





1982

11



Julio Evaristo



NOVÍSIMO

MANUAL DE DERECHO.

NO. 1210

MANUAL DE DERECHO

NOVÍSIMO MANUAL DE DERECHO

COMPENSIVO DE

TODAS LAS REFORMAS DE QUE HA SIDO OBJETO NUESTRA LEGISLACION

HASTA EL PRESENTE

POR

D. LUIS LAMAS VARELA

Licenciado en Derecho civil y canónico y Abogado del Ilustre Colegio de Madrid.

CONTIENE EN COMPENDIO LAS SIGUIENTES MATERIAS:

- 1° **Prolegómenos del Derecho.**
2° **Historia e Instituciones del romano.**
3° **Idem id. del civil español**, con las reformas vigentes en el registro y matrimonio civiles.
4° **Derecho penal español**, precedido de una reseña histórica del mismo.—Reformas en materia de hurtos, caza, pesca y secuestro de personas.—Ley de protección a la infancia (26 de Junio de 1878).—Abusos cometidos por la imprenta.
5° **Ideas generales de economía política.**
6° **Historia y elementos del Derecho mercantil vigente.**—Ley de 30 de Julio

de 1878, sobre supresión y modificación de algunos artículos del Código de comercio
Derecho eclesiástico, canónico y disciplina.

Elementos de Derecho político.—Constituciones de 1809 y 1876.—Leyes orgánicas comparadas.

Procedimientos judiciales, en materia civil y penal.—Suspensión del Jurado y del juicio oral.—Resubordinamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.—Reforma del juicio de desahucio y de las quiebras mercantiles.—Nueva organización de los Tribunales militares.—Procedimiento en las causas de imprenta.

TERCERA EDICION

MADRID:

SATURNINO CALLEJA

CALLE DE LA PAZ, 17.ª PUERTE.

1878.

Es propiedad.

Julio Enaso y Angel
Madrid - 1889.

ADVERTENCIA.



Agotadas las *dos* primeras ediciones del MANUAL DE LA FACULTAD DE DERECHO, publicadas por el abogado de este ilustre colegio D. Luis Lamas y Varela, hacían necesaria la *tercera*, no sólo el constante pedido con que el público sigue favoreciendo esta obra, sino tambien las variaciones y trascendentales reformas que han sufrido algunos de los ramos del derecho pátrio, desde la fecha de la *segunda* edicion (1873). Dedicado este trabajo, preferentemente á la *juventud* escolar, era menester compilar lo nuevo, para recordarle lo que está vigente en la actualidad. Esto es lo que se propuso el autor en la *tercera* edicion puesta á la venta.

Pero para facilitar su adquisicion á los alumnos de cada año ó de cada asignatura, en particular, que no necesitan por el momento mas que la seccion ó parte del libro referente á la rama del derecho en que están matriculados, así como á todo el que, no siendo alumno de las cátedras en que se enseñan aquéllas, tenga tan sólo curiosidad, necesidad ó aficion á especiales tratados de la ciencia jurídica, hemos determinado publicar con independendencia, en tomitos separados, el compendio de algunas asignaturas, ya sólás, cuando su extension é importancia ofrecen bastante materia para ello, ya unidas á otras, de manera que pueda adquirirse cada tomo por un precio módico.

El que quiera ó necesite tener toda la obra, comprensiva de los diferentes tomos y asignaturas, en un sólo volúmen, puede satisfacer sus deseos comprando un ejemplar de la *ter-*

cera edicion, cuyo coste es menor que el importe total de los tomos sueltos.

La paginacion será independiente; cada tomo llevará su índice, y la obra completa un índice general.

Hechas estas advertencias, referentes á las modificaciones de la publicacion, esperamos que la nueva edicion del MANUAL DE DERECHO, dada á luz conjunta y separadamente, obtendrá la misma benévola acogida que han alcanzado las dos primeras ediciones.

Madrid, Enero de 1878.

EL EDITOR.

Al publicar en 1868 la primera edición de este libro, con el título de *Manual de todas las asignaturas que constituyen la Facultad de Derecho*, hemos manifestado nuestra opinion acerca de la utilidad de esta clase de publicaciones, en el siguiente

PRÓLOGO.

Créese en absoluto, y á nuestro modo de ver equivocadamente, que los *Compendios* ó *Manuales* científicos, tan lejos de contribuir al progreso de la ciencia, causan daños de consideracion en la inteligencia de la juventud que, ansiosa de saber, concurre á las aulas universitarias, fundándose en que sólo ofrecen al alumno una ligerísima é insípida tintura de la fecunda sávia del árbol de la ciencia, proporcionándole un medio fácil para poder salir aparentemente airoso de las difíciles y angustiosas circunstancias creadas por la necesidad ineludible de tomar parte en los certámenes de prueba de curso. Esto, que indudablemente contiene algo de verdad, no es completamente exacto.

La mejor y mayor parte de la juventud estudiosa no circunscribe sus aspiraciones á los cortos y efimeros límites de un *Manual*. La juventud amante del estudio se esfuerza en levantar el vuelo de su inteligencia á regiones más elevadas, y lucha con todas sus fuerzas para penetrar en lo más recóndito de la ciencia, hasta tocar el lindero que el dedo de Dios ha señalado á la humanidad. Un *Manual* para esta loable juventud, no es mas que un medio, un eficazísimo auxiliar que contribuye poderosamente á la necesaria ordenacion de las ideas, adquiridas con conciencia y firme convencimiento, merced á largas y continuadas vigiliass y á las selectas explicaciones del profesor. No recurre á un *Compendio* el jóven estudioso para adquirir ideas nuevas. La lectura de este género de libros viene á ser como una rápida ojeada por los puntos más culminantes de la vasta ciencia á que dedica sus estudios. Por eso hemos dicho que la condenacion absoluta de los *Compendios* ó *Manuales* es injusta.

Mas, aun cuando estuviera legitimada respecto á la juventud, no sería

aquella razon bastante para condenarles inconsiderada y absolutamente. Las personas que no se dedican con exclusiva preferencia á determinadas profesiones, tienen necesidad de conocer y aún de aplicar, las nociones fundamentales en que descansan los *derechos* y *deberes* recíprocos, viéndose obligadas á demandar su conocimiento de los peritos en las mismas, ó á rebuscarlas en las voluminosas obras que de ellos se ocupan, con gran trabajo y pérdida de tiempo. Un *Manual* ocurre á aquella necesidad y evita estos inconvenientes.

Si, pues, la ignorancia de los principios elementales del derecho deja sentir sus males en todas las esferas de vida civil; si desde que el hombre vé la luz por primera vez, la *ley* le cobija, le ampara y le defiende; si, como individuo de la familia, como jefe de la misma y administrador de su caudal, como simple ciudadano y como repúblico le otorga derechos é impone obligaciones, ¿cómo puede calificarse, con verdad, de pernicioso é inútil el libro que contiene en compendio y al alcance de todas las inteligencias lo más importante y necesario que conviene conocer de aquellos derechos y deberes? No es nuestro ánimo encomiar este *Manual*: ridícula y engañosa seria tal pretension. Queremos, tan sólo, combatir la injustificada preocupacion con que se miran trabajos de esta índole. Si éste no satisface las indicadas aspiraciones, culpa nuestra será, que no hemos entendido ó desarrollado bien la idea de lo que debe ser un *Compendio*.

En cuanto á la bondad del trabajo, confesamos ingénuamente que no merece la calificacion de *bueno*. Limitado á una mera recopilacion de lo más superficial y selecto, nos mostraremos satisfechos si alguna vez llega á merecer el calificativo de *útil*.»

Al publicar la segunda edicion, en 1873, añadíamos lo siguiente:

«Muy ajenos estábamos, al darlo á luz, de que el público le dispensara tan inmerecida acogida; y si bien el buen éxito, el haberse agotado la edicion, las trascendentales innovaciones del derecho y la libertad de enseñanza, nos aconsejaban la reforma del libro y su nueva publicacion, no lo hubiéramos hecho por ahora, esperando á que la legislacion adquiriese mayor estabilidad, si la casa editorial que publicó la primera *tirada* no hubiese puesto á la venta el *Novísimo Manual del estudiante de Derecho*, escrito por el Dr. D. Vicente Olivares Béc. La analogía del título, la identidad del tipo de impresion empleado y la circunstancia de ser unos mismos los editores, podrian dar apariencia de verdad al dicho ó presuncion de que el *Novísimo Manual* era el que habíamos escrito en 1868, reformado y adicionado por el Dr. Olivares. De aquí la necesidad de esta *segunda edicion*, ampliada, que ofrecemos al público y dedicamos particularmente á los alumnos de la carrera de Derecho, sin pretensiones de ningun género y sin aspirar á más premio que la satisfaccion de ver que el público y la juventud estudiosa, particularmente, continúan juzgando *útil* y nunca pernicioso el contenido de este *MANUAL*.»

Nuestras aspiraciones se han cumplido. La *segunda* edicion, como la *primera*, se ha agotado antes de lo que podíamos pro-

meternos, apesar de compartir con nosotros el favor del público y las demandas del mercado el *Novísimo Manual del estudiante de Derecho*, del Dr. Olivares Biec. Y como aquéllas continúan, y las reformas que se han realizado en la legislación son importantes, contando nuevamente con el favor que el público y la juventud de la Universidades nos dispensan, publicamos esta *tercera edición*, en la cual encontrará el lector todo lo más culminante del antiguo derecho pátrio vigente, y de las reformas legislativas promulgadas hasta la fecha.

Madrid, Enero de 1878.

L. L. V.

PROLEGÓMENOS DEL DERECHO.

Son los PROLEGÓMENOS «una introducción á los estudios jurídicos, que tiene por objeto presentar en compendio, los diferentes ramos que abraza la ciencia del derecho», y sus principios fundamentales, bajo un aspecto elementalmente filosófico.

¿Cuál es el carácter esencial y distintivo del hombre?—La sociabilidad. Se prueba por la misma naturaleza de éste, por su debilidad individual, por los sentimientos de su alma, por la facultad de su palabra y tantos otros motivos que le arrastran á la sociedad.

¿A qué se da el nombre de *estado natural* del hombre?—Á una situación quimérica, que le supone aislado completamente de sus semejantes y entregado exclusivamente á sí mismo. Pruébese la imposibilidad de este *estado* con sólo observar que equipara el hombre á los brutos, privándole de toda relación con los seres que le rodean, y que es contrario al verdadero origen de la sociedad, que no es, ciertamente, el pacto social proclamado por J. J. Rousseau.

¿Qué viene á ser el llamado *pacto social*?—Un sistema que tiene por objeto explicar el origen de la sociedad, suponiendo que los hombres han hecho una convención expresa, por medio de la cual cedieron parte de sus derechos, para encontrar en la fuerza común la garantía de su bienestar.

¿Cómo se refuta este sistema?—Considerando que, además de fundarse en una ficción, puesto que su autor y sostenedores no dicen en dónde ni cuándo tuvo lugar, da por resultado que el salvaje reúne más derechos y más seguridad en su goce, que el hombre culto y civilizado, lo cual repugna hasta el buen sentido, y lo condena la razón y la filosofía.

Sólo puede admitirse el *pacto social* como una convención en la cual todos se obligan tácitamente á obedecer las leyes, y á respetar el derecho de los demás.

Sin embargo, este sistema ha reportado alguna utilidad, porque originó el estudio de los deberes y derechos *absolutos*, ó lo que es lo mismo, el de las distintas relaciones del hombre y del ciudadano, que tanta influencia ejercieron en el derecho político y penal de los pueblos modernos.

¿Cuál es el verdadero origen de la sociedad?—La familia. Ella es su cimiento y base, ora considerada en su origen, ora en su actualidad, porque todas las condiciones de una buena sociedad se encuentran en ella; así vemos el orden, el respeto, la autoridad, la moralidad, la obediencia, etc., cuyos hábitos han pasado luego á la sociedad. Con la reunión de las familias, á quienes la conveniencia, la necesidad, los pactos, las conquistas ú otros motivos de esta índole reunieron bajo un vínculo común de protección y dependencia, se formó la sociedad.

¿Qué son, según eso, las sociedades civiles?—Asociaciones de familias

con derechos y deberes recíprocos, que se defienden mutuamente contra todo el que intente desconocerlos. Llámaseles también Estados, pueblos y naciones, aunque los pueblos y las naciones suponen un mismo origen, y tienen por aspiración suprema la realización del derecho.

¿Qué es el gobierno?—Un ente moral que tiene por principal objeto la protección y defensa de los asociados, con facultad para legislar y con poder y medios para corregir. Trae su origen de la necesidad de que haya unidad en la protección y en la defensa de los intereses sociales, lo que sería imposible si estuvieran encomendados á toda la sociedad.

De la justicia.

¿Qué es la justicia?—Varias son las definiciones que se han dado de la justicia. Ulpiano la define: *la constante y perpétua voluntad de dar á cada uno su derecho*. Según D. Alfonso el Sábio es *raygada virtud que dura siempre en las voluntades de los homes justos, é da, é comparte á cada uno su derecho igualmente*. Otros la definen: *la obediencia práctica de los asociados, ó al ménos de su mayor parte, á los principios cardinales de todo derecho y á las reglas de equidad que tradicionalmente sirven para dirigir las relaciones mútuas de los individuos, ó sea, «la conformidad de nuestras acciones con las leyes positivas, basadas en las reglas de equidad.»*

La definición más exacta, jurídicamente considerada, es la tercera; porque la segunda no es más que la traducción elegante de la primera, y ésta examina la justicia más con relación á la moral que al derecho, efecto de la confusión que los jurisconsultos romanos tenían de la idea de justicia y la del Estado.

¿Es necesaria la justicia en la sociedad?—Tan necesaria que sin ella las leyes serían desobedecidas, dimanando de aquí la anarquía y el desorden social.

¿Qué es justicia moral?—La obediencia y respeto á los preceptos morales.

¿Qué es justicia civil?—El respeto y obediencia á los deberes y derechos establecidos por las leyes humanas.

¿Qué otras divisiones se hacen de la justicia?—Aristóteles la divide en *universal y particular*, subdividiendo ésta en *conmutativa y distributiva*. Llama *universal* al ejercicio de todas las virtudes con los demás hombres; y *particular*, á la virtud de dar á cada uno lo suyo, cuya distribución, si tiene lugar en proporción aritmética, recibe el nombre de *justicia particular conmutativa*; y si en la geométrica, el de *particular distributiva*.

Estas divisiones adolecen: 1.º, de que el segundo miembro de la división está comprendido en el primero, teniendo tan sólo acepción jurídica aquél; y 2.º, de que la subdivisión es, aunque ingeniosa, muy sutil, é incierto el fundamento de las proporciones matemáticas en que descansa.

De la ley (1).

¿Cuál es el origen de la palabra *ley*?—Según Cicerón, la llamaron así los griegos porque la igualdad presidía en la distribución de los derechos, y los romanos, por la elección que hacía de lo más conveniente. Las Partidas, suponiendo la necesidad de su escritura, la llamaron *leyenda*.

¿Qué es *ley*?—En su acepción más amplia y general es *una regla de acción reconocida como necesaria*, que comprende á todos los seres de la creación. Tomada en un sentido ménos absoluto, es *la misma regla de acción á*

(1) Como complemento de este capítulo, véase el referente á esta materia en la secc. de Derecho civil.

que están sujetos tan sólo los seres racionales, y en la significacion rigurosamente jurídica, es la expresión solemne y obligatoria de la autoridad soberana sobre cosas de interés común.

¿Qué requisitos esenciales deben entrar en la formación de la ley?—Cuatro: 1.º, que sea dada por el legislador; 2.º, que sea promulgada con toda solemnidad; 3.º, que tenga fuerza coactiva, y 4.º, que verse sobre cosas de interés general.

El legislador debe tener presentes, al formularla, las leyes fundamentales, las tradiciones y las costumbres del pueblo á quien va á obligar.

¿A qué se da el nombre de promulgación de la ley?—Al acto público por medio del cual se pone en conocimiento de los ciudadanos. Es tan necesaria, que sin ella no tiene la ley fuerza obligatoria, y debe hacerse por medio de las fórmulas adoptadas convenientemente, para que llegue á noticia de todos los asociados.

¿Debe tener la ley fuerza retroactiva?—Por regla general no, pues, si así fuera, la *libertad civil* y la *seguridad personal* serían una mentira. Se exceptúan las leyes que tienen por objeto explicar, aclarar ó reproducir otras anteriores, debiendo respetar, no obstante, las transacciones y sentencias dictadas en el intervalo de ambas, y las favorables á los delincuentes.

¿Son todas las leyes obligatorias?—Sí, pues, aun cuando algunas se limitan á permitir un hecho, como quiera que esta permission impone á los demás el deber de respetarla, encierran siempre un precepto.

Debe recaer sobre cosas de interés común, porque el interés general debe ser su objeto principal y preferente, evitando la creación de privilegios y procurando la *igualdad* de derechos y deberes.

¿Qué son los *privilegios*?—El conjunto de derechos concedidos por leyes individuales en odio ó en favor de determinadas personas, familias ó castas. Los beneficios á ciudadanos desvalidos ó á clases del Estado no son privilegios propiamente dichos, y están permitidos porque, fundados en máximas de justicia y de equidad, tienden al bien general más que al particular de aquéllos á quienes se conceden.

¿Qué es la *igualdad ante la ley*?—El disfrute de los mismos derechos, honores y distinciones, y la sujeción á idénticos deberes.

¿Cuáles son los derechos llamados *naturales* que debe proteger la ley?—La *libertad individual*, la *seguridad personal* y la *propiedad real*.

La facultad natural que tiene el hombre de hacer lo que no perjudica á los demás, llámase *libertad individual*. El derecho á exigir de todos respeto á la individualidad moral y física del ciudadano y de la *sociedad*, la prevención y castigo de los delitos, constituye la *seguridad personal*. Y la facultad que tiene todo hombre de disponer de las cosas que le pertenecen ó del producto de su trabajo, sin más limitación que la que la ley establece en beneficio de todos, denominase *propiedad real*.

Los famosos preceptos romanos, *vivir honestamente, no dañar á otro y dar á cada uno lo suyo*, contienen los derechos naturales que quedan definidos, pero comprendidos en una acepción mas bien moral que jurídica, inadmisibles para el derecho.

Legislación, derecho y jurisprudencia.

¿Qué es *legislación*?—La ciencia que enseña cómo deben ser formadas las instituciones políticas y las leyes para afianzar la seguridad del Estado, proteger los derechos individuales y procurar el bienestar general, conforme á los principios absolutos de justicia.

¿Qué es *derecho*?—Considerado objetivamente ó como *causa*, es el conjunto de preceptos y de máximas que obligan á todos los individuos de la asociación política de un modo eficaz. Considerado subjetivamente ó como *efecto*, es la facultad concedida por las leyes para hacer, tener, ó no hacer

alguna cosa, ú obligar á otro á que la haga. Los romanos daban á la palabra derecho varias significaciones, segun los tiempos. Primitivamente la referian, ya á un orden inflexible como lo que está ordenado (*jus ó jussum*), ya á una fórmula concisa y rigurosa; y despues, á una creacion esencialmente científica, fundada más en la razon que en la autoridad, definiéndolo *lo que siempre es justo, lo que siempre es bueno, ó el arte de lo justo y de lo bueno*. En un sentido más absoluto suele definirse *«el orden en el obrar de los seres libres.»*

¿Qué es *jurisprudencia*?—Justiniano la definió, *la ciencia de las cosas divinas y humanas, el conocimiento de lo justo y de lo injusto*, y nosotros decimos, *la ciencia del derecho*. Es la interpretacion recta del espíritu y letra de las leyes, aplicable á determinados casos; y constituye la parte práctica de la ciencia.

Para formarse idea exacta de estas tres palabras, debe considerarse que la *legislacion* forma el *derecho*, y el *derecho*, la *jurisprudencia*; que aquélla es la ciencia del legislador, y el *derecho* y la *jurisprudencia* forman el estudio del *jurisconsulto*.

La moral y el derecho.

¿Son una misma cosa la moral y el derecho?—No: ambas reconocen la misma base, que es la naturaleza humana, y los mismos fines, la perfeccion, el progreso y la felicidad del hombre, pero no son iguales en su extension y dominio.

¿Qué diferencias existen hoy entre una y otro?—Tres, capitales: 1.^a, el derecho comprende los actos externos; la moral abarca éstos y los internos; 2.^a, el derecho pena exteriormente las acciones, la moral no es susceptible de coaccion externa; y 3.^a, el derecho no reconoce más deberes que para con los demás, mientras que la moral añade los que existen para con Dios y para con nosotros mismos.

Division del derecho.

¿Cómo dividió Justiniano el derecho?—En *público y privado*; *escrito y no escrito*. El primero se referia al Estado, considerado como un sér colectivo; y el segundo al individuo, considerado aisladamente, comprendiendo aquél el deslinde y atribuciones de los poderes públicos, los derechos políticos de los ciudadanos, el culto y el sacerdocio.

¿De dónde dimanaban los preceptos del derecho público, segun Justiniano?—Del derecho natural, ó del de gentes, ó del civil.

Se llama derecho *escrito* el que ha sido promulgado, y *no escrito* el que no ha sido objeto de promulgacion, haya sido, ó no, reducido á escritura.

¿Cómo se divide el derecho por razon de sus fundamentos?—En *natural y positivo*. El *natural* es el que la razon ha revelado á todos los hombres. El *positivo* es el que nos enseña la *revelacion*, la *promulgacion* y la *costumbre*: la primera es órgano del *derecho divino positivo*, la segunda del *derecho escrito*, y la tercera del *derecho consuetudinario*. Por eso tambien puede dividirse en *divino y humano*, segun que proceda directamente de Dios, ó de los hombres.

El *derecho positivo*, atendido su diverso origen, se subdivide en *nacional é importado*. El primero debe su existencia á las necesidades públicas esencialmente regnicolas, y á la costumbre que insensiblemente las regula. El segundo se toma de otros pueblos, como el romano y el canónico.

¿Cómo se divide el derecho, atendida la fuerza de sus prescripciones?—En *comun, singular y privilegiado*. Es *comun* el que obliga á todos los ciudadanos; *singular* el que tan sólo obliga á los que se encuentran en circunstancias dadas, concediendo al efecto *beneficios de ley*; y *privilegiado* el

que exige de ciertos deberes á determinadas personas, clases y corporaciones, ó les otorga derechos especiales.

¿Qué diferencia media entre los *privilegios* y las dispensas de ley?—Se distinguen en que los primeros son de aplicacion constante, y las segundas suspenden la de la ley general en algunos casos.

¿Cómo se divide el derecho segun la naturaleza de sus preceptos?—En *derecho preceptivo y prohibitivo*. El primero manda, impone deberes; el segundo concede derechos.

Tambien se divide en *permisivo y dispositivo*. El primero no puede separarse del preceptivo, porque lo que se permite hacer, supone el deber de no perturbar la libertad de accion del que hace; y el segundo sólo tiene aplicacion cuando nada han convenido los asociados.

Puede subdividirse tambien en *marítimo, agrícola, militar, industrial, consular*, etc., segun la naturaleza de sus disposiciones, así como tambien en público, privado, civil, penal, mercantil, y de procedimientos, por razon de su objeto y la extension de la materia sobre que recae.

Derecho natural.

¿Qué es *derecho natural*?—*El que la naturaleza enseñó á todos los animales, segun los romanos, y el que han en sí los homes naturalmente, e aun las otras animalias que han sentido*, segun las Partidas.

Son defectuosas estas definiciones por comprender á todos los seres animados, suponiendo capaces de tener derechos á los animales que carecen de razon y sólo tienen instinto, cuando deben comprender únicamente al hombre, como sér moral, social, libre é inteligente.

¿Qué es, pues, el *derecho natural* en su significacion genuina?—El conjunto de reglas que la razon revela á todos los hombres, enseñándoles las relaciones que les ligan con los demás seres de su especie, guiando su conciencia é ilustrando su entendimiento.

Se presenta este derecho en su origen por medio de un corto número de principios sencillos, incrustados en la conciencia de todos, sin escuela ni enseñanza alguna. No es una verdadera ciencia en la infancia de las sociedades, mas luego que éstas se desarrollan y progresan, sí, porque de aquellos sencillos principios, la reflexion, el estudio y el talento del hombre, deducen consecuencias de aplicacion á las necesidades de la vida social. En el siglo XVIII fué elevado á la categoría de ciencia, merced á los estudios de Hugo de Groot (Grotius) y Samuel Pufendorf, que distinguieron los deberes *imperfectos* de los *perfectos*, separando así la moral del derecho.

Son los deberes *imperfectos* aquellos que caen únicamente bajo el dominio de la conciencia, no siendo por ello susceptibles de coaccion externa; y llámense *perfectos* aquellos cuyo cumplimiento puede exigirse por estar dentro de la esfera del derecho.

¿Cómo se divide el *derecho natural*?—En *absoluto ó puro*, é *hipotético ó aplicado*. El primero considera al hombre sin relaciones ulteriores con el hombre, y el segundo le estudia en las que le ligan con sus semejantes en la vida real.

Algunos autores creen encontrar su origen en la correlacion de los derechos y de las obligaciones; otros, en la libertad que dimana de la ley moral; otros en el derecho que asiste á todos para exigir el cumplimiento de los deberes impuestos á los demás. Pero todos los indicados sistemas confunden los deberes *morales y jurídicos*.

La ciencia que tiene por objeto investigar la nocion originaria del derecho natural, conócese bajo el nombre de *filosofía del derecho positivo*.

Derecho divino positivo.

¿Qué es derecho *divino positivo*?—La coleccion de máximas que exigen coaccion jurídica, y que han sido comunicadas á los hombres por medio de la *revelacion* (1). Sólo se diferencia del *natural* en la forma en que ha sido notificado á los hombres, pues si el segundo lo fué por la razon, el primero lo fué por la revelacion, reconociendo ambos, sin embargo, el mismo origen.

Es cuestionable la fuerza obligatoria de sus preceptos, si bien puede asegurarse que son obligatorios los que fueron adoptados y sancionados por el derecho civil, ó por el canónico (2).

Derecho político.

¿Qué es derecho político?—La coleccion de reglas que organizan el poder público. Este se divide en *legislativo*, *ejecutivo* y *judicial*. El primero está encargado de la formacion de las leyes, el segundo de su ejecucion en general y el tercero de su aplicacion á las relaciones de los individuos entre sí. Hay quien niega la categoria de poder al llamado *judicial*, suponiéndole parte integrante del *ejecutivo*.

¿En qué se divide el derecho político?—En *general* ó público, y *especial* ó privado. El primero estudia la teoria del Estado sin relacion á ningún pueblo. El segundo se circunscribe á determinada nacion. Llámase tambien *constitucional*, ó público *interior* de cada pueblo.

¿En qué se fundan los diversos sistemas de gobierno, y cuáles son?—En la diferente organizacion de los poderes públicos. Los antiguos refieren sólo tres: el *democrático*, el *aristocrático* y el *monárquico*, segun que el poder público está á cargo de todos los miembros libres de la sociedad, al de un número determinado de ciudadanos distinguidos, ó al de un sólo individuo. Pero esta division no satisface, porque sólo se refiere al número de personas que ejercen el poder, sin tener en cuenta sus relaciones jurídicas, y en ninguna cabe el sistema moderno llamado *representativo*, que participa, hasta cierto punto, de aquellos tres elementos.

¿Cuáles y cuántos son, pues, los sistemas de gobierno?—Dos: el *monárquico* y el *repblicano*. Es *monárquico* cuando el poder ejecutivo está confiado á un jefe durante su vida. Es *repblicano* cuando el jefe, ó los que están investidos de la autoridad suprema, la ejercen solo temporalmente.

¿Cuántas clases hay de monarquías?—*Hereditarias* y *electivas*. Son *hereditarias* aquellas para quienes las leyes del país señalan previamente una série de sucesores en quienes debe recaer el poder; y *electivas* las que antes ó despues del fallecimiento del monarca, se provistan por eleccion. Las hay tambien *representativas*, *absolutas* y *despóticas*. Llámanse *representativas* aquellas en que el poder legislativo reside en las Cortes con el monarca; *absolutas* las en que los poderes legislativo y ejecutivo son ejercidos por éste, sejetándose á los principios constitutivos del Estado; y *despóticas* las que reconocen por base de toda ley la voluntad omnimoda de los reyes, que se convierten en *tiranos* si atropellan los derechos civiles del ciudadano, y á su sistema de gobierno se llama *tiranía*.

¿Qué clases hay de repúblicas?—*Aristocráticas* y *democráticas*. Son *democráticas* las en que los agentes de los poderes públicos pertenecen á todas las clases de la nacion. Son *aristocráticas*, por el contrario, cuando el poder ejecutivo, y aun el legislativo, está en manos de castas privilegiadas.

(1) Las sagradas escrituras y las tradiciones divinas, forman este derecho.

(2) Los preceptos morales del antiguo Testamento, son obligatorios porque la moral es siempre una y universal. Los legales y ceremoniales, como reglas variables, no tienen hoy fuerza de obligar.

Se llama *oligarquía* la república *aristocrática* que cuenta con reducido número de castas privilegiadas, encargadas del poder; gobierno *teocrático*, aquél en que la casta privilegiada para gobernar es el clero; *ochlocracia*, la república democrática que tiene confundidos sus poderes; y *anarquía*, la confusión de poderes abandonada á sí misma, sin reglas ni concierto en su ejercicio, y sin fuerza de coacción en el gobierno.

Del derecho de gentes.

¿Cuál es el origen del *derecho de gentes*?—La necesidad de proteger á los asociados de los ataques del extranjero que no respeta sus derechos. Llámase también *público exterior* ó *internacional*.

¿Cómo define Justiniano el *derecho de gentes*?—El que la razón natural ha establecido entre todos los hombres, que es guardado por todos, y por ser general á todos los pueblos, ha recibido su nombre. No es buena esta definición, porque es demasiado lata; comprende al derecho exterior é interior, y debe limitarse á las relaciones recíprocas de los pueblos.

¿Cómo puede definirse hoy el *derecho de gentes*?—El conjunto de reglas que, fundadas en el interés de los pueblos, establecen las relaciones recíprocas entre éstos.

Se subdivide en *universal* y *positivo*. Se da el nombre de *universal* al conjunto de reglas positivas y aplicables, dimanadas de acontecimientos históricos, que no forman un código escrito admitido por todos, pero que existen en las costumbres de las naciones civilizadas. Se llama *positivo* ó *práctico* á la colección de capitulaciones, *tratados* y costumbres que se establecen entre diferentes pueblos, por mutuo asentimiento.

El jurisconsulto que se ocupó preferentemente de este derecho fue Hugo de Groot.

Derecho administrativo.

¿Cómo se define?—«La colección de reglas que, teniendo por base el derecho político, y por fin el interés general de la sociedad, fijan las relaciones generales del Estado con los particulares, y de los particulares con el Estado.»

Como que es una consecuencia del *político*, su objeto es señalar el modo que tiene de ejercer su acción el poder ejecutivo, y desarrollar los principios políticos, acomodándoles, en la práctica, á las necesidades de los pueblos.

¿Qué es la *administración*?—La acción del poder ejecutivo.

Se diferencia el *derecho administrativo* del *político*, en que éste se ocupa de los grandes principios políticos y de la organización de los poderes públicos; y aquél, del desarrollo de tales principios con relación al Estado y á los ciudadanos; y del *civil*, en que éste no se extiende á las relaciones del Estado con los particulares, sino que está limitado á las que median mutuamente entre los asociados.

¿Es de importancia el *derecho administrativo*? Sí, por la grande extensión y pormenores que abraza. Todos los actos no políticos del ciudadano, caen bajo su esfera, desde el nacimiento hasta la muerte.

¿Cuáles son las funciones de los *poderes públicos*?—La del legislativo, *legislar*; la del ejecutivo, *gobernar*; y la del judicial, *juzgar* y hacer que se ejecute lo juzgado.

Derecho canónico.

¿Cuál es la constitución de la Iglesia?—Es una asociación pública, no sujeta á las reglas del *derecho civil*, distinta de las demás sociedades por

su extension, por sus relaciones y por la influencia moral que ejerce sobre los asociados. Comenzó á tener su constitucion propia desde el momento en que dejó de sufrir la persecucion de los Césares, dispensándole proteccion las potestades temporales.

Esta sociedad se rige por preceptos y reglas, para fijar las relaciones entre sus miembros y magistrados encargados de su cumplimiento. Estas reglas se llaman *cánones*; y su conjunto, *derecho canónico*.

¿Qué medios existen para mantener la integridad de las jurisdicciones civil y eclesiástica?—El *pase real* á las *bulas*, *breves* y *rescriptos* de la corte romana, y los recursos de *proteccion* y de *fuerza*. Llámase tambien *regium exequatur*.

Derecho civil.

¿Qué es derecho civil?—Segun Justiniano, *el que cada pueblo forma para sí*.

No es aceptable hoy esta definicion, porque comprende el político, el administrativo, el penal y los procedimientos judiciales que tambien, como se dice del civil, forma cada pueblo para sí.

Debe definirse, *el que comprende las relaciones mútuas de los individuos, considerados aisladamente como particulares*.

¿Cuáles son los objetos del derecho civil?—Las *personas*, las *cosas* y las *acciones*. Es *persona* todo sér susceptible de obligaciones y derechos, sea realidad física, ó pura creacion legal. Viene á ser el sugeto activo ó pasivo del derecho.

¿Hay, segun eso, más personas jurídicas que el hombre?—Sí, ciertas abstracciones que la ley supone capaces de derechos y deberes, como el fisco, los pueblos, los establecimientos benéficos, etc.

¿Qué es cosa jurídica?—*Todo lo que es susceptible de ser objeto de derechos, ora sea corporal, ora incorporeal; v. gr., una heredad, las servidumbres, el derecho hereditario, etc.* Cosas son tambien las obligaciones, aún cuando por su importancia forman una parte independiente del derecho. Las cosas jurídicas constituyen el objeto mediato del derecho.

¿De dónde nacen las obligaciones?—De actos *licitos* y de actos *ilícitos*, siendo la fuente el consentimiento verdadero y el presunto, el dolo y la negligencia culpable, respectivamente. El consentimiento da origen á los contratos, si es expreso ó tácito, y á los cuasi-contratos, si es presunto. El dolo y la negligencia originan los delitos y las faltas.

¿Qué son las acciones?—Los medios que tenemos para hacer eficaces los derechos y perseguirlos en juicio.

¿El derecho mercantil forma parte del civil?—Puede considerarse como una de sus ramas más importantes, por su especialidad y extension constituyendo, generalmente, un código separado.

¿Cuál es la base de todos los derechos modernos?—El romano, que puede considerarse como la razon escrita, y cuyo estudio es necesario porque la sabiduria de sus leyes debe tenerse presente para la formacion, exámen y critica de las legislaciones; no debiendo constituirnos, no obstante, en ciegos imitadores de sus preceptos, porque los adelantos de la civilizacion condenan muchas de sus instituciones, incompatibles con las costumbres y manera de ser de las sociedades modernas.

Del derecho penal.

El derecho penal, como ciencia y objeto de la filosofía, tuvo su desarrollo preponderante despues de la revolucion francesa de 1789. Los derechos proclamados entonces como patrimonio inalienable del hombre, die-

ron á esta rama del derecho un carácter individualista, matando el principio de absorcion que dominaba antes en favor de la sociedad.

¿Qué es derecho penal ó criminal?—*El que define los delitos, y señala las penas en que incurren los que le cometen.* Es tan necesario, que sin él las leyes serian ineficaces. Sin la coaccion y sin la pena no puede asegurarse el cumplimiento de las leyes.

¿Qué es delito?—La infraccion de una ley penal. La violacion directa é intencional de un derecho.

¿Qué es trasgresion?—La infraccion de los preceptos de una ley de cualquier género que sea.

¿Qué diferencia media entre una y otro?—Que los efectos del primero lo repara el derecho penal; y los de la segunda puede repararlos la ley civil. En otros términos, todo delito es trasgresion, pero no toda trasgresion es delito.

¿El derecho penal es público ó privado?—Considerando que se pide su aplicacion en nombre de la sociedad, pertenece al derecho público; y atendiendo á que se aplica por los tribunales, pertenece al privado.

¿El derecho romano es base tambien del penal?—No. La barbarie de sus leyes penales está condenada por la ciencia y por la filosofía.

¿Qué es legislacion penal?—La ciencia que tiene por objeto desentrañar el fundamento de la penalidad, el exámen de los hechos ú omisiones que deben ser reprimidos, y las cualidades que deben tener las penas.

Procedimientos.

¿Qué son los procedimientos judiciales?—El complemento de las leyes civiles y penales, que tiene por objeto establecer la tramitacion y las actuaciones en que han de ventilarse los derechos de los ciudadanos. Puede definirse: *las reglas vigentes en cada país, que se refieren al modo de proceder en justicia.*

¿Cómo se divide esta organizacion?—En líneas, territorios y grados.

¿Qué es jurisdiccion?—El ejercicio del poder que cada tribunal recibe de la ley ó del jefe del Estado, como fuente del Poder judicial y de la justicia práctica.

¿Cuál es el objeto de las divisiones expuestas?—La de líneas de jurisdiccion, tiene por objeto separar los tribunales, segun las causas que están llamados á juzgar. La de territorios, tiende á facilitar la buena y pronta administracion de justicia, evitando gastos é incomodidades á los administrados; y el *orden gradual de jueces* consulta la vigilancia de los superiores sobre los inferiores y el acierto de los fallos, corrigiendo los errores, hijos de la mala fé, ó de la ignorancia de los juzgadores.

¿Qué formas pueden adoptarse en la organizacion de los tribunales?—Principalmente dos. Una en que la declaracion del hecho y del derecho esté á cargo de los mismos tribunales, y otra, en que el hecho se declare por unos, aplicándose por otros el derecho.

¿Conocieron estos sistemas los romanos?—Sí, llamando *jueces* á los encargados del hecho, y *magistrados* á los del derecho. El derecho moderno les llama *jurados* y *jueces*, respectivamente.

Entre los romanos el magistrado fijaba la cuestion, daba al juez una fórmula condicional, y abandonaba el negocio antes de que hubiese verdadero juicio. Entre los germanos, los jurados eran los que conocian del hecho y del derecho. En Inglaterra, el jurado examina y decide el hecho, y el juez de derecho aplica la ley. Análogas funciones tuvo el jurado en España, durante el corto periodo de su existencia legal, hoy en *suspense* (1).

(1) Véase el tratado de procedimientos.

¿Cuáles son los objetos de los procedimientos?—La organizacion de los tribunales, la ritualidad y la serie de actuaciones judiciales en que se fija la cuestion, determina la prueba de los hechos y se decide la contienda. Son, pues, la garantía de los litigantes, y de la libertad y persona de los acusados.

De la interpretacion.

¿Qué es *interpretacion*?—La reconstruccion del pensamiento del legislador. El estudio fundamental de su propósito y de su voluntad.

Es necesaria porque las leyes, al establecer principios fijos y reglas generales, no pueden descender á todos los casos que la práctica suele ofrecer, que se escapan á su prevision, y cuyas palabras requieren á veces la fijacion de su sentido.

Las fuentes de la *interpretacion* son la *costumbre*, la *doctrina* y la *equidad*. La repeticion de actos públicos y lícitos, consentidos por el legislador, forman la *costumbre*, que se llama tambien derecho *no escrito* ó *no promulgado*, y suple el silencio, la insuficiencia ó la oscuridad de las leyes.

¿Cuántas clases hay de *costumbre*?—*Segun, fuera y contra la ley*. La primera interpreta genuinamente el sentido de ésta; la segunda le sirve de complemento, y la tercera enmienda sus disposiciones, y á veces las deroga.

Bajo dos formas se presenta la *costumbre*: el *uso* del pueblo y la *práctica* de los tribunales.

El *uso* necesita para llegar á formar la *costumbre*: 1.º, estar en armonía con los eternos principios de justicia; 2.º, el consentimiento tácito del legislador; 3.º, considerable repeticion de actos, y 4.º, el tiempo y la forma establecidos en cada nacion. Forma la *práctica* de los tribunales la repeticion de sentencias dictadas en casos semejantes. Llámase tambien *interpretacion usual*, y debe reunir las circunstancias siguientes: 1.ª, que las sentencias sean pronunciadas en tiempos normales, é hijas tan sólo del sentimiento de la justicia; 2.ª, que lo sean por los tribunales que conocen en última instancia, y 3.ª, que, siendo antiguas, sean conformes al espíritu de las nuevas leyes. Así la doctrina fija el derecho, cuando hay dudas en su modo de entenderlo ó aplicarlo.

¿De cuántas maneras puede ser la *interpretacion*?—*Usual, doctrinal y auténtica*. La primera es la que da el *uso*; la segunda la origina la *doctrina*, y la tercera es la que dimana del legislador. La más lógica y admisible es la *doctrinal*, que forma la mision más difícil del juriconsulto. La *auténtica* no está admitida, porque, si bien el legislador puede aclarar las leyes, su aclaracion constituye una nueva ley, no decisiva de un caso particular.

¿Qué es la *hermenéutica* jurídica?—La teoría de la explicacion ó *interpretacion* de la ley.

¿Qué nombre recibe la *interpretacion* segun su extension?—*Gramatical y lógica*. La gramatical aprecia el sentido de las palabras. La lógica examina el origen de la ley y su razon filosófica, comparándola con la legislacion y costumbres de otros países.

¿Es aplicable la *interpretacion doctrinal* á las leyes penales?—No, porque los motivos que han creado la necesidad de la *interpretacion* no tienen lugar en éstas, y porque los delitos pueden ser objeto de un determinado circulo que la ley prevé y define, sin que deba extenderse la *interpretacion* más allá de lo que prescribe.

La *crítica* ó sea el conjunto de principios por los que se juzga de la propiedad é integridad de los textos, y la *paleografia*, ó sea el estudio de la antigüedad, considerado con relacion á las formas de la escritura, son tambien elementos necesarios para la *interpretacion* de las leyes.

Estudios auxiliares del Derecho.

¿Cuáles son los principales estudios que auxilian el de la jurisprudencia?—La lengua latina y castellana, la griega, y particularmente, de entre las vivas, la alemana; el conocimiento del antiguo castellano, el estudio de la historia, el de la filosofía, el derecho comparado, y aun la medicina legal.

¿Cómo debe estudiarse la historia?—No sólo en general, sino aplicada al derecho pátrio, á la Iglesia y á la eterna Roma.

¿Cómo puede tratarse la historia del derecho?—Puede ser *interna* y *externa*. Comprende la *externa* las causas que promovieron las transformaciones del pueblo, el origen y vicisitudes del poder, la literatura jurídica y las instituciones que cooperaron á la perfeccion del derecho. Y la *interna* los cambios de las reglas del derecho y el efecto causado por ellos en las teorías jurídicas. A ésta se le dá el nombre de *antigüedades del derecho*.

Es necesaria la historia del derecho, porque las leyes son el reflejo del país y de la época en que se promulgan, y la historia del derecho nos da la razón de la existencia de ellas y nos pone al corriente de las causas que han motivado el desarrollo de las instituciones y la marcha progresiva de la ciencia. Sin estos estudios la interpretacion del derecho no tendria base sólida.

HISTORIA DEL DERECHO ROMANO.

Se divide en cuatro períodos: I. Desde la fundacion de Roma hasta las XII Tabas.—II. Desde la publicacion de éstas, hasta Ciceron.—III. Desde este jurisconsulto, hasta Alejandro Severo.—IV. Desde este Emperador, hasta Justiniano.

PRIMER PERÍODO.

¿Cuál fué el origen de Roma?—Una colonia latina á la cual concurrieron muy luego los pueblos sabino y etrusco.

¿Cuál fué la primitiva division del pueblo?—Se dividió en las tres tribus de *rhamnenses*, *tatienses* y *hsceres*, representantes de las tres naciones originarias. Se dividió tambien en treinta curias, sin que conste la relacion que esta division tenia con la anterior.

¿En qué clases estaba dividido el pueblo?—En patricios y plebeyos, monopolizando los primeros el ejercicio de las funciones sacerdotales, políticas, religiosas y judiciales, participando exclusivamente del *ager publicus*, y prestando los segundos el servicio militar.

¿Qué relaciones mediaban entre los unos y los otros?—La clientela.

¿Qué efectos producía ésta?—El cliente tomaba el nombre de las deidades privadas del patrono, le debía respeto y obediencia, y estaba obligado á servirle con su persona y bienes, protegiéndolo en cambio de estos deberes el patrono, socorriéndolo en sus necesidades y defendiéndolo en juicio.

¿Qué eran los esclavos en Roma?—Simplemente una *cosa*, sin gozar de derecho alguno civil.

¿Cuál fué el primitivo gobierno de Roma?—El monárquico electivo, si bien muy restringido.

¿Cuáles eran las principales atribuciones de los tres elementos que entraban en su composicion?—El rey mandaba los ejércitos, convocaba al Senado y al pueblo, hacia ejecutar las leyes, administraba justicia, y en el órden religioso era el Pontífice máximo. El Senado era una corporacion consultiva respecto á los negocios que debian someterse al pueblo; sus miembros, al principio, fueron los jefes de las familias patricias, á los cuales agregó despues Tarquino los de algunas plebeyas, eligiéndose con posterioridad entre los individuos de unas y otras familias los miembros de aquel cuerpo. Las decisiones del Senado se llamaban *senatus-consultus*, y si un tribuno de la plebe habia interpuesto su veto, *senatus-auctoritas*. El pueblo elegia el rey y los magistrados, declaraba la paz y la guerra, y hacia y derogaba las leyes; sus asambleas se llamaban *comicios*, siendo éstos *curiados* por ser convocado el pueblo por curias.

¿Cuándo se alteró la primitiva division del pueblo?—En tiempo de Servio Tulio, que lo dividió en seis clases, y á éstas en ciento noventa y tres.

centurias, tomando para ello como base la propiedad territorial de los individuos. Estableció además el *censo*, que era el alistamiento en sus respectivas clases, que debía hacerse de cinco en cinco años, de todos los ciudadanos. Es de creer que la nueva division no se aplicó hasta el tiempo de la república á la eleccion de los magistrados y formacion de las leyes.

¿Cuándo se alteró la primitiva forma de gobierno?—En el año 244, por la expulsion de Tarquino el Soberbio y extincion de la dignidad real.

¿Quiénes fueron desde entonces los supremos magistrados?—Dos cónsules elegidos anualmente, y al principio de sólo el orden patricio. Desde entonces parece que tuvieron lugar los comicios *centuriados*, creados por Servio Tulio.

¿Cuándo se creó la dictadura?—En el año 253 de la fundacion de Roma, con ocasion de un tumulto de la plebe.

¿Cuáles eran sus atribuciones?—Ejercia la autoridad suprema cesando los demás magistrados, excepto los tribunos de la plebe; elegia el jefe de la caballería, llevaba veinticuatro lictores, pero no podia usar caballo en la ciudad y en el ejército sin el consentimiento del pueblo. Su nombramiento correspondia á los cónsules, despues de acordado por el Senado. La duracion del cargo era de seis meses.

¿Cuándo se creó el de los tribunos de la plebe?—En 264.

¿A quién correspondia su eleccion?—A los comicios tributos, anualmente.

¿Cuáles eran sus atribuciones y prerogativas?—La de interponer su veto á las decisiones de los cónsules y á los acuerdos del Senado, especialmente en los asuntos relativos á la administracion de justicia. Su persona era sagrada. No podian ser elegidos sino de la clase plebeya. Presidían los comicios tributos, cuyo elemento dominante era la plebe, denominándose *plebiscitos* los acuerdos tomados en ellos.

¿Cuándo se crearon los *Questores*?—Segun la opinion más probable despues de la expulsion de los reyes, en virtud de una ley de Valerio Publícola, creando dos magistrados con este nombre que habian de ser elegidos por el pueblo.

¿Cuáles eran sus funciones?—La custodia de los archivos del Estado, del tesoro público, depositado en el templo de Saturno, y de los estandartes militares.

¿Quiénes eran los *Questores parricidii*?—Unos magistrados á quienes los comicios delegaban el conocimiento de las causas criminales por delito capital.

¿Cuáles eran los *Ediles plebeyos* y cuáles sus atribuciones?—Dos, y sus funciones consistían en la inspeccion de los mercados, de la exactitud de pesos y medidas y de la policía de las calles.

¿Qué magistrados extraordinarios se conocieron?—El *interrex* y los *decenviros*. El *interrex* ejercia el poder supremo durante las vacantes del consulado, turnando en aquel cargo de cinco en cinco dias los senadores. Los *decenviros* fueron creados para la redaccion de las leyes de las XII Tablas.

¿Cuál fué el primer código de leyes en Roma?—La ley ó derecho civil Papiniano, coleccion formada por el Pontífice Papinio, en el reinado del último Tarquino, de las leyes regias relativas al culto. No se conserva de él ningun fragmento.

¿Cuál fué el origen de las XII Tablas?—En el año 300 de la fundacion de Roma, por resultado de la lucha entre patricios y plebeyos, fueron comisionados á Grecia tres patricios para estudiar el derecho de aquellas repúblicas, habiendo sido nombrados despues los decenviros, que, con el auxilio de Ermodoro y los datos de los comisionados, redactaron las diez primeras tablas en un año, las cuales fueron aprobadas en los comicios *centuriados*. Y para la redaccion de las otras dos fueron nombrados otros decenviros que abusaron de su autoridad, y cuyos trabajos no fueron con-

firmados por los comicios, por más que desde entonces continuaron unidos á las diez primeramente redactadas. Hoy, sin embargo, se cree que las XII Tabas contienen una legislación, no extranjera, sino indígena y nacional.

¿Es conocido su texto?—Apesar de los grandes trabajos de Jacobo Godefroy, Haubold, Dirksen, Gell y Ortolan, no puede asegurarse que lo que hoy se conoce con el nombre de aquel código sea su texto primitivo, por estar reducido á extractos tomados de autores más ó ménos fidedignos.

¿Cuál es el carácter del derecho en este período?—El ser exclusivo y sombrío, estando limitado á los ciudadanos romanos.

¿Cuál es la base de la constitucion de la familia?—El derecho de propiedad. El jefe es dueño de las personas, y de las cosas de los individuos que la componen; las relaciones que entre éstos median son las de la ley, y no las de la sangre, siendo la agnacion el único parentesco civil. La mujer es hija de familia respecto á su marido, cuya potestad se llama *manus*, sin que pueda haber matrimonios entre patricios y plebeyos. El padre puede vender, entregar en *noxá* y matar al hijo, cuyas atribuciones constituian la *potestas*, que tambien comprendia el poder sobre los esclavos.

¿Cuál era el carácter de la propiedad?—Un exclusivismo absoluto que negaba la cualidad de dueño al que no era romano, exigiendo para la trasmision del dominio ritos materiales y solemnes.

¿Cuál era el sistema de sucesion testada é intestada?—Los agnados eran los llamados á la sucesion en defecto de hijos que estuviesen bajo la patria potestad del difunto. En defecto de agnados entraban los gentiles. Desde las XII Tabas el jefe de familia gozaba de la facultad ilimitada de disponer de sus bienes por testamento, el cual podia hacerse *in calatis comitiis in procinctu ó per aes et libram*.

¿Cuál era el carácter y las fuentes de las obligaciones?—Un exclusivismo tan exagerado como el de la familia. Las fuentes eran la voluntad ó el delito, celebrándose con fórmulas solemnes las que procedian de aquella. Sus efectos eran inflexibles. El deudor que no pagaba ó no presentaba un *vindex*, podia ser reducido á prision por el acreedor: no pagando en los dos meses siguientes, podia ser muerto ó vendido por aquél al otro lado del Tiber.

¿Qué procedimiento se conocia entonces?—Uno muy sencillo y grosero. Se distinguia, no obstante, ya el magistrado del juez: el primero daba el derecho; el segundo lo aplicaba.

¿Cuál era el estado de la ciencia del derecho?—Casi no era esta conocida por estar unida á la religion, siendo los patricios los únicos iniciados en ella.

SEGUNDO PERÍODO.

¿Cuál fué la causa y qué disposiciones contenian las leyes *Valeria-Horatia*, *Publilia*, *Hortensia* y *Canuleya*?—Fueron resultado de la lucha no terminada entre patricios y plebeyos. La ley *Valeria*, dada en el año 305, declaró obligatorios los plebiscitos. La *Publilia*, en 446, confirmó lo mismo contra una sutileza de los patricios, que pretendian no estar comprendidos en la palabra *populus*, que habia empleado la *Valeria*. La *Hortensia* fué una confirmacion de las anteriores, y segun Teófilo dió tambien fuerza legislativa á los *senatus-consultus*. La *Canuleya* permitió los matrimonios entre patricios y plebeyos.

¿Qué causa dió origen á la creacion de los tribunos militares, y cuáles fueron sus atribuciones?—No pudiendo los patricios evitar la participacion de los plebeyos en el consulado, lo suprimieron, y crearon en el año 310 aquellos magistrados como los supremos de la república. Podian ser

nombrados individuos de ambos órdenes. En el año 387 se restableció el consulado, y quedaron suprimidos definitivamente los tribunos.

¿Quiénes eran los *Censores*?—Unos magistrados patricios, creados cuando los tribunos militares, cuyo cargo duró al principio cinco años, y después uno y medio; y cuyas funciones consistían en la formación del censo, fijando en él la clase, tribu y curia á que había de pertenecer cada ciudadano, para lo cual tenían en cuenta sus antecedentes y conducta. Cuidaban también de la construcción y reparación de los edificios públicos y de los caminos, puentes, acueductos y calles. Desde el año 404 fueron también admitidos los plebeyos á esta magistratura.

¿En qué tiempos fueron creados los *Pretores*?—Al ser admitidos al consulado los plebeyos, que también aspiraron á la pretura desde el año 418.

¿Cuáles eran su número y atribuciones?—Al principio fué uno sólo nombrado en los comicios centuriados; después muchos, conociéndose desde el año 510 uno con el nombre de *prætor peregrinus*, en oposición á los demás, que se llamaban *prætores urbani*. Sus funciones consistían en administrar justicia, á cuyo efecto publicaban el *edictum* al comenzar en su ejercicio. La duración del cargo era anual, como la mayor parte de las magistraturas romanas.

¿En qué tiempo fueron creados los *ediles curules*?—En el mismo que los pretores, ó sea en el año 387.

¿Cuáles eran sus funciones?—Las análogas á los ediles plebeyos, aunque en un orden superior, como que eran elegidos únicamente de la clase patricia.

¿Qué magistrados se hallaban al frente de las provincias?—Al principio unos comisionados especiales del orden patricio, nombrados *ad hoc* por el Senado; después los *procónsules* y *propretores*, que eran los que el año anterior habían desempeñado el consulado y la pretura en Roma. Mas á los numerosos extranjeros que concurrían á Roma administraba justicia el *prætor peregrinus*.

¿Cuáles fueron los orígenes del derecho en este período?—El precepto positivo y el no promulgado. Al primero correspondían las leyes, que eran votadas en los comicios por centurias, á propuesta de un magistrado del orden senatorial, y los plebiscitos, que eran los acuerdos de la plebe en los comicios tributos, tomados á propuesta de un magistrado plebeyo, ó sea de un tribuno. Las leyes se votaban con arreglo á la Tabelaria. Los plebiscitos fueron en este período la fuente más fecunda del derecho civil positivo. Además de estas dos fuentes de derecho escrito había los *senatus-consultus*.

¿Cuáles eran las fuentes del precepto no promulgado?—La *costumbre*, los *edictos* de los magistrados y la *doctrina* de los jurisconsultos. La *costumbre* procedía de los usos recibidos ó de la autoridad de la cosa juzgada. Los edictos eran publicados al principio de sus magistraturas en la ciudad por los pretores y los ediles, y en las provincias por los procónsules y los prepretores. El edicto era *nuevo* ó *traslaticio*, según que era ó no tomado de los edictos anteriores. Su fuerza obligatoria duraba tanto como la magistratura de su autor. Los edictos produjeron grandes beneficios, porque, sobre dar firmeza al derecho que había de ser aplicado por el magistrado, contribuyeron á suavizar el primitivo civil romano, templándole con la equidad del de gentes. La doctrina de los jurisconsultos tenía por objeto la interpretación del derecho civil, y estaba constituida por las respuestas que daban á sus clientes en los casos que les consultaban, llegando, por su repelición, á formar derecho consuetudinario.

¿Cuál era el estado del derecho al fin de este período?—La austeridad de los antiguos preceptos se iba suavizando por las máximas del derecho de gentes. Entre los ciudadanos y los extranjeros se conocieron entonces ya varias clases de individuos que participaban más ó menos de los derechos de ciudadanía, como los *latinos colonarios*.

¿Qué modificaciones experimentó la sociedad doméstica?—El derecho pretorio moderó la autoridad del jefe de la familia; se dieron leyes para fomentar el matrimonio; la tutela perpétua de las mujeres se hizo casi nominal, quedando reducida á la intervencion del tutor en la venta que la mujer hiciese de las cosas *mancipi*; y por último, tuvieron ménos frecuente aplicacion las solemnidades por las cuales la mujer, al contraer matrimonio, se constituia en poder del marido.

¿Qué modificaciones experimentó el derecho de propiedad?—Al lado de la rigurosamente *civil*, llamada *mancipium*, apareció la del derecho de gentes, en virtud de la cual se decia que estaban *in bonis* las cosas que por ella se poseian.

¿Qué modificaciones experimentó el derecho de testar y de sucesion?—Desaparecieron las formas *in calatis comitiis* é *in prociunctu*, introduciendo una nueva más sencilla el derecho pretorio, y conservándose, aunque desnaturalizada, la *per aes et libram*. El padre no pudo ya desheredar á los hijos sin justa causa y sin declararlo expresamente; los cognados y los hijos emancipados fueron llamados en su caso á la herencia por el pretor; los herederos *suyos* obtuvieron tambien del mismo el beneficio de abstenerse de la herencia gravosa.

¿Qué modificaciones experimentó el derecho relativo á contratos?—La obligacion reemplazó al antiguo *nexus*; algunas convenciones, destituidas de fuerza por el derecho civil, la adquirieron por el pretorio. Dejó de existir el antiguo rigor con los deudores.

¿Qué modificaciones experimentó el derecho relativo á las acciones?—La palabra *accion* cambió de significado, no representando ya otra cosa que la facultad de reclamar lo que á cada uno corresponde. El derecho pretorio creó medios de ejercitar derechos no reconocidos ó que estaban en oposicion con la ley civil. En una palabra, al sistema de las acciones de ley sucedió el formulario. Se marcaron más las diferencias que habia entre el magistrado y el juez, el cual no podia conocer sino de un negocio especial y á tenor de la fórmula que habia recibido del magistrado, siendo su nombramiento resultado de la propuesta de éste, de la voluntad de los litigantes ó de la suerte en caso de discordia. Los jueces, ó eran propiamente tales, ó *árbitros*, *recuperatores*; los *árbitros* se distinguian de los jueces en la mayor latitud de que gozaban para conocer del negocio, segun la fórmula que habian recibido del magistrado; los *recuperatores* se distinguian de los unos y de los otros en ser varios para cada negocio y en la forma más expedita con que conocian. Habia otros jueces llamados *centunviro*s, cuyas funciones no son bien conocidas. Para conocer de ciertos delitos habia tribunales permanentes, presididos por un pretor que no tenia jurisdiccion especial, y llamados *questiones perpetuae*.

¿Qué trabajos jurídicos se escribieron en este período?—Los más notables fueron los debidos á Cuco Flavio y Sexto Elio Cato. El primero, amanuense de Apio Claudio el Ciego, publicó en el año 449 el calendario y las acciones de ley, cuya publicacion dió margen á que los patricios, para no perder el monopolio de la jurisprudencia de que hasta entonces habian gozado, inventasen nuevas fórmulas, expresándolas con letras iniciales para que no hubiese quien pudiese revelarlas á la plebe, como á pesar de ello lo hizo Elio Cato en el año 352.

¿Quiénes fueron los jurisconsultos más notables en este período?—Tiberio Coruncanio, primer plebeyo que llegó á la dignidad de Pontifice, y el cual enseñó públicamente el derecho, dando así origen á la clase de jurisconsultos, que produjo el efecto de extinguir la antigua clientela y los inconvenientes de las acciones de ley, hasta el punto de que fuesen reemplazadas por el sistema formulario, cuyas bases asentó la ley *Æbu*cia; Caton el antiguo, que fué el primero en recopilar hechos que habian dado margen á procedimientos particulares, y de quien, ó de su hijo, procede la

regla *catoniana*; Manilio, que dió su nombre á ciertas fórmulas para las ventas; Hostilio, que tambien lo dió á ciertas acciones relativas á testamentos; Marco Junio Bruto, autor de tres libros titulados *De jure civili*; los dos Scévolas, Publio Mucio y el augur Quinto.

TERCER PERÍODO.

¿Qué causas y acontecimientos produjeron y prepararon el tránsito de la república al imperio?—Las continuas discordias entre los ricos y los pobres; los patricios y plebeyos, que dieron lugar á las sediciones de los Gracos, á las proscripciones de Mario en nombre de la plebe y de Sila en el de los patricios, al triunvirato de Pompeyo, Craso y César, que terminó por la dictadura del último, y al de Octavio, Marco Antonio y Lepido, que se resolvió en la dictadura y despues en el imperio del primero, quien puso definitivamente fin al régimen republicano.

¿Qué títulos y atribuciones tuvo el emperador?—Se llamó *imperator cæsar augustus*; reasumia el poder consular, mandaba los ejércitos, de clara la paz ó la guerra, ejercia el mando en las provincias más importantes, desempeñaba las funciones de la antigua censura, del pontificado máximo y del tribunal de la plebe. Por estas magistraturas tenia el derecho de dar edictos, que á poco se convirtieron en una abundante y única fuente del derecho escrito.

¿A quién correspondia la facultad de elegir emperador?—Al Senado, el cual, comunmente, no hacia otra cosa respecto á la eleccion que ceder, sancionándolas, á las exigencias de las legiones ó de la cohorte pretoriana.

¿A quiénes correspondió en este período el poder legislativo?—Al principio continuó ejerciéndolo el pueblo en los comicios centuriados y tributos, pero pasó luego por completo al Senado y á los emperadores.

¿Qué atribuciones tuvo el Senado?—Además de la de elegir al emperador, que era casi nominal, segun se ha dicho, elegia tambien á los magistrados, exceptuando tan solo á los cónsules; sucedió al pueblo en el ejercicio de la potestad legislativa, aumentándose por esta causa los *senatus-consultus*; y por último, adquirió jurisdiccion criminal para conocer de los delitos de lesa magestad, de concusion de los funcionarios de las provincias y de los capitales contra los senadores.

¿Qué magistraturas se conocieron en este período?—Las antiguas, aunque reducidas casi á meros títulos de honor, exceptuando solamente la pretura que conservó sus primitivas funciones, si bien aumentándose los magistrados de este nombre hasta doce en tiempo de Augusto, y diez y seis en el de Tiberio. Hubo además los siguientes nuevos magistrados del emperador: el *præfectus urbi*, el *præfectus pretorio*, el *præfectus annonæ*, el *præfectus vigilum* y los *præfecti ærarii*. Habia además el *consistorium*, corporacion compuesta de magistrados y senadores, que formó el consejo del emperador.

¿Qué alteraciones sufrió la division y administracion de las provincias?—Desde Augusto quedaron divididas en dos clases: las unas, en que residia el ejército, eran administradas por el emperador ó sus delegados con los nombres de *præfectus* ó *presidentes*, por lo cual se llamaban *provinciae cæsaris*; las otras eran administradas por el Senado, y en su nombre por los procónsules y propretores, denominándose por ello *provinciae senatus*. Se llamaban tambien las primeras *tributarie*, porque los impuestos que pagaban se denominaban *tributum*, y entraban en el fisco, y las segundas *stipendiariae*, porque sus impuestos se llamaban *stipendium* y entraban en el erario.

¿Cuáles fueron las fuentes del derecho en este período?—Como preceptos positivos, al principio, las leyes y los plebiscitos; y despues, los *senatus-consultus* y los edictos y constituciones imperiales. Los *senatus-consultus*

por analogía con las antiguas leyes, llevaban el nombre del emperador que los proponía, y alguno hay, como el *Macedoniano*, que se conoce con el del individuo que dió causa á su formación. Los emperadores, además de constituciones, publicaban *decretos* relativos á los negocios judiciales que se sometían á su fallo, y *rescriptos*, que eran las respuestas dadas por ellos á las consultas que se les hacían sobre derecho privado, ejerciendo esta potestad legislativa en virtud de la ley llamada *regia*, que no era otra cosa que la concesión que el pueblo hacía al emperador, á su advenimiento al solio, de todas las magistraturas que había reasumido Augusto en su persona. El derecho *no escrito* procedía de las mismas fuentes que en el período anterior. Los pretores continuaron dando sus edictos al encargarse de la jurisdicción, cuando ménos hasta el tiempo de Adriano, en que publicó Salvio Juliano el *edictum perpetuum*, que es de creer hubiese sido sancionado y recibido fuerza obligatoria para lo futuro por el emperador sobredicho. Ya anteriormente la ley Cornelia había establecido que los magistrados se arreglasen á las bases contenidas en el edicto que hubiesen publicado. Desde la obra del jurisconsulto Juliano presúmese que la facultad de publicar edictos los magistrados debió quedar, cuando ménos, muy minorada. Respecto á las respuestas de los jurisconsultos, Augusto autorizó á algunos para que las diesen en su nombre, siendo, por lo tanto, las de este modo dadas, obligatorias en juicio, llamándose por esta razón á sus autores *juris conditores*, cuya autorización precisó más Adriano, declarando que cuando los jurisconsultos autorizados estuviesen unánimes en su opinión, tuviera ésta fuerza de ley; y, por el contrario, el magistrado pudiese optar por la que creyese más equitativa, cuando estuviesen discordes.

¿Qué estado alcanzó el derecho en este período?—El rigorismo quiritarío continuó desapareciendo ante máximas de justicia universal, y por otra parte Antonino Caracalla dió una constitución declarando ciudadanos romanos á todos los hombres libres habitantes de las provincias, por más que no por eso desaparecieron las clases de *latinos junianos* y *dediticios*.

¿Cómo se modificó la organización de la familia?—El padre perdió la libertad ilimitada de vender al hijo, el cual adquirió personalidad, introduciéndose á su favor el *peculio castrense*; la mujer dejó en realidad de estar sometida á tutela perpétua; los esclavos no pudieron ya ser muertos, ni aun castigados con excesivo rigor, por los dueños; mas á la vez se puso un límite al número de manumisiones por las leyes *Elia Sentia*, *Julia Sorbana* y *Furia Caninia*; se desarrolló el derecho relativo á las tutelas, tendiendo á proteger la persona y bienes del huérfano y estableciéndose la tutela *dativa*.

¿Cómo se modificó el derecho de propiedad?—A pesar de continuar todavía subsistente, fué ya ménos trascendental la diferencia entre cosas *mancipi* y *ne mancipi* y entre el suelo *itálico* y el *provincial*, agregándose á los antiguos el nuevo modo de adquirir, llamado *caducum et ereptorium* en virtud de la ley *Papia Popea*, permitiéndose las adquisiciones por tercera persona, y precisándose los casos en que podía enajenar el que no era dueño y no podía hacerlo el que lo era.

¿Qué modificaciones sufrió el derecho relativo á testamentos y sucesiones?—Adquirieron la facultad de testar los mayores de catorce años y los hijos de familia respecto al *peculio castrense*, así como los habitantes de las provincias, en el concepto de ciudadanos romanos, exceptuando los *latinos junianos* y *dediticios*. Adquirieron la facultad de ser instituidos herederos los póstumos, los municipios y algunas divinidades y, por el contrario, la perdieron en parte, los que no tenían hijos y los célibes: éstos nada podían recibir á no ser de un pariente próximo, y aquellos perdían la mitad de la herencia en que habían sido instituidos. Se autorizaron los codicilos, se hicieron más frecuentes las sustituciones vulgares y se dieron estímulos á los herederos para que aceptasen la institución hecha á su favor.

evitando así la nota que en otro caso caería sobre la memoria del difunto. En las sucesiones intestadas se respetaron más las inspiraciones de la naturaleza, sucediendo los hijos á la madre, y ésta á aquellos en ciertos casos.

¿Qué modificaciones se introdujeron en el derecho relativo á obligaciones?—Algunos pactos adquirieron fuerza obligatoria, por más que no se les diese el nombre de contratos; fueron ménos frecuentes las solemnidades de la estipulacion, se generalizó el uso de la escritura en los contratos, se fijó la tasa de la usura, se privó de toda fuerza á las obligaciones contraidas por los hijos de familia sin el consentimiento de los padres, se establecieron las diferencias entre la permuta y la venta; y por último, se introdujeron como modos de extinguir las obligaciones, la estipulacion *aquiliana*, la *compensacion* y la *consignacion*.

¿Qué modificaciones se introdujeron en los procedimientos?—El sistema de las acciones de ley fué completamente extinguido y reemplazado por el formulario, sin embargo de que ya comenzó á ser conocido el procedimiento extraordinario, en virtud del cual el emperador ó los magistrados fallaban un litigio por sí mismos, sin someter á los jueces el conocimiento. Se introdujeron las apelaciones al emperador.

¿Qué causas favorecieron el desarrollo del derecho en este período?—La filosofía estoica que profesaron casi todos los juriconsultos, y que les llevaba á elevarse del ritualismo del antiguo derecho á doctrinas y principios más generales; la decadencia de la idolatría, que permitió á la ley y á la ciencia despojarse de la antigua forma religiosa en que había estado envuelta, y la separacion del estudio de la teoria del derecho del de la práctica, introducida en este período con la creacion de escuelas de derecho en que se enseñaba oralmente la ciencia, por más que no sean conocidas hoy las prescripciones ó reglamentos á que esta enseñanza se hallaba sometida.

¿Qué juriconsultos más notables florecieron en este período?—Quinto Mucio Scévola, Aquilio Galo, Marco Tulio Ciceron, Servio Sulpicio Rufo, Alfeno Varo, Trebacio Testa, Marco Antistio Labeon y Cayo Aleyo Capiton, que crearon, Labeon la escuela de los proculeyanos ó pegasianos, y Capiton las de los sabinianos ó casianos, por más que no hubiese entre estas escuelas, ó á lo ménos no sea hoy conocida, ninguna teoría fundamental que les sirviese de punto de separacion. Se cuentan también entre los juriconsultos más notables, pero posteriores á Adriano, á Sexto Cicilio Africano Pomponio, Emilio Macer, Emilio Papiniano, Gayo, Domicio, Ulpiano y Modestino. Gayo escribió las célebres instituciones de su nombre, descubiertas en 1816 en un palimpsesto, en Verona, por Nieburh. Papiniano escribió varios libros de cuestiones, de respuestas y de definiciones. Paulo escribió, entre otras obras, la de las sentencias, en cinco libros, y Ulpiano escribió uno de reglas.

CUARTO PERÍODO.

¿Qué acontecimientos más notables hubo en este período?—El desarrollo que tuvo la propagacion del cristianismo, hasta ser ascendido al solio con Constantino, y la invasion de los bárbaros del Norte.

¿Qué cambios experimentó la organizacion del imperio?—Diocleciano extinguió los últimos restos del régimen republicano, asentando las bases del despotismo áulico, que desarrollaron despues Constantino y sus sucesores; dividió el imperio en cuatro partes, poniendo al frente de ellas dos augustos y dos césares, y con su larga residencia en Nicomedia preparó la traslacion de la capital de Roma á Bizancio, que llevó á efecto Constantino, dando su nombre á la nueva ciudad, por lo cual quedó reducido el antiguo

Senado romano á una corporacion municipal, aunque con grandes honores y preeminencias. Abrazando el cristianismo Constantino, destruyó los restos de los elementos paganos que todavía subsistían en el derecho, y dió márgen á que se desarrollase en él un nuevo y más civilizador espíritu. Reconoció en la Iglesia capacidad para adquirir; dió fuerza obligatoria á las sentencias arbitrales de los obispos; elevó la herejía á la categoría de delito público, y dió grande intervencion á aquéllos en lo relativo á manumisiones y tutelas. Variando la division del imperio, lo organizó en cuatro grandes prefecturas, al frente de cada una de las que puso un prefecto del pretorio; separó la jerarquía militar de la civil, y organizó ésta en una série de grados cuyos individuos llevaban los títulos de *ilustres*, *spectabilis*, *clarissimi*, *perfectissimi* y *egregii*. Por resultado de la consolidacion del despotismo imperial, el erario quedó confundido con el fisco. A su muerte, el imperio se dividió entre sus hijos, continuando la division entre oriental y occidental hasta Teodosio I, que á su vez lo volvió á dividir, desapareciendo el de Occidente en el año 476. Continuó el de Oriente, aunque atacado por todas partes por los bárbaros, ascendiendo al solio Justiniano en 527, quien, por medio de sus generales Belisario y Narses, reconquistó el África, la Sicilia y la Italia; y, sobre todo, con el auxilio de Tribonian y otros célebres jurisconsultos, redactó las célebres obras legislativas que llevan su nombre, á las cuales debe su gloria y el que pasen oscurecidas las grandes faltas que cometió como emperador.

¿Cuáles fueron las fuentes del derecho en este período?—La principal, y que vino á absorber casi por completo las de los períodos anteriores, fueron las constituciones imperiales, porque los plebiscitos y los *senatus-consultus*, así como los edictos de los magistrados, desaparecieron del todo, y las respuestas de los jurisconsultos quedaron muy reducidas como fuentes de derecho por la ley de Citas.

¿Cuál fué el origen y el objeto de esta ley?—Adrian, y despues Constantino, habian dictado ya algunas disposiciones para arreglar el grado de autoridad de los jurisconsultos; mas despues Teodosio II y Valentiniano III, en el año 426, promulgaron una Constitucion declarando que tuviesen fuerza de derecho escrito las opiniones de Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino, y las de los jurisconsultos antiguos que hubiesen sido adoptadas por los mencionados; que, en el caso de no hallarse éstos conformes, se estuviese por la opinion del mayor número, y si todos opinasen singularmente, que prevaleciese Papiniano, á no ser que estuviesen conformes y en contra suya dos ó más de los nombrados. Y en el caso de que Papiniano no hubiese dado opinion y los otros cuatro estuviesen discordes, el juez, con su prudente criterio, adoptase el parecer que creyese más equitativo.

¿Qué colecciones de constituciones imperiales se conocieron en este período?—La de Papirio Justo, que extrató las de Vero y Antonino; la de Dositheo, que publicó en griego las de Adriano; la de Ulpiano, que reunió las dudas contra los cristianos, y otra de Julio Paulo, dividida en seis libros. Pero las más notables fueron las denominadas Códigos Gregoriano y Hermogeniano, de que tan sólo se conservan fragmentos. Parece probable que el Gregoriano se publicó hácia el año 296, no comprendiendo constituciones más antiguas que las de Adriano, y que el Hermogeniano vió la luz hácia el 365, conteniendo las promulgadas desde la publicacion del Gregoriano.

¿Quién fué el autor y cuál la estructura y materia del código Teodosiano, y qué carácter tuvo?—Este código fué formado por una comision de jurisconsultos, presidida por Antioco, y publicado por Teodosio II en 438 para el imperio oriental, habiendo sido adoptado para el Occidente en el mismo año, por Valentiniano III. Se dividió en diez y seis libros, distribuyéndose en ellos por orden de materias las constituciones promulgadas

desde Constantino, comprendiendo el derecho civil en los libros 2.º, 3.º, 4.º y 5.º Hoy se posee una buena parte de este código, debido á las investigaciones de Clossio y de Peyron, en las bibliotecas de Milan y de Turin.

¿Qué compilaciones romanas más notables debieron su origen á los bárbaros?—El edicto de Teodorico, publicado en el año 500 con fuerza obligatoria para los súbditos romanos y ostrogodos; en Italia, el código de Alarico, publicado en 506 para los romanos del imperio visigodo, y las respuestas de Papiano ó Papiniano, que vieron la luz del 517 al 534 en el reino de los borgoñones, para los súbditos romanos.

¿Qué obras legislativas publicó Justiniano?—El código formado de su orden por una comision de diez jurisconsultos, presidida por Juan, questor del palacio imperial, en cuya obra se comprendieron las constituciones que estaban en observancia, habiendo sido promulgado en 7 de Abril de 529. En 534 se hizo una revision del mismo por los jurisconsultos Triboniano, Doroteo, Menna, Constantino y Juan, conciliándolo con el Digesto y las Instituciones, publicando la nueva obra en 16 de Noviembre con el nombre de *Codeo repetite prelectionis*. Se dividió en doce libros, y se comprendieron en él las constituciones publicadas desde Adriano, que entonces estaban en observancia. Las *Pandectas* ó *Digesto* fueron formadas por Triboniano y otros quince jurisconsultos; su trabajo tuvo por objeto extraer dos mil tratados de treinta y nueve jurisconsultos, habiendo concluido la obra en tres años, dividiéndola en siete partes y en cincuenta libros, y cada uno de éstos en títulos, fragmentos y párrafos. Se publicaron las *Pandectas* en latín en 16 de Diciembre de 533. Las Instituciones fueron redactadas, teniendo presentes las de Gayo, por los jurisconsultos Triboniano, Teófilo y Doroteo, y publicadas en el 2 de Noviembre del últimamente citado año. Justiniano publicó además muchas constituciones que, por ser posteriores al Código, se llamaron *novelas*, y fueron coleccionadas y extraídas despues de su muerte.

¿Cuál fué el estado del derecho al fin de este periodo?—Desapareció por completo la diferencia entre el ciudadano y el peregrino, y apareció otra jurídica entre el católico y el hereje. Se introdujeron nuevos medios de manumision, derogándose la ley Furia Caninia, y apareciendo la clase intermedia de los siervos de la gleba. Desaparecieron igualmente las clasificaciones de las leyes *Elia Sentia* y *Junia Norbana*.

¿Qué modificaciones experimentó la organizacion de la familia?—La facultad de adquirir los hijos se extendió á los empleados en palacio y á los eclesiásticos, y en general á todos, respecto á lo que no adquiriesen procedente del padre, organizándose los peculios *castrense*, *cuasi-castrense*, *adventicio* y *profecticio*. Se dificultó el divorcio y las segundas nupcias; se aumentaron los impedimentos matrimoniales, naciendo el espiritual; apareció la emancipacion legal y se facilitó la voluntaria; se limitaron los efectos jurídicos de la adopcion, y se introdujeron las legitimaciones por subsiguiente matrimonio, oblacion á la curia y rescripto imperial; cesó del todo la tutela perpétua de las mujeres, que quedaron facultadas para ser tutoras en algunos casos; se fijó la pubertad por la edad y se admitió la venia del príncipe como modo especial de salir de la curaduria, además del general de los veinticinco años.

¿Qué modificaciones experimentó la organizacion de la propiedad?—Se suprimió completamente toda diferencia entre cosas *mancipi* y *nec mancipi* y entre el suelo itálico y provincial; se aseguró la dote de la mujer casada y se hizo más frecuente la donacion *ante* ó *propter nuptias* como compensacion de la dote, y se asimilaron las donaciones *mortis causa* á los legados.

¿Qué modificaciones experimentó la testamentificacion?—Se concedió capacidad de adquirir por este título á las corporaciones religiosas, se fijaron las causas de desheredacion, se introdujo la sustitucion ejemplar, se regularizaron los fideicomisos universales y aparecieron los beneficios de

deliberar y de inventario; y, por último, respecto á la sucesion intestada, los cognados sucedieron á los agnados.

¿Qué modificaciones se introdujeron en la materia de obligaciones?—Desapareció el antiguo rigor de la estipulacion, bastando la sola congruencia entre la pregunta y la respuesta; al antiguo contrato *litteris* sucedió el literal, se generalizó el uso de los *tabelliones* ó notarios para el otorgamiento de los contratos, se redujo el interés del dinero y el *enfiteusis* se elevó á contrato, separándose de la compra-venta y del arrendamiento.

¿Qué reformas experimentó el procedimiento?—El extraordinario fué el único admitido.

¿Qué causas dieron lugar á la decadencia de la cultura del derecho?—Las luchas intestinas en el imperio, la traslacion de la capital á Bizancio y el mayor brillo de los estudios teológicos.

¿Cuáles fueron las escuelas más célebres del derecho en este periodo?—Las de Constantinopla y Berito.

¿Quiénes fueron los jurisconsultos más notables?—Triboniano y Teófilo.

¿Cuáles fueron las obras jurídicas más importantes?—La denominada *Fragments vaticanos*, la *Comparacion de las leyes mosaicas con las romanas* y la *Consultatio veteris jurisconsulti*.

¿Qué compilacion legal se publicó despues de la de Justiniano?—Las *Basilicas*, compuestas por el emperador Basilio I y su hijo Leon el Filósofo, que las promulgó en 887, habiendo hecho de ellas nueva edicion en 944 el emperador Constantino Porphirogeneta, y además la coleccion de 413 novelas del emperador Leon, publicada por el mismo en 893.

¿Qué suerte cupo al derecho romano en Oriente?—Continuó rigiendo como ley escrita, aun despues de tomada Constantinopla por los turcos, pero la ciencia desapareció del todo. En la nueva nacionalidad griega volvieron á revisarse las *Basilicas*; pero ya este trabajo se acomodó á las formas de los códigos modernos.

¿Cuál fué el destino del derecho romano en Occidente?—Subsistió ya en la forma que tenia en el código Teodosiano, ya en la que habia recibido en los códigos de Justiniano en los nuevos Estados de Europa, aunque al principio tan sólo como ley de la raza vencida, hasta que en el siglo XII renació con nuevo brillo en las universidades de Bolonia, de París y de Alemania y en los colegios de Inglaterra, apareciendo la escuela de los glosadores con Irnerio, sucediendo á ésta la de los comentaristas con Bartolo de Saxo Ferrato, tomando un carácter literario el derecho con Ángel Policiano y Alciato en el siglo XVI, y apareciendo con un tinte profundamente filosófico en el presente, en que ha adquirido gran brillo.

¿Cuál fué el destino del derecho romano, especialmente en España?—Estuvo en observancia como ley escrita en el breviario de Alarico, pasando despues al *Fuero Juzgo* como uno de sus elementos constitutivos, volviendo á renacer con más fuerza en el siglo XIII en las *Partidas* de Alonso el Sabio, que fundó tambien la universidad de Salamanca, en la cual, y en las demás escuelas, desde entonces volvió á florecer la ciencia del derecho romano, corriendo la misma suerte que en el resto de la Europa.

INSTITUCIONES DEL DERECHO ROMANO.

LIBRO PRIMERO.

¿Qué es justicia?—La constante y perpetua voluntad de dar á cada uno su derecho.

¿Qué es jurisprudencia?—El conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto, ó como se define hoy, el conocimiento del derecho.

¿Qué es derecho?—El conjunto de principios que sirven de regla á los actos humanos.

¿Cuáles son sus preceptos fundamentales?—Tres: vivir honestamente, no dañar á otro y dar á cada uno lo que es suyo.

¿Cómo se divide el derecho?—En público y privado; y éste en natural, de gentes y civil.

¿Qué es derecho público?—El que se refiere al gobierno del pueblo romano.

¿Qué es derecho privado?—El que se refiere á la utilidad de los particulares.

¿Qué es derecho natural?—El que la naturaleza enseñó á todos los animales.

¿Qué es derecho civil?—El que cada pueblo constituye y es peculiar á sus ciudadanos.

¿Qué es derecho de gentes?—El que la razon natural ha establecido entre todos los hombres, y se observa igualmente en todos los pueblos.

¿Cómo se divide el derecho por razon de sus orígenes ó fuentes?—En escrito y no escrito.

¿Cuáles son las fuentes del derecho escrito?—La ley, los plebiscitos, los senados-consultos, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los jurisconsultos.

¿Qué es ley?—Lo que el pueblo romano establecía á propuesta de un magistrado del orden senatorial.

¿Qué es senado-consulta?—Lo que el senado mandaba y establecía.

¿Qué es plebiscito?—Lo que la plebe constituía á propuesta de un magistrado del orden plebeyo.

¿Qué son constituciones imperiales?—Todo lo que el emperador decidía por un rescripto, decretaba juzgando, ó mandaba por un edicto.

¿Qué eran los rescriptos?—Las contestaciones que el emperador daba á las consultas que se le dirigian, las cuales se llamaban *anotaciones* cuando el consultante era un particular, *epistolas* cuando era un magistrado y *pragmáticas sanciones* si era una provincia, municipio ó colegio.

¿Qué eran los decretos?—Las sentencias dadas por el emperador en los negocios judiciales que se sometian á su fallo, bien despues de haber observado los trámites del procedimiento, bien decidiendo de plano del asunto, en cuyo caso se llamaban *intervenciones*.

¿Qué eran los edictos?—Las disposiciones generales que espontáneamente publicaban los emperadores sobre cosas de interés comun.

¿Qué eran los edictos de los magistrados?—Las declaraciones que los pretores, ediles, curules y otros que tenian esta facultad, publicaban en el *album* al encargarse de la magistratura, y en las que consignaban reglas á que habian de atenerse en la administracion de justicia. Estos edictos formaron lo que se llamó derecho honorario.

¿Qué eran las respuestas de los jurisconsultos?—Las opiniones y sentencias de aquellos á quienes estaba permitido fijar el derecho.

¿Qué es derecho no escrito?—El introducido por el uso.

¿Cómo se divide el derecho por razon de su objeto?—En tres partes, segun que se refiere á las personas, á las cosas ó á las acciones.

DE LAS PERSONAS.

Ingenuos.—Libertinos.—Manumitidos.—Personas «sui juris, y alieni juris.»

¿Qué es persona?—Todo sér capaz de derechos y obligaciones.

¿Cómo se clasifican los hombres?—En libres y siervos.

¿Qué es libertad?—La facultad natural que cada uno tiene de hacer aquello que no prohibe la fuerza ó la Ley

¿Qué es servidumbre?—Una institucion de derecho de gentes por la que uno es sometido al dominio ajeno, contra la naturaleza.

¿Cómo se clasifican los siervos por razon de la causa de su servidumbre?—En siervos que nacen tales, como los hijos de las esclavas, y siervos que, naciendo libres, cayeron después en la esclavitud, como los cautivos ó los mayores de veinte años que permiten que los vendan para participar del precio.

¿Cómo se clasifican los libres?—En *ingenuos* y *libertinos*.

¿Quién es ingenuo?—El hombre libre desde el instante de su nacimiento, bien sea hijo de dos ingenuos, bien de dos libertinos, bien de un libertino y un ingenuo, bien de una mujer libre aunque el padre fuese esclavo; pues el estado de libertad de la madre, al tiempo de la concepcion ó durante la gestacion ó al tiempo del parto, basta para que el hijo nazca ingenuo.

¿Quién es libertino?—El que fué manumitido de una servidumbre justa.

¿Qué es manumision?—El otorgamiento de la libertad. Era acto de jurisdiccion voluntaria.

¿Qué clases hay de manumision?—La que se hace en las iglesias; la que se hace por vindicta; la que tiene lugar entre amigos; la que se verifica por carta, la que se consigna en un testamento ó en cualquiera otra última voluntad y la inscripcion del nombre del esclavo en las tablas del censor, antes del cristianismo, á cuyo modo sustituyó la primera manumision referida.

¿Se conocieron otros modos de manumision?—Los siguientes: 1.º, cuando el señor abandonaba al esclavo enfermo de peligro sin procurarle un albergue, en cuyo caso ni aun conservaba la consideracion de patrono; 2.º, cuando prostituía á la esclava comprada con la condicion de no prostituirla; 3.º, cuando el esclavo llevaba el gorro de la libertad en las exequias de su señor, por haberlo así dispuesto éste ó con asentimiento de su heredero; 4.º, cuando el señor casaba á la esclava con hombre libre y le constituía dote; 5.º, cuando en una acta pública daba al esclavo el nombre de hijo; 6.º, cuando le entregaba ó destruía á presencia de cinco testigos los documentos en que se acreditaba la servidumbre.

Los modos de manumitir indicados, unos eran *solemnes* y otros *ménos solemnes*. El censo, la vindicta y el testamento, eran de los primeros.

Se manumitia en las iglesias, á presencia del señor, de los fieles y del clero, que suscribia el acta de libertad; por *vindicta*, ante el magistrado, en vista del silencio del señor á la peticion de libertad del esclavo hecha por el *asertor libertatis*; y en *testamento* cuando se concedia expresamente la libertad, la cual podia ser en forma *directa* ó *fideicomisaria*, segun que fuera hecha por el testador directamente ó rogando á otro que la hiciese.

¿De qué clase podían ser los libertinos?—De tres: ó bien adquirían la mayor libertad y se hacían ciudadanos romanos, ó bien adquirían menos libertad y se hacían *latinos* por la ley Junia Norbana, ó bien una libertad inferior y se hacían *dediticios* por la ley *Alia Sentia*, cuyas clases fueron suprimidas por Justiniano, que adjudicó la ciudadanía romana á todos los manumitidos.

¿Quiénes no podían manumitir?—1.º, el que lo hacía en fraude de sus acreedores, esto es, el que manumitía al siervo cuando ya sabía que sus bienes no eran suficientes para el pago de aquéllos, exceptuándose tan sólo al que manumitía el siervo para que fuese heredero suyo y necesario en el caso de que no existiese otro heredero en el testamento; y esto aunque no le concediese la libertad expresamente, bastando sólo para la manumisión que lo instituyese heredero; 2.º, el menor de veinte años, á no ser por el rito de *vindicta* y por justa causa aprobada por el consejo.

¿Qué causas se reputaban justas al efecto?—El ser el esclavo padre ó madre, hijo ó hija, hermano ó hermana natural, preceptor, nodriza, ayo, discípulo ó hermano de leche del manumitente, ó necesitarlo éste para procurador suyo, debiendo en este caso tener el esclavo más de diez y siete años; ó intentar el manumitente casarse con la esclava, con tal que el matrimonio se verificase, á no impedirlo una justa causa, en los seis meses siguientes á la manumisión. Justiniano modificó este derecho establecido por la ley *Alia Sentia*, declarando que pudiese manumitir por testamento el mayor de diez y siete años cumplidos.

¿Cómo se clasifican las personas por razón de su capacidad jurídica?—En personas *sui juris* y *alieni juris*. Eran *sui juris*, los que no estaban sujetos á la potestad de otro; y *alieni juris*, los que estaban sometidos á la potestad de sus ascendientes ó á la de sus señores.

¿Quiénes están en poder de sus señores?—Los siervos, sobre los cuales aquéllos tenían el derecho de vida y muerte, que fué restringido por el emperador Antonino Pio, que declaró reo de homicidio al que matase á su esclavo y prohibió que los señores los castigasen cruelmente, mandando que en este caso fuesen obligados á venderlos con buenas condiciones.

¿Quiénes están en poder de sus ascendientes?—Los hijos procreados de justas nupcias.

De las nupcias y de la patria potestad.

¿Qué son nupcias ó matrimonio?—La unión del varón y la mujer, que contiene la obligación de vivir en comunidad perpétua.

¿Qué es patria potestad?—El poder que las leyes otorgan al jefe de la familia sobre sus descendientes legítimos, poder dimanado del derecho *quiritario*, que llegaba á considerar como cosas á los hijos. Por eso podía venderlos, darlos en *noxá*, hacer propias todas las adquisiciones de aquéllos, llegando á tener sobre ellos derecho de vida ó muerte.

La legitimidad de los hijos se presumía siempre que la madre estuviese casada, por el principio *filius est quem iustae nuptiae demonstrant*.

¿Quiénes estaban bajo la patria potestad romana?—Los hijos legítimos y los nietos provenientes de hijo y no de hija.

¿Quiénes podían contraer justas nupcias?—Los ciudadanos romanos varones, púberos y mujeres núbiles, bien fuesen padres ó hijos de familia, previo, respecto á éstos, el consentimiento paterno, á no ser que el padre fuese loco ó furioso, en cuyo caso los hijos podrían contraer matrimonio sin aquel requisito.

¿Entre quiénes no podían mediar justas nupcias?—1.º, entre las personas que ocupaban mutuamente el lugar de ascendientes y descendientes, bien procediese esta consideración de la naturaleza, bien del vínculo de la adopción aun después de disuelto; 2.º, tampoco podía celebrarse entre los

hermanos, aunque no lo fuesen por ambas líneas ó por el vínculo de la adopción, mientras subsistiese ó no hubiese sido emancipado el hermano natural; 3.º, tampoco podía mediar entre el hermano y la hija ó nieta del hermano, ó hermana natural, aunque si podían casarse los hijos de hermanos; 4.º, tampoco podían mediar las nupcias entre el hijo y la hermana natural ó adoptiva del padre, madre, abuelo ó abuela; 5.º, no podía igualmente mediar matrimonio entre el padrastro y la hijastra, ni entre el suegro y la nuera, no debiendo tampoco celebrarse nupcias, entre el padre y la esposa del hijo; pero si podían contraer matrimonio el hijo del padre y la hija de su mujer, si es que la madre y el padre respectivos habían sido extraños entre sí, existiendo estos impedimentos aunque el parentesco se hubiese formado en la esclavitud.

Por razones civiles ó políticas, ¿quiénes no podían contraer matrimonio?—1.º, el tutor ó curador, y sus hijos ó nietos, con la huérfana antes de la rendición de cuentas y de que aquella hubiese cumplido veintiseis años; 2.º, algunas autoridades con una mujer de la provincia en que ejerciesen sus funciones; 3.º, el raptor con la robada; 4.º, la adúltera con su cómplice, y 5.º, el cristiano con la judía.

¿Qué valor tenían los matrimonios celebrados contra las prohibiciones precedentes?—Eran nulos, y los hijos que de ellos naciesen no caían bajo la potestad del padre.

¿En qué casos los que no habían nacido en la potestad de los padres entraban después en ella?—Cuando eran ofrecidos á la curia ó se celebraba entre sus padres un matrimonio posterior, arreglándose entre ellos los instrumentos dotales. A estos medios se llama *legitimación*, la cual puede definirse «un acto por el cual se finje que los hijos *ilegítimos* han nacido de legítimo matrimonio.» Sólo podían legitimarse los hijos naturales.

¿Cuántas clases había de *legitimación*?—Tres: matrimonio subsiguiente, oblación á la curia y rescripto del príncipe.

¿Cómo se denominan las causas que se oponen á la celebracion de los matrimonios?—Impedimentos.

Por razón de ellos, ¿qué clases de parentesco se conocían?—Cuatro, á saber: 1.º, parentesco de *consanguinidad*, que mediaba entre los que procedían de un mismo tronco; 2.º, parentesco de *afinidad*, que mediaba entre un cónyuge y los parientes del otro; 3.º, parentesco *civil*, que procedía de la adopción entre el adoptado y el adoptante y sus descendientes naturales, y 4.º, parentesco *espiritual*, que mediaba entre el bautizante ó confirmando, el bautizado ó confirmado, sus padres y padrinos.

¿Qué es línea?—La serie de personas que proceden de un mismo tronco.

¿Qué clases hay de líneas?—*Recta*, que también puede ser ascendental ó descendental y *transversal*. La 1.ª, es la formada directamente por los que engendran y los engendrados; y la 2.ª, la que forman las personas provenientes de un mismo tronco, sin descender unas de otras, como los hermanos.

¿Qué es grado?—La distancia que separa á un pariente de otro, sea directo ó colateral.

Adopciones.

¿Qué es adopción?—El acto por el que se recibe como hijo ó nieto al que no lo es naturalmente. Por este modo se constituye también la patria potestad.

¿Por qué fué de uso frecuente en Roma la adopción?—Por el interés de conservar perpétuamente las deidades domésticas; por el de evitar las penas y disfrutar de las recompensas otorgadas por la ley *Papia Pópea* á los que tenían hijos, y por la ambición política de algunos patricios que, para

aspirar á las magistraturas plebeyas, entraban en este orden, dándose en adopcion á algun individuo del mismo.

¿De qué modos podia hacerse la adopcion?—Por *rescripto* del príncipe, en cuyo caso se llamaba *arrogacion*, y servia para adoptar como hijo y someter al poder paterno á aquél que no estaba en poder de otro; y por *decreto* de magistrado, en cuyo caso se llamaba *adopcion* propiamente dicha, y por ella podia entrar en la potestad paterna de uno el que ya estaba sometido á la de su padre natural.

¿Qué rito se empleaba para la adopcion hasta que Justiniano la redujo á una simple acta ante el magistrado?—La *mancipacion per ces et libram*, en la cual intervenian el padre natural, el adoptivo, el hijo, el *antestado*, el *libripende* y testigos, debiendo el padre natural vender tres veces al adoptante el hijo varon, y una sola vez á la hija ó al nieto.

¿Qué clases de adopcion estableció Justiniano?—La *plena* y la *ménos plena*.

¿Qué era la *ménos plena* y cuáles sus efectos?—La hecha por un extraño de un hijo que estaba bajo la patria potestad de un padre natural, cuyo vinculo en este caso no se disolvía; no entrando, por lo tanto, el adoptivo en poder del adoptante, aunque adquiria el derecho de sucederle *abintestato*.

¿Qué era la adopcion *plena*?—La hecha por un ascendiente materno de un descendiente que se hallaba bajo la potestad de su padre natural, ó por un ascendiente paterno cuando el padre natural no se hallaba bajo su poder por estar emancipado. En este caso, el padre adoptante adquiria la patria potestad sobre el adoptado, perdiéndola el padre natural.

¿Qué requisitos eran indispensables para la arrogacion de un impubero?—Conocimiento previo de causa de la que resultase utilidad al arrogado, y caucion que debia dar el arrogante de devolver los bienes del arrogado, si fallecia antes de la pubertad, á los parientes llamados á su sucesion intestada. El arrogador no podia emancipar al arrogado, sino con conocimiento de causa, y entonces le devolveria sus bienes; y si lo desheredaba en su testamento ó lo emancipaba sin justa causa, tendria el arrogado derecho á la cuarta parte de sus bienes, además de los que él hubiese aportado ó hubiese adquirido durante la arrogacion.

¿Quiénes no podian adoptar ó arrogar?—1.º, los de menor edad á los de mayor edad, porque, imitando la adopcion á la naturaleza, el adoptante debia exceder al adoptado en diez y ocho años; 2.º, no se podia adoptar como nieto, sin que el hijo del adoptante consintiese la adopcion, pero el abuelo podia dar á otro en adopcion al nieto, sin consentimiento del hijo; la razon de la prohibicion consistia en que no era licito dar un heredero, ni aun al hijo, contra su voluntad; 3.º, tampoco podia adoptar el castrado; pero sí el impotente, así como la mujer que habia perdido á sus hijos, y 4.º, no podia adoptar tampoco el que tenia hijos naturales ú otros adoptivos, ó conservaba esperanza fundada de tenerlos.

Disolucion de la patria potestad.

¿Por qué medios se extingue ésta?—Por la muerte *natural* del padre ó del hijo; por la muerte *civil* de ambos, que constituia la *capitis-diminucion* máxima, media y mínima, de que hablaremos más adelante; por la adopcion plena, respecto del padre natural; por la dignidad del hijo, como el ser Consejero del Príncipe, Obispo, Cónsul, Prefecto, etc., y por la *emancipacion*.

¿Qué es emancipacion?—El acto por el cual sale el hijo de la patria potestad, por voluntad del padre.

¿Qué clases hay de emancipacion?—Tres: legal, forzosa y voluntaria.

¿De qué modos se hacia la emancipacion voluntaria?—De tres, á saber:

1.º, por el rito de la mancipacion, simulando el padre tres ventas ó una sola, segun que el emancipado fuese hijo varón, ó bien hija ó nieto, concluyendo el acto con la cláusula confidencial, que por esto se llamaba *fiducia*, por la que el que hacía el papel de comprador, se obligaba á la *remancipacion*, esto es, á volver á vender al padre natural el hijo, para que, manumitido por éste por el rito de *vindicta*, conservase, no obstante, respecto á él los derechos de tutela y sucesion; 2.º, el del Emperador Anastasio, que consistia en obtener un rescripto al efecto, del Emperador, que, presentado al magistrado, y consintiendo la emancipacion el hijo, si habia salido de la infancia, producía su efecto; 3.º, el del Emperador Justiniano, que consistia en el acto de comparecer el padre ante el magistrado y declarar su voluntad de renunciar á la patria potestad sobre el hijo ó nieto, manifestando éstos su consentimiento. En este caso, el emancipante conservaba en los bienes del emancipado los mismos derechos que el patrono sobre los bienes del libertino, y además la tutela del emancipado, si no habia llegado á la pubertad.

¿En qué casos procedia la emancipacion legal?—1.º, muriendo el jefe de familia, á no ser que en ésta hubiese otra persona llamada á ejercer sobre los de ulterior grado la patria potestad. Así sucedia cuando moria el abuelo dejando á hijos y nietos; éstos recaian en la potestad de su padre, si es que á la muerte del abuelo se hallaba en la familia por no haber sido emancipado por aquél; 2.º, por la dignidad del patriciado á que fuese elevado el hijo segun dispuso Justiniano.

¿En qué casos procedia la emancipacion forzosa?—1.º, cuando era deportado el padre ó el hijo, porque esta pena llevaba consigo la pérdida de la ciudadanía, y extinguía, por consiguiente, los derechos civiles de familia; no sucedia lo mismo con la *relegacion* del padre ó del hijo, porque no privaba de la ciudadanía romana al que la sufría; 2.º, cuando el padre ó el hijo eran condenados á las ruinas ó á las fieras, porque entonces se hacían siervos de la pena, y 3.º, cuando el padre ó el hijo caian en la cautividad, si es que fallecian en ella antes de recobrar la libertad; pues en otro caso, por derecho de *post liminio*, se entendia que nunca habian perdido su libertad y, por consiguiente, que siempre habian conservado los derechos de familia.

DE LAS TUTELAS Y CAPITIS-DIMINUCIONES.

¿Qué es tutela?—El derecho y potestad en una cabeza libre, dados y permitidos por el derecho civil, para proteger á aquel que, por razon de su edad, no puede defenderse. Es una institucion antiquisima ya del tiempo del emperador Anco Marcio. Tiene por objeto preferente las personas y secundario las cosas.

¿Quiénes están sometidos á tutela por razon de edad?—Los impúberos, esto es, los varones menores de catorce años y las hembras menores de doce.

¿Qué clases hay de tutela?—Tres: testamentaria, legítima y dativa. Tambien se dividia en perpétua y pupilar. La primera se daba á la mujer púber, no sujeta á otra autoridad; y la segunda á los huérfanos impúberos.

¿Quiénes pueden dar tutor testamentario?—Los ascendientes.

¿A quiénes se puede dar tutela testamentaria?—1.º, á los hijos que no han llegado á la pubertad, aunque hubiesen sido emancipados; 2.º, á los póstumos que por la muerte del ascendiente que nombra el tutor no hayan de recaer en la patria potestad de otro; 3.º, á los póstumos en el caso de que á su nacimiento hubieran de recaer en la potestad del que nombra el tutor, sino no hubiese fallecido.

¿Quiénes pueden ser nombrados tutores?—Los padres y los hijos de familia y aun el siervo propio, aunque no se le legue expresamente la libertad, porque se sobrentiende; y el siervo ajeno, con la condicion precisa de que haya de serlo cuando adquiera la libertad.

¿Qué efectos produce el nombramiento de tutor hecho á favor de un loco ó de un menor de veinticinco años?—Quedará en suspenso mientras que el loco no recobre la razon ó el menor no llegue á la mayor edad.

¿Qué condiciones admite el nombramiento de tutor?—Puede hacerse para que ejerza el cargo desde cierto tiempo, ó hasta cierto tiempo, ó cuando se verifique la condicion de que se haga depender el nombramiento, ó puede tambien hacerse antes de la institucion de heredero, pero no puede nombrarse tutor para un negocio ó causa determinada, porque el tutor se dá á la persona y no á la cosa.

¿A quiénes comprende el nombramiento de tutor testamentario hecho á favor de los hijos ó de los ascendientes?—Así á los nacidos como á los póstumos. Pero cuando se emplea en el nombramiento la palabra hijos no se entienden comprendidos los nietos, y sí al contrario.

¿Qué es tutela legítima?—La que, en defecto de testamentaria, procede dar por el ministerio de la Ley.

¿Quiénes son tutores legítimos?—Hasta la novela 118 de Justiniano lo eran tan sólo los agnados varones; mas despues, lo fueron tambien los cognados, marcándose la preferencia por la proximidad del grado de parentesco.

¿Quiénes eran agnados?—Los parientes unidos entre sí por el sexo masculino.

¿Quiénes eran cognados?—Los parientes unidos entre sí por la linea femenina.

¿Cuándo los agnados y cognados perdian el derecho de ser tutores?—Cuando sufrían la *capitis-diminucion* máxima ó media.

¿Qué es *capitis-diminucion*?—La mutacion que experimenta el ciudadano en su estado civil.

¿Qué clases hay de *capitis-diminucion*?—Tres: la *máxima*, la *media* y la *mínima*.

¿Qué es *capitis-diminucion* máxima?—La pérdida de la ciudadanía y de la libertad.

¿Qué es *capitis-diminucion* media?—La pérdida de la ciudadanía, conservando la libertad.

¿Qué es *capitis-diminucion* mínima?—El simple cambio de estado, conservando la libertad y la ciudadanía.

¿Qué es tutela legítima de los patronos?—La que corresponde á éstos y á sus hijos varones sobre sus libertos ó libertas y púberos, en virtud de la ley de las XII Tablas, por la razon de que corresponde, por regla general, la tutela, al que tiene el derecho de sucesion del impúbero.

¿Qué es tutela legítima de los padres?—La que corresponde á éstos sobre los hijos ó nietos impúberos que hayan emancipado.

¿Qué es tutela *fiduciaria*?—La que corresponde al hijo del emancipante sobre el emancipado impúbero al fallecimiento de aquél, cuando en el acto de la emancipacion se empleó la cláusula de *fiducia*.

¿Qué era tutela *dativa*?—La dada en Roma por el pretor y el mayor número de los tribunos de la plebe, segun la ley *Atilia*, por lo cual el nombrado se llamaba tutor *atiliano*, y en las provincias, por sus presidentes, segun la ley *Julia* y *Ticia*.

¿En qué casos procedía el nombramiento de tutores con arreglo á las leyes sobredichas?—En los siguientes: 1.º, cuando el tutor testamentario

había sido nombrado condicionalmente ó desde cierto día, mientras estaba pendiente la una ó el otro; 2.º, cuando, aunque hubiese sido nombrado puramente el tutor testamentario, no había todavía heredero y mientras no lo hubiese, y 3.º, cuando el tutor testamentario ó legítimo había caído en poder de los enemigos, por el tiempo que estuviese en cautiverio.

¿Desde cuándo dejaron de ser nombrados los tutores con arreglo á las dos indicadas leyes?—Desde que los cónsules, y después los pretores, comenzaron á nombrarlos con investigación, porque aquellas leyes nada disponían, ni sobre la fianza que debían prestar, ni sobre los medios de compeler á los nombrados al desempeño del cargo.

¿Qué dispuso Justiniano relativamente á este punto?—1.º, que los tutores dativos debían dar caución bastante, bajo la responsabilidad subsidiaria de los magistrados que la recibiesen, y 2.º, que no excediendo la fortuna del pupilo de quinientos sólidos, pudiese nombrar el tutor el defensor de la ciudad, con el obispo, el magistrado ó el juez de Alejandria.

¿Qué se entendía por *autoridad* del tutor?—Su intervencion en los negocios del pupilo, por la cual la personalidad jurídica de éste se aumentaba ó completaba.

¿De qué modo interponía su autoridad el tutor?—Cuando el pupilo era infante, es decir, no había llegado á los siete años, el tutor obraba por él; cuando había salido de la infancia, el tutor intervenía, juntamente con el pupilo, en los actos en que era absolutamente necesaria la presencia de éste, y en los que no la exigían, ó bien obraba por sí, ó bien intervenía con el impúbero.

¿En qué casos era necesaria la autoridad del tutor?—En todos aquellos en que el pupilo contraía obligación, pero no en los que adquiría derechos, con la sola excepcion de la adición de la herencia, la petición de la *possessum bonorum*, ó la admision de una herencia fideicomisaria, en cuyos actos era necesaria la autoridad del tutor, por más que fuesen beneficiosos para el pupilo. En los actos bilaterales otorgados por éste sin la intervencion de su tutor, el pupilo no quedaba obligado, pero sí el otro contratante.

¿De qué modo debía el tutor interponer su autoridad?—Hallándose presente en el mismo acto, siendo ineficáz la que después prestase por escrito ó de palabra.

¿Cuáles eran las obligaciones de los tutores ántes del desempeño de su cargo?—Tomar posesion de él, prestar fianza y juramento de desempeñarlo fielmente y formar inventario de los bienes del pupilo.

¿Cuáles eran sus obligaciones durante el desempeño del cargo?—Respecto á la persona del pupilo, alimentarlo y educarlo segun la cualidad de su familia y la cuantía de sus bienes; y respecto á éstos, prestar en su administracion la misma diligencia que en los suyos propios, vendiendo los muebles inútiles ó de imposible conservacion, pagando las deudas, cobrando los créditos y rentas é invirtiendo su importe en bienes inmuebles ó colocándolo á interés; y, por último, defendiendo al pupilo en las cuestiones judiciales en que fuese parte.

¿Quién autorizaba al pupilo en las que sostuviese con su tutor?—No otro tutor dativo, sino un curador especial que se le nombraría al efecto.

¿De qué modos concluye la tutela?—Por razon del pupilo ó del mismo tutor: del primero, cuando llega á la pubertad, esto es, á los doce años si es hembra y á los catorce si es varón, segun una constitucion imperial que abolió el antiguo modo especial de fijar para cada individuo la edad de su pubertad por la inspeccion corporal; cuando el pupilo muere ó es arrojado, deportado, reducido á servidumbre ó á cautividad por los enemigos, y cuando sufre capitis diminucion, aunque sea *mínima*. Por razon del tutor, cuando fué nombrado en testamento hasta cierta condicion, y ésta se cumple; cuando fué nombrado hasta cierto tiempo, y éste llega; cuando sufre

capitis—diminucion *máxima* ó *media*, y aún la *mínima*, si es tutor legítimo; cuando es removido como sospechoso ó se excusa por una justa causa y, finalmente, cuando muere.

DE LA CURATELA.

¿Qué es *curaduría*?—La potestad de administrar los bienes de los que por cualquiera causa, no pueden hacerlo por sí mismo suficientemente.

¿Qué clases se conocieron de curaduría?—La legítima y la dativa. La legítima se daba por las XII Tablas á los pródigos y á los furiosos. La dativa se daba por el Magistrado á los mentecatos, sordo-mudos y que adolecían de una enfermedad perpétua que les imposibilitaba para administrar sus bienes, y á los púberos menores de veinticinco años que la solicitaban, á no ser en la rendición de cuentas de la tutela, en el pago de deudas y en toda cuestión judicial en que fuese parte el menor, en cuyos casos el extutor, el deudor y el colitigante podían pedir que se proveyese de curador al menor. También los pupilos podían recibir curador cuando el tutor no era idóneo, pero no obraba con fraude.

¿Cuál era el oficio del curador?—Administrar los bienes del menor y prestar su consentimiento en todos los actos en que aquél se obligase, hasta el punto de que, según la opinión más probable, eran nulas las obligaciones en que el curador no intervenía.

¿Cuándo terminaba la curaduría?—Cuando concluía el negocio para que el curador había sido nombrado, ó cuando el menor llegaba á los veinticinco años.

¿Qué tutores y curadores estaban obligados á dar fianza para la administración de su cargo?—Los legítimos y los dativos nombrados por los Magistrados inferiores; no los testamentarios ni los nombrados por los Magistrados superiores, porque la suplían la confianza del testador y la inquisición de las cualidades de los nombrados que hacían ántes de su nombramiento aquellos altos funcionarios. Como excepción de la regla tampoco estaban obligados á afianzar entre los tutores legítimos los patronos del menor si eran personas honradas, y por una interpretación racional los padres de los menores emancipados.

¿Quiénes quedaban en virtud de la fianza obligados á favor de los menores?—Los que la habían prestado; y subsidiariamente los Magistrados inferiores ú oficiales públicos que la habían recibido.

¿Qué se entiende por excusa del tutor ó curador?—El motivo justo para librarse del cargo ó para no ser admitido á desempeñarlo.

¿Qué clases había de excusas?—Voluntarias y necesarias: las primeras eximían del cargo cuando eran alegadas por el tutor ó curador; las segundas le excluían de él aunque no las alegase, siendo por esto verdaderas incapacidades.

¿Qué causas de excusa voluntaria se declararon suficientes?—1.^a, tener el nombrado tres hijos vivos en Roma, cuatro en Italia y cinco en las provincias, estuviesen ó no emancipados, contándose como vivos los muertos en defensa de la república y los nietos por parte de hijo, pero no los adoptivos á favor del adoptante, aunque sí á favor del padre natural; 2.^a, estar ausente el tutor ó curador por causa de la república durante el tiempo de la ausencia para la tutela ó curaduría que se le hubiese deferido ántes, y por un año más para la que se le hubiese de deferir despues; 3.^a, estar revestido de alguna autoridad; 4.^a, desempeñar ya tres cargos de tutela ó curaduría no solicitados, mientras se desempeñasen; 5.^a, ser pobre el tutor ó curador; 6.^a, adolecer de una enfermedad que le impidiese administrar sus propios bienes; 7.^a, no saber leer ni escribir; 8.^a, haber sido nombrado por el padre por venganza á causa de la enemistad que tuviese con el nombra-

do; 9.^a, ser mayor de setenta años; 10.^a, ser gramático, retórico ó médico en Roma ó en su propia patria, hallándose dentro del número de profesores que debía tener cada ciudad, segun una constitucion del Emperador Antonino Pio; 11.^a, haber desempeñado ya la tutela del mismo menor, lo que excusaba para desempeñar la curaduría, y 12.^a, ser marido de la mujer menor.

¿En qué tiempo debía alegarse la excusa por el tutor ó curador?—Dentro de los cincuenta dias siguientes al en que sabian su nombramiento, cuando se hallaban á ménos de cien millas del lugar en que se hacia, y estando á mayor distancia se contaba un dia por cada veinte millas, añadiéndose treinta, de suerte que no resultasen ménos de cincuenta.

¿Cuáles eran las causas de excusa necesaria?—Ser el nombrado deudor del menor y ser menor de veinticinco años.

¿Qué se entendia por acusacion de tutor ó curador sospechoso?—La accion civil que para preservar la persona ó bienes del menor se interponia, pidiendo la separacion de la administracion del tutor ó curador acusado.

¿Quiénes podian remover á los tutores ó curadores sospechosos?—En Roma el pretor, y en las provincias el presidente ó el legado del proconsul.

¿A quiénes competia esta accion?—Como cuasi pública á todos, incluso á la madre, nodriza, abuela y hermana menor, y á cualquiera otra mujer que lo hiciese por razones de piedad. Los impúberos no podian acusar á sus tutores, pero sí los menores á sus curadores, siempre que no lo hiciesen con el consejo de sus parientes.

¿Qué tutores podian ser removidos como sospechosos?—Todos sin excepcion.

¿Cuáles eran las causas de sospecha?—1.^a, el no administrar fielmente el cargo; 2.^a, no dar alimentos al pupilo ó menor, teniendo bienes bastantes para ello; 3.^a, ser de malas costumbres el tutor ó curador.

¿Qué consecuencias llevaba consigo la declaracion de sospechoso?—Ser removido del cargo y la nota de infamia si se habia probado dolo, exceptuándose únicamente de esta nota al patrono, tutor ó curador de su liberto, y la privacion de administrar los bienes del menor durante el procedimiento.

¿Cuándo cesa éste?—Con la muerte del tutor ó curador.

¿Qué efecto producía la no comparecencia del tutor para señalar los alimentos?—Se ponía al pupilo en posesion de los bienes del tutor, y las cosas cuyo deterioro se temia, eran vendidas nombrándose un curador.

¿La fianza exime de la separacion de la tutela y curatela?—No, cuando es administrada fraudulentamente.

LIBRO SEGUNDO.

De las cosas.

¿Qué es cosa?—En sentido jurídico estricto, *cosa es todo lo que es objeto de derechos y de obligaciones*. En este concepto lo son las de creacion real y legal.

¿Qué division se hace de las cosas?—Se dividen en *comunes*, *públicas*, de corporacion, *nullius* y de particulares.

¿Es ésta la division del *Digesto*?—No: segun él, se dividen en cosas de derecho *divino* y de derecho *humano*.

¿Cuáles son las *comunes*?—Las que, dadas por la naturaleza, no están en dominio, como el aire, el agua corriente, el mar y sus riberas.

¿Cuáles son las cosas *públicas*?—Aquéllas cuya propiedad es del pueblo, y el uso, de todos los que lo componen, como los ríos, los puertos, el derecho de pescar en ellos, las minas, los bosques y los campos *vectigales*.

¿Por qué siendo público el uso de las riberas de los ríos, no lo es su propiedad?—Porque ésta pertenece al Estado.

¿Cuáles son las de corporación?—Las que son comunes á los moradores de las ciudades, como los teatros, estadios, etc.

¿Qué eran las *universitates*?—Las corporaciones ó unidades de creacion legal que debían su origen á una ley, á un senado-consulto ó á una constitucion imperial, segun los tiempos.

¿Qué clase de cosas podrían poseer?—Dos: unas, de las que usaban todos los miembros de la corporacion, y aún los que no lo eran; y otras, de las que sólo podía usar la persona jurídica en totalidad, sin que tuviesen este derecho sus individuos. A la primera clase pertenecen las referidas antes; á la segunda el tesoro de la corporacion.

¿Cuáles son las cosas *nullius*?—Las sagradas, religiosas y santas, que no están en el dominio de nadie, por ser de derecho divino.

¿Qué otras cosas se comprenden bajo esta denominacion?—Las que siendo capaces de adquisicion, no están en el dominio actual de nadie, como las fieras, mientras no son cogidas, y las que son abandonadas por sus dueños.

¿Cuáles son las cosas sagradas?—Deben distinguirse dos épocas. En tiempo del paganismo eran las consagradas solemnemente á los dioses superiores por los pontífices, previa autorizacion pública. En tiempo del cristianismo, las consagradas á Dios por los sacerdotes cristianos.

¿Cuáles eran las eclesiásticas?—Las destinadas al mantenimiento de los ministros y del culto, y al socorro de los pobres.

¿Podían enajenarse las cosas sagradas?—No: exceptuándose para la redencion de cautivos, para el socorro de los pobres en tiempo de hambre y para el pago de deudas de la Iglesia.

¿Cuáles eran las cosas religiosas?—Las sepulturas abiertas con consentimiento del dueño del terreno.

¿Qué requisitos deben concurrir para considerar un lugar como religioso?—Si el terreno es ajeno ó está afecto al *usufructo*, el consentimiento del dueño y del *usufructuario*.

¿Cuáles eran las santas?—Los muros y las puertas de las ciudades, equiparadas á las sagradas y religiosas.

¿Por qué se las daba este nombre?—A *santiendum*, por que se castigaba con pena capital su violacion.

¿Cuáles eran las cosas *singulorum*?—Las de propiedad privada, que con relacion al propietario eran consideradas, ya como del suelo romano, ya como del itálico, ya como del provincial.

¿Qué otra division se hacía de ellas?—Llamábanse *mancipi* y *nec mancipi*.

¿Qué es derecho *real*?—El que existe sin relacion á persona determinada, y solo en consideracion á la cosa que es su objeto (*jus in re*).

¿Qué es derecho *personal*?—El que tenemos con relacion á una persona que debe dar ó hacer alguna cosa (*jus ad rem*).

¿Cuáles son los derechos *reales*?—El dominio, el derecho hereditario, la posesion, las servidumbres, el derecho enfitéutico, el de superficie, la prenda y la hipoteca.

¿Cuál es el principal?—El *dominio*, que es el derecho real por excelencia; en el cual, atentamente considerado, están comprendidos todos los otros, bien siendo una semejanza suya, como la posesion y el derecho hereditario, bien desmembraciones suyas, como las demás.

¿Qué es el *dominio*?—La facultad de poseer, de aprovecharnos exclusivamente y de disponer de una cosa corporal, en términos no prohibidos por las leyes.

¿En qué se divide?—En *pleno*, y *ménos pleno*, ó *unda propiedad*.

¿Cuándo tiene lugar el *pleno*?—Cuando todos los derechos inherentes á la propiedad están reunidos en una persona.

¿Cuándo existe el *ménos pleno*?—Cuando la facultad de usar y gozar de la cosa, está separada de la propiedad trasferida á otra persona.

¿Cuáles son los modos naturales de adquirir el dominio?—Son de dos clases: unos que dimanán de un hecho nuestro; otros que deben su origen á una cosa que es nuestra.

¿Cuáles son los primeros?—Están comprendidos en el genérico que se llama *ocupacion*, y son la *caza*, la *pescas*, la *especificacion*, la *invencion*, la *aprehension* de las cosas sin dueño y las dadas por sus propietarios.

¿Cuáles los segundos?—El nacimiento y la *accesion*.

¿Qué es la *ocupacion*?—En su sentido estricto, es la toma de posesion de las cosas que no tienen dueño y están en el comercio de los hombres. Así las fieras, aves y peces, son del primer ocupante.

¿Cómo se dividen los animales para el efecto de la adquisicion?—En fieros, mansos y amansados.

¿A cuales se denomina fieros?—Á los que vagando libremente, se adquieren por fuerza, astucia ó artificio.

¿Cuáles son mansos?—Los nacidos de otros que dejaron de ser fieros.

¿Cuáles amansados?—Los que, habiendo sido fieros, cayeron bajo el poder del hombre y modificaron sus instintos por la educacion.

¿Qué derecho dá la caza sobre los animales?—El de propiedad mientras están en poder del cazador, que desaparece con la libertad recobrada por ellos.

¿Cuándo se considran libres?—Cuando se pierden de vista ó se hace difícil su persecucion.

¿El animal herido y fugitivo pertenece al cazador?—Absolutamente, no: sólo le pertenece desde que consigue aprehenderlo.

¿Se sigue las mismas reglas con las abejas?—Sí; siendo de naturaleza fiera, pertenecen al primer ocupante.

¿A quién pertenecen los animales amansados?—Á su dueño, mientras no pierdan la costumbre de ir y volver; pues no volviendo, recobran su condicion de fieros y pertenecen al primer ocupante; por ejemplo, los pavos reales, las palomas, los ciervos, etc.

¿Sucede lo mismo con los *mansos*?—No, porque éstos, dondequiera que estén, pertenecen á su dueño, lo que sucede con las gallinas, los ánsares y otros.

¿A quién pasaba la propiedad de lo conquistado al enemigo?—Al pueblo, haciéndose esclavos los vencidos, que si se escapaban, recobran su primitivo estado.

¿Qué es la *invencion*?—La ocupacion de las cosas que no tienen dueño. Es de dos clases: 1.^a, la de las que nunca lo han tenido, como las piedras preciosas y otros objetos que se encuentran en las riberas del mar; 2.^a, la de las que han dejado de tenerlo.

¿Qué es la *accesion*?—Un modo de adquirir el incremento de nuestras cosas. Por ella nos hacemos dueños del fruto de nuestros animales, aunque el padre pertenezca á otro.

¿Qué es *aluvion*?—Un modo de adquirir lo que el agua de los rios agrega paulatinamente á nuestra heredad, ó deja descubierto al retirarse insensiblemente.

¿Cuándo adquirimos por la fuerza del rio?—Cuando éste agrega de una vez una porcion del terreno al nuestro, y llega á adherirse á éste de tal modo que los árboles se arraigan.

¿A quién corresponde la isla nacida en el rio?—Si está en medio de él, pertenece proporcionalmente á los que poseen heredades en una y otra ribera. Si está más próxima á una de ellas, es de los dueños de las hereda-

des más cercanas. Si la isla debe su origen á la division de las aguas, continúa siendo de su antiguo dueño.

¿A quién pertenece el cauce abandonado?—Á los que poseen heredades en sus orillas, en proporcion á la extension de éstas.

¿Y el nuevo cauce?—Se hace público.

¿Qué sucede cuando el rio recobra el antiguo?—Vuelven las cosas al estado anterior.

¿La inundacion varía el de la propiedad?—No, porque este estado es momentáneo.

¿A quién pertenecen las islas flotantes?—Son públicas, como el rio que las sostiene.

¿Qué es la *especificacion*?—Un modo de adquirir por la creacion de una cosa que antes no existía.

¿A quién pertenece su dominio?—Debe distinguirse el caso de que la nueva cosa, siendo formada con materiales ajenos, pueda ó no reducirse á su primitivo estado. Si lo primero, pertenece á su antiguo dueño; si lo segundo, al especificante.

¿A quién corresponde si, además de invertir materiales ajenos, consume algunos propios?—Tambien al especificante, quedando sujeto á la accion del hurto y á la indemnizacion al propietario.

¿A qué se da el nombre de *adjuncion*?—A la union de dos ó más cosas, de la cual no resulta una tercera.

¿De cuántas maneras puede tener lugar?—Bordando, soldando, pintando, escribiendo, edificando, plantando ó sembrando.

¿Qué regla hay que tener presente?—La de que *lo accesorio sigue á lo principal*, cuando la separacion es imposible; y, siendo posible, que cada una sigue en el dominio de su propietario.

¿Qué es la *confusion*?—La mezcla de cosas líquidas ó liquidadas.

¿Qué es la *commistion*?—La de las sólidas. Los romanos usaban indistintamente de estas palabras.

¿A quién corresponde el dominio de las cosas en estos casos?—Si la mezcla es voluntaria, á los dueños de las mezcladas, en proporcion á la cantidad, aunque resulte una nueva en ambos. Si es debida al azar, á cada dueño su cosa, si pueden separarse; y una parte proporcional, si esto no fuere posible, en el caso de *commistion*.

¿A quién pertenece la propiedad de lo edificado?—Si tiene lugar la edificación en terreno propio, con materiales ajenos, al dueño del solar, porque *cede al suelo cuanto se edifica en él*. Si se verifica con materiales propios, en terreno ajeno, corresponde al dueño de éste por la misma razon.

¿Qué derechos quedan á los dueños de los materiales?—En el primer caso, el de reivindicarlos tan luego como dejen de formar parte del edificio, pues no se extinguió su propiedad, tan sólo quedó en suspenso á fin de evitar demoliciones; y el de exigir el duplo de su valor si no opta por la oportuna reivindicacion. En el segundo caso debe tenerse presente la buena ó mala fé del edificante. Si sabía que el terreno era ajeno, se presume que donó los materiales; si no lo sabía, tiene accion á exigir de su dueño el precio de aquéllos e importe de la mano de obra.

¿Qué acontece en el caso de *plantacion y siembra*?—Las mismas reglas expuestas, y la aplicacion del principio *lo accesorio sigue á lo principal*.

¿Qué hay que tener en cuenta para determinar la propiedad de los árboles?—Que hayan echado raices y que, cuando las extienden á dos ó más terrenos, en cuyos confines crecen, se presumen comunes.

¿Tiene aplicacion el principio y reglas expuestas al caso de la escritura?—Sí, por una anomalia inexplicable; la escritura cede al papel ó pergamino, como cede al suelo lo edificado.

¿Tienen lugar con relacion á la pintura?—No; Justiniano decidió que la tabla cediese á la pintura.

¿Qué situaciones deben tenerse presente?—Si el dueño de la tabla pintada la posee, el pintor debe pagar su precio. Si la posee el pintor con buena fé, y no recibe el precio de la pintura, no está en el deber de darla, y sólo en el de satisfacer el de la tabla. Cuando la tabla es robada, procede la acción de hurto contra el ladrón.

¿Qué es la posesion *física ó natural*?—El acto por el que uno tiene en su poder una cosa corporal, de modo que puede disponer de ella segun su voluntad, con exclusion de los demás.

¿Qué es posesion *jurídica ó civil*?—La tenencia legítima de una cosa de que nos consideramos dueños.

¿Cuáles son sus requisitos esenciales?—La *ocupacion* y la *intencion*. La primera es el poder físico de disponer de ella. La segunda es el ánimo y la voluntad que se tiene de ser su propietario.

¿Qué consideracion tiene el poseedor jurídico?—Considérase dueño mientras no aparezca el verdadero.

¿Qué cosas pueden poseerse?—Las que son susceptibles de ocupacion.

¿Qué es la *cuasi-posesion*?—El ejercicio del derecho y la intencion de ejercerlo.

¿Qué derecho tiene el poseedor de buena fé?—El hacer suyos los frutos que percibe, en recompensa de su cultivo y sus trabajos.

¿Cuál es el deber del poseedor de mala fé?—Restituir la heredad, con los frutos é indemnizacion de los consumidos.

¿Cuándo existe la buena fé?—Cuando el poseedor tiene el convencimiento íntimo de que aquél de quien ha adquirido la cosa era el verdadero dueño.

¿A qué se da el nombre de *frutos*?—A todo lo que la cosa produce naturalmente, ó á las producciones corporales orgánicas de una cosa.

¿Qué division se hace de los frutos?—Se dividen en *pendientes* y *separados*, *naturales*, *industriales* y *civiles*.

¿Cuáles son los pendientes?—Los que permanecen unidos á la cosa que los produce.

¿Cuáles los separados?—Los que dejan de estar unidos á ella.

¿Qué son frutos *naturales*?—Los que la naturaleza ofrece, ó espontáneamente, ó con poca diligencia del hombre, como la leña de los montes.

¿Qué son frutos *industriales*?—Los debidos á la industria, auxiliada por la naturaleza, v. gr.: las legumbres.

¿Qué son frutos *civiles*?—Todo lo que no siendo producto natural de la cosa, se percibe en consideracion á ella, como el interés del dinero, la merced de los arrendamientos.

¿Qué derechos tiene el *usufructuario*?—Percibe todos los frutos de la propiedad, en cuanto él mismo los percibe, porque como servidumbre personal se extingue con la muerte de aquél á cuyo favor está constituida.

¿El parto de la esclava se considera como fruto?—No; pertenece al dueño de aquélla, pues seria un absurdo considerar al hombre como *fruto*, cuando todos los frutos se producen para su beneficio.

¿Qué deber tiene el usufructuario de un rebaño?—El de reemplazar con las crias las cabezas que mueren, no siendo por efecto de un caso fortuito. Igual obligacion existe en el usufructuario de una viña.

¿Cuál es el deber general de todo usufructuario?—Administrar bien la cosa, conservarla, repararla, como lo hace un diligente padre de familias para entregarla, en su caso, íntegra al propietario.

¿A qué se da el nombre de *tesoro*?—A un depósito antiguo de riqueza, del que no existe memoria y que carece de dueño.

¿A quién pertenece su hallazgo?—Al descubridor que lo encuentra en su heredad, ó por azar, en los lugares sagrados ó religiosos. Y su mitad á los que lo hallan en heredad ajena, sea del César, sea del fisco, sea de una

ciudad, perteneciendo la otra mitad al propietario, cuando se encuentra sin buscarlo de propósito.

¿Qué es *tradicion*?—El acto de poner una cosa nuestra á disposicion de aquél á quien queremos traspasarla.

¿Qué requisitos son necesarios para que transfiera el dominio?—Voluntad del dueño de la cosa para trasmitirla, facultad legal en éste para enajenarla y entrega de la cosa.

¿La entrega ha de ser *material*?—No, porque esto no podría tener lugar mas que en las cosas muebles.

¿Cómo se transmiten las incorporeales?—Por medio de la *cuasi-tradicion*.

¿Qué es la *cuasi-tradicion*?—El acto de ejercer uno el derecho que ha adquirido con tolerancia y aquiescencia de aquél de quien le hubo.

¿Se necesita que siempre acompañe el *titulo* y el *modo* para adquirir el dominio?—Generalmente sí, pero no absolutamente; así vemos que no es necesario en las adjudicaciones de las últimas voluntades y de los juicios dobles.

¿Qué especies hay de *tradicion*?—Cinco: *verdadera*, *simbólica*, *longa manu*, *brevi manu* y *constitutum possessorium*.

¿En qué consiste la *verdadera*?—En entregar *realmente* la cosa.

¿En qué consiste la *simbólica*?—En entregar un objeto que haga posible la toma de posesion.

¿Cuándo tiene lugar la *longa manu*?—Cuando se deposita la cosa á la vista del que debe recibirla, ó por su órden la llevan á su casa.

¿Cuándo tiene lugar la *brevi manu*?—Cuando el que posee á nombre de otro, adquiere la propiedad de la cosa poseida.

¿Y la *constitutum possessorium*?—En el caso contrario; esto es, cuando el propietario cede la propiedad y continúa, no obstante, poseyendo la cosa.

¿Cuáles son las cosas incorporeales?—Las que no existen realmente por ser su existencia imaginaria y de origen legal, como las servidumbres, el fisco, las corporaciones, los derechos y deberes, etc.

Servidumbres.

¿Qué es la *servidumbre*?—Un derecho establecido sobre una propiedad ajena en beneficio de una persona ó de otra heredad, en virtud del cual el propietario está obligado á sufrir, ó á no hacer alguna cosa en la suya.

¿Qué se deduce de esta definicion?—Dos consideraciones capitales: 1.^a, la necesidad de la existencia de una heredad ajena, pues nadie puede constituirla en cosa propia; 2.^a, que no puede recaer ni sobre cosa mueble, ni sobre cosa incorporal, sino únicamente sobre cosa inmueble.

¿Cuál es la naturaleza de las *servidumbres*?—El ser derechos *reales*, desmembrados de las facultades del dominio.

¿En qué consisten las *servidumbres*?—En *no hacer* ó en *sufrir*.

¿Qué division se hace de las *servidumbres*?—Se dividen en *reales* y *personales*.

¿Qué es *servidumbre real*?—El derecho constituido sobre una heredad á favor de otra heredad, que puede ser ejercido por el poseedor de la primera contra el de la segunda.

¿Cuántos predios debe haber para que exista?—Dos: uno que deba la *servidumbre*, llamado *sirviente*; y otro á quien se deba, nombrado *dominante*.

¿Qué relacion debe haber entre ambas?—Deben estar próximas.

¿Qué principios son comunes á todas las *reales*?—Cuatro: 1.^o, deben tener por fin la ventaja de la heredad dominante, y no de la persona de su propietario; 2.^o, no pueden exceder las necesidades de aquella; 3.^o, la causa de las *servidumbres* ha de ser perpétua, de forma que la posicion del

predio *serviente* debe ser tal, que pueda prestar constantemente al *dominante* las ventajas en que consiste, 4.^o, la *individualidad*, ó lo que es lo mismo, el no poder ser adquiridas, usadas y perdidas en parte.

¿Qué deducciones se desprenden del principio de la indivisibilidad?—1.^a, que la *pro-indivision* de una heredad impide que pueda ser gravada con una servidumbre por uno de los partícipes en el dominio; 2.^a, que la division del predio *dominante* adjudica á cada parte la servidumbre por completo; 3.^a, que la ejecutoria, declarando la existencia ó no existencia de la servidumbre, hecha á favor de uno de los condueños de ambos predios, aprovecha ó daña á los demás; 4.^a, que el uso de parte de la servidumbre basta para conservar su totalidad.

¿Qué division se hace de las servidumbres, atendida su naturaleza?—Dividense en *rústicas* y *urbanas*. Las primeras consisten en el suelo; las segundas en la superficie.

¿Cuáles son las *rústicas*?—La *senda*, *acto*, *via* y *acueducto*. *Senda* es el derecho de pasear uno á uno, á pié, á caballo ó en litera, sin que puedan llevarse carruajes ni bestias cargadas. *Acto* es el derecho de ir y conducir bestias ó carruajes. *Via* es el derecho de ir, conducir y acarrear cuanto sea necesario para la heredad *dominante*, sin perjudicar á los frutos de la *serviente*. *Acueducto* es el derecho de conducir del predio *serviente*, ó atravesando por él, temporal ó perpétuamente, agua para el predio *dominante*.

¿Cuál es la etimología de estas servidumbres?—La de *senda* (*iter*) viene de *ab eundo*; la de *acto* (*actus*) de *ab agendo*; la de *via* (*via*) de *á vehendo*, y la de *acueducto* (*aquæductus*) de *ab aqua ducenda*.

¿Qué servidumbres comprende la de *via*?—La de *senda* y la de *actus*, así como ésta comprende á aquélla.

¿Qué modificaciones pueden hacerse al constituir la de *acueducto*?—Puede estipularse para proporcionar agua todo el año (*aqua quotidiana*), ó sólo para el verano (*aqua estiva*), ó limitarse á determinados meses, dias y horas, y aún á una cantidad dada.

¿Existen más servidumbres *rústicas*?—Sí; la de pastos, la de sacar agua, cal ó arena de una heredad, la de poder abreviar el ganado, y tantas otras que se encuentran comprendidas en la siguiente clasificacion del jurisconsulto Donneau.

Las servidumbres son de tres clases; unas que facilitan el acceso á nuestra heredad, otras que nos permiten tomar de la ajena alguna cosa para utilidad de aquélla ó de los ganados que necesita, y otras que la libran de una carga que la afecta interiormente.

¿Cuáles son las servidumbres *urbanas*?—Las que son inherentes á los edificios, estén en las ciudades ó en los campos.

¿Cuáles son las principales?—Ocho: 1.^a, la de que el vecino sufra la carga de la casa del vecino (*oneris ferendi*); 2.^a, la permission de cargar sobre su pared (*tigni immittendi*); 3.^a, la de recibir á chorro, ó gota á gota, el agua de la heredad vecina (*fluminis vel stillicidii recipiendi*); 4.^a, la de no recibirla en la misma forma (*stillicidii vel fluminis non recipiendi*); 5.^a, la de no levantar más la casa vecina (*altius non tollendi*); 6.^a, la de levantar la propia, con perjuicio de las comodidades de los vecinos (*altius tollendi*); 7.^a, el derecho de abrir ventanas en la pared ajena, ó en una comun, que den luz á nuestra finca (*luminum*); 8.^a, la privacion de edificar, plantar ó hacer cualesquiera actos que puedan quitar la luz á nuestra casa (*ne luminibus officiatur*).

¿Hay más servidumbres *urbanas*?—Sí, la de impedir que el vecino nos quite las vistas que disfruta nuestra heredad de cualquier modo (*prospectus*), que, si bien parecida á la *luminum* y *ne luminibus officiatur*, tiene más latitud porque puede referirse á vecinos más lejanos y á obstáculos que, si no privan la luz, quitan la vista; la de poder adelantar nuestra casa so-

bre la del vecino sin descansar en ella, como con un balcon ó galería (*pro-jiciendi*), que cuando es un tejado para defender la nuestra de las aguas se llama *prolegendi*, y otras.

¿Cómo clasificó Donneau las servidumbres urbanas?—Formando tres grupos, como las rústicas. Comprende el primero las que tienen por objeto dar más extensión á los edificios; el segundo proporcionarles comodidad interior, y el tercero libertarles de ciertas incomodidades.

¿De cuántos modos se constituyen las servidumbres?—De cuatro: por convencion, por última voluntad, por adjudicacion y por prescripcion.

¿Cuándo tiene lugar el primero?—Cuando es objeto de un convenio entre las partes.

¿Es menester que tenga efecto la *cuasi-tradicion*?—En las servidumbres *negativas*, esto es, en las que consisten en *no hacer*, no; pero si en las *afirmativas*, que son las que consisten en *sufrir*.

¿Cuándo se verifica el segundo modo de constitucion?—Cuando se dispone y acuerda el gravámen en una última disposicion.

¿Requiere la *cuasi-tradicion*?—No, porque la excluye este titulo de adquirir.

¿Cuándo se adquieren por adjudicacion?—En los juicios divisorios y por sentencia judicial.

¿Cuándo por *usucapion*?—Cuando por el ejercicio de una, y el consentimiento del otro, tienen lugar los efectos ó actos de la servidumbre por espacio de diez años estando presentes, y de veinte estando ausentes los interesados.

¿Por qué medios se extinguen las servidumbres?—1.º, por la conclusion del término por que fueron constituidas; 2.º, por el cumplimiento de la condicion resolutoria estipulada; 3.º, por la renuncia expresa ó tácita que de ella haga el dueño del predio *dominante*; 4.º, por la consolidacion ó reunion de ambos predios en el dominio de una misma persona; 5.º, por la destruccion de cualquiera de ellos; 6.º, por la extincion del derecho del que la constituyó, y 7.º, por la prescripcion.

¿Qué tiempo era necesario para que la prescripcion extinguiese las servidumbres?—En los primeros tiempos, dos años; Justiniano la amplió á diez entre presentes y veinte entre ausentes.

¿Qué requisitos exigian además las urbanas?—Que el dueño del predio sirviente ejecutase un hecho contrario á la servidumbre, desde el cual comenzaba á correr el tiempo.

Servidumbres personales.

¿Cuáles son las servidumbres *personales*?—El *usufructo*, el *uso*, la *habitacion* y las obras de los esclavos. Esta fué abolida por Justiniano.

¿Qué es *usufructo*?—El derecho de usar cosas ajenas y percibir sus frutos, sin alterar su sustancia; ó un gravámen que pesa sobre una cosa, que consiste en el ejercicio del derecho expuesto.

¿Corresponden al usufructuario todos los frutos?—Sí, excepto los que son una accesion accidental, como el parto de las esclavas, el aumento por aluvion, fuerza del rio, nacimiento de una isla, el hallazgo de un tesoro y la manda dejada al esclavo.

¿Qué deberes tiene el usufructuario?—Conservar y reparar la cosa, sin deteriorarla, empleando toda la diligencia de un buen padre de familia; satisfacer las cargas y pagar los impuestos, de los cuales se liberta renunciando el usufructo.

¿Qué garantía puede exigirse al usufructuario?—La *caucion usufructuaria*, introducida por el derecho pretorio.

¿De cuántas maneras puede desmembrarse el usufructo de la propie-

dad?—Por testamento, por pactos y estipulaciones, por el juez y por la Ley. Estos dos últimos modos tienen lugar en los juicios *communi dividundo* y *familiae erciscundae*, y en el peculio adventicio.

¿Puede constituirse por *prescripcion*?—General ha sido la opinion afirmativa; mas hoy va perdiendo fuerza, sustituyéndose con la contraria.

¿Sobre qué cosas puede constituirse?—Tanto sobre las muebles como sobre las inmuebles, á excepcion de las que se consumen por el uso, que sólo pueden ser objeto de un cuasi-usufructo.

¿Qué es el *cuasi-usufructo*?—El usufructo aplicado á las cosas que se consumen por el uso, como el vino, los vestidos, el dinero acuñado, etc., afianzando suficientemente al heredero la devolucion de éstas.

¿Cuándo se verificaba la devolucion?—A la muerte del usufructuario, ó en el caso de sufrir la capitis-diminucion.

¿Qué diferencia media entre el usufructo y el *cuasi-usufructo*?—Se diferencian en el modo de constituirse, en el de extinguirse, en la fianza y en que ésta nunca paga usuras.

¿Cuál fué el motivo de la introduccion del *cuasi-usufructo*?—El dar mayor latitud á las últimas voluntades.

¿Cuál el de la caucion *usufructuaria*?—El garantizar la devolucion de otras cosas del mismo género y cantidad, supuesto que las usufructuadas se consumen por el uso.

¿Cómo se extingue el usufructo?—1.º, por la muerte de un usufructuario; si éste era un esclavo, por la de su señor; si era un hijo de familia, por la suya y la de su padre, y si era una persona jurídica, por el trascurso de cien años; 2.º, por las capitis-diminuciones máxima y media, que se equiparaban en sus efectos á la muerte civil, y antiguamente por la mínima; 3.º, por el uso de tres años en las cosas muebles, y de diez entre presentes y veinte entre ausentes en las inmuebles; 4.º, por extincion del tiempo convenido; 5.º, por la cesion que de él haga el usufructuario á favor del propietario; 6.º, por la *consolidacion*, que consiste en la reunion del usufructo con la propiedad en una misma persona; 7.º, por la destruccion total de la cosa que perece cuando cambia de especie, y 8.º, por el cumplimiento de la condicion con que fué impuesta.

¿Renace el usufructo en el edificio levantado de nuevo?—No, porque á diferencia de las servidumbres reales, depende de la forma determinada de la propiedad.

¿Los modos de extincion expuestos son aplicables al *cuasi-usufructo*?—Sí, exceptuando el no uso, la consolidacion y la extincion de la cosa, cuyos modos repugnan la naturaleza de aquéllas sobre que se constituyen.

¿Qué es *uso*?—El derecho de valerse de una cosa en cuanto su naturaleza y su destino lo permiten, sin relacion á las necesidades del que lo disfruta, no pudiendo aprovecharse de los frutos: ó el gravámen que pesa sobre una cosa ajena, que consiste en el derecho descrito.

¿Qué se entiende por *usar*?—Ejercer la servidumbre de uso, en la forma y limites expuestos.

¿Por qué medios se constituye el *uso*?—Por los mismos que el *usufructo*, exceptuando la adjudicacion por el juez.

¿Puede constituirse en parte?—No, por ser indivisible, diferencia que le separa del usufructo.

¿Qué derechos tiene el *usuario*?—Si la heredad es rústica, tiene la facultad de vivir en ella, de pasearse, de servirse de sus bodegas é impedir la entrada hasta al propietario, en cuanto no perjudique á su cultivo. Puede consumir frutos indispensables para el uso cotidiano de su familia, atendida su condicion y dignidad, sin que le sea lícito traspasar este derecho. Si la finca es urbana, puede habitarla íntegramente con su familia, no obstante no necesitarla toda, y aún recibir huéspedes en ella, siempre que él la habite. Si el *uso* está constituido en un esclavo ó una bestia, puede

aprovecharse del trabajo de ambas cosas, en cuanto le sirvan á él ó á su familia, mas no cuando el usuario no ha intervenido en los actos ó trabajos, pues entónces los productos corresponden al propietario. De los rebaños sólo puede aprovecharse para estercolar los campos.

¿Cómo se extingue el *uso*?—Por los mismos modos que el usufructo.

¿Qué es *habitacion*?—El derecho de vivir y arrendar la parte de la casa ajena destinada á morada.

¿Cuál es su naturaleza?—Ser una servidumbre especial, que más bien consiste en un hecho que en derecho, y que dura la vida del concesionario.

De la usucapion y de la prescripcion.

¿Qué es la *usucapion*?—La adquisicion del dominio quiritarrio por el uso de las cosas. Es uno de los modos singulares de adquirir.

¿Cuál fué su origen?—La ley de las XII Tabas, que preceptuaba que por la posesion de una cosa mueble durante un año, ó de una inmueble durante dos, se adquiria su dominio.

¿Qué cosas podian *usucapirse*?—Tan sólo las que podian ser objeto del dominio quiritarrio.

¿Qué es la *prescripcion*?—La adquisicion del dominio de las cosas por la posesion durante el tiempo y con las condiciones establecidas por la Ley.

¿Cuál es su origen?—El derecho pretorio.

¿Qué cosas podian prescribirse en un principio?—Las que no eran objeto del dominio quiritarrio, como los derechos *reales*.

¿Qué diferencias separan la usucapion de la prescripcion?—Además de distinguirse por razon de las cosas que eran su objeto, se diferenciaban en el tiempo, pues la prescripcion exigia diez años entre presentes y veinte entre ausentes, y por los efectos que producian.

¿Cuáles eran éstos?—La usucapion daba el dominio, y como consecuencia de él nacia en favor del adquirente una accion *real* contra el poseedor de la cosa, llamada *reivindicacion*. La prescripcion no originaba el dominio, concedia un medio para contrarrestar la peticion del dueño, que se equiparó á las excepciones, auxiliado con acciones concedidas por los pretores.

¿Cuándo desaparecieron estas diferencias?—En tiempo de Justiniano, porque con la igualacion del suelo itálico y provincial, se hacian insostenibles los dos medios de adquirir por la posesion.

¿De cuántas maneras es la prescripcion?—*Adquisitiva* y *extintiva*, segun que se considere con relacion al adquirente ó al dueño. En el primer caso, es un modo de adquirir la propiedad; en el segundo, un medio de libertarse de una carga ú obligacion.

¿Qué requisitos deben cumplirse para que la prescripcion tenga lugar?—Buena fé, título hábil traslativo del dominio, tiempo de posesion *civil* no interrumpida marcado por la ley, y capacidad en la cosa.

¿Cuándo ha de existir la buena fé?—Al principio de la prescripcion.

¿Qué tiempo se necesita para prescribir?—Tres años para las cosas muebles, y diez entre presentes y veinte entre ausentes, para las inmuebles, contados por dias.

¿Cuándo se decia que estaban presentes?—Cuando el propietario y el poseedor residian en la misma provincia.

¿Cuándo se consideraban ausentes?—En el caso contrario.

¿Cómo se computa el tiempo siempre que se den las dos situaciones?—Cada dos dias de ausencia se equipara á uno de presencia.

¿Qué cosas no son susceptibles de prescripcion?—Las sagradas y religiosas, los hombres libres vendidos como esclavos, las hurtadas, las poseidas con violencia, las fiscales, las inmuebles de las iglesias, de los pupilos y menores y las dotes cuando no han empezado á prescribirse ántes del

matrimonio, en cuyo caso están tambien las del peculio adventicio enajenadas y las reservables, las legadas y enajenadas por el heredero, y otras.

¿El error de una falsa causa impide la prescripcion?—Si, porque en tal caso falta el título para prescribir; mas si el error tiene un fundamento racional, no la impide.

¿Cómo puede interrumpirse la posesion?—Natural ó civilmente. Tiene lugar lo primero por el hecho natural de perder posesion; y lo segundo, por el ejercicio de una *accion* contra el poseedor, ó la protesta contra su derecho, lo cual no perjudica al tercero.

¿La buena ó mala fé del heredero favorece ó perjudica la prescripcion comenzada por el difunto?—No; debe atenderse únicamente á la buena ó mala fé de éste, cuya personalidad jurídica continúa.

El que adquiere por título singular, ¿se encuentra en el mismo caso?—No, porque como no reemplaza á aquél de quien adquiere, puede comenzar una nueva prescripcion.

¿En qué se divide la prescripcion por razon del tiempo?—En *ordinaria* y *extraordinaria*.

¿Cuál es la ordinaria?—La que queda explicada.

¿Cuál es la extraordinaria?—La de treinta y cuarenta años.

¿Qué cosas se adquieren por la de treinta años?—Las poseidas por el sucesor, cuyo causante tuvo mala fé ó no tuvo título justo, las hurtadas, robadas ó invadidas, y otras.

¿Cuáles se ganan por las de cuarenta años?—Las fiscales, las del patrimonio del príncipe, de los pueblos y de las provincias.

Donaciones.

¿Qué es donacion?—*El acto de liberalidad en virtud del cual uno trasfiere, sin coaccion alguna, la propiedad de una cosa á otro que la acepta.* El que da se llama *donante*; y *donatario* el que recibe.

¿Cuál es su etimología?—Viene de *dono dare*; esto es, trasferir á otro gratuitamente la propiedad.

¿Qué clases hay de donaciones?—Dos: donaciones *inter vivos*, y donaciones *mortis causa*.

¿Cuáles son las segundas?—Las que se hacen en consideracion á la muerte, bien se hagan en un peligro inminente ó bien fuera de él, con tal que sus efectos se refieran al tiempo de la muerte.

¿De cuántas maneras pueden hacerse?—Bien entregando la cosa desde luego al donatario, ó bien dilatando su entrega para despues de la muerte del donante. Cuando se dona en la primera forma, lleva implícita una condicion *resolutoria*; cuando con la segunda, una condicion *suspensiva*.

¿Qué intencion se presume en el donante?—La preferencia de su persona á la del donatario, y la de éste á la del heredero.

¿Cuál es la naturaleza de estas donaciones?—El ser revocables hasta la muerte, si no media pacto en contrario, en cuyo caso se convierte en donacion *inter vivos*.

¿Qué efectos produce la donacion hecha con condicion resolutoria?—Traspasa la propiedad, si bien de un modo revocable, requiriendo la tradicion.

¿Cuáles produce la hecha con condicion suspensiva?—No da derecho alguno en el momento; pero al tiempo de la muerte, trasfiere la propiedad sin necesidad de tradicion.

¿En qué casos quedan sin efecto las donaciones?—Cuando el donante salva del peligro que le indujo á hacer la donacion, si la revoca, y por la muerte del donatario, anterior á la del donante.

¿Qué diferencias separan las donaciones de las mandas?—1.ª; la aceptacion en vida del trasferente no es necesaria en las mandas, y sí en las do-

naciones: 2.^a; en éstas se exige capacidad en el legatario al tiempo de la muerte y al del otorgamiento de la última disposición, mientras que en aquéllas sólo se atiende al de la muerte: 3.^a; las mandas se pierden por hacerse indigna la persona del legatario, caso que no es aplicable á las donaciones: 4.^a; cuando la manda consiste en una renta anual, se consideran legadas muchas mandas, constituyendo una sola donacion dejada en esta forma.

¿Qué es la *mortis causa capio*?—Latamente considerada esta frase significa todo lo que se adquiere por la muerte de un individuo, no como donacion; y tomada en sentido estricto, se refiere á las adquisiciones que se hacen por causa de la muerte de una persona, que no tienen denominacion legal determinada.

¿Cuáles son las donaciones *inter vivos*?—Las que se hacen sin ninguna consideracion á la muerte.

¿Cuál es su naturaleza?—El ser irrevocables, excepto en el caso de ingratitude del donatario.

¿Cuándo se perfeccionan?—Cuando el donante manifiesta su voluntad por escrito ó de palabra.

¿Es necesaria la tradicion para trasladar el dominio?—Sí, porque, sin ella, sólo tenemos derecho á la cosa, ó lo que es lo mismo, facultad legal de reclamarla de la persona obligada.

¿Qué requisito era necesario para la validez de algunas?—La *insinuacion* en las mayores de doscientos sólidos en un principio, y despues en las mayores de quinientos.

¿En qué consistia la insinuacion?—En consignar la donacion en las actas de los magistrados.

¿Cuál fué el origen de la insinuacion?—Refrenar la prodigalidad.

¿Qué donaciones estaban exentas de ella?—Las hechas para el rescate de los prisioneros; para reedificar edificios; al emperador y emperatriz, y las que éstos hacian.

¿Qué hechos motivaban la revocacion?—Las injurias graves, los malos tratamientos, los daños causados á la fortuna del donante, los atentados contra su vida y la falta de cumplimiento de las condiciones impuestas.

¿Cuál es la donacion *ante-nupcias*?—La que se hacian los esposos antes del matrimonio, *simplemente* en los primeros tiempos; y despues, con la condicion implicita de que aquél habia de realizarse.

¿Qué otro nombre tenian?—Llamábanse *sponsalitiae largitales*.

¿Cuál era su efecto si el matrimonio no se verificaba por la muerte de uno de los futuros cónyuges?—Si la mujer era la donante, debia devolverse íntegra; si era el hombre, sólo tenia lugar la devolucion cuando no habia mediado ósculo, pues en otro caso, la mujer era propietaria de la mitad.

¿Cuál era la donacion *propter-nuptias*?—La que tenia lugar entre los esposos, antes ó despues del matrimonio.

¿Qué diferencia habia entre ambas?—Ninguna, porque la *ante-nuptias* dejó de existir cuando se permitió aumentarla ó constituirla despues del matrimonio, recibiendo desde entónces el nombre genérico de *propter-nuptias*.

¿Cuál era su objeto?—Ayudar á sobrellevar las cargas del matrimonio, asegurar la mujer los desfalcos de su dote y el hombre su capital en caso de divorcio, provocado por ella.

¿Quiénes podian además constituirla?—El padre del marido, y aun un tercero.

¿A quién corresponde su propiedad y administracion?—Al marido durante el matrimonio, cohibido de enajenar é hipotecar los bienes, á no ser que la mujer preste su consentimiento, al efecto, y lo renueve dos años despues del contrato.

Disuelto el matrimonio por la muerte de la esposa, cesa la donacion; disuelto por la del marido, aquélla adquiere la plena propiedad si no hubiere hijos, y sólo el usufructo, si los hubiere.

¿Qué efectos produce en caso de divorcio?—Cuando es por culpa del marido, pasan los bienes á la mujer; y si debe su origen á ésta, pierde su dote.

¿Eran válidas estas donaciones segun el primitivo derecho?—No, porque la prohibicion de las donaciones entre los cónyuges fué absoluta en un principio.

¿Cómo han venido á serlo?—Para mitigar la ley se permitió que el donante pudiera revocarlas, considerándolas válidas si no lo hacía ántes de morir, y nulas si el donatario moria ántes que aquél, y cuando morian ambos al mismo tiempo, como en un incendio, ruina ó naufragio.

¿Reconocia algunas excepciones la prohibicion absoluta de los esposos?—Sí; desde el principio eran válidas: 1.º, las donaciones que no empobrecian al donante, ó no hacian más rico al donatario; 2.º, las que reportaban utilidad para la casa comun; 3.º, las que se hacian para adquirir una dignidad; 4.º, las de cosas de poco valor; 5.º, las que se destinaban á la reparacion de los edificios; 6.º, las hechas en consideracion al divorcio, y 7.º, las mútuas entre el emperador y la emperatriz.

DE LAS DOTES.

¿Qué es *dote*?—«Tedo lo que la mujer, ú otro en su nombre, trasfiere al marido para ayudar á soportar las cargas del matrimonio.»

¿Cuál fué el origen de las dotes?—Evitar que las mujeres participaran de la herencia paterna, cuando entraban en la potestad y familia del marido, y que permanecieran en soltería.

¿Qué bienes pueden ser objeto de la dote?—Todos los que pueden aumentar los del marido.

¿De cuántas maneras puede ser la dote?—Considerado el origen de los bienes, puede ser *profecticia* ó *adventicia*; atendida su necesidad, *voluntaria* ó *necesaria*; segun sus efectos, *estimada* é *inestimada*, y vista su constitucion, *entregada* y *prometida*.

¿Cuál es la *profecticia*?—La que proviene directa ó indirectamente del padre ó abuelo de la mujer.

¿Cuál es la *adventicia*?—La que no es profecticia, reconozca cualquier origen.

¿Cuál es la *voluntaria*?—La que constituye cualquiera persona como acto espontáneo y no exigible.

¿Cuál la *necesaria*?—La que está obligado á constituir el padre y el abuelo paterno en favor de la hija ó nieta, con arreglo á su fortuna, si no tienen bienes propios.

¿Esta obligacion alcanza alguna vez á la madre?—Sí, por virtud de causas graves; por ejemplo, cuando no fuere ortodoxa y lo fuere su hija.

¿Cuándo se llama *estimada*?—Cuando se aprecia su valor, lo cual puede hacerse con dos objetos: 1.º, para que el marido se haga dueño de los bienes y deba su precio; y 2.º, para saber á cuánto asciende lo que éste puede verse obligado á reintegrar. En el primer caso se llama *dote estimada con estimacion que causa venta*, y en el segundo *dote simplemente estimada*.

¿Cuándo se llama *entregada*?—En el caso en que los bienes que la forman se transmitan á la dotada.

¿Cuándo *prometida*?—Cuando la entrega no se efectúa por más que se deba.

¿Qué era la *dictio dotis*?—Una promesa solemne de dote, sin la práctica de la estipulacion.

¿De qué modos se constituye la dote?—Además de los expuestos, se constituye por testamento, antes y después de la celebración del matrimonio.

¿A quién corresponde el dominio de la dote?—Al marido, si consiste en cosas fungibles, ó si es *estimada* con estimación que cause venta; y en los demás casos, á la mujer.

¿A quién pertenece la administración?—Al marido, comprendiendo en ella la percepción de frutos y su distribución, la enajenación de los muebles, reclamación de créditos y la facultad de reivindicar los bienes.

¿Puede el marido enajenar ó gravar la dote?—No, ni aun con el consentimiento de la mujer, excepto la *estimada* con estimación que cause venta, en que tiene el dominio irrevocable.

¿En qué caso no tiene efecto esta excepción?—Cuando la mujer se reservó el derecho á la restitución de la finca ó su estimación.

¿Quiénes pueden ejercer este derecho?—Solamente la mujer y sus herederos, y nunca los del marido, por estar introducido en favor de aquéllos. Si aquélla es heredera de éste, sólo puede solicitar la nulidad de la enajenación de la dote, cuando la herencia no alcanza á pagar su importe.

¿Qué efectos produce la disolución del matrimonio relativamente á la dote?—Diversos, según que proceda la disolución de la muerte ó del divorcio, y según la clase de dote.

¿Cuáles son los que ocasiona la muerte de la mujer?—Si la dote es *profecia*, revierte al ascendiente que la constituyó, á ménos que hubiera pacto en contrario. Si fuera *adventicia*, se trasmite á los herederos de la mujer, á no ser que se pactara otra cosa.

¿Cuáles tienen lugar si la disolución se verifica en vida de la mujer?—Corresponde á ésta la dote, sea *profecia* ó *adventicia*, no mediando pacto alguno.

¿Puede pedirse la restitución de la dote sin que tenga lugar la disolución?—Sí, en el caso de indigencia del marido; mas entonces sus productos deben destinarse al sostenimiento de las cargas matrimoniales.

¿Cómo debe hacerse la restitución?—En la misma cantidad, consistiendo en dinero; en los mismos bienes, ó su estimación, si hubieran sido apreciados en venta, y en las mismas cosas precisamente si fuera la dote inestimada ó estimada sin causar venta.

¿En qué término debe restituirse?—Los bienes inmuebles deben devolverse inmediatamente; los muebles y las cantidades en el de un año.

¿Qué pena lleva consigo la falta de la restitución en dichos plazos?—El pago de un cuatro por ciento de intereses.

¿Qué garantía tiene la mujer?—Una hipoteca tácita privilegiada en los bienes del marido.

¿Qué se entiende por *enajenar*?—Toda manera de trasferir el dominio ó sus desmembraciones.

¿Quiénes pueden enajenar?—Por regla general los dueños de las cosas, si bien á veces no puede hacerlo el dueño, como el marido en la dote, y tiene esta facultad el que no lo es, como el acreedor, en virtud de convenio.

¿Pueden enajenar los pupilos sin la autoridad de sus tutores?—No, por lo cual el dinero que entregaren en *mútuo*, no pasa al dominio del mutuuario, pudiendo ser reivindicado si no hubiere sido consumido de buena fé por éste.

¿Pueden adquirir los pupilos sin aquella autoridad?—Sí, de lo cual resulta que el pago hecho á ellos, no es eficaz sin que intervenga el guardador.

¿Qué circunstancia debe llenarse para que lo sea el hecho al tutor ó curador?—La autorización concedida al efecto por una sentencia judicial.

Personas por medio de las que podemos adquirir.

¿Cómo podemos adquirir?—No sólo por nosotros mismos, sino tambien por medio de las personas que están en nuestro poder, dice Justiniano. Así se adquiria por los esclavos y por los descendientes.

¿A quién correspondia el dominio de las adquisiciones de los hijos?—Antiguamente correspondia á los ascendientes, á excepcion del *peculio castrense*. En tiempo del imperio, la excepcion se amplió al *peculio adventicio* y á la propiedad del hijo emancipado.

¿Cuál fué el primitivo origen del *peculio*?—La concesion que el padre hacia al hijo ó el señor al esclavo, de algunos bienes, con objeto de que los administrase ó negociase con ellos.

¿Qué *peculios* se conocieron despues?—El *castrense*, el *cuasi castrense*, el *profecticio* y el *adventicio*.

¿Qué bienes comprendia el *castrense*?—Todos los que los hijos de familia recibian de padres y extraños antes de partir á la guerra, estando en los ejércitos, las sucesiones de sus camaradas y lo que adquirian con el dinero de estas procedencias.

¿Cuál es el origen de este *peculio*?—El alentar á los jóvenes á la guerra con este privilegio.

¿Qué consideracion gozan en ellos?—La de padres de familia á quien corresponde la propiedad, el usufructo y la administracion.

¿Qué bienes comprende el *cuasi castrense*?—Introducido á imitacion del *castrense*, comprende las adquisiciones hechas por la profesion de abogado, en el ejercicio de las órdenes sagradas, ó por la munificencia de los emperadores.

¿Qué consideracion gozan en él los hijos de familia?—La misma que en el *castrense*.

¿Qué comprende el *profecticio*?—Todo lo que el padre da á su hijo para que lo administre.

¿A quién corresponde su propiedad?—Al padre, así como cuanto con él adquiere el hijo.

¿Puede enajenarlo éste?—Sí, pero no donarlo.

¿En qué casos puede retenerlo el hijo?—En el de emancipacion, si el padre no se lo quita expresamente; cuando adquiere alguna dignidad de las que le libran del poder paterno, y en el de confiscacion de los bienes paternos.

¿Qué bienes comprende el *adventicio*?—Todos los que no son objeto de los demás *peculios*, como los procedentes de la madre, los adquiridos por el trabajo del hijo, ó por su suerte.

¿A quién corresponde su propiedad y administracion?—Por regla general, la propiedad al hijo; y el usufructo ó administracion, al padre.

¿Puede enajenarlo el padre en algun caso?—Sí, para satisfacer deudas, mandas, ó cuando no pueden ser conservadas las cosas en que consiste. Fuera de estos casos la enajenacion es nula.

¿Existen algunos en que no corresponde al padre la administracion y el usufructo?—Sí, cuando acepta el hijo una herencia ó una manda contra la voluntad de aquél; cuando recibe una donacion con la condicion de que el padre no goce el usufructo, concurriendo ambos á la sucesion intestada de un hermano, y cuando el padre malversa el fideicomiso que debe venir al hijo.

¿Qué bienes comprende el *peculio adventicio extraordinario*?—Los adquiridos en propiedad libre por el hijo, en las circunstancias anteriores.

¿Que derechos correspondian el ascendiente que emancipaba un descendiente?—Antiguamente la reserva de la tercera parte de los bienes en que no tenia la propiedad; y en tiempo de Justiniano, la mitad tan sólo del usufructo.

¿Qué diferencia notable existe entre este peculio y el profecticio?—La de que la mitad del usufructo le pertenece al padre en aquél *ipso jure*, y sin que la reserve; mientras que en éste era menester la reservara expresamente.

¿A quién correspondían las adquisiciones de los esclavos?—A sus dueños, aunque fueran hechas sin su consentimiento y contra su voluntad, por regla general, porque el esclavo no puede tener nada propio.

El esclavo, instituido heredero, ¿necesita la licencia del señor para adquirir la herencia?—Sí, porque no pudiendo el esclavo obligar á su señor, no puede adquirirla válidamente sin su orden.

¿Puede adquirirse la posesion por los esclavos?—Sí; del mismo modo que la propiedad. Así la usucapion y la posesion que ellos adquieren, aprovecha á los dueños; pero debe acompañar al acto material del esclavo, la intencion de su señor.

¿Qué bienes se exceptúan de esta regla?—Los que vienen al esclavo como pertenecientes á su peculio, porque se presume que el dueño, queriendo poseerle, en general, extiende su voluntad á las cosas de que se compone.

¿A quién corresponden las adquisiciones hechas por el esclavo en quien se tiene el usufructo?—Las que provienen de las cosas del usufructuario ó del trabajo del esclavo, pertenecen á aquél; las demás al dueño, porque es principio indiscutible que el usufructuario hace suyos los frutos que la cosa produce por su destino, pero no los extraordinarios y accidentales.

¿Puede adquirirse por medio de los esclavos la posesion?—Sí, cuando procede de cosa del usufructuario ó del trabajo de aquéllos.

¿Puede adquirirse por los hombres libres?—Sí, igualmente, si son poseídos de buena fé, como esclavos.

¿Puede adquirirse por medio de una persona extraña?—Primitivamente la propiedad no, porque era acto de derecho civil, y la posesion sólo en el caso de ser tomada por un procurador, por ser acto de derecho de gentes. Posteriormente podían adquirirse ambas cosas, porque, en virtud de la posesion, se adquiría la propiedad si era dueño el que entregaba la cosa.

¿La posesion del procurador sirve para los efectos de la prescripcion del dueño?—Sí, contada desde que éste tiene conocimiento de ella.

MODOS UNIVERSALES DE ADQUIRIR.

Testamentos ordinarios y extraordinarios ó privilegiados.

¿Cuáles son los modos universales de adquirir?—La *herencia*, la *bonorum possessio*, la *arrogacion* y la adjudicacion de los bienes de otro para conservar las libertades.

¿Qué otros se conocían además en el derecho antiguo?—La venta de los bienes del deudor, la reduccion de una mujer libre á la esclavitud y la entrada solemne de la mujer en la potestad del marido.

¿Qué es *sucesion*?—«El reemplazo de unas personas en los derechos de otras», que continúan la personalidad jurídica de éstas.

¿Cuándo puede tener lugar?—Por la muerte, y en el caso de *arrogacion*.

¿Qué clases hay de sucesion?—*Universal* y *particular*. La primera com-

prende el todo jurídico de derechos y obligaciones del difunto, exceptuando las inherentes á su personalidad, que se extinguen con él. La segunda se limita á parte de sus derechos.

¿Qué otra significacion tiene la palabra *sucesion*?—Tomada en sentido objetivo indica el todo jurídico de bienes, derechos y obligaciones.

¿Qué es testamento?—«La disposicion solemne de la última voluntad, en que se instituye un heredero directo.»

¿Cuál es el origen de esta palabra?—Justiniano dice que toma su nombre de *testatio mentis*, esto es, atestacion de la voluntad.

¿Cuál es la naturaleza de los testamentos?—Ser una disposicion que, aunque solemne, es revocatoria hasta la muerte.

¿Cuál es su objeto?—Trasmitir al heredero los bienes que el testador quiere que goce despues de su muerte.

¿Cuál es el origen de la facultad de testar?—Unos la suponen hija del derecho de gentes ó de los principios jurídicos universales, y otros la consideran dimanada exclusivamente de la ley civil. Hay quien asegura que es de derecho natural.

¿Qué opinion es la más seguida como cierta?—La segunda, por sus sólidos fundamentos.

¿En qué se funda?—En que la propiedad desaparece con la muerte del propietario, y, cierto esto, sus bienes serian del primer ocupante, si la ley civil no facultara á aquél para disponer de ellos en vida; y en que repugna á la sencillez del derecho universal la ficcion que explica las sucesiones, suponiendo que el acto del otorgamiento, de la muerte y de la adiccion de la herencia, se reputan uno mismo.

¿Qué clases hay de testamentos, considerados segun sus formas?—Dos: *públicos* y *privados*.

¿Cómo se otorgaban los públicos?—Podian hacerse de tres maneras: 1.^a, presentándolos al príncipe; 2.^a, registrándolos ante una autoridad que tuviera jurisdiccion civil, y 3.^a, conservándolos escritos bajo su custodia.

¿Qué division se hace de los privados?—Pueden ser *nuncupativos* y *escritos*.

¿Qué otra clasificacion se hace de los testamentos por razon de su forma?—Son *ordinarios* y *extraordinarios*. Los primeros requieren solemnidades exigibles, como regla general. Los segundos se apartan de la regla, añadiendo, quitando ó modificando algunas de dichas solemnidades.

¿Cuáles eran propias de los ordinarios?—Unas eran comunes á los nuncupativos y escritos, y otras especiales á cada clase.

¿Cuántas y cuáles son las comunes?—Cuatro: 1.^a, convocacion expresa para su otorgamiento; 2.^a, asistencia rogada de siete testigos con aptitud legal; 3.^a, manifestacion de hacerlo, y 4.^a, unidad del acto.

¿Cuántas y cuáles son las peculiares del testamento escrito?—Cinco: 1.^a, que sea escrito por el testador ó, no siéndolo, que sea firmado por él ó reconocido como propio ante los testigos; 2.^a, que, no pudiendo escribirlo ni firmarlo, lo haga en su nombre y á su ruego un octavo testigo; 3.^a, presentacion y manifestacion de ser su última voluntad, hecha por el testador á los testigos; 4.^a, firma y sello de éstos, y 5.^a, siendo secreto, expresion de ser su última voluntad el contenido, firmando la carpeta, ó un octavo testigo por él, caso de ignorancia ó impotencia, en la cual firmarán y sellarán los demás testigos.

¿Cómo se llama el testamento escrito de la mano del testador?—*Testamentum holographum*.

¿Qué nombre recibe el que tan sólo aparece firmado por él?—*Testamentum allographum*.

¿Qué circunstancias son inherentes al oral ó *nuncupativo*?—Tan sólo exige que la declaracion se haga en un idioma entendido por todos.

¿Varia su índole si se reduce á escrito?—No, ni requiere más solemnidades.

¿Qué testamentos son los llamados extraordinarios?—Cuatro: el del ciego, el otorgado en el campo, el hecho en tiempo de peste y el de los ascendientes en favor de los descendientes.

¿Qué solemnidades exige el del ciego?—Hay que distinguir si es nuncupativo ó escrito. Si es nuncupativo, debe ser redactado por un oficial público requerido al efecto (*tabularius*) en presencia de los testigos, quien lo leerá al testador y lo firmará y señalará con éstos. Si es escrito por otra persona, debe procederse á su lectura con las demás solemnidades expuestas.

¿Cómo se suple la falta del *tabularius*?—Con un octavo testigo.

¿Qué testamentos se conocían antiguamente?—El otorgado en tiempo de paz, que llamaban *calatis comitiis*, y el hecho al ir al combate, denominado *prociuctum*.

¿Qué eran los *comicios calados*?—Reuniones periódicas del pueblo convocado por *curias* para tratar asuntos religiosos y confeccionar en ellos los testamentos.

Segun eso, ¿cuál era la naturaleza de los testamentos romanos?—Tenían el carácter de leyes, porque se hacían á presencia y con autorizacion de todo el pueblo.

¿Por qué se otorgaban en esta forma?—Porque, establecido el orden gradual de sucesion, las alteraciones ó excepciones deseadas por el testador era menester hacerlas por medio de una ley; y porque, no siendo de derecho privado la determinacion de la persona del sucesor en las cosas sagradas y profanas, requería la solemnidad de la ley.

¿Qué inconvenientes ofrecía esta manera de testar?—Como que los *comicios* eran convocados semestralmente, quedaban sin testar muchos ciudadanos que se hallaban en peligros inminentes y fuera de Roma.

¿En qué consistía el testamento *per aes et libram*?—En una venta imaginaria hecha en presencia de cinco testigos de *libripende* y del comprador de la familia, que era el heredero, á quien ordenaba el testador.

¿Qué razon hubo para su introduccion?—Las dificultades que ofrecía el otorgado en los *comicios*.

¿Qué inconveniente nacía de él?—El que, segun el rigor del derecho, el comprador adquiría irrevocablemente la propiedad de la herencia, lo cual imposibilitaba la revocacion ulterior del testamento.

¿Cómo se evitó?—Adoptando la intervencion del comprador como formularia, é instituyendo por escrito al heredero.

¿Qué novedad introdujo este medio?—La division de la forma en dos partes: la mancipacion de la herencia, y la nuncupacion del heredero. La primera era la venta fingida. La segunda la institucion escrita del heredero.

¿Qué origen reconocen estas tres clases de testamentos?—El derecho civil.

¿Cuál de ellos duró más tiempo?—El hecho por el rito de la mancipacion.

¿Qué otra forma se dió al ejercicio de la facultad de testar?—La introducida por el derecho pretorio, que desentendiéndose de la mancipacion y de la nuncupacion, y despojando al *libripende* y comprador de la familia del carácter con que intervenían en aquélla, los conservó tan sólo como testigos, que, unidos á los cinco exigidos antes, formaron el número de siete, que debían solemnizar el testamento con sus sellos.

¿Cómo no siendo válido este modo de testar, atendido el rigor de los principios, era eficaz?—Porque el pretor daba al heredero instituido la *bonorum possessio, secundum tabulas*.

¿Qué otra manera de testar se estableció posterior y definitivamente?—La que hemos descrito antes, que reconoce tres orígenes: el derecho civil, el pretorio y las constituciones imperiales.

¿Quién la motivó?—La fusion paulatina de aquellos derechos.

¿Qué requisitos deben su origen al *civil*?—La unidad del acto y la presencia de siete testigos.

¿Cómo debe entenderse la unidad del acto?—La no interrupcion del mismo por un negocio distinto. No se tiene por interrumpido por un accidente natural y breve, ocurrido al testador ó á los testigos.

¿Cuál fué el origen de esta exigencia?—La necesidad de que los acuerdos de los comicios no se interrumpieran, supuesto que su interrupcion llevaba consigo la nulidad.

¿Qué circunstancias debian tener los testigos?—Ser ciudadanos romanos púberos y haber sido convocados al intento, aunque despues se mitigó en parte este rigor.

¿Qué requisitos se conservaron del derecho honorario?—La solemnidad del sello de los testigos en los testamentos escritos y el número de siete.

¿Cuáles de las constituciones imperiales?—La suscripcion del testador y de los testigos, y que el nombre del heredero sea escrito por aquél ó por éstos, aunque despues se suprimió la última circunstancia.

¿Quiénes podian ser testigos en los testamentos?—Aquéllos que tenían la testamentificacion.

¿Qué es la testamentificacion?—La facultad de testar y el derecho de ser instituido heredero. A la primera se llama testamentificacion *activa*; á la segunda testamentificacion *pasiva*.

¿Qué personas eran incapaces absolutamente para ser testigos?—La mujer, el impúber, el mudo, el sordo, el furioso, el privado de la administracion de sus bienes y los infames é indignos de testar.

¿Por qué pudiendo la mujer testar y ser instituida heredera, tenía incapacidad para ser testigo?—Porque no disfrutaba del *commercium*, condicion general que se exigia á todos para participar de la mancipacion, cuyo rito intervenia en el testamento *per aes et libram*, y porque se le prohibia toda intervencion en ciertos actos civiles, por su inexperiencia.

¿Por qué no podian serlo el impúber, el mudo, el sordo y el furioso?—Por las mismas razones y por sus defectos fisicos é intelectuales.

¿Por qué tampoco podia testificar el privado de la administracion de sus bienes?—Porque tambien carecia del *jus commercium*.

¿Quiénes eran los *intestables*?—Los que no podian testar, ni dar testimonio, ni compeler á que se diera, como los condenados por libelos infamatorios, por concusion, por adulterio, por apostasia y por herejía.

¿Quiénes tenían incapacidad relativa?—Los que estaban en la potestad del testador; el padre y sus dependientes; cuando el hijo testaba acerca del peculio castrense, el heredero, los que están bajo su potestad, el jefe de su familia y los que están en la suya.

¿Era válido el testimonio del esclavo?—Sí, con tal que fuera tenido por libre.

¿Lo era el de varios individuos de una familia en el testamento de un extraño?—Sí.

¿Podian ser testigos los legatarios y fideicomisarios?—Sí, aun cuando estuviesen en la potestad del testador, porque como sucesores singulares no continuaban la persona jurídica de aquél.

¿Cuál era el testamento militar?—El que hacian los militares mientras estuvieran ocupados en alguna expedicion.

¿Qué formalidades exigia?—Ninguna; bastaba que constase su otorgamiento y que se probara por dos testigos.

¿Cuál fué su origen?—En cierto modo el testamento *in procinctu*, si bien no son una misma cosa, pues aquél nació en tiempo del imperio, y éste es más antiguo; aquél dimanaba de los privilegios de los emperadores y éste del derecho primitivo.

¿Podia testar el militar hijo de familia?—Sí, pero observando las formalidades de los demás ciudadanos.

¿Cuál es la razon y el objeto de este testamento?—Favorecer la milicia y evitar que quedaran intestados los que en momentos supremos no podian cumplir las solemnidades prescritas para los testamentos ordinarios.

¿Es favorable ú odioso?—Limitado á la campaña, puede ser conveniente y hasta necesario. En tiempo de paz es odioso, como todo privilegio que no tiene razon de ser.

¿De qué modos podia hacerse?—Por escrito ó nuncupativamente, siempre que constase que se habia otorgado.

¿Quiénes podian testar en esta forma?—Los soldados en cuanto militaban y vivian en los campamentos, aun siendo mudos ó sordos.

¿Cuándo y por qué tiempo tenía validez?—Cuando se justificaba su otorgamiento, y su fuerza duraba sólo un año, contado desde que el testador dejara el servicio militar honrosamente ó por causas accidentales, pues la despedida ignominiosa le hacia perder su fuerza.

¿Qué más facultades tenía el militar?—Podia instituir heredero á los incapaces, desheredar los hijos sin expresa declaracion y sin que hubiera contra el testamento la accion de querella; morir testado en parte y en parte intestado, disponer de la herencia en codicilo y distribuirla en legados, lo cual no era permitido hacer en los testamentos ordinarios.

¿Cuál era el testamento otorgado en el campo?—La disposicion solemne de los que testaban fuera de la ciudad.

¿Qué solemnidades requeria?—Cinco testigos, si no se hallare mayor número, que podian firmar unos por otros, y aun que ninguno firmara, si no supieren.

¿Por qué es privilegiado?—Por la dificultad que habria para cumplir todas las formalidades del ordinario.

¿Qué circunstancias exige el testamento hecho en tiempo de peste?—Todas las ordinarias excepto la unidad del acto, que no podria fácilmente conseguirse en tales casos.

¿Cómo puede hacerse el testamento de ascendientes en beneficio de descendientes?—Escrito y no escrito.

¿Cuáles son sus solemnidades?—Cuando es escrito, está exento de todas, y sólo requiere que lo haya sido por el testador, ó que éste lo firme, que contenga en su principio el año, mes y día de su otorgamiento, y luego el nombre de sus herederos, y en letra la parte hereditaria que se les deja. Si es no escrito, exige las circunstancias de los comunes.

¿Qué prohibiciones le atañen?—No podia dejarse en ellos nada á un extraño, ni desheredar, ni dar tutor á los descendientes.

¿Cuál era el carácter especial de la testamentifaccion entre los romanos?—El estar considerada como un acto de derecho público, y el testamento como una ley.

¿Por qué se le consideraba como ley?—Porque era menester darle su fuerza para derogar las reglas establecidas por los modos de suceder.

¿El testamento *per aes et libram* tenía la misma consideracion?—En realidad no, puesto que no era acto civil; por lo cual se le revistió de fórmulas solemnes que, conciliando el rigor de los principios, satisfacian las nuevas exigencias.

¿Qué circunstancia indispensable era menester para testar válidamente?—La ciudadanía y el ser padre de familia, cuyo carácter le revestia de una especie de poder legislativo.

¿Podia ser siempre ejercido el derecho de testar?—No; requeriase posibilidad para su ejercicio y capacidad física y moral; así no podian ejecutarlo el impúbere, el sordo, el mudo ni el loco, por más que fueran padres de familia.

¿Qué clases habia, segun eso, de incapacidades?—Dos: *naturales* y *civiles*.

¿Quiénes tenían las naturales?—Tenian incapacidad natural el loco, el mudo y el sordo.

¿Quiénes tenían las civiles?—La tenían los jefes sin patria potestad, excepto los hijos de familia respecto al peculio castrense ó cuasi-castrense, los *intestables*, los *impúberos*, el *pródigo*, etc.

¿Qué variaciones hubo más notables respecto á estas incapacidades hasta Justiniano?—Antiguamente los hijos de familia tenían prohibición absoluta de hacer testamento; despues de la institucion del peculio castrense podian disponer de lo adquirido en hueste, cuyo derecho extendió el emperador Adriano á los veteranos,

¿A quién correspondia el peculio castrense muerto el hijo intestado?—Al padre, no como herencia, sino en concepto de peculio.

¿Qué reforma sufrió esto?—Se estableció que el padre sucediese como si fuera *ab intestato*.

¿Cómo debe entenderse la incapacidad del mudo y del sordo?—Se refiere á los que no oyen ni pueden hablar absolutamente, pues los que pueden expresarse de cualquier modo, fueron autorizados por Justiniano para testar.

¿Qué solemnidades debían observarse en el testamento del ciego?—Las que quedan descritas en otro lugar.

¿Cuál fué la razon de su introduccion?—El evitar los fraudes á que podia dar margen el defecto físico del testador.

¿El cautivo podia testar?—No; sólo sería valido el testamento que hubiere otorgado antes de su cautividad, si volvía ó si se moría en ella. Lo primero, en fuerza del derecho de *post liminio*; lo segundo, por la ficcion de la ley Cornelia que le suponía muerto en la ciudad.

Desheredacion de los descendientes.

¿Qué es deheredar?—«Excluir de la herencia al que en otro caso sería heredero,» sea nacido ó *póstumo*.

¿Cuál es su razon?—Se funda en la omnimoda facultad de los padres de familia sobre todo lo que estaba en su potestad, que se extendia en un principio á poder vender y aún matar á sus hijos.

¿Cuál es su objeto?—Privar de la herencia á los que, no siendo desheredados, sucederian en ella.

¿Era de esencia en el testamento la desheredacion?—Tan necesaria como la institucion de heredero. De forma que si no se instituía ó desheredaba al hijo, y se pasaba en silencio, el testamento era nulo, hasta el extremo de que, muerto el hijo antes que el padre, el testamento continuaba siendo nulo, porque lo que era nulo en su origen, no podia convalecer por el trascurso del tiempo.

¿Cuál era su forma en el derecho antiguo?—Debia hacerse *expresamente*, designando al heredero con su nombre, ó de otro modo que no admita duda, si eran hijos de primer grado; y si eran hijas ó nietos, podian desheredarse *entre los demás*.

¿Cuántas formas habia de desheredacion?—Dos: *nominal* é *inter ceteros*. Tenia lugar la primera cuando decia el testador *mi hijo Ticio quede desheredado*, ó simplemente *mi hijo quede desheredado*, si era único; y la segunda, cuando decia *sea heredero mi hijo Ticio, los demás queden desheredados*.

¿Qué efectos producía?—La exclusion del desheredado en la participacion de la herencia.

¿Qué efectos producía la omision de los descendientes?—La nulidad del testamento si era hijo varon de primer grado, y el derecho de acrecer una parte de la herencia, si era hija ó nieto.

¿En qué consistía esta parte?—Variaba segun la clase de herederos. Si eran *suyos*, las hijas y nietos tomaban una parte *viril*, esto es, igual á la de los demás; si eran *extraños*, tomaban sólo la mitad; y cuando eran de ambas clases, se combinaban las dos reglas.

¿Quiénes eran los herederos *suyos*?—Los que al tiempo de la muerte del testador ocupaban el primer grado en la familia y no recaían en la potestad de nadie, viniendo á ser jefes de otras familias.

¿Quiénes eran los *extraños*?—Los que no eran *suyos*.

¿Qué se entiende por *póstumos*?—Dáse este nombre al descendiente que ha nacido después del otorgamiento del testamento del ascendiente; si bien son verdaderamente *póstumos* los nacidos después de la muerte de aquél.

¿Cuál era su condicion?—Primitivamente no podían ser instituidos, porque eran considerados como personas inciertas; mas después se les consideró como nacidos, en cuanto se trataba de su interés, siempre que se realizara su nacimiento; beneficio debido á la jurisprudencia pretoriana. Debían, pues, ser instituidos ó desheredados.

¿En qué forma debían ser desheredados los *póstumos*?—Si eran hembras podían serlo, bien nominalmente, bien *inter ceteros*, siempre que en este caso se les dejara un legado. Si eran varones, debían serlo *nominalmente*.

¿Qué efecto producía su omision?—El testamento no se invalidaba, pero se rompía con su nacimiento, anulándose por este hecho.

¿Quiénes eran los *cuasi-póstumos*?—Los nietos y adoptados después del testamento, que venían á ocupar el primer lugar en la familia, los primeros por la muerte ó emancipacion de su padre, y los segundos por la adopcion.

¿De qué condicion gozaban?—Se equiparaban á los *póstumos*, y debían ser también instituidos ó desheredados, para evitar que rompieran el testamento, llegando á ocupar el lugar de herederos *suyos*.

¿Cómo debía hacerse su desheredacion?—La Ley Junia Velleia estableció que fuera condicional, es decir, hecha bajo el supuesto de que ocuparan el primer lugar en la familia al tiempo de la muerte del testador; siguiéndose la misma regla, en lo demás, que en la desheredacion de los *póstumos*.

¿Qué variaciones introdujo en la materia el derecho pretorio?—Prescribió la necesidad de instituir ó desheredar á todos los hijos, sean varones ó hembras, que estén bajo la patria potestad ó emancipados; á los varones nominalmente, y á las hembras *inter ceteros*.

¿Qué efectos producía su omision segun esta jurisprudencia?—No pudiendo concederles la herencia á los emancipados, les otorgaba la *bonorum possessio contra tabulas*; y para igualar la condicion de la hija constituida en potestad y de la emancipada, dispuso el emperador Antonino que ésta no pudiera obtener más que aquélla.

¿Qué debía hacerse con los hijos adoptivos?—Si estaban en la familia del adoptante, seguían la misma condicion que los naturales; si fueran emancipados por el padre adoptivo, el pretor los consideraba como emancipados por el padre natural, fundado en que los vínculos de la sangre no desaparecen por un acto civil.

¿Qué modificaciones introdujo el derecho de Justiniano?—Comprendiendo que el sistema antiguo estaba fundado en sutilezas, estableció por base del nuevo la equiparacion de los derechos de los hijos, sin consideracion al sexo, ni á estar ó no bajo la patria potestad, ni á ser nacidos *póstumos* ó *cuasi-póstumos*.

¿Conforme á él, qué personas deben ser instituidas ó desheredadas?—Por regla general, todos los que ocuparan el primer lugar en la familia, á quienes se debía la porcion legitima.

¿En qué forma?—Nominalmente.

¿Qué estableció respecto á los hijos adoptivos?—El padre adoptante no estaba obligado á instituir ó desheredar al hijo en la adopcion menos plena, porque éste sólo le hereda *ab intestato*. En la plena debía instituirlo ó desheredarlo como á los demás.

¿Qué privilegio gozaba el militar en la desheredacion?—Pasando en si—

lencio á sus descendientes nacidos ó póstumos, se suponía que los desheredaba *nominalmente*.

¿Los ascendientes maternos estaban obligados á instituir ó desheredar á sus hijos?—No, porque eran extraños á la familia á que pertenecían sus descendientes.

¿Qué causas reconocía el derecho como justas para fundar la desheredación?—Las que se enumeran al tratar de la querrela del testamento inoficioso (4).

Institucion de heredero.

¿Qué es la institucion de heredero?—La designacion del individuo ó de los individuos que han de representar la persona jurídica del testador.

¿Qué importancia tuvo?—Fué considerada como la cabeza y el fundamento de la última voluntad que debía preceder á todo, si bien podia hacerse antes la desheredacion ó la determinacion de la tutela, exigencia derogada por Justiniano.

¿Cuál fué la razon de esta importancia?—Porque siendo el heredero el súbdito á quien se manda cumplir, debía comenzar designándolo, para luego establecer los preceptos y obligaciones.

¿Cuál es su objeto?—Determinar la persona que ha de representar jurídicamente la del testador.

¿Quiénes pueden ser instituidos herederos?—Los hombres libres y los esclavos.

¿Quiénes estaban privados absolutamente de ser instituidos herederos?—Los hijos varones de los reos de lesa majestad, los apóstatas y herejes, y los colegios ó corporaciones no aprobados por el emperador.

¿Quiénes tenían prohibicion respectiva?—El príncipe á quien se le imponía la prosecucion de un pleito del testador, el cónyuge de segundas nupcias que sólo podia recibir lo tocante al hijo de las primeras que llevara ménos, los padres é hijos incestuosos entre si, y los hijos naturales habiendo otros legítimos.

¿Cómo puede hacerse la institucion de heredero?—*Pura y condicionalmente*, pero no desde, ni hasta cierto tiempo.

¿Cuál es la *pura*?—La que se hace simplemente sin condicion ni día.

¿Cuál es la condicional?—La que está sujeta en sus efectos al cumplimiento de una condicion.

¿Qué es condicion?—«Un acontecimiento futuro é incierto, del que se hace depender la fuerza de derechos determinados.»

¿Qué clases hay de condiciones?—Posibles é imposibles.

¿En qué se subdividen las posibles?—En suspensivas y resolutorias, afirmativas y negativas, potestativas, casuales y mistas.

¿Qué es condicion suspensiva?—Aquella de cuyo cumplimiento pende el comenzar á usar un derecho.

¿Qué es condicion resolutoria?—Aquella de cuyo cumplimiento pende la extincion del derecho concedido.

¿Cuáles son las afirmativas?—Las que se refieren á un suceso que suponen ha de suceder.

¿Cuáles las negativas?—Las que presuponen lo contrario.

¿A cuáles se denomina potestativas, casuales y mistas?—A las que dependen su realizacion á la voluntad de aquél á quien se imponen, al azar ó casualidad, y á ambas causas respectivamente.

¿Qué efecto produce la institucion *pura*?—La adquisicion del derecho á la herencia con la muerte del testador.

(1) Pág. 72.

¿Qué efecto produce la condicional?—Si la condicion se verifica antes de la muerte del testador, la institucion se reputa *pura* y simple. Si está pendiente entonces, el derecho del heredero no nace hasta su cumplimiento. Si éste muere antes que el testador ó antes que la condicion se cumpla, nada adquiere ni trasmite.

¿Qué efecto produce el día incierto?—El mismo que la condicion.

¿Qué efecto produce el día cierto, que se sabe que ha de llegar?—Se tiene por no puesto, bien indique el principio ó el fin de la cualidad de heredero (*à quò* y *ad quem*), porque era máxima inconcusa que nadie podia morir en parte testado y en parte intestado.

¿En qué se subdividen las condiciones imposibles?—En *física* y *moralmente imposibles*. La imposibilidad *física* puede nacer de la misma naturaleza de la condicion, como la de tocar al cielo, ó por otra circunstancia cualquiera que no éste conforme con las leyes naturales. La imposibilidad *moral* nace de la prohibicion de las leyes y de la moral.

¿Cuál es el efecto de las condiciones imposibles?—Como que en realidad no son condiciones, se tienen por no puestas, porque se supone que el testador no quiso burlarse en un acto tan sério como el otorgamiento de su postrimera voluntad.

¿Qué efecto producen las negativas?—El de toda condicion que, consistiendo en *no hacer*, si se hace lo prohibido, no se cumple, y no surte ni nace el derecho á la herencia.

¿Cuál es el efecto de la imposicion de varias condiciones?—Si son *impuestas copulativamente*, deben cumplirse todas; y si se imponen *disyuntivamente*, el cumplimiento de cualquiera de ellas basta para el nacimiento del derecho.

Division de la herencia.

¿Qué principio absoluto debia consultarse en la distribucion de la herencia?—La prohibicion de morir testado en parte y en parte intestado.

¿Qué consecuencias y efectos nacen de él?—Que el testamento debia contener la disposicion comprensiva de todas las cosas pertenecientes á la herencia, y en caso contrario una interpretacion benigna procuraba acomodarla á la ley para sostener su validez.

¿Qué reglas debian seguirse en tal caso?—Varias, segun que hubiere nombrado uno ó más herederos.

¿Cómo se distribuía siendo uno sólo?—Acrecía el resto de la herencia á la parte que se le designase.

¿Qué sucedia si eran varios?—Cuatro situaciones podian ofrecerse: 1.^a, cuando el testador nombraba los herederos sin expresar las partes de su herencia en que habian de heredarle; 2.^a, cuando decia que fueran iguales; 3.^a, cuando les señalaba partes desiguales, y 4.^a, cuando el señalamiento estaba limitado á algunos, callando en cuanto á lo demás.

En las dos primeras situaciones todos heredaban en la misma cantidad é iguales porciones hereditarias. En la tercera, hay que distinguir si todas las partes completaban la unidad, si la excedian, ó si no llegaban á formarla. En el primer caso no habia dificultad; los herederos llevaban la porcion designada por el testador. En el segundo las partes designadas disminuian proporcionalmente, por respeto al principio enunciado. Y en el tercero, aumentaban en la misma proporcion por igual motivo; y para evitar complicaciones, se ponía por denominador de los quebrados la suma de los numeradores. En la cuarta se suponía que el testador se refería á la division más general de doce partes (*pondius*), y se entendian instituidos en las restantes aquéllos á quienes no se la señalara, en concurrencia con otros que la tenian determinada.

¿Cómo se resolvian las dificultades si las partes señaladas llegaban ó

excedían de doce?—Se entendía dividida la herencia en veinticuatro partes (*dupondius*), ó en treinta y seis si llegaba ó superaba á este número (*tripondius*), y así sucesivamente.

¿Qué era el *as hereditario*?—La herencia dividida en doce onzas, llamadas, segun su número correlativo, *uncia*, *sextans*, *quadrans*, *triens*, *quincunx*, *semis*, *septunx*, *bes*, *drans*, *dextans*, *deunx* y *as*.

¿Podía constituirse el *as* con más ó ménos onzas?—Sí: su número pendía de la voluntad del testador.

¿En qué se subdividía la onza?—La mitad se llamaba *senuncia*; la tercera parte *duella* ó *binx sextula*, la cuarta *sicilicum* la sexta *sextula*, la octava *drachma*, la duodécima *hemiscla* ó *dimidia sextula*, la décimosexta *tremis*, y la vigésima cuarta *scrupulus*.

El testamento militar estaba exento de estas prescripciones.

Sustitucion de heredero.

¿Qué es *sustitucion*?—«El llamamiento de un segundo heredero para reemplazar al instituido en primer lugar»

¿Qué clases habia de *sustitucion*?—Tres: la *vulgar*, la *pupilar* y la *ejemplar*; porque otras que se enumeran, no son verdaderas *sustituciones*, sino formas de *sustituir*.

¿Qué se entiende por *sustitucion vulgar*?—El llamamiento que hace el testador de un segundo heredero, en el caso de que el primer instituido no llegue á serlo, cuyo nombre recibió por ser la más general y comprensiva de todas.

¿Cuál fué su origen?—Fué usada ya en tiempo de la república.

¿Cuál su razon y objeto?—La conservacion de las deidades privadas, trasmisibles con la herencia, y la mancha que recaía sobre los que morían sin herederos, que causaba que los bienes fueran al Erario, impulsaron á buscar medios para encontrar un heredero que pudiese adir la herencia y evitase, con la adición, la invalidez del testamento.

¿Fué de uso frecuente la *sustitucion*?—Sí, por las razones expuestas.

¿Cuál era la fórmula de la *sustitucion vulgar*?—«*Si aquel no es heredero, que lo sea el otro*; por ejemplo, si Ticio no es mi heredero, séalo Mevio»

¿Qué casos comprende?—Los llamados de *noluntad* ó *impotencia*; esto es, de no querer ó de no poder ser heredero.

¿Cuándo se verifican?—Cuando no lo es el primer instituido, bien porque repudia la herencia, bien por haber muerto, ó bien por tener incapacidad legal para serlo.

¿De qué modos puede hacerse esta *sustitucion*?—Puede *sustituirse* muchos á uno sólo, ó uno sólo á muchos, ó cada uno á cada uno, ó mutuamente á los mismos instituidos.

¿Cómo debe entenderse la *sustitucion* cuando tiene lugar recíprocamente entre herederos instituidos por partes desiguales?—Se atiende á la porción en que fueron instituidos para calcular la en que deben reputarse *sustitutos*.

¿A qué se dá el nombre de *sustitucion brevi-loqua*?—A la en que á varios herederos se les *sustituye* mutuamente.

¿Quiénes pueden *sustituir*?—Los que pueden hacer testamento, porque la *sustitucion* es una institucion supletoria.

¿Quiénes pueden ser nombrados *sustitutos*?—Los que pueden ser instituidos herederos.

¿Cuándo tiene lugar el derecho de los *sustitutos*?—Cuando aquél ó aquellos á quienes *sustituyen*, no son herederos por cualquier causa.

¿Qué derecho tenia el *sustituto* de un esclavo ajeno, nombrado heredero en la creencia de que era padre de familia?—Llevaba la mitad de la herencia, porque se presumía que si el testador supiera que el instituido no era padre de familia, llamaría en su lugar al *sustituto*.

¿Cuándo concluye la sustitucion?—Cuando el instituido acepta la herencia.

Sustitucion pupilar y ejemplar.

¿Qué es sustitucion pupilar?—«La institucion que el padre hace en su testamento para la sucesion del hijo que está en su potestad, en el caso de que éste le sobreviva y muera antes de llegar á la pubertad.»

¿A qué debe su origen?—A la amplia potestad que las leyes concedian al jefe de la familia, que permitia al padre velar por la suerte del hijo, áun despues de su muerte.

¿Cuál es su razon y objeto?—Evitar que los parientes encargados de la tutela del impúburo atentaran contra la vida de éste, antes de que llegase á la pubertad, época en que podia testar, á fin de heredarle.

¿Quiénes podian sustituir pupilarmente?—Los que tenian la patria potestad sobre sus hijos al tiempo de sustituirlos, y al de su muerte; por consiguiente, no podian hacerlo, el padre natural, ni la madre, que no gozaban de aquella facultad, y si el arrogador.

¿Qué hijos, segun eso, podian ser sustituidos?—Los que estaban en el poder paterno y ocupaban el primer lugar en la familia, razon por que no podian serlo los emancipados, los naturales, ni los nietos á quienes vivia su padre.

¿De qué modos se hacia?—Diciendo: *Mi hijo Ticio sea mi heredero; y si él no lo fuere, ó si bien lo fuere y muriere antes de llegar á la pubertad, Seyo sea mi heredero.*

¿A quién heredaba el sustituto en estos casos?—Al padre si el hijo no llegaba á ser heredero, y al hijo si lo fuera y muriera en la impubertad.

¿Qué otra forma habia?—Podia sustituirse ó nominalmente ó entre los demás, como en el caso de la institucion de heredero.

¿Esta sustitucion comprende la vulgar?—Sí, excepto cuando se expresa en contrario la voluntad del testador.

¿Cuándo concluye la sustitucion pupilar?—Cuando el hijo llega á la pubertad, tiempo en que queda dicho podia testar.

¿Cuándo tenia lugar la sustitucion ejemplar ó cuasi pupilar?—Cuando el ascendiente sustituye á un descendiente demente, aunque haya llegado á la pubertad.

¿Cuál fué su origen?—El mismo que reconoce la sustitucion pupilar.

¿Cuál su razon y objeto?—Como en ésta, dar heredero á quien no podia designarlo por su incapacidad intelectual.

¿Quién puede hacer esta sustitucion?—Á diferencia de la pupilar, pueden hacerla todos los ascendientes, aunque no tengan la patria potestad, por lo cual podia sustituir ejemplarmente la madre y el padre emancipante.

¿Quiénes deben ser nombrados sustitutos?—Tambien, á diferencia de lo que sucedia en la sustitucion ejemplar, debian serlo necesariamente los hijos del loco en primer lugar; en su defecto, sus hermanos, y no habiendo unos ni otros, cualquier extraño.

¿En qué forma debia hacerse?—Como la pupilar, debia ser condicional para el caso de que el sustituto muriera demente.

¿Qué efectos producía?—La sucesion del loco, y cesaba cuando éste recobraba la razon.

Ineficacia de los testamentos.

¿Cuándo no surten efecto legal los testamentos?—Cuando son nulos desde un principio, ó se anulan despues por un hecho posterior; casos que comprenden la nulidad y la anulacion.

¿Cuáles son los que contienen nulidad desde su origen?—Los propiamente *nulos* y los *injustos*.

¿Qué testamentos eran *nulos*?—Los otorgados por una persona incapaz, según el derecho.

¿Qué testamentos se llaman *injustos*?—Aquéllos en cuya confeccion no se observaron las formas legales externas.

¿Por qué son *nulos* ambos desde su origen?—Por la regla que establecía que lo que era nulo en un principio no podía convaler por el trascurso del tiempo.

¿Cuáles eran los que podían anularse?—Los que se *rompían* ó se hacían *inútiles* (*irritum*).

¿Cuándo se *rompen* los testamentos válidos?—Cuando, permaneciendo en el mismo estado el testador, arrogaba á alguno ó lo adoptaba plenamente, por la formacion de un testamento posterior, por el nacimiento de un póstumo, por ocupar el nieto el primer lugar en la familia, efecto de la muerte prematura de su padre, y por la legitimacion de los hijos naturales.

¿Por qué causas se hacen inútiles ó *irrita* los testamentos?—Por sufrir el testador cualquiera de las tres *capitis* disminuciones explicadas en su lugar oportuno, puesto que entre sus efectos se comprende la pérdida de la facultad de testar, y en tal estado tiene aplicacion la regla que establece que *el negocio incidió en el caso del que no podía tomar origen*.

¿En qué caso podía convaler?—Cuando el vicio tenía lugar en el tiempo que media entre su otorgamiento y la muerte del testador, y en éste, había ya desaparecido.

¿El testamento posterior, comenzado y no concluido, anula el primero?—No, porque no basta la voluntad del testador para su revocacion: es menester un hecho externo que la demuestre legalmente, y el testamento no terminado no puede tener fuerza legal contra otro perfectamente otorgado.

¿Cuáles son los testamentos llamados *destituidos*?—Los que no tenían efecto por falta de la adición de la herencia, por no poderla adir el heredero por cualquiera motivo ó causa legal, ó por falta de voluntad.

¿En qué casos tenía esto lugar?—Cuando se incapacitaba despues de la institucion, ó no se cumplía la condicion de la cual pendía el nacimiento del derecho.

Testamento inoficioso.

¿Qué es testamento *inoficioso*?—«Aquél en que se falta á los deberes de afeccion que deben guardar los que están íntimamente ligados con los vínculos de la sangre.»

¿Cuál es la naturaleza de la queja de inoficioso testamento?—Ser un remedio extraordinario que sólo podía usarse á falta de otro recurso, que para ser eficaz necesita una declaracion judicial que lo estime.

¿Cuál fué su origen?—La opinion más probable, la supone hija de la interpretacion de los jurisconsultos, ya en los últimos años de la república.

¿Cuál su razon y fundamento?—Equiparando el padre desnaturalizado que se olvidaba de sus descendientes, al que padecía enajenacion mental, suponían que aquél no podía testar, como no podía hacerlo éste, y que si testaba, se rescindía el testamento por la querella de inoficioso. Así, pues, su fundamento consiste en una ficcion que aparenta incapacidad en el desheredante.

¿Por qué se llama á este remedio *queja*?—Porque al acto de reclamar entre parientes se llamaba antiguamente *conqueri*, de cuya palabra se nombró á la demanda judicial *querela*, ó *queja*.

¿A quiénes se concedía esta acción?—No solamente á los descendientes, sino también á los ascendientes y áun á los hermanos, siempre que fueran pospuestos á personas viles; si bien respecto á esto hay que tener presente que el antiguo derecho sólo se refería á los hermanos unidos por la agnación. Justiniano primeramente extendió el derecho á todos los *consanguíneos*, y por último le concedió también á los *uterinos*, que fueron igualados á aquéllos.

¿Por qué y para qué, se concedía este derecho?—Porque, además de ser llamados á la legítima aquéllos á quienes se concedía, eran justas las consideraciones que debía respetar el testador, y tenía por fin la rescisión del testamento.

¿Qué personas se consideraban *viles* para los efectos de la acción?—Tres causas hacían perder la pública estimación: la infamia, la torpeza y la nota leve.

¿Quiénes eran los infames?—Los declarados tales por una sentencia, los que ejercían una profesión mal mirada y los que ejecutaban un acto vergonzoso condenado por las leyes ó por el pretor.

¿Quiénes eran los torpes?—Los que la costumbre señalaba con nota denigrante por el ejercicio de determinadas profesiones ó de algunos vicios.

¿Qué era la *leve nota*?—La mala opinión de que gozaban algunos, no por consideración á sí mismos, sino á la de que disfrutaron sus ascendientes ó patronos.

¿Cuándo procedía la queja?—Cuando los interesados eran desheredados sin justa causa.

¿Cuáles eran las causas justas de desheredación?—Catorce referentes á los descendientes, ocho á los ascendientes y tres á los hermanos.

Causas de desheredación de los descendientes.

El Sr. Laserna las enumera en esta forma: 1.^a, propasarse á vías de hecho con los ascendientes; 2.^a, hacerles graves injurias verbales; 3.^a, acusarlos criminalmente, á no ser por delito cometido contra el Estado ó contra el príncipe; 4.^a, asociarse con envenenadores ó tener participación en este delito; 5.^a, atentar de cualquier modo á la vida de sus ascendientes; 6.^a, tener comercio ilícito con la mujer ó la concubina de su ascendiente; 7.^a, causarle, por una delación falsa, una pérdida considerable en sus bienes; 8.^a, negarse á salir fiador de su ascendiente, preso por deudas, cuando es requerido por éste y tiene posibilidad de hacerlo; 9.^a, impedir testar ó modificar el testamento otorgado; 10.^a, seguir contra la voluntad paterna á una compañía de gladiadores ó de gentes que dan espectáculos, y tomar parte en sus ejercicios, á no ser que sus padres sean de la misma profesión; 11.^a, entregarse la hija ó nieta á una vida licenciosa, cuando sus padres ó abuelos ofrecen casarla y dotarla con arreglo á sus facultades; pero si la hija ya tiene veinticinco años y los padres dilatan su matrimonio, cesa este motivo de desheredación; 12.^a, abandonar á su descendiente cuando se halla en estado de demencia; 13.^a, no rescatarlo de cautiverio; 14.^a, si el hijo del padre ortodoxo se hace hereje, desechando la autoridad de los cuatro primeros concilios ecuménicos (1).

Causas de desheredación de los ascendientes:

Primera, acusar los ascendientes á los descendientes de un delito á que la ley impone la pena capital, á no ser contra el Estado ó contra el príncipe; 2.^a, atentar de cualquier modo á la vida de su descendiente; 3.^a, tener

(1) Capítulo 3 de la Nov., 115.

comercio ilícito con la mujer ó concubina de éste; 4.^a, impedir testar de los bienes de que la ley permite disponer á los hijos por última voluntad; 5.^a, atentar uno de los cónyuges ascendientes á la vida del otro de cualquier modo, ó extraviar su razon por medio de medicamentos; 6.^a, abandonar á sus descendientes que se hallan en estado de demencia; 7.^a, no procurar libertarlos del cautiverio en que gimen; 8.^a, incurrir en herejía los padres de un hijo ortodoxo (1).

Causas de los hermanos.

Primera, armar asechanzas á la vida del hermano; 2.^a, acusarlo criminalmente; 3.^a, causarle una gran pérdida en sus bienes.

¿Quiénes no podían hacer uso de esta accion?—Los que contaban con un remedio ordinario para declarar nulo, roto ó inútil el testamento, ú obtener algo de la herencia.

¿Qué derecho competía á los que habian recibido alguna porcion ó cosa hereditaria?—El de completar hasta la cuarta parte de la herencia, aunque no lo dispusiera el testador, si se les debía la legítima.

¿Qué era la *legítima*?—La parte debida por derecho á los ascendientes, descendientes y hermanos.

¿En qué consistía esta parte?—Segun el derecho antiguo la fijaban los jueces prudencialmente. La ley *Falcidia* la fijó en la cuarta parte de la herencia, y Justiniano la extendió á la mitad cuando eran más de cuatro los herederos, y á la tercera en otro caso.

¿Qué nombre recibía la *accion* para conseguir el todo de la legítima?—*Ad supplementum*.

¿Qué diferencias la separan de la de inoficioso testamento?—Su duracion, su trasmision y su renuncia. Duraba treinta años; la querella cinco. Se trasmitia á los herederos; ésta se extinguía con la muerte del interesado, á no ser que estuviere preparada. Se debía renunciar expresamente, mientras que se entendia renunciada la querella por la aceptacion de cualquiera cosa de la herencia.

¿Cuándo cesa la querella?—Una vez adquirida la legítima porcion por aquellos á quienes corresponde; cuando se renuncia expresa ó tácitamente; por el trascurso de cinco años, contados desde la adición de la herencia; y por el fallecimiento del agraviado antes de entablarla.

Diferentes clases de herederos.

¿Qué clases había de herederos?—Tres: herederos *necesarios*, herederos *suyos y necesarios* y herederos *extraños*.

¿Quiénes eran los *necesarios*?—Los que con su voluntad ó contra su voluntad *ipso jure* eran herederos, como el esclavo instituido por su señor, siempre que lo fuera al tiempo de la muerte de éste, aunque no tuviera el discernimiento necesario para comprender sus deberes.

¿Por qué eran *necesarios*?—Por la razon expuesta, y á fin de que no recayese sobre la memoria del difunto la mancha de morir sin heredero.

¿Qué efectos producía?—El esclavo adquiría la libertad, la ciudadanía y el derecho de adquirir en lo sucesivo, sin que pudieran confundirse los bienes heredados con los adquiridos despues, beneficio de separacion introducido por el pretor.

¿Qué debía hacer para no perderlo?—Abstenerse de tocar á la herencia y solicitarlo del pretor ó del presidente.

(1) Capítulo 4 de la Nov., 115.

¿Quiénes eran los *suyos* y *necesarios*?—Los hijos ó nietos, hijos de hijo, que ocupaban el primer lugar en la familia.

¿Por qué eran *suyos*?—Porque eran herederos domésticos, y se suponía tenían condominio en los bienes, aún en vida del padre ó abuelo.

¿Por qué eran *necesarios*?—Porque del mismo modo que los esclavos, con ó sin voluntad, lo eran en la sucesión testada ó intestada.

¿Qué beneficio introdujo el pretor en su favor?—El de abstenerse de la herencia, en virtud del cual, si bien se consideraban herederos, no estaban obligados á pagar las deudas ni á cumplir las obligaciones testamentarias.

¿Qué diferencias había entre este beneficio y el concedido á los esclavos?—Dos: 1.^a, no necesitaba ser solicitado del magistrado, y éste sí: 2.^a, los acreedores del difunto no podían reclamar del heredero *suyo y necesario*, mientras que el esclavo debía responder en cuanto alcanzasen los bienes del finado.

¿Quiénes eran los herederos *extraños* ó voluntarios?—Todos los que no estaban sujetos al poder del testador, como los hijos emancipados, los instituidos por la madre, y el esclavo instituido y manumitido después por su señor.

¿Qué diferencia notable había entre aquéllos herederos y éstos?—La necesidad de la *adición* de la herencia, que no tenía lugar en los *suyos* y *suyos y necesarios*.

¿A qué se da el nombre de *adición* de la herencia?—Al acto en cuya virtud el heredero manifiesta expresa ó tácitamente su voluntad de aceptarla.

¿Qué nombre especial recibía la aceptación *tácita*?—Llamábase *gestion* por heredero (*pro herede gestio*).

¿En qué épocas debe tener capacidad el heredero extraño para poder serlo?—En tres: la del otorgamiento del testamento, porque no podía ser válido lo que era nulo desde un principio; la de la muerte del testador, porque en ella se abre la sucesión, y la de la *adición* de la herencia, porque, siendo una adquisición, requiere capacidad de hecho y de derecho en el adquirente.

¿Qué consecuencias y efectos producía la *adición* de la herencia?—El heredero reemplazaba la persona jurídica del testador, y por tanto se instituía en todos sus derechos y obligaciones, salvo los casos en que tenían lugar los beneficios de *deliberar* y de *inventario*.

¿En qué consiste el beneficio de *deliberar*?—Es la *facultad* que tiene el heredero de examinar el estado de la sucesión, y decidirse en su virtud á serlo de hecho.

¿Cuál fué su origen?—El derecho pretorio.

¿A qué razones fué debido, y para qué?—Fué introducido para evitar que el heredero aceptase una herencia perjudicial, y en beneficio de los acreedores, sustitutos y de cuantos estaban interesados en ella, á fin de que sus derechos no permaneciesen en suspenso é inciertos hasta tanto que el heredero manifestase su voluntad, quien no tenía tiempo señalado legalmente para verificarlo.

¿Qué término le concedía el pretor?—El que estimaba oportuno, no pudiendo exceder de cien días.

¿Qué alteración sufrió por Justiniano?—Lo amplió á nueve meses cuando fuera otorgado por el magistrado, pudiendo conceder un año el emperador.

¿Qué cosas podía hacer durante ese término el heredero?—Dictar las disposiciones necesarias para enterrar al finado ú otras de las que no podía deducirse su voluntad de aceptación ó repudiación de la herencia.

¿Qué efectos producía el trascurso del tiempo señalado sin renunciar ó aceptar?—Si las personas que habían promovido el negocio eran las que inmediatamente debían heredar, en el caso de no aceptación, se reputaba

renunciada la herencia. Si eran los legatarios ó acreedores, se consideraba aceptada.

¿Qué efectos producía la muerte del heredero ocurrida dentro del término?—La trasmision á los sucesores del derecho de *deliberar* durante el tiempo que faltaba para extinguirse.

¿Qué efectos y ventajas resultaban de la aceptacion de la herencia?—La responsabilidad del heredero á pagar las deudas del difunto, despues de conocer deliberadamente á cuánto ascendía su activo y su pasivo.

¿Cómo se perdía el derecho á este beneficio?—Si el heredero *suyo* se mezclaba en la herencia ó el *extraño* la aceptaba.

¿Qué casos de excepcion habia?—La menor edad del heredero y la aparicion de grandes deudas desconocidas antes.

¿En qué consistía el beneficio de *inventario*?—Era la facultad que tenía el heredero de aceptar la herencia, obligándose tan sólo á responder de las deudas en cuanto bastara para satisfacerlas el caudal hereditario.

¿Qué era el *inventario*?—La solemne escritura que se hacia de los bienes del finado.

¿Cuándo debía comenzarse á formarlo?—Se tenía en cuenta si estaba ausente ó presente el heredero. Si lo primero, tenía un año de término, contado desde que supiera la institucion; si lo segundo, debía comenzarlo en los treinta dias contados desde tal suceso, y concluirlo á los sesenta.

¿Qué solemnidades debían concurrir?—Debía ordenarse ante un escribano público, á presencia de todos los interesados en la herencia, ó en su defecto, de tres testigos; firmarse por el escribano y el heredero, quien, si no sabía escribir, debía poner la señal de la cruz, en cuyo caso certificaria un segundo escribano.

¿Qué bienes debía comprender?—Todos los en que consistiera la herencia.

¿Qué efectos producía?—Limitaba la responsabilidad del heredero al valor de lo que heredaba; le autorizaba para deducir gastos de funerales, apertura del testamento, formacion del inventario y otros de necesidad; separaba su patrimonio del caudal hereditario, facultándole para cobrar si era acreedor de la herencia, y obligándole á pagar si era deudor á la misma; impedía que los acreedores le molestasen durante su formacion, y le obligaba á satisfacerles por el orden que se presentaban, sin atencion á privilegios, hipotecas ni prendas, cuestiones de prelacion que debían ventilarse y decidirse entre ellos.

¿Qué es repudiacion de la herencia?—La renuncia de la misma, hecha por el heredero.

¿De qué modos podia hacerse?—Expresa y tácitamente. Cuando se hacia expresamente, se llamaba *repudiacion*; cuando tácitamente, *omision de la herencia*.

Mandas.

¿Qué es *manda* ó *legado*?—Justiniano la define, una especie de donacion dejada por el difunto: es, pues, la manda, en su sentido *objetivo*, una determinada porcion de bienes dejados por el difunto.

¿Cuál es su naturaleza?—El ser un modo *singular* de adquirir, revocable como las últimas voluntades en que se constituye.

¿Cuál es su objeto?—El cumplimiento de los deseos y afectos que tiene el testador á los legatarios.

¿En qué se diferenciaba de la herencia?—En que ésta comprende una generalidad de bienes y constituye un modo *universal* de adquirir, y la manda una cosa particular de la misma, y es, segun queda dicho, modo *singular* de adquisicion.

¿Cuál es el origen de la palabra *legado*?—Viene de *á legendo*, que segun

unos se refería á la especie de poder legislativo inherente á la patria potestad; y según otros, se equiparaba al verbo *decernere*, que significaba tomar. De aquí que llamemos *legado* á lo que los romanos designaban con la voz *legatum*.

¿Por qué dice Justiniano que es una especie de donacion?—Porque si á ella se asemeja en un acto de liberalidad, no es donacion, puesto que no requiere para su eficacia la intervencion del legatario.

¿Por qué dice *dejada por el difunto*?—Porque dimanaba de su voluntad, manifestada en testamento ó en codicilo.

¿Qué diferencias existen entre los legados y las donaciones?—La principal queda expuesta en la penúltima pregunta, habiéndose enumerado otras al tratar de las donaciones por causa de muerte.

¿Qué diferencias principales mediaban antiguamente entre los legados y los fideicomisos singulares?—Los legados eran de interpretacion más estricta y estaban encerrados en límites más estrechos que los fideicomisos. Los legados sólo podían dejarse en el idioma latino, después de la institucion de heredero, y nunca para después de la muerte del mismo. Sólo podían imponerse á éste, y no al legatario ni al fideicomisario.

¿Cómo, y por qué, desaparecieron?—Justiniano las suprimió equiparando unos á otros, procurando atender solamente al cumplimiento de la voluntad de los testadores.

¿Qué diferencias quedaron subsistentes?—Los nombres; las palabras imperativas con que se dejaban los legados; las de ruego que distinguían á los fideicomisos; la necesidad de cinco testigos para la validez de aquéllos, mientras que éstos podían probarse por cualesquiera medios.

¿Quiénes podían legar?—Los que podían hacer testamento.

¿Quiénes podían obtenerlos?—Los que tenían la testamentifaccion pasiva. Antiguamente estaban excluidos de adquirirlos en su totalidad los célibes y los casados sin hijos, las mujeres y después los herejes.

¿Cómo se clasificaban los legados por el derecho antiguo?—Había cuatro clases de legados, denominados *per vindicationem*, *per damnationem*, *sinendi modo* y *per preceptionem*.

¿Cuál era la fórmula del primero?—*Do, lego, sumito, capio* y otras semejantes.

¿Qué efectos producía?—Trasmitía al legatario el dominio de la cosa, facultándole para *reivindicarla* de cualquiera poseedor, por lo cual se llamaba *per vindicationem*.

¿Qué cosas podían ser objeto de este legado?—Solamente las en que el testador tenía el dominio quiritarario al tiempo del otorgamiento y al de la muerte, bastando que lo estuvieran en el último, si eran de las que se apreciaban por el número, peso ó medida.

Legado el género ó una de dos cosas, ¿á quien pertenecía la eleccion?—Al legatario, porque á él se dirigían las palabras del testador.

¿Cuál era la fórmula del segundo?—*Hæres meus, dare damnas esto ó dato*, y otras semejantes.

¿Qué efectos producía?—Imponía al heredero la obligacion de entregar al legatario la cosa legada, quien no podía reivindicarla por no adquirir el dominio, sino un derecho *ad rem*.

¿Qué cosas podían ser objeto de este legado?—Tanto las propias como las ajenas, y aún las que no existían, como los frutos.

¿A quien pertenecía la eleccion, legado el género ó una de dos cosas?—Al heredero, porque á él se dirigía el testador.

¿Cuál era la fórmula del legado *sinendi modo*?—*Hæres meus, damnas esto, sinere Lucium Titium, hominem Stichum sumere, sibi que habere*.

¿Qué cosas podían legarse con esta fórmula?—Era más lato que el primero y más limitado que el segundo, pues no sólo podían legarse las cosas propias, sino las del heredero; pero no las de un extraño.

¿Cuáles eran sus efectos?—No trasmitía al legatario el dominio de la cosa, concediéndole tan sólo una accion personal para reclamarla.

¿A quién pertenecía la eleccion en su caso?—Al heredero, por la razon expuesta en el legado anterior.

¿Cuál era la fórmula del legado *per praeceptionem*?—*Lucius Titius, hominem Stichus praecipito.*

¿Qué cosas podian ser objeto de este legado?—Los Sabinianos opinaban que sólo las cosas hereditarias, si bien, dejadas las ajenas, se sostenia el legado por el senado-consulto Neroriano, que disponia que todo lo que se legase con palabras ménos aptas, se entendiese legado *per damnationem*.

Segun los Proculeyanos, sólo podian legarse las en que el testador tenia el dominio quiritario, porque equiparaban este legado al *per vindicationem*.

¿Qué efectos producía?—Los consiguientes á cada una de las opiniones antedichas.

¿Qué reformas sufrieron estos modos de legar?—Constantino, Constantino y Constante eliminaron la necesidad de la intervencion de fórmulas en legados y fideicomisos, y Justiniano las hizo desaparecer por completo, igualando sus efectos, dándoles la misma naturaleza, y concediendo á los legatarios el derecho de reclamar los legados por medio de las acciones personales ó de las reales.

¿Qué cosas pueden legarse?—No solamente las del testador, sino tambien las del heredero; las ajenas; las dadas en prenda y las que no existen, pero que pueden existir. Las del heredero, porque con la adiccion de la herencia, acepta la imposicion de la voluntad del testador; y las ajenas porque no obliga el legado á su dueño á entregarlas al legatario, pero sí al heredero á adquirirlas; y no pudiendo hacerlo, á pagar su estimacion cuando están en el comercio.

¿Qué efectos produce el legado de cosa ajena?—Ya quedan indicados. Prescribe al heredero el deber de procurar la adquisicion de la cosa; y no consiguíendola, el de satisfacer su estimacion.

¿Qué derecho tiene el legatario que ha adquirido en vida del testador la cosa ajena que le fué legada?—Si la adquirió por título oneroso, puede reclamar su estimacion. Si la adquirió por título lucrativo, ninguno; pues no era permitido reunir en una misma persona dos causas lucrativas sobre una misma cosa.

¿Qué derecho compete al legatario á quien se haya legado una misma cosa ajena por dos personas?—Si ha adquirido de cualquiera de ellas la cosa legada, no conserva accion alguna, porque la adquisicion fué por causa lucrativa; mas si recibió su estimacion, puede pedir la misma cosa.

¿Qué efectos dimanán del legado de la cosa empeñada?—Nace la obligacion de redimirla el heredero, para entregarla al legatario cuando sabe el estado de la cosa. Si lo ignora, la redencion corresponde al legatario, que se libera de ella, probando que ésta no era la voluntad del testador.

¿Qué efectos produce el legado de las cosas que no existen, pero que pueden existir?—Que en tanto se deben éstas, en cuanto existen. Así, por ejemplo, legados los frutos de una heredad, sólo se deberán si nacieren, y en la cantidad que produjere aquélla, por regla general.

¿Qué excepcion admite esta regla?—Cuando se legan para *demonstrar* y no para *tasar*.

¿Cuándo se legan por *demonstracion*?—Si se indican para determinar su género y no su cantidad.

¿Cuándo por *tasacion*?—Si se mencionan para limitarlos á los producidos por la finca. En el primer caso se deben, aunque nada produzca; en el segundo se deben los producidos, y no existiendo, el heredero está relevado de toda obligacion.

¿Es válido el legado que se hace de lo que pertenece al legatario?—No,

porque la cosa legada es ya suya, y aunque la enajene no se le debe ni aun su estimacion.

¿Es válido el legado de cosa propia, supuesta ajena?—Sí, porque tiene más fuerza la verdad que la creencia.

¿Qué efectos produce la enajenacion de la cosa legada, hecha por el testador?—Si la enajenacion se hizo con intencion de revocar el legado, el legado es nulo.

¿Qué efectos produce la hipoteca de la cosa legada, constituida despues del testamento?—Que el legatario puede demandar al heredero para que redima del acreedor la cosa, puesto que no se presume la revocacion por la hipoteca.

¿Cuál es el legado de *liberacion*?—Aquél en que se deja al deudor el perdón de la deuda.

¿Qué efectos producía?—El legatario podía demandar al heredero para que lo libertara de la obligacion.

¿Es válido el legado de *deuda* hecho por el deudor á su acreedor?—Generalmente no, pero puede serlo si lega puramente la que debía bajo condicion, pues entonces adquiere alguna ventaja.

¿Qué efectos producía el legado de dote?—Era válido, porque la mujer podía ejercitar la accion *ex-testamento*, más ventajosa que la dotal, cuando la dote se habia recibido; pues en el caso contrario era nula, á ménos que se indicase por el marido, con determinacion, lo que debía recibir la mujer como expresado en la carta dotal.

¿Para quién perece la cosa legada?—Para el legatario si consiste en especie; pues el género nunca perece.

¿A quién pertenecen los aumentos del peculio legado?—Al legatario.

¿En qué consiste el legado de *deuda*?—En legar á otro el crédito que se nos debe.

¿Qué efectos produce?—La obligacion del heredero á ceder sus acciones al legatario, á no ser que el legatario haya exigido en vida su satisfaccion, hecho del cual se presume la voluntad de revocarlo.

¿Cuándo hay legado de *género*?—Cuando el testador lega una cosa sin determinar el individuo ó la misma que se ha de dar, sino que se refiere á su clase indeterminadamente; por ejemplo, si dice: *lego mi esclavo á Ticio, una casa á Mevio*.

¿Cuándo hay legado de *especie*?—Cuando existe la determinacion de la cosa legada individualizándola. Así en el caso propuesto se legará la especie, si se dice: *lego mi esclavo Sempronio á Ticio; la casa de tal punto á Mevio*.

¿Qué exige el primero para su validez?—Que la cosa legada tenga determinacion fija por la naturaleza y no por la creacion del hombre, porque las cosas del género determinado por la naturaleza no son tan distintas como las del que determina la mano del hombre.

¿Cuál es el legado de cantidad?—Aquél que consiste en la que fija el testador.

¿A quién corresponde la eleccion en el de género?—Antiguamente variaba entre el heredero y el legatario, segun la fórmula que se usaba al constituirlo; pero equiparadas en sus efectos, correspondia al segundo, salva la voluntad del testador.

¿Cómo debe hacerse?—El heredero no está obligado á dar lo mejor y el legatario á recibir lo peor: debe, pues, buscarse un término medio en la bondad de la cosa legada.

¿Qué se entiende por legado de opcion ó de eleccion?—La facultad que se da al legatario de elegir una cosa entre otras.

¿Qué diferencias le separan del de género?—Además de las que dimanan de las fórmulas antiguas de legar, se distinguian en que en el de opcion la eleccion se deja terminantemente expresada, y en el de género se sobreentiende; en el primero el acto de la eleccion es indispensable,

mientras que en el segundo corresponde á veces al heredero; en el primero puede elegir lo mejor, obligando al heredero á exhibir las cosas en que debe recaer la eleccion, y no así en el segundo, como hemos visto; y por fin, en que anteriormente el primero llevaba consigo la condicion implicita de que habia de cumplirse exclusivamente por el legatario, lo que no sucedia con el segundo, que se consideraba como puro y trasmisible á los herederos.

¿Qué notable novedad introdujo sobre ellos Justiniano?—Reputó puro en sus efectos al legado de opcion, quedando igualado al de género.

¿Cómo se clasifican los legados segun el modo de legar?—En *puros*, *condicionales*, *con día cierto* y *con día incierto*.

Los primeros se dejan simplemente y sin condicion.

Los segundos son aquéllos cuya eficacia depende de la realidad de un acontecimiento futuro é incierto.

Son los terceros los que comienzan á deberse en determinado tiempo.

Y los últimos los que se deben si llega el día, que no se sabe cuándo vendrá, pero si que llegará.

¿Cuál es el legado *modal*?—Aquél en que el testador manifiesta el fin por que lo deja, que recibe el nombre de *modo*.

¿Cuál es el *con causa*?—El que indica un acontecimiento pasado que lo motiva.

¿Cuál es el *con demostracion*?—Aquél en que se señala la cosa legada.

El señalamiento inexacto no perjudica el legado cuando puede venirse en conocimiento de la cosa por otros caracteres.

¿Qué es determinacion del legado?—El señalamiento que se hace del carácter especial y esencial del objeto, sin el que no puede reconocerse.

¿Qué efectos producen estos legados?—En el condicional se debe y puede pedir la cosa cuando se cumple la condicion. En el puro, con causa y modal, se debe y puede pedirse á la muerte del testador, con la pequeña diferencia de que en el con causa no queda sujeto á responsabilidad ulterior el legatario, y si en el modal, porque lo está al cumplimiento del fin para que se le dejó.

¿Qué sucede cuando la condicion impuesta consiste en no hacer?—Cuando era ilimitada debia otorgar el legatario á favor del heredero la caucion llamada *muciana*, que consistia en prometer la devolucion de la cosa y sus frutos si no cumplia la condicion, y prestada, podia gozar de ella, á fin de evitar que el legado se hiciera ilusorio.

¿El error padecido en el nombre, sobrenombre ó antenombre del legatario vicia el legado?—No, con tal que conste indubitadamente quién sea el legatario.

¿El padecido en la cosa legada lo perjudica?—Tampoco, porque la demostracion falsa no vicia el legado.

¿Y la falsa causa?—Con ménos razon, porque si la demostracion de la cosa y la persona del legatario son circunstancias necesarias en el legado, y no obstante su importancia no lo vician, ménos puede hacerlo la falsa causa que se refiere á un hecho anterior, que no es de esencia exista para la validez de la manda.

¿Cuáles eran los legados dejados á título de pena?—Los que se dejaban para el caso de que el heredero hiciera ó no hiciera lo que se le prohibia ó mandaba ejecutar.

¿Fuéron siempre válidos?—En un principio no, porque se suponía que el testador debia legar movido por motivos de afeccion y benevolencia, y nunca por rencor; pero Justiniano declaró su validez igualándolos á los demas, desde cuya época pueden considerarse como condicionales, en cuanto penden de la ejecucion ú omision de un hecho.

¿Quiénes son los legatarios *parciarios*?—Aquéllos á quiénes se deja una parte alicuota y determinada de la herencia, entre los que y el heredero se divide ésta.

Del derecho de acrecer.

¿En qué consiste el derecho de acrecer?—En la agregacion de las partes de una manda dejada á varios colegatarios, cuando falta uno de ellos.

¿Cuándo tiene lugar?—Cuando, segun queda dicho, se lega á dos ó más una misma cosa y falta alguno por cualquier causa, bien se le deje *conjunta*, bien *separadamente*.

¿Cuándo se dice que se lega *conjunta* y *separadamente*?—*Conjuntamente* se lega cuando uno dice: «Doy, lego el esclavo Stico á Ticio y á Seyo»; y *separadamente* en estos términos: «Doy, lego á Ticio el esclavo Stico; doy, lego Stico á Seyo», pues en este caso se entiende legado *separadamente* aunque sea el mismo esclavo.

¿Qué nombre reciben los legatarios en ambos?—Los primeros llámanse *conjuntos* y los segundos *disyuntos*.

¿Cómo clasifica Paulo la *conjuncion* de los legatarios?—Reconoce tres clases de *conjuncion*. *Conjuntos en la cosa (re conjuncti)*; *conjuntos en la fórmula (verbis tantum conjuncti)* y *conjuntos en la cosa y en la fórmula (re et verbis conjuncti)*.

¿Cuáles son unos y otros?—Los *re conjuncti*, son los llamados antes *disyuntos*. Los *verbis tantum conjuncti*, aquéllos á quiénes se deja la misma cosa, pero expresando la parte correspondiente á cada uno. Y *conjuncti re et verbis*, son los llamados *conjuntos*.

¿Cuál es el origen y fundamento de este derecho en las mandas?—La presuncion de la voluntad del testador que supone que su ánimo es dejar la cosa al legatario antes que al heredero, siempre que falte el colegatario.

¿Cuál es su origen y fundamento en las herencias?—La necesidad de que nadie muriese testado é intestado, y la prohibicion legal de repudiar parte de la herencia y aceptar otra, cuando no había más herederos, por lo que tenía lugar *ipso jure* aun contra la voluntad del instituido.

¿Qué reglas debían observarse en las herencias?—Distintas, segun la clase de *conjuncion*. Si son *conjuntos, re ó re et verbis*, crece por partes iguales á los demas la parte que falta. Si son *verbis tantum*, acrece á todos proporcionalmente á la que cada uno tiene designada por el testador. Si son de los tres géneros, debe tenerse en cuenta la clase á que pertenece el legatario que falta. Si es de los *conjuntos re et verbis* acrece sólo á los de su clase. Si es de los *verbis tantum* acrece á todos, considerándose los *re et verbis* como una sola persona.

¿Qué reglas se observan en el derecho de acrecer en los legados?—También distintas, segun la naturaleza de la *conjuncion*. Si la *conjuncion* es *re* acrece á los demas que aceptan forzosamente, pero sin cargas. Si la *conjuncion* es *re et verbis* acrece voluntariamente, pero con las cargas. Si la *conjuncion* fuere de ambas clases, los *re et verbis* excluyen á los demas en la parte de uno de su clase, y se reputan una sola persona para recibir la que pertenezca á un conjunto *re tantum*.

¿Qué particularidad se nota en el *usufructo*?—Que así como cuando el legatario aceptó la manda su parte pasa á los herederos, no habiendo lugar para ello al derecho de acrecer, no sucede lo mismo en el *usufructo*, porque la muerte de un co-usufructuario no trasmite el derecho á los suyos, sino que acrece á los demas partícipes y aun al que ya perdió su parte.

¿Qué principios se seguían en el derecho antiguo, atendidas las diversas formas de legar?—El derecho de acrecer tenía lugar entre todos los *conjuntos*, cualquiera que fuera su clase, en el legado dejado *per vindicationem*, porque todos habían adquirido el dominio *solidariamente*. No tenía lugar ese derecho en el legado *per damnationem* porque sólo trasmitía una accion

personal. Tampoco existía en el *per praeceptionem*. Y en cuanto al *sinendi modo*, no hay conformidad entre los jurisconsultos.

¿Qué variación importante sufrieron estas reglas?—La ley Papia Pópea estableció preferencias á favor de los herederos y legatarios que tuvieran hijos, siendo su objeto fomentar los matrimonios.

Revocación de los legados.

¿En qué se funda la facultad de revocarlos?—En el principio en que descansa la revocabilidad de las últimas voluntades, que sanciona que la de los hombres es variable hasta su muerte.

¿Cómo pueden revocarse los legados?—En el mismo testamento ó en codicilos. Antiguamente, empleando palabras contrarias á las de la fórmula en que se dejaron; y con posterioridad, usando cualesquiera, aunque fueran contrarias. Pueden también revocarse pura ó condicionalmente, expresa ó tácitamente, infiriéndose esta forma de los hechos; la enajenación de la cosa; una enemistad capital nacida entre el testador y el legatario, y la nota denigrante puesta á éste por aquél en un documento posterior, son revocaciones tácitas de los legados.

¿De cuántos modos puede transferirse el legado?—Paulo refiere cuatro: 1.º, de persona á persona, que tiene lugar cuando se deja á uno el legado que antes se dejaba á otro; 2.º, cuando varía la persona del heredero que lo ha de pagar, permaneciendo el mismo legatario; 3.º, de cosa á cosa, en cuyo caso no varían éste ni aquél, pero se cambia la legada, y 4.º, cuando se deja condicionalmente el legado puro, ó vice-versa.

¿En qué casos se extingue el legado además de los que quedan referidos anteriormente?—Por la muerte del legatario acaecida antes de nacer su derecho, por la falta de eficacia del testamento, debida á cualesquiera causa, y cuando se convierte en *eruptitium*, lo cual sucede si el legatario se hace indigno de él.

De la ley Falcidia.

¿Qué disponía esta ley?—Que nadie pudiera invertir en legados más que las tres cuartas partes de su herencia.

¿Cuál fué el origen de esta disposición?—La necesidad de restringir la amplia facultad de testar que consignaban las XII Tablas, según las que debía obedecerse estrictamente todo lo que disponía el testador acerca de sus bienes.

¿Qué inconvenientes ofrecía esta amplitud?—Producía á veces la situación de que quedasen intestados los ciudadanos cuyas herencias no eran aceptadas por los herederos, efecto de no producirles lucro alguno y sí incomodidades.

¿Qué intereses se consultaron al limitar la facultad amplia de testar?—Los de los testadores, los de los herederos y los del fisco. Los de aquéllos para evitar la mancha que recaiga sobre su memoria por el hecho de morir intestados; y los de éstos para que heredasen algo y cobrase el fisco el impuesto que gravaba sobre los testamentos.

¿Qué medios se emplearon antes de la ley Falcidia?—Se publicaron las leyes *Furia* y *Voconia*. La primera prohibía constituir legados mayores de mil ases; y la segunda que los legatarios ó cualesquiera otros, recibieran más de lo que percibían los herederos.

¿Consiguieron remediar los inconvenientes estas leyes?—No, porque la primera se eludía fácilmente con la multiplicación de legados en cantidad igual al límite de la prohibición que establecía; y la segunda también se burlaba por el mismo medio de multiplicación hasta dejar al heredero una cosa insignificante.

¿Cuándo se publicó la ley *Falcidia*?—En el año 714 de la fundacion de Roma, consiguiendo la realidad de la correccion apetecida.

¿Qué nombre recibió la cuarta parte que señalaba al heredero?—*Cuarta falcidia*.

¿Quiénes tienen derecho á detraerla?—Los herederos nombrados cuyo beneficio aprovechan separadamente y con relacion á la parte de herencia en que fueron instituidos.

¿Qué soluciones deben darse en el caso de que alguna de estas partes estén gravadas y recaigan en un heredero no gravado?—Cuando se reúnen por virtud de una sustitucion ó por efecto de una condicion, se reputan un todo, y de él se detrae la cuarta. Cuando su reunion procede del derecho de acrecer, debe distinguirse si la parte acrecida es la gravada ó la libre. Si es ésta, el heredero se considera que lo es por el todo y tambien se detrae la cuarta del conjunto. Si es aquélla, las dos partes tienen su respectiva *falcidia*, y puede detraerse con independendencia.

¿A qué tiempo debe atenderse para la detraccion?—Al de la muerte del testador.

¿Qué deducciones ó pagos deben hacerse préviamente?—Las deudas, en tendiéndose por tales las obligaciones á cuyo cumplimiento está sujeto el testador; los gastos de funeral, comprendiendo en ellos los de conduccion y sepultura del cadáver; el valor de los esclavos manumitidos ó mandados manumitir.

¿Qué se hacía cuando la disposicion del difunto excedia del importe de su herencia?—Dos deducciones: una para igualar las cargas con los bienes hereditarios; otra para la cuarta *falcidia*.

¿En qué casos no tiene lugar la detraccion?—Cuando el heredero paga integramente los legados, ó por error de derecho no puede reclamar su respectiva reduccion ó entrega, porque se presume que quiso cumplir fielmente la voluntad del testador. Tampoco se detrae de los inmuebles dejados con condicion de que no se enajenen.

Herencias fideicomisarias.

¿Qué es *fideicomiso*?—«Todo aquéllo que el testador deja en su última voluntad con palabras indirectas.»

¿Qué clases hay de fideicomisos?—*Universales y singulares*. Eran universales, cuando comprendian una generalidad de bienes; y singulares, si se limitaban á cosas determinadas.

¿Cuál es su naturaleza?—El ser una disposicion apoyada en un ruego cuyo cumplimiento pendia de la lealtad y buena fé de la persona rogada, sin que produjera obligacion exigible.

¿Qué personas intervenian en él?—Tres: el que lo dejaba, llamado *fideicomitente*; aquél á quien se dejaba, *fideicomisario*; y aquél á quien se rogaba lo cumpliera, nombrado *fiduciario*.

¿Cuál fué el origen de los *fideicomisos*?—El dejar parte de la herencia á personas incapaces de recibir por otros modos, y la inflexibilidad del derecho civil en cuanto á las solemnidades del testamento, que no podian cumplir los ciudadanos que estaban en peregrinacion. Por eso se dice que fueron introducidos en fraude de las leyes.

¿Por qué y cómo se generalizaron?—Porque la razon y la conveniencia aconsejaban que fueran cumplidos, llegando á formarse la opinion de que eran dignos de vituperio los que no los cumplian. Primeramente se reconocieron y otorgaron por gracia especial, que luego pasó á ser una jurisprudencia constante, hasta el extremo de nombrarse un pretor que inspeccionase su cumplimiento. Antes de Augusto no eran exigibles en derecho, constituyendo un deber imperfecto en el *fiduciario*.

¿Por qué eran tan frecuentes en tiempo de Augusto?—Porque éste, mo-

vido por consideraciones personales, ó bien por respeto al juramento que los testadores exigían á los fiduciarios, á quienes hacían invocar la salud del príncipe, ó bien para evitar la perfidia de otro, dispuso que los cónsules interpusieran su autoridad para cumplirlos.

¿En qué se diferenciaban de las herencias y legados?—En ciertas reglas y en sus efectos: 1.º, en ellos tenía más amplitud la voluntad del testador; 2.º, podían dejarse en codicilos no confirmados en testamento; 3.º, podían imponerse al que recibiera algo de la herencia, y 4.º, los universales podían dejarse á cierto término. En sus efectos no transmitían la propiedad, ni nacía de ellos la acción *ex-testamento*; el fideicomisario debía pedir la intervención del pretor que acordaba lo conveniente.

¿Qué consecuencias nacieron del necesario cumplimiento de los fideicomisos?—Que el *fiduciario*, por el rigor del derecho, permanecía siendo heredero, y contra él se daban las acciones. De aquí la necesidad de usar de una venta fingida para traspasar al fideicomisario derecho y deberes; mas como éste no podía tener lugar por tal medio, se interponían dos estipulaciones al hacer la llamada *emptæ et venditæ hereditatis*. Por la primera se obligaba al fiduciario á restituir al fideicomisario todo lo concerniente al fideicomiso, autorizándole para cobrar créditos en concepto de procurador. Por la segunda, el fideicomisario se obligaba á indemnizar al fiduciario del importe de todas las deudas que pagase.

¿Qué concepto merecía, pues, el fideicomisario?—Cuando la restitución de la herencia tenía lugar por el senado-consulta Trebeliano, se le reputaba heredero; si la recibía en virtud del Pegasiano, se consideraba legatario.

¿Qué disponía el senado-consulta *Trebeliano*?—Que todas las acciones que competían á ó contra el heredero, se diesen al fideicomisario, ó contra el fideicomisario.

¿Cuál fué su objeto?—Evitar que los fiduciarios no aceptasen la herencia por el peligro de las deudas, y que se convirtiera en daño del testador la confianza que había depositado en él.

¿Cuál era su fundamento?—Un principio de equidad, en cuya virtud aquél que debía percibir las utilidades estaba en la obligación de sufrir las incomodidades.

¿Qué consecuencias produjo?—Que si bien el fiduciario continuó siendo reputado como heredero, según el rigor del derecho civil, el pretor le concedió la acción *util restitute hereditatis*, que contrariaba las directas que contra él se entablaban; y concedió igualmente á los acreedores otras también útiles contra el fideicomisario, fundado en la ficción de que era heredero.

¿Satisfizo cumplidamente su objeto este senado-consulta?—No, porque si bien le eximía de las cargas, no encontraba en la adición de la herencia lucro alguno cuando nada le quedaba, motivando este inconveniente la publicación de otro llamado Pegasiano.

¿Qué disponía éste?—Que del mismo modo que el heredero podía detraer la cuarta *falcidia*, pudiese el fiduciario detraer la cuarta del fideicomiso, llamada *Trebelianica*, considerándose el fideicomisario como un legatario parciario.

¿Ha derogado el segundo las disposiciones del primero?—No; uno y otro eran aplicables á diferentes casos. Si el fideicomiso excedía de las tres cuartas partes de la herencia, se aplicaba el Pegasiano; si no excedía, se aplicaba el Trebeliano.

¿Qué recurso quedaba al fiduciario que no detraía la cuarta parte?—Las estipulaciones *emptæ et venditæ hereditatis*.

¿Qué derecho tenía el fideicomisario cuando el fiduciario rehusaba adir la herencia?—El senado-consulta Pegasiano le permitía pedir que se le obligase á adirla y se acordase la restitución de la herencia.

¿Qué reformas introdujo Justiniano?—Considerando que las estipulaciones que mediaban entre fideicomisarios y fiduciarios no bastaban para salvar los intereses de todos, refundió los dos senados-consultos en uno, ordenando que el fiduciario tenía derecho á retener ó completar la cuarta parte de la herencia, siendo responsable de las cargas de la misma proporcionalmente; si restituía íntegramente el fideicomiso, el fideicomisario sería el único responsable, á quien conservó el derecho de exigir la adición del fiduciario.

¿Qué sucedía cuando el testador dejaba una cosa determinada al fiduciario?—Que éste la retenía sin quedar obligado á responsabilidades, aunque excediese del valor de la cuarta parte de la herencia, teniéndosele entonces como legatario.

¿Requerían los fideicomisos la existencia del testamento?—No, pues podían rogarse aún en caso de morir intestado.

¿Cuándo se declararon obligatorios los fideicomisos?—En tiempo de Augusto.

¿Qué medios de prueba exigían?—Cualquiera número de testigos, bastaba; y no habiéndolos, el fideicomisario podía deferir juramento al fiduciario sobre su verdad, formulando él previamente el de calumnia; y no queriendo prestarlo aquél, se suponía tácitamente confeso.

Fideicomisos singulares.

¿Cuáles son?—Aquéllos que comprenden una cosa determinada ó un objeto particular de la herencia.

¿Qué cosas podían dejarse por este medio?—No sólo las propias, sino las ajenas, las del mismo fideicomisario y la libertad de los esclavos propios ó ajenos.

¿Puede gravarse el fideicomisario en más de lo que importe el fideicomiso?—No, cuando éste y el gravámen consisten en cosas de igual naturaleza; pues si son diferentes, se presume que, aceptando el fideicomisario, considera de más valor el fideicomiso que la cosa cuya entrega se le ruega.

¿Qué efectos producía el fideicomiso de libertad?—Aquél á quien se rogaba debía comprar el esclavo y manumitirlo; y si su dueño no accedía á la venta, se defería para la primera ocasión.

¿Qué fórmulas se empleaban en su constitución?—Las palabras *pido, ruego, quiero, encargo, encomiendo á su fe*; y aún podía constituirse por señas (*etiam nutu*).

Codicilos.

¿Qué es codicilo?—«La expresión ménos solemne de la voluntad del testador, en que dispone de parte de sus bienes para despues de su muerte.»

¿Cuál es su origen?—Aunque anteriores á Augusto, sin ser obligatorios, fueron declarados válidos y con fuerza legal por este emperador.

¿De dónde dimana su nombre?—De que con el vocablo *codicilli* se designaban las disposiciones ménos solemnes que no tenían institución de heredero, y con la palabra *codex* los testamentos; aludiendo ambas á las tablas enceradas en que se escribían.

¿Cómo comenzaron á usarse?—Lucio Lentulo, cónsul, estando para morir en Africa, rogó al emperador cumplierse ciertas cosas que, habiende sido cumplidas, se declaró que no era contrario á los principios de derecho esta forma de ejecutar las últimas voluntades.

¿Cuál era su naturaleza?—La de ser revocables como los testamentos de quienes dependían.

¿Qué causas motivaron los codicilos?—La frecuencia de las peregrinaciones y la casi imposibilidad de otorgar durante ellas el testamento civil romano. Además, no siendo permitido morir mas que con un testamento, cuando el hecho quisiera modificarse, habia necesidad de formular otro; lo que era gravoso y molesto. De aquí el remediar estas dificultades con la introduccion de los codicilos.

¿Quiénes podian hacerlos?—No sólo los que testaban, sino los que morian intestados, si bien éstos se sostenian sólo como fideicomisos.

¿Cuál es la materia de los codicilos?—Frecuentemente los fideicomisos.

¿Puede disponerse en ellos de la herencia?—Directamente no, ni desheredar, ni sustituir, ni imponer condiciones al heredero; pero sí puede disponerse indirectamente de aquélla.

¿Cuántos podian hacerse?—Tantos como cosas tuviese la herencia, porque, como no servian mas que para dejarlas separadamente, los testamentos eran la única forma de trasmitir el conjunto hereditario, señalando la persona que habia de continuar la representacion del finado.

¿Los codicilos anteriores al testamento son válidos?—Primeramente no lo fueron si no aparecian confirmados en él; despues lo fueron como los demas, aunque no lo estuvieran.

¿Qué solemnidades requerian?—El texto de Justiniano dice que ninguna era necesaria; pero la opinion generalmente seguida, exige la intervencion de cinco testigos, que debian presenciar el acto y suscribir el documento siempre que se formulase.

¿Cómo se concilia esta contradiccion?—Suponiendo que no intervienen por razon de solemnidad, sino de prueba. Pueden justificarse como los fideicomisos, si no hubo suficiente número de testigos.

¿Cuál es la cláusula codicilar?—La en que el testador manifiesta que, si el testamento no valiese como tal, surta todos los efectos de un codicilo, cláusula que necesita expresa constitucion, pues sólo se sobrentiende en los testamentos militares.

Apertura y conservacion de las últimas voluntades.

¿Qué solemnidades refiere Paulo sobre esta materia?—Dice que se hacia la apertura á presencia de los testigos ó, cuando ménos, de la mayor parte. Debian reconocer los signos, romperse el hilo que lo sujetaba y leer su contenido; hecho esto, se imprimía en él un sello público y se depositaba en un archivo para que pudieran sacarse las copias que fueren necesarias.

¿Qué otras eran especiales á los otorgados fuera de Roma?—Debían ser leídos en la plaza pública ó en el templo, despues de abiertos, estando presentes los testigos ó, en su defecto, algunas personas honradas, entre la hora segunda y la décima del día. Se sacaba una copia y se sellaba por los magistrados que autorizaban la apertura.

¿Dentro de qué término debía verificarse ésta?—Variaba, segun que los testigos estaban presentes ó ausentes. Estando presentes, debía tener lugar inmediatamente despues de la muerte del testador ó, lo más tarde, dentro de los cinco dias siguientes. Estando ausentes, dentro de los cinco dias posteriores al de su vuelta.

Herencias ab-intestato.

¿Qué se entiende por sucesion *ab-intestato*?—La continuacion de la persona jurídica del testador, designada por la ley, en defecto de la expresa voluntad de aquél.

¿Quiénes mueren intestados?—Los que no han hecho testamento absolutamente, ó no lo hicieron con arreglo á derecho, ó se ha *roto*, ó vino á

ser *inútil*, ó no ha producido efecto por falta de adición, no obstante ser legal y válido.

¿Quiénes eran llamados en primer lugar á la herencia por la ley de las XII Tablas?—Los herederos *suyos*; los hijos emancipados, llamados por los pretores, y los descendientes por línea de hembra, admitidos por las constituciones imperiales.

¿Quiénes eran los herederos *suyos*?—Ya quedan suficientemente expresados y definidos en los títulos anteriores.

¿Adquieren éstos del mismo modo la herencia testamentaria?—Del mismo modo que la legítima, sin saberlo, y aún estando privados de razón.

El hijo cautivo al tiempo de la muerte de su padre ¿es heredero *suyo*?—Sí, siempre que vuelva, por efecto del derecho de *post liminio*, que suponía que no había salido de la ciudad.

¿Cómo sucedían los herederos *suyos*?—Podía tener lugar la sucesión por individuos, *in capita*, ó por estirpes, *in stirpes*. Tiene lugar la primera cuando la herencia se divide en tantas partes cuantos son los individuos; y la segunda cuando las partes son tantas como ramas salen del tronco común, sean muchos ó pocos los individuos que á cada una pertenezcan. Llámase á este segundo modo de suceder, heredar por derecho de *representación*.

¿Cuándo tenía lugar una y otra?—La sucesión *in capita*, cuando existían solamente herederos *suyos* de primer grado; y la *in stirpes*, cuando, muerto alguno de los herederos *suyos* antes que el ascendiente, concurrían á heredar los descendientes de aquél en representación de los derechos de su padre, y cuando, faltando todos los hijos, sólo heredaban los nietos.

¿A qué tiempo debe atenderse para la calificación de herederos *suyos*?—Al de la muerte cierta del testador.

¿Quiénes eran llamados en segundo lugar por las XII Tablas?—Los *agnados*, entre los que los más próximos excluían á los más remotos.

¿Quiénes eran los *agnados*?—Los individuos de una familia unidos por personas de sexo masculino, es decir los cognados por el padre. Al tratar de la tutela legítima de ellos se expresó lo necesario para conocerlos.

¿Quiénes eran los gentiles?—Una agregación política de familias pertenecientes á una misma casta, que componían una división territorial con un nombre y sacrificios comunes.

¿A qué tiempo hay que atenderse para graduar la proximidad del parentesco?—Cuando hay testamento, al en que se sabe que la herencia no es adida; cuando no le hay, al de la muerte del testador.

¿El llamamiento de los *agnados* varones tenía limitación?—No; su llamamiento, por derecho de agnación, se extendía al grado más remoto.

¿La tenía el de las hembras?—Sí; por la ley de las XII Tablas sólo podían percibir la herencia por derecho de consanguinidad siendo hermanas, pero no cuando estaban en grado más remoto.

¿Qué variación introdujo la jurisprudencia de los jurisconsultos?—El llamamiento de las mujeres en calidad de consanguíneas, de cuya modificación resultó el siguiente orden de suceder: 1.º, los herederos *suyos*; 2.º, los consanguíneos hermanos ó hermanas, que tenían preferencia entre todos los *agnados*; 3.º, los *agnados* varones, con arreglo á la mayor proximidad de grado, y 4.º, los cognados.

¿Qué preferencia existía en cuanto á los grados?—Los herederos *suyos* concurrían á suceder sin distinción de grados; los *agnados* de grado más próximo excluían á los más remotos, siendo preferidos á los cognados; los cognados sucedían con igual preferencia de proximidad.

¿Cómo pueden resumirse las variaciones sucesivas que experimentaron los parientes admitidos como *agnados*?—El Sr. La Serna presenta el cuadro de M. Etienne en la forma siguiente:

1.º Con arreglo á la ley de las XII Tablas son *agnados* entre sí los que,

proviniento de un mismo ascendiente, se encuentran bajo su poder, ó se encontrarían si no hubieran muerto.

2.º La jurisprudencia intermedia excluye del orden de agnados á las mujeres que no son hermanas del difunto, aunque se encuentren bajo el poder del ascendiente comun, ó que debieran estarlo si éste no hubiera muerto.

3.º El derecho pretorio admite á la *bonorum* posesion *unde legitimi* solamente á los que el derecho civil admite como agnados.

4.º La constitucion del emperador Anastasio llamó los hermanos y hermanas emancipados en concurrencia con sus hermanos y hermanas agnados, si bien con cierta deducción; pero no llamó á los descendientes de los hermanos ó hermanas emancipados, ni decidió cosa alguna respecto á los hermanos ó hermanas adoptivos, ni á los parientes por línea de hembra.

5.º Justiniano llamó á las hembras del mismo modo que á los varones á la sucesion de los agnados, cualquiera que fuera su grado, y confirmó la constitucion del emperador Anastasio respecto á los hermanos y hermanas emancipados. No habian trascurrido todavía cuatro años despues de la publicacion de las instituciones, cuando, revocando en parte la referida constitucion del emperador Anastasio, dejó subsistente el llamamiento de los hermanos y hermanas emancipados, pero los libertó de la disminucion que antes debían sufrir, y extendió el mismo favor á sus hijos. Los hijos adoptivos eran considerados como individuos de la familia. En 528 Justiniano llamó como agnados á los hermanos y hermanas uterinos en concurrencia con los hermanos y hermanas consanguíneos, y en 532 á los hijos de los hermanos y hermanas uterinos cuando concurrían con los sobrinos y sobrinas del difunto.

¿Qué derecho otorgó Justiniano á los agnados?—El de *devolucion*, que consistía «en el llamamiento de los parientes de un grado ulterior, cuando los que están en grado más próximo al tiempo de abrirse la sucesion no son herederos.»

¿Qué diferencia hay entre él y el de representacion?—La principal consistía en que la herencia descendía gradualmente en aquél, mientras que en éste los herederos saltan por uno ó más grados, aproximándose á la herencia.

Senados-consultos Tertuliano y Orficiano.

¿Qué disponia este senado-consulta?—Modificando el derecho antiguo, que no concedía á la madre el derecho de suceder al hijo muerto *ab-intestato*, la llamó á su herencia; pero excluyendo á la abuela, siempre que si fuera *ingenua* hubiera tres hijos nacidos, y si *libertina* tuviera cuatro.

¿En qué época se publicó?—En el año 914 de la fundacion de Roma.

¿Qué dispuso Justiniano sobre el particular?—Derogó la exigencia del número de hijos, y concedió la sucesion á la madre aunque no hubiera tenido más que aquél á quien heredaba, sin disminucion alguna cuando no tenía el difunto hermanos ó hermanas. Si se daba este caso y quedaban hermanas agnadas ó cognadas, la madre llevaba la mitad de la herencia y las hermanas se repartían la otra mitad; y si quedaba algun hermano, bien sólo ó bien con hermanas, la herencia se repartía *in capita*.

¿Cuál era el fundamento del senado-consulta Tertuliano?—El respeto y consideracion debidos á los vínculos de la naturaleza, por lo cual era extensivo á las madres naturales.

¿Qué disponia el senado-consulta Orficiano?—El principio de reciprocidad en favor de los hijos en las herencias de las madres, llamando á éstos á su sucesion, de que estaban excluidos por el derecho antiguo.

¿En qué año se publicó?—En el 934 de la fundacion de Roma.

¿Llamaban del mismo modo á los nietos?—No; por lo que las constituciones imperiales corrigieron esta falta extendiendo á ellos el derecho de sucesion.

Sucesion de los cognados.

¿Cuál es el tercer orden de suceder?—El de los cognados, en el cual sólo se atiende al parentesco natural.

¿Con quiénes entraban á suceder los hermanos emancipados?—Una ley del emperador Anastasio los llamaba á la sucesion con los demás hermanos legítimos.

¿Entre quiénes heredaban los hijos de padre incierto?—El pretor les daba la *bonorum possessio*, figurando entre los cognados con arreglo á su proximidad.

¿Hasta qué grados de parentesco la concedía el pretor?—Hasta el sexto de cognacion, y en el séptimo al hijo ó hija de hijos, ó hijas de primos ó primas carnales.

Grados de cognacion.

¿Cómo se cuenta el parentesco?—Subiendo, bajando ó trasversalmente; llamándose cognacion ascendente, descendente ó lateral. Las dos primeras comienzan en el primer grado, y la tercera en el segundo.

¿Se reputaba parentesco la cognacion de los esclavos?—Antiguamente no; pero una constitucion de Justiniano ha determinado que los hijos que tuvieran uno de sus padres esclavo, llegando á ser éste libre, les sucedieran, ampliando este derecho á la sucesion de unos á otros aunque concurran hijos nacidos despues de la libertad.

Sucesion de los libertos.

¿Qué derechos tenían los patronos sobre la herencia de los libertos?—Por las XII Tablas era libre la facultad que tenían de testar éstos, sin consideracion alguna á aquéllos; pero modificando esta amplitud el derecho pretorio, prescribió al liberto la obligacion de dejar al patrono la mitad de sus bienes, dando á éste la *bonorum possessio* contra tábulas, si le dejaba menos de la mitad, para completarla.

¿Qué derecho tenían en el caso de la sucesion intestada?—Si dejaban un hijo adoptivo como heredero suyo tenían tambien la *bonorum possessio* por la mitad, cuyo derecho no existía habiendo hijos naturales, estuvieran ó no emancipados, con tal que fueran instituidos en una parte de la herencia, ó que hubieran pedido la *bonorum possessio* contra tábulas, si hubieran sido pasados en silencio.

¿Por qué estas disposiciones no eran aplicadas á las libertas?—Porque en nada perjudicaban al patrono, puesto que, estando en perpétua tutela, no testaban sin consentimiento de los patronos.

¿Qué derechos sancionó la ley Papia Popena?—Concedió al patrono una porcion viril si el liberto dejaba un patrimonio de 100.000 sesteracios y menos de trez hijos, ya muriese testado, ya intestado.

¿Qué modificaciones hizo Justiniano?—Acordó que, consistiendo la herencia en cantidad menor de 100 áureos, no tenga el patrono ningun derecho en la sucesion testada, conservando los antiguos en la intestada, si no hubiera descendientes.

Si la herencia excedía de 100 áureos y habia descendientes, eran excluidos los patronos absolutamente. Si morían intestados y sin hijos, los patronos eran los herederos. Si hacían testamento omitiendo á éstos, á pe-

sar de no tener hijos dichos patronos, pueden obtener la *bonorum possessio* de la tercera parte, ó su complemento, sin carga alguna.

¿Hasta qué grado extendió Justiniano el derecho de los patronos?—Hasta los parientes laterales del quinto grado, excluyendo el más próximo al más remoto, debiendo dividirse la herencia por estirpes.

¿Cuál era en resúmen el llamamiento á las herencias de los libertos?—1.º, los herederos suyos y los asimilados á ellos; 2.º, el patrono ó patrona y sus descendientes; 3.º, los parientes colaterales de éstos hasta el quinto grado.

¿Qué excepcion habia en la aplicacion de esta doctrina?—Cesaba cuando el ascendiente que manumitia, asignaba el liberto á un heredero, en cuyo caso sólo éste se consideraba como único patrono, por regla general.

Bonorum posesiones.

¿Qué era la bonorum posesion?—La herencia dada en virtud del edicto del pretor.

¿A quién debe su origen?—Al derecho pretorio.

¿Cuál fué su fundamento?—La necesidad de que no quedasen vacantes las herencias, y la adjudicacion interina, por consiguiente, á favor del que parecia tener mejores títulos para ser heredero.

¿Quiénes eran los *bonorum poseedores*?—Aquéllos á quienes el pretor daba la herencia.

¿Qué clases existian de *bonorum possessio*?—Cuando habia testamento eran dos, llamadas *contra tabulas* y *secundum tabulas*. Cuando la sucesion era intestada eran ocho, denominadas: 1.ª, *unde liberi*; 2.ª, *unde legitime*; 3.ª, *unde decem personae*; 4.ª, *unde cognati*; 5.ª, *tamquam ex familia*; 6.ª, *unde liberi patroni et parentes*; 7.ª, *unde vir et uxor*; 8.ª, *unde cognati manumissoris*.

¿A quién se concedia la *bonorum possessio contra tabulas*?—1.º, á los descendientes herederos suyos que no habian sido desheredados con arreglo á derecho; 2.º, á los hijos emancipados que estaban en igual caso; 3.º, al patrono preferido en la mitad de la herencia, y 4.º, al padre contra el testamento del hijo emancipado.

¿A quién se daba la *secundum tabulas*?—1.º, á los herederos instituidos que veian más ventajas en ella que las concedidas por el derecho civil; 2.º, á los que, no pudiendo serlo con arreglo á éste, lo eran conforme al pretorio por reunir las exigidas por él.

¿Cuál tenia preferencia?—La primera era preferida á la segunda, por lo que los favorecidos con ésta tenian que esperar que terminase el tiempo en que podia pedirse aquélla.

¿A quién se daba la *unde liberi*?—A los herederos suyos y á los asimilados á ellos, sin que fuera extensiva á las hembras.

¿A quién se daba la *unde legitimi*?—A los agnados, patronos, á la descendencia de éstos, á la madre en la sucesion de los hijos, y á los hijos en la de su madre.

¿A quién se daba la *unde decem personae*?—Al padre, madre, abuelo, abuela paternos y maternos, hijo, hija, nieto, nieta uterinos ó consanguíneos, con preferencia al manumitente extraño.

¿A quién se daba la *unde cognati*?—A los cognados, segun queda expuesto al tratar de ellos.

¿A quién se daba la *tamquam ex familia*?—A los agnados del patrono en la sucesion del liberto, cuando faltaban el patrono y sus descendientes.

¿A quién se daba la *unde liberi patroni et patronae et parentes eorum*?—La opinion más aceptable es la que supone se concedia á los ascendientes y descendientes del liberto, sólo en consideracion á los vínculos de la sangre.

¿A quién se daba la *unde vir et uxor*?—Al cónyuge superviviente que no estaba divorciado.

¿A quién se daba la *unde cognati manumissoris*?—A los cognados del patrono, en defecto de los preferidos á la herencia del liberto.

¿Cuáles dejó subsistentes Justiniano?—La *contra tabulas*, la *secundum tabulas*, *unde liberi* y *unde legitimi*.

¿Qué término fijó para pedir las?—Un año á los ascendientes y descendientes, y cien dias á los demás.

¿Qué efecto producía su trascurso?—Acrecía la parte del que no la solicitaba, á las de los del mismo grado; y no habiéndolas, pasaba al inmediato.

¿De qué formas podía darse la bonorum posesion?—*Sine re* ó *cum re*: *cum re* cuando aquél á quien se daba podía retener los bienes; y *sine re*, cuando otro podía conseguir la herencia, fundado en el derecho civil.

¿Cuál es la *bonorum possessio* que se daba á la mujer embarazada?—La que se le concedía en nombre del póstumo que llevaba en su seno, diferente de las demás, porque sólo duraba hasta el momento del parto.

¿Cuál era la concedida en virtud del edicto *Carboniano*?—La otorgada á los huérfanos á quienes se desconocía su filiacion, habiendo motivos racionales para creer que eran descendientes.

Variaciones introducidas por las novelas en las sucesiones intestadas.

¿Qué órdenes fijó Justiniano en estas sucesiones?—Cuatro: 1.º, el de descendientes; 2.º, el de ascendientes; 3.º, el de hermanos y sus descendientes, y 4.º, el de los demás colaterales.

¿Qué principios consultó para establecer estos llamamientos?—Las afectaciones nacidas de los vínculos de la sangre, despreciando las preocupaciones antiguas en que se basaba la familia civil.

¿Quiénes son comprendidos en el primer llamamiento?—Todos los descendientes sin distincion.

¿Cómo se divide la herencia entre ellos?—Los hijos suceden *in capita*; los demás, *in stirpes*.

¿Qué excepciones contiene esta regla?—Una en favor del cónyuge superviviente, que concurre á heredar con aquéllos en tres casos: 1.º, quedando la madre pobre y sin dote, lleva una cuarta parte si no son más de tres los descendientes, y una porcion viril siendo más; 2.º, siendo el difunto hijo de familia, el padre reserva el usufructo de los bienes adventicios; 3.º, el marido goza igual derecho en la sucesion de la madre de sus hijos, si están en su poder, y si no los tiene, una porcion viril.

¿Qué derechos tienen los hijos naturales?—Sucedan á la madre, aun concurrendo con los legítimos, y al padre en una sexta parte de la herencia, si no los hay legítimos; pues en este caso sólo tienen derecho á alimentos.

¿Qué derechos tienen los *espurios*?—Si no hay hijos legítimos suceden á la madre; mas, habiéndolos, sólo sucederán con ellos siendo la madre mujer ilustre. Al padre no le suceden nunca.

¿Qué derechos tienen los incestivos?—Ninguno absolutamente, ni aun el de alimentos.

¿Qué derechos tienen los *adoptivos*?—Durante la patria potestad se equiparan á los legítimos en cuanto á la sucesion del padre y de sus parientes; pero no á la de la madre.

Sucesion de ascendientes, de hermanos y hermanas y demás colaterales.

¿Cuándo son llamados los ascendientes á suceder?—En defecto de descendientes.

¿Concurren siempre sólos?—No: heredan conjuntamente con los hermanos y hermanas de doble vínculo, ó, cuando no existen, con los hijos de éstos, y no con los nietos.

¿Qué reglas se siguen en ambos casos?—Cuando concurren sólos, los más próximos excluyen á los más remotos. Si en el mismo grado hay más de una persona, se divide la herencia *in capita*. Si pertenecen á las dos líneas, se divide por mitad entre ambas, aplicándose lo expuesto á cada una de ellas.

Quando concurren con los hermanos de doble vínculo, la sucesion se divide *in capita*; y si faltan, heredarán su porcion los hijos, *in stirpes*.

¿Qué sucede cuando no hay ascendientes?—Hedarán los hermanos *in capita*; y si concurren sólo sobrinos, éstos tambien heredarán, pero *in stirpes*.

¿Los sobrinos tienen derecho á heredar en concurrencia con sus tios?—No: pertenece la herencia á éstos íntegramente.

¿Qué regla se observa en la sucesion de descendientes ilegítimos?—Que suceden en los mismos casos en que los ascendientes les suceden.

¿Cuándo son llamados á suceder los hermanos consanguíneos y uterinos?—En defecto de los de doble vínculo.

¿Cuándo heredan con ellos sus sobrinos?—Siempre que el padre haya muerto antes que el heredado.

¿Cómo heredan unos y otros?—Los primeros, *in capita*; los segundos, *in stirpes*.

¿Cuándo suceden éstos?—Después de los hermanos por ambas líneas, ó por una sólo, sin distincion de sexo, agnacion ó cognacion, y sin que el doble vínculo ni el derecho de representacion pasen más allá de los hijos de los hermanos.

¿Qué derechos tienen los parientes ilegítimos?—Quando son uterinos tienen el mútuo derecho de sucesion, y si son consanguíneos, ni éste ni el de heredar á sus parientes.

COSAS COMUNES A AMBAS SUCESIONES.

Colacion de bienes.

¿A qué se llama colacion de bienes?—«Al acto por el que los descendientes que concurren á la herencia de los ascendientes traen al acervo comun los bienes profecticios, para comunicarlos con los otros herederos.»

¿Cuál fué su origen?—El derecho pretorio, que mandó que los hijos emancipados trajesen sus bienes á la herencia comun, para que se verificase la distribucion hereditaria entre todos los herederos.

¿Cuál fué su razon y objeto?—Hacer desaparecer la desigualdad que existia entre los hijos emancipados y los que estaban bajo la patria potestad, porque éstos adquirian todo para su jefe, y aquéllos exclusivamente para sí.

¿Qué clases de bienes eran colacionables?—Antiguamente todos, excepto

los castrenses y cuasi castrenses, limitándolos despues Justiniano á los profecticios.

¿Cuándo tiene lugar la colacion?—Cuando se ha recibido algo del ascendiente de cuya sucesion se trata ó por contemplacion á él.

¿Qué cosas están exceptuadas de la colacion?—1.º, los gastos hechos por razon de estudios, si no se prueba la contraria voluntad del padre, pero no los alimentos; 2.º, los causados por la dignidad del hijo; 3.º, los que tuvieran por objeto la redencion de la cautividad de los hijos; 4.º, las donaciones remuneratorias y *mortis causa*, los legados y los fideicomisos.

¿La dote profecticia y la donacion *propter nupcias* son colacionables?—Si, del mismo modo que todo lo que reciban los hijos por razon de casamiento.

¿En qué casos no tenía lugar la colacion?—1.º, cuando el testador dividía desigualmente su herencia; 2.º, cuando prohibía la colacion; 3.º, cuando el que debe colacionar renuncia la herencia, quedándose con los bienes colacionables, siempre que quede salva la legitima de los demas.

¿De cuántas maneras se hace?—De tres: llevando á la herencia los bienes colacionables; teniendo por recibido lo que debe corresponderle; y dando fiador ó prendas á los coherederos.

Trasmision de la herencia.

¿Qué se entiende por trasmision de la herencia?—El derecho que el que no ha adido ni repudiado una herencia, traspasa á sus sucesores para que la admitan ó la repudien.

¿Qué es, pues, lo que se trasmite?—El derecho de adirla.

¿Qué estableció Justiniano sobre esto?—Que el llamado á heredar en ambas sucesiones, si moría en el término concedido para deliberar, ó ántes de fijarse, con tal que fuera dentro de un año, sabiendo que era heredero, transmitiera á los suyos el derecho que tenía, sólo por el tiempo que faltaba por correr.

Reservas.

¿Qué se entiende por *reserva*?—La obligacion impuesta al cónyuge superviviente que pasa á segundas nupcias, de retener para los hijos del primer matrimonio los bienes procedentes del cónyuge premortuo, ó de alguno de los hijos de aquel matrimonio.

¿Qué reglas se siguen cuando los bienes proceden del cónyuge?—La division se hace por partes iguales, sin que pueda hacerse de mejor condicion á alguno de los descendientes.

¿Cuáles eran aplicables cuando los bienes procedian de los hijos?—La division se hacia del mismo modo que en el caso anterior, si la sucesion era intestada y los bienes procedian del padre; pues áun cuando antiguamente era extensiva esta regla á la sucesion testada, Justiniano la limitó á la intestada, fundándose en que en aquélla el ascendiente heredaba como cualquier extraño.

¿En qué casos cesa la obligacion de reservar?—Cuando no hay hijos del primer matrimonio; cuando han fallecido ántes de la celebracion del segundo y, segun algunos, cuando los hijos convienen en las segundas nupcias.

De la adquisicion por arrogacion.

¿Qué efectos producía la arrogacion?—Todas las cosas corporales é incorporeales, á excepcion de lo que se extinguía por la *capitis-diminucion*,

pasaban al arrogador, perdiendo el arrogado su familia natural con los derechos que en ella tenía.

¿El arrogador adquiría también los créditos y quedaba obligado á las deudas del arrogado?—Adquiría los primeros, porque no era compatible con la autoridad del jefe de la familia que el hijo los tuviese en su cabeza; pero no quedaba responsable de las segundas, porque el hijo no podía obligar á su padre.

De la adjudicacion de bienes en favor de la libertad.

¿Cuándo tenía lugar esta adquisicion?—Cuando, no resultando adida la herencia por falta de sucesores, aquéllos á quienes se dejaba la libertad en el testamento pedían que se les adjudicara con el fin de adquirir y conservar la libertad dejada, cuyo modo de suceder no tiene lugar en virtud del derecho hereditario.

¿Podía tener lugar en la sucesion intestada y cuando se dejaban las libertades en codicilos?—Sí; en los mismos términos.

¿Qué circunstancias debían cumplirse para que tuviera efecto?—La certeza de que no existía heredero y la concesion de la libertad.

¿Qué disposiciones sancionó Justiniano referentes á la materia?—Fijó en un año el término para pedir la adjudicacion; dispuso que se hiciese en favor de todos los que la solicitaran, dando fianzas, prefiriendo al que afianzare dar más; y si éste ofrecía mayor fianza dentro de un año, no obstante haberse hecho ya la adjudicacion, obtenía los bienes, dejando absolutamente libre al primer adjudicatario.

DE LAS OBLIGACIONES.

¿Qué es obligacion?—Justiniano la define: «Un vínculo del derecho, en virtud del cual somos compelidos á pagar alguna cosa, segun nuestro derecho civil».

¿Cuál es su naturaleza jurídica?—El constituir un derecho á la cosa y un deber exigible por las leyes.

¿Qué personas son necesarias para que pueda nacer la obligacion?—Dos: una en cuyo favor se constituye, llamada *acreedor*; y otra contra quien se constituye, llamada *deudor*.

¿Qué efectos produce para ambos?—Sujeta al segundo á dar ó á hacer alguna cosa, y crea derecho en el primero para exigir que aquél haga ó dé la cosa prometida.

¿Cómo se dividen las obligaciones por razon de su origen?—En *naturales* y *civiles*. Son naturales las que se fundan en la equidad, no traen su creacion de la ley, y carecen, por tanto, de una *accion* con que poder conseguir su cumplimiento. Son civiles las que, dimanando del derecho civil, «están garantidas por una accion otorgada al que pide su cumplimiento contra el que lo rehusa».

¿Qué efecto civil producen las naturales?—Nos dan derecho para oponerlas como excepcion á la accion que contra nosotros se entable.

¿Qué otra division se hace de las obligaciones, atendido su origen?—Llámanse también *civiles* y *pretorias*, segun que estén establecidas en las leyes, ó reconocidas de un modo cierto por el derecho civil, ó que el pretor las haya constituido en virtud de su jurisdiccion.

¿Qué otra division hace Justiniano?—Las clasifica en cuatro especies: obligaciones nacidas de un contrato; obligaciones nacidas de un cuasi-contrato; obligaciones nacidas de un delito, y obligaciones nacidas de un cuasi-delito.

¿Qué es *convención* ó *pacto*?—«El consentimiento de dos ó más personas en una misma cosa», ó «el convenio de diferentes personas sobre la declaración de la voluntad común, para arreglar relaciones jurídicas».

¿Qué es *contrato*?—«La convención que está apoyada por la ley»; y según Ulpiano, «la convención que tiene ó *nombre* ó *causa*»; entendiéndose por *nombre* que la acción producida por el contrato tenga la denominación que el mismo contrato, y por *causa* un hecho del cual nazca obligación, con arreglo al derecho.

¿Qué clases hay de *pactos*?—Dos: *nudos* y *no nudos*. Llámase *nudos* á los que no producen obligación civil ni acción; y *no nudos*, á los que originan una acción para exigir su cumplimiento.

¿Cómo se subdividen los *no nudos*?—En *legítimos*, *pretorios* y *agregados*. Aquéllos á quienes una disposición legislativa moderna concedió acción, son *legítimos*; aquéllos que están sostenidos únicamente por la acción que les otorga el pretor, son *pretorios*, y los que se unen á un contrato de buena fé en el acto de su otorgamiento, y no después, llámense *agregados*.

¿Qué requisitos deben ó pueden intervenir en los contratos?—*Esenciales*, *naturales* y *accidentales*. Llámase *esenciales* á los que sin su concurrencia no puede existir el contrato; son *naturales* los que se sobrentienden sin necesidad de mención expresa, y son *accidentales* los que, no siendo necesarios, ni sobrentendiéndose, pueden estipularse.

¿Qué divisiones suelen hacerse de los contratos?—Dividense en *reales*, *verbales*, *literales* y *consensuales*; en *unilaterales* y *bilaterales*; contratos de buena fé y de derecho estricto, y en *nominados* é *innominados*.

¿Cuáles son los *unilaterales* y los *bilaterales*?—Son *unilaterales* los que obligan sólo á una de las partes; y *bilaterales*, los que obligan á ambas. Cuando la obligación mútua no nace de su otorgamiento, pero tiene lugar después, se llaman *bilaterales imperfectos* ó *intermedios*.

¿Cuáles son los de buena fé y los de derecho estricto?—Son de buena fé todos los bilaterales; y de derecho estricto, los unilaterales. En los primeros la interpretación es más amplia y equitativa que en los segundos.

¿Cuáles son los *nominados* y los *innominados*?—Son los primeros los que producen acción del mismo nombre; y los segundos, los que no la originan de igual denominación, reconociendo por base una causa civil de obligar.

Obligaciones reales.

¿Qué es *contrato real*?—Aquél que ni tiene origen, ni produce obligación, sin la entrega de una cosa, ó la prestación de un hecho.

¿Cuáles son los *reales nominados*?—El *mútuo*, el *comodato*, el *depósito* y la *prenda*.

¿Cómo se define el *mútuo*?—«El contrato por el que uno trasfiere á otro cierta ó ciertas cosas que se estiman en el comercio por su peso, número ó medida, con la obligación de que le devuelva otro tanto del mismo género y cantidad».

¿Qué cosas pueden ser objeto de este contrato?—Las llamadas *fungibles*.

¿Cuáles son las cosas *fungibles*?—Las que pueden ser representadas por otras de igual género y naturaleza.

¿Quiénes pueden dar en *mútuo*?—Solamente los dueños de cosas fungibles, porque por él se traspasa al mutuuario la propiedad.

¿Cómo se llama el que da, y cómo el que recibe?—*Mutuante* y *mutuario*.

¿Debe éste el género ó la especie?—Debe el género, y no la misma especie que recibe.

¿Cuál es la causa civil de este contrato?—La tradición verdadera de la cosa.

¿Puede devolverse lo mismo que se dió?—Sí, con tal que no se haya deteriorado.

¿Quién debe sufrir ó gozar del alza y baja del precio del género debido?—El deudor, porque es circunstancia ajena completamente al contrato.

Si hubiere de darse la estimacion de la cosa, ¿a qué tiempo hay que atenderse para fijarla?—Juliano dice que al tiempo del contrato, si no se determinó en él la época de su devolucion, y al de ésta si se prefijó.

¿A qué tiempo debe atenderse para fijar la estimacion del dinero prestado, cuando ha variado su valor?—Unos opinan que al del pago, y otros que al del otorgamiento del contrato. La opinion más equitativa consiste en decidir que se atienda al primero si la variacion sufrida atañe únicamente al valor *extrínseco* del dinero, y al segundo si tiene lugar en su valor *intrínseco*, porque las mismas vicisitudes hubiera pasado si permaneciera en poder del mutante.

¿Qué obligaciones nacen de este contrato?—Como *unilateral*, sólo produce una á favor del mutuante, para cuya eficacia tiene una accion denominada *condictio certi* contra el mutuuario para que le entregue una cantidad de cosas igual, y del mismo género y calidad que la que de él recibió.

Préstamo á interés.

¿Qué nombre recibia en Roma el interés?—Llamábase *fenus, versura, usura*.

¿Podia ser objeto del *mútuo*?—No, porque en él sólo se debe una cantidad de igual género y calidad que la prestada.

¿Podian prometerse intereses por medio de un pacto agregado á él?—No, porque como el *mútuo* era de derecho estricto, no obligaban los pactos que se le agregasen.

¿A qué remedio se acudia para establecer intereses en el *mútuo*?—Se apelaba á una estipulacion, en la cual se constituian.

¿Cuál es la verdadera idea del interés?—Consiste en ser una compensacion de los perjuicios, peligros y carencia de ventajas que pudiera tener el mutante si conservara y destinara á alguna negociacion la cosa prestada.

¿Qué condiciones debe tener el interés para que sea legitimo?—Debe ser proporcionado á los beneficios que del préstamo recibe el mutuuario, y estar en relacion con los peligros y perjuicios que pueda sufrir el mutante.

¿Qué vicisitudes ha sufrido la usura en Roma?—Para evitar los abusos de los ricos, se apeló á medios directos é indirectos á fin de neutralizar sus consecuencias, siendo entre ellos el principal la limitacion legal del interés, que en tiempo de Ciceron se fijó en un 12 por 100 anual.

¿Qué dispuso Justiniano acerca de él?—Teniendo por base la calidad de las personas y de los préstamos, determinó que aquéllas de más alta posicion social sólo pudieran llevar un 4 por 100; los comerciantes, un 8 por 100, y los demás un 6 por 100. En los contratos á la gruesa, ó á riesgo marítimo, podia estipularse el 12 por 100.

¿Podian llevarse usuras de usuras?—No: el interés debia recaer siempre sobre el capital, siendo este precepto tan riguroso, que los emperadores Diocleciano y Maximiano impusieron la pena de infamia á los contraventores, y Justiniano prohibió la acumulacion al capital de los intereses pasados y futuros, para que no pudiera eludirse tal precepto.

Comodato ó préstamo á uso.

¿Qué es *comodato*?—Un contrato *real* intermedio «por el que una de las partes entrega gratuitamente á la otra una cosa, con la obligacion de que le devuelva la misma, después de haber hecho de ella el uso convenido».

¿Cuáles son sus requisitos esenciales?—Cinco: 1.º, la entrega efectiva de la cosa; 2.º, que el uso á que se destina no la consuma; 3.º, que sea gratuito; 4.º, que sea determinado; 5.º, que se restituya la misma cosa.

¿En qué se diferencia el *precario* y del *arrendamiento*?—En que en el *precario* no se determina el uso para que se presta la cosa, y puede ser pedida por el que la da en cualquiera tiempo, y en el *arrendamiento* media siempre una *merced* que le convierte en contrato oneroso.

¿Qué cosas pueden darse en *comodato*?—Las muebles y las inmuebles. Las que se consumen por el uso, pueden ser objeto de comodato, sólo en el caso de que se presten para hacer de ellas ostentacion.

¿Qué obligaciones produce para el comodatario?—La principal consiste en la devolucion de la cosa, la cual debe cuidar con toda la diligencia que pueda emplearse en ello.

¿Qué obligaciones puede producir para el comodante?—La de indemnizar al comodatario los perjuicios que le hayan causado los vicios ocultos de la cosa y los gastos que para conservarla haya tenido que hacer.

¿Qué acciones nacen de este contrato?—Dos; una *directa* y otra *contraria*. La primera «compete al comodante y á su heredero, contra el comodatario y el suyo, para que, concluido que sea el uso para que se le prestó la cosa, se le devuelva y repare los daños que haya ocasionado por la culpa leve en abstracto». La segunda «es la que compete al comodatario y á su heredero, contra el comodante y su heredero, para que le indemnice de los daños que le ha causado por dolo ó culpa lata, y le reembolse los gastos necesarios que haya hecho á fin de conservar la cosa prestada».

¿Qué se entiende por prestar la *culpa*, el *dolo* ó el *caso fortuito*?—Significa esta frase el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por cualquiera de estas causas.

¿Qué es el *caso fortuito*?—Llámanse así á «todo acontecimiento perjudicial que no puede preverse ó que, previsto, no puede evitarse», como un incendio, una inundacion, etc.

¿Cuándo se presta?—En ningún caso, porque su naturaleza consiste en constituir una desgracia.

¿Qué es *dolo*?—Toda maquinacion fraudulenta que tiene por objeto causar perjuicio á otro.

¿Cuándo se presta?—Siempre y en todos los contratos, prohibiéndose como ilícito todo pacto que tienda á modificar lo absoluto de esta regla.

¿Qué es *culpa*?—Todo hecho ú omision involuntaria que perjudica á otro.

¿En qué se distingue el *dolo*?—En que éste supone voluntad é intencion en los hechos que lo constituyen, y aquélla no, como queda expuesto.

¿Qué clases hay de *culpa*?—Los antiguos reconocian tres, que llamaban *culpa lata*, *leve* y *levísima*.

¿Qué base tenia esta division?—La diferente diligencia y cuidado de los padres de familia, desde el abandono á que se equiparaba la primera, hasta la minuciosa escrupulosidad que suponía la tercera.

Segun esta clasificacion, ¿cuándo se presta la culpa?—Si la utilidad del contrato recae únicamente sobre el acreedor, presta el deudor la *culpa lata*; cuando la utilidad es de ambos, presta la *leve*, y la *levísima* cuando es sólo del deudor.

¿Cuál es la division moderna seguida más generalmente?—La indicada por Donneau, que divide la culpa en *lata* y *leve*. Llama *lata* á las omisiones ó hechos que son efecto de una negligencia que casi se confunde con el *dolo*, y *leve* á las que no pueden llamarse *culpa lata*.

¿Qué grados reconoce la *leve*?—Dos, que se denominan *leve en concreto* y *leve en abstracto*. Esta consiste en la falta de diligencia que pone en sus negocios un diligente padre de familias, y aquélla en la falta de diligencia que usa en los suyos aquél con quien se contrata.

¿Qué reglas deben observarse en la prestación de la culpa, según esta nueva división?—Primera, la *culpa lata*, como que se equipara al *dolo*, se presta en todos los contratos. Segunda, la *leve en abstracto* se presta por el contrayente que recibe exclusivamente utilidad del contrato, por ambos cuando la obligación es útil para los dos, y por el que posee una cosa ajena en beneficio propio.

¿Reconocen excepciones las reglas anteriores?—Sí, según la naturaleza especial de algunos contratos, por ejemplo, el de sociedad, el cuasi-contrato de administración de bienes ajenos, etc.

¿Qué es la *custodia*?—La conservación y guarda de las cosas ajenas que se deben, aunque hubieran sido hurtadas, si no se justifica el delito.

¿Qué clase de culpa presta el comodatario?—La *leve en abstracto*; presta también la *custodia*.

Del precario.

¿Qué es *precario*?—Un contrato muy semejante al comodato, que consiste en conceder una cosa por el tiempo que dure la voluntad del que la concede, circunstancia que le distingue de aquél.

¿Qué acción produce?—No tenía efectos civiles si no se agregaba á otro contrato, pero daba origen á un *interdicto* introducido por el pretor contra el que tenía la cosa, ó sus herederos; ó no teniéndola, que hubiese dejado de poseerla por dolo, para que la restituya con sus acciones.

¿Qué tiempo duraba el interdicto?—Era perpétuo.

¿Qué culpa se presta en él?—La *lata*.

Del depósito.

¿Qué es *depósito*?—Un contrato real *intermedio* por el que uno entrega á otro una cosa mueble para que la custodie, obligándose á devolverla cuando el deponente la reclame.

¿Cuáles son sus requisitos esenciales?—Cinco: 1.º, que sea mueble la cosa; 2.º, la aceptación gratuita del depositario; 3.º, que éste se encargue de la custodia de la cosa; 4.º, la obligación de devolver la misma cosa; 5.º, que la devolución se verifique cuando la reclame el deponente.

¿Qué es depósito *miserable* ó extraordinario?—El que se constituye por consecuencia de un incendio, un naufragio ú otra calamidad pública.

¿Qué acciones nacen del contrato de depósito?—Dos; una *directa* y otra *contraria*. La primera compete al deponente ó sus herederos, contra el depositario y los suyos, para que le restituyan la cosa depositada con todas sus acciones, y para que le indemnicen de las pérdidas que les hayan ocasionado por dolo ó culpa lata. La segunda corresponde al depositario ó sus herederos, contra el deponente y los suyos, para que les indemnicen de los gastos hechos en la conservación de la cosa y de las pérdidas causadas por los vicios que el deponente no hizo oportunamente conocer.

¿Qué culpa presta el depositario?—El *dolo* y la culpa *lata*, porque es contrato en donde la utilidad es del deponente.

¿Cuándo puede prestarse la culpa *leve*?—Siempre que así se pacte, ó el depositario se presente espontáneamente á recibir el depósito.

Del secuestro.

¿Qué es el *secuestro*?—Es una especie de depósito que tiene lugar cuando se hace para la conservación de un derecho, ó la ejecución de una sentencia.

¿De cuántas maneras puede ser?—*Voluntario* y *necesario*. Voluntario,

cuando en él convienen las dos partes contendientes; y necesario, cuando lo acuerda el juez.

¿Puede tener lugar el secuestro en las cosas no litigiosas?—Sí; por ejemplo, cuando el marido comienza á disipar la dote.

¿Qué acciones nacen del secuestro?—Dos; una *directa* y otra *contraria*. La primera compete al vencedor en el juicio y á sus herederos, contra aquel á quien se confió la cosa y los suyos, para que la restituyan con todas sus acciones. La *contraria* compete al depositario contra el vencedor, para que le indemnice de los gastos ocasionados por la conservacion de la cosa.

De la prenda.

¿Qué acepciones tiene la palabra *pignus*?—Tres: significa la cosa que se da en prenda; el derecho *real* que sobre ella adquiere el acreedor, y el contrato de prenda.

¿Cómo se define tomada en el último sentido?—«Un contrato *real inter-medio*, en virtud del cual uno entrega á otro una cosa en seguridad de cierta deuda.»

¿Cuáles son sus esenciales requisitos?—Dos: la entrega de la cosa, y que tenga por objeto garantizar una deuda.

¿Qué derecho tiene en la prenda el acreedor?—Un derecho *real*, que por su naturaleza le sigue siempre.

¿Qué obligaciones produce?—La de devolver la misma cosa, pagada que sea la deuda, y la de indemnizar los gastos de su conservacion.

¿Qué acciones nacen de él?—Dos: una *directa* y otra *contraria*. La primera «corresponde al que dió la cosa en prenda y á sus herederos, contra el que la recibió y los suyos, para que se le restituya la cosa dada en garantía con todas sus acciones.» La *contraria* «compete al acreedor y sus herederos contra el deudor y los suyos, para que les indemnicen de los daños que les ha ocasionado la cosa, aunque sea por culpa leve del deudor, y de los gastos necesarios ó útiles hechos para su conservacion.»

¿Existen diferencias entre la accion *pignoraticia* que se acaba de definir, y la *hipotecaria*, de que se hablará?—Sí; la accion *pignoraticia* es *personal*, porque nace de un contrato; y la *hipotecaria* es *real*, porque dimana de un derecho en la cosa. De esto se infiere que la *pignoraticia* sólo puede ejercitarse contra el contratante y sus herederos, y la *hipotecaria* contra cualquiera poseedor, por seguir constantemente á la cosa. La *pignoraticia* tiene por fin la devolucion de la prenda solicitada por el deudor; la *hipotecaria* la entrega de la cosa pedida por el acreedor á un tercero que la intenta. Y por último, se diferencian en que ambas no pueden existir al mismo tiempo, pues la *pignoraticia* comienza cuando se extingue la *hipotecaria*, porque cesa el derecho del acreedor desde el momento en que el deudor puede reclamar la prenda por haber solventado el crédito.

¿En qué cosas puede constituirse la prenda?—En las muebles, si bien á veces se designaban con esta palabra las inmuebles.

¿Qué responsabilidades se prestan en este contrato?—El acreedor responde de la culpa leve en *abstracto* y de la *custodia*.

¿Cómo se definen la prenda y la hipoteca, consideradas como *derecho real*?—«El que tiene constituido un acreedor en cosa ajena para seguridad de su crédito.»

¿En qué se diferencian la hipoteca de la prenda?—Únicamente en que en ésta tiene el acreedor la posesion material, que no puede tener en aquélla, porque se constituye en bienes inmuebles.

¿Pueden ser objeto de la prenda é hipoteca las cosas incorpóreas?—Sí, como el usufructo, la habitacion y los créditos.

¿Qué clases hay de hipotecas?—*Generales y especiales, voluntarias y necesarias, ordinarias y privilegiadas.*

¿Cuáles son las *generales*?—«Las que afectan á todos los bienes del deudor.»

¿Cuáles son las *especiales*?—«Las que sólo afectan á objetos determinados individualmente, y pasan con ellos al que los adquiere.»

¿A cuáles se llaman *voluntarias*?—«A las que resultan de la expresion de la voluntad manifestada ó en una convencion ó en una disposicion testamentaria.»

¿Cuáles son las *necesarias*?—«Las que existen sin voluntad ó contra la voluntad de los dueños de las cosas hipotecadas», por disposicion de la ley ó del magistrado.

¿Cuándo tiene lugar por determinacion del magistrado?—Puede constituirse de dos maneras: primera, poniendo en posesion de la cosa al acreedor, sin necesidad de juicio; y segunda, ejecutando lo dispositivo de una sentencia que tenga la autoridad de la cosa juzgada, ó lo confesado por el deudor, tambien sin la apertura de juicio.

¿Cuándo tiene lugar por disposicion de la ley?—Cuando ésta las establece directa y expresamente, á quienes se da el nombre de *hipotecas tácitas ó legales*, que pueden ser *generales ó especiales*.

¿Cuántas y cuáles son las *hipotecas tácitas generales*?—Once; los señores La Serna y Montalvan las enumeran en la forma siguiente:

1.º La que tiene el fisco en los bienes de sus deudores, por los tributos públicos desde que vence el pago; en los bienes de sus administradores desde que entran en el ejercicio de su cargo, por los desfalcos que pueden hacer; en los de los que contratan con él, hasta cubrir las obligaciones que resulten del contrato.

2.º La que compete á los impúberos, menores y locos, en los bienes de sus tutores y curadores, desde el día en que éstos comenzaron á administrar su cargo, para que no eludan las obligaciones que resulten contra ellos. Los pródigos, los enfermos y los ausentes no tienen esta hipoteca legal en los bienes de sus guardadores ó de los encargados de la administracion de sus bienes.

3.º La que tienen los hijos de un matrimonio anterior para garantir su derecho en las demandas contra su madre como administradora de la tutela, sobre los bienes del marido de ésta; derecho que empieza cuando se contraen las segundas nupcias.

4.º La de los hijos en los bienes de su padre ó madre, para garantía de sus derechos á los lucros nupciales, cuando un cónyuge pasa á segundas nupcias.

5.º La que tienen los hijos sobre los bienes del padre que es administrador de lo que aquéllos recibieron de su madre ó de sus ascendientes maternos; hipoteca que comienza desde el momento en que el padre se encarga de la administracion.

6.º La del marido por la dote prometida sobre los bienes del que la debe; hipoteca que se constituye desde el día en que se verifica el matrimonio, si se prometió antes, y desde la promesa cuando ésta fué posterior.

7.º La de la mujer y de sus herederos en los bienes del marido ó en los del suegro en su caso, para garantir la restitution de la dote y su aumento desde el día en que se celebró el matrimonio, y si estaba ya entonces entregada ó aumentada la dote; y en otro caso, desde la entrega ó aumento.

8.º La que tiene la mujer y sus herederos por la donacion *propter nupcias*, en los bienes del que la prometió.

9.º La que corresponde á las mismas personas en los bienes del marido por razon de la administracion de los parafernales, desde el día en que se encargó de ella.

10. La de los que tienen derecho de adquirir lo dejado á un viudo ó á

una viuda con la condicion de no volverse á casar, si éstos quebrantan la condicion impuesta: en cuyo caso, el derecho hipotecario nace en el momento en que se infringe lo dispuesto por el testador.

11. La de la Iglesia en los bienes del enfiteuta, por los deterioros de la cosa dada en enfiteusis, desde el momento en que sucedieron.

¿Cuántas y cuáles son las *especiales tácitas*?—Siete, cuya reseña tomamos tambien de los citados autores:

1.º La de arrendador de un predio urbano para el pago del inquilinato sobre todas aquellas cosas en que el inquilino lleva á la finca arrendada *invecta et ilata*, desde el momento en que entran en ella.

2.º La de los arrendadores de predios rústicos, bajo cuya denominacion aquí sólo se comprenden los destinados al cultivo, en los frutos de la heredad, desde su percepcion.

Cuando al mismo tiempo se arriendan dos predios, uno como accesion del otro, y de ellos uno sólo produce frutos, debe observarse que si lo que principalmente se ha arrendado es la heredad productiva, los frutos sólo serán lo hipotecado, aún en el caso de que se hayan introducido muebles ó efectos en la casa que estaba en la heredad: y por el contrario, si lo que se arrendó principalmente fué una casa que tenía como accesorio un jardín, no se entenderán hipotecados los frutos que éste produzca, sino sólo las cosas introducidas en la casa.

3.º La que tienen los subarrendadores de heredades rústicas ó urbanas sobre las cosas nacidas ó introducidas respectivamente, pero sin que por esto se coarte de ningun modo el derecho del primer arrendador.

4.º La del que ha prestado dinero expresamente para reconstruir algun edificio, desde que se empieza á reconstruir, tanto sobre lo edificado como sobre el solar. Esta hipoteca no es extensiva al que dió dinero para reparar la casa ó para edificarla de nuevo, ni al que sólo haya dado los materiales ó el trabajo, á no ser en el caso de que medie estipulacion; pero entónces habrá hipoteca especial privilegiada, y no será tácita, sino expresa.

5.º La de los pupilos en las cosas compradas con su dinero por el tutor ó por otro, á nombre de ellos. De esta hipoteca no disfrutan los que han pasado de la pubertad. Para que tenga lugar en beneficio de los pupilos es menester que el dinero no haya llegado al tutor ó á otra persona por via de préstamo, porque entónces no tendrá lugar la hipoteca sino en cuanto se haya estipulado.

6.º La de la mujer sobre la cosa dotal que no se le ha restituido, y sobre las cosas adquiridas con el dinero dotal.

7.º La de los legatarios y fideicomisarios para seguridad de lo que se les ha dejado en los bienes que el gravado ha recibido del testador desde que cede el día del legado ó del fideicomiso. En el caso de que sean muchos los que tengan que satisfacer la carga, la hipoteca sólo afecta á cada uno en proporcion de la parte que él deba satisfacer, aunque no faltan autores que sostienen que en este caso, como en todos los demás, es indivisible la hipoteca, y que no cabe la prorata en proporcion á la parte de cada uno de los gravados.

¿Qué son hipotecas privilegiadas y ordinarias?—Son privilegiadas aquellas que, en competencia con otras, son más atendidas por la ley y de preferente resultado; y ordinarias, las que no lo son.

¿Cuáles son las privilegiadas?—El texto citado refiere cuatro, que son: 1.º, el fisco por los tributos atrasados y por sus créditos contra los encargados del mantenimiento y subsistencia de los ejércitos; 2.º, el que ha prestado dinero para comprar un cargo militar, si bien no será preferido á la mujer que pide su dote sino en cuanto se haya procurado una escritura suscrita por testigos: en el mismo caso se hallan los banqueros, *argentarii*, por su anticipo de dinero respecto á las cosas adquiridas con él,

constando la hipoteca por escrito; 3.º, la mujer por su dote: en concurrencia de dos dotes, es preferida la más antigua; 4.º, todos los que han prestado dinero para la adquisición, reconstrucción ó conservación de la cosa hipotecada, entre los cuales los más antiguos son preferidos á los más modernos.

¿Qué efecto produce la hipoteca?—Trasmite al acreedor la facultad de enajenarla si no satisface el deudor el crédito debido, sin necesidad de recurrir al juez, excepto en la constituida por sentencia judicial; en el primer caso, debe ponerlo en conocimiento del deudor, y verificar la venta públicamente, después del trascurso del tiempo prefijado por la ley.

¿Cómo se extingue el derecho *real* de prenda ó hipoteca?—Por diversos modos, de los que unos son comunes á la extincion de todos los derechos, y otros especiales de la prenda ó hipoteca.

¿Cuáles son los comunes?—Seis: 1.º, la pérdida ó desaparicion de la cosa; 2.º, la consolidacion del derecho real, hipotecario y del dominio en una misma persona; 3.º, la pérdida ó terminacion del derecho del deudor; 4.º, la llegada del término por que se constituyó; 5.º, la renuncia tácita ó expresa del acreedor; 6.º, la prescripcion de la accion.

¿Cuáles son los especiales?—Tres: 1.º, la solvencia del crédito; 2.º, la reunion en una persona de los caracteres de acreedor y de deudor; 3.º, la venta de la cosa hecha en forma legal.

Contratos innominados.

¿A qué contratos se llama *innominados*?—A los que tienen por objeto obtener una prestacion ó un servicio en cambio de otro, que no producen accion especial.

¿Cuántas clases se conocen?—Cuatro, comprendidas en las siguientes fórmulas: *Doy para que des (do ut des)*; *doy para que hagas (do ut facias)*; *hago para que des (facio ut des)*, *hago para que hagas (facio ut facias)*.

¿Cual es la naturaleza de estos contratos?—Son *reales*, y no producen, por tanto, obligacion hasta que se verifique la prestacion de la cosa ó hecho.

¿Qué accion nace de ellos?—Ya queda dicho que ninguna especial, pero les es aplicable la *præscriptis verbis*.

¿Qué particularidad tienen los comprendidos en las fórmulas *doy para que des* y *doy para que hagas*?—El *jus pœnitendi*, introducido á favor del acreedor en la obligacion, segun el cual si el deudor no entrega la cosa prometida ó no ejecuta la prestacion convenida, puede reclamar la entregada ó exigir el cumplimiento de la obligacion.

¿Qué medio debe emplear en caso de arrepentimiento?—La condicion *causâ datâ, causâ non secutâ*, que tiene por objeto la restitution de lo que entregó por una causa expresa, honesta y futura, no seguida.

¿Qué contratos se cuentan entre los innominados?—El llamado *estimatorio* y la *permuta*.

¿Qué es contrato *estimatorio*?—«Aquel en que se da á otro una cosa tasada para que la venda, con la condicion de que devuelva la misma cosa ó la estimacion fijada.»

¿Qué acciones produce?—Una *directa* á favor del que da la cosa contra el que la recibe, para obtener su devolucion ó la estimacion; y otra *contraria* á favor de éste, para conseguir de aquél el pago de la merced estipulada y la indemnizacion de perjuicios.

¿Qué es *permuta*?—El contrato real por el que uno da una cosa para que el que la recibe le dé otra en que convinieron.

¿Qué acciones produce?—La *præscriptis verbis*, que «corresponde al que dió y su heredero, contra el que recibió y el suyo, para que le entregue la cosa prometida ó que le interese».

¿En qué se diferencia de la venta?—Principalmente en que la cosa que se da en cambio no es dinero, y en que es contrato *real*, y la venta *personal*.

Obligaciones verbales.

¿Cuáles son las obligaciones *verbales*?—Las que reconocen por causa civil de obligar la congruencia y solemnidad de una pregunta y una respuesta, llamada *estipulación*.

¿Qué es, pues, la *estipulación*?—Un contrato verbal «por el que uno, preguntando, obliga al que le contesta congruentemente á dar ó hacer alguna cosa». También se llama simplemente *estipulación* á la pregunta, designándose la respuesta con el nombre de *promesa*.

¿Qué nombre reciben el interrogante y el que responde?—*Reus stipulandi* y *reus promitendi*, respectivamente.

¿Cuál es el origen de la palabra *estipulación*?—Unos lo ven en la latina *stipes*, estaca ó palo fuerte hincado en tierra; otros en *stips*, nombre de una moneda romana; y San Isidoro lo halla en *stipula*, que significa caña ó paja de mieses, la cual rompían y volvían á unir al obligarse los que hacían promesas.

¿Qué clases habia de contratos verbales?—Antiguamente tres: la *dotis dictio*, la *promissio operarum* de los libertos, y la *estipulación*.

¿Qué acciones nacían de la estipulación?—Cuando la cosa prometida era determinada y cierta, nacía la acción *condictio certi*; y cuando era indeterminada, la *condictio incerti*, llamada *ex stipulatu*.

¿Qué fórmulas se usaban en la estipulación?—Las siguientes: ¿Ofrezco? Ofrezco (*spondes, spondeo*).—¿Prometes? Prometo.—¿Prometes bajo tu fe? Prometo bajo mi fe.—¿Sales por fiador? Salgo por fiador.—¿Darás? Daré.—¿Harás? Haré.

¿Cuál era la que usaban los ciudadanos romanos?—La primera, que debia pronunciarse en latin por ser de derecho civil y las demás del de gentes.

¿Qué dispuso sobre ellas el emperador Leon?—Suprimió la solemnidad de las palabras, bastando sólo el conocimiento ó inteligencia de las mismas, cualquiera que fuese el idioma en que se pronunciasen, pero conservando la causa de la obligación que consistía en ellas.

¿De cuántas maneras pueden ser las estipulaciones?—Puras, condicionales y á término.

¿Cuáles son sus efectos?—En las puras *cede* y *viene* el dia inmediatamente; en las condicionales no *cede* hasta que se cumple la condicion, y en las á término *cede* desde luego, pero no puede pedirse hasta tanto que aquél no llega.

¿Qué efectos produce la condicional, si alguno de los contratantes muere antes del cumplimiento de la condicion?—Los efectos de la estipulación tendrán lugar en los respectivos herederos.

¿Qué efectos produce el dia *incierto* puesto en la estipulación?—Cuando no se sabe si vendrá ó no, se tiene como condicional la estipulación; mas si sólo es incierta la época en que ha de venir, no dudándose de su llegada, se reputa la estipulación hecha á término.

Prometida una cantidad anual durante la vida de una persona, ¿cómo se entiende hecha la estipulación?—Pura y simplemente, no sólo la primera anualidad, sino las ulteriores; porque, siendo objeto de un mismo contrato de derecho estricto, no puede considerarse pura la primera y condicionales las demás. Por eso dice Justiniano que la estipulación se perpetúa, y se diferencia del legado de igual género en que, así como ésta es una siempre, el legado es *múltiple*, y se tiene como condicionales la segunda y demás anualidades.

La estipulacion formulada puramente, pero cuyo cumplimiento debe hacerse en lugar distinto del contrato, ¿cómo se reputa hecha?—A término, porque sería inútil si no se tuviese por convenio tácitamente el tiempo necesario para trasladarse al punto designado.

¿Pueden ser objeto de la estipulacion los hechos?—Sí; puede prometerse hacer ó no hacer alguna cosa, en cuyo caso se llamará la estipulacion *afirmativa ó negativa*.

¿Qué resultado da la falta del cumplimiento de esta clase de estipulaciones?—Convierten la obligacion del promitente en otra de daños y perjuicios, teniendo lugar una *novacion* por el ministerio de la ley, cuyos perjuicios deben ser aprobados por el estipulante en un juicio de apreciacion ó avalúo.

¿Cómo se evitan estos inconvenientes?—Anticipándose á agregar á la estipulacion una cláusula penal exigible en caso de falta de cumplimiento de lo estipulado.

¿Qué fórmula solía usarse?—La siguiente: «Si hicieres lo que has prometido no hacer, ó no hicieres lo que has prometido hacer, ¡prometes dar á título de pena diez aureos?»

Co-estipulantes y co-promitentes.

¿Quiénes son co-estipulantes?—«Aquéllos que han estipulado una misma cosa de otro, con la intencion de que, aunque á cada uno se deba toda ella, sólo se deba una á todos.»

¿Quiénes son co-promitentes?—«Aquéllos que han prometido la misma cosa á uno que estipulaba con la intencion de que, aunque á cada uno la debiera íntegramente, no debieran todos más que la misma.»

¿Qué nombre recibe la obligacion en que hay más de un deudor ó de un acreedor?—Llámanse *obligacion co-real*.

¿Qué circunstancia debe mediar para que exista?—Que la promesa sea *una sola*, contestando á todas las preguntas, y tenga lugar en el mismo tiempo de la pregunta ó poco despues. Si es más de una, habrá tantas estipulaciones como promesas.

¿Qué caractéres detalla la naturaleza de la obligacion co-real?—La *unidad* y la *multiplicidad*, segun el punto de vista en que se la considere. Con relacion á sí misma es *una*, porque sólo *una* cosa se debe en fuerza suya; porque es *un* sólo contrato el que la origina, y porque con *una* sola paga se extingue, sea cualquiera el número de los contratantes. Con relacion á éstos es *múltiple*, porque, apesar de ser *una* la cosa, se debe entera á todos, y nacen tantas obligaciones como son los estipulantes y los promitentes.

¿Qué efectos puede producir esta especie de *dualidad*?—1.º, el quedar la estipulacion sin efecto total ó parcialmente; totalmente, cuando el vicio de nulidad que contenga recaiga sobre la cosa que es su objeto; y parcialmente, cuando afecte únicamente á uno de los contratantes; 2.º, el que la demanda deducida en juicio por uno de los *co-estipulantes* impide á los demás el uso de sus derechos, y les incapacita para cobrar, del mismo modo que libra á los *co-promitentes* contra quienes no fué entablada.

¿Qué acciones tenían los co-estipulantes que nada recibieron y el co-promitente que pagó lo estipulado?—En rigor de derecho estricto ninguna, porque no habian obrado en representacion de sus consocios, á ménos que entre ellos exista una sociedad ó comunidad de bienes, de la cual nazcan las acciones *communi dividendo*, *pro socio*, etc.

¿Gozan los *co-reos* del beneficio de division?—El emperador Adriano no les comprende entre las personas á quienes lo concedió; pero sí el que Justiniano estableció para los co-deudores igualmente interesados en la deuda, á fin de que el acreedor que reclama contra uno de ellos sea obligado á ampliar su demanda á los demás.

¿Qué otra obligacion puede producir la intervencion de varios contratantes?—La conocida con el nombre de obligacion á *pro-rata*, en contraposicion de la llamada *solidaria*.

¿Cuándo tiene lugar?—La *solidaria* en los casos que quedan expuestos, esto es, cuando se debe toda la cosa á todos y cada uno de los acreedores en la obligacion; y á *pro-rata*, cuando se deben partes determinadas á cada uno y á ninguno el todo.

¿Podian estipular los esclavos?—Sí, pero adquirian para su señor, pues cuanto tuviera por fin enriquecerlos era eficaz. Y si pertenecian á una herencia no adida, adquirian para la herencia, considerada como una persona jurídica.

¿En qué se fundan las estipulaciones de los esclavos?—En que éstos, si bien eran considerados como *cosas*, podian intervenir representando á su dueño en todos aquellos actos que no eran *legítimos* y le reportaban lucro ó utilidad.

¿Qué sucedia cuando el esclavo estipulaba un hecho?—Que como concesion personalísima no podia ser sustituido por otro; pero su señor reportaba utilidad de la estipulacion, porque podia impedir ó consentir que el esclavo lo ejecutase en su perjuicio ó beneficio.

¿Para quién adquiere el esclavo comun?—Para cada uno de sus dueños proporcionalmente á la parte de dominio que tenga, excepto cuando estipula determinadamente para uno, ó por mandato especial y exclusivo de alguno.

Division de las estipulaciones.

¿Cómo se dividen las estipulaciones?—Además de ser puras, condicionales y á término, las estipulaciones son judiciales, pretorias, convencionales y comunes.

¿Cuáles son las judiciales?—Las que dimanar exclusivamente del oficio del juez: tales son la *caucion de dolo*, la de *perseguir al siervo fugitivo* y de *restituir el precio*.

¿En qué consiste y cuándo tiene lugar la *caucion de dolo*?—En todos los casos en que hay sospecha de que aquél que posee una cosa que está obligado á devolver, obra con dolo para perjudicar al acreedor, y gr.: si da un veneno al esclavo para que muera en poder del que lo demanda.

Se prestaba por medio de una promesa.

¿Cuándo tenia lugar la segunda y en qué consistia?—Cuando, adquirido el dominio de un esclavo litigioso por la *usucapion*, se fugaba aquél. Consistia en prometer el usucapiente reivindicarlo para entregarlo al litigante vencedor ó pagar su precio como pena.

¿Cuáles son las estipulaciones *pretorias*?—Las que dimanar del oficio del pretor exclusivamente, como las relativas á un inminente daño ó á los legados. Tambien se comprenden entre ellas las *edilicias*.

¿Cuándo tenian lugar?—Cuando habia pleito y el demandante temia un perjuicio irreparable; y no habiéndolo, cuando lo reclamaba la equidad y la justicia.

¿En qué consistia la llamada *damni infecti*?—En prometer el dueño de un edificio ruinoso indemnizar al vecino del daño que pudiera ocasionarle las ruinas, cuya estipulacion podia hacerse ó por promesas ó por medio de fiadores.

¿Qué derechos nacia en favor del vecino en el caso de negativa del dueño?—Si no afianzaba en el término fijado por el pretor, se ponía á aquél en posesion del edificio; y si no obstante esto persistia en su obstinacion, se declaraba la posesion verdadera en favor de éste con todas sus consecuencias legales.

¿Cuándo tenia lugar y en qué consistia la *legatorum*?—Siempre que me-

diaba algun obstáculo para la entrega inmediata de los legados. Consistia en obligar al heredero á que la asegurase por medio de fiadores, evitando así la pérdida de los legados en caso de insolvencia de aquél.

¿Cuáles eran las *edilicias*?—Las otorgadas por los ediles, entre las que figura preferentemente la que obliga al vendedor á indemnizar al comprador de los vicios de la cosa vendida.

¿Cuáles eran las *convencionales*?—Las que debian su origen á la voluntad de los otorgantes. Constituyen tantas clases cuantas son las obligaciones.

¿Cuáles son las comunes?—Las que, si bien generalmente deben su origen al oficio del magistrado, por via de excepcion pueden ser otorgadas por el juez. Ulpiano las llama *cautionales*.

Son ejemplos de éstas la garantia de los intereses del pupilo y la promesa de que otro se ratificará.

¿Cuándo tienen lugar y en qué consisten?—Tienen lugar, la primera cuando es demandado un pupilo cuyo tutor no ha rendido aún las cuentas tutelares, y consiste en afianzar éste que será salvo el patrimonio de aquél; y la segunda, cuando un procurador demanda ó contesta por otro de quien no tiene poder, y consiste en afianzar que su representado ratificará sus actos y gestiones.

Estipulaciones inútiles.

¿A qué se da el nombre de estipulaciones *inútiles*?—A todas las que no originan una accion para exigir el cumplimiento de lo estipulado.

¿Cuándo, pues, será *inútil* una estipulacion?—Cuando no reúne las condiciones siguientes: 1.^a, requisitos esenciales á todo contrato; 2.^a, requisitos esenciales y propios de la estipulacion; 3.^a, carencia de condiciones imposibles, y 4.^a, que sea ejecutable.

¿Por qué conceptos pueden ser *inútiles* las estipulaciones?—Por razon de las personas, por razon de las cosas y por razon de su forma ó modo de contraerlas.

¿Cuándo son *inútiles* por razon de las personas?—Cuando las contraen individuos que no pueden consentir por su edad ó incapacidad, como el loco, el mudo, el hijo de familia, etc., porque el consentimiento libre de los contrayentes, es un requisito esencial á todo contrato.

¿Cuándo lo son por razon de las cosas?—Cuando se contraen sobre las que no existen y no pueden existir, ó están fuera del comercio de los hombres.

¿Cuándo lo son por razon de la forma?—Cuando no hay congruencia entre la pregunta y la respuesta, ó uno de los contratantes no conoce el valor y relacion que entre ambas media, y cuando la causa de la obligacion se opone á la moral y á las leyes.

¿Qué cosas pueden ser objeto de las estipulaciones?—Las susceptibles de propiedad que por ello se hallan en el comercio, estén ó no en nuestro dominio, aunque no existan, con tal que puedan existir, bien sean muebles, inmuebles ó incorporeales.

¿Es válida la estipulacion que uno hace prometiendo que otro dará ó hará alguna cosa?—No, porque no consiente el promitente en ser el deudor, ni obliga al tercero; pero quedará obligado á poner en juego los medios necesarios para que éste haga ó dé alguna cosa, si así se estipuló.

¿Es válida la estipulacion hecha en favor de otra persona que aquélla en cuyo poder estamos?—No, porque el tercero no convino en nada, y el estipulante no estipuló nada para sí. Son, sin embargo, válidas las que hace el guardador, el actor de la ciudad, y á veces el procurador.

Quando se estipula para sí y para un extraño ¿qué porción se debe?—Tan sólo es válida la estipulacion en la mitad.

¿Qué extremos debe comprender la congruencia entre la pregunta y la

respuesta?—La intension y la extension de la obligacion, sin lo cual la estipulacion es inútil.

Prometida una cantidad menor que la estipulada, ¿es válida la estipulacion?—Aunque hay diversidad de pareceres, la opinion más razonable parece ser que es válida en cuanto á la cantidad ofrecida.

¿Es válida la estipulacion entre ausentes?—No, porque su naturaleza exige que se oigan las personas que la contraen.

¿Qué presuncion induce la escritura, como medio probatorio?—*Juris tantum*; esto es, que admite prueba en contrario de lo que se presume.

¿A qué se llamaba estipulacion *prepostera*?—A la que originaba obligacion antes del cumplimiento de la condicion de que dependia, por ejemplo: «Si tal nave llegase del Asia, ¿me prometes dar hoy?»

¿Era válida esta estipulacion?—En un principio no; el emperador Leon la admitió en las dotes, y Justiniano le dió validez en todas materias.

¿Era válida la en que se estipulaban varias cosas?—El promitente quedaba obligado á todas, ó á algunas de ellas, segun que las había ofrecido todas ó solamente algunas, porque se consideraban tantas estipulaciones como cosas se estipulaban.

¿Era válida la estipulacion para un tercero, hecha con cláusula penal?—Sí, en cuanto á la pena estipulada, siempre que en la principal no tenía interés el estipulante; pues teniéndole, la estipulacion era válida en toda su extension.

¿Qué efectos produce la muerte del estipulante acaecida ántes del cumplimiento de la condicion?—Trasmite á su heredero las acciones que le correspondian.

Adstipulacion.

¿Qué era la *adstipulacion*?—Un contrato accesorio de la estipulacion, que tenía por objeto la misma cosa estipulada, y por fin, dar más fuerza y garantía al contrato principal.

¿Cuáles eran sus límites?—Los términos de la obligacion que garantizaba. No podia ser ni más *extensa*, ni más *intensa*.

¿Qué diferencia notable separaba una de otra obligacion?—La *adstipulacion* no era trasmisible á los herederos, como lo era la *estipulacion*; porque era aquella hija de la confianza y buena fé, cualidades personalísimas é intrasmisibles.

¿Qué utilidad produjo?—Conceder á los estipulantes ausentes un medio para que las cosas estipuladas se entregasen á una persona de su confianza, medio que se hizo inútil tan luego como se autorizó la representacion de los procuradores en los actos jurídicos.

Fiadores.

¿Qué son los *fiadores*?—Unas terceras personas que intervienen en el contrato, constituyendo una obligacion accesoría, cuyo fin es asegurar más el cumplimiento de la principal. Antiguamente llamábanse *sponsors*, *fidepromisores* y *fidejutores*, nombres que correspondian á las fórmulas de la estipulacion.

¿Qué leyes regularon esta materia?—La Apuleya (652 de la fundacion de Roma), que suponía una sociedad entre los fiadores, cuando eran varios; la Fúria (659 de id.), que limitaba su obligacion á dos años y dividía por partes iguales la responsabilidad; otra ley, cuyo nombre se ignora, que exigía la declaracion pública que debia hacer el acreedor del número de los fiadores, sin cuya circunstancia tenían éstos derecho á libertarse de la obligacion, probando, en el término de treinta dias, que aquél requisito no se había cumplido; la Publilia, que otorgaba un beneficio á los *sponsors*

solamente, y la Cornelia, que prohibía la multiplicidad de fianzas entre las mismas personas por más de 20.000 sextercios, exceptuándose las constituidas para dote, por orden del juez, y otras.

¿Qué diferencia había entre los *fidejutores* y los demás?—Distinguianse principalmente en que aquéllos podían adherirse á toda clase de obligaciones, y éstos tan sólo á las verbales; en que aquéllos transmitían su responsabilidad á los herederos, y la de éstos era puramente personal; en que la de aquéllos era perpétua, y extingible á los dos años la de éstos; y finalmente, en que aquéllos se obligaban *in solidum*, siendo más de uno, y éstos *à pro-rata*.

¿Qué obligación era la que se usaba en tiempo de Justiniano?—La *fidejussio* ó fianza.

¿Qué clase de obligaciones podían admitir la fianza?—Todas, fueran naturales, mistas, pretorias, nacidas de un contrato, de un cuasi-contrato, de un delito ó de un cuasi-delito. Una sola excepcion se reconocía; la obligación de restituir el marido la dote.

¿Es transmisible la fianza á los herederos?—Sí, porque el que contrae, contrae para sí y sus sucesores.

¿Cómo quedaban obligados los fiadores?—*In solidum*.

¿Qué beneficios les concedía el derecho?—Tres: el de *division*, el de *cession de acciones* y de *orden* ó de *excusión*. Consistía el primero en poder obligar al acreedor á que dividiere el crédito entre todos los fiadores solventes al tiempo de la contestacion de la demanda, siendo gravosa á éstos la parte correspondiente á los insolventes. Por el segundo, se consideraba al fiador como comprador y cesionario del crédito, y aún cuando lo hubiera satisfecho íntegramente, podía indemnizarse de la parte de los demás, siendo insolvente el deudor principal. Y el tercero daba derecho á impedir toda demanda contra los fiadores, antes de haber ocupado y vendido los bienes del deudor principal y de que se declarase su insolvencia.

¿Puede exceder la fianza los límites de la obligación principal?—No: «el fiador puede obligarse más *intensamente*, pero no más *extensamente* que el deudor principal».

¿Qué remedio queda al fiador que paga por el deudor?—La accion de mandato, porque se supone que entre ambos hubo un mandato tácitamente consentido.

¿Cuál era el pacto llamado *constitutum*?—Dábase este nombre á la obligación de responder por otro, constituida por un simple pacto, á que concedía el pretor la fuerza que le negaba el derecho civil.

¿Qué diferencias le separan de la fianza?—No exigía como circunstancia necesaria la estipulacion, pudiendo ser la obligación contraída por este medio más extensa que la principal.

¿Qué disponía el senado-consulto *Veleyano*?—Declaraba nulas las intercesiones que hacían las mujeres por otros, tomando sobre sí las obligaciones ajenas.

¿En qué casos no tenía lugar el senado-consulto *Veleyano*?—En los siguientes:

1.º Si el acreedor es menor de veinticinco años, é insolvente el deudor principal; de lo cual deducen algunos intérpretes que el privilegio de la edad es más fuerte que el del senado-consulto *Veleyano*.

2.º Si la intercesion ha sido por causa de la dote, para evitar que, indotadas las mujeres, hallen más dificultad en contraer matrimonio.

3.º Si la obligación de la mujer se ha contraído en favor de la libertad; decision que adoptó Justiniano, resolviendo las dudas que acerca de esto agitaban los antiguos.

4.º Si la mujer ha obrado con dolo contra el acreedor; porque el senado-consulto auxilia á las engañadas, no á las engañadoras, y protege la debilidad y no las malas artes.

5.º Si se ha convertido la obligacion en utilidad de la mujer, por faltar entónces los motivos que dieron lugar al senado consulto.

6.º Si para interceder percibió la mujer cualquiera precio; bien sea antes, bien despues de obligarse.

7.º Si recibió del deudor principal la deuda que tomó á su cargo ó que garantizó; porque entónces no corre peligro de perder lo que ya tiene percibido.

8.º Si la mujer, mayor ya de edad, al tiempo de interceder se ratificó despues de pasados dos años; porque en este caso, habiendo tenido ya bastante tiempo para conocer y meditar las consecuencias de su compromiso, debe imputarse á sí misma los perjuicios que se le originen por la repetición de sus actos, á lo que se agrega que la ley supone que la mujer más se ha obligado por su propia utilidad que por la ajena. Esto, sin embargo, no es extensivo á las intercesiones que la mujer hace á favor de su marido, aun cuando consten por escritura pública, á no ser que se pruebe claramente que se han convertido en utilidad de ella; limitación puesta para evitar los peligros en que la coaccion y el predominio de los maridos pudieran hacer caer á las mujeres.

Obligaciones literales.

¿Qué era la obligacion literal entre los romanos?—La que nacia de la misma escritura, sin considerarla como medio de prueba.

¿Qué nombres recibia este género de escritos?—Llamábanse *nomina transcriptitia*, *chirographa* y *syngraphæ*. Llamábanse *nomina transcriptitia*, las inscripciones puestas en los libros denominados *Codex*, en donde anotaban mensualmente las diferentes operaciones que hacían, tomándolas de otro de memorias ó borrador llamado *adversaria*. Cuando en ellas resultaba entregada y recibida una cantidad, habia la obligacion literal, llamada tambien *expensilatio*.

¿Era necesaria la conformidad de los libros del deudor y acreedor para la validez de la obligacion?—Es cuestionable. M. Ortolan opina negativamente, y sólo considera precisa la inscripcion en el libro del acreedor, y el consentimiento ó la orden del deudor. Generalmente se probaba la obligacion con la congruencia de ambas inscripciones.

¿Qué clase habia de *expensilationes*?—Cayo refiere dos: *de la cosa á la persona* y *de la persona á la persona*. La primera suponía una deuda anterior originada de un contrato, cuya obligacion se extinguía por el nacimiento de la literal; la segunda tenia lugar cambiando la persona del deudor.

¿Cuándo cayeron en desuso las *tabulæ* ó *codex*?—Antes de Justiniano.

¿A qué se llamaba *chirographa* y *syngraphæ*?—A las escrituras por que se obligaban los peregrinos, cuando la *expensilacion* era forma peculiar del ciudadano. El *chirographum* era el escrito firmado tan sólo por el deudor, y el *syngraphus* era el firmado por ambos, del que se repartían dos ejemplares.

¿Cuál era la circunstancia necesaria en ellos?—Que constase que se debía una cantidad, aunque no se refiriese la causa de la deuda.

¿Qué excepciones favorecian al deudor, en caso de dolo del acreedor?—La *non numeratæ pecuniæ*, y la condicion *sine causa*, ó *causa datâ*, *causa non secutâ*. La primera tenia por objeto libertar al deudor de la accion del acreedor cuando, no obstante constar la obligacion literal, no se habia entregado la cantidad que en ella se decia deber; y las demas reconocian por fin perturbar la primera y protestar la falta de entrega antes de dos años.

¿Qué tiempo duraba el derecho á interponer la primera?—Primera-mente duró cinco años; mas Justiniano lo redujo á dos.

Segun eso, ¿cómo se puede definir la obligacion literal?—«Es la que

nace del hecho de confesar uno en un documento deber á otro cierta cantidad, aún en el caso de que no la haya recibido, si no retractó la confesion dentro de dos años.

¿Qué habia de particular en esta excepcion cuando se oponia por razon de dote prometida y no entregada?—Que variaba su duracion segun la del matrimonio. Si duraba ménos de dos años, la excepcion competia por uno; si duraba más de dos, pero ménos de diez, competia por tres meses; si duraba más de diez años sin que se hubiera reclamado, quedaba el marido obligado en pena de su negligencia.

Obligaciones consensuales.

¿Cuál es la naturaleza especial de estas obligaciones?—La de nacer inmediatamente del consentimiento, sin que necesiten de un hecho ulterior que las fortalezca, produciendo obligaciones bilaterales.

¿Qué contratos se enumeran como consensuales?—La compra-venta, la locacion-conduccion, la sociedad, el mandato, el enfiteusis, y aún, segun algunos autores, la donacion, y la constitucion de la dote.

¿Qué contrato dió origen á la compra-venta?—La permuta, que no pudiendo satisfacer todas las necesidades, se vencieron los inconvenientes que presentaba creando una mercancía de un valor igual para todos, llamada moneda, por la que se cambiaban las cosas, recibiendo el contrato el nombre de compra-venta.

¿Cómo puede definirse?—«Contrato consensual bilateral, por el que uno se obliga á trasferir á otro una cosa por el precio que éste se compromete á pagar.» Llámase comprador al que da dinero, vendedor al que da la cosa y precio á la cantidad que se entrega.

¿Cuándo se perfecciona este contrato?—Tan pronto como se convienen las partes en la cosa y en el precio.

¿Cuándo se consuma?—Con la entrega del precio y de la cosa.

¿Cuáles son sus requisitos esenciales?—El consentimiento, la cosa y el precio.

¿Qué circunstancias debe tener la cosa?—Debe ser cierta en cuanto á la especie; estar en el comercio, aunque no sea del vendedor, en cuyo caso puede prescribirla el comprador, y ser de las que puedan existir, aunque realmente no existan.

¿Qué situaciones puede crear la última circunstancia?—Dos, segun que el contrato dependa de la futura existencia de la cosa, ó se acepte á manera de un juego de azar. En la primera, el contrato no tiene efectos si la cosa no llega á existir; en la segunda es siempre eficaz, pues el comprador adquiere una esperanza.

¿Qué son las arras?—La cantidad ú objeto que una de las partes, y frecuentemente el comprador, entrega al vendedor en prueba de haberse hecho el contrato.

¿En qué casos pueden retractarse los contrayentes?—Cuando, habiéndose convenido el otorgamiento de una escritura, ésta no está aún confeccionada; no obstante que, si en él intervienen arras, las pierde el comprador retractado, y su valor duplo, el vendedor que se retracta.

¿En qué conceptos pueden intervenir las arras?—No sólo como prueba del contrato, sino como medio de facilitar la retractacion.

¿Qué circunstancias debe tener el precio?—Debe ser cierto; esto es, fijado absoluta ó relativamente, verdadero y justo y, lo que viene á ser lo mismo, proporcionado al valor de la cosa, á fin de evitar la rescision del contrato por la lesion que en él puede sufrirse. Debe consistir precisamente en dinero.

¿Puede fijarlo uno de los contrayentes ó un tercero?—Uno de los contrayentes no, porque estaria á su libre arbitrio el contrato; pero sí un

tercero, siendo válida la venta con tal que la fijacion llegue á tener lugar.

¿Qué acciones nacen de la compra-venta?—Dos, llamadas *empti* ó *ex empto* y *venditi* ó *ex vendito*.

¿Cómo se define la primera?—«La que compete al comprador y á su heredero contra el vendedor y el suyo, pagado el precio, para que le entreguen la cosa vendida con sus accesiones y frutos, si pueden entregársela; y si no pueden, que le satisfagan los daños y perjuicios.»

¿Cómo se define la segunda?—«La que compete al vendedor ó su heredero, entregada ya la cosa, contra el comprador y su heredero, para que le paguen el precio convenido y le hagan dueño de él, entreguen las usuras desde que debieron hacer el pago y no lo hicieron, y le resarzan de los gastos necesarios y útiles y de los perjuicios que se han ocasionado por la conservacion de la cosa.»

¿Se libera el vendedor ofreciendo la estimacion de la cosa?—No; debe entregar la misma estipulada.

¿Qué debe entenderse por accesiones de la cosa?—Las que están ligadas á ella, ó destinadas á su uso constante, como las cañerías, alcantarillas, huertos, patios, llaves, tejas, etc.

¿A quién pertenece el peligro y favorece el beneficio de la cosa vendida y no entregada?—El peligro pertenece al comprador si la cosa vendida es la especie, porque el deudor de especie se libera cuando ésta perece; si se vendió el género, el vendedor continúa obligado, porque el género nunca perece; doctrina inaplicable cuando el menoscabo ó pérdida de la cosa proviene del dolo ó negligencia del vendedor, en cuyo caso á él serian imputables. Las mismas reglas se siguen cuando en vez de perjudicarse se benefician las cosas vendidas.

¿En qué formas puede contraerse la compra venta?—Puramente y bajo condicion suspensiva ó resolutoria.

¿Qué pactos solian modificar los efectos del contrato?—Principalmente tres, llamados de *adicion en día*, *ley comisoria* y *retroventa*.

¿En qué consiste el primero?—En convenir en que «si en un término dado encuentra el vendedor quien haga mejores condiciones que aquéllas á que está obligado el comprador, el contrato, ó no se perfecciona, ó se rescinde.»

¿Cómo se define el de la *ley comisoria*?—«La cláusula ó pacto puesto en el contrato en virtud de la que, si uno de los contrayentes falta por su parte al contrato, se considera éste como no efectuado.»

¿Qué es la *retroventa*?—Una condicion resolutoria del contrato, en virtud de la cual el vendedor puede volver á adquirir la cosa vendida si reembolsa al comprador el precio, dentro de un término señalado.

¿En qué consisten las acciones *redhibitoria* y *quanti minoris*?—La primera «compete al comprador que ha sido engañado y á su heredero contra el vendedor y el suyo, para que le restituyan el precio y sus intereses y reciban la cosa vendida con sus frutos y accesiones;» la segunda «compete al comprador engañado y á su heredero contra el vendedor y el suyo, para que le restituyan tanta parte del precio cuanto menos valía la cosa al tiempo de hacerse la venta.»

¿En qué se diferencian?—No sólo en sus efectos, como queda indicado, sino en el tiempo de su duracion, puesto que la primera dura seis meses y la segunda un año.

¿Qué es *lesion*?—La desproporcion entre el precio y la cosa, ó lo que es lo mismo, entre el valor verdadero y el convencional de las cosas.

¿Qué accion habia para reclamarla?—La del mismo contrato, con el carácter de restitucion *in integrum*.

¿Cuál era su objeto?—La rescision del contrato.

¿Cuándo tenía lugar?—Si la desproporcion consistia en más de la mitad del justo precio.

¿Qué se entiende por *eviccion*?—«La privacion de la cosa vendida, á causa de haber sido reivindicada por un tercero en juicio fallado á su favor.»

¿Cuál es su objeto?—Indemnizar al comprador privado de la cosa.

¿Cuándo tiene lugar?—Llenándose los siguientes requisitos: 1.º, que haya sido privado de la cosa el comprador por una sentencia justa, de cuya decision no tenga culpa; 2.º, que la causa de la eviccion sea anterior al derecho del comprador, y 3.º, que éste haya citado al vendedor al pleito, si es posible, cuando éste no haya renunciado á tal derecho.

Locacion-conduccion.

¿Qué es *locacion-conduccion*?—«El contrato en que uno de los contrayentes se obliga á dar á otro el uso de una cosa, ó á hacer ciertas obras, ó á prestar ciertos servicios, y el otro á pagarle una merced determinada consistente en dinero.»

¿Cuáles son sus requisitos esenciales?—El consentimiento, la cosa ó hecho, y la merced, consistente en dinero.

¿Qué nombre reciben los contrayentes cuando la locacion es de cosas?—Si es una finca urbana la arrendada, se llama *inquilino* al que la toma; si es rústica, *colono* ó *arrendatario*; y *alquilador* al que da en arrendamiento cosas muebles; llámase *empresario* ó *asentista* al que arrienda las rentas públicas; la merced se denomina *alquiler*, *renta*, *arrendamiento* ó *inquilinato* en las fincas urbanas, *renta* simplemente en las rústicas y tambien *alquiler* en las muebles. El arrendamiento de las embarcaciones recibe el nombre de *fletamento*, el de *fletante* el que las da, *fletador* el que las recibe, y *flete* la merced.

¿Qué nombres se usan en el arrendamiento de servicios?—Llámase *criado* ó *sirviente* al que los presta, *amo* ó *señor* al que los recibe, y *salario*, *suelo* ó *jornal* á la merced.

¿Cuál es la naturaleza de este contrato?—El perfeccionarse, como la compra-venta, tan luego como se conviene en la cosa arrendada y en la merced, por lo que se llama *consensual*.

¿En qué se diferencia de la compra-venta?—En que en el arrendamiento no se trasmite la propiedad de la cosa ni la facultad de prescribir, sino la de usarla por determinado tiempo.

¿Debe consistir en dinero la *merced*?—Sí, por ser esta circunstancia esencial al contrato, segun queda dicho.

¿Qué obligaciones y acciones nacen de este contrato?—El locador y sus herederos tienen contra el conductor y los suyos la accion llamada *locati*, para que cumplan las obligaciones convenidas en el contrato; y al conductor y sus herederos les corresponde la nombrada *conducti* contra aquéllos, para el cumplimiento de las que les corresponden. Las obligaciones varían segun las clases de arrendamiento. En el de cosas, el dueño debe entregarlas al arrendatario, y asegurárselas durante el tiempo del contrato; pagar las cargas que sobre ellas pesen, si no hubo pacto en contrario, y abonar á éste los gastos necesarios. Cuando la cosa es una finca urbana, el dueño puede hacerla desalojar probando que la necesita para habitarla él ó su familia, para hacer en ella reparos, ó cuando el arrendatario la usa mal.

¿El arrendatario está obligado á pagar la pension convenida en la forma en que lo fuere, y á devolver la cosa al cumplimiento del tiempo y no antes?—Tiene derecho á una rebaja proporcional de la renta siempre que por caso fortuito perdiere considerable parte de los frutos, antes de percibirlos, y á subarrendar la finca.

¿Qué regla se sigue en el arrendamiento de obras y servicios?—La voluntad de los otorgantes es la ley del contrato, que debe ser cumplida bien y fielmente.

¿Qué clase de culpa se presta en él?—Todas, y aún la custodia en el arrendamiento de cosas; mas no en el caso fortuito, salvo pacto en contrario.

¿En qué casos termina este contrato?—El texto citado los enumera en la forma siguiente:

1.º Por haber transcurrido el tiempo prefijado. Si pasado este término continúa el arrendatario con ciencia y paciencia del dueño, se entiende que hay una novación del contrato con las mismas condiciones que tenía el antiguo; y no habiendo convenio sobre la duración, ni una costumbre local que la fije, se considera en las fincas rústicas renovado por un año, y en las urbanas hasta que el inquilino se despida ó sea despedido.

2.º Por cesación del dueño en la propiedad que sólo disfrutaba temporalmente. El arrendatario que tenía conocimiento de esta circunstancia no puede pedir el rescamiento de daños y perjuicios.

3.º Por la pérdida de la cosa dada en arrendamiento, acaecida por caso fortuito; porque, si ha sobrevenido por culpa de una de las partes, ésta, en virtud de la acción nacida del mismo contrato, estará obligada á indemnizar á la otra.

4.º Por sentencia dada, ó en virtud de abusos cometidos por el arrendatario, ó por no pagar en dos años el arrendamiento.

5.º Por sentencia pronunciada, ó porque el dueño no cumpla las leyes y condiciones del contrato, ó porque pruebe que le es indispensable el uso de la cosa arrendada en los términos que antes se ha expuesto.

6.º Por separarse las partes por mútuo consentimiento de la obligación, cosa no peculiar á este contrato, sino general á todos los consensuales, como se expondrá más adelante.

7.º Por la venta de la cosa cuando el dueño no estipula con el comprador la continuación del arrendamiento, lo cual no impide que en este caso el arrendatario pueda obtener la debida indemnización por la acción *conducti* del antiguo dueño que le cause semejante perjuicio.

La locación-conducción de una obra termina por la conclusión de ésta y por la muerte del que la tomó á su cargo; porque, como queda dicho, su industria es la causa que hubo para elegirlo. La locación-conducción de servicios concluye por la muerte del que debía prestarlos.

Enfiteusis.

¿Qué es el *enfiteusis*?—Un contrato consensual por el que uno entrega á otro una heredad perpétuamente, para que la use y disfrute, mediante el pago de una pensión ó cánón que debe entregar al dueño en reconocimiento del dominio.

¿Cuál fué su origen?—Los arrendamientos que el Estado ó los municipios hacían de los terrenos públicos por una renta llamada *vectigal*, á consecuencia de no serles posible trabajar por sí las grandes extensiones de territorio que poseían incultas.

¿Qué carácter tenía antiguamente?—Considerábase como un contrato de arrendamiento, hasta que el emperador Zenon le dió vida propia, llamándose *enfiteusis*, palabra griega que significa plantación.

¿Qué obligaciones nacen de ese contrato?—El enfiteuta debe pagar la pensión estipulada, sin consideración á la pérdida de los frutos, conservando el derecho de ser mantenido en la finca, á no ser que dejare de hacerlo en tres anualidades, que se reducen á dos, si el dueño es la Iglesia; debe pagar también las cargas é impuestos de la finca. El dueño está obligado á entregarla al enfiteuta y no interrumpirle en su pacífico goce.

¿Qué derechos tenían uno y otro?—El enfiteuta, el de percibir los frutos, variar el predio sin deteriorarlo, ceder su derecho á terceros é imponer sobre él servidumbres. El dueño tiene el derecho de *tanteo*, que con-

siste en ser preferido por el tanto á otro comprador, para lo cual debe avisarle el enfiteuta, teniendo aquél dos meses de término para decidirse, pasados los cuales se considera renunciado; el de *laudemio*, que consiste en el pago de la quincuagésima parte del precio que debe hacer todo nuevo adquirente en reconocimiento del dominio, del cual sólo están exceptuados los herederos del enfiteuta.

¿Qué acciones produce?—Dos directas, llamadas *enfiteuticarias*. Por ellas ambos contrayentes pueden reclamar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

¿El cánón ó pension debe ser proporcionado á las utilidades de la finca?—No, porque se da sólo en concepto del reconocimiento del dominio.

¿Cuándo termina el contrato?—Por la muerte del enfiteuta que no deja herederos, por la prescripción, por la renuncia, por la terminación del tiempo si es temporal, y por la falta de pago de tres anualidades en los términos indicados antes.

De la superficie.

¿A qué se llama superficie?—A todo lo que, sobresaliendo del suelo, forma, no obstante parte de él. Puede cederse el disfrute de la superficie, reteniéndolo el dominio de la finca el mismo propietario.

¿En qué se diferencia este derecho de las servidumbres?—Se distingue de las personales en que es transmisible á los herederos; y de las prediales, en que puede constituirse á favor de una persona.

¿Cómo se constituye este derecho?—Por contrato y por última voluntad.

¿Qué derechos adquiere el superficiario?—Puede disponer de la superficie segun le acomode y transmitirla á sus herederos, hipotecarla durante su derecho é imponerle servidumbres.

¿Qué deberes le son consiguientes?—Satisfacer las cargas que sobre ella pesen, porque el que se aprovecha de los productos debe pagar las cargas.

Sociedad.

¿Qué es la sociedad?—Un contrato bilateral perfecto por el que dos ó más personas convienen en formar un fondo de capitales ó de industria con objeto de lucrar y de repartir los beneficios ó pérdidas que resulten.

¿Cómo se perfecciona este contrato?—Con el consentimiento de los socios en el objeto y condiciones de la sociedad.

¿En qué se diferencia de la *comunion* de bienes?—En que la sociedad nace únicamente del consentimiento, y la comunidad es consecuencia de la sociedad ó de un hecho ajeno, como sucede con los coherederos y colegatarios.

¿Qué clases hay de sociedades?—Cinco: universal de bienes, universal de ganancias, la de determinadas negociaciones, la que se constituye para uno ó más objetos determinados y la establecida para el arrendamiento de las rentas públicas, llamada *vectigalis*.

¿Qué comprende la universal de bienes?—Todos los presentes y futuros de los socios; sus productos y adquisiciones por su industria, de los que deben satisfacerse las obligaciones, cargas y condenaciones de los socios, siempre que éstas no sean efecto de un hecho ilícito.

¿Qué comprende la de todas las ganancias?—Las que tengan los socios por su industria, su economía ó su trabajo despues de constituida la sociedad, que responderá de las deudas originadas desde esta época y para negocios beneficiosos.

¿Cuál es la de una negociacion determinada?—La que se forma, por ejemplo, para comprar y vender aceites, vinos, granos, etc.

¿Cuál la de un objeto dado?—La que se contrae para uno sólo, como la explotacion de determinada mina.

¿Cuál es la ordinaria?—La de todas las ganancias, la cual se presume no constando otra cosa.

¿Qué reglas deben tenerse presentes para la distribucion de ganancias y pérdidas?—Tres: 1.^a, cuando nada se ha prefijado, unas y otras se repartirán igualmente; 2.^a, cuando se estipuló algo acerca de esto, la voluntad de las partes debe ser la ley; y 3.^a, que expresada solamente la distribucion de ganancias, debe entenderse la misma en las pérdidas, y vice-versa.

¿Qué clase de socios puede haber?—Capitalistas é industriales. Los primeros aportan el capital; los segundos su industria, de más valor á veces que el capital.

¿A qué se daba el nombre de sociedad *leonina*?—A aquella en que algun sócio no tenía opcion aparte en las ganancias.

¿Pueden gravar sobre un sócio todos los daños y adjudicarle una pequeña parte de ganancia?—Sí.

¿Cómo termina la sociedad?—Además de disolverse por los medios comunes á todos los contratos, termina por la renuncia, que no sea fraudulenta é intempestiva, de uno de los socios; por su muerte; la conclusion del objeto para que se formó; la confiscacion y la cesion de bienes.

¿Por qué la renuncia y la muerte de un sócio disuelven la sociedad?—Porque contrayéndose en consideracion á las cualidades personales de los socios, desapareciendo uno de ellos, faltan los motivos que se han tenido presentes en la constitucion. Debe notarse, apesar de ello, que se exceptúa de esta regla la sociedad formada para el cobro de impuestos públicos, que puede continuar con los herederos del sócio difunto.

¿Qué derechos y obligaciones nacen de este contrato para los socios?—Siete: «1.^o, participar de las ganancias de la sociedad en los términos que antes quedan expuestos; 2.^o, ser indemnizados por los demás consocios respectivamente de los daños que se les originen, ó por no haber aportado éstos á la sociedad el capital en que convinieron, ó por haber empleado en su uso personal las cosas que eran comunes á la sociedad, ó por haber demorado el restituirlas; 3.^o, obtener una indemnizacion por la falta leve *in concreto* de los otros asociados; 4.^o, renunciar oportunamente á la sociedad en los términos ya expuestos; 5.^o, ser indemnizados proporcionalmente de las pérdidas, gastos y obligaciones que les haya ocasionado la sociedad; 6.^o, exigir cuentas á los que hayan administrado los negocios de la sociedad; 7.^o, gozar del beneficio llamado *de competencia*, esto es, no ser obligados á pagar lo que adeuden á la sociedad sino en cuanto puedan, y reteniendo lo necesario para subsistir *in quantum facere potes*».

Estos derechos se convierten en obligaciones mutuas entre los socios, por lo mismo que á todos se refieren.

¿Qué accion tienen para hacerlas cumplir?—Una directa, llamada *pro sócio*, que «compete á todos y á cada uno y á sus herederos contra otro y los suyos, para que se cumplan las obligaciones y se hagan efectivos los derechos que resultan del contrato de sociedad».

Mandato.

¿Qué es el *mandato*?—Un contrato consensual bilateral imperfecto por el que una persona encarga un negocio lícito á otra que lo acepta gratuitamente. La primera se llama *mandante*, y *mandatario* la segunda.

Antiguamente no se podia contraer, porque nadie podia adquirir derechos para otro, teniendo que recurrir á rodeos y acciones *útiles*.

¿Cuál es su carácter distintivo?—El ser gratuito; pues no siéndolo, degenera en arrendamiento.

¿De cuántas maneras se puede contraer?—De seis: en utilidad del mandante, en la del mandante y mandatario, en la de un tercero, en la del mandante y un tercero, en la del tercero y el mandatario, y en la del mandante, mandatario y un tercero.

¿Qué otra division puede hacerse de él?—Puede ser *general* y *especial*, segun que comprenda todos los negocios ó uno sólo; *expreso* y *tácito*, segun que la voluntad se manifieste de palabra ó por hechos; y *judicial* ó *extrajudicial*.

¿Por qué no es mandato el que redundo sólo en beneficio del mandatario?—Porque es más bien un consejo con forma de mandato, que no obliga al que lo dá.

¿Cuándo valia el mandato sólo en utilidad de un tercero?—Cuando el mandatario, apesar de no estar obligado, cumplia el encargo.

¿Puede traspasar el mandatario los términos del mandato?—No, siendo irresponsable el mandante de lo hecho fuera de aquéllos.

¿Qué acciones nacen del mandato?—Una *directa* que compete al mandante y sus herederos contra el mandatario y los suyos, para que éste cumpla y haga el negocio que tomó á su cargo, entregue la cosa adquirida y los frutos, dé cuentas y preste toda clase de culpas. Puede nacer otra *contraria* á favor del mandatario y contra el mandante, para conseguir la indemnizacion de los gastos ocasionados en el cumplimiento del mandato.

¿Qué modos peculiares de disolucion reconoce este contrato?—Cuatro, ademas de los comunes á todos: la revocacion ó la muerte del mandante, y la renuncia ó la muerte del mandatario.

¿Cuándo debe hacerse la revocacion?—Estando aún íntegra la cosa.

¿Qué causas justifican la renuncia intempestiva?—La enfermedad del mandatario, su enemistad capital con el mandante, la insolvencia de éste y el viaje necesario de aquél.

¿Cómo puede contraerse el mandato ademas de las formas expuestas?—Puramente ó bajo condicion.

Quasi-contratos.

¿Qué son los *quasi-contratos*?—Ciertas obligaciones dimanadas del consentimiento presunto, que producen efectos análogos á las que provienen de los contratos y son de un carácter semejante.

¿Cuál es el fundamento legal de la presuncion?—Fúndase en que nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro, en que todos consienten en lo que les trae utilidad y en que el que acepta las consecuencias no puede rechazar los antecedentes.

¿Por qué se llaman *quasi-contratos*?—Por la semejanza que tienen con los contratos, cuyo nombre fué desconocido entre los romanos.

¿Cuáles son los principales *quasi-contratos*?—La gestion de los negocios ajenos (*negotiorum gestio*), la tutela, la comunion de bienes, la adiccion de la herencia y el pago de lo indebido por error.

¿Cuándo tiene lugar la *gerencia de negocios ajenos*?—Cuando alguno se encarga de la administracion de los bienes de otro, de quien no ha recibido mandato, é ignora tal cometido.

¿Qué acciones produce?—Puede producir dos, y siempre origina una *directa*, que compete á aquél cuyos derechos son administrados y sus herederos contra el gerente y los suyos, para que le den cuentas entreguen lo que corresponda y resarzan el daño ocasionado por cualquiera culpa. Puede nacer otra *contraria*, que compete al gestor contra el dueño de los

bienes administrados, para ser indemnizado de los gastos necesarios ó útiles que hubiere hecho en la cosa.

¿Qué culpa se presta en este cuasi-contrato?—La culpa leve en abstracto.

¿Cuándo tiene lugar el cuasi-contrato de tutela?—Desde el momento en que el tutor se encarga de ella, contrae sin necesidad de consentimiento expreso ni tácito la responsabilidad que pesa sobre todo el que administra negocios ajenos.

Acerca de las acciones que produce este cuasi-contrato, su naturaleza y extension, queda indicado bastante en el libro de las personas.

¿Cuándo tiene lugar el cuasi-contrato de la comunión de bienes?—Cuando la propiedad ó la herencia pertenece á más de una persona por cualquiera concepto que no sea el contrato de sociedad.

¿Qué acciones nacen de él?—Si la comunidad es en la herencia, la llamada *familie erciscunde*; y si es en la propiedad *communi dividunde*. Ambas tienen por fin dividir la cosa común, repartir el lucro, las pérdidas y los gastos.

¿Cuándo existe el cuasi-contrato de la adición de la herencia?—Desde el momento de la aceptación del heredero, que hace presumir su intención de cumplir las disposiciones testamentarias.

¿En qué se funda?—En la utilidad que el mismo reporta y hace recaer en los que algo esperan del testamento.

¿Cuándo se dice que existe el cuasi-contrato del pago de lo indebido por error?—Cuando se da en pago á alguno una cantidad, en la creencia falsa de que se adeuda.

¿Qué obligación y acción produce?—La de devolver la cantidad pagada á medio de la *condictio indebiti*.

¿En qué se funda este cuasi-contrato?—En que, si bien no hubo consentimiento manifiesto, el principio moral de que nadie debe enriquecerse con perjuicio de otro, y á que la ley supone que el hombre no quiere faltar, induce la presunción de que se obliga á restituir lo que se le entrega por error.

¿Qué clase de error debe existir?—El de hecho, pues el de derecho á nadie aprovecha.

¿En qué clases de obligaciones tiene lugar este cuasi-contrato?—En las meramente civiles y en las mistas, equiparándose las primeras á las segundas, porque pueden ser eludidas por una excepción perpétua.

¿Nace esta obligación en las naturales?—Sí, porque éstas, por más que les falte alguna fórmula ó exigencia del derecho, no pueden desconocerse que contienen una obligación que sanciona el principio de que nadie debe lucrarse con daño de otro.

¿En qué casos no hay lugar á la petición, apesar de haberse pagado lo que no se debía?—Cuando se paga al pupilo ó al loco, porque como éstos no pueden obligarse, sólo podrá repetirse contra ellos en cuanto se hiciesen más ricos con el pago, al contestar á la demanda; cuando se paga por resultado de una transacción, ó se entregan legados á lugares venerables, iglesias y hospitales.

Personas por las que se adquieren las obligaciones.

¿Por qué personas se podían adquirir las obligaciones?—No sólo por las mismas que las contraían, sino por las que estaban en su poder, como los hijos y los esclavos, y las que no lo estaban, libres y ajenas, en determinados casos.

¿Cuál era la razón de este derecho?—La consideración de cosas que tenían los esclavos, y los derechos limitados de los hijos, que quedan expuestos al tratar de los peculios.

¿En qué casos se adquirían las obligaciones por los esclavos ajenos?—Cuando, poseyéndolos de buena fé un tercero, la adquisicion procedía de sus trabajos ó de una cosa de éste. Con las mismas circunstancias se adquirían por medio de los esclavos en que se tenía el usufructo ó el uso.

Disolucion de las obligaciones.

¿Cuándo se extingue una obligacion?—Cuando por cualquiera causa se hace ineficaz el derecho del acreedor.

¿De cuántos modos puede esto suceder?—De dos; *ipso jure* ú *ope exceptionis*. *Ipso jure*, cuando no queda accion civil alguna para reclamar la obligacion; y *ope exceptionis*, cuando, sin extinguirse en su origen, tiene el deudor una justa defensa que oponerles.

¿Qué efectos producen ambos?—El de hacer ineficaz la accion del acreedor, desde luego y directamente el primero, é indirectamente el segundo.

¿Cuántos y cuáles son los modos *ipso jure*?—Siete: el pago, la aceptilacion, la novacion, el mútuo disentimiento, la pérdida de la cosa, la confusion y la concurrencia de dos causas lucrativas.

¿Cuántos y cuáles son los modos *ope exceptionis*?—Cinco: la remision, el pacto *constitutum*, la compensacion, la prescripcion y la restitution *in integrum*.

¿En qué consiste la paga?—«En la realizacion del hecho, ó en la entrega de la cosa objeto de la obligacion.»

¿Quién puede pagar?—Cualquiera que tenga intencion de extinguir la obligacion, libertando de ella al deudor.

¿Qué efectos produce?—La desaparicion de la deuda y el nacimiento de una nueva obligacion á favor del que paga y contra el deudor, á no ser que hubiera pagado contra la voluntad de éste.

¿A quién ha de hacerse el pago?—Al acreedor ó su apoderado.

¿De qué modo debe hacerse?—No puede pagarse una cosa por otra, ni prestarse un hecho por otro, sin consentimiento del acreedor, salvo determinadas excepciones. Debe cumplirse la obligacion en el término y lugar convenidos, hacerse el pago en totalidad, á menos que consienta en lo contrario el acreedor, excepto cuando el deudor goza del beneficio de competencia.

¿En qué casos no debe entregarse la misma cosa?—No debe entregarse cuando ha perecido, por la imposibilidad material de hacerlo, siendo ajena y el dueño no quiere cederla; cuando forma parte de otra indivisible ó de division perjudicial; y en otros casos análogos en que la imposibilidad predomine, como sucede en las obligaciones de hacer, que, no cumpliéndose, se resuelven en otras de daños y perjuicios.

¿Por qué el pago debe hacerse íntegro?—Porque verificado por partes puede ocasionar perjuicios al acreedor; razon porque, no siendo á su satisfaccion, no es obligatorio el recibirlo.

Ignorando ó no consintiendo el deudor el pago de un tercero, ¿podía ser compelido el acreedor á recibirlo?—No; mas podría ofrecer aquél el pago y consignarlo á fin de extinguir la obligacion, llenando todos los requisitos ante la autoridad judicial cuando la deuda consistia en dinero. Este remedio no surtía efecto legal si el acreedor tenía motivo justo para rehusar el pago.

¿En qué consiste la *acceptilacion*?—Es un pago imaginario que tiene por objeto disolver las obligaciones verbales, dándose el acreedor por recibido de lo mismo que se le debe. Llámase imaginario, porque en realidad nada se paga; y se distingue de la verdadera paga, en que la *acceptilacion* no admite ningun género de representacion, debiendo hacerse por el mismo deudor.

¿Cómo se amplió la aceptilación á las demás clases de obligaciones?—Por medio de la aceptilación aquiliana, que consistía en una fórmula por la que se reducían á estipulaciones todos los contratos, y luego se disolvían por la aceptilación, que, como hemos dicho, era modo especial de disolverse los verbales.

¿Qué es la *novación*?—«La trasformación de una obligación en otra.» Es de dos clases; *voluntaria* y *necesaria*: aquella es hija de la voluntad de las partes; ésta se deduce de la contestación á la demanda ó de la sentencia del juez.

¿Qué requisitos debe tener la voluntaria?—Para que tenga lugar son necesarias cuatro circunstancias: 1.^a, una obligación válida y preexistente; 2.^a, la voluntad de las partes expresada en un contrato verbal; 3.^a, la intención de trasformarla, y 4.^a, una obligación nueva y válida.

¿Qué obligaciones pueden ser objeto de esta novación?—Todas, cualesquiera que sea su origen.

¿Cuándo tenía lugar la novación necesaria?—Con la contestación á la demanda, pues se extinguía la primera obligación y nacía otra que pasaba á novarse con la sentencia.

¿Qué efectos producía?—Diversos, según que el juicio fuera legítimo ó *imperio continentia*. En los primeros, la novación tenía lugar *ipso jure*; en los segundos, *ope exceptionis*.

¿De cuántos modos puede hacerse la novación?—De tres: 1.^o, variando la obligación permaneciendo en ella las mismas personas; 2.^o, cambiando solamente la persona del deudor, bien entre el acreedor y el nuevo deudor, bien transmitiendo el antiguo la deuda al nuevo, en cuyos casos recibe los nombres de *expromision* y *delegación* respectivamente; 3.^o, cambiando la persona del acreedor únicamente, consintiendo el deudor.

¿En qué se diferencia de la cesión de acciones?—En que ésta no es novación, ni el deudor se libera del antiguo acreedor.

¿En qué consiste el *mútuo disenso*?—En convenir en desatar la obligación contraída, porque nada más natural que las obligaciones se disuelvan del mismo modo que se han contraído.

¿Qué clases de obligaciones se disuelven por este medio?—Las consensuales y las naturales, que se sostienen sólo por la equidad.

¿Cuándo puede tener lugar?—Siempre que el contrato no haya comenzado á tener ejecución, pues entonces ya no es el consentimiento lo que hay que destruir, sino un hecho posterior.

¿Cuándo concluye la obligación por la pérdida de la cosa debida?—Cuando, debiéndose la especie, la cosa perece sin culpa ó dolo del deudor. Si se debe el género ó cantidad, no se extingue la obligación, porque el género nunca perece. Cuando, siendo la obligación alternativa, perecen todas las cosas que se deben, también termina la obligación.

¿Cómo se resuelve el caso mediando dolo ó culpa?—Si es imputable al acreedor, se extingue la obligación; si al deudor, debe satisfacer el valor de lo debido; y siendo la obligación alternativa y la elección del acreedor, podía pedir ó la cosa que existiera ó el valor de la extinguida. Compitiendo la elección al deudor, sólo podía demandar la existente.

¿Cuándo tiene lugar la confusión?—Siempre que se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor.

¿Por qué se extingue entonces la obligación?—Por la imposibilidad de ejercitar acciones contra sí mismo.

Obligaciones nacidas del delito.

¿Qué es delito?—La contravención voluntaria á una ley penal. De su comisión nacen dos responsabilidades: una *civil* para reparar en lo posible el daño causado, y otra *penal* para sufrir el castigo consiguiente.

¿Cómo se dividen los delitos?—En *públicos* y *privados*.

¿Cuáles eran los delitos públicos?—Aquéllos que podían ser perseguidos por todos los ciudadanos ante tribunales especiales, y estaban castigados con penas corporales.

¿Cuáles eran los privados?—Los que sólo podían perseguirse por los perjudicados ante los mismos tribunales que entendían en lo civil, y eran castigados con penas pecuniarias, que se destinaban al ofendido.

¿Qué delitos son los que se consideran como fuentes de obligaciones, y por qué?—Los privados, porque la afrenta que en ellos se hace á la persona, origina el deber de repararla.

¿En qué se diferencian las obligaciones dimanadas de los delitos y cuasi-delitos, de las que deben origen á los contratos y cuasi-contratos?—En que éstas nacen del consentimiento tácito, expreso ó presunto, y aquéllas, no sólo no lo requieren, sino que existen apesar del disentiimiento del delincuente.

¿Qué delitos eran los considerados como privados en Roma?—Principalmente el hurto, robo, el daño hecho contra justicia y la injuria.

¿Qué era el hurto?—La sustraccion fraudulenta de una cosa del lugar en que estaba para reportar lucro, ó bien de la misma cosa, ó bien de su uso y posesion. De aquí se infiere que este delito no puede tener lugar en las cosas inmuebles, porque no pueden moverse de un lugar á otro; que la sustraccion ha de ser dolosa, no violenta; pues, siéndolo, degeneraría en rapiña.

¿Qué clases habia de hurto?—Manifiesto y no manifiesto, *prohibitum* y *non exhibitum*, y algunos añaden *conceptum* y *oblatum*, si bien éstos pueden considerarse más bien como especie de acciones del hurto.

¿A quién se llamaba ladrón manifiesto?—Al que era sorprendido con la cosa hurtada, antes de llegar al sitio á donde quería llevarla. La aprehension del ladrón manifiesto, caracterizaba el hurto.

¿A qué se llamaba hurto no manifiesto?—A toda sustraccion fraudulenta que no reunía las circunstancias del manifiesto.

¿Cuándo tenia lugar el *conceptum*?—Cuando ha sido buscada y encontrada la cosa en casa de alguno y á presencia de testigos. Los juriscónsultos refieren que estas investigaciones debían hacerse con el cuerpo desnudo, y llevando en la cara una vasija horadada, á fin de evitar la sospecha de que se ocultase tras de las ropas lo mismo que se iba buscando.

¿Qué nombre recibia la accion que se daba contra el hurtador?—Llamábase *furti-concepti*.

¿Cuándo se efectuaba el *oblatum*?—Cuando alguno, sabiendo que la cosa era hurtada, la entregaba á otro para que apareciera en su poder. Este tenia contra aquél la accion del triplo, llamada *furti-oblati*.

¿Cuándo se daba la accion *furti-prohibiti*?—Siempre que alguno se oponia á que se buscara en su casa y á presencia de testigos la cosa hurtada; su objeto era la imposicion de la pena del cuádruplo.

¿Cuándo nacia la *furti non-exhibite*?—Cuando, siendo alguno requerido, se negaba á presentar la cosa hurtada. Se ignora la pena.

¿Cuándo desaparecieron estas acciones?—Antes de Justiniano, quedando sólo la de hurto no manifiesto.

¿Cómo se castigaba el hurto manifiesto y el no manifiesto?—El primero con el cuádruplo, y el segundo con el duplo de los perjuicios ocasionados al perjudicado.

¿Cuándo tenia lugar el hurto de *uso*?—Cuando el acreedor *pignoraticio*, el depositario ó el comodatario destinaban la cosa dada en prenda, depósito ó comodato, á usos diferentes de los que les marcaba la naturaleza de sus respectivas obligaciones.

¿A qué tendia y cuando tenia lugar la accion *servi corrupti*?—Nacia por

el hecho de aconsejar mal y tratar de seducir á los esclavos, y tenía por fin conseguir el duplo para el dueño del esclavo.

¿Será hurto la sustraccion que el deudor hace de la cosa que ha dado en prenda?—Sí, porque si bien la cosa era suya, lesiona un derecho ajeno.

¿Qué circunstancias debian mediar para que la complicidad en el hurto se castigara?—Dos; la cooperacion y la intencion.

¿El esclavo y el hijo de familia que sustraian las cosas de sus amos y padres cometian hurto?—No, porque siendo los jefes la única personalidad jurídica de la familia que las absorbía todas, no podía entablar accion contra sí mismo. Pero el cómplice en el delito, era castigado.

¿A quiénes competia la accion de hurto?—A todos los que tenían interés en que la cosa no se hurtase, como el acreedor pignoraticio, etc., y estaban en posesion de ella, ó eran responsables de la misma, al tiempo de cometerse el delito.

¿Qué particularidad habia en el hurto de las cosas dadas en comodato?—Que el dueño podía elegir entre la accion de comodato y la de hurto; pero, una vez ejercitada ésta, era irresponsable el comodatario, y usando de aquélla, no podía hechar mano de la de hurto, que correspondia al dueño.

¿Tenía el depositario la accion de hurto?—No, porque sólo era responsable por el dolo que cometia, no siendo, por regla general, custodio.

¿Cometian hurto los impúberos?—Como que no hay delito sin intencion, lo cometian únicamente los próximos á la pubertad, á quiénes se suponía ya con discernimiento bastante para comprender las acciones.

¿Cómo puede definirse la accion de hurto?—«Es la que competia á aquél á quien interesa que la cosa no hubiera sido hurtada y sus sucesores, contra cada uno de los autores y cómplices del hurto, para que paguen respectivamente el cuádruplo ó el duplo, segun sea ó no el hurto manifestado.»

¿Qué otras acciones tiene el perjudicado además de la de hurto?—La reivindicacion y la condicion para perseguir la cosa hurtada; la acusacion *expilatorie hereditatis*, y la accion *rerum amotarum*.

¿Qué era la reivindicacion?—La accion que competia al dueño de una cosa contra el que la poseía, fuera ó no el ladrón, para que se le entregase con sus frutos y accesiones.

¿Qué era la *condicion furtiva*?—La que correspondia al dueño contra el ladrón, mas no contra el cómplice, para que le entregase la cosa hurtada; y caso de no tenerla, le indemnizase de los perjuicios que habia sufrido por el hurto.

¿Eran compatibles las dos primeras con la de hurto?—La de hurto podía entablar con las otras dos, porque su naturaleza y fin eran diferentes; la reivindicacion y la condicion se excluían porque, obtenida la cosa, no era dable reclamar su estimacion.

¿Qué objeto tiene la accion *expilatorie hereditatis*?—Castigar con pena extraordinaria la sustracion de una cosa perteneciente á una herencia vacante ó que, estando adida, aún no habia tomado posesion de ella el heredero. Competia ésta contra el hurtador, en concepto de subsidiaria.

¿Cómo se define la accion *rerum amotarum*?—Es la que compete al cónyuge contra el cónyuge despues del divorcio, para que devuelva las cosas sustraídas, ocultas, vendidas, donadas ó consumidas por él, durante la proximidad del divorcio, ó, en otro caso, su estimacion. Esta accion es perpétua.

Del robo.

¿Qué es el robo?—Un atentado contra la propiedad cometido por medios violentos.

¿En qué se distingue del hurto?—En que en éste la sustraccion se verifica fraudulentamente; y en aquél, usando de la violencia.

¿Qué acciones habia para perseguirlo?—Además de la accion del hurto, la creada por el pretor, nombrada *vi bonorum raptorum*, cuando habia mediado intencion criminal y violencia.

¿Qué fin reconoce esta accion?—La pena del cuádruplo, si se entabla durante un año, y de otro tanto, si despues.

¿En qué se parece y se distingue de la de hurto?—Aseméjase en que ambas se otorgan á las mismas personas, y por efecto de sustraccion de cosas muebles. Diferéncianse, en que la primera es mista de *rei persecutoria* y *penae persecutoria*, porque en el cuádruplo está comprendida la indemnizacion, lo que no sucede en la de hurto; en que aquélla es anual y en que, por ser en su mayor parte penal, no se da contra los herederos del que robó.

¿En qué casos puede ser más útil la accion de hurto?—Cuando el robo reune las circunstancias del hurto manifiesto, y cuando ha trascurrido un año desde su comision entablando la *furti nec manifesti*.

¿En qué se distingue el robo ó rapiña, de la invasion?—En que ésta tiene lugar en las cosas inmuebles, y aquéllas en las muebles.

¿El que tenia derecho á la cosa, ó fundadamente creia tenerlo, cometia robo?—No, porque para ello era menester tener intencion de cometerlo.

¿Qué pena castigaba su accion?—La pérdida de la cosa, si era su dueño, y su valor si era ajena.

¿A quién se concedian las acciones nacidas del robo?—Como en el hurto, á todo el que tenia interés en que no se cometiera, v. gr.: el acreedor pignoraticio, el comodatario, el arrendatario, etc.

De la ley Aquilia.

¿Qué era la ley Aquilia?—Un plebiscito publicado en el año 468 de la fundacion de Roma, que tenia por objeto derogar la legislacion antigua y establecer nuevas reglas para el castigo de los daños causados, lesionando los derechos de un tercero.

¿Qué se entendia por daño?—Toda disminucion, destruccion ó corrupcion de una cosa ajena que no reporte utilidad ó lucro al que la causa.

¿Cuándo se decia hecho con injuria?—Cuando se causaba sin derecho alguno, aunque fuera sin intencion de causarlo y por mera culpa.

¿Cuántos capitulos tenia la ley Aquilia?—Tres.

¿Qué daños castigaba el primero?—La muerte de un esclavo ajeno ó de un cuádrupedo de los que pastoreados pacen juntos, como los bueyes, las ovejas, los camellos, los cerdos, etc., siempre que fueren muertos injustamente, lo que sucedia cuando tenia lugar el hecho sin derecho á ejecutarlo.

¿Qué clase de culpa necesitaba la ley Aquilia para su aplicacion?—Cualquiera.

¿Con qué pena se castigaban estos daños?—Con el valor mayor que la cosa tuviera en el año anterior al dia en que se cometieron, aun cuando excediera del que tenia en este dia, computándose en él los perjuicios que fueran consecuencia suya.

¿Qué daños castiga el segundo capítulo de la ley Aquilia?—La opinion indudable, desde el descubrimiento de las instituciones de Cayo, afirma que el segundo capítulo castigaba al *adstipulante* que, por medio de la aceptacion y en fraude del estipulante, libertaba de la deuda al deudor principal. Justiniano dice que ya no estaba en uso.

¿Qué daños penaba el tercer capítulo?—Todos los que no estuvieran castigados en el primero.

¿Cómo se regula la responsabilidad del dañado?—Por el mayor valor que tuviese la cosa en los treinta días inmediatos.

¿Qué acciones naciende la ley Aquilia?—Directas y útiles. Las primeras se daban contra los que causaban el daño con su cuerpo, dice Justiniano, y las segundas contra los que lo causaban de cualquier otro modo.

De las injurias.

¿Qué es injuria?—En su acepcion más lata todo lo que se hace sin derecho; en otra más especial se le llama *contumelia*, y significa ultraje. También representa la idea de *culpa*, *iniquidad* ó *injusticia*.

¿En qué sentido se toma en este título?—En el de ultraje ó afrenta (*contumelia*).

¿Qué clases habia de injurias?—Reales, verbales, por pintura, por escrito, simples, graves y atroces.

¿Cómo se cometian las reales?—Por medio de hechos afrentosos, v. gr.: poner á uno violentamente las manos, demandarle como esclavo, como deudor no siéndolo, mutilar la estatua de su ascendiente, etc.

¿Cómo las verbales?—Rebajando, menospreciando, insultando á alguno en público ó privadamente, á gritos, ó por simples palabras.

¿Cómo se injuriaba por pinturas?—Representando objetos ó personas en tal forma que su vista traia sobre ellas la difamacion, el ridiculo ó la deshonra.

¿Cómo por escrito?—Principalmente á medio del libelo infamatorio, contenido de imputaciones ó expresiones denigrativas.

¿En qué se fundaba la division de injurias simples, graves y atroces?—En la mayor ó menor intensidad ó extension del hecho ó palabra afrentosa.

¿La verdad del hecho disculpaba la injuria?—Si se imputaba un delito, sí; mas no, si se descubria un defecto físico ú otra cosa de escaso interés.

¿La protesta de falta de intencion de injuriar libertaba al injuriante?—No, porque sólo era una manifestacion hipócrita, desmentida por los hechos.

¿Qué personas se entienden injuriadas en las de otros?—Los padres en las de sus hijos y su mujer, los suegros en la de su nuera, cuyo marido está en su poder, el señor en la de sus esclavos, siendo las injurias atroces, etc.

¿Con qué pena se castigaban las injurias?—Las XII Tablas con la del Talion, cuando se rompía un miembro. Si sólo se fracturaba un hueso y era de hombre libre, con la multa de 300 ases, y de 150 si era esclavo. La injuria más leve se castigaba con 25 ases. El pretor mitigó este rigor, disponiendo la valuacion de la injuria segun la importancia de la persona injuriada.

¿Qué circunstancias hacían que la injuria fuese atroz?—La naturaleza del hecho, el lugar en que se cometia y la persona del injuriado.

¿Qué acciones procedian de la injuria?—Dos: una civil y otra penal. La primera podia entablarse por medio de procurador ó representante; la segunda debia ejercitarse personalmente, excepto los ciudadanos ilustres, que podian hacerlo á medio de representacion.

¿Cómo se extinguian estas acciones?—Por el perdon ó la muerte de la parte ofendida y el trascurso de un año desde que se infringió la ofensa.

Cuasi-delitos.

¿Qué son los *cuasi-delitos*?—Ciertos hechos que producen obligacion, ejecutados por ignorancia ó descuido, sin mala fé ni intencion criminal, que no son delitos, ni contratos ni cuasi-contratos.

¿Cuáles son los principales *cuasi-delitos*?—El fallo injusto dictado por ignorancia, la colocacion, efusion ó suspension de objetos que por su contenido ó ellos mismos pueden perjudicar á un tercero, y la sustraccion de cosas en una nave, posada ó establecimiento de este género, que obliga al principal á responder de su valor.

¿Qué accion nace de los *cuasi-delitos*?—La accion *in factum*.

¿Qué casos podian darse en el fallo injusto?—Que fuera debido á la mala ó buena fé del juez. Si lo primero, cometia un delito; y no sólo quedaba obligado á hacer suyo el litigio, esto es, á sostener la sentencia, sino á sufrir el castigo consiguiente. Si lo segundo, tenía lugar el *cuasi-delito*, y sólo se obligaba á pagar la estimacion de los perjuicios causados al litigante declarado vencido.

¿Qué casos comprende el segundo *cuasi-delito*?—Dos: el arrojar y deramar cosas desde una habitacion á la calle, y la colocacion ó suspension de objetos que con su caida podian perjudicar á los transeuntes.

¿Con qué penas se castigaban?—La ley Aquilia penaba al autor, y el pretor al dueño de la casa, por la falta de vigilancia, con el doble del daño causado; con diez aureos la suspension de objetos perjudiciales; y si de su caida resultaba la muerte de un hombre libre, cincuenta aureos; y en otro caso, con la estimacion del daño causado.

¿Qué fundamento tiene la responsabilidad exigida al dueño de una nave, posada, etc.?—La falta de diligencia en la eleccion de las personas empleadas en el servicio.

DE LAS ACCIONES.

¿Qué son las *acciones*?—Los medios establecidos por la ley para obtener, conservar ó recobrar los derechos. Traen su origen de la palabra *agere*.

¿Qué clases habia de acciones?—Dos: dividianse en públicas ó criminales y privadas ó cíviles, segun que tenían por objeto la reparacion del mal causado á la sociedad ó al individuo.

¿Qué diferencia existe entre el derecho y la accion?—El derecho es anterior á la accion y puede existir sin ésta; la accion, por el contrario, es una consecuencia del derecho, y para que nazca es menester que el derecho sea violado.

¿Qué acepciones tiene la palabra *accion*?—En sentido lato comprende todos los derechos que garantiza; en sentido estricto se limita á significar sólo las acciones personales, en contraposicion de la *peticion* con que se nombraban las *reales* y de la *persecucion* que, como los fideicomisos, no estaban comprendidas en el procedimiento ordinario.

¿Qué sistemas de procedimientos hubo en Roma?—Tres: el de las acciones de ley, el formulario y el de los juicios extraordinarios. En el primero, riguroso y simbólico, la palabra *accion* significaba el procedimiento; en el segundo, más expedito y equitativo, significaba la fórmula que daba el magistrado al actor para que dedujera su derecho ante el juez; y en el tercero, más filosófico, significaba la facultad de provocar el juicio por cuenta y riesgo del actor.

¿Conocieron los romanos el orden jerárquico de tribunales?—Antes del imperio, no. Los magistrados conocian en única instancia, segun la naturaleza é importancia de sus funciones.

¿Conocieron los jurados?—Si; el magistrado daba la fórmula que determinaba la accion y límites en que debian encerrarse los jueces elegidos por las partes, que venian á ser una semejanza de los jurados modernos.

¿Qué significaba el *imperio* de los magistrados?—La potestad con que

estaban revestidos, que comprendia la jurisdiccion, y por consiguiente, la facultad de ejecutar las leyes y de juzgar. En sentido ménos lato y opuesto á la jurisdiccion, sólo comprendia la facultad de administrar y de corregir á los ciudadanos.

¿Cómo se divide el *imperio*?—En *mero* y *misto*. Imperio mero es la potestad de castigar los delitos, é imperio misto la de hacer respetar las providencias judiciales.

¿Qué era la jurisdiccion?—La facultad de regular las relaciones de los individuos por la aplicacion del derecho preexistente, ó la creacion de nuevas reglas. Trae su etimología de *dicere jus*.

¿Qué significaba el *cognitio*?—La reserva que hacia el magistrado del conocimiento de la causa para decidirla por si mismo.

¿Qué era la *notio*?—Todo exámen hecho por el magistrado ó juez que terminaba por una decision, la cual recibia el nombre de *decreto*, si era pronunciada por aquél.

¿Qué divisiones se hacen de la jurisdiccion?—Divídese en voluntaria y contenciosa, en plena y ménos plena, en ordinaria y extraordinaria, propia y delegada, y propia y prorogada.

¿Qué es jurisdiccion voluntaria?—«La que se ejerce en negocios extrajudiciales entre las personas que voluntariamente reclaman la intervencion del magistrado.»

¿Qué es jurisdiccion contenciosa?—«La que se ejerce entre personas que litigan y contienden sobre derechos.»

¿En qué se diferenciaban?—En que ésta supone litigio, y aquélla no; en que ésta no podia ejercerse en negocios propios, y aquélla sí; y en que ésta sólo podia ejercerse en determinado territorio y lugar, y aquélla en cualquiera parte.

¿Qué es jurisdiccion plena y ménos plena?—La primera es el conjunto de atribuciones que constituyen la jurisdiccion; ejercianla los magistrados superiores. Jurisdiccion ménos plena es la que sólo comprendia determinadas atribuciones; ejercianla los magistrados inferiores.

¿Qué es jurisdiccion ordinaria y extraordinaria?—Ordinaria es la que tenia el magistrado fijando el hecho, dando la fórmula y remitiendo la causa al juez para su decision; y extraordinaria la que ejercia el magistrado fallando la causa sin remitirla á los jueces.

¿Qué es jurisdiccion propia y delegada?—Propia es la inherente al cargo; y delegada, la que se ejerce por comision de otra autoridad á quien corresponde. Esta podia ser para un negocio, para parte de él ó para el todo, y para determinados negocios. Podia delegarse en un particular y en los delegados de los magistrados. La primera delegacion era revocable; la segunda, irrevocable. La jurisdiccion criminal no era delegable.

¿Qué es jurisdiccion prorogada?—La que ejerce un magistrado fuera de su territorio ó de los límites de su autoridad, por voluntad de las partes que á él se someten. Puede ser *expresa* ó *tácita*. Se hace expresamente, por el consentimiento explicito de los interesados, confirmado por ellos mismos, acudiendo al juez; y tácitamente, por el consentimiento implicito de los interesados, manifestado por hechos. Llámasele tambien legal y necesaria.

Sistema de las acciones de ley.

¿Cuál es el carácter que distingue este sistema?—Los símbolos materiales, los ritos pantomímicos y las fórmulas solemnes.

¿Cuál era su organizacion judicial?—Componianla los magistrados y los jueces.

¿Cuáles eran las funciones de los magistrados?—Fijar los hechos litigiosos, dar la accion que el demandante debia ejercitar ante el juez, y eje-

cutar lo juzgado por éste. Las actuaciones que ante ellos tenían lugar, se decían hechas *in jure*.

¿Cuáles eran las de los jueces?—Examinar el litigio y juzgar la contienda, aplicando la fórmula ó acción que recibían del magistrado. Las actuaciones eran hechas *in judicio*.

¿Qué magistrados se conocían?—El rey, supremo magistrado, con *imperio y jurisdicción*; los cónsules en tiempo de la república, cuyas atribuciones judiciales pasaron á los pretores, y más tarde á los ediles curules respecto á ciertas ventas. Algunos dan al colegio de los pontífices grande importancia en este sistema. Fuera de Roma, los decemviros, los quatorviros, los prefectos y los pretores provinciales administraban justicia, á semejanza de Roma.

¿Qué causas daban la competencia de los magistrados?—El ser miembro de la ciudad ó estar domiciliado en el territorio del magistrado, y la sumisión á su autoridad.

¿Por qué medios se conseguía el ser miembro de un municipio?—Por el nacimiento, la manumisión, la elección y la adopción. Roma se consideraba la patria común de todos, con ligeras excepciones.

¿Qué se entendía por domicilio?—El lugar en que el ciudadano tiene sus bienes y sus lares, y en donde habitaba con intención de no cambiarlo. Llamábase *incola*.

¿Qué excepciones tiene la doctrina expuesta?—Cinco: las sucesiones, porque el juez del difunto es el del heredero; los contratos y cuasi-contratos, que hacían competente al juez del lugar en que se celebraban, ó en que debía cumplirse la obligación; la reconvenção, que se supone incidente de la cuestión principal; el delito, que surte fuero en favor del juez del territorio en que se cometió, y las causas conexas, que por su íntima relación, eran decididas por el mismo juez que entendía de las principales.

¿En dónde se administraba justicia?—En el foro por medio de decretos y de libelos, según que se formulaba un asunto contencioso ó voluntario.

¿Qué eran días fastos y nefastos?—Llamábanse días fastos los en que podía administrarse justicia, y nefastos los feriados, en que estaba prohibido actuar, fuera de los asuntos sometidos á jurisdicción voluntaria y de urgente necesidad. Las vacaciones de los tribunales eran ordinarias ó extraordinarias, según que estaban establecidas, ó se establecían por un acontecimiento fausto ó importante.

¿Qué clases había de jueces?—Cuatro: los jueces propiamente dichos, los árbitros, los recuperadores y los centumviros. Los jueces y los árbitros aplicaban la fórmula dada por el magistrado, sin más diferencia entre ellos que la latitud de las funciones que se les concedían.

¿Quiénes podían ser jueces?—Primitivamente sólo los patricios; después los caballeros y, por último, se establecieron cinco decurias de jueces: una de senadores, otra de caballeros, otra de tribunos de la plebe, otra de personas contribuyentes de un pequeño censo y otra establecida últimamente por Calígula.

¿A quién pertenecía su elección?—Al magistrado superior, que los hacía inscribir en una lista que se fijaba al público.

¿Quiénes no podían ser jueces?—Los sordos, los mudos, los furiosos y los impúberos. Los menores de diez y ocho años podían excusarse hasta los veinte. No podían serlo los removidos del Senado, las mujeres y los esclavos.

¿Cómo administraban justicia?—Sentados en el *subsellium*, rodeados de consejeros, daban audiencia pública en el Foro.

¿Quiénes eran los recuperadores?—Unos magistrados encargados de dirimir las contiendas entre los ciudadanos y los peregrinos, por medio de un procedimiento rápido y expedito.

¿Quiénes eran los centumviros?—Un tribunal que tenía por objeto co-

nocer en Roma las cuestiones acerca del estado civil de las personas, del dominio quiritarario y de las sucesiones. Dividíase ya en dos, ya en cuatro secciones, sin que se sepa á punto fijo su objeto y competencia.

¿En dónde administraban justicia?—Primeramente en el Foro, y después en la basilica Julia, en cuyo lugar se colocaba una lanza como símbolo de la propiedad romana.

¿Por qué se llamaron acciones de ley?—Porque fueron establecidas únicamente por la ley.

¿Cuántas y cuáles eran?—Cinco: *actio sacramenti*, *judicis*, *postulatio*, *condictio*, *manus injectio* y *pignoris capio*.

¿De dónde trae su nombre la accion *sacramenti*?—Del depósito que todo litigante tenía que hacer en manos de los pontífices para entablar el litigio, que quedaba sujeto á las consecuencias del proceso.

¿En qué consistía?—En una fórmula general aplicable á todos los negocios, cualquiera que fuera el derecho que en ellos se ventilara, siempre que no tuvieran una tramitacion especial marcada por la ley. Si se ventilaban derechos *personales* mediaban varias provocaciones entre los litigantes, concluyendo por pedir un juez, que el magistrado les daba en el término de treinta dias. Si se litigaban derechos *reales* sobre bienes muebles, se presentaba la cosa ante el magistrado; ambos pedían su reivindicacion y simulaban un combate, constituían el *sacramentum*, y después de haber fijado quién debía figurar como poseedor, el magistrado les daba el juez que había de decidir el pleito. Si los derechos versaban sobre bienes inmuebles, se trasladaba el magistrado, acompañado de los litigantes, al punto en que radicaban, en donde tenían lugar las solemnidades indicadas; más tarde sólo se simulaba el combate á presencia de testigos y de la finca, volviendo al magistrado con algun terror ó teja que la simbolizaba, para que en ellos tuviesen lugar las demás formalidades. Ultimamente todo era fingido.

¿Qué era la accion *judicis postulatio*?—La opinion más seguida entre las diferentes que se emiten, es la que supone tenía lugar en las cuestiones que exigían una estimacion, ya versaran sobre obligaciones de derecho estricto, ya sobre derechos *en la cosa*, ya reveindicables por haberse extinguido, ya sobre el ejercicio de acciones de buena fé de la jurisdiccion de los árbitros.

¿Cuál era su procedimiento?—Nos es desconocido.

¿Cuál era la accion *per condictionem*?—La que tenía por objeto reclamar de un modo más sumario, una cantidad fija ó una cosa cierta y determinada. El acreedor convocaba solemnemente al deudor, para que compareciera delante del mismo magistrado á los treinta dias, á recibir un juez.

¿Qué era la *manus injectio*?—«El acto de poner la mano sobre una cosa ó sobre una persona,» diferente de la *pignoris capio*, porque ésta no tenía lugar ante el magistrado.

¿Qué clases había de *manus injectio*?—Tres: *judicati*, *pro judicato* y *pura*. La primera tenía lugar cogiendo el demandante al demandado por alguna parte del cuerpo, después de solemnizar la fórmula; éste, si se creía con derecho á oponerse, nombraba un tercero, llamado *vindex*, para que lo hiciera en su nombre; y si no lo hacía, era llevado por el acreedor y retenido en prisiones. La segunda procedía cuando el citado *per condictionem* no se presentaba en el término que se le señalaba, y en otros casos en que se suponía que había habido condenacion. La tercera permitía al deudor defenderse por sí mismo.

¿Qué efectos importantes producía la *manus injectio*?—Podía dar lugar á que el acreedor vendiese ó matase al deudor; podía retenerlo con su familia y bienes *in mancipio*, hasta que pagase la deuda, etc.

¿Qué era la *pignoris capio*?—Una accion que tenía por objeto retener una cosa del deudor hasta que pagara la deuda. Comenzó contra los comprado-

res de bestias para los sacrificios, y se extendió á los que estaban encargados del suministro de los ejércitos.

¿Qué actos comprendía este sistema?—La *vocatio in ius*, el *vadimonium*, la *litis contestatio*, que tenían lugar ante el magistrado; y el *judicio*, que se efectuaba ante el juez.

¿Qué era la *vocatio in ius*?—Una diligencia preliminar que tenía por objeto citar al demandado para ante el magistrado. Asemajábase á nuestro emplazamiento. Primitivamente consistía en obligarle á que siguiese al demandante á la presencia de aquel funcionario, pudiendo llevarle á viva fuerza en caso de resistencia, lo cual se evitaba presentando una persona que prometiese comparecer por él y tomar su defensa, á quien se llamaba *vindex*, como queda dicho.

¿Qué era el *vadimonium*?—La promesa que ambos litigantes hacían delante del magistrado, por medio de fiadores, llamados *vades*, de volver á presentarse ante él á su debido tiempo.

¿Qué era la *litis contestatio*?—El acto en que los litigantes, cumpliendo el *vadimonium*, recibían del magistrado el juez y la fórmula de la acción, invocando el testimonio de los presentes para justificar con él las palabras de aquél. Producía una nueva obligación que autorizaba al demandante para perseguir al demandado ante el juez.

¿En qué consistía el *judicio*?—Presentes las partes ante éste hacían un resumen del litigio, producían las pruebas y formulaban las defensas, pronunciándose luego la sentencia á su presencia. Todo debía tener lugar antes de la postura del sol.

Sistema formulario.

¿Por qué y cuándo se abolió el sistema de las acciones de ley?—Porque, demasiado riguroso y exigente, llevaba su exactitud hasta el extremo de declarar perdido el pleito en que se hubiera cometido el más pequeño error ú omisión en las palabras. Fué derogado por las leyes Ebuia y Julia.

¿Cuál es el carácter distintivo del sistema formulario?—En él se encuentra más claridad y sencillez, no se exigen los ritos pantomímicos y el magistrado puede rechazar las demandas fundadas en hechos que, aun probados, no justifiquen la petición que contienen.

¿Cuál era la organización judicial de este sistema y sus grados?—Por efecto de los cambios políticos, el emperador asumió las funciones de todas las magistraturas, de lo cual fué consecuencia que pudiera oponerse á la ejecución de las sentencias de los tribunales, como estaba en el poder de los tribunos de la plebe, considerándosele por ello como la suprema y última autoridad, que más tarde llegó á conocer y juzgar en primera y única instancia. Cuatro grados había en la jerarquía judicial: 1.º, el juez; 2.º, el pretor en Roma y el gobernador en las provincias; 3.º, el prefecto de la ciudad y el de las cohortes pretorianas en Roma, y los consulares en las provincias; 4.º, el emperador.

¿Qué jueces se conocían durante este sistema?—Los que existían anteriormente perdieron su importancia, quedando limitada su autoridad al conocimiento de pocos y determinados negocios. Aparecen los jueces *pedaneos*, que, según la opinión más seguida, eran unos delegados para decidir puntos litigiosos de escasa importancia, entendiéndose en la comprobación de los hechos.

¿Qué eran las fórmulas dadas por el magistrado?—Venían á ser una sentencia hipotética, á que debía arreglar su decisión el juez encargado de aplicarla.

¿Qué partes contenían?—Dos; principales y accesorias, que se insertaban á instancia de los litigantes. Eran las principales, además de la desig-

nacion del juez, la *demonstracion*; la *intencion*; la *adjudicacion* y la *condenacion*.

¿Qué era la *demonstracion*?—«La parte de la fórmula que tenía por objeto manifestar el negocio acerca de que versaba el litigio.»

¿Qué era la *intencion*?—«La parte de la fórmula en que el magistrado reproducía la pretension del demandante, imprimiendo el carácter á la accion.»

¿Qué era la *adjudicacion*?—«La parte de la fórmula en que el magistrado autorizaba al juez para adjudicar á alguno de los litigantes una cosa que les pertenecía en comun ó que pertenecía al contrario.»

¿Qué era la *condenacion*?—«La parte de la fórmula en que el magistrado señalaba al juez la regla que habia de seguir en la sentencia,» bien condenando, bien absolviendo. La condenacion podia ser de cantidad cierta y determinada ó indeterminada, fijándose en este caso el máximo á que podia ascender, ó dejando al arbitrio prudencial del juez la cuantía.

¿Qué otras limitaciones podia contener la condenacion?—La del beneficio de competencia en favor de los que lo gozaban; la concedida á los padres de familia por las obligaciones contraidas por personas que de ellos dependian, para no responder de ellas mas que en cuanto les fuesen provechosas, ó de los delitos cometidos por aquéllas, que podian reparar ó dar en *noxá* á los delinquentes, y las relativas á las acciones arbitrarias. No todas las partes principales de las fórmulas eran esencialmente necesarias. Por regla general lo eran la *intencion* y la *condenacion*.

¿Cuáles eran las partes accesorias?—Las excepciones, las réplicas, dúplicas y triplicas y las prescripciones.

¿Qué eran las *excepciones*?—Las exclusiones que hacia el magistrado en la fórmula, atendidas las circunstancias y razones de la defensa del demandado. Formulábanse de un modo contrario á la demanda.

¿Cuál fué el origen de las excepciones?—El derecho pretorio.

¿Qué eran las *réplicas*?—Las adiciones que el demandante suplicaba al juez pusiera en la fórmula, en vista de los argumentos opuestos por él á la excepcion.

¿Qué era la *dúplica* y la *triplica*?—Tambien adiciones de la fórmula, que tenían por objeto contrariar la réplica y la dúplica respectivamente.

¿Qué eran las prescripciones?—Las reservas pedidas al magistrado por el demandante ó el demandado, con que se encabezaba la fórmula. Las hechas por éste se convirtieron luego en excepciones.

¿Qué actos tenían lugar en el sistema formulario?—Ante el magistrado, *in jure*, tenía lugar la *vocatio in jus*, acciones ó *litis denuntiatio*, *actionis editio*, *actionis postulatio*, *litis contestatio*, *interrogationes in jure*, *confessio in jure* y *jusjurandum in jure*; y ante el juez la comparecencia, el orden de las alegaciones, las clases de prueba y las sentencias.

¿Cambió el carácter de la *vocatio in jus*?—No, si bien no podian ser citados á juicios los magistrados, los furiosos, los infantes y los impúberos, y no podian serlo sin licencia del pretor los ascendientes y los patronos y sus hijos.

¿Qué remedios habia contra el deudor que se ocultaba?—Reputábase indefenso, y como no podia ejercer en él la *manus injectio*, tenía lugar la *missio in possessionem bonorum*, que llevaba la infamia al deudor y la pérdida de sus derechos políticos. Nada se resolvía sobre lo principal, por el contrario, y podia declararse nula la posesion si el deudor, presentándose, probaba la injusticia de la demanda.

¿Qué especialidad tenía la posesion dada al demandante de una accion *real*?—Gozaba de las ventajas del poseedor, cambiando su carácter de demandante en demandado y trasladando á aquél la obligacion de probar.

¿Qué era la *actiones denuntiatio*?—El acto extrajudicial en virtud del que el actor ponía en conocimiento del demandado la naturaleza y objeto de la accion.

¿Qué era la *actiones editio*?—«El acto en que el demandante hacía saber al demandado su pretension y la accion que intentaba obtener del magistrado.» Tenía lugar ante el pretor y no constituía vínculo juridico.

¿Qué era el *vadimonium*?—La caucion que el demandado prestaba de presentarse á juicio en el día y lugar señalados. Podia ser pura, jurada, con fianza y con recuperadores. La primera se hacia sin juramento, la segunda se garantia con él, la tercera llevaba un fiador y la cuarta tenía lugar cuando se nombraban los que habian de condenarle al pago del importe del *vadimonium*, en caso de no comparecencia. A veces se estipulaba una cláusula penal.

¿Qué era la *litis contestatio*?—No era, como en el anterior sistema, la invocacion que hacían los litigantes á los testigos presenciales para justificar ante el juez lo dicho por el magistrado; sino la terminacion de la parte del proceso que tenía lugar ante él, segun la opinion más seguida.

¿Qué efectos producía?—Legitimaba una sentencia, originaba una novacion, determinaba el carácter y extension del juicio, señalaba las personas de los litigantes y de los jueces que debian decidirlo, perpetuaba las acciones que antes eran temporales, fijaba el tiempo á que debia atenderse el juez para el exámen de la accion ó la condenacion, interrumpia la prescripcion y prohibia la enajenacion de la cosa litigiosa.

¿Qué eran las interrogaciones *in jure*?—Ciertas preguntas hechas por el magistrado ó una de las partes á la otra, con objeto de esclarecer algunos hechos, cuyo conocimiento era necesario para la fórmula. Podian contestarse en el momento ó despues de algun tiempo. La negativa falsa obligaba *in solidum* al interrogado, así como tambien la resistencia á contestar y la respuesta ambigua.

¿Qué era la *confesio in jure*?—El asentimiento ó confesion que hacía uno de los litigantes ante el magistrado sobre hechos directamente ligados con el negocio principal. Diferenciábase de las anteriores en que éstas se referian á hechos necesarios para la redaccion de la fórmula, y aquélla al punto litigioso. Cuando se confesaba un objeto cierto ó suma determinada, el confesante se equiparaba al sentenciado.

¿Qué era el *juramentum in jure*?—El juramento hecho por los litigantes ante el magistrado, que obligaba á su contrario á estar y pasar por lo jurado. Llamábase necesario porque aquél á quien se referia, ó bien pagaba ó bien lo prestaba, pudiendo por su parte exigir de su contrario el juramento de calumnia.

¿Qué era la comparecencia?—La presentacion de las partes ante el juez, despues de obtener la fórmula del magistrado. Si no comparecia el demandante, podia continuar el juicio, absolviéndole ó condenándole, segun la justicia de su causa. Si no comparecia el demandado, podia el demandante conseguir que se declarase la contumacia de aquél, prévia la publicacion de edictos, y proseguir el juicio hasta la sentencia.

¿En dónde, cómo, y por qué orden se hacia las alegaciones?—En público y oralmente, los dias no feriados, delante del juez, que examinaba los documentos y testigos, y escuchaba las peroraciones.

¿A quién incumbia la obligacion de probar?—Al actor que afirmaba la accion, y al reo que aseveraba la excepcion.

¿Qué pruebas podian aducirse?—La testifical y la documental, el juramento y la confesion.

¿Qué eran los testigos?—Las personas designadas por el litigante para deponer acerca de los hechos alegados. Declaraban, por regla general, oralmente y en público, pudiendo ser interrogados por los abogados y partes.

¿Qué número de testigos era admisible?—Primeramente ascendia á diez, y, por último, se admitian todos los que el juez considerase necesarios. Un sólo testigo no debia ser oido.

¿Cuántos eran necesarios para hacer prueba?—No se atendia al número

sino á la dignidad, posicion, riquezas, buenas costumbres, y concepto de los testigos.

¿Quiénes no podian serlo?—Los ascendientes y descendientes en sus respectivas causas, los impúberos, los perjuros, los sobornados, los indignos de credulidad por los crímenes que hubieran cometido y las prostitutas.

¿Tenia preferencia la prueba documental sobre la de los testigos?—No.

¿Cuándo debia presentarse?—Al tiempo de la *actionis editio*.

¿Podia obligarse al litigante á que presentara los titulos?—Por regla general no, si bien el deudor podia exigir del acreedor la exhibicion de sus libros.

¿En qué concepto tenia lugar el juramento?—Como medio de prueba supletorio, y cuando era menester fijar la cantidad de la condenacion. Igual carácter tenia la confesion en juicio.

¿Qué era la sentencia?—La decision final de la instancia seguida ante el juez. Debia pronunciarse de viva voz, siendo despues obligatoria su redaccion, y contener la expresion de los fundamentos.

¿En qué forma debia hacerse la condenacion?—Debia imponerse al condenado obligacion de pagar una suma, sin cuya determinacion era nula la sentencia, por más que se pidiera una cosa determinada.

¿Cuál era su efecto?—Legalmente pronunciada, adquiria el carácter de verdad legal, con toda la fuerza de la cosa juzgada; originaba una nueva obligacion, extinguiendo la dimanada de la *litis contestacion*; hacia desaparecer las relaciones anteriores de los litigantes, en caso de absolucion, y daba al demandado una excepcion para destruir la nueva demanda de su contrario, si salia victorioso.

TERCER SISTEMA.

Juicios extraordinarios.

¿Cuál era el carácter distintivo de este sistema?—La fusion en el magistrado de las atribuciones del juez.

¿Qué significaba la accion y la excepcion?—La primera, el derecho de dirigirse á la autoridad en reclamacion del que se creyera tener, y la segunda, un medio de defensa que ante él podia oponer el demandado.

¿Qué modificaciones sufrió la organizacion judicial?—La division del imperio en prefecturas y las subdivisiones en diócesis y provincias, dió lugar á varias reformas. Al frente de la prefectura está el prefecto; al frente de la provincia está el procónsul, corrector, rector ó presidente, segun la extension de su territorio, figurando en Roma y en Constantinopla en el primer grado de la escala los prefectos de la ciudad y del pretorio. Sólo habia jueces pedaneos para asuntos de poco interés.

¿Qué clases habia de magistrados?—Ordinarios y menores. A los primeros pertenecian los referidos antes, y constituian los segundos, los magistrados municipales de las provincias.

¿Quiénes eran los defensores?—Unos magistrados creados en las provincias, cuyas funciones tenian por objeto principal la defensa de los intereses de la república, de la plebe, de la ciudad y de los débiles, contra las demasias del imperio. Tenian jurisdiccion para conocer en asuntos menores de trescientos sólidos.

¿Qué principio regia en materia de competencias?—Surtia fuero el

lugar de la obligacion, comprendiéndose en él, el en que estaba sita la cosa.
 ¿Qué modificacion experimenta la *vocatio in jus*?—Pierde el carácter de fuerza de las primeras épocas, sustituyendo á la autoridad privada, la pública.

¿Qué alteraciones sufrieron los demás actos del procedimiento?—La *actionis editio*, la *actionis postulatio*, el *vadimonium* y la *actionis denuntiatio* desaparecieron. La litis-contestacion no extingue el derecho anterior: los testigos declaran con juramento, y se consigna su declaracion, prohibiendo serlo á los herejes. Requeriase la confrontacion de las escrituras privadas por medio de peritos; podia exigirse el juramento en cualquier estado del negocio, y era retractable por una sola vez. La rebeldia del demandado se prepara por tres denuncias, y la del demandante, que se extendia á un año despues de las mismas, hacia posible la sentencia.

¿Cómo se formulaba la demanda?—Por medio de un escrito breve que pasaba al demandado, aunque habia casos en que se prescindia de él.

¿Qué modificaciones sufrió la sentencia?—Podia contener la devolucion de la cosa demandada; no extinguia la obligacion anterior; debia ser escrita; pronunciarse públicamente y transcribirse á un libro registro, del cual se sacaban las copias necesarias.

¿Cómo define Justiniano la accion?—«El derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe.» Peca del defecto de ser poco expresiva y estar definida bajo la inspiracion del sistema formulario.

¿Cómo debiera definirse?—«La facultad que tenemos directamente, y sin ninguna concesion especial, de acudir á los tribunales para obtener lo que es nuestro ó lo que se nos debe.»

¿Qué clases habia de acciones?—Cinco: 1.^a, reales, personales y mistas; 2.^a, *reipersecutorias* y *paene-persecutorias*; 3.^a, acciones para el tanto, el triplo y el cuádruplo; 4.^a, de derecho estricto, de buena fé y arbitrarias, y 5.^a, para el todo, ó parte de la cosa.

¿En qué se funda la primera division?—En que el origen de las acciones puede ser un derecho en la cosa, un derecho á la cosa, ó la combinacion de ambos derechos.

¿Qué es accion personal?—«La que nos compete para compeler al que nos está obligado á hacer alguna cosa, ó á que cumpla con la obligacion.» Llamábase tambien *condictio*.

¿Qué es accion real?—La que tiene el demandante, «sin relacion ninguna á la persona á quien demanda, para reclamar una cosa corporal ó vindicar un derecho real que le compete sobre cosa ajena.»

¿Qué es accion mista?—Dícese generalmente que es mista la que nace de un derecho real y un derecho personal combinados.

¿Qué es reivindicacion?—La accion real, «que compete al dueño de una cosa contra el que la posee ó es considerado por el derecho como poseedor, para que éste la entregue con sus frutos y accesiones.» Debe justificar el dominio. El dolo se equipara á la posesion para los efectos de la accion reivindicatoria.

¿Qué reglas se seguian en la devolucion de frutos?—Debían restituirse los percibidos despues de la contestacion á la demanda; igualmente los anteriores si se hallan existentes y el poseedor es de mala fé, y si lo fuere de buena, sólo restituirá los no consumidos.

¿Qué reglas se adoptaban en la indemnizacion de gastos?—Las que quedan expuestas en los libros anteriores.

¿Cómo se define la accion *confesoria*?—«La que se da á aquél que pretende tener una servidumbre personal ó predial sobre la propiedad ajena, contra el dueño de ésta ó el que la posee, para que le dejen expedito el ejercicio de su derecho, y le indemnicen de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado.»

¿Cómo se define la accion *negatoria*?—Es aquélla «por la que el pro-

pietario de una heredad pretende que ésta se halla libre de una servidumbre, bien real ó bien personal, que otro quiere ejercer sobre ella, y obtener la indemnizacion de daños y perjuicios que éste le haya ocasionado.»

¿Cuál es el origen de las anteriores acciones?—El derecho civil.

¿Qué es accion *publiciana*?—«La que se da á aquél que perdió la posesion de la cosa cuando la estaba prescribiendo, y aun la que no había comenzado á prescribir en los casos en que puede adquirirse la propiedad sin posesion, contra el que la posee sin ningun título ó con uno ménos eficaz, para que se le devuelva con todos sus frutos y acciones.» Fundábase en la ficcion que suponía que el poseedor de buena fé había usucapido cuando aún no lo había realizado.

¿Qué otra accion *publiciana* se conocia en tiempo de Justiniano?—«La que se otorgaba al antiguo dueño de una cosa para rescindir la usucapion que en su ausencia legítima había completado otro.»

¿Como se define la accion *pauliana*?—«La que se da á los acreedores para revocar las enajenaciones hechas en su fraude contra cualquier poseedor de la cosa enajenada.»

¿Qué era la accion *serviana*?—«Aquella por la que un dueño de un predio rústico, dado en arrendamiento, hace valer su derecho de hipoteca en los frutos nacidos de la finca y en las demás cosas que expresamente le están hipotecadas, al pago del arrendamiento.»

¿Qué era la accion *quasi serviana*?—«La que competía á los acreedores para hacer valer el derecho real que tienen sobre lo que tácita ó expresamente les está hipotecado ó empeñado, á excepcion de lo que es objeto de la accion *serviana*.» Resulta, pues, que ésta es la especie y aquélla es el género.

¿Cuál es el origen de estas acciones?—El derecho pretorio.

¿Qué otras deben su nacimiento á él?—La de *pecunia constituta*, la de *peculio*, la de *ex jurejurando* y otras. De la primera se ha tratado al hablar del pacto llamado *constitutum*, y es la que se daba contra los que prometieron pagar sin emplear la fórmula de la estipulacion. La de *peculio* tenía lugar contra el padre ó el señor por los contratos otorgados por el hijo de familia ó el esclavo. La de *ex jurejurando* dimanaba del juramento extrajudicial, en virtud del cual el deudor reconocía el crédito ó el acreedor á quien se defería aseguraba su legitimidad.

También el pretor introdujo algunas acciones penales para perseguir la destruccion total ó parcial del *edicto*, castigar el llamamiento á juicio del ascendiente ó patrono sin licencia del magistrado, y la oposicion del demandado á comparecer.

¿Qué son acciones *prejudiciales*?—Las que tienen por objeto decidir una cuestion previa para entrar en un litigio diferente. Pertenecían á esta clase las intentadas con el fin de reconocer si el demandado era libre ó liberto ó reconocer su filiacion. La primera daba origen al proceso llamado *causa liberalis*.

¿A que género pertenecen las acciones *prejudiciales*?—Considerando que dimanaban de un derecho absoluto, no nacido de obligacion preexistente que pueda ejercitarse contra cualquiera, parecen ser *reales*; mas se distinguen de éstas en que no terminan en una condenacion, sino en la declaracion de un hecho.

¿Cómo se dividían las acciones segun el objeto que se proponía el demandante?—En acciones para perseguir la cosa, acciones para perseguir la pena y acciones mistas. Las reales persiguen siempre la cosa; las personales la persiguen también, por regla general, cuando nacen de un contrato, y si dimanaban de un delito; unas persiguen la pena y otras la pena y el delito, por lo que son mistas. Entre éstas figura la *vi bonorum raptorum*, la de la ley *Aquiliana* y otras.

¿Cuáles son las principales acciones divisorias?—La *familiae erciscundae*, «que compete á un heredero contra los demás coherederos para dividir la herencia comun y para obtener ciertas prestaciones personales; la *communi dividundo*, que compete á uno de los asociados contra los demás para la division de la cosa comun y para ciertas prestaciones personales, y la *finium regundorum*, que tiene por objeto deslindar las heredades colindantes y señalar los términos de cada una.»

¿Cuál es la naturaleza de estas acciones?—La opinion más seguida asegura que son por su esencia personales, y que pueden dar un resultado igual al de las reales. Por eso algunos las suponen mistas.

¿Qué clasificación se hacía de las acciones, bajo el punto de vista del importe de su fin?—Unas se daban para conseguir el tanto, otras para el doble, otras para el triplo y otras para el cuádruplo, límite de la condenación. A la primera clase pertenecen las que provienen de la estipulación, del mútuo, de la compra-venta, de la locación-conducción, del mandato y de otros. A las segunda, la de hurto no manifiesto, la de la ley *Aquilian*, la de depósito algunas veces, la *servi corrupti* y otras. A la tercera, la que exigía una obligación introducida por una nueva ley cuando en ésta no se determinaba la clase de acción competente, y antiguamente las llamadas *furti concepti* y *furti oblati*. Y á la cuarta, la de hurto manifiesto, la *quod metus causa*, la condicion *ex lege* por la exacción de derechos indebidos y otras, entre las que figura la *vi bonorum raptorum*.

¿Qué clasificación se hacía de las acciones bajo el punto de vista de la latitud de la fórmula?—Dividíanse en acciones de buena fé, acciones de derecho estricto y acciones arbitrarias. Llamábanse de buena fé aquellas que eran juzgadas por el criterio de la equidad y eran las nacidas de contratos ó cuasi-contratos, en las que el juez fijaba la cantidad de la condenación segun su arbitrio prudencial, ó compensaba las reciprocas deudas. Llamábanse de derecho estricto las que el juez decidía ajustándose rigurosamente á la fórmula del magistrado; y recibían el nombre de arbitrarias, las que autorizaban al juez para prevenir al demandado que pagase al demandante sin necesidad de, ó antes de hacer condenación alguna. Eran de esta clase la publiciana, serviana, cuasi-serviana, acción de dolo, *ad exhibendum* y *finium regundorum*.

¿Qué era la *plus petitio*?—Un vicio que afectaba á la demanda siempre que en ella se pidiera más de lo debido. Podía esto tener lugar de cuatro modos: ó por razon de la cosa, como cuando se pide *veinte* debiéndose sólo diez; ó por razon del tiempo si se pedia antes del término ó del cumplimiento de la condicion; ó por razon del lugar si se pedia en otro del en que se habia prometido, ó por razon de la causa, lo cual acaecía cuando la obligación era alternativa y se exigía como simple.

¿Qué efectos producía?—Cuando era causada por razon del tiempo, el demandante no podía ejercitar su acción durante otro tanto, ni exigir intereses por él, á no ser que indemnizara al demandado de todos los gastos debidos á la interposición prematura de su demanda. Cuando procedía de otras causas, debía aquél pagar á éste un valor triple de los perjuicios causados.

¿Qué efecto producía la demanda que no comprendía todo lo debido?—No perjudicaba al demandante, quien podía obtener en el mismo juicio el resto.

¿Qué efecto producía el error en la cosa pedida?—La condenación al demandante de las costas procesales.

¿Qué divisiones se hacían de las acciones, segun la latitud de la condenación?—Unas tendían á obtener el todo, y otras parte de lo debido. Así sucedía cuando el peculio no alcanzaba á cubrir la cosa demandada; cuando el marido no podía pagar la dote de su mujer, en los casos en que el demandado gozaba el beneficio de competencia, en los cuales su ulterior

fortuna no quedaba obligada al complemento del pago; cuando hay lugar á la compensacion, caso en que el demandante no recibia mas que la diferencia; cuando el deudor cesionario de sus bienes adquiria otros, pues sólo se entendia condenado en lo que pudiera pagar.

Contratos con personas constituidas en potestad ajena.

¿Qué principio regia en la materia, segun el derecho civil?—Su rigor proclamaba que ninguno quedaba obligado por el acto ó contrato de otro, cuyo rigor fué mitigado por el derecho pretorio que estableció acciones para hacer eficaces estas obligaciones, denominadas *quod jussu, exercitoria, institoria, tributaria*, de *peculio* y de *in rem verso*.

¿Qué carácter distingue á estas acciones?—Carecen de existencia propia, viviendo al lado de las que nacen del acto ó contrato celebrado con la persona constituida en potestad ajena. Por eso se les llama *adjecticiae qualitatis*.

¿Qué es accion *quod jussu*?—La que se da contra el señor ó el ascendiente, para exigir el cumplimiento de la obligacion contraida por el esclavo ó descendiente, de orden ó por ratificacion de aquéllos. No tiene lugar cuando éstos son un mero instrumento.

¿Qué es accion *exercitoria*?—La que compete contra el dueño de la nave para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la persona encargada por aquél de su direccion, sea libre ó esclavo.

¿Qué es accion *institoria*?—La que compete contra el dueño de una tienda ó establecimiento para el pago de las obligaciones contraidas por el encargado de su direccion en el ejercicio de su encargo.

¿Qué es accion *tributoria*?—La que compete á los acreedores del esclavo que comercia con su propio peculio, sabiéndolo su señor, contra éste que figura con igual carácter, á fin de obtener que dicho peculio se distribuya á prorata de los créditos. Tiene lugar cuando el dueño obra con dolo.

¿Qué es accion de peculio y de *in rem verso*?—La que se da contra el ascendiente ó señor para obtener el cumplimiento de las obligaciones contraidas sin voluntad especial por el esclavo ó descendiente, que han producido utilidad á aquéllos.

¿Qué limitacion tiene esta doctrina?—La establecida por el senado-consulto macedoniano en el contrato de mútuo, cuando consiste en dinero en gran cantidad, y no es resultado de peculio castrense ó cuasi-castrense.

¿Qué otro remedio tenian los acreedores de la obligacion?—El ejercicio de la *condicion*, cuya accion se fundaba en que nadie debia enriquecerse con perjuicio de otro.

Acciones noxales.

¿Qué son acciones noxales?—Las que se dan contra el señor del esclavo condenado para que pague la cantidad fijada en la condena ó entregue al esclavo en *nox*. Llámase *nox* al cuerpo dañador y al delito.

¿Qué efecto producía la dacion en *nox*?—Trasfería la propiedad del esclavo, quien debia ser manumitido si resarcia el daño que habia causado.

¿Qué carácter especial tienen estas acciones?—Se dan siempre contra el poseedor del esclavo.

¿Era extensiva la *nox* á los hijos?—Antiguamente sí. Constantino lo abolíó respecto á las hijas, y Justiniano á los hijos.

Daño causado por animales.

¿Quién respondía de los daños causados por los animales mansos?—Sus dueños, para lo cual la ley de las XII Tablas creó una accion noxal.

Al daño causado dábale el nombre de *pauperies*, y el dueño del animal se libertaba de ella entregándolo en noxa, si no sabía los vicios de que adolecía.

¿Qué fin tenían las acciones *editicias*?—La condenación en el duplo del daño causado por un animal, en la vía pública, á un hombre libre.

Personas por quienes se podía demandar.

¿Quiénes podían demandar por otro?—Primitivamente los actos jurídicos eran personalísimos. El sistema de las acciones de ley admitía la representación en una acción pública, en el juicio de libertad de alguno, en la tutela, en la acción de hurto de las cosas de los ausentes. Durante el sistema formulario todos pudieron ser representados por otro, á quien se llamó *cognitor*. Y en el de las acciones de ley se admitieron los mandatarios ó procuradores, si bien obrando en nombre propio y por su cuenta y riesgo, á quienes se llamó *dominus litis*. Su nombramiento no requería solemnidad, ni la presencia del contrario.

Cauciones.

¿Cuál era la caución *judicatum solvi*?—Aquella por la cual el poseedor de una cosa estipulaba una acción contra él y sus fiadores para el caso de ser vencido en juicio y no devolver la cosa y su estimación.

¿Qué caución prestaba el procurador?—Antiguamente prometía que su principal ratificaría lo hecho por él, á fin de evitar una nueva demanda intentada por éste. Igual era la caución que debían prestar los tutores y curadores, si bien se les eximía de ella en algunos casos.

Esto, que tenía lugar en las acciones *reales*, verificábase también en las personales con relación al demandante; pues el demandado, representado por otro, estaba obligado á dar la caución *judicatum solvi*.

¿Qué modificaciones sufrió esta doctrina?—El demandado no debe garantizar la estimación, sino prometer que se presentará personalmente y continuará el litigio hasta su terminación, cuya promesa solemnizaba con juramento ó sin él y con fiadores. El procurador del demandante ó demandado, el tutor y curador ó cualquiera persona que gestionase á nombre de otro, debían prestar caución de que sus actos serían ratificados si su personalidad ó nombramiento no constaba en las actas.

¿Quiénes podían defender al demandado?—Cualquiera persona que prestase la caución *judicatum solvi*.

Duración y trasmisión de las acciones.

¿Qué división se hacía de las acciones por razón de su duración?—Dividíanse en *perpétuas* y *temporales*. En un principio todas las que dimanaban del derecho civil fueron *perpétuas*, pasando después á ser temporales algunas. Las que nacían del derecho pretorio eran, por regla general, temporales: había algunas excepciones.

¿Qué tiempo era necesario para extinguir las temporales?—Las reales y personales del derecho civil requerían el trascurso de treinta años: exceptuábanse la hipoteca que necesitaba cuarenta, la querrela de testamento inficioso, á quien bastaban cinco, y otras. Las pretorias prescribían al año de su nacimiento: exceptuábanse algunas que eran perpétuas, como las concedidas al *bonorum poseedor*, la de hurto manifestado, las que se daban contra los dueños de naves ó establecimientos por los delitos cometi-

dos por sus dependientes, y algunas otras. La accion de dolo duraba dos años.

¿Qué principio rige en la trasmision de las acciones?—Que todas se dan á y contra los herederos, desde la litis-contestacion. Antes de este acto, las penales, á excepcion de la de injuria, querrela de inoficioso testamento y las que se fundan en la vindicta pública, son trasmisibles á los herederos del ofendido, pero no se dan contra los del delincuente. Las civiles son generalmente trasmisibles en pro y en contra, si bien, cuando média dolo en el testamento, el heredero sólo es responsable en cuanto recibió por él utilidad.

Excepciones, réplicas, dúplicas, etc.

¿Qué es la *excepcion*?—«La alegacion que hace el demandado de hechos ó derechos que vengan á destruir la accion entablada por el demandante;» por ejemplo, el miedo, el dolo, el error, la *non numerata pecunia*, el *pacto conventi*, el juramento, la cosa juzgada, etc.

¿En qué se diferencia de la defensa?—En que ésta se dirige á debilitar ó destruir la prueba, y aquélla, reconociendo implícitamente el derecho del demandante, presenta un nuevo hecho ó derecho, sujeto á demostracion.

¿Cuál es el fundamento de las excepciones?—La equidad. La obligacion en que ha intervenido el miedo, dolo ó error, era exigible, segun el derecho civil; pero no era equitativo condenar al que convino hostigado por estos móviles.

¿Qué circunstancias debia reunir la excepcion *quod metus causæ*?—El miedo debia ser grave, verosímil, difícil de evitar, producido para conseguir la obligacion y causar impresion en ánimo de varon fuerte.

¿Cómo debe ser el dolo?—Tal que induzca á consentir en lo que no se hubiera consentido si se tuviera conocimiento de la verdad.

¿En qué se diferencian estas excepciones?—En que la de dolo puede oponerse contra el demandante, aunque no haya intervenido en la obligacion dolosa, y la de miedo sólo contra el que la causó; en aquélla es general, y nace por el dolo coetáneo ó posterior al contrato, y ésta sólo por el miedo causado en el momento de su celebracion; y en que el dolo puede oponerse en el caso de que hubiere mediado miedo, por ser éste una especie de aquél.

¿Qué género de error es el que motiva excepcion?—El que sin anular el contrato fué causa del consentimiento.

¿Cuándo podia oponerse la excepcion de *pacto conventi*?—En los contratos reales, verbales y literales, en que se estipulaba el pacto de remision ó de no pedir, puesto que, esto no obstante, la obligacion subsistia segun el derecho civil; porque tales contratos no se disolvian por el consentimiento.

¿Cuándo tenía lugar la de *jurisjurandi*?—Siempre que se prestaba un juramento deferido por el contrario, obligado á pasar por él; pues si bien la obligacion sobre que se juró no desaparece por derecho civil, la equidad aconseja que el juramentado pueda oponer su juramento á la accion.

¿Cuándo puede oponerse la excepcion de cosa juzgada?—Siempre que la accion que se ventile haya sido objeto de un juicio anterior, habido entre las mismas personas, por la misma causa, y haya adquirido la sentencia fuerza ejecutoria.

¿Cómo se dividian las excepciones?—En civiles y pretorias, segun su origen; en perpétuas y temporales, por su duracion; y en perentorias y dilatorias, con relacion á sus efectos. Las segundas pueden equipararse á éstas.

¿Cuáles eran las perentorias?—Las que destruían los efectos de la acción en cualquiera tiempo, como el dolo, el miedo y el pacto absoluto de no pedir.

¿Cuáles eran dilatorias?—Las que podían alegarse en tiempo determinado y suspendían los efectos de la acción, como el pacto de no pedir temporalmente, la incompetencia ó recusación de los jueces, la falta de personalidad de los litigantes, etc.

¿Qué eran las réplicas?—Las alegaciones del demandante en contra de las excepciones. Eran la excepción de la excepción.

¿Qué eran las dúplicas?—Las alegaciones del demandado en contra de las réplicas. Eran la excepción de la réplica. Las trípticas eran la excepción del demandante á las dúplicas, y así sucesivamente.

¿Cuáles eran las excepciones *rei coherentes*?—Las que nacían de causas hijas de la cosa, y se daban sin relación á las personas. De esta naturaleza eran las que podían usar los fiadores como pertenecientes á los deudores, si no eran personalísimas.

Interdictos.

¿Qué eran los interdictos?—En los primeros tiempos de la pretura, á que debieron su origen, eran unos preceptos ú órdenes dadas por los magistrados acerca de conflictos ocasionados en materias que no habían sido objeto de derecho escrito, y versaban generalmente sobre orden público. En tiempo de Justiniano eran unas fórmulas, con carácter de acciones, por las que el pretor prohibía ó mandaba alguna cosa, especialmente sobre posesión ó cuasi-posesión.

¿Que clases había de interdictos?—Tres: prohibitorios, restitutorios y exhibitorios. Los primeros eran posesorios ó no posesorios, y tenían por objeto una prohibición del pretor.

¿Cuántos y cuáles eran los posesorios?—Los siguientes: *Uti possidetis, utrubi, de itinere actus privato, de aqua quotidiana, de aqua aestiva, de rivis, de fonte, de operis novi nuntiatione*.

¿Cuántos y cuáles eran los no posesorios?—Diez y seis, cuya enumeración puede verse en el segundo tomo del *Curso histórico-exegético* del Sr. La Serna.

¿Cuáles y cuántos eran los restitutorios?—Once; tenían por objeto restituir alguna cosa, como la vía pública á su antiguo estado, poner expedida la navegación de los ríos, etc.

¿Cuántos eran y qué objeto tenían los exhibitorios?—Eran cinco y tenían por objeto evitar la detención ilegal del hombre libre; presentar el libreto manumitido con la obligación de prestar servicios, ó personas sobre cuyo estado se litigaba, ó el testamento en que alguno tenía interés.

¿Qué diferencia había entre éstos y la acción exhibitoria?—En que aquéllos se referían á personas libres, excepto el de *liberis exhibendis*, y ésta tenía lugar contra las cosas.

¿Qué otra división se hacía de los interdictos?—Dividíanse en interdictos de adquirir, de retener y de recobrar la posesión, cuya clasificación no excluye la anterior.

¿Cuáles eran, y qué fin tenían los de adquirir?—Su objeto era obtener la posesión que antes no se había disfrutado, y eran seis: el llamado *quorum bonorum*, el *salviano*, el *posesorio*, el *sectorio*, el *quod legatorum* y el *quo itinere*. Por el primero, el *bonorum poseedor* adquiría la parte de bienes hereditarios poseída por otro, ó que éste ha dejado de poseer por el dolo, y que nunca aquél había poseído. Por el segundo, el dueño de una finca arrendada podía dirigirse contra las cosas del colono hipotecadas al pago de los alquileres ó arrendamientos, mientras permanecían en su poder. Por el

tercero, obtenia la posesion de los bienes comprados, el comprador de una universalidad, llamado *emptor bonorum*. Por el cuarto, la adquiria el que compraba los bienes del Estado, llamado *sector*. Por el quinto, se restituia á la herencia todo lo que se hubiera distribuido en concepto de legado. Y por el sexto, el comprador del predio dominante adquiria la cuasi-posesion de la servidumbre *iter*.

¿Cuáles eran, y que fin tenían los de retener?—Tenian por objeto proteger al poseedor contra los hechos perturbatorios de su contrario, y eran nueve: el nombrado *uti possidetis*, el *utrubi*, el de superficie, *senda y carretera*, el de *agua quotidiana*, el de *agua aestiva*, el de *rivis*, el de *fonte* y el de *cloasis*. Por los dos primeros se fijaba cuál de los litigantes debia tener el carácter de demandado, ya fuesen muebles ó inmuebles las cosas demandadas. Por el tercero, se conseguia lo mismo respecto al derecho de superficie. Por el cuarto, se mantenia en la posesion de las servidumbres, *iter*, *actus*, *via*, al que las habia usado en el año corriente sin violencia, sin clandestinidad ni precariamente. Por el quinto, se otorgaba igual favor al que hubiera poseido alguna vez, durante otro término y con las mismas condiciones, la servidumbre de acueducto. Por el sexto, al que la disfrutaba en el verano anterior. El sétimo se referia á la limpia y reparacion de los cauces de las aguas privadas. El octavo, á los mismos objetos respecto al uso de las aguas de una fuente, pozo ó estanque. El noveno, á los mismos fines en las cloacas.

¿Qué circunstancias debian mediar para que fueran eficaces éstos interdictos?—Que la posesion no hubiera sido adquirida violenta, ni clandestina, ni precariamente.

¿Cuáles eran y qué fin tenían los interdictos de recobrar?—Tenian por objeto recuperar la posesion perdida por un hecho independiente de la voluntad del poseedor, frecuentemente violento, y eran tres: el llamado *unde bi*, el de *clandestina possessione* y el de *precario*. Por el primero se devolvia la posesion al despojado, aun cuando éste la disfrutara violenta, clandestina ó precariamente. El segundo competia cuando se habia quitado la posesion de un modo clandestino; luego cayó en desuso. Por el tercero se recobraba la posesion, negada por aquél á quien se habia concedido una cosa inmueble á titulo de precario.

¿Qué requisitos debian concurrir para que naciera el *unde bi*?—1.º, que el despojado tenga con buena ó mala fé la posesion juridica; 2.º, que el despojo se hubiera causado por, ó de orden del demandado, y 3.º, que el acto fisico ó moralmente violento, haya producido la pérdida de la posesion.

¿Qué otra division se hacia de los interdictos?—Dividíanse en simples y dobles. Eran simples aquéllos en que resultaba claro quién era el demandante y quién el demandado, y dobles aquéllos en que era igual la condicion de ambos litigantes, quiénes participaban del carácter de demandados y demandantes.

¿Qué modificacion capital sufrieron los interdictos en tiempo de Justiniano?—Perdieron su antigua naturaleza, convirtiéndose en verdaderas acciones.

Penalidad de los litigantes temerarios.

¿Con qué castigaba el derecho romano la temeridad en los litigios?—La de los demandantes con la accion de calumnia, la accion contraria, el juramento y la *reestipulacion*.

¿A quién competia, y que fin procuraba la accion de calumnia?—Se daba en favor del demandado injustamente, que habia sido absuelto, contra el demandante malicioso, para que pagase una décima ó cuarta parte del valor de la demanda, segun que fuera ó no un interdicto.

¿Qué era la accion ó juicio contrario?—Una especie de reconveccion que el demandado absuelto dirigia contra el demandante, para que se le condenara al pago de una parte del valor de la demanda. Procedia contra la accion de injurias y otros casos determinados.

¿Sobre qué versaba el juramento?—Sobre la intencion de no proceder de calumnia al entablar la demanda.

¿Qué era la reestipulacion?—Una multa impuesta al demandante que habia sido vencido en el juicio. No procedia cuando podia usarse del juicio contrario.

¿Con qué medios se castigaba la temeridad de los demandados?—Con la esponsion, la condenacion en el duplo, el juramento y la infamia. La esponsion, parecida á la reestipulacion, era tambien una multa que debia pagar el demandado vencido, al demandante. La condenacion en el duplo tenia lugar cuando aquél negaba la deuda en determinados juicios. El juramento de calumnia podia exigirse por el demandante, siempre que no procedieran los medios anteriores. La infamia recaia sobre el demandado algunas veces, como por consecuencia de la accion de tutela, de mandato, de depósito y otras. El juramento se exigió siempre á los demandados despues de Justiniano, así como á los abogados de ambas partes, cuya formalidad vino á reemplazar á la antigua accion de calumnia. Al pago de la parte del valor del pleito, sustituyó la indemnizacion de perjuicios y gastos causados.

¿Qué reglas debian observarse en la administracion de justicia?—Debian los jueces y magistrados juzgar atemperándose al derecho constituido y á las costumbres legítimamente admitidas, absolver al demandado por la accion *real*, ó condenarle á la devolucion de la cosa con sus frutos, segun que resultare ó no probado el dominio; en una palabra, decidir conforme á la naturaleza y fin de las acciones, apreciando recta é imparcialmente las pruebas aducidas.

¿Cómo se dividian los juicios?—En públicos y privados. Eran públicos, aquéllos en que se perseguian crímenes juzgados antiguamente por el pueblo ó sus representantes, y podian ser entablados por todos los ciudadanos; y llamábanse privados, aquéllos de que se ha tratado anteriormente.

¿Quiénes no podian acusar?—Las mujeres, los pupilos, los infames, los que no poseian 50 áureos y los testigos falsos.

¿Qué clases habia de juicios públicos?—Unos eran capitales y otros no capitales.

¿Cuáles eran los capitales?—Los que versaban sobre delitos castigados con la última pena, con la interdiccion del agua y del fuego, con la deportacion y con la condenacion á minas. Los demás eran no capitales.

¿Qué juicios públicos eran los principales?—El de lesa majestad, que castigaba la ley Julia con la pena de muerte y condenacion de la memoria del culpable, y comprendia los atentados contra el pueblo romano personificado en el emperador, y contra su seguridad; el de adulterio, castigado con la pena capital; el de estupro no violento de una virgen ó viuda honesta, castigado con la confiscacion de la mitad de los bienes del reo de clase elevada, y con la relegacion y pena corporal del reo de condicion humilde; el de homicidio, castigado por la ley Cornelia con la deportacion, y despues con la muerte del homicida de baja condicion; el de parricidio, que comprendia la muerte de los ascendientes, colaterales de cuarto grado, cónyuge, afines de primer grado, patronos y descendientes, si era cometido por la línea materna, castigado por la ley Pompeya con la muerte, en la forma siguiente: se encerraba al delincuente, acompañado de un perro, un gallo, una víbora y una mona en un saco de cuero, y era arrojado al mar ó á un rio despues de haber sido azotado con varas hasta que saltase la sangre; el de falsedades, castigado por la

ley Cornelia con la deportacion ó la muerte, segun que fuere libre ó esclavo el delincuente; el *plagio*, que consistia en ocultar, vender, poner ó retener en prisiones á un ciudadano ó esclavo ajeno, castigado por la ley Fabia con la pena de minas ó muerte, relegacion perpétua ó confiscacion de bienes, en caso de ser los reos de clase elevada ó humilde. Y, en fin, los que tenian lugar para el castigo de otros delitos de menor importancia.

FIN DEL DERECHO ROMANO.

ÍNDICE.

Páginas

Prolegómenos del Derecho.....	4
Division del Derecho.....	4
Estudios auxiliares del Derecho.....	11
Historia del Derecho romano.....	12
Primer periodo.....	12
Segundo periodo.....	14
Tercer periodo.....	17
Cuarto periodo.....	19
Instituciones del Derecho romano.....	23

LIBRO PRIMERO.

De las personas.....	24
Nupcias y patria potestad.....	25
Adopciones.....	26
Disolucion de la patria potestad.....	27
Tutelas y capitis-diminuciones.....	28
De la curatela.....	31

LIBRO SEGUNDO.

De las cosas.....	32
Servidumbres reales.....	37
Servidumbres personales.....	39
Usucapion y prescripcion.....	41
Donaciones.....	42
De las dotes.....	45
Personas por medio de las que podemos adquirir.....	46
Modos universales de adquirir.....	46
Testamentos ordinarios y privilegiados.....	47
Desheredacion de descendientes.....	52
Institucion de heredero.....	54
Division de la herencia.....	55
Sustituciones de heredero.....	56
Ineficacia de los testamentos.....	57
Testamento inoficioso.....	58
Desheredacion de descendientes y ascendientes.....	59
Desheredacion de los hermanos.....	60
Clases de herederos.....	60
De las mandas.....	62
Derecho de acrecer.....	67
Revocacion de los legados.—Ley Falcidia.....	68
Herencias fiduciarias.....	69
Fideicomisos singulares.....	71

Codicilos	71
Apertura de las últimas voluntades.....	72
Herencias ab-intestato.....	72
Senados-consultos tertuliano y orficiano.....	75
Sucesion de los cognados.....	75
Sucesion de los libertos.....	75
Bonorum possessiones.....	76
Variaciones introducidas en las sucesiones intestadas por las <i>novelas</i>	77
Sucesion de ascendientes y colaterales.....	78
Cosas comunes a ambas sucesiones.—Colacion de bienes.....	78
Trasmision de herencia, reservas, por arrogacion.....	79
De las obligaciones.....	80
Obligaciones reales.—Préstamo.....	81
Comodato.....	82
Precario.—Depósito.—Secuestro.....	84
De la prenda.....	85
Contratos innominados.....	88
Obligaciones verbales.....	89
Co-estipulantes.—Co-promitentes.....	90
Division de las estipulaciones.....	91
Estipulaciones inútiles.....	92
Adstipulacion.—Fiadores.....	93
Obligaciones literales.....	95
Obligaciones consensuales.....	96
Locacion-conduccion.....	98
Enfiteusis.....	99
Superficie.—Sociedad.....	100
Mandato.....	101
Cuasi-contratos.....	102
Personas por las que se adquieren las obligaciones.....	103
Disolucion de las obligaciones.....	104
Obligaciones nacidas del delito.....	105
Del robo.....	107
De la ley Aquilia.....	108
De las injurias.....	109
De los cuasi-delitos.....	109

LIBRO TERCERO.

De las acciones.....	110
Sistema de las acciones de ley.....	111
Sistema formulario.....	114
Tercer sistema.....	117
Juicios extraordinarios.....	117
Contratos con personas en potestad ajena.....	121
Acciones noxales.....	121
Daño causado por animales.....	121
Personas por quienes se podrá demandar.....	122
Cauciones.....	122
Duracion y trasmision de acciones.....	122
Excepciones.—Réplicas.—DúPLICAS.....	123
Interdictos.....	124
Penalidad de los litigantes temerarios.....	125

BREVE COMPENDIO

DE LA

HISTORIA DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA.

¿Cuándo quedó España definitivamente sometida al gobierno imperial romano?—En tiempo de Augusto, rigiendo las leyes romanas, que con su sabiduría y el idioma latino, que llegó á ser general, contribuyeron poderosamente á la fusion de vencidos y vencedores, asimilando sus costumbres y consiguiendo que la España fuera considerada como una provincia del imperio, hasta que los visigodos, en tiempo del emperador Honorio, invadieron la Galia meridional y el territorio hispano confinante con ella, concluyendo por conquistarlo íntegramente.

¿Desapareció la legislación romana con esta invasión?—No; los nuevos conquistadores la respetaron como propia de los conquistados, á quienes permitieron regirse por sus leyes, continuando ellos bajo el yugo de las suyas. De aquí el derecho *personal* ó *de castas* entre vencedores y vencidos, anarquía legal que llegó á desaparecer con la publicación de un nuevo código general para todos los habitantes, contribuyendo á la fusion, la invasión de los árabes, que obligó á unos y otros á hacer causa común en la defensa del territorio.

¿Qué suerte ha cabido á la legislación goda despues de la conquista de los árabes?—En un principio debió continuar rigiendo para el corto número de los españoles que, refugiados en las montañas de Astúrias, comenzaron á reconquistar palmo á palmo el país; mas luego que adelantaban en su empresa publicábanse ciertos cuadernos contentivos de disposiciones legales, por las que debían gobernarse determinadas comarcas, dando origen al derecho *foral*, y minorando, por consiguiente, la fuerza general de la legislación goda, mal que comenzó á remediarse en tiempo del rey don Fernando y don Alfonso el Sabio, por medio de códigos que tendían á uniformar la legislación, y que, si bien la oposicion de los ricos-hombres impidió que surtieran todo el efecto deseado, don Alfonso XI consiguió que se fijara la prelación de los cuerpos legales que debían tener autoridad. En esta época dominaba el estudio del derecho romano y de las Decretales, que se deja entrever en las Partidas.

¿Qué monarcas intentaron posteriormente uniformar la legislación?—Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, encargando á un célebre jurisconsulto la revision del derecho, sancionando sus trabajos y tomando disposiciones en las Cortes de Toledo. Los esfuerzos empleados no han correspondido, sin embargo, al propósito de sus autores.

Los monarcas posteriores secundaron sus miras por medio de reformas parciales y de una compilación que fué corregida y revisada varias veces, sin que nunca haya llegado á satisfacer las exigencias de la época.

¿Cuál es, pues, el fundamento de la legislación española?—Lo constituyen las costumbres godas y el derecho romano. Su estudio puede dividirse en seis épocas: 1.^a, legislación de España en el siglo IV y principios del V, último tiempo de la dominación romana; 2.^a, id. durante la dominación goda, hasta el Fuero-Juzgo; 3.^a, desde el Fuero-Juzgo hasta el nacimiento del sistema foral; 4.^a, desde el sistema foral hasta don Alfonso el Sábio. 5.^a, desde este monarca hasta los Reyes Católicos, y 6.^a, desde el reinado de éstos, hasta la época actual. Esta época puede subdividirse en dos partes, que comprenden: la primera, desde los Reyes Católicos hasta el destronamiento de doña Isabel II; y la otra, hasta la actualidad.

ÉPOCA PRIMERA.

ESPAÑA ROMANA.

Principales magistraturas.—Senadores y curiales.

¿Qué legislación regía en España durante esta época?—La romana, si bien experimentando todas las vicisitudes por que pasó en las provincias donde fué extendiéndose paulatinamente, especialmente desde que el emperador Caracalla concedió el derecho de ciudadanía á todos los habitantes del imperio. Reconocía las mismas fuentes de la que regía en Roma. La ley de las XII Tabas, los edictos de los pretores, los plebiscitos, los senado-consultos y las respuestas de los jurisconsultos fueron sus orígenes durante la república, aumentándose en tiempo del imperio con las constituciones imperiales y los escritos de Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino, mandados tener como cuerpos legales por Valentiniano III, los cuales adquirieron carácter de generalidad desde Constantino, siendo causa de su importancia la desaparición de la república, de los comicios, de la independencia del Senado romano y el nacimiento de las escuelas que dividían á los jurisconsultos.

¿Quién las recopiló?—Los jurisconsultos Gregorio y Hermógenes, formando dos colecciones llamadas códigos Gregoriano y Hermogeniano. Comprendía el primero las constituciones publicadas desde el emperador Adriano hasta Constantino, y el segundo las de Diocleciano y Maximiano.

¿Quién recopiló las constituciones dictadas desde Constantino?—El código de Teodosio II, formado para el imperio de Oriente y adoptado después en Occidente por Valentiniano III, quien, fundándose en el crecido número de las obras de los jurisconsultos, en la dificultad de su adquisición, y principalmente en la diversidad y oposición de sus opiniones, les dió fuerza de ley, mandando que si entre dichos jurisconsultos hubiese oposición en las opiniones, se siguiera la del mayor número, decidiendo la de Papiniano en caso de empate, siempre que hubiera escrito sobre la cuestión; pues habiendo guardado silencio, el juez podía elegir la que considerara más justa (1). Fuera de este caso, el juez era un autómeta.

(1) Constitución llamada ley de citas, publicada en 426. Los jurisconsultos eran Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano, Modestino y algunos otros.

¿Qué parte del imperio formaba la España en los últimos tiempos de la dominación romana?—Era una de las tres diócesis en que se subdividía la prefectura de las Galias (1), dividida á su vez en provincias. Al frente de cada una de éstas habia un *gobernador* ó consular, y de toda la diócesis un *viceprefecto*.

¿Qué funciones ejercian los gobernadores?—Gobernaban y administraban justicia, cobrando los impuestos, organizando los ejércitos, y ejercian la jurisdiccion civil y criminal, excepto en las ciudades que gozaban del derecho *italico*, cuya administracion era la misma que la de la Italia.

¿Quiénes estaban encargados de la administracion municipal?—Los magistrados (2), de los cuales eran los principales los *duumviri*, *prefecti*, *quinquennales*, *curatores* ó *censores* y *defensores*. Los primeros, llamados tambien *quatorviri* cuando eran cuatro, vigilaban la administracion pública en general, administraban justicia y presidian el Senado; instituian un juicio y designaban el juez, llegando á tener el imperio y la jurisdiccion. Los elegian los curiales; su cargo era anual, y no podia recaer mas que en individuos de la curia.

Los *prefectos* eran unos magistrados principales, en donde no habia *duumviri*, cuyas funciones y duracion del cargo eran iguales á las de éstos, diferenciándose en que el nombramiento de los *prefectos* se hacia en Roma, y no por la *curia* de la ciudad, como el de los *duumviri*.

Los *censores quinquennales* ó *curatores*, eran magistrados que tenían á su cargo la vigilancia de las costumbres, contribuciones y trabajos públicos; el arriendo de las propiedades y la administracion del capital municipal. Reunian las funciones de la Censura y Cuestura romanas. Se solian nombrar por un año, quedando luego vacante por cuatro, siendo tanta la importancia de su cargo que, para llegar á él, era necesario haber desempeñado las demás magistraturas.

Los *defensores* estaban encargados de la defensa de los intereses de las ciudades, reclamaban contra los agravios de los gobernadores, nombraban tutores y conocian de algunas faltas en lo criminal. Elegianlos todas las clases del pueblo, de entre los individuos de la plebe, razon por que se le llamaba *defensor plebis*; y aunque en un principio fueron temporales y para determinados negocios, se convirtió en público y perpétuo el cargo desde Constantino. Su jurisdiccion se extendió á conocer de asuntos cuya importancia no excedia de 300 sueldos, y desempeñadas últimamente sus funciones por los obispos, ejerció aquel cargo gran influencia en el porvenir de las ciudades. El Fuero-Juzgo menciona esta magistratura.

¿Qué clases reconocia la poblacion de las provincias?—Dos: los *senadores* y los *curiales*. Eran los *senadores* los individuos de las familias que habian pertenecido al Senado romano ú obtenido esta distincion honorífica por su prestigio, por su riqueza y por haber ejercido el gobierno de las provincias, gozando de varias exenciones, entre las cuales figuraban preferentemente la de la tortura y de las cargas municipales.

Los *curiales* eran una reunion de personas que componian el cuerpo municipal de la ciudad llamado *curial* (3), con funciones honoríficas en

(1) Esta prefectura y la de Italia, eran las dos en que se dividia el imperio de Occidente.

(2) Conviene tener presente la diferencia que establecia el derecho romano entre el magistrado y el juez, para no confundir las funciones de ambos. Recordaremos aqui solamente, que el primero era un funcionario público nombrado por las leyes políticas, de alta mision, que publicaba edictos, resolvia algunas cuestiones, y daba la *fórmula* á que debia ajustarse el juez; y el segundo era un particular, elegido por las partes, y á veces por el magistrado, que se atenia en la resolucion del negocio á la *fórmula* que de aquél recibia.

(3) Al lado de la *curia* habia el senado de *decuriones*, especie de consejo público de aquélla, compuesto de parte de los curiales, de los hijos de algunos de éstos y de los ciudadanos que, por sus servicios públicos, habian obtenido el titulo de *honorati*.

un principio, y derecho al sufragio en las deliberaciones públicas; cargos apetecidos primeramente y despues repugnados, porque se agobió á los curiales con gravámenes extraordinarios, responsabilidades ilimitadas y otras cargas que los han hecho odiosos, hasta el extremo de tener que considerarse obligatorios y penarse su excusa, privándoles, al efecto, de asilo y de refugio.

¿Qué circunstancias debian reunir los curiales?—Eran considerados tales todos los habitantes de las ciudades, naturales ó domiciliados, y sus hijos, que poseyeran más de veinticinco yugadas de propiedad territorial, no pudiendo dejar de serlo á su arbitrio. No podian vivir en el campo, alistarse en los ejércitos, obtener empleos incompatibles con sus funciones, excepto cuando habian llegado á recorrer toda la escala de la magistratura; no podian ser clérigos sin que hubieran dejado á la curia sus bienes ó á otra persona que lo sustituyera, y no podian venderlos sin permiso del gobierno. Dirigian los negocios del municipio, administraban sus bienes, recaudaban los impuestos, quedando obligados á responder de su buen desempeño, hasta el extremo de suplir con bienes propios la insuficiencia de las rentas, cualquiera que fuera la causa que la ocasionara. Cuando no sucedian en el cargo de curial, así como sus viudas é hijas que se casaban con personas no curiales, debian ceder á la curia la cuarta parte de sus bienes. Cuando moria un curial sin herederos forzosos, no podia disponer en su testamento mas que de la cuarta parte de su patrimonio.

¿Qué privilegios gozaban?—Pueden resumirse en los siguientes: 1.º estaban exentos de la tortura, excepto en casos gravísimos, y de penas afflictivas é infamantes; 2.º, eran acreedores á ciertos honores, y aún al título de *condes*, si habian recorrido todos los grados municipales; 3.º, tenían derecho á alimentos en casos de indigencia, y á ser elegidos magistrados, previa la confirmacion del emperador.

¿Cuándo desapareció la curia?—Hacia el siglo IX, en tiempo de Leon el Filósofo.

Concilios y conventos jurídicos.

¿Qué eran los *Concilios jurídicos*?—Unas asambleas compuestas de los ciudadanos *honorati*, de los *posesores* y *judices*, y de los más ricos y notables, en que se discutian los negocios públicos, judiciales y administrativos. Solian presidirlos los Procónsules. Habia otras asambleas de tres clases, segun las personas que las componian: *generales*, *intermedias* y *particulares* ó de una ciudad. Las primeras comprendian á todas las provincias de una diócesis, y las segundas á algunas. Las terceras llamábanse tambien *concilium provinciale* ó de una ciudad. Tratábanse en ellas de los negocios públicos correspondientes al territorio que abrazaban.

¿Qué eran los *Conventos jurídicos*?—Reuniones compuestas de jueces y recuperadores, presididas por los procónsules ó gobernadores de las provincias, que tenían por objeto la administración de justicia, y evitar gastos á los litigantes, acercándoles el tribunal que debia dirimir sus discordias.

¿Cuál era la legislacion vigente entonces en España?—La misma que se aplicaba en Roma en aquella época.

ÉPOCA SEGUNDA.

ESPAÑA GODA.

Código de Eurico.

¿Cuáles fueron las principales causas de la decadencia del imperio romano?—La gran extension de territorio, que encerraba provincias enteramente opuestas por su origen, costumbres ó intereses, entre cuyos habitantes no podian existir lazos de union y de nacionalidad; el enfriamiento patriótico, que llegó casi á convertirse en indiferencia; los ejércitos de bárbaros, á quienes se confiaba la defensa de las fronteras; la poca importancia de la escasa clase media; el desarme general de la nacion, decretado y llevado á cabo por los emperadores; la molicie y relajacion de costumbres, que debilitaba la juventud y el espíritu guerrero y, por fin, el despotismo, manifestándose por medio de una centralizacion irritante que ahogó la vida de los municipios, llamados á ser, sin ésto, los principales baluartes del imperio.

¿Qué tribus invadieron primeramente la España?—Los *vándalos* y *silingos*, cuya dominacion ha sido pasajera; luego los *suevos*, que se estacionaron en Galicia; más tarde los *alanos*, que fijaron su residencia en Extremadura y Lusitania; y, por fin, los *godos*, que llegaron á dominar por completo la Península, estableciendo una monarquía, cuyo primer rey fué Eurico, en España (1). Todos eran germanos.

¿Desapareció la legislacion romana con estos trastornos?—No, porque fué respetada por los vencedores.

¿Qué costumbres tenian los germanos?—Tácito refiere que las mujeres les acompañaban en los combates, alentándoles en la pelea. Elegian por reyes á los nobles más valientes, cuyo poder era arbitrario, enseñando y mandando con el ejemplo. Durante la paz, la juventud germana se aguerria en las filas de las naciones combatientes, disfrutando de banquetes abundantes, pero poco delicados, como único sueldo, ó se dedicaba á la caza y á la ociosidad, entregándose tarde á los placeres del amor. Las mujeres cuidaban de la casa y de los ancianos. Se casaban con una sola, aunque algunos jefes tenian muchas por ostentacion. Los maridos constituian la dote, consistente en bueyes, jaeces, armas y caballos. El adulterio era poco conocido y lo castigaba el marido arrojando la mujer de la casa á presencia de los padres y azotándola, desnuda y cortado el cabello, por toda la poblacion. No conocieron los testamentos. La nacion reunida entendia en los negocios más graves.

¿Cuándo tuvo lugar la invasion goda?—En el año 400 entraron en la Península las tres tribus referidas de *suevos*, *alanos* y *vándalos*, que, no pudiendo ser vencidos por los romanos, dirigieron contra ellas las hordas godas que amenazaban inundar y destruir la Italia, prometiéndoles en recompensa los países de España que conquistasen, lo que tuvo lugar al fin

(1) El origen de este pueblo fué objeto de controversia para los eruditos; pero la opinion más generalmente seguida, es la que les supone oriundos de la Escandinavia. Léase el discurso de don Francisco Pacheco, que precede al Fuero-Juzgo, en la coleccion de Códigos españoles de «La Publicidad».

en el año 416, siendo su jefe Ataúlfo. Componían el pueblo godo dos tribus: los *visigodos*, que se dirigieron á España, y los *ostrogodos*, que fueron después á la Italia, cuyos diversos nombres procedían de la posición que ocupaban estas tribus en la embocadura del Danubio.

¿Qué acontecimientos notables tuvieron lugar hasta el reinado de Eurico?—La extinción de los *alanos*, la emigración de los *vándalos* al África y la batalla de los campos cataláunicos, conservando los vencidos sus leyes y rigiéndose los vencedores por las suyas, según queda dicho.

¿Qué monarca legisló para el pueblo godo?—Según San Isidoro, fué Eurico el que le dió leyes escritas que se compilaron por los años de 466 y 484, como se demuestra por los descubrimientos hechos por los benedictinos de San German, en un palimpsesto que fué descifrado por sábios alemanes y por M. Blume. Antes se regían por tradiciones y costumbres.

Hay dudas acerca del primer compilador. Unos la atribuyen á Recaredo, otros á Eurico y otros á Alarico. Los Sres. La Serna y Montalvan opinan que no fué Recaredo, y que, por más que haya motivo para inclinarse á creer fué Eurico, atendidas ciertas palabras de San Isidoro, es menester reconocer que la crítica no hizo desaparecer las dudas, acerca de si fué aquel monarca ó Alarico. Leovigildo parece haber sido el que revisó la antigua ley goda. No falta quien supone que la revisión tuvo lugar en el Concilio IV de Toledo, reinando Sisenando, opinión equivocadamente fundada, según se colige de la afirmación de San Isidoro en favor de Eurico, de quien lleva el nombre. Llámasele también *Código de Tolosa*.

Desgraciadamente no se conserva íntegra esta colección. Comienza por tres párrafos que preceden al capítulo 277 y concluyen en el 324, pues de los 325 y 326 sólo quedan algunas letras.

¿Para quién fué dada esta ley?—De las disposiciones que contiene, se deduce que fué formada para los vencedores. Muchas de ellas forman parte del Fuero-Juzgo.

Breviario de Aniano.

¿Cuál era el estado de la legislación cuando se publicó la *Ley romana* ó *Breviario de Aniano*?—La anarquía legal producida por el derecho de castas. El franco, el borgoñon, el romano y el godo, se regían por sus propias leyes, no obstante formar parte y habitar una misma comarca, lo cual sucedía también en España, mientras que los romanos continuaron obediendo y gobernándose por las suyas.

¿Cómo se formó este código?—Alarico dió encargo á una comisión de jurisconsultos presididos por Goyarico, conde de Palacio, para que recopilase y reuniese en una sola colección las leyes romanas que regían á los vencidos, á fin de evitar dudas, aclarar las oscuras y derogar las injustas; cuya colección, terminada en 506, fué aprobada por una reunión de obispos y de personas notables, confirmada por el rey y suscrita por el canciller Aniano, destinándola á decidir las contiendas y juicios suscitados entre los vencidos. Llámasele primeramente *Ley romana*, *Liber legum*, *Auctoritas Alarici regis*, *Lex Theodosii*, *Corpus Theodosianum* y *Commonitorium*. El nombre de Breviario de Aniano no lo recibió hasta el siglo XVI.

Constituyen este Código diez y seis libros del código de Teodosio; las novelas de los emperadores Teodosio, Valentiniano, Marciano, Mayoriano y Severo; algunos fragmentos de las instituciones de Gayo; los cinco libros de las sentencias de Paulo; trece títulos del código Gregoriano; dos títulos del Hermogeniano, y un pasaje muy corto del libro de las respuestas de Papiniano.

Consta de dos partes: 1.^a, el texto; 2.^a, la interpretación, exceptuando los fragmentos de Gayo, en que ambas cosas están reunidas. Si la ley es clara, el comentario nada dice, ó manifiesta simplemente no haber necesi-

dad de interpretacion. La pureza, sin modificacion alguna, del derecho antiguo, se observa en el texto; y la interpretacion explica, modifica y aclara aquél, deteniéndose particularmente en el sistema municipal.

¿Qué ediciones se han hecho del Breviario de Aniano?—Dos: una en Basilea en 1528, por Juan Sichard, á la que falta el *Commonitorium*, y otra publicada por el alemán Hachel en 1847 y 1848, más completa que la anterior. También se encuentra ya íntegra, ya particularmente inserta en las ediciones del código Teodosiano.

¿Ha tenido fuerza obligatoria para los godos?—No; bastando para vencerse de ello la sencilla razon de que sería incompatible con la ley de los visigodos si obligara á vencedores y vencidos. Cesó su fuerza con la publicacion del Fuero-Juzgo, código formado para toda la monarquía, y obligatorio para unos y para otros.

Concilios de Toledo.

¿Qué fueron los concilios de Toledo?—Primeramente una reunion de obispos, y despues de obispos y magnates, para tratar de asuntos civiles y eclesiásticos. Fueron los más notables el octavo y siguientes, en los cuales comenzaron á asistir los magnates.

Cuestionábase sobre si en España hubo asambleas distintas de los concilios de Toledo, y análogas á las que la historia demuestra que hubo en Inglaterra y en Francia; pero esa duda todavía no se ha resuelto satisfactoriamente, no obstante los eruditos trabajos publicados.

No deben considerarse como el fundamento de las Córtes, porque á ellos no concurrían los dos brazos de la nacion, el eclesiástico y el secular. El primero asistió sólo hasta el octavo; y el segundo, si en éste y en los siguientes figura, es por delegacion del monarca, sin voz ni voto en las deliberaciones, como mero testigo, y con objeto de dar más solemnidad al acto. No era necesaria la aprobacion del pueblo para la validez de las decisiones, pues aunque parece deducirse esta exigencia de algunas actas, la intervencion del pueblo era una fórmula, más bien de aclamacion, con que aquél demostraba su agrado á las decisiones de los concilios.

¿Qué diferencias notables los separan de las Córtes?—En ellos no se discutían los impuestos, no se deliberaba sobre hechos árdulos, ni se trataban los casos de guerra ni preliminares de paz; no eran, en fin, cuerpos colegisladores, ni tenían poder propio é independiente, sino que discutían y deliberaban tan sólo sobre los asuntos que el monarca les designaba, sin cuyo asentimiento, puesto que en él residía la autoridad, no tenían fuerza legal las disposiciones y acuerdos de los concilios.

¿Qué diferencias les separaban de las antiguas *juntas germánicas*?—En éstas tenían voz y voto los guerreros, y en aquéllos ya queda dicho que los magnates asistían como testigos. Los concilios se reunían casi todos los meses, principalmente para asuntos eclesiásticos; las juntas no reconocían periodo determinado, y á veces tenían lugar despues de muchos años, convocándose para decidir alguna expedicion militar. Diferenciábase, pues, en las personas; en el tiempo de su celebracion, y en las materias de que se ocupaban.

¿Cuál era la forma de su celebracion?—Reunidos en una iglesia, y á puerta cerrada, los obispos, los presbíteros que tenían entrada y los diáconos necesarios para el servicio, imploraban el auxilio divino, leíanse los cánones que prescribían las solemnidades de su celebracion, y se ocupaban desde luego en tratar los asuntos señalados por el monarca, de todo lo cual se extendían actas autorizadas por notarios convocados al efecto (1).

(1) Esta forma se estableció en el IV concilio.

¿Han ejercido influencia en el gobierno y administracion del Estado?—Sí, y muy grande, pues con sus máximas de moral y de justicia, dictadas por la sabiduría y la experiencia que distinguía á los que los formaban, contribuian poderosamente á impedir que la barbarie dominara aquella sociedad. Pueden considerarse como el depósito de la fé, de la moral y de la ciencia en aquellos oscuros tiempos.

¿Cuándo se celebraron los primeros concilios?—Los dos primeros en tiempo del emperador Honorio. Fueron de escasa importancia. El III en tiempo de Recaredo, año 589. En él abjuró este monarca el arrianismo, y se prohibió la cohabitacion de los obispos y sacerdotes con sus mujeres. El IV, reinando Sisenando, año 633 de la era cristiana. Se acuerda en él la forma en que deben celebrarse estas reuniones; se recomienda al príncipe la consideracion que debe tener al pueblo, y á éste el respeto que debe guardar á aquél: se ocupa tambien de la eleccion de los reyes. El V tuvo lugar en tiempo de Chintila, año 636. Se ocupó preferentemente de materias civiles. Prohíbe atentar contra la familia real; condena las pretensiones á la corona, de los que no son godos ó no hayan sido elegidos legitimamente, y sanciona en el soberano el derecho de indulto. El VI se celebró reinando el mismo monarca, en el año 638. Se ocupa de las remuneraciones con que deben pagarse los servicios prestados al rey; de la conservacion de su familia y patrimonio; de la obligacion de vengar el sucesor la muerte de su predecesor, y prohíbe la peticion de los sufragios para la eleccion que debia tener lugar despues de la muerte del monarca. El VIII se celebró en el reinado de Recesvinto, año 653. Es notable porque se ocupa del patrimonio privado de los reyes y de la corona, trasmisible á los monarcas sucesores, y porque es el primero en que se ven firmas de magnates. Diez y siete condes suscriben sus actas. El IX, X, XI y XII son de poco interés. El XII fué celebrado en tiempo de Ervigio, año 638. Son importantes en materia civil las disposiciones que perdonan los tributos debidos hasta el primer año del reinado del monarca, y las que reiteran la defensa y proteccion de éste; en materia eclesiástica, la que excomulga á las reinas viudas que faltan á la castidad ó contraigan segundo matrimonio. Firman sus actas veintiseis condes y varones. Por fin el XVII, último de los celebrados, así como los demás no expresados especialmente, se ocupan de la seguridad y conservacion del monarca y su familia.

ÉPOCA TERCERA.

Fuero-Juzgo.

¿Qué es el Fuero-Juzgo?—Un código formado para toda la monarquía goda, obligatorio para vencedores y vencidos.

¿Qué efectos produjo su promulgacion?—Hizo desaparecer el derecho personal ó de castas; fomentó la fusion de vencedores y vencidos, permitiendo los matrimonios entre ellos, facilitando y afirmando la unidad de legislacion y de territorio.

¿Quién fué su autor?—Varias opiniones hay sobre el particular. Unos opinan que es obra de Recaredo, otros de Sisenando, y otros de Chindasvinto, Recesvinto, Ervigio y Egica. Los primeros se fundan en que en él hay leyes de aquel monarca, los cuáles padecen una grave equivocacion. Los segundos se apoyan en un epígrafe de los códigos romanceados, fun-

damento que deja de serlo, observando que varia notablemente en los latinos, en donde, con más razon, debia existir. Además, en los concilios celebrados en su reinado, nada se dice referente á este código, por más que contenga algunas leyes formadas por Sisenando, ó de su orden, lo cual no prueba que él fué el autor de la compilacion.

Los que afirman que Chindasvinto y Recesvinto fueron los primeros autores del Fuero-Juzgo, se apoyan en que el primero prohibió citar leyes romanas contenidas en el Breviario; prohibicion que no hubiera hecho si no existiera una compilacion por que hubieran de regirse; en que al tratar del tormento, se refiere á una coleccion ya formada; y en que mandó que los tribunales se rigiesen por leyes propias. Respecto á Recesvinto, es indudable que encargó al Concilio VIII la revision de las leyes, que confirmó la prohibicion de su padre Chindasvinto, y penó con la multa de 30 libras de oro á los litigantes que presentaran otro libro que el suyo, y á los jueces que no lo destruyesen. Ervigio corrigió, enmendó y añadió algunas leyes, segun el tomo régio del Concilio XII; y Egica fué el que dió la última mano á la compilacion legal, segun se prueba por el del Concilio XVI.

La última opinion, seguida por los autores modernos de más nota, es la más aceptable.

¿Con qué nombres se designó este código?—Llamósele *Código de las leyes*, *Libro de las leyes*, *Libro de los jueces* y *Libro de los godos*; hasta el siglo XIII no se llamó *Fuero-Juzgo*.

Fué escrito en latin, que era la lengua casi nacional. No falta quien diga que fué escrito en lengua gótico-española, opinion infundada, y quien asevere que la version castellana es coetánea á la latina, lo cual es inverosímil y erróneo, porque en el tiempo de su formacion, aunque ya se conocia el castellano, no puede suponersele tan desarrollado como el que se lee en los códigos; y porque se sabe que la primera version castellana tuvo lugar en tiempo de San Fernando, y la segunda, en el de Alfonso el Sábio.

No existe conformidad entre la version castellana y la latina. Faltan en los códigos latinos algunas leyes que se leen en los romanceados, observándose variaciones de lugar, de origen y de monarcas en otras, y notas diversas en ambos.

¿Cuántas ediciones se hicieron del Fuero-Juzgo?—Cinco latinas, en el extranjero; la primera en Paris en 1579, por Pedro Pithou; dos en Alemania, por Escoto y Lindebrog; y las dos restantes en Italia, por Canciani y Giorgiogni. Últimamente la Real Academia española publicó este código en 1845. Romanceadas, dos: la primera por Alfonso Villadiego, reimpresa en 1792; la segunda por la Real Academia española, cuando la latina, reproducida recientemente, y precedida de un discurso del Sr. Pacheco.

¿Qué juicios se han formado acerca del mérito de este código?—Se le calificó de rudo, inhumano y poco filosófico; mas este juicio es exagerado, porque, atendida la época de su formacion, es sin duda el que está más cercano á las máximas que la ciencia y la civilizacion proclamaron despues. M. Guizot dice que es un código universal, comprensivo del derecho político, civil y criminal de aquel tiempo.

¿Cuántos libros contiene?—Doce, divididos en títulos y leyes, á los que precede en algunos códigos un título preliminar. Este se ocupa del derecho público, ensalza la dignidad real, aconseja la piedad y bondad de los príncipes y la obediencia á los súbditos, determina la eleccion como único medio para ascender al trono, la cual deben hacer los obispos y magnates recayendo en persona goda ilustre, no religiosa. Califica de patrimonio del príncipe, trasmisible á sus herederos, todo lo que tuviere antes de subir al trono, y de patrimonio de la corona lo adquirido durante su reinado.

El libro PRIMERO se ocupa de las cualidades del legislador, de la ley, sus efectos, y circunstancias que debe contener.

El SEGUNDO, de la unidad de legislacion, prohibiendo la cita de leyes extrañas; somete á ellas al príncipe y declara ineficaz la alegacion de su ignorancia; se ocupa de los jueces, á quienes pueden amonestar los obispos y aun revocar sus fallos con aprobacion del monarca. Trata de los procedimientos, sustituyendo á los combates judiciales, las escrituras y testamentos. Una ley permite disponer de sus bienes por enfermedad ó miedo de la muerte, á los mayores de diez años.

El TERCERO tiene por epígrafe *De ordine conjugali*. El matrimonio, las dotes y los delitos contra la honestidad forman su materia predominante. Establece un sistema dotal diferente del romano, teniendo por base de su cuota la clase de las personas; permite los matrimonios entre españoles y godos, y exige para su celebracion el consentimiento materno ó de los hermanos, segun los casos. Condena el rapto de doncellas ó viudas; disculpa la muerte del adúltero *in fraganti* y del seductor, ocasionada por el marido, padre ó hermanos respectivamente. Declara la indisolubilidad del matrimonio, salvo algunas excepciones.

El CUARTO lleva el título de *De origine naturale*. El parentesco y sus grados, las sucesiones, los gananciales, las tutelas, la patria potestad virtualmente concedida á la madre y la institucion de las mejoras, son objeto de sus títulos.

El QUINTO, *De transactionibus*, comienza por las donaciones hechas á las iglesias, la dotacion de éstas, declarando sin efecto la prescripcion de treinta años; trata enseguida de las donaciones en general; luego de las ventas y cambios, préstamos, comodatos y depósitos, prendas, manumisiones y de los siervos del rey.

El SEXTO trata de los delitos y del tormento, estableciendo éste como medio probatorio, si bien más humanamente regulado que en algunos códigos posteriores, eximiendo de él á los magnates y empleados de palacio, que sólo deben ser atormentados por delitos de traicion, adulterio ú homicidio. Declara la facultad de indultar, consignando la filosófica máxima de que las penas no son trasmisibles á los hijos; castiga el aborto y el infanticidio; tasa la importancia de las heridas y mutilaciones y establece la pena del Talion.

El SÉTIMO se ocupa de los hurtos y de los engaños. Establece el sistema de composiciones entre el perjudicado y el reo, y autoriza la muerte del ladrón. Las usurpaciones, los plagios, la custodia de los presos, la publicidad de las sentencias y de las ejecuciones capitales, las falsedades y falsificación de monedas, son objeto de sus títulos.

El OCTAVO trata de las fuerzas y de los daños. Habla de las invasiones, despojos y daños causados en la propiedad ajena, de los causados por animales, de los ocasionados en las vías públicas, etc., y de los incendios é incendiarios.

El NOVENO, *De fugitivis et refugientibus*, se ocupa de los siervos fugitivos y sus encubridores, de las desercciones del ejército, imponiendo la obligacion de acudir á las armas á los legos y clérigos, incluso los obispos, y concluye tratando de los asilos.

El DÉCIMO, titulado *De divisionibus et annorum temporibus atque limitibus*, trata de las particiones, edificaciones y plantaciones en terreno ajeno; de la prescripcion de cosas, acciones y delitos, y de las penas con que se castigaban las alteraciones de los linderos.

Son objeto del UNDÉCIMO los enfermos y muertos, y los comerciantes de Ultramar. Y por fin, el DUODÉCIMO exhorta á los jueces la mesura y prudencia en los fallos, concluyendo ocupándose de los judíos. Las versiones romanceadas contienen un título más que las latinas, que se ocupa de los denuestos.

Fuerza legal del Fuero-Juzgo.

Hasta la formacion de los fueros municipales rigió como código general de la monarquía; despues de éstos compartió con ellos su autoridad. Esto resulta probado por documentos incontestables como el concilio de Oviedo, en tiempo de Alfonso el Casto, una sentencia del de Bermudo II, y otros que enumeran los autores.

Despues del sistema foral, era opinion generalmente aceptada, que sólo regía en las comarcas en que se justificara su observancia; opinion fundada en que el Ordenamiento de Alcalá no había hecho mencion de él al enumerar los cuerpos legales. Mas el Consejo de Castilla, por real cédula de 15 de Julio de 1788, declaró que estaba comprendido entre las leyes del reino, con preferencia á las de Partida, al contestar á la Chancillería de Granada en un pleito sobre sucesion de un religioso, mandando que ésta se arregle á las leyes del reino, entre las cuales están las del Fuero-Juzgo, *sin tanta adhesion á las Partidas*. Sus leyes, sin embargo, sólo deben considerarse vigentes en cuanto son usadas y guardadas.

ÉPOCA CUARTA.

Sistema foral hasta D. Alfonso el Sábio.

¿Qué eran los *fueros* municipales?—Unos cuadernos de leyes civiles, criminales, económicas y administrativas, que concedían los monarcas á los pueblos para constituirlos, arraigarlos y fomentar su poblacion. Los más antiguos son los españoles, pues ninguna nacion puede presentar documentos de esta especie, anteriores al fuero de Leon. La lucha con los sarracenos hacia forzoso el estímulo de los moradores que iban ganando terrenos y reconquistando el territorio, á quienes se concedían las cartas-pueblas.

¿Cuáles son los más antiguos y notables en España?—Los publicados desde D. Alfonso V, como el de Leon, Nájera, Sepúlveda y Cuenca, pues si alguno se presenta más antiguo, es diminuto y ménos importante. Hay tambien los de Logroño, Sahagun, Jaca, Salamanca, Escalona, San Sebastian, Alcalá de Henares, Plasencia, Palencia, Baeza, Madrid, etc. (1)

¿Fué conveniente y ventajoso el sistema foral?—Sí, política, económica y jurídicamente apreciados. Políticamente considerados los fueros, contribuyeron poderosamente á crear el poder de los municipios, en los que los reyes encontraban apoyo contra las demasías de los magnates, y los súbditos una libertad respetada por él y sus agentes, que se extendía á poder destruir las fortalezas de los ricos-hombres enclavadas en su territorio, si éstos intentaban dominarlos ó avasallarlos. Económicamente examinados, contienen disposiciones saludables á los pueblos, pues todos proclaman y sancionan la desamortizacion civil y eclesiástica, tal cual existía en aquellos tiempos. Relativamente al derecho, si bien no igualan en bondad al Fuero-Juzgo, en ellos se leen, no obstante, muchas de sus disposiciones ci-

(1) La Academia de la Historia, ha publicado un catálogo de los fueros y cartas-pueblas de España.

viles, como las relativas al sistema dotal, á los gananciales, etc., separándose de él en otras, v. gr.: la prohibicion de mejorar, la institucion del tanteo y retracto gentilicio, y el sistema de troncalidad. En materia penal adolecian de los errores reinantes en aquella época en que la ciencia estaba completamente oscurecida, y son vituperables todas sus disposiciones: la venganza privada y la atrocidad de las penas eran su carácter distintivo.

Fuero de Leon.

Reinando Alfonso V, año 1020, en el concilio celebrado en la ciudad de que tomó el nombre, se formó este fuero, el más antiguo que se conoce; pues otras concesiones sólo merecen el nombre de Cartas-pueblas. Concede el derecho de asilo á los habitantes de Leon, exceptuándolos de los tributos llamados *rauso*, que consistia en la cantidad que se pagaba por las heridas; *fonsadera*, que era una especie de redencion del servicio militar; *mañeria*, la cantidad que se pagaba para poder testar los pobres que no tenían hijos, y la *mincion* ó *luctuosa*, que la formaba la mejor cabeza de ganado que debía dar al rey el señor, por la muerte de uno de sus vasallos. Se prohiben las investigaciones violentas en las casas de los vecinos y el demandar á las casadas en ausencia de sus maridos.

Fuero de Sepúlveda.

Es uno de los más célebres, y fué concedido á la villa que lleva su nombre en la provincia de Segovia (4).

Dos ejemplares existen de este fuero; uno latino y otro romanceado. El latino se atribuye al conde D. Sancho Garcia ó á D. Alfonso VI; mas esta opinion es equivocada, pues ya existia en tiempo de Fernan-Gonzalez, Garcia Fernandez, Sancho Garcia y D. Sancho el Mayor; y el romanceado parece haber sido formado privadamente, durante la menor edad de Fernando IV, y confirmado despues por él.

¿Cuáles eran sus disposiciones más importantes?—La supremacia del vecino sobre el forastero hasta en los delitos; la clasificacion de las multas con que se castigaban las heridas y homicidios; las penas impuestas al adulterio, rapto de mujeres y daños contra la propiedad. Concedia el derecho de asilo á los pobladores, declarándoles irresponsables de los delitos, deudas y fianzas anteriores. Establecia el fuero de troncalidad y la prescripcion de las heredades por la posesion de año y dia.

Fuero de Cuenca.

Es el más notable y completo de todos los españoles.

Don Alfonso VIII, hácia el año de 1190, lo dió á la ciudad de Cuenca.

Sus más esenciales prescripciones eran la unidad de fuero en los pleitos para todos los habitantes, cualquiera que fuera su origen; la negacion del asilo á los homicidas forasteros. El asesino debía ser enterrado vivo debajo del difunto, si cometia el delito durante la feria. Prohibe las donaciones á los monjes y hombres de orden; éstos sólo podian adquirir el quinto de los muebles; el resto de sus bienes pasaba á los herederos. El violador debía ser quemado. El marido podia matar á la adúltera y á su cómplice juntamente. Trata tambien de las pruebas del hierro caliente, retos, duelos y juramentos.

(1) El Municipio conserva como reliquia un ejemplar de ese fuero, que algunos creen que es una copia del primero.

Ordenamiento de las Cortes de Nájera y Fuero Viejo de Castilla.

Se publicó este Ordenamiento en las Cortes de Nájera, por D. Alfonso VII el Emperador, en 1138, para fijar los derechos y deberes de los *ijos-dalgo*, por lo que se le llamó *Fuero de losijos-dalgo* y de las *fazañas* y *albedrios*. Su original no se conoce. Formó parte del Fuero Viejo, y constituye el título 32 del Ordenamiento de Alcalá.

Diversas opiniones hay acerca de la formación del *Fuero Viejo*, pero la más fundada le atribuye á los *ijos-dalgo*, por encargo del rey D. Alfonso VIII, el de las Navas, hácia el año de 1212, habiendo sido concertado y metodizado por el rey D. Pedro en 1356 (1).

Aunque no fué sancionado por Alfonso VIII, no dejó de estar en observancia hasta la publicación del *Fuero Real*, en 1255, volviendo á regir desde 1272 á instancia de la nobleza. Componíanlo las historias, los fueros, las costumbres y fazañas de los *ijos-dalgo*, y sólo fué obligatorio en la monarquía de Castilla. Vigente todavía, la naturaleza de sus prescripciones lo hace inaplicable.

Está distribuido en libros y títulos. El PRIMER libro fija los derechos del rey y de la nobleza, señalando como no enajenables é inherentes á la corona, la *justicia*, la *moneda*, la *fonsadera* y el *yantar*. Establece la *minción ó luctuosa*. Declara voluntario el servicio del vasallo, á quien el monarca puede echar fuera del país. Sanciona el duelo, prescribiendo reglas para su celebración, y determina los derechos del señor sobre el solariego. El SEGUNDO se ocupa del derecho criminal; castiga el homicidio y las lesiones con multas; señala las causas por que pueden hacerse pesquisas, pena los daños con multas, y el rapto y la violación con la horca, en algún caso. El TERCERO trata de los procedimientos judiciales. El CUARTO comprende los contratos y prescripciones. El QUINTO se ocupa de las dotes, herencias, particiones, guarda y desheredación.

Carece de método y de uniformidad en sus disposiciones, pero es un monumento histórico notable, en donde se estudian los derechos de los *ijos-dalgo* y ricos hombres de la Edad Media.

Variaciones en las asambleas públicas después de la restauración.

¿Cuándo formó parte de las asambleas el elemento municipal?—Con firmeza no puede señalarse la época, pero sí que ya el año de 1169 asistieron los representantes de las municipalidades, llamados *procuradores*; pues se les vé en las de Búrgos de dicho año y en las de León de 1188 y 1189, siendo cosa indiscutible su presencia en las de Benavente, celebradas en 1202. En Aragón, ántes que en Castilla, figuran ya en las de Borja, de 1131. En Cataluña, en tiempo de Jaime I, por los años de 1248; y en Navarra, en 1134. Tales reuniones, que continuaron llamándose *concilios*, no recibieron el nombre de *Córtes* hasta después.

Motivaron la entrada en las Cortes de este tercer brazo de la nación, su creciente importancia, su riqueza, fuerza, independencia y resistencia á pagar impuestos que no acordasen, y la política de los reyes, que veían en las municipalidades un poder aliado y un rival de la nobleza.

¿Cuál era el estado de la legislación en tiempo de San Fernando?—La

(1) Algunos escritores lo atribuyen al conde D. Sancho García.

anarquía legal, que progresaba con la innumerable promulgacion de fueros municipales, sostenida y fuertemente defendida por clases tan poderosas como preocupadas, estado insostenible y pernicioso que ofrecia distintas reglas para un mismo caso.

Aquel monarca mejoró su estado, dictó disposiciones encaminadas á promover el fomento y desarrollo material de los pueblos por medio de concesiones territoriales, reconociendo y otorgándoles los recursos de propios y arbitrios. Procuró generalizar el Fuero-Juzgo, dándolo como municipal á muchas ciudades, traduciéndose de su orden al castellano; concedió al municipio el derecho de nombrar sus magistrados, y encargó á su hijo Don Alfonso la formacion de un nuevo código general.

EPOCA QUINTA.

Desde Alfonso el Sábio hasta los Reyes Católicos.

Las Siete Partidas.

Esta época es de las más importantes, por los muchos códigos que en ella se publicaron y diversas tendencias que toma la legislacion.

¿Qué códigos publicó D. Alfonso el Sábio?—El *Spéculo* (1), el *Fuero Real*, las *Partidas*, las *Leyes del Estilo* y el *Ordenamiento de Alcalá*. También se le atribuye la terminacion del *Selenario*, obra diminuta é incompleta y anterior al *Spéculo*.

¿Cuándo se formó el *Spéculo*?—Se cree que ha sido en 1254, ó principios de 1255, casi al mismo tiempo que se promulgó el *Fuero Real*. Intervinieron en su formacion los obispos, magnates y personas instruidas en el derecho. Fueron tomados sus materiales de lo más selecto y escogido de los fueros.

¿Qué fuerza legal tuvo?—La Academia de la Historia opina que no llegó á tener fuerza legal, tal vez por causas independientes de la voluntad del rey.

No se conocen más que cinco libros, pero parece que faltan dos. El PRIMERO trata del legislador, de la ley, de la Santísima Trinidad, de la fé católica, de sus artículos y de los sacramentos. El SEGUNDO de la sucesion de la corona, guarda de la familia real y conservacion de sus bienes. El TERCERO se ocupa de la milicia en toda su extension. El CUARTO y QUINTO del procedimiento judicial.

¿Cuándo se publicó el *Fuero Real*?—Poco tiempo despues del *Spéculo*, á principios del año 1255, segun la opinion más aceptada. Llamósele *Fuero del libro*, *Fuero castellano* y *Flores de las leyes*.

¿Qué autoridad tuvo este código?—Hay opiniones acerca de ello: unos le suponen formado para concederlo como municipal á varios pueblos; otros para ser observado como código general. Lo cierto parece haber sido que la intencion de D. Alfonso fué promulgarlo como general, y á fin de darlo á conocer y extender su autoridad paulatinamente, lo concedió como fuero especial á varias poblaciones, hasta extenderlo definitivamente.

Duró su autoridad diez y siete años primeramente, pues fué derogado en 1272, á instancia de los ricos-hombres, cuyos privilegios lastimaba, re-

(1) Espejo de todos los derechos.

cobrándola nuevamente por medio de una ley del Ordenamiento de Alcalá, en tiempo de Alfonso XI.

Predominan en este código las disposiciones del Fuero-Juzgo y de los fueros municipales, conteniendo por consiguiente el elemento jurídico más puro de la nación española, en contraposición de las Partidas, según veremos luego. Existen dos ediciones: la de Alonso Díaz de Montalvo, con sus comentarios, publicada en Salamanca el año 1500 y repetida después; y la que en 1836 publicó la Academia de la Historia.

Está distribuido este código en cuatro libros, subdivididos en títulos. El 1.º se ocupa de la Santísima Trinidad, de la fe, del rey y de su señorio, y establece la monarquía hereditaria. El 2.º trata de los emplazamientos, contestación, pruebas, sentencias y apelaciones. El 3.º del matrimonio, prohibiendo los clandestinos; de los testamentos, á que llaman *mandas*, permitiendo testar por comisario; de las herencias, alimentos, desheredaciones, ventas, permutas y donaciones, depósitos, préstamos, arrendamientos y otros contratos. El 4.º contiene la legislación criminal; clasifica las lesiones y heridas, penándolas con multas, y proclama el principio de que las penas son puramente personales. Castiga el adulterio, el incesto, la violación, las falsedades, hurtos, etc.

¿Cuándo se formaron las Partidas?—El mismo D. Alonso nos dice que se comenzaron la víspera de San Juan del año de 1256, terminándose siete años después, según unos, y nueve, según otros; esto es, en 1265.

Motivaron su fundación el deseo manifestado por D. Fernando el Santo, la instrucción de los reyes sucesores y la enseñanza del pueblo en el camino del derecho y de la justicia. También se agrega á éste la elección de D. Alfonso para emperador de Alemania. Se le llamó antiguamente *Libro y fuero de las leyes*, y aún se dice también que se conocía con el de *Setenario*, por las siete partes en que se divide, y con el de Libro de las *posturas*. Es el código más notable de los promulgados por Alfonso el Sabio.

¿Tuvo parte en su confección el rey San Fernando?—No; tuvo el pensamiento de formarlo, y encargó su confección á su hijo D. Alfonso, que fué el verdadero autor, si bien no trabajó en su redacción, porque, además de no contar con conocimientos tan profundos como revelan las Partidas, las atenciones que le rodeaban como monarca, le impedían dedicarse á este género de trabajos; y aún cuando él mismo se llama su autor, no es esta razón bastante para suponerle tal, porque sabido es que estos trabajos llevan el nombre del monarca bajo quien se formulan.

Conjeturas fundadas hacen presumir que fueron sus redactores el maestro Jácome Ruiz, el maestro Roldán y el maestro Fernando Martínez, porque el primero fué ayo del rey, por orden de quien había formado una *Suma de leyes* para su instrucción; Roldán gozaba entonces de gran reputación, á quien encargara también el monarca la formación del *Ordenamiento en razón de las tafferías*, y el maestro Martínez porque era otro de los jurisconsultos de gran nota que floreció en el reinado de D. Alfonso.

Algunos párrafos de su prólogo y de la ley 49, tit. I, Part. 1.ª de la edición de la Academia, justifican que no era la intención de sus autores la mera instrucción de los príncipes y la resolución de los litigios en que conocían, sino publicarlas como un código general para toda la monarquía. Además, su estructura, el nombre de *leyes* que se da á sus disposiciones, la obligación impuesta á los jueces de fallar con arreglo á ellas y otras razones corroboran, sin dejar duda ninguna, esta opinión.

¿Cuándo adquirió fuerza legal?—En el reinado de D. Alfonso XI, si bien algunas ciudades lo recibieron antes, y fué frecuentemente consultado y respetado por los jurisconsultos, siendo evidentemente erróneas las opi-

niones de los que le suponen promulgado, ora en las Cortes de Valladolid de 1351, ora reinando Enrique II, ora en tiempo de los Reyes Católicos. Es de creer que Alfonso XI mandase cotejar algunos ejemplares, y aún que se hicieran en ellos algunas enmiendas.

Tres textos existen de las Partidas: el de Alonso Díaz Montalvo, del cual se tiró la primera edición en 1491, varias después, y la última fechada en Lyon; el de Gregorio Lopez, cuya edición se declaró auténtica en 1555, habiéndose publicado después varias; y el de la Academia de la Historia, dado á luz en 1807, y declarado también auténtico por una real orden de 1818, si bien la jurisprudencia sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia (1) da preferencia al texto de Gregorio Lopez, en caso de discordia de los textos. En 1848 se publicó una nueva edición, arreglada al de este juriconsulto.

Este código, aún cuando adolece del defecto de haber seguido casi exclusivamente el derecho romano, es acreedor á elogios por la sabiduría que encierra, pudiendo asegurarse que la elegancia, pureza y majestad de su lenguaje y las máximas filosóficas y políticas que encierra, le hacen superior á cuantos se publicaron en Europa en los siglos medios (2).

Trata la *primera* Partida del derecho natural, de las leyes, del uso, de la costumbre, de la fe católica, de los sacramentos y de otras materias de disciplina y dogma, ajenas al derecho civil. La *segunda*, del derecho público del reino, siendo notable la ley que fija la sucesión á la corona, estableciendo la preferencia de la línea, el grado, el sexo y la mayor edad en los llamamientos. La *tercera* comprende los procedimientos judiciales, que deben seguir las causas en primera y segunda instancia, ocupándose luego del dominio, de la prescripción, de la posesión, de las servidumbres, etc., acomodándose en sus leyes á las doctrinas del derecho romano. La *cuarta* se ocupa de los esponsales, del matrimonio, impedimentos para contraerlo, del divorcio, dotes, arras, parafernales y donaciones esponsalicias; trata luego de la patria potestad y de la legitimidad de los hijos. Nada dice respecto á gananciales. La *quinta*, de las obligaciones y sus clases, su constitución y su extinción. La *sexta*, de las sucesiones testadas é intestadas, la guarda de los huérfanos y la restitución *in integrum*. Prohibe el testamento por comisario, y guarda silencio sobre las mejoras. La *sétima* establece, mejora y completa la legislación criminal, sancionando las penas de fuego y horca, el ser echado á las fieras y la infamia, prodigando el tormento más inhumanamente que el Fuero-Juzgo.

¿Cuándo se publicaron las leyes del *Estilo*?—La opinión mas generalmente seguida las supone publicadas en el reinado de D. Fernando IV el Emplazado.

¿Cuál es la materia y origen de las leyes del *Estilo*?—Las declaraciones de las leyes del Fuero Real y la costumbre que se seguía para juzgar pleitos en los tribunales de la corte desde D. Alfonso el Sábio hasta aquel monarca, son objeto de las 252 leyes del *Estilo*. Forman su origen los trabajos de los juriconsultos, que llegaron á extenderse sucesivamente, insertándose algunos en la *Nueva Recopilación*.

Ordenamiento de Alcalá.

En las Cortes de Alcalá de 1348, reinando D. Alfonso XI, se promulgó esta compilación. La continuación del estado vacilante y contradictorio en

(1) Sentencia de 27 de Marzo de 1860.

(2) Joveiananos y Gomez de la Serna.

que se encontraba el derecho por no haber podido conseguir D. Alfonso X que sus reformas legislativas surtieran todo el efecto de unidad que se había prometido, fué la causa de la formación del Ordenamiento; y su propósito, el regularizar y uniformar la legislación; fin que no llegó á alcanzarse, porque dejaba en pie la autoridad de los fueros municipales y del Fuero Real, concediéndola supletoria á las Partidas, contribuyendo así á aumentar la confusión y oscuridad, en vez de procurar la simplificación y claridad que deseaba. Estuvo algun tiempo desconocida y la dió publicidad el P. Burriel.

D. Pedro, D. Enrique II, D. Juan I, D. Juan II, D. Enrique IV y los Reyes Católicos, confirmaron la autoridad de esta compilación.

¿Cómo está distribuido este Código?—Se divide en 32 títulos, y éstos en leyes, á que preceden una carta confirmatoria de D. Pedro y un prólogo de D. Alfonso. Los primeros títulos establecen la ritualidad y orden de los juicios. El 16 contiene la célebre ley (1), que declara válida toda obligación de cualquiera manera que resulte que el hombre se obligó. El 17 declara la rescisión de las ventas por lesión enorme. El 18 exime de los embargos por deudas á los animales y aperos de labranza. El 19 innova la doctrina romana sobre testamentos, no exigiendo para su validez la institución del heredero. El 20, 21 y 22 castigan el cohecho, el adulterio, el homicidio y otros delitos. El 23 prohíbe las usuras. El 27 se ocupa de la significación de las palabras en la interpretación de las leyes. El 28 fija la prelación de los códigos en la siguiente forma: 1.º, el Ordenamiento; 2.º, el Fuero Real; 3.º, los fueros municipales en lo que fueren usados y guardados, y 4.º, las Partidas. El Ordenamiento de las Cortes de Nájera forma el último título.

Fueros de Aragon.

¿Cuál fué la primera recopilación de los fueros de Aragon?—La formada por D. Vidal de Canellas, por encargo de D. Jaime el Conquistador, publicada en las Cortes de Huesca de 1217, dividida en ocho libros, subdivididos en títulos. Despues ha llegado á constar de doce libros, en los que se comprendían los fueros y disposiciones generales que tenían fuerza legal. En 1283 se le agregó el *Privilegio general*, que es la carta magna de los aragoneses. El libro 9.º contiene los fueros hechos por D. Jaime II. El 10.º los formados con las Cortes por D. Pedro IV el Ceremonioso. El 11.º los que se hicieron por D. Juan I en las de Monzon. Y el 12.º los hechos en las de Zaragoza y Maella en tiempo de D. Martin. Los posteriores se unieron sin orden ni concierto. D. Martin Diaz Aux agregó, con autorización de las Cortes, las más notables *observancias* sancionadas por el uso y la costumbre inmemorial.

Constituciones de Cataluña.

¿Cuáles son los principales elementos del derecho catalan?—Los *usajes*, *constituciones*, *capítulos* ó *actos de Cortes*. Cuéntanse tambien como tales las costumbres generales, algunas pragmáticas, las sentencias del monarca, otras arbitrales, y aun bulas apostólicas. Eran los *usajes* las disposiciones que constituían el derecho feudal de Cataluña. Se publicaron en tiempo del conde D. Ramon Berenguer, en Barcelona, el año 1068, por no satisfacer las necesidades de la época y las nuevas costumbres el Fuero-Juzgo, que regía en toda su extension. Se escribieron en latin y fueron traducidos al catalan en 1413.

(1) Ley única en el título.

Llámanse *constituciones* á los acuerdos legislativos hechos á propuesta del rey, con aprobacion de los tres brazos del reino.

Los *capítulos* ó *actos de Córtes* eran los acuerdos que se tomaban á propuesta de éstas y aprobaba el monarca.

¿Cuál es el origen de las costumbres generales?—Los *usajes* y las *constituciones*. Los demás orígenes son lo que indica su nombre.

Se recopilaron todas estas disposiciones en 1413, reinando D. Fernando I, imprimiéndose en el de Fernando V de Castilla y II de Aragon.

Fueros de Valencia.

¿Quién concedió los primeros fueros de Valencia?—D. Jaime I. En un principio se observaron; mas luego los ricos-hombres aragoneses, á quienes se habían concedido heredamientos en el nuevo reino, solicitaron y obtuvieron ser regidos por los suyos, estableciéndose la multiplicidad de legislacion. D. Jaime II añadió nuevos fueros, confirmando los antiguos con juramento, despues de enmendados; y Alfonso III, á nuevas instancias de los nobles de Aragon, permitió que se rigieran por los fueros aragoneses las villas y ciudades que quisieran adoptarlos; dualidad que aún existe hoy.

Fuero general de Navarra.

¿Cuándo se formó?—No puede asegurarse. Algunos lo atribuyen al rey Trobaldo I, pero hay razones convincentes para suponerle anterior al siglo XII. Parece ser que lo formó una junta compuesta de diez ricos-hombres, veinte caballeros, diez eclesiásticos y el obispo de Pamplona, teniendo presentes los fueros de otras poblaciones.—Esta opinion la combaten otros autores.

No tuvo autoridad general sino en cuanto no hubiera fueros municipales, por que se gobernaban los pueblos.

FUEROS VASCONGADOS.

Alava.

¿Quién concedió los fueros de Alava?—Parece haber sido D. Alfonso XI. Don Juan II mandó formar las hermandades de Alava y aprobó un cuaderno de ordenanzas y capítulos para perseguir los criminales. D. Enrique IV los confirmó, y encargó la formacion de un nuevo cuaderno que, terminado, recibió la sancion de los Reyes Católicos, y se titula *Cuaderno de leyes y ordenanzas con que se gobierna esta muy noble y muy leal provincia de Alava, y diferentes privilegios y cédulas de S. M. que van puestas en el indice*. Sólo se refiere al órden político y administrativo.

Vizcaya.

¿Quién concedió fueros á Vizcaya?—D. Alfonso VIII cedió esta provincia á D. Diego Lopez de Haro bajo ciertos pactos y condiciones, en los cuales ven algunos el origen de sus fueros (siglo XII ó principios del XIII). Don Juan Nuñez de Lara le dió tambien fueros en 1343, confirmando los de doña Isabel la Católica y su esposo D. Fernando y doña Juana la Loca. Se reformaron en tiempo de Carlos I, que confirmó y aprobó la reforma hecha, permitiendo su reimpression, que lleva el epigrafe de *Privilegios, franquie-*

zas y libertades de los caballeros hijo-dalgos del muy noble y muy leal señorío de Vizcaya, y fueron confirmadas por la ley de 25 de Octubre de 1839.

Establecen que los pleitos se decidan por las leyes contenidas en los fueros; y á falta de ellas, por las generales de la nación. Esto no obstante, el código penal, las leyes de procedimientos, la hipotecaria, y del registro civil, rigen en Vizcaya.

Guipúzcoa.

¿Quién concedió los fueros á Guipúzcoa?—D. Alfonso VIII, en recompensa de los servicios que le habian prestado sus habitantes en la guerra con D. Sancho de Navarra. D. Enrique II los coleccionó y redactó nuevamente, admitiendo algunas enmiendas solicitadas por los procuradores de las villas. D. Enrique IV formó un nuevo cuaderno que demandaban las exigencias de la época, confirmada su autoridad por varios monarcas posteriores. Lleva por título *Recopilacion de los fueros y privilegios, leyes y ordenamientos de la provincia de Guipúzcoa*. Refiérense al orden político y al administrativo.

Las leyes de carácter general, indicadas al hablar de Vizcaya, son también obligatorias en Guipúzcoa.

Recientemente, se proclamó por una ley la unidad constitucional en las provincias forales; y se está llevando á cabo en cuanto al servicio militar, de que estaban exentas ordinariamente, y á la tributacion para los servicios públicos y pago de culto y clero (1).

Córtes de Castilla.

¿Qué brazos componian las Cortes de Castilla?—Tres: la nobleza, la iglesia y los procuradores de las villas y ciudades. Decayó la influencia de los nobles y eclesiásticos en las Cortes en tiempo de D. Sancho IV, ocurriendo algunos casos, aunque excepcionales, de haberse celebrado sin previa convocatoria al clero ni á la nobleza. El rey las convocaba, no teniendo tiempo ni época determinada.

¿Qué poblaciones tenían voto en Cortes y cuántos procuradores las representaban?—Al principio no se fijó el número de unas y otros, aunque por regla general eran dos los procuradores encargados de esta gestion. En las de 1425 se concedió voto tan sólo á doce ciudades, cuyo número se amplió despues á diez y ocho.

En un principio las municipalidades á quienes representaban, los nombraban; más tarde elegian las personas designadas por el rey, apesar de las protestas de las Cortes. Los concejos les otórgaban dietas, hasta que D. Juan II accedió, en las Cortes de Ocaña de 1442, á satisfacerlas por cuenta del Erario, á petición de aquéllos.

¿Cuáles eran las atribuciones de las Cortes?—El derecho de petición al monarca; recibirle el juramento á su advenimiento al trono; autorizar las abdicaciones; nombrar tutor al rey menor, que no lo tenía testamentario; votar ó negar los impuestos y entender en todos los negocios áridos y de consideracion. Debían prestar juramento de obediencia al rey y al príncipe de Asturias.

Córtes de Aragon.

¿Quiénes constituian las Cortes de Aragon?—Cuatro brazos ó estamen-

(1) Esta ley fué consecuencia del último levantamiento de aquellas provincias en favor de Carlos VII; origen de la guerra civil terminada en 1875.

tos: el eclesiástico, el de los nobles, el de los caballeros ó infanzones y el de las universidades, que lo componian los procuradores de las villas (1).

¿Cuáles eran sus atribuciones?—Además de gozar de las que tenían las de Castilla, podian deliberar acerca de la paz y de la guerra, y ejercian funciones judiciales. Tenian sus miembros el derecho especial de impedir que fuera ley lo acordado por la mayoría, con sólo negar su consentimiento, cuyo derecho fué abolido en las Cortes de Tarazona de 1592.

Su intervencion en los negocios públicos, en el período de una á otra legislatura, continuaba, porque al efecto se nombraba una comision compuesta de ocho individuos, dos por cada estamento, que inspeccionaba los negocios públicos y podía convocar Cortes extraordinarias.

LLámabanse *promovedores*, tres miembros nombrados por las Cortes; los cuales, en union del arzobispo de Tarragona y del jurado de esta ciudad, proponian las resoluciones que se ofrecian sobre negocios públicos.

Córtés de Cataluña.

Componian estas asambleas los tres brazos: el eclesiástico, presidido por el arzobispo de Tarragona; el militar, por el duque de Cardona; y el real, que lo componian las ciudades y villas del principado, presididas por Barcelona. Solo podian tener asiento los naturales y los extranjeros que tuvieran feudos ó señorios territoriales en el principado. Las convocaba el rey para un pueblo de la provincia.

Por regla general ejercian las mismas atribuciones que las de Castilla y Aragon, exceptuando las especiales de este reino que quedan enumeradas, respecto á la paz y á la guerra, é impedir que fuera ley la resolucion de la mayoría. Juraban al príncipe heredero, y reclamaban contra los agravios causados á los pueblos y á los particulares.

¿Cuál era la *diputacion general* de Cataluña?—Una asamblea que tenía por objeto velar por la observancia de las constituciones generales y libertades del país, en el intervalo de unas á otras Cortes, pudiendo oponerse y representar siempre que lo creyera conveniente, exigir tributos, y decretar el levantamiento de gente armada. Fué creada á fin del siglo XIV.

Córtés de Valencia.

¿Quiénes formaban las Cortes de Valencia?—Los tres brazos que componian las de Cataluña. Tuvieron lugar las primeras en tiempo de Jaime I, segun la opinion más seguida. Se convocaban por el rey, ó su hijo primogénito, si á aquél no le fuera posible, de tres en tres años, cuyo período dejó de estar en uso; y eran sus atribuciones análogas á las que tenían las Cortes de Cataluña, si bien su cooperacion legislativa no era tan absoluta como la de aquéllas y las de Aragon.

Tambien en Valencia hubo una diputacion del reino, análoga á la de Cataluña y Aragon.

Córtés de Navarra.

¿Quiénes componian las Cortes de Navarra?—Los tres repetidos estamentos; el eclesiástico, el militar y el de las universidades; verificándose las votaciones dentro de cada estado, siendo necesaria unanimidad para que hubiera resolucion. La influencia del pueblo en ellas fué menor que la que tenía en las demás Cortes, pues la del clero y la nobleza era decisiva. Primitivamente las convocó el rey; mas luego que se unió la Navarra á

(1) Eran diez ciudades, diez y ocho villas y tres comunidades.

Castilla, las convocó el virey; primero todos los años, despues de dos en dos y, por último, de tres en tres, llegando á dilatarse su convocacion más tiempo. Son las únicas antiguas que continuaron reuniéndose hasta nuestros días.

Eran sus atribuciones principales reclamar contra las providencias que causaran desafuero, ejercer el derecho de peticion y otorgar donativos.

¿Quiénes formaban la diputacion de las Cortes y cuál era su objeto?—Siete individuos nombrados por los tres brazos, en la forma siguiente: uno por el eclesiástico, dos por el militar y cuatro por el de las universidades, con sólo dos votos. Su mision consistia en velar por el cumplimiento de las leyes y representar al rey, durante la clausura de las Cortes, en caso necesario.

Organizacion judicial.

¿De dónde dimana la jurisdiccion segun los códigos de esta época?—Del rey, considerado como su fuente y origen.

Constituian el orden judicial los *adelantados* de la corte ó los *sobre-jueces*, llamados tambien *adelantados del rey*, cuya jurisdiccion consistia en conocer de las apelaciones interpuestas ante los jueces de la corte. Los *adelantados mayores*, que gobernaban una provincia, tenian jurisdiccion criminal y entendian en las apelaciones de los fallos de los jueces inferiores de su territorio. Los *merinos mayores* tenian las mismas atribuciones que los adelantados, cuyo lugar ocupaban, y eran nombrados por el rey. Los *menores*, tenian jurisdiccion criminal, limitada al conocimiento de ciertas graves causas, y recibian su nombramiento de los *mayores* y *adelantados*. Los *alcaldes de corte*, cuya jurisdiccion era de ménos importancia (1). A estos magistrados debemos añadir el monarca, que juzgaba por sí mismo en audiencia pública, como lo hizo San Fernando en 1233, decidiendo un pleito suscitado entre Segovia y Madrid, sobre términos jurisdiccionales.

Audiencias.

Se modificó esta organizacion con el establecimiento de las Audiencias, atribuido equivocadamente á D. Alfonso XI, creadas por D. Enrique II, y ya mencionadas en las Cortes de Toro de 1731. Aquel monarca nombró siete oidores, tres obispos y cuatro letrados, marcó el orden de los procedimientos y creó diez alcaldes para juzgar las causas criminales.

Don Juan I aumentó el número de oidores á diez y seis, diez letrados y seis obispos; legisló sobre el orden de los procedimientos, y fijó en Segovia el asiento de la *Audiencia*, dividiéndose durante la menor edad de Don Juan II, é instalándose parte en Sevilla y parte en dicha poblacion. Los Reyes Católicos introdujeron grandes reformas, como veremos luego.

¿Qué era el *justicia de Aragon*?—Un magistrado elegido del segundo orden de la nobleza, dotado de elevadas é importantísimas funciones, que tenia por objeto administrar justicia y velar por la integridad de las libertades públicas. Sus providencias no podian eludirse, ni aún por letras reales. Fué la magistratura más notable y revestida de más extraordinarias facultades de aquellos tiempos. En un principio fué inamovible, pero Felipe II decretó que fuese amovible á voluntad del monarca, por lo cual perdió el cargo mucha de su independendencia. Sus atribuciones más importantes eran recibir el juramento á los reyes; decidir las dudas que se suscita-

(1) Eran veinte y tres: nueve en Castilla, seis en Extremadura y ocho en Leon.

ran en los tribunales acerca del derecho; paralizar la tramitacion de los negocios judiciales, cualquiera que fuese el tribunal que de ellos estuviera conociendo; prohibir el despojo de la posesion; garantir la libertad personal con la caucion llamada *la firma de derecho*, y arrancar á los procesados y condenados del poder de los oficiales del rey, á lo que se nombraba *manifestacion*. Esta magistratura llegó á ser vitalicia é irrenunciable, y fué tenida por la garantia más poderosa de las libertades del pueblo. Harto sabido es el fin que tuvo el último célebre personaje histórico que la desempeñaba (1).

En caso de vacante, desempeñaban sus funciones los lugar-tenientes del justicia, graduados en derechos, y nombrados por el rey, á que se llamó *Consistorio del Justicia*, cuya organizacion tambien se alteró en sentido centralizador, en cuanto al nombramiento de los individuos. Felipe V, al derogar los fueros, hizo desaparecer ese Consejo.

Consejo real.

¿Cuándo tuvo lugar la creacion del Consejo real?—En tiempo de don Juan I, en las Cortes de 1385, siendo erróneas las opiniones de los que la atribuyen, ya á los godos, porque tenían el oficio palatino, ya á San Fernando, porque encargó á doce sábios una instruccion general. Doce personas lo componian, y se ocupaban exclusivamente de asuntos gubernativos. Entre los consejeros habia cuatro letrados. Enrique III extendió el número de aquéllos á diez y seis, y don Juan II lo elevó á sesenta y cinco, dividiendo el Consejo en dos salas. Más tarde sufrió otras alteraciones, segun se dirá, organizándose de un modo definitivo.

ÉPOCA SEXTA.

DESDE LOS REYES CATÓLICOS HASTA DOÑA ISABEL II.

Esta es la época más notable é importante, por las reformas modernas que se hicieron en el derecho político, civil, penal, mercantil y administrativo.

¿Cuál fué la primera compilacion formada por los Reyes Católicos?—El Ordenamiento de Montalvo, formado durante las Cortes de Toledo de 1480 por el célebre jurisconsulto Alonso Diaz de Montalvo, de quien lleva el nombre. Débese su formacion á la necesidad de aclarar y reunir multitud de disposiciones legales, publicadas despues de D. Alfonso el Sábio, derogadas unas, limitadas otras, y esparcidas todas en diversos volúmenes; y á las dudas que nacen de este estado defectuoso de la legislacion.

No obstante lo que dicen sus impugnadores, puede afirmarse que tuvo autoridad; pues consta del mismo que fué confeccionado por encargo de los Reyes Católicos, habiéndole otorgado su real sancion, por lo cual se llamaron Ordenanzas reales (2).

Existen varias ediciones: la primera se publicó el año de 1484, en la ciudad de Huete, siendo notable, entre las posteriores, la que se hizo en Salamanca en 1574, glosada por Diego Perez, con autorizacion del monarca. Se

1) D. Juan de Lanuza, que murió en el cadalso.

2) Así se expresa en las palabras que se leen al frente de la compilacion.

compone de ocho libros, subdivididos en títulos, ocupándose los siete primeros de la parte civil, y el octavo de la penal.

¿Cuál fué la segunda compilacion hecha en tiempo de los monarcas católicos?—La formada en Alcalá de Henares en 1503, titulada: *«Libro en que están copiladas algunas bullas de nuestro muy santo padre, concedidas á favor de la jurisdiccion real de sus altezas é todas las pragmáticas, que están fechas para la buena gobernacion del reino»*... Contiene las disposiciones legislativas publicadas por los Reyes Católicos despues de la promulgacion del Ordenamiento de Montalvo, y algunas bulas pontificias. La primera edicion, suscrita por el escribano del Consejo Juan Ramirez, tiene el carácter de auténtica, y lleva una carta confirmatoria de aquellos monarcas; las posteriores carecen de ella, y contienen las leyes de Toro, varias pragmáticas de doña Juana y un cuaderno de la Hermandad, formado en Torrelaguna en 1485. Esta compilacion se considera como un suplemento del Ordenamiento de Montalvo.

Leyes de Toro.

La tercera compilacion legal, formada en tiempo de los Reyes Católicos, constituye las llamadas *Leyes de Toro*, á que dieron origen las dudas en la legislacion; la carencia de disposiciones que aplicar en casos dados; lo cual producía decisiones contrarias en asuntos de la misma índole y circunstancias. Son ochenta y tres.

Las Córtes de Toledo de 1502 suplicaron su formacion, terminándose próximamente en 1504, recibiendo su promulgacion en 1505, á peticion de las Córtes celebradas en Toro en esta fecha, para jurar por reina á doña Juana, en cuyo reinado se publicaron en número de ochenta y tres.

Tuvieron por objeto principal, dirimir las dudas y hacer desaparecer las cuestiones que existían acerca de la inteligencia de algunos puntos de derecho, llenando al mismo tiempo algunos vacíos que se notaban en la legislacion. Son de gran importancia bajo el punto de vista de que forman el depósito de las más importantes disposiciones del derecho pátrio; pero bajo otros aspectos, son censurables, porque admitieron y extendieron instituciones perniciosas, como los mayorazgos, complicando y aumentando la confusion en algunas materias.

Derogan la fuerza obligatoria de las opiniones de algunos jurisconsultos, concedida por los Reyes Católicos á imitacion del derecho romano; sancionan las mejoras; restablecen el testamento por comisario; amplian, regularizan y extienden las vinculaciones; reproducen los retratos, y crea la ley 75ª el de comuneros. La última, pena el falso testimonio dado en causa criminal.

Entre los numerosos comentarios que de ellas se escribieron, ocupan un lugar preferente, por su profundidad, los de Antonio Gomez y los de Llamas y Molina (1). Estas leyes se insertaron en la

Nueva Recopilacion.

¿Cuándo y por quién se formó esta coleccion?—En el reinado anterior al de Felipe II se habian nombrado tres jurisconsultos célebres, Lopez Alcocer, Guevara y Escudero, para recopilar las leyes, que por su multitud, confusion y diversidad de colecciones hacían difícil y costosa la administracion de justicia. Sus trabajos fueron continuados en tiempo de Felipe II por el licenciado Arrieta, y terminados por el doctor D. Bartolomé

(1) Cuéntanse hasta doce comentaristas de estas leyes, siendo los últimos D. Joaquín Francisco Pacheco, que comentó las 24 primeras, y el Sr. Gonzalez Serrano, que comentó las restantes publicadas en 1876.

Atienza en 1562, concediéndole este monarca fuerza obligatoria en 1567 por una real cédula que va al frente de la compilacion.

La confusion producida por el considerable número de pragmáticas y leyes, sus variaciones, las necesidades de la época, la instancia de los procuradores, etc., impulsaron su formacion.

Se divide en nueve libros, y éstos en títulos, subdivididos en leyes. Fué comentada por varios jurisconsultos, mereciendo especial mencion Alfonso de Acevedo.

¿Mejóro el estado de la legislacion con este código?—Los males y causas que la ocasionaron no desaparecieron, porque en él se dejaron vigentes códigos anteriores; notándose parte de los defectos de que adolecia el Ordenamiento de Montalvo, falta de método, algunos errores, leyes oscuras y contradictorias.

De aquí la necesidad de la Novísima Recopilacion, formada en tiempo de Carlos IV, de que nos ocuparemos en su lugar oportuno.

FUEROS PROVINCIALES.

Aragon y Valencia.

¿Cuándo se compilaron de nuevo los fueros de Aragon?—En tiempo del príncipe D. Felipe, quien comisionó este trabajo en las Cortes de Monzon, de 1547, á personas inteligentes. Carlos V habia reconocido ya su necesidad y determinado tambien quiénes debian hacerlo; pero no pudo realizarse este proyecto durante su reinado. El lamentable estado legal de los fueros, cuya confusion era grande y perniciosa, motivó las solicitudes de las Cortes.

Dividióse esta coleccion en tres partes: La 1.^a contenia en nueve libros los fueros que estaban vigentes; la 2.^a las costumbres del pueblo, denominadas *observancias*, y la 3.^a los fueros derogados, ó que habian caido en desuso, como monumento histórico y de estudio.

En 1664 se formó una edicion importante, en la que se incluyeron los actos de las últimas Cortes; en 1727 Diego Francó de Villalva publicó otra con notas y observaciones; D. Ibañeta de Bardagi compuso una *Suma de fueros y observaciones*, y hay además otros muchos trabajos que vieron la luz publica sobre los fueros aragoneses.

Felipe V derogó estos fueros y los de Valencia, por la parte que habia tomado el reino en favor de la casa de Austria durante la guerra de sucesion, restableciéndolos en 1741 en cuanto á los pleitos civiles entre particulares, sólo para Aragon.

Como derecho supletorio, unos dicen que ha quedado el romano, otros el canónico y otros el de Castilla, en el antiguo reino de Aragon.

Cataluña.

¿Cuándo se publicaron las compilaciones de los fueros de Cataluña?—En tiempo de D. Fernando V de Castilla y II de Aragon se imprimió la coleccion formada en el de D. Fernando I y no publicada, añadiéndole las leyes hechas en tiempo de D. Alfonso V, D. Juan II y del mismo D. Fernando. La segunda recopilacion fué impresa y publicada en 1588. Comprendia la anterior y leyes posteriores hasta 1585. La tercera y última, en 1704, dividida en tres volúmenes.

Fueron comentadas notablemente por A. Olivan, Miguel Ferrer, Jaime Cacer y Pedro Fontanella.

El derecho romano y el canónico rigen en Cataluña, en defecto de di-

chas compilaciones, las cuales están vigentes, confirmadas por la ley primera título ix, lib. v, Nov. Recop. Y en defecto de todos, las doctrinas de los doctores.

Navarra.

¿Cuándo se modificó el fuero general?—En 1514 las Cortes de Navarra se propusieron reformarlo, cuyo proyecto no llegó á realizarse por la conquista del Rey Católico, verificada en 1512. En 1528 se concluyó un nuevo código que se llamó *Reducido*, el cual no llegó á tener fuerza obligatoria por falta de sancion real, razon por que volvió á reimprimirse el fuero antiguo de 1686, que aún constituye en el día la legislacion vigente. En su defecto, rige el derecho romano. La edicion más importante es la publicada en 1844 por D. José Alonso, que contiene todo el derecho actual.

CONTINUACION DE LAS CORTES.

Castilla.

¿Cuándo dejó de concurrir la nobleza y el clero á las Cortes de Castilla?—Las celebradas en 1538 en Toledo, fueron las últimas á que asistieron; formándolas despues tan sólo los procuradores, únicos á quienes se convocaba. Perdieron por completo su influencia en tiempo de Felipe V, que las consideró como «una mera solemnidad de vana pompa».

Aragon.

¿Cuándo comenzaron á perder su importancia las de Aragon?—En tiempo de Felipe II. Las adversidades del levantamiento dirigido por el justicia D. Juan de Lanuza y su muerte debilitaron este poderoso elemento, contribuyendo tambien á ello la abolicion del derecho que tenían todos los miembros de las Cortes de impedir la realizacion de los acuerdos, con sólo oponerse; abolicion que tuvo lugar en las Cortes de Tarazona de 1592.

Se confundieron con las de Castilla, habiendo sido abolidas en la guerra de sucesion.

Cataluña.

Las Cortes de Cataluña, aunque algo más respetadas que las de Aragon se extinguieron á consecuencia de la misma guerra de sucesion, y con ellas, los fueros y privilegios de los catalanes, por haber seguido éstos la bandera de la casa de Austria.

Navarra.

Las Cortes de Navarra subsisten. Los reyes no han tenido pretexto para suprimirlas y aún se celebraron en Pamplona en 1828 y 1829.

Organizacion de la Audiencia y Consejo.

¿Qué organizacion tuvo la Audiencia en esta época?—Distinta de la que se ha visto en la anterior. Los Reyes Católicos fijaron el asiento de este tribunal en Valladolid, dividiéndole en dos salas y reduciendo á ocho el número de sus ministros (1489). En 1494 fundaron otra en Ciudad-Real, tras-

ladada á Granada en 1505. Estas dos fueron las más honoríficas y se llamaron despues *chancillerías*. Los monarcas sucesores y especialmente Felipe V, fueron creando otras hasta la de Navarra, que es de nuestros días.

Consejo Real.

Constituyeron definitivamente el Consejo Real los Reyes Católicos, componiéndole tres caballeros y nueve letrados, presididos por un prelado; pues si bien eran vocales los demás prelados, los títulos y maestros de las órdenes militares, no tenían voto en las deliberaciones. También asistían á él dos *procuradores fiscales*, representando los derechos de las regalías de la corona.

¿Qué funciones se le concedieron?—Podía conocer, sumariamente, de las causas y pleitos, cuando lo exigiese el servicio público; pero no podía entender en apelaciones de los fallos de las audiencias, ni en demandas que á éstas correspondiesen.

Felipe II aumentó cuatro plazas de consejeros y mandó que todos fueran letrados. Felipe V, en 1713, le dividió en cinco salas, aumentó el número de consejeros á veinticuatro, estableció un *fiscal general*, dos abogados generales, dos sustitutos fiscales y cuatro secretarios, suprimiendo la presidencia del Consejo. A esta reforma se llama *la planta de Macanaz*, por haber sido su autor D. Melchor de Macanaz, fiscal que fué del Consejo. En 1715, durante el ministerio Alberoni, fué restablecido el antiguo Consejo, con ligerísimas excepciones, en cuya forma puede decirse que siguió constituido hasta su supresión.

La Cámara de Castilla.

Fué creada por Felipe II en 1588, llamada así porque se reunía en la cámara real. Formábanla varios ministros del Consejo, presididos por el gobernador de la Cámara, y tenía atribuciones para examinar las cuestiones del real patronato; proponer personas para las magistraturas, obispados y prebendas; despachar los negocios de gracia; conceder dispensas de ley y licencias para fundar mayorazgos; recibir las solicitudes de indultos y otros asuntos graves.

La planta de Macanaz la hizo desaparecer, volviendo á restablecerse poco tiempo despues.

Consejo de Aragon.

¿Quién creó este Consejo y qué personas lo componían?—Lo creó don Fernando el Católico y lo componían, en tiempo de Felipe IV, un presidente, un vicecanciller, un tesorero general, seis regentes, (dos de Valencia, dos de Aragon y dos de Cataluña), un fiscal, un proto-notario y cuatro secretarios. Felipe IV le dió nuevas ordenanzas.

Felipe V le incorporó al Consejo de Castilla, en 1707, para unificar la organizacion general del reino.

Novísima Recopilacion.

¿Cuál era el estado del derecho antes de la formacion de este código?—La afición y estudio de la jurisprudencia romana, sostenido por las Partidas, que había llegado á ser general, tenían olvidado el derecho español, resintiéndose de este mal las decisiones de los tribunales y la enseñanza de las universidades, en dónde no hubo cátedras de derecho pátrio hasta el año de 1770, y principalmente hasta 1802. Era tal el abandono de la legislación española, que los tribunales no la aplicaban y los abogados no la

invocaban, lo cual obligó al Consejo á expedir un auto acordado en 1713, encargando á los tribunales de justicia la observancia de aquélla, apercibiéndoles como desobedientes.

Merced á esto y á los trabajos de los jurisconsultos que florecieron en tiempo de Carlos III y aun despues, la tendencia y los estudios de legislación y jurisprudencia cambiaron de rumbo, en bien del derecho de Castilla.

La aglomeracion y confusion de las disposiciones legales, demandaba una nueva compilacion de lo vigente.

La Recopilacion se habia aumentado en 1745 con un tomo que comprendia 500 disposiciones llamadas *autos acordados del Consejo*, referentes á economia, administracion y justicia. Por los años de 1777, D. Manuel de Larrazabal fué encargado de coleccionar las cédulas y autos acordados, publicados desde 1745, cuya coleccion fué revisada por una junta de tres ministros, quedando en tal estado. En tiempo de Carlos IV, el Consejo nombró á D. Juan de la Reguera para formar nuevamente la coleccion, quien cumplió su cometido y manifestó que lo necesario era formar una Novísima Recopilacion, para lo cual tenia estudiado el plan que propuso al Consejo y, aprobado por éste, continuaron los trabajos. La junta nombrada al efecto los revisó; el monarca les prestó su sancion, y el 15 de Julio de 1805, se publicó la *Novísima Recopilacion*, dando fuerza obligatoria á las notas que se leen en algunas de sus leyes.

Pocos ó ningunos bienes produjo su formacion, porque, en vez de ser un código breve y sencillo, es voluminoso y complicado, formado por el hacinamiento de leyes posteriores á la última compilacion, sin orden ni concierto, plagado de inexactitudes, anacronismos, leyes anticuadas y sin uso, otras redundantes, supérfluas ó derogadas, notándose la falta de algunas y carencia absoluta de método en su exposicion. No es un verdadero código, porque le falta unidad y dependencia á una idea fija, perfecta y simétricamente ordenada, expuesta en términos precisos y breves, como lo son el Fuero Real, Las Partidas, el Código mercantil, el penal, etc.

Carlos IV mandó formar en 1808 el *Suplemento de la Novísima Recopilacion de leyes de España*, no publicado hasta 1829. Contiene las disposiciones legislativas de 1805 y 1806, y fué el único cuaderno suplementario que se publicó, apesar de estar dispuesto en la cédula que mandó formar la Novísima Recopilacion que se publicasen anualmente.

Reformas modernas.

En el reinado de Fernando VII se promulgó la Constitucion de 1812, conteniendo los principios fundamentales de la organizacion y atribuciones de los poderes públicos y administracion de justicia. Se derogó en 1814; volvió á ser ley en 1820, para desaparecer en 1823. En 1822 se publicó un código penal, que sufrió igual suerte que aquélla en 1823; el de comercio en 1829, y la ley de Enjuiciamiento mercantil en 1830; la ley de señorios y las de desamortizacion civil y eclesiástica, que pasaron por las mismas vicisitudes que el sistema constitucional; la coleccion de decretos y órdenes de las Cortes, expedidos desde las generales de 1810, y otra coleccion que contiene los de Fernando VII, que aunque no tiene expresa sancion real, por haber sido formada de orden del rey y en la Imprenta Nacional, se considera como auténtica. No ménos notable fué la publicidad dada á la derogacion de la ley *Sálica*, y el restablecimiento de la Partida, para la sucesion á la corona (4).

(1) Las leyes y decretos expedidos por José Napoleon, no son obligatorios. Sólo pueden mencionarse como hecho histórico.

El reinado de doña Isabel II puede señalarse como el principio de una nueva era de progreso en el orden político, administrativo y civil, sustituyendo al antiguo régimen el gobierno representativo.

¿Qué reformas tuvieron lugar en el orden político?—La promulgacion del Estatuto real, en el que se reconoce el sagrado derecho que tenia la nacion á participar del poder legislativo y á votar los impuestos; el restablecimiento de la Constitucion de 1812, hecho en 1836, con todas sus máximas de libertad, humanidad y justicia; la promulgacion de la de 1837, especie de transaccion entre los partidos políticos militantes más poderosos; la de 1845, algo ménos popular, y la de 1854 y 1857, modificadoras de las anteriores.

¿Qué reformas se hicieron en el administrativo?—Se ha procurado en lo posible la igualdad en la contribucion de sangre é impuestos, exceptuándose entónces las Provincias Vascongadas y la Navarra, que no gozan ya de todas las exenciones, (1) constituyendo casi por completo el principio de unidad administrativa la base de nuestro sistema actual. La provincia es más que una circunscripcion territorial: es una unidad política y administrativa, con derechos, necesidades y obligaciones, y los municipios participan de igual carácter. La importancia de la administracion es tal, que llegó á formar una seccion de la carrera de derecho en las universidades.

¿Cuáles se notan en el orden civil?—Si bien no era un principio verdadero en la práctica la unidad de legislacion, reformas trascendentales se han ido haciendo extensivas á toda la monarquía. La ley de sucesiones intestadas; la que restablece las de desamortizacion civil y eclesiástica; la que condena la tasa del interés; la de Enjuiciamiento civil y la hipotecaria (2), contienen reformas dignas de mencion. Las leyes de aguas, expropiacion forzosa, sociedades mercantiles por acciones y anónimas, creacion de Bancos, Bolsas, etc., y por fin, el Código penal de 1850, prueban lo mucho que se había adelantado hácia la unidad de legislacion, en la esfera civil.

¿Qué modificaciones sufrió la organizacion judicial?—La más importante consiste en la creacion del Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido á reemplazar á los Supremos Consejos de Castilla, de Indias y de Hacienda. Las Audiencias territoriales sucedieron á las antiguas Chancillerías y los juzgados de primera instancia y de paz (3), son modificaciones que tienden á separar las funciones judiciales de las administrativas. Suprimieronse los fueros de la real casa, del bureo, correos y caminos, minas, patronato de legos, Santa Hermandad, montes, maestranes, y mostrencos, y se limitaron los de Hacienda, eclesiástico y militar. Se creó la jurisdiccion contencioso-administrativa, permitiendo la defensa de los particulares contra las disposiciones emanadas del gobierno.

¿Qué reformas sufrió el procedimiento?—En lo civil la más importante fué la publicacion de la Ley de Enjuiciamiento, obligatoria desde 4.º de Enero de 1856, la cual modificó lo establecido en la Constitucion de 1842 y en el reglamento provisional para la administracion de justicia de 1835; separó la jurisdiccion voluntaria de la contenciosa; ordenó que las sentencias fuesen fundadas; suprimió la tercera instancia é introdujo los recursos de casacion.

En el orden *penal*, no fué tan laudable y tan trascendental la reforma. Vigente el título V de la Constitucion de 1812, y el reglamento provisional, si bien sus disposiciones eran un adelanto en cuanto á la libertad y á la se-

(1) Desde 1876.

(2) En 1861: reformada en 1869.

(3) Hoy se llaman Juzgados municipales.

guridad de los procesados, estaban aquéllas muy lejos de los principios que ya la ciencia entonces proclamaba. La ley provisional para la aplicación del Código penal, publicada con éste; la supresión de la confesión con cargos; el abono de la mitad del tiempo de prisión á los sentenciados por delitos correccionales; la separación de las faltas gubernativas de las judiciales; y varias reglas que se dictaron sobre cumplimiento de condenas y detenciones de personas, forman las modificaciones más importantes en este ramo del procedimiento.

La publicación de la *Colección legislativa*, comprensiva de todas las disposiciones que emanan del Poder, así como de la jurisprudencia civil y administrativa, formada por las sentencias del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, en sus respectivas esferas, produjeron grandes bienes para el acierto de los tribunales inferiores y para el estudio del derecho vigente.

Reformas posteriores al reinado de doña Isabel II.

Si durante el de Fernando VII, y especialmente el de su hija doña Isabel ha comenzado una nueva era de progreso para el derecho español, más fecundo y más trascendental ha sido el periodo posterior al destronamiento de aquélla, durante el cual, y merced á las ideas democráticas que dominaban en los poderes legislativo y ejecutivo, las reformas acometidas fueron mucho más importantes y de efectos más radicales; la mayor parte de las cuales han sido, á su vez, modificadas despues de la restauración de la monarquía.

La constitucion democrática promulgada en 1869, proclamando la libertad religiosa, los derechos individuales y el *Jurado*, sustituida ya por la de 1876; las leyes electorales; la municipal y provincial de 1870, derogadas y modificadas tambien por otras de Agosto de 1876; el Decreto-ley sobre unidad de fueros, aceptados despues en su mayor parte; la de organización del Poder judicial, vigente aún, excepto en lo relativo á los tribunales de partido, no establecidos; la reforma del Código penal de 1850, hecha y promulgada en 1870 y sujeta en éstos momentos á nuevas modificaciones; el planteamiento del recurso de casacion en lo criminal, que sigue rigiendo; las leyes de matrimonio y registro civil de Junio de 1870, reformadas profundamente, pero no derogadas, en 1875; la de Enjuiciamiento criminal, que respondió á una necesidad generalmente sentida de mucho tiempo atrás y comenzó á regir en Enero de 1873, admitiendo y regulando el tribunal del *Jurado* y el principio práctico de la única instancia con el juicio oral y público, vigente aquella todavía, excepto en la que se refiere á estas dos innovaciones, cuya parte ha declarado *en suspenso* el decreto de 3 de Enero de 1875; la supresión de la jurisdicción contencioso-administrativa en Octubre de 1868, restablecida con sus tribunales especiales en 1875; la supresión de las órdenes militares, vueltas ya á la vida legal en Abril de 1874; la ley de orden público de 1870; la reforma de la casacion civil; la reglamentación de la gracia de indulto; la abolición de la pena de argolla y declaración de los efectos de la interdicción civil; la reversion al Estado de los oficios de la fé pública; la redención de foros y otras cargas; y por último, la humanitaria y transcendentalísima ley de la abolición de la esclavitud de 5 de Julio de 1870, son hechos históricos de la legislación pátria, que señalan esta época como una de las más brillantes de la historia contemporánea, política y jurídica de la nación (1).

(1) La gloria de estas reformas jurídicas, corresponde principalmente á los ex-ministros de Gracia y Justicia D. Antonio Romero Ortiz y D. Eugenio Montero Ríos, cuyos nombres figuraran en la historia del Derecho civil y procesal, como los iniciadores de la nueva tendencia dada á la legislación.

Si la reforma no fué llevada á mayor grado de perfeccion apetecible, es lo cierto que han sentado las bases capitales que proclaman los buenos principios de legislación. Su desarrollo dependerá de las escuelas en que militen los juriconsultos que formen el Gobierno; pero aquellas bases ya no desaparecerán de nuestros Códigos. El tiempo y la experiencia cuidarán de su conservacion y desenvolvimiento.

¿Qué reformas capitales se hicieron despues de la restauracion de la monarquía?—Se promulgó la nueva Constitucion, en 30 de Junio de 1876, que limita el ejercicio de los derechos individuales proclamados por la de 1869; suprime el sufragio universal y el Tribunal del Jura do; establece únicamente la *tolerancia* de los cultos disidentes, reconociendo como oficial la religion católica, aunque respetando las opiniones y los cultos indicados, sin manifestaciones públicas: modifica la Constitucion del Senado, que sólo reconocía, en la de 1869, el principio electivo; y crea senadores *vitalicios* de eleccion real, senadores *por derecho propio* y senadores *electivos*. Se devolvió al matrimonio canónico la fuerza y efectos civiles de que le habia privado la ley del matrimonio civil (Decreto de 9 de Febrero de 1875) Se suspendió, como ya hemos indicado antes, el *Jurado* y el juicio oral (3 de Enero de 1875) Se restableció la jurisdiccion contencioso-administrativa y los tribunales especiales que antes la ejercian (20 de Enero de 1875) Se repuso el tribunal de las órdenes militares, para ejercer la jurisdiccion metropolitana (1.º de Agosto de 1876). Y se declaró solemnemente, que los servicios obligatorios de las armas y las cargas públicas, eran existenvos á las Provincias Vascongadas; declaracion digna de todo encomio, porque es el paso fundamental para la unidad política, civil y administrativa que debe existir en todo el reino (Ley de 21 de Julio de 1876)

En materia administrativa, se promulgaron las leyes provincial y municipal; y en materia penal, se declaró delito toda clase de *hurtos*; (ley de 17 de Abril de 1876), se modificó la penalidad del delito de *secuestros*, encomendándose su castigo á los Consejos de guerra permanentes; (ley de 8 de Enero de 1877), y se separa de la legislación comun los delitos de imprenta, creando un tribunal y procedimiento especiales. (Decreto de 31 de Diciembre de 1875.)

Orden de prelación entre los diferentes cuerpos legales.

¿Qué orden de preferencia guardan entre sí las disposiciones legales que forman el derecho de Castilla?—El siguiente: 1.º, leyes y disposiciones más recientes del reinado actual y de los anteriores, prefiriendo las más modernas á las más antiguas: los decretos y órdenes de las Córtes, para que sean obligatorios, deben haber sido restablecidos expresamente; 2.º, el suplemento á la Novísima Recopilacion, con la misma prioridad en favor de las disposiciones más modernas que contenga; 3.º, Novísima Recopilacion; 4.º, leyes comprendidas en la Recopilacion y Ordenanzas reales de Castilla; 5.º, Fuero-Juzgo, (1) Fuero Real y fueros municipales, en cuanto fueren usados y guardados; 6.º, las Partidas.

En los territorios regidos por fueros especiales deben suplirse los vacíos de la legislación del modo y forma que en los fueros se prevenga.

¿Por qué no se mencionan el Ordenamiento de Alcalá y las leyes de Toro?—Porque la parte del primero, no inserta en la Recopilacion, se considera sin autoridad, y es verdaderamente un monumento histórico. Y en cuanto á las leyes de Toro, porque están incluidas en la Novísima Recopilacion.

(1) Acerca de la fuerza obligatoria de sus leyes y de la preferencia de este Código al de las Partidas, véase la pág. 172.

ELEMENTOS DEL DERECHO CIVIL.

Preliminares (1).

¿Qué acepciones tiene la palabra *derecho*?—Tres: la más lata significa: «Todo lo que es conforme á una regla general y obligatoria»; y jurídicamente considerada, puede tomarse en sentido *subjetivo* y *objetivo*.

Objetivamente considerado, es el conjunto de principios, de preceptos y de reglas á que están sometidos los hombres que viven en una sociedad civil, y á cuya observancia pueden ser compelidos por medio de la fuerza. *Subjetivamente* apreciado, es la facultad que tenemos de hacer alguna cosa, ó de exigir que otro la haga. Los preceptos jurídicos y los morales se distinguen en que los segundos no son susceptibles de coacción externa, como lo son los primeros.

¿Qué es *derecho positivo*?—El sancionado por la sociedad civil, tomando por base las máximas imprescriptibles del natural, que contiene los principios que son seguidos y apoyados como reglas de acción en el Estado. Si se refiere á las demás naciones, llámase *derecho exterior*, de *gentes* ó internacional; si se circunscribe á un solo pueblo, llámase *interior* ó peculiar de cada nación.

Comprende el *interior* las leyes fundamentales ó *políticas* que organizan el gobierno y los poderes públicos, determinando sus límites y las instituciones generales; las leyes *administrativas* que regulan las relaciones de los administrados con el gobierno; las *civiles*, que marcan las relaciones de los ciudadanos entre sí, entre las que figuran las *mercantiles*; las *penales*, que determinan las relaciones que aquéllos tienen con la Ley, comprendiéndose en ellas las de *procedimientos*. Forman las primeras el *derecho político*, las segundas el *administrativo*, las terceras el *civil* y *mercantil*, y las cuartas el *penal* y de *procedimiento* ó *enjuiciamiento*. La *Ley* y la *costumbre*, son las fuentes del Derecho.

¿Qué es *derecho civil*?—«El conjunto de disposiciones legales que regulan las relaciones mútuas de los ciudadanos,» declarando sus derechos y obligaciones; definición distinta á la del *derecho romano*.

¿Qué es *derecho penal*?—«El conjunto de disposiciones que hacen respetable á la sociedad por la represión de los delitos.»

Señala y define los hechos punibles y determina la pena que les corresponden. Es la sanción de las demás leyes.

Ley.

Es la *Ley* «una declaración solemne del poder legislativo sobre un objeto de régimen interior de la nación y de interés común.» Debe tener tres caracteres: ser *obligatoria*, *general* y *estable*. Son obligatorias, tanto las permisivas, como las preceptivas y prohibitivas; porque las primeras, al permitir, imponen un deber de respeto y obediencia á la generalidad en beneficio del derecho que conceden; y las dos restantes, llevan consigo bien claro la imposición de deberes. Debe ser *general* y extensiva á todos

(1) Para mayor instrucción, véase lo expuesto en los PROLEGÓMENOS DEL DERECHO, respecto á cada una de las materias que contienen estos preliminares, pág. 1.

los ciudadanos, considerándoles iguales ante ella; lo que no excluye los beneficios que algunas conceden á toda una clase, como los menores, las mujeres y los incapacitados. Debe ser *estable* por la permanencia y seguridad de los derechos que crea ó declara, sin que por ello pueda entenderse perpétua y ajena á los adelantos y necesidades de la época.

En toda ley debe considerarse su formacion, su promulgacion, sus efectos, su aplicacion, su abrogacion y derogacion, y su dispensa.

¿Quién forma la Ley?—Antes del periodo constitucional, su formacion era obra exclusiva del monarca. Desde este tiempo, en las Córtes, con el rey, reside el poder legislativo, quiénes pueden abrogarla, derogarla y dispensar de su observancia. Su ejecucion se facilita por medio de reales decretos, reales órdenes, reglamentos é instrucciones.

Son objeto de los reales decretos los negocios más graves, nombramientos de importantes cargos, etc. Deben aparecer como dictados por el monarca, y ser refrendados por el ministro del ramo, responsable de sus acuerdos. Son objeto de las reales órdenes asuntos de menor importancia, y sólo los firma el ministro, de orden del rey.

¿Cuál es la promulgacion de la Ley?—El acto por el cual se pone en conocimiento del pueblo para quién fué dictada, y desde el que es obligatoria. Corresponde promulgarlas al poder ejecutivo, que lo hace por medio de la *Gaceta* y *Boletines Oficiales* de las provincias, siendo obligatorias en las capitales de éstas, desde luego, y cuatro días despues de promulgadas, en todos los demás pueblos (1).

¿Qué efectos debe producir?—Debe ser aplicable á los casos posteriores á su promulgacion, mirando siempre al porvenir y huyendo de la retroactividad en sus efectos. Puede, no obstante, explicar otra anterior, respetando siempre la cosa juzgada, las transacciones y las decisiones arbitrales consentidas. En materia penal puede ser retroactiva, pues, minorada ó suprimida la pena de un delito, sería irritante ver que se imponia á un hecho anterior, que el legislador declaraba haber sido injustamente castigado. Esta retroactividad se aplica aunque haya sentencia firme y esté sufriendo condena el penado (2).

A nadie aprovecha la ignorancia de la Ley, ni aún á los rústicos, los soldados y las mujeres, á quiénes favorecian las Partidas. Por eso la Ley debe ser extensiva á todos los españoles dentro y fuera de España. Su esfera de accion alcanza á los extranjeros, en cuanto atañe á la seguridad pública, á la policia, á la correccion de los delitos y á algunos derechos de la vida civil, que son objeto del derecho internacional privado, formando los estatutos *personal, real y formal*. Deben respetarse los tratados internacionales.

¿Qué es el estatuto *personal*?—«La ley que se refiere directa y exclusivamente al estado civil de la persona, como su condicion y capacidad para los actos de la vida civil. El *estatuto personal* sigue al hombre donde quiera que esté, y le sujeta á la ley del país á que pertenece.» Este es el principio que los A. A. proclaman y la regla fundamental de este *estatuto*. Por ella, el extranjero en España se rige por las leyes de su país, en cuanto á su condicion y actos de la vida civil, así como el español conserva sus leyes en los mismos casos, estando fuera de su patria.

¿Qué es el estatuto *real*?—«La ley que tiene por objeto principal las cosas inmuebles, sin consideracion al estado ó á la capacidad de las personas.» Es una consecuencia del dominio llamado *eminente*, que consiste en la facultad que tiene el Estado de arreglar la propiedad de su territorio,

(1) El Tribunal Supremo ha declarado, no obstante, que la ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820, rigió desde su fecha en toda la monarquia.

(2) Artículo 23 del Código penal de 1870, por virtud del cual se mandaron revisar todas las causas sentenciadas y no cumplidas.

exigir de ella los impuestos y expropiar á sus poseedores por causa de necesidad y utilidad pública. La legislación del país en que radican los inmuebles es aplicable á todos los actos y contratos de que sean objeto (*locus regit actum*), sobreponiéndose á los demás estatutos.

¿Qué guía debe seguirse para apreciar debidamente los casos en que es aplicable el estatuto *real* y los en que debe hacerse aplicación del *personal*?—No puede señalarse una regla fija y constante, por la dificultad del deslinde de las cuestiones. La más aproximada consiste en examinar la naturaleza de la ley que trata de aplicarse, investigando cuál es su objeto principal, directo é inmediato, y según que sea la propiedad inmueble, ó la condición y capacidad de las personas, así debe aplicarse el estatuto *real* ó el *personal*.

¿Cuál es el estatuto *formal*?—«La ley que rige los actos lícitos del que se halla en país extranjero,» sean judiciales ó extrajudiciales. En las solemnidades *internas* de los actos extrajudiciales se aplica el estatuto *personal* en cuanto á la condición de las personas, y el *real* con relación á los bienes. Y en las solemnidades *externas* rige el principio enunciado de que *locus regit actum*.

¿Qué circunstancias deben reunir los documentos otorgados en el extranjero para tener fuerza en España?—1.^a, que el asunto de que traten sea lícito en España; 2.^a, que los otorgantes puedan obligarse según la ley de su país; 3.^a, que las hipotecas sean registradas en el de la propiedad, si radican en España, dentro de tres, nueve y doce meses, si fueran constituidas en Europa, América ó Africa y en Asia respectivamente, si bien este registro no es obligatorio en la nueva ley hipotecaria; 4.^a, que los documentos españoles tengan igual fuerza en el país en que se otorgaron á la que se les concede en la Península.

Es principio general que las sentencias no tienen fuerza obligatoria fuera de los límites de la nación en que han sido dictadas; pero razones de conveniencia mútua han mitigado el rigor de este principio entre los Estados que, por su proximidad y frecuencia de relaciones civiles, se hermanan y sienten los efectos de su rigor. Las sentencias extranjeras que deciden juicios criminales no tienen fuerza en España; y en cuanto á las civiles se está á lo establecido en los tratados respectivos; no existiendo éstos, el derecho dispone que tengan la misma fuerza que se da á las ejecutorias españolas en la nación de que aquéllas proceden, y si no se les concede autoridad, que no la tengan tampoco en España las extranjeras. Y por último, no estando comprendidas en ninguno de los tres casos anteriores, deben reunir las circunstancias siguientes: 1.^a, que recaigan sobre acción *personal*, siendo lícita en España la obligación que la motiva; 2.^a, que el juicio no se siguiera en rebeldía; y 3.^a, que sea legalmente *auténtica* en la nación en que fué dictada, y contenga los requisitos que exigen las leyes españolas, para que haga fe en España (1).

¿Los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros tienen fuerza en España?—Nada dispone nuestro derecho acerca de los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros; pero la reciprocidad es la regla sancionada por los pueblos cultos, admitida aún en los Estados que desconocen la fuerza de las ejecutorias extranjeras. Deben haber tenido lugar ante el juez competente y ser formalizados con arreglo á la ley del país en que se dictaron, siendo conformes con el estatuto que correspondiere al caso litigioso.

Aplicación de la ley.

¿Cuál es el elemento indispensable para la aplicación de las leyes?—La *interpretación*, porque los principios generales que en ellas se consiguan

(1) Véase lo expuesto acerca de la ley en los *Prolegómenos*.

no pueden comprender todos los casos que la práctica presenta en sus diversas combinaciones. De aquí la necesidad de *interpretarlas*.

Interpretar la ley es «entenderla bien y derechamente», esto es, de la manera más sana y provechosa, según las Partidas, para lo cual el jurista-consulto debe penetrar en su espíritu (1).

Dos clases hay de interpretación: *usual* y *doctrinal*. La *usual* se origina de la práctica, y forma la jurisprudencia consuetudinaria, á que llamemos *costumbre*, aplicable sólo en el efecto de ley, si es constante y uniforme y dimanada de la resolución de casos perfectamente análogos, dada por el Tribunal Supremo. La *doctrinal* nace de los escritos y trabajos de los comentaristas y escritores, procurando explicar, restringir ó extender la ley. Es preferible la primera.

¿Qué reglas fijan los autores que deben tenerse presentes en la interpretación de las leyes?—Los Sres. La Serna y Montalvan, formulan trece que son las siguientes:

- 1.^a El respeto escrupuloso á la ley, cuyo tenor literal, cuando es claro, no puede ser eludido á pretexto de penetrar en su espíritu.
- 2.^a La inteligencia de las palabras de la ley, en su significación propia y natural, á no constar que el legislador las entendió de otro modo.
- 3.^a El sentido más razonable y verosímil cuando hay ambigüedad en las expresiones de la ley.
- 4.^a La comparación y combinación de las diferentes partes de la ley, explicando las unas por las otras.
- 5.^a El espíritu del legislador, que se deducirá de las creencias y opiniones de la época de la ley, de las exposiciones ó motivos incluidos en su preámbulo ó en su parte dispositiva, y de las demás leyes contemporáneas.
- 6.^a La inteligencia común que se dá á la ley en la práctica.
- 7.^a Ampliación de todo lo favorable. Así, las leyes que protegen la libertad de los contratos y de las últimas voluntades, deben ser extensivamente interpretadas (2).
- 8.^a Restricción de todo lo odioso. Por esto las leyes que limitan la libertad natural, las que clasifican los delitos y prescriben penas y las que autorizan la desheredación, deben ser estrictamente interpretadas, sin hacer extensivas sus disposiciones á los casos que no están comprendidos en su tenor literal.
- 9.^a Ampliación de la ley en un caso igual á otro igual. Esta regla sólo es aplicable al derecho civil. En el penal no es lícito, á título de interpretación, llevar la ley de un caso prohibido á otro que no lo está, en los términos que expondremos al tratar de los delitos.
- 10.^a Ampliación de los más á los menos en las leyes permisivas. Así, pues, aquéllos que tienen facultad de hacer donaciones, la tienen también de vender y de hipotecar sus cosas.
- 11.^a Ampliación de los menos á los más en las leyes prohibitivas. Por esto las personas que no pueden administrar sus bienes no tienen tampoco facultad para proceder á su enajenación.
- 12.^a La razón de analogía con otros casos expresos en las leyes.
- 13.^a Y la equidad judicial, que consiste en volver la vista á la ley natural, cuando no existe una positiva, ó en la parte que es oscura é insuficiente.

Abrogación y derogación de la ley.

Se entiende por *abrogación* de una ley la anulación ó revocación de

(1) Véase lo expuesto acerca de la ley en los *Prolegómenos*.

(2) *Aragon*.—Las leyes de Aragon rechazan la interpretación extensiva, admisible no obstante, cuando hay identidad de razón.

todo lo que por ella se halla establecido, y por *anulacion* la revocacion de parte de lo que en ella se establece. Una y otra pueden hacerse *expresa* ó *tácitamente*. La *expresa* tiene lugar cuando una nueva ley la determina, refiriéndose absolutamente á todas las anteriores, ó concretamente á alguna; y la *tácita* cuando la nueva disposicion es contraria á las anteriores, cuando una legitima costumbre se opone á ella y cuando no existen los motivos en que se fundaba la ley.

Dispensa de la ley.

Dispensa de ley es «la exencion de lo ordenado por ella.» Llámense las dispensas *gracias al sacar*. No son verdaderos privilegios, porque están al alcance de todos los ciudadanos que se encuentran en las mismas circunstancias del dispensado.

Corresponde la facultad de dispensar la ley al poder legislativo, cuya facultad se delega al ejecutivo en casos determinados, previa la justificacion de existir motivos justos y razonables, y el pago de un servicio pecuniario.

Costumbre.

¿Qué es la *costumbre*?—«El derecho introducido legitimamente por la repeticion de actos consentidos por el legislador.» Reconoce por fundamento el uso ó práctica general, que tiene la misma fuerza que la ley (1).

Debe reunir, para ser legitima, cuatro circunstancias: 1.^a, repetición de actos uniformes sin contradicción; 2.^a, conformidad con la religion é interés del país; 3.^a, la ciencia y paciencia del legislador, que se presume de derecho, y 4.^a, el uso no interrumpido por diez años.

Para probar su existencia se requieren treinta sentencias, segun las *Partidas* de la Academia, y dos, segun las de Gregorio Lopez; ambas declaradas oficiales, si bien está preferida en la práctica y declarada su preferencia por el Tribunal Supremo de Justicia, la edicion de Gregorio Lopez. Deben ser dictadas por los tribunales superiores.

¿Qué clases hay de costumbres?—Tres: *costumbre segun la ley, fuera de la ley y contra la ley*; cuyas especies quedan explicadas al tratar de los *Prolegómenos del Derecho*. Todas se derogan por una ley ó por otra *costumbre* que la modifique ó le sea enteramente contraria.

El no uso de una ley no constituye una *costumbre contra ley*.

DERECHO CIVIL.

De las personas y su estado.

Son los objetos del derecho las *personas*, las *cosas* y los *procedimientos*, comprendiendo en ellos las *acciones*.

¿Qué es persona juridica?—«Todo sér susceptible de derechos y de obligaciones», civilmente considerado. Son, pues, *personas juridicas*, no sólo los individuos, sino el Estado, los pueblos, las corporaciones, el fisco y determinadas fundaciones, á quien la ley, por medio de abstracciones, considera susceptibles de deberes y derechos.

¿A qué se dá el nombre de *estado de las personas*?—A la *distinta conside-*

(1) Véase lo dicho en la penúltima página sobre la interpretacion usual.

ración que tienen en el orden civil, según la cual gozan de diversos derechos, diferentes obligaciones y determinadas incapacidades, por la edad, la capacidad y la posición en que se encuentren. La libertad y la esclavitud sirvieron antiguamente para fijar el estado de las personas (1). Hoy debemos atenernos para fijarlo á las cualidades marcadas por la naturaleza y á las creadas por la ley, ó lo que es lo mismo, al estado natural y al estado civil.

Forman el estado *natural* de las personas, el *sexo*, el *nacimiento* y la *edad*. La ley concede distintos derechos al varón que á la hembra, haciendo á aquél de mejor condición que ésta, por regla general; pues, al paso que impone prohibiciones y limitaciones á la mujer, declara estar en la plenitud de su goce al hombre, sólo por ser varón. Así vemos que éste puede contratar, y la mujer ni aun podía ser tutora mas que de sus descendientes. Hoy, por virtud de la ley de matrimonio civil, la madre tiene patria potestad sobre sus hijos, en defecto del padre, y la de Enjuiciamiento civil les admite como curadoras ejemplares de sus maridos (2).

El *nacimiento* origina la patria potestad en sus diversas y múltiples manifestaciones en la esfera de la familia, clasificando sus individuos en padres é hijos de familia, y puede ser causa de privación de derechos, por la conformación viciosa ó incapacidad moral con que se presente el nacido. La ley considera como nacidos á los *póstumos*, siempre que se trate de su utilidad, con tal que nazcan con figura humana y vivan veinticuatro horas, enteramente desprendidos del seno materno.

La *edad* concede ó niega derechos. Al efecto se divide en *mayor y menor*. Llega ésta hasta los veinticinco años, y comprende la menor edad ó *minoría civil* la *infancia*, que termina á los siete años; la *proximidad á la infancia*, que comprende desde los siete á los diez años y medio; la *proximidad á la pubertad*, desde esta época hasta los catorce años en los varones y doce en las hembras; y la *pubertad*, desde estas épocas, respectivamente, en adelante. Antes de la pubertad se les llama *pupilos*, y después *menores* simplemente.

La clasificación de las personas por razón de la edad es distinta, según veremos en el tratado de derecho penal, para los efectos de la penalidad.

¿Qué base rige en el estado *civil* de las personas?—La consideración de ser españoles ó extranjeros, con relación al ejercicio de los derechos civiles.

Son españoles: 1.º, las personas nacidas en territorio español; 2.º, los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España; 3.º, los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza; 4.º, los que sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquía (3). Los hijos naturales siguen la condición del padre; los espúreos, la de la madre; la mujer casada, la del marido.

¿Qué prohibición expresa tienen los extranjeros establecidos en España, no naturalizados?—Además de no poder gozar de los derechos civiles y políticos propios del español, no pueden ejercer cargo alguno que tenga anexa jurisdicción ó autoridad, ni dedicarse á profesiones que exijan títulos expedidos por las autoridades españolas.

Los buques españoles, para el efecto del estado civil de las personas, se reputan como formando parte del territorio de la monarquía.

¿De cuántos modos se pierde la nacionalidad?—De tres: 1.º, adquiriendo naturaleza en otro país; 2.º, admitiendo en él un empleo sin licencia del rey, y 3.º, casándose la española con un extranjero.

(1) Promulgada la ley de abolición de la esclavitud, pronto desaparecerá de nuestras posesiones ultramarinas la clasificación de libres y esclavos.

(2) Las mujeres condenadas por delitos castigados con cadena ó presidio, sufrirán las de reclusión y prisión respectivamente. (Art. 96 del Código penal.)

(3) Art. 1.º de la Constitución de 1876.

¿Cómo se clasifican los extranjeros?—En *domiciliados* y *transeuntes*. Son *domiciliados* los que viven con casa abierta, residiendo en punto fijo ó por más de tres años en él, y teniendo bienes propios ó modo de vivir conocido. Son *transeuntes* los que no son *domiciliados*.

¿Qué otra division suele hacerse de las personas?—Dividense en *residentes* y *transeuntes*, y los primeros se subdividen en *vecinos* y *domiciliados* (1).

Es *vecino* todo español emancipado que reside habitualmente en un término municipal, y se halla inscrito como tal en el padron del pueblo. Sólo puede tenerse una vecindad, que declara el Ayuntamiento á los dos años, ó cuando se ejercen cargos públicos.

Es *domiciliado* todo español que, sin estar emancipado, reside habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia de un vecino.

Es *transeunte* todo el que, no estando comprendido en los párrafos anteriores, se encuentre en el término accidentalmente.

DEL REGISTRO CIVIL Y DEL MATRIMONIO,

SEGUN EL DERECHO ANTIGUO Y EL MODERNO (2).

Del registro civil.

Una de las más importantes y necesarias innovaciones que ha sufrido el derecho, en cuanto al *estado civil* de las personas, es el planteamiento del *Registro*, que, encomendado por ahora á los jueces municipales, constituye la garantía de los hechos más trascendentales del individuo, dentro de la familia y aun fuera de ella. Era de apremiante necesidad que el legislador se ocupase del nacimiento, del matrimonio y de la defuncion del ciudadano, bajo su aspecto civil, vigilando y asegurando la certeza de tales hechos, fuente y origen de los derechos inherentes al *estado civil* de las personas, expuestos aquéllos, como dice el autor de la ley, á la tergiversacion y al olvido, «sin contar mas que con un débil y poco seguro recuerdo en el oscuro rincon de una sacristía.»

¿Qué es el *registro civil*?—Una oficina pública en cuyos libros *talonarios* se hacen constar, en forma conveniente, todos los actos que fijan, alteran ó modifian el *estado civil* de las personas, y se custodia la prueba documental de los mismos. Así, pues, son objeto del registro civil los *nacimientos*, los *matrimonios*, las *defunciones*, los cambios de *nacionalidad*, nacimiento verdaderamente civil, los *reconocimientos* y *legitimaciones* de hijos naturales, las *adopciones*, las *interdicciones* de bienes, y otros actos que, directa ó indirectamente, afectan á los enunciados. Esta institucion es de los tiempos modernos, por mas que, entre los romanos, Servio Tulio y Marco Aurelio hayan dictado algunas disposiciones relativas al nacimiento y á la muerte de los ciudadanos, aunque en bien del interés del Estado exclusivamente.

¿Desde cuándo rige en España tan importante innovacion?—Desde la publicacion de la ley de 17 de Junio de 1870, que aunque de carácter pro-

(1) Ley municipal de 20 de Agosto de 1870, no modificada por la de 16 de Diciembre de 1876.

(2) La ley provisional de matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, ha modificado esencialmente el antiguo derecho, como tendremos ocasion de observar más adelante; y si bien el decreto de 9 de Febrero de 1875 dejó vigente dicha ley tan sólo para los que ostensiblemente manifestasen que no son católicos, las disposiciones de aquélla que se refieren á los efectos del contrato con relacion á las personas y á los bienes, continúan en vigor.

visional la estableció, desarrollándose sus disposiciones en el reglamento de 13 de Diciembre del mismo año. Antes estaba á cargo de los párrocos.

¿Qué funcionarios están encargados del registro civil?—El director general de los Registros civil, de la propiedad y del notariado, por medio de los oficiales que están bajo su dependencia; los jueces municipales y los agentes diplomáticos y consulares españoles, todos bajo la inspección superior del ministerio de Gracia y Justicia.

¿Qué actos deben inscribirse en el registro de la dirección general?—Los siguientes: 1.º, los nacimientos en el extranjero de hijos de español que no tenga domicilio conocido en España; 2.º, los nacimientos ocurridos en buque español durante un viaje, si ninguno de los padres tuviese domicilio conocido en España; 3.º, los nacimientos de hijos de militares ocurridos en el extranjero, donde los padres se hallen en campaña, si no fuese conocido su último domicilio en España; 4.º, los matrimonios *in articulo mortis* contraídos por militares en el extranjero, hallándose en campaña, si no fuese conocido su último domicilio en España; 5.º, los matrimonios de la misma clase celebrados durante un viaje por mar, si ninguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España; 6.º, los matrimonios de españoles celebrados en el extranjero, si el contrayente ó contrayentes españoles no tuvieren domicilio conocido en España; 7.º, toda ejecutoria en que se declare la nulidad ó se decrete el divorcio de un matrimonio inscrito en el registro de la dirección general; 8.º, las defunciones de militares ocurridas en campaña, cuando no sea conocido el domicilio anterior del difunto; 9.º, las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese domicilio conocido en España; 10, las de españoles ocurridas en el extranjero; 11, las cartas de naturaleza, cuando los interesados no hayan elegido domicilio en España; 12, las declaraciones de opción por la nacionalidad española hechas por los nacidos en territorio extranjero, de padre ó madre española, si los que hiciesen la declaración no eligiesen, al hacerla, domicilio en España; 13, las de españoles que hubiesen perdido esta cualidad, manifestando que quieren recuperarla, si al hacerlo no eligiesen domicilio en España; 14, las que para recuperar la nacionalidad española hagan las personas nacidas en el extranjero, de padre ó madre españoles que hubiesen perdido esta cualidad, si tampoco eligiesen domicilio en España; 15, las hechas con el mismo objeto por españolas casadas con extranjeros después del fallecimiento de sus maridos, en el mismo caso de los cuatro números anteriores.

¿Qué actos deben inscribirse en el registro municipal?—Los siguientes: 1.º, los nacimientos ocurridos en territorio español; 2.º, los ocurridos en viaje por mar ó en el extranjero, si los padres ó alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en España; 3.º, los matrimonios que se celebren en el territorio español; 4.º, los celebrados *in articulo mortis* en viaje por mar, si alguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España; 5.º, los celebrados en el mismo caso por militares en campaña en el extranjero, si fuese conocido su último domicilio en España; 6.º, los matrimonios celebrados en el extranjero por un español y un extranjero, ó por dos españoles, si tienen domicilio conocido en España; 7.º, los matrimonios de extranjeros celebrados según las leyes de su país, cuando los contrayentes trasladen á España su domicilio; 8.º, las ejecutorias en que se declare la nulidad del matrimonio ó se decrete el divorcio de los cónyuges; 9.º, las defunciones que ocurran en territorio español; 10, las de militares en campaña, cuando sea conocido su domicilio; 11, las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese domicilio conocido en España; 12, las cartas de naturaleza, cuando los interesados elijan domicilio en territorio español; 13, las justificaciones hechas en forma legal por extranjeros que hayan ganado vecindad en territorio de España relativamente á este hecho; 14, las declaraciones de opción por la nacionalidad española, hechas por

nacidos en España de padres extranjeros ó de padre extranjero y madre española; 15, las hechas por los comprendidos en los números 13, 14 y 15 de la contestacion anterior, si al hacerlas eligiesen domicilio en España; 16, las que hagan los extranjeros manifestando querer fijar su domicilio en territorio español, ó querer trasladarlo á punto distinto dentro del mismo, y 17, las ejecutorias en que se disponga la rectificacion de cualquiera partida de dichos registros municipales.

¿Que actos deben ser inscritos en el registro encomendado á los agentes diplomáticos y consulares de España?—Los siguientes: 1.º, los nacimientos de hijos de españoles ocurridos en el extranjero; 2.º, los matrimonios que en él se contraigan por españoles, ó por un extranjero y un español que conserve su nacionalidad; 3.º, las defunciones de españoles que allí ocurran; 4.º, las declaraciones de españoles que quieran conservar esta calidad al fijar su residencia en país extranjero, donde por sólo este hecho sean considerados como nacionales; 5.º, las declaraciones señaladas con los números 12, 13, 14 y 15 de los actos que deben inscribirse en el registro de la direccion general.

¿En cuántas secciones se divide el registro civil?—En cuatro, denominadas: 1.ª, de *nacimientos*; 2.ª, de *matrimonios*; 3.ª, de *defunciones*; 4.ª, de *ciudadanía*. Cada una de ellas debe tener distintos libros talonarios, excepto los que lleven los agentes diplomáticos y consulares, que podrán ser de forma comun, rubricados y señalados. Los correspondientes al registro municipal, consular y diplomático se llevarán por duplicado, con índice alfabético, si bien por ahora sólo llevarán un libro para cada seccion.

La ley establece requisitos *internos* y *externos* comunes á todas las inscripciones, y otros especiales para cada clase de asientos.

¿Qué requisitos *externos* debe tener todo asiento de los libros?—Estarán autorizados con el sello de la oficina correspondiente, y se firmarán por el juez y el secretario, ó por quienes legalmente les sustituyan en el desempeño de las atribuciones generales de sus cargos, por la persona ó personas que hayan hecho la declaracion ó manifestacion á que dichos asientos se refieran, y por dos testigos mayores de edad. Las inscripciones que deban hacerse en los registros de que están encargados la direccion general y los agentes diplomáticos ó consulares de España en el extranjero, se autorizarán con los sellos respectivos ó con las de dichos agentes y los cancilleres, en su caso, firmando además los testigos y las otras personas que deban concurrir al acto. Deben salvarse las equivocaciones y omisiones por el que haya escrito el asiento, no pudiendo sufrir ninguna alteracion despues de firmado.

¿Qué circunstancias ó requisitos *internos* deben contener los asientos?—Deben expresar: 1.º, el lugar, hora, dia, mes y año en que son inscritos; 2.º, el nombre y apellido del funcionario encargado del registro y del que haga las veces de secretario; 3.º, los nombres y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesion ú oficio y domicilio de las partes, testigos y apoderados que en el acto intervengan, y 4.º, las declaraciones y circunstancias expresamente requeridas ó permitidas por éstas ú otras leyes, con relacion á cada una de las diferentes especies de inscripciones; pero no otras declaraciones ó circunstancias que por via de observacion, opinion particular ú otro motivo creyesen conveniente consignar el juez ó cualquiera de las demás personas asistentes, y ménos las contrarias al Derecho.

¿Es necesaria la asistencia personal?—Puede sustituirse con un apoderado especial, excepto en los casos en que la ley la exige expresamente.

¿En dónde deben formalizarse las inscripciones?—En el local del registro, si bien podrán hacerse en sitio distinto de la oficina en que se lleve el registro, aunque siempre dentro del respectivo distrito, mediando para ello causa bastante á juicio del encargado de practicarlas, ó en los casos

que especialmente determine el reglamento. En uno y otro caso son siempre gratuitas.

¿Es público el registro civil?—Sí: toda persona tiene derecho á que se le facilite certificación literal del asiento ó asientos que designe, ó negativa en su caso, y de los documentos presentados para hacer la inscripción, cuyas certificaciones serán consideradas como documentos públicos.

¿Pueden expedirse certificaciones del segundo ejemplar de los libros?—Debiendo archivarse éstos en la secretaría de los tribunales de primera instancia, sólo pueden librarse en los casos siguientes: 1.º, cuando en el ejemplar existente en el juzgado municipal no se halle el asiento cuya copia se solicita; 2.º, cuando no estén conformes el asiento incluido en un ejemplar del registro con el correspondiente en el otro ejemplar; 3.º, cuando se haya perdido ó destruido el ejemplar depositado en el juzgado municipal.

¿Cómo se justifican los actos referentes al estado civil de las personas que son objeto del registro?—Hay que distinguir los anteriores, de los posteriores á la promulgacion de la ley que lo ha establecido. Los primeros se probarán por los medios establecidos en el derecho vigente ántes de aquélla: los segundos únicamente con las partidas del registro civil. Las del registro eclesiástico referentes á los mismos actos, no tenían fuerza probatoria en juicio civil, ni podían considerarse como documentos públicos; pero posteriormente se acordó que hagan plena prueba despues de ser inscritas en el civil. (1) No existiendo los libros del registro, se probarán los segundos por los demás medios de prueba que establecen las leyes. Las certificaciones indicadas no son gratuitas.

¿A quién corresponde la inspeccion del registro civil?—Al ministro de Gracia y Justicia, el cual la ejerce directamente por medio de la direccion general. Son inspectores delegados los jueces de primera instancia, y pueden nombrarse inspectores extraordinarios.

Seccion primera: nacimientos.

¿Cuándo debe presentarse al registro el niño recién nacido?—Dentro del término de tres dias, á contar desde aquél en que hubiese tenido lugar el nacimiento, presentándole al funcionario encargado del registro, quien procederá en el mismo acto á verificar la correspondiente inscripción. Dicho término empezará á correr, segun el reglamento, desde las doce de la noche del dia en que hubiese nacido, ó en que hubiese sido hallado, si fuere expósito. Si ocurrieran avenidas, nevadas ú otras causas de fuerza mayor, el término se proroga por todo el tiempo que duren dichos obstáculos. En estos casos, y siempre que hubiere temor de daño para la salud del recién nacido ú otra causa racional bastante que impida su presentacion en dicho término, el funcionario encargado del registro se trasladará al sitio donde el niño se halle, para cerciorarse de su existencia, recibir la declaracion de las circunstancias que deben expresarse en el registro, y verificar la inscripción.

¿Cómo se suple la falta de presentacion del niño dentro del término legal, cuando no concurren las circunstancias antedichas para que se entienda prorogado?—Con la formacion de un expediente ante el tribunal de partido, en que se oiga al fiscal, en el cual se justificará la causa que ha motivado la omision, haciendo constar la hora y el dia del nacimiento por certificación facultativa, y en su defecto, por informacion testifical. En caso de oposicion, conocerá y decidirá el juez de primera instancia en

(1) Decreto de 9 de Febrero de 1875.

sentencia que se mencionará en el acta. Están obligados á promover estos expedientes los fiscales municipales (4).

¿Quiénes tienen deber de hacer la presentacion de los niños?—Las personas siguientes: 1.º, el padre; 2.º, la madre; 3.º, el pariente más próximo, siendo mayor de edad, de los que se hubiesen hallado en el lugar del alumbramiento al tiempo de verificarse; 4.º, el facultativo ó partera que haya asistido al parto, ó en su defecto, cualquiera otra persona que lo haya presenciado; 5.º, el jefe del establecimiento público ó el cabeza de la casa en que el nacimiento haya ocurrido, si éste se efectuase en sitio distinto de la habitacion de los padres; 6.º, respecto á los recién nacidos ó abandonados, la persona que los haya recogido; 7.º, respecto á los expósitos, el cabeza de familia de la casa ó el jefe del establecimiento, dentro de cuyo recinto haya tenido lugar la exposicion. La obligacion es solidaria y no exige que se guarde el orden establecido anteriormente.

¿Qué circunstancias debe contener la inscripcion de nacimiento?—Además de las comunes á todo asiento, que ya hemos enumerado, expresará las siguientes: 1.º, el acto de la presentacion del niño; 2.º, el nombre, apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de la persona que lo presenta, y relacion de parentesco ú otro motivo por el cual esté obligada á presentarlo; 3.º, la hora, día, mes, año y lugar del nacimiento; 4.º, el sexo del recién nacido; 5.º, el nombre que se le haya puesto ó se le haya de poner, rechazando los extravagantes é impropios de personas; 6.º, los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si pudiesen ser legalmente designados, y su nacionalidad si fuesen extranjeros; si aquéllos no fuesen conocidos, debe ponerse un nombre y apellido usuales, que no revelen su origen, respetando y secundando cualquiera indicacion que se encontrare con el niño expósito; 7.º, la legitimidad ó ilegitimidad del recién nacido, si fuese conocida, pero sin expresar la clase de ésta, á no ser la de los hijos legalmente denominados naturales.

Respecto á los niños abandonados ó expósitos, en vez de las circunstancias 3.ª, 6.ª y 7.ª se expresará: 1.º, la hora, día, mes, año y lugar en que el niño hubiese sido hallado ó expuesto; 2.º, su edad aparente; 3.º, las señas particulares y defectos de conformacion que le distingan; 4.º, los documentos ú objetos que sobre él ó á su inmediacion se hubiesen encontrado, vestidos ó ropas en que estuviere envuelto, y demás circunstancias cuya memoria sea útil conservar para la futura identificacion de su persona. Los niños abandonados, mayores al parecer de tres años, y los adultos de origen y filiacion desconocidos, necesitan, para ser inscritos, una sentencia judicial (2).

Respecto á los ilegítimos, no se expresará en el registro quiénes sean el padre ni los abuelos paternos, á no ser que el mismo padre, por sí ó por medio de apoderado con poder especial y auténtico, haga la presentacion del niño y la declaracion de su paternidad.

Lo mismo se observará en cuanto á la expresion del nombre de la madre y de los abuelos maternos. Tal respeto exigen el secreto de las familias y el porvenir del niño.

¿Qué debe hacerse con los objetos encontrados con el niño expósito ó abandonado?—Si fueren documentos, se encarpetarán y archivarán; y si fueren otros objetos de fácil conservacion, se custodiarán tambien, marcándolos para que en todo tiempo puedan ser reconocidos.

¿Debe consignarse la declaracion de ilegitimidad en el acta de inscripcion?—Si el niño ha nacido de constante matrimonio ó en tiempo legal, no puede expresarse aquella en el registro sin mandato judicial.

(1) Decreto de 1.º de Mayo de 1873.

(2) Id., id.

¿Qué formalidades deben observarse para la inscripcion de un recién nacido, muerto inmediatamente despues del nacimiento?—Se hará constar por declaracion verbal de facultativo, si aquél ha fallecido antes ó despues de nacer, y por declaracion de los interesados, la hora del nacimiento y del fallecimiento. De todas estas circunstancias se hará mencion en la inscripcion de nacimiento, é inmediatamente se inscribirá la defuncion en el libro de la seccion correspondiente del registro civil.

¿Cuáles deben cumplirse cuando nazca el niño en un lazareto?—El jefe del establecimiento, en presencia del padre si se hallare en el mismo y de dos testigos, formalizará por duplicado un acta en que se expresen todas las circunstancias que segun esta ley deben mencionarse en los asientos del registro civil.

Un ejemplar de esta acta se remitirá inmediatamente al juez municipal del distrito en que el lazareto se halle situado, para que verifique su inscripcion en el registro de que esté encargado. El otro ejemplar quedará archivado en el establecimiento.

¿Cómo y con qué requisitos deben inscribirse los niños nacidos en buques nacionales?—Si el nacimiento se verificase en buque nacional durante su viaje, el contador, si el buque es de guerra, ó el capitán ó patron, si es mercante, formalizará el acta de que habla el artículo anterior, insertando copia de ella en el diario de la navegacion.

En el primer puerto que el buque tocare, si está en territorio español, se entregarán los dos ejemplares del acta por el oficial que la haya levantado á la autoridad judicial superior del mismo punto, quien hará constar la entrega por diligencia ante notario público, testimoniándose aquélla literalmente. En seguida se remitirán á la direccion general, por distintos correos, los dos ejemplares del acta original, para que practique en su registro la inscripcion correspondiente, si ninguno de los padres del recién nacido tuviere domicilio conocido en España; y en otro caso, remitirá una de ellas al juez municipal del domicilio, para que haga la inscripcion, quedando archivado el otro ejemplar en la direccion. El acta de entrega se depositará en el archivo del tribunal que la haya mandado extender.

Si antes de tocar el buque en puerto español tocare en puerto extranjero donde haya agente diplomático ó consular de España, se entregará á éste uno de los dos ejemplares del acta de que se habla anteriormente, para que se ejecute lo dispuesto. El otro ejemplar se entregará, con igual objeto, en el primer puerto español en que despues toque el buque, á la autoridad judicial superior.

Cuando no exista agente español en dicho puerto extranjero, el contador ó capitán del buque en su caso, reservarán en su poder los dos ejemplares del acta; y al llegar al puerto donde lo haya, ó á otro español, practicarán lo ordenado.

¿Qué formalidades y en qué puntos debe hacerse la inscripcion de los hijos españoles nacidos en el extranjero?—Aunque el nacimiento de los hijos de españoles en el extranjero haya sido inscrito conforme á las leyes que estén allí en vigor, los padres deberán hacer que se inscriba tambien en el registro del agente diplomático ó consular de España del punto más próximo al de su residencia, presentando con tal objeto al recién nacido ante este funcionario, si fuera posible, ó remitiendo al mismo dos copias auténticas de la inscripcion ya hecha. A su vez el agente español, practicada la inscripcion en su registro, remitirá á la direccion general una de dichas copias ó de la inscripcion que hubiese practicado al presentársele el recién nacido, para que asimismo la inscriba en su registro respectivo si los padres no tuviesen domicilio conocido en España, ó para que en otro caso se remitan al juez municipal correspondiente.

¿Dónde deben inscribirse los hijos de militares?—En el registro del punto en que residan; y si fuere el extranjero, con motivo de guerra, se

formalizará un acta por el jefe del cuerpo, observando lo dispuesto para la inscripcion de los nacidos en un lazareto, remitiéndose sucesivamente por el conducto más seguro los dos ejemplares de ella al ministerio de la Guerra, para que en él quede uno archivado y se pase el otro á la direccion general del Registro, con el objeto de que formalice la correspondiente inscripcion.

¿Qué anotaciones deben hacerse al márgen de las inscripciones de nacimiento?—1.º, las legitimaciones; 2.º, los reconocimientos de hijos naturales; 3.º, las ejecutorias sobre la filiacion; 4.º, las adopciones; 5.º, los matrimonios; 6.º, las ejecutorias de divorcio, sin expresar la causa que lo hubiere motivado; 7.º, las en que se declare la nulidad del matrimonio; 8.º, las interdicciones de bienes por efecto de la imposicion de pena; 9.º, los discernimientos de tutela y de toda especie de curatelas; 10, las remociones de estos cargos; 11, las emancipaciones voluntarias ó forzosas; 12, las naturalizaciones de los hijos ilegítimos; 13, las dispensas de edad; 14, los cambios, adiciones ó modificaciones de nombres ó apellidos (1), y en general, todos los actos juridicos que modifiquen el estado civil del ciudadano y no deban ser objeto de inscripcion principal, segun las disposiciones de la ley.

Los agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero inscribirán, en su registro, el fallecimiento de los españoles ocurrido en el país en que estén acreditados, remitiendo copia certificada de esta inscripcion á la direccion general para que se repita en el registro de la misma, ó el del domicilio en España del fallecido, si lo hubiere tenido.

De toda inscripcion de defuncion se dará conocimiento, por medio de copia certificada, á los encargados del registro en que se hubiese inscrito el nacimiento del difunto, para que se anote al márgen de las partidas respectivas.

¿Qué correccion se impone al que no verifica la presentacion del recién nacido dentro de los tres dias?—Cuando dejare de hacerlo sin mediar justa causa, incurre en una multa de 5 á 40 pesetas; y del doble en caso de reincidencia, exigible por el encargado del registro, con una correccion disciplinaria.

Seccion segunda: matrimonios.

El decreto de 9 de Febrero de 1875, que devolvió al matrimonio canónico los efectos civiles de que le habia privado la ley de matrimonio civil, válido éste ya únicamente para los que manifiesten con publicidad no ser católicos, extendió su reforma; necesariamente, á la parte de la ley de registro civil que trata de la inscripcion de los matrimonios, cuya formalidad se rige hoy por aquél decreto y por la instruccion de 19 del mismo mes y año.

Por manera, que el conocimiento de las disposiciones de la ley del registro, no es tan necesario como el de lo dispuesto por dicho decreto ó instruccion, que forma el derecho vigente para los matrimonios canónicos.

¿A quiénes correspondió y corresponde llevar el registro de los matrimonios?—Antes de la ley de registro civil, á los párrocos; despues de ésta á los jueces municipales, habiendo variado la forma y requisitos de la inscripcion el decreto ó instruccion citados.

¿Es obligatoria, dentro de qué término, y cómo debe solicitarse la inscripcion?—Es obligatoria y debe solicitarse con la presentacion de la partida ó certificacion del párroco ante quien se haya celebrado el matri-

(1) Estos cambios son autorizados por el Ministerio de Gracia y Justicia, previo expediente y consulta del Consejo de Estado, y á veces mandados hacer por sentencia firme.

monio, dentro de ocho dias contados desde el siguiente á su celebracion. En los matrimonios de conciencia, se contará desde la autorizacion dada por la autoridad eclesiástica para la publicidad de aquéllos. Terminado el plazo, no se inscribirá el matrimonio sin orden judicial y previo expediente.

¿Quiénes pueden solicitar la inscripcion?—Los cónyuges, sus padres ó tutores y sus mandatarios, aunque el mandato sea verbal. La omision cometida por estas personas sólo se castiga en el marido, cuya indolencia corrige la ley con una multa, que puede convertirse en prision subsidiaria, acordada en juicio verbal por los jueces municipales, en caso de insolvencia.

Para conseguir la inscripcion de todos los matrimonios canónicos, los párrocos deben dar noticia circunstanciada de los que autoricen, los dias 1.º y 15 de cada mes, por medio de relaciones que contengan la fecha y lugar de la celebracion, el nombre del sacerdote autorizante, la filiacion de los contrayentes y el folio del libro en que conste el asiento.

¿Cómo se verifica la inscripcion y qué circunstancias debe contener?—Transcribiendo literalmente la partida sacramental, y debe hacerse constar el lugar, hora, mes y año en que se verifica, los nombres y apellidos del encargado del registro y de su secretario, así como que no resulta en los libros antecedente alguno que impida la inscripcion.

Además de los requisitos expresados como necesarios, pueden consignarse, á instancia de cualquiera de los contrayentes: 1.º, el registro y la fecha de la inscripcion del nacimiento de éstos; 2.º, si son hijos legítimos, naturales ó expósitos; 3.º el poder y filiacion del apoderado cuando al matrimonio ó está presente uno de los contrayentes; 4.º, el consentimiento ó consejo para casarse los hijos de familia y menores de edad; 5.º, los nombres de los hijos naturales que se legitiman por el matrimonio celebrado; 6.º, la filiacion, fecha y lugar en donde falleció el cónyuge *pre mortuo* del contrayente viudo.

¿Qué deberes tiene el encargado del registro de matrimonios para con el de nacimientos?—Poner en conocimiento de éste la celebracion de las nupcias, á fin de que se anote el hecho al margen de la inscripcion del nacimiento.

¿Qué debe hacerse cuando existan contradicciones trascendentales entre el contenido de la partida sacramental y lo que resulte de los libros del registro?—Suspender la inscripcion, dando conocimiento á los interesados cuando las contradicciones no puedan rectificarse por las declaraciones, documentos ó justificaciones que acompañen á la partida, la cual devolverá el juez municipal al párroco con atento oficio, en que expresará las dificultades de la inscripcion. Si aquéllas no afectan á la validez del matrimonio ó son trascendentales, podrá el juez, si los interesados lo reclaman, hacer una inscripcion provisional, sujeta á ulterior rectificacion por el resultado de la informacion y comprobaciones posteriores.

En vista, pues, de lo dicho ¿qué fé merecen en juicio las partidas sacramentales del matrimonio religioso?—Cuando han sido inscritas en el registro civil, la hacen plena y acabada. Si no lo han sido, quedarán sujetas á las comprobaciones que prescriban los reglamentos y exijan los Tribunales para calificar su autenticidad, sin cuyas comprobaciones no tienen fé perfecta en juicio.

¿En qué registro debe inscribirse el matrimonio de los extranjeros?—En el del distrito municipal, cuando los contrayentes ó sus descendientes fijen su residencia en territorio español.

¿En cuál debe serlo el matrimonio contraído por españoles en el extranjero?—En el registro del agente diplomático ó consular de España del punto en que se celebre y, no habiéndolo, en el más próximo, quien remitirá copia de la inscripcion que haga á la direccion general, para la inscripcion en su registro, ó para remitirlo al juez municipal correspondien-

ta, según que el contrayente ó contrayentes españoles tengan ó no domicilio conocido en España.

Tercera seccion.—De las defunciones.

¿Qué requisitos deben preceder al enterramiento de los cadáveres?—

1.º, la inscripcion de defuncion en el libro correspondiente del registro del juzgado municipal en que haya ocurrido, ó del en que se halle el cadáver; 2.º, la licencia de dicha autoridad para darle sepultura, y 3.º, el trascurso de veinticuatro horas desde la consignada en la certification facultativa, salvas las excepciones de los reglamentos sanitarios. El encargado del cementerio y los que hubiesen autorizado el enterramiento sin dicha licencia, incurrén en multa de 20 á 100 pesetas.

¿Qué facultativos y con qué formalidades deben certificar el fallecimiento?—El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad, ó en su defecto el titular del ayuntamiento respectivo, deberá examinar el estado del cadáver; y sólo cuando en él se presenten señales inequívocas de descomposicion, extenderá en papel comun, y remitirá al juez municipal, certification en que exprese el nombre y apellido y demás noticias que tuviere acerca del estado, profesion, domicilio y familia del difunto; hora y dia de su fallecimiento, si le constare, ó en otro caso los que crea probables; clase de enfermedad que haya producido la muerte, y señales de descomposicion que ya existan. Ni por esta certification, ni por el reconocimiento del cadáver, que debe precederle, se podrá exigir retribucion alguna. A falta de los facultativos indicados, practicará el reconocimiento y expedirá la certification cualquier otro llamado al intento, á quien se abonarán por la familia ó los herederos del finado los honorarios que marque el reglamento; y si no lo hubiere, suplirá una informacion testifical.

El juez municipal presenciará el reconocimiento facultativo, siempre que se lo permitan las demás atenciones de su cargo, ó haya motivos para creerlo de preferente atencion.

¿Qué circunstancias debe comprender el acta ó asiento de defuncion?—Además de las comunes á todos, las siguientes: 1.º, el dia, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte; 2.º, el nombre, apellido, edad, naturaleza, profesion ú oficio y domicilio del difunto, y de su cónyuge si estaba casado; 3.º, el nombre, apellido, domicilio y profesion ú oficio de sus padres, si legalmente pudiesen ser designados, manifestándose si viven ó no, y de los hijos que hubiere tenido; 4.º, la enfermedad que haya ocasionado la muerte; 5.º, si el difunto ha dejado ó no testamento, y en caso afirmativo la fecha, pueblo y notaria en que lo haya otorgado; 6.º, el cementerio en que se haya de dar sepultura al cadáver.

Cuando la muerte hubiere sido violenta, ó hubiere ocurrido en cárcel, establecimiento penal, ó por efecto de ejecucion capital, no se hará mencion en la partida correspondiente del registro civil, de ninguna de estas circunstancias.

En el caso de fallecimiento de una persona desconocida, ó del hallazgo de un cadáver cuya identidad no sea posible por el pronto comprobar, se expresarán en la inscripcion respectiva: 1.º el lugar de la muerte ó del hallazgo del cadáver; 2.º, su sexo, edad aparente y señales ó defectos de conformacion que le distinguan; 3.º, el tiempo probable de la defuncion; 4.º, el estado del cadáver, y 5.º, el vestido, papeles ú otros objetos que sobre si tuviere ó se hallaren á su inmediacion, y que ulteriormente puedan ser útiles para su identificacion, los cuales habrá de conservar al efecto el encargado del registro, ó la autoridad judicial en su caso.

Identificado el cadáver, debe hacerse una nueva partida y ponerse nota

marginal en la inscripcion anterior, suspendiendo en todo caso la licencia de entierro, si hubiere indicios de muerte violenta.

¿Cómo se inscribe la muerte del condenado á la última pena?—El juez encargado de hacer ejecutar la sentencia de muerte, inmediatamente que se haya ejecutado, lo pondrá en conocimiento del juez municipal, acompañando testimonio, con referencia á la causa, de las circunstancias generales de la inscripcion de fallecimiento que en ella constaren, para que pueda extenderse la partida de defuncion del reo y expedirse la licencia de entierro.

¿En dónde y con qué requisitos debe hacerse la inscripcion de las defunciones ocurridas en viaje por tierra, y las de los militares en tiempo de paz y de guerra?—El fallecimiento ocurrido en viaje por tierra se inscribirá en el registro del distrito municipal en que se haya de dejar el cadáver para su entierro.

El fallecimiento de militares en tiempo de paz y en territorio español, se pondrá, por el jefe del cuerpo á que pertenezcan, en conocimiento del juez municipal del distrito en que ocurra, acompañándole copia de sus filiaciones, para que proceda á hacer en su registro la inscripcion correspondiente.

Si el fallecimiento de militares ocurriese en campaña en territorio español, donde á la sazón no impere la autoridad del gobierno legítimo ó en territorio extranjero, el jefe del cuerpo á que perteneciera el difunto dispondrá el enterramiento y lo pondrá en noticia del ministerio de la Guerra, remitiéndole copia duplicada de la filiacion, para que éste haga verificar la inscripcion en el registro del último domicilio del finado, si fuere conocido, ó en la direccion general en otro caso.

¿En qué registro debe constar la defuncion de los españoles fallecidos en el extranjero?—En los registros de los agentes diplomáticos y consulares, quiénes remitirán copia certificada á la direccion general, para que se repita en el de la misma, ó en el del domicilio que tuviere el difunto al tiempo del fallecimiento.

¿Cómo y en dónde se inscribirán las defunciones que ocurran en los buques nacionales?—Se formalizará el acta, y se practicará lo dispuesto para los nacimientos, de que ya hemos hablado.

¿Qué deberes tiene el encargado del registro de defunciones para con la Hacienda y para con los gobiernos extranjeros?—Dar parte á las oficinas de Hacienda del fallecimiento de los empleados y de las personas pensionistas; y poner en conocimiento de los agentes consulares, y en su defecto del ministerio de Estado, el de los extranjeros que no hayan dejado familia.

Del mismo modo que de todo matrimonio debe ponerse nota marginal en la inscripcion de nacimiento de los cónyuges, tambien se pondrá de la defuncion de los mismos; para lo cual, el registrador de ésta debe comunicarla al de aquél.

Seccion cuarta: ciudadanía (1).

¿Qué particulares debe comprender la inscripcion de actos, por virtud de los cuales se adquiere, se recupera ó se pierde la nacionalidad española?—En todas se expresarán, si fuere posible, además de las circunstancias comunes á los asientos del registro, las siguientes: 1.^a, el domicilio anterior del interesado; 2.^a, los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de sus padres, si pudieren ser designados; 3.^a, el nombre, apellido y naturaleza de su esposa, si estuviere casado; 4.^a, los nombres,

(1) Véase lo dicho al tratar de la naturalizacion de los extranjeros.

apellidos, naturaleza, vecindad y profesion ú oficio de los padres de ésta en el caso del número 2.º; 5.ª, los nombres, edad, naturaleza, residencia y profesion ú oficio de los hijos, manifestando si alguno de ellos está emancipado.

¿Cuándo producen efectos legales los derechos de los extranjeros que han ganado vecindad española, los cambios de nacionalidad y las cartas de naturaleza concedidas á aquéllos?—Los primeros y los segundos solamente los producen desde el día en que sean inscritos en el registro civil, y las terceras desde que lo sean en el domicilio elegido por el interesado, ó en el de la direccion general, si no hubiese de fijar su residencia en España.

Los cambios de domicilio de los extranjeros deben inscribirse en el registro de ciudadanía del distrito municipal que se abandona, y del nuevamente elegido.

La renuncia de una nacionalidad extranjera, hecha por un español que la hubiese adquirido ó por un extranjero, para recobrar la española el primero y adquirir ésta el segundo, debe tambien inscribirse en el registro civil, declarando ante el juez municipal ser ésta su voluntad, y renunciando á la proteccion del pabellon del país cuya ciudadanía abandona. Asimismo pueden recobrarla la mujer española despues de que se disuelva el matrimonio contraído con un extranjero.

La índole de este libro no nos permite ser más extensos acerca del registro de ciudadanía, concluyendo por decir que, para pedir la inscripción de la ciudadanía es menester estar emancipado, ser mayor de edad, y acompañar las partidas de nacimiento y matrimonio de los interesados; las de nacimiento de los hijos, y la del cónyuge difunto si fueren aquéllos viudos.

Efectos civiles del matrimonio con relacion á los bienes de los cónyuges y de sus descendientes.

¿Qué efectos produce el matrimonio en los bienes de los cónyuges?—Crea una sociedad puramente legal en los adquiridos durante él, llamados *gananciales*, y dá lugar á las *dotes*, á los *parafernales*, á las *donaciones esponsalicias* y *propter nupcias*, y á las *arras*, que, segun veremos, tienen reglas especiales de grande importancia por su trascendencia.

Dotes.

¿Qué es la *dote*?—Una porcion de bienes que la mujer lleva al marido para sostener las cargas del matrimonio, definicion basada en el derecho romano, de donde trae origen nuestro sistema dotal vigente, pues ya se encuentran vestigios de él en las leyes visigodas.

¿Qué clases hay de dotes?—*Adventicias*, *profecticias* y *mistas*; *voluntarias* y *necesarias*; *estimadas* é *inestimadas*. Es *adventicia* la porcion de bienes que la mujer aporta al matrimonio procedentes de la madre ó del abuelo paterno, ó de un extraño, ó adquiridos por ella por cualquier motivo y sin consideracion á su padre. Es *profecticia* la porcion de bienes que la mujer lleva al matrimonio procedentes del padre ó del abuelo paterno, ó dados en concepto de dotes, por consideracion al padre. Es *mista* la dote que se constituye con bienes gananciales. Es *voluntaria* la constituida por cualquiera persona espontáneamente y sin tener deber legal de constituirla. Y *necesaria* la que se constituye por las que tienen obligacion de hacerlo.

Tienen este deber, el padre respecto de la hija legítima, no de la natural, aunque sea rica, siempre que no esté emancipada, cuyo deber no es extensivo al abuelo y bisabuelo paternos; el curador á la menor, con bienes de ésta, cuando pueda casarse; el poseedor de bienes vinculados, que no

invierta la sexta parte líquida de su renta en beneficio de sus parientes, según las fundaciones, á las hermanas; y, por fin, todo el que se haya impuesto ó aceptado esta obligacion. El penúltimo caso es ya poco frecuente.

Llábase dote *estimada* la porcion de bienes traídos por la mujer al matrimonio, que han sido apreciados en su valor, cuya propiedad pasa al marido, quedando sólo responsable de aquél, cuya valuacion es reformable; é *inestimada* la dote cuya conservacion y administracion pasa al marido con la obligacion de devolver los mismos bienes, en su caso. Algunas veces son tambien objeto de apreciacion para conocer su valor y tenerlo presente, si hay lugar á la devolucion y se perdieron por culpa del marido. Por eso se dice que hay estimacion que causa venta, y otra que no la causa (1).

¿En qué bienes puede constituirse la dote?—En todos, sin excepcion, en los mismos términos y con las mismas condiciones que pueden estipularse los contratos.

Puede preceder al matrimonio, y prometerse y aumentarse antes y despues, siempre que no se haya disuelto aquél.

El error de la causa no anula la dote, porque se supone que su existencia se tuvo presente para convenir en la celebracion del matrimonio.

¿Qué limites debe tener la dote?—Debe estar en relacion con los elementos, posicion social y número de hijos del que la dá. La costumbre ha sancionado el principio de que no exceda de la *legitima*, y nunca puede llegar á que se entienda la hija mejorada por razon de dote.

¿A quién pertenece el dominio de la dote?—Si es *estimada* corresponde al marido, que sólo es responsable del valor; y si es *inestimada* continúa en la mujer, teniendo aquél únicamente la administracion.

¿Qué recursos tiene la mujer para impedir la dilapidacion de la dote?—Puede pedir su entrega, ó que se afiance su restitucion, ó que se deposite ó ponga en administracion.

¿Pueden enajenarse, gravarse ó hipotecarse los bienes dotales inestimados?—La ley hipotecaria ha resuelto las antiguas dudas, prescribiendo que deben inscribirse en el registro de la propiedad á nombre de la mujer, pudiendo enajenarse, gravarse ó hipotecarse despues, en nombre y con consentimiento expreso de los dos cónyuges, y con las formalidades legales, si alguno ó ambos fueren menores.

¿En este caso, qué garantías establece dicha ley en favor de la mujer?—Tiene derecho á exigir que su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere; y no teniéndolos, que le hipoteque los primeros que adquiera; en caso de pobreza del marido, por dilapidacion de la dote, puede pedir tambien que se le entregue ó que se deposite, si no hubiere hipoteca constituida.

¿En qué casos debe restituirse la dote y en cuáles no?—Debe restituirse por el marido, ó sus herederos, cuando se disuelve el matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, ó por haber impedimentos dirimentes, y por divorcio. No hay obligacion de devolverla si la mujer ha sido adúltera; si sabía, y el marido ignoraba el impedimento que anuló el matrimonio, y si la costumbre del pueblo no lo exige.

¿Cómo debe hacerse la restitucion de la dote inestimada?—Si la dote consistiere en fincas, deben restituirse las mismas al momento; si consistiere en dinero ó en muebles, en el término de un año; si hay créditos, deben restituirse los documentos en que consten, si aún no se hubieren cobrado; si hubiera habido permuta de bienes dotales ó se hubieren comprado algunos con dinero de la dote, deben restituirse ambos.

(1) Los bienes muebles deben apreciarse, para saber la cantidad que ha de asegurarse en la hipoteca legal.

¿Qué derechos conservan el marido, ó los hijos en su caso?—El *beneficio* llamado de *competencia*, y la retencion del importe de los gastos necesarios y útiles. El marido, además, como padre, la de los bienes en que tiene el usufructo y administracion.

¿Qué otra division puede hacerse de la dote?—Puede ser *prometida*, *entregada* ó *confesada*. Las dos primeras están explicadas por sus nombres; la tercera es la que el marido confiesa haber recibido, sin que conste por otros medios su constitucion, cuya confesion puede tener lugar por *contrato* y por *última voluntad*. Si tiene lugar por última voluntad, se considera como, y produce los mismos efectos de un legado; si es objeto de un contrato, la ley hipotecaria determina que, no constando por documento público, produzca sólo una obligacion personal, pudiendo la mujer exigir que el marido garantice la dote con hipoteca, siempre que la confesion tuviere lugar antes de la celebracion del matrimonio ó dentro del primer año de él, y justifique la existencia de los bienes dotales ó de otros equivalentes, al tiempo de la reclamacion.

¿Qué dotes reputa fraudulentas el derecho mercantil?—Las constituidas por los comerciantes en favor de sus hijas, dentro de los treinta días anteriores á la quiebra.

¿Qué dispone la ley hipotecaria sobre la hipoteca *dotal*?—Alteró el antiguo derecho, sustituyendo la hipoteca especial á la tácita y general. Segun ella, la mujer casada, á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, tendrá derecho: 1.º, á que el marido le hipoteque é inscriba en el registro los bienes inmuebles y derechos reales que reciba como dote estimada ó con la obligacion de devolver su importe; 2.º, á que se inscriban en el registro, si ya no lo estuvieren, en calidad de dotales ó parafernales, ó por el concepto legal que tuvieren; todos los demás bienes inmuebles y derechos reales que el marido reciba como inestimados y deba devolver en su caso; y 3.º, á que el marido asegure con hipoteca especial suficiente, todos los demás bienes no comprendidos en los párrafos anteriores, y que se le entreguen por razon de matrimonio.

Los bienes inmuebles ó derechos reales que se entreguen como dote estimada, se inscribirán á nombre del marido en el registro de la propiedad, en la misma forma que cualquiera otra adquisicion de dominio; pero expresándose en la inscripcion la cuantía de la dote de que dichos bienes hagan parte, la cantidad en que hayan sido estimados y la hipoteca dotal que sobre ellos quede constituida. Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes á favor del marido, se inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se constituya en el registro correspondiente.

La hipoteca legal constituida por el marido á favor de la mujer, garantizará la restitution de los bienes ó derechos asegurados, sólo en los casos en que dicha restitution deba verificarse, conforme á las leyes y con las limitaciones que éstas determinan; y dejará de surtir efecto y podrá cancelarse, siempre que, por cualquiera causa legítima, quede dispensado el marido de la obligacion de restituir.

Cuando se constituya dote inestimada en bienes no inmuebles, se apreciarán éstos con el único objeto de fijar la cantidad que deba asegurar la hipoteca, para el caso de que no subsistan los mismos bienes al tiempo de su restitution; mas sin que por ello pierda dicha dote su calidad de inestimada, si fuere calificada así en la escritura dotal.

La constitucion de hipoteca é inscripcion de bienes sólo podrán exigirse por la misma mujer, si estuviere casada y fuere mayor de edad. Si no hubiere contraído aún matrimonio, ó habiéndolo contraído fuere menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nombre, y calificar la suficiencia de la hipoteca que se constituya, el padre, la madre ó el que diere la dote ó los bienes que se deban asegurar. A falta de estas personas, y siendo

menor la mujer. esté ó no casada, deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos el curador, si lo hubiere.

Las disposiciones de la ley hipotecaria sobre la hipoteca dotal no alteran ni modifican las contenidas en el Código de comercio; pero lo prevenido en el art. 1117 del mismo, sobre reclamacion de dote, en caso de segunda quiebra del marido, no tendrá lugar cuando la dote estuviere asegurada con hipoteca anterior á los créditos que se reclamen.

Bienes parafernales.

¿A qué bienes se llama *parafernales*?—A todos los que la mujer aporta al matrimonio ó adquiere durante él, que no sean gananciales, ni llevados en concepto de dote. Llámense tambien *extradotales*.

¿En qué se diferencian de la dote?—En que el dominio y administracion de los parafernales pertenece á la mujer, á no ser que lo haya traspasado *expresamente* al marido, doctrina confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia, é implícitamente apoyada por la ley hipotecaria y la de matrimonio civil. Los frutos, deben destinarse á pagar las cargas matrimoniales.

La mujer tiene hipoteca legal en los bienes del marido para seguridad de los parafernales, siempre que hayan sido entregados á éste por escritura pública, inscrita en el registro de la propiedad, expresando en la inscripción su cualidad de parafernales.

El dominio y administracion de estos bienes, no excluye la obligacion que tiene la mujer casada de obtener la licencia de su marido para contratar (1).

Donaciones esponsalicias.

¿A qué se dá el nombre de *donaciones esponsalicias*?—A los regalos y obsequios que los esposos suelen hacerse mutuamente y los parientes del uno al otro, antes del matrimonio. Llámense tambien *vistas, galas, regalos de boda*, etc. Entre los romanos eran conocidas con el nombre de *sponsalitia largitates*, y consisten generalmente en alhajas y vestidos.

No pueden exceder de la octava parte de la dote, y si ésta no existiese, la prudencia, el estado y la fortuna de los esposos debe servir de regulador. La ley prohíbe vender al fiado los objetos en que han de consistir, bajo pena de la pérdida de su importe, prohibicion poco atendida en la práctica.

Son revocables siempre que exista una justa causa, y lo es la no realizacion del matrimonio por culpa del donatario, ó por motivos independientes de la voluntad de ambos. En este caso, si el donante fué la mujer, recobrará íntegra la donacion; si fué el marido, recobrará sólo la mitad, siempre que haya habido *ósculo*, cuya particularidad viene consignada en la ley más antigua de nuestro derecho, enviada á España por Constantino el Grande, y sin aplicacion al presente por el cambio de nuestras costumbres sociales.

¿Hay hipoteca legal en favor de estas donaciones?—Sí, cuando se hicieron como aumento de dote; siendo potestativo en el marido el constituir la cuando tienen lugar en otro sentido, en cuyo caso sólo producen obligacion personal.

Arras y donaciones propter nuptias.

¿Qué son las *arras*?—«La donacion que hace el esposo á la esposa en remuneracion de la dote ó de sus cualidades personales.» Esta es la acepcion mas genuina de las *arras* en la actualidad.

¿Pueden constituirse ó aumentarse despues del matrimonio?—Existe

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 1.º de Febrero de 1876.

controversia entre los autores. La opinion mas probable parece ser que no pueden constituirse ni aumentarse, porque se infringiria la prohibicion de las donaciones simples entre los esposos. Hay quien opina lo contrario, fundándose en que constituyen una donacion remuneratoria, y á éstas no alcanza aquella prohibicion.

El dominio de las arras pertenece á la mujer, reservándose su administracion el marido, como jefe de la familia. Tienen por limite la *décima* parte de los bienes del marido existentes al tiempo de entregarlas, ó al de la disolucion del matrimonio, si se hubieren aumentado, siendo nulo todo contrato en que haya exceso de dicho limite. El marido no puede enajenar las arras, ni aun con consentimiento de la mujer.

¿Tiene la mujer hipoteca legal para su seguridad?—Rigen los mismos principios que en las donaciones esponsalicias. Sólo es exigible si se dieron como aumento de dote, segun la ley hipotecaria.

¿En qué casos pierde la mujer su propiedad?—Por adulterio, por abandono del marido, huida voluntaria de la casa y por hacer aquélla una vida relajada y disoluta, despues de viuda.

Habiendo mediado arras y donaciones esponsalicias, ¿cuáles corresponden á la mujer?—Las que ella elija al disolverse el matrimonio consumado, dentro de los veinte dias contados desde el requerimiento hecho al efecto por el marido ó sus herederos; y despues, las que le entreguen éstos. En tal caso, la hipoteca legal tendria lugar siempre que ambas se dieren como aumento de dote, por las que la mujer elija ó el marido, con tal que le eleccion de aquélla no se hiciera en el plazo de dos meses, contados desde que se prometieron.

¿Qué son donaciones *propter nuptias*?—«Las que los padres hacen voluntariamente á sus hijos para sostener con decoro las cargas del matrimonio.» Deben salir de los *gananciales*, y en su defecto de los bienes del padre promitente, ó de ambos si la promesa fuese constituida por los dos.

Sociedad legal entre los cónyuges.

¿Cuál es el origen y efectos de esta sociedad?—Nace con el matrimonio y comunica por mitad los bienes adquiridos, llamados *gananciales* en Castilla, y *conquistas* en Navarra.

No reconoce su origen en la legislacion romana, sino en una antiquísima y respetada costumbre de los godos, que daba participacion á las mujeres en el botin de los combates, cuya costumbre se convirtió en ley por el Fuero-Juzgo, llegando hasta nosotros, con pequeñas modificaciones. Para que exista sociedad, debe la mujer vivir de *consuno* (1) con el marido; pero puede aquélla renunciarla, por cuyo hecho queda libre del pago de deudas matrimoniales.

¿Qué bienes son *gananciales*?—Los adquiridos durante el matrimonio por titulo oneroso; las mejoras hechas en éstos y en los propios de cada cónyuge; lo que gana el marido en la guerra, si la hace á costa de ambos; los frutos de todos los bienes y los productos de las industrias que ejerzan. Los demás bienes no son objeto de la sociedad legal, ni *gananciales*.

La propiedad de los *gananciales* pertenece en comun á ambos cónyuges, siendo derecho exclusivo del marido su administracion y la facultad de disponer de ellos por acto entre vivos, siempre que no tenga por fin perjudicar á la mujer. Para despues de su muerte sólo puede disponer de la mitad.

(1) Viven de *consuno* los cónyuges, hasta tanto que no se disuelve el matrimonio, áun cuando tengan distintas residencias, segun el Tribunal Supremo.

¿Qué obligaciones pesan sobre esta sociedad legal?—Las inherentes al cargo de jefe de la familia, entre las cuales no se cuenta la alimentacion de los hijos naturales; las deudas contraídas, constante matrimonio; y la constitucion de las dotes y donaciones *propter nuptias* hecha por los dos, ó sólo por el marido.

¿Por qué medios se disuelve la sociedad?—Por la muerte de uno de los esposos, por el divorcio y por la renuncia hecha por la mujer, siendo nula la adjudicacion en propiedad de los bienes adquiridos anteriormente.

Pátria potestad, antes y despues de la ley de matrimonio civil: sus derechos y obligaciones.

¿Qué es la pátria potestad?—«La autoridad y proteccion confiada por la ley al padre sobre sus hijos legítimos, legitimados y á veces sobre los adoptivos no emancipados, para su educacion y utilidad de toda la familia.» En virtud de este poder el padre legisla, premia y castiga á los hijos, cuida de su subsistencia, se aprovecha de los frutos de los bienes y procura su educacion, teniendo á su vez deberes que cumplir. Fúndase en el amor de los padres y en el reconocimiento de los hijos.

Son deberes de los padres la manutencion, educacion y defensa de los hijos y de sus bienes. La primera comprende el alimento, el vestido y la habitacion, proporcionados á su clase y circunstancias.

Estos deberes corresponden, en caso de divorcio, al que dió margen á él, pudiendo retener los hijos el inocente.

¿Qué prescribe el derecho sobre alimentos de los hijos?—Que corresponde la lactancia y alimentacion hasta los tres años, de los legítimos ó ilegítimos; á la madre; y en adelante, al padre la de los legítimos, legitimados, adoptivos y naturales reconocidos. En caso de pobreza de los padres, los abuelos paternos tienen el deber de alimentar á los hijos legítimos y naturales reconocidos, y los maternos el de los demás ilegítimos.

Se extingue la obligacion cuando los hijos poseen lo necesario para su subsistencia, cuando acusan ó procuran la muerte del que los dá, les deshonran ó causan pérdidas en sus bienes, y cuando la hija natural se casa.

¿Deben alimentar los hijos á los padres?—Sí, cuando éstos carecen de medios de subsistencia.

Comprende la *educacion*, el desarrollo de la inteligencia, la enseñanza de los principios de religion y moral y dedicarlos á una ciencia ó arte en que cifren su porvenir.

¿A qué está reducida la *defensa* de los hijos y sus bienes?—A contratar en su nombre cuando ellos no pueden hacerlo independientemente; representarlos en juicio y administrar sus bienes, conservando el patrimonio de que son dueños, para devolvérselo, cuando ménos integro, al salir de la pátria potestad.

¿Qué derechos tiene el padre en los bienes de los hijos?—Diversos, segun la naturaleza de los bienes que constituyen el *peculio* de aquéllos.

¿Qué es *peculio*?—«El patrimonio que tienen los hijos de familia, independiente de los bienes del padre.» Cuatro son los peculios: *castrense*, *cuasi-castrense*, *adventicio* y *profecticio*. El primero es el adquirido por los hijos en la milicia ó por su causa. El segundo el que se han proporcionado en las diferentes carreras del Estado ó en el ejercicio de las ciencias y artes liberales. El tercero el que el hijo adquiere por razon de su trabajo, oficio ó industria, bienes de la madre, ascendientes maternos, cualquier extraño ó por ventura. Y el cuarto el que los hijos adquieren, ó bien de los bienes del padre, ó bien por su contemplacion.

¿Qué derechos tiene el padre en los peculios?—En el *castrense* y *cuasi-castrense* ninguno, porque el hijo es considerado en ellos como padre de

familias. En el *adventicio* tiene el usufructo y la mitad del peculio en el caso de emancipacion voluntaria, perteneciendo al hijo la propiedad, á quien debe entregarlo íntegro cuando se case, por no poder enajenarlo, si bien, una vez enajenado, sin justa causa, no es nula la venta, debiendo indemnizar el padre á los hijos (1). En el *profecticio* le corresponde la propiedad y usufructo, quedando sólo al hijo la administracion, con objeto de ejercer alguna industria.

¿Qué garantías ofrece la ley hipotecaria en favor del peculio adventicio?—La hipoteca legal en los bienes del padre, la inscripcion de los inmuebles en el registro en tal concepto, y el derecho de pedir que aquél asegure los muebles con hipoteca especial, derecho que pueden ejercitar los hijos mayores de edad; y siendo menores: 1.º, las personas de quienes procedan los bienes en que consista el peculio; 2.º, los herederos ó albaceas de dichas personas; 3.º, las ascendientes del menor; 4.º, la madre, si estuviere legalmente separada de su marido.

Medios constitutivos de la patria potestad.

¿Cómo se constituye el poder paterno?—Por el matrimonio, por la *legitimacion* y por la *adopcion*. Del primer medio ya hemos tratado.

¿Qué es la *legitimacion*?—«Un acto por el que se supone que los hijos naturales son nacidos de legítimo matrimonio.» Equipara en todo los hijos legitimados á los legítimos, y es distinta del reconocimiento de los hijos.

Puede hacerse por subsiguiente matrimonio y con autorizacion real, siendo hoy insostenible la legitimacion por oblacion á la curia, atendida la organizacion administrativa de la nacion.

Tiene lugar la legitimacion por *subsiguiente matrimonio*, cuando los padres del hijo natural lo contraen despues del nacimiento de éste.

¿Qué clase de hijos pueden ser legitimados?—Los naturales. Los incestuosos pueden serlo por subsiguiente matrimonio, si ha habido dispensa del impedimento: pero no los adulterinos y sacrílegos.

¿Cuáles son los hijos *naturales*?—«Los habidos de padres que, al tiempo de la concepcion ó del nacimiento, podian casar justamente y sin dispensacion, con tal que el padre los reconozca por suyos, aunque no haya tenido la mujer de quien los engendró en su casa, ni sea una sola.» El reconocimiento debe constar por cualquiera medio probatorio, y puede ser expreso ó tácito. La partida de bautismo no basta para probar la calidad de hijo natural. No es necesario el reconocimiento de la madre (2).

¿Qué clasificacion hacen los autores de los hijos?—Los dividen en *legítimos* é *ilegítimos*, y éstos en *naturales* y *espurios*, subdividiendo los *espurios* en *adulterinos*, *sacrílegos*, *incestuosos* y *manceros*.

Son *legítimos* los nacidos de matrimonio, aun cuando sea meramente putativo; esto es, de matrimonio en que exista un impedimento dirimente, ignorado por ambos cónyuges ó por uno sólo. Son *ilegítimos* todos los hijos que no son legítimos.

Son *espurios* los que no son *naturales*. *Adulterinos* los nacidos de personas de las que una de ellas, cuando ménos, es casada. *Sacrílegos* los nacidos de personas entre las que media profesion religiosa ú orden sagrado. *Incestuosos* los nacidos de parientes entre quienes existe impedimento que requiere dispensa. Y *manceros* los procreados por las prostitutas.

(1) Esta es la síntesis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en oposicion de la cual parece estar la Direccion de los Registros, que tiende á prohibir la inscripcion de enajenaciones cuando no ha precedido autorizacion judicial para llevarlas á efecto. (Real Orden de 28 de Agosto de 1875).

(2) La declaracion de hijo natural puede pedirse despues de la muerte del padre. (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 Marzo de 1873).

¿El hijo adulterino, nacido después de la disolución del matrimonio, puede ser legitimado?—Unos afirman que si considerándolo como *natural*, y otros, entre los que figuran los Sres. La Serna y Montalvan, sostienen que no, porque la ley que definió aquél se refería únicamente á las sucesiones. La jurisprudencia no ha resuelto esta duda legal.

¿Cómo se legitiman los hijos por autorizacion real?—Por medio de una orden del jefe del Estado, obtenida previo expediente, pagando una cantidad al tesoro público, fundada la concesion en motivos justos y razonables justificados debidamente. Es una de las *gracias* llamadas *al sacar*; produce efectos civiles solamente y pueden ser objeto de ella algunos hijos naturales que no pueden ser legitimados por subsiguiente matrimonio. Por manera, que aquél medio de legitimacion es subsidiario de éste.

¿Puede concederse la autorizacion cuando existen hijos legítimos?—El Fuero-Real lo prohibia; pero la práctica la consiente, siempre que el padre haya manifestado, al pedirla, que tenia hijos legítimos.

¿Qué efectos produce esa legitimacion?—Otorga el derecho de sucesion, no existiendo hijos legítimos ni legitimados por subsiguiente matrimonio.

La ley concede de hecho y de derecho esta legitimacion á los *expósitos*, á quienes considera legítimos para todos los efectos civiles.

¿Qué es *adopcion*?—«Un acto por el que se recibe como hijo al que no lo es naturalmente.» Llámase tambien *porfijamiento*. Puede entenderse en dos sentidos, uno lato y otro estricto. El primero comprende la *arrogacion* y la *adopcion* propiamente dicha. El segundo abraza solamente ésta.

¿Quiénes pueden adoptar?—Los que pueden ser padres física y legalmente, porque la *adopcion* es una ficcion legal que *imita á la naturaleza*. No pueden, por consiguiente, adoptar los físicamente inhábiles para la procreacion; los que no tienen diez y ocho ó treinta y seis años, segun que quieran adoptar un hijo ó un nieto, porque la ley supone que hasta la plena pubertad no hay prole; las mujeres (1), exceptuándose el caso en que hayan perdido un hijo en defensa del Estado; los que tienen hijos legítimos; los que están sujetos al poder paterno; los ordenados *in sacris* y los ligados con voto de castidad.

¿Qué es *arrogacion*?—«El acto por el que, con autorizacion real, se reducen á patria potestad los que están libres de ella.» Debe hacerse con autorizacion real; con conocimiento de causa, si el arrogado es menor de catorce años, y con consentimiento del arrogador, quien se obligará á la devolucion de los bienes de aquél, si falleciere antes de la pubertad.

¿Quiénes pueden ser arrogados?—Por regla general todas las personas *sui juris*; exceptuándose los infantes porque no pueden consentir, y los menores relativamente á sus guardadores, que podrán serlo por éstos con autorizacion real, llegada la mayor edad.

¿Qué efectos produce la *arrogacion*?—Concede al arrogador la patria potestad y el usufructo de los bienes del arrogado, no siendo la mujer la que arroge; y al arrogado, el derecho de sucesion del arrogador, no existiendo herederos forzosos, en cuyo caso sólo heredará el quinto ó tercio, segun algunos comentaristas; y el derecho á la devolucion de sus bienes, si fuere desheredado ó emancipado con justa causa, ó las ganancias y la cuarta parte de los del arrogador, si fuere desheredado sin causa justa, y éste no tuviera herederos forzosos, correspondiéndole entonces la quinta solamente; doctrina exenta ya de toda duda.

(1) Teniendo las madres actualmente patria potestad, puede ser discutible si tienen ó no facultad para la adopcion.

¿Cómo se define la *adopcion en especie*?—«El acto por el que, con autoridad judicial, recibimos por hijos á los que están en poder de su padre legítimo.» Requiere el consentimiento de los tres, no pudiendo ser arrogado por ello el infante.

Las personas que pueden arrogar pueden adoptar, y sólo los hijos de familia pueden ser adoptados.

¿De cuántos modos puede ser la *adopcion*, y qué efectos produce?—De dos: *plena y ménos plena*. Es *plena* cuando la hace un ascendiente del adoptado; y *ménos plena*, cuando la hace otro que no lo sea. Aquella trasfiere la patria potestad al adoptante; ésta la conserva en su padre natural. Las juntas municipales y los particulares, adoptan á veces á los expósitos y huérfanos abandonados. Produce el parentesco de *adopcion*, origen de un impedimento para el matrimonio.

La patria potestad segun la ley de matrimonio civil.

Nada altera el decreto de 9 de Febrero de 1875, de lo que aquélla ley establecía sobre la patria potestad. La trascendental y justa concesion de aquel derecho á las madres, en defecto de los padres, produjo una modificacion profunda en nuestro antiguo derecho, basado en los principios del romano, en donde el padre lo era todo, y la madre era poco considerada; y continúa y continuará vigente, porque se funda en la justicia, en la equidad y en la convenienciencia social.

¿A quién corresponde el derecho de *patria potestad*?—El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos legítimos, no emancipados. Se reputará emancipado de derecho el hijo legítimo desde que hubiere entrado en la mayor edad. La patria potestad otorgada á las madres, á falta de los padres, constituye una de las más importantes y trascendentales innovaciones de la ley de matrimonio civil, contraria al espíritu y letra del derecho antiguo, basado en la legislación romana.

¿Tienen *patria potestad* sobre sus hijos las madres viudas al tiempo de la promulgacion de la ley de matrimonio civil, ó sólo es aplicable á las madres cuyos maridos fallecieron despues de dicha ley?—La solucion á esta pregunta ha dado origen á encontradas, eruditas y bien defendidas opiniones en el foro y en la prensa jurídica. Razones poderosas se alegan para sostener la afirmativa y negativa. Hasta el presente no ha recaído ninguna resolucion del Tribunal Supremo, por mas que estuvo á punto de provocarla un recurso de casacion, siendo tambien antitéticas las opiniones de las audiencias y de sus fiscales. Nosotros creemos, en nuestra humilde opinion, que la *patria potestad* sólo es extensiva á las madres viudas despues de dicha ley, porque los hijos de las viudas anteriores á la reforma, ya estaban emancipados, y no les comprende el texto de la misma, dándosele, en caso contrario, efecto retroactivo. De todos modos, baste saber que es opinable la contestacion á la pregunta, y que por ahora nada ha resuelto el Tribunal Supremo.

¿Qué derechos concede la *patria potestad* á los padres, y en su defecto á las madres?—Tienen derecho: 1.º, á que sus hijos legítimos no emancipados vivan en su compañía, y á representarlos en juicio en todos los actos jurídicos que les sean provechosos; 2.º, á corregirlos y castigarlos moderadamente; 3.º, á hacer suyos los bienes que adquieran con el caudal que hubieren aquéllos puesto á su disposicion para cualquiera industria, comercio ó lucro; 4.º, á administrar y usufructuar los bienes que los hijos hubieren adquirido por cualquier título lucrativo ó por su trabajo ó industria.

El padre, y en su defecto la madre, no adquirirán la propiedad, el usufructo ni administracion de los bienes adquiridos por el hijo con su trabajo

ó industria, si no viviere en su compañía, en cuyo caso se reputará como emancipado para la administracion y usufructo de dichos bienes.

Tampoco adquirirá el padre, ó en su defecto la madre, la propiedad ni el usufructo de los bienes donados ó mandados al hijo para los gastos de su educacion ó instruccion, ó con la condicion expresa de que aquéllos no hubieren de usufructuarlos, si en este caso los bienes donados no constituyeren la legitima del hijo.

¿Qué obligaciones tienen los padres cuando sean usufructuarios de los bienes de sus hijos?—Las mismas que tiene todo usufructuario, excepto la de afianzar, mientras no contrajeran segundas nupcias; debiendo formar inventario, con intervencion del ministerio fiscal, de los bienes de sus hijos, cuando tuvieren sólo la administracion de aquéllos.

¿Qué deberes tienen los hijos para con sus padres?—La obligacion de obedecerles, si no están emancipados; y aun estándolo, deben tributarles respeto y reverencia. En uno y otro caso les deben *alimentos*.

¿Qué obligaciones tienen los padres para con sus hijos y demás descendientes?—Están obligados á criarlos, educarlos, segun su fortuna, y alimentarlos; obligaciones que sólo nacen en cuanto á los segundos, cuando no tuvieren padres ú otros ascendientes en grado más próximo, ó éstos no pudieren cumplir las expresadas obligaciones.

¿Qué límites reconocen los alimentos?—La ley no señala límites. Deben regularse por el caudal del que dá, y por las necesidades del que recibe; reduciéndose ó aumentándose proporcionalmente, segun el aumento ó disminucion que sufiere aquél y éstas.

¿Quiénes están obligados á dar alimentos en defecto de los padres, ó cuando éstos no pudieren darlos?—Los hermanos legítimos, hermanos uterinos ó consanguíneos, por el orden expuesto.

¿Qué deber liga al alimentista?—El de vivir en compañía del que dá los alimentos, cuando éste justifica no poder cumplir de otro modo su obligacion, por escasez de fortuna.

¿Cuándo nace y cuándo cesa esta obligacion?—Es exigible desde que los necesita para subsistir el alimentista, cuya renuncia por sí sola no extingue la obligacion. Y cesa: 1.º, cuando la fortuna del que estuviere obligado á darlos se hubiere reducido hasta el punto de que éste no pudiera satisfacerlos sin desatender sus necesidades precisas y las de su familia; 2.º, cuando el que hubiere de recibirlos haya mejorado de fortuna hasta el punto de no serle necesarios para su subsistencia; 3.º, cuando el mismo hubiere cometido alguna falta, por la que legalmente le pueda desheredar el obligado á satisfacerlos; 4.º, cuando el que los hubiere de percibir fuere descendiente ó hermano del que los hubiere de satisfacer; y la necesidad de aquél proviniere de mala conducta ó falta de aplicacion al trabajo, mientras que esta causa subsistiere.

Disolucion y suspension de la patria potestad.

¿Qué causas *disuelven la patria potestad*?—1.ª, la muerte del padre ó madre viudos (1); 2.ª, la profesion religiosa de cualquiera de ellos ó del hijo; 3.ª, el matrimonio incestuoso ó sacrilego del primero; 4.ª, la dignidad de hijo que lleve aneja jurisdiccion ó cargo público; 5.ª, su emancipacion, sea legal, voluntaria ó forzosa. La adopcion plena, mas bien traslada que disuelve el derecho.

¿Qué es *emancipacion legal*?—«Un acto en virtud del cual salen los hijos

(1) Antes de la ley de matrimonio civil, la muerte del padre extinguía la patria potestad, porque á él solamente correspondía este derecho. Mas ahora, á la muerte de aquél se trasfiere á la madre, por lo cual, sólo siendo viudos acaba el derecho por la muerte de cualquiera de ambos.

de la patria potestad sólo por ministerio de la ley», que consiste en la celebración del matrimonio, y en la mayor edad, según la ley de matrimonio civil. Atendidas las disposiciones del Concilio de Trento, no son necesarias las velaciones para que surta aquél efecto legal.

¿Qué es emancipación voluntaria?—«Un acto por el que, con autoridad real y con voluntad del padre y del hijo, se disuelve la patria potestad», concedida por motivos justos y razonables, debidamente justificados y previo el pago del servicio señalado. El padre, y la madre en su defecto, puede retener la cuarta parte del peculio adventicio, y dejar sin efecto la emancipación por la ingratitud del hijo.

¿Qué es emancipación forzosa?—«El acto por el que, en virtud de sentencia judicial, pierden los padres, por una justa causa, el poder que tienen sobre los hijos.»

¿Qué causas legitiman esta emancipación?—Los castigos crueles é inhumanos de los hijos y la prostitución de las hijas; la disipación de los bienes del hijastro, que hubiera sido arrogado antes por el padre y cumpliera catorce años, y la aceptación que éste haga de una manda, con condición de emancipar. La declaración de pródigo y la demencia del padre extinguen aquel derecho.

¿Cuándo puede suspenderse la patria potestad?—En los casos en que el padre sufra la pena de interdicción civil, con arreglo al Código penal, durante la pena.

Del matrimonio.—Derecho vigente en la actualidad.

Al tratar de la sección del registro civil en que debían inscribirse los matrimonios, hemos indicado la trascendental reforma que esta materia había sufrido por el decreto de 9 de Febrero de 1875. En el antiguo derecho, la ley civil y la legislación canónica marchaban en perfecto acuerdo. La ley de matrimonio civil, que respondía al principio de libertad religiosa absoluta, proclamada en la constitución de 1869, rompió aquella armonía, secularizando el matrimonio para los efectos civiles. El decreto ya citado, respondiendo á otros principios políticos, y partiendo del de la tolerancia de cultos, enfrente del constitucional, que declara religión del Estado la Católica, consignado en el artículo 41 de la constitución de 1876, restableció aquel consorcio, devolviendo al sacramento la fuerza y efectos que le negaba la ley de matrimonio civil, y restituyéndolo á la jurisdicción de la Iglesia, cuando sea celebrado por católicos.

¿En qué bases descansa, pues, la reforma planteada por el decreto de 9 de Febrero de 1875?—1.º Derogación de la ley de matrimonio civil para los católicos, que deben contraer matrimonio en la forma canónica. 2.º Conservación del *civil* para los que, por no ser ó por dejar de ser católicos, no pueden celebrar el canónico (1). 3.º Inscripción del matrimonio canónico en el registro civil, por medio de la presentación de la partida sacramental. 4.º Retroacción de los efectos del decreto á la fecha de los matrimonios canónicos, celebrados durante la ley de matrimonio civil, respetando solamente los derechos de tercero adquiridos á título oneroso. 5.º Conservación de los efectos civiles declarados por aquella ley á las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes.

¿Cómo puede definirse el *matrimonio*?—Civilmente considerado es «la sociedad perpetua é indisoluble de varón y de mujer para la procreación, alimentación y educación de los hijos y mútuo auxilio y fidelidad de los cónyuges.» «Es la base de todas las instituciones humanas y el elemento

(1) Exceptuáanse los ordenados *in sacris* y los ligados con voto solemne de castidad.

generador de la sociedad. Sin matrimonio no hay familia, y sin familia la sociedad no existe.» Es de origen divino y uno de los sacramentos (1).

¿Cuál es la naturaleza del matrimonio canónica y civilmente considerado?—El ser perpétuo é indisoluble, disolviéndose sólo por la muerte de uno de los esposos.

¿De cuántas maneras puede ser y qué requisitos le preceden?—*Rato* y *consumado*. Es *rato* cuando no ha habido union carnal, y *consumado* aquél en que esta union se ha efectuado. Ambos eran y son legítimos. Divídese también en *putativo*, *presunto* y de *conciencia*: El 1.º, es el contraído existiendo un impedimento dirimente, ignorado por uno de los cónyuges, hasta cuya publicidad es aquél válido; el 2.º, es el que se presumía por actos demostrativos del consentimiento, el cual no es válido por la falta del párroco y los testigos, y el 3.º, se llama de conciencia porque permanece en sigilo, autorizado por el diocesano. Sus requisitos son los mismos que necesita el matrimonio *rato*.

Precede siempre al matrimonio el consentimiento ó consejo de las personas que deben otorgarlo, y muchas veces los esponsales, las amonestaciones ó publicación de edictos, y las licencias reales y del obispo. Los esponsales, ya poco frecuentes, carecían de objeto desde la ley de matrimonio civil; las licencias reales no tienen importancia alguna, y las de los obispos sólo son necesarias para la celebracion del matrimonio católico, que en nada afectaba al matrimonio civil, pudiendo celebrarse aquél antes ó después de éste, segun la ley que estableció el segundo.

Esto no obstante, nos ocuparemos de todos los expresados requisitos, como parte del derecho antiguo, vigente ahora por el decreto de 7 de Febrero de 1875, sin perjuicio de exponer las reformas que habia introducido la ley de matrimonio civil en la materia.

Esponsales.

¿Qué eran los esponsales?—«La promesa mútua de futuro matrimonio.» Llámense también *desposorios*; y á los contrayentes, *esposos*.

Pueden otorgarlos los que pueden contraer matrimonio, por lo cual están privados de su otorgamiento los locos y los infantes, si bien pueden éstos ratificarlos á los siete años de edad; y los que consienten, movidos por error, fuerza ó miedo, porque necesitan el consentimiento verdadero.

Además del consentimiento de los esposos es necesario el de los padres ó personas que los representen, y que se otorgue por escritura pública. Pueden celebrarse por poder; mas si se revoca antes de realizarse el contrato, queda éste ineficaz, aún cuando la noticia de la revocacion llegue á conocimiento del procurador después de celebrarse.

De los esponsales nacia la obligacion de efectuar el matrimonio, que sólo podia eludirse indemnizando al esposo que reclamaba su cumplimiento, y permaneciendo en soltería el que lo rehusaba hasta que el indemnizado se casase. Las excusas justas, son, sin embargo, atendibles.

Se disolvía: 1.º, por el mútuo disentimiento; 2.º, por el matrimonio, recepcion de orden sagrado ó ingreso de religion de alguno de los contrayentes, que continúa obligado hasta la profesion; 3.º, por enfermedad contagiosa, que le desfigure ó le incapacite para el matrimonio; 4.º, por la ausencia de uno, sin esperanza de vuelta, y 5.º, por ayuntamiento carnal con otra persona.

(1) Al estudiar esta materia, conviene leer la parte del derecho canónico que trata de sacramento del matrimonio; tanto más necesario este estudio en la actualidad, por la supresion del matrimonio civil para los católicos, decretada en Febrero de 1875, y el restablecimiento del derecho civil, basado en el canónico, anterior á la fuerza obligatoria de dicha ley.

¿Qué modificaciones introdujo en la materia de *esponsales* la ley de matrimonio civil?—Había quitado toda trascendencia al contrato, declarando, terminantemente, que no producirían obligación civil la promesa de futuro matrimonio, cualesquiera que fuesen la forma y solemnidades con que se otorgase, ni las cláusulas penales, ni cualesquiera otras que en ella se estipulasen, por creer que coartaban la libertad de los contrayentes en el acto trascendental del matrimonio, pudiendo ser fuente de inmoralidad contra el contrayente no culpable.

Las demandas á que den lugar, se sustanciarán como asuntos civiles.

Consentimiento paterno (1).

¿Quiénes necesitan el consentimiento paterno?—El hijo de familia que no ha cumplido veintitres años, y la hija que no ha cumplido veinte.

¿Qué personas deben prestar el consentimiento cuando falta el padre ó se halla incapacitado para prestarlo?—La madre; y sucesivamente y en iguales circunstancias, el abuelo paterno y materno. A falta de éstos, corresponde esta facultad al curador testamentario y al juez de primera instancia, también sucesivamente, en union con los parientes más próximos del menor, reunidos en junta, siempre que éste, cualquiera que sea su sexo, no haya cumplido veinte años, ó el otro contrayente no sea pariente del curador dentro del cuarto grado civil. En el primer caso cesa la necesidad del consentimiento. En el segundo el curador es inhábil para prestarlo.

¿Quiénes componen la junta de parientes?—1.º, los ascendientes del menor; 2.º, los hermanos y maridos de las hermanas, viviendo éstas, siendo mayores de edad. En defecto de éstos ó cuando sean menos de tres, se completa la junta hasta el número de cuatro vocales, sin contar con el curador, con los parientes mas allegados varones y mayores de edad, elegidos de entre las dos líneas, comenzando por la del padre, prefiriendo la edad en igualdad de grado. A falta de parientes, se completará la junta con vecinos honrados, elegidos, siendo posible, entre los que hayan sido amigos de los padres del menor, por el juez municipal ó de primera instancia en su caso.

¿Es obligatoria la asistencia de los parientes?—Sí, respecto de los que residan en el domicilio del huérfano ó en otro pueblo que no diste más de seis leguas del punto en que deba celebrarse la junta. Su falta de asistencia será castigada con una multa menor de diez duros; pero puede ser sustituido por apoderado especial, limitado á una sola representacion.

¿A quién corresponde la convocacion y presidencia de la junta?—Al juez de primera instancia del domicilio del huérfano, cuando le toque por la ley prestar el consentimiento; en los demás casos al juez municipal. A ellos corresponde la facultad de multar á los parientes y de calificar sus excusas. Sus deliberaciones son absolutamente secretas. El escribano y secretario del juzgado intervienen sólo en las votaciones y extension del acta.

El curador deberá asistir á ellas y podrá tomar parte en la deliberacion de los parientes respecto á la ventaja é inconvenientes del enlace proyectado; pero votarán con separacion, lo mismo que el juez de primera instancia. Cuando el voto de éstos no concuerde con el de la junta de parientes, prevalecerá el favorable al matrimonio. Si resultare empate, decidirá el juez de primera instancia; y el pariente más inmediato, mayor en edad, en las juntas presididas por el juez municipal.

(1) Este requisito es una exigencia legal muy antigua. El Fuero-Juzgo, las leyes recopiladas y especialmente la pragmática de 1803, la consignaron y reglamentaron, hasta que la ley de 20 de Junio de 1862, formada á propuesta del diputado D. Claudio Moyano, derogó aquéllos y constituye el derecho vigente.

El acta debe contener la constitucion de la junta, sus resoluciones y voto, y los del curador y juez, en sus respectivos casos.

¿Qué excepciones existen en favor de los hijos naturales?—Estos no necesitan del consentimiento de los abuelos ni de la intervencion de los parientes.

¿Quiénes deben prestar el consentimiento para el matrimonio de los demás hijos ilegítimos?—La madre; á falta de ésta el curador, si le hubiese, y en su defecto el juez de primera instancia. Los jefes de las casas de expósitos se consideran como curadores. En ningun caso intervienen los parientes.

¿Qué recursos quedan al menor contra la negacion del consentimiento cuando es necesaria su obtencion?—Ninguno. Las personas autorizadas para prestarlo no necesitan expresar las razones de su negativa.

¿Quiénes están exentos del requisito necesario del consentimiento?—Los hijos mayores de veintitres años y las hijas mayores de veinte. Pero no son completamente libres para contraer matrimonio, pues deben pedir *consejo* á sus padres ó abuelos, por el orden prefijado para prestar el consentimiento.

¿Qué recursos tienen los menores cuando el consejo no es favorable al matrimonio?—Esta decision no es irreparable, como la negativa del consentimiento. El menor podrá casarse despues de trascurridos tres meses, contados desde la fecha en que ha solicitado el consejo, para lo cual debe acreditar la peticion por medio de declaracion del que hubiere de prestarlo, ante notario público eclesiástico, ó bien ante el juez municipal, previo requerimiento y en comparecencia personal.

¿Qué sancion penal establece el derecho en garantía de estas disposiciones?—Los menores contraventores serán castigados con la pena de prision correccional, en sus grados mínimo y medio (1); quince dias de arresto y represion privada, y los párrocos que autoricen los matrimonios, con la de arresto menor.

Licencia del rey ó de los jefes.

¿Quiénes deben obtener real licencia para contraer matrimonio?—1.º, las personas de la familia real; 2.º, los grandes de España, sus sucesores y los titulos; 3.º, los jefes y oficiales del ejército y armada, comprendiéndose entre ellos los sarjentos que tengan el grado de oficiales y los alumnos de colegios militares; 4.º, jefes y empleados en administracion y sanidad militar, que dejen derecho al Montepío, y los alumnos de colegios protegidos por el monarca.

¿Quiénes deben obtener licencia de sus respectivos jefes?—1.º, los caballeros de las cuatro órdenes militares y los de la de Carlos III; 2.º, los jefes militares que, en peligro inminente, se casen por motivos de conciencia.

¿Estas licencias excluyen la de los padres en los casos en que procede?—No; ésta debe pedirse, y expresarse en la solicitud de aquélla el motivo por que se presta.

Licencia del obispo.

¿Cuándo es necesaria la licencia del ordinario?—Cuando los contrayentes son extranjeros, vagos, de distinta diócesis ó piden dispensa de proclamas, y en los demás casos que exprese el derecho.

¿Qué son las proclamas ó amonestaciones?—«Los anuncios que los pár-

(1) Art. 489 del Código penal de 1870.

rocos propios de ambos contrayentes hacen al pueblo, manifestándole las personas que quieren contraer matrimonio.

¿Cuándo y dónde deben hacerse?—En tres días de fiesta consecutivos, y en la misa llamada mayor ó parroquial.

¿Cuál es su fin?—El descubrimiento de algun impedimento oculto.

¿Qué causas son las más frecuentes para su dispensa?—La desigualdad en la edad de los futuros cónyuges, en la posición social ó en las fortunas.

Requisitos esenciales del contrato.

¿Qué requisitos deben concurrir, necesariamente, en el matrimonio *canónico*?—Dos: el consentimiento de las partes, y la presencia del párroco y testigos. El primero, puede otorgarse expresa ó tácitamente, esto es, con palabras ó con signos. Por consiguiente, no pueden contraer matrimonio los mentecatos y los locos, á no tener intervalos de razon, porque no pueden consentir.

Vician el consentimiento, el error en la persona, no en sus cualidades, y el miedo y violencia que hagan impresion en varon fuerte, siendo por ello nulo el matrimonio, así consentido; y lo *anulan* las condiciones que sean contra la naturaleza, como la prostitucion de la mujer, la procuracion del aborto, y el convenio de disolverlo.

¿Por qué se exige la presencia del párroco y testigos?—Porque, siendo el matrimonio ante nuestras leyes un sacramento y un contrato, requiere la de aquél, como representante de la religion, y la de éstos, como medio justificativo del contrato. Si los contrayentes pertenecen á distintas parroquias, la costumbre tiene sancionado que intervenga el párroco de la á que pertenezca la mujer, pudiendo, no obstante, ser cualquiera de ellos. Los testigos no requieren circunstancias especiales. Los matrimonios en cuya celebracion no intervienen estas solemnidades, llámanse *clandestinos*, y no surten efecto alguno en España.

Contrayentes.

¿Quiénes pueden contraer matrimonio *canónico*?—Los que no tienen algun *impedimento legal*. Se entiende por *impedimento*, «la capacidad legal de contraer matrimonio, ó bien absolutamente, ó bien con determinadas personas.» Nacen de la naturaleza, del derecho divino positivo, y del derecho *canónico*.

¿Qué clases hay de impedimentos, y cuáles son?—*Dirimentes é impedi-*tes. Los primeros anulan el matrimonio celebrado, y los segundos impiden el matrimonio; mas no lo anulan despues de contraído.

Son *dirimentes*: 1.º, la falta de edad; 2.º, la impotencia; 3.º, el parentesco; 4.º, ciertos delitos; 5.º, la diversidad de religion; 6.º, el voto solemne de castidad; 7.º, las órdenes sagradas; 8.º, la profesion religiosa, y 9.º, el matrimonio anterior, ó *ligamen*.

Tienen impedimento por falta de edad, los varones menores de catorce años, y las hembras menores de doce. Pueden, no obstante, contraerlo antes de este tiempo, si su prematuro desarrollo les hiciera hábiles.

Se consideran impotentes los inhábiles perpétuamente para la procreacion, por causa anterior al matrimonio. La impotencia puede ser *absoluta ó relativa* al cónyuge. En caso de duda, la ley concede tres años de expectativa, á cuyo término puede disolverse el matrimonio, ó continuar viviendo juntos los cónyuges como hermanos. La absoluta, debe ser declarada por ejecutoria.

¿Qué parentesco produce impedimento *dirimente*?—El de consanguinidad, el natural, el de afinidad, el espiritual y el civil.

Llámanse parentesco de *consanguinidad*, á «la relacion que tienen entre sí las personas que descienden de un mismo tronco, por efecto de una union lícita;» y parentesco *natural*, á «la relacion que tienen entre sí las personas que descienden de un mismo tronco, por efecto de una union ilícita.»

¿Qué hay que tener presente en el parentesco?—Las *líneas* y los *grados*. *Línea* es la serie de personas que traen un mismo origen. *Grado* es la distancia que media entre dos ó más personas.

La línea es *recta* y *trasversal*. La primera puede ser *ascendente* ó *descendente*, y la segunda *igual* ó *desigual*. La *recta* está formada por las personas que provienen las unas de las otras sucesivamente, como los hijos de los padres. La *trasversal* está formada por personas que no derivan la una de la otra, pero reconocen el mismo tronco. Cuando la *recta* comienza á contarse desde los engendrados hasta los generadores, y sucesivamente, es *ascendente*; y si se computa vice-versa, es *descendente*. Cuando en la *trasversal* se cuentan parientes que están á la misma distancia del tronco común, la línea es *igual*; y *desigual* si uno está más cercano que el otro.

¿Cómo se computan los grados de parentesco?—De dos modos, segun que la computacion sea *civil* ó *canónica*. En la *civil*, se siguen las reglas siguientes: 1.^a En la línea recta se cuentan las generaciones, y su número es el de los grados de parentesco; 2.^a En la trasversal se cuentan las generaciones de ambos lados, sea igual ó desigual. En la *canónica*, las siguientes: 1.^a En la línea recta se cuentan las personas; y su número *ménos una*, es el de los grados de parentesco; 2.^a En la trasversal se cuenta en la forma dicha un sólo lado, si la línea es igual; y el más largo, si es desigual.

¿En qué grados existe el impedimento?—En todos los grados de la línea *recta*, y hasta el segundo *civil* en la *trasversal*.

Llámanse *afinidad*, «el parentesco que tiene un cónyuge con la familia del otro.» Puede ser *civil* ó *natural*, segun la naturaleza de la union que lo produce. Se computa, no habiendo tronco común, por las líneas y grados en que se computa el del otro cónyuge.

Existe el impedimento si la afinidad procede de union legítima, hasta el cuarto; y si nace de union ilegítima, no pasa del segundo.

Dáse el nombre de *cuasi-afinidad*, al parentesco que media por razon de esponsales ó de matrimonio *rato*, entre un esposo y los parientes del otro.

En los esponsales se circunscribe este impedimento al primer grado, y en el matrimonio *rato* llega hasta el cuarto.

Constituye el parentesco *espiritual* la relacion que media entre el padrino y ministro del sacramento con el bautizado ó confirmado, y los padres de éstos.

Por fin, el parentesco *civil*, la relacion legal que existe entre el adoptante y sus parientes, y el adoptado.

Los Sres. La Serna y Montalvan exponen las tres siguientes reglas para fijar los casos en que existe este impedimento: 1.^a, en la línea recta ascendente ó descendente del adoptado y del adoptante, aun disuelta la adopcion; 2.^a, en la línea trasversal entre el adoptado y la descendencia natural del adoptante, mientras permanecen en la patria potestad; pero disuelta ésta, cesa el impedimento; 3.^a, á semejanza de la afinidad entre el adoptante y la mujer del adoptado, y entre el adoptado y la mujer del adoptante. En el caso de que uno mismo adoptase á varias personas, éstas no tienen impedimento entre sí.

Hay tambien impedimentos *dirimentes* nacidos del delito. El *rapto* entre el raptor y la robada, hasta que ésta consienta en el matrimonio, estando en lugar seguro, y separada de aquél; el *adulterio*, si los adúlteros ejecutaron ó proyectaron la muerte del cónyuge, ó pactaron futuro matrimonio; el *homicidio* entre la viuda y el asesino, si tuvo participacion en el delito. El matrimonio *ilegal* produce impedimento entre los esposos, sabiendo

ambos que uno estaba ligado á otro matrimonio. Si cualquiera de ellos lo ignoraba, es potestativa en él la continuacion ó separacion, si fuere posible

¿Qué orden sagrado basta para que nazca el impedimento?—El subdiaconado.

¿Cuáles son los impedimentos *impedientes*?—1.º, los esponsales; 2.º, el voto simple de castidad ó de entrar en religion; 3.º, la disparidad de cultos entre los cristianos; 4.º, la ignorancia de los rudimentos de la religion; 5.º, la falta de cumplimiento de los requisitos que deben preceder al matrimonio; 6.º, la falta de aprobacion de las cuentas de la guarda, entre el guardador y la menor; 7.º, el embarazo de la viuda, que no puede contraer segundo matrimonio antes de su alumbramiento, ni del trascurso de 301 dias posteriores á la muerte del marido; 8.º, el mismo caso y circunstancias cuando se haya declarado nulo el matrimonio, y 9.º, la adopcion entre el adoptante y sus descendientes adoptivos.

¿Pueden dispensarse canónicamente los impedimentos *dirimentes*?—Algunos hay dispensables; otros que no admiten dispensa, y otros que no la necesitan. Se da el nombre de *dispensa* á la habilitacion para contraer matrimonio, dada á persona que tiene un impedimento.

Pueden dispensarse: 1.º, la incapacidad física por impotencia ó falta de edad; 2.º, el voto solemne de orden sagrado (1) ó religion; 3.º, el parentesco de consanguinidad ó afinidad en la línea recta: 4.º, el de consanguinidad en el primer grado de la transversal; 5.º, el de adopcion. No necesitan dispensacion todos los que provienen de falta de consentimiento.

¿A quién compete la facultad de dispensar?—Al Pontífice, si los impedimentos son *dirimentes* ó *impedientes*, nacidos del voto simple de castidad perpétua y de los esponsales, y á los obispos los demás *impedientes*. La autoridad civil dispensa la adopcion que debe ser objeto de las *gracias al sacar*; siendo conveniente, y aún legalmente necesario, que se obtenga la dispensa del Pontífice. Cuando éste la niega y la concede aquélla, el matrimonio será nulo, y válido en el caso contrario, aunque constituya un delito penado con arresto mayor (2).

Modos de disolverse el matrimonio.

¿Cuándo tiene lugar la disolucion del matrimonio *canónico*?—Por la muerte de uno de los cónyuges ó por el divorcio. Es el *divorcio* «la separacion legitima de los cónyuges,» declarada por la autoridad eclesiástica (3).

¿De cuántos modos puede ser el divorcio?—De dos: en cuanto al *vinculo*, y en cuanto al *tálamo* y *habitacion*. El primero tiene lugar cuando, en el matrimonio consumado, uno de los esposos abraza la religion católica y se vé molestado, y no quiere vivir con el que queda infiel; mas si éste se convierte antes de que aquél contraiga nuevo matrimonio, el antiguo recobra toda su fuerza. En el matrimonio *rato* tiene lugar cuando uno de los cónyuges hace profesion religiosa en una orden monástica. El divorcio en cuanto al *tálamo* y *habitacion* se efectúa entrando ambos esposos, por mútuo consentimiento, en religion, ó haciendo voto de castidad; por el adulterio voluntario de uno de ellos si no ha sido aconsejado por el otro, ó no ha obtenido su perdon, ó éste no ha sido igualmente adúltero; por crueles

(1) Hay quien cree que éste puede dispensarse en bien de la iglesia, y de ello hay algunos ejemplos en la historia: *se puede dispensar, por el origen eclesiástico, y por tanto la iglesia lo puede dispensar.*

(2) Art. 491 del Código de 1870.

(3) La ley de matrimonio civil, consecuencia con sus principios de autorizacion, encomendaba á los tribunales ordinarios el conocimiento y decision de estos juicios. Los depósitos de las casadas son todavia de la competencia de aquéllos.

J.B.

tratamientos dados por el marido á la mujer; cuando uno atenta contra la vida del otro, ó le induce á pecar mortalmente, ó incurre en herejía ó idolatría.

Para que produzca efectos civiles el divorcio debe ser declarado por sentencia firme.

Efectos civiles del matrimonio con relacion á los cónyuges y á sus descendientes.

El decreto de 9 de Febrero de 1875, que tan profunda modificacion produjo en el matrimonio, devolviéndole su antiguo carácter mixto de sacramento y de contrato, aceptó y confirmó las prescripciones de la ley de matrimonio civil en todo lo relativo á sus efectos civiles. Por manera que, ya sea canónico el matrimonio, ya sea meramente civil, en los escasísimos casos en que dicho decreto lo autoriza, los efectos son los mismos, y les son aplicables las disposiciones de dicha ley vigente en esta materias, que no han derogado las del derecho foral que se ocupan de los efectos civiles del matrimonio.

¿Qué efectos produce el matrimonio civil con relacion al marido?—1.º, el deber de guardar fidelidad á la mujer; tenerla en su compañía y prestarle auxilio y proteccion en todo deber reciproco que nace inmediatamente; 2.º, administrará sus bienes, excepto aquéllos cuya administracion corresponda á la misma por la ley; 3.º, estará facultado para representarla en juicio, salvo los casos en que ésta pueda hacerlo por sí misma con arreglo á derecho, y para darle licencia para celebrar los contratos y los actos que la sean favorables; 4.º, su emancipacion del poder paterno, 5.º, la patria potestad.

¿Qué limitaciones pone la ley á los efectos expuestos?—Dos, fundadas en la poca edad del marido y en el divorcio. El marido menor de diez y ocho años no podrá ejercer los derechos expresados, ni administrará sus propios bienes sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, del de su madre, y á falta de ambos, sin la competente autorizacion judicial, que se le concederá en la forma y en los casos prescritos en la ley de Enjuiciamiento civil. Tampoco podrá ejercer las expresadas facultades el marido que esté separado de su mujer por sentencia firme de divorcio, que se halle ausente en ignorado paradero ó que esté sometido á la pena de interdiccion civil.

¿Qué efectos produce el matrimonio en la mujer con relacion á su marido?—Además del deber mútuo de fidelidad y auxilio: 1.º, la obediencia á su esposo, debiendo vivir en su compañía; de cuya obligacion puede ser exenta cuando aquél resida en el extranjero; 2.º, no puede administrar la mujer sus bienes, ni los de su marido, ni comparecer en juicio, ni celebrar contratos, ni adquirir por testamento ó abintestato sin licencia de aquél, á no ser en los casos y con las formalidades y limitaciones que las leyes prescriban; los actos de esta especie que la mujer ejecutare serán nulos, y no producirán obligacion ni accion si no fueren ratificados expresa ó tácitamente por el marido; 3.º, tampoco podrá la mujer publicar escritos ni obras científicas ó literarias, de que fuere autora ó traductora, sin licencia de su marido, ó en su defecto sin autorizacion judicial competente, y 4.º, la mujer gozará de los honores de su marido, excepto los que fueren estricta y exclusivamente personales, y los conservará mientras que no contrajere segundas nupcias.

No obstante la prohibicion absoluta del número segundo, ¿qué compras puede hacer la mujer sin licencia del marido?—Las de cosas muebles pagadas al contado y las que hiciere al fiado, de las que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de su familia, y no consistieren en

joyas, vestidos y muebles preciosos, por más que no hubieren sido hechas con licencia expresa del marido.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, se consolidará la compra hecha por la mujer al fiado de joyas, vestidos y muebles preciosos, desde el momento en que hubieren sido empleados en el uso de la mujer ó de la familia con conocimiento y sin reclamacion del marido.

¿Qué derechos puede ejercitar la mujer casada sin licencia de su marido?—1.º, otorgar testamento, disponiendo en él de sus bienes, con las limitaciones establecidas por las leyes; 2.º, ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan, respecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos que hubiere tenido de otro, y á los bienes de los mismos; 3.º, disponer de los suyos, siendo mayor de edad, y estando el marido sufriendo condena de interdiccion civil.

¿A quién compete la accion de nulidad consiguiente?—Al marido y sus herederos. A la esposa y á los que con ella contrataron, no les concede la ley esa accion para evitar fraudes.

¿Qué efectos produce el matrimonio en cuanto á los hijos?—La legitimidad, la patria potestad y la alimentacion de éstos.

¿Qué hijos deben presumirse *legítimos*?—Los nacidos despues de los ciento ochenta dias siguientes á la celebracion del matrimonio, y antes de los trescientos siguientes á su disolucion ó á la separacion de los cónyuges. Principio reconocido ya por las Partidas. El hijo se presumirá legítimo, aunque la madre hubiere declarado contra su legitimidad ó hubiere sido condenada como adúltera. Sabida es la antiquísima máxima romana *el padre legítimo es el designado por el matrimonio*, (*pater est qui justæ nuptiæ demonstrant*); máxima que se funda en una presuncion legal, sujeta, no obstante, á prueba en contrario.

¿Qué pruebas pueden ofrecerse contra tales presunciones?—No se admitirá otra prueba que la de la imposibilidad fisica del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte dias de los trescientos que hubieren precedido al nacimiento del hijo.

¿Qué hijos deben presumirse *ilegítimos*?—Los nacidos en los ciento ochenta dias siguientes á la celebracion del matrimonio, á no ser que concurriera alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª, haber sabido el marido, antes de casarse, el embarazo de su mujer; 2.ª, haber consentido, estando presente, que se pusiera su apellido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hubiere dado á luz; 3.ª, haberlo reconocido como suyo expresa ó tácitamente. Se entenderá que lo ha reconocido como suyo, si ha dejado trascurrir dos meses, á contar desde que tuvo noticia del nacimiento, sin hacer la reclamacion.

El marido ó sus herederos podrán desconocer la legitimidad del hijo que la mujer de aquél hubiere dado á luz despues de trascurridos trescientos dias de la disolucion del matrimonio ó de la separacion legal efectiva de los cónyuges; pero el hijo y su madre podrán tambien justificar en tal caso, la paternidad del marido.

¿Qué condiciones debe reunir el hijo para que se repute nacido y sea objeto de los efectos civiles del matrimonio?—Nacer con figura humana y vivir veinticuatro horas, enteramente desprendido del seno materno.

¿Por qué medios se prueba la legitimidad de los hijos?—1.º, por la partida de su nacimiento consignada en el registro civil; 2.º, por la posesion constante del estado de legitimidad; 3.º, por testigos, con tal que hubiere un principio de prueba documental ó indicios que constaren desde luego, siendo estos tales que con la prueba testifical bastaren para probar la legitimidad.

¿A quién corresponde la accion para reclamar la legitimidad?—Al hijo interesado, la cual es imprescriptible para él.

¿Es trasmisible esta accion?—Se trasmite á los herederos, si el hijo hu-

biere muerto antes del quinto año de su mayor edad, ó despues, dejando entablada la *accion*; porque el estado civil de las personas no está en el comercio de los hombres.

¿Qué medidas adoptaron las Partidas para evitar la suposicion de los partos?—Facultaron á los parientes del marido para vigilar escrupulosamente la viuda y su casa, en la cual no debia haber más que una puerta, pudiendo exigir que se les mostrase el recién nacido, tan pronto como diere á luz.

¿Qué efecto produce la nulidad del matrimonio para la legitimidad de los hijos?—Los que nazcan con posterioridad, no se reputan legítimos; pero si los anteriores, si uno de los cónyuges ignoraba el impedimento: no cuando ambos lo sabian evidentemente.

Todo lo relativo al divorcio y á la nulidad de los matrimonios, corresponde, desde la reforma, (1) á la jurisdiccion eclesiástica. Las sentencias firmes dictadas por los tribunales civiles en las causas fenecidas, son obligatorias.

GUARDA DE LOS MENORES É INCAPACITADOS.

Tutelas y curatelas.

¿Qué acepciones tiene la palabra *guarda*?—Comprende la *tutela* y la *curaduría*. Fúndase en la incapacidad de las personas á quienes alcanza.

¿Qué es tutela?—«Un poder de proteccion á las personas y bienes de los huérfanos impúberos que por su edad no pueden dirigirse.»

¿A quién corresponde la suprema tutela de los huérfanos?—A la nacion, por lo cual es de carácter público el cargo de tutor, que no puede ser dado para un negocio determinado, ni ser rechazado por el huérfano.

¿Qué clases hay de tutela?—Tres: *testamentaria*, *legítima* y *dativa*. La *testamentaria* es la dada, en su última disposicion legítima, por el padre ó por otra persona autorizada al efecto por las leyes. Fúndase en el amor de la familia.

Pueden nombrar tutores, segun las Partidas: 1.º, el padre, y faltando éste la madre por la ley de matrimonio civil, á los hijos legítimos nacidos ó póstumos, á los legitimados y á los naturales, si los instituye herederos, debiendo confirmar el juez el nombramiento relativo á éstos; 2.º, cualquiera extraño que instituya heredero al huérfano, ó le deje manda de importancia.

¿En qué forma pueden ser nombrados?—En testamento ó codicilo, *pura* y *condicionalmente*, y desde, ó hasta cierto día, pero siempre con claridad.

¿Qué requisito previo deben cumplir los tutores?—El discernimiento del cargo, que es «un poder que el juez confiere al tutor para que desempeñe sus funciones,» consignado en auto fundado; en que se especifican las facultades que se le confiere.

¿Qué es tutela *legítima*?—«La deferida por la ley, en defecto de la testamentaria, á los parientes más próximos del pupilo, hábiles para su desempeño.» Tiene lugar cuando las personas que pueden constituir la testamentaria no lo han hecho, ó los tutores nombrados fallecieron antes que el testador, y se funda en que deben cuidar del huérfano aquéllos que esperan la herencia.

(1) Art. 7.º, del repetido decreto.

¿Qué orden de prelacion existe entre los parientes para esta tutela?—En primer lugar, el abuelo (1) paterno; en segundo, el materno; en tercero, las abuelas, y en cuarto los demás parientes más próximos en grado, que, si fueren muchos, se discernirá el cargo al que se comprometa á afianzarlo y desempeñarlo sólo, si en ello se conformasen los demás; y en caso de discordia, al más idóneo y útil al huérfano, con prestacion de fianza.

¿Qué es tutela *dativa*?—«La que, en defecto de la testamentaria y legítima, dá el juez al pupilo.» Tiene lugar siempre que ha terminado ó está en suspenso la testamentaria, y antes cuando la madre que pasaba á segundo matrimonio, con real habilitacion para continuar en la tutela, no constituia hipoteca especial dentro de sesenta dias. Mas esta doctrina es incompatible con la patria potestad concedida á las madres por la ley de matrimonio civil.

¿Quiénes pueden pedir el tutor dativo?—Cualquiera persona, por ser popular esta accion; y aun puede hacer el nombramiento el juez, de oficio, que suele ser en la práctica, el del lugar en que radique la testamentaria.

¿Qué es *curaduría*?—«Una autoridad de proteccion creada por las leyes para la direccion de los bienes y personas de los que por cualquier causa no se bastan á si mismos,» como la menor edad ó la incapacidad fisica ó moral, legítimamente declarada. En el primer caso se llama *curaduría* de los menores; en el segundo, *curaduría ejemplar*. Puede tener por objeto una causa ó negocio determinado.

¿Quiénes pueden nombrar curador á los menores?—Los mismos que pueden nombrar tutores, y por consiguiente las madres.

¿En qué casos están relevados de fianzas?—Por regla general, todos deben afianzar el buen desempeño del cargo; pero no están obligados á ello, si han sido nombrados por el padre ó por la madre, relevándose de la fianza; si bien el juez puede exigirla, no obstante la relevacion hecha por el extraño que tiene derecho á nombrar curador.

¿Pueden oponerse los menores al nombramiento de sus curadores?—Sólo al de los nombrados por un extraño, quedando la oposicion á juicio del juez, en cuyo caso se hará el nombramiento por el mismo menor, en comparencia judicial que suscribirá.

¿Pueden administrar sus bienes sin curador?—Sólo en el caso que obtengan dispensa de edad, con los requisitos que exigen las gracias al sacar.

¿A quiénes se les nombra curador *ejemplar*?—A los incapacitados fisica ó moralmente, como los perpétuamente impedidos, los locos, fátuos y desmemoriados. El pródigo se equipara á éstos.

¿Quién hace este nombramiento, y en qué personas debe recaer?—El juez del domicilio del incapacitado discierne el cargo por el orden siguiente: á el padre, hijos, mujer, madre, abuelo paterno, abuelo materno, abuela paterna, abuela materna, y en defecto de todos, á los parientes y amigos íntimos.

¿Cuándo se nombra el curador para *pleitos*?—Cuando el tutor tiene impedimento temporal, ó cuando tiene interés en el pleito, opuesto al del menor. Debe serlo un pariente, en su defecto un amigo, y en último caso, un vecino del domicilio del menor, y nombrarse por medio de comparencia que suscribirá éste, quedando reservado á la prudencia del juez el discernirle el cargo.

¿Qué son los *defensores*?—Unas personas, especie de curadores, que

(1) Antes de la ley de matrimonio civil, la primer llamada era la madre; pero á ésta corresponde, no la tutela, sino la patria potestad.

tienen á su cargo la defensa de los bienes de los ausentes, ó de una herencia yacente.

¿Quiénes han de cuidar de los bienes de los penados con interdicción civil?—La esposa no separada legalmente, ayudada de curador, si fuere menor. El penado soltero, queda sujeto al curador ordinario, si es menor, y al *ejemplar*, si fuere mayor (1).

¿Qué formalidades deben cumplir los guardadores antes del desempeño del cargo?—Obtener el discernimiento; prestar fianzas; jurar su buen desempeño, y formar inventario. La fianza tiene lugar en los casos que quedan antes reseñados, y debe ser hipotecaria y extensiva al valor del patrimonio del menor, con deducción del de sus bienes inmuebles. Están excluidos los curadores para pleitos.

¿Qué dispone la ley hipotecaria?—Concede una hipoteca legal en los bienes del guardador, además de la especial de que hemos hablado, que puede inscribirse como tal en el Registro, en favor del menor.

¿Cuándo y cómo debe formarse el inventario?—El derecho no fija el término, pero la práctica ha sancionado que para ello deben tenerse presentes el número, naturaleza y calidad de los bienes. Comunmente, el guardador recibe los bienes del menor por inventario, cuando existen, y firma su recibo.

¿Qué deberes tiene el guardador durante el cargo?—*Alimentar y educar* al menor; *conservar y administrar* sus bienes, é *intervenir* en sus negocios. La educación debe ser con arreglo á su clase y circunstancias.

¿Qué comprende la *alimentación*?—«Todos los gastos que ocasiona la subsistencia y educación del menor.» El juez fija su cuantía, si el padre no la determinó con arreglo á la posición social é importe del caudal de aquél, y declara que se entienda *frutos por pensión*, á no ser que sea perjudicial al menor, la manifestación de su caudal.

¿Puede vender el guardador los bienes del menor?—Sólo en determinadas circunstancias, y con ciertas solemnidades. Los bienes raíces, derechos, alhajas y bienes muebles ó semovientes de valor, puede venderlos en caso de necesidad y utilidad justificada, con autorización judicial determinada, verificando el contrato en pública subasta, y previo avalúo pericial de los inmuebles. Los muebles también deben venderse solamente, y con los requisitos que prescribe el uso del pueblo. Las ventas en otra forma, son nulas.

¿Para qué más negociaciones necesitan la autoridad judicial?—Para hipotecar los raíces y aun dar en prenda los muebles, y transigir las contiendas que por ellos se ventilen, oyéndose al efecto la opinión de tres letrados. No la precisan para adquirir para los menores.

¿Qué cuidados preferentes debe tener?—Conservar los bienes con la diligencia de un hombre regularmente cuidadoso, trabajando los terrenos, reparando las fincas urbanas, sosteniendo los ganados y empleando el dinero en fincas, ó dándole un destino reproductivo.

¿Cómo interviene el guardador en los negocios del menor?—Siendo el menor infante, el guardador *administra*; después de la infancia, *interpone su autoridad*; entrado en la pubertad, *presta su consentimiento*. El guardador del incapacitado administra siempre.

¿Cuándo ha de tener lugar la intervención?—En el momento de celebrarse el contrato, que si se estipula entre el guardador y el menor, debe nombrarse al segundo, un nuevo curador especial para el caso.

¿Qué retribución recibe el guardador?—Se le señala por el juez un tanto por ciento, ó frutos por pensión, según la cuantía del caudal y necesidades del menor.

(1) Ley de 18 de Junio de 1870.

¿Qué obligaciones debe cumplir terminado el desempeño del cargo?—Entregar los bienes del menor y rendir cuenta de la administracion que ejerció, con audiencia del curador *ad litem*, ó para pleitos, y del promotor fiscal. Esta obligacion es ineludible, exceptuándose á los guardadores que tuvierén señalados los frutos por pension. Las cuentas pueden ser revisadas en caso de ser erróneas, y deben ser probadas por el juez.

¿Qué derechos competen al guardador?—El reintegro de los gastos hechos en beneficio del menor, y el percibo del tanto por ciento de administracion.

Incapacidades y excusas de los guardadores.

¿Qué son incapacidades?—Ciertas circunstancias que impiden *necesariamente* el ejercicio del cargo de guardador, por razon de la edad, estado ó condicion de las personas; por falta de garantía de éstas y por ciertos delitos.

Están incapacitados, por regla general, los ciegos, mudos, fátuos y furiosos; los menores, los eclesiásticos y los militares en servicio. Lo estaban por falta de garantía, los recaudadores de rentas públicas, y lo están los deudores del que está en guarda. Y finalmente, los que cooperen á la violacion, estupro, rapto ó corrupcion de éste, con abuso de autoridad ó encargo, ó interés de un tercero, y los que se hallen penados con la interdiccion civil.

Exceptuáanse: 1.º, la abuela, que puede ser guardadora si renuncia al segundo matrimonio y las leyes que le prohiben obligarse por otro, y las casadas, las cuales pueden ser curadoras ejemplares de sus maridos; 2.º, los clérigos pueden ser guardadores de sus parientes, pero no los obispos y reguladores; 3.º, los deudores nombrados por el testador; 4.º, los menores á quien se conceda dispensa de edad, y 5.º, las viudas que obtienen dispensa de ley para continuar en la tutela de sus nietos, no obstante el segundo matrimonio, despues de constituir la hipoteca judicial correspondiente con aprobacion judicial.

¿Qué son excusas?—Las justas causas que se alegan ante el juez para eximirse del cargo de guardador.

¿Cuáles son las justas y voluntarias causas de exencion?—Son de varios géneros, segun que deben su origen al favor de la ley, á motivos de conveniencia y á la equidad. Los Sres. La Serna y Reus las enumeran en la forma siguiente:

1.º Los que tienen cinco hijos legítimos, varones, vivos; reputándose como tales los muertos en defensa del Estado.

2.º Los ausentes por causa del Estado, mientras lo están, y en un año despues de su vuelta; pero ésto no es extensivo al cargo que ya tenían antes, el cual deberá ser desempeñado por otro en su ausencia.

3.º Los magistrados y jueces en actual ejercicio, respecto á la guardaduría que antes no tenían.

4.º Los recién casados, en los cuatro primeros años de matrimonio.

5.º Los maestros públicos, con nombramiento real, de gramática, retórica, filosofía y medicina.

6.º Los que por el servicio nacional estuvieren en un lugar determinado, lo cual debe entenderse en el caso de que la necesidad de residir en él no les permita desempeñar el cargo.

Por razones de opinion pública pueden excusarse:

1.º El que sobre toda la herencia ó su mayor parte tuviere pleito con el pupilo ó menor.

2.º El que hubiere sido enemigo capital del padre, no mediando reconciliacion.

Finalmente, por la justa distribucion de cargas entre los individuos del Estado, se exige de la de guardadores:

- 1.º Los que ya tienen tres tutelas.
- 2.º El que fué tutor de un huérfano, de ser su curador.
- 3.º Los que se ven precisados á subsistir de su trabajo corporal.
- 4.º Los que padecen enfermedad crónica ó habitual.
- 5.º Los que no saben leer ni escribir, si es complicada la administracion.
- 6.º Los mayores de setenta años.

¿Cómo y en qué tiempo deben proponerse?—Debe tener lugar su alegacion ante el juez y con audiencia del fiscal, en los cincuenta dias contados desde la noticia del nombramiento, si el guardador no distare más de cien millas del punto en que se hizo, agregando un dia, por cada veinte millas, además de los treinta de la ley.

Conclusion de la guarda.

¿Cuándo termina el cargo de los guardadores?—1.º, por llegar el menor á la mayor edad, ó á los diez y ocho años, siendo casado, obtener dispensa de edad, ser arrojado ó haber muerto; 2.º, por excusa del guardador legalmente admitida, haber sido éste penado con la interdiccion civil, removido como sospechoso ó haber muerto; 3.º, por las segundas nupcias de la abuela que no ha obtenido dispensa de ley, y 4.º, por el cumplimiento de la condicion resolutoria, ó conclusion del tiempo marcado en el testamento.

¿Qué entendemos por guardador *sospechoso*?—«El que por su conducta hace temer que no desempeñará bien su cargo.» Son causas para su remocion la enseñanza de malas costumbres al menor; la disipacion de sus bienes; la enemistad del guardador; la falsa negativa de alimentos; la incuria y abandono en la defensa judicial y extrajudicial de la persona y bienes de aquél; la omision del inventario y el ocultarse el guardador al saber el nombramiento.

¿Quién puede solicitar la remocion?—Cualquiera, y áun las mujeres y los menores púberos, con el consejo de sus parientes. El mismo juez puede proceder de oficio, por ser pública la accion correspondiente.

Restitucion in integrum.

¿Qué es la restitucion *in integrum*?—«La reposicion del negocio válido, en que ha padecido daño el menor, al estado que tenía antes de haberle sufrido.» Procede cuando el menor, el incapacitado y el ausente por causa del procomunal, sufrieron daño por culpa de otro en juicio ó fuera de él, y sólo como recurso extraordinario y cuando no puede entablarse el de nulidad ú otro ordinario.

No pueden tener lugar: 1.º, cuando el menor se aprovecha de su fisionomía y dice ser mayor; 2.º, en las causas criminales; 3.º, cuando los pagos se han hecho con autorizacion judicial; 4.º, cuando el juez les negó la restitucion pedida por ellos en juicio; 5.º, en los términos fatales y contra el legal para interponer el recurso de casacion; 6.º, cuando el tercero, que no tuvo participacion en el contrato dañoso al menor, adquirió la cosa ó el derecho real con buena fé, y ha inserto el título en el Registro de la propiedad; 7.º, contra las sentencias firmes; 8.º, en los pleitos fallados despues de la mayor edad del menor.

Pueden hacer uso de este remedio extraordinario los menores y sus herederos, porque es *personalísimo*, y dura la accion consiguiente toda la menor edad y cuatro años más, llamados *cuadrienio legal*, que se empiezan á contar, para los ausentes ó herederos, desde que volvieron á sus hoga-

res, y si hubieren fallecido, desde el fallecimiento. Corresponde tambien este beneficio á los incapacitados física ó intelectualmente.

Personas jurídicas civilmente consideradas.

¿Qué origen distintivo se observa entre las personas jurídicas?—Que unas tienen una creacion natural, digámoslo así, como los pueblos; y otras artificial ó legal, como las corporaciones, las provincias, etc., y que sus derechos y obligaciones no corresponden á uno ó muchos individuos determinados, sino al ente moral ó conjunto abstracto que se llama *persona*.

¿Qué es el fisco?—La personificación del Estado, como particular, adquiriendo y poseyendo bienes de diversas clases.

¿Quién debe intervenir en la creacion de las personas jurídicas?—El gobierno, porque puede ser perjudicial á los intereses morales ó materiales del país, á fin de darles nacimiento y consideracion legal. Por iguales razones debe intervenir en su desaparicion.

Gozan del beneficio de restitution por el mismo término de cuatro años, y por treinta cuando el daño es en más de la mitad del justo precio, ó por razon de *lesion enormísima*.

¿Qué son, pues, las *personas jurídicas*?—Ciertas entidades morales, de creacion abstracta puramente imaginaria y artificial, á quienes se reconocen derechos y obligaciones.

DE LAS COSAS.

¿Qué es *cosa*?—En una acepcion lata, es «todo lo que puede constituir el patrimonio de los hombres». Comprende las físicas y las de creacion jurídica, como son las incorpóreas.

¿Qué division hicieron las Partidas de las cosas?—Clasificáronlas en cinco grupos: 1.º, cosas comunes al hombre y á los demás seres animados; 2.º, cosas comunes sólo al hombre; 3.º, cosas de uso común de los pueblos; 4.º, cosas de propiedad privada, y 5.º, cosas que no están en dominio.

Son las primeras las que, dadas por la naturaleza para el uso común, no están en el señorío de nadie. Á ellas pertenecen el aire, el agua de lluvia y el mar y sus riberas; si bien las aguas pluviales que no forman arroyo permanente dejan de serlo, perteneciendo al dueño de la propiedad en que caen. El código visigodo dividía las aguas corrientes en aguas de uso común y de uso particular. La instruccion de corregidores, inserta en la Novísima Recopilacion, las considera como susceptibles de adquisicion, previa la concesion del Estado, por corresponder á él su propiedad.

¿Qué principios se tienen para ello presentes?—Que las corrientes naturales son del dominio público, perdiendo este carácter desde el momento en que el hombre les hace discurrir por un cauce artificial. Que los cauces de aquéllas son tambien de dominio público, y sus límites se extienden á todo el espacio bañado por ellas en su crecimiento.

¿Qué derechos tiene el público sobre estas aguas?—El uso de las mismas, sin perjudicar al derecho de los demás, para bañarse, lavarse, abreviar ganados, pescar y navegar, conformándose á las ordenanzas de policia y buen gobierno.

¿Cómo se clasifica el mar?—En mar alta, mar cerrada y mar litoral. La mar alta separa los grandes continentes y no es susceptible de apropiación: su uso es común y libre para todas las naciones. Llámase mar cerrada la que puede serlo por las costas del Estado, como los golfos, bahías y ensenadas: su dominio pertenece á la nación en cuyo territorio se introduce. Mar litoral es la que baña las costas del Estado. Ni es absolutamente libre, ni de exclusiva posesión. El litoral marítimo español comprende seis millas de la costa.

¿A quién pertenecen las riberas del mar?—Son de uso común á los nacionales, quienes deben respetar sus reciprocos derechos. Comprenden la extensión que hemos dicho al tratar de las de los ríos. El Estado es el que únicamente puede hacer en ellas construcciones, y conceder autorización perpétua ó temporal para ello á los particulares (1).

¿Qué son cosas *públicas*?—Las que pertenecen al Estado, y cuyo uso y aprovechamiento está al alcance de todos los hombres, como los ríos, las aguas pluviales, los puertos, los caminos públicos, las costas, bahías, etc.

¿A quién pertenecen las riberas de los ríos?—Por regla general á los dueños de las propiedades colindantes, que deben respetar los derechos del público en su aprovechamiento y las disposiciones de la administración.

¿Qué clase de bienes tienen los pueblos?—Dos: los que constituyen su patrimonio particular, denominados *propios*; los *comunes*, que son de todos, sin pertenecer á ninguno. Aquéllos sirven para atender á las obligaciones del municipio, para cuyo mejor cumplimiento fueron objeto de las leyes de desamortización, reservándose sólo á los pueblos las fincas rústicas y urbanas indispensables ó de gran utilidad para el vecindario. A los segundos pertenecen las fuentes, plazas, mercados, egidos, montes, etc.

¿Qué extensión puede tener el aprovechamiento de estos bienes?—Unos sólo pueden ser disfrutados por los vecinos, con exclusión de todo otro, como los pastos y los montes; y otros, aun cuando pertenezcan al pueblo, pueden ser usados por los vecinos y los que no lo son, como las plazas y paseos. La doctrina anterior es extensiva á las provincias, consideradas como personas jurídicas.

¿Qué son cosas de dominio particular?—Las que están en el comercio de los hombres y son objeto de contratación.

¿Cuáles son las que no están en dominio?—Las que no pertenecen á nadie. Las Partidas las dividían en *sagradas*, *religiosas* y *santas*, y los autores modernos en *espirituales* y *corporales*, subdividiendo éstas en *sagradas*, *religiosas* y *temporales*. Llámense también cosas de derecho divino y cosas eclesiásticas. A las espirituales pertenecen los sacramentos, ayunos é indulgencias, que son objeto de derecho civil.

¿Qué son cosas *sagradas*?—«Las que están consagradas á Dios y á la religión para el culto divino, como son las iglesias, los vasos y ornamentos sagrados.» Pueden enajenarse para el pago de deudas de la iglesia, redención de cautivos, socorro de los pobres y construcción de cementerios.

¿Qué son cosas *religiosas*?—Los edificios destinados á la vida contemplativa y fines piadosos, como los monasterios y casas de beneficencia, cuyo carácter pierden cuando se hallan bajo la inspección de la administración, ó son sostenidos por fondos públicos; razón por que no son cosas *religiosas* los hospitales, hospicios, inclusas y otros.

¿A qué clase pertenecen los cementerios?—Participan del carácter de religiosos, por el fin á que están destinados y depender de la autoridad eclesiástica, si bien corresponde su inspección á la civil, por considera-

(1) Véase la materia de aguas, en la sección de *Derecho administrativo*.

ciones de salubridad pública y estar obligada á construirlos en ciertos casos (1).

¿Qué son cosas temporales de la Iglesia?—Los bienes, derechos y rentas que posee para atender al sostenimiento de sus ministros y de los pobres, obligación que radica hoy en el Estado.

¿Qué subdivision se hace de las cosas de dominio particular?—Subdiviense en *corporales* é *incorporales*, *raíces* y *muebles*, *fungibles* y *no fungibles*, *divisibles* é *indivisibles*, *universales* y *singulares*, *existentes* y *futuras*, *principales* y *accesorias*.

Son cosas *corporales* las que están sujetas á la inspeccion de los sentidos. *Incorporales* las que, no existiendo realmente, se conciben con la inteligencia, v. gr., los derechos, los créditos ejecutoriados y las acciones. Se llaman *inmuebles* ó *raíces* las unidas al terreno de modo que forman con él un mismo todo; y *muebles* las que, no estando adherentes al suelo, pueden moverse ó ser movidas. Si se mueven por sí solas, reciben el nombre de *semovientes*.

¿Qué cosas muebles é incorporales por su naturaleza son, no obstante, calificadas de *inmuebles*?—Por el uso á que se destinan lo son los alfólies de madera, las llaves y brocales de los pozos, las tinajas empotradas, etc.; y por el objeto á que se aplican, lo son las acciones reales, las servidumbres prediales y el usufructo.

¿Qué modificacion introdujo la ley hipotecaria?—Privó del carácter de *inmuebles* á los oficios enajenados de la Corona, inscripciones de la Deuda pública y acciones de bancos y compañías mercantiles.

¿Qué cosas se equiparan á las *muebles*?—Las obligaciones y acciones personales, acciones de bancos y compañías, etc.

¿Cuál es el fundamento de la division de cosas *fungibles* y *no fungibles*?—La diferencia entre el *género* y la *especie*. El género nunca perece, y puede, por consiguiente, ser siempre representado; la especie, por el contrario, como idea determinada, relativa á un objeto único y cierto, no puede ser representada por otra. Son cosas *fungibles* aquéllas que pueden ser representadas por otras, por pertenecer al género; y *no fungibles* las que no pueden ser representadas por otras, por pertenecer á la especie. Una alhaja determinada es *no fungible*, y un caballo, en general, es *fungible*.

Dáse el nombre de cosas *divisibles* á las que son susceptibles de fraccionarse en partes homogéneas y análogas á las demás y al todo; *indivisibles* á las que no pueden ser objeto de particion; *universales* al conjunto jurídico de varias, de las cuales cada una forma una individualidad, y *singulares* á las que no forman parte de un todo y se las considera individual y aisladamente.

¿De cuántas maneras puede ser la *universalidad*?—De hecho y de derecho. Es de hecho cuando las cosas que la forman son de una misma especie, como un rebaño. Es de derecho cuando son heterogéneas, corporales ó incorporales, como la herencia, el peculio, etc.

Las cosas *existentes* y las cosas *futuras* no necesitan definirse. Finalmente, llámanse cosas *principales* á las que existen por sí mismas, con entera independencia de las otras, y cosas *accesorias* á las que se agregan á las principales para su adorno ó complemento.

Derechos reales y personales.

¿Qué es derecho real ó en la cosa?—«El que tiene el hombre sin relacion alguna á la persona.»

(1) Aunque la tendencia del derecho se dirige á la secularizacion de los cementerios, todavia no se ha conseguido en nuestra patria.

¿Qué es derecho *personal* ó *á la cosa*?—«El que tiene acerca de ella, pero con relacion á una persona que está obligada á dar ó hacer.»

¿Cuál es el carácter de ambos?—El primero es absoluto y sigue á la cosa, cualquiera que sea su poseedor, y el segundo es relativo y se dirige contra la persona obligada.

¿Cuál es el verdadero derecho *real*, jurídicamente considerado?—El dominio; derecho *en la cosa* primordial y fundamental.

¿Qué otros derechos *reales* se conocen?—Varios, que más bien son desmembraciones del conjunto de facultades que corresponde á aquél, ó diferentes fases en que se le considera. Así sucede con el derecho hereditario, las servidumbres, la prenda ó hipoteca y la posesion.

¿Qué es el derecho hereditario?—Como derecho *real*, es un modo de considerar el dominio que el testador tenía en la herencia, trasmitido á su heredero.

¿Qué son las servidumbres, bajo este aspecto?—La facultad de usar ó gozar una cosa en parte, trasmitida por su propietario ó por la ley á otra persona. Son, pues, una limitacion del dominio.

¿Qué es la prenda ó hipoteca en tal sentido?—La privacion de poder disponer de la cosa que es su objeto, limitándose en esta parte la propiedad.

¿Qué es la posesion bajo el mismo punto de vista?—Un dominio fingido que no excluye el verdadero, tambien limitado por ella.

¿En qué se divide el dominio?—En *directo* y *útil*. El *directo* corresponde al condueño á quien no pertenece la utilidad de la cosa, pero cuya enajenacion puede impedir. El *útil* lleva consigo el aprovechamiento de ella, con la prohibicion expuesta.

¿Qué otra clasificacion de derechos *reales* se conoce?—Dividense en servicios, ya *activos* como las pensiones y cargas, ya *pasivos* como las servidumbres, ya de *garantía* como la prenda ó hipoteca que están obligadas á prestar las cosas.

¿Qué nuevo derecho *real* introdujo la ley hipotecaria?—El constituido á favor del arrendatario que ha inscrito en el Registro el arrendamiento de inmuebles por más de seis años, ó en que haya anticipado las rentas de tres ó más anualidades.

¿Cuál es el origen de los derechos *personales* ó *á la cosa*?—Las obligaciones.

¿Qué es propiedad y cuál es su fundamento?—«El derecho de gozar y de disponer libremente de las cosas, con sujecion á las leyes.» Fúndase en la manera de ser de nuestra existencia y en las relaciones del hombre con el mundo material. Es tan antigua como el mismo hombre.

¿Qué nombre recibe la facultad que tiene el Estado de legislar sobre el derecho de propiedad?—Llábase por algunos *imperio*, y por otros *dominio eminente*; frases que son poco exactas, porque al Estado sólo incumbe la proteccion y garantía del derecho de propiedad.

¿Cómo sanciona nuestro derecho esa facultad?—Prescribiendo que ningún ciudadano pueda ser privado de su propiedad sino por causas justificadas de utilidad comun, prévia la correspondiente indemnizacion, sin cuyo requisito los Tribunales deben restituir la propiedad al expropiado, segun la Constitucion.

De la accesion.

¿Qué es *acesion*?—«La adquisicion de lo que produce la cosa ó de lo que á ella se incorpora.» Fúndase en que *lo accesorio sigue á lo principal*. Por ello pertenecen al propietario los frutos *naturales, industriales y civiles*, y al dueño de la hembra los de ésta, por ser además una continuacion del dominio cuando no está limitado por otro derecho.

«Son frutos *naturales* los que, sin esfuerzos del arte, producen las cosas. Frutos *industriales* los que, sin el trabajo del hombre, no vendrían espontáneamente. Frutos *civiles* los que provienen de una obligación legal y voluntaria.»

¿De cuántas maneras puede tener lugar la *accesion*?—Por los productos de la cosa, según queda dicho, y por la incorporación natural ó artificial.

¿Qué causas pueden producir la *accesion* natural en los bienes inmuebles?—Cuatro: el *aluvion*, la *fuerza manifiesta del río*, el *nacimiento de una isla* y la *mutacion de cauce*.

¿Qué es *aluvion*?—«El acrecentamiento sucesivo é insensible que dan los ríos á las heredades confinantes.» Pertenece al dueño de éstas, porque el que está á lo perjudicial debe estar á lo favorable, y no se conoce el dueño de lo agregado.

¿Qué se entiende por *fuerza del río*?—«El acrecentamiento de las propiedades, ocasionado por una avenida que arranca toda una heredad ó parte de ella y la agrega á otra. No pierde su dominio el propietario de la agregada, hasta tanto que se identifica en términos que los árboles llegan á arraigarse, debiendo ser indemnizado de su valor.

¿A quién pertenece la isla nacida en el río?—A los dueños de las heredades inmediatas, según su proximidad; pero si dista más de una que de otra, pertenecerá al propietario más próximo íntegramente (1). No debe esto confundirse con el simple aislamiento de una heredad, que nada altera el dominio.

¿Cuándo tiene lugar la *mutacion del cauce*?—Cuando el río cambia su curso.

Pertenece la propiedad del antiguo á los dueños de las tierras abandonadas, en la misma proporcion que hemos dicho al tratar de la isla. Las inundaciones no alteran el estado de la propiedad.

¿Qué causas produce la *accesion* artificial en los inmuebles?—Tres: la *edificacion*, la *plantacion* y la *siembra*.

¿Qué principio rige en la *edificacion*?—La regla general de que *lo accesorio* que es el edificio, *cede á lo principal* que es el suelo.

¿Qué casos pueden presentarse?—Dos: la *edificacion* en suelo propio con materiales ajenos, y la *edificacion* en suelo ajeno con materiales propios. En el primer caso el edificante de buena fé cumple con pagar al dueño de los materiales el duplo de su valor, y el de mala fé los daños y perjuicios, apreciados bajo juramento por aquél. En el segundo caso el de buena fé tiene derecho al valor de sus materiales, perdiendo su propiedad el que la haya tenido mala.

En la *plantacion* y *siembra* rigen los mismos principios que en la *edificacion*.

¿A quién pertenece el árbol nacido en el límite de dos heredades?—Al dueño de la en que tiene sus raíces, por ser ésta la que contribuye á su nutricion. Si las extiende á ambas, sus dueños serán copropietarios y dividirán los frutos.

¿Por qué medios se efectúa la *accesion* de los bienes muebles?—Por *ad-juncion*, *commision* y *especificacion*.

¿Qué principios predominan en esta materia?—La misma regla anteriormente expuesta, que consigna que el dueño de lo principal debe satisfacer el valor de lo accesorio; y la que establece que no cambia la propiedad de las cosas, mientras pueden ser separadas sin detrimento suyo.

¿Qué es *ad-juncion* ó *conjuncion*?—La union de una cosa á otra, perteneciendo cada una á diferente dueño. Puede tener lugar por *inclusion*, por

(1) Ley de aguas.

soldadura, por *tejido*, por *pintura* y por *escritura*. Hay *inclusion* cuando se engasta una piedra preciosa en metal ajeno. Hay *soldadura* cuando se une una cosa á otra por medio de una tercera de la misma ó diferente naturaleza. Se verifica por *tejido* cuando con materiales ajenos se forma una tela, y por *pintura* y *escritura* siempre que se pinta ó escribe sobre tabla ó papel de otro.

¿Qué particularidad ofrece la *soldadura*?—Que cuando tiene lugar con diferente metal no altera la propiedad de los objetos soldados.

¿Qué excepcion hay en favor de la *pintura*?—Atendiendo á las excelencias del arte, cede la tabla ó lienzo á lo pintado si mediase buena fé, cuya doctrina se hizo extensiva por la práctica á la escritura, no obstante la disposicion contraria del derecho. En uno y otro caso hay lugar al pago de los materiales.

¿Qué es *commistion*?—La mezcla de cosas correspondientes á diferentes dueños. Si la mezcla es de cosas sólidas, se llama simplemente *commistion*; y si de cosas líquidas, *confusion*.

¿Qué causas puede producir la *commistion*?—La voluntad de ambos dueños, la de uno sólo ó un hecho independiente de la de ambos. La primera produce la comunidad en el dominio. La segunda autoriza la separacion posible de lo mezclado á costa del que la causó, y si no es realizable, el otro puede elegir, ó bien la division proporcional de lo mezclado, ó bien el precio de sus cosas. La tercera autoriza tambien la division posible ó realizable por cuenta de ambos, y no siéndolo, la division proporcional.

¿Qué es la *especificacion*?—La formacion de una nueva especie con otras que pertenecen á diferentes dueños. En este caso debe distinguirse si las cosas pueden ó no reducirse á su primer estado. En caso negativo, el especificante de buena fé las adquiere, previo el pago de materiales, y en caso afirmativo, las hace suyas el dueño de éstos, debiendo satisfacer al especificante los gastos de la operacion.

Algunos autores consideran como *accesion* el modo de adquirir la propiedad de las aguas de lluvia, las de los manantiales, subterráneas y medicinales. No creemos muy exacta esa apreciacion. En el derecho administrativo nos ocupamos de esta materia, á donde remitimos al lector.

Modos de adquirir la propiedad.

¿Cuántos y cuáles son los modos de adquirir?—*Universales* y *singulares*. *Universales* son aquéllos en virtud de los que continuamos la representacion juridica de otra persona, en todos los derechos y obligaciones que no sean personalísimos. *Singulares* son aquéllos en virtud de los que adquirimos el dominio de una cosa individual y determinada.

Entre nosotros sólo se cuenta, como único modo *universal*, el *derecho de sucesion*, considerado por la ley como un derecho *real*; y ocho *singulares* que son, la *ocupacion*, la *tradicion* y la *prescripcion*, el *legado*, el *fideicomiso singular*, la *donacion mortis causa*, la *adjudicacion* judicial y la *adquisicion* por pena. Algunos cuentan tambien la *accesion*.

¿Qué es *ocupacion*?—La aprehension de las cosas corporales que no tienen dueño, con la intencion de adquirir su propiedad. Deben concurrir, la toma material de la cosa, el ánimo adquisitivo del que la ocupa y la circunstancia de que aquélla no tenga dueño.

Seis especies se cuentan de *ocupacion*: la *caza*, la *pesca*, el *hallazgo* de las cosas sin dueño, el de los *tesoros*, el de las que han sido abandonadas y la *adquisicion* de las minas.

¿Qué clasificacion se hace de los animales de caza y pesca?—Se dividen en *feros*, *mansos* y *amansados*. Son *feros*, los que no han estado nunca en el dominio del hombre y viven vagando por los campos, el aire y las aguas.

Mansos, los que han nacido en el dominio del hombre é instintivamente se someten á él. *Amansados*, los que, siendo de naturaleza fiera, han modificado sus instintos por la educacion del hombre.

¿A quién pertenece el dominio de los *mansos* y *amansados*?—Siguen la misma condicion que las cosas de propiedad privada y pueden ser objeto de contratacion.

¿Qué limitacion existe en contra de las *palomas*?—Que puede tirárselas á la distancia de mil varas de los palomares, fuera del tiempo de la recoleccion y sementera, y á cualquiera distancia en este tiempo, estando con la espalda vuelta á aquéllos.

¿Que reglas se siguen en la ocupacion de los animales *fieros* y *amansados* que recobran su libertad?—Las siguientes: 1.^a, nadie puede cazar ni pescar en terrenos acotados y plantíos sin permiso de sus dueños ó representantes, porque á éstos corresponde exclusivamente tal derecho; 2.^a, en los terrenos abiertos é incultos es permitida la caza y pesca, siempre que no la prohiban sus dueños; 3.^a, en los terrenos pertenecientes á los pueblos pueden cazar los vecinos y los forasteros, con licencia; 4.^a, todo animal fiero pertenece al que lo coge, si para ello no vulnera el derecho de propiedad, cuyo dominio pierde por la fuga del animal á quien no alcanza á ver, y 5.^a, la aprehension del animal es necesaria aun despues de haber sido herido ó preso, salvo la costumbre en contrario.

¿Qué reglas rigen la adquisicion de las *abejas*?—Para adquirir su dominio es menester encerrar el enjambre en la colmena, á no ser que prohibiere la captura el dueño del árbol que lo contuviere. El del colmenar pierde su dominio tan luego como desaparece de su vista, en extremo que no sea fácil recobrar.

¿A quién pertenece la propiedad de las cosas sin dueño?—Al primer ocupante, por la necesidad que exige el caso de fijar el dominio, y evitar conflictos con el más fuerte.

¿A quién pertenecen las abandonadas por sus dueños?—Al que primero las ocupa, siempre que se justifique su abandono espontáneo y voluntario, como sucede con el dinero arrojado en fiestas públicas y de familia, que es del primero que lo recoge.

¿A quién pertenece el dominio de las cosas sin dueño conocido, á que se llaman bienes *mostrencos*?—Al Estado, prévias ciertas formalidades.

¿Cuáles son esos bienes y formalidades?—1.^o, aquéllos que no tienen poseedor ni dueño conocido, que se llaman *vacantes*; 2.^o, los objetos arrojados por el mar, que no son sus productos naturales, si resultan no tener dueño, y 3.^o, los buques náufragos y sus cargamentos, cuando, publicados en debida formæ, no se presenta á reclamarlos su propietario.

¿A qué se dá el nombre de *tesoro*, y á quién pertenece?—Llámase tesoro á «un antiguo depósito de dinero ó efectos preciosos, de cuyo dueño no se puede tener noticia.» Su propiedad varía, segun el lugar en que se encuentre y el móvil del hallazgo. Hallado en terreno propio, es del que lo encontró. Hallado en terreno ajeno y por casualidad, se divide entre el dueño de éste y el inventor; y buscado de propósito, pertenece íntegramente á aquél.

¿A quién corresponde la propiedad de las minas?—Al Estado ó á los particulares, segun la clase del mineral. Si consiste en sustancias inorgánicas, metales, piedras preciosas, combustibles, salinas y fosfatos calizos que exigen trabajos formales de explotacion, corresponde al Estado, quien suele conceder su aprovechamiento al interés particular. Si consisten en producciones silíceas y calcáreas, arcillas, tierras magnesianas y ferruginosas, ú otras que se apliquen á la agricultura ó á las artes, son de aprovechamiento comun cuando se descubren en terrenos del Estado ó de los pueblos, y de beneficio particular cuando existen en propiedad privada.

¿Qué derecho se ha introducido en favor de la industria?—Si las producciones mineras de esta clase sirven para la alfarería, fabricación de porcelanas, fusion de cristal ó vidrio y construcciones de interés público, puede el gobierno conceder su explotación, no obstante existir la mina en terreno particular, previa la informacion de expediente con audiencia del dueño, que será preferido en su explotación á cualquiera solicitante (1).

¿A quién pertenecen las producciones minerales de los rios?—Son de libre aprovechamiento.

¿Qué es *tradicion*, y cuál es su fundamento?—Es el acto en virtud del cual ponemos á disposicion de otro una cosa mueble, inmueble ó incorporeal, con ánimo de traspasar su dominio. Fúndase en que debe ser eficaz la voluntad del dueño, y cuando se traté de cosas inmuebles ó de derechos reales, debe inscribirse el titulo en el Registro.

Deben concurrir para su validez cuatro requisitos: 1.º, que la persona que la entrega sea su propietario; 2.º, que tenga su libre disposicion; 3.º, que exista una justa causa para ello, y 4.º, que, si es inmueble, se inscriba el titulo en el Registro de la propiedad. Esta doctrina tiene dos excepciones: la cosa dada en prenda puede ser objeto de tradicion despues del término en que debiera redimirse, á pesar de no ser su propietario el acreedor. La compra-venta requiere, además de la tradicion, el pago del precio, si no media pacto acerca de él.

¿Qué clases hay de tradicion?—Seis: la que se llama *verdadera*, la *longa manu*, la *brevi manu*, el *constitutum possessorium*, la *toma de posesion* y la *simbólica*.

La *verdadera* consiste en poner la cosa mueble en manos de aquél á quien se quiere traspasar. La *longa manu* consiste en ponerla á su vista, ó llevarla á su casa. La *brevi manu* tiene lugar cuando el que posee á nombre de otro adquiere la propiedad. El *constitutum possessorium* se efectúa en el caso contrario, siempre que el vendedor tiene la propiedad de la cosa, al tiempo del contrato. La *toma de posesion* se verifica cuando el trasfrente manifiesta su voluntad de entregársela. La *simbólica* consiste en la entrega de un objeto que represente á la cosa, ó facilite su posesion.

¿Qué es *cuasi tradicion*?—La tradicion de las cosas incorporeales que consiste en el ejercicio del derecho por parte de aquél á quien se quiere transmitir, y en la tolerancia del trasmitente.

¿Qué es *prescripcion*, y cuál es su fundamento?—Un modo de adquirir el dominio de cosa ajena poseida durante el tiempo y con los requisitos señalados por la ley, ó un modo de libertarse de una carga ó de una accion, por el trascurso del tiempo prescrito. Fúndase en que debe ser tenido por dueño aquél que ha poseído, y sido considerado como tal, durante largo tiempo; en el abandono y negligencia del dueño, y en la necesidad social de fijar el dominio de las cosas.

Cinco requisitos deben concurrir para su eficacia: buena fé, justo titulo, capacidad en la cosa, posesion continuada y tiempo legal.

La *buena fé* consiste en la creencia que tenemos de ser nuestra la cosa, desde su tradicion, y se presume siempre, hasta que se pruebe lo contrario. Es requisito esencialísimo hasta en la prescripcion inmemorial, segun

(1) Véase el tratado de minas, en la seccion de *Derecho administrativo*.

algunos. Se reputa *justo* el título, siendo de los traslativos del dominio; debiendo existir realmente, ó ser para el poseedor una realidad, á quien sólo perjudica el error del derecho (1). Para que perjudiquen á terceros, deben estar inscritos en el Registro de la propiedad.

Es necesaria la posesion *civil*, por la que nos suponemos dueños, y debe ser pacífica y no interrumpida natural, ni civilmente; esto es, continua, y sin que el emplazamiento para un juicio convierta la cosa en litigiosa. La del antecesor aprovecha al sucesor con tal que sea de buena fé, desde que han recibido la cosa.

¿Qué cosas son susceptibles de prescripción?—Todas las que no están exceptuadas por la ley; y son éstas las sagradas, santas y religiosas; la jurisdicción, las públicas, las forzadas y robadas, hasta que vuelvan á su dueño; las depositadas, dadas en prenda, en arrendamiento ó comodato; las de los hijos de familia, las dotes inestimadas, las que están poseídas en comun ó *pro indiviso*, respecto al condueño; los tributos, y las de menores y ausentes por causa pública ó estudios, con algunas limitaciones; porque si bien las de menores resisten la prescripción ordinaria que ha comenzado contra ellos, pueden ser objeto de la extraordinaria y aun de la ordinaria si comenzó en su antecesor, salvo la restitucion *in integrum* por el tiempo de su menor edad. Los ausentes pueden ejercitar este derecho en los cuatro años siguientes á su regreso, y sus herederos en el mismo período, contado desde la muerte de aquél, acaecida en la ausencia, si comenzó la prescripción durante ella.

¿Cuál es el tiempo legal de la prescripción?—Puede ser *ordinario* y *extraordinario*. El ordinario es de *tres años* en las cosas muebles, y en las inmuebles *diez años* entre presentes y *veinte* entre ausentes. El extraordinario es de *treinta, cuarenta* y *cien años*, según los casos.

Supónense presentes los que están en la misma provincia, y ausentes los que residen fuera de ella, doblándose el tiempo de la ausencia cuando el dueño haya estado presente y ausente. Este tiempo se computa, respecto á un tercero, desde la inscripción del título en el Registro de la propiedad.

Se prescriben por *treinta años* las cosas raíces enajenadas por el que sabe que no es dueño; las hurtadas ó robadas, y las de los menores y púberos. Exceptúanse: 1.^a, los inmuebles enajenados por el que no es dueño, con conocimiento y silencio de su verdadero señor, los cuales pueden ser objeto de la prescripción ordinaria, contada desde que aquél tuvo conocimiento de la enajenación; 2.^a, el ladrón no puede prescribir en ningún tiempo las cosas robadas, por carecer del requisito de la buena fé.

Se prescriben por *cuarenta años* las cosas patrimoniales de los pueblos y los inmuebles de las iglesias, y á los *cien años* las pertenecientes á la Iglesia romana.

¿Quiénes no pueden prescribir?—Los que poseen á nombre de otros, como el arrendatario, el depositario, el comodatario y el acreedor con prenda; los coherederos respecto á las cosas hereditarias; los condueños á las comunes, y el demente, si la prescripción comenzó desde su enfermedad. Pero la prescripción puede efectuarse por procurador.

¿Cuándo tiene lugar la *adjudicación judicial* y la *adquisición por pena*?—Aquella se realiza en los juicios divisorios decididos por sentencia ejecutoria, y ésta por el adulterio de la mujer, que es causa de adquisición para el marido, de los bienes dotes inestimados.

De los legados, fideicomisos y donaciones, que son también modos singulares de adquirir, trataremos más adelante.

(1) Hay sentencias del Tribunal Supremo que excluyen la sucesion de los títulos hábiles para prescribir, y otras que parecen indicar lo contrario.

Propiedad intelectual.

¿Qué es propiedad intelectual?—El dominio aplicado á los productos de la inteligencia, susceptibles de contratacion, segun la ley. El pensamiento manifestado por medio de formas materiales, constituye el objeto sobre que recae aquel derecho, extensivo á las obras literarias, las artísticas y á los inventos que impulsan el progreso de la industria.

¿Cómo se define la *propiedad literaria*?—El derecho exclusivo, limitado en el tiempo, que compete á los escritores para reproducir sus escritos ó autorizar su reproduccion, por medio de copias manuscritas, impresas, litografiadas ó de cualquier otro modo. Para adquirir la propiedad definida, los autores deben entregar dos ejemplares en el ministerio de Fomento, uno de los cuales pasa á la Biblioteca Nacional.

¿Qué opiniones existen acerca de la naturaleza de la propiedad intelectual?—Tres: una que la equipara, en todo, á la propiedad comun; otra que le niega condiciones de tal, por recaer sobre las ideas, que no son susceptibles de apropiacion, y la que, no creyéndola igual á la propiedad comun, sino con naturaleza propia, distinta de aquélla, por no juzgarla acreedora á la eficacia de la perpetuidad, concede á las personas á quienes corresponde el goce *temporal* y exclusivo de los derechos inherentes al dominio ordinario (1). En estas bases se funda la legislacion vigente en España, próxima á reformarse en los Cuerpos Colegisladores.

¿Qué tiempo dura esta propiedad?—La vida de los autores y un número determinado de años, que varia segun el género de las producciones.

Tienen la propiedad durante su vida, trasmisible á sus herederos por cincuenta años, los autores de obras originales, los traductores en verso ó prosa de obras escritas en lenguas vivas, los traductores en verso ó prosa de las escritas en lenguas muertas, los autores de discursos pronunciados en público, artículos y poesías publicadas en periódicos, reunidos unos y otros en coleccion, y los compositores de cartas geográficas. Tambien gozan de este derecho los autores de artículos y poesías originales, aunque no estén reunidas en coleccion; los caligrafos y dibujantes, cuando sus trabajos no se aplican á los tejidos ó artículos de uso comun, y los pintores y escultores en la reproduccion de sus obras por el grabado.

Tienen la propiedad por sólo cincuenta años, el Estado y las corporaciones científicas y artísticas legalmente reconocidas, en las obras que publiquen.

La conservan durante su vida, trasmisible á los herederos por veinticinco años, los autores de discursos pronunciados en público, los traductores en prosa de obras escritas en lenguas vivas, sin perjuicio del que compete á los de otras distintas traducciones, aunque sean hechas por el mismo autor, si es extranjero.

Tienen la propiedad por veinticinco años solamente, los que publican algun manuscrito, dibujo, mapa ó composicion musical que poseen ó para que son autorizados.

El Estado, en las colecciones legislativas, libros de rezo eclesiástico ú otras obras cuya publicacion se reserve, tiene la propiedad perpétuamente.

¿Qué se entiende por obras póstumas?—Las que ven la luz pública despues de la muerte de su autor, y las que, ya publicadas durante su vida, se reproducen despues, adicionadas ó corregidas por el mismo. La propiedad de éstas dura cincuenta, y veinticinco años, respectivamente.

¿Qué derechos disfrutaban los editores?—Los mismos que los autores,

(1) Como ampliacion de estas opiniones, véase el apéndice publicado al final.

cuando les suceden legítimamente en ellos, y en las obras anónimas ó seudónimas, sin perjuicio de los de propiedad declarados en favor de alguno.

¿Qué garantías tienen los autores, traductores y editores?—1.^a, la prohibición de reproducir las obras, ni aun comentadas ó aumentadas; 2.^a, la de extractarlas, no contentiendo el extracto una importancia tal que el gobierno lo considere de utilidad pública, en cuyo caso debe indemnizarse á aquéllos.

¿Qué particularidad ofrecen las producciones dramáticas?—Además de los derechos que crea su publicación como obras literarias, no pueden ser representadas sin licencia de su autor durante su vida, y veinticinco años después, sin la de sus sucesores.

¿Qué comprende la indemnización?—El valor de 2.000 ejemplares ó más, siempre que no llegue á este número la edición; y si excediere, el valor de 3.000 ó más; y si fuere mayor de este número, el valor de 4.000 ó más; computándose el precio de cada uno por lo que tengan los legítimos, decomisándose los fraudulentos, que deben entregarse al perjudicado, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad establecida en el Código. La indemnización de las obras dramáticas representadas sin licencia de su autor, consiste en una multa de 1.000 á 3.000 reales, duplicada si se ha cambiado el título de la obra.

¿Qué principios rigen en esta materia entre las naciones?—La propiedad literaria es objeto de convenios especiales, que suelen tener por base la ley de la reciprocidad.

¿Cómo se garantiza la propiedad de los inventos?—Otorgando á los inventores ciertos privilegios llamados de invención y de introducción, extensivos á lo que es absolutamente nuevo y á lo que lo es relativamente á España, y limitados á los medios de producción ó formas de ejecución. Se conceden por cinco años los de introducción, y los de invención por cinco, diez ó quince, al arbitrio de los concesionarios, siempre que justifiquen la práctica del invento ó procedimiento dentro de un año y un día, contando desde que se les concedió el privilegio.

Modos de perder el dominio.

¿Qué causas producen la extinción del dominio?—La voluntad del legislador; la desaparición de la cosa en que se ejerce, la expropiación forzosa, la condición resolutoria y la voluntad manifestada en los contratos. La voluntad del legislador se demuestra siempre que una disposición legal así lo determina, como en el caso de la prescripción. Se extingue, no sólo cuando la cosa ha dejado de existir realmente, sino cuando la ley la supone extinguida, por más que no lo esté como en la especificación. La expropiación forzosa tiene lugar cuando la cosa se declara necesaria para una obra de utilidad pública, indemnizando al propietario de su valor. La condición resolutoria extingue el dominio, porque su cumplimiento deja sin efecto, ó revoca el adquirido, por virtud del contrato en que se impuso, como la reventa cumplida. La propiedad intelectual y la de las minas (1) tienen además medios especiales de extinción. El consentimiento de los contratantes es, por lo demás, la forma más natural y lógica de la extinción de los derechos y obligaciones.

Servidumbres.

¿Qué es servidumbre?—«El derecho constituido en heredad ajena, por el que el señor de ella tiene que sufrir ó no hacer alguna cosa», cuya obliga-

(1) Véase el derecho administrativo.

ción pasiva constituye la naturaleza de este derecho *real*. Hay dos clases de servidumbres: *reales* y *personales*. Son *reales* las introducidas en favor de una heredad, y *personales* las que se constituyen á favor de una persona. Pueden ser voluntarias ó forzosas, segun que deban su origen al consentimiento ó á la imposición de ley, como las de aguas.

Las primeras exigen dos heredades próximas: una que presta el servicio, denominada por ello *predio sirviente*, y otra que es quien lo recibe, nombrada *predio dominante*. Las segundas no requieren mas que una heredad, porque el servicio en que consisten está establecido en favor de las personas. Divídense tambien en *continuas* y *discontinuas*, y en *afirmativas* y *negativas*. Llámense *continuas* los que se prestan siempre y sin interrupción; *discontinuas* las que se usan de tiempo en tiempo. Son *afirmativas* las que consisten en sufrir, y *negativas* las que consisten en no hacer. Todas tienen por fin el mejoramiento del predio dominante. Son indivisibles y van adheridas al predio sirviente.

Las servidumbres *reales* son *rústicas* y *urbanas*. Llámense *rústicas* las que pesan sobre una heredad en beneficio de otra, siendo ambas *rústicas*. Son las más comunes cuatro: la de *senda*, la de *carrera*, la de *vía* y la de *acueducto*. La primera consiste en sufrir que otro pase por nuestra heredad para ir á la suya, á pié ó á caballo, sólo ó acompañado. La segunda en que otro transite por nuestra heredad con carretas ó bestias cargadas. La tercera en sufrir que otro conduzca á su heredad todo lo necesario para su cultivo y utilidad por un tránsito prefijado por convenio, y de ocho pies de ancho en línea recta, y diez y seis en línea curva, si no se ha estipulado otra cosa. Y la cuarta en sufrir que otro conduzca agua á su heredad, quien debe cuidar de la reparacion del cauce. Existen además otras servidumbres que por su ménos frecuencia no enumeramos, contentándonos con decir que pueden ser objeto de ellas todos los servicios útiles á los predios.

Son *urbanas* las servidumbres que gravan á un edificio en favor de otro. Siete son las más comunes: 1.^a, la de sufrir que en nuestro edificio se construya pared ó columna en que descansa otro; 2.^a, la de sufrir que en nuestra casa se apoyen las vigas ó materiales de la del vecino; 3.^a, la de sufrir ventanas en edificio ajeno, que caigan sobre nuestra heredad; 4.^a, la prohibición de alzar nuestro edificio para no perjudicar las vistas ó luces del vecino; 5.^a, la de sufrir que el agua de lluvia caiga en nuestra heredad desde la del vecino gota á gota, ó por canales; 6.^a, la de sufrir que el vecino éntre á su casa por la nuestra, y 7.^a, la de *medianería*, que, si no está establecida en la ley porque no la conocieron los romanos, se halla sancionada por la costumbre.

¿Cuáles y cuántas son las servidumbres *personales*?—Son las que gravan á una heredad en favor de una persona, que puede aprovecharse del todo ó parte de sus frutos, y son tres: el *usufructo*, el *uso* y la *habitación*.

¿Qué es el usufructo?—El derecho personalísimo no enajenable, de aprovecharse de las producciones de una cosa ajena, sin cambiar su naturaleza. Por eso no pueden ser objeto de esta servidumbre las cosas fungibles, aunque si de un *cuasi usufructo*. Pertenecen al propietario los frutos pendientes al tiempo de concluirse la servidumbre, y una parte de los civiles proporcionada al tiempo del goce de la cosa, excepto de las rentas de los edificios, que se consideran como frutos naturales.

¿Qué deberes tiene el usufructuario?—1.^o, dar caución y formalizar inventario, cuando no es el padre ó la madre el usufructuario en los bienes del hijo, mientras no contrajerén segundas nupcias (1); 2.^o, procurar la

(1) Ley de matrimonio civil é hipotecaria.

conservacion de la cosa con la diligencia de un buen padre de familia, reemplazando el arbolado, sustituyendo las reses muertas con las nacidas y reparando los edificios; 3.º, devolver la cosa sin menoscabo al terminar la servidumbre.

¿Qué es servidumbre de uso?—Un derecho *real* introducido á favor de una persona, que consiste en el aprovechamiento de los frutos de una cosa ajena, que sean indispensables para satisfacer las necesidades del usuario y de su familia. Estos frutos no pueden ser destinados á otros objetos, y reconocen por límite las circunstancias del usuario.

¿Qué deberes tiene éste?—Prestar caucion, el mismo cuidado que el usufructuario, y pagar las pensiones y gastos necesarios, siempre que el uso abrace todos los frutos.

¿Qué es servidumbre de habitacion?—Un derecho *real* constituido en favor de una persona, que consiste en morar en casa ajena, sin menoscabarla.

¿Cuál es la naturaleza de las servidumbres *personales*?—El estar sujeta su duracion á la vida de la persona que las goza, quien debe respetar siempre la integridad de la cosa que las presta, y cuidarla como buen padre de familia.

¿Quiénes pueden constituir las servidumbres?—Por regla general todos los que tienen el dominio, sea en comun ó exclusivamente. Segun la ley hipotecaria, las servidumbres constituidas por el enfiteuta son obligatorias para el dominio *directo*, cuando recobra las cosas que han caido en comiso.

¿Por qué medios se constituyen?—Por *contrato*, *última voluntad*, *prescripcion* y *adjudicacion*. La voluntad del dueño, manifestada en convenios ó en disposiciones testamentarias, basta para establecerlas, siempre que al convenio siga la *cuasi-tradicion*, circunstancia no exigida en las disposiciones testamentarias, que son eficaces desde la muerte de su autor. El uso de la cosa, consentido por el dueño, y con las circunstancias de la *prescripcion*, por diez años entre presentes y veinte entre ausentes, si las servidumbres son *continuas* y por el tiempo inmemorial si son *discontinuas*, es medio de constitucion. La comunion del dominio hace necesaria la division de la propiedad, así como que el juez, al verificarla, facilite su disfrute con la imposicion y *adjudicacion* de las servidumbres, á los condueños.

¿Qué constitucion peculiar tiene el *usufructo* además de la general?—El que tiene el padre en los bienes adventicios de los hijos, se constituye por el ministerio de la ley, debiendo inscribirse en el Registro á nombre de éstos, quiénes pueden exigir de su padre que asegure dichos bienes con hipoteca especial, en la forma expuesta al tratar de los peculios.

¿Qué requisito debe cumplirse para la efectiva constitucion de las servidumbres?—Como todos los derechos *reales*, deben inscribirse en el Registro de la propiedad para que perjudiquen á tercero.

¿Qué causas producen la extincion de las servidumbres?—1.ª, la *consolidacion*, que tiene lugar cuando se reunen en una persona la servidumbre y la propiedad; 2.ª, el *tiempo*, si la servidumbre es temporal; 3.ª, la *renuncia* expresa ó tácita del acreedor; 4.ª, la *prescripcion inmemorial* en las rústicas *continuas*, de veinte años en las *discontinuas*, y de diez y veinte, respectivamente, en las *urbanas* y *personales*; 5.ª, la extincion de alguno de los prédios en las *reales*.

La enajenacion absoluta y definitiva, no la cesion temporal de los frutos; la alteracion sustancial de la cosa, y la muerte de la persona á quien se deben, son modos de extincion propios de las servidumbres *personales*.

Servidumbres forzosas.

La ley de aguas, fundada en el interés mayor de los pueblos y en el mejoramiento de la industria y de la agricultura, reconoció y regularizó varias clases de servidumbres forzosas: las naturales, la de acueducto, la de estribo de presa, la de abrevadero y la de camino de sirga y otras sobre los predios ribereños.

Llámanse servidumbres *naturales*, en materia de aguas, las que prestan los predios inferiores ó más bajos, para dar salida ó paso á las aguas procedentes de los superiores.

La de *acueducto*, que consiste tambien en dar paso á las aguas por nuestra heredad, y servicio por las márgenes de aquél, puede tener por fin el interés público ó el privado, como el establecimiento ó aumento de riegos, de baños ó fábricas, la desecacion de terrenos y lagunas y la salida de aguas. Están exceptuados de esta servidumbre, los edificios, jardines, huertos y acueductos preexistentes. Puede ser perpétua, ó por más de diez años, y temporal. Se decreta por el gobierno ó sus delegados, segun la importancia de la servidumbre.

Se extingue ésta por consolidacion, terminacion del plazo, no uso del derecho durante veinte años y expropiacion forzosa por causa de utilidad pública.

La servidumbre de *estribo de presa*, parada ó partidur de aguas, consiste en consentir que el que la necesita para tomar agua y conducirla á sus predios, apoye las obras en terreno nuestro. Impone este gravámen el gobierno, cuando son del dominio público las aguas, y el gobernador, si son del privado, previo expediente é indemnizacion á los perjudicados.

La de *abrevaderos y saca de aguas* se impone en favor de un caserio ó pueblo, por utilidad pública, y lleva consigo necesariamente la de paso para conducir el agua, las personas y los ganados. No puede imponerse sobre los pozos ordinarios, las cisternas ó algibes, ni sobre los edificios ó terrenos cercados de pared.

Sobre las riberas de los ríos pesan ciertas servidumbres, como la de *camino de sirga*, que consiste en sufrir un camino destinado á conducir las embarcaciones tiradas por una maroma ó sirga. Este camino tendrá uno ó dos metros segun que esté destinado á peatones ó á caballerías, y en él no se pueden hacer plantaciones, siembras, zanjas, cercas, ni tener nada que estorbe la navegacion ó acarreo de la sirga.

Gravan tambien los predios ribereños las servidumbres de amarre de embarcaciones de paso; depósito temporal de maderas, mercancías, pesca y materias procedentes de la limpieza de los ríos y barrancos, y se convierten á veces aquéllas en tendadero de redes.

En éstas, como en las anteriores, debe preceder á su constitucion, el abono de daños y perjuicios, como indemnizacion.

Otras servidumbres, ó limitaciones del derecho de propiedad, se conocen, aunque ménos trascendentales, que dán lugar á *interdictos*.

Consisten en no poder prolongar las canales de nuestra casa, en perjuicio de la finca del vecino; hacer ninguna obra que impida el curso de las aguas antes corrientes, en perjuicio de otro; construir ni levantar la casa, fuera de la línea y más alta de lo que marquen las ordenanzas municipales, así como en no continuar poseyendo un edificio ruinoso que debe demoler el propietario, ó demolerá, en su defecto, la administracion municipal.

De los censos como derechos reales.

¿Qué es *censo*?—Un derecho *real* que consiste en la facultad de exigir del poseedor de una finca ajena, cierta pension ó *cánon*. El acreedor se lla-

ma censalista, y censatario el deudor. Como todo derecho *real*, sigue á la cosa, cualquiera que sea su poseedor, y puede considerarse como una desmembracion del dominio, semejante á las servidumbres, que se constituye por última voluntad y por contrato.

Hay tres clases de censos: *enfiteúticos*, *consignativos* (1) y *reservativos*.

¿Qué es censo *enfiteútico*?—El derecho de exigir perpétuamente ó por largo tiempo, de una finca ajena, cuyo dominio *útil* hemos traspasado, una pension anual estipulada en reconocimiento del dominio *directo* (2).

En Aragon se llaman *tributaciones*: y los llamados *foros* de Galicia y Asturias, tienen muchas semejanzas con los *enfiteús* (3).

¿Qué derecho tiene el censalista?—1.º, el dominio *directo*, por el que percibe la pension; 2.º, el de reversion de la cosa con sus gravámenes en caso de comiso; 3.º, el llamado de *tanteo* ó *fadiga*; 4.º, el de *laudemio* ó *luismo*; 5.º, el de retracto.

Hay lugar al *comiso*, por falta del pago de la pension de tres anualidades correlativas; al de dos si el censalista es la Iglesia, y cuando se enajena ó hipoteca la cosa á persona que presente más dificultades para el pago. Consiste el derecho de *tanteo* ó *fadiga*, en la preferencia que tiene el censalista á todo comprador por el mismo precio, para lo cual debe requerirse, suponiéndose que renuncia á él si deja trascurrir dos meses desde el requerimiento. No surte efecto contra tercero que haya inscrito su derecho en el Registro de la propiedad. Es el *luismo* ó *laudemio* el 2 por 100 que debe pagar al censalista todo nuevo adquirente del dominio censido.

¿Qué derechos y deberes corresponden al censuario?—1.º, la adquisicion del dominio *útil*, que le faculta para su disfrute hasta que deja de pagar el *cánon* ó pension; 2.º, el de venderla, salvo el derecho de *tanteo* del dominio *directo*; hipotecarla á persona hábil; gravarla con servidumbres; constituir dotes y disponer de ella por sucesion ó mejora y poder retraer el dominio *directo*. En estos dos últimos casos no hay lugar al *laudemio*.

Debe pagar todas las cargas y tributos, por lo mismo que percibe las utilidades.

Se extingue el *enfiteús*, si es temporal, por la conclusion del tiempo convenido en su estipulacion, y además por la falta del pago de la pension; por la consolidacion, por la redencion, por la desaparicion ó alteracion de la cosa, en términos que no haya quedado la octava parte, por la renuncia del *enfiteúta* y por falta de cumplimiento de las condiciones que deben concurrir en su enajenacion. Cuando caiga la finca en comiso, quedan subsistentes las hipotecas y derechos reales impuestos por el *enfiteúta*.

¿Qué es censo *consignativo*?—Un derecho *real* constituido *perpétua* ó *temporalmente* en cosa ajena, que consiste en la facultad de exigir de su dueño una pension determinada impuesta sobre ella. Cuando el censuario es el gobierno, recibe el nombre de *juro*. Data en Castilla del siglo XV.

Las siguientes causas extinguen el censo *consignativo*: 1.º, la desaparicion total de la cosa censida, ó la parcial, si lo que de ella quedare fuese insuficiente para soportar el pago de la pension, siempre que la cosa se deteriorare por dolo, culpa, negligencia ó voluntad del censatario. En caso de que deba origen á otra causa, si el rédito del capital que represente la finca, graduado al tanto por ciento con que se constituyó el censo, basta para su pago, no podrá desampararla el censuario, ni pedir la reduccion de las cargas; y si no alcanzare á cubrirlas, puede desampararla ó exigir la reduccion de las pensiones, que podrá aumentarse á medida que aumente el valor de la finca, no excediendo de su primitivo importe; 2.º, la falta de

(1) Algunos subdividen el *consignativo* en *real*, *personal* y *mixto*.

(2) Véase acerca de su origen y utilidad, lo expuesto en el *Derecho romano*.

(3) Véase el Apéndice final.

produccion de la finca, independiente de la voluntad del censatario, renaciendo el censo si se volviere productiva. La doctrina del caso anterior es aplicable á éste cuando la falta de produccion es debida al dolo ó culpa de aquél; 3.º, la renuncia en favor del censualista, si el rédito del capital que represente el valor del prédio es suficiente para cubrir el de las pensiones; 4.º, la prescripcion de treinta años; 5.º la redencion (1).

¿Qué doctrina establece la ley hipotecaria respecto á las pensiones atrasadas?—Cuando la finca acensuada pasó á un tercero, podrán reclamarse de él, ó de la finca en su caso, las dos últimas anualidades y la parte vencida de la corriente, sin perjuicio de reclamar el resto del antiguo censatario. Las sucesivas se deben por el poseedor de la finca.

¿Qué es censo *reservativo*?—Un derecho constituido en cosa ajena, que consiste en la exaccion de una pension determinada por virtud y en reconocimiento de la cesion del dominio *directo* y *útil*. En él no existen los derechos de *tanteo*, *laudemio* y *comiso* (2), y el censatario puede libertarse del gravámen dimitiendo la finca en favor del censualista, cuyas diferencias le separan del enfiteúsis.

¿Qué es derecho de *superficie*?—El que se adquiere en un edificio construido en terreno poseido por arrendamiento ó previa concesion de su dueño. Puede ser temporal ó perpétuo, y el superficiario, que es el arrendatario, tiene facultad para enajenarle ó gravarle, debiendo pagar la pension al dueño que es el censualista.

Los *censos*, como las servidumbres y demás derechos *reales*, deben inscribirse en el Registro de la propiedad.

Posesion.

¿Qué es la posesion?—Considerada civilmente, es un derecho *real* que consiste en la ocupacion de las cosas en virtud de un título justo y con buena fé. Cuando no existe ésta, la posesion es puramente *material*, á que tambien se llama *tenencia*. Si las cosas son incorporeales, llámase *cuasi-posesion*, limitada en tal caso al ejercicio del derecho y á la aquiescencia de aquél á quien se perjudica con dicho ejercicio, como en las servidumbres.

Sin el justo título y la buena fé, que se presume mientras no se pruebe lo contrario, la posesion no es eficaz, y con estos requisitos sólo cede ante el más fuerte del dominio.

¿Cuáles son sus efectos?—Facilita la prescripcion; hace nacer la presuncion de dueño en favor del poseedor, hasta que se presente el que lo es; le hace de mejor condicion en el juicio; destruye toda demanda posesoria si cuenta un año y un dia de duracion; legitima la consuncion de los frutos anteriores á la demanda, aun cuando sean naturales, si no han enriquecido al poseedor; y autoriza para percibir el importe de los gastos *necesarios* y de los *útiles*, existiendo buena fé, y para sacar las obras que han sido objeto de los *voluntarios*, en el mismo caso. Cuando media mala fé, el poseedor pierde los gastos *voluntarios*; puede recobrar los *útiles* y tiene derecho al reintegro de los *necesarios*.

La posesion se interrumpe *natural* y *civilmente*. *Civilmente* se interrumpe por el emplazamiento hecho sobre la misma cosa y por la interposicion de una demanda. *Naturalmente*, cuando el poseedor es privado de la posesion por fuerza ó hurto, ó estando ausente, no se le recibe en la cosa

(1) Hemos extractado las opiniones más segundas; lo cual quiere decir que hay disparidad en algunos puntos.

(2) El Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de Diciembre de 1864 y 9 de Febrero de 1871, declaró que el pacto del comiso, por defecto de pago, no era válido en estos censos.

á su regreso, ó una inundacion la cubre é imposibilita su ejercicio; cuando los que poseen á nombre del dueño la enajenan ó son lanzados de ella, y cuando éste la abandona.

Se pierde tambien por la enajenacion y abandono voluntario de las cosas poseidas.

Del derecho hereditario.

¿De cuántas maneras se adquiere este derecho?—Por *sucesion testada ó intestada*, segun provenga de la voluntad del hombre ó de la ley.

Se llama *sucesion* al conjunto jurídico de derechos y obligaciones que por su naturaleza son transmisibles á otra persona, la cual recibe el nombre de heredero.

La *sucesion testada* tiene lugar por *testamento*, por *codicilo*, por *memorias testamentarias* y por *mandas ó legados*.

¿Qué es *testamento*?—Un acto solemne revocable, en el que se dispone de los bienes para despues de la muerte. Si esta disposicion es pública, recibe el nombre de *nuncupativo ó abierto*; si es secreta y reservada, el de *cerrado ó escrito*; formas que requieren diversas solemnidades.

¿Es de derecho civil la facultad de testar?—Unos afirman que sí, y que puede abolirla la ley; otros creen que no. Reconocen en ella un origen natural, dimanado del principio de la propiedad, profundamente arraigado en la conciencia, legislable por el derecho positivo; pero no susceptible de abolicion legitima y justa.—Leibnitz la supone de origen divino; y lo cierto es que no se le conoce origen en el tiempo, ni el país en que comenzó á usarse.

El *testamento nuncupativo ó abierto* se debe otorgar en un sólo acto, ante escribano, ó sin su intervencion. Cuando interviene aquél, deben concurrir *tres* testigos que vean, oigan y entiendan al testador, y sean vecinos del lugar del otorgamiento. Cuando no interviene escribano, son necesarios *cinco* testigos de la misma vecindad, y áun *tres* si no hubiere cinco vecinos; y *siete*, aunque no sean vecinos. No es de esencia la escritura.

El *escrito ó cerrado* necesita la presencia de escribano y *siete* testigos, que firmarán la carpeta ó cubierta que contenga la disposicion del testador, la cual debe ser escrita; razon por que, el que no sabe escribir no puede testar en esta forma. La ignorancia ó imposibilidad de los testigos puede suplirse firmando unos por otros, para lo cual deben poder ó saber hacerlo, cuando ménos *dos* de los presenciales al acto.

Llámanse *testamentos comunes* los que deben sujetarse en su formacion á las solemnidades expuestas; y *privilegiados* los que se separan de esta norma, como los del ciego y del militar. El primero requiere *cinco* testigos á lo ménos, y el segundo sólo exige que conste la voluntad del otorgante en cualquiera forma (1). El testamento del pobre, no es privilegiado.

¿Qué es *codicilo*?—«Un acto ménos solemne, revocable, en que el testador dispone de parte de los bienes para despues de la muerte.» Pueden ser *cerrados ó abiertos*, como los testamentos. Unos y otros requieren las mismas solemnidades que los testamentos *nuncupativos*. Se diferencian de los testamentos en que, además de no contener disposicion relativa á todos los bienes, los *codicilos cerrados* exigen ménos solemnidades que los testamentos de igual indole, si bien deben constar aquéllas en la cubierta, como en éstos. Diferéncianse tambien en que, en los *codicilos*, no puede instituirse heredero, ni adicionarse con una condicion la institucion hecha en testamento, ni desheredarse; pero sí dejar fideicomisos.

(1) Puede usar del papel simple, escribirle el otorgante ó un tercero.

¿Qué son *memorias testamentarias*?—Las disposiciones parciales que hace el testador en un papel cualquiera, mencionadas en el testamento y declaradas auténticas. Deben su origen á la práctica, y están sancionadas por la jurisprudencia legítimamente introducida, aunque son muy dadas á fraude.

¿Quiénes no pueden ser testigos en las últimas voluntades?—Los impúberos, las mujeres, los locos, sordos, mudos y pródigos; los cristianos renegados, los ascendientes y descendientes respectivamente si no gozan del fuero de guerra; los herederos instituidos y sus parientes hasta el cuarto grado en los testamentos nuncupativos. No pueden serlo los impúberos; los locos, á no ser en intervalos lúcidos; los pródigos; los mudos y los sordos de nacimiento, si no supieren escribir; los herejes y los religiosos profesos.

¿Cuál es el testamento por *comisario*?—El otorgado á nombre de otro, en virtud de poder, solemnizado con todas las formalidades de un testamento. Esta forma de testar tiene dos limitaciones. Cuando el poderdante no determina las facultades que trasfiere al comisario, éste no puede instituir heredero, desheredar, mejorar, sustituir ni nombrar tutores; quedando reducida su comision al cumplimiento de las cargas de conciencia de aquel pago de deudas, distribucion del quinto por su alma, si hubiere herederos, y en caso negativo, á consumir la herencia en sufragios.

El *comisario* termina dentro de cuatro, seis y doce meses, en los casos respectivos de hallarse en el pueblo del otorgamiento del poder, en otro del reino, ó fuera de él; pasados los cuales, la herencia se trasmite *ab intestato*, salvo el caso en que el testador haya designado heredero, ó manifestado determinadamente su voluntad, que será respetada.

¿Cuáles son los testamentos llamados de *mancomun*?—Los que otorgan en un mismo acto, y bajo las mismas solemnidades externas, dos personas, que suelen ser, generalmente, marido y mujer. No ligan, irrevocablemente, la libertad del superviviente.

¿Quiénes pueden testar?—Todos los que no tienen prohibicion legal; y la tienen los menores de 14 años siendo varones y de 12 si son hembras; los locos, excepto en el caso probado de lucidez; los pródigos declarados judicialmente; los sordo-mudos que no sepan escribir ó no puedan expresar bien claramente su voluntad; los religiosos profesos en clausura.

¿Es necesaria la reduccion de los testamentos á escritura *pública*?—Aunque no es requisito esencial en los *nuncupativos*, todos, así como los codicilos, deben serlo (1). Tiene derecho á pedir la escritura, en los *nuncupativos*, cualquiera que tenga interés en el testamento, ó haya recibido encargo del testador, ó pueda representar sin poder á aquéllos. En el testamento *cerrado*, todo el que presume que se le deja algo.

La ley de Enjuiciamiento civil determina la tramitacion, por ser esto materia propia del procedimiento.

¿Quiénes no pueden ser herederos?—No pueden serlo *absolutamente* los religiosos profesos, por razon del veto de pobreza; las corporaciones no autorizadas y los institutos monásticos, de beneficencia é iglesias, respecto á bienes inmuebles. No pueden serlo *relativamente*, los hijos de *dañado y punible ayuntamiento*, de cuya madre sólo pueden heredar el quinto; los *sacrilegos*, que nada pueden recibir de sus padres, ni de sus parientes; el último confesor, su iglesia, religion, conventos y parientes.

¿Qué clases hay de herederos?—*Forzosos y voluntarios*. Son *forzosos* los descendientes legítimos, en las cuatro quintas partes de la herencia; los ascendientes, en las dos terceras; y los hijos *naturales y espurios*, en la de su

(1) Las memorias testamentarias, declaradas auténticas, deben protocolizarse en el del notario autorizante del testamento.

madre, que no dejare legítimos. Los *naturales* pueden ser preferidos á los ascendientes en la herencia del padre.

¿Qué es *institucion* de heredero?—El señalamiento que el testador hace de la persona que ha de continuarle jurídicamente. Dede ser *clara*, *cierta* y sin palabras denigrantes. Puede instituirse más de un heredero por iguales ó desiguales partes; ser extensiva la institucion á todos los parientes ó á los pobres. Puede hacerse *pura* ó *condicionalmente*, desde y hasta *cierto día*, y aún por la vida del heredero. Es *condicional* cuando á la institucion se agrega la existencia de algun hecho del que se hace depender su validez, debiendo referirse la condicion á tiempo futuro. Es *pura* cuando no contiene condicion; y desde y hasta *cierto tiempo*, cuando éste se determina. La institucion de heredero, no es necesaria para la validez del testamento.

¿Qué clases hay de condiciones?—Posibles, que pueden ser *potestativas*, *casuales* y *mixtas*; é *imposibles*, que pueden ser por *naturaleza*, *de hecho*, por *derecho* y por *ambigüedad*. Son *potestativas* las que quedan á merced del heredero; son *casuales* las que dependen de la suerte, y *mixtas* las que están sujetas á ambas cosas. Son *imposibles por naturaleza* las que no están conformes con el órden natural; lo son *de hecho* las que, no siéndolo naturalmente, no pueden, no obstante, cumplirse; lo son *por derecho* las que no están conformes con la moral y con las leyes, y, finalmente, lo son por *ambigüedad* las que, por efecto de su oscura redaccion, no pueden entenderse y apreciarse.

Las *posibles*, impuestas á los extraños, son de obligatorio cumplimiento, por regla general, pues las *potestativas*, no cumplidas por un acto independiente de la voluntad del heredero, y las *mixtas*, por falta ó por culpa de aquél de quien en parte dependen, se tendrán por cumplidas. Cuando se imponen á los herederos forzosos, se consideran como no puestas; pues á éstos sólo puede imponérseles *potestativas*, fuera de la legítima. Las *imposibles por derecho* y *por naturaleza*, también se tienen por no puestas; anulando la institucion las *de hecho* y las *ambiguas*.

¿Qué otra clasificacion se hace de las condiciones?—Pueden ser *afirmativas* y *negativas*, *expresas* y *tácitas*, *copulativas* y *disyuntivas*. Las primeras consisten en hacer; las segundas, en no hacer; las terceras tienen lugar cuando se formulan explícita y señaladamente; las cuartas, en el caso contrario; las quintas, cuando son varias y todas deben cumplirse, y las sextas, cuando, siendo más de una, satisface la voluntad del imponente el cumplimiento de cualquiera de ellas, á eleccion del heredero. El cumplimiento de las *negativas* debe afianzarse; y se considera válida la de no casarse con determinada persona.

¿A qué se da el nombre de sustituciones?—A los segundos llamamientos que hace el heredero, que deben ser eficaces, en defecto de los primeros.

¿Cuántas clases se conocen?—Seis: *vulgar*, *pupilar*, *ejemplar*, *compendiosa*, *brevilocua* y *fideicomisaria*.

El llamamiento que hace el testador de un segundo heredero, para el caso en que el instituido no llegue á serlo, se llama *sustitucion vulgar*.

El llamamiento de un segundo heredero, hecho por el padre al hijo no emancipado, para el caso de que muera impúbero y siendo heredero, se llama *sustitucion pupilar*. Es el testamento del hijo, limitado en sus efectos al tiempo de la pubertad, extensivo al desheredado. Trasfiere al sustituto toda la herencia del sustituido, si el padre no es arrogador, en cuyo caso aquél heredará tan sólo los bienes que fueren procedentes de éste, salvo el respeto debido á la legítima materna. Y se hace ineficaz

por la muerte del hijo anterior á la del padre, por llegar aquél á la pubertad ó emanciparse, y por la nulidad del testamento de éste.

¿Que es sustitucion *ejemplar*?—El llamamiento de un segundo heredero, hecho por los ascendientes, para el caso en que algun descendiente loco muera sin testamento. Es extensiva á los emancipados, porque no es consecuencia de la patria potestad. Deben ser nombrados sustitutos ejemplares los hijos y descendientes del enajenado, los ascendientes, los hermanos y los extraños, en el orden en que quedan expuestos. Queda sin efecto por la revocacion del testamento, por volverse cuerdo el enfermo y por el nacimiento de un hijo del loco.

Dáse el nombre de institucion *compendiosa* á la fórmula que abraza todos los modos de sustituir; de sustitucion *brevilocua* á la que tiene lugar cuando se sustituyen entre sí los instituidos; y de institucion *fideicomisaria* á la institucion de una persona, con encargo de que entregue á otra la herencia y pudiendo designar ésta pública ó confidencialmente. La instituida, se llama heredero *fiduciario*, el cual puede quedar relevado de dar cuenta del desempeño de su encargo (1), y aquélla á quien se debe entregar *heredero fideicomisario*, que puede ser el alma del testador. No puede perjudicar á las legítimas.

¿Qué es *desheredacion*?—La privacion de la legítima, en virtud de justa causa. Para que pueda tener lugar, es necesario que, además de la justa causa, aquél á quien se quiere desheredar sea mayor de diez años y medio.

Debe probarla el testador ó sus herederos. La desheredacion del hijo no afecta á los nietos. Debe hacerse *puramente* de toda la herencia y con expresion de la causa.

¿Qué fundamento reconocen las causas justas de desheredacion?—Hechos graves contra la vida, la honra y los bienes del padre ó del hijo; actos infamantes; el abandono de religion; la celebracion del matrimonio clandestino del hijo, pero no la falta de consentimiento paterno.

¿Puede anularse la desheredacion expresa de los hermanos?—Sí; cuando son postergados á una persona torpe ó infamada, á no ser que mediere justa causa para su desheredacion, como haber maquinado la muerte del testador, ó le hubiere acusado criminalmente ó causado ó intentado causarle la pérdida de la mayor parte de sus bienes.

Mandas ó legados.

¿Qué es *legado* ó *manda*?—La porcion de bienes que el testador deja á persona determinada. Puede constituirse, en testamento y en codicilo, *pura y condicionalmente*; y *desde y hasta cierto tiempo*; y aún en *memorias testamentarias*. El puro y el á tiempo cierto, trasmite el dominio de la cosa inmediatamente despues de la muerte del testador: el de género, no lo trasmite hasta que se determina la cosa; y el condicional trata que se cumpla la condicion.

Además de estas formas, puede dejarse con *causa, modo y demostracion*, y puede ser de *cosa propia* ó *ajena*, de *liberacion*, de *crédito* y de *deuda*; de *especie*, de *género* y de *cantidad*.

¿Qué es legado *con causa*?—Aquél que expresa el motivo por que se constituye. La causa falsa no vicia el legado.

¿Qué es legado *de modo*?—Es aquél en que se determina el fin propuesto por el testador.

(1) Es opinable si está vigente la cuarta *trebellánica*, que correspondia al heredero *fiduciario*.

¿Qué es legado de *demonstracion*?—Aquél en que se explica y describe, aunque sea inexactamente, pero con certeza, la cosa legada.

¿Qué efectos produce el legado de *cosa ajena*?—Obliga al heredero á adquirir la de su dueño y entregarla al legatario, ó su estimacion, si no pudiese conseguirla. Si estuviere en poder de segundo por efecto de un título lucrativo, nada debe dársele; y si es debido á un título oneroso, tiene derecho á la estimacion. Si la cosa fuere objeto de diversos legados, tiene igual derecho, hasta que reciba de un heredero la misma cosa. En caso de estar empeñada, debe libertarla el heredero cuando lo está por todo su valor, y el legatario cuando lo esté por ménos y lo ignore el testador.

¿Qué es legado de *género*?—Aquél en que se lega una cosa que puede ser representada por otra, segun queda explicado al tratar de las *cosas fungibles*. Si la determinacion de éstas se halla fijada por la naturaleza, la eleccion corresponde al legatario; si, por el contrario, su determinacion es debida al hombre, pertenece al heredero la designacion, siempre que, tanto en uno como en otro caso, el testador no haya legado tambien la *opcion*, ó sea el derecho de elegir.

¿Qué es legado de *especie*?—Aquél que consiste en una cosa individual y determinada que no puede ser sustituida por otra no fungible.

¿Qué es legado de *cantidad*?—Aquél en que determina su cuantía.

¿Qué es legado de *liberacion*?—El que consiste en el perdon de una deuda, ó en la renuncia de la documentacion que la justifica.

¿Qué es legado de *deuda*?—El que consiste en dejar á un acreedor lo mismo que se le debe, convirtiéndose, por ello, en pura y liquida la deuda que antes no lo era.

¿Qué es legado de *crédito*?—El que consiste en dejar á otro lo que se nos debe, por medio de la cesion de acciones ó de la documentacion.

¿Qué cosas pueden *legarse*?—No sólo las presentes, sino las futuras, que estén en el comercio al tiempo de la muerte del testador.

¿Quiénes pueden legar y ser legatarios?—Los que pueden hacer testamento y ser herederos.

¿Tiene lugar en ellas la *cuarta falcidia*?—La opinion más seguida, afirma que no, por haber cesado la causa que introdujo aquélla, que era la necesidad de la institucion de heredero. La opinion del Tribunal Supremo parece ser favorable á la existencia de dicho derecho.

¿Existen hoy las mandas llamadas *forzosas*?—Desaparecieron por la ley de presupuestos de 1845.

¿Qué causas extinguen las mandas?—La revocacion expresa ó tácita de la disposicion testamentaria en que se dejan, manifestada por su cancelacion, por la donacion, modificacion, desaparicion y adquisicion lucrativa, por el legatario, de la cosa legada, y la muerte del legatario anterior á la del testador, ó á la condicion.

¿A quién se pueden imponer las mandas?—A todo aquél á quien se deje algo en el testamento ó codicilo, con tal que no excedan de lo dejado.

Donaciones mortis causa.

¿Qué es donacion por *causa de muerte*?—Un acto de liberalidad en virtud del cual se trasfiere á otro una cosa, subordinada su adquisicion efectiva á la época de la muerte del donante. De ella depende la extension y eficacia de la donacion. Puede otorgarse con efectos *suspensivos* ó *resolutorios*, y reconoce por causa, frecuentemente, la existencia de un inminente peligro.

¿Cuándo tiene lugar con condicion *suspensiva*?—Cuando se solemniza diciendo: «Te dono tal cosa, si muero en el naufragio.»

¿Cuándo se otorga con condicion *resolutoria*?—Si se dice: «Te dono tal cosa, que me devolverás si no perezco en el naufragio.»

¿Qué efectos producen ambas?—La primera crea una esperanza á favor

del donatario, que sólo adquiere el dominio, sin necesidad de tradicion, ocurriendo la muerte del donante. La segunda, seguida de la tradicion, trasfiere un dominio revocable, que se consolida si la muerte del donante se verifica.

¿En qué se diferencian estas donaciones de las mandas?—Principalmente en que, según se ha dicho, la tradicion tiene lugar á veces en vida del donante, y á veces es necesaria la voluntad del donatario, circunstancias que no concurren nunca en las mandas.

¿Quiénes pueden hacerlas, y en que forma?—Todos los que pueden testar, pueden otorgarlas en testamento ó en codicilo.

¿Por qué causas se entienden revocadas?—Por no perecer el donante en el peligro que motivó la donacion; por haber modificado su voluntad, y por fallecimiento del donatario, anterior al del donante.

Mejoras: derecho de acrecer, por virtud de testamento.

¿A qué se dá el nombre de *mejora*?—A «la porcion de bienes que los ascendientes dejan á sus descendientes fuera de la legitima.» Deben su origen al Fuero-Juzgo. No se conocen en Aragon, Cataluña y Navarra.

¿Qué es *legítima*?—La parte del caudal hereditario, perteneciente á los descendientes y ascendientes en sus respectivas sucesiones, consistente en las cuatro quintas partes la de aquéllos, y en las dos terceras la de éstos. Los ascendientes pueden dejar á sus descendientes, además del quinto, el tercio de sus bienes, porque éste viene á ser una legitima de todos los descendientes.

Son revocables hasta la muerte del mejorante. Exceptuáanse las que, *constituidas por contrato*, fueren seguidas de la tradicion de la cosa ó del documento en que se formalizaron, ó debieren origen á contrato oneroso con un tercero, con tal que el mejorante no se hubiera reservado la facultad de revocarlas, ó el mejorado, en los dos primeros casos, no haya incurrido en causa legal de ingratitud.

¿De qué modos puede mejorarse?—*Expresa ó tácitamente*, en testamento y por contrato. Se entiende *mejora tácita*, la donacion hecha al hijo. Puede ser *simple ó con causa*, según que nada se diga ó se exprese algo acerca del motivo por que se mejora.

¿A qué tiempo debe atenderse para la deduccion de las *mejoras*, y qué reglas se siguen para la imputacion de las *tácitas*?—Deben deducirse del caudal hereditario al tiempo de la muerte del donante, é imputarse las *tácitas simples*, primero en el tercio, despues en el quinto y últimamente en la *legítima*; y las *tácitas causales*, primero en la *legítima*, luego en el tercio y por último en el quinto.

¿Qué efectos producen las *promesas de mejorar* y de *no mejorar*?—La de *mejorar*, hecha en virtud de contrato oneroso con un tercero ó por caso de matrimonio, debe ser oumplida. La de *no mejorar*, debe serlo tambien, si consta por escritura pública. Cuando se promete en beneficio de un hijo determinado, puede ser éste ú otro el mejorado, siempre que aquél, no habiéndolo sido él, no salga perjudicado por la mejora, en su *legítima larga*.

¿Qué disposiciones rigen acerca de las hijas?—No pueden ser mejoradas *tácita ni expresamente en ninguna manera de contrato, por via de dote ó casamiento*, siendo nulas las promesas que se le hicieren en tal sentido. Las de *no mejorar* á los demás hijos, son válidas, porque no las hacen de mejor condicion.

¿A qué tiempo debe atenderse para la deduccion de la *dote*?—Derogada por la pragmática de Madrid y la ley de Toro, que facultaba á las dotadas para elegir el tiempo de la constitucion de aquélla ó el de la muerte del

testador, hoy es opinion seguida por respetables autores que sólo éste debe tenerse presente para deducirla y computarla.

¿Cómo debe deducirse la mejora del *tercio y quinto*?—Se saca primero el *quinto*, si la mejora del *tercio* es revocable ó el testador no ha dispuesto lo contrario; y luego se detrae el *tercio*. Se deduce primeramente éste, cuando lo previene la costumbre ó el fuero.

Del quinto salen los gastos del entierro y funerales, si no ha dispuesto el difunto otra cosa

¿Pueden gravarse las mejoras?—Sí; con cualquier gravámen que no sea perpétuo.

¿Quiénes pueden mejorar?—Por testamento, los que pueden otorgarlo; y por contrato, los hábiles para contraer.

¿Cómo debe hacerse el pago de la mejora?—Si el mejorante determinó bienes, con ellos debe satisfacerse; si no los determinó, debe verificarse con los de la herencia, sin que pueda tener lugar en dinero mientras aquéllos existan. La facultad de señalarlos, es exclusiva del mejorante.

¿Existe entre nosotros el derecho de *acreecer*?—Sí; pero no necesario, sino hijo de la voluntad del testador. Tiene lugar cuando existen varios coherederos, comejorados ó colegatarios, llamados á una misma cosa, y consiste en que los supervivientes adquieran la parte de los muertos antes que el testador ó mejorante, y de los que hayan hecho renuncia de ella, ó que por otra causa no puedan obtenerla. No se verifica en las mejoras irrevocables, pero sí en las donaciones *mortis causa*.

¿Qué circunstancia debe llenarse?—La nombrada *conjuncion*, que consiste en el llamamiento de dos ó más personas á una misma cosa, formulado en distintos períodos ó en uno mismo, de cuya forma nacen los *conjuntos en la cosa, conjuntos en las palabras, y conjuntos en la cosa y en las palabras*.

¿Qué reglas se siguen en éstos casos?—Las mismas que quedan expuestas al tratar de esta materia en el *Derecho romano* (1).

¿Quiénes están llamados á cumplir y á ejecutar la voluntad de los testadores?—Las personas denominadas testamentarios ó albaceas, designadas frecuentemente por aquéllos de entre los que tienen la facultad de testar.

¿Qué clases hay de albaceas?—*Legítimos y dativos*. Es *legítimo* el heredero instituido y el que lo es abintestato, si han aceptado la herencia; y *dativo* el nombrado por el juez, cuando no hubo testamento ni existieron herederos dentro del cuarto grado. No es obligatorio el cargo, pero, admitido, exige exacto cumplimiento en los deberes á él inherentes, y se extingue por la muerte, impotencia ó remocion del testamentario, y por la conclusion del tiempo señalado para cumplir su cometido.

¿Cuáles son los deberes principales?—El respeto á la voluntad de los testadores, que deben cumplir en el primer año despues de su muerte, bajo pena de perder la porcion hereditaria que aquél les dejare, quedando á salvo la *legítima*, si se les debiere realizar las ventas en pública subasta, con prohibicion de figurar como compradores, y el pago de las mandas piadosas y de alimentos.

(1) Véase lo dicho en la Seccion de *Derecho romano*.

Anulacion de las últimas voluntades.

¿Qué causas invalidan los testamentos y los codicilos?—El otorgamiento de los posteriores, si no lo causa la falsa creencia de la muerte del primer heredero instituido, ó el testamento anterior no contuviere cláusula derogatoria, pues en este caso, debe revocarlo *señaladamente*; la destruccion del testamento *cerrado*, hecha á sabiendas por el otorgante; y la del *nuncupativo*, ejecutada con indudable intencion de revocarlo.

¿Qué causas invalidan sólo la institucion del heredero?—El nombramiento de los extraños, cuando los hay forzosos; el nacimiento de un hijo, posterior al otorgamiento del testamento ó á la muerte de su padre, y la declaracion judicial de testamento *inoficioso*, que consiste en su rescision, fundada en ser falsa la causa de la desheredacion de los parientes.

¿Quién puede entablar esta accion?—Los herederos forzosos y los hermanos postergados á personas torpes que han sido desheredados sin causa justa para ello; esto es, por virtud de una falsa causa.

¿Cuándo pierden este derecho?—Cuando consienten tácita ó expresamente y por cualquier concepto en el testamento que les perjudica, lo pierden *absolutamente*, y sólo tienen accion á exigir el complemento de su *legítima*, si algo se hubiere dado á las personas á quienes se debe; y por el trascurso de cinco años, tiempo de duracion de la accion, sin perjuicio de la restitution *in integrum* de los menores.

Sucesiones intestadas.

¿Cuándo tiene lugar la sucesion *intestada*?—Cuando el difunto no ha instituido heredero; cuando el testador hubiere instituido á personas extrañas, ó desheredado sin justa causa, y cuando el testamento es nulo ó se anula con respecto á la institucion de heredero.

¿Qué órdenes de llamamiento establece la ley en la sucesion *intestada*?—Tres: el de descendientes, el de ascendientes y el de colaterales. Fúndase este orden en el amor de la familia, que primero desciende, luego asciende y por fin se extiende á los lados; principio aceptado por Justiniano.

¿De cuántos modos suceden los descendientes?—De dos: por derecho *propio* y por *representacion*; formas que reciben los nombres de *sucesion in capita* y *sucesion in stirpes*.

¿Qué preferencias se observan en la sucesion de los descendientes?—Son llamados, en primer lugar, los hijos legítimos y legitimados por subsiguiente matrimonio, que suceden *in capita*. En concurrencia con ellos, suceden *in stirpes* los nietos. En segundo lugar entran á heredar los descendientes de grados ulteriores, siempre por derecho de representacion; y en defecto de éstos, los naturales legitimados con autorizacion real para suceder, cuyo derecho desaparece con el nacimiento de descendientes legítimos, cuando la herencia es de los ascendientes.

¿Qué reglas se siguen en la sucesion de las madres?—Son llamados primeramente los hijos legítimos ó legitimados; en su defecto, los naturales, y á falta de ambos, los espurios. Los de dano y punible ayuntamiento no tienen derecho á la sucesion testada ni intestada.

¿Qué reglas se siguen en la sucesion de los padres naturales?—Cuando no dejan hijos legítimos, les suceden los naturales; pero sólo en la sexta parte de su herencia, de la cual deben entregar á la madre la mitad (4).

(1) Doctrina reconocida por el Tribunal Supremo.

Los hijos abortivos, incestuosos, adulterinos y sacrilegos, están excluidos de la sucesion de sus padres.

¿Cuándo suceden los hijos adoptivos?—La opinion más fundada parece ser que deben ser preferidos á los parientes laterales, no habiendo ascendientes ó descendientes legítimos, aceptada implícitamente por el Tribunal Supremo.

¿Cuándo es llamado á suceder el orden de ascendientes?—No habiendo personas del orden de descendientes legítimos, ni descendientes naturales reconocidos.

¿Qué reglas se siguen en esta sucesion?—La proximidad del grado civil, sin distincion de líneas. Habiendo dos ó más que ocupen el mismo, la herencia se divide por mitad entre ambas líneas, entrando á suceder en cada una de ellas la persona ó personas que se encuentren en el grado llamado por la ley, sin atender á la procedencia de los bienes, á no ser que se pruebe el *fuero de troncalidad*, ó separacion de los paternos y maternos.

¿Qué reglas se siguen en la sucesion de los *ilegítimos*?—No habiendo descendientes, ni existiendo la madre del finado, el padre *natural* es el llamado preferentemente á los colaterales, y no existiendo aquél, ó no siendo conocido, heredará la abuela materna natural, aunque el nieto tenga hermanos uterinos legítimos (1). En los demás casos son aplicables las reglas que quedan expuestas anteriormente, debiendo sólo advertir que los hermanos y sobrinos del difunto, nunca concurren á la herencia con los ascendientes de éste.

¿Cuándo tiene lugar la sucesion de los colaterales?—En defecto de descendientes y ascendientes.

¿Qué reglas se siguen en el llamamiento de este tercer orden?—Heredan, en *primer término*, los hermanos por derecho propio, en concurrencia con los sobrinos que representan á su padre, si son todos de doble vínculo; en *segundo*, los hermanos y sobrinos maternos ó paternos; los primeros en los bienes procedentes de su abuelo, y los segundos en los que derivan de la madre, estando limitada la preferencia del doble vínculo á éstos; en *tercero*, los tíos del difunto; en *cuarto*, los primos hermanos; en *quinto*, los hijos naturales y sus descendientes, en la herencia paterna; en *sexto*, el cónyuge no divorciado, de quien pasarán los bienes de abolengo á los laterales; en *sétimo*, los demás parientes de esta clase, hasta el décimo grado civil inclusive, segun su proximidad, y en defecto de todos los expuestos, el Estado (2).

¿Quiénes están llamados á heredar á los hijos naturales?—En primer lugar los hermanos *uterinos*; no habiéndolos, los legítimos *consanguíneos*, y finalmente, los *naturales* del mismo género. Cuando hubiere más de un hijo natural por parte de madre, el más próximo heredará al difunto.

¿Qué derecho tiene la viuda pobre en la sucesion testada ó intestada de su marido?—La *cuarta* llamada *marital*, que consiste en la cuarta parte de los bienes de aquél, siempre que no cuente con recursos bastantes para vivir con decencia. No puede exceder de 100 libras de oro, cuyo importe regularán prudencialmente los tribunales, atendiendo á la diversidad actual de la moneda. Se considera como deuda legal, y debe ser segregada de todo el caudal hereditario.

¿La sucesion traspasa por sí sola el dominio?—No; es necesario que vaya seguida de la aceptacion de la herencia, por lo cual el heredero de-

(1) Segun la doctrina del Tribunal Supremo, declarada en sentencia de 24 de Febrero de 1877, la abuela materna de un hijo natural es preferida en la sucesion de éste, muerto intestado, á los hermanos legítimos uterinos.

(2) Ley de 16 de Mayo de 1835.

muestra su voluntad de continuar la persona del difunto, y además que aquél tenga capacidad para serlo al tiempo de la muerte de éste, si es heredero *forzoso*; y del otorgamiento del testamento, de la muerte y de la aceptación, si es *voluntario*.

¿De cuántas maneras puede hacerse la aceptación?—Expresa ó tácitamente; esto es, por medio de palabras ó de hechos. Puede también hacerse *simplemente* ó á beneficio de inventario y de deliberar.

Se acepta *simplemente* cuando el heredero, sin ninguna clase de reservas, entra desde luego en la herencia y confunde su patrimonio con el del difunto, respondiendo con él á todas las obligaciones hereditarias; á beneficio de inventario cuando se recibe la herencia, no obligándose á responder de las cargas mas que con los bienes en que consista aquélla; y á beneficio de deliberar cuando se puede meditar, durante algun tiempo, si debe ó no aceptarse.

¿Qué es adición ó aceptación de la herencia?—La manifestación del heredero, que puede contratar, de que quiere suceder al difunto.

¿Con qué formalidades y cuándo debe formarse el inventario?—Si los bienes hereditarios existen en un mismo pueblo, debe comenzar su formación dentro de los treinta días siguientes á la noticia que el heredero tuviere de su nombramiento, y terminarse en tres meses. Si los bienes no radicaren en un mismo punto, se le concede además un año, teniéndose por renunciado el beneficio por el trascurso de estos términos. La intervención de escribano, herederos, cónyuge, legatarios parciales y citación de los acreedores, cuando es judicial, son formalidades que deben llenarse en el procedimiento.

Debe ser judicial el inventario siempre que haya menores ó incapacitados, si no lo ha prohibido el testador; cuando hay herederos ausentes no representados legítimamente; cuando la herencia no está intervenida, y si lo solicita algun acreedor ú otra parte legítima.

¿Qué ventajas reporta el heredero que acepta la herencia con este beneficio?—Además de discretar su patrimonio de el del difunto, no puede ser inquietado por los legatarios y acreedores durante su formación, por lo cual puede detraer de la herencia lo que éste le debía.

¿Qué derechos corresponden á los hijos cuando sus padres contraen segundo matrimonio?—El llamado de *reserva*, en fuerza del cual el cónyuge que contrae segundo matrimonio debe conservar, á favor de los hijos habidos en el primero, lo que adquirió del cónyuge difunto y de aquéllos, por título de sucesión. Los abuelos no están obligados á reservar los bienes heredados de sus nietos, porque es obligación limitada á los padres respecto á los bienes de sus hijos.

¿Tiene obligación de reservar la viuda que viviere deshonestamente?—Autores de gran nota opinan que no; si bien perderá todo los bienes que haya adquirido de su marido, en pena de su mala vida, que pasarán á los herederos de aquél.

¿Los bienes procedentes de los hijos del primer matrimonio son siempre reservables?—Cuando el cónyuge superviviente los heredó por sucesión intestada, lo son siempre; y si la sucesión ha sido testada, están sujetos á reserva las dos terceras partes, en que suceden por disposición de la ley (1).

¿Qué garantía tienen las reservas?—Los hijos del primer matrimonio tienen hipoteca legal sobre los bienes de sus padres y sobre los de su pa-

(1) Es discutible esta opinion.

drastro, por los bienes que la mujer deba reservar y administre, cuya hipoteca están obligados a constituir *especialmente*, y debe inscribirse en el Registro. El consentimiento del marido ó de los hijos, no hace desaparecer la obligación de reservar.

Las enajenaciones de bienes reservables, hechas antes del segundo matrimonio, es discutible si son válidas ó nulas. La jurisprudencia del Supremo, que se inclina á la negativa, y la Ley hipotecaria, que deja entrever la afirmativa, presentan una oposicion irreconciliable.

¿Quiénes son indignos para suceder y recibir mandas?—El heredero que abre el testamento del difunto, muerto violentamente, ó toma posesion de la herencia, antes de formular la acusacion criminal contra el matador, ó si ha tenido participacion en el homicidio, el que ha cometido adulterio con la mujer de aquél; el que voluntariamente persigue como falso el testamento en que ha sido instituido, declarado válido por ejecutoria; los hijos desnaturalizados que abandonan á sus padres dementes; la viuda que vive deshonestamente, respecto á la herencia de su marido; y, por fin, aquéllos que, sabiendo que una persona tiene incapacidad legal, le entregan, no obstante, la herencia de otra por su encargo.

Particion de la herencia.

¿Qué es *particion*?—El acto por el cual se liquida, distribuye y adjudica el caudal hereditario, entre las personas llamadas á heredarlo. No son objeto de partijas las cosas nocivas é inmóviles, que deben destruirse; ni la documentacion indivisible, la cual debe conservarse por el mayor porcionista; en su defecto, por el más digno; en caso de igualdad, por el varon más anciano, y, por último, por aquél á quien elija la suerte, sin perjuicio de las copias que pueden sacar los demás herederos, para lo cual tienen indiscutible derecho. La *particion* comprende la *liquidacion*, la *colacion* y la *adjudicacion* de bienes.

¿Qué reglas deben tenerse presentes al formar las particiones?—Debe comenzarse por averiguar el importe de todo el caudal, clasificando los bienes, segun su naturaleza y luego hacer de él las deducciones necesarias para satisfacer á cada persona la cuantia del derecho que tenga en la herencia que se llama *liquidacion*, por el órden siguiente: 1.º, los bienes dotales si son *inestimados*, y los *estimados*, si no hubiere acreedores con hipoteca expresa anterior, y constaren como efectivos, y no como *confesados*; cuando hay más de una dote, la más antigua debe ser preferida á la moderna *estimada*; 2.º, las *arras* que constituyen aumento de dote y fueron incluidas en la escritura dotal; 3.º, los *parafernales*; 4.º, las donaciones espousalicias que no forman parte de la dote; 5.º, el capital aportado por el marido y lo que ha adquirido despues por título lucrativo; 6.º, los *gananciales*, de los que deben pagarse las deudas y obligaciones de la sociedad conyugal, y segregarse las dotes y donaciones *propter nupcias*, constituidas por el padre; 7.º, las deudas hereditarias; 8.º, las *mejoras* en la forma expuesta al tratar de ellas, debiendo advertir que los gastos del funeral y misas se reputan carga del *quinto*, y á veces del *tercio*.

¿A qué se llama *colacion* de bienes?—Al acto de traer al acervo comun lo que los descendientes legítimos recibieron en vida de sus padres, para que se tenga presente su valor en la adjudicacion de las legítimas. Son colacionables todos los bienes adquiridos de los padres, excepto lo que dió á aquéllos por razon de alimentos.

Puede hacerse la colacion de tres modos: por *manifestacion* de la cosa, por su *imputacion* en el haber del que debe colacionar, y por *liberacion*, que consiste en tener por cumplida la promesa que aún no lo estaba.

¿Cuáles es la última operacion de las particiones?—La *adjudicacion* de

bienes en pago del haber que cada interesado debe llevar, en la cual debe procurarse la igualdad y evitarse la subdivision de las fincas.

La adjudicacion debe inscribirse, en cuanto á los inmuebles, en el Registro de la propiedad del partido correspondiente, para consolidar el dominio en la persona del heredero contra terceros adquirentes.

¿De cuántas maneras puede hacerse la particion?—*Judicial y extrajudicialmente*. La primera liga á todos al saneamiento por *eviccion*; la segunda produce este efecto, si en ella no han recibido perjuicio las legítimas. Para pedir su nulidad, debe no habersele prestado aprobacion.

Vinculaciones (1). Patronatos y Capellanías.

¿Qué es *vinculacion*?—La limitacion perpétua impuesta á la libertad de disponer de los bienes, por estar ligados á una série de determinados sucesores. Las principales vinculaciones son: los *mayorazgos*, los *patronatos* y las *capellanías*. Son contrarias al principio de libertad que debe regular la propiedad, y deben su origen á una costumbre muy antigua.

¿Qué era el *mayorazgo*?—«Una vinculacion civil y perpétua en que se sucede por el órden de la fundacion, ó en su defecto por el que establece la ley de Partida para la sucesion de la corona.» Trae su origen del derecho de primogenitura de los hebreos, de los fideicomisos familiares de los romanos y del sistema feudal. No los han conocido los fueros.

¿Es conveniente esta institucion?—No, porque exime los bienes vinculados de la libre contratacion, que no pueden enajenarse, y establece una infundada desigualdad entre los hijos, que puede ser causa de odios y disensiones en la familia; razones que se han tenido presentes para decretar su abolicion, en 1820.

¿Cómo se fundaban y con qué formalidades?—Por testamento y por contrato, previa licencia real. Debían contener dos extremos: prohibicion de enajenar, y llamamientos á la sucesion con carácter de perpetuidad.

Para su otorgamiento se exigia que los bienes destinados á la dotacion del mayorazgo produjesen una renta de 3.000. ducados ó más; que la familia del fundador fuese distinguida; que se procurase dotarlos con efectos de rédito fijo, y que se pagase el 15 por 100 primeramente, y despues el 25, por causa de amortizacion.

Eran indivisibles, pero revocables hasta la muerte del testador, bien lo hubieran sido por testamento ó por contrato, siempre que no se entregaran las cosas vinculadas, ó las escrituras de fundacion, ó no debiera ésta su origen á una causa onerosa con un tercero. Aun en estos tres casos podian revocarse, si la licencia real ó el mismo fundador reservaban esta facultad.

¿Qué clases habia de *mayorazgos*?—Dividianse en *regulares* é *irregulares*. Llamábanse *regulares* los que se ajustaban, en el órden de suceder, á las reglas que se siguen en la sucesion de la corona, y constituian el tipo regulador; é *irregulares* á los que se separaban de ella, cuya irregularidad daba origen á los llamados de *agnacion verdadera* ó *rigorosa*; de *agnacion fingida*; de *masculinidad*; de *femineidad*, de *eleccion*; *alternativos*, *saluarios* y de *segunda genitura*.

¿Por qué principios se regian los *regulares*?—Los llamamientos generales comprendian todas las líneas, sin embargo de que, extinguida, las llamadas exclusivamente, la propiedad se consideraba libre. El mayorazgo

(1) Esta materia, despues de las leyes desvinculadoras y del tiempo trascurrido desde su restablecimiento en 1836, es ménos interesante para la práctica, porque son pocos ya los casos que ésta ofrece.

era, por regla general, *indivisible*, puesto que sólo se dividía en el caso de que, existiendo dos gemelos, se ignorase cuál de los dos había nacido el primero. Los bienes eran *inajenables*, excepto por causa de utilidad pública, de necesidad y utilidad de mayorazgo, previa la licencia real y con citación del inmediato sucesor. La sucesión tenía lugar por derecho hereditario respecto al fundador, y por derecho de sangre respecto á los demás poseedores; adquiriéndose la posesión por ministerio de la ley, sin necesidad de tradición, cualquiera que sean las condiciones en que se encuentre el sucesor. Los hijos legítimos, los legitimados por subsiguiente matrimonio y los de matrimonio putativo, eran los que sucedían en el mayorazgo, prefiriéndose los primeros á los segundos, si eran anteriores á la legitimación. Los legitimados con autorización real y los naturales, necesitaban haber sido llamados por el fundador. Los adoptivos estaban excluidos. La proximidad del parentesco debía buscarse en el sucesor y no en el fundador. Las construcciones, reparaciones y aumentos hechos en los bienes amayorazgados cedían en beneficio del mayorazgo, en los que no tenía lugar la doctrina de los gananciales, ni aún en los frutos de los bienes. La línea, el grado, el sexo y la mayor edad, eran el fundamento del derecho de sucesión, en la cuál tenía lugar la representación, á no estar excluida expresamente.

¿Cuál era el mayorazgo de *agnación verdadera*?—Aquél en que se llamaba á suceder á los varones, hijos de otros, con exclusión de las hembras y de los que nacieren de ellas. En caso de duda, debe reputarse de *masculinidad*.

¿Cuál era el de *agnación fingida*?—Aquél en que se sucedía del mismo modo que en el anterior, pudiendo hacerse el primer llamamiento en favor de un extraño, de un cognado ó de una hembra.

¿Cuál era el de *masculinidad*?—Aquél á cuyo disfrute sólo eran llamados los varones, aunque procedieran de hembra.

¿Cuál era el de *femineidad*?—Aquél en que se establecía la preferencia de las hembras.

¿Cuál era el de *elección*?—Aquél en que se consignaba, á favor del poseedor, la facultad de elegir entre los parientes del fundador, y en su defecto entre los extraños, la persona que había de sucederle.

¿Cuál era el *alternativo*?—Aquél en que sucedían un pariente de una línea, luego el de otra; y luego otro de la primera, y así sucesivamente.

¿Cuál era el *saltuario*?—Aquél en cuya sucesión servía de norma la mayor edad, ó alguna otra circunstancia especial.

¿Cuál era el de *segunda genitura*?—Aquél en que eran preferidos los hermanos segundos.

¿Qué otra división se hacía de los mayorazgos?—Dividíanse en *compatibles* é *incompatibles*. Eran *compatibles* los que podían recaer en una misma persona, é *incompatibles* aquéllos que se excluían.

¿Cuántas clases había de *incompatibilidad*?—*Incompatibilidad*, por la ley y por el hombre, *real* ó *lineal* y *personal*; *absoluta* y *respectiva*; *para adquirir* y *para retener*. La ley hacía incompatibles dos mayorazgos que por sucesión de los padres recayeran en un hijo, siempre que uno de ellos contare 58.823 reales de renta, cuya prohibición no ha sido observada. La *voluntad* del hombre puede establecer la incompatibilidad de los mayorazgos expresa ó tácitamente, imponiéndoles condiciones que impidan que puedan estar juntos. Cuando se excluye de la sucesión á toda una línea, la incompatibilidad es *real* ó *lineal*; si sólo se excluye á una persona, la incompatibilidad es *personal*. Si el fundador prohíbe que se una á ningún otro, hay incompatibilidad *absoluta*; si la prohibición es limitada á alguno, la hay *respectiva*. Por último, si se prohíbe la facultad de adquirir y de retener los mayorazgos incompatibles, se dice que hay incapacidad de *adquirir* ó de *retener*.

¿Cuándo se abolieron los mayorazgos?—Como todas las vinculaciones familiares, fueron objeto de las leyes desamortizadoras de 1820, restablecidas en 1836.

¿Cuáles son las principales reglas que se adoptaron en su abolición?—1.º, el poseedor del mayorazgo puede disponer, desde luego, de la mitad de sus bienes, debiendo reservar la otra mitad para el inmediato sucesor, quien dispondrá de ella con entera libertad. Para que la enajenación del todo ó parte de la mitad del poseedor sea válida, debe hacerse con consentimiento del sucesor inmediato; 2.º, la misma división y reserva de la mitad tiene lugar en los fideicomisos familiares, reconociendo por base la cuantía de lo que percibe cada pariente del fundador; 3.º, cuando son de *elección absoluta*, los poseedores pueden disponer de la totalidad de los bienes, sin reserva alguna; cuando es *limitada* ó circunscrita á una familia, está en el deber de reservar, para ésta, la mitad, porque en ella existe un derecho sagrado que se lastimaría si nada se le diera, y 4.º, cuando resulte probado que los poseedores no tienen inmediatos sucesores legítimos, disponen de todo el mayorazgo. Otras muchas reglas establecen las leyes desamortizadoras, que pueden consultarse al efecto en todos los AA. y comentaristas de aquéllas (1).

¿Cómo se prueban los mayorazgos?—Por su fundación escrita, por testigos y por costumbre inmemorial.

¿Qué es *patronato*?—El derecho de presentar ó de ser presentado, para la obtención de un cargo eclesiástico, de instrucción ó de beneficencia, y de gozar de ciertas preeminencias útiles, onerosas y honoríficas. A la facultad de presentar se llama *patronato activo*, y al derecho de ser presentado, *patronato pasivo*. El primero puede ser *eclesiástico*, *laical* y *mixto*; *hereditario*, *gentilicio* y *mixto*; *real* y *personal* (2).

¿Qué es *patronato eclesiástico*, *laical* y *mixto*?—Es *eclesiástico* el que corresponde á una dignidad ú oficio eclesiástico; es *laical* el inherente á un patrimonio, cualquiera que sea su poseedor; llámase *mixto* el que participa de los dos, como cuando una dignidad y un lego son llamados á ejercerlo.

¿Qué es *patronato hereditario*, *gentilicio* y *mixto*?—Es *hereditario* aquél de que puede disponer el testador con absoluta libertad; es *gentilicio* aquél que debe ser ejercido entre los individuos de una familia, y se dá el nombre de *mixto* al que reúne las dos circunstancias de heredero y pariente.

¿Qué es *patronato real* y *personal*?—Es *real* aquél que se considera inherente á determinado fundo, y debe ser ejercido por el poseedor de éste; y es *personal* el que corresponde á una persona ó familia, sin atender á otras circunstancias.

¿Quiénes pueden ser *patronos*?—Todos, sin distinción de edad, ni sexo, excepto los que están fuera del gremio de la Iglesia, y las corporaciones ú otras personas jurídicas.

¿Por qué principio se regula el *derecho de representación*?—Diversas reglas se siguen, según la naturaleza del patronato. Si es *eclesiástico*, debe formularse en el término de seis meses, no pudiendo presentar mas que á una persona; hecho lo cual, concluyen las facultades del patrono. Si es *lego*, debe verificarla en el término de cuatro meses, pudiendo designar á varias personas sucesivamente, quedando reservada la elección al obispo. Cuando por alguna cosa no puede tener lugar la presentación en los términos

(1) Recomendamos los comentarios de D. Joaquín Francisco Pacheco.

(2) Véase el derecho canónico.

preñados, el derecho pasa al ordinario en los beneficios eclesiásticos y capellanías *colativas*; mas si la causa fuere un litigio con éste, no pierde el patrono el derecho de presentacion, apesar del trascurso de dichos términos.

¿Qué condiciones debe tener el presentado?—Debe ser idóneo á juicio del obispo, cuyo fallo es apelable. En los patronatos *mixtos* el principio que se sigue consiste en buscar siempre lo más favorable al patrono.

¿Cómo se adquiere el patronato?—Los autores enumeran tres modos de constitucion: la *fundacion*, la *dotacion* y la *prescripcion*.

¿Qué se entiende por *fundacion*?—La cesion del fundo en que debe levantarse un santuario ó su construcción.

¿Qué comprende la *dotacion*?—El señalamiento y adjudicacion de rentas ó otros medios para el sostenimiento de las obligaciones y atenciones del beneficio ó iglesia.

¿Qué *prescripcion* es necesaria para adquirir el patronato?—La *inmemorial* cuando la iglesia es libre, y la de cuarenta años si el patronato existe en un tercero.

¿Por qué medios se trasmite?—Por todos los que reconoce el derecho, segun la naturaleza del patronato. Asi, pues, si es *real* sigue las vicisitudes por que pase el dominio del fundo á que va unido; debiendo observarse que, siendo por naturaleza *indivisible*, cuando el fundo se divide por sucesion, los herederos sucederán en él por *representacion*.

¿Por qué causas se extingue?—Por la ruina de la iglesia ó santuario, á cuya reparacion se niega el patrono; su union á otra, ó conversion en colegiata ó monasterio, consentidas por aquél; la muerte y las lesiones causadas por el patrono al clérigo; el no uso del derecho, y la conclusion de la familia para que fué creado.

¿Qué patronatos fueron objeto de las leyes desvinculadoras?—Los *pasivos* laicales, con posesion de bienes determinados.

¿Qué es *capellania*?—Una fundacion piadosa que tiene por objeto la celebracion anual de determinado número de misas, segun y en la forma acordada por el fundador. Pueden ser *mercenarias* ó *colativas*. Son *mercenarias* las que se constituyen sin intervencion eclesiástica, por lo cual no están sujetas á su autoridad, limitada únicamente á la investigacion del cumplimiento de las cargas. Son *colativas* las que necesitan la intervencion eclesiástica, y como requisito indispensable la *colacion* ó *institucion canónica* dada por el obispo al capellan. Espiritualizan los bienes y se constituyen como título de ordenacion.

¿Qué clases hay de *capellanías mercenarias*?—Dos: unas que pueden ser obtenidas por cualquiera persona, sin distincion de sexo ni estado, cuyas cargas puede cumplir un capellan nombrado al efecto, y reciben generalmente el nombre de *capellanías laicales*, *memorias de misas*, *legado pío* y *patronato real y lego*; otras en quiénes la administracion, usufructo y cumplimiento de obligaciones, está á cargo de un capellan.

¿Qué derecho tiene el patronato en las *capellanías colativas*?—Solamente el de nombrar el capellan que ha de servirlos, acomodándose á las prescripciones de la fundacion. Al obispo pertenece la vigilancia sobre el cumplimiento de las cargas y conservacion de las fincas, exámen de la aptitud del elegido y, como ya queda dicho, la institucion canónica.

¿Cuáles de estas capellanías pueden servir de título de ordenacion?—Las *colativas* y no las *mercenarias*. Se necesitan para obtenerlas contar catorce años, si no tienen *cura de almas*, y áun bastan siete, si así lo dispuso el fundador; y veinticinco, si son *beneficios curados*.

¿Cuáles han sido objeto de la desamortizacion?—Las *colativas*.

¿Cuáles son las reglas principales que se han adoptado?—1.^a, los bienes de las que fijan los llamamientos en determinadas familias deben distribuirse entre todos sus individuos que ocupen la mejor línea y el grado más próximo á su fundador, sin distincion de sexo, edad, condicion ni estado, con la obligacion de cumplir las cargas que pesen sobre ellos; 2.^a, si la fundacion llama á varias líneas alternativamente, deben dividirse aquéllos en tantas porciones iguales cuantas sean éstas, siendo aplicable á la distribucion parcial de cada una la regla anterior; 3.^a, si el patronato activo es sólo *familiar*, la adjudicacion tendrá lugar exclusivamente entre los individuos de la familia que á él tienen derecho. Estas adjudicaciones corresponden á la jurisdiccion ordinaria. La ley de 19 de Agosto de 1844 que acordó, entre otras, las anteriores reglas, fué derogada por el decreto de 30 de Abril de 1852, restablecida en 6 de Febrero de 1855 y suspendida nuevamente en 28 de Enero de 1856 (1).

(1) En 24 de Junio de 1867 se ha publicado como ley del reino un convenio con la Santa Sede, sobre capellanías colativas de sangre, memorias, obras pías y otras fundaciones análogas, y en el día siguiente la instruccion para ejecutar lo convenido. Por la extension de ambos documentos no los insertamos en este libro.

Debemos advertir tambien, que las reglas expuestas, tomadas de la ley de 19 de Agosto de 1841, llamadas de capellanías, sólo son aplicables á los bienes reclamados antes del decreto de 28 de Noviembre de 1856, segun el citado convenio que está vigente.

DE LAS OBLIGACIONES.

Contratos, pactos y condiciones.

¿Qué es obligación?—«Un vínculo del derecho por el que somos compelidos á dar ó hacer alguna cosa.» La persona que debe dar ó hacer se llama *deudor*, y la que debe recibir se llama *acreedor*. Son derechos á la cosa.

¿Qué clases de obligaciones se conocen?—Tres: *meramente naturales*, *meramente civiles* y *mixtas*. Es obligación *natural* la que se funda en principios de justicia universal y no está reconocida y sancionada por la ley. Es obligación *civil* la que, teniendo fuerza legal, puede ser eludida por una excepcion. Es *mixta* la que participa de los dos caractéres; esto es, la que, fundada en la justicia *universal*, tiene fuerza civil de obligar.

¿Cuáles son sus efectos?—Las *meramente naturales* no son, por regla general, exigibles, pudiendo ser garantidas por medio de fianzas. Las *meramente civiles* no producen efecto, probada la excepcion que las perjudica. Las *mixtas* originan una accion que tiene por fin su cumplimiento, y constituyen las verdaderas obligaciones.

¿Cuál es el origen de las obligaciones?—La *equidad* y la *voluntad* del hombre, cuya voluntad, si se manifiesta en un hecho lícito, produce el *contrato* y el *cuasi contrato*, y si se ostenta en un hecho ilícito, motiva el *delito* y la *falta*. La voluntad es la ley del contrato, que se probará por los medios de prueba reconocidos por la ley de Enjuiciamiento civil (1).

¿Qué es, pues, el *contrato*?—La convencion estipulada entre dos ó más personas hábiles, sobre un hecho lícito exigible.

¿Cómo se dividen los *contratos*?—En *unilaterales*, *bilaterales*, *intermedios*, *onerosos*, *lucrativos*, *commutativos*, *aleatorios*, *reales*, *verbales*, *literales* y *consensuales*. Es *unilateral* ó de derecho estricto, el que obliga solamente á uno de los otorgantes, contra quien nace una accion *directa*. Es *bilateral* ó de buena fé el que obliga á ambos otorgantes á favor y en contra, del cual nacen reciprocas acciones *directas*. Es *intermedio* aquél que obliga, desde luego, á uno de los otorgantes, pudiendo el otro quedar obligado por un hecho posterior.

¿Qué son *contratos lucrativos* y *onerosos*?—Llámanse *lucrativos* cuando producen efectos ventajosos, y *onerosos* cuando no los producen; pudiendo reunirse en uno mismo los dos caractéres, segun el punto de vista personal bajo el que se consideren.

¿Qué son *contratos commutativos* y *aleatorios*?—*Commutativos* son aquéllos en que los otorgantes constituyen una obligacion cierta y determinada, y *aleatorios* los que dependen, en sus efectos, de un acontecimiento incierto. Esta division puede considerarse como una subdivision de los *contratos onerosos*.

¿Qué son *contratos reales*?—Los que necesitan, además del consentimiento, la *tradicion* de la cosa ó la *prestacion* del hecho que forma su objeto. Son *contratos consensuales* los que se perfeccionan por sólo el consentimiento. Llámanse *verbales* los que toman fuerza de la congruencia entre

(1) Véase el tratado de procedimientos.

la pregunta y la respuesta, por cuyo medio se contraen; y *literales* los que nacen de una obligación reconocida y confesada por escrito.

¿Qué requisitos *esenciales* deben concurrir en todos los contratos?—Cuatro: *capacidad* de los contrayentes, *consentimiento*, *objeto* y *causa*.

¿Quiénes no tienen *capacidad* para contraer?—Los que no tienen la administración de sus bienes; los menores sin sus guardadores cuando se obligan en algún contrato importante; la mujer casada sin licencia del marido, ó del juez en su caso; los hijos de familia sin la de sus padres, con quienes no pueden contraer, excepto en el *peculio castrense* y *cuasi-castrense*.

¿Qué circunstancias deben concurrir en el *consentimiento* para que sea eficaz?—Debe ser espontáneo, sin que medie el *error*, la violencia, el miedo ni el *dolo*. El *error* que recae sobre la sustancia de la cosa, la determinación de la persona ú otra circunstancia esencial, vicia el consentimiento; pero no si se limita á meros accidentes. El miedo y la *violencia* deben ser tales que hagan impresion en varón fuerte; y para que el *dolo* invalide la obligación debe haber dado causa al contrato, no bastando el que interviene en la misma, que sólo produce la indemnización consiguiente.

¿Qué causas pueden ser *objeto* de los contratos?—Todas las que, estando en el comercio, y siendo determinadas en su precio y cantidad, existen ó pueden existir; los hechos y servicios *posibles*, lícitos é igualmente determinados; y aún las cosas inciertas dependientes del azár.

¿Cuáles es la *causa* de las obligaciones y qué circunstancias debe reunir?—El interés de ambos contratantes, ó la gratitud y reconocimiento de uno sólo. La *causa* no debe ser falsa ni ilícita, pues siéndolo, vicia la obligación.

¿Qué pactos especiales se consideran inútiles?—El llamado *cotalitis*, el *comisorio*, el de sucesion *mútua* entre los cónyuges vivientes, el de la renuncia del derecho nacido del engaño de una cuenta, y el convenido entre dos que se suponen herederos en un testamento cerrado, antes de su apertura. Tampoco es válido el convenio para eludir las leyes prohibitivas.

¿En qué consiste el pacto de *cotalitis*?—En contratar el abogado ó procurador con el litigante á quien defiende, que se le remunerará con parte de la cosa litigiosa, ó que le dará una cantidad alzada por la defensa, siguiendo ó no pleito á su costa. La promesa de herencia por causa onerosa, es válida si el promitente no tiene herederos forzosos.

¿En qué consiste el pacto *comisorio*?—En que el acreedor se haga dueño de la cosa empeñada, si el deudor no paga al tiempo convenido.

¿Qué efectos producen los contratos?—Por regla general, ligan á los otorgantes y á sus sucesores, limitando su acción á los primeros, cuando su actitud é idoneidad ha sido la causa de su otorgamiento.

¿A quién perjudica la pérdida de la cosa prometida?—Si procede del *dolo*, á aquél que lo causa, quien debe indemnizar al perjudicado los daños y perjuicios. Si dimana de la *culpa*, esto es, de la omision involuntaria que perjudica, debe distinguirse si es *lata*, *leve* ó *levísima*, segun que la omision no la hubieran padecido, ni aún los hombres poco diligentes, ni los regularmente diligentes, ni los exactísimos. La culpa *leve* se presta en los contratos *útiles* á ambos otorgantes; la *lata* que se equipara al *dolo*, cuando son sólo útiles al que dá, y la *levísima* si sólo reporta utilidad al que la recibe. Si la causa de la pérdida de la cosa ha sido el *caso fortuito*, nadie está obligado á la indemnización, porque tal caso no se presta en ningún contrato. Llámase *caso fortuito* al que no puede preverse, y previsto, no puede evitarse.

¿De cuántas maneras pueden constituirse las obligaciones?—Pueden ser *puras* y *condicionales*, á cierto tiempo, *mancomunadas* y *solidarias*, *alternativas* y *conjuntivas*, *indivisibles* y con *cláusula penal*.

¿Cuáles son *puras*?—Las que no reconocen día ni condicion de que dependen. Se deben y pueden exigirse desde su otorgamiento.

¿Cuáles son *condicionales*?—Las que dependen del éxito de la condicion impuesta. No se deben ni pueden impedirse hasta el cumplimiento de ésta, cuyos efectos varían según su naturaleza. Cuando es *imposible*, la jurisprudencia sanciona el principio de que invalida las obligaciones; y si consiste en *no hacer*, no se reputa cumplida hasta la muerte de aquél á quien se impone. El cumplimiento de toda obligacion, retrotrae sus efectos al tiempo del otorgamiento del contrato.

De las condiciones *suspensivas* y *resolutorias*, trataremos más adelante.

¿Qué son obligaciones á cierto término?—Aquéllas que deben cumplirse en una época determinada, conocida y cierta, cuyo principal efecto consiste en dilatar ó aplazar su cumplimiento. Si el término prefijado es incierto y dudosa su existencia, se considera la obligacion *condicional*; no si sólo se ignora el cuándo sucederá.

¿Qué son obligaciones *alternativas* y *conjuntivas*?—Son *alternativas* aquéllas en que se debe una de dos ó más cosas, cuya eleccion pertenece al deudor, si no se pacta lo contrario. Y son *conjuntivas* aquéllas en que se deben dos ó más cosas, de las que no queda libre el deudor sino entregándolas todas.

¿Qué son obligaciones *mancomunadas* y *solidarias*?—Aquéllas en que dos ó más personas se obligan á pagar el todo ó la parte proporcional de la deuda, á uno ó más acreedores, que deben recibirla en la misma forma. Si la obligacion está limitada á una parte proporcional, se llama *simplemente mancomunada* ó de *mancomun*. Si, por el contrario, cada deudor está obligado por el todo, recibe el nombre de *solidaria* ó *in solidum*. Estas no se presumen nunca: debe justificarse su existencia, y en caso de duda, reputarlas simplemente mancomunadas.

¿Qué efecto producen?—Las de *mancomun* dividen los derechos y los deberes á *prorata*, entre acreedores y deudores, respectivamente. Las *solidarias*, por el contrario, concentran en cada uno de ellos la plenitud de deberes y derechos. Si son *solidarias* en los acreedores, el primero que ejerce su derecho debe recibir el pago, sin que su perdon perjudique á los demás. Si son *solidarias* en los deudores, todos y cada uno, están obligados á pagar la totalidad debida, sin que tengan el beneficio de *division*, pudiendo el pagador dirigirse contra los codeudores para el reintegro de la parte que á cada uno correspondía. Las obligaciones *divisibles* é *indivisibles*, llevan en su nombre la naturaleza que las distingue, que por esta razon no necesitan explicarse. Reconocen por base la posibilidad de la *division real* ó *intelectual* de la cosa.

¿Qué son obligaciones con *cláusula penal*?—Aquéllas en que se estipula una cantidad ó hecho diferente del principal, para el caso de no ejecucion de éste. Tienen de particular estas obligaciones, que la pena continúa subsistente, por mas que la obligacion principal se declare ineficaz, á no ser que lo fuere por ser contraria á la ley ó las buenas costumbres.

¿Cómo se extinguen los contratos?—Por la *paga*, la *remision*, la *compensacion*, la *confusion*, el *mútuo disenso*, la *novacion* que comprende la *transaccion*, la *rescison* que contiene la *lesion*, la *condicion resolutoria*, la *prescripcion*, y por perecer la cosa que forma su objeto.

¿Qué es paga y cómo, cuándo y á quién debe hacerse?—La dacion ó entrega de lo debido, ó la prestacion del hecho á que quedó obligado el deudor. Debe hacerse con arreglo á las condiciones estipuladas en el contrato, siempre que sea factible; y si no lo fuere, con arreglo á las prescripciones equitativas dictadas por el juez. Por ello debe pagarse, llegado que fuere el plazo del contrato, en el punto designado, ó en el de su otorgamiento, ó en el domicilio del deudor, si no se hubiere convenido determinado lugar. Debe pagarse al acreedor ó á su apoderado, y aun á un tercero, con tal que

aquél se dé por satisfecho, siempre que no tenga incapacidad por falta de edad u otra causa. Así, pues, no extingue la obligación, el pago hecho á la mujer casada, ni al hijo de familia, ni al menor, sin que intervenga su curador, y se llenen las formalidades legales. Imputado el pago á determinada deuda, no puede aplicarse á otra del mismo deudor.

¿Debe pagar siempre el mismo deudor?—No: tambien puede hacerlo su apoderado y una tercera persona, con lo cual se extingue la obligación, si el acreedor no recibe perjuicio en ello. Del mismo modo que para recibir es necesario no estar incapacitado, para pagar no debe existir esta circunstancia.

¿Qué efecto produce el pago hecho por un tercero?—Si éste pagó con consentimiento del deudor, la ley supone que ha habido un mandato, y sujeta á ambos á las consecuencias del contrato. Si se pagó contra la voluntad de aquél, puede obtener del acreedor la cesion de acciones, consignada en una escritura que recibe el nombre de *carta de lasto*. Si el deudor nada ha sabido del pago, se reputa al tercero como su administrador voluntario.

¿Qué derechos corresponden al deudor cuando el acreedor se niega injustamente á recibir el pago?—La *consignacion* de la cosa en que consiste, depositándola en lugar ó persona segura, desde cuyo acto queda irresponsable al peligro que pueda sufrir. Este derecho nace desde el momento en que tiene lugar la oferta de la paga, hecha en el tiempo, lugar y con las condiciones estipuladas en el contrato, y el acreedor se niega á recibirla.

¿Cómo suele pagar el deudor insolvente?—Por medio de la *cesion* de sus bienes, especie de paga general á todos los acreedores, por la que pueden proceder á la venta de aquéllos, reintegrarse proporcionalmente de sus créditos, salvo el beneficio de competencia y el abono ulterior del déficit que resulte. Si no son suficientes, queda obligado ulteriormente, con los mismos beneficios.

¿A qué se dá el nombre de *imputacion* del pago?—A la designacion que el deudor hace, ó el acreedor en su defecto, de la deuda que con él ha de amortizarse, si existe más de una.

¿Qué es *remision*?—El perdon de la deuda, otorgado por el acreedor. Puede hacerse tácita ó expresamente; esto es, de palabra ó por medio de hechos que la demuestren. Llámase tambien *quitamiento*.

¿Qué es *compensacion*?—La extincion de dos deudas existentes entre dos ó más personas que se dan, mútua y recíprocamente, por pagadas. Puede ser *judicial* ó *extrajudicial*. Para que las deudas puedan compensarse deben ser *ciertas, líquidas y probables* dentro de diez dias. Todas las que no reúnan estas condiciones, no pueden ser objeto de compensacion. Exceptuáanse los alimentos, las debidas por consecuencia de un delito, las depositadas y las dadas en comodato.

¿Puede ser objeto de compensacion el daño causado por un sócio á la sociedad?—Si procede de dolo ó culpa de todos los sócios, ó es hijo de la culpa de uno y del dolo de otro, causado en diferentes cosas, puede compensarse. Tambien se compensará el daño causado por culpa de un sócio con el beneficio que el mismo haya recibido.

¿Qué es *confusion* ó *consolidacion*?—La reunion en una misma persona del crédito y de la deuda, ó de los conceptos de acreedor y de deudor. La consolidacion de la fianza, no extingue la obligación principal.

¿Qué es *mútuo disenso*?—La conformidad de los contratantes en separarse de la obligación convenida, que no se ha consumado.

¿Qué es *novacion*?—La modificacion hecha en un contrato, bien sustituyendo una deuda por otra, bien reemplazando á los otorgantes otras personas. Es un nuevo contrato. Si se cambia el deudor por otro, la novacion se llama *expromision*, que para ser eficaz necesita el consentimiento

del acreedor. Cuando se cambia el acreedor, tambien debe concurrir el consentimiento del deudor, para que la novacion no se convierta en *cesion de acciones*. Toda *transaccion* es una *novacion*.

¿Cuál es la novacion llamada *necesaria*?—La que resulta de la contestacion á la demanda, que no es verdadera novacion, sino una nueva seguridad de la primera.

¿Qué es *rescicion*?—La anulacion del contrato, declarada por ejecutoria á instancia de parte. Diferenciase de la nulidad, en el grado de vicio que afecta á la obligacion, y en que ésta existe siempre para los efectos legales, pidase ó no su declaracion judicial.

¿Cómo extingue la condicion *resolutoria* el contrato?—Siendo uno de los efectos de ésta el considerar como no contraida la convencion, cuando se cumple, supone que aquélla no ha existido.

¿Por qué extingue las obligaciones la *prescripcion*?—Porque, perdiéndose por ella los derechos, se extinguen del mismo modo las acciones que tenemos para reclamarlos en juicio.

¿Qué tiempo se necesita para que las obligaciones prescriban?—Varía, segun la naturaleza de aquéllas. El lapso de *treinta años*, hace desaparecer las acciones *mixtas*. Por el de *veinte años*, prescriben las *personales*, la ejecutoria en que se declaran y la obligacion *hipotecaria* (1). Por el de *diez años*, prescribe la accion *ejecutiva*. Por el de *cinco*, la de testamento *inoficioso*. Por el de *cuatro*, la de reclamar las rentas públicas, no pagadas, que puede ejercitar el recaudador despues de concluido el arriendo. Por el de *tres años*, la de los abogados, procuradores y agentes, para cobrar sus honorarios y derechos; la de los criados despedidos, para el de sus salarios; la de los boticarios, joyeros é industriales, confileros y tratantes en artículos de consumo, para el cobro de sus deudas, dimanadas de sus industrias. Algunos contratos ofrecen *prescripciones especiales*.

¿Cuándo se extingue la cosa debida?—Dejando de existir cuando se pone fuera del comercio, ó perece sin culpa del deudor, y es determinada.

¿Qué efecto legal producen las obligaciones de *hacer* ó *no hacer*, cuando no se cumplen?—Se convierten en otras de daños é intereses, que debe indemnizar el moroso deudor.

Compra-venta.

¿Qué es *compra-venta*?—Un contrato bilateral perfecto, en el cual uno se obliga á dar alguna cosa mediante determinada cantidad, llamada *precio*. Vendedor, se llama al que dá la cosa; y comprador, al que paga el precio.

¿Cuáles son los requisitos *esenciales* de este contrato?—El *consentimiento*, la *cosa* y el *precio*. El primero debe versar acerca de los términos del contrato, y no estar afectado por ninguno de los vicios que le perjudican. Sólo en caso de expropiacion forzosa, por causa de utilidad pública, no se exige el consentimiento.

¿Qué circunstancias debe reunir el *precio*?—Ha de ser *cierto*, *verdadero*, *justo* y *consistir en dinero ó papel* que le represente. Es *cierto* cuando se determina expresamente, ó con relacion á otra cosa ó cantidad. Es *verdadero* cuando no es tan insignificante que más bien que venta sea donacion el contrato. Y es *justo* cuando se halla en relacion del valor de la cosa que se vende, deducidas las cargas, salvo pacto en contrario.

Puede ser señalado por un tercero. Si no lo designare por falta de voluntad, por muerte ú otra causa, no valdrá el contrato:

(1) Modificacion introducida por esta ley. Antes, la obligacion con hipoteca prescribia á los 30 años, como contentiva de *accion real*.

Cuando el precio consiste en *dinero y efectos*, ¿qué contrato se celebra?—Si los efectos se entregan en pago de parte del precio convenido, habrá *venta*; si, por el contrario, el dinero que se entrega es como un medio de nivelación de valores entre las cosas que se dan y se van á recibir, habrá *permuta*.

¿Qué cosas pueden ser objeto de este contrato?—Las *corporales é incorpóras*, muebles é inmuebles, *existentes y futuras*, con tal que sean determinadas. Pueden también comprarse, á *riesgo y ventura*, las cosas que hayan de venir, como los frutos no nacidos.

¿Qué cosas no pueden ser vendidas?—1.º, las *sagradas, religiosas y santas*, enajenables sólo en ciertos casos, como se ha visto; 2.º, las del Estado, provincias y corporaciones, sin las formalidades administrativas establecidas al efecto; 3.º, los bienes *vinculados* que aún no han entrado en la libre circulación; 4.º, la *sucesión* que se espera de una persona, sin consentimiento de ésta sostenido hasta su muerte; 5.º, las *litigiosas*, cuyo carácter adquieren desde la conciliación, seguida de la demanda; 6.º, las *estancadas*; 7.º, la parte del comuero en la cosa, objeto de un juicio incoado de partición, sin el consentimiento de los coparticipes; y otras de menor importancia.

¿Cuándo se *perfecciona y consuma* la compra-venta?—Se perfecciona por el consentimiento en la *cosa* y en el *precio*, y el otorgamiento de la escritura, cuando se estipuló; y se consuma por la entrega de las dos primeras. El otorgamiento de la escritura, si bien no es un requisito *esencial* del contrato de compra-venta, es casi una necesidad jurídica en la de los inmuebles, porque, siendo necesaria la inscripción del contrato en el Registro de la propiedad para que perjudique á *tercero*, es menester presentar el título en vista del cual debe inscribirse, único medio de obtener la inscripción y sus efectos, cuyo otorgamiento tienen derecho á pedir las partes, por mas que para ellas no sea requisito esencial del contrato.

¿A quién corresponden los aumentos ó pérdidas que tenga la cosa antes de su entrega?—Cuando se vende la *especie*, pertenece exclusivamente al comprador, si las pérdidas no han sido efecto de su tardanza ó culpa leve, y no se ha pactado lo contrario, ó si tienen lugar antes de la condición. Si procedió con *culpa*, y por su tardanza sufrió perjuicios el vendedor, debe ser indemnizado por el comprador. Al vendedor corresponde el peligro de las cosas que se pesan, cuentan, miden ó gustan.

¿Qué efecto producen las *arras* que intervienen á veces en este contrato?—Si se han entregado antes de la perfección del mismo, puede arrepentirse el comprador todavía, perdiendo su dominio; y el duplo de su importe, el vendedor arrepentido. Si la entrega fué posterior, no hay lugar al arrepentimiento, y se computan como parte de precio, consumándose el contrato.

¿A quién corresponde el dominio de la cosa vendida á diversas personas?—La posesión y el carácter de dueño que pueda tener el vendedor, deciden las dificultades. Si era dueño, corresponde al primer comprador que ha pagado el precio, sin perjuicio de las acciones personal y criminal (1) que competen al segundo perjudicado. Si no era dueño, tiene aquél las mismas acciones, y no la de dominio, que pertenece al verdadero propietario. Y si no lo era al tiempo de la primera venta, pero sí al de la segunda, tiene la misma preferencia, si está en posesión de la cosa. La Ley hipotecaria favorece al tercero que adquirió la cosa é inscribió su título en el Registro de la propiedad, siendo él el preferido en el dominio.

¿A quién corresponde el dominio de las cosas compradas con dinero

(1) Constituye el hecho un delito de estafa.

ajeno?—Al comprador, si el dinero no pertenece á persona cuyo caudal administre, ó que esté ausente por servicio del Estado.

¿Quiénes tienen prohibicion de otorgar este contrato?—Los menores é hijos de familia, sin licencia ó intervencion de sus guardadores y padres; los estudiantes y novios, si estipulan que pagarán cuando mejoren de fortuna, hereden ó contraigan matrimonio; los clérigos cuando lo hacen por negociar; los jueces, relativamente á cosas juzgadas por ellos; y los guardadores, testamentarios y procuradores, respecto á los bienes que administren ó estén bajo su direccion; los padres y los hijos, entre sí, excepto en bienes castrenses ó cuasi-castrenses.

¿Qué obligaciones nacen del contrato de compra-venta?—El vendedor queda obligado á entregar la cosa vendida, con sus frutos y accesiones, en el estado en que se encuentre al tiempo del contrato; á prestar la culpa leve; á cumplir los efectos de las acciones *redhibitoria* y *estimatoria*, y al saneamiento en caso de *eviccion*. El comprador está obligado á pagar el precio ó dar satisfaccion al vendedor.

¿Qué efectos producen las acciones mencionadas?—La *redhibitoria* tiene por fin la rescision del contrato, cuando el vendedor no manifestó los vicios ó defectos ocultos, cargas ó gravámenes de la cosa de que tenía conocimiento, devolviendo el precio é indemnizando al comprador de los perjuicios que se le hubiesen seguido. La *estimatoria*, ó *quantum minoris*, obliga al vendedor á la devolucion de la parte de precio que vale ménos la cosa, por vicios ó defectos conocidos ó ignorados por aquél. La primera dura seis meses, la segunda un año, contados desde que el comprador tuvo conocimiento del defecto, segun opinion general.

¿Cuándo procede el saneamiento?—Cuando el comprador ó adquirente oneroso de una cosa se vé privado de ella por una sentencia firme dictada á favor de un tercero. Consiste en el abono de importe de la cosa, y de los daños y perjuicios, por aquél de quien se adquirió. Es tambien circunstancia indispensable que el comprador cite de *eviccion* al vendedor, antes de la union de las pruebas del juicio, para que salga á él si quisiere defenderse.

¿Por qué causas se pierde este derecho?—Por la falta de esta citacion; por el fallo contrario de árbitros, á quienes haya encomendado un pleito el comprador, sin conocimiento del vendedor; por la pérdida culpable de la posesion; rebeldia del comprador; por no oponer éste la excepcion de *prescripcion*; por no apelar de la sentencia condenatoria, ausente el vendedor; y cuando sabia que éste no era dueño de la cosa vendida.

¿Qué requisitos legitiman la *expropiacion* por causa de utilidad pública?—La necesidad del terreno para una obra de utilidad comun, y el pago de la indemnizacion, cuyo importe debe ser justipreciado previamente (1). Al derecho administrativo toca desarrollar estos principios (2).

¿Qué modos rescisorios son peculiares á este contrato?—La accion *redhibitoria*, los pactos de la ley *comisoria* y de *adicion en dia*, y la *lesion*.

La *retroventa* ó retracto convencional, es otro pacto rescisorio de las ventas. La primera ya queda explicada; el segundo tiene lugar, y de él depende la subsistencia del contrato, cuando se pacta que el precio, ó su mayor parte, debe pagarse en dia determinado, pudiendo el vendedor, faltando la paga, pedir la rescision, reteniendo la señal que hubiere recibido, ó optar por la eficacia de la obligacion, demandando el precio. El comprador no puede enajenarla antes de dicho dia. El tercero se verifica cuan-

(1) El art. 10 de la Constitucion de 1876, establece que, cuando no haya precedido el pago de la indemnizacion, «los jueces ampararán y en su caso reintegrarán en la posesion al expropiado.»

(2) Véase el tratado de esta parte del Derecho.

do se establece un término dentro del cual puede venderse la cosa á otro que más dé por ella, lo cual, teniendo lugar, debe noticiarse al comprador por si acepta el nuevo precio. La *lesion* se padece cuando falta la justa proporcion entre la cosa y su valor. La desproporcion, que no es el *dolo*, debe consistir, cuando ménos, en más de la mitad del justo precio. El que causa el perjuicio puede rescindir la venta ó devolver, ó suplir, en su caso, el importe de la lesion, cuyo derecho dura cuatro años, y no perjudica á tercero que haya inscrito el suyo en el Registro de la propiedad. Compete á ambos contratantes, y á los menores aún en las ventas judiciales, ejercitada dentro del *cuadrienio legal*.

¿Qué limitaciones tiene la facultad de vender?—Los derechos de *tanteo* y de *retracto*, que consisten, el *primero*, en la prelacion que tienen algunas personas, al tiempo del contrato, de comprar la cosa por el precio en que se vende; y el *segundo*, en la facultad que á otras compete, de rescindir la venta otorgada, adquiriendo para sí la cosa, mediante el mismo precio. Diferéncianse en que el primero tiene lugar cuando la venta no se ha verificado, y el segundo despues de su celebracion; y en que el primero se dá contra el vendedor y el segundo contra el comprador.

¿Quiénes gozan del derecho de *tanteo*?—Los *comuneros* en el dominio, y los *enfiteutas*.

¿Qué clases hay de *retractos*?—Cuatro: el *convencional*; el *gentilicio*; el de *comuneros*; el del *dominio directo*; y el *superficial*.

¿Qué es *retracto convencional*?—La facultad de rescindir la venta, perpétua ó temporalmente, estipulada por el vendedor y convenida por el comprador. Llámasele tambien pacto de *retroventa*, y á los contratos á que se agrega, *ventas á carta de gracia*. El perpétuo es nulo; el de tiempo ilimitado prescribe, como accion personal, á los veinte años. Hace revocable la trasmision del dominio.

¿Qué es *retracto gentilicio*?—La facultad concedida á los parientes del vendedor, dentro del cuarto grado, de redimir en el término legal, pagando el precio al comprador, los bienes inmuebles de patrimonio ó abolengo. Llámase de *abolengo* y de *sangre*, y tiene lugar aunque la venta sea judicial ó se haga en pública subasta; pero no dá lugar á él la permuta.

¿Cuál es la naturaleza de este derecho?—Es *personalísimo*, y por ello no puede trasmitirse á otro que no esté en las condiciones de parentesco, pero sí á descendientes naturales, con tal que hayan sido reconocidos. Puede ser ejercitado por dos parientes que estén en el mismo grado, entre quienes debe dividirse la cosa redimida, siendo factible la division.

¿Cuándo tiene lugar?—Siempre que el comprador sea un extraño, y no cuando lo sea un pariente, no obstante se halle fuera del cuarto grado (1).

¿Qué bienes están sujetos al *retracto*?—Los inmuebles hereditarios procedentes de los padres ó abuelos del vendedor y del retrayente, razon por que no lo son los adquiridos por título de mejora, ni los vinculados cuando el padre ó abuelo no los ha poseído como libres. No pueden retraerse, porque no son bienes inmuebles, los oficios enajenados de la corona, ni los bienes retraibles que hayan salido una vez de la familia, por más que hayan vuelto á ella, ni los del Estado.

Vendidas dos cosas por un sólo precio, deben retraerse las dos, porque no hay medio de hacer la consignacion del precio de cada una.

¿Cuál es el término establecido por la ley para entablar el *retracto*?—Nueve dias, contados como todo término judicial de procedimiento, desde el otorgamiento de la escritura de venta, cuando el que lo intenta resida en el pueblo en que se otorgó el contrato, cuyo término aumenta un dia por

(1) Esta opinion no está reconocida por el Tribunal Supremo.

cada diez leguas que distare de éste el de su residencia (1). No puede prorogarse, por ser de carácter tan *perentorio* que corre contra los pupilos, menores y ausentes, si no ha intervenido fraude y ocultacion de la venta, ni perjudica al *tercero* que haya inscrito su derecho en el Registro de la propiedad (2).

¿Qué circunstancias exige la ley de Enjuiciamiento civil para la eficacia del retracto?—Tres: 1.^a, la consignacion del precio, si fuere conocido, ó la fianza de consignarlo tan luego como se conozca; 2.^a, la interposicion de la demanda dentro del término legal, comprometiéndose á conservar la finca dos años, por lo ménos, si la disminucion de fortuna del retrayente no legitimare la venta, y 3.^a, justificacion, aunque no sea cumplida, del fundamento del retracto.

¿Qué es retracto de comuneros?—La facultad que compete á los dueños para redimir la parte de los inmuebles que poseen en comun, vendida por los demás socios. Sólo tiene lugar cuando el comprador es un extraño y son inmuebles los bienes vendidos. El término y las solemnidades necesarias para obtenerlo, son las mismas del gentilicio, extendiéndose tan sólo el compromiso de conservar la cosa á cuatro años.

La misma facultad de redimir corresponde al dominio *directo* y *superficial* en las ventas hechas por el útil y propietario del fundo, con los mismos requisitos y dentro de igual término, haciendo extensivo aquel compromiso á seis años.

En concurrencia de varios retractos, cualquiera de los expuestos tiene preferencia sobre el gentilicio.

Todos deben interpretarse restrictivamente, por su carácter odioso, y ser limitaciones de la libertad del dominio.

Permuta.

¿Qué es *permuta*?—Un contrato bilateral perfecto, en virtud del cual uno se obliga á dar una cosa por otra, que no consista en dinero. Las mismas causas de eviccion, rescision y nulidad de la compra-venta, producen los mismos efectos en las permutas. Puede ser *simple* ó *estimatoria*. Es *estimatoria* cuando las cosas se aprecian para conocer su valor, y *simple* cuando no son objeto de estimacion. La *estimatoria* puede rescindirse por lesion, y á ambas son aplicables las doctrinas expuestas acerca del saneamiento (3), en cuyo caso se reputa hipotéticamente comprador al que ha perdido en juicio la posesion de la cosa. Es el más rudimentario y antiguo de los contratos, y en él debe prestarse la culpa leve. Cuando se permuten los inmuebles, exige la ley hipotecaria la inscripcion de la escritura, para que pueda perjudicar á terceros.

Arrendamiento.

¿Qué es el *arrendamiento*?—Un contrato bilateral perfecto, en virtud del cual uno se obliga á dar una cantidad de dinero ó papel moneda, por el uso de una cosa, ó la prestacion de ciertas obras. Son sus requisitos *esenciales* el *consentimiento*, la *cosa* y la *cantidad* determinada de *dinero*, á que se denomina *merced*. Se perfecciona por el consentimiento, á no ser que se haya pactado la escritura, y entónces se considerará perfecto desde este acto.

(1) Esta disposicion de la ley de Enjuiciamiento civil, unificó el derecho de Castilla y el foral, diferente en los términos para retraer; y está declarado de aplicacion general por el Tribunal Supremo.

(2) Ley hipotecaria.

(3) Véase la compra-venta.

¿Qué otros nombres recibe?—Llámanse *fletamento* si lo que se arrienda son embarcaciones, *inquilinato* si son prédios urbanos, *alquiler* si son muebles, *empresa* y *asiento* si son rentas ú obras públicas, *ajuste ó contrato de obra* al de servicios para construir un edificio y, por último, denominase en general *locacion-conduccion*. Los otorgantes reciben nombres especiales derivados de los que tiene el contrato, segun hemos visto, distinguiéndose en su generalidad con los nombres de *dueño ó arrendador* al que da, y *arrendatario* al que recibe. La *merced* denominase también, segun los casos, *arrendamiento*, *renta*, *inquilinato*, *alquiler*, *flete*, *jornal* y *salario*, y debe ser proporcional al provecho que se saca.

¿Quiénes pueden arrendar?—Todos los que pueden contratar, y además el *enfiteuta*; el *usufructuario*; el *administrador*; el *marido* y el *padre*, los bienes de su mujer y de los hijos, cuya administracion le corresponde.

¿Qué cosas pueden darse en arrendamiento?—Todas las que están en el comercio de los hombres; las incorporeales como son los frutos, y las fungibles solamente para lujo y ostentacion.

¿La enajenacion de la finca concluye el arrendamiento?—Por regla general sí, quedando obligado el vendedor á indemnizar al arrendatario de los perjuicios que reciba, si el contrato es temporal. Cuando su duracion excede de seis años, ó el arrendatario hubiere anticipado las rentas de tres ó más, y los bienes son inmuebles, debe ser respetado el contrato por el comprador, si aquél lo ha inscrito en el Registro de la propiedad, constituyendo una especie de derecho *real* (1).

¿Qué obligaciones nacen de él?—El *dueño* debe entregar libre y desembarazada la cosa para su uso, manifestando al arrendatario los vicios ocultos que tenga: queda obligado al saneamiento y abono de mejoras, pago de tributos, cargas y reparaciones necesarias, salvo el pacto en contrario. El *arrendatario* debe usar la cosa, prestando la culpa leve; devolverla á la terminacion del contrato, y satisfacer la *merced* en la forma convenida: á falta de convenio, conforme con la costumbre: y si no la hubiere, al fin de cada año.

¿Qué reglas se siguen en el arrendamiento de prédios *rústicos*?—La ley del contrato, que no puede quedar sin efecto sino por falta de pago de la renta ó mal trato de la finca, es la regla principal y preferente. Si el arrendamiento es *temporal*, termina el plazo estipulado sin mútuo desahucio; y continuando el arrendatario tres ó más dias en la posesion de la finca, se entiende prorogado por un año. Si el arrendamiento no tiene tiempo determinado, queda á arbitrio de las partes, que pueden disolverlo avisándose mútuamente un año antes.

¿Qué doctrina rige en materia de frutos?—Cuando desaparecen por completo, efecto de un caso fortuito, el arrendatario no debe la *merced* de aquel año á no ser que al contratar haya aceptado toda eventualidad. Cuando se pierden en parte, debe dar aquél ó la renta del año, ó los frutos existentes, deducidos los gastos. Si la pérdida proviene de culpa ó negligencia del arrendatario, no le son aplicables los beneficios anteriores, de los que no puede tampoco utilizarse, si la anualidad siguiente, ó la pasada, fuere bastante para satisfacer las rentas y gastos de las dos. Si, por el contrario, los frutos han recibido un aumento que eleva su cantidad al doble de la produccion ordinaria, y no procede de la industria, debe duplicarse la renta.

Los prédios *rústicos* no pueden subarrendarse; pero pueden enajenarse parte de los frutos.

¿Qué reglas se observan en el arrendamiento de prédios *urbanos*?—1.º El arrendatario puede ser desahuciado antes de la terminacion del contrato,

(1) Ley hipotecaria.

cuando hay necesidad de reparar la finca; cuando hace aquél mala vecindad; cuando no pagare la pension de dos años, siendo cuatro el tiempo estipulado; y algunos creen que todavía podrá desahuciarse cuando el propietario quiera vivir en la finca arrendada, porque la que habita amenaza ruina. 2.^a Los edificios pueden arrendarse en la forma y condicion que los contratantes estipulen, considerándose terminado el último día del plazo prefijado, sin necesidad de *desahucio*. Si no hubiese plazo fijo, ó si apesar de haberlo, continuase el arrendamiento por consentimiento tácito, deben avisarse aquéllos reciprocamente, segun la costumbre del pueblo, y no habiéndola, en el plazo de 40 dias (1).

¿Qué reglas se siguen en los arrendamientos de los prédios urbanos?—A diferencia de los rústicos, puede el propietario desahuciar al inquilino antes del cumplimiento del contrato, porque quiera habitarlos él ó su familia, repararlos ó reedificarlos, y por mala vecindad ó la falta de pago de dos anualidades.

¿Qué tienen de peculiar los arrendamientos de obras?—Que los arquitectos ó maestros encargados de su ejecucion no pueden alegar lesion ó daño, á no ser causado por el arrendador.

Puede celebrarse el arrendamiento de obras, de tres maneras; poniendo el arquitecto el terreno y los servicios; poniendo solamente su industria personal; y poniendo la industria y los materiales. La obra debe durar quince años sin falseamiento, que no proceda de caso fortuito, cuando no se ha recibido previo reconocimiento.

Censos.

¿Qué es censo?—Un contrato bilateral por el cual uno se obliga á pagar á otro cierta pension ó cánón, en la forma y por la razon que dejamos dicha al tratar de sus especies (2).

¿Qué reglas son especiales al censo *enfiteútico* y *reservativo*?—Ambos deben constar por escritura pública, hasta cuyo otorgamiento no hay medio legal para justificar en juicio su existencia, y registrarse en el de la propiedad. Sin este requisito, no perjudica á tercero.

¿Qué debe tenerse presente en el censo *consignativo*?—La *cosa*, el *capital* y la *pension*. Como que se equipara á una venta, el capital es precio del derecho á la pension, que es la cosa que se vende por el censuario y compra por el censualista.

¿Qué condiciones debe tener la cosa que se impone?—Debe ser *raíz*, *determinada*, *fructífera* y de la propiedad del censuario. Tambien puede constituirse sobre un derecho perpétuo.

¿Qué circunstancias debe tener el *capital*?—Ha de consistir en *dinero*, debe ser entregado *realmente*, ántes ó en el acto del contrato, y proporcionado á la pension, regulándolo al 3 por 400 en los censos al quitar ó redimibles, y sin tasa en los *irredimibles*. Pero este último es opinable.

¿En qué debe consistir la pension?—Por regla general en dinero, apesar de que la costumbre de algunos pueblos, consentida y respetada por leyes posteriores, permite que se constituya en granos y en otras especies; y esta doctrina está reconocida por el Tribunal Supremo.

¿Qué debe hacerse cuando hay duda acerca de la naturaleza del censo?—Atender á su constitucion para calificarlo; y en todo caso, suponerle *redimible* y *consignativo*, como más favorable al deudor.

¿Qué modificaciones suele sufrir el censo?—Puede ser *reconocido*, *reducido*, *redimido* y *sustituida* la persona del censualista. Hay *reconocimiento*

(1) Véase en procedimientos la tramitacion del juicio de desahucio.

(2) Idem, lo expuesto al tratar de los censos como *derechos reales*.

cuando el poseedor de la finca censida renueva la obligación, al cual puede ser compelido. Se verifica la *reduccion* cuando se disminuyen los productos del censo por la ley, ó la voluntad del hombre, manifestada en un contrato en que se minorra la pensión, sin alterar el capital. Puede tambien reducirse éste. Tiene lugar la *redencion* en todos los censos cuando se paga al censalista el capital impuesto y los réditos devengados, libertándose la finca. Los arrendamientos de fincas anteriores á 1800, cuya renta no exceda de 1100 reales, pueden redimirse. La *regulación* del capital se hará por los términos de la escritura, si de ella se ocupa; en su defecto por la ley, y despues, con arreglo á las costumbres de cada pueblo. Puede ser *voluntaria* ó *forzosa*. La primera es hija del consentimiento mútuo; la segunda es necesaria para el censuario, cuando ocultó las cargas de la finca, ó quiso retractarse despues de citar al censalista para la redencion. Por fin, el censalista puede trasladar su derecho á un tercero, mediante la paga del capital, cuyo contrato se llama *subrogacion*. Todas estas variaciones deben inscribirse en el Registro de la propiedad.

Son nulos los pactos de no enajenar la cosa censida y reserva del tanteo, excepto en los censos que no tienen precio legal, y se le señala el máximo ó medio que autoriza la costumbre. El pacto de comiso, en defecto del pago de pensión, es válido.

Sociedad ó compañía.

¿Qué es *sociedad*?—Un contrato bilateral por el cual dos ó más personas se reúnen para dedicarse á alguna gestión lícita, que ha de reportarles beneficio, comunicando para ello sus bienes ó su industria. Es *universal* ó *singular*, y ésta se subdivide en tres clases: 1.^a, para un negocio determinado; 2.^a, sin comunicación de bienes, limitada sólo á la de los productos de la industria de los socios, y 3.^a, extensiva á todas las ganancias, ora provengan de la industria, ora de cualquiera otra causa. La *universal* comprende todos los bienes presentes y futuros de los asociados. La sucesión esperada de determinada persona no puede ser objeto de esta sociedad, sin consentimiento de aquél á quien piensa heredarse.

Las sociedades llamadas *anónimas*, *colectivas* y *en comandita*, son objeto del derecho mercantil (1).

¿Cuáles son las obligaciones de los socios?—Debe aportar cada uno al caudal social todo lo prometido, con más el abono de intereses vencidos desde el día que debió cumplirlo. Cada socio presta la culpa *leve* en las cosas comunes, debiendo ser indemnizado de los anticipos que hiciere para la conservación de éstas. Goza del *beneficio de competencia*; le corresponde la acción *directa pro socio* para perseguir sus derechos, y debe percibir la parte de las ganancias estipulada.

¿Cómo concluye el contrato?—Además de los medios generales aplicables á todos, termina por la muerte; cesion de bienes ó renuncia con buena fe de algun socio, modo especial de terminarse este contrato; por la pérdida del capital social; conclusion del objeto de la sociedad ó imposibilidad de conseguirlo; y terminacion del tiempo por que se constituyó.

¿Cómo deben distribuirse las ganancias y pérdidas?—Con arreglo á lo pactado en el contrato, y proporcionalmente al capital de cada socio, si en el nada se convino. La sociedad en que todas las ganancias ó todas las pérdidas correspondan exclusivamente á uno sólo de los socios, se llama *leonina*, y no es lícita.

(1) Una ley promulgada en tiempo de la República, proclamó el principio de la redencion de los foros y otros contratos censuales análogos; pero fué declarada en suspenso en 1874. La comision de Códigos tiene preparado un proyecto de ley con ese objeto, que presentará el Gobierno á las Cortes, acaso en la legislatura de 1878.

¿A quién corresponde la administracion de la sociedad?—A todos los asociados, que, para facilitarla, depositan sus facultades en uno que de ella se encarga. Si no lo hacen, todos pueden contratar.

Mandato.

¿Qué es *mandato*?—Un contrato bilateral imperfecto ó consensual intermedio, por el que uno encarga á otro alguna cosa, cuya ejecucion acepta gratuitamente. Puede, no obstante, y la jurisprudencia lo ha admitido, estipularse un premio en favor del mandatario; hecho que constituye la costumbre más general, y que convierte el contrato en bilateral perfecto. Llámase *mandante* al que encarga, y *mandatario* al aceptante. El mandato puede ser *general* que comprende todos los intereses, excepto la enajenacion é hipoteca de bienes inmuebles, ó *especial*, segun la extension del encargo. Pueden ser mandatarios todos los que pueden contratar, á excepcion de los religiosos profesos y clérigos seculares, y deben tener diez y siete años para negocios extrajudiciales y veinticinco para los judiciales. Estos se llaman procuradores, y sus circunstancias están reguladas por la ley de organizacion de Tribunales (1).

¿Qué clases hay de *mandato*?—Cinco: 1.º, el que reporta utilidad sólo al mandante; 2.º, el que se constituye en beneficio de un tercero; 3.º, el que es útil al mandante y á un tercero; 4.º, el beneficioso para el mandante y mandatario, y 5.º, el útil para el mandatario y un tercero. La utilidad exclusiva del mandatario, convierte en consejo el mandato.

¿Qué obligaciones nacen de este contrato?—El *mandante* debe indemnizar al mandatario de las pérdidas y anticipos que haya hecho, y satisfacerle la recompensa, si se hubiera estipulado, quedando ligado por los actos legítimos del apoderado. El *mandatario* debe cumplir fielmente el encargo aceptado, sin exceder sus límites; prestar la culpa leve, dar cuenta de su cometido y restituir lo debido.

¿Cómo termina el mandato?—Además de las causas por que concluyen todos los contratos, termina por la revocacion expresa ó tácita, que consiste en el apoderamiento de un tercero, hecha por el mandante desde la notificacion al mandatario; por la pérdida de la administracion de su caudal; por la muerte ó la intervencion de bienes del mandante y mandatario; por la renuncia é imposibilidad física ó moral de éste; y por el cumplimiento del mandato.

Préstamo.

¿Qué es *préstamo*?—Un contrato unilateral por el que uno entrega á otro una cosa, para que la use ó la consuma. Cuando su objeto es el uso, el contrato recibe el nombre de *comodato*, y el de *mútuo* si la cosa se entrega para su consumacion.

¿Cómo se define el *comodato*?—Un contrato real, bilateral imperfecto, por el que se entrega una cosa gratuitamente, para que el comodatario la use y devuelva, concluido el tiempo por que se le dió. La *tradicion*, el *título gratuito*, el *tiempo ó uso de la cosa* y su *devolucion* son requisitos *esenciales* de este contrato, que no puede tener lugar en cosas fungibles.

¿Qué obligaciones nacen de él?—El *comodante* debe entregar la cosa al comodatario, manifestándole los vicios que tenga; permitir que la use el tiempo convenido, y satisfacer los gastos *necesarios* y *urgentes* que hubiera anticipado. El comodatario está obligado á usar la cosa en la forma y términos convenidos; á prestar la culpa *levisima* en su conservacion, siendo

(1) Véase el tratado de procedimientos.

de su cuenta los gastos ordinarios que ocasione; y á restituirla al *comodante*, concluido el uso ó tiempo por que se le prestó. La cosa perece para el comodante, cuando la pérdida ó deterioro se verifica sin culpa del comodatario.

¿Qué es el *precario*?—El comodato, sin determinacion en el tiempo y en el uso de la cosa. Es revocable á voluntad del comodante.

¿Cómo se define el préstamo *mutuo*?—Un contrato real unilateral por virtud del que se entregan á alguno cosas fungibles para que éste devuelva otro tanto de la misma especie y calidad. La *tradicion* traslativa del dominio; la naturaleza de las cosas que se entregan y la devolucion de igual cantidad, especie y calidad, son requisitos *esenciales* de este contrato.

¿Qué obligaciones nacen de él?—El *mutuatario*, única persona obligada, se hace dueño de la cosa, que debe restituir en la forma expuesta, en el tiempo y lugar señalados; cuya entrega puede tener lugar antes del plazo si no perjudica al *mutuante*, y en cantidad numérica igual al valor nominal de la moneda, cuando el préstamo consiste en dinero, á no ser que se determine la devolucion de la misma clase que se entregó. En este contrato no se presta culpa alguna. El dueño y su mandatario pueden contraer este préstamo.

¿Qué limitaciones y prohibiciones afectan á este contrato?—No pueden contraerlo los hijos de familia, excepto cuando aseguran que no tienen padre ó son considerados como jefes de familia, por tener un oficio público ó ejercitar una industria, ó cuando lo contraen para alimentos ó por razon de estudios. Tambien será válido el consentimiento tácito ó expresamente por el padre, ó del que ha recibido beneficio. Los préstamos contraídos á pagar cuando se case, herede ó mejore de fortuna el mutuatario, y los de los estudiantes, sin consentimiento de sus padres ó de los que les dan carrera, son nulos.

¿A qué se llama *usura*?—Al interés ó cantidad de la misma especie de lo principal, que se paga en remuneracion del capital prestado.

¿Qué limitacion reconoce la *usura*?—Actualmente los contratantes tienen absoluta libertad para establecerla, debiendo constar por escrito para que sea exigible, sin que el interés vencido la devengue durante el contrato. Si no se ha estipulado, el capital redituará el interés establecido por el Gobierno en cada año, consistente, *interin* no se fije, en el 6 por 100 (4), y comenzará á deberlo desde que el deudor se ha *constituido en mora*, lo cual tiene lugar desde la contestacion á la demanda.

¿Cuál es el contrato llamado *trino*?—Aquél en que un sócio garantiza el capital de otro, mediante la renuncia hecha por éste de parte del lucro, del cual debe destinarse otra parte á afianzar el resto. Llámase *trino* porque hay en él algo de sociedad, de fianza y de venta, y es perfectamente lícito.

Depósito (2).

¿Qué es *depósito*?—Un contrato real, bilateral imperfecto, por el que uno entrega á otro alguna cosa para su custodia, con la obligacion de restituirla. El que entrega se llama *deponente*, y el que recibe *depositario*.

Son sus requisitos *esenciales* la *tradicion*, la *custodia* y la *devolucion* de la cosa, y permite alguna remuneracion por la guarda. Puede ser *regular* ó *irregular*. El *regular* obliga á la devolucion de la misma cosa entregada, y

(1) La ley de 14 de Marzo de 1856, derogó la tasa del interés de los préstamos, que antes regulaba y dificultaba este género de contratacion.

(2) Las Partidas le llamaron *condesifio*.

el *irregular* á la de otro tanto de la misma especie y calidad cuando se entregan cosas fungibles. Si la cosa es *litigiosa*, el depósito recibe el nombre de *secuestro*, que puede ser *convencional* ó *judicial*; y si no es *litigiosa* llámasele simplemente *depósito*, que puede ser *voluntario* y *necesario* ó *miserable*.

¿Qué es *secuestro convencional*?—El depósito de una cosa *litigiosa* en persona *lega*, *llana* y *abonada*, convenido entre los litigantes. Debe entregarse al vencedor en el juicio.

¿Qué es *secuestro judicial*?—El depósito acordado por el juez cuando hay temor de *malversacion*, *pérdida* ú *ocultacion* de la cosa *litigiosa*. Puede ser reclamado por una de las partes, y debe acordarse cuando haya temor de que ambas pasen á *vias de hecho*.

¿Qué obligaciones nacen de él?—Las consiguientes á todo depósito.

¿Qué es depósito *voluntario*?—El que emana del consentimiento del deponente y depositario.

¿Qué es depósito *necesario* ó *miserable*?—El que tiene lugar por un acontecimiento desgraciado ó imprevisto, como un incendio, un naufragio. Su violacion constituye un delito, y origina mayor responsabilidad.

¿Qué obligaciones nacen del depósito?—El *deponente* debe manifestar los vicios perjudiciales de la cosa y pagar los gastos que ocasione su custodia. El *depositario* debe cuidarla, prestando la *culpa lata*, por regla general; la *culpa leve*, cuando solicitó el depósito, cuando recibe por él alguna remuneracion y cuando se estipula en el contrato; y la *culpa levisima* y el *caso fortuito*, cuando perece la cosa por su culpa, cuando el depósito le produce utilidad y cuando se conviene en el contrato. Debe tambien restituir la misma cosa con sus frutos, en el lugar y tiempo convenidos, y aun antes, si la demandare el deponente, sin detenerla á pretexto de compensacion debida. De aquí que la enajenacion que haga de la cosa depositada será nula.

Nacen de él dos acciones para su cumplimiento: una *directa* en favor del deponente, y otra *contraria* en el del depositario.

Contratos aleatorios.

¿Qué es contrato *aleatorio*?—Aquél que depende de un acontecimiento incierto, á cuya existencia está subordinado. Si el hecho fuere cierto para alguno de los contratantes, será una *estafa*. Son los más comunes el de *seguros*, el *censo vitalicio*, la *apuesta*, el *juego*, los *sujetos al azar* y la *compra de una esperanza*. Deben tener por objeto un hecho lícito.

¿Cómo se define el contrato de *seguros*?—Es un contrato bilateral en que uno responde á otro del daño que pueda sobrevenir por un caso fortuito, mediante el pago de cierta cantidad. Llámase *asegurador* al responsable; *asegurado* al dueño de la cosa; *prima*, *premio* ó *precio* a la cantidad estipulada; y *póliza del seguro* á la escritura. Son sus requisitos *esenciales* la cosa, el riesgo y la *prima* ó *premio* (1).

Los *seguros* son *marítimos* y *terrestres*, division basada en la diversidad de riesgos, y pueden ser objeto de ellos las cosas existentes, que estén sujetas á un riesgo, no contrarias al derecho y á la moral, y las muebles ó inmuebles. Hay seguros sobre la vida, de incendios, de quintas, etc.

¿Qué particularidad se observa en los *seguros mutuos*?—Que en ellos no hay prima alguna, pues que el daño asegurado debe ser indemnizado proporcionalmente, por todos los socios.

¿Qué es *censo ó renta vitalicia*?—Un contrato real unilateral, por el que uno se obliga á pagar á otro durante su vida, la de éste ó de un tercero,

(1) Por regla general, los contratos de seguros se rigen por las leyes mercantiles.

una pension anual por el capital que recibe de aquél. Puede deber su origen á una donacion ó testamento. La entrega del capital, la determinacion de la pension y la incertidumbre de la muerte del pensionista, son sus requisitos *esenciales*. El capital ha de consistir precisamente en dinero, y sólo puede constituirse sobre una vida, si bien ésta es una afirmacion discutible, no resuelta por la jurisprudencia.

¿Qué relacion debe haber entre el capital y la pension?—Antiguamente ésta debia consistir en la sétima ó décima parte de aquél; pero, abolida la tasa del interés, parece estar dentro del espíritu de la ley la abolicion de aquélla, cuando se constituye el censo por título oneroso. Puede asegurarse hipotecariamente, convirtiéndose entonces de censo vitalicio *personal* en *real*, sin que por eso se altere su naturaleza propia. Uno y otro terminan con la muerte de la persona de cuya vida dependen.

¿Qué es el *apuesto*?—Un contrato bilateral por el que uno se obliga á dar á otro alguna cosa, si se realiza un hecho dependiente del azar, ó del arte, habilidad, fuerza ó industria de otro, ó de la simple incertidumbre. Para que sea eficaz es menester que no esté prohibida por la ley.

¿Qué es el *juego*, jurídicamente considerado?—Un contrato bilateral por el que uno se obliga á pagar á otro alguna cosa, en caso de pérdida de la partida jugada.

¿Cuáles son los juegos prohibidos?—Todos los de envite, suerte y azar, entre los cuales se cuentan las rifas, que sólo pueden tener lugar con autorizacion real, y mediante el pago de ciertas prestaciones reglamentarias. Las deudas procedentes de aquéllos no son exigibles, porque son nulos todos los contratos que de ellos dimanen. No lo son tampoco las procedentes de juegos permitidos en que el tanto exceda de un real de vellón, y la totalidad de la deuda de 330 reales; ó en que se jugaren prendas, bienes, alhajas, dinero al fiado, ó con tantos ó señales que no sean dinero contado (1).

¿Qué *esperanzas* pueden comprarse?—Las de una cosa incierta cuya existencia depende de una eventualidad. No tiene lugar en estos contratos la rescision por lesion.

Finalmente, la decision de un negocio por la suerte, es un contrato bilateral, aleatorio, lícito y bastante frecuente.

Transaccion, compromisos, cesion y promesas.

¿Qué es *transaccion*?—Un contrato bilateral que tiene por objeto poner fin á una cuestion dudosa, perdiendo los otorgantes parte del derecho de que se crean asistidos. Son sus requisitos *esenciales* que el asunto sea ó pueda ser *litigioso*; la cesion del derecho y la terminacion del negocio pendiente. Es una especie de enajenacion onerosa, una novacion de contrato, que no puede rescindir-se, ni aun por lesion enormísima (2), y tiene fuerza de cosa juzgada.

¿Qué causas no pueden ser objeto de transaccion?—Las matrimoniales; lo que se espera de un testamento cerrado, antes de su apertura; los alimentos futuros testamentarios, sin autoridad judicial; los pleitos beneficios; y los delitos, perseguibles de oficio, en cuanto á la responsabilidad penal, pero sí á la civil.

Puede rescindir-se cuando se funda en documentos falsos, error sustancial, dolo, fuerza ó temor grave.

¿Qué es *compromiso*?—Un contrato en virtud del cual se somete una cues-

(1) Véase en la seccion de *Derecho penal* el título de juegos prohibidos. La Ley 15, título xxiii, lib. xii de la Nov. Recopilacion, menciona muchos de los juegos prohibidos.

(2) Esta opinion no es indiscutible.

tion pendiente, en juicio ó fuera de él, á la decision de uno ó más terceros.

¿Qué causas no pueden compromisarse?—Las relativas al estado civil de las personas, todas las que no pueden ser transigidas, y aquéllas en que interviene el ministerio público. Debe formalizarse en escritura pública, bajo pena de nulidad (1).

¿Qué es *cesion*?—Un contrato por el que trasferimos á una persona, que lo acepta, los derechos y acciones que nos corresponden contra un tercero. Puede ser *onerosa* y *lucrativa*, siendo nula la hecha á persona más poderosa y la que debe su origen al *dolo*, cuando no se otorga por última voluntad. Diferénciase de la *condonacion* en que exige el consentimiento del concesionario. La delegacion se circunscribe á la sustitucion del deudor por otra persona. Lo primero es contrario á la igualdad civil.

¿Qué es *promesa*?—Un contrato unilateral en que uno se obliga á hacer ó dar á otro alguna cosa. Es revocable hasta la aceptacion del acreedor.

¿Quiénes pueden prometer y en qué forma?—Todos los que pueden contratar, en los mismos términos admitidos para los contratos; esto es, *pura* y *condicionalmente, desde y hasta cierto dia*, y pueden recaer sobre la misma materia declarada lícita para la contratacion. La célebre ley del ordenamiento de Alcalá, que declaró que de cualquiera manera que uno se obligue, queda obligado, produjo una gran reforma en el derecho antiguo en materia de promesas y obligaciones.

De las donaciones.

¿Qué es *donacion*?—El acto de liberalidad por el que uno dá á otro alguna cosa. Comprende las *inter vivos* y las *mortis causa* (2).

¿Quiénes pueden donar?—Todos los que no tienen prohibicion legal. No pueden hacerlo los menores; las mujeres casadas, sin autorizacion de sus maridos; los locos; los pródigos intervenidos; los sujetos á la pena de interdiccion civil; y los hijos de familia sin autorizacion paterna, á no ser del peculio *castrense*, *cuasi-castrense*, y aun del *profecticio*, en algunos casos.

¿Cómo pueden constituirse?—En la misma forma y términos que los demás contratos. El donante puede imponer todo género de condiciones lícitas y honestas.

¿Es revocable la donacion no aceptada?—La opinion más seguida sostiene la afirmativa, y parece admitida por el Tribunal Supremo.

¿Qué cosas no pueden donarse *absolutamente*?—Todo el patrimonio del donante, ó lo que exceda de las *legítimas*, si las debe. La renuncia ó cesion del derecho hereditario, cuando el otorgante no tiene bienes, es nula porque se equipara á la donacion general. Si en ésta se reserva el usufructo, es válida siempre que contenga lo necesario para vivir y poder testar. Tambien lo son las en que se imponen otras limitaciones al donatario que coartan el dominio, cuyas donaciones se llaman á *cierta postura*. Las donaciones *comunes* entre los esposos, si alguno de ellos se hace más rico por la donacion, y el donante más pobre, están prohibidas.

¿Qué donaciones necesitan la aprobacion judicial?—Las *simples* y *puras*, que excedan de 500 maravedis de oro, sobre cuya cuantia hay variedad de opiniones, atendido el valor actual de la moneda (3). Exceptuáanse las que se constituyen por causa de dote, las que se otorgan en favor del Estado, ó por motivos de religion, piedad y beneficencia, y las pensiones vitalicias.

(1) Véase el tratado de procedimientos, sobre los juicios de compromisarios.

(2) De éstas hemos tratado en las sucesiones.

(3) En segunda sentencia no publicada en la *Gaceta* como consiguiente á la de casacion, el Tribunal Supremo ha fijado la equivalencia de los 500 maravedises de oro, en la cantidad de 30.073 reales, 18 maravedises al decidir, en 11 de Noviembre de 1875, un pleito civil entre los hermanos Collantes.

¿Qué requisito debe llenarse en las que comprendan bienes inmuebles?—Debe inscribirse el título en el Registro de la propiedad, para que perjudiquen á tercero, con lo cual no le afecta la revocacion legal, excepto cuando el donatario no cumple las condiciones inscritas en el Registro, (1) ni le exime de la insinuacion cuando es precedente.

¿Por qué causas pueden revocarse?—Apesar del carácter de irrevocabilidad que tienen las donaciones aceptadas, puede revocarse, por el nacimiento posterior de los hijos legítimos, y de los naturales, en cuanto á la madre, cuando la donacion es considerable; por la falta de cumplimiento de las condiciones impuestas al donatario que ha sido apremiado judicialmente; y por su ingratitud, en las que no tienen por motivo el matrimonio, probada por el donante exclusivamente. Se consideran *motivos de ingratitud* las acusaciones, injurias graves, malos tratamientos, violencias y destrucción de bienes del donante, cometidos por el donatario, y la maquinacion de su muerte.

De las fianzas.

¿Qué es fianza?—Un contrato *accesorio* en virtud del cual uno, ó más, garantizan y se obligan al cumplimiento de otro contrato, llamado *principal*, si no fuere cumplido por el deudor del segundo. Es una verdadera promesa, que exige para ser eficaz, que la obligacion de éste sea *natural*: no obstante, el fiador no queda obligado cuando asegura las obligaciones de los hijos de familia, y de los menores que contraen sin licencia de sus respectivos padres ó curadores. La obligacion meramente *civil*, sujeta á una excepcion perpétua, trasmite sus efectos á la fianza que la garantiza.

La *fianza* no debe ser, ni más extensa, ni más gravosa que la principal, hasta cuyos límites puede llegar; pero si más limitada. Puede constituirse, del mismo modo que los demás contratos, por todos los que pueden obligarse, y puede deber origen á la ley, como en el usufructo; al mandato judicial, como en guardas de incapacitados; y á la voluntad de los contratantes: y constituirse con las mismas formas de los demás contratos. Exceptúanse los clérigos, que sólo pueden salir fiadores por otros y por alguna iglesia ó persona miserable, pues su facultad, en cuanto á los demás, está circunscrita al patrimonio. Tampoco pueden afianzar los regulares, recaudadores de tributos, las mujeres y los labradores, excepto por personas de su clase y por la Hacienda pública. Aunque los militares tienen prohibicion de afianzar, la práctica la rechaza.

¿Qué excepciones tiene la fianza de las mujeres?—Pueden afianzar la dote de otra mujer, y serán subsistentes las fianzas que otorgaren y ratificaren dos años despues; lo serán tambien aquéllas porque hayan recibido precio; las constituidas á favor de personas á quienes hereden, ó por sus maridos en favor de la Hacienda, y las que hayan otorgado con renuncia de sus privilegios, ó prevaleiéndose del disfraz de hombres. Cuando son casadas, necesitan la autorizacion de sus maridos.

¿Es válida la obligacion *mancomunada* de marido y mujer?—Sí; siempre que le haya reportado utilidad, no consistente en lo que de aquél debe recibir. En otro caso, es nula, y la renuncia que haga la mujer, aunque sea con juramento, de la ley que tanto le protege, es ineficaz y de ningun valor, segun el Tribunal Supremo.

¿Qué obligaciones produce la fianza?—Sujeta subsidiariamente al fiador al pago de la deuda principal, concediéndole la ley los beneficios de *orden* y de *division*, que consisten, el primero, en que se haga excusion en los bienes del deudor principal antes de dirigirse contra él, y el segundo,

(1) Ley hipotecaria.

en que se divida el importe de la deuda entre los fiadores, cuando hay más de uno, doctrina que parece derogada por las leyes recopiladas sobre todo en las obligaciones solidarias. El deudor debe indemnizar al fiador, de lo que por él ha pagado, y de los daños y perjuicios que ha sufrido, si éste no se obligó contra su voluntad, no dejó de oponer la excepcion perentoria procedente, ó no pagó con ánimo de donar; estando tambien obligado á hacer en favor de aquél la *cesion de acciones*, ó *carta de lasto*, por virtud de la cual puede conseguir el fiador el reintegro de la parte proporcional correspondiente á sus cofiadores.

¿Por qué causas se extingue la *fianza*?—Se disuelve por los modos comunes á todos los contratos, y además por la extincion de la obligacion principal; por el pago de la deuda; por la prolongacion de aquélla; por el depósito de la cantidad debida, rehusada por el acreedor; por la malversacion del deudor; y por el trascurso de tiempo, si fuere á término.

De la prenda y de la hipoteca.

La ley hipotecaria separó estos dos contratos, por lo cual debemos ocuparnos de ellos aisladamente.

¿Qué acepciones tiene la palabra *prenda*?—Llábase *prenda* al contrato *real*, en virtud del cual el deudor entrega al acreedor una cosa *mueble* en seguridad de la obligacion. Produce un derecho en la cosa, á favor del acreedor. Llábase tambien *prenda* al derecho que el acreedor adquiere sobre dicha cosa, por consecuencia del contrato; y, por último, se designa con este nombre á la misma cosa *mueble* que sirve de garantia.

¿Quiénes pueden constituir la *prenda*?—Los dueños que tienen la administracion de los bienes que van á gravar, y los guardadores, maridos, padres y apoderados que la tengan en los muebles de los menores, esposas, hijos y poderdantes.

¿Qué cosas no pueden ser objeto de *prenda*?—Los ganados y aperos de labranza, el lecho cotidiano de la familia y los instrumentos del arte ú oficio del deudor.

¿Qué contratos puede asegurar?—Toda obligacion lícita, sea *pura*, *condicional* ó *á plazo*, ora proceda de contrato ó se imponga en un testamento.

¿Qué efectos produce el contrato de *prenda*?—El acreedor puede retener la cosa empeñada hasta el pago de la deuda y de los gastos necesarios para su conservacion; y aún hasta que se satisfaga la que fuere contraída posteriormente. Está facultado para empeñar la cosa, que, sin embargo, debe restituir á su tiempo, y venderla en el señalado, previa la intimacion hecha al deudor doce dias antes, que se repetirá por tres veces si se pactare la prohibicion de enajenarla. Está obligado á prestar la *culpa leve* en su conservacion, á custodiaria sin usarla, y restituirla con sus frutos y accesiones, terminado el contrato.

El deudor debe pagar los gastos ocasionados en la conservacion de la cosa empeñada, y la parte de la deuda que no llegue á cubrir el importe de la prenda vendida. Tiene derecho á la devolucion, con sus adhesiones, una vez satisfecha aquélla.

¿Qué acciones nacen de este contrato?—Una *directa*, desde su otorgamiento, para conseguir la devolucion de la cosa y la diferencia de su precio en caso de venta. Otra *contraria*, para indemnizarse de los gastos y de los perjuicios causados en su conservacion. Ambas acciones se llaman *pignoraticias*, y se diferencian de la *real* que tiene el acreedor sobre la cosa, no sólo por su naturaleza, sino en que deben ejercitarse cuando aquélla ha terminado, y sólo se dan en pró y en contra de los contratantes.

¿Qué carácter especial tiene la *prenda*?—Es *indivisible*; por lo que, satisfe-

cho uno de varios acreedores, no se libera la cosa, continuando el gravámen en todas y cada una de sus partes, así como en sus acciones.

¿Qué pactos pueden agregarse á este contrato?—Los que tienen una causa lícita, y no alteran su naturaleza. No pueden estipularse los que quedan referidos al tratar de la *prenda*, como derecho *real* (1), y son el *comisorio*; la prohibición de enajenar la *prenda*, y la facultad de venderla sin requerimiento al deudor.

El pacto llamado *anticresis* ó *anticreseos*, que consiste en ceder al acreedor los frutos de la cosa, es lícito desde la abolición de la tasa del interés del dinero.

¿Por qué causas se extingue?—La desaparición de la cosa; la *remisión* del acreedor; la extinción de la obligación asegurada; la *prescripción* de treinta años; el transcurso del tiempo por el que se constituyó; la adquisición de su dominio por el acreedor, y la pérdida del que tenía en ella el deudor, son motivos bastantes para que el contrato se disuelva.

¿Qué acepciones tiene la palabra *hipoteca*?—Las mismas que la palabra *prenda*; esto es, puede considerarse como contrato, como derecho *real* emanado de él, y como la *cosa hipotecada*. Tomado en el primer sentido, suele definirse: un contrato *real* por el que uno se obliga á responder del cumplimiento de una obligación principal, sujetando para ello determinados bienes inmuebles, con cuyo valor puede hacerse el pago. Apreciada como *derecho real*, es el que tiene el acreedor en los inmuebles que garantizan el cumplimiento de lo debido (2).

¿En qué principios se funda la nueva reforma hipotecaria?—(3) Derogando la mayor parte del derecho antiguo, reconoce por bases la *publicidad*, *especialidad* y *determinación de las hipotecas*, y establece las llamadas *legales*, diferentes de las antiguas, para garantizar los intereses de los menores é incapacitados, pero públicas y especiales.

¿Qué medio empleó para conseguir la *publicidad*?—La instalación de los Registros de la propiedad, á cargo de letrados que entran en la carrera por oposición, en cuyos libros deben inscribirse todos los *derechos reales* y modificaciones que reciba el dominio de los inmuebles, con algunas limitaciones si se quiere que perjudiquen á terceros, deslindando y determinando los derechos de los contratantes y los de aquéllos. Así desaparecen las hipotecas ocultas y tácitas que en tan evidente peligro ponían los intereses de los acreedores.

¿Qué bienes son ó pueden ser objeto de este contrato?—Solamente los *inmuebles*, y los que á éstos equipara la ley, como son los *derechos reales* impuestos sobre aquéllos que pueden enajenarse.

¿Qué hipotecas no producen efectos absolutos?—Las siguientes, cuyas limitaciones se expresan también: 1.^a, la del edificio construido en suelo ajeno, que no perjudica el derecho del propietario del terreno, que no interviene en el contrato; 2.^a, la del usufructo, que se extinguirá cuando éste, si la causa de la extinción no es debida á la voluntad del usufructuario hipotecante; pues si lo fuere, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación principal, ó termine naturalmente el usufructo; 3.^a, la de la mera propiedad, cuyo usufructo, adquirido por el hipotecante de aquélla, queda ligado al cumplimiento de la obligación; 4.^a, la de bienes ya hipotecados anteriormente, que deja á salvo el derecho del primer acreedor; 5.^a, la de pastos, superficie, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza *real*, que salvan el derecho de los demás partícipes; 6.^a, la de los ferro-carriles, ca-

(1) Véase la pág. 73.

(2) Idem, id.

(3) Tuvo lugar por la ley hipotecaria y su reglamento en 1861, y las modificaciones que rigen desde 1871.

nales, puentes y otras obras destinadas al servicio público, cuya explotación llegue á diez años ó más, y la de los edificios ó terrenos de dominio particular, agregados á aquellas obras, las cuales quedan pendientes del derecho del concesionario; 7.^a, la de bienes pertenecientes á personas que no tienen la libre disposición de ellos, que deben sujetarse á las condiciones y requisitos del derecho, de cuyo cumplimiento deben dar fé los notarios en las escrituras de constitucion; 8.^a, la del derecho de hipoteca voluntaria; no la del de las legales que no pueden hipotecarse, cuya hipoteca, que viene á ser una sub-hipoteca, estará limitada por la existencia y resolución del derecho hipotecado; 9.^a, la de los bienes comprados á *retroventa*, que sólo responderán, para el comprador hipotecante, de la cantidad que debe recibir, si el vendedor los retrajere; y para el vendedor, de lo que valgan más sobre dicho precio; pero no podrá perseguirse la hipoteca, sin retraer los bienes el acreedor á nombre del vendedor; 10.^a, la de los bienes litigiosos, cuya demanda se haya anotado preventivamente en el Registro, pues esta hipoteca queda pendiente de la resolución del pleito.

¿Pueden hipotecarse los bienes sujetos á condiciones resolutorias?—Si; pero con las siguientes limitaciones. Si la condicion pendiente afectare á la totalidad de la cosa hipotecada, no se podrá enajenar, sino cuando la condicion deje de cumplirse, y pase el inmueble al dominio absoluto del deudor. Los frutos se aplicarán al pago del crédito. Cuando la condicion afecte únicamente á una parte de la cosa hipotecada, deberá enajenarse ésta judicialmente con la misma condicion, aplicándose al pago los frutos y el precio.

Si antes de la consumacion de la venta adquiere el deudor el dominio absoluto de la cosa hipotecada, podrá el acreedor repetir contra ella, y solicitar su enajenacion.

¿Qué cosas no pueden hipotecarse?—Los frutos y rentas pendientes, separados del prédio; los muebles de adorno y comodidad, ó destinados á alguna industria, siempre que los primeros estén colocados permanentemente en los edificios; los oficios públicos; los títulos de la deuda; obligaciones y acciones de compañías; el derecho *real* futuro, no inscrito á favor del hipotecante; las servidumbres aisladamente, excepto la de agua; el usufructo legal que tienen los padres y el marido supérstite; el uso y la habitacion; las minas sin título de concesion, aun situadas en terreno propio. Pueden, no obstante, hipotecarse éstos con consentimiento de aquél á quien aprovechan las condiciones, y cuando el cumplimiento de la obligacion depende exclusivamente del poseedor de los bienes, quien quedará obligado, durante la hipoteca, á hacer ó á no hacer aquello de que debe depender la existencia de su derecho, siendo responsable civil y criminalmente de la extincion de la hipoteca debida á esta causa.

¿Qué extension concede el nuevo derecho á la hipoteca?—Se extiende á las acciones, mejoras, frutos y rentas pendientes, pertenecientes á la finca; y comprende tambien las indemnizaciones concedidas, ó debidas á su propietario. Por consecuencia de tal extension, la hipoteca comprende todos los bienes muebles adheridos á los inmuebles, ó que son considerados como tales; pero para que esto suceda, es menester que pertenezcan al dominio del hipotecante. Es tal la fuerza de este derecho *real* y la adherencia de las hipotecas á las fincas, *á quienes siguen como la sombra al cuerpo*, que una vez inscrito, pueden hacerse efectivos los créditos, no obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre la hipoteca.

¿Qué derecho tiene el dueño de acciones y mejoras no hipotecadas?—Puede exigir su importe ó retenerlas, siempre que sea factible, sin menoscabo del resto de la finca. Cuando opta por lo primero, ó no sea posible separarlas, no podrá detener el cumplimiento de la obligacion principal, debiendo esperar á la enajenacion de la finca para realizar su derecho. Si, siendo las acciones y mejoras separables, no quisiera su dueño llevarse—

las, se enajenarán con separacion del prédio, y entregará el precio á su dueño.

¿Qué dispone la ley hipotecaria sobre el préstamo con interés?—Crea una presuncion *juris et de jure*, por la que supone que el acreedor renuncia á la hipoteca, relativamente á los intereses antiguos, estableciendo por ello que la constituida por un crédito de esta naturaleza, sólo es responsable de los intereses de los dos últimos años, y la parte vencida de la anualidad corriente, en perjuicio de tercero. El acreedor diligente puede asegurar los anteriores, de tres en tres años, pidiendo que se amplie la hipoteca á los del primer año, y así sucesivamente, siempre que se debiere alguna parte de ellos. Despues de los tres años, sólo puede asegurar la parte de réditos que en el momento de hacerse la ampliacion no la estuviere con la primer hipoteca, salvo el derecho anterior y el adquirido despues de los dos años por un tercero. Exceptuase de esta doctrina el caso en que la hipoteca no pertenezca al deudor, porque entonces el acreedor debia dirigirse contra los inmuebles que posea éste y puedan hipotecarse. Lo dispuesto acerca de los préstamos con interés, es aplicable á los censos.

¿Qué consecuencias nacen de la indivisibilidad de la hipoteca?—Las siguientes: 1.ª, subsiste íntegramente, aunque la principal sufra disminucion, y se conserva en la parte de la finca que haya desaparecido, con tal que no se haya cancelado; 2.ª, la division de la finca no altera su responsabilidad *solidaria*, á no ser con consentimiento del acreedor, quien podrá repetir por la totalidad de la suma contra cualquiera de las nuevas fincas, ó contra todas á la vez; 3.ª, dividida la hipoteca, y distribuida la responsabilidad, el dueño que haya satisfecho la parte consignada á su porcion, puede pedir la cancelacion *parcial*, y consiguiente liberacion de su propiedad: si dicha cantidad excede del gravámen parcial, el deudor puede elegir la finca que haya de quedar libre; 4.ª, cuando no existe la division y distribucion, la hipoteca quedará subsistente en toda su extension, cualquiera que sea la parte del crédito que el deudor haya satisfecho.

¿Qué medios adopta el nuevo sistema para conseguir la determinacion de la hipoteca?—Exige que, siendo varias las fincas hipotecadas, se exprese la parte de gravámen de que cada una debe responder, por la que, y por la correspondencia á los intereses, sólo puede repetirse contra la finca, con perjuicio de tercero. Si falta á esta distribucion, la hipoteca no puede inscribirse. Si la finca no alcanzare á cubrir el crédito, puede el acreedor repetir, por la diferencia, contra las demás hipotecas que tenga el deudor, sin perjuicio del tercero que haya adquirido un derecho posterior á la inscripcion.

¿A quiénes concede la facultad de hipotecar?—Sólo al que tenga derecho, segun los asientos ó índices del Registro, requisito sin el que, la hipoteca no convalecerá ni perjudicará á tercero, aunque el contrayente adquiera despues dicho derecho.

¿Qué recursos tiene el acreedor, en caso de deterioracion de la finca?—Puede solicitar que su dueño haga, ó no haga, lo conveniente para evitar ó remediar el daño, probando que el deterioro es hijo del dolo, culpa ó voluntad de éste, recurso que puede extenderse á poner el inmueble en administracion judicial, si el hipotecante continúa causándolo.

¿Qué procedimiento debe seguir el acreedor para obtener la efectividad del crédito?—Si la hipoteca estuviere en manos de un tercero, entendiendo por tal, no sólo al dueño absoluto de la finca antes hipotecada, sino al que lo sea del usufructo ó del dominio directo, no puede dirigirse contra ella hasta pasados diez dias, término en que debe pedir judicial ó extrajudicialmente, al deudor primero y principalmente obligado, el cumplimiento de la obligacion, y puede éste solventar la deuda. Pasado dicho término sin obtener el pago, el requerimiento debe hacerse al tercero, que está obligado á pagar, dentro de igual término, la deuda con los intereses de los dos

últimos años, y la parte vencida de la anualidad corriente, ó, en su defecto, desamparar los bienes hipotecados. Igual procedimiento debe seguirse para el pago de los plazos del capital é intereses vencidos y no satisfechos. Cuando para ello fuere necesario enajenar la finca, se transferirá al comprador con la hipoteca correspondiente á la parte del crédito no satisfecho, deduciéndola, con los intereses, del precio de la venta. Si porque el comprador no consienta en el contrato, ó por falta de cumplimiento del deudor y del tercero, el acreedor no consiguiese la satisfaccion del crédito, puede dirigirse ejecutivamente contra los mismos bienes, presentando el título y justificando el requerimiento. No se suspenderá la ejecucion, ni por la muerte del deudor ó del tercero, ni por la declaracion de quiebras, ni declaracion de concurso, ni por las reclamaciones del tercero, si no estuvieren fundadas en títulos inscritos anteriormente. El tercer poseedor se subroga en lugar del acreedor, si satisface el crédito hipotecario.

¿Cuando prescribe la accion *hipotecaria*?—A los veinte años, contados desde el tiempo en que pueda ejercitarse, con arreglo al título inscrito (1).

¿Cómo se dividen las *hipotecas*?—En *voluntarias* y *legales*; quedando derogada la antigua division de *hipotecas generales* y *especiales, convencionales, legales* y *judiciales*, por la nueva forma que les dá la ley hipotecaria.

¿Qué son *hipotecas voluntarias*?—Las convenidas entre partes ó impuestas por el propietario. Son las llamadas antes *convencionales*.

¿Quiénes pueden constituir las?—Los que tienen la libre disposicion de sus bienes ó se hallan autorizados para ello con arreglo á las leyes. Pueden hacerlo por sí, ó por medio de apoderado debidamente autorizado, circunstancia tan esencial, que la hipoteca constituida por el que no lo esté no surte efecto hasta la ratificacion del dueño de los bienes, que deberá inscribirse en el Registro.

¿Qué formalidades requiere la *hipoteca voluntaria*?—Para que pueda perjudicar á tercero, debe constituirse en escritura pública, é inscribirse en el Registro de la propiedad, en la forma prescrita en la nueva ley y su reglamento.

¿Cuándo surte efecto la hipoteca de obligaciones con condicion *suspensiva ó resolutoria*?—La primera surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si la condicion llega á cumplirse; y la segunda, desde que en el mismo se hace constar el cumplimiento de la obligacion, cuyos hechos deben hacerse constar por nota marginal en el Registro.

¿Qué formalidad debe observarse con los *pactos, intereses* del capital ú otras modificaciones que afecten á la hipoteca?—Que, por regla general, para que perjudiquen á un tercero deben constar en el Registro, en la forma que el caso requiera, y segun los términos del contrato. Cualquiera que sea la época del reintegro del capital, podrá el acreedor dirigirse contra la hipoteca por el pago de los intereses, no pudiendo pasar del de los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente, si hay terceros interesados, sin perjuicio de la accion personal por el resto, contra el deudor.

¿Qué reglas establece la ley hipotecaria sobre los *censos*?—Redimido el que esté gravado con hipoteca, sólo puede exigir el acreedor que el redimente le pague el crédito y los intereses, ó le reconozca una hipoteca sobre la misma finca, antes censida, lo cual debe hacerse constar tambien en el Registro. Si la hipoteca llega á ser insuficiente por *dolo, culpa* ó *voluntad* del censatario, puede el censalista exigir ó una nueva hipoteca que garan-

(1) Novedad introducida por la ley hipotecaria.

tice la parte del capital que deja de estar asegurado, ó que aquél redima totalmente el censo. Si la disminucion de la finca es efecto de otras causas, la reduccion de pensiones y abandono de aquélla no tendrá lugar mientras alcance á cubrirlas el rédito del capital, graduado por el tanto por ciento á que esté constituido el censo. Cuando la disminucion no pudiere soportar esto, procede el abandono ó la reduccion, sin perjuicio del aumento proporcional que deban tener las pensiones, en el caso de que la finca mejore.

¿Son enajenables los créditos *hipotecarios*?—Sí, siempre que la enajenacion se constituya en escritura pública, con conocimiento del deudor, y se inscriba en el Registro. Tambien pueden cederse en los mismos términos. Las hipotecas que garantizan obligaciones transmisibles por endoso, ó títulos al portador, no necesitan, para su enajenacion ó cesion, el conocimiento del deudor, ni la inscripcion de la trasferencia en dicho Registro.

¿Cómo deben cancelarse las hipotecas?—Las hechas por escritura pública deben cancelarse por medio de otra, en la cual manifieste su consentimiento el acreedor de la primera, sus causahabientes y representantes legítimos, ó en virtud de providencia ejecutoria, no pendiente de casacion, para que conste en el Registro la libertad de la finca, pues de lo contrario las hipotecas subsistirán en cuanto á tercero, mientras no se cancele su inscripcion.

¿Qué es hipoteca legal?—El derecho concedido á ciertas personas para que á su favor se constituyan, necesariamente, hipotecas *especiales* sobre bienes hipotecables; vienen á ser las antiguas hipotecas generales ó especiales creadas por la ley, pero determinadas, concretas y públicas, cuya ocultacion en el Registro los priva de efectos legales. Subsiste este derecho mientras está pendiente el cumplimiento de la obligacion, aunque cese la causa que le dá origen, como el matrimonio, la patria potestad ó la administracion. Es tambien requisito indispensable su inscripcion.

¿Pueden ampliarse las hipotecas *legales*?—Sí, con tal que lleguen á ser insuficientes en los casos y con las formalidades que establece la ley hipotecaria.

¿Qué efectos produce la hipoteca *legal*?—Se equipara á la *voluntaria*, sin más excepciones que las expresamente determinadas por la ley, cualquiera que sea la persona que ejercite el derecho.

¿Pueden ser objeto de *cesion*?—Sólo cuando haya llegado el caso de fijar su importe, y las personas que deban entregarlo sean igualmente capaces para hacerlo.

¿Cuáles son las hipotecas *legales*?—1.^a, la constituida sobre los bienes de los maridos en favor de sus mujeres, por las dotes entregadas, bajo fé de escribano; por las arras ó donaciones del marido; por los parafernales que éstos administren, y por cualesquiera otros bienes de la mujer, entregados al marido por escritura pública; 2.^a, la constituida en los bienes de los padres y en favor de los hijos, por los bienes reservables y los del peculio de éstos, siempre que tengan aquéllos la administracion y usufructo de dicho peculio; 3.^a, la constituida sobre los bienes de los guardadores en favor de los menores ó incapacitados, por los bienes de éstos, y la responsabilidad que pueda afectar á aquéllos; 4.^a, la constituida en favor del Estado, de las provincias y de los pueblos, sobre los bienes de los que contratan con ellos ó administran sus intereses, por las responsabilidades consiguientes, y sobre los bienes de los contribuyentes por la anualidad vencida, y no pagada, de los impuestos; 5.^a, la constituida sobre los bienes de los asegurados en favor de los aseguradores, por los premios del seguro de dos años, cuya hipoteca se extiende á los dos últimos dividendos, si el seguro fuere mútuo.

¿Qué reglas se han establecido para la eficacia de las hipotecas *legales*?—Se impuso á los notarios la obligacion de advertir á los otorgantes

sus derechos y deberes, siempre que de los instrumentos que ante ellos pasen, resulte derecho de hipoteca *legal*, debiendo ponerla en conocimiento de los encargados ó representantes de dichos otorgantes y del registrador de la propiedad, cuando éstos sean menores de edad, mujeres casadas, etcétera. Los registradores, en este caso, trascurridos los treinta días siguientes al otorgamiento del contrato, sin que se haya constituido la hipoteca, deben poner el hecho en conocimiento de aquellas personas ó del promotor fiscal, cuando este funcionario deba intervenir como representante legal. También están acordadas otras medidas reglamentarias de que no podemos ocuparnos en este libro.

¿Qué derechos nacen de la hipoteca *legal* de las mujeres casadas?—Los siguientes: 1.º, tienen derecho á que los maridos les hipotequen é inscriban en el Registro, la dote *estimada*, ó la obligación de devolver su importe; 2.º, á que también se inscriba la dote *inestimada* que deba devolver el marido en su caso, si los bienes en que consista no lo estuvieren ya por algún concepto, pero no á hipotecar bienes propios para seguridad de dicha dote; 3.º, á que el marido constituya hipoteca *especial* en la carta dotal ó en otra escritura, para seguridad de los que haya recibido aquél por razón de matrimonio, y no se hallen comprendidos en los números anteriores, como muebles, semovientes, dinero, etc.

¿A favor de quién se inscribe la dote *estimada*?—A favor del marido, hasta lo cual no puede ejercer actos de dominio y de administración. El registrador debe inscribir de oficio, la hipoteca legal correspondiente á la mujer que sobre ellos pesa, aunque nada diga de ella la carta dotal.

¿A favor de quién se inscribe la dote *inestimada*?—Si los bienes en que consiste están inscritos ya á nombre de la mujer, el registrador debe poner una nota marginal que indique su cualidad. Si no lo estuvieren, se expresará en la inscripción su carácter de dotes *inestimados*. Cuando no sean inmuebles, se apreciarán para saber la cantidad de que responde la hipoteca, en caso de no restitución.

¿A nombre de quién se inscriben los *parafernales*?—Los que la mujer entregue á su marido para administrarlos, siguen la misma condición que la dote *inestimada*, y se inscriben, por tanto, á nombre de la mujer, valuándose su importe.

¿Cuándo debe el marido hipoteca, por razón de las *arras* y donaciones *esponsalicias*?—Cuando se le han ofrecido como aumento de la dote, lo cual debe hacerse constar en la escritura. Si ha prometido ambas, sólo está obligado á asegurar con hipoteca una sóla, á elección de la mujer, ó á la suya, si ella no eligiere dentro de veinte días.

¿A nombre de quién deben inscribirse los bienes gananciales?—A nombre de los cónyuges.

¿Quiénes pueden reclamar la hipoteca *legal* de la mujer casada?—La misma interesada, si fuere mayor de edad. Si es menor, el padre, la madre y el dotante, aun cuando no se haya realizado el matrimonio. A falta de éstos el curador, cuyo derecho puede ejercitar viviendo la madre y el dotante, si no lo usaren éstos, en los treinta días siguientes á la entrega de la dote. El curador que no cumple con este deber, está sujeto á responsabilidad. En defecto de todos, el promotor fiscal pedirá la hipoteca *legal* y su inscripción en el Registro.

¿Quiénes deben calificar la suficiencia de la hipoteca?—Constituida la dote por los padres ó con bienes de la hija, corresponde la calificación y admisión de la hipoteca al padre; luego á la madre, y en último caso al curador. Constituida por un extraño, corresponderá al dotante, en primer lugar, y luego á las expresadas personas. La calificación ó no admisión infundadas, pueden ser corregidas por el juez, admitiendo la hipoteca.

¿Es renunciable el derecho de hipoteca *legal*?—La mujer que es mayor de edad, y tiene la libre administración de sus bienes, puede renunciarlo,

después de haber sido advertida de él por el notario autorizante. En los demás casos no puede renunciarse.

¿Qué formalidades deben llenarse en la enajenación de los bienes dotales é hipotecados, para su seguridad?—Los bienes *inestimados* y los *parafernales* deben enajenarse según las reglas del derecho común, pero con la obligación de restituirlos el marido. Las rentas ó pensiones perpétuas, se asegurarán con hipoteca, capitalizándolas, al efecto, por el interés legal. La capitalización de las temporales, será convencional; y á falta de ésta, se señalará por el juez. Los bienes hipotecados, propios del marido, pueden enajenarse por éste, dejando subsistente la hipoteca legal constituida sobre ellos, siendo necesario el consentimiento de la mujer, cuando la hipoteca haya de reducirse, ó sufrir modificación en su preferencia. Para llevar á efecto estas formalidades, los notarios deben cumplir con ciertas prevenciones reglamentarias.

¿Quiénes pueden pedir la hipoteca por bienes *reservables*?—Los hijos, cuando son mayores de edad; el padre, la madre, y el segundo marido, dentro de noventa días, si son menores; y no haciéndolo éstos, los tutores ó curadores, si los hubiere, y en su defecto, los parientes ó el albacea. Cuando no existan bienes que hipotecar, el padre y la madre constituirán la obligación de hipotecar los primeros que se adquieran. Y si los *reservables* son raíces, bastará que se consigne su calidad en el Registro.

¿Qué peculio debe asegurarse con hipoteca *legal*?—El *adventicio*, cuando consista en bienes muebles ó semovientes; pues si lo forman bienes inmuebles, basta que se inscriban á favor de los hijos, en tal concepto.

¿Es obligatoria en todo caso la constitución de la hipoteca?—Sólo cuando el padre puede constituirla por tener bienes inmuebles. Si son insuficientes y se le exige, puede ampliarla á los que adquiriera después.

¿Quiénes pueden pedirla?—Los hijos mayores de edad y, no siéndolo, las personas de quienes procedan los bienes, sus herederos ó albaceas, los ascendientes del menor y la madre legalmente separada de su marido, por el orden relacionado. Al curador del menor debe dársele conocimiento del expediente, quien tiene la obligación de pedir la constitución de la hipoteca, siempre que no se solicite por dichas personas.

¿Qué hipoteca deben constituir los guardadores?—Una *especial*, suficiente á responder del desempeño de sus cargos, que puede ser ampliada, á juicio del juez y excitación de cualquiera persona, ó de oficio, con las formalidades de la ley de Enjuiciamiento civil.

¿Qué dispone la ley hipotecaria acerca de la viuda que pasa á segundas *nupcias*?—Que no se le expida real cédula de habilitación para continuar en la guarda de sus hijos sin que constituya igual hipoteca dentro de sesenta días, quedando obligado su segundo marido á constituirla si aquélla continúa administrando los bienes sin cumplir esta formalidad, siendo *mancomunadamente* responsable de ella; obligación que se extiende al caso de que el segundo matrimonio tenga lugar antes de la aprobación legal de las cuentas tutelares. Pasados los sesenta días, se nombrará otro guardador al menor, á instancia de parte, ó de oficio.

Estas disposiciones son contrarias á la letra y espíritu de la ley de matrimonio civil, que otorgó la patria potestad, á las madres en defecto de los maridos, por lo cual se consideran derogadas por dicha ley, y así lo declara el Reglamento de la hipotecaria.

¿Quiénes pueden pedir la constitución de la hipoteca?—Los hijos mayores de edad, el guardador, curador para pleitos, y los parientes paternos y maternos, si fueren menores.

¿Qué preferencia tiene el Estado en la hipoteca *legal* sobre los bienes de los que deben impuestos?—La relativa al cobro de una anualidad, respecto á bienes inmuebles, la cual se mencionará en la escritura.

¿Qué derechos tienen los aseguradores?—Pueden exigir una hipoteca

especial sobre los bienes inmuebles asegurados, para el cobro de los premios del seguro de dos ó más años, ó de dos ó más dividendos, si el seguro es *mútuo*. Antes de devengarse éstos tienen los aseguradores preferencia sobre los demás créditos. En las escrituras, el notario reservará expresamente esta hipoteca.

Títulos sujetos á inscripcion en el Registro de la propiedad (1).

¿Qué títulos deben inscribirse?—Todos los traslativos del dominio de los inmuebles ó de los derechos *reales* impuestos sobre ellos; aquéllos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen ó extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteúsis, hipotecas, censos, servidumbres y otros cualquiera *reales*; todo acto ó contrato en el cual se adjudiquen bienes inmuebles ó derechos *reales*; las ejecutorias de incapacidad legal para administrar, de presuncion de muerte de ausentes, imposicion de interdiccion civil ó modificacion de capacidad para disponer de los bienes; los arrendamientos de inmuebles que excedan de seis años, ó en que se hayan anticipado las rentas de tres ó más.

¿Es absolutamente necesaria la inscripcion?—Sí, para que el título perjudique á tercero. En cuanto á los contratantes, no parece serlo, si bien hay disposiciones que indirectamente obligan á ello, puesto que es causa bastante para suspenderla ó denegarla, la de no hallarse anteriormente inscrito el dominio ó derecho de que se trate, á favor de la persona que lo trasfiera ó grave, quien podrá subsanar esta falta en cualquiera tiempo, con la presentacion del título correspondiente, ó por medio de informacion supletoria de posesion, si aquél no existe; puesto que desde la publicacion de la ley hipotecaria no se admiten en los tribunales ni oficinas públicas documentos no inscritos de los que están sujetos á inscripcion, á no ser cuando se invoquen por un tercero en apoyo de un derecho distinto, estando facultadas dichas dependencias para devolverlos, sin tomar de ellos nota ni extracto alguno, y puesto que los notarios deben advertir á los contratantes la necesidad de la inscripcion, recordándoles la prohibicion de ciertas diligencias y previniéndoles varias formalidades que corroboran y secundan el pensamiento de la ley. Son medios indirectos de llegar á la inscripcion de los derechos *reales*. Pero lo cierto es, que el Tribunal Supremo ha declarado que la falta de aquel requisito en los títulos traslativos del dominio, no produce nulidad; sino que se limitará sus efectos á salvar los derechos de tercero, dejando subsistentes las obligaciones de los contratantes.

¿Qué medio ha creado la hipotecaria para sustituir la falta de título *escrito*?—La justificacion de la posesion, mandando se inscriba ésta en el Registro.

¿Quiénes se entiende que carecen de título *escrito*?—Además del propietario, que realmente no lo tiene, los que, teniéndolo, no pueden hacer uso de él, por cualquiera causa que dilate ó impida su presentacion.

¿Cómo debe tramitarse el expediente?—Comienza por una manifestacion sencilla y breve, hecha á la autoridad del lugar en que radiquen los bienes, ofreciendo justificar la posesion, presentan lo los recibos de contribucion, etc.; hecho lo cual se practica la justificacion, con audiencia del promotor fiscal, si fuere del dominio pleno, y con la de los demás co-

(1) La índole de este Manual no consiente que nos ocupemos de la constitucion, organizacion, direccion é inspeccion de los Registros de la propiedad, así como tampoco del nombramiento, cualidades y responsabilidad de los registradores, que pueden estudiarse fácilmente en la ley hipotecaria.

participes en otro caso; y si aquella resulta perfecta, se aprueba el expediente por el juez y se entrega al interesado para su presentacion en el Registro. Segun la última reforma de la ley, puede verificarse la inscripcion por virtud de certificacion del ayuntamiento que acredite que el interesado paga, á título de dueño, la contribucion por los bienes que ha de inscribir. Esta facultad ó forma de inscripcion, es extensiva á los poseedores anteriores á la ley hipotecaria y á los dueños y poseedores de derechos reales, *excepto el de hipoteca*, posteriores á dicha ley (1).

¿Cuáles son los efectos de esta posesion inscrita?—No perjudica á tercero de mejor derecho, aunque no tenga inscrito su título, quedando vigente la legislación comun en cuanto á la posesion, que perjudicará ó favorecerá á aquél, desde la fecha de la inscripcion.

¿Qué dispone la ley hipotecaria sobre los documentos privados anteriores á la misma?—Que cuando contienen actos ó contratos de bienes inmuebles sujetos á registro, se presenten firmados y rubricados por los contrayentes, con una copia de los mismos en papel comun, firmada tambien. Dichos títulos se inscribirán, quedando en el Registro el documento original y devolviendo la copia al interesado con la nota de «registrado».

Hecha la inscripcion, perjudicará al tercero, quedando vigentes siempre los derechos de los contratantes entre si.

¿Quiénes pueden pedir la inscripcion, en general?—El trasmitente y el adquirente del derecho inscribible, sus representantes legítimos y todo el que tenga interés en dicho derecho. Los notarios y cónsules deben exigir la de los derechos reservados á terceras personas en los actos y contratos en que no fueron parte ó que resulten de documentos tenidos á la vista. La forma de la inscripcion y la manera de rectificarla, así como la organizacion, inspeccion y publicidad de los registros, no caben en la índole de este trabajo (2).

¿Qué efectos produce la inscripcion?—Prohíbe la de cualquier título de fecha anterior sujeto á ella, sin la que aquél no perjudicará á tercero, excepto los anteriores á la ley hipotecaria, no inscritos, que pueden inscribirse, como ya hemos dicho antes. Los títulos inscritos sólo le perjudicarán desde la fecha del asiento de presentacion, que, en caso de concurrencia de dos ó más, se atenderá á la hora en que se presentaron para determinar su prelación. La prescripcion que requiere justo título, tampoco le perjudicará, si éste no se halla inscrito, ni se darán contra él las acciones *rescisorias* y *resolutorias* si presenta inscritos los documentos en que funde su derecho. Es tal la fuerza de la inscripcion, que perjudica á los acreedores *singularmente* privilegiados. Son consecuencias de esta doctrina que los contratos no se anularán ni rescindirán en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por la revocacion legal de las donaciones, excepto por la falta de cumplimiento de condiciones inscritas en el Registro; por el retracto en la venta y el tanteo en el *enfiteusis*; por la falta total ó parcial de pago del precio cuando no consta inscrito el aplazamiento; por la doble venta no inscrita; por lesion *enorme ó enormísima*; por resolucion *in integrum*; por enajenacion en fraude de acreedores, y por cualesquiera otras acciones *rescisorias* no inscritas ni mencionadas anteriormente, quedando siempre en pié la accion *personal* para la indemnizacion de daños y perjuicios.

¿Qué excepciones reconoce esta doctrina?—No es aplicable cuando las acciones *rescisorias* y *resolutorias* deben su origen á causas que constan explícitamente del Registro; ni á las de enajenaciones hechas en fraude de acreedores, si la segunda fué otorgada por título gratuito, como por dona-

(1) Decreto de 10 de Febrero de 1875.

(2) Véase la ley hipotecaria y su reglamento.

cion ó cesion de derecho, enajenacion ó renuncia en que no haya mediado precio ni obligacion preexistente vencida, y si el tercero ha sido cómplice en el fraude.

Segun lo expuesto, ¿qué contratos podrán revocarse concurriendo las expresadas circunstancias?—Los censos, enfitéusis, servidumbres, dotes, donaciones *proprier nupcias*, adjudicaciones en pago de deudas no vencidas; hipotecas *voluntarias* tambien no vencidas, y cualquiera otro contrato otorgado por el deudor en que traspasa ó renuncia un derecho *real*.

¿Cuándo se reputa cómplice en el fraude al poseedor de la cosa?—Cuando se probare que sabía el fin de la enajenacion ó la simulacion y suposicion de que fuera objeto, aprovechándose de ella para adquirir la cosa, y cuando pagó por su adquisicion la mitad, ó ménos, del justo precio.

¿Qué efectos produce la inscripcion de un acto ó contrato nulo?—No altera en nada su naturaleza, pues que no convalida los que sean nulos con arreglo á las leyes. Si del Registro resulta capacidad en el enajenante, y el tercer adquirente ha inscrito su derecho, no se invalidará en cuanto á los que con aquél hubieran contratado por título oneroso, aunque despues se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud del título anterior no inscrito, ó de causas que no resulten claramente del mismo Registro. Tampoco se invalidarán con respecto á las citadas personas, aun cuando tenga lugar por dicha causa la anulacion del derecho del otorgante, si la inscripcion hecha á favor de aquél se hubiere notificado á los que, en los veinte años precedentes hayan poseido, segun el Registro, los mismos bienes y no hubieren reclamado contra ella en treinta dias. Esto no es aplicable á la inscripcion de la mera posesion.

Anotaciones preventivas.

¿Qué son *anotaciones preventivas*?—Una especie de hipotecas judiciales por las que se asegura el éxito de un juicio, y ciertos derechos *reales* que, por no ser definitivos, no pueden inscribirse. No modifican la naturaleza de las obligaciones, ni convierten en *real* la accion que no lo es. Son una garantía del demandante, para no ver ilusorio su derecho en definicion, por la insolvencia voluntaria, ó destruccion de la cosa litigiosa.

Quiénes pueden pedir las?—1.º, el que demanda la propiedad de un inmueble, ó la constitucion, declaracion, modificacion ó extincion de un derecho *real*; 2.º, el ejecutante que ha hecho efectivo el embargo acordado en bienes raíces del deudor; 3.º, el que tuviere á su favor una ejecutoria, para cuyo cumplimiento se mandaren embargar inmuebles del condenado; 4.º, el demandante que obtuvo en juicio ordinario el *secuestro* ó la prohibicion de enajenar el inmueble demandado; 5.º, el que pidiere la declaracion de incapacidad de algunas personas, de presuncion de muerte de ausentes, interdiccion civil, etc.; 6.º, el legatario que no puede promover la testamentaria; 7.º, el acreedor refaccionario, mientras duren las obras; 8.º, el que presente en el Registro un título que no puede ser inscrito por faltas subsanables, ó imposibilidad del registrador; 9.º, todos los que tienen este derecho, segun la ley hipotecaria, no enumerados en la anterior relacion.

¿Dentro de qué término debe pedirse, y cómo debe hacerse la anotacion de los legatarios?—El que lo es de *especie* puede pedir, en cualquier tiempo, que se anoten preventivamente los bienes en que consista el legado. El que no lo es de *especie*, debe pedir la anotacion dentro de los ciento ochenta dias siguientes á la muerte del testador, sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia, excepto los legados especialmente, cuya anotacion no excluye otras del mismo género, equiparadas legalmente en sus efectos, y preferidas á las que se pidan despues de aquel término.

¿Qué derechos nacen de la anotación á favor del legatario?—La prelación sobre los acreedores del heredero que ha aceptado la herencia sin beneficio de inventario, á favor de los que posteriormente hayan adquirido algun derecho sobre los bienes, y de los legatarios que pidieren la anotación despues de los ciento ochenta dias.

¿Puede ampliarse la anotación preventiva?—Sí; siempre que los bienes anotados no basten para la seguridad del legado.

¿Puede el heredero inscribir á su favor los bienes hereditarios, dentro del término de los ciento ochenta dias?—Puede hacerlo, con tal que todos los legatarios renuncien en escritura pública su derecho de anotación, ó que la solicitud de aquél se notifique á éstos con treinta dias de anticipación, por si quisieren hacer uso de su derecho.

¿Qué formalidades debe llenar el acreedor refaccionario para obtener la anotación preventiva de su crédito?—Debe presentar el contrato escrito, celebrado con el deudor, en donde consten todas las circunstancias necesarias para evitar dudas y esclarecer los hechos. Si la finca resultara afectada á obligaciones *reales*, sólo se hará la anotación, bien en virtud de convenio público, en que intervengan los acreedores de éstas, bien por providencia judicial dictada con citación de las mismas, en cuyo caso el refaccionario será considerado como acreedor hipotecario en lo restante de su valor, despues de cubrir las obligaciones reales, y en la diferencia de precio que alcanzare en su enajenación, comparado con el que se le hubiere dado antes de las obras.

¿Qué faltas se consideran *subsanales* para que se suspenda la inscripción de los documentos y se anoten preventivamente?—Las que afecten á la validez del mismo título, sin producir la nulidad necesaria de la obligación. Las que produzcan necesariamente nulidad, impiden la anotación, y son por ello *insubanales*. Por consiguiente, la validez ó nulidad de la obligación, es la guía que debe seguirse en la calificación de las faltas de los títulos. Contra ella puede recurrirse al juzgado.

¿Cuáles son los principales efectos de las anotaciones preventivas?—Las que son resultado de una providencia judicial, tienen el carácter de transitorias. Las demás pueden considerarse como preparatorias de otras tantas inscripciones, cuyo efecto se retrotrae á la fecha de las anotaciones. Su existencia basta para enajenar ó gravar los inmuebles anotados, sin perjuicio del derecho de la persona á cuyo favor se haya hecho la anotación.

¿En qué casos será nula la anotación?—Cuando por ella no pueda venirse en conocimiento de la finca ó derecho anotado, de la persona á quien perjudica, ó de la fecha de la anotación.

¿Cómo se extinguen las inscripciones y anotaciones *preventivas*?—Aquéllas se extinguen, en cuanto á tercero, por su cancelación, ó por la inscripción de la trasferencia del dominio ó derecho *real* inscrito á favor de otra persona. Estas se extinguen con el derecho anotado, ó llegado el caso convenido en el contrato, ó providencia judicial, de convertirlas en inscripciones, y en todos los demás en que procede su cancelación total.

¿Cuándo procede la cancelación total y parcial de las anotaciones?—La ley hipotecaria y el reglamento para su ejecución, enumeran los diferentes casos, que, por su extensión, no podemos mencionar en este trabajo.

¿En qué forma deben hacerse las cancelaciones?—Por regla general, deben constar en documentos de la misma naturaleza que los que se tuvieron presentes para la inscripción. Nada decimos tampoco de la conversión de las anotaciones en inscripciones, nulidad de las cancelaciones, efecto de las mismas en cuanto á tercero, y otros puntos importantes de la nueva ley, porque no lo permite la índole de este libro.

¿Qué reglas se han establecido para preparar el tránsito del antiguo al nuevo sistema hipotecario?—La ley hipotecaria concedió á los dueños de antiguas hipotecas tácitas y generales el derecho de exigir que se convir-

teran en una *expresa y especial* bastante para responder de toda la obligación, cuya conversión debe hacerse en un término dado, presentando el título nuevo en el Registro, ó el mandamiento judicial que la acuerde. Cuando la obligación asegurada es *ilíquida é indeterminada*, debe fijarse su cuantía con acuerdo de todos los interesados, único límite á que se extiende la responsabilidad del deudor. Las antiguas hipotecas legales, tácitas, según el anterior sistema, deben convertirse en *especiales*, exceptuando las que á la publicación de la ley disfrutaban las mujeres casadas, los hijos, y las establecidas por fueros especiales; las que subsistirán mientras duren las obligaciones que garantizan, si los interesados no las convierten voluntariamente en *especiales*, ó una providencia judicial no las declara sin efecto contra tercero. Los deudores pueden exigir siempre de sus acreedores, que acepten una hipoteca especial suficiente, en sustitución de la tácita y general que aseguraba su crédito, decidiendo el juez las cuestiones que con tal motivo puedan suscitarse. Las hipotecas legales de los acreedores refaccionarios y legatarios, deben inscribirse dentro de un término dado, como anotaciones preventivas. Análogo precepto se sanciona respecto á las antiguas acciones *resolutorias ó rescisorias*. Establece el juicio de deliberación de las fincas, respecto á gravámenes antiguos. Permite que el censuario ó deudor que tenga sus bienes gravados, sin determinación de la responsabilidad individual de cada uno, pueda exigir que se divida el capital entre los que bastaren á responder del valor triplo de aquél; derecho que se compensa con el de reducción del gravamen otorgado al acreedor y al censalista. Si los bienes no fuesen suficientes, se dividirá el capital proporcionalmente á lo que valiesen, no libertándose ninguno de ellos. La falta de conformidad entre unos y otros, dará lugar á una contienda judicial. También se establecen reglas para la inscripción de las obligaciones antiguas, no inscritas, de que tampoco nos ocuparemos por la razón tantas veces indicada, y porque es materia que está llamada á pronta reforma.

La reforma de la ley hipotecaria (1) ha tenido por preferente objeto facilitar el planteamiento del crédito territorial, y hacer ménos costosa y más fácil la inscripción de los títulos. Al efecto estableció: 1.º, que por la liberación desaparezcan todos los derechos, sin distinción alguna, que afecten á los bienes que carezcan de titulación escrita, y que tengan sólo las inscripciones de posesión, adquiriendo dichos bienes, por este medio, las condiciones necesarias para el crédito territorial; 2.º, que los interesados en una inscripción puedan solicitar que se notifique á los que en los veinte años anteriores hubiesen poseído los bienes á que la misma se refiera, á fin de que ejerciten sus acciones para invalidar dicha inscripción dentro del término de treinta días, no pudiendo verificarla despues, y 3.º, que cuando la hipoteca se constituya para garantizar obligaciones transferibles por endoso ó títulos al portador, el derecho hipotecario se entenderá trasferido con la obligación ó con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la trasferencia en el Registro. Y como medio de facilitar y abaratar la inscripción, se han suprimido los libros especiales de hipotecas, debiendo hacerse los asientos del mismo modo que los concernientes á los demás derechos *reales*; no se exige la inscripción del dominio de la finca ó derecho que se trasfiera ó grave, si aquél es anterior al 4.º de Enero de 1863; se autoriza como queda dicho, la inscripción de la posesión por medio de los expedientes y de las certificaciones de los ayuntamientos, que acrediten que el interesado paga la contribución, á título de dueño, por las fincas que trata de inscribir; y se dictan reglas para dar autenticidad á los documentos privados anteriores á la indicada fecha.

(1) Véase la ley hipotecaria reformada y promulgada en 29 de Octubre de 1870.

Consignase tambien, como prenda de capacidad é independencia, el principio de que los Registros de la propiedad se provistarán por oposicion, el cual se reitera en las reformas posteriores (4).

Contratos sin nombre especial.—Cuasi-contratos.

¿Cuál es el origen de estos contratos?—La voluntad del legislador ó el consentimiento presunto de los contrayentes, manifestado por hechos que, si son licitos, originan los *cuasi-contratos*; y si son ilicitos, los *delitos* y *cuasi-delitos*. Aquellos orígenes se fundan en principios morales, porque todo el que causa un mal está obligado á repararlo, no debiendo, por ello, enriquecerse en perjuicio de otro, sin razon derecha; y porque debemos hacer cuanto quisiéramos que en las mismas circunstancias hicieran por nosotros, y por último, porque el que quiere una cosa ó acepta un trato, quiere y acepta sus consecuencias. Los contratos *innominados* pueden reducirse á las antiguas fórmulas: *doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas*, consignadas en las leyes de Partida, siguiendo al Derecho romano, que puede consultarse, para mejor inteligencia.

¿Cuántos son los cuasi-contratos?—Cinco son los más frecuentes: la *gestion* ó administracion de bienes ajenos; la *tutela* y *curaduría*; la *comunion de bienes*; la *aceptacion de la herencia*, y el *pago de lo indebido*. Unos producen reciprocas obligaciones, y otros una sola.

¿En qué consiste el primero?—En administrar los bienes de un ausente, sin mandato expreso del mismo, sólo en consideracion á relaciones de amistad ó parentesco y con buena fé. El administrador (*gestor*) debe prestar la culpa *leve*, por regla general; la *levísima*, si otro queria serlo; y la *lata*, si los bienes estaban completamente abandonados y nadie queria encargarse de su cuidado. Debe continuar su administracion hasta que el dueño acuerde sobre ella, y gestionar en la manera y extension en que lo haria éste. El propietario queda obligado al cumplimiento de los convenios hechos por el administrador, á quien debe indemnizar de las deudas, gastos necesarios y útiles, y perjuicios abonables que contrajo y sufrió por efecto de la *gestion*.

El administrador de mala fé pierde los gastos que no mejoren los bienes, y debe pagar el menoscabo de los mismos. El que se incautó de ellos y recogió al huérfano, movido solamente por causas de piedad y de beneficencia, no tiene derecho al reintegro de la alimentacion y educacion de éste, ni de las expensas hechas en la administracion de los bienes, salvo cuando sea el recogido una mujer, con quien quiera casarse el administrador ó alguno de sus hijos, siempre que ella lo repugne, sin justa causa.

La madre y la abuela, tienen derecho á indemnizarse de los alimentos, siempre que al tiempo de darlos, pretesten que quieren reintegrarse oportunamente.

De la *administracion* de la guarda y *adicion* de la herencia nos hemos ocupado en otro lugar (2). Son cuasi-contratos dimanados de la ley.

La *comunion de bienes*, no procedente del contrato de sociedad, obliga á los socios á respetar la voluntad del que quiere separarse, y pide la division

(1) Mucho hemos omitido de lo que está vigente sobre registros, inscripciones, anotaciones preventivas, y otras materias importantísimas de la ley hipotecaria; pero no podemos decir más, sin salirnos de nuestro propósito, limitado á ocuparnos de lo más notable del derecho y en la forma superficial que hemos adoptado.

(2) Véase el *Tratado de la tutela y curaduría* y el de *las sucesiones*, págs. 66 y 87.

de la cosa comun. La *paga de lo indebido*, tiene lugar cuando uno paga á otro lo que no le debia y creia deberle, por error de hecho, no de derecho, quedando obligado el segundo á su devolucion. La paga y su ilegitimidad deben probarse por el que pagó, de lo cual sólo se exceptúan los menores, la mujer, los soldados y los rústicos.

¿En qué casos pierde el pagador el derecho de reclamacion?—Cuando sabia que no estaba obligado, no siendo menor; cuando la obligacion era sólo *natural*; cuando debe origen á una causa torpe, que no lo sea exclusivamente para el que recibe; en lo dado por dote ó arras; y en lo pagado por transaccion sin dolo.

¿Qué cosas no deben restituirse por este concepto?—La dote, las arras y lo dado por transaccion, en que no haya mediado dolo, como queda dicho.

¿Qué debe hacerse cuando no se puede restituir la cosa pagada?—Debe entregarse su valor. Si la obligacion consiste en *hacer* y no se puede realizar el hecho, debe pagarse el precio en que se estimare la obra. Las obligaciones nacidas del delito y de la culpa, son objeto del derecho penal.

Prelacion de créditos.

El principio que declara la preferencia del derecho del acreedor más antiguo, ó lo que es lo mismo, que el *que es primero en tiempo, tiene preferencia en el derecho*, reconoce algunas fundadas limitaciones, como veremos.

¿Qué clasificacion legal se hace de los créditos para averiguar su preferencia?—Dividense en *singularmente privilegiados*, *mera ó simplemente privilegiados*, *hipotecarios* y *comunales*. Son *singularmente privilegiados* los gastos de funeral, ordenacion de últimas voluntades, formacion de inventarios y diligencias judiciales de testamentaria ó ab-intestato. Son *mera ó simplemente privilegiados* los procedentes de trabajos personales, alimentos, gastos de la última enfermedad, los legalmente hipotecarios, segun el derecho antiguo, y los depósitos de cosas fungibles. Son *hipotecarios* todos los que se encuentran asegurados con *hipotecas legales públicas y especiales*, inscritas en el Registro, entre los que dá preferencia la fecha de la inscripcion, Y son *comunales* todos los demás que no están comprendidos entre los anteriores.

¿Qué orden se sigue en la escala de prelacion?—Ocupan el primer lugar los acreedores *hipotecarios* sujetos entre sí, como queda dicho, á la antigüedad de las fechas de sus respectivas inscripciones. Ocupan el 2.º los *singularmente privilegiados*. El 3.º los acreedores por trabajo personal y alimentistas. El 4.º los *legalmente hipotecarios privilegiados*, segun el derecho antiguo (1). El 5.º los de igual clase *no privilegiados* (2). El 6.º los que tienen escritura pública. Siguen en orden los que la tienen privada, en papel sellado; luego los que no la tengan en esta forma y, por último, los no escriturarios. La antigüedad de los créditos sirve para decidir las contiendas entre los acreedores comprendidos en los números 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º.

FIN.

(1) A esta clase correspondia la hipoteca dotal en los bienes del marido; la del Fisco por lo que se le debia; la del que dió dinero para reparar un edificio ó nave, para comprar una finca; la del huérfano en la cosa comprada con su dinero, y la del propietario en los frutos de la finca para cobrar sus rentas.

(2) Eran de esta clase la de los menores en los bienes de sus guardadores; la del legatario en los del testador; la de los hijos, en los del padre usufructuario, por los de la madre, que éste enajenó; la del arrendante en las cosas contenidas en la finca arrendada, etc.

APÉNDICE.

EL MATRIMONIO CIVIL, SEGUN LA LEY DE 1870,

DEROGADA PARA LOS CATÓLICOS, EN FEBRERO DE 1875 (1).

De los contrayentes, impedimentos y dispensas.

¿Qué circunstancias de aptitud exige dicha ley para contraer matrimonio civil?—1.º, ser púberes los contrayentes, entendiéndose que lo son, el varón á los catorce años cumplidos, y la mujer á los doce; 2.º, estar en el pleno ejercicio de su razon, al tiempo de celebrar el matrimonio.

¿Es válido el celebrado antes de la pubertad?—No. Se tendrá, no obstante, por revalidado *ipso facto*, si un día despues de haber llegado á la pubertad legal, hubieren vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez, ó si la mujer hubiere concebido antes de la pubertad, ó de haberse entablado la reclamacion.

¿Quiénes no pueden contraer matrimonio, apesar de reunir las circunstancias expresadas?—1.º, los que se hallen ligados con vínculo matrimonial, no disuelto legalmente; 2.º, los católicos que estuvieren ordenados *in saeris* ó que hayan profesado en una orden religiosa, canónicamente aprobada, haciendo voto solemne de castidad, á no ser que unos y otros hayan obtenido la correspondiente licencia canónica; 3.º, los hijos de familia y los menores de edad que no hayan obtenido la licencia ó solicitado el consejo de los llamados á prestarlos en los casos determinados por la ley, y 4.º, la viuda, durante los trescientos y un dias siguientes á la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo en los mismos casos y términos, á contar desde su separacion legal, á no haber obtenido la correspondiente dispensa.

¿Quiénes tienen incapacidad relativa?—1.º, los ascendientes y descendientes por consanguinidad ó afinidad legítima ó natural; 2.º, los colaterales por consanguinidad legítima hasta el cuarto grado; 3.º, los colaterales por afinidad legítima hasta el tercer grado; 4.º, los colaterales por consanguinidad ó afinidad natural hasta el segundo grado; 5.º, el padre ó madre adoptante y el adoptado, éste y el cónyuge viudo de aquellos, ya qué-llos y el cónyuge viudo de éste; 6.º, los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, mientras subsista la adopcion; 7.º, los adúlteros que hubiesen sido condenados como tales por sentencia firme; 8.º, los que hubieren sido condenados como autores ó como autor y cómplice de la muerte del cónyuge inocente, aunque no hubieren cometido adulterio;

(1) Este apéndice formaba parte de la edicion segunda del *Manual*, y la doctrina que contiene, está tomada de la ley de matrimonio civil.

9.º, el tutor y su pupila, salvo el caso en que el padre de ésta hubiere dejado autorizado el matrimonio de los mismos en su testamento ó en escritura pública, y 10, los descendientes del tutor con el pupilo ó pupila, mientras que, fenecida la tutela, no haya recaído la aprobacion de las cuentas de este cargo, salvo tambien la excepcion expresada en el número anterior.

¿Qué impedimentos pueden dispensarse, y por qué autoridad?—El gobierno puede dispensar, sin exaccion de derechos bajo ningun concepto, previo expediente que se forma ante los jueces de primera instancia por ahora, con audiencia del ministerio fiscal, los impedimentos siguientes: 1.º, el de la viuda y el de la mujer cuyo matrimonio se hubiere declarado nulo en los términos expuestos en la penúltima contestacion; 2.º, los grados tercero y cuarto de consanguinidad legítima en la línea colateral; 3.º, el parentesco de afinidad legítima hasta el tercer grado; 4.º, el de afinidad natural hasta el segundo grado, y 5.º, el que existe entre los descendientes legítimos del adoptante y el adoptado durante la adopcion (1).

Publicacion del matrimonio.

¿Cómo se incoa el expediente matrimonial, ante quién y en qué forma se publica?—Se inicia por medio de manifestacion, escrita y firmada por los dos interesados, ó por un tercero si no supieren ó no pudiesen firmar, la cual se presenta al juez municipal del domicilio ó residencia de ambos, si fuere uno mismo, ó al de los dos respectivamente, caso de ser distinto. En ella debe constar la completa filiacion de los solicitantes y el punto de su domicilio ó residencia durante los dos últimos años. Ratificada la manifestacion, el juez mandará fijar edictos en el local de su audiencia pública, y en otro sitio tambien público de la parroquia del último domicilio ó residencia de los interesados, remitiendo los necesarios á los jueces municipales en cuyo territorio hubiesen residido ó estado domiciliados aquéllos en los dos últimos años, á los efectos antes indicados (2).

¿Cuántos edictos deben publicarse, y qué circunstancias deben contener?—Deben fijarse dos veces consecutivas, por término de ocho dias cada uno, y expresarse en ellos: 1.º, los extremos que contiene el escrito de manifestacion; 2.º, el tiempo de la publicacion, y si es primero ó segundo edicto; 3.º, la fecha en que se fijan, y las incapacidades absolutas y relativas para el matrimonio; 4.º, debe invitarse á todos á que manifiesten al juzgado municipal cualquiera impedimento legal de que tengan conocimiento.

¿Cómo se sustituye la publicacion de edictos, cuando los interesados son extranjeros y no llevan dos años de residencia en España?—Deben acreditar, en forma legal, haber hecho la publicacion solemne en el territorio en que hubieren tenido su domicilio ó residencia durante el año anterior á su entrada en España, justificando siempre su libertad para contraer matrimonio.

¿Es indispensable la publicacion de los edictos?—Si; por regla general solamente el gobierno puede dispensar la publicacion del segundo, ó de ambos, mediando causas graves suficientemente probadas. Exceptuase el caso de peligro inminente de muerte, en el cual el mismo juez que debe autorizar el matrimonio puede dispensarla, y cuando el contrayente es

(1) En el reglamento para la aplicacion de la ley de matrimonio y Registro civil puede verse la tramitacion de los expedientes.

(2) Para la tramitacion de los expedientes debe tenerse en cuenta el decreto de 16 de Agosto de 1870, y el reglamento de 13 de Diciembre de dicho año.

militar en activo servicio, que bastará que presente certificacion de su libertad, expedida por el jefe del cuerpo á que pertenezca.

De la oposicion al matrimonio y celebracion del mismo.

¿Qué impedimentos son denunciabiles, ante quién y por qué personas?—No podrán denunciarse más que los enumerados anteriormente al tratar de los contrayentes. Cualesquiera otro no debe ser atendido. Deben denunciarse al juez municipal que haya publicado los edictos, y pueden hacer la denuncia todos los ciudadanos mayores de edad, y tienen deber de inquirir y denunciar los promotores fiscales y los regidores síndicos.

¿Cuándo debe hacerse la denuncia y qué efectos produce?—En el término señalado en los edictos, ó en los cinco días siguientes á su conclusion, pudiendo sólo hacerse despues, y antes de la celebracion del matrimonio, siempre que se presente al juez que haya de autorizarlo. Produce el efecto de suspender la celebracion de aquél hasta que se declare su improcedencia ó falsedad por sentencia firme.

¿En qué forma debe presentarse y cómo se tramita?—Puede hacerse por escrito ó verbalmente, y se sustanciará ante el juez municipal por los trámites que establece la ley de Enjuiciamiento civil.

¿Ante quiénes debe celebrarse el matrimonio?—Ante el juez municipal competente y dos testigos mayores de edad. En algunos casos, en defecto de aquél, ante los jefes de los cuerpos militares, los contadores de buques de guerra y capitanes de los mercantes.

¿Cuál es el juez competente?—El del domicilio ó residencia de los contrayentes, ó de cualquiera de ellos, á eleccion de los mismos, entendiéndose residencia de éstos el término municipal en donde hubieren permanecido con dos meses de antelacion. La de los militares en activo servicio debe determinarse por el punto en donde se halle el cuerpo á que pertenezcan, ó radique el empleo, cargo ó comision que estuvieren desempeñando.

En caso de inminente peligro de muerte, el juez municipal de cada territorio será competente para autorizar el matrimonio del transeunte.

¿Qué documentación exige la ley para autorizar el matrimonio?—1.º, las certificaciones del nacimiento de los interesados; 2.º, las negativas de denuncia de impedimento expresadas; 3.º, los documentos que acrediten la dispensa de la publicacion de edictos ó de impedimentos legales de los contrayentes en sus respectivos casos; 4.º, los documentos que demuestran haber obtenido la licencia ó solicitado el consejo, conforme á la ley, cuando se trate del matrimonio de hijos de familia y de menores de edad; 5.º, los documentos que se exigen á los extranjeros que no llevan dos años de residencia en España; 6.º, la certificacion de libertad expedida por el jefe del cuerpo, si son militares en servicio activo.

Sin embargo de lo dispuesto anteriormente, el juez municipal podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro inminente de muerte, aunque los contrayentes no hayan presentado los mencionados documentos.

El matrimonio así contraído se entenderá condicional, mientras que no se acredite la libertad anterior de los esposos en la forma establecida en esta ley.

¿Cuándo prescribe la fuerza de dichos documentos?—A los seis meses desde la fecha del último edicto ó de su dispensa. Trascurrido dicho tiempo, deben cumplirse nuevamente los requisitos y diligencias prescritas por la ley.

¿De cuántas maneras puede celebrarse el matrimonio?—Personalmente ó por medio de mandatario con poder especial, cuya revocacion no le haya sido notificada en forma auténtica, el cual deberá expresar el nom-

bre de la persona con quien lo haya de celebrar. Sólo es indispensable la presencia del contrayente domiciliado ó residente en el territorio del juez autorizante.

¿En dónde debe celebrarse el matrimonio y qué fórmulas se emplean en su celebracion?—Se celebrará en la audiencia del juez municipal, pudiendo, no obstante, éste acordar otra cosa á presencia del juez y dos testigos mayores de edad, empleando las fórmulas siguientes: Primeramente el secretario del juzgado leerá los artículos de la ley que se refieren á la naturaleza del matrimonio, aptitud, circunstancias é impedimentos de los contrayentes. Acto continuo y sucesivamente, el juez interrogará á cada uno de los esposos con la siguiente fórmula, *¿Queréis por esposa (ó esposo) á...?* (El nombre y apellido del contrayente no interrogado.) Los contrayentes contestarán por su órden: *Si quiero*. Incontinenti el juez pronunciará las siguientes palabras: *Quedaís unidos en matrimonio perpétuo é indisoluble*; y se terminará el acto de la celebracion, leyendo el secretario del juzgado los artículos referentes á los efectos del matrimonio con relacion á las personas y bienes de los contrayentes, todo lo cual se hará constar en un acta que firmarán el juez, los cónyuges y los testigos, pudiendo ser, autorizándola el secretario referido.

¿Qué efectos civiles produce el matrimonio celebrado fuera de España?—El contraído por extranjeros surtirá todos los inherentes al matrimonio legítimo si se ha celebrado con arreglo á las leyes de su nacion. El celebrado por dos españoles, ó por un español y un extranjero, será válido en España siempre que se hayan observado en su celebracion las leyes establecidas en el país en que tuvo efecto para regular la forma externa de aquel contrato, y los contrayentes tuvieren aptitud para celebrarlo con arreglo á las leyes españolas. Deben inscribirse en el Registro civil del agente diplomático ó consular español del lugar en que se celebre el matrimonio, y no habiéndolo, en el más próximo.

¿En qué casos pueden autorizar el matrimonio civil los jefes militares, los comandantes de la armada y los capitanes de buque mercante?—Los primeros, en defecto de juez municipal y estando en campaña; y unos y otros *in articulo mortis*.

Medios de probar el matrimonio.

¿Cómo se prueba el matrimonio?—Si es anterior á la ley de 18 de Junio, por los medios establecidos en el derecho que autorizó el civil, vigente á la sazón. Si es posterior, solamente por las actas del Registro civil; y en caso de haber desaparecido éstas, por todos los medios legales de prueba. Si ya hubieren fallecido los cónyuges ó se hallaren impedidos para manifestar el lugar de su casamiento, la posesion constante del estado de los mismos, unida á las actas de nacimiento de los hijos, en concepto de legítimos, harán prueba plena del matrimonio de aquéllos, á no constar que alguno estaba ligado con un matrimonio anterior.

El celebrado en país extranjero podrá acreditarse por cualquier medio de prueba, si en el país en que fué celebrado no estuvieren los matrimonios sujetos á registro.

Del divorcio y sus efectos.

¿Cuál es la naturaleza del divorcio?—El constituir una suspension de la vida comun de los esposos y de los efectos de aquella comunidad, no entrañando la disolucion del matrimonio.

¿Es legalmente eficaz el divorcio convenido por ambos cónyuges?—

No. Estos no pueden divorciarse, ni aun separarse por mutuo consentimiento; para ello se necesita siempre el mandato judicial.

¿Qué causas legitiman el divorcio?—Las siguientes: 1.^a, adulterio de la mujer, no remitido expresa ó tácitamente por el marido; 2.^a, adulterio del marido con escándalo público ó con el abandono completo de la mujer, ó cuando el adúltero tuviere á su cómplice en la casa conyugal, con tal que no hubiera tambien sido remitido expresa ó tácitamente por la mujer; 3.^a, malos tratamientos graves, de obra ó de palabra, inferidos por el marido á la mujer; 4.^a, violencia moral ó física ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla á cambiar de religion; 5.^a, malos tratamientos de obra inferidos á los hijos, si pusieren en peligro su vida; 6.^a, tentativa del marido para prostituir á su mujer, ó proposicion hecha por aquél á ésta para el mismo objeto; 7.^a, tentativa del marido ó de la mujer para corromper á sus hijos, y la complicidad en su corrupcion ó prostitucion; 8.^a, condenacion por sentencia firme de cualquiera de los cónyuges á cadena ó reclusion perpétua.

¿A quien corresponde la accion de divorcio?—Al cónyuge inocente, única persona que puede ejercitarlo.

¿Qué efectos produce la admision de la demanda de divorcio?—Admitida aquélla, ó antes si la urgencia del caso lo requiere, se acordará judicialmente: 1.^o, la separacion provisional de los cónyuges y el depósito de la mujer; 2.^o, el depósito de los hijos en poder del cónyuge inocente, y si ambos fueren culpables, el nombramiento de tutor y curador de los mismos y su separacion de los padres; si las causas que hubieren dado margen al divorcio fueren la primera, segunda, tercera, cuarta y octava de las que lo legitiman, podrán los padres proveer de comun acuerdo al cuidado y educacion de sus hijos; 3.^o, el señalamiento de alimentos á la mujer y á los hijos que no quedaren en poder del padre, y 4.^o, la adopcion de las disposiciones necesarias para evitar que el marido que hubiere dado causa al divorcio, perjudique á la mujer en la administracion de sus bienes.

¿Qué efectos produce la sentencia firme que cause ejecutoria?—Los siguientes: 1.^o, la separacion definitiva de los cónyuges; 2.^o, quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad y proteccion del cónyuge inocente. Si ambos fueren culpables, quedarán bajo la autoridad del tutor ó curador que se nombrará con arreglo á las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil, salvo los casos comprendidos en el número 2.^o del párrafo anterior. No obstante estas disposiciones, la madre conservará en todo caso á su cuidado á los hijos menores de tres años hasta que cumplan esta edad, á no ser que expresamente se haya dispuesto otra cosa en la sentencia; 3.^o, la privacion por parte del cónyuge culpable, mientras viviere el inocente, de la patria potestad y de los derechos que lleva consigo sobre las personas y bienes de los hijos. A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable á recobrar la patria potestad y sus derechos, si la causa que hubiere dado margen al divorcio hubiere sido alguna de las comprendidas en el mencionado número 2.^o: si fuere distinta, se nombrará tutor á los hijos en la forma anteriormente prevenida; la privacion de la patria potestad y sus derechos, no eximirá al cónyuge culpable del cumplimiento de las obligaciones que tuviere para con sus hijos; 4.^o, la pérdida, por parte del cónyuge culpable, de todo lo que hubiere sido dado ó prometido por el inocente ó por otra persona en consideracion á éste, y la conservacion de todo lo recibido por el inocente, y el derecho de reclamar desde luego lo que hubiere sido prometido por el culpable; 5.^o, la separacion de los bienes de la sociedad conyugal y la pérdida de la administracion de los de la mujer, si fuere el marido quien hubiere dado causa al divorcio, y la mujer los reclamare, y 6.^o, la conservacion, por parte del marido inocente, de la administracion de los bienes de la mujer, la cual sólo tendrá derecho á alimentos.

¿Por qué medios puede hacerse cesar el divorcio y sus efectos?—Por el consentimiento de ambos cónyuges en volver á reunirse, debiendo poner la reconciliación en conocimiento del juez ó tribunal sentenciador. Se exceptúa el divorcio nacido de las causas 5.ª y 7.ª de las en que, según dicho queda, puede fundarse.

Disolución y nulidad del matrimonio y sus efectos.

¿Por qué causas se disuelve el matrimonio legítimo?—Sólo por la muerte de uno de los cónyuges, debidamente probada. La ausencia en ignorado paradero no autoriza la presunción de su muerte. Si se prolongare hasta cumplir cien años el ausente, se le tendrá por fallecido.

El impedimento que anula el matrimonio no le disuelve cuando el primero es posterior á la celebración del segundo.

¿Qué matrimonios son nulos para los efectos legales?—Los siguientes: 1.º, el que se contrajere por el que carezca de alguna de las circunstancias necesarias de aptitud, excepto el matrimonio de los impúberos cuando se revalida *ipso facto*, en los casos de que ya nos hemos ocupado al principio de esta materia; 2.º, el que se contrajere mediando alguno de los impedimentos que afectan á las personas comprendidas en los números 1.º y 2.º de las que no pueden contraer matrimonio, y en los ocho de las que tienen incapacidad relativa; 3.º, el que no se contrajere con autorización del juez municipal competente y á presencia de dos testigos mayores de edad; 4.º, el contraído por error en la persona, por coacción ó por miedo grave que vicie el consentimiento; 5.º, el contraído por el raptor con la robada, mientras que ésta se halle en su poder.

Serán, no obstante, válidos los matrimonios á que se refieren los dos números antecedentes si hubieren transcurrido seis meses de cohabitación de los cónyuges, á contar desde que el error se hubiere desvanecido ó la libertad se hubiere recobrado, sin haber reclamado durante aquel tiempo la nulidad.

¿Quiénes pueden ejercitar la acción de nulidad del matrimonio?—Según los motivos que la hayan producido. En los casos de los números 1.º, 2.º y 3.º relacionados, podrán reclamar la nulidad, los cónyuges, el ministerio fiscal ó cualquiera persona que tuviere interés en ella. En los casos de los números 4.º y 5.º, solamente el cónyuge que hubiere sufrido el error, la fuerza ó el miedo.

¿Qué efectos produce la admisión de la demanda de nulidad del matrimonio?—Los mismos que la de divorcio.

¿Cuáles lleva consigo la nulidad declarada de aquél?—Deben distinguirse los casos en que haya habido ó no buena fé, la cual se presumirá siempre, á no probarse lo contrario.

El matrimonio nulo, contraído de buena fé por ambos cónyuges, producirá todos sus efectos civiles mientras subsista, y la legitimidad de los hijos. El contraído de buena fé por uno de ellos, lo producirá solamente respecto del cónyuge inocente y de los hijos.

¿Qué efectos produce la nulidad con relación á los hijos?—Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos varones mayores de tres años quedarán al cuidado del padre y las hijas al de la madre, habiendo habido buena fé por parte de ambos cónyuges. Si la hubo tan sólo por parte de uno de ellos, quedarán los hijos de ambos sexos bajo su poder y á su cuidado. Pero en todo caso continuarán al cuidado de la madre los menores de tres años hasta que cumplan esta edad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá efecto si los padres, de común acuerdo, dispusiesen otra cosa.

¿Qué efectos origina con respecto á los bienes de los cónyuges?—Los

mismos que produce la disolucion del matrimonio por la muerte de uno de aquéllos.

El cónyuge que hubiere obrado de mala fé perderá, sin embargo, la parte de los gananciales que en otro caso le hubiera de corresponder.

¿Son válidos los matrimonios celebrados hasta la promulgacion de la ley ante los alcaldes y testigos?—Por una disposicion transitoria de la misma se consideran legitimos y producen todos los efectos civiles, si los contrayentes tuvieron capacidad para celebrarlos con arreglo á las prescripciones de esta ley.

Al final de la seccion destinada á tratar de los procedimientos judiciales nos ocuparemos de los tribunales competentes para conocer de las demandas de nulidad y de la tramitacion que debe darse al juicio consiguiente.

APUNTES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1).

En tres bandos se hallan divididos los publicistas para determinar con precision la naturaleza de la propiedad literaria ó intelectual. Unos la equiparan á la propiedad comun, fundada en el mismo origen, hija de las mismas causas y sujeta á las prescripciones generales que regulan aquélla. El principio de *perpetuidad* es, consiguientemente en su opinion, uno de los elementos constitutivos de su manera de ser, y califican de verdaderos robos las usurpaciones de las obras de la inteligencia. Fúndanse para exponer esta teoria en que ambas tienen por origen un esfuerzo del hombre, el ejercicio de su actividad intelectual, el trabajo del productor; y así como el cazador, el pescador y el cultivador, hacen suyos los frutos que se apropian, como resultado de su actividad fisica, así tambien el sábio, el inventor, el escritor, etc., igual derecho tienen para llamarse propietarios de sus concepciones; de sus inventos y de sus escritos, como frutos de su actividad intelectual; derecho que les faculta para aplicarse el resultado de sus esfuerzos, el valor de sus servicios, y no cederle sino en cambio de otros servicios, de otros esfuerzos, de otros valores equivalentes. Esta propiedad tan justa y tan natural, es tambien, dicen, el premio de su laboriosidad, la exigua remuneracion del que, encerrado en su gabinete, consagra los dias y las noches á la meditacion y al estudio; del que roba al sueño y al descanso de su fatigada inteligencia, horas y momentos que sacrifica en aras de las ciencias y de las artes; del que, en fin, á costa de sacrificios inmensos, deja pasar los mejores años de su vida, perdido en el laberinto de las especulaciones, y al descender al terreno de la realidad, contribuye á empujar la humanidad hácia adelante, coadyuvando así á la realizacion del progreso, que es su fin social. El, como único dueño de sus concepciones, debe serlo tambien de su utilidad y de su valor; á ménos que se quiera negar al producto del sábio valor en el mercado; negacion ridícula y absurda, porque el sábio produce más riqueza que las semillas arrojadas á la tierra para su germinacion. Cristóbal Colon produjo más cantidad de riqueza con el descubrimiento del Nuevo Mundo que todo el oro y la plata que encerraban en su seno los carros del Potosí y las minas de las Californias. Y esto hoy no puede ponerse en duda; que es el talento capital inagotable, y fuente abundantísima de produccion.

Otros pensadores, por el contrario, no sólo no equiparan la propiedad literaria á la propiedad comun, sino que llegan á sostener que no hay, que no puede haber propiedad intelectual; alegando como principal fundamento de sus afirmaciones, la falta de capacidad en el objeto apropiable. Dicen que las ideas, las verdades científicas, no pertenecen á nadie; que son del dominio general, de la esfera comun de los espíritus; que el individuo no tiene en ellas mas que una mera participacion, que no puede

(1) Fragmento de un artículo publicado en la *Gaceta del Ministerio Fiscal*, número 55, tomo III.

apropiarse una paternidad exclusiva: que si bien los conocimientos adquiridos que constituyen su ciencia le pertenecen y son una verdadera propiedad intelectual, desde el momento en que por cualquiera medio los manifiesta, pasan al dominio público, y no pueden ser apropiados; que á ser cierta la doctrina contraria, sancionaria la vinculacion y el monopolio del pensamiento en determinadas familias, haciendo desaparecer la concurrencia en el mercado y las fuentes del saber en el mundo intelectual, privando á las clases ménos acomodadas del benéfico influjo de la competencia en la regulacion de los precios por medio de la oferta y de la demanda, y á la juventud de los tesoros de la ciencia: que esto seria injusto y perjudicial, y un obstáculo al progreso y á la civilizacion de los pueblos.

Ambas opiniones se encuentran apoyadas por filósofos y jurisconsultos eminentes. Suscribenlas nombres respetables, cuya mencion basta para que la vacilacion y la duda se apoderen del ánimo del estudioso. En ambas parece encontrarse la verdad, porque las dos satisfacen á primera vista á nuestra inteligencia y á nuestra razon. ¿Cómo no recompensar al sábio? ¿Cómo no remunerar al obrero de la inteligencia, segun le califica un célebre economista? ¿Pero cómo puede ejercerse el derecho de propiedad sobre un pensamiento? ¿Cómo apropiarse una idea?

Debemos confesar ingenuamente que el ánimo fluctúa entre ambas opiniones, y que es preciso, para decidirse por una de ellas, penetrar en la naturaleza íntima de esa propiedad especial, examinando, aunque ligeramente, su manera de ser y el objeto sobre que recae. Por este medio nos acercaremos á la verdad, puesto que la verdad es una y como tal no puede encontrarse á un mismo tiempo en dos opiniones que se contradicen.

El derecho de propiedad exige como todo derecho una cosa, un sér, un objeto, sobre quien ejercer su accion; y dado ya el objeto, que éste se halle rodeado de tales circunstancias, que sea tal su naturaleza, que pueda poseerse de algun modo, porque la idea de la propiedad encierra la de la posesion, porque sin posesion, el derecho de propiedad es incompleto por faltarle su elemento esencial, porque la propiedad sin la posesion está huérfana, es una aspiracion y una idealidad real, si se quiere, en el espíritu; pero una mera idealidad en el mundo físico. Quien es dueño y no posee, quiere poseer, porque la propiedad sin la posesion no satisface la inteligencia. Así, pues, si no existe cosa, sér ú objeto, ó aun cuando exista, si no se halla adornado con las condiciones necesarias para poder ser poseído, no puede ser objeto de propiedad, no puede sobre él ejercerse tal derecho, y entónces la propiedad no existe, no puede existir, como no puede existir la forma sin la materia; el cuerpo sin el espacio; la extension sin cuerpo extenso.

Pues bien: veamos ahora cuál es la cosa, el sér, el objeto sobre que recae la propiedad literaria, y si este objeto reúne las circunstancias que debe contener.

No cabe duda que lo que aparece en primer término como objeto de ese derecho es la *idea*, el pensamiento del hombre; en segundo, la forma, el estilo, el ropaje, el colorido con que se le viste, y en tercero, el papel ó pergamino en que se manifiesta. Ahora bien: conocido ya el objeto ¿puede decirse que reúne las circunstancias necesarias para ser poseído? O en otros términos; la *idea*, el pensamiento humano hecho público, ¿puede ser objeto de posesion? Claro parece ser que no. Sin embargo de que esto parece ser, desde luego conveniente será que, para comprobarlo, examinemos los tres períodos por que pasa el pensamiento antes de hacerse del dominio público; que estudiemos la *idea* en el cerebro germinador; la *idea escrita* y la *idea impresa*; el *pensamiento*, el *manuscrito* y el *libro*.

Cuando la *idea* y el pensamiento se hallan aún encerrados en la cabeza de su autor, concíbese una especie de posesion que consiste en el uso ó aplicaciones que puede hacer de él su propietario. Cuando se halla ya es-

orta, concíbese también su posesión, aunque ya más débilmente, á consecuencia de la facilidad de perderla por la lectura del manuscrito que pudiera hacer un extraño. Mas cuando se halla *impresa*, no se concibe su posesión exclusiva, porque los caracteres de Guttemberg la han apropiado á nombre y en favor del dominio público, haciendo el pensamiento eterno, fugaz é indestructible. Ellos han cambiado la fórmula de su expresión, y han hecho que, apenas se manifiesta por este medio, todas las inteligencias se comunican, todas saborean los frutos de su invención, todas pueden aprovecharse y se aprovechan de sus ventajas. Tales y tan grandes efectos produce la pasmosa facilidad de la imprenta que, como dijo Victor Hugo, es el mayor lucero de la historia, la revolución madre, el símbolo de la expresión de la humanidad que se renueva totalmente, el pensamiento humano que se despoja de una forma y adopta otra, el hormiguero de las inteligencias, la segunda torre de Babel del linaje humano.

Pues bien: si la propiedad comienza con la emisión del pensamiento, época en que la cosa que va á ser su objeto se hace del dominio público, ¿cómo pueda decirse que existe tal propiedad? No se concibe su existencia. Y si estudiamos las ideas ya publicadas, reunidas, combinadas bajo una forma material, constituyendo un volumen, un libro, ¿ha cambiado la manera de ser de la materia objeto del derecho? ¿El objeto es susceptible de apropiación exclusiva? Distinguiendo entre el tangible y el moral, entre el libro material y su contenido intelectual, diremos que el primero puede ser susceptible de apropiación como otra cosa mueble cualquiera; pero no el segundo, que, como producto de la inteligencia, pertenece al dominio de todos, á ese mundo en que aquella vive, porque las ideas no son, en verdad, del dominio de persona determinada, son del dominio común de los espíritus; pertenecen exclusivamente al mundo intelectual.

Con efecto: los trabajos intelectuales, cuyo nombre damos al conjunto de pensamientos metódico y ordenado, no son la reunión de ideas primitivas, sino producto, resultado inmediato de combinaciones y transformaciones que el entendimiento hace al desenvolver las verdades generales que pertenecen al círculo de las ciencias y de las artes. «El mundo intelectual es un vasto taller en que la Providencia ha prodigado fuerzas esencialmente activas.» Un publicista francés ha dicho, discutiendo la propiedad literaria, que el pensamiento no puede llegar á ser el patrimonio de un individuo transmisible por la herencia, porque ese individuo jamás es su único creador, y las ideas son hijas de las ideas. Y en opinión de Luis Blanc, no sólo es absurdo declarar al escritor propietario de su obra, sino que es absurdo proponerle como recompensa una retribución material.

Los mantenedores de esta opinión la robustecen con ejemplos de la vida real. Fácilmente acontece, dicen, que dos personas conciben y manifiestan, al mismo tiempo, una misma idea, sin que por ello ninguno pueda reputarse su propietario, ni decirse el uno usurpador del otro. Recordad si no los conflictos habidos entre algunos autores dramáticos con motivo de la semejanza, y á veces identidad del pensamiento fundamental de sus obras (4). Créese el uno plagiado por el otro, y no es exacta esa creencia;

(1) Un hecho reciente da todavía más fuerza á esa opinión, del cual hace mención el periódico *El Imparcial*, correspondiente al 7 de Enero de 1878, al ocuparse del nuevo invento del *Teléfono*, en la forma siguiente:

«Pero aún faltaba una maravilla por todo extremo superior, que rematase esta preciosa corona, y en los últimos días del año ha surgido justamente en hombros de tres sabios de tres naciones diferentes que *simultáneamente* han dado con ella sin sospechar que el descubrimiento tuviera tres naciones y tres padres diferentes.

Cárols Cros en Francia, Napoli en Italia y Edison en América, estudiando el teléfono, han tenido al mismo tiempo la idea de escribir los sonidos, como se escriben las palabras; de archivar los discursos, las voces y las notas, como los libros, y dejar grabada, para los siglos futuros, la elocuencia hablada del orador ó la voz arrebatadora del cantante, como se legó, desde que la escritura fué descubierta, la trasmisión eterna del pensamiento.»

hay en los dos originalidad; pero es que los dos han concebido el mismo pensamiento, debido tal vez á las mismas impresiones, á la misma lectura, á los mismos acontecimientos, á las mismas ideas, á las mismas causas, en fin, acaso al mismo estado de preparacion intelectual, á la idéntica disposicion de su cerebro, porque, como dice otro publicista francés, al tiempo del nacimiento de la nueva idea, la educacion científica de la humanidad ha llegado á un punto tal, que aquélla debía producirse, por decirlo así, fatalmente.

Si pues las ideas son hijas de las ideas; si se pueden concebir á un mismo tiempo en dos cerebros; si son el resultado de esas combinaciones; si la fatalidad preside á veces su nacimiento, deben reconocer por dueño absoluto al que lo sea de las ideas combinadas, de las ideas comunes, de las ideas madres que fluctúan en las inteligencias instruidas y que constituyen un inmenso capital, sin el que la nueva idea no podia germinar ni haberse producido; y el dueño absoluto de esas ideas, ya lo hemos dicho, es el mundo intelectual. El hombre puede atribuirles un carácter puramente personal; pero ellas llevan impreso el carácter de otras personalidades. Véase cómo siendo la mision de la propiedad el individualizar los objetos, excluyéndolos de la comunidad y resultando que el escritor hace lo contrario, puesto que renuncia al pensamiento individual al comunicarla á los demás, no pudiendo ser objeto de posesion la idea, ni producto exclusivo de determinada inteligencia, la propiedad literaria parece que no tiene razon de ser en buena lógica.

Otros pensadores han creido encontrar una fórmula práctica que armonice las dos tendencias. A pesar de todo lo expuesto, el obrero de la inteligencia, dicen, es acreedor á recompensa; la remuneracion del sábio es justa, es legítima, es necesaria. Por más que la idea del lucro repugne al lado de la nobleza que distingue á las ocupaciones del talento, no es cierto que sea absurdo dar al escritor, como recompensa, una retribucion material, porque aunque la suerte del genio sea misteriosa, y el producto de sus esfuerzos inapreciable, los grandes talentos no están suficientemente pagados con su gloria. Son hombres y necesitan vivir, y la vida tiene necesidades que satisfacer. Pero la remuneracion, la recompensa, no puede consistir en la propiedad de sus producciones, por la sencilla razon de que no son apropiables. Concédasele el derecho de reproducirlas exclusivamente ó autorizar su reproduccion, el derecho de copia, como llaman los ingleses, pero temporal, limitado; no como emanacion de la propiedad, sino como un privilegio otorgado á su trabajo en premio de sus desvelos y de sus afanes. Si se le reconoce como hijo del derecho de propiedad, no hay justicia para limitarle. La perpetuidad debe ser su carácter esencial. Su limitacion trae consigo la idea del despojo. Y siendo el derecho del autor perpétuo, es indudablemente cierto que la propiedad literaria seria una injusticia, una ingratitud; seria la superposicion del interés público al interés privado, del bien particular al bien general; sancionaria el monopolio universal, el derecho del primer nacido, y seria, en fin, una rémora al progreso y un obstáculo á la civilizacion. ¿Cuál de estas tres opiniones es más justa y se atempera más á los principios de la filosofia del derecho?

Junio de 1863.»

L. L. V.

SUCINTA IDEA DE LOS FOROS Y ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD AFORADA.

El *Foro* es un contrato especial que sólo se conoce en Asturias, Galicia y Leon, el cual no ha recibido todavía carta de naturaleza en nuestros códigos. Así es, que ninguna ley lo define, regulariza y determina. Tiene su origen en la voluntad de los contratantes, como todas las convenciones; una antigüedad respetabilísima, que arranca, quizás, de los tiempos de la Reconquista; es un *hecho* legal, que produce derechos y obligaciones exigibles, y constituye la manera de ser de la inmensa mayoría de la propiedad territorial de aquellos dos primeros antiguos reinos. La Jurisprudencia sentada por los Tribunales de dichos territorios, inspirada en las costumbres por que se decidieron primeramente las controversias entre el *forero* y el *Señor*, y sancionada despues, en los puntos que fueron objeto de los recursos de casacion, por el Tribunal Supremo, forman todo el derecho positivo existente, aplicable á los foros.

No son lo mismo que el llamado *enfiteútico* ni que el *arrendamiento*, por más que tengan con éstos muy grandes semejanzas.

Puede decirse que el *Foro* es un contrato especial, distinto de aquéllos, por el cual el dueño de una finca inmueble, la dá á un colono, cediéndole sus derechos, *temporal* ó *perpétuamente*, con la obligacion de pagar éste al primero una pension anual, consistente en frutos ó dinero, á cuya efectividad queda responsable dicha finca, cualquiera que sea su poseedor. De aquí que las acciones que de este contrato nacen en favor del *aforante*, participen del carácter de *reales* y de *personales*, que sean de las que algunos A. A. designaron con el nombre de *mixtas*.

Tambien se infiere de lo dicho que, si el tiempo de la cesion es limitado, el *foro* será siempre *temporal*; y si fuere ilimitado, será necesariamente *perpétuo*.

Al documento en que se consigna el contrato y sus condiciones, se llama *carta foral*.

Cuando era *temporal*, otorgábase por *voces*, ó durante la vida de *tres reyes* y 29 años más, clausula que se lee en la mayor parte de los títulos de fundacion antigua, cuyo tiempo podia prorogarse en una *renovacion*, ó nuevo contrato, á la terminacion del primer plazo; pero generalmente se hacia esto con *aumento de la pension* estipulada en la primitiva *carta foral*.

El propietario *aforante*, ó dueño del dominio *directo*, tiene derecho á recobrar las fincas aforadas con todas las accesorias, y mejoras hechas á la terminacion del contrato. El *forero* ó *colono* se considera dueño, en cambio, durante dicho tiempo, y puede disponer libremente de las fincas, enajenarlas, dividir las, dárlas en dote, gravarlas, cederlas tambien en *foro*, mediante la percepcion de otra pension, dando origen á nuevos gravámenes por medio de *sub foros*.

Para facilitar el pago de la pension y entenderse con el dominio *directo*, el *forero*, que por poseer la mayor parte de la propiedad censida, á quien se llama *mayor llevador* ó *cabezalero*, tiene el deber y el derecho de recoger las partes alcuotas que cada partcipe de dicha propiedad posee, con accion para demandarlas; y reunido el total de la pension, que se conoce con el nombre de *renta foral*, entregarlo al *señor* ó propietario *directo*.

De tiempo en tiempo se practican *apeos* para aclarar, en lo posible, las fincas sujetas á la *renta foral*; y se distribuyen en *prorata* proporcional á la extension y valor de las fincas que *lleban* los *foreros*, la pension total

que debe satisfacerse, como gravámen del *foro*, á cuya operacion, en que intervienen peritos agrimensores, se llama *prorateo*, el cual resultado se consigna en un documento, que pocas veces se reviste con la autoridad judicial, y sirve de guia al *cabezalero*.

No podemos ser más extensos y municiosos, acerca de la naturaleza y efectos del *foro*.

En cuanto á su origen; á las quejas que produjeron los *desahucios* ó *despojos*, que comenzaron á ejecutar los *dominios directos*, pidiendo judicialmente á la terminacion del contrato la reivindicacion de las fincas aforadas, con todos sus mejoramientos; á la perturbacion social que esta medida justa, en rigor de derecho, ocasionaba, que puede convertirse en cuestion que afecte al órden público en Galicia y Astúrias; y á las resoluciones, en cierto modo legislativas, que acordaron la suspension de aquellos despojos, á virtud de las cuales el estado de *suspension provisional* es el jurídico que hoy mantienen los efectos del *contrato foral*, puede leerse el preámbulo que precede al Real decreto de 8 de Noviembre de 1875, dictado para facilitar la inscripcion de los *foros* en el Registro de la propiedad, del cual insertamos á continuacion la parte más importante á nuestro objeto.

«Sin entrar ahora en un profundo, detenido y erudito exámen acerca del origen de los *foros*; sea que se establecieran á imitacion de las *enfiteús* desde los más remotos tiempos conocidos, como algunos pretenden; sea que participeen de cierto carácter feudal, como quieren otros, el hecho histórico indudable es que la mayor parte de las tierras de Galicia, Astúrias y parte de la provincia de Leon, ganadas unas por el esfuerzo de los héroes de nuestra gloriosa Reconquista; pródigamente donadas otras por nuestros Monarcas á los próceres y á las corporaciones eclesiásticas, se dieron en *foro* á los que, libres de los cuidados de la guerra y extraños al retiro de la vida monástica, podian dedicarse á su cultivo. Por virtud de este contrato el dueño del suelo cedia, por lo general, todos sus derechos al colono ó *forero*, reservándose, si no exclusivamente, al ménos como principal, el de percibir una pension fija é invariable en frutos ó en dinero, ó en ambas cosas á la vez.

En un principio, poquísimos se constituyeron con carácter de perpetuidad; casi todos lo fueron temporalmente, por la *vida* ó *voces* de tres señores Reyes y 29 años más; por manera que, segun el derecho comun de España y aun de todo el mundo civilizado, al terminar el tiempo por el cual se hubiesen constituido los *foros* debian volver las tierras ó fincas urbanas; pues tambien sobre éstas solian constituirse á sus dueños en pleno dominio y en el estado en que se hallasen, es decir, con todas las mejoras y aumentos que hubieren recibido durante el término del contrato. Así se practica invariablemente en los arrendamientos y en las *enfiteús* temporales, por largo que sea el tiempo señalado para su duracion.

Pero se hizo tan general el *foro* en Galicia y Astúrias principalmente, que casi todos los cultivadores no poseian mas que tierras aforadas. Alrededor de ellas se fueron constituyendo las familias, viniendo á crear un estado social digno de respeto; y de aplicarse rigurosamente el derecho comun, se hubiera producido sin duda un gran conflicto, que la prudencia aconsejó evitar, aun cuando para ello fuese necesario prescindir de las leyes generales del Reino, de los principios estrictos del derecho y lastimar en cierto modo el de los verdaderos dueños del suelo.

Eran muchísimas las demandas de *desahucio* entabladas por éstos contra sus colonos ó *foreros*, para obligarles á que les dejaran libres las tierras aforadas despues de terminado el tiempo del contrato; y de haberse estimado como era indispensable, segun el derecho comun, habrianse visto repentinamente muchos millares de familias, la inmensa mayoría de la poblacion, lanzadas de sus tierras, teniendo que abandonar el hogar en que habian nacido y al calor del cual se habian ido desarrollando, produ-

ciendo una inmensa perturbacion de consecuencias incalculables y funestas para propietarios y colonos, y para la paz pública.

El Consejo Real de Castilla, que reunía extraordinarias atribuciones, no sólo en el orden judicial, sino en el económico y en el político, y de las cuales usó generalmente con gran sabiduría y prudencia, se detuvo ante estas poderosas consideraciones; y en vez de fallar como Tribunal las demandas pendientes ante su autoridad suprema, dictó una medida de alto gobierno, mandando se librase Real provision, que tuvo, y ha seguido teniendo, fuerza de ley á las Reales Audiencias de Galicia, Asturias y las demás donde fueren conocidos los foros, para que no se diese curso á las demandas de desahucio, aunque hubiese terminado el tiempo de los contratos hasta que, en vista del expediente que sobre tan árdua y compleja materia mandó formar, se resolviese lo conveniente. Ya tres años ántes, en 1760, se había mandado por la misma suprema autoridad que no se cumpliesen las ejecutorias ganadas en los Tribunales por los señores ó dueños del dominio directo para lanzar de sus tierras á los foreros. Ambas gravísimas resoluciones tuvieron un carácter interino y provisional, sin resolver por tanto, la cuestion de un modo definitivo y permanente.

Formóse, con efecto, un voluminoso expediente, en el cual obran los informes de las Reales Audiencias y otras corporaciones y hombres de ciencia; pero nada se ha resuelto, y las cosas continúan en el estado incierto y precario, á que todos los intereses y derechos reclaman de consuno se ponga pronto y definitivo término. Es una situacion en cierto modo anárquica aquella en que, como en este caso, el derecho positivo vá por un lado y el hecho vá por el opuesto.

Segun el primero, los dueños de las tierras dadas en foro continúan siéndolo en pleno dominio, una vez acabadas las voces ó llamamientos del foro, pues nadie los ha despojado en todo ni en parte de este carácter; pero el hecho es, en contradiccion de esto, que los colonos no pueden ser expulsados de las tierras aforadas ni los dueños recobrar real y efectivamente el pleno dominio de las mismas. Es preciso, pues, y así lo aconseja imperiosamente la pública utilidad, poner en perfecta consonancia y acuerdo el hecho con el derecho; fijar clara y definitivamente el de los propietarios y el de los colonos de un modo prudente y conciliador que, lejos de producir temibles y funestos antagonismos entre una y otra clase, los concilie y una en estrecho lazo por un interés comun, y por el perfecto deslinde de sus respectivos derechos.

Por árduo y complicado que parezca este problema, reunidos están ya todos los elementos y datos necesarios para resolverle con el acierto que cabe en lo humano. En virtud de disposiciones dictadas por los ilustrados y celosos gobiernos que precedieron al que hoy es honrado con la confianza de S. M. se ha formado otro nuevo expediente en que se hallan los más autorizados informes. Las Audiencias, los colegios de Abogados, las Sociedades Económicas del país y muy señaladamente la de Santiago, donde reside una ilustre y justamente renombrada Universidad literaria, y, por último, la Real Academia de ciencias morales y políticas de esta Corte, todos han dado su opinion evacuando las consultas que se les dirigieron.

Por último; terminaremos esta brevisima reseña de los foros, diciendo que, suspendida la redencion de estos contratos, autorizada por las leyes de 20 de Agosto y 46 de Setiembre de 1873, es urgente que el poder legislativo dicte alguna medida definitiva, cuyo proyecto ha sido objeto de los trabajos de la comision de códigos y parece estar ya redactado, que ponga término á ese estado anómalo y perjudicial que mantiene en constante alarma á los colonos, y produce la intranquilidad consiguiente en los propietarios de la riqueza inmueble aforada.

INDICE.

	Páginas
Historia de la legislacion española.	1
EPOCA PRIMERA.	
España romana.—Magistraturas.—Senadores y curiales.	2
Concilios y conventos jurídicos.	4
EPOCA SEGUNDA.	
España goda.—Código de Eurico.	5
Breviario de Aniano.	6
Concilios de Toledo.	7
EPOCA TERCERA.	
Fuero-Juzgo.	8
EPOCA CUARTA.	
Sistema Foral hasta Alfonso el Sábio.	11
Fueros de Leon, Sepúlveda y Cuenca.	12
Ordenamiento de Nájera y Fuero viejo.	13
Las asambleas públicas despues de la restauracion.	13
EPOCA QUINTA.	
Las Siete Partidas.	14
Las leyes del Estilo.	16
Ordenamiento de Alcalá.	16
Fueros de Aragon y de Cataluña.	17
Fueros de Valencia y Navarra.	18
Fueros vascongados de Alava y Vizcaya.	18
Fueros de Guipúzcoa.	19
Córtes de Castilla y Aragon.	19
Idem de Cataluña, Valencia y Navarra.	20
Organizacion judicial.—Audiencias.	21
Consejo real.	22
EPOCA SEXTA.	
Leyes de Toro.—Nueva recopilacion.	23
Fueros provinciales.—Aragon, Valencia, Cataluña y Navarra.	24
Continuacion de las Córtes de Castilla, Aragon, Cataluña y Navarra.	25

Organizacion de la Audiencia y del Consejo.	25
Consejo Real.—Cámara de Castilla.—Consejo de Aragon.	26
Novísima Recopilacion.	26
Reformas modernas.	27
Idem posteriores al reinado de doña Isabel II.	29
Orden de prelacion de los cuerpos legales.	30

ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL.

Preliminares.—Ley.—Su aplicacion, abrogacion, derogacion y dis- pensa.	31, 33 y 35
De la costumbre.	35
De las personas y su estado civil.	35

Del Registro civil y del matrimonio.

Del Registro civil.	37
Del registro de los nacimientos.	40
Idem de los matrimonios.	43
Idem de las defunciones.	45
Idem de la ciudadanía.	46
Efectos civiles del matrimonio.—Dotes.—Bienes parafernales.—Do- naciones esponsalicias.—Arras y donaciones propter nuptias.	47 y 50
Sociedad legal de los cónyuges.—Gananciales.	51
La patria potestad, antes y despues de la ley de matrimonio civil.— Modos de constituirla.	52
De la adopcion.	54
Disolucion y suspension de la patria potestad.—Clase de emanci- pacion.	56

Del matrimonio, derecho vigente.

Esponsales.—Consentimiento paterno.—Licencia real y eclesiásti- ca.—Impedimentos.—Disolucion del matrimonio.	57 á la 63
Efectos civiles del matrimonio con relacion á los esposos y á sus descendientes.—Legitimidad de los hijos.	64

Guarda de los incapacitados.

Tutelas y curatelas.—Incapacidades y excusas.—Conclusion de la guarda.	66 y 70
De la restitution ni integrum.	66 y 70

De las cosas.

Su division.	71
Derechos reales y personales.	73
De la accesion.	74
Modos de adquirir la propiedad.—Ocupacion, tradicion, prescripcion.	76
Propiedad intelectual.	80
Modos de perder el dominio.	81
Servidumbres reales y personales, voluntarias y forzosas.	81
De los censos.	84
De la posesion.	86
Del derecho hereditario.—Sustituciones.—Desheredacion.	87

Mandas ó legados.	90
Donaciones mortis-causa.	94
Mejoras.—Derecho de acrecer por testamento.—Albaceas y testamentarios.	92
Anulacion de las últimas voluntades.	94
Sucesiones intestadas.—Adicion de la herencia.—Bienes reservables.	94
Division de la herencia.—Colacion y adjudicacion de bienes.	97
Vinculaciones.—Patronatos y capellanias.	98

De las obligaciones.

Contratos, pactos y condiciones.	403
Compra-venta.	407
Permuta y arrendamiento.	414
Censos.	413
Sociedad, mandato, préstamo y depósito.	444
Contratos aleatorios.	417
Transaccion, compromiso, cesion y promesas.	448
De las donaciones.	449
De las fianzas.	420
De la prenda y de la hipoteca.—Clases de hipotecas.—Legislacion hipotecaria.	421
Títulos sujetos á inscripcion en el Registro de la propiedad.	429
Anotaciones preventivas	434
De los contratos sin nombre especial y cuasi-contratos.	434
De la prelacion de créditos.	435

APÉNDICE.

El matrimonio civil, segun la ley de 1870.	439
Apuntes sobre la propiedad intelectual.	446
Sucinta idea de los <i>Feros</i> y su estado actual.	450

100. The first of these is the fact that the
 101. of the world is not a uniform one.
 102. of the world is not a uniform one.
 103. of the world is not a uniform one.
 104. of the world is not a uniform one.
 105. of the world is not a uniform one.
 106. of the world is not a uniform one.
 107. of the world is not a uniform one.
 108. of the world is not a uniform one.
 109. of the world is not a uniform one.
 110. of the world is not a uniform one.

111. The second of these is the fact that the
 112. of the world is not a uniform one.
 113. of the world is not a uniform one.
 114. of the world is not a uniform one.
 115. of the world is not a uniform one.
 116. of the world is not a uniform one.
 117. of the world is not a uniform one.
 118. of the world is not a uniform one.
 119. of the world is not a uniform one.
 120. of the world is not a uniform one.

121. The third of these is the fact that the
 122. of the world is not a uniform one.
 123. of the world is not a uniform one.
 124. of the world is not a uniform one.
 125. of the world is not a uniform one.

BREVÍSIMA RESEÑA

DE LA

HISTORIA DEL DERECHO PENAL.

¿Es muy antiguo el Derecho penal?—Considerado como ciencia, su origen y su desarrollo es de los modernos tiempos. Pero el hecho de la ley penal; la existencia del delito y la aplicación de la pena, son tan antiguos como el hombre. La ley penal es la primera en el orden cronológico, como dice un célebre comentarista: es muy anterior á la civil. La violación del precepto, cometida por nuestros primeros padres y el crimen de Cain, son los primitivos hechos punibles de la historia, tan antiguos como el hombre mismo, á quien, desde entonces, acompaña el mal y seguirá con él constantemente.

Y es la más antigua la ley penal, porque ella responde á la primera necesidad social, á la conservación del individuo. Así es que la encontramos en todas las primitivas sociedades, en la tribu, bajo el régimen patriarcal, y en todos los pueblos antiguos y modernos; pero como ciencia, sólo debe reconocerse el origen de su estudio en el siglo XVIII. El instinto y la pasión primero; la apreciación de una equivocada moralidad y ciertas consideraciones políticas después, fueron las únicas fuentes de donde nacían las reglas para declarar y castigar los delitos antiguamente.

Ni en Atenas, ni en Roma, encontramos verdadera ciencia penal. Las leyes de Dracon, que todo lo castigaban con la pena de muerte; las de Solon, que participaban, en su mayoría, de la misma dureza sin relación con el delito, eran aplicadas en una forma arbitraria. Las primeras leyes de Roma, no ménos crueles y ásperas que aquéllas, prodigando inconsiderada y desproporcionalmente la pena de muerte para castigar delitos leves y á veces imaginarios, como el ejercicio de la mentida magia y de la embaucadora supercheria, no merecen el nombre de derecho penal, en el sentido científico y filosófico de esta palabra. El instinto, y sólo el instinto, como dice el Sr. Pacheco, era quien las producía. La filosofía no las hubiera aconsejado, porque la ciencia penal no puede aconsejar la barbarie. Y esto que pasaba en tiempo de la república romana, si bien algo se templó con los adelantos de la civilización durante el imperio, no humanizó la ley penal, ni fué objeto de estudios y de aplicación de principios científicos, continuando aquélla con la rudeza característica de tales tiempos, hasta el advenimiento al mundo del cristianismo.

¿Qué influencia ventajosa ejerció el cristianismo en el derecho penal?—

El cristianismo, con su nueva moral, con sus principios de igualdad y de fraternidad, vino á enseñar nuevos orígenes, nuevas causas, nuevos criterios, por los cuales debia regirse el Estado para señalar los delitos y fijar la penalidad. Esto, no obstante, la ciencia penal no ha aparecido por entonces, debido, quizás, al sistema político, despótico y absoluto de aquella sociedad, que no permitia al entendimiento profundizar en las nuevas regiones del mundo moral, y ménos manifestar el resultado de esos estudios que habian de ser contrarios á la existencia de tales sistemas. Por eso los códigos civiles de aquéllos tiempos, modelos de buen sentido y depósito imperecedero de la ciencia del Derecho civil, apenas se ocupaban en el último de sus libros del delito y de la pena.

Y sin embargo, el adelanto hácia la ciencia era evidente. Ya no se penaban hechos que no estuviesen declarados punibles con antelación, como se castigaban primeramente en Grecia y en la misma Roma, desterrando así las acusaciones y sentencias arbitrarias, funestos errores de trascendentes consecuencias.

¿Cuál era el carácter de la ley penal en los pueblos que invadieron la España en el siglo V?—La rudeza, la barbarie, la violencia y la prodigalidad de la pena de muerte; caracteres inherentes á las costumbres y á la manera de ser de aquellos pueblos casi salvajes, cuya ocupacion constante era la guerra y la conquista.

¿Qué juicio merecen las leyes penales del Fuero-Juzgo?—Como contestacion á esta pregunta transcribimos á continuacion las palabras del juriscónsul antes citado, Sr. Pacheco (1), síntesis del juicio que, acerca de las doctrinas y de los defectos de aquel código ha formado: «Nada hay en ella (en la ley penal de los visigodos) de ciencia, y muy poco de los principios de legislacion como la comprendemos en el día; pero los rectos instintos de un pueblo bárbaro, las leyes del código Teodosiano, que se tuvieron á la vista, y el espíritu de la iglesia, tan predominante en aquella sociedad, produjeron disposiciones frecuentemente útiles, á veces muy elevadas y siempre superiores á cuantas regian contemporáneamente en los nuevos estados de Europa. Es un código verdadero, y tan extenso y completo como le habian menester los pueblos á quienes se daba. Con todas sus faltas, con todos sus errores la humanidad ganó con él, y en muchos siglos no ha logrado otro semejante. Sus defectos capitales son en cuanto á la nocion del delito, la confusion de éste con el pecado, hasta el punto de usar promiscuamente una y otra palabra, como las de criminales y pecadores. En cuanto á la nocion de la pena, ese carácter privado que continuamente se le dá; esa sustitucion de venganza á la idea de justicia. En cuanto á las bases del procedimiento, lo que proviene del anterior principio, el reemplazo de la acusacion pública y social por las acusaciones individuales y personales. Por lo que respecta á escalas y proporciones de los delitos, de las penas, y de los unos con las otras, eso habria sido demasiado pedir á aquella época y á aquella sociedad: ni existen en el Código, ni sus autores habian reflexionado nunca sobre semejante circunstancia. Con todo ello, volvemos á repetirlo, por última vez, nada hay comparable en la Europa del siglo VII á la legislacion de los visigodos.»

Y con efecto; si bien en el Fuero-Juzgo no se define el delito, se vislumbra ya la diferente apreciacion del hecho punible, como sucede al penar el homicidio, segun que haya habido ó no voluntad y conciencia en su consumacion ó actos de violencia que lo provocasen, aminorando la pena en unos hasta llegar á la exencion de culpabilidad, y agravándola en otros hasta el límite del rigor. Nótese tambien al definir la pena, que la ejemplaridad,

(1) Introduccion á los comentarios del Código penal, página 35.

el escarmiento, la intimidacion y la seguridad individual, fines que sirven actualmente de base á algunos sistemas filosóficos de la ciencia penal, son ideas que tienen alguna acogida ya en los legisladores del código visigodo, por más que al lado de esto veamos como grandes lunares de esa compilacion, las penas de azotes, la decalcacion, la marca y la excomunion, excesivamente prodigadas, así como la entrega del delincuente al ofendido para que éste hiciese de aquél lo que quisiese, hecho escandaloso á los ojos de la ciencia, conculcador de todo principio de justicia y de procedimiento, que erigia en acto de cruel venganza lo que debiera ser acto de justicia, y desconocía las condiciones de proporcionalidad que debe existir entre la pena y el delito, cuya correccion y castigo corresponde exclusivamente al poder social.

Otra de las particularidades recomendables que contiene el Fuero-Juzgo es el principio de intrasmisibilidad de las penas, así como la reforma que introdujo favorable á los acusados, en la aplicacion de ese espantoso y nunca bien condenado medio de prueba, llamado *el tormento*. Minoró el número de los delitos por que se podría dar; prohibió que se aplicase en términos que pudiera resultar muerte ó mutilacion de miembros, y que al efecto, tuviese lugar en tres dias; y sujetó á sufrirlo al Juez que, por culpa ó negligencia, hubiese causado la muerte al atormentado.

A pesar de lo dicho, la ciencia penal todavía no era conocida en aquellos siglos.

¿Cuál fué el estado de la legislacion penal española durante el periodo de la reconquista?—Sabido es que la invasion árabe destruyó la monarquía goda, y que la reconquista del territorio, conseguida palmo á palmo, merced á continuas luchas, dió origen á la concesion ú otorgamiento de las *cartas pueblas y fueros* para determinadas poblaciones y territorios, produciendo una verdadera y anárquica confusion en el derecho, cuya unidad casi habia completado el Fuero Juzgo. Pues bien; durante ese largo periodo de tiempo, nuestro derecho penal, en vez de adelantar, retrocedió, á consecuencia del sistema foral: la ignorancia de la época, que sólo cuidaba de la guerra; la preponderancia avasalladora del feudalismo, y la falta de unidad y concierto en la legislacion, apartaron la ley penal todavía más de los buenos principios. Las algun tanto relativamente progresivas ideas que el código visigodo admitía acerca del delito, de la pena y de sus recíprocas relaciones, se habian abandonado, para ser sustituidas por la más cruel barbarie. Los célebres *juicios de Dios* eran medios de pruebas convincentes y de indisputable certeza probatoria, y se encomendaba al agua caliente, al hierro enrojecido y al duelo, la investigacion y el juicio decisivo de la verdad legal; tan pobre idea y tan mezquino interés se tenia respecto del acusado. Gráficamente describe el mismo Sr. Pacheco aquella época de oscurantismo jurídico, diciendo: «La penalidad casi puede llamarse una lotería; y el juicio se convierte en una batalla ó en una ridícula tentacion al cielo.» Se despeñaba y ahorcaba al ratero, aunque fuese sólo de uvas el hurto; se quemaba viva á la mujer que procurase el aborto; se arrancaban los dientes al falsario, y se ataba á los pies ó á la crin de un caballo al deudor que no pagaba. Y en cambio algunos homicidios sólo se castigaban con multas y aún se permitía que hubiese composicion entre el ofensor y el ofendido; tal era la desproporcion y la carencia de ideas exactas, relativas á la pena y á la naturaleza del hecho punible.

¿Qué influencia ejerció en el derecho penal el *fuero real*?—No puede desconocerse que este código acusa un progreso, si bien pequeño con relacion á la ciencia penal, grande y plausible con referencia al estado que mantenía la penalidad en los *fueros*. Ya no se prodiga tanto la pena de muerte; se hace gradual y proporcionada la multa, especialmente en el castigo de las lesiones, y se aplica la pena de destierro. En materia procesal, sanciona la acusacion con el carácter de *pública* y el procedimiento de *oficio*.

* ¿Qué juicio merece el código de las Partidas, bajo el punto de vista de la ley penal?—Muy inferior, ciertamente, al que con justicia se le tributar, bajo el punto de vista del derecho civil. Inspirado en el romano, ha sancionado el derecho criminal de aquel pueblo, y ya hemos dicho al principio que las leyes penales de Roma se distinguían por su crueldad y por la aspereza que en ellas reflejaban las costumbres de los romanos. Es inconsecuente dicho código; extiende á veces la penalidad á los descendientes; confunde el delito con el pecado, como el Fuero Juzgo; prodiga las penas de confiscación y de infamia; admite también los duelos como extremo y último medio de prueba; y retrocediendo más á la barbarie, prodiga el tormento y le destituye de las garantías que el Código visigodo había introducido en beneficio de los acusados. Se inspira en las Decretales para penar los delitos religiosos; y cuando ni aquellas ni el derecho romano le ofrecen preceptos para condenar otros delitos, acude á los castigos establecidos en el derecho *foral*. No ofrece, pues, el código alfonsino motivo alguno para juzgarle favorablemente en su parte penal. Por el contrario, bien puede decirse que, si no ha retrocedido en él la legislación criminal, es indudable que no ha adelantado, ni aventajado al estado que mantenía en el Fuero-Juzgo.

¿Qué progresos se han hecho en la ley penal, después de las Partidas?—Hasta la mitad del siglo XVIII ninguno. La bárbara, cruel y anticientífica legislación penal que contenían los códigos antes referidos, ha llegado con fuerza obligatoria hasta aquella época, porque los preceptos sancionados en las Recopilaciones que se hicieron posteriormente tienen el mismo anterior carácter, siendo de notar ese hecho absurdo del estacionamiento de las leyes penales, que ha subsistido durante tantos siglos, sin contradicción, sin reformas importantes, sin que los jurisconsultos hayan parado su atención y hayan dedicado sus talentos y combatir esa afrentosa penalidad de los siglos medios, ese procedimiento horrible del tormento cuya existencia—admiración y vergüenza causa el decirlo—ha durado hasta 1842. Verdad es que la influencia teocrática había llegado á dominarlo todo, y que el *Santo Oficio*, con toda su abominable presión y su intransigente fanatismo, ahogaba los espíritus, aherrojaba el pensamiento, é impedía los vuelos de la razón, y por consiguiente oponía obstáculos insuperables á los progresos de las ciencias filosóficas al calor de cuyas elucubraciones había de nacer y desarrollarse el derecho penal moderno. Pensar entonces en proclamar públicamente los derechos del hombre y la libertad de su conciencia y de sus juicios, era más que una quimera; era atreverse á raciocinar sobre el proyecto de un delito. ¿Qué mucho, pues, que la ley penal continuase en el estado de barbarie y de rudimentaria aspiración?

¿Cuándo, según eso, puede afirmarse que tuvo verdadero origen científico el derecho penal?—Ya lo dejamos apuntado: en la mitad del siglo XVIII. Los estudios y trabajos de los célebres jurisconsultos italianos Beccaria y Filangieri, los del utilitario inglés Bentham, y sobre todo, la revolución que produjeron en todas las ciencias filosóficas las doctrinas de los legisladores franceses de 1789, y la omnimoda libertad de pensar y de escribir sin coacciones, en la república vecina á la sazón, han dirigido la mirada de los hombres pensadores hácia el hecho antiquísimo de la ley penal; y partiendo de los derechos inherentes á la personalidad humana y preconizando la justicia y la legalidad de las libertades necesarias del ciudadano, combatieron el absurdo sistema antiguo, destruyeron con la fuerza irresistible de la razón y de la lógica ese cúmulo de injusticias, errores y arbitrariedades que contenían los códigos anteriores, para sentar sobre bases más sólidas, más humanas y más conformes con la civilización y el progreso, la importantísima ciencia penal, el derecho necesario é inmanente de castigar, y la forma y proporción que deben tenerse en cuenta

para que los fines de la pena se consigan en bien de la sociedad, y en bien y mejoramiento del delincuente. De aquellos tiempos data, sin género alguno de duda, el origen científico de la ley penal, en sus tres manifestaciones, el *delito*, la *pena* y el *procedimiento*, que á tantos, tan profundos y tan variados estudios, escuelas y sistemas ha dado lugar, y de que está siendo objeto preferente en nuestros días. Y como la imprenta difundió por todo el mundo civilizado el espíritu de la reforma exigida ya por la misma opinión, nuestra España ha respondido á ese grito de la humanidad y de la ciencia, y Campomanes y Jovellanos y Lardizabal se hicieron eco de aquellas teorías, y comenzaron á preparar la opinión con sus discursos y sus obras, inclinándola en favor de los buenos principios y de la formación de nuevas leyes, inspiradas en aquéllos.

¿Cuál fué el primer Código que se promulgó en España bajo el predominio de los modernos adelantos?—El publicado en 1822, discutido y aprobado por las Cortes liberales de 1820.

¿Qué juicio puede formarse de este Código?—Como nosotros no tenemos autoridad para juzgarle, copiamos á seguida la opinión del precitado jurisconsulto Sr. Pacheco, cuya competencia en la materia es evidente. «El Código de 1822, dice, es un Código científico. La ciencia del derecho y la buena filosofía inspiran la mayor parte de sus disposiciones. Digno del siglo, mejoraba inmensamente la situación penal de la nación. Pero es, á veces, demasiado duro: transige demasiado con antiguas preocupaciones españolas, muy vivas aún en aquella edad, y casi borradas en la que corremos: es, por último, difuso, y sacrifica la claridad, la sencillez y el mérito legislativo á pretensiones artísticas y á un vanidoso aparato literario. Hay en él algo del Fuero Juzgo y de las Partidas, envuelto con el carácter del Código Napoleón.» Cortísima ha sido la vida legal del de 1822, pues fué derogado y rechazadas sus doctrinas, como todo lo procedente del régimen liberal, en la reacción insensata y sistemáticamente vengativa de 1823.

¿Qué trabajos posteriores se han llevado á cabo en el Código penal?—Si bien fué objeto de proyectos reformadores antes de 1833 y en 1839, que no llegaron á ser ley, no recibió modificación importante y trascendental hasta 1848, en cuya época se publicó el segundo Código penal *reformado*, que rigió hasta 1850; época en que los adelantos de la ciencia y las necesidades y enseñanza de la práctica, aconsejaron una nueva revisión y reforma del mismo, la que se llevó á cumplido efecto satisfactoriamente y dió vida al derecho y estuvo vigente hasta 1870. La revolución de 1868; los principios de la escuela liberal avanzada que aquella proclamaba, el espíritu democrático de la Constitución de 1869; los derechos individuales que reconocía, y la libertad religiosa que declaraba, hechos y derechos de trascendentalísima influencia en la manera de ser política del pueblo español, hacían necesaria la nueva reforma del Código penal para concordar y poner en perfecta y realizable armonía, especulativa y prácticamente, principios tan antitéticos como la libertad y la intolerancia religiosa; y si no tan contrarios como éstos, otros de insostenible alianza como la libre manifestación y el limitado ejercicio de la libertad del pensamiento, de reunión y asociación, y el derecho de sufragio absoluto y limitado, así como tantos más que sancionaba la ley fundamental de 1869, y no reconocía, ó apenas consentía, el Código penal de 1850; cuerpo legal, que era el resultado lógico y necesario de la legislación restrictiva civil, política y administrativamente considerada, de la época á que respondía.

Como consecuencia de análogas causas á las que justificaron la reforma del Código en 1870, aparece actualmente la necesidad de otra nueva modificación. La Constitución de 1869 es ya un respetable monumento histórico del derecho pátrio. La sancionada en 30 de Junio de 1876, ocupa su lugar, y es la vigente. Si, antes de la primera, la intolerancia religiosa era precepto obligatorio, y durante la vida legal de aquella el principio de

libertad de conciencia se traducía en la práctica por el de libertad religiosa, la segunda sólo consiente la tolerancia de los cultos disidentes, aceptando como religión del Estado la católica romana. Si en la de 1869 los derechos llamados individuales tenían una esfera positiva, más amplia y desembarazada, en la de 1876 la tienen mucho más limitada y estrecha. De aquí, pues, la necesidad de modificar la materia jurídica relativa á los delitos religiosos, y á la penal del ejercicio de la libertad de imprenta, que no puede formar parte del Código, desde que el Decreto de 31 de Diciembre de 1875 (1) reguló los hechos en tal concepto punibles, determinó los abusos corregibles, se separó de la teoría que asienta dicho Código para fijar las personas responsables de los *abusos de imprenta* no viendo mas que á la entidad *periódico*, cualquiera que sea el autor del escrito; estableció un procedimiento singular y un tribunal y fiscal especiales, que forman el derecho vigente y vienen funcionando para esa clase de transgresiones de ley, que el legislador ha creído, y nosotros aplaudimos su juicio, no deber calificar de *delitos*.

Para ocurrir á la indicada necesidad y poner en armonía el precepto de la Constitución relativo á la tolerancia de los cultos disidentes, con el Código penal, la comision de códigos ha formulado un proyecto, que ha dado lugar á no pocas discusiones y diversidad de pareceres entre los diferentes individuos de aquella, en cuanto á la interpretación y alcance del precepto constitucional en la cuestión religiosa, cuyo precepto dicese que será presentado á las Cortes en la primera legislatura de este año.

Acerca del sistema que preside en nuestro Código penal, cuyas reformas no han alterado aquél en sus bases fundamentales, algo decimos al ocuparnos de su texto: pero puede asegurarse que en él preside un sistema algun tanto ecléctico, respecto á la inteligencia, naturaleza y fines de la pena. Las ideas de *intimidacion ó ejemplaridad*, *espacion*, *escarmiento*, *incapacidad de ulteriores infracciones*, *correccion apetecible* del delincuente y aún á veces la de la *defensa de la sociedad*, son elementos morales que entran á formar parte del sistema adoptado por los legisladores de nuestro Código.

Aquí terminaremos esta ligerísima mirada retrospectiva sobre la historia de la ciencia penal, habiéndonos fijado especialmente, pero sin detencion en las culminantes y más sensibles manifestaciones que ha tenido en nuestra patria ese hecho de la ley penal tan constante, tan trascendental, tan necesario, y sin embargo tan desatenido, tan abandonado por los jurisconsultos y por los filósofos, merced á malhadadas circunstancias de los tiempos, hasta fines del siglo XVIII. Y si el ánimo lamenta la indolencia y los errores del pasado, se consuela y encuentra compensacion en la ferviente fé y constante predileccion con que la ciencia se entrega á los estudios filosóficos del derecho penal en los tiempos actuales, ganando como han ganado en pocos años, el tiempo perdido en tantos siglos, y acariciando y sonriendo el porvenir, al ver en lontananza el *desideratum* de las escuelas modernas; esto es, la realizacion práctica en la vida de los pueblos, de la *teoría correccional* de las penas, completada por un perfecto y bien combinado sistema penitenciario, en que produzcan sus buenos efectos el aislamiento, el trabajo, la educacion y la reforma moral de los reclusos dentro del establecimiento, y extienda su benéfica proteccion la *tutela del estado* y de los particulares fuera de la clausura, durante ese primer periodo del ejercicio de la libertad personal, recobrada por la extincion de la pena, en que tanto necesita el rematado de la direccion, de los consejos y del apoyo de esa accion y proteccion que se conoce con el nombre de *patronato de los reos cumplidos*.

(1) Existe ya en proyecto una nueva reforma del ejercicio de la libertad de imprenta.

ELEMENTOS DE DERECHO PENAL.

Concepto filosófico jurídico de aquél.—Principales teorías sobre la penalidad.

¿Cuál es el concepto abstracto y filosófico del derecho penal?—«El conjunto de condiciones libres, para que el derecho que ha sido perturbado por los actos de una voluntad opuesta á él, sea restablecido y restaurado en todas las esferas y puntos á donde la violacion llegó. Es el derecho para el restablecimiento del derecho; es la restauracion del derecho por el derecho mismo; es una posicion ó situacion del derecho ó mejor, el derecho que nace y se constituye en consecuencia de una transgresion voluntaria (1).» Estas palabras de un distinguido profesor, contestan la pregunta.

¿Qué es derecho penal?—La coleccion de reglas y principios que tienen por objeto definir los delitos y señalar las penas con que debe castigarse su perpetracion. Es «el conjunto de condiciones coactivas y externas para el restablecimiento del derecho que el Estado hace efectivo, cuando ha sido perturbado por actos de la libre voluntad (2).»

¿Cuál es el fundamento del derecho de castigar?—El sentimiento íntimo de la justicia, que se presenta innato en todos los corazones, proclamando la necesidad de la reparacion del mal que se causa, segun algunos A. A.

¿Qué otras fuentes se atribuyen á este derecho?—Unos lo ven en el principio *moral*; otros en el material de la *utilidad*. No falta quien proclame el derecho de *defensa*, ora individual, ora de la sociedad; ni quien suponga generador de aquel derecho el que aseguran tener todo individuo sobre sí mismo, ejercitado por la sociedad, en virtud de la cesion hecha por aquél. Estos sistemas son hoy problemas de la ciencia penal, discutidos por eminentes juriconsultos, cuyos principios dimanar de las diversas escuelas filosóficas. El sistema seguido por nuestros legisladores reconoce como base del derecho penal, la *justicia*; y como fin, la *utilidad* de los pueblos.

¿Cuáles son las teorías penales que más se distinguen en la ciencia del derecho?—Las llamadas *absolutas* y las *relativas*. Tambien se las distingue con los nombres de *simples ó puras*, y *mixtas ó sincréticas* (3).

Las primeras no reconocen en la pena, fin alguno; la creen una consecuencia necesaria de la accion ilícita. Las segundas aprecian la pena, como un medio de conseguir un fin jurídico, que es el restablecimiento del derecho perturbado por el delincuente.

La naturaleza de los medios empleados, como pena, para aquél fin, dá lugar á múltiples y variadas teorías *relativas*. Si se proponen reparar la perturbacion causada por el delito, se llaman de *compensacion*, *restitucion* ó *reparacion*. Si tienden á prevenir las perturbaciones que puedan hacerse ulteriormente en el orden jurídico, denomináselas teorías de *prevencion*.

(1) L. Silvela. Derecho penal.

(2) El mismo

(3) Roeder, doctrinas fundamentales sobre el delito y la pena.

Estas reciben el nombre de *ejecutivas*, cuando proclaman el principio de la aplicación de la pena, previo el juicio contencioso, para obrar ora sobre el criminal, ora sobre todos los ciudadanos; y el de *conminatorias*, cuando creen conseguir el fin preventivo, amenazando con la ley penal.

Las *ejecutivas* cuyos medios obran solamente sobre el criminal, reciben nuevos nombres, según el fin individual que se propongan. Cuando éste consiste en mejorar interiormente al culpable, llámase teoría de la *enmienda ó correccional*; cuando protegen al Estado, teoría de la *defensa* y de la propia *conservación*. Los que obran sobre todos los ciudadanos, por el temor que producen las penas, llámense teorías de la *intimidación* y del *escarmiento ó ejemplaridad*.

Las teorías preventivas *conminatorias* se llaman de la *coacción psíquica* porque ven en la amenaza de la pena el efecto de apartar á todos los ciudadanos del delito; y de la *advertencia*, porque los ciudadanos quedan advertidos de la aplicación de la penalidad, para el caso de infracción ó violación del Derecho.

Las teorías *mixtas* son las que admiten principios y reglas de varios sistemas, y *simples* las que forman un sistema independiente, con reglas y principios propios.

No podemos analizar con extensión estas teorías, ni aún formular conclusiones relativas á la verdad, conveniencia y bondad de cada una. Sólo si debemos consignar, como hecho innegable, que la teoría de la *enmienda ó correccional* está hoy librando una gran batalla con las demás que se disputan el campo de la verdad científica, porque, con sus principios y sus derivadas consecuencias, sólo vé en la pena «el medio racional y necesario para ayudar á la voluntad, injustamente determinada, de un miembro del Estado, á ordenarse por sí misma, porque la desarmonía que nace de su desorden perturba la armonía de todo el organismo racional de él.» No vé en ella un mal necesario é inevitable, dirigido á la parte física del hombre, sino el *medio* de educar al delincuente, para restablecer su pervertida voluntad. Si para ello se le causa algún mal exterior, necesario para su corrección, debe saber que «no se le pena así, y sólo así, por el placer ó el dolor que á él ó á otros puedan resultar de esto, sino porque el Derecho, es decir, el fundamento y fin jurídico de la pena lo exige.»

Como se vé, pues, la teoría correccional ataca rudamente los sistemas antiguos y aún los mixtos, que, á la par que buscan en la pena la enmienda del culpable, la imponen como un mal justo, en compensación del mal que ha causado, y tienden á buscar la prevención de ulteriores delitos en el delincuente y en los demás asociados.

Mas á pesar de la índole especial de este libro, ampliaremos las indicaciones anteriores al tratar de la *pena*.

¿Qué escollos deben evitarse en la formación de un Código penal?—El *individualismo* y el *socialismo*. Aquél santifica al ciudadano de un modo exagerado, y tiende, si no á la impunidad, cuando ménos á las consideradas atenuaciones. Este destituye al hombre de la importancia que le pertenece, y cuyo respeto tiene derecho á exigir, mirando sólo al bien general, sin tener en cuenta lo justo y lo equitativo.

¿Qué sistema han seguido los legisladores de nuestro Código penal?—Reconociendo por *base* la necesidad práctica de la represión de los delitos, y por *fin* el bien de la nación, procuraron no caer en el *individualismo*, aleccionados por la historia que nos presenta el Fuero-Juzgo, como plantel de sus exageraciones, ni sancionar el *socialismo* de cuyas irritantes consecuencias nos muestran algunos ejemplos las Partidas.

Ideas generales acerca del delito, sus caracteres y elementos constitutivos.

Antes de entrar á examinar la definicion del delito, y las clases y condiciones que enumera nuestro Código penal, bueno será que digamos algo, someramente, acerca de lo que es *el delito*, de la materia que lo constituye y de los sujetos que entran en su composicion jurídica, en su concepcion filosófica.

¿Cómo puede definirse *el delito*, bajo un concepto filosófico?—La *violacion ó quebrantamiento del derecho por actos de la libre voluntad*; esto es, con conciencia no sólo del acto, sino además, de que éste es contrario ú opuesto al Derecho.

¿Qué caracteres revisten el delito?—Unos *comunes* á toda clase de delitos; otros *especiales*, ó propios, de cada clase. Son *comunes*, la infraccion, violacion ó quebrantamiento del derecho; la voluntad *libre* en la ejecucion de los actos punibles, y la conciencia de que es el derecho lo que se quebranta ó infringe. En el primero de los caracteres indicados vá comprendida, no sólo la infraccion del *deber*, sino la del *derecho*, su correlativo, porque el *deber* y el *derecho*, en relacion, forman el derecho absoluto, que es lo que se infringe. Por esta razon encuentran algunos defectuosa, por deficiencia, la definicion que del delito dan los jurisconsultos Rossi y su secuaz Pacheco, fundada solamente en el quebrantamiento del deber. La *libertad* con que ha de obrar el delincuente, debe entenderse *la propiedad* que goza éste para poder dejar de cometer el delito, dominando el móvil impulsivo de su ejecucion, por tener conciencia de sí mismo y conocimiento de la regla que debia seguir, contraria al acto consumado.

Son caracteres *especiales* ó propios de cada clase de delitos los que, concurriendo siempre con los *comunes*, determinan ó constituyen la naturaleza del hecho punible. Los primeros son, digámoslo así, el género, y los segundos la especie. Así, por ejemplo, todos los delitos contra la personalidad humana, tienen los caracteres *comunes* que hemos indicado; pero se determinan ó caracterizan especialmente, porque los actos de la voluntad que quebrantan el derecho, se dirigen contra las personas; ó lo que es lo mismo, se distinguen por la materia tangible sobre que se ejerce la violacion ó quebrantamiento.

¿Qué debe entenderse por *imputabilidad*?—El resultado de un juicio, segun el cual los hechos ó actos, producto de la voluntad, fueron ejecutados libre y conscientemente por el agente.

Puede ser *objetiva* y *subjetiva*, segun que aquel juicio se dirija á los hechos ó al sér que de ellos es autor. La primera suele definirse: «la propiedad que tienen ciertos hechos por su propia esencia y naturaleza, de ser producidos por una causa libre, á la cual se le atribuyen como efectos de su determinacion.» v. g., el homicidio, la injuria, el robo. La segunda, definíenla como «la propiedad de ciertos seres, por su propia naturaleza, de producir ciertos hechos que les pueden ser atribuidos como efecto de su libre voluntad.» Y por consiguiente, no son de aquéllos, el loco, el menor, etcétera, porque no tienen voluntad libre, y por tanto, no puede *imputárseles* el delito; ó mejor, no son capaces de imputabilidad *subjetiva*.

¿Qué viene á ser la *responsabilidad*, segun la doctrina anterior?—«La necesidad moral á que está sujeta toda persona, de atenerse ó estar á las consecuencias que provienen de sus acciones *imputables*,» porque el que es autor de la causa debe ser *responsable* del efecto.

Del mismo modo que la *imputabilidad*, la *responsabilidad* penal puede considerarse *objetiva* ó *subjetivamente*. La *responsabilidad objetiva* nace del

exámen del hecho imputable, y de su naturaleza especial, su importancia, su valor y su mérito; cuando al examinar las condiciones propias de aquél no se aprecian los detalles accidentales ó circunstancias de lugar, tiempo y forma, se llama *responsabilidad objetiva abstracta* del delito; y cuando se aprecian esos accidentes variables y circunstanciales, *responsabilidad objetiva concreta* del mismo. La responsabilidad *subjetiva* mira únicamente al agente del hecho punible, ó bien considerando su espíritu en estado normal al tiempo de cometerlo, ó bien apreciando la situación anormal y extraordinaria de su alma en aquel momento. En el primer supuesto se aprecia la responsabilidad *subjetiva in abstracto*; y en el segundo, *in concreto*.

¿Qué es *culpabilidad*?—La parte ó el todo de una acción libremente ejecutada, que es contraria ú opuesta á la ley por que debe regirse. No debe confundirse ni con la *imputabilidad*, ni con la *responsabilidad*. Abraza más que la primera, porque llega á apreciar el valor del acto; y ménos que la segunda, porque no llega á la determinación de la pena imponible.

¿Cuáles son los elementos comunes á todo delito?—El sujeto *activo*, el sujeto *pasivo* y la materia ú objeto del delito mismo. Llamase sujeto *activo* al autor, ó agente *libre*, de los actos ó hechos contrarios al derecho, que debía respetar y con que lo infringe. Y se dice *libre*, porque sin la libertad, entendida como antes queda expuesto, el sujeto *activo* del delito no sería capaz de serlo, porque no podría ser responsable de sus acciones; carecería de las condiciones ó requisitos de la capacidad necesaria para delinquir.

Como el delito no es indivisible, sino que durante su generacion pueden concurrir distintas personas, de aquí las ideas de la *codelinquencia*, que viene á ser «el concurso ó reunion de varios agentes activos, que da por resultado un solo crimen con *unidad* en el delito y *multiplicidad* en las personas, á las cuales suele calificarse de *autores* y de *cómplices*»; y de las responsabilidades *cualitativa* y *cuantitativa*, la primera igual para todos los delinquentes; la segunda distinta y proporcionada. El *encubrimiento* no entra en la esfera de la delinquencia, propia y exactamente entendida.

Denominase sujeto *pasivo*, á aquél cuya condicion jurídica se desconoce rompiendo la relacion, tambien jurídica, que le liga con el agente. Como para ser sujeto *pasivo* del delito no se necesitan actos de libre voluntad por parte del mismo, de aquí que todos los hombres nacidos, y aún los *póstumos*, tengan condiciones de capacidad para serlo. Tambien el Estado puede ser sujeto *pasivo* de delito, cuando son violadas las condiciones necesarias para su desenvolvimiento y conservacion. Finalmente; forman la *materia* ú objeto de los delitos, las reglas ó leyes que constituyen el derecho, cuyo quebrantamiento es punible, en cuanto componen el derecho positivo escrito ó legisable por el Estado, manifestado aquél por un hecho externo y sensible, que produce un mal *físico*, *moral* ó *mixto*, cuyo mal debe ser mixto de moral y físico, si ha de ser penable, segun la escuela que han seguido los autores de nuestro Código, combatida por otras con razones profundas y de gran valia, basadas en los principios que quedan expuestos, los cuales no admiten, por falta de consecuencia lógica, ese exclusivismo del mal *mixto*.

Nosotros no podemos entrar en el exámen de esa demostracion. Diremos sólo que, segun los partidarios de las doctrinas modernas, si sólo fuera materia del delito el mal mixto, no serian punibles los actos que no fuesen de ejecucion, como la *proposicion*, el *concierto*, la *escitacion pública* para cometer el delito, y de aquí que se considere al derecho como un órden puramente *material*, y no puramente *ético* y *espiritual*. No serian tampoco delitos la injuria, la calumnia, el desacato, la amenaza. En resumen; hay materia de delito, segun la escuela que combate el exclusivismo del mal *mixto*, tan pronto como actos ó hechos nos demuestren que la vo-

luntad del criminal está decididamente determinada en sentido opuesto ó contrario al derecho que ha de hacerse efectivo y exigirse por la coaccion.»

¿Qué funciones ejerce la voluntad en la *generacion* ó *proceso* del delito?—Tres, que suponen otros tantos estados del alma: la *disposicion*; la *deliberacion*, y la *resolucion* de cometerlo. Entre ellos puede mediar más ó ménos tiempo, y dar cabida á otros hechos que, manifestados exteriormente, pueden ser punibles, como la *tentativa* y la *frustracion* del delito, y la consumacion de la *amenaza*. Dichos hechos pueden ser preparatorios, bien *morales*, bien *materiales*, ó ya de *ejecucion*. Unos y otros se comprenden perfectamente por la naturaleza de los mismos. Si alguna dificultad ofrece su apreciacion, es meramente relativa á los preparatorios *materiales* con los de *ejecucion*, porque ambos son sensibles y externos. Los A. A. dicen que sólo pueden distinguirse cuando, separados del agente y examinados aisladamente del fin á que tienden, aparecen inocentes los primeros, mientras que los segundos revelan por sí mismos su naturaleza y fin punibles.

¿Qué es la *tentativa*?—La ejecucion de alguno, pero no de todos los requisitos ó condiciones esenciales de un crimen, faltando para completarle y perfeccionarle, algo esencial y constitutivo, dependiente de la libre voluntad del agente ó que éste pensaba ejecutar.»

¿Cuando se dice *frustrado* el delito?—Cuando «los actos ejecutados no dieron el resultado que esperaba su autor, por cualquiera causa ajena á su deseo», lo cual puede provenir de una imposibilidad, ora *absoluta*, ora *relativa*, ó de hechos imprevistos y casuales.

¿Cuándo está *consumado* el delito?—«Cuando la voluntad hizo todo lo que juzgaba indispensable y preciso para cometer el crimen», y consiguió el fin aspirado.

¿En qué período del proceso del delito comienza á ser éste castigable por el Estado?—En el de *resolucion*, á juicio de las modernas escuelas, siempre que sea conocida por hechos externos; doctrina contraria á la que establece el Código penal vigente entre nosotros, que sigue la de la escuela que asienta que el delito no es susceptible de coaccion legal, sino desde el momento que comienza á ejecutarse. La *resolucion* de la voluntad y los actos *preparatorios*, son, por regla general, inocentes para el Estado. Y decimos por regla general, y no absolutamente, porque hay hechos de *resolucion* como la *amenaza*, la *proposicion* y la *conspiracion*, la tenencia de instrumentos conocidamente destinados á cometer ciertos delitos, los cuales parecen ser un acto preparatorio *material*, y sin embargo, tienen sancion en nuestra ley penal.

¿Son igualmente punibles la *tentativa*, el delito *frustrado* y el *consumado*?—La escuela moderna sólo admite diferencia entre la *tentativa* y los segundos. El delito *frustrado* y el *consumado*, son, para ella, de igual magnitud é importancia, y no deben diferenciarse, porque el delito está perfecto para la voluntad; porque los hechos externos son meramente la expresion de aquélla; porque el éxito de la accion punible no depende del agente, sino de la fortuna ó de la casualidad, y finalmente, porque la filosofía, la justicia, la lógica y la razon, no pueden dejarse llevar de los efectos que el hecho realizado produce en la sensibilidad de los ciudadanos, más profundamente afectada al ver el éxito *consumado*, que el daño *frustrado* del mismo.

Y, sin embargo, forzoso es reconocer que estas teorías, lógicas sin duda ninguna, no son las más seguidas por los Códigos modernos, y especialmente por el nuestro, si bien el francés parece inclinarse á admitirlas.

Segun un juriconsulto moderno (1), la razon de penar la *tentativa*

(1) Francisco Carrara, profesor de la universidad de Pisa.

nace del *riesgo corrido*, que viene á sustituir al daño; y la de que se castigue con pena menor, es una consecuencia del anterior fundamento, porque «un *riesgo*, por grande que sea, jamás iguala en gravedad al mal efectivamente realizado»: un *peligro* nunca puede igualarse á un *daño* real. Esto es evidente é incontestable.

Son elementos constitutivos de la *tentativa*, en opinion de ese jurisconsulto, la *intencion* y el *riesgo*. El primero representa la parte moral del hecho juridico; el segundo la parte *física*. El hecho *fin*, que constituiria el delito *perfecto ó consumado*, no existe; en su lugar se destaca el *peligro*.

El jurisconsulto aludido no reconoce la *tentativa* de delito por *mera culpa*; es, en su opinion, un contrasentido juridico, esa apreciacion legal.

LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO (1).

De los delitos.

Nuestro Código penal ha sido objeto de una nueva reforma extensiva á todos sus libros. Muchas é importantes innovaciones ha introducido, de las cuales nos ocuparemos á medida que vayamos adelantando en la exposicion de sus artículos. Los principios políticos consignados en la Constitucion del Estado de 1869 hacian necesaria la reforma. Publicada la ley fundamental de 1876, está en proyecto otra reforma del Código que es imprescindible, especialmente en cuanto á los delitos religiosos, porque, partiendo aquella Constitucion de la base de la *libertad* de cultos, á todos los consideraba iguales en la esfera del delito. Mas como la segunda proclama la religion católica como religion del Estado, y sólo admite la *tolerancia* de cultos, la reforma es de nuevo necesaria, si se han de armonizar el Código politico y el penal que ha de castigar las transgresiones ó violaciones de aquel precepto restrictivo.

Subsiste y subsistirá por mucho tiempo en nuestra ley, la pena de muerte, bien cautelosa y concienzudamente escatimada, no obstante los esfuerzos que se han hecho para borrarla de la escala de las penas. La penalidad ha descendido en concreto. Se han suprimido las penas *menores*, que han sido absorbidas por razon del tiempo de su duracion, en las penas *correccionales*; desaparece la de *argolla* con todos sus efectos, y la de sujecion á la vigilancia de la autoridad; se declaró no ser delitos algunos hechos que lo eran en el antiguo Código, como sucede con la vagancia, rebajada á la categoria de circunstancia *agravante*; se califican, en cambio, de delitos, hechos no previstos anteriormente, como acontece con el disparo de arma de fuego contra determinada persona, siempre que no constituya la *tentativa* ó el delito *frustrado* de un homicidio; y, por fin, entre otras muchas novedades que sancionaba, se destacaba por su importancia la inclusion de los delitos cometidos por medio de la imprenta, su penalidad y las reglas especiales que regian respecto á las personas responsa-

(1) Véase el Código penal reformado, promulgado como provisional en 30 de Agosto de 1870, á cuyo texto y doctrinas nos atenemos en este Manual preferentemente.

bles penal y civilmente; novedad que ha dejado de serlo, porque los delitos cometidos por medio de la imprenta, han vuelto á segregarse del derecho penal comun, para ser objeto de una legislacion especial, ahora vigente, en que se definen, denominan, clasifican y castigan con una penalidad especial y siguiendo un procedimiento tambien propio, ante tribunales no ménos especiales (1).

El nuevo Código tiene el carácter de *provisional*, y las Cortes procurarán corregir algunos de sus defectos, que la práctica ha hecho notar y exigen los buenos principios.

¿Qué clases de delitos castiga el Código penal?—Todos los que no están penados por leyes especiales. Por eso no son objeto de sus disposiciones los *militares*, los de *contrabando*, las contravenciones *sanitarias*, ni otros castigados por determinadas disposiciones como los de imprenta en la actualidad, y ciertos daños cometidos en los montes públicos. Los *militares*, porque la ordenanza mira sólo á la conservacion de la disciplina, necesaria en los ejércitos. Los de *imprenta*, porque su legislacion es transitoria y política, variable con frecuencia por su inestabilidad. Los de *contrabando*, por razones análogas á las anteriores. Las contravenciones *sanitarias*, porque son objeto de leyes excepcionales y de circunstancias que la ciencia médica aconseja en determinadas ocasiones para evitar las epidemias ó aislar los puntos infestados. Son delitos *militares* los que penan las ordenanzas y determinan las leyes de organizacion de tribunales, en materia de jurisdiccion.

¿Qué es delito?—La infraccion de una ley penal (2). Segun el código es *toda accion ó omision voluntaria penada por la ley*. Para que exista el delito es necesario que haya *libertad, inteligencia é intencion* de cometerlo, y que el hecho sea *externo*, manifestado por una *accion* ó una *omision*. Aquellas facultades se presumen siempre, porque el hombre obra comunmente en pleno goce de su libre y voluntario albedrío, siendo indispensable la prueba en contrario para que pueda modificarse la presuncion legal. Si el hecho ú omision, considerados como delito, no tuvieran señalada penalidad en el Código, no son hechos punibles, ni pueden ser castigados; porque sólo lo son los que la ley, con anterioridad, ha calificado de delitos ó faltas, debiendo, en caso contrario, suspenderse el procedimiento y manifestar al gobierno las razones que tenga el tribunal que de ellos conociere para creer que debieran ser penados.

¿Cómo divide el código los delitos?—En *graves, ménos graves y faltas*. Se reputan *graves* los que la ley castiga con penas que, en cualquiera de sus grados, sean *aflictivas*; *ménos graves* los que la ley reprime con penas que, en su grado máximo, sean *correcionales*, y *faltas* las infracciones á que la ley señala penas *leves*. Esta definicion, nada científica, parece estar fundada en los principios de la tramitacion que establece la ley de Enjuiciamiento criminal.

¿El error de la persona ofendida exime ó atenúa la responsabilidad criminal?—El que ejecuta *voluntariamente* el hecho, es responsable de él, é incurre en la pena que la ley señala, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquélla á quien se proponia ofender, siempre que el delito consumado sea el mismo que se habia determinado á cometer.

¿Qué debe hacerse cuando de la aplicacion rigorosa del código resulta una pena excesiva?—Debe el tribunal sentenciador acudir al gobierno, exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, para que, por medio de indulto, se procure la equidad.

¿Qué vicisitudes experimenta el delito hasta su comision?—Várias y de

(1) Decreto de 31 de Diciembre de 1875.

(2) Véase lo dicho en el cap. I, lib. I del Código penal, acerca de la materia.

diversa índole. Comienza por un *pensamiento*, que se convierte luego en *deseo*, para cuya ejecucion *vacila la conciencia*, hasta que el criminal adopta la *resolucion* de cometerlo. Resuelto el ánimo, realiza los actos preparatorios del delito, dá principio á su ejecucion, lo ejecuta y lo consuma. Como se vé, pues, en la generacion del delito hay actos *internos* y actos *externos*. El *pensamiento*, el *deseo*, las *vacilaciones* de la *conciencia* y la *resolucion* de cometer el delito, son actos meramente *internos*. Los *preparatorios*, los de *principio de ejecucion*, los de *ejecucion* y la *consumacion*, son actos *externos*. Todos, ó su conjunto, constituyen lo que se llama el *proceso ó generacion del crimen*.

¿Qué son actos *preparatorios*?—«Los que, no teniendo por objeto la realizacion material del delito, ni por fin inmediato la accion criminal, la preceden y están más ó menos ligados con ella, pero sin constituirla.»

¿Cuáles son los que dan *principio á la ejecucion*?—Aquéllos que tienen por objeto *directo* el delito, pero que permiten que el delincuente pueda detenerse antes de su consumacion.

¿Cuándo tienen lugar los actos de *ejecucion*?—Cuando el criminal ha puesto en juego todos los medios para cometer el delito, pudiendo éste, no obstante, no consumarse, por causas independientes de su voluntad.

¿Cuándo se *consume* el delito?—Cuando el pensamiento criminal se realiza y lleva á efecto.

¿Cuándo comienza á ser punible la accion?—Desde el momento en que se presenta con hechos exteriores, que indudablemente revelan la intencion criminal del actor. Los actos *internos* pertenecen al dominio de la conciencia y de la moral, á donde no penetra la ley y se detiene la esfera del derecho.

¿Son punibles los actos *preparatorios*?—Por regla general no, á no ser que por sí mismos constituyan un delito, porque son actos que lo mismo indican criminalidad, que revelan inocencia. Pero lo son la *conspiracion* y la *proposicion*, cuando las pena expresamente el código, lo cual tiene lugar tan sólo cuando se dirigen á cometer los delitos de traicion, lesa magestad, rebelion y sedicion.

¿Cuándo hay *conspiracion*?—Cuando dos ó más personas se conciertan para la ejecucion del delito y resuelven ejecutarlo.

¿Cuándo tiene efecto la *proposicion*?—Cuando el que ha resuelto cometerlo, propone su ejecucion á otra ú otras personas.

Desistiendo de la *conspiracion* ó *proposicion* antes de la formacion del procedimiento, y revelando á la autoridad el plan y sus circunstancias, se libraba de la pena antes el *conspirador*; pero el código vigente nada dice respecto á este particular, consignando que la *conspiracion* y la *proposicion* para cometer un delito, sólo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente.

¿Qué diferencia separa los actos *preparatorios* de los de *principio de ejecucion*?—Aunque es difícil determinarla, puede asegurarse que, si del acto se infiere necesariamente la intencion criminal, es de *principio de ejecucion*; y *preparatorio*, cuando puede traducirse como inocente ó como ilícito.

¿Son punibles los actos de *principio de ejecucion*?—Sí, porque han causado, por medios sensibles, el mal moral que constituye la *alarma*. Tambien lo son la *tentativa* y el *delito frustrado*.

¿Cuándo hay *tentativa*?—Cuando el culpable dá principio á la ejecucion del delito directamente por hechos exteriores, y no practica todos los actos de ejecucion que debieran producir el delito, por causa ó accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento. Cuando, pues, el arrepentimiento del delincuente evita la consumacion del delito, la *tentativa* no es punible, siempre que no se hubiere cometido otro anteriormente.

¿Cuándo hay *delito frustrado*?—Cuando el culpable practica todos los actos de ejecucion, que deberian producir como resultado el delito, y sin

embargo no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente.

¿En qué se diferencia la *tentativa* del delito frustrado?—En que éste es el delito *moral* consumado, puesto que nada restó que hacer al delincuente, mientras que aquella es un acto externo de *principio de ejecución*, suspendido y abandonado por causas involuntarias.

¿Aprecia el código la *tentativa* y la *frustración* de las faltas?—No: sólo se castigan, por punto general, cuando han sido consumadas. Se exceptúan las frustradas contra las personas ó la propiedad, que son punibles.

Situaciones que excluyen ó modifican la imputabilidad.—

Circunstancias eximentes.

¿Cuándo tienen lugar esas situaciones y circunstancias?—Cuando no concurren en el agente *activo* del delito las condiciones todas que hemos visto exigia la imputabilidad; ó lo que es lo mismo, cuando el estado moral del hombre no reúne las condiciones de normalidad que le son propias, por efecto de determinadas causas.

A estas causas, y según el efecto que producen, suelen los tratadistas llamarlas *circunstancias* de exención ó *eximentes*, de atenuación ó *atenuantes* y de agravación ó *agravantes*.

¿Qué fundamento ó caracteres comunes tienen tales estados ó circunstancias?—El ser *subjetivas* ó personales del agente, referirse al momento de la ejecución del hecho punible, y constituir un estado excepcional en que la voluntad, en vez de regirse á sí misma, es regida por causas externas.

Esas causas pueden ser permanentes ó temporales de mayor ó menor duración; la locura, el idiotismo, la imbecilidad, son ejemplos de las primeras; la edad, la embriaguez, el sueño, los celos, dan idea de las segundas.

¿Qué condiciones deben tener las circunstancias modificativas de la imputabilidad?—1.^a, su concurrencia ha de verificarse en los periodos de *resolución*, *preparación* y *consumación* del delito; 2.^a, deben ser involuntarias, sin culpa del agente; 3.^a, ser, como ya hemos dicho antes, personales ó *subjetivas* y excepcionales.

Algunos A. A. entienden que las circunstancias modificativas de la imputabilidad, revestidas con aquellos caracteres, sólo producen minoración ó atenuación de responsabilidad, nunca agravación; criticando y rechazando la clasificación, meramente práctica, de circunstancias *eximentes*, *atenuantes* y *agravantes*, que es la seguida por nuestro código.

¿Qué causas eximen de responsabilidad criminal?—La *locura* y la *imbecilidad*, la *edad*, la *defensa*, el mero accidente, la *fuerza*, el *miedo*, el *deber*, el *decreto* ó *autoridad*, la *obediencia debida* y la *omisión involuntaria*.

¿Cómo puede definirse la *locura* y la *imbecilidad*?—Imbecilidad es la enajenación mental constante, pacífica y tranquila, y *locura* es la pérdida de la razón, manifestada con accesos de furor, delirios y síntomas exajerados. Así, pues, en estos dos extremos se hallan comprendidos los enfermos, estúpidos, idiotas, furiosos, monómanos, etc.

¿En qué se funda la exención del loco y del imbecil?—En que sin inteligencia no hay voluntad, y sin voluntad no hay delito; por eso dice la ley que *no delinquen*, y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal, á no ser que hayan obrado en un intervalo de razón.

¿Comprende la imbecilidad el *sonambulismo*?—No: cuando el sonámbulo justifique que el sueño embargaba sus sentidos al tiempo de cometer

el acto, debe ser absuelto, porque la accion no es *voluntaria*, y el delito presupone libre voluntad en el agente. El sonámbulo no tiene conciencia de sus actos: obra en virtud de alucinaciones mentales (1) y no delinque.

¿Es causa de exencion la *sordo-mudez*?—No; al sordo-mudo, por mas que viva aislado del mundo exterior, no le falta por ello, la conciencia del deber. El Tribunal Supremo ha declarado que puede ser responsable, porque no debe equipararse á la imbecilidad, ni á la locura, la sordo-mudez.

¿Comprende la imbecilidad á la *embriaguez*?—Tampoco: ésta, por regla general, es causa de atenuacion; pero no de exculpacion absoluta. Esto, no obstante, si la embriaguez es tal que ha producido un estado de completa atonia, suspendiendo, como el sueño, las funciones del espíritu, debe exculpar al beodo, porque las condiciones de imputabilidad no existen.

¿Qué precauciones adopta la ley para con los locos y los imbeciles?—Cuando el imbecil ó el loco hubiere ejecutado un hecho que la ley califica de delito *grave*, el tribunal decretará su reclusion en uno de los hospitales destinados á los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorizacion del mismo tribunal.

Si la ley califica de delito *ménos grave* el hecho ejecutado por el imbecil ó el loco, el tribunal, segun las circunstancias del hecho, practicará lo dispuesto en el párrafo anterior, ó entregará al imbecil ó loco á su familia, si ésta diese suficiente fianza de custodia.

¿Cómo se dividen las personas por razon de la *edad*, para los efectos del código penal?—En menores de nueve años; mayores de nueve y menores de quince; mayores de quince y menores de diez y ocho; mayores de diez y ocho. El menor de nueve años está, en todo caso, exento de responsabilidad, por la falta absoluta de discernimiento. El mayor de nueve y menor de quince, lo está igualmente, por regla general, á no ser que haya obrado con discernimiento, sobre lo cual debe hacer declaracion expresa el tribunal; porque casos hay en esta edad, en que la naturaleza dota á algunos jóvenes del discernimiento necesario para delinquir con intencion. El mayor de quince y menor de diez y ocho, es siempre responsable, aunque con circunstancia atenuante, por no suponerle con todo el lleno del desarrollo intelectual propio del mayor de diez y ocho años, el cual es responsable en la plenitud de la accion punible.

¿En qué se funda la exencion que produce la *defensa* y qué circunstancias deben concurrir en la de la persona y derechos del delincuente?—En el derecho natural é instinto de la propia conservacion. Para que sea justa debe existir: 1.º, *agresion ilegítima*; 2.º, *necesidad racional*, no absoluta del medio empleado para impedir la ó repelerla; apreciable aquélla por la situacion del ofendido, lugar, ocasion y naturaleza de la ofensa ó del riesgo, bastando para ello que la accion ofensiva amague ó sea inminente, segun el Tribunal Supremo (2), y 3.º, *falta de provocacion suficiente*, lo cual quiere decir que no toda provocacion basta, por parte del que se defiende. Ni la amenaza de palabra, ni los abusos de autoridad, legitiman la defensa. Es necesaria la *agresion de hecho, ilegítima y sin derecho*, acompañada de las demás circunstancias.

¿Qué circunstancias debe comprender la defensa de los parientes?—*Agresion ilegítima, necesidad racional de su repulsion y falta de provocacion suficiente* por parte del defensor, aun cuando la hubiere habido por la del pariente acometido. El parentesco á que se refiere el Código, se extiende al cuarto grado civil de afinidad y consanguinidad.

¿Cuáles se exigen en la defensa de un extraño?—La *agresion ilegítima, la*

(1) El Código de 1822 declaraba causa de irresponsabilidad el sonambulismo.

(2) Cuando no hubo agresion ilegítima, la *racionalidad* del medio repulsivo empleado no puede apreciarse. (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Noviembre de 1877.)

necesidad racional de su repulsion y la carencia de resentimiento, venganza u otro motivo apasionado contra el agresor.

¿Qué requisitos son necesarios para que sea legítima la defensa de la propiedad?—Cuando pertenece al defensor, está comprendida en las reglas anteriores. Cuando es ajena, y para su defensa hay necesidad de causar un mal, deben concurrir los siguientes: 1.^o, *realidad del mal que se trata de evitar*; 2.^o, *que sea mayor que el causado para evitarlo*, y 3.^o, *que no haya otro modo practicable y ménos perjudicial, para impedirlo.*

¿Cuándo se reputa que el daño causado lo fué por mero accidente?—Cuando se causa ejecutando un acto lícito, con la debida diligencia y sin la menor culpa ni intencion de causarlo.

¿Por qué la fuerza y el miedo disculpan la accion?—Porque coartan la libertad del individuo. El miedo ha de ser insuperable relativo a un mal injusto igual ó mayor al que se nos hace cometer, ineludible, no merecido e inevitable. La fuerza ha de ser extraña, *irresistible*, proveniente de un tercero.

¿Cuándo es debida la obediencia?—Cuando el mandato es legítimo, procedente de autoridad, en cuyas atribuciones está el ordenarlo, y cuando la obediencia no se opone al cumplimiento de deberes de mayor importancia.

El deber, el ejercicio de un *derecho*, *oficio*, *profesion* ó *cargo*, son causas de exención que llevan en si mismas la razon de su existencia.

¿Por qué las *omisiones involuntarias* lo son tambien?—Porque el que deja de hacer alguna cosa por una causa legítima é insuperable, no puede responder de las consecuencias, supuesto que no ha tenido intencion de provocarlas. Mas es; ha querido tal vez evitarlas, y una causa independiente de su voluntad le ha impedido cumplir su propósito. Pero para que las omisiones sean causas eximentes, es preciso que el que *incurre* en ellas, estuviese impedido por causas legítimas é insuperables, y por consiguiente incapacitado para llenarlas.

Circunstancias atenuantes.

¿Cuál es el fundamento de las circunstancias *atenuantes*?—La menor perversidad del delincuente ó el menor daño causado por el delito.

¿Cuántas y cuales son?—Ocho: 1.^a, cualquiera de las eximentes que no reuna todos los requisitos que la ley requiere; 2.^a, la de ser el culpable menor de diez y ocho años, que *siempre* rebaja la pena al grado inferior inmediato; 3.^a, la de no haber tenido el delincuente intencion de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo; 4.^a, la de haber precedido *inmediatamente*, sin interrupcion de tiempo, provocacion ó amenaza *adecuada*, de parte del ofendido; 5.^a, la de haberse ejecutado el hecho en vindicacion *próxima*, sin que medie mucho espacio de tiempo, de una ofensa grave causada al autor, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermano, cualquiera que sea su clase, ó afines en los mismos grados (1); 6.^a, la de ejecutar el hecho en estado de embriaguez, cuando ésta no fuere habitual ó posterior al proyecto de cometer el delito. Esta circunstancia es incompatible con la 3.^a, según doctrina del Tribunal Supremo; 7.^a, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebató y obcecacion. Presupone la prueba de las causas de esos estímulos que apreciarán los tribunales, los cuales deben ser *próximos*, y producir perturbacion del ánimo, siendo únicamente aceptable para la ley la del

(1) El trascurso de una noche quita el carácter de atenuante á esta circunstancia.

momento, que no dá lugar á la reflexion, sin que autorice ni proteja la venganza y el resentimiento, que son efectos de un ánimo pervertido, ni los estímulos contrarios á la moral (1), y 8.ª y última, cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores (2). Debe demostrarse la analogía y determinarse específicamente con cual de las circunstancias anteriores la guarda (3).

¿Puede ser la embriaguez causa de exculpacion *absoluta*?—Sí, cuando no siendo voluntaria, ni ménos *habitual*, se justifica que es nacida ó efecto de un hecho inocente é inculpa ble que prive al hombre completamente de su voluntad. Los tribunales resolverán, con vista de la circunstancias, de las personas y de los hechos, cuando haya de considerarse *habitual* la embriaguez.

Circunstancias agravantes.

¿Cuántas y cuáles son las circunstancias *agravantes*?—Veinte y tres.

1.ª Ser el agraviado cónyuge ó ascendiente, descendiente, hermano legítimo, natural ó adoptivo, ó afín en los mismos grados, del ofensor.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales para apreciarla como agravante ó atenuante, segun la naturaleza y los efectos del delito, no pudiendo dejar de apreciarse en uno ú otro sentido.

2.ª Ejecutar el hecho con *alevosia*.

Hay alevosia cuando el culpable comete cualquiera de los delitos *contra las personas*, empleando medios, modos ó formas en la ejecucion, que tiendan directa y especialmente á asegurarla, sin riesgo para su persona, que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. Esta exposicion, por demasiado casuistica, ha dado lugar á dudas en su aplicacion práctica; siendo preferible la vaga, pero exacta idea que contenia la antigua fórmula de *obrar á traicion ó sobre seguro*, con relacion á los delitos contra las personas (Véase el apéndice).

La *alevosia* puede tener lugar sin la *premeditacion*.

3.ª Cometer el delito mediante precio, recompensa ó promesa.

4.ª Ejecutarlo por medio de inundacion, incendio, veneno, explosion, locomotora, ó averia causada de propósito, descarrilamiento de locomotora, ó empleando otro artificio ocasionado á grandes estragos.

5.ª Realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, fotografía, ú otro medio análogo que facilite la publicidad (4).

Esta circunstancia la tomaban en consideracion los tribunales para apreciarla como agravante ó atenuante, segun la naturaleza y los efectos del hecho punible.

6.ª Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males

(1) Doctrina del Tribunal Supremo. (Sentencia de 23 Noviembre de 1877.) El dar una bofetada, es uno de los estímulos que arrebatan y atenúan la responsabilidad penal. (Sentencia de 18 de Diciembre de 1877.)

(2) Algunas audiencias aprecian como atenuante, por analogía, el corto valor de la cosa robada, pero el Tribunal Supremo rechazó esta apreciacion en sentencia de 31 de Enero de 1871.)

(3) El mismo Tribunal no ha apreciado como análogas y de igual entidad la retractacion de la calumpnia; la enemistad del ofendido con el ofensor; la buena conducta del procesado; la necesidad de alimentarse; la horfandad del mismo; el corto valor de lo sustraído; la confesion del reo, ni la misma ancianidad, invocada como análoga á la de ser el delincuente menor de 18 años.

(4) Esta circunstancia queda sujeta á las disposiciones de la ley de imprenta.

innecesarios para su ejecucion. Debe ser, pues, *deliberado ó innecesario* el aumento del mal.

7.^a Obrar con premeditacion conocida, ó sea despues de una meditacion reflexiva sobre el hecho punible, antes de cometerlo. La estafa y la falsificacion no admiten esta agravante.

8.^a Emplear astucia, fraude ó disfraz, entendiéndose por esto todo medio empleado para evitar el ser conocido, como tiznarse la cara.

9.^a Abusar de superioridad, ó emplear medio que debilite la defensa. La primera no es apreciable en el robo, porque el empleo y abuso de la fuerza se pena en el delito mismo. Comunmente forma parte de la alevosia.

10. Obrar con abuso de confianza. Es de estimar en los robos; pero no en las estafas, ni en los hurtos domésticos.

11. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.

12. Emplear medios ó hacer que concurren circunstancias que añadan la ignominia á los efectos propios del hecho criminal.

13. Cometer el delito con ocasion de incendio, naufragio ú otra calamidad ó desgracia, aprovechándose de la confusion y del espanto consiguientes.

14. Ejecutarlo con auxilio de gente armada ó de personas que aseguren ó proporcionen la impunidad.

15. Ejecutarlo de noche, ó en despoblado y en cuadrilla. El despoblado y la cuadrilla han de concurrir juntos. La noche ha de buscarse de intento, para aprovecharse de su oscuridad. Cuando no se busca la *nocturnidad*, no agrava la pena señalada al delito.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales, segun la naturaleza y accidentes del hecho.

16. Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de la autoridad pública.

17. Haber sido castigado el culpable anteriormente, en sentencia firme, por delito á que la ley señale igual ó mayor pena, ó por dos ó más delitos á que aquella señale pena menor.

Tampoco esta circunstancia es siempre agravante; la tomarán en consideracion los tribunales, segun las condiciones del delincuente y la naturaleza y los efectos del delito.

18. Ser reincidente el culpable.

Hay *reincidencia*, cuando al ser juzgado el delincuente por un delito, estuviere ejecutoriamente condenado por otro, comprendido en el mismo título del código, aunque la sentencia sea posterior á la consumacion del segundo delito, porque no debe atenderse á la fecha de aquél; sino á la de la sentencia en que se castigue cualquiera de ellos. La amnistia del delito anterior, impide la reincidencia, porque borra la pena y sus efectos. El indulto, como no extingue éstos, no evita la apreciacion de reincidencia.

19. Cometer el delito en lugar sagrado, en los palacios de las Cortes ó del jefe del Estado, ó en presencia de éste, ó donde la autoridad pública se halle ejerciendo sus funciones.

20. Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto que por la dignidad, edad ó sexo mereciere el ofendido, siempre que el delito se haya dirigido á causar tales ofensas; ó en su morada, cuando no haya provocado el suceso. El hogar doméstico es como un lugar sagrado, respetado por las leyes, cuya violacion es punible. Si la morada es comun al ofensor y al ofendido, no es aplicable esta circunstancia al caso en que concorra.

21. Ejecutarlo con escalamiento.

Hay escalamiento cuando se entra por una vía que no es la destinada al efecto. Forma parte del delito de robo, siendo elemento integrante.

22. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo ó pavimento, ó con fractura de puertas ó ventanas.

23. Ser vago el culpable.

Se entiende por *vago* el que no posee bienes ó rentas, ni ejerce habi-

tualmente profesion, arte ú oficio, ni tiene empleo, destino, industria, ocupacion lícita ó algun otro modo legitimo y conocido de subsistencia, por más que sea casado y con domicilio fijo.

¿Qué reglas deben seguirse para apreciar el parentesco del número primero como *aggravante*, ó como *atenuante*?—La ley no las fija. Por regla general, en los delitos contra la propiedad, el parentesco atenúa la responsabilidad. En los que afectan á las personas, si el ofendido es ascendiente, debe agravarla, y atenuarla cuando es descendiente ó de grado inferior. Esto se entiende siempre que el parentesco no sea elemento constitutivo del delito, como en el parricidio, ó no esté expresamente penado.

¿Cómo se entendia antes de la reforma de 1870 la *alevosia* y se apreciaba la *reincidencia*?—La primera tenía lugar cuando se obraba á *traicion y sobre seguro*. La segunda consistia en la perpetracion de delitos de la misma especie, cometidos antes de la consumacion del último, por los cuales habia sido condenado el culpable. Mas ahora, segun determina la expresada circunstancia 18, existe la *reincidencia* siempre que, al tiempo de ser juzgado el delincuente, resultare ejecutoriamente condenado por otro delito del mismo titulo, aunque, como sanciona el Tribunal Supremo, la sentencia fuere posterior á la consumacion del segundo delito, doctrina legal, algun tanto grave en sus efectos, pero que es la vigente.

¿Qué es *premeditacion*?—La perseverancia en el pensamiento de delinquir, tenida desde tiempo anterior á la comision del delito. Cuando constituye una parte esencial de éste no puede calificarse de circunstancia *aggravante*, como sucede en la *conspiracion y falsificacion de moneda*.

¿Es *reincidencia* el caso de la circunstancia 17?—Verdaderamente no, porque en dicha circunstancia no se busca la analogia de los delitos, sino la cantidad de la pena. Llámase, generalmente, *reiteracion*.

¿Cuál es el fundamento, segun lo expuesto, de las circunstancias *aggravantes*?—La mayor perversidad del delincuente, la mayor facilidad de cometer el delito y el mayor daño causado en su perpetracion (1).

Autores, cómplices y encubridores.

No siempre se presenta en el proceso del delito una sola persona como *sujeto activo*. A veces son varias, y aparece la *codevincuencia* y la *complicidad*, por la mayor ó menor participacion en el delito, y el tiempo en que se presta la cooperacion. Cuando ya se ha cometido, puede haber lugar al *encubrimiento*, que consiste siempre en una cooperacion posterior al delito, con ánimo de evitar su persecucion ó su publicidad. De aqui se deduce que son responsables de los delitos los *autores*, los *cómplices* y los *encubridores*.

De esta regla se exceptuaban, por el código de 1870, los delitos y las faltas cometidas por medio de la imprenta, que, segun él, eran considerados como contravenciones comunes; pues de ellos sólo respondian los *autores que lo fueran realmente*; en su defecto, los directores de la publicacion; á falta de éstos los editores; y en último caso los impresores, jefes de los establecimientos en que se hubiese tirado el escrito penable. Mas esta parte del código ha quedado derogada por los Decretos de 29 de Enero y 31 de Diciembre de 1875, los cuales, volviendo al sistema anterior de considerar delitos especiales los *abusos* punibles cometidos por la imprenta

(1) La circunstancia tenida como agravante en el Código de 1850, de ejecutar el delito como medio de perpetrar otro, dejó de serlo en el de 1870, agravando, no obstante, la penalidad, porque el art. 90 de éste prescribe que se imponga el grado máximo de la pena más grave señalada á cualquiera de los dos.

ta, los definieron, clasificaron y penaron, estableciendo un procedimiento y un tribunal especiales (1).

¿Quiénes se consideran autores de un delito?—1.º Los que toman parte *directa* en la ejecución del hecho. 2.º Los que fuerzan ó inducen directamente á otros á ejecutarlo. Y 3.º Los que cooperan á la ejecución de aquél, por un acto, sin el cual no se hubiese efectuado.

¿Quiénes toman parte *directa* en la ejecución de un delito?—«Los que participando de la resolución criminal marchan juntos á perpetrarlo, y toman parte personalmente en su realización, ejecutando actos que *directamente* tienden al mismo fin (2).»

Sólo responderán, no obstante, individualmente, de los hechos que no fueron objeto del proyecto criminal, ni tienen relación íntima con el mismo.

¿A quiénes debe declararse autores porque fuerzan á otros á cometer el delito?—«A los que materialmente, por violencia real ó miedo grave, de obligan á cometerlo», siendo aquélla ó éste la causa eficiente del mal causado, de tal modo que sin ella no se hubiese ejecutado.

¿Quiénes son autores por *inducir* directamente á la consumación del hecho punible?—Los que por un medio eficaz, persuasivo, directo ó intencional, ejercen tal influencia en el ánimo del agente material, que consiguen mover la voluntad de éste hácia la realización del crimen, resultando ser también aquella *inducción* la causa eficiente y determinante de su efectividad; inducción que no debe confundirse con el *consejo*, ni con inducciones vagas é indirectas. El *mandato* del superior y el *pacto* criminal pueden comprenderse entre los medios directamente inductivos.

¿Qué *actos* son los que acusan responsabilidad de autores legales á los que los ejecutan? El mismo código los señala: aquéllos sin los cuales, sin cuya concurrencia, por estar íntimamente ligados con el delito, éste no hubiera podido tener ejecución. En tal concepto, es autor del robo el criado que abre la puerta al malhechor, ó le pone al corriente de los secretos de la caja en que su amo guarda caudales, aun cuando aquél no tome parte directa en la consumación material del delito.

¿Quiénes son *cómplices*?—Los que, no estando comprendidos en ninguno de los casos anteriores de delincuencia, cooperan á la ejecución del hecho por actos *anteriores* ó *simultáneos*, como el que facilita el arma, el veneno, la ganza, etc., para consumir un delito, sabiendo que aquéllos van destinados á este fin criminal.

Debe, pues, tenerse muy presente que la *complicidad* es *anterior* ó *simultánea* al delito; nunca *posterior* á la consumación de éste, por lo cual puede decirse que termina aquélla donde comienza el *encubrimiento*. También debe advertirse que para que la complicidad tenga existencia legal, debe manifestarse por hechos, y que por consiguiente, la no revelación de un tercero que tiene conocimiento exacto del proyecto criminal, no es motivo de complicidad, porque esa omisión es todo lo contrario de lo que la ley exige, que consiste en *actos anteriores* ó *simultáneos*.

¿Quiénes son *encubridores*?—Los que, con conocimiento de la comisión del delito, sin haber tenido participación en él como *autores* ni como *cómplices*, intervienen con posterioridad á su ejecución de alguno de los modos siguientes: 1.º, aprovechándose ó auxiliando el aprovechamiento de los efectos del crimen; 2.º, ocultando ó inutilizando el cuerpo, los efectos ó instrumento del delito, para impedir su descubrimiento; 3.º, albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: la de intervenir abuso de funciones

(1) Véase el apéndice á este tratado.

(2) Viada, Código penal comentado.

públicas, de parte del encubridor; la de ser el delincuente reo de traición, regicidio, parricidio, asesinato, ó reo conocidamente habitual de otro delito; 4.º, denegando el cabeza de familia á la autoridad judicial el permiso para entrar de noche en su domicilio, á fin de aprehender al delincuente que se hallare en él.

¿Qué encubrimiento declara no punible la ley?—El de los ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos ó afines en los mismos grados, siempre que no haya sido con aprovechamiento de los efectos del delito ó prestando auxilio al de los delincuentes.

¿La irresponsabilidad criminal lleva consigo la exención de la responsabilidad civil?—En algunos determinados casos.

En los señalados con los números 1.º, 2.º y 3.º de las circunstancias eximentes (1), son responsables civilmente, por los hechos que ejecutaren, el loco ó imbecil, y el menor de nueve años, ó el mayor de esta edad y menor de quince que no haya obrado con discernimiento, las personas que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

No habiendo persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legal, ó siendo aquélla insolvente, responderán con sus bienes los mismos locos, imbeciles ó menores, salvo el beneficio de competencia (2), en la forma que establezca la ley civil.

En el caso del número 7.º son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción del beneficio que hubieren reportado por el acto productor del daño causado al tercero.

Los tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada interesado deba responder cuando no sean equitativamente asignables, ni aun por aproximación, las cuotas respectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda al Estado ó á la mayor parte de una población; y en todo caso, siempre que el daño se hubiere causado con el asentimiento de la autoridad ó de sus agentes, se hará la indemnización en la forma que establezcan las leyes ó reglamentos especiales (3).

En el caso del número 10 responderán principalmente los que hubiesen causado el miedo, y subsidiariamente y en defecto de ellos, los que hubiesen ejecutado el hecho, salvo, respecto á éstos últimos, el beneficio de competencia antes indicado.

¿Quiénes son responsables civil y subsidiariamente, no siéndolo criminalmente?—Los posaderos, taberneros ó personas que estén al frente de establecimientos semejantes, por los delitos que se cometieren dentro de ellos, *si ha habido infracción de los reglamentos de policía*. Los primeros lo son de los efectos robados ó hurtados en las posadas, siempre que se pusiera en su conocimiento el depósito de aquellos efectos, y el robo no haya sido con violencia ó intimidación en las personas. Los amos, maestros, etc., son también responsables por los delitos ó faltas en que incurran sus dependientes *en el desempeño de su obligación ó servicio*. La responsabilidad subsidiaria de las empresas de ferro-carriles, se determina en la ley especial de policía de esas vías de comunicación.

(1) Véase la página 15.

(2) Consiste, por regla general, en la reserva de lo puramente necesario para poder vivir.

(3) No existen leyes ni reglamentos todavía, que regulen estas indemnizaciones.

Ideas generales sobre la pena, absoluta y jurídicamente considerada; sus caracteres; su naturaleza.

La palabra *pena* contiene las ideas de *sufrimiento* y de *privacion*. Su origen más elevado se encuentra en la conciencia universal, que proclama el principio de que todo aquél que ha infringido un precepto obligatorio, debe sufrir las consecuencias de la violacion, una de las cuales es el sufrimiento ó la *pena*. Por manera que la pena está intimamente unida al hecho anterior de la infraccion que la produce, el cual ha de consistir en una perturbacion del orden armónico, y es sólo aplicable al autor de ésta, quien encontrará en el remordimiento, en la tristeza, en el desaliento ó en el dolor físico, las consecuencias de la infraccion del precepto obligatorio, cuando lo ha infringido con libre voluntad; y no sólo serán un castigo para su culpa, sino un medio de regeneracion, de reparacion y de enmienda. En este sentido la pena «es la misma fuerza del orden, imponiéndose á la perturbacion,» segun los partidarios de la *teoría correccional* de la penalidad.

¿Constituye el mal, la esencia y carácter de toda pena?—Segun aquéllos no, porque en la pena encuentran el medio de volver el delincuente al camino de la virtud, á recobrar su honra y al cumplimiento del deber; lo cual, tan lejos de apreciarse como un mal, constituye un gran bien. Por eso dicen que tiene el delincuente *derecho á la pena*.

¿Cuáles son, pues, los caracteres de la pena en general?—1.º El nacer de un hecho anterior, opuesto á la ley. 2.º El consistir aquélla en un estado de privacion ó sufrimiento, que debe terminar con el restablecimiento del desórden ocasionado. 3.º El ser esencialmente buena, por su propia naturaleza.

Quando sobreviene espontánea, naturalmente, sin intervencion de la voluntad humana, se llama pena *natural*, como lo es el remordimiento; y cuando la impone un esfuerzo voluntario del hombre pena *jurídica*.

¿Cómo define la *pena jurídica* la escuela *correccional*, y cuáles son los caracteres ó notas de aquélla?—«El conjunto de condiciones exteriores y coactivas prestadas por el Estado, para que el derecho, que por aquel ha de hacerse efectivo, sea restaurado, cuando se perturbe por un delito.» Son sus caracteres ó notas: 1.º Que el hecho que dá origen á la pena sea un quebrantamiento voluntario del derecho. 2.º Que aquélla tienda al restablecimiento de éste. 3.º Que consista en un sufrimiento externo, y esencialmente coactivo.

Su razon ó causa está en el delito mismo que corrige, cuya perturbacion trata de hacer desaparecer, volviendo el derecho á su normalidad. Se castiga, pues, como ya decian los antiguos, *quia peccatum est*.

¿Cuál es, segun esta doctrina, el fin de la pena?—El restablecimiento del derecho, ó sea el mantenimiento del orden jurídico, perturbado por la violacion que constituye el delito. Si, por consiguiente, dicen los partidarios de esta teoría, la aplicacion de la pena presupone necesariamente la infraccion, cuando ménos comenzada, y manifestado su comienzo por actos externos, el llamado sistema *preventivo* es insostenible ante tales principios, lo cual no supone la inculpabilidad de ciertos actos preparatorios, cuando por sí solos, sin necesidad de la realizacion del fin criminal á que se dirigen, constituyen ya una perturbacion del derecho, y son materia de delito. Claro es que lo dicho antes no es aplicable á la prision preventiva, á las fianzas y cauciones procesales, porque éstas son meros trámites de procedimiento, y no verdaderas penas. El fin de la pena puede ser *mediato ó inmediato*, como veremos luego.

¿Qué medios aconseja esta escuela para conseguir el expresado fin de la pena?—No hay otro camino, dice, para llegar á la restauracion del de-

recho por la pena, que la *enmienda* del culpable, como exigencia y derecho del Estado y de la sociedad civil. No sólo ha de buscarse el restablecimiento de la ley perturbada en el caso dado del hecho concreto, sino el procurar y evitar que el agente perturbador vuelva á cometer nuevas violaciones, produciendo otros males. El sistema de la *vindicta pública* ó *privada*, no llena estos fines. El agente *pasivo* del delito podrá obtener reparación del mal *individual* que le han causado, pero ese mal, llamado por algunos de tercer orden, la alarma, que «no es otra cosa que la lesión del derecho sentida por quien no es víctima inmediata del crimen, por la certeza de ataques futuros y posibles,» y que es una perturbación del orden jurídico, no se consigue hacerla desaparecer, sin haber obtenido la imposibilidad de un nuevo desorden, igual ó semejante al anterior. Pues bien, dicen los sostenedores de esta teoría, esa imposibilidad ó se consigue con la muerte, la reclusión perpetua, ó la mutilación del delincuente, y hay que prodigarla y extenderla á todos los delitos, lo cual es absurdo é injusto, ó *corrigiendo*, enmendando, enderezando la voluntad del culpable, origen del acto perturbador, por medio de la pena. De aquí, á diferencia del concepto antiguo que dice que el criminal *se debe* á la pena, los modernos filósofos dicen que la pena *le es debida*, porque ella contiene condiciones necesarias para que aquél pueda curar su enferma voluntad.

¿Cuándo debe declararse cumplido el fin de la pena?—Como la pena *jurídica* supone una perturbación anterior *externa*, única que cae dentro del concepto jurídico del delito, tan pronto como el restablecimiento del orden perturbado se manifieste exteriormente, dicese que el fin, la corrección por la enmienda, están cumplidas, háyase ó no consumado plenamente la enmienda *moral*, que está fuera del círculo del orden jurídico.

¿Cuándo se cumple el fin *inmediato* y cuando el *mediato* de la pena?—El primero, desde el momento en que aquélla empieza á efectuarse; desde que ofrece al delincuente los medios para obtener la restauración jurídica, si persiste en aprovecharse de sus condiciones. El segundo tiene por objeto el cumplimiento del destino humano; esto es, la vuelta de su estado moral perturbado, á la observancia del deber, por los medios que le ofrece la pena.

¿Cuál debe ser la naturaleza de la pena?—El ser dependiente de la voluntad libre; ser buena en si misma; consistir en un sufrimiento; ó privación, pero no en un mal; y tener por fin, según unos, la expiación, según otros, la corrección del penado, y según algunos, ambas cosas combinadas.

¿Debe ser la pena un mal?—Según la escuela *absoluta* y las *eclecticas*, ésta es la idea más exacta de la pena, que aseguran ser la privación de un bien. Pero las escuelas modernas, y principalmente la que venimos reseñando, califican de error grave ese concepto de la pena, que creen ser la negación del mal ó sea la afirmación del bien mismo: la privación de libertad del culpado, dicen, que no sabe, y dada su situación no puede usar de ella en provecho suyo y de los demás, es un bien, y por eso puede encerrárselo, aislársele, imponérsele el trabajo como obligatorio, realizando de esta manera su derecho. Por el contrario, los primeros afirman como dogma de su escuela, que toda clase de males, cualquiera género de privaciones, son materias de la verdadera pena.

Distinguendo entre las ideas de mal y de sufrimiento ó privación, las dos escuelas parece que pueden conciliarse. La segunda admite la privación, el sufrimiento, y aun el dolor, como elemento accidental de la pena correccional; y bajo este supuesto, si, como acontece generalmente, á esto se le llama mal, conviene en que toda pena puede ser un mal. Pero si se emplea esta palabra en el sentido en que la usan y generalizan las escuelas contrarias, protesta contra tal aserción é inteligencia. El delito, añade, es el resultado del empleo abusivo é ilegítimo de la libertad de obrar, y no hay ninguna pena, cuya materia no sea la restricción de aquella

libertad, hasta que se efectúe la restauracion del derecho y de la voluntad del agente; y hé ahí lo que tiene la pena de *sufrimiento*, de privacion y de dolor, porque es innegable que el penado, antes de que sienta el consuelo del arrepentimiento, debe sufrir afliccion y experimentar sensaciones dolorosas al verse contrariado en todos sus propósitos y sus vicios censurables, que constituian su manera de vivir anteriormente, siendo el sufrir un bien apetecible y tranquilizador, despues de comenzado el arrepentimiento, el cual por medio de la afliccion, lleva al delincuente al fin de la correccion de su voluntad.

¿La expiacion debe ser fin de la pena?—La contestacion á esta pregunta varía, segun las teorías de la penalidad. Las escuelas *utilitarias* la admiten, en cuanto las penas sean útiles en su aplicacion, porque no ven la razon de la pena mas que en la utilidad del bien público ó particular. Los partidarios de la *justicia absoluta* contestan afirmativamente, porque entienden que «la pena no tiene fin alguno que llenar, ni en cuanto á la sociedad, ni en cuanto al culpable, y que debe imponerse, no por alcanzar ventaja alguna, ni con ningun propósito ó fin ulterior, sino por la sola razon de haber delinquido; esto es, para expiar el delito.»

La escuela *correcional* admite la idea de la *expiacion*, siempre que por tal se entienda la destruccion del mal ó la extincion de la parte pecaminosa é injusta del acto culpable, para conseguir la restauracion del derecho.

¿Debe considerarse la pena como un medio de *defensa* y de *prevencion*?—Unas escuelas sostienen que éste debe ser el único fin de la pena, sin tener para nada en cuenta, ó mirándola, cuando más, como accidental, la correccion del culpable. Buscan la conservacion del orden social en el modo y en la coaccion psíquica, empleando para ello medios sensibles. Otras, reconociendo como fin principal y preferente la enmienda del delincuente, admiten la prevencion como medio de defensa del orden jurídico, por el escarmiento, pero como propósito secundario. Dicen que las primeras escuelas no se inspiran mas que en el grosero principio de la utilidad y del interés de los ciudadanos, proclamando justas las desproporcionadas penas de la Ordenanza militar, dictadas solamente para conservar la disciplina, desatendiendo los derechos del penado. Y si la pena es para dichas escuelas un medio encaminado únicamente á producir la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos sin atender á la correccion y enmienda del culpable, la pena viene á ser la negacion del delito y la negacion de la pena misma, porque la idea de ésta presupone la comision de un hecho, perturbacion anterior del derecho, con cuya importancia debe guardar proporcion el castigo.

¿Tiene la pena el carácter de *tutela*?—Tambien se sostiene la afirmativa por la escuela *correcional*. La voluntad enferma es una forma en que se manifiesta la debilidad humana; y si la debilidad y la perturbacion del menor, del loco y del pródigo, dicen, tiene derecho á la *tutela* como institucion pública, y es deber del Estado, del mismo modo debe reconocerse igual derecho en el delincuente, á quien debe ampararse y dirigirse, poniéndole en condiciones de recobrar el estado jurídico en que vivía su alma antes del delito, lo cual puede conseguirse por la enmienda y la correccion. Y como la perturbacion causada por el delito, no sólo produce derecho en el delincuente á la restauracion del derecho perturbado en bien suyo, sino que afecta aquélla tambien á los ciudadanos, éstos tienen, como aquél, derecho á pedir que se le castigue y que se le eduque y corrija, para que no vuelva á perturbar con nuevos actos punibles el orden jurídico, que todos tienen el deber de conservar, y cuyas ventajas á todos alcanza.

¿Qué caracteres ó notas esenciales debe tener la pena?—Considerada en sí misma, y sin relacion al delito que castiga, debe ser buena, tutelar y restrictiva; tranquilizadora por la prevencion; *correcional* por la enmienda; externa y coactiva.

Además, las escuelas le asignan caracteres especiales, conformes con las teorías que sustentan. Las de la *justicia absoluta*, que sólo ven en el castigo un mal, exigen que la pena sea *aflictiva, física ó moralmente*: las de la *defensa, prevención y escurrimiento*, proclaman la circunstancia necesaria de la *ejemplaridad*; y las *eclecticas* se contentan con que no sea *infamante ni desmoralizadora*, pudiendo ser al mismo tiempo *expiatoria y correccional*.

Considerada la *pena* con relacion al delito, debe ser *pronta é ineludible*; principio de las escuelas absolutas; *temporal y remisible*, á juicio de otras, para poder acortarla ó alargarla, segun los progresos de la enmienda del culpable; y *personal*, esto es, limitada á la persona de aquél, en sus efectos *directos*.

Debe tambien ser *análoga* al delito, que quiere decir que la naturaleza y cualidades de aquélla sean como las de éste, ó iguales en su esencia; lo cual constituye la relacion *cualitativa* de la pena, que debe apreciarse estudiando profundamente la materia de los delitos, la causa, el origen y forma de su ejecucion, con violencia, con fraude ó sin estas circunstancias, y la naturaleza del derecho violado, para asignarles penas tambien más duras, más ó menos sensibles, y más adecuadas á la naturaleza de los hechos punibles y al mejor modo de conseguir la enmienda de los culpables.

La pena debe ser *proporcionada*, circunstancia que forma su relacion *cuantitativa* con el delito, debiendo ascender ó descender en duracion é intensidad, á medida que descienda ó ascienda la gravedad del crimen; y dentro de esa esfera de proporcion, segun que el agente haya ó no recorrido todas las situaciones ó estados que constituyen la *generacion ó proceso* del delito, y conforme al número, clase y entidad de las circunstancias modificativas de la imputabilidad, comprendiendo entre ellas la *reincidencia*, la *reiteracion*, la *acumulacion* de delitos y la *codelinquencia*, sin olvidarse tambien de la individualidad del penado, considerada en su edad, sexo, temperamento, educacion y posicion social.

Finalmente; debe ser *divisible*, es decir, susceptible de mayor ó menor desarrollo, sin lo cual no podria ser *proporcionada* al delito. Debe contener una flexibilidad tal que pueda aumentar ó disminuir el sufrimiento y la privacion, aunque no sea en cantidades de tiempo, sino en la naturaleza propia del sufrimiento, como la mayor ó menor dureza en el trabajo forzoso, combinado con la privacion de libertad.

¿Cuántos y cuáles son los elementos de la pena?—Tres, lo mismo que sucede con el delito: un sugeto *activo*, un sugeto *pasivo*, y la materia ó contenido de la misma. El Estado, entidad jurídica que la declara, la impone y la manda ejecutar, es el sugeto *activo*. Aquella persona á quien se impone, capaz de utilizar el medio de correccion en que consiste, es el sugeto *pasivo*. Y ese medio, ese conjunto de condiciones que ofrece el Estado al delincuente, que constituyen la privacion, el sufrimiento ó el dolor de aquél, forma la *materia* de la pena.

Segun las teorías modernas acerca del delito y de la pena, no es potestativo en el Estado el uso de la facultad de penar que le corresponde. Constituye un deber exigible por todos los asociados y hasta por el mismo delincuente. Y como consecuencia de esta doctrina, sus defensores niegan la justicia de la prerogativa de indulto inherente al supremo magistrado, cuyo ejercicio califican de violacion del derecho y de ataque al poder judicial, si bien reconocen que el atraso de la sociedad civil, lo defectuoso del sistema penitenciario y de la organizacion de Tribunales, aconsejan como conveniente, por ahora, la existencia de esa facultad discrecional (1).

¿Cuál debe ser la *materia* de toda pena?—Hemos dicho antes que, segun

(1) Esas razones, que tan elocuentes son, desgraciadamente para nosotros, hacen que sea no sólo conveniente, sino necesaria, en España, la prerogativa de indulto.

algunos filósofos, no todo *mal* podía ser materia de la pena, y que la escuela de la absoluta justicia afirmaba lo contrario. Si el hombre ha de cumplir su destino, todo lo que le impida volver restaurado á la sociedad, es contrario á la idea de la pena justa, en sentir de dicha escuela. Por eso claman contra las penas infamantes, la de muerte y las perpétuas; contra las que atacan totalmente la propiedad, como la confiscación; y pregonan las excelencias de la privación de libertad, como la base más aceptable y que mejores condiciones reúne, para conseguir el fin correccional de la pena, comprendiendo en esa ancha base el *destierro*, el *extrañamiento* y la *relegación*. Si á la privación de libertad se une la prohibición de ejercer algunos oficios ó profesiones, el trabajo forzoso y el aislamiento absoluto ó temporal, las ventajas de esa materia penal son indiscutibles.

También son, y deben ser objeto de la pena, la interdicción de derechos civiles y políticos, el comiso de ciertos instrumentos del crimen, la propiedad del delincuente, pero sólo en cuanto á su administración temporal, y á la pérdida de una pequeña parte, como se realiza en las multas, para penar hechos de poca gravedad.

El sufrimiento *corporal*, sin más fin que el de atormentar al culpable, como castigo expiatorio, no lo admiten las ideas modernas sobre la penalidad. Por eso condenan los azotes, los grillos, las cadenas, los trabajos excesivos y perjudiciales á la salud, el látigo y la vara, para cuyo empleo no hay derecho, como elementos de la pena. Sólo se admitirán, en casos extremos, para la seguridad del penado, los grillos y las cadenas, cuando no bastan las condiciones de los establecimientos y los medios reglamentarios de los mismos. Pero el dolor físico, debido al trabajo, á la privación de goces, al alejamiento de anteriores comodidades, al cambio de traje y á la ausencia del bienestar perdido, tan lejos de proscribirse, es uno de los medios de corrección que, unido á la coartación de la libertad, la ciencia admite, cree necesario y ensalza sus excelencias.

Añádase á esto, dicen los tratadistas, la instrucción que debe facilitarse, al penado, en cuanto pueda ser, por medio de la enseñanza de un arte ú oficio, y de máximas morales y religiosas, generalmente á cargo de sociedades benéficas que tienen entrada en los establecimientos correccionales, y la pena será justa, y cumplirá los fines para que se impone, castigando, corrigiendo, enmendando y consiguiendo así el restablecimiento del orden jurídico perturbado por el penado con la comisión del delito.

¿Qué circunstancias puramente accidentales deben buscarse en las penas, para que produzcan mejores efectos?—Su duración; el lugar de su cumplimiento ó ejecución; la cuantía en las pecuniarias; el régimen más ó menos severo y duro del establecimiento, relativamente al trabajo, en público ó privadamente, voluntario, elegible ó forzoso y exclusivo, y á la distribución de las utilidades; y en fin, otras circunstancias de más detalle, nacidas de los antecedentes de los penados y de las prescripciones reglamentarias de las cárceles y casas de corrección.

De las penas segun las doctrinas del código vigente (1).

¿Qué es *pena*?—En sentido absoluto, es la privación de un bien. Puede definirse más concretamente diciendo que es «el padecimiento que la sociedad impone al que comete un delito ó falta». Puede ser *temporal* ó *perpétua*, segun su duración.

(1) Ténganse presentes las ideas y contradictorias opiniones que acerca de la pena y sus notas quedan ligeramente apuntadas en el capítulo anterior, debiendo advertir que en este lugar exponemos las teorías en que se inspiraron los autores de nuestro código, sus reformadores y más conocidos comentaristas.

¿Cuál es el fin de las penas?—La proteccion y conservacion de los derechos sociales, el castigo de los delitos, y la enmienda de los penados.

¿Cuáles son sus efectos?—La *prevencion*, el *ejemplo* y la *reparacion* del daño causado. Previenen nuevos delitos, moralizan al delincuente é indemnizan al perjudicado.

¿Qué requisitos deben tener las penas?—Deben ser *legítimas*, esto es, conformes con la ley penal; *morales*, para que influyan en el porvenir del penado; *divisibles* en intensidad y extension, para que guarden relacion con la gravedad del delito; *ciertas*, esto es, sentidas por el delincuente, y no ilusorias; *proporcionadas* al grado de criminalidad de aquél; *reparables*, ó lo que es lo mismo, susceptibles de que el mal que ocasionan sea compensable; *análogas* y semejantes en lo posible al delito que castigan; *ejemplares*, para el pueblo que las vé y teme sus padecimientos, y *correctivas*, consistiendo en males y privaciones que tiendan á perfeccionar la extraviada inteligencia del reo, á fin de conseguir que salga de la prision convertido en un buen ciudadano.

¿Son estos requisitos *indispensables*?—No: La *moralidad*, la *proporcion* y la *ejemplaridad*, son *esenciales*; los demas son *apetecibles*. Para las escuelas modernas, la enmienda y la correccion del penado es el principal y preferente requisito que debe tener la pena, como dejamos dicho.

¿Qué reglas suelen establecer los autores para obtener la proporcion de las penas?—Las siguientes: 1.^a, la gravedad de la pena debe estar en relacion directa con la gravedad del delito; 2.^a, el mal constituyente de la pena debe exceder al beneficio reportado por el delito; 3.^a, el mal de la pena debe guardar relacion con la escala de moralidad de la accion punible, para dejar abierta al delincuente la puerta del remordimiento y la suspension de la ejecucion de aquélla; 4.^a, la intervencion de varias personas en un delito debe ser castigada con diferentes penas, segun la importancia de sus actos. De esto se infiere el eclecticismo de los comentaristas que aceptan estas reglas.

¿Qué otras circunstancias deben concurrir en la *pena*?—Debe hallarse establecida previamente por la ley, antes de la perpetracion del delito ó comision de la falta que trate de corregirse, y ser impuesta por una sentencia firme, sin lo cual no son *legales* las penas ni exigibles justamente.

¿Tiene efecto retroactivo la ley penal?—Siempre que por ella se mitigue el rigor de la penalidad existente, aunque al publicarse aquella hubiere recaido sentencia firme condenatoria, y el penado estuviere cumpliendo la condena (1).

¿Qué efecto produce el perdon de la parte ofendida?—El código establece terminantemente que no extingue la accion *penal*, limitandose á extinguir la responsabilidad *civil*, en cuanto al interés del condonante, si éste lo renuncia *expresamente*, siempre que tenga capacidad para ello conforme á la ley civil. La administracion de justicia en los tiempos modernos es cuestion de orden público, que sólo puede dispensar el castigo en los delitos contra la honestidad y el honor de las personas. Por eso añade el código que, lo expuesto anteriormente, no se entiende respecto á los delitos que no pueden ser perseguidos sin previa denuncia ó consentimiento del agraviado, como el estupro, la injuria y la calumnia. Tambien hay faltas que no pueden perseguirse sino á instancia de la parte ofendida; los malos tratamientos del marido á la mujer, la desobediencia de ésta á aquél, la falta de respeto de los hijos y de los menores para con sus padres y guardadores, y las injurias leves, pertenecen á esta clase. (2)

(1) Véase el decreto de 17 de Setiembre de 1870 en que se dictaron reglas para la aplicacion del art. 23 del Código, en el cual se establece la retroactividad de sus efectos.

(2) Art. 24 del Código y 5.^o de la Ley de Enjuiciamiento eriminal.

¿Existen penas *infamantes* en la legislación vigente?—El código declara no reconocer pena alguna infamante; mas como quiera que la infamia es inherente á la naturaleza de ciertas penas, por más que el código antiguo se obstinaba en no reconocerlas, no puede dejar de confesarse que lo eran la de *argolla* y la de *degradacion*, aun cuando se repita que el delito es lo que infama y no la pena. La primera ha sido suprimida por la reforma última (1).

¿Qué inconvenientes se atribuyen á las penas *infamantes*?—Su ineficacia y la separacion que establecen entre los conciudadanos y el penado, á quien no basta el remordimiento y correccion más plenamente justificadas para que la sociedad le reciba con benevolencia y conmiseracion. Condénalas la ciencia moderna, porque si el fin preferente de la pena ha de ser la enmienda y correccion del culpable, nada puede hacer más difícil esa aspiracion, y nada se opone más á conseguirla, que la infamia que imprimen las penas que tienen esa cruel, ilegítima, inconveniente é injusta cualidad.

¿Cómo se clasifican las penas en el código?—En *aflictivas*, *correccionales* y *leves*; *principales* y *accesorias*; *divisibles* é *indivisibles*. Son *aflictivas* las destinadas al castigo de los delitos *graves*; *correccionales* aquéllas con que se castigan los delitos *ménos graves*; y *leves* las que penan las *faltas*. Llámense *principales* las que pueden imponerse con independencia de otras, y *accesorias* las que van anejas siempre á las principales. El código establece la siguiente escala general de penas, únicas que pueden imponerse.

PENAS AFLICTIVAS.

Muerte.

Cadena perpétua.

Reclusion perpétua.

Relegacion perpétua.

Extrañamiento perpétuo.

Cadena temporal.

Reclusion temporal.

Relegacion temporal.

Extrañamiento temporal.

Presidio mayor.

Prision mayor.

Confinamiento.

Inhabilitacion absoluta perpétua.

Inhabilitacion absoluta temporal.

Inhabilitacion especial per-

pétua. (Para cargo público, derecho de sufragio ac-

Inhabilitacion especial tem-

poral. tivo y pasivo, profesion ú oficio.

PENAS CORRECCIONALES.

Presidio correccional.

Prision correccional.

Destierro.

Reprension pública.

Suspension de cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesion ú oficio.

Arresto mayor.

(1) Ley de 18 de Junio de 1870, art. 3.º

PENAS LEVES.

Arresto menor.
Represión privada.

PENAS COMUNES Á LAS TRES CLASES ANTERIORES.

Multa.
Caucion.

PENAS ACCESORIAS.

Argolla (1).
Degradación.
Interdicción civil.
Pérdida ó comiso de los instrumentos y efectos del delito.
Resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio.
Pago de costas procesales.

¿Qué otra división puede hacerse de las penas?—Pueden clasificarse también en ocho grupos: 1.º, muerte; 2.º, privación de libertad con trabajo forzoso; 3.º, privación de libertad sin trabajo; 4.º, limitación de libertad; 5.º, privación de derechos; 6.º, represión; 7.º, caución; 8.º, penas pecuniarias.

¿Qué penas comprende el segundo grupo?—La *cadena*, la *reclusión* y el *presidio*.

¿Cuáles comprende el tercero?—La *prisión* y el *arresto mayor*.

¿Cuáles pertenecen al cuarto?—La *relegación*, el *extrañamiento*, el *confinamiento*, y el *destierro*.

¿Cuáles al quinto?—La *inhabilitación* y la *suspensión*.

¿Cuáles al sexto?—La *represión pública y privada*.

¿Cuáles al octavo? La *multa*, la *pérdida de los instrumentos y efectos del delito* y el *resarcimiento de las costas procesales*. La *degradación* puede considerarse como pena especial.

¿Qué coacciones ó limitaciones no son penas?—1.º, la *detención* y la *prisión provisional* de los procesados; 2.º, la *suspensión de empleo ó cargo público*, acordada durante el proceso ó para instruirlo; 3.º, las *multas* y demás *correcciones* que en uso de las facultades gubernativas ó disciplinarias impongan los superiores á sus subordinados ó administrados; 4.º, las *privaciones de derechos* y las *reparaciones* que, en forma penal, establezcan las leyes civiles.

¿Qué flexibilidad especial tienen las penas pecuniarias?—La *multa*, cuando se impusiere como pena principal, se reputará *aflictiva* si excediere de 2 500 pesetas; *correccional* si no excediere de 2 500 y no bajare de 425, y *leve* si no llegare á 425 pesetas.

Las penas de *inhabilitación* y *suspensión* para cargos públicos y derecho de sufragio, son *accesorias* en los casos en que, no imponiéndolas especialmente la ley, declara que otras penas las llevan consigo. Las *costas procesales* se entienden impuestas por la ley á los criminalmente responsables de todo delito ó falta.

¿Cuáles son las penas *divisibles*?—Las que son susceptibles de mayor ó menor duración, como la *cadena*, el *presidio*; é *indivisibles* las que no son susceptibles de división en el tiempo, como la de *muerte* y las *perpétuas*.

¿Cómo se subdividen las *divisibles*?—En tres grados: *mínimo*, *medio* y *máximo*, entre los que se distribuye igualmente el tiempo de duración de la pena.

(1) Esta pena fué suprimida en 1870, y desaparecerá de la escala general en la nueva edición del Código.

TABLA DEMOSTRATIVA

DE LA

DURACION DE LAS PENAS DIVISIBLES Y DEL TIEMPO QUE ABRAZA CADA UNO DE SUS GRADOS.

PENAS.	TIEMPO QUE comprende toda la pena.	TIEMPO QUE comprende el grado mínimo	TIEMPO QUE comprende el grado medio.	TIEMPO QUE comprende el grado máximo.
Cadena, reclusion, relegacion y extranamiento temporales.....	De 12 años y un día, á 20 años.	De 12 años y un día, á 14 años y 8 meses.	De 14 años, 8 meses y un día, á 17 años y 4 meses	De 17 años, 4 meses y un día, á 20 años.
Presidio y prision mayores y confinamiento.....	De 6 años y un día, á 12 años.	De 6 años y un día, á 8 años.	De 8 años y un día, á 10 años.	De 10 años y un día, á 12 años.
Inhabilitacion absoluta é inhabilitacion especial temporal.....	De 6 meses y un día, á 6 años.	De 6 meses y un día, á 2 años y 4 meses.	De 2 años, 4 meses y un día, á 4 años y 2 meses	De 4 años, 2 meses y un día, á 6 años.
La de presidio, prision correccional y destierro.....	De un mes y un día, á 6 años.	De uno mes y un día, á 2 años.	De 2 años y un día, á 4 años.	De 4 años y un día, á 6 años.
La de suspension.....	De un mes y un día, á 6 meses.	De uno, á 2 meses.	De 2 meses y un día, á 4 meses.	De 4 meses y un día, á 6 meses.
La de arresto mayor.....	De uno, á 30 dias.	De uno, á 10 dias.	De 11, á 20 dias.	De 21, á 30 dias.
La de arresto menor.....				

¿Cuándo comienza á contarse el tiempo de duracion de la pena, y cuándo procede su indulto?—Hay que atender á la situacion del penado. Cuando el reo estuviere preso, la duracion de las penas temporales empezará á contarse desde el día en que la sentencia condenatoria hubiere quedado firme, entendiéndose por tal aquélla contra la cual no se dá ningun recurso, bien porque no exista, bien porque se haya consentido el fallo. Cuando el reo no estuviere preso, la duracion de las penas que consistan en privacion de libertad, empezará á contarse desde que aquél se halle á disposicion de la autoridad judicial para cumplir su condena. La duracion de las penas de extrañamiento, confinamiento y destierro no empezará á contarse sino desde el día en que el reo hubiere empezado á cumplirlas, que será para las dos primeras, el en que quede á disposicion de la autoridad gubernativa, y en la tercera, el en que salga del punto del cual es desterrado. Cuando el reo entablare recurso de casacion, y fuere desechado, no se le abonará en la pena el tiempo trascurrido desde la sentencia de que recurrió hasta la sentencia que desechó el recurso, porque el trascurso de ese tiempo á él es imputable exclusivamente.

Los condenados á las penas perpétuas *serán* indultados á los treinta años de cumplimiento de la condena, á no ser que por su conducta ó por otras circunstancias graves, no fuesen dignos del indulto, á juicio del gobierno. Así se minorará el rigor inexorable de la perpetuidad de las penas por medio del indulto en favor del penado que, por su buen comportamiento, se hace acreedor á esta gracia, no aplicable al incorregible y al perverso. El principio de la perpetuidad continúa todavía, pero puede convertirse en temporal, aplicando la régia prerogativa.

Las penas de cadena, reclusion, relegacion y extrañamiento temporales durarán de doce años y un día á veinte años. Las de presidio y prision mayores y la de confinamiento, durarán de seis años y un día á doce años. Las de inhabilitacion absoluta é inhabilitacion especial temporales durarán de seis años y un día á doce años. Las de presidio y prision correccionales y destierro durarán de seis meses y un día á seis años. La de suspension durará de un mes y un día á seis años. La de arresto menor durará de uno á treinta días. La de caucion durará el tiempo que determinen los tribunales. (Téngase presente el cuadro anterior.)

Efectos concretos de las penas: penas accesorias.

¿Qué efectos producen las penas de inhabilitacion *absoluta perpétua y absoluta temporal*?—La primera produce: 1.º, la privacion de todos los honores y de los cargos y empleos públicos que tuviere el penado, aunque sean de eleccion popular; 2.º, la privacion de todos los derechos políticos activos y pasivos; 3.º, la incapacidad para obtener los cargos, empleos, derechos y honores mencionados; 4.º, la pérdida de todo derecho á jubilacion, cesantía ú otra pension por los empleos que hubiere servido con anterioridad, sin perjuicio de la alimenticia, que el gobierno podrá concederle por servicios eminentes. No se comprenden en esta disposicion los derechos ya adquiridos, al tiempo de la condena, por la viuda ó hijos del penado. La pena de inhabilitacion *absoluta temporal* para cargos públicos ó derechos políticos, produce en el penado: 1.º, la privacion de todos los honores y de los empleos y cargos públicos, aunque sean de eleccion popular; 2.º, la privacion de todos los derechos políticos activos y pasivos, durante el tiempo de la condena; 3.º, la incapacidad para obtener los empleos, cargos, derechos y honores mencionados, también por el tiempo de la condena.

¿Qué efectos producen la inhabilitacion *especial perpétua y temporal*?—La inhabilitacion *especial perpétua* para cargos públicos produce: 1.º, la privacion del cargo ó empleo sobre que recae, y de los honores anejos á él; 2.º,

la incapacidad de obtener otros análogos. La inhabilitacion especial *perpétua* para el derecho de *sufragio* priva perpétuamente de la capacidad para ejercerlo. La inhabilitacion *especial temporal* para el referido derecho produce la incapacidad para ejercerlo por el tiempo de la condena. La inhabilitacion perpétua especial para profesion ú oficio, privará al penado perpétuamente de la facultad de ejercerlos. La temporal le privará del mismo modo por el tiempo de la condena.

¿Qué efectos produce la *suspension*?—La suspension de un cargo público inhabilita para su ejercicio y para obtener otro análogo por el tiempo de la condena. La suspension de derechos políticos inhabilita igualmente para su ejercicio durante el tiempo indicado. La suspension de profesion ú oficio produce los mismos efectos que la inhabilitacion temporal durante el referido tiempo.

¿Comprenden estas dos últimas penas los cargos y derechos de los eclesiásticos?—No: quedan limitados sus efectos, en cuanto á éstos, á los que no tengan por la Iglesia, y á la asignacion que tuvierien derecho á percibir por su cargo eclesiástico, quedando reservado á la autoridad eclesiástica lo que creyere conveniente acordar en cuanto á los cargos de su jurisdiccion.

¿En qué consiste la *interdiccion civil* y cuáles son sus efectos?—Consiste en la privacion, mientras la estuviere sufriendo el penado, de los derechos de patria potestad, tutela, curaduría, y participacion en el consejo de familia; de la autoridad marital, de la administracion de bienes y del derecho de disponer de los propios, por actos entre vivos. Exceptúanse los casos en que la ley limita determinadamente sus efectos. Así vemos que al penado soltero emancipado, y al casado divorciado, se le nombrará curador, para administrar sus bienes; y que si no estuviere divorciado, corresponderá la administracion á la mujer, á quien se le nombrará curador, si fuere menor, prefiriendo los ascendientes para este cargo: que los bienes del penado no podrán enajenarse ni gravarse, sin las formalidades de ley: pudiendo la mujer, mayor de edad, disponer de los suyos libremente, y que los hijos del penado menores de edad, quedan sujetos al poder de la madre, y en su defecto á la del curador nombrado para el padre. La interdiccion civil suspende los cargos de guardador y de administrador de bienes ajenos (4).

¿Qué obligaciones imponia la abolida pena de *sujecion á la vigilancia de la autoridad*?—Producia en el penado las siguientes: 1.^a, fijar su domicilio y dar cuenta de él á la autoridad inmediatamente encargada de su vigilancia, no pudiendo cambiarlo sin conocimiento y permiso de la misma autoridad, dado por escrito; 2.^a, observar las reglas de inspeccion que aquella le prefijase; 3.^a, adoptar oficio, arte, industria ó profesion, si no tuviere medios propios ó conocidos de subsistencia. Esta pena ha sido suprimida en la reforma del código hecha en 1870.

¿En qué consiste la *caucion*?—En presentar el penado un fiador abonado que responda de que aquél no ejecutará el mal que se trate de precaver, y se obligue á satisfacer, si lo causare, la cantidad que haya fijado el tribunal en la sentencia, quien determinará, segun su prudente arbitrio, la duracion de la fianza. Si no la diere el penado, incurrirá en la pena de destierro.

¿Qué gastos comprenden las *costas procesales*?—Los derechos é indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, ya consistan en cantidades fijas ó inalterables, por hallarse anticipadamente determinadas por las leyes, reglamentos ó reales órdenes, ya no estén sujetas á arancel. Comprenden, pues, las costas; el reintegro del papel sellado; los derechos de arancel; los honorarios de los abogados y peritos y las indemnizaciones reclamadas por los testigos (2). Lo antiguos *gastos* llamados del juicio en el código de 1850, forman parte de las costas procesales.

(1) Ley de 27 de Junio de 1870.

(2) Artículos 120 y 121 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

¿Qué preferencia establece el código para la efectividad pecuniaria?—En el caso de que los bienes del penado no fueren bastantes á cubrir todas las responsabilidades, se satisfarán por el órden siguiente: 1.º la reparacion del daño causado é indemnizacion de perjuicios; 2.º la indemnizacion al Estado por el importe del papel sellado y demás gastos que se hubiesen hecho por su cuenta en la causa; 3.º las costas del acusador privado; 4.º las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados; 5.º la multa. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse á instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia á la indemnizacion del Estado.

¿Qué reglas deben seguirse en caso de insolvencia de los penados?—Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer las responsabilidades pecuniarias comprendidas en los números 1.º, 3.º y 5.º del párrafo anterior, quedará sujeto á una responsabilidad personal subsidiaria, á razon de un dia por cada cinco pesetas, con sujecion á las reglas siguientes: *primera*, cuando la pena principal impuesta se hubiere de cumplir por el reo encerrado en un establecimiento penal, continuará en el mismo, sin que pueda exceder esta detencion de la tercera parte del tiempo de la condena, y en ningun caso de un año; *segunda*, cuando la pena principal impuesta no se hubiere de cumplir por el reo encerrado en un establecimiento penal y tuviere fijada su duracion, continuará sujeto por el tiempo señalado en la regla anterior, á las mismas privaciones en que consista dicha pena; *tercera*, cuando la pena principal impuesta fuere la de reprension, multa ó caucion, el reo insolvente sufrirá en la cárcel de partido una detencion, que no podrá exceder, en ningun caso, de seis meses cuando se hubiese procedido por razon de delito, ni de quince dias cuando hubiese sido por falta.

¿A qué penas no alcanza la responsabilidad personal subsidiaria por insolvencia?—A las *aflictivas*, puesto que no se impondrá aquélla al condenado á pena superior, en la escala general, á la de *presidio correccional*.

¿La responsabilidad personal que hubiese sufrido el reo por insolvencia, le exime de toda responsabilidad civil ulterior?—No; queda sujeto á la reparacion del daño causado y de la indemnizacion de perjuicios, si llegare á mejorar de fortuna, cuya obligacion se extinguirá con arreglo á las prescripciones del derecho civil; pero queda exento de las demás responsabilidades pecuniarias comprendidas en las reglas 3.ª y 5.ª

¿Qué penas son accesorias de la de *muerte*, cuando es conmutada por indulto?—La de inhabilitacion absoluta perpétua, si no se hubiese remitido especialmente en el indulto concedido.

¿Qué accesorias tiene la de *cadena perpétua*?—1.ª la *degradacion*, en el caso de que dicha pena principal fuere impuesta á un empleado público por abuso cometido en el ejercicio de su cargo, y éste fuere de los que confieren carácter permanente; 2.ª la *interdicion civil*. Aunque el condenado obtuviere indulto de la pena principal, sufrirá la de inhabilitacion perpétua absoluta, si no se hubiere remitido esta pena accesoría en el indulto de la principal.

¿Cuáles corresponden á la *reclusion*, *relegacion* y *extrañamiento perpétuos*?—La de inhabilitacion perpétua absoluta, cuya pena sufrirá el condenado, aunque se le hubiere indultado de la principal, si en el indulto no se le hubiere remitido aquélla expresamente.

Las penas de *relegacion perpétua* y *extrañamiento perpétuo* llevarán consigo la misma accesoría que la *reclusion perpétua*.

¿Cuáles son accesorias de la *cadena temporal*?—La *interdicion civil* del penado durante la condena, y la inhabilitacion absoluta perpétua.

¿Cuáles tiene el *presidio mayor*?—La de inhabilitacion absoluta temporal en toda su extension.

¿Cuáles son accesorias del *presidio correccional*, de la *reclusion*, *relega-*

ción y extrañamiento temporales?—La suspensión de todo cargo público, profesión, oficio ó derecho de sufragio, y la inhabilitación absoluta temporal en toda su extensión.

¿Cuáles del confinamiento, prision mayor y correccional?—La de inhabilitación absoluta temporal durante el tiempo de la condena y la de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio por dicho tiempo.

¿Qué debe de hacerse con los efectos é instrumentos del delito?—Unos y otros caen en comiso, á no ser que pertenezcan á un tercero irresponsable, á quien deben entregarse. Los que se decomisaren se venderán si son de lícito comercio, aplicándose su producto á cubrir las responsabilidades del penado, guardando la preferencia establecida para el pago de costas, que hemos enumerado antes, y se inutilizarán si son ilícitos.

De la aplicacion de las penas.

¿Qué debe tenerse presente para la aplicacion de las penas?—La naturaleza del hecho, sus accidentes y el grado de criminalidad de los delinquentes; esto es, si son *autores, cómplices ó encubridores*; si el delito es *consumado, frustrado, tentativa*; mera *proposicion ó conspiracion*, y si han ocurrido circunstancias *atenuantes ó agravantes*.

¿Qué pena corresponde á los autores, cómplices y encubridores?—Varía, segun que el delito sea *consumado, frustrado ó tentativa*, como vamos á exponer, siguiendo las reglas del código.

A los autores de un delito *frustrado*, se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la Ley para el delito consumado. La misma regla se observará respecto á los autores de las faltas *frustradas* contra las personas ó la propiedad.

A los autores de *tentativa* de delito, se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la Ley para el delito consumado.

A los *cómplices* de un delito consumado, se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la Ley para el delito.

A los *encubridores* de un delito consumado, se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la Ley para el mismo.

A los *cómplices* de un delito frustrado, se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la Ley para aquél.

A los *encubridores* de un delito frustrado, se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la Ley para el expresado hecho.

A los *cómplices* de tentativa de delito, se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la Ley para la tentativa penada.

A los *encubridores* de tentativa de delito, se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la Ley para la misma.

A los *encubridores* que, siendo funcionarios públicos, abusaren de sus funciones albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al culpable, sólo se les impondrá la pena de inhabilitación perpétua especial, si el delincuente encubierto fuere reo de delito grave, y la de inhabilitación especial temporal, si lo fuere de delito ménos grave.

La penalidad indicada en la pregunta y párrafos anteriores, no se aplicará cuando los casos se hallen especialmente penados por la Ley.

¿Qué reglas han de observarse cuando el delito ejecutado fuere distinto del que se habia propuesto ejecutar el culpable?—Antes de exponerlas conviene advertir que debe constar determinada y ciertamente el delito que se propuso cometer, y entonces se aplicarán las siguientes: 1.^a, si el ejecutado tuviere pena mayor, se impondrá la pena del que se habia propuesto ejecutar en su grado máximo; 2.^a, si el primero la tuviere menor, se impondrá la de aquél en su grado máximo; 3.^a, si los actos ejecutados constitu-

yeren tentativa ó frustracion de otro delito, penadas con mayor pena, se impondrá la correspondiente á aquéllos, tambien en su grado máximo.

¿Qué reglas deben observarse en la aplicacion práctica de la penalidad?—Para graduar las penas que deben imponerse á los autores del delito frustrado ó tentativa, y á los cómplices y encubridores, se observarán las siguientes: 1.^a, cuando la pena señalada al delito fuere una sola é indivisible, la inmediatamente inferior será la que siga en número, en la escala gradual respectiva, á la pena indivisible; 2.^a, cuando la pena señalada al delito se componga de dos penas indivisibles ó de una ó más divisibles, impuestas en toda su extension, será inmediatamente inferior la que siga en número en la escala gradual respectiva á la menor de las penas impuestas; 3.^a, cuando la pena señalada al delito se componga de una ó dos indivisibles y del grado máximo de otra divisible, la pena inmediatamente inferior se compondrá de los grados medio y mínimo de la propia pena divisible y del máximo de la que la siga en número en la respectiva escala gradual; 4.^a, cuando la pena señalada al delito se componga de varios grados, correspondientes á diversas penas divisibles, la inmediatamente inferior se compondrá del grado que siga al mínimo de los que constituyan la pena impuesta y de los otros dos más inmediatos que se tomarán de la propia pena impuesta, si los hubiere, y en otro caso, de la pena que siga en número en la respectiva escala gradual; 5.^a, cuando la Ley señalare la pena al delito en una forma especialmente no prevista en las cuatro reglas anteriores, los tribunales, procediendo *por analogia*, aplicarán las penas correspondientes á los autores de delito frustrado y tentativa, y á los cómplices y encubridores.

La analogia consiste, segun doctrina del Tribunal Supremo, en que la pena suba ó descienda, en la misma forma y proporcion en que está establecida (1) para el delito determinado, que sirve de tipo regulador.

Cuando la pena señalada á aquél estuviere incluida en dos escalas, se hará la gradacion prevenida anteriormente por la escala que comprenda las penas con que estén castigados la mayor parte de los delitos (2) de igual naturaleza.

¿Son aplicables á las faltas las reglas anteriores?—No; la *complicidad* de éstas debe ser castigada con el grado *mínimo* de la pena correspondiente á los autores; y el *encubrimiento*, aunque nada dice acerca de él el código, segun opinion de los comentaristas, debe ser penado con el grado inferior al correspondiente á la complicidad, como si se tratara de un delito.

¿Qué efectos producen las circunstancias *atenuantes* y *agravantes* en la determinacion de la pena?—La disminuyen ó la aumentan en la forma que luego se dirá, porque, como dicho queda al tratar de las causas que modifican la imputabilidad de los delinquentes, originan un estado excepcional en el ánimo del agente activo del crimen.

Las *agravantes*, que por sí mismas constituyan un delito especialmente penado, como sucede con la premeditacion en las falsedades, el fraude en las estafas y el abuso de confianza en el hurto doméstico, ó que la Ley haya expresado al describirlo, como la alevosia y la premeditacion en el asesinato, y el escalamiento en el robo, no aumentan la penalidad. En igual

(1) Sentencia de 25 de Junio de 1874.

(2) Varios jurisconsultos han llenado los vacíos del código, estableciendo reglas para los distintos casos que puede ofrecer la práctica, siendo uno de los más completos el del señor Vicente y Carabantes, que insertamos en el apéndice.

caso se encuentran las que son de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no pudiera cometerse; lo cual sucede con el abuso de superioridad, y el desprecio al respeto que por su sexo merece la mujer, cuando es ésta la víctima del atentado, y la primera consideración y la de poco respeto á la edad, en el *infanticidio*.

Las de una y otra clase que consintieren en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido, ó en otra causa personal, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad sólo de aquellos *autores, cómplices ó encubridores* en quienes concurrieren. Por eso la embriaguez únicamente favorecerá al beodo, mas no á sus códelincuentes; el parentesco, sólo afectará al pariente y no á sus compañeros, y la edad al menor y no á los demás reos.

Las que consistieren en la ejecución material del hecho ó en los medios empleados para realizarlo, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad, exclusivamente, de los que tuvieron conocimiento de ellas en el momento de la acción ó de su cooperación para el delito. El ensañamiento, por ejemplo, cuando no entra en el proyecto criminal, no puede agravar la responsabilidad del que no tenía de él conocimiento, ni lo había consentido.

¿Qué reglas deben observarse para la aplicación de las penas, atendidas las circunstancias expresadas?—Varias, según la naturaleza de aquéllas. En los casos en que la ley señale una sola pena *indivisible*, la aplicarán los tribunales sin consideración á las circunstancias atenuantes ó agravantes que concurran en el hecho.

En los casos en que la ley señale una pena compuesta de dos *indivisibles*, se observarán para su aplicación las siguientes reglas: 1.^a, cuando en el hecho hubiere concurrido sólo alguna circunstancia agravante, se aplicará la pena mayor; 2.^a, cuando en el hecho no hubieren concurrido circunstancias atenuantes ni agravantes, se aplicará la pena menor; 3.^a, cuando en el hecho hubiere concurrido alguna circunstancia atenuante y ninguna agravante, se aplicará la pena menor, y 4.^a, cuando en el hecho hubieren concurrido circunstancias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente por su número ó importancia los tribunales, para aplicar la pena á tenor de las reglas precedentes, según el resultado que diere la compensación.

En los casos en que la pena señalada por la ley contenga tres grados, bien sea una sola pena *divisible*, bien sea compuesta de tres distintas, cada una de las cuales forma un grado, los tribunales observarán para la aplicación de la pena, según haya ó no circunstancias atenuantes ó agravantes, las reglas siguientes: 1.^a, cuando en el hecho no concurrieren circunstancias agravantes ni atenuantes, impondrán la pena señalada por la ley en su grado medio; 2.^a, cuando concurriere sólo alguna circunstancia atenuante, la impondrán en el grado mínimo; 3.^a, cuando concurriere sólo alguna circunstancia agravante, la impondrán en el grado máximo; 4.^a, cuando concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente para la designación de la pena, graduando el valor de unas y otras; 5.^a, cuando sean dos ó más y *muy calificadas* las circunstancias atenuantes, y no concorra ninguna agravante, los tribunales impondrán la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley en el grado que estimen correspondiente, según el número y entidad de dichas circunstancias; 6.^a, cualquiera que sea el número y entidad de las circunstancias agravantes, los tribunales no podrán imponer pena mayor que la designada por la ley en su grado máximo, y 7.^a, dentro de los límites de cada grado, los tribunales determinarán la cuantía de la pena, en consideración al número y entidad de las circunstancias agravantes y atenuantes y á la mayor ó menor extensión del mal producido por el delito.

En los casos en que la pena señalada por la ley no se componga de

tres grados, los tribunales aplicarán las reglas contenidas en el párrafo anterior, dividiendo en tres periodos iguales el tiempo que comprenda la pena impuesta, formando un grado de cada uno de los tres periodos.

En la aplicacion de las *multas*, los tribunales podrán recorrer toda la extension en que la ley permita imponerlas, consultando, para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente, el caudal ó facultades del culpable. Así puede realizarse, como dice un discreto comentarista (1), la verdadera igualdad, que consiste en este caso, quizás más que en ningun otro, en tratar *desigualmente* á los que la fortuna *desigualó*.

¿Que efecto produce para la pena la menor edad del delincuente?—La rebaja del castigo en la forma siguiente: al menor de quince años, mayor de nueve, que no esté exento de responsabilidad por haber declarado el tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados, *por lo ménos*, á la señalada por la ley al delito que hubiere cometido; al mayor de quince años y menor de diez y ocho, se aplicará *siempre*, en el grado que corresponda, la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley.

¿Cuándo puede rebajarse la penalidad en uno ó dos grados?—Cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal (2), siempre que concurren el mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que los tribunales estimaren correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que faltaren ó concurrieren.

¿Por qué se concede á los tribunales el arbitrio prudencial para la aplicacion de las multas?—A fin de evitar la desigualdad en los efectos de la pena, la cual, no empleando este medio, podría ser confiscacion para unos la exaccion que para otros era una nimiedad de efectos nulos.

¿Cómo debe exigirse á un sólo delincuente la responsabilidad de dos ó más delitos?—El principio general seguido previene que al responsable de dos ó más delitos ó faltas se le impondrán todas las penas correspondientes á las diversas infracciones, acudiendo en consulta al gobierno, exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, si resultare excesiva la suma total de las penas.

¿Qué orden debe guardarse en su cumplimiento?—El sentenciado cumplirá todas sus condenas *simultáneamente*, siendo posible. Cuando no lo fuere, se observarán las reglas siguientes:

4.ª En la imposicion de las penas se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo por el condenado, en cuanto sea posible, por haber obtenido indulto de las primeramente impuestas, ó por haberlas ya cumplido.

La gravedad respectiva de las penas para la observacion de lo dispuesto en el párrafo anterior, se determinará con arreglo á la siguiente escala:

Muerte

Cadena perpétua.

Cadena temporal.

Reclusion perpétua.

Reclusion temporal.

Presidio mayor.

Prision mayor.

Presidio correccional.

Prision correccional.

(1) Viada y Vilaseca.

(2) Véase lo dicho al tratar de las circunstancias eximentes.

Arresto mayor.
 Relegacion perpétua.
 Relegacion temporal.
 Extrañamiento perpétuo.
 Extrañamiento temporal.
 Confinamiento.
 Destierro.

2.^a Sin embargo de lo dispuesto en la regla anterior, el máximo de duración de la condena del culpable no podrá exceder del *triple de tiempo* por que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de imponérsele las que procedan, desde que las ya impuestas cubrieren el máximo del tiempo predicho. En ningún caso podrá dicho máximo exceder de *cuarenta años*. Para la aplicación de lo dispuesto en esta regla se computará la duración de la pena perpétua en *treinta años*. Por este medio acertado y justo, se evita el espectáculo repugnante de ver sentenciado á un criminal á ciento ó más años de presidio, ó aunque sea inferior el número, no baste la vida del penado para cumplirlos.

3.^a Estas disposiciones no son aplicables en el caso de que un sólo hecho constituya dos ó más delitos, ó cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro (1). En estos casos sólo se impondrá la pena correspondiente al delito más grave, aplicándola en su grado máximo, lo cual viene á ser como la excepción del principio referido en la pregunta anterior.

¿Qué reglas deben observarse cuando se señale una pena inferior ó superior á otra determinada?—Las enumeradas anteriormente para su aplicación. La pena inferior ó superior se tomará de la escala gradual en que se halle comprendida la pena determinada. Cuando haya de aplicarse una pena superior á la de arresto mayor, se tomará de la escala en que se hallen comprendidas las señaladas para los delitos más graves de la misma especie que el castigado con arresto mayor. Los tribunales, en estos casos, atenderán para hacer la aplicación de la pena inferior ó superior, á las siguientes escalas graduales que el código consigna:

ESCALA NÚM. 1.^o

- 1.^o Muerte.
- 2.^o Cadena perpétua.
- 3.^o Cadena temporal.
- 4.^o Presidio mayor.
- 5.^o Presidio correccional.
- 6.^o Arresto.

ESCALA NÚM. 2.^o

- 1.^o Muerte.
- 2.^o Reclusion perpétua.
- 3.^o Reclusion temporal.
- 4.^o Prisión mayor.
- 5.^o Prisión correccional.
- 6.^o Arresto.

ESCALA NÚM. 3.^o

- 1.^o Relegacion perpétua.
- 2.^o Relegacion temporal.

(1) Este segundo supuesto constituía en el código de 1850 una circunstancia agravante.

- 3.º Confinamiento.
- 4.º Destierro.
- 5.º Represion pública.
- 6.º Caucion de conducta.

ESCALA NÚM. 4.º

- 1.º Extrañamiento perpétuo.
- 2.º Extrañamiento temporal.
- 3.º Confinamiento.
- 4.º Destierro.
- 5.º Represion pública.
- 6.º Caucion de conducta.

ESCALA NÚM. 5.º

- 1.º Inhabilitacion absoluta perpétua.
- 2.º Inhabilitacion absoluta temporal.
- 3.º Suspension de. } Cargos públicos, de derecho de sufragio activo y pasivo, profesion u oficio.

ESCALA NÚM. 6.º

- 1.º Inhabilitacion especial perpétua. } Para cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesion u oficio.
- 2.º Inhabilitacion especial temporal. }
- 3.º Suspension de. } Cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesion u oficio.

En los casos en que la ley señala una pena superior á otra determinada, sin designar especialmente cuál sea, si no hubiere pena superior en la escala respectiva, ó aquélla fuese la de muerte, se considerarán como inmediatamente superiores las siguientes: 1.ª, si la pena determinada fuese la de cadena ó reclusion perpétuas, ó inhabilitacion absoluta ó inhabilitacion especial perpétuas, las mismas penas, con la cláusula de que el penado no goce del beneficio establecido en el código sino á los cuarenta años; 2.ª, si fuere la de relegacion perpétua, la de reclusion perpétua; 3.ª, si fuere la de extrañamiento perpétuo, la de relegacion perpétua.

¿Qué reglas son peculiares á la aplicacion de las multas?—La multa se considerará como la pena inmediatamente inferior á la última de todas las escalas graduales, aunque no figure expresamente en ellas, en cuyo caso no podrá bajar de 125 pesetas, ni subir de 2.500, segun opinion de un comentarista (1) la cual no parece muy conforme con la letra del código, como se vé en el siguiente párrafo.

Quando se hubiere impuesto en dicho concepto, la responsabilidad subsidiaria correspondiente á ella por insolvencia del culpable, no podrá exceder del tiempo de duracion correspondiente á la pena inmediatamente

(1) Viada y Vilaseca.

superior de la escala respectiva, lo cual parece facultar para imponer el límite máximo de aquélla. Cuando sea necesario elevar esta pena ó bajarla á otros grados, se aumentará para cada grado superior una cuarta parte sobre el máximo de la multa determinada; y para rebajarla se hará una operación inversa. Lo mismo se hará cuando la multa no consista en cantidad fija, sino proporcional, v. gr. cuando sea del tanto al duplo, al triplo, etc.

¿Cómo se divide cada pena para su aplicacion?—Toda pena *divisible* tiene tres grados: *máximo*, *medio* y *mínimo*. Estos se subdividen discrecionalmente por los tribunales, según los casos y su apreciación.

En los en que la ley señale una pena compuesta de tres distintas, cada una de éstas formará un grado de penalidad: la más leve de ellas el *mínimo*, la siguiente el *medio*, y la más grave el *máximo*. En las multas no se reconocen esos grados.

Quando la pena señalada no tenga una de las formas previstas y manifestadas, se distribuirán los grados, aplicando, *por analogía*, las reglas expuestas. Si, pues, se compone de tres grados de distintas penas, cada uno formará un grado de la pena del delito.

¿Qué disposición importante consigna el código respecto á las mujeres condenadas por sentencia firme?—Que cuando son responsables de delitos que el código castiga con las penas de *cadena* perpétua ó temporal ó con las de *presidio* mayor ó correccional, se les impondrán respectivamente, las de *reclusion* perpétua ó temporal, *prisión* mayor ó correccional.

IDEAS GENERALES SOBRE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LA PENA.

Sistemas penitenciarios.

Dada la definición, naturaleza y efectos de la pena, que hemos indicado anteriormente, se infiere que su ejecucion no sólo debe consistir en actos positivos de sufrimiento y aliccion, sino que aquéllos deben ejecutarse con conocimiento del propósito y fines á que se encaminan; y como uno de ellos, si no el exclusivo, es la enmienda y correccion del culpable, es evidente que los hechos positivos de la pena, por sí solos, nada alcanzarian del fin jurídico de la misma. Requiere, pues, para la ejecucion de la pena, que haya una sentencia decisiva que la imponga; que se ejecuten los actos en que consista sin la menor variación que afecte á lo esencial de su naturaleza, y que se tenga conciencia de su fin. La relacion *cualitativa* de la pena no debe alterarse, ni alternar con otras para un mismo delito: la relacion *cuantitativa*, debe quedar al arbitrio prudencial de los tribunales, á fin de poder apreciar el grado de culpabilidad del delincuente y de su predisposicion para sufrir y experimentar los efectos de la pena, hasta conseguir su fin. La edad, el sexo, el carácter, el temperamento, el estado de salud de los reos, las circunstancias modificativas de la imputabilidad, deben tomarse en cuenta y estudiarse para que, dentro de la *cualidad* de la pena, sea proporcionada, eficaz y justa la *cantidad* que haya de imponerse.

¿Cuándo debe terminar ó suspenderse toda pena?—Las escuelas que sólo ven en ella la correccion y enmienda de los penados, siendo la pena el medio de obtenerlas, dicen que debe darse por cumplida cuando aquel fin se haya conseguido; y que debe suspenderse, cuando el penado haya caído en locura ó imbecilidad. Combaten la inflexibilidad del límite acor-

dado en las sentencias, porque dicen que de ellas no nacen más derechos privados que los de tutela en beneficio de los reos, y que por eso debe considerarse como esencialmente modificable la pena en todos sus accidentes; doctrina nueva, en verdad, que ataca, hasta cierto punto, la santidad de la cosa juzgada y perturba las tradicionales doctrinas del derecho penal. Y decimos hasta cierto punto porque, bien examinada la prerogativa de indulto, las causas ó motivos en que suele fundarse su aplicación y los efectos que produce en la práctica, dan por resultado una reforma esencial de la pena impuesta, quedando circunscrita la cuestión, á saber dónde sería más lógico y más racional que radicase aquella facultad, si en el jefe del Estado ó en el tribunal sentenciador, y á si debía concederse como gracia, ó aplicarse necesariamente como acto de justicia. «La buena conducta del reo, dice un tratadista de derecho penal (1), le hace acreedor á ingresar, más ó menos pronto, en una clase superior donde el tratamiento penal sea más dulce y más suave, é irse acercando más y más al día en el que, aun antes de cumplido el tiempo de condena, obtendrá su libertad provisional.» como acontece en muchas naciones: «¿Qué otra cosa es esto,—añade—sino la modificación de la pena, segun las circunstancias lo requieran y lo exija la conducta del reo (2)?»

¿A quién corresponde la ejecución de la pena?—En buenos principios debe corresponder al poder judicial, porque él es el único encargado de la declaración del delito y de la imputabilidad de los delincuentes. Por eso es una verdadera intrusión en las funciones judiciales, el aumento, disminución, castigo y premios reglamentarios de los establecimientos penales, porque esas variaciones afectan necesariamente á la naturaleza de la pena, lo cual se evitaria si, como es más racional y consecuente, toda ejecución y cumplimiento de pena, así como los establecimientos en que han de cumplirse algunas, estuviesen bajo la inspección, vigilancia y dirección de los tribunales, ó, cuando menos, del ministerio de Gracia y Justicia. Entonces, con la cooperación de los buenos ciudadanos, la de sociedades benéficas encargadas de la instrucción moral y religiosa de los reclusos y la de patronos de cumplidos, podría hacerse y conseguirse mucho en beneficio de éstos y en bien del Estado.

¿Bajo qué puntos de vista deben considerarse las *penitenciarias*, destinadas al cumplimiento de la pena?—Como medidas de seguridad para evitar la evasión de los penados: como establecimientos destinados á cuidar de la vida corporal y física de los reclusos, y como medios de atender y mejorar la vida espiritual de aquéllos. De estos puntos de vista y de su combinación, dimanar los diferentes *sistemas penitenciarios*.

Bajo el primer punto de vista, debe cuidarse de su construcción material y arquitectónica; de su alejamiento de las poblaciones; de la moralidad, celo, honradez y firmeza de carácter de los altos y bajos empleados del establecimiento, á fin de que la vigilancia reglamentaria sea constante, cierta y eficaz, y de la prohibición del ejercicio de determinados oficios que pueden suministrar medios para las evasiones.

Bajo el segundo aspecto, debe cuidarse de la conservación de la salud del recluso y de su restablecimiento, en caso de enfermedad, por todos los medios que exige la ciencia, procurando que la higiene más severa reine en las celdas y salones, en la ventilación de todo el edificio, y en el vestido del penado, á quien se dará para su alimentación *lo preciso y nada más que lo preciso*, en caso de bienestar, y se facilitarán los cuidados, atenciones y medicamentos necesarios, cuando estuviere enfermo.

(1) L. Silvea.

(2) Recordemos algo de esto en el Código de 1822, que facultaba á los tribunales para revisar las sentencias despues del cumplimiento de la mitad de la pena.

Bajo el último aspecto, esto es, consideradas las penitenciarias como casas destinadas á mejorar la vida espiritual de los delinquentes, mucho pudiéramos decir; pero prescindiendo de que, al tratar de los establecimientos penales en el derecho administrativo, nos ocuparemos de los diferentes sistemas penitenciarios que disputan la mayor bondad de sus preceptos en la aplicación y resultados prácticos de la penalidad, no podríamos exponer extensamente esta importantísima parte de la función primitiva encomendada al Estado, sin olvidarnos del carácter de este MANUAL, y de que debe ser objeto preferente de nuestro trabajo el código penal de 1870. Esto no obstante, algo diremos para indicar, tan sólo, cuáles son los puntos capitales que separan unos de otros sistemas, los cuales pueden estudiarse en libros de mayor ampliación (1).

¿Cuántos son los sistemas penitenciarios, y cuáles sus bases fundamentales?—Tres: el llamado *auburnés*, que se ensayó por vez primera en la ciudad de Auburn; el de *clasificación*, y el *arresto individual celular* ó *filadélfico*, ensayado en Filadelfia.

El sistema *auburnés* consiste en el trabajo común de los penados, durante el día, bajo la más severa regla del silencio y de toda comunicación con los demás, ni de palabra, ni por escrito, ni con miradas, ni por señas; y el aislamiento y soledad de aquellos durante la noche y los días y horas en que no se trabaja, en celdas pequeñas; sistema defectuoso del cual dice un jurisconsulto alemán (2) que su vicio fundamental consiste en «pretender realizar la monstruosa ficción de que los penados, en medio de la sociedad de sus iguales, debían subsistir como si cada uno fuese una especie de *Robinson en su isla*... La experiencia ha demostrado que ese fin, como que es antinatural é injusto, no es posible conseguirlo; que «obliga á continuo disimulo y transforma el establecimiento penal en verdadera escuela de hipocresía.» Así es que fracasó por completo el sistema, resultando probado que las comunicaciones de los presos eran tan perfectas y tan rápidas, en medio de aquella severidad del silencio y de la incomunicación que, según refiere el traductor de la nota, la visita de Mr. de Metz, el fundador de la penitenciaría de Mettray, á la de Zuig-Zuig, en donde rige el sistema *auburnés*, era conocida de los penados con antelación. Refiere también que el director de la cárcel de Gante, del mismo sistema, declaró oficialmente que era tan ineficaz éste, que si cambiaba de celda á un detenido durante la noche, lo sabían sus camaradas antes de tres días. «Tan rápidas como el rayo, según acredita la experiencia, se esparcen las noticias por toda la casa, tanto más, cuanto que los presos durante su marcha á la manera de gansos al aire libre, son comparables, en cierto modo, á la cadena eléctrica (3).» Además, en la sala y en las horas del trabajo, con la pesada mordaza del silencio y la coacción moral de la incomunicación, no se dá *satisfacción á la naturaleza sociable del hombre*.

Al sistema de *clasificación* es perfectamente aplicable algo del anterior. Consiste en reunir á los reclusos en grupos ó clases, separadas las unas de las otras, reconociendo por base de estas clasificaciones, además del sexo, separación fundamentalmente necesaria en todo establecimiento penal, la edad, el grado de corrupción apreciado por los delitos y las penas de los mismos, las profesiones y otras circunstancias rebuscadas difícilmente, que en algunas ocasiones han llegado á dar ocasión á diez y seis gru-

(1) Entre ellos pueden consultarse, la obra lata de derecho administrativo de Colmeiro, los estudios sobre derecho penal y sistemas penitenciarios de C. D. A. Roeder, traducidos por D. V. Romero Giron, y el derecho penal de D. Luis Silvela.

(2) C. D. A. Roeder.

(3) El mismo Roeder.

pos distintos. Pero aún conviniendo en la casi imposibilidad de obtener una clasificación exacta y exenta de graves errores, el mal de la perversión por el trato de los compañeros del mismo grupo es inevitable en este sistema; por manera que se habrá disminuido la aglomeración de penados, pero la corrupción no se habrá imposibilitado en manera alguna. De todas suertes, el sistema de *clasificación*, combinado con el *auburnés*, atenuará algo, muy poco, los males é inconvenientes del segundo.

El sistema del *arresto individual*, ó *absolutamente celular*, conocido bajo el nombre de *filadélfico* ó de Pensilvania, es el que tiene más aceptación en la filosofía moderna. Consiste en la separación del recluso de todos los demás, durante el día y la noche, viviendo sólo, encerrado en una celda, obligado á trabajar, y sin más comunicación exterior, que con los empleados del establecimiento, los individuos de las sociedades benéficas, los encargados de su instrucción moral, religiosa y artística, y alguna vez con su familia. La separación exterior le aleja de los malos; imposibilita las connivencias y planes de evasión; y prepara el ánimo del penado para el arrepentimiento, primer paso de toda regeneración moral, por la casi constante *soledad* en que vive. La celda inspira temor al recluso y ejemplaridad al no delincuente todavía; despierta la conciencia de aquél, quizás por primera vez, sensibilizando su corazón por la influencia del aislamiento, que le obliga á pensar en su culpa y á amasarla con las lágrimas del arrepentido, por carecer de medios que distraigan su conciencia; *individualiza* la pena, facilitando su jurídica aplicación y pudiendo tratar á cada preso «como si fuese el único existente en el establecimiento penal.»

Pero, según queda indicado al principio del párrafo anterior, el *arresto celular individual*, por sí sólo, sin el empleo de otras influencias, no basta para el fin de la pena; es la base capital del sistema, pero no el elemento único. Dentro de la celda, pueden cometerse las mismas atrocidades de los inhumanos sistemas antiguos. El látigo, las cadenas y grillos, el cepo, el hambre, la sed, la gota y el chorro de agua permanentes, pueden convertir el aislamiento celular, en un sistema más execrable, más cruel y más anticientífico que los primitivos. Por eso sus defensores encargan las *frecuentes visitas* útiles y provechosas, de personas de confianza y moralidad, como las de la familia del penado, los maestros, los sacerdotes, los empleados de la casa, á fin de que la soledad interrumpa su pesada acción por algunos momentos, dando lugar al descanso del ánimo y de la conciencia; hasta como medida preventiva contra la salud física y del espíritu, recomiendan con preferente interés la buena y amplia *instrucción*, religiosa é industrial de los preses, por medio de la enseñanza y lectura encaminadas á desarrollar capacidades útiles algún día; ocupaciones que, si entonces sirven de pasatiempo y distracción, pueden ser la base de un ulterior bienestar, para lo cual cada prisión debe tener una biblioteca escogida y abundante. Exigen también como condición ineludible en este combinado sistema, el *trabajo* de los reclusos adecuado á sus fuerzas, á sus inclinaciones y al estado de su espíritu, el cual, aparte de la influencia moralizadora que contiene, dá por resultado un bien general que alcanza al recluso, á la sociedad y al Estado; al primero porque, con una parte de sus ganancias, debe formarse un pequeño fondo de reserva que se le entregará á la salida de la prisión; á la sociedad porque, con otra parte puede indemnizarse, en lo posible, el mal causado por el delito; y al Estado porque, no sólo recibe nuevamente un ciudadano regenerado, sino que se reintegra, cuando ménos en parte, de los gastos ocasionados por aquél en la reclusión. Sólo en casos excepcionales consienten los partidarios del sistema *filadélfico* la disminución de alimentos y la oscuridad de la celda, como coacciones reglamentarias de orden y disciplina. Y si á todo lo dicho se añade un personal docto, práctico, instruido, que conozca perfectamente su misión, la naturaleza y fin de la pena, y se penetren sus individuos

de que, en vez de ser carceleros duros é insolentes, deben ser consejeros compasivos, francos, amables y bienhechores del infeliz penado, mucho debe esperarse del sistema *celular individual*, combinado con el trabajo, y ayudado por una buena y sana instruccion del reo.

¿Qué razones se alegan contra este sistema?—Dícese que las enfermedades del espíritu son mayores bajo su régimen, porque enerva su virilidad y contribuye á la pérdida de la memoria, favoreciendo en si y de por si las enajenaciones mentales; lo cual niegan sus defensores, concediendo únicamente que sólo respecto á las mujeres resultan contradictorias las experiencias hechas. Aseguran aquéllos que es tal la influencia perjudicial del mismo, que sólo puede sufrirse por poco tiempo, y por consiguiente que debe fijarse un máximo de duracion; lo cual tampoco reconocen sus mantenedores; y en fin, entre unos y otros se sostiene la conveniencia y las desventajas de sus teorías con muchas otras razones, siempre dignas de estudio, de que no podemos ocuparnos.

Además de los tres sistemas penales referidos, existen otros formados de elementos vários, tomados de aquéllos, los cuales reciben el nombre de *sistemas mixtos*. Y por fin, hay quien opina que primeramente debe pasar el penado por un estado de *soledad absoluta*, como preparacion y prueba para entrar en otro de *separacion sin aislamiento*, el cual debe durar tanto como la pena misma (1).

¿Qué otras medidas pueden ensayarse, en favor del penado, para conseguir más completamente el fin correccional de la pena?—La libertad provisional revocable; el patronato de los reos cumplidos y su traslacion á colonias ó países lejanos. Estos medios tienden á asegurar mejor y hacer eficaz el período que llaman de la *emancipacion* de los penados.

La libertad *provisional revocable* consiste en la facultad que se reserva el Estado de volver el delincuente á la reclusion, si cometiese algun delito, de la cual se ha hecho uso en los indultos generales concedidos recientemente entre nosotros (2); la de sujetarle á la vigilancia de la autoridad durante cierto tiempo, pena suprimida en nuestro código por la reforma de 1870, obligándole á vivir en determinadas poblaciones; á presentarse periódicamente; á que su patrono dé cuenta de su conducta; á que se dedique á trabajos útiles y productivos, notificando á la autoridad los cambios de domicilio. Esta libertad se convertirá en definitiva é irrevocable, tan luego como el penado dé pruebas evidentes de enmienda y de correccion, viviendo ya libremente desde aquel momento.

Los *patronatos de cumplidos*, que pueden desempeñar algunos particulares ó constituir la mision benéfica de algunas sociedades, tienen por objeto principal el vigilar por la conducta del rematado, informar de él á las autoridades; conocer las compañías que frecuenta; averiguar la inversion del fondo que el establecimiento penal le entregó; procurarle trabajo, presentándole en los talleres, ú ofreciéndoselo los mismos patronos, porque este es el medio más imperioso, puesto que atiende á la necesidad más rudimentaria de la alimentacion y de la subsistencia; ayudarle, en fin, en cuanto sea posible, á pasar el período más crítico y más próximo á la reincidencia; por el cual atraviesa el cumplido para su emancipacion, al pasar de la situacion de penado al estado de libertad completa.

La *traslacion voluntaria á colonias lejanas*, es tambien un buen medio para conseguir la completa regeneracion del cumplido, en su vida práctica. Cuando no tiene familia, cuando no encuentra trabajo, cuando el peso de su mala historia pugne con la tranquilidad de su espíritu, ó con el buen recibimiento de sus convecinos, puede pedir, y el Estado debe rea-

(1) L. Silvela. Derecho penal.

(2) Decretos de Enero y Noviembre de 1875.

lizar el propósito de aquél, que se le traslade á una colonia lejana, nacional ó extranjera, facilitándole terreno y trabajo, en donde, sin antecedentes conocidos y con su alma regenerada hácia el bien, pueda llegar á ser un buen ciudadano, trabajador y arrepentido, el que ha sufrido la pena justa impuesta por el delito que consumó.

Antes de terminar estas ligeras indicaciones debemos observar que esas colonias, á que antes nos referimos, no deben confundirse con las *colonias penitenciarias*, verdaderos lugares destinados al cumplimiento de las penas, no á facilitar la emancipacion de los cumplidos. De ellas parece cierto que puede afirmarse como exacto, lo que dice un tratadista, que no cree justa tal forma de cumplimiento de la penalidad, «que parece buscar, más que la correccion del penado, el librar á la nacion de los malhechores y de la dura carga de custodiarlos.»

¿Qué sistema se sigue en nuestras prisiones?—Hasta el presente, ninguno de los modernos. Nuestras cárceles y presidios continúan rigiéndose por los antiguos principios de represion, castigo, y malos tratamientos. Fuera de la separacion de sexos y edades, nada hay en ellas digno de mencion, más que para condenarle enérgicamente. De sus departamentos sale el recluso más amaestrado en el crimen, más inmoral, más abyecto y menos arrepentido. Puede aplicárseles el juicio que el jurisconsulto alemán Roeder hace de los antiguos establecimientos penales. «Es más frecuente, dice, en estas cárceles, en donde los antiguos secuaces del crimen desempeñan el papel de soberanos, de señores y de maestros y son objeto de homenajes y admiracion, que los pocos buenos sean victimas de la burla, de la ironia venenosa y de incesantes persecuciones, las más odiosas, hasta que aceptan el tono reinante... En realidad estas antiguas prisiones más merecen, en su mayor parte, el nombre de casas de impudicia é indisciplinada, que de lugares de disciplina. Son verdaderos antros del crimen y semilleros de pecados.» En otra parte les llama *agradable casino de criminales*.

La nueva cárcel de Madrid, y la casa de correccion de jóvenes delincuentes, ambas en construccion, pueden ser los primeros pasos de la necesaria reforma que demandan imperiosamente nuestras prisiones. Están fundadas en las modernas ideas acerca de la naturaleza y fin de la pena, y serán regidas por un sistema celular *mixto*. ¡Quiera Dios que este ensayo sea precursor de una modificacion extensiva á todo el reino: que en nada mejor que en atender á esta necesidad social podria invertirse una parte de los sacrificios del contribuyente!

Ejecucion y cumplimiento de las penas, segun el código vigente (1).

¿Cuándo, y en qué forma, deben ejecutarse las penas?—No puede ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia *firme*, haciéndolo en la forma prescrita por el código y los reglamentos. Ya hemos visto cuando son *firmes* las sentencias, segun la ley de Enjuiciamiento criminal.

Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias ó accidentes que los expresados en su texto.

(1) El decreto inserto en la *Gaceta* del 14 Diciembre de 1870, fué modificado por circulares de los ministerios de Gracia y Justicia y de la Guerra, segun las cuales, los militares deben sufrir las prisiones preventivas y las penas que se les impongan, aun por los tribunales ordinarios, en los castillos y prisiones militares. (Véanse en el apéndice.)

Se observará también lo que se determine en los reglamentos especiales para el gobierno de los establecimientos en que deben cumplirse las penas, acerca de la naturaleza, tiempo y demás circunstancias de los trabajos, relaciones de los penados entre sí y con otras personas, socorros que puedan recibir y régimen alimenticio. Esta disposición genera presupone la reforma penitenciaria que no ha llegado á ser un hecho todavía en España, por más que, como indicamos al final del capítulo anterior, sean un principio de reforma el ensayo que vá hacerse en los dos establecimientos que están en construcción, la nueva cárcel, y la casa de corrección para jóvenes delincuentes: la primera costeada por las provincias del territorio de la audiencia, y la segunda debida á la iniciativa y esfuerzos particulares, aunque con la protección y cooperación oficial.

Los reglamentos dispondrán la separación de sexos en establecimientos distintos, ó por lo menos en departamentos diferentes (1).

¿Qué disposiciones deben adoptarse con los delincuentes que caigan en locura ó imbecilidad?—Cuando el delincuente cayere en locura ó en imbecilidad después de pronunciada sentencia firme, se suspenderá la ejecución tan sólo en cuanto á la pena personal, acordando su reclusión ó entregándolo á su familia, según la gravedad del delito.

En cualquier tiempo en que el delincuente recobraré el juicio, cumplirá la sentencia, á no ser que la pena hubiere prescrito, con arreglo á lo que se establece en el código, y decimos mas adelante (pág. 56.)

Se observarán también las disposiciones respectivas cuando la locura ó imbecilidad sobreviniere hallándose el sentenciado cumpliendo la sentencia.

¿A quién corresponde acordar la suspensión de la ejecución de la sentencia?—Unos afirman que al tribunal sentenciador, otros á la autoridad administrativa, y otros á la autoridad judicial del territorio en que se cumple la sentencia. Una Real orden dispuso (2) que las salas sentenciadoras acordasen lo procedente sobre el hecho de la demencia, previo expediente formado por el comandante del presidio y ampliado ante la sala misma, con audiencia del Fiscal, del acusador particular y del defensor del reo.

¿Cómo debe ejecutarse la pena de muerte?—Se ejecutará en garrote, sobre un tablado. El uso de la horca fué abolido en 1832.

La ejecución se verificará de día, á las veinticuatro horas de notificada la sentencia, cuya notificación se hará á las 8 de la mañana, desde cuyo momento quedará el reo puesto en capilla (3); con publicidad y en el lugar destinado generalmente al efecto, ó en el que el tribunal determine, cuando haya causas especiales para ello.

Esta pena no se ejecutará en días de fiesta religiosa ó nacional.

Hasta que haya en las cárceles un lugar á propósito para la ejecución pública de la pena de muerte, el sentenciado á ella, que vestirá bota negra, será conducido al patíbulo en el carruaje destinado al efecto, ó donde no lo hubiere, en carro. Esta disposición indica la conveniencia y la esperanza de que la ejecución de la pena de muerte se verificará dentro de las mismas cárceles, como se efectúa en Inglaterra y otras naciones.

El cadáver del ejecutado quedará expuesto en el patíbulo para ejemplaridad é intimidación, desgraciadamente poco eficaz, hasta una hora antes de oscurecer, en la que será sepultado, entregándole á sus parientes ó amigos para este objeto, si lo solicitaren. El entierro no podrá hacerse con pompa, para que no honre la memoria del criminal.

(1) Téngase presente lo dicho antes respecto á sistemas penitenciarios y lo expuesto en la sección de *Derecho administrativo*, al tratar de las prisiones.

(2) Fué publicada por el ministerio de Gracia y Justicia el 13 de Octubre de 1865.

(3) Véase lo dispuesto en la sección de procedimientos, acerca de la ejecución de las sentencias.

¿Cuándo debe ejecutarse la pena de muerte en la mujer embarazada?—Cuarenta días después de su alumbramiento, hasta cuyo tiempo no puede tampoco notificársele la sentencia, á fin de evitar la muerte del sér inocente que lleva en sus entrañas, y el horrible espectáculo causado por su debilidad; medida justa, humanitaria y de general aplauso.

¿Es *justa*, es *necesaria*, es *legítima*, es siquiera *conveniente*, la pena de muerte?—Mucho se ha discurrido acerca de ese terrible problema de la ciencia penal. A graves y concienzudas discusiones ha dado márgen hace bastante tiempo, y todavía no ha resuelto la ciencia cual de las soluciones que se dan es la más exacta, ni aún cual es la más satisfactoria para la conciencia universal. Cada escuela la resuelve según sus teorías y toda solución dimana de la concepción genuina, pura, filosófica de la pena, de su naturaleza y de sus fines. La teoría *correccional* condena la de muerte, así como proscribte todas las perpétuas. Las teorías *absolutas* de la *defensa*, de la *intimidación* y de la *ejemplaridad*, la defienden, no sólo como *conveniente*, sino como *necesaria*, como *legítima* y como *justa*. La idea de que la pena es, principalmente, un mal expiatorio, alienta y sostiene aquéllas proclamadas *legitimidad*, *justicia* y *necesidad*, no bastando que se nieguen á la pena capital por otras escuelas, esas circunstancias, y que se grite con convicción profunda, fruto de grandes estudios, que «no hay derecho para ese hecho; que el hombre no puede privar de la vida á su semejante, amparado con el pretexto de una *necesidad* mentida, y que «el patíbulo es el eterno y constante baldon de los pueblos salvajes.» (1) A esos argumentos se les califica de arranques declamatorios de imaginación, hijos de un sentimentalismo de perjudiciales consecuencias; y los códigos prácticos consignan, ó no, á la cabeza de las escalas de sus penas, la de muerte, según que el legislador que los ha dictado, haya cedido al rigor de unos ó de otros principios. Y no solo al rigor inexorable y lógico de éstos, sino á la conveniencia práctica de su aplicación al pueblo para quien legisla: que si el *summum jus es summa injuria*, la abolición de la pena capital puede ser peligrosa y aventurata, hecha desde luego, sin preparación social, en determinadas circunstancias históricas, y cuando no sea una verdad real la existencia de una buena organización en el sistema penitenciario, encargado de regenerar al delincuente que, destinado á subir los escalones del cadalso, le haga ascender la más suave pendiente de una penitenciaría, en donde severa, pero humanitariamente, despierte el remordimiento en su torcida conciencia, y con la soledad, el aislamiento, el trabajo, la instrucción moral, civil y religiosa combinados, le regenere y vuelva á encauzar su alma, con voluntad y espontáneo afán del penado, por el camino franco, expedito, noble, de la virtud y del derecho.

Nosotros no podemos ampliar estas indicaciones, ni por consiguiente entrar á discutir razonamientos tan opuestos. No lo consiente el propósito de este libro, ni nada adelantaría el lector con conocer nuestra opinión. Bástele saber que no es unánime la contestación que puede darse á la pregunta, y que requiere grandes estudios y largas meditaciones sobre el *fundamental origen* y el *trascendental fin* de las penas; y que, acercándonos al terreno práctico del derecho, nuestro código ha contenido siempre la pena de muerte, apesar de haber pasado la nación y el Estado por circunstancias bastante propicias, dadas las opiniones predominantes en las esferas del poder, á la abolición de aquella pena. Lo único que se ha hecho, ha sido escatimarla cada vez más: reservarla para los grandes crímenes, quitándole algo de lo accidental, innecesario y repugnante de su ejecución, acortando el tiempo que debe permanecer el reo en la capilla, y reco-

(1) Victor-Hugo.

mendando que el sitio de la ejecucion de la pena, *mientras no haya en las cárceles un lugar destinado al efecto*, esté lo más próximo que sea posible á aquélla. Y para quitar toda ocasion de convertir en fiesta y romería el tránsito y el campo de la ejecucion, se recomienda tambien que se prohiban los puestos de bebidas y comestibles fijos y ambulantes, procurando evitar por estos y otros medios, que se infundan en la muchedumbre que concurre á tales actos «sentimientos ajenos á la dignidad de un pueblo culto, contrarios á la majestad de la justicia é incompatibles con el recogimiento y el respeto que debe inspirar el espectáculo de la muerte.»

¿Seria oportuna y conveniente la abolicion de la pena capital entre nosotros?—Para contestar á esta pregunta, íntimamente ligada con las resoluciones que se den á la cuestion propuesta en la anterior, recordaremos lo que en Febrero de 1874 declaraba franca, pública y paladinamente el ministro de Gracia y Justicia del entónces gobierno de la República (1) en un documento oficial: «Sobre que la gravedad de ciertos delitos no lo consiente y lo veda el carácter de sus circunstancias esenciales y constitutivas, forzoso es declarar con sinceridad y entereza que *no está la sociedad española preparada al beneficio de esa reforma*; que faltan en nuestro sistema penitenciario estímulos eficaces de arrepentimiento, y quizás medios suficientes y análogos de correccion y de castigo... y que no han permitido los tiempos, ni han querido nuestras desdichas que... nuestro pueblo... marche al compás del progreso de las ideas, ni siga de tan cerca como fuera preciso, el movimiento de los hechos sociales.» (2) Vemos, pues, por tan autorizada opinion declarado, que la abolicion de la pena capital no seria conveniente, en la actualidad, para nuestro país; y por más que sea una triste verdad el tener que reconocerlo y nunca sea lícito alegarla como razon de justicia, ni de legitimidad, es lo cierto que, sin las penitenciarias adecuadas, aquella pena seria hoy irremplazable, bajo el punto de vista jurídico, entre nosotros, si es que habia de ser el límite máximo de la penalidad imponible, dentro del código, la pena que sustituyese á la de muerte.

¿En dónde debe cumplirse la pena de *cadena perpétua y temporal* y en qué consiste?—En cualquiera de los puntos destinados á este objeto en Africa, Canarias ó Ultramar, precisamente, deberá tener lugar su cumplimiento.

Los sentenciados á estas penas trabajarán en beneficio del Estado; llevarán siempre una cadena al pie, pendiente de la cintura, y no unida á la de otro penado, como disponia el código de 1850; se emplearán en *trabajos duros y penosos*, y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento. Sin embargo, cuando el tribunal, consultando la edad, salud, estado y cualesquiera otras circunstancias personales del delincuente, creyere que éste debe cumplir la pena en trabajos interiores del establecimiento, lo expresará así en la sentencia.

Los condenados á *cadena temporal ó perpétua* no podrán ser destinados á obras de particulares, ni á las públicas que se ejecutaren por empresas ó contratas con el gobierno. Esto no obstante, muchas veces han trabajado, y actualmente trabajan para obras públicas, y aun para empresas contratistas con el Estado.

Los sentenciados á dichas penas, que tuvieren antes de la sentencia *sesenta años* de edad, cumplirán la condena en una casa de presidio mayor. Si los cumplieren estando ya sentenciados, se les trasladará á dicha casa-presidio, en la que permanecerán durante el tiempo prefijado en la sentencia.

(1) D. Cristino Martos, cuyas ideas democráticas son de todos conocidas. (Circular de 9 de Febrero de 1874. Véase el apéndice.)

(2) Por ser un documento notable, digno de meditacion y contener además algunas ideas referentes á la pena, así como una desconsoladora semejanza del estado de nuestro pueblo para las reformas del Derecho penal, insertamos en el apéndice la citada Circular de Gracia y Justicia.

¿Dónde se cumple y cuál es la naturaleza de la pena de *reclusion perpetua y temporal*?—En un establecimiento situado dentro ó fuera de la Península. El trabajo *forzoso*, pero ménos duro y penoso que el de la *cadena*; la disciplina, trage, régimen alimenticio y uniforme, constituyen parte de la pena. A diferencia de los condenados á la segunda, no podrán ser sacados del establecimiento para trabajar, ni llevarán el grillete al pie los sentenciados á la de *reclusion*.

¿En dónde se cumple la de *relegacion* y en qué consiste?—En Ultramar, en los puntos para ello destinados por el gobierno. Los relegados podrán dedicarse libremente, bajo la vigilancia de la autoridad, á su profesion ú oficio, dentro del radio á que se extiendan los límites del establecimiento penal. La *perpetua* suele cumplirse en las Islas Marianas, y la *temporal* en la de Mindoro.

¿En qué consiste el *extrañamiento*?—En la expulsion del territorio español, temporal ó perpétuamente. Es una especie de destierro, cuya prohibicion comprende todo el territorio español, y cuya aplicacion no se encuentra en ninguno de los artículos del código (1) como pena perpétua.

¿Dónde se cumple el *presidio* y cuál es el carácter de esta pena?—En los establecimientos destinados para ello, los cuales estarán situados, para el *presidio mayor* dentro de la Península é islas Baleares ó Canarias; y para el *correcional*, dentro de la Península. Los condenados á esta pena estarán sujetos á trabajos forzosos dentro del establecimiento en que cumplan la condena. Por manera que sólo se diferencia el *presidio* de la *reclusion*, en el tiempo que dura, y en el destino del producto de los trabajos.

¿Como se distribuye el producto del trabajo de los presidios?—Será destinado: 1.º, para hacer efectiva la responsabilidad civil, proveniente del delito; 2.º, para indemnizar al establecimiento de los gastos que ocasionaren los presidiarios; 3.º, para proporcionarles alguna ventaja ó ahorro durante su detencion, si lo mereciesen, y para formarles un fondo de reserva, que se les entregará á su salida del presidio, ó á sus herederos, si falleciesen en él los penados. Como se vé, estas prescripciones guardan analogia con las reglas de las casas de correccion y enmienda de los sistemas modernos. Y como no determinan una verdadera prelacion en los objetos, esto dá lugar á dudas sobre la manera de distribuirse el producto del trabajo, siguiendo opiniones contrarias los comentaristas.

¿En qué consiste y dónde debe cumplirse la pena de *prision*?—En los establecimientos destinados al efecto, los cuales estarán situados, para la *prision mayor*, dentro de la Península é islas Baleares ó Canarias; y para la *correcional*, dentro del territorio de la audiencia que la hubiere impuesto.

Los condenados á *prision* no podrán salir del establecimiento en que la sufran durante el tiempo de su condena, y se ocuparán, para su propio beneficio, en trabajos de su eleccion, siempre que fueren compatibles con la disciplina reglamentaria. Estarán, sin embargo, sujetos á los trabajos del establecimiento hasta hacer efectiva la responsabilidad civil é indemnizarle; tambien lo estarán los que no tengan oficio ó modo de vivir conocido y honesto. Es, pues, condicional ó temporal el trabajo forzado.

¿En qué consiste el *confinamiento*?—En la obligatoria residencia en un punto determinado de las islas adyacentes, en el cual permanecerán los confinados en completa libertad, bajo la vigilancia de las autoridades. Para el señalamiento del punto en que deba cumplirse la condena, tendrán en cuenta los tribunales el oficio, profesion ó modo de vivir del sentenciado, con objeto de que pueda adquirir su subsistencia. Los que fueren útiles por su edad, salud y buena conducta, podrán ser destinados, con su anuencia, por el gobierno, al servicio militar.

(1) Así lo hace notar el Sr. Viada y Vilaseca en sus comentarios al código.

¿En qué consiste el *destierro*?—En la privacion de entrar en un punto ó puntos determinados en la sentencia, y en el radio que en la misma se señala, el cual comprenderá una distancia de 25 kilómetros, al ménos, y 250 á lo más, del punto designado.

¿Cómo se ejecuta la *represion*?—La *pública* tiene lugar en la audiencia del tribunal ó juzgado, á puerta abierta. La *privada* en el mismo punto, á puerta cerrada, y á presencia del secretario.

¿Dónde se cumple el *arresto*?—El *mayor*, en establecimientos destinados al objeto en las cabezas de partido. Tiene las mismas limitaciones que la pena de *prision*, en cuanto á la salida del establecimiento y el trabajo.

¿Dónde se extingue el *arresto menor*?—En las casas del ayuntamiento ú otras del público, ó en las del mismo penado, cuando así se determina en la sentencia, sin poder salir de ellas aquél en todo el tiempo de la condena.

¿Existen todos los establecimientos que el código exige para el cumplimiento de las penas?—No, por lo cual se cumplen en los que hay, procurando guardar la mayor analogía posible.

¿Cómo se ejecuta la *degradacion*?—El sentenciado será despojado por un alguacil, en audiencia pública del tribunal, del uniforme, traje oficial, insignias y condecoraciones. El despojo se hará á la voz del presidente, que lo ordenará con esta fórmula: «Despojad á (el nombre del sentenciado) de sus insignias y condecoraciones, de cuyo uso la ley le declara indigno: la ley le degrada por haberse el degradado á si mismo.» Cuando sea eclesiástico, efectuará la degradacion la autoridad eclesiástica; y si fuere militar desahogado, la hará el presidente del Tribunal, pero la presenciara el jefe militar comisionado por el Capitan general.

¿Cómo se cumple la pena de *inhabilitacion absoluta*?—Cuando es *perpétua*, publicando la parte dispositiva de la sentencia en los *Boletines oficiales* de la provincia en que se hubiere seguido la causa, y en que hubiere nacido el reo, y en la *Gaceta de Madrid*, si fuere conveniente. Cuando es *temporal* ademas de la publicacion anterior, se comunicará la condena al gobernador, gefes y ministro del ramo á que correspondan las oficinas en que hubiese servido; al alcalde y juez municipal de su domicilio, y en donde tuviere sufragio y declarada aptitud para ser jurado, para su exclusion de las listas; se recogerá el título de la profesion ú oficio que ejerciere el penado y la patente correspondiente, y se anotará la recogida en los libros en que aquéllos consten.

¿Cómo tiene cumplimiento la de *inhabilitacion especial temporal*?—Oficiando á los jefes, alcaldes ó jueces municipales para que no pueda ejercer el cargo, derecho de sufragio, profesion ú oficio para que fué inhabilitado el delincuente, durante el tiempo de la condena.

¿Cómo se efectuará la de *suspension*?—De igual manera.

¿Cómo se realiza la *multa*?—Por la via de *apremio*, y en el papel correspondiente.

¿Y la *caucion*?—Con la presentacion de la escritura en que una persona abonada afiance al reo, prometiendo que éste no ejecutará el mal que trata de precaverse.

¿Y la *interdiccion civil*?—El tribunal cuidará de que se cumplan los efectos de esta pena que indicamos en su lugar oportuno, expidiendo desde luego los mandamientos necesarios para que el Registrador de la propiedad inscriba la prohibicion de enajenar el penado sus bienes.

Respecto á la pérdida ó comiso de los instrumentos del delito y pago de costas, ya hemos dicho lo suficiente al tratar de estas penas accesorias.

De la responsabilidad civil.

¿Qué obligaciones comprende la responsabilidad *civil*?—1.ª, la *restitucion* de la misma cosa, siempre que sea posible, con abono de deterioros ó menoscabos, á regulacion del tribunal, aun cuando se halle en poder de un tercero, salva la *prescripcion* civil, ganada por éste. Esta disposicion no es aplicable, en el caso de que el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irrevindicable como sucede con los efectos públicos, cuando son enajenados con intervencion de agente de bolsa, en donde exista este centro de contratacion, y los billetes de Banco, por su propia naturaleza irrevindicables, á no ser que, siendo robados, fuesen adquiridos de mala fé (1). Tambien deben tenerse presentes las disposiciones de la ley hipotecaria, en cuanto á los efectos de la inscripcion en el registro, respecto á tercero (2); 2.ª la *reparacion* del daño causado, valorándose su entidad por los tribunales, atendido el precio natural de la cosa, si fuere posible, y el de afeccion del agraviado, cuya apreciacion ofrece dificultades en la práctica. Tiene lugar, generalmente, en los delitos contra la propiedad; 3.ª, la *indemnizacion* de perjuicios causados al perjudicado, á su familia ó á un tercero, en la forma prescrita anteriormente. Se aplica en los delitos contra las personas, regulándose en la misma forma que la anterior, atendida la posicion del ofendido y de su familia, el jornal que gana aquél, la clase de recursos de que se haya visto privado, y tantos otros datos que, si no han de dar una exacta indemnizacion, la aproximen cuanto sea posible. Estas obligaciones se trasmiten á favor y en contra de los herederos, y de aquéllos que hayan participado de los efectos del delito por titulo lucrativo, hasta la cuantia del beneficio; pero para hacerla efectiva no puede procederse de oficio, en opinion de algunos comentaristas.

¿Extinguida la accion *penal*, queda extinguida la *civil*?—No: esceptuase el caso en que la extincion de aquélla se declare, por no constituir delito el hecho punible.

Si la accion *penal* se suspende por la rebeldía del procesado, puede ejercitar la *civil* separadamente el ofendido (3).

¿Cómo se gradúa la responsabilidad *civil* cuando hay varios delincuentes?—Los tribunales deben señalar la cuota correspondiente á cada uno, siendo los *autores* responsables mancomunadamente por las suyas respectivas y por las de los *cómplices* y *encubridores*, sin perjuicio de la repeticion correspondiente. Los *cómplices* son responsables entre si, y subsidiariamente, por las cuotas de los *autores* y *encubridores*. Y los *encubridores* lo son en la misma forma, y por la de los *autores* y *cómplices*. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva, primero en los bienes de los *autores*, despues en los de los *cómplices*, y por último en los de los *encubridores*.

¿A quién competia antiguamente el cumplimiento de estas obligaciones, cuando los responsables carecian de medios?—Al Estado, en los casos y formas que habia de establecer una ley especial, como tutor supremo de los intereses de los asociados, cuya ley no ha llegado á formarse. Esta disposicion no está contenida en el Código reformado en 1870.

(1) Ley de 30 de Marzo de 1861.

(2) Véase lo dicho en la seccion de derecho civil, relativo á esta materia.

(3) Ley de Enjuiciamiento criminal.

Quebrantamiento de condena y delitos cometidos durante su cumplimiento.

¿Qué se entiende por quebrantamiento de condena, y cuál es su castigo?—La infracción de los sufrimientos, medidas ó prescripciones coercitivas que constituyen la naturaleza de las penas. ¿Cómo se castiga ese quebrantamiento? Conforme á las reglas siguientes: 1.^a, los sentenciados á *cadena ó reclusion*, cumplirán sus respectivas condenas, haciéndoles sufrir, por un tiempo que no excederá de tres años, las mayores privaciones que autoricen los reglamentos, y destinándolos á los trabajos más penosos. Si la pena fuere *perpétua*, no gozarán del beneficio de ser indultados á los treinta años, hasta que hayan cumplido la agravación en la pena que se les hubiere impuesto. Si fuere *temporal* y la agravación de pena no pudiere cumplirse dentro del término señalado en la anterior condena, continuarán sujetos á ella hasta extinguir el tiempo de la agravación; 2.^a, los sentenciados á *relegación ó extrañamiento*, serán condenados á *prisión correccional*, que no podrá exceder de tres años, debiendo los *relegados* sufrirla en el punto de la relegación, si fuere posible, y en el más inmediato, si no lo fuere; y los *extrañados*, en uno de los establecimientos penales del reino. Cumplidas estas condenas, continuarán sufriendo las anteriores; 3.^a, los sentenciados á *presidio*, *prisión ó arresto*, sufrirán un recargo de la misma pena, que no podrá exceder de la sexta parte del tiempo que les faltare para cumplir su primitiva condena; 4.^a, los sentenciados á *confinamiento*, serán condenados á *prisión correccional*, que no podrá exceder de dos años, y cumplida esta condena, extinguirán la de confinamiento; 5.^a, los *desterrados* serán condenados á *arresto mayor*, cumplido el cual, extinguirán la pena de destierro; 6.^a, los *inhabilitados* para cargo, derecho de sufragio, profesion ú oficio, que los obtuvieren ó ejercieren cuando el hecho no constituya un delito especial, serán condenados al *arresto mayor* y *multa* de 100 á 1.000 pesetas; 7.^a, los *suspensos* de cargo, derecho de sufragio, profesion y oficio, que los ejercieren, sufrirán un recargo por igual tiempo al de su primitiva condena, y una *multa* de 50 á 500 pesetas.

¿Qué excepciones se oponen á estas reglas?—Las siguientes: las agravaciones prescritas en el párrafo anterior, respecto á los que sufran privación de libertad, no se aplicarán á los que se fugaren de los establecimientos penales ó de sus destacamentos sin haber empleado violencia, intimidación, ni resistencia; sin fractura de puertas ó ventanas, paredes, techos ó suelos; sin usar ganzúas ó llaves falsas; sin escalamiento, y sin ponerse de acuerdo con otros penados ó dependientes del establecimiento.

El quebrantamiento de la sentencia, cuando no concurren una ó más de dichas circunstancias, será corregido con la *cuarta parte* de la pena respectivamente señalada en el párrafo anterior.

¿Qué reglas deben aplicarse en la corrección de los delitos cometidos despues de una sentencia condenatoria?—Los que cometieren algun delito ó falta, despues de haber sido condenados por sentencia firme no empezada á cumplir, ó durante el tiempo de su condena, serán castigados con sujeción á las reglas siguientes: 1.^a, se impondrá en su grado máximo la pena señalada por la ley al nuevo delito ó falta; 2.^a, los tribunales observarán, en cuanto sean aplicables á este caso, las reglas prescritas para el cumplimiento simultáneo ó correlativo de las penas que hemos enumerado oportunamente (1) sin las limitaciones que allí se expresan; 3.^a, el

penado comprendido en estas reglas, será indultado á los *setenta años*, si hubiere ya cumplido la condena primitiva, ó cuando llegare á cumplirla despues de la edad sobredicha, á no ser que por su conducta ó por otras circunstancias, no fuere digno de la gracia expresada.

¿Debe ser delito el *quebrantamiento* de las sentencias?—Atendida la causa impulsiva de su comision, no debiera ser punible cuando las penas consisten en la privacion *absoluta* de la libertad, porque el hombre, al poner en práctica todos los medios que están á su alcance para recobrar su estado *libre*, cede al instinto noble de su propia naturaleza. Cuando las penas tienen sólo por objeto la limitacion de la libertad, la infraccion de las privaciones en que consisten, hace desaparecer, en parte, los motivos que la disculpan completamente en el primer caso.

¿Es delito la *fuga* del procesado pendiente de causa?—El código no la castiga, de lo cual nace una razon de analogia, atendido el fin del quebrantamiento de condena, para que ésta no debiera considerarse como delito.

De esos dos hechos nos hemos ocupado en otra ocasion aunque ligeramente (4).

Extincion de la responsabilidad penal y civil.—Prescripcion de delitos y penas.

¿Por qué medios se extingue la responsabilidad *penal*?—1.º, por la muerte del reo en cuanto á las penas *personales*, siempre; y respecto á las *pecuniarias*, sólo cuando á su fallecimiento no hubiere recaido sentencia firme; porque despues de ésta, quedan obligados sus bienes y sus herederos; 2.º, por el cumplimiento de la condena; 3.º, por *amnistia*, la cual extingue por completo la pena y sus resultados, puesto que viene á ser el olvido y el perdón de los delitos; 4.º, por *indulto*, cuyos efectos no son tan extensos como los de la *amnistia*, estando limitados solamente al perdón de la pena (2); pero el indultado no podrá habitar por el tiempo que, á no haberlo sido, deberia durar la condena, en el lugar en que viva el ofendido, sin el consentimiento de éste, quedando en otro caso sin efecto el indulto acordado; 5.º, por el perdón del ofendido, cuando la pena se haya impuesto por delitos que no puedan dar lugar á procedimiento de oficio, como son los llamados *privados*, la *injuria*, la *calumnia*, el *estupro*, la *violacion* y otros; 6.º, por la prescripcion del delito, ó sea el trascurso del tiempo desde que el delito se cometió, que extingue el derecho del Estado á su persecucion; 7.º, por la prescripcion de la pena, que, á semejanza de la prescripcion del delito, hace caducar el derecho á que se cumpla la pena impuesta en sentencia firme, si concurren determinados requisitos.

¿A qué tiempo prescriben los *delitos* y las *faltas*?—Los delitos prescriben á los *veinte años*, cuando señalare la ley al delito la pena de muerte ó de cadena perpétua; á los *quince*, cuando señalare cualquier otra pena aflictiva; á los *diez*, cuando señalare penas correccionales. Exceptuáanse los delitos de calumnia, los de injuria y los cometidos por medio de la imprenta, (3) de los cuales, los primeros prescribirán al *año*; los segundos á los

(1) Gaceta del ministerio fiscal, (Véase el apéndice.)

(2) Las circunstancias que deben contener los expedientes de indulto y su tramitacion, pueden verse en la ley que regula el ejercicio de la prerogativa regia de 18 de Junio de 1870.

(3) Respecto á la prescripcion de los *abusos* de imprenta, hay que estar á las leyes y decretos especiales. El actual decreto no fija el término de la prescripcion de tales hechos.

seis meses, y los últimos prescribían, según el código á los tres meses; pero esto ya no rige, por ser objeto de una legislación especial. Las faltas prescriben á los dos meses.

Cuando la pena señalada sea compuesta, se estará á la mayor para la aplicación de las reglas comprendidas en el párrafo antecedente.

¿Cuándo comienza á contarse, y cuándo se interrumpe el tiempo de la prescripción?—El término de la prescripción comenzará á correr desde el día en que se hubiere cometido el delito; y si entónces no fuere conocido, desde que se descubra y se empiece á proceder judicialmente para su averiguación y castigo. Esta prescripción se interrumpirá cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo á correr de nuevo el tiempo de la prescripción, desde que aquél termine sin ser condenado, ó se paralice, á no ser por rebeldía del procesado.

CUADRO de la prescripción de los delitos y de las faltas.

DELITOS Y FALTAS.	TIEMPO DE LA PRESCRIPCION.
Las faltas prescriben á los	2 meses.
Los delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación que consistan en provocar directamente á la perpetración de los delitos comprendidos en el código, prescriben á los	3 meses. (1)
Los de injurias á los	6 meses.
Los de calumnia á los	12 meses.
Los menos graves á los	40 años.
Los graves á los	45 años.
Y de éstos, los castigados con la pena de cadena perpetua ó la de muerte en cualquiera de sus grados, á los	20 años.

¿Cuándo prescriben las penas?—Las penas impuestas por sentencia firme, prescriben: las de muerte y cadena perpetua á los veinte años; las demás penas allictivas á los quince años; las penas correccionales á los diez, y y las leves al año.

¿Desde qué época se cuenta el tiempo de esta prescripción, y cuándo se interrumpe?—El tiempo de esta prescripción comenzará á correr desde el día en que se notifique personalmente al reo la sentencia firme, ó desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta comenzado á cumplirse. Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo trascurrido para el caso en que el reo se presentare ó sea habido, cuando se ausentare á país extranjero, con el cual España no haya celebrado tratados de extradición ó, teniéndolos, no estuviere comprendido en ellos el delito; ó cuando cometiere otro antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar á correr nuevamente.

(1) Véase la nota última anterior.

CUADRO de la prescripcion de las penas.

PENAS.	TIEMPO DE LA PRESCRIPCION.
Las penas <i>leves</i> prescriben al.	1 año.
Las <i>correccionales</i> á los.	10 años.
Las <i>aflictivas</i> á los.	15 años.
De éstas, las de cadena perpétua y muerte á los. . . .	20 años.

¿Cómo y cuándo se extingue la responsabilidad civil?—La responsabilidad civil nacida de delitos ó faltas, se extingue del mismo modo que las demás obligaciones, con sujecion á las reglas del derecho civil, siendo por consiguiente aplicables al caso, todos los modos legales que el derecho civil reconoce para declarar extinguidas las obligaciones que nacen de los contratos y de los cuasi-contratos, de cuya materia nos hemos ocupado extensamente en la seccion de derecho civil, á donde remitimos al lector.

LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL.

De los delitos y sus penas.

Este libro, dedicado exclusivamente al delito y á su penalidad, está dividido en quince títulos, subdivididos en capítulos y éstos en secciones. En ellos se guarda un orden lógico y natural, comenzando por los delitos contra la *seguridad exterior del Estado*; siguiendo los que atentan contra el *Código fundamental* que constituye su manera de ser políticamente; luego los que se refieren á la *alteración del orden público*, comprendiendo en ellos, por su naturaleza especial, los que se cometen contra el *principio de autoridad*; continúan las *falsedades* en sus múltiples manifestaciones, por lo que afectan y perjudican á la confianza y al crédito público, bases de la contratación general; á seguida los que pueden dar ocasion á que sufra graves daños la *salud pública*, los cometidos por medio de rifas y *juegos ilícitos*, y por los empleados públicos en el *ejercicio de sus cargos*; entrando despues á tratar de los delitos que se cometen contra los individuos, ora lesionando su persona *física*, su personalidad *moral*, su estado civil, su libertad y seguridad personal, ora atacando la *propiedad* de los mismos, por tantos y tantos medios punibles que ha inventado la perversidad humana para menoscabarla, aprovechándose, ó no, el delincuente, de tales perjuicios. Termina el libro ocupándose de la *imprudencia temeraria*, y dictando disposiciones de aplicacion general para todos sus títulos.

Tal es el orden que nos proponemos seguir nosotros tambien, consignando únicamente la parte principal y más interesante de cada capítulo, por no sernos posible entrar en detalles minuciosos, si no hemos de traspasar el plan y carácter superficial de la obra.

¿Cómo se dividen los delitos, segun las teorías antiguas?—En *públicos* y *privados*, conformándose esta division con los principios del derecho romano. Llamábanse *públicos* aquéllos que podian ser acusados por todos los ciudadanos; y *privados*, los que sólo podian ser perseguidos por el ofendido ó sus parientes. Esta division, si bien facilita el estudio del derecho penal, no fué seguida por el código, porque ha sido considerada como inexacta. Otros la admiten para dividir en dos grandes grupos la escala de los delitos, comprendiendo, en los llamados *públicos*, á todos los que afectan más directa y especialmente á la sociedad; y *privados* á los que lastiman en primer término y preferentemente, al individuo. Pero esta division no es realmente exacta. Ningun delito deja de afectar, en más ó en menos, el orden jurídico, y por consiguiente, el interés del Estado y de los asociados. Por manera que todos los delitos tienen algo de carácter *público*, y algo de carácter *privado*, quedando, pues, demostrada la inexactitud de la division.

TÍTULO PRIMERO.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR DEL ESTADO.

¿Qué delitos castiga el código en tal sentido?—Los de traicion, los que comprometen la paz y la independencia del Estado, los delitos contra el derecho de gentes, y los de piratería.

¿Quiénes, y con qué hechos, cometen el delito de traicion?—Los nacionales y los extranjeros, según los actos que ejecuten.

Comete delito de traicion el español que: 1.º, indujere á una potencia extranjera á declarar guerra á España, ó se concertare con ella para el mismo fin; 2.º, facilitare al enemigo la entrada en el reino, la toma de una plaza, puesto militar, buque del Estado ó almacenes de boca ó guerra del mismo; sedujere tropa española, ó que se hallare al servicio de España, para que se pase á las filas enemigas ó deserte de sus banderas, estando en campaña; 3.º, reclutare en España gente para hacer la guerra á la patria bajo las banderas de una potencia enemiga; 4.º, el que tomare las armas contra la patria bajo banderas enemigas, reclutare en España gente para el servicio de las mismas, en el caso de que no fuese para que aquella tome parte directa en la guerra contra España; suministrarle á las tropas de una potencia enemiga caudales, armas, embarcaciones, efectos ó municiones de boca ó guerra, ú otros medios directos y eficaces para hostilizar á España, ó favoreciere el progreso de las armas enemigas, facilitare al enemigo planos de fortalezas ó de terrenos, documentos ó noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar á España ó de favorecer el progreso de aquellas armas, y que en tiempo de guerra impidiera que las tropas nacionales reciban auxilios, datos y noticias convenientes; 5.º, el ministro de la Corona que, sin que el rey esté autorizado por una ley especial, según previene el art. 74 de la Constitucion, refrende decreto: 1.º, enajenando, cediendo ó permutando cualquiera parte del territorio español; 2.º, admitiendo tropas extranjeras en el reino, y 3.º, ratificando tratados de alianza ofensiva que hayan producido la guerra de España con otra potencia, ratificando tratados de igual indole que no hayan producido la guerra de España con otra potencia, y ratificando otros en que se estipulare dar subsidios á una potencia extranjera.

La penalidad varía desde la muerte al presidio mayor, según la gravedad é importancia de los hechos.

¿Qué dispone el código expresa y especialmente, acerca del delito *frustrado*, de la *tentativa* y de la *conspiracion* para cometer esta clase de delitos?—Les señala una penalidad mayor que la correspondiente á los mismos, si se les aplicaran las reglas generales que rebajan un grado la pena del *frustrado* y dos la de la *tentativa*; y pena expresamente la *conspiracion*, que no es punible por regla general. Los delitos *frustrados* de los tres primeros números, se castigan como consumados, y las *tentativas* con la pena inferior en un grado.

Delitos contra la paz y la independencia del Estado.

¿Qué hechos son punibles por comprometer la paz y la independencia del Estado?—La publicacion ó ejecucion por un ministro *eclesiástico*, en el

ejercicio de su cargo, de las bulas, breves ó despachos de la corte pontificia, ó de otras disposiciones ó declaraciones, que atacaren la paz ó la independencia del Estado, ó se opusieren á la observancia de las leyes, ó provocaren su inobservancia, cuya responsabilidad alcanza al *lego* que las ejecutare; la introduccion, publicacion ó ejecucion de órdenes de un gobierno extranjero, ofensivas á la nacion; la ejecucion de actos ilegales que provoquen ó den motivo á una declaracion de guerra contra España, ó expusieren á los españoles á experimentar vejaciones ó represalias, aun cuando ni éstas, ni dicha declaracion, lleguen á tener efecto; la violacion de una tregua ó armisticio en tiempo de guerra, y la tentativa para pasar á pais enemigo estando prohibido. El párroco que predicó contra la ley de matrimonio civil, cuando ésta estaba vigente, está comprendido en este párrafo, porque, segun el Tribunal Supremo, esos y otros actos análogos, constituyen verdadera oposicion á la observancia de una ley obligatoria (1). En igual declaracion se encuentra comprendido el hecho de negarse los párrocos á dar sepultura eclesiástica al cadáver de una persona, sólo por haber muerto casada civil y no canónicamente (2).

¿Es delito, segun el código de 1870, la publicacion ó ejecucion de documentos de la corte pontificia, sin el pase real ó *regium execuat*?—No: el de 1850 exigia ese requisito, que se cumplia previo dictamen del Consejo de Estado. Mas como aquél partía del principio de la libertad religiosa, no creia necesaria la falta de dicho permiso para que las bulas, breves y rescriptos que fuesen punibles por su contenido, dejasen de constituir delito (3).

Atentan tambien contra la paz y la independencia del Estado el funcionario público que, abusando de su cargo, comprometiére la dignidad ó los intereses de la nacion española, de un modo no expresado especialmente en los casos enumerados; el que, sin autorizacion bastante, levantara tropas en el reino para el servicio de una potencia extranjera, cualquiera que sea el objeto que se proponga, ó la nacion á quien intente hostilizar, ó destinar buques al corso; el que en tiempo de guerra tuviere correspondencia con pais enemigo ú ocupado por sus tropas, usando cifras ó signos, ó la siguiera en la forma comun y el gobierno no hubiere prohibido, aunque dirija la correspondencia por pais amigo ó neutral, para eludir la ley.

La penalidad fluctúa entre el *extrañamiento temporal*, la *prision*, *multa* y *arresto*, segun los casos, á la que va acompañada la inhabilitacion, cuando es funcionario público el delincuente.

Delitos contra el derecho de gentes.

Dáse este nombre, aunque bien impropia é inadecuadamente, á los delitos cometidos contra la persona de los monarcas ó jefes de otros Estados, residentes en España; á la violacion de su inmunidad personal y de su domicilio, cuando han sido recibidos con carácter oficial, y la de los representantes de las potencias extranjeras, siempre que en la legislacion del pais á que unos y otros pertenezcan, tengan señalados dichos delitos una pena.

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Enero de 1874.

(2) Idem de 6 de Octubre del mismo año.

(3) En la próxima reforma, encaminada á armonizar el principio de la mera tolerancia religiosa con las prescripciones del código, es probable que el hecho indicado en la pregunta, sea objeto de correccion penal.

lidad recíproca, estando sujetos, en caso contrario, á las reglas generales del código.

Las penas correspondientes guardan relacion con la naturaleza y gravedad de los hechos que se cometan contra dichas personas.

Delitos de piratería.

Ni el código antiguo, ni el moderno, definen la *piratería*. No es, en efecto, necesaria su definicion, porque la idea que representa esta palabra está al alcance de las personas ménos inteligentes. Llámase *pirata* al que roba en la mar, con buque armado; y *piratería* al acto de ejecutar el delito, y á la punible ocupacion en que emplea su vida el pirata. El *Diccionario de la Lengua* la define, diciendo que es *el robo y apresamiento de las embarcaciones que andan por el mar*. Y como al delito de *piratería* pueden ir unidos otros cometidos contra las personas, el código, considerando las diferentes circunstancias y acciones que pueden concurrir, aprecia los hechos y los castiga, teniendo en cuenta: 1.º, si el delito de *piratería* se cometió contra españoles ó súbditos de una nacion amiga ó enemiga; 2.º, si en su comision se hubiere apresado alguna embarcacion al abordaje, ó haciéndola fuego; 3.º, si fuere acompañado de asesinato, homicidio ó lesiones, ó del atentado contra la honestidad, como la violacion y otros abusos; 4.º, si los piratas han dejado algunas personas sin medio de salvarse.

En todo caso el capitán ó patron pirata, incurre en la pena de cadena perpétua á muerte, descendiendo para los demás, segun las circunstancias y hechos que hayan concurrido, hasta el presidio mayor, y segun que sean españoles ó extranjeros los apresados, beligerantes ó no beligerantes.

TITULO II.

DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION.

Bajo este epígrafe se designan los delitos de *lesa majestad*, denominacion no empleada en el código de 1850, *contra las Cortes, sus individuos, el consejo de ministros, la forma de gobierno y los cometidos por funcionarios públicos y por los particulares, con motivo de los derechos individuales y el libre ejercicio de los cultos*.

¿Qué hechos comprenden los delitos de *lesa majestad*?—Los actos que tienden á atentar, directa ó indirectamente, contra la persona, la honra, la libertad y la seguridad del rey ó jefe del Estado, su inmediato sucesor, y del regente del reino. Compréndense en esa agrupacion, 1.º, la *tentativa*, el delito *frustrado* y la muerte del rey, del inmediato sucesor á la corona, del rey consorte y del regente del reino, así como también la *proposicion* y la *conspiracion* para cometer estos delitos, que se penan expresamente en el código; 2.º, la privacion de la libertad personal del monarca, la violencia é intimidacion ejercidas en el mismo, y las lesiones graves que se le causen; 3.º, las injurias y amenazas que se le dirijan en su presencia, y fuera de ella, por escrito y con publicidad, ó en cualquiera otra forma; 4.º, la invasion violenta de su morada, especie de allanamiento con fin injusto, en forma irreverente y de desacato grave á su inviolabilidad constitucional. La penalidad es grave, como graves son los

hechos á que se contrae, pudiendo llegar á la pena de muerte, en varios casos.

¿Cuándo tiene lugar, y qué hechos constituyen los delitos *contra las Cortes*?—Cuando, vacante la corona ó imposibilitado el rey, los individuos de su familia, los ministros, las autoridades y demás funcionarios impidieren á las Cortes reunirse ó coartaren su derecho para nombrar tutor al rey menor ó para elegir la regencia del reino, ó no obedecieren al Regente nombrado, despues de haber prestado ante las Cortes juramento de guardar la Constitucion y las leyes.

Cometen tambien este delito los ministros, por ser el rey irresponsable, cuando éste no cumpliera con el precepto constitucional de reunir las Cortes todos los años, convocándolas, á más tardar, para el 4.º de Febrero, y de tenerlas reunidas á lo ménos cuatro meses cada año, sin incluir en este tiempo el que invirtieren en su constitucion; cuando estuviere reunido uno de los cuerpos colegisladores sin estarlo el otro, excepto el caso en que el Senado se constituya en tribunal; cuando firmaren real decreto de disolucion de uno ó de ambos cuerpos colegisladores que no tengan la convocatoria de las Cortes para dentro de tres meses, ó las suspendieren, sin consentimiento de éstas, más de una vez en una legislatura (1).

Son tambien punibles la invasion violenta, ó con intimidacion, del palacio de ambos cuerpos colegisladores, por ser un atentado á la magestad é independencia del Poder legislativo; las manifestaciones, ú otra clase de reuniones al aire libre, en los alrededores de aquéllos, cuando estén abiertas las Cortes, porque es una especie de amenaza que puede coartar la libertad de las de sus individuos y de las discusiones: la tentativa para penetrar en ellas y presentar en persona, ó colectivamente, peticiones á las mismas, por estar prohibida esa forma de peticion; las injurias graves que se les dirijan hallándose en sesion, ó á alguna de sus comisiones, en los actos públicos; la perturbacion grave del orden de las sesiones; las injurias ó amenazas en los mismos actos á los diputados y senadores, y las proferidas fuera del local por las opiniones manifestadas ó votos emitidos en la sesion; y el impedir á sus individuos que concurran al Congreso ó Senado, y el coartarles la libre manifestacion de sus ideas, empleando la fuerza, la intimidacion ó la amenaza. Todos estos hechos atacan evidentemente el ejercicio de la funcion legislativa encomendada á las Cortes, cuya independencia y cuya libertad en todos y cada uno de sus individuos es condicion esencialísima para la marcha y desenvolvimiento del régimen constitucional.

¿Qué otras garantías sanciona el código en favor de la inmunidad de los diputados?—Considera y castiga como delito, la detencion ó procesamiento de un diputado ó senador, llevadas á efecto por un funcionario público, cuando estén abiertas las Cortes, sin haber obtenido permiso del respectivo cuerpo á que pertenezca, á no ser hallado *in fraganti* (2): la ejecucion de una sentencia dictada contra aquéllos en proceso seguido sin el permiso indicado ó sin que el respectivo cuerpo autorice la ejecucion de dicha sentencia. En el primero de estos casos debe darse cuenta inmediatamente á las Cortes de la detencion del cogido *in fraganti*, si estuvieren abiertas, ó tan luego como se reunieran, en el supuesto contrario. A estas garantías suele llamarse la inmunidad personal del diputado.

¿Quiénes, y por qué hechos atacan contra el Consejo de ministros?—

(1) Deben tenerse presentes los preceptos de la Constitucion acerca de esta materia.

(2) Se entiende por reo *in fraganti*, aquel que es sorprendido en el acto de cometer el delito, ó es detenido y perseguido inmediatamente despues de cometerlo, mientras dura la persecucion, y el delincuente no se ponga fuera del alcance de sus perseguidores. Tambien se considera delincuente *in fraganti*, al que se ocupan efectos ó instrumentos de un delito que hicieren presumir su participacion en él. (Ley de Enjuiciamiento criminal).

4.º, los que invadiesen violentamente ó con intimidacion, el local donde esté constituido y deliberando el Consejo; 2.º, los que coartaren ó por cualquier medio pusieren obstáculo á la libertad de los ministros reunidos en Consejo; 3.º, los que los calumniaren, injuriaren ó amenazaren gravemente, estando constituidos en Consejo; 4.º, los que emplearen fuerza ó intimidaciones graves para impedir á un ministro concurrir al Consejo. La provocacion al duelo se reputará siempre amenaza grave, por la perturbacion que puede ofrecer y el atentado que constituye al poder ejecutivo, cometido en la persona de uno de sus ministros.

Delitos contra la forma de gobierno.

¿Quiénes cometen esta clase de delitos?—Los que ejecutaren cualquiera clase de actos ó hechos encaminados directamente á conseguir por la fuerza, ó fuera de las vías legales, uno de los objetos siguientes: 1.º, reemplazar el gobierno monárquico-constitucional por un gobierno monárquico-absoluto ó republicano; 2.º, despojar en todo ó en parte, á cualquiera de los cuerpos colegisladores, al rey, al regente ó la regencia, de las prerogativas y facultades que les atribuye la Constitucion; 3.º, variar el orden legítimo de sucesion á la corona, ó privar á la dinastía de los derechos que la Constitucion le otorga; 4.º, privar al padre del rey, ó en su defecto á la madre, y á falta de ambos al Consejo de ministros, de la facultad de gobernar provisionalmente al reino hasta que las Cortes nombren la regencia, cuando el rey se imposibilitare para ejercer su autoridad ó vacare la corona, siendo de menor edad el inmediato sucesor.

Delinquen tambien contra la forma de gobierno: 1.º, los que en las manifestaciones políticas, en todas clases de reuniones públicas ó en sitios de numerosa concurrencia, dieren vivas ú otros gritos que provocaren aclamaciones directamente encaminadas á la realizacion de los objetos determinados anteriormente; 2.º, los que en dichas reuniones y sitios, pronunciaran discursos, leyeren, repartieren impresos, ó llevaran lemas y banderas que provocaren directamente á la realizacion de los objetos mencionados; 3.º, los funcionarios públicos que dieren cumplimiento á mandato ú orden que el rey dictare en el ejercicio de su autoridad, sin estar firmado por el ministro á quien corresponda.

La penalidad varia segun el grado de intervencion de los delinquentes, siendo más grave la responsabilidad de los que han promovido, sostenido ó dirigido el movimiento insurreccional, y aun entre éstos, la de las personas constituidas en autoridad civil ó eclesiástica, que la de los subalternos y meros ejecutores. Las circunstancias de haber habido combate y causado daños, influyen tambien en la cuantía de la pena, que desde el *destierro* puede elevarse á la de *muerte*.

Delitos contra los derechos individuales, que garantiza la constitucion.

Bajo este epigrafe, se ocupa el código en dos secciones, de tales hechos, segun que se cometan por los particulares ó por los funcionarios públicos, contra los derechos llamados *individuales*, por unos, y *libertades necesarias* por otros; y son, el de *reunion*, el de *asociacion*, el de *imprenta*, el de *libertad de conciencia*, el de *inviolabilidad del domicilio*, el de *seguridad personal*, y el *secreto de la correspondencia*.

Delitos cometidos por los particulares.

Para poder apreciar esta clase de delitos deben tenerse en cuenta las circunstancias que es necesario concurren en toda reunion, manifestacion y asociacion, para que se reputen *pacíficas y lícitas*, de las cuales se viene en conocimiento, desde el momento en que se especifican aquellas calificaciones.

No son reuniones ó manifestaciones *pacíficas* segun el código de 1870; 1.º, las que se celebraren con infraccion de las disposiciones de policia, establecidas con carácter general ó permanente, en el lugar en que la reunion ó manifestacion tenga efecto; 2.º, las reuniones al aire libre ó manifestaciones políticas que se celebraren de noche; 3.º, las reuniones ó manifestaciones á que concurre un número considerable de ciudadanos con armas de fuego, lanzas, sables ú otras armas de combate; 4.º, las reuniones ó manifestaciones que se celebraren con el fin de cometer alguno de los delitos penados en el código, ó en las que, estando celebrándose, se cometiere alguno de los delitos de rebelion, sedicion, desórden ó atentado contra la autoridad.

El hecho de concurrir con armas, y la comision de algun delito durante la celebracion del acto, es tambien punible (1).

Son asociaciones *lícitas* todas las que no son *ilícitas*. Y se reputan *ilícitas* por el expresado código; 1.º, las que por su objeto ó circunstancias

(1) El siguiente proyecto de ley sobre reuniones públicas, que interesa conocer, por lo que pueda afectar á las disposiciones del Código penal, y que probablemente llegará á ser ley en esta legislatura, fué leído por el ministro de la Gobernacion, en el Congreso, el día 9 de Marzo de 1878. Lo transcribimos á continuacion por su notoria importancia.

Artículo 1.º El derecho de reunion pacífica que concede á los españoles el art. 13 de la Constitución, puede ejercitarse por todos, sin más condicion, cuando la reunion haya de ser pública, que la de dar los que la convoquen conocimiento escrito y firmado del objeto, sitio, día y hora de la reunion al gobernador civil en las capitales de provincia, y á la autoridad local en las demás poblaciones.

Art. 2.º Por reunion pública se entiende, para los efectos de esta ley, la que haya de constar de más de 20 personas, y haya de celebrarse en edificio donde no tengun su domicilio habitual los que la convoquen.

Art. 3.º Las reuniones públicas, procesiones cívicas, séquitos y cortejos de igual índole, necesitan para celebrarse en las calles, plazas, paseos ó cualquier otro lugar de tránsito, el permiso previo y por escrito de las autoridades indicadas en el art. 1.º

Art. 4.º A toda reunion pública puede asistir la autoridad personalmente ó por medio de sus delegados. En caso de asistir personalmente, ocupará el sitio de preferencia, pero sin presidir ni mezclarse en las discusiones.

Art. 5.º La autoridad mandará suspender ó disolver en el acto:

Primero. Toda reunion pública que se celebre fuera de las condiciones de esta ley.

Segundo. Todas aquellas que, habiéndose convocado con arreglo á ella, traten de objetos no consignados en el aviso, ó se verifiquen en sitio diverso del designado.

Tercero. Las que en cualquier forma embaracen el tránsito público.

Cuarto. Las definidas y enumeradas en el art. 189 del Código penal, y

Quinto. Aquéllas en que se cometan ó se trate de cometer cualquiera de los delitos especificados en el tit. III lib. II del mismo código; comprende la rebelion, la sedicion, los atentados, desacatos y desórdenes públicos.

En todos estos casos, la autoridad dará inmediatamente cuenta al gobierno, y en los dos últimos, pasará además al tribunal competente el oportuno tanto de culpa.

Art. 6.º No están sujetas á las prescripciones de esta ley:

Primero. Las procesiones religiosas y las reuniones de igual índole, en los templos y en los cementerios.

Segundo. Las que se verifican en asociaciones y establecimientos autorizados.

Tercero. Las que tienen lugar en las funciones de teatros y demás espectáculos públicos.—*Romero Robledo.*

sean contrarias á la moral pública; 2.º, las que tengan por fin cometer alguno de los delitos penados en dicho Código (4).

Los fundadores, directores y presidentes de tales asociaciones, son responsables, aún cuando la asociacion no hubiera llegado á establecerse, así como tambien los meros individuos de las mismas.

Son tambien responsables criminalmente los que fundaren establecimientos de enseñanza que, por su objeto y circunstancias, sean contrarios á la moral pública.

¿Qué deberes tienen los presidentes de toda asociacion?—Deben poner en conocimiento de la autoridad local (2) su objeto y estatutos, ocho dias antes de su primera reunion, y veinticuatro horas antes de la sesion respectiva; el lugar donde han de celebrarse éstas, aunque llegare á cambiarse el primeramente elegido; 2.º, permitir á la autoridad, ó á sus agentes, la entrada ó asistencia á las sesiones, y levantarlas á la segunda intimacion que con ese objeto les hagan aquéllos.

Estas omisiones y la celebracion de nueva junta, despues de haber sido suspendida la anterior, constituyen delito penado, si la autoridad judicial no ha dejado sin efecto la suspension acordada.

¿Qué deberes son inherentes á la prensa periódica?—Los directores, editores é impresores, en sus respectivos casos, debian poner en conocimiento de la autoridad local, antes de salir á luz la publicacion, el nombre del director y del editor, si lo tuviere. Pero esta disposicion del código, aunque acertada en el fondo, fué modificada algun tanto por los decretos que rigen y castigan los abusos cometidos por medio de la imprenta (3).

Tales faltas, del mismo modo que las anteriores, así como tambien las publicaciones clandestinas, son objeto de correccion penal en dichos decretos.

Llámanse *clandestinas* las publicaciones que no llevan pie de imprenta ó lo tienen supuesto.

Delitos cometidos por los funcionarios públicos, contra los derechos individuales.—Garantías de la libertad individual; de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

¿A qué personas y qué hechos castiga el código en esta seccion?—Varios, y principalmente los siguientes: 1.º, la arrogacion de atribuciones judiciales hecha por un funcionario público que impusiere algun castigo equivalente á pena personal, porque esto es usurpar las atribuciones del poder judicial, á quien se aplicará la pena arbitrariamente impuesta, si se hubiere ejecutado, y la *inferior*, no habiéndose cumplido aquélla, sin perjuicio de las demás que el código especifica; 2.º, castiga tambien á las autoridades y funcionarios civiles y militares que, aún hallándose en suspenso las ga-

(1) Mucho se ha discutido en las Cortes y en la prensa acerca de si la asociacion internacional de trabajadores, era *licita* ó *ilícita*, por ser algunas de sus doctrinas, segun algunos, contrarias á la moral pública, y por tanto, comprendida dicha asociacion entre las que califica el código penal de *ilícitas*. El criterio politico de los partidos militantes ha influido en estas apreciaciones, é influirá siempre, sin resultado obligatorio en la práctica, hasta tanto que los tribunales de justicia establezcan y sancionen con sus fallos la verdadera y legal inteligencia del art. 198 del referido código.

(2) Por Real orden de 14 de Junio de 1871 se declaró que el conocimiento debe darse á los alcaldes, aún cuando sean de capitales de provincia, no bastando, por consiguiente, dárselo á los gobernadores, como se ha creído en alguna ocasion.

(3) Véase el apéndice.

rantías constitucionales, establecieren y á los que la aplicaren, una pena-
 lidad distinta de la prescrita previamente por la ley, para cualquier género
 de delitos; 3.º, á la autoridad judicial que entregare indebidamente una
 causa criminal ó un reo á otra autoridad ó funcionario militar ó adminis-
 trativo, que *ilegalmente* se la reclamare; 4.º, al funcionario público que de-
 tuviere á un ciudadano, á no ser por *razon de delito*, no estando en suspen-
 so las garantías constitucionales, cuya penalidad comprende desde la multa
 á la *reclusion temporal*, segun que la detencion no haya excedido de tres, *quince*
 ó *treinta dias*, ó hubiere pasado de este término y aun del de un año; 5.º, al
 funcionario que, no siendo autoridad judicial, y no estando en *suspense las*
garantías constitucionales, detuviere á un ciudadano por *razon de delito*, y
 no lo pusiere á disposicion de la autoridad judicial en las *veinticuatro horas*
 siguientes á la en que se hubiere hecho la detencion; 6.º, al que dilatare el
 cumplimiento de un mandato judicial para que se ponga en libertad á un
 preso ó detenido que tuviere á su disposicion (4).

¿Qué hechos ú omisiones cometidas por los jefes de los establecimien-
 tos penales, en relacion con los delitos anteriores, son punibles como
 atentatorios de la *libertad personal* de los ciudadanos?—Los siguientes:
 1.º, recibir en calidad de detenido á cualquiera ciudadano, y dejar tras-
 currir veinticuatro horas sin ponerlo en conocimiento de la autoridad ju-
 dicial; 2.º, no poner en libertad al detenido que no hubiere sido cons-
 tituido en prision en las *setenta y dos horas* siguientes á la en que aquél
 hubiere puesto la detencion en conocimiento de la autoridad judicial; 3.º,
 recibir en calidad de preso á un ciudadano, á no ser en virtud de
 mandamiento judicial, ó el retenerle en prision despues de las *setenta y*
dos horas de haberle sido entregado en tal concepto, ó habersele notifica-
 do el auto de prision, sin que, durante este tiempo, le hubiere sido notifi-
 cado tambien el auto ratificando aquél; 4.º, ocultar un preso á la au-
 toridad judicial; 5.º, tener un preso ó sentenciado incomunicado ó en lu-
 gar distinto del que le corresponda, sin mandato de la autoridad judicial;
 6.º, negar á un detenido ó preso, ó á quien le representare, certifica-
 cion de su detencion ó prision, ó no dar curso á ninguna solicitud
 relativa á su libertad; 7.º, retener á un ciudadano en el establecimiento
 penal, despues de tener noticia oficial de su indulto, ó despues de haber ex-
 tinguido su condena.

¿Qué funcionarios del poder judicial cometen á su vez el delito de
 atentado á la seguridad personal, de que nos venimos ocupando?—Delin-
 quen igualmente, y por tal razon deben ser suspensos, las *autoridades ju-*
diciales y los secretarios y escribanos de los tribunales, en los casos si-
 guientes: la autoridad judicial cuando: 1.º, no pusiere en libertad ó no
 constituyere en prision, *por auto motivado*, al ciudadano detenido dentro
 de las *setenta y dos horas* siguientes á la en que aquél hubiere sido puesto
 á su disposicion; 2.º, no *ratificare* el auto de prision ó no lo dejare sin
 efecto, dentro de las *setenta y dos horas* siguientes á la en que aquél hu-
 biere sido dictado; 3.º, fuera de los casos expresados en los dos números
 anteriores, cuando retuviere en calidad de preso al ciudadano cuya soltura
 proceda; 4.º, cuando decretare ó prolongare indebidamente la comunica-
 cion de un preso. Los secretarios y escribanos delinquen cuando: 1.º, de-
 jaren trascurrir el término fijado de *setenta y dos horas*, sin notificar al
 detenido el auto constituyéndole en prision ó dejando sin efecto la deten-

(1) La detencion forzosa de los mendigos para encerrarlos en un hospicio, y la de
 las personas indocumentadas, sólo por el hecho de estarlo, constituyen verdaderos deli-
 tos de *detencion ilegal*, en sentir del comentarista Viada y Vilaseca, cuando no están en
 suspense las garantías constitucionales. El Tribunal Supremo no ha tenido ocasion de re-
 solver esta cuestion; al ménos no tenemos conocimiento de que la haya resuelto.

cion; 2.º, retrasaren *indebidamente*, la notificación del auto alzando la incomunicación ó poniendo en libertad á un preso; 3.º, dilataren el dar cuenta á los tribunales de cualquiera solicitud de un detenido ó preso, ó de su representante, relativa á su libertad. Si la demora á que se refieren los números anteriores hubiere durado más de *un mes*, la penalidad se agrava.

Son objeto tambien de este título, como delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los derechos individuales consignados en la Constitución, la *entrada en el domicilio* de un español ó extranjero, el *registro de sus papeles y efectos*, la *detención de la correspondencia* privada, el *destierro*, *mutacion de domicilio ó residencia*, *deportación* y *extrañamiento* de los ciudadanos, cuando tiene lugar contra las garantías constitucionales; el *mandar pagar y exigir impuesto general*, provincial ó municipal *no autorizados* legalmente, y el *prestar auxilio y cooperación* para efectuar estas exacciones; la *expropiación* de los bienes de un ciudadano sin mandamiento judicial y sin los requisitos legales; el *prohibir ó impedir* á un ciudadano, *no detenido, ni preso*, concurrir á cualquiera reunión ó asociación *pacífica*, formar parte de las *licitas*, y *dirigir peticiones* á las Cortes, al rey ó á las autoridades, ordenar la *disolución* de aquéllas, cuando sean pacíficas, la *suspensión* de las lícitas y la *clausura* de cualquier establecimiento privado de enseñanza, á no ser por motivos racionalmente suficientes; y por fin, otros hechos ménos importantes de que no podemos ocuparnos detalladamente.

¿Cuándo y con qué formalidades *debe y puede* practicarse la *entrada en el domicilio ajeno*, el *registro de papeles* de un ciudadano ó extranjero, y la *detención de la correspondencia* privada, para que no se cometa delito?—Sólo pueden tener lugar estos actos en las situaciones siguientes: estando en suspenso las garantías constitucionales, ó con consentimiento de los interesados, ó por virtud de mandamiento judicial. Sin embargo de esta regla general, fundada en las prohibiciones y garantías de la Constitución, en los casos urgentes de *incendio*, *inundación*, *agresión ilegítima* ó *peligro análogo*, *ocultación* de un delincuente en su propia casa, ó *para auxiliar á personas* que desde dentro pidan socorro, podrá entrarse en el domicilio ajeno. Fuera de estos determinados casos, como dicho queda, el funcionario público ó autoridad judicial que entre *de noche* en el domicilio de un español ó extranjero, sin su consentimiento, incurre en responsabilidad criminal. Cuando preceda mandamiento de juez competente, la entrada debe verificarse, *de día*.

El *registro de papeles y efectos*, tambien debe decretarse por dicha autoridad y ejecutarse *de día*, presenciándolo el interesado ó un individuo de su familia, y en su defecto, dos vecinos del mismo pueblo. Cuando falta el mandato judicial, y aún existiendo, no se ejecuta con los requisitos expresados, se incurre en responsabilidad penal, á no ser que, según ya hemos manifestado, estén suspendidas legalmente las garantías constitucionales.

La *detención y apertura de la correspondencia* tendrá lugar solamente por virtud de orden judicial y á presencia del procesado. El funcionario público que, siendo autoridad judicial, detuviese ó abriese la correspondencia privada, procedente del correo, es reo de esta clase de delitos, porque la Constitución sanciona que en ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la autoridad *gubernativa*, la correspondencia confiada al correo, ni detenerse la telegráfica, á no ser por mandamiento judicial.

El *cambio de domicilio ó de residencia* debe ser objeto de una sentencia

firme. El funcionario público que, estando en suspenso las citadas garantías, desterrase á un ciudadano á una distancia mayor de 250 kilómetros de su domicilio, á no ser en fuerza de dicha sentencia, y el que, *no estando en suspenso* aquellas garantías, le compeliere á mudar de domicilio ó residencia, es autor de delito contra los derechos individuales, como lo es tambien el funcionario público que *deportare ó extrañare* del reino á una persona, sin mandato judicial; porque la Constitución previene que esas limitaciones de la *libertad individual* no pueden efectuarse sin orden de juez competente, consignada en una sentencia ejecutoria; y que, aun en suspenso las garantías y rigiendo la ley de orden público, no puede el gobierno *deportar, extrañar ni desterrar* á distancia mayor de 250 kilómetros.

La imposición y exacción de los impuestos generales, provinciales ó municipales, no votados ó autorizados por las Cortes, Diputaciones ó Ayuntamientos, son ilegítimas, y constituyen delitos, cuya responsabilidad alcanzará á los ministros, autoridades y funcionarios que hayan intervenido en ellas, y será mayor ó menor, segun que se hubieren ó no hecho efectivos, porque la Constitución declara que nadie está obligado á pagarlos cuando faltan aquellas circunstancias.

La expropiación y perturbación de la posesión de bienes es un hecho punible tambien, cuando no está acordado por una sentencia firme y no se cumplen los requisitos que las leyes mandan que precedan á la expropiación como el *justiprecio* y la *indemnización*.

¿Puede ser *disuelta* una reunión ó manifestación ó *suspendidas* las sesiones de una asociación?—Sí; pero el funcionario público encargado de hacerlo debe intimar dos veces consecutivas la orden de disolución ó suspensión, antes de emplear la fuerza, á no ser en el caso de que hubiere precedido agresión violenta por parte de los reunidos, manifestantes ó asociados. De lo sucedido, así como tambien de la suspensión de toda asociación *ilícita* ó de las sesiones de cualquiera otra, debe dar cuenta á la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al hecho, manifestándole las causas que hayan motivado la providencia, aumentando su responsabilidad si á ello se negare.

Cuando la disolución ó suspensión no tiene lugar con estas formalidades, el funcionario público incurre en responsabilidad cometiendo un delito contra los derechos individuales de *asociación lícita* y manifestación pacífica (1).

Delitos religiosos.

Bajo esta denominación comprendía el código de 1850, partiendo de la base constitucional, entónces vigente, de la *unidad religiosa*, católica-apos-

(1) Como complemento de esta materia, debemos decir que cuando rige la ley de orden público, lo cual tiene lugar siempre despues de la suspensión de las garantías constitucionales, las atribuciones extraordinarias que concede á las autoridades no consienten la arbitrariedad y el capricho en sus disposiciones, porque, como dice el Tribunal Supremo en los considerandos de una sentencia publicada en la *Gaceta* de 21 de Enero de 1877, la expresada ley de 23 de Abril de 1870 fué dictada para conservar el orden público y no para molestar á las personas, cuando ni las circunstancias, ni el interés público lo exigen. «Considerando, dice ademas, que cuando la referida ley reviste de facultades extraordinarias á las autoridades, no por ello les faculta para usar de ellas sin causa ni motivo alguno, sino que, como expresa el artículo citado, deben tener por objeto el mantener y restablecer el orden público, por lo que, cuando no existe tal razon, bien porque no se haya éste alterado, ó bien porque no haya recelo, ni temor de que suceda, falta entónces la razon de ejercer las facultades extraordinarias concedidas solamente en defensa de la seguridad del Estado».

He aquí el comentario más legalmente autorizado sobre el espíritu y fines de la ley de orden público, no comprendido, desgraciadamente, por todas las autoridades.

Más adelante nos ocupamos de lo que se entiende por asociaciones lícitas, manifestaciones y reuniones legales.

tólica-romana, que era la oficialmente reconocida por el Estado, todas las acciones u omisiones voluntarias que el legislador juzgaba contrarias al dogma y disciplina de la Iglesia, erigiéndolas en delito y penando hasta la tentativa y los actos públicos dirigidos á abolir aquella unidad.

Promulgada la Constitución de 1869, que rompió con la tradición secular de aquel principio *unitario y exclusivo*, proclamando la *libertad religiosa* declaró que, si bien era obligación de la nación española el mantenimiento del culto y de los ministros de la religión católica, garantizaba también á los extranjeros residentes en España el ejercicio público ó privado de cualquier otro culto, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Y que si algunos españoles profesaban otra religión que la católica, era aplicable á los mismos lo dispuesto en favor de los extranjeros, relativamente al culto público ó privado de cualquiera religión, con las limitaciones expresadas. Por eso el código reformado en 1870, guardando consonancia con el precepto constitucional de *libertad religiosa*, modificó lo establecido en 1850, y bajo el epígrafe de *delitos contra el libre ejercicio de los cultos*, comprendió los actos y hechos, que luego especificaremos, porque todavía no ha sido modificado ni alterado expresa y especialmente el capítulo de los mismos, como es necesario que lo sea, si ha de guardar consonancia dicho código con la nueva Constitución de 1876 en esta materia.

Y por eso nosotros decíamos en la segunda edición de este libro, publicada en aquellos tiempos, lo siguiente: «La libertad religiosa y la garantía del ejercicio público ó privado de cualquier culto, sancionadas por la Constitución, han motivado un cambio importante en nuestro derecho penal, que ántes prohibía todo acto público de un culto que no fuera el de la religión católica-apostólica-romana. Esta es otra de las innovaciones del derecho moderno, el cual defiende la libertad de conciencia de los ciudadanos, castigando la violencia y las coacciones que á aquélla se dirigen y protegiendo los ministros, los actos, los templos, los cementerios, los libros, los periódicos y las funciones de todas las religiones y cultos disidentes».

Mas esto ya no es aplicable al estado actual del derecho vigente. La ley fundamental de la monarquía no garantiza el libre ejercicio público de todos los cultos, sin más limitaciones que las prescritas por la moral y el derecho; tolera solamente algunos, no todos los actos públicos de los cultos disidentes.

La restauración de la dinastía reinante trajo forzosamente, en pos de sí, la de las ideas que inspiraron el código de 1850; y sancionada la Constitución de 30 de Junio de 1876, que es la vigente, no podía dejar de alcanzar la reacción á la *libertad religiosa*, objeto predilecto y campo de discusión de las escuelas filosófico-políticas, por lo que afecta á la libertad de la conciencia humana, cuya cuestión debía resolverse lógica y prácticamente en España, como la resolvió dicha Constitución, convirtiendo la *libertad religiosa* en mera *tolerancia* de cultos, en los términos y con las concesiones siguientes: «La religión católica-apostólica-romana, es la del Estado. La nación se obliga á mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias, ni manifestaciones públicas, que las de la religión del Estado (1).»

Modificada la Constitución en el sentido transcrito, es claro que la reforma del código penal se hace indispensable y urgente. Los dos textos le-

(1) Art. 11 de la Constitución de 1876.

gales son incompatibles en el fondo, porque el segundo representa el principio de libertad, que no autoriza el primero, resultando una desarmonía insostenible en la práctica, la cual ha dado márgen á muchas y variadas consultas de las autoridades al Gobierno, quien, para dar unidad á la interpretación del precepto constitucional, publicó algunas reglas (1), á cuyas prescripciones deben atemperarse las autoridades y funcionarios encargados de su cumplimiento, mientras no se reforma el código y no se publican las leyes y reglamentos que desarrollen y regulen aquel precepto.

¿Qué manifestaciones religiosas prohíbe la Constitución de 1876?—Según la interpretación oficial, queda prohibida toda manifestación pública de los cultos ó sectas disidentes de la religión católica, fuera del recinto del templo ó del cementerio de las mismas; debiendo entenderse por manifestación pública para esta prohibición, todo acto ejecutado sobre la vía pública ó en los muros exteriores del templo y del cementerio, que dé á conocer las ceremonias, ritos, usos y costumbres del culto disidente, ya sea por medio de procesiones ó de letreros, banderas, emblemas, anuncios y carteles.

¿Pueden tener lugar reuniones religiosas dentro y fuera de los templos y de los cementerios?—Como la Constitución, así interpretada, sanciona la inviolabilidad del templo y del cementerio, las reuniones religiosas, católicas ó disidentes, podrán celebrarse dentro de aquéllos, siempre que en ellas no se contravenga á las órdenes y reglamentos de policía, ó no se cometa alguno de los delitos comprendidos y castigados en el Código penal.

Las reuniones que quieran celebrarse fuera de los lugares indicados y de los que estuvieren autorizados por disposiciones especiales, sólo podrán tener lugar si la autoridad las consiente, solicitando de ella el permiso previo y por escrito. En otro caso se reputarán reuniones ilícitas, y podrán ser disueltas en el acto, y entregados los que las hayan convocado ó presidido, á los tribunales de justicia, por las autoridades gubernativas.

Hé aquí expuesto el derecho vigente en materia de delitos religiosos, según el código fundamental, y las reglas de interpretación publicadas por el Gobierno, con cuyas prescripciones hay necesidad de conciliar los preceptos del código de 1870, en cuanto sean conciliables, que no lo son, ni pueden serlo siempre, hasta que las Cortes modifiquen los artículos de aquél, poniéndolos en armonía con la Constitución (2), trabajo terminado ya por la comisión de códigos, que se presentará á las Cortes.

¿Qué hechos constituyen delito contra el libre ejercicio de los cultos, según el código de 1870?—1.º, las amenazas, violencias ú otros apremios ilegítimos, encaminados á forzar á un ciudadano á ejercer actos religiosos (3), ó á asistir á funciones de un culto, sea ó no sea el que profesa el amenazado ó el delincuente; 2.º, los mismos medios empleados para impedirle que observe las fiestas religiosas de su culto, abra su tienda, almacén ó establecimiento, y obligarle á abstenerse de trabajar; todo sin perjuicio de los reglamentos de orden público y policía; 3.º, los tumultos provocados para impedir, perturbar ó hacer retardar la celebración de funciones religiosas, dentro ó fuera de los edificios destinados á ellas; 4.º,

(1) Circular de la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigida á los gobernadores de provincia el 23 de Octubre de 1876. (Véase el apéndice.)

(2) La comisión de códigos, después de una detenida discusión, presidida por el señor Calderón Collantes, ministro de Gracia y Justicia, ha aprobado las bases para la reforma del código de 1870, en cuanto á la definición, determinación y penalidad de los delitos contra la religión del Estado, y la tolerancia limitada de los cultos disidentes.

(3) El obligar á los padres de un niño á bautizarlo, cuando aquéllos rehusan hacerlo por no ser católicos, contraviene el espíritu de la Constitución y cae dentro de la esfera de los actos penados en este número. Recientemente ha manifestado el gobierno en la Gaceta Oficial el disgusto con que el alcalde de..... había ejecutado ó cooperado á la ejecución de hechos análogos.

las injurias y amenazas á los ministros de los cultos cuando se hallaren desempeñando sus funciones; la perturbación ó interrupcion de las funciones religiosas en cualquier lugar (4); el *escarnio público* de los dogmas ó ceremonias de cualquier religion y la *profanacion pública* de imágenes, vasos sagrados y demás objetos destinados al culto, hecha con el fin de escarnecer el dogma, y 5.º, todo acto ejecutado con *escándalo*, en lugar religioso, que ofenda al sentimiento de los concurrentes.

Predomina en la penalidad de estos delitos la multa y la prision correccional.

No terminaremos sin recordar de nuevo á nuestros lectores que estos hechos penados en el código de 1870, en donde se partia de la existencia legal de la *libertad* de cultos, van á ser modificados en la próxima legislatura en el sentido restrictivo de la *tolerancia* que permite á los extranjeros la Constitucion de 1876.

TITULO III.

DELITOS CONTRA EL ÓRDEN PÚBLICO.

Con este epigrafe se ocupa el código de los delitos de *rebelion*, *sedicion*, *atentados*, *desacatos*, *injurias* y *amenazas á la autoridad* y *á sus agentes*, y de otros *desórdenes públicos*.

Rebelion.

¿Qué es *rebelion*?—El código no define este delito. Dice quiénes lo cometen; pero bien puede asegurarse que es la *rebelion* un *alzamiento público* y en *abierta hostilidad*, para alterar profunda y trascendentalmente la tranquilidad general del pueblo, á fin de conseguir alguno de los objetos que despues indicaremos.

¿Quiénes son reos de *rebelion*?—Los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno, para cualquiera de los fines siguientes: 1.º, destronar al rey, deponer al regente ó regencia del reino, ó privarles de su libertad personal, ú obligarles á ejecutar un acto contrario á su voluntad; 2.º, impedir la celebracion de las elecciones para diputados á Cortés ó senadores en todo el reino, ó la reunion legítima de las mismas; 3.º, disolver las Cortés ó impedir la deliberacion de alguno de los Cuerpos colegisladores, ó arrancarles alguna resolucion; 4.º, impedir la reunion de las Cortés para nombrar tutor al rey, ó la regencia del reino, y no obedecer á ésta despues de haber jurado; 5.º, sustraer el reino ó parte de él ó algun cuerpo de tropa de tierra ó de mar, ó cualquiera otra clase de fuerza armada, de la obediencia al supremo gobierno, y 6.º, usar y ejercer por sí ó despojar á los ministros de la Corona de sus facultades constitucionales, ó impedirles ó coartarles su libre ejercicio.

Estos hechos deben considerarse *rebelion de carácter militar*, sujetos á

(1) El no quitarse el sombrero al paso de una procesion católica, está comprendido en este caso. (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Enero de 1871).

los consejos de guerra, cuando se cometan por fuerzas armadas y legalmente organizadas (1), como las milicias, etc.

Cuando la rebelion no hubiere llegado á organizarse con jefes conocidos, se reputarán tales los que de hecho dirigieren á los rebeldes ó llevarán la voz por ellos, ó firmaren los recibos ó escritos expedidos á su nombre, ó ejercieren otros actos semejantes en representacion de los demas.

¿Qué otras personas son responsables y consideradas como rebeldes?—Las siguientes: 1.º, los que sin alzarse contra el gobierno, cometieren por astucia ó por cualquier otro medio, alguno de los delitos expresados en el penúltimo párrafo: 2.º, los que sedujeren tropas ó cualquiera otra clase de fuerza armada de mar ó de tierra, para cometer el delito de rebelion. Si llegare á tener efecto ésta, los seductores se reputarán *promovedores*. La *conspiracion* y la *proposicion* para cometer este delito está expresamente penada en el código.

Desde la prision correccional hasta la reclusion temporal á muerte, el código gradúa la penalidad para los *promovedores*, los que tuvieren un mando subalterno y los *meros ejecutores* de la rebelion (2).

Sedicion.

¿Qué es sedicion?

Tampoco define el código esto delito. Del mismo modo que la *rebelion*, la *sedicion* es un alzamiento público y tumultuario, para perturbar el orden general, y conseguir extralegalmente un fin determinado, aunque menos importante y de menor gravedad que el que se propone la primera.

Esos fines se manifiestan en el párrafo siguiente:

¿Quiénes son reos de *sedicion*?—Los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, ó fuera de las vías legales, cualquiera de los objetos siguientes: 1.º, impedir la promulgacion ó la ejecucion de leyes, ó la libre celebracion de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripcion ó distrito electoral; 2.º, impedir á cualquiera autoridad, corporacion oficial ó funcionario público, el libre ejercicio de sus funciones ó el cumplimiento de sus providencias administrativas ó judiciales; 3.º, ejercer algun acto de odio ó venganza en la persona ó bienes de alguna autoridad, ó de sus agentes; 4.º, ejercer, con un objeto político ó social, algun acto de odio ó de venganza contra los particulares ó cualquiera clase del Estado; 5.º, despojar, con un objeto político ó social, de todos ó de parte de sus bienes propios, á alguna clase de ciudadanos, al municipio, á la provincia ó al Estado, ó talar ó destruir dichos bienes. Tambien se califica de *sedicion* la seducion de tropas ó de cualquiera otra fuerza armada para cualesquiera de dichos fines.

Como acabamos de ver, y ya hemos indicado, diferénciase la *sedicion* de la *rebelion* en que los fines á que se dirige ésta son siempre más graves y trascendentales que los que se propone aquélla, como puede observarse comparando la enumeracion que de unos y otros queda hecha.

La penalidad varia, como en la *rebelion*, segun que haya de imponerse á los *promovedores*, *sostenedores* y *caudillos* principales de la *sedicion*, á los que tuvieren mando subalterno ó á los *meros ejecutores*. En el caso de que la *sedicion* no haya llegado hasta el punto de embarazar de un modo grave

(1) Circular á los fiscales de 17 de Enero de 1873, expedida por el ministerio de Gracia y Justicia.

(2) Este es el delito que cometieron las facciones carlistas.

el ejercicio de la autoridad pública, y no hubiere tampoco ocasionado la perpetracion de otro delito grave, los tribunales rebajarán de uno á dos *grados* las penas señaladas.

Reglas comunes á la rebelion y sedicion.

¿Quiénes deben considerarse *jefes* de tales desórdenes cuando la rebelion y la sedicion no los tuviere conocidos?—Las personas que dirigieren á los demas, ó llevaren la voz por ellos, ó firmaren los recibos y demás escritos expedidos á su nombre, ó ejercieren otros actos semejantes en representacion de todos los alzados.

¿Qué deberes y requisitos debe cumplir la autoridad antes de disolver los grupos de amotinados por medio de la fuerza pública?—Luego que se manifieste la rebelion ó sedicion, la autoridad gubernativa intimará segun el código, hasta dos veces á los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimacion el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiraren inmediatamente despues de la segunda intimacion, la autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlos. Las intimaciones se harán mandando ondear al frente de los sublevados la bandera nacional si fuere de dia, y si fuere de noche, requiriendo la retirada á toque de tambor, clarin ú otro instrumento apropiado. Cuando las circunstancias no permitieren hacer uso de los medios indicados, se ejecutarán las intimaciones por otros, procurando siempre la mayor publicidad. No serán necesarias, respectivamente, la primera ó la segunda intimacion, desde el momento en que los rebeldes ó sediciosos rompien el fuego.

¿Qué efectos produce la sumision de los amotinados antes del empleo de la fuerza?—Cuando los *rebeldes* ó *sediciosos* se disolvieren ó sometieren á la autoridad legítima, antes de las intimaciones ó á consecuencia de ellas, quedarán exentos de toda pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, y tambien los *sediciosos*, *sostenedores* y *directores*, si no fueren empleados públicos. Los tribunales en este caso rebajarán á los demás culpables, de uno á dos grados, las penas señaladas por el código.

¿Cómo se castigan los delitos *particulares* cometidos por los amotinados?—Serán castigados, respectivamente, segun las disposiciones del código, debiendo entenderse por delitos *particulares* los comunes, ajenos á la sedicion, al fin político ó social que aquélla persigue, ó que sean innecesarios para consumarla. Cuando no puedan descubrirse sus autores, serán penados como tales los jefes principales de la *rebelion* ó *sedicion*.

¿Qué actos y omisiones son punibles en los funcionarios públicos en tales circunstancias?—La *no resistencia* á la *rebelion* ó *sedicion* por parte de las autoridades, sean ó no de nombramiento directo del gobierno; *el continuar los empleados desempeñando sus cargos* bajo el mando de los alzados, ó *el abandonarlos* sin habérseles admitido la renuncia de los mismos, y *el aceptar empleos* de aquéllos.

Lo prescrito por el código penal respecto á los delitos de *rebelion* y *sedicion* no es aplicable cuando, por razon de la gravedad de las circunstancias, se hayan declarado en suspenso, por medio de una ley, las garantías á que se refiere el art. 31 de la Constitucion. En tal caso se aplicarán únicamente las disposiciones y penalidad consignadas en la

LEY DE ÓRDEN PÚBLICO DE 23 DE ABRIL DE 1870. (1)

Esta ley, no sólo tiene por objeto las medidas gubernativas que las autoridades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden público y para prevenir los delitos contra la Constitución del Estado, contra la seguridad interior y exterior del mismo y contra el orden público, sino también determinar la competencia de los jueces y tribunales en las causas criminales que se formen sobre dichos delitos, y el procedimiento á que éstas han de ajustarse. No abraza los casos de guerra extranjera, ni de guerra civil formalmente declarada.

¿Qué situaciones reconoce y prevé dicha ley?—Dos: el estado de *prevención* y de *alarma*, y el estado de *guerra*.

¿Cuándo comienza legalmente el primer estado?—Publicada la ley de suspensión de garantías constitucionales, se considera declarado por el mismo hecho el estado de *prevención*, hallándose facultada desde este momento la autoridad civil para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia conceptúe convenientes á fin de asegurar el orden público. La autoridad civil excitará por oficio á la judicial para que proceda desde luego contra los que comprenda que son responsables en algun sentido de los delitos á que se extiende la acción de esta ley.

¿Qué facultades concede á la autoridad civil respecto de los grupos que se formaren y de las publicaciones por medio de la prensa?—Si se formaren grupos, dictará las medidas oportunas para su disolución, intimidando á los fautores y auxiliares de la agitación que se disuelvan, y en el caso de no ser obedecida á la tercera intimación, utilizará la fuerza de que disponga, al efecto de restablecer la calma y dejar expedita la vía pública.

Propondrá al gobierno, y en caso urgente acordará desde luego, la suspensión de las publicaciones que preparen, exciten ó auxilien la comisión de los delitos expresados, y señaladamente los que tiendan á perturbar las sesiones de las Cortes ó atacar la inmunidad de los diputados, dando cuenta al gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares de aquellas publicaciones, remitiéndolos con las personas responsables de los delitos expresados al juzgado ordinario competente para los efectos de justicia.

¿Cuáles le corresponden con relación á la libertad de los ciudadanos?—La autoridad civil, en este estado, podrá detener y detendrá á cualquiera persona, si lo considerase necesario para la conservación del orden. Los detenidos en esta forma no deberán confundirse con los presos y detenidos por delitos comunes. Podrá asimismo compeler á mudar de residencia ó domicilio á las personas que considere peligrosas, ó contra las que existan racionales sospechas de participación en dichos delitos. El cambio de domicilio no podrá decretarse á más de 150 kilómetros de distancia del pueblo del compelido á mudarle. El destierro, que desde luego puede acordar la autoridad á una distancia que no exceda de 250 kilómetros, se entiende levantado de hecho y de derecho, así como el cambio de domicilio,

(1) Sobre la genuina interpretación del espíritu y propósitos que ha dado á esta ley el Tribunal Supremo, véase la nota de la pág. 67.

terminado que haya el período de suspension temporal de las garantías constitucionales, si antes no fuesen éstas establecidas. Los motivos de las providencias acordadas se harán constar en acta que se levante, ó expediente que se forme, antes ó despues de llevarlas á ejecucion.

¿Qué facultades le confiere la ley, en cuanto al domicilio ajeno?—La autoridad civil podrá tambien entrar en el domicilio de cualquier español ó extranjero residente en España, sin su consentimiento, y examinar sus papeles y efectos, pero nada de esto podrá verificarse sino por la misma autoridad ó por un delegado suyo, provisto de orden formal y escrita. En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos, tendrá siempre que ser presenciado por el dueño ó encargado de la misma, ó uno ó más individuos de su familia, y por dos vecinos de la propia casa ó de las inmediatas, si se hallasen en ellas, y en su defecto por dos vecinos del mismo pueblo. No hallando en ella al dueño ó encargado de la casa, ni á ningun individuo de la familia, se hará el reconocimiento á presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantándose acta del reconocimiento, que firmará con ellos la autoridad ó su delegado. Cuando un delincuente contra el orden público fuere sorprendido *in fraganti* y, perseguido por la autoridad civil ó sus subordinados ó dependientes, se refugiare en su propio domicilio ó en el ajeno, podrán éstos penetrar en él, pero sólo para el efecto de la aprehension.

¿Qué otros deberes debe tener en cuenta la autoridad pública en el estado de *prevencion y alarma*?—Ademas de los que le impone y atribuciones que le concede la ley de orden público, debe tener en cuenta, para observarlas en lo posible, las reglas del código que hemos expuesto antes como aplicables á los delitos de rebelion y sedicion.

¿Cuándo debe resignar el mando la autoridad civil en manos de la militar?—En los siguientes casos: 1.º, si la autoridad civil, una vez empleados todos los medios de que en circunstancias ordinarias dispone y los que para las extraordinarias le otorgan las precedentes disposiciones, no pudiese por sí sola, ni auxiliada por la judicial, dominar la agitacion y restablecer el orden, lo prevendrá en un bando, que se publicará con la solemnidad posible, é inmediatamente despues dispondrá que la militar proceda á la adopcion de las medidas que reclame la paz pública, previa la declaracion del estado de guerra; 2.º, cuando la rebelion ó sedicion se manifiesten desde los primeros momentos, rompan el fuego los rebeldes ó sediciosos, ó comprenda la autoridad civil la urgente necesidad de apelar á la fuerza y resignar el mando para dominarlos, se pondrá de acuerdo con la autoridad judicial y la militar, y dispondrán la inmediata declaracion del estado de guerra. Si no hubiese acuerdo entre estas autoridades, ni tiempo para tomarlo, se entrará desde luego provisionalmente, en el estado de guerra, en los dos primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al gobierno y á las autoridades superiores jerárquicas respectivamente.

¿A qué autoridades se refiere la ley en los anteriores casos?—Si ocurriese la rebelion ó sedicion en capital de provincia, la autoridad civil lo será el gobernador de la misma ó el que haga sus veces, y las autoridades judicial y militar las superiores en el orden jerárquico. En los demás pueblos se reunirán para dicha declaracion el juez de primera instancia, ó el decano si hubiese más de uno, el alcalde popular y el jefe militar que ejerza el mando de las armas. En el caso de que en dichos pueblos no existiere autoridad militar que ejerza el mando de las armas, el alcalde popular, jefe superior de la milicia (1), asumirá las facultades que corresponden segun esta ley á la autoridad militar en el estado de guerra.

(1) Hoy no puede tener aplicacion esto, porque no existe la milicia ciudadana.

¿Qué requisito se requiere para declarar el estado de guerra en la capital de la monarquía?—No podrá declararse en ésta, ni en los puntos donde reside el rey ó la regencia del reino, sin autorizacion del gobierno. El mismo determinará el territorio que debe quedar sujeto á él cuando hayan ocurrido actos de rebelion ó sedicion, ó se hayan presentado grupos considerables de alzados en armas en dos ó más provincias.

¿Qué deberes corresponde cumplir en el estado de alarma al poder judicial y al ministerio fiscal?—Deben reunirse y ofrecer su cooperacion á las autoridades, procediendo á lo que hubiere lugar, segun los casos.

Del estado de guerra.

¿Cuándo comienza legalmente el estado de guerra?—Desde el momento que la autoridad civil resigna el mando en la militar, lo cual se hará saber al público por medio de bandos y edictos que contengan las prevenciones y medidas oportunas. En dicho bando se intimará á los rebeldes ó sediciosos y perturbadores que depongan toda actitud hostil y presten obediencia á la autoridad legítima. Los que lo hicieren en el término que el bando fije, y no habiendo término señalado, en el de dos horas, quedarán exentos de pena, excepto los autores ó jefes de la rebelion, sedicion ó desórden, y los reincidentes en estos delitos. Los autores y jefes referidos serán indultados de la pena que les corresponda, caso de rendirse dentro del término que se expresa anteriormente, y sufrirán la inmediata inferior en su grado mínimo al medio. Los reincidentes quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad por el hecho de serlo.

¿Cuándo es lícito emplear la fuerza armada contra los amotinados?—Después de transcurrir el plazo señalado en el indicado bando, serán disueltos, á todo trance, los grupos que se hubieren formado, empleando la fuerza, si fuere necesario, hasta reducirlos á la obediencia, prendiendo á los que no se entreguen, y poniéndolos á disposicion de la autoridad judicial, cuando deban ser juzgados por ella, en la forma que se expresa al tratar del procedimiento.

¿Quiénes deben considerarse responsables despues de la lucha?—Serán considerados como presuntos reos, los que se encuentren ó hubieren estado en los sitios del combate durante éste, sin perjuicio de probar su inculpabilidad, hallándose en el mismo caso los que sean aprehendidos huyendo ó escondidos, despues de haber estado con los rebeldes ó sediciosos. Los habitantes de las casas donde se hubieren hecho fuertes los rebeldes ó sediciosos, no serán considerados presuntos criminales por el solo hecho de encontrarse en ellas. Pero si resultase haber tenido participacion en los delitos á que se refiere esta ley, sufrirán la pena correspondiente. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo los individuos de las asociaciones filantrópicas legalmente establecidas para el socorro de los heridos en casos de guerra.

¿Qué penalidad establece la ley de órden público respecto á los delitos de rebelion y sedicion, y á los comunes cometidos con ocasion de ellos?—Debe aplicárseles la misma que establece el código penal.

¿Qué deberes tienen los funcionarios públicos en el estado de guerra?—Todo funcionario ó corporacion, cualquiera que sea su autoridad ó cargo, prestará inmediatamente, así á la autoridad militar como á la civil, el auxilio que éstas le pidan para sofocar la rebelion ó sedicion y restablecer el órden: el funcionario ó corporacion que no prestase inmediato auxilio á la autoridad superior militar ó civil, será en el acto suspendido de su empleo ó cargo, y reemplazado en él interinamente hasta la resolucion del gobier-

no, á quien se dará cuenta al efecto; todo sin perjuicio de las penas en que incurra, por consecuencia del procedimiento que se instruirá para depurar su responsabilidad ó irresponsabilidad criminal.

¿Qué funciones reserva dicha ley á las autoridades civiles en tal estado?—Todas las que no se refieran al orden público, limitándose en cuanto á éste á las facultades que la militar les delegare ó deje expeditas, debiendo en uno y otro caso daría directamente los partes y noticias que les reclame, y las demás que con referencia al orden público lleguen á su conocimiento.

¿Qué delitos y qué personas quedan sujetos á los consejos de guerra ordinarios?—4.º, los de rebelion que tengan *carácter militar* y aparezcan comprendidos en ellos y sus anejos (1): los individuos militares de mar y tierra en activo servicio, cualquiera que sea su situacion y categoria: las causas á que den lugar, se considerarán de carácter militar cuando los rebeldes ó sediciosos estén mandados por jefes militares, y cuando el movimiento se inicie ó sostenga por fuerzas armadas del ejército ó de la milicia popular; 2.º, los jefes, los oficiales de la milicia popular armada ó los que en su defecto y de cualquier modo hagan veces de tales, y los rebeldes ó sediciosos que en número mayor de doce individuos se levanten en armas ó sostengan con ellas la bandera de la rebelion y sedicion en despoblado, si fueren aprehendidos por fuerzas públicas, sean ó no del ejército permanente, destinadas á su persecucion, ya por las autoridades militares, ya por las civiles: los jefes principales de una rebelion ó sedicion armada de carácter no militar, durante el periodo de guerra, quedan tambien sujetos al consejo de guerra ordinario, y 3.º, todos los demás milicianos populares armados, y los que sin pertenecer á la milicia popular tomen parte con armas y en poblado en una rebelion ó sedicion, sean éstas ó no de carácter militar, si hicieren resistencia á las fuerzas públicas, serán juzgados y sentenciados tambien por el consejo de guerra ordinario, siguiéndose en el procedimiento los trámites que señalan las ordenanzas militares y disposiciones especiales que le determinan.

¿Qué procesados deben ser juzgados por los tribunales comunes?—Todos los demás que se consideren responsables en cualquier concepto de los expresados delitos de rebelion y sedicion, serán juzgados y sentenciados por la jurisdiccion comun, y conforme al procedimiento que establece la ley de orden público. En su consecuencia, si instruidas las diligencias sumarias por mandato de la autoridad militar, apareciesen complicados como reos de los expresados delitos personas no comprendidas en los tres precedentes casos, los fiscales de las causas harán expedir inmediatamente los oportunos testimonios del tanto de culpa, y los remitirán al juez de primera instancia que corresponda, por conducto de la autoridad militar superior, la que con toda seguridad pondrá los presuntos reos á disposicion de dicho juez de primera instancia, para los efectos de justicia.

(1) Según una circular á los fiscales de las audiencias, publicada en 18 de Enero de 1873, deben considerarse como delito de rebelion de carácter militar. 1.º, los hechos comprendidos en el art. 248 del código penal que se cometan por fuerzas armadas y legalmente organizadas; 2.º, los que se cometan por paisanos armados y organizados, á las órdenes de jefes militares; 3.º, los que se cometan por la iniciativa ó bajo la protección de las fuerzas á que se refiere el número 1.º; y 4.º, los que se cometan en despoblado por paisanos en número mayor de doce individuos, si por razon de la clase de obediencia que presten á sus jefes, de la organizacion que tengan, de los medios que empleen y del género de vida que hagan, pueden ser considerados como fuerza rebelde militarmente organizada: aunque ésta se halle formada por ménos de doce individuos se considerará como militarmente organizada si reúne las demás circunstancias mencionadas en el párrafo anterior y hay en el pais otras fuerzas rebeldes que se propongan el mismo fin, por más que no pueda probarse la existencia de relaciones de carácter jerárquico entre ellas.

¿Qué solemnidades deben preceder á la terminacion del estado de guerra, qué efectos produce la derogacion de tal estado, y á quién corresponde hacerla?—Para declarar levantado el estado de guerra, luego que hayan terminado la rebelion ó la sedicion, se celebrará previamente un consejo por las autoridades militar, civil y judicial de la capital de la provincia declarada en dicho estado de guerra; y si hubiere unanimidad de votos, se llevará á cabo el acuerdo, dándose inmediatamente cuenta al gobierno. Si el acuerdo no fuese por unanimidad, sino por mayoría de votos, no se llevará á cabo interin el gobierno, á quien se dará asimismo cuenta con urgencia, no resuelva lo que corresponda, en Consejo de ministros. Sólo al gobierno corresponde levantar el estado de guerra, cuando haya hecho la declaracion, en los casos que le corresponde. Levantado que sea el estado de guerra, serán remitidas á los juzgados competentes, para su continuacion y demas efectos de justicia, todas las causas contra aquéllas personas que se hallen sometidas al tribunal excepcional por virtud de esta ley.

¿Qué penalidad puede aplicarse durante el estado de guerra?—No podrá establecerse, ni imponerse otra que la prescrita anteriormente por las leyes. Podrán publicarse además, los bandos que se creyeren necesarios para mantener mejor el orden público, con sujecion á los preceptos constitucionales no suspendidos, estableciendo penas que aplicarán gubernativamente las autoridades, consistentes en pequeñas multas y en el arresto menor, que tambien pueden imponer por vía de sustitucion en caso de insolvencia, el cual no puede exceder de quince dias; acerca de todo lo expuesto, tanto las autoridades civiles como las militares, consignarán en un libro sus providencias, contra las cuales caben los recursos de alzada y de revision inmediatos, segun que sean inferiores ó superiores las autoridades sentenciadoras (1).

Del procedimiento con que deben sustanciarse las causas sujetas á los tribunales de justicia ordinarios, segun la ley de orden público, nos ocuparemos al tratar, en la última seccion de este libro, de la materia de procedimientos en general, no sólo por ser éste el lugar más propio, sino porque debemos hacer mencion de él al hablar del juicio por jurados.

De los atentados, desacatos, insultos y amenazas á la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, y otros desórdenes.

¿Qué es delito de *atentado*?—El código no lo define, expresando que lo cometen: 1.º, los que sin alzarse públicamente emplearen fuerza ó intimidacion para alguno de los objetos señalados en los delitos de *rebelion* y *sedicion*, de que ya hemos tratado; 2.º, los que *acometieren* (2) á la autoridad ó á sus agentes, ó *emplearen fuerza* contra ellos, ó los *intimidaren gravemente*, ó les *hicieren resistencia tambien grave*, cuando se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos ó con ocasion de ellas.

Tiene lugar, como se vé, contra la *autoridad* y tambien contra sus *agentes*, y deben concurrir las circunstancias de estar aquéllos en el *ejercicio de sus funciones*, ó deber origen el hecho al *ejercicio de las mismas* ó con *ocasion de ellas*, y ha de consistir en *acometimiento*, empleo de *fuerza*, *intimi-*

(1) La tramitacion de estos expedientes puede estudiarse en la seccion 2.ª del tit. 3.º de la ley de orden público.

(2) El dar un empuellon, constituye el delito de atentado. (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Enero de 1873.)

dacion ó resistencia grave. Cuando la *resistencia* no sea *grave*, el acto constituye delito; pero no el de *atentado*. Este se pena con la prision correccional y multa, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.^a, si la agresion se verificare á mano armada (1); 2.^a, si los reos fueren funcionarios públicos; 3.^a, si los delincuentes pusieren manos en la autoridad, y 4.^a, si por consecuencia de la coaccion la autoridad hubiere accedido á las exigencias de los delincuentes. Sin estas circunstancias, la pena disminuye en extension, debiendo tenerse tambien en cuenta el caso en que los culpables hubieren puesto manos en las personas que acudieren en auxilio de la autoridad ó sus agentes, ó en las de los funcionarios públicos.

No debe confundirse el *atentado* con la *resistencia no grave* y *desobediencia grave* á la autoridad ó á sus agentes. Los que, sin estar comprendidos en los casos y circunstancias referidos en el párrafo anterior, como ya queda indicado, *resistieren* á aquélla, ó á éstos, pero en forma no grave, ó los *desobedecieren gravemente* en el ejercicio de las funciones de sus cargos, no son reos de *atentado*, perocometen el delito de *resistencia* y *desobediencia*, especialmente penado por la ley.

¿Puede haber *atentado* cuando los agresores y los ofendidos son *autoridades* ó *agentes* de la autoridad?—El Tribunal Supremo ha declarado que no, fundándose en que este delito supone falta de aquellos caractéres en el ofensor (2).

¿Las *lesiones*, resultado de un *atentado*, constituyen un delito independiente?—Parece ser que no, y que el *atentado* y las *lesiones* deben considerarse y apreciarse como un sólo hecho constitutivo de dos delitos, como lo son y lo forman el disparo de arma de fuego y las lesiones que produce. El Tribunal Supremo ha decidido algunos recursos en este sentido, declarando que no pueden penarse separadamente uno y otro hecho (3).

¿Qué es *desacato*?—Tampoco define el código este delito, siguiendo el sistema de exposicion empleado en el *atentado*. Cometen este delito, dice: 1.^o, los que, hallándose un ministro de la corona ó una autoridad en el ejercicio de sus funciones, ó con ocasion de éstas, los calumniaren, injuriaren ó insultaren de hecho ó de palabra en su presencia, ó en escrito que les dirigieren, ó los amenazaren; 2.^o, el funcionario público que, hallándose su superior jerárquico en el ejercicio de su cargo, lo calumniare, injuriare ó insultare de hecho ó de palabra en su presencia, ó en escrito que le dirigiere, ó le amenazare. Conste, pues, y téngase muy presente, que la *amenaza* no es menester que haya tenido efecto á presencia del amenazado, ni que se le haya hecho en escrito que se le dirija, para que constituya el delito de *desacato*, por razon de la persona á quien vá dirigida, como debe acontecer en los demás casos. Y conste tambien que este delito, á diferencia del *atentado*, no se comete contra los *agentes* de la autoridad, sino solamente contra ésta.

Además de tales innovaciones, la ley ha introducido una excepcion en favor de la prensa, declarando que la publicacion por medio de la periódica de los *escritos ofensivos* á las personas desacatables, en los cuales se calumnie, injurie ó insulte á éstas, no constituye, por sí sola, delito de *desacato*, por más que sea delito de injuria ó calumnia perseguible de oficio; caso de aplicacion frecuente en las poblaciones en donde salen á luz dichas publicaciones, que debe tenerse muy presente.

(1) El arrojar piedras, se reputa como agresion á mano armada. (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Noviembre de 1874.)

(2) Sentencia de 25 de Enero de 1873.

(3) Sentencia de 8 de Octubre de 1873.

Los Procuradores SÍNDICOS de los Ayuntamientos son funcionarios públicos.

Segun la gravedad de las ofensas, entre las cuales figura siempre como *amenaza grave* la provocacion al duelo, se impone la prision correccional y el arresto combinado con la multa, á los delinquentes.

Siendo elementos del *desacato*, por regla general, la *presencia* del desacatado ó que el escrito ofensivo *le hubiese sido dirigido*, cuando estas circunstancias no concurran en el hecho punible, el delito no es *desacato*; pero constituye el de *injuria, calumnia ó insulto* dirigidos á las autoridades, especial y expresamente penado en el código, y como dicho queda, perseguible de oficio.

Cuando los hechos referidos se dirijan á los funcionarios públicos ó á los agentes de la autoridad, *en su presencia ó en escrito que se les dirija*, el delito es tambien perseguible de oficio; quedando limitado su castigo á la accion privada de los ofendidos, no concurriendo aquellas circunstancias.

¿Quiénes se consideran *autoridad* para los efectos de los delitos comprendidos en esta seccion?—Todos los que, por sí solos ó como individuos de alguna corporacion ó tribunal, ejercieren jurisdiccion propia. Se reputarán tambien *autoridades* para los mismos efectos, los funcionarios del ministerio fiscal en todas sus jerarquías (1).

¿Quiénes se reputan *agentes* de la autoridad?—Todos los que, por disposicion de la ley, ó por virtud de nombramientos especiales de autoridad competente, están encargados del orden público y de la guarda de la propiedad. Los individuos de la policia judicial, que no sean *autoridad*, deben tenerse como *agentes* de ésta. Y para los efectos del atentado, tienen esta consideracion legal las personas que, requeridas por aquélla, acuden en su apoyo, así como los funcionarios públicos que auxilian á la misma autoridad (2).

¿Qué hechos se califican de *desórdenes públicos*?—Refiere y castiga el código los casos en que se causare *tumulto ó turbare el orden* en la audiencia de un tribunal ó juzgado; en los *actos públicos* propios de cualquiera autoridad ó corporacion; en algun colegio electoral, oficinas ó establecimiento público, espectáculos, solemnidad ó reunion numerosa, y cuando se alterare para causar injuria ú otro mal á alguna persona particular, ó impedir el ejercicio de sus derechos políticos. Castiga tambien los gritos provocativos de *rebelion ó sedicion* en cualquiera reunion ó asociacion, ó en lugar público, y el ostentar en los mismos sitios lemas ó banderas que provocaren directamente á la alteracion del orden público. Es igualmente punible la extraccion de las cárceles ó de los establecimientos penales, de alguna persona detenida en ellos, ó el proporcionarle la evasion, dentro ó fuera del establecimiento, y los desperfectos que se causan en los caminos de hierro ó en las lineas telegráficas, interception de las comunicaciones ó de la correspondencia, destruccion y deterioro de pinturas, estatuas ú otro monumento público, de utilidad ú ornato.

Estos desórdenes se penan con el arresto mayor y la prision correccional, segun su mayor ó menor importancia, debiendo aplicarse siempre el grado máximo, cuando la persona responsable de los mismos se hallare constituida en autoridad civil ó religiosa, convirtiéndose estas penas en *destierro ó confinamiento*, cuando los delinquentes sean eclesiásticos que hayan

(1) Los alcaldes de barrio son autoridades. (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Junio de 1874.)

(2) Los cabos furieles de los presidios; los *serenos* en general y los llamados *de comercio* en Madrid; los *pedaneros* y *alcaldes de barrio*; los comisionados *ejecutores de apremios*; los guardas del ramo de consumos, cuando esta contribucion la recauda el Ayuntamiento; los guardas de campo públicos ó de particulares juramentados; y los peones camineros, son agentes de la autoridad, segun declaraciones de dicho Tribunal Supremo.

provocado á la ejecucion de los atentados, desacatos, desobediencia grave y demas desórdenes públicos.

De las falsedades.

Muchas y variadas son las formas con que se presentan estos delitos. Compréndense bajo este nombre la falsificacion de la firma ó estampilla real y firmas de los ministros; la de sellos y marcas; la de la moneda, billetes de Banco, documentos de crédito, papel sellado, sellos de correos y telégrafos, y otros efectos timbrados; la de documentos públicos, privados, oficiales y de comercio y despachos telegráficos, y la de las cédulas de vecindad y certificados. Y por razon de analogía, forman parte del título de las falsedades, la ocultacion fraudulenta de bienes ó de industria, el falso testimonio, la acusacion y denuncia falsa; la usurpacion de funciones, calidad y títulos; y, finalmente, el uso indebido de nombres, trages, insignias y condecoraciones.

¿Cómo puede definirse la *falsedad*?—Falsedad es, conforme á la ley de Partidas, todo «mudamiento ó alteracion de la verdad, hecho maliciosamente y con ánimo de dañar á otro». Segun el diccionario de la lengua es la «falta de verdad».

Como no podemos, ni debemos designar concreta y especialmente las penas de cada falsificacion, basta á nuestro propósito expresar los hechos que la ley castiga como falsedades, y las circunstancias principales que deben concurrir para ser punibles, agrupándolos todo lo posible, atendida su naturaleza propia y la semejanza de los mismos.

Falsificacion de firmas y estampillas.

Incorre en responsabilidad criminal el que falsificare la firma ó estampilla del rey ó del regente del reino; la firma de los ministros de la corona; la firma ó estampilla del jefe de una potencia extranjera ó la de sus ministros, y el que, *á sabiendas*, usare firma ó estampilla falsa de las clases referidas.

Falsificaciones de sellos y marcas.

Son tambien responsables criminalmente: el que falsificare el sello del Estado, ó, *á sabiendas*, usare de él; el que falsificare el de una potencia extranjera y usare de él en España; y el que, constándole la falsedad de los sellos expresados, y sin haber tenido parte en su falsificacion, se sirviere de ellos ó los usare; los que falsificaren las marcas y sellos de los fieles-contrastes (1) y expusieren á la venta objetos de oro ó plata marcados con sellos falsos de éstos.

Constituyen igualmente delito, la falsificacion de los sellos usados por cualquiera autoridad, tribunal, corporacion oficial ú oficina pública, y el

(1) Dáse este nombre á los funcionarios públicos encargados de pesar las monedas, examinar su ley y marcar las alhajas que circulan como buenas en el mercado, cuya marca constituye una garantía para los contratantes.

uso de los mismos; la de los sellos, marcas y contraseñas que se emplean en las oficinas del Estado, para identificar cualquiera objeto ó para asegurar el pago de impuestos; la de los mismos útiles y billetes que usen las empresas ó establecimientos industriales ó de comercio; la suposición ó cambio de la marca ó el nombre de un fabricante por la marca ó el nombre de otro, y la desaparición *maliciosa* de cualquier sello, billete ó contraseña de la marca ó signo que indique haber ya servido ó sido inutilizado, y el uso, á *sabiendas*, de esta clase de sellos ó contraseñas.

Falsificación de moneda.

Este delito es gravísimo por sus consecuencias. Usurpa una prerrogativa del jefe supremo del Estado, consignada y reservada al mismo ya desde el *Fuero real*; defrauda el interés de los particulares; produce la desconfianza en el mercado; dificulta las transacciones y ataca profundamente el crédito público. Por eso se castiga con mucha severidad en el código; pudiendo llegar la pena desde la simple multa hasta la *cadena perpétua*.

¿Qué actos son punibles referentes á la moneda?— 1.º la *fabricación* de la falsa, de un valor inferior á la legítima, que tenga curso legal en el reino; la de moneda falsa del valor de la legítima, que también lo tenga, y la de moneda falsa que imite la que no tiene curso legal; 2.º, el *cercenamiento* de la moneda legítima, tenga ó no circulación en España; 3.º, la *introducción* en el reino de cualquiera de las clases de moneda referidas, y su *expedición* cuando exista connivencia con los falsificadores ó introductores; siendo también punible la *expedición*, aunque aquélla no exista, siempre que los expendedores hubiesen adquirido la moneda para expenderla, *sabiendo que era falsa* ó que estaba *cercenada*.

Finalmente; incurren también en pena, el que habiendo recibido de *buenafé* moneda falsa, la expendiese después de constarle su falsedad, si la expedición excediere de 125 pesetas; y aquéllos en cuyo poder se encontraran monedas falsas que, por su número y condiciones, se infiera *razonablemente*, que están destinadas á la expedición.

Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito, papel sellado y otros efectos timbrados.

No debemos definir aquí, ni explicar, detenidamente, lo que son los *billetes de Banco*, y los documentos de crédito. Esto corresponde y puede estudiarse en la sección de Derecho mercantil (1). Basta recordar que los billetes de Banco son documentos de crédito al portador, que representan un valor real, y constituyen una especie de moneda, pero que necesitan más, mucho más que la moneda verdadera, de una confianza absoluta, como base de su respetabilidad y de su crédito. Por eso es punible y de graves consecuencias la *falsificación* y la *introducción* de dichos billetes u otros títulos al portador, ó sus cupones, cuando la emisión está autorizada por las leyes de España ó de un país extranjero, y la *expedición* de dichos efectos, estando en connivencia con el falsificador ó introductor, ó sin estarlo, siempre que el expendedor sepa que son falsos.

(1) Véase lo que en dicha sección decimos á seguida de este tratado.

Son tambien autores del delito de *falsificacion*: los que *falsificaren* ó *introdujerén* en el reino titulos nominativos ú otros documentos de crédito que no sean al portador, cuya emision esté autorizada en virtud de una ley española ó extranjera; el que, á *sabiendas*, *negociare* ó de cualquier otro modo se *lucrare*, con perjuicio de un tercero, de un título falso de los referidos, ó lo presentare en juicio; el que *falsificare* papel sellado, sellos de telégrafos ó de correos, ó cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya expedicion esté reservada al Estado, y el *introductor* y *expendedor* en connivencia con aquél ó el falsificador, y los que, sin relacion con éstos, *adquierén*, á *sabiendas*, papel, sellos, ó efectos falsos de la clase mencionada, para expenderlos; por último; los que, habiendo adquirido de buena fé efectos públicos de los comprendidos anteriormente, los *expendieren* sabiendo su falsedad, ó los usaren teniendo conocimiento de la misma.

Desde la multa, en estos últimos casos, hasta la *cadena temporal* en los primeros, la penalidad es diferente, segun la naturaleza y gravedad de los hechos á que se aplica, del mismo modo que sucede en la falsificacion de moneda.

Falsificacion de documentos.

Dáse el nombre de *documento*, á todo escrito cuyo contenido ó texto pueda ser alterado ó supuesto. Dividense en *públicos*, *oficiales*, *mercantiles* y *privados* para los efectos del código. Son *públicos* los que enumera la ley de Enjuiciamiento civil (1), como las escrituras públicas, las certificaciones expedidas por los funcionarios competentes, etc. Son *oficiales* los que están revestidos de carácter público, y no comprendidos en los especificados como públicos: *mercantiles*, los que designa el código de comercio, como las letras de cambio, cartas-órdenes, pagarés á la orden, etc. Luego diremos cuáles son los documentos *privados*.

¿De cuántos modos puede falsificarse un *documento*?—El código señala los ocho siguientes: 1.º, *contrahaciendo ó fingiendo* firma ó rúbrica; 2.º, *suponiendo* en un acto la intervencion de personas ciertas, reales, no imaginarias, segun el Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de Diciembre de 1877), que no la han tenido; 3.º, *atribuyendo* á las que han intervenido en él, declaraciones ó manifestaciones diferentes de las que se hubieren hecho; 4.º, *faltando á la verdad* (2) en la narracion de los hechos; 5.º, *alterando las fechas* ciertas; 6.º, *haciendo* en documento verdadero cualquiera *alteracion* ó *intercalacion* que *varie su sentido*; 7.º, *dando copia* en forma fehaciente de un documento supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria ó diferente de la que contenga el original; 8.º, *intercalando* cualquiera escritura en un protocolo, registro ó libro oficial.

Pueden cometer estas falsificaciones en documento público, los *empleados públicos* y los *particulares*, y no es necesario que hayan causado perjuicio á tercero, ni que aparezca ánimo de causarlo. Tambien puede cometerse este delito por imprudencia. (Sentencia de 21 de Noviembre de 1877.)

(1) Véanse las secciones de procedimiento y derecho mercantil, para determinar con exactitud los documentos que son materia del delito de falsificacion.

(2) Fueron comprendidos en este caso, los otorgantes de una escritura pública que faltaron á la verdad en la narracion de los hechos que hicieron ante el Notario (Sent. del Tribunal Supremo de 1.º de Diciembre de 1874), y los padres que manifestaron en el Registro civil que eran *legítimos* los hijos suyos *adulterinos*, presentados para su inscripcion. (Sentencia de id. de 7 de Febrero de 1876).

Cuando el falsario sea *funcionario público* y haya *abusado* de su oficio para cometer la falsedad, ó es un ministro eclesiástico y la falsedad se refiere á actos ó documentos que pueden producir efectos en el estado ú órden civil de las personas, la pena se eleva á la *cadena temporal y multa*, por la trascendencia y consecuencias graves á que puede dar margen el delito.

Cuando es un *particular*, ó un funcionario público que obra *fuera* del ejercicio de sus funciones, la pena se rebaja al *presidio mayor* y á una *multa* menor. El coautor, cómplice ó encubridor *no* funcionario público, del delito cometido por el que lo sea, es responsable de la falsedad del segundo.

Son hechos punibles, además de las falsedades enumeradas que el particular ejecute en *documento público ú oficial*, las que haga *por los mismos medios*, con ó sin propósito de perjudicar á tercero (1), en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, así como son también punibles la *presentación* en juicio y *el uso*, con *intencion de lucro*, de cualesquiera de estos documentos falsificados; y del mismo modo lo son la *suposicion ó falsificacion* de un despacho telegráfico, y *el uso* del mismo con *intencion de lucro*, ó deseo de perjudicar á otro.

¿Cuándo tiene lugar la falsificacion de documentos *privados*, y qué circunstancias debe contener para que sea punible?—Cuando en ellos se comete alguna de las seis formas ó maneras de falsificacion que quedan descritas; pues las dos últimas no pueden tener lugar en los documentos *privados*, con tal que hayan causado perjuicio á tercero (2) ó haya existido ánimo de causárselo.

Califícase de documento *privado* todo el que no es *público, oficial ni mercantil*, como los pagarés comunes, las cartas y los documentos en que no interviene la autoridad, ni los funcionarios públicos.

Es también responsable criminalmente el que, *sin haber tomado parte en la falsificacion*, presentare en juicio ó hiciere uso, con *intencion de lucro ó perjuicio de tercero y á sabiendas*, de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior. Es una especie de *encubrimiento* lucrativo de la falsificacion del documento.

Suele confundirse, con harta frecuencia, la *falsedad* de los documentos privados con la *suposicion* fraudulenta ó engañosa de los mismos para cometer el delito de *estafa*, y debe tenerse presente que, cuando no se disfigure, contraiga, finja, imite letra, firma ó rúbrica de la persona á quien se atribuya, no se comete *falsedad*, sino que se emplea esa *suposicion* como elemento constitutivo de la estafa, por ser el *medio engañoso*, sin el cual no se hubiera conseguido aquélla, cuya doctrina ha sancionado el Tribunal Supremo repetidas veces.

Respecto á las cédulas de vecindad ó certificados (3), incurren en responsabilidad: 1.º, el funcionario público que, *abusando de su oficio*, expi-

(1) Sentencia de dicho Tribunal de 20 de Junio de 1874, y de 31 de Octubre de 1877.

(2) El comentarista Viada y Vilaseca, aceptando como justa la doctrina de los Tribunales franceses, opina que basta que el perjuicio se cause en el honor de la persona perjudicada, para que exista el delito de falsificacion de documento privado.

(3) Nótese que en la reforma del código, verificada en 1870, no se habla de la falsificacion de los *pasaportes*, lo cual es lógico, porque, si bien de ella se ocupaba el código de 1850, suprimidos aquéllos en 1854, ya no tenía objeto el empleo de esa palabra en 1870. Pero esta omision no indica en manera alguna, ni que deba pensarse en los casos que puedan ofrecerse todavía, como la falsificacion de todo documento público en general, ni ménos declararse la impunidad de ese hecho, fundándose en que no está especificado en el código. El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 27 de Noviembre de 1875, que en la seccion del código en que se penan las falsificaciones de las cédulas de vecindad y los certificados, están incluidos los antiguos *pasaportes*, porque aquéllas vinieron á sustituir á éstos.

diere una cédula de vecindad bajo un nombre supuesto, ó la diere en blanco; 2.º, el que hiciere una cédula de vecindad *falsa*, y el que, en una cédula *verdadera*, mudare el nombre de la persona á cuyo favor hubiere sido expedida, ó de la autoridad que la hubiere dado, ó que altere en ella alguna otra circunstancia *esencial*; (1) 3.º, el que *hiciere uso* de tal cédula de vecindad, *aunque sea verdadera* y expedida á favor de otra persona; 4.º, el facultativo que librare certificado *falso* de enfermedad ó lesion, con el fin de eximir á una persona de algun servicio público; 5.º, el funcionario público que librare certificacion *falsa* de méritos ó servicios, de buena conducta, de pobreza ó de otras circunstancias análogas; 6.º, *el particular* que falsificare una certificacion de la clase designada en los anteriores números, y el que *hiciere uso á sabiendas*, de la certificacion falsa.

En este último caso, la pena no excede del arresto mayor; y puede llegar á las de prision correccional é inhabilitacion especial temporal, en los primeros.

¿Qué hechos punibles expresa el código en concepto de *comunes* á las falsedades enumeradas hasta aquí?—La *fabricacion é introduccion* de cuños, sellos, marcas ó cualquiera otra clase de útiles é instrumentos destinados *conocidamente*, sin género de duda, no por sospechas, á la falsificacion de que nos hemos ocupado. La *existencia*, en poder de una persona, de cualquiera de los útiles ó instrumentos de que se habló anteriormente, si no diere descargo suficiente sobre su adquisicion ó conservacion; hecho que el código, saliéndose de las reglas generales que ha establecido en el libro primero al determinar los que son punibles, ha elevado á la categoria de un delito sin nombre especial, como lo hizo al penar la falsificacion de moneda, y lo hace al castigar el robo, de un hecho análogo al presente, segun veremos en su lugar oportuno está castigado en el capítulo de los robos. *El uso* de los útiles é instrumentos legítimos que estuvieren confiados á un funcionario público siempre que los empleeen ejecutar cualquiera falsificacion, es punible tambien.

La delacion y revelacion de las circunstancias del delito, hechas antes de haberse comenzado el procedimiento, la circulacion de la moneda y el uso de los documentos falsos; el no haberse causado perjuicio á tercero; la indemnizacion consiguiente, si éste hubiere tenido lugar, y el no haber resultado efectivo y considerable, ó no haber producido grave escándalo, eran causas que el código de 1850 tenia en cuenta para eximir de responsabilidad al falsificador, ó aminorar la pena, segun los casos; exenciones que no pueden tener lugar desde la publicacion del código reformado, por no haber sido incluidas en él, y por tanto, no ser atendibles como motivos de exculpacion total ni parcial.

Ocultacion de bienes ó industria.—Falso testimonio.—Acusacion y denuncia falsas.

¿Quién es autor de *ocultacion fraudulenta* de bienes?—El que, requerido por el competente funcionario administrativo, ocultare el todo ó parte de los suyos ó el oficio ó la industria que ejerciere, con el propósito de eludir el pago de los impuestos que por aquéllos ó por ésta debiere satisfacer.

¿Qué es *falso testimonio*?—La declaracion en que se oculta ó altera la verdad, prestada ante autoridad competente y bajo el debido juramento. Se comete tambien cuando se presta ante la autoridad administrativa (2).

(1) De esto se deduce, que cuando la circunstancia alterada no sea *esencial*, no se comete la falsificacion.

(2) Sent. del Tribunal Supremo de 13 de Marzo de 1872 con motivo de un expediente de quintas, ante la Diputacion provincial.

La pena designada á este delito es más ó ménos grave, atendida la concurrencia y efectividad de las circunstancias siguientes: segun que se cometa en causa *criminal* ó en causa *civil*; y en el primer caso, segun que sea *en favor* ó *en contra* del reo, ó bien que *no le perjudique ni le favorezca*; segun que haya sido condenado á la pena de muerte y se hubiere ó no ejecutado; á la cadena temporal, hubiere ó no empezado á sufrirla, y así sucesivamente en las demás penas. Cuando el falso testimonio fuere dado en causa civil, debe tenerse presente si el valor de la demanda excede ó no de 50 duros, para la imposicion de la pena.

Lo expuesto es aplicable á los *peritos* que declaren *falsamente* en juicio, agravándose la penalidad, en todo caso, cuando el *testigo* ó *perito* obrare mediante *cohecho*, esto es, habiendo mediado dádiva ó presente, promesa ú ofrecimiento lucrativo, imponiéndoles, además, la multa del tanto al triplo del valor de la promesa ó dádiva, que será decomisada, si hubiera llegado á entregarse al sobornado.

Incurren tambien en el delito de falso testimonio, el *testigo* ó *perito* que, *sin faltar sustancialmente á la verdad*, la alteren con reticencias ó inexactitudes.

La ocultacion de los hechos, cuando el declarante no fué preguntado por ellos, no constituye falso testimonio (1).

Es tambien punible la presentacion en juicio de testigos falsos, *sabiendo* que van á declarar falsamente.

¿La retractacion del testigo, hecha en el mismo juicio, quita el carácter de delito á la declaracion falsa?—Esta pregunta no ha sido resuelta por la jurisprudencia, y algunos opinan que, no habiendo resultado perjuicio ninguno, porque la sentencia no se habia dictado bajo la impresion juridica de una afirmacion falsa, no debe calificarse el hecho de falso testimonio. Esta resolucio[n] parece adoptada por un tribunal francés, porque, se dice en la sentencia, seria difícil y peligroso examinar si la retractacion fué efecto del miedo, el arrepentimiento, ó del mejor recuerdo y reflexion de los hechos (2).

¿La parte perjudicada ú ofendida por el delito, puede cometer *falso testimonio* declarando en la causa?—Indudablemente sí. Al declarar con juramento, lo hace en concepto de testigo, y su dicho es susceptible de las mismas apreciaciones de sana crítica, que las declaraciones de los demás. Así lo reconoce el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de Noviembre de 1877.

¿Cómo y cuándo se comete el delito de *acusacion* ó *denuncia falsas*?—Imputando *falsamente* á alguna persona hechos que, si fueren ciertos, constituirian delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio, si esta imputacion se hiciere ante funcionario administrativo ó judicial, que, por razon de su cargo, deba proceder á su averiguacion ó castigo. No se procederá, sin embargo, contra el denunciador ó acusador, sino en virtud de *sentencia firme* ó *auto* tambien *firmes* de sobreseimiento del tribunal que hubiere conocido del delito imputado. Este mandará proceder de oficio contra el denunciador ó acusador, siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo proceso.

La pena varia, segun la gravedad del delito imputado, entre el presidio y la prision correccionales, el arresto y la multa.

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Abril de 1872.

(2) Viada, código penal comentado.

Usurpacion de funciones, calidad y títulos, y uso indebido de nombres, trages, insignias y condecoraciones.

Agrúpanse, naturalmente, estos distintos delitos, porque todos tienen el mismo fundamento; la mentira y la suposicion punibles.

¿Quiénes son, pues, responsables de estos hechos?—1.º El que, sin título ó causa legítima, *ejerciere* actos propios de una autoridad ó funcionario público, suponiendo tener carácter oficial; 2.º, el que, atribuyéndose la calidad de profesor, *ejerciere públicamente* actos propios de una facultad que no pueda ejercerse sin título oficial; 3.º, el que *usurpare carácter* que habilite para el ejercicio de los actos propios de los ministros de un culto que tenga prosélitos en España, ó *ejerciere* dichos actos; 4.º, el que *usare y públicamente se atribuyere* títulos de nobleza que no le pertenezcan; 5.º, el que *usare pública y habitualmente* un nombre supuesto, á diferencia del que se limita á ocultarlo ó suponerlo alguna vez, y sobre todo, á la autoridad, lo cual no constituye delito y puede ser materia de una falta (1). Cuando dicho uso tuviere por objeto ocultar algun delito, eludir una pena ó causar algun perjuicio al Estado ó á los particulares, la pena es mayor; 6.º, el funcionario público que, *en los actos propios de su cargo*, atribuyere á cualquiera persona, en connivencia con ella, títulos de nobleza ó nombre que no le pertenezcan; 7.º, el que *usare pública e indebidamente* uniforme ó trage propios de un cargo que no ejerza, el que usurpare sus funciones, ó las de una clase á que no pertenezca, ó de un estado que no tenga, ó llevare insignias ó condecoraciones que no esté autorizado para usar.

¿Puede autorizarse el uso del nombre supuesto?—En algunos casos podrá ser autorizado *temporalmente* por la autoridad superior administrativa, mediante justa causa, cuya exigencia presupone la justificación del fin para que se otorga aquel uso, el cual no puede ménos de ser lícito, justo y honesto.

TÍTULO V.

INHUMACIONES Y VIOLACION DE SEPULTURAS.—DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

Sabido en que al enterramiento de los cadáveres deben preceder ciertas formalidades, que establece la ley del Registro civil (2), entre las cuales se cuenta la certificacion facultativa que, previo reconocimiento, justifique la certeza de la muerte; la inscripcion del fallecimiento en el expresado Registro; la orden de enterramiento dictada por el juez municipal; y el trascurso necesario de veinticuatro horas, contadas desde la consignada en dicha certificacion. Tambien es sabido, que las leyes sanitarias y los reglamentos ú ordenanzas municipales, contienen ciertas reglas de lugar y tiempo, que es menester cumplir al practicar las inhumaciones, porque así lo exige la higiene ó las circunstancias excepcionales *endémicas* ó *epidé-*

(1) No debe confundirse el delito de uso público de nombre *supuesto*, con el de un nombre fingido, usado solamente para consumar una estafa, de cuyo delito es elemento constitutivo.

(2) Véase la seccion de derecho civil, al tratar de dicho registro.

micas, á veces. Pues bien; el que practicare ó hubiere hecho practicar una inhumacion, contraviniendo á lo dispuesto por las leyes ó reglamentos, respecto al sitio, tiempo y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, incurre en responsabilidad penal, como autor de un *delito*; y como autor de una *falta*, si contraviniere á disposiciones sanitarias, de menor importancia, dictadas por la administracion sobre conduccion y enterramiento de cadáveres.

¿En qué consiste, ó como puede cometerse, la violacion punible de sepulturas?—Practicando cualesquiera actos en los sepulcros ó enterramientos, que tiendan directamente á faltar al respeto debido á la memoria de los muertos. Y es tal la extension que ha querido dar el legislador á esta violacion, que ha dispuesto, como complemento de la misma, que no sólo es responsable como autor de *delito* el que lo sea legalmente de aquellos actos, sino que lo será como autor de *falta*, el que profanare los cadáveres, cementerios ó lugares de enterramiento por hechos ó actos que no constituyan *delito*; es decir, por todo género de profanaciones, sean leves ó graves. Y la razon es clara; esos actos, esas profanaciones, lastiman, hieren profundamente, uno de los sentimientos más arraigados, más intensos, más poderosos del ciudadano, hácia la memoria de sus antepasados.

Los cadáveres humanos fueron siempre, en todos los pueblos y en todas las edades, objeto de respeto religioso y de consideracion veneranda; ¿qué mucho, pues, que la ley, respondiendo á y defendiendo ese sentimiento universal, haya castigado todo acto dirigido á menospreciarle y lesionarle?

¿Qué hechos comprende y castiga el código como perjudiciales á la salud pública?—La elaboracion de sustancias nocivas á la salud, ó productos químicos que puedan causar grandes estragos; su expencion, venta ó cualquier otra clase de operacion de comercio que con ellos se ejecute sin la autorizacion competente, ó sin cumplir las formalidades prescritas por las leyes y reglamentos, en cuyo caso están comprendidos los farmacéuticos, cuando faltan á dichos reglamentos ó sustituyen unos medicamentos por otros, y los dependientes de los mismos, cuando fueren culpables hasta el punto de poder ocasionar la muerte de las personas. Cuando los hechos referidos sean menores en importancia, dejará de ser *delito* para convertirse en una *falta*.

Son tambien punibles la *exhumacion* ó *traslacion* de los restos humanos, cuando se infringen los reglamentos y demás disposiciones de sanidad; la alteracion, con mezclas nocivas á la salud, de las bebidas ó comestibles destinados al consumo público; la venta de los corrompidos y de otros objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo, todos los cuales se decomisarán: el esconder ó sustraer efectos que van á ser inutilizados ó desinfectados, con objeto de venderlos ó comprarlos; y el arrojar en fuente, cisterna ó rio, cuya agua sirva de bebida, algun objeto que la haga nociva para la salud.

La simple enumeracion de los referidos hechos, demuestra la razon de su punibilidad. Todos pueden producir la alteracion de la salud pública, y llegar á causar males sin cuento, de fatales consecuencias y de incalculable trascendencia. Existen, ademas, otros hechos de menor importancia que se castigan como *faltas*.

TÍTULO VI.

DE LOS JUEGOS Y RIFAS.

En este título, no sólo se penan los juegos de *suerte*, *envite* ó *azar*, sino tambien los *licitos* en que se hayan empleado medios fraudulentos para

asegurar la suerte. En el primer caso, y sólo por el hecho del juego, se castiga á los banqueros ó sea á las personas encargadas de su direccion y dueños de las casas, inquilinos ó arrendatarios de las habitaciones en que aquél tiene lugar, y á los jugadores que concurren á ellas, con las penas de *arresto* mayor y multa, que se agrava en caso de reincidencia.

Los establecimientos públicos no destinados al juego, sino á otros fines, en los cuales se cometa el delito de juegos prohibidos, no están comprendidos en las *casas* llamadas generalmente de *juego*. El hecho, entonces, no constituye delito, pero sí una falta, que consiste en promover ó tomar parte en cualquiera clase de juegos de azar, que no sean de puro pasatiempo y recreo (1).

¿Qué se entiende por juegos de *suerte*, *envite* ó *azar*?—Los que dependen exclusivamente de la casualidad ó de la fortuna de los jugadores. El antiguo derecho los prohibía, y especialmente lo hizo así la ley 15, tit. xxiii, libro 12 de la Novísima Recopilacion.

¿Deben ser castigados como delitos los juegos prohibidos?—Hay quien combate su represion como contraria á la libertad que debe tener todo ciudadano de destinar su capital á los usos y empleos que más le agraden. Pero es lo cierto que esta opinion, seguida por muy pocos, es contraria al sosiego público y á las buenas costumbres; porque no puede negarse la verdad y la justicia que contienen las palabras siguientes, de un comentarista. «Entre los elementos de corrupcion, dice, que más desastrosas consecuencias producen en el seno de la sociedad, ninguno tan trascendental y de resultados tan funestos, como el de los juegos de *suerte*, *envite* ó *azar*, porque no sólo afectan á la fortuna y comprometen la paz y la dicha de las familias, sino que relajan las costumbres, pervierten y extravían los más nobles instintos y son el foco inmundo de donde salen la gran parte de los ódios y crímenes que manchan, desgraciadamente, los anales de todas las épocas. No es de extrañar, por lo tanto, que todas las legislaciones penales hayan considerado como delito, semejante clase de juegos (2).»

Para que nuestros lectores conozcan, si no todos, la mayoría de los juegos prohibidos, transcribimos el siguiente párrafo de la pragmática de Carlos III, dada en San Lorenzo el 6 de Octubre de 1771, la cual viene á ser la ley xv del lib. xii del tit. xxiii de la Novísima Recopilacion. «Prohibo que las personas estantes en estos reynos, de cualquiera calidad y condicion que sean, jueguen, tengan ó permitan en sus casas los juegos de *banca* ó *saraon*, *baceta*, *carteta*, *banca fallida*, *sacanete*, *parar*, *treinta y cuarenta*, *cacho*, *flor*, *quince*, *treinta y una envidada*, ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte y azar, ó que se jueguen á *envite*, aunque sean de otra clase, y no vayan aquí especificados; como tambien los juegos de *birbis*, *oca* ó *auca*, *dados*, *tablas*, *azares* y *chuecas*, *bolillo*, *trompico*, *palo* ó *instrumento de hueso*, *madera* ó *metal*, ó de otra manera alguna que tenga encuentros, azares ó reparos; como tambien el de *taba*, *cubiletes*, *dedales*, *nueces*, *corregüela*, *descarga la burra*, y otros cualesquiera de suerte y azar, aunque no vayan señalados con sus propios nombres».

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 1.º de Mayo de 1876.

(2) Tal ha sido el abuso que se venia haciendo, en estos últimos tiempos y en la inmensa mayoría de las poblaciones, del juego llamado de *banca* y de los importados del extranjero conocidos con los nombres de *ruleta* y *bucarrak*, que ha obligado al gobierno á excitar el celo de todas las autoridades para la persecucion y castigo de aquéllos, recordando á los gobernadores la legislacion vigente, algun tanto olvidada por los mismos, respecto á la competencia exclusiva de las autoridades *judiciales*, á quienes corresponde penar el delito de juegos prohibidos, por más que dichos funcionarios y sus dependientes, deben perseguirlos como individuos de la policia judicial.

¿Son punibles el juego de *lotería* y las *rifas*?—Cuando la administración no las ha autorizado expresamente, los empresarios y expendedores de billetes de esta clase de juegos, están sujetos á responsabilidad penal. Si los autoriza, lo cual sucede en España con la lotería oficial, y con demasiada profusión respecto á multitud de rifas destinadas á la beneficencia y á otros objetos ménos laudatorios, claro es que no son punibles. Y sin embargo, esta clase de juegos son perjudiciales á la sociedad; alientan la ambición; exponen las fortunas; merman los pequeños ahorros y son verdaderos juegos de azar, que la ley debiera prohibir en absoluto.

¿Cómo se castiga el fraude empleado en el juego y en las rifas?—Como que el uso de ese elemento de ganancia segura, es un medio engañoso para burlar la confianza del jugador de buena fé, que convierte el juego y la rifa en una verdadera *estafa*, todos los que lo empleen ó pongan en práctica, serán castigados como *estafadores*.

Terminaremos este capítulo manifestando que el dinero, efectos, instrumentos y útiles destinados al juego ó rifa, caerán en comiso.

TÍTULO VII.

DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.

Comprende este título la *prevaricación*, la *infidelidad* en la custodia de presos y de documentos, la *violación de secretos*, la *desobediencia* y *denegación de auxilio*, la *anticipación*, *prolongación* y *abandono* de funciones públicas, la *usurpación* de atribuciones y nombramientos ilegales; los *abusos* contra la honestidad, el *cohecho*, la *malversación* de caudales públicos, y los *fraudes* y *exacciones ilegales*, terminando con indicar las *negociaciones prohibidas* á los empleados públicos.

¿Quiénes se consideran *empleados públicos*?—Se reputará funcionario público, dice el código penal, todo el que, por disposición inmediata de la ley ó por elección popular ó por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas.

¿Qué es *prevaricación*?—El código no define este delito. Puede, sin embargo, entenderse por tal la falta *maliciosa* de cumplimiento y rigurosa observancia de los deberes inherentes á los cargos que ejercen los funcionarios públicos, cometida *á sabiendas*. Es una especie de falsedad que, como dice la ley de Partida, *há en sí ramo de traición*, ejecutada por los funcionarios públicos, precisamente con *malicia* y *á sabiendas*.

Pueden cometer este delito el juez, el abogado, el procurador y cualquier funcionario público. El código reformado no menciona, como lo hacía el anterior, á los asesores, árbitros, arbitradores y peritos, sin duda porque se ocupa de ellos al tratar del falso testimonio y del delito de *cohecho*.

¿Qué jueces cometen el delito de prevaricación, y en qué casos?—Toda clase de jueces, en los siguientes: cuando el juez, *á sabiendas*, dictare: 1.º, sentencia injusta contra el reo, en causa criminal por delito; 2.º, sentencia injusta en contra ó á favor del reo, cuando ésta no hubiere llegado á ejecutarse; 3.º, sentencia injusta en causa civil; 4.º, el que, por *negligencia* ó *ignorancia inexcusable*, esto es, cuando la injusticia sea tan evidente á los ojos de las personas entendidas en derecho, que no dé lugar á dudas,

dictare en causa civil ó criminal, sentencia *manifestamente injusta*, 5.º, el que, *á sabiendas*, dictare providencia interlocutoria injusta, que lo es toda resolucion judicial contraria al derecho; 6.º, el que se negare á juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, ó sea culpable de *retardo malicioso* en la administracion de justicia; de donde se infiere que no todo retardo constituye prevaricacion, sino el que se comete con deliberado intento de perjudicar á alguna de las partes.

¿Cuándo *prevarica* el abogado y el procurador?—Cuando, *con abuso malicioso* de su oficio, ó *negligencia ó ignorancia inexcusables*, perjudican á su cliente ó descubren sus secretos, si de ellos han tenido conocimiento en el ejercicio de su ministerio; y siempre que, habiendo llegado á tomar la defensa de una parte, defendieren ó aconsejaren despues, *sin su consentimiento*, á la contraria en el mismo negocio.

¿Qué funcionarios públicos prevarican, y en qué casos?—Todos, de cualquier clase que sean, siempre que estén comprendidos en el número de personas á que nos referimos en el principio de esta seccion, al determinar quiénes se consideran tales; y cometen prevaricacion cuando, *á sabiendas*, dictan ó consultan providencia ó resolucion injusta en negocio contencioso-administrativo, ó meramente administrativo, aunque sea por negligencia ó ignorancia *inexcusables*; y cuando, faltando á los deberes de su cargo, dejaren *maliciosamente* de promover la persecucion y castigo de los delincuentes. Debe advertirse que, cuando deje de promoverse la persecucion, sin malicia, ó sin interés por parte del funcionario, no constituye delito el hecho. Constituirá una falta de diligencia, corregible disciplinariamente, pero nada más.

El juez prevaricador en causa criminal por delito, además de la inhabilitacion, á que se le condenará siempre, incurre en la pena impuesta por la sentencia, si ésta se hubiere ejecutado, y en otra inferior en grado, si no hubiera llegado á ejecutarse, descendiendo la penalidad en los demás casos. La inhabilitacion se impone á los funcionarios públicos indicados, y la multa á los abogados y procuradores.

Infidelidad en la custodia de presos y de documentos.

Son responsables de estas infidelidades 1.º, los funcionarios públicos y los particulares, culpables de connivencia en la evasion de un preso, cuya conduccion ó custodia les estuviere confiada; 2.º, el funcionario que sustrajere, destruyere ó ocultare documentos ó papeles que le estuvieren confiados *por razon de su cargo*. Será castigado, teniendo en cuenta para la penalidad los casos en que resulte ó no grave daño de tercero ó de la causa pública, con mayor ó menor pena.

Son responsables de este delito los jefes de los establecimientos que consienten ó permiten que salgan los reclusos fuera de aquéllos, á no ser por causas del servicio, con las prevenciones y seguridades reglamentarias. El particular á quien se encomienda la custodia de los presos, puede ser igualmente responsable.

Lo son tambien los funcionarios públicos que, teniendo á su cargo la custodia de papeles ó efectos sellados por la autoridad, quebrantaren los sellos ó consintieren en su quebrantamiento, y el que abriere ó consintiere la apertura, sin la autorizacion competente, de papeles ó documentos cerrados, cuya custodia le estuviere confiada, sea eclesiástico ó lego, y haya

recibido el encargo ó comision del gobierno ó de algun funcionario público.

Violacion de secretos.

¿Qué clases de secretos son los que no pueden revelarse y cuya revelacion constituye delito?—Los de que tengan conocimiento los funcionarios públicos *por razon de su oficio ó cargo*, sean de interés general ó correspondientes á los particulares. Tambien es punible la entrega *indebida* de papeles, ó *copia* de los que tengan *por razon de su empleo* y no deban ser publicados. La penalidad es mayor, si resultare *grave* daño para la causa pública. (Véase la *ley de Enjuiciamiento criminal*). Sin que haya provenido algun daño, sea grave ó leve, no puede cometerse este delito. La publicidad de los sumarios por cualesquiera de los funcionarios que de ellos tienen conocimiento, por razon de sus cargos, es materia de este capítulo.

La revelacion de secretos hecha por los particulares, constituye otro delito distinto, de que nos ocuparemos más adelante.

Desobediencia y denegacion de auxilio.

¿Quiénes cometen estos delitos?—1.º, los funcionarios judiciales, administrativos ó que ejerzan autoridad, que se negaren *abiertamente* á dar el debido cumplimiento á sentencias, decisiones ú órdenes de autoridad superior, dictadas dentro de los limites de su respectiva competencia, y revestidas de las formalidades legales. Sin embargo, no incurrirán en responsabilidad criminal, por no dar cumplimiento á un mandato *administrativo* que constituya una infraccion *manifiesta, clara y terminante*, de un precepto constitucional, ó de cualquiera otra ley, porque, segun la Constitucion (1), el mandato del superior que contiene una infraccion de esa naturaleza, no exime de responsabilidad penal; 2.º, el funcionario que, habiendo suspendido por cualquier motivo que no fuere de los expresados en la excepcion anterior la ejecucion de las órdenes de sus superiores, las *desobedeciere despues que aquéllos hubieren desaprobado la suspension*; 3.º, el de igual clase que, requerido por autoridad competente, no prestare la debida cooperacion para la administracion de justicia ú otro servicio público. Si de su omision resultare grave daño para la causa pública ó á un tercero, las penas serán más graves; 4.º, el que rehusare ó se negare á desempeñar un cargo público de eleccion popular, sin presentar ante la autoridad que corresponda excusa legal, ó despues que la excusa fuere desatendida. Por esta razon incurria en responsabilidad el jurado que voluntariamente dejaba de desempeñar su cargo, sin excusa admitida (2), é incurre el perito y el testigo que dejaren tambien voluntariamente de comparecer ante un tribunal á prestar sus declaraciones, cuando hubieren sido oportunamente citados al efecto, doctrina sancionada por el código reformado, y no prevista en el anterior.

La inhabilitacion, la suspension y la multa, son las penas que se imponen á estos delitos.

(1) Se refiere el código á la de 1869.

(2) Suspendido por Decreto de 3 de Enero de 1875 el juicio por jurados, es claro que no puede tener aplicacion este caso en la actualidad.

Anticipacion, prolongacion y abandono de funciones públicas.

La simple lectura de este epígrafe, explica suficientemente la naturaleza de los hechos prohibidos y penados por el código. Por consiguiente, basta indicar que incurre en responsabilidad penal el que entrare á desempeñar un empleo ó cargo público sin haber prestado en debida forma el juramento ó fianza requeridos por las leyes, y el que continuare ejerciendo su empleo, cargo ó comision despues que debiere cesar, conforme á las leyes, reglamentos ó disposiciones especiales de su ramo respectivo.

Usurpacion de atribuciones y nombramientos ilegales.

La base del organismo constitucional, consiste en la independencia de los poderes públicos. La ley determina la esfera de accion y las atribuciones de cada cual, y castiga á los funcionarios dependientes de ellos por la usurpacion que hagan de las atribuciones de losdemás.

Por eso pena el código: 1.º, al funcionario público que invadiere las atribuciones del poder legislativo, ya dictando reglamentos ó disposiciones generales, ya derogando ó suspendiendo la ejecucion de una ley; 2.º, al juez que se abrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas, ó impidiere á éstas el ejercicio legítimo de las suyas, y al funcionario administrativo que se abrogare ó impidiere el ejercicio de las judiciales; 3.º, al funcionario público que, requerido legalmente de inhibicion, continuare procediendo, antes que se decida la contienda jurisdiccional; 4.º, á los funcionarios administrativos ó militares que dirigieren órdenes ó intimaciones á una autoridad judicial, relativas á causas ó negocios, cuyo conocimiento ó resolucion sean de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia; 5.º, al eclesiástico que, requerido por tribunal competente, rehusare remitirle los autos pedidos para la decision de un *recurso de fuerza*.

¿Cuándo tiene lugar el hecho punible de *nombramientos ilegales*?—Cuando el funcionario público á quien corresponde hacerlos, ó proponer las personas en las cuales ha de recaer, nombran ó proponen para el cargo público, á las que no reunen los requisitos legales, haciéndolo á *sabiendas*.

Abusos contra la honestidad.

Los hechos que pasamos á enumerar como punibles, revelan siempre la inmoralidad, la falta de hidalguía y los malos sentimientos de los funcionarios que los cometen. La posicion de éstos, respecto á las personas ofendidas, les da cierta especie de supremacía, de la cual se prevalecen para cometer el delito, ofreciendo en pago del favor que demandan, sin consideracion alguna á la desgracia, el quebrantamiento de sus deberes, en el cual vé la persona solicitada, tan injustamente ofendida, una esperanza de realizar el bien que desea ó las aspiraciones que se propone, y cuya voluntad ponen en tortura las promesas halagüeñas de tan indignos funcionarios.

Cometen los delitos á que nos referimos: el funcionario público que *solicitar* á una mujer que tenga pretensiones pendientes de su resolucíon, acerca de las cuales deba evacuar informe ó elevar consulta á su superior, aunque no haya conseguido su torpe propósito; y el alcaide que igualmente *solicitar* á una mujer sujeta á su guarda, aunque tampoco haya obtenido correspondencia. Si la solicitada fuere esposa, hija, hermana ó afín en los mismos grados, de persona que tuviere bajo su custodia, la pena será menor. En todo caso incurrirá, además, en la de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial, cuya pena combinada con la prision correccional, constituye la penalidad de estos delitos.

Del cohecho.

¿Qué es el *cohecho*?—El ejercicio de funciones públicas, aplicado á determinados fines, como consecuencia de las *dávivas*, *promesas* ú *ofrecimientos* luerativos, aceptados por los empleados públicos á quienes aquellas corresponden. Todo acto ejecutado, acuerdo, disposicion ó sentencia dictada, habiendo intervenido dichos reprobados medios, constituye el delito de *cohecho*. Es, pues, responsable de él: 1.º, el funcionario público que recibiere por sí ó por persona intermedia, *dáviva* ó *presente*, ó *acceptare ofrecimientos* ó *promesas* por ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo que constituya delito, ó un acto injusto que no lo constituya; 2.º, el que recibiere *dáviva* ó *acceptare ofrecimiento*, en las formas indicadas, que tuviere por objeto *abstenerse* de un acto que debiera practicar en el ejercicio de los deberes de su cargo; 3.º, los jurados, árbitros, arbitradores, peritos, hombres buenos ó cualesquiera personas que desempeñaren un servicio público y cometieren alguno de los hechos ú omisiones antes referidas; 4.º, el funcionario que admitiere *regalos* que le fueren presentados en consideracion á su oficio.

Pero no sólo son responsables los sobornados: la responsabilidad alcanza tambien á los sobornantes que corrompen la moralidad de los funcionarios públicos, y vienen á ser autores legales del cohecho, porque no sólo inducen directamente á su consumacion, sino porque ejecutan el hecho fundamental del delito mismo, la *dáviva*, la *promesa* ó el *ofrecimiento*, sin el cual el cohecho no se hubiera cometido.

Fraudes y exacciones ilegales.

En este capítulo se pena la defraudacion al Estado, por medio de la connivencia de los funcionarios oficiales, con los arrendatarios de los servicios públicos; la participacion interesada, directa ó indirecta de aquéllos, comprendiendo en este delito á los peritos, árbitros, contadores particulares, tutores, curadores y albaceas, cuando figuran en los contratos ú operaciones en que deban intervenir por razon de su cargo; la exaccion de derechos excesivos y las estafas cometidas por los funcionarios públicos.

El presidio correccional, la inhabilitacion y la multa, son las penas que alternan, segun la gravedad ó importancia del hecho que castigan.

Malversacion de caudales públicos.

Cometen este delito los funcionarios públicos que: 1.º, teniendo á su cargo, por razon de sus funciones, caudales ó efectos públicos, los sustraieren ó consintieren que otros los sustraigan; 2.º, por abandono ó negligencia inexcusables, hayan dado ocasion á que se efectúe por otra persona la sustraccion; 3.º, los que, con daño ó entorpecimiento del servicio públi-

co, y aún sin ellos, aplicaren á usos propios ó ajenos los caudales ó efectos públicos antes referidos; 4.º, el que diere á los caudales que administre una aplicacion pública diferente de aquélla á que estuvieren destinados, con ó sin daño y entorpecimiento; 5.º, el funcionario público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, no lo hiciere; 6.º, el que, requerido por autoridad competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia ó administracion.

No es circunstancia indispensable que los autores de tales hechos, para que éstos constituyan delito, sean funcionarios públicos. Son tambien punibles cuando se ejecutan por los que se hallan encargados de fondos, rentas ó efectos provinciales ó municipales, ó pertenecientes á un establecimiento de instruccion ó beneficencia, y por los administradores ó depositarios de caudales embargados, secuestrados ó depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan á particulares. La penalidad puede llegar á la cadena temporal, en el primer caso.

Negociaciones prohibidas á los empleados.

Los jueces, los funcionarios del ministerio fiscal, los jefes militares, gubernativos ó económicos de una provincia ó distrito, con excepcion de los alcaldes, no podrán mezclarse, directa ni indirectamente, en operaciones de agio, tráfico ó granjería, dentro de los límites de su jurisdiccion ó mando, sobre objetos que no fueren producto de sus bienes propios, mientras estén en el ejercicio de sus cargos. Esta disposicion no es aplicable á los que impusieren sus fondos en acciones de Banco ó de cualquiera empresa ó compañía, con tal que no ejerzan en ellas cargo, ni intervencion directa, administrativa ó económica.

Esta prohibicion es conveniente para la administracion imparcial y severa de la justicia, y la excepcion que se establece es justa y necesaria.

TÍTULO VIII.

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.

Bajo este epígrafe se comprenden el *parricidio*, el *asesinato*, el *homicidio*, el *infanticidio*, el *aborto*, las *lesiones* y el *duelo*. Por la importancia y lamentable frecuencia de este género de delitos, haremos mencion de la penalidad con que se castigan.

Parricidio.

Este delito no se penaba independientemente en el código de 1850, por más que se castigaba como *parricida* al que mataba á sus ascendientes, descendientes ó á su cónyuge.

¿Qué es *parricidio*?—Si bien, tomada esta palabra en una acepcion estric-
ta, es la muerte violenta causada por los hijos á sus padres, en otra más lata y no ménos antigua, comprende la muerte de los ascendientes y descendientes y la del cónyuge (1).

Por eso establece el código que el que matare á su padre, madre ó hijo,

(1) Las leyes romanas, las del Fuero Juzgo y las de Partida, ya empleaban esa palabra dándole la extension que queda indicada en el texto.

sean legítimos ó ilegítimos, de cualquiera especie, ó á otro de sus ascendientes ó descendientes, ó á su cónyuge, será castigado como *parricida*, con la pena de cadena perpétua á muerte. Los ascendientes y descendientes *adoptivos* no entran en la determinación de este delito. Su muerte violenta, causada por el ligado con dicho vínculo y en los grados expresados, constituirá un *homicidio* con circunstancia *agravante*, en algún caso, pero no el *parricidio*.

La *ilegitimidad* de los ascendientes ó descendientes más allá del primer grado, excluye la calificación de parricidio. Por eso el autor de la muerte de su abuelo, bisabuelo, nieto ó biznieto, no es reo de aquel delito.

No mencionado tampoco por la ley el parentesco de *afinidad*, la muerte del suegro ó del yerno, no constituyen el repetido hecho punible. Pero si cooperan á su ejecución con la esposa, hija del primero, que constituye el lazo del parentesco, y caracteriza el delito de parricidio, del cual ella es partícipe, entonces serán aquéllos responsables criminalmente del expresado delito, según la participación que hayan tenido en él.

El *parricidio* se castiga con la pena de *cadena perpétua á muerte*, según las circunstancias modificativas de la imputabilidad, que hayan concurrido en su consumación.

Asesinato.

Tampoco el código antiguo se ocupaba, especialmente, de este delito, comprendiéndole en el *homicidio* llevado á cabo con las circunstancias de agravación, que, como veremos luego, constituyen hoy esencialmente el *asesinato* y caracterizaban ántes el homicidio llamado *cualificado*.

¿Qué es, pues, el *asesinato*?—El *homicidio*, que no es *parricidio*, consumado con alguna de las cinco circunstancias siguientes: *alevosía* (1), *precio ó promesa remuneratoria*, por medio de *inundación*, *incendio* ó *veneno*, con *premeditación conocida* ó con *enseñamiento*, aumentando deliberada é inhumanamente el dolor del ofendido. Estas circunstancias, todas comprendidas en las generales de agravación de los delitos, dejan de ser genéricas, para formar elementos *esenciales*, constitutivos del *asesinato*. Cualquiera de ellas basta para calificarlo, sin que por eso sean desatendibles las demás, que en concurrencia con aquéllas, deben apreciarse como *agravantes genéricas*.

La *premeditación* que, como dijimos en su lugar oportuno (2) viene á ser la *meditación reflexiva* anterior al homicidio, ha de constar convincentemente y no confundirse con la meditación instantánea ó próxima á la ejecución del delito, necesaria para su consumación, y á veces constitutiva del delito mismo.

¿Qué es *enseñamiento*?—La acción y efecto de enseñarse, según el Diccionario de la lengua. Y *enseñarse* es «deleitarse en causar á la víctima del crimen, ó al enemigo ya rendido, el mayor daño y dolor posibles, prolongando su agonía.»

Obra *con enseñamiento*, consiguientemente, el homicida que se complace en causar al interfecto mayor mal, que el necesario para conseguir su fin, *aumentando deliberada é inhumanamente* el dolor de aquél. Pero debe tenerse en cuenta que esa forma cruel, *inhumana* y de refinada perversidad, empleada en la ejecución del *asesinato*, debe haber sido resultado de *deliberación* anterior para atormentar á la víctima innecesariamente. Cuando la exuberancia del mal no es el efecto de un lujo de perversidad, sino del

(1) Véase lo expuesto acerca de esta circunstancia en la pág. 18: no nos cansaremos de recomendar bastante el estudio de esta circunstancia que ha dado lugar, y dará todavía, á multitud de cuestiones puramente de apreciación, pero de una trascendencia fatal para los delincuentes, si no se modifican los términos en que está descrita en el Código.

(2) Véase la pág. 19.

propósito firme de matar ó de herir sólo y determinadamente, para lo cual se repite dicho mal, ofuscado el delincuente por la pasión torpe y brutal que le domina, obrando casi maquinalmente, temiendo que el primer golpe no baste, no se obra con ensañamiento, y por tanto no se comete el delito de *asesinato* por tal concepto.

El *ensañamiento* puede deducirse, según el Tribunal Supremo, del número y clase de heridas; del destrozo del cuerpo y demás circunstancias que indiquen que debió padecer el ofendido larga y dolorosa agonía. (Sentencia de 4.º de Marzo de 1876.) Doctrina no muy conforme con la sentada en otra ejecutoria de 13 de Mayo de 1873 que declara que «aunque parezca innecesario para el criminal objeto el mayor número de las punaladas, no así se deduce (de las mismas) que haya habido voluntad perfecta y deliberación de atormentar al ofendido».

El *asesinato* se castiga con la pena de *cadena temporal*, en su grado máximo, á muerte, según las circunstancias de su ejecución.

Homicidio.

¿Qué es *homicidio*?—La muerte violenta de una persona, cuyo hecho no constituye el *parricidio*, ni se ha ejecutado con ninguna de las circunstancias que determinan el *asesinato*. Es, por consiguiente, reo de *homicidio* el que, sin estar comprendido entre las personas que cometen *parricidio* ó *asesinato*, matare á otro, no concurriendo alguna de las circunstancias enumeradas, y será castigado con la pena de *reclusion temporal*.

Cuando, riñendo varios y acometiéndose entre sí *confusa* y *tumultuariamente*, no cuando la riña no es *confusa* ni *tumultuaria* (1), hubiere resultado muerte y no constare su autor, pero sí los que hubieren causado lesiones graves al difunto, serán éstos castigados con la pena de *prisión mayor*. Cuando no constaren éstos, se impondrá á todos los que hubieren ejercido violencias en su persona, la de *prisión correccional* en sus grados medio y máximo. Si no hubiese resultado muerte y si lesiones solamente, no es aplicable la doctrina expuesta, castigándose el delito como de *lesiones*.

Suicidio.

¿Es punible el *homicidio de sí mismo*?—No, con relación al suicida; porque si comete un gran pecado, y si fuera racional y justo creer que cometía un delito, es lo cierto que el primero no cae bajo la acción de la justicia humana, y el segundo no podría recibir mayor pena que la privación de la vida que el suicida se impone voluntariamente. Pero el que le presta auxilio para consumar el hecho, ya ejecuta un acto punible, equiparado al autor ó al cómplice del homicidio. Por eso será castigado con la pena de *prisión mayor*; y si se le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la pena de *reclusion temporal*.

A pesar de lo dicho, dibújase entre ciertos escritores modernos la tendencia encaminada á castigar el suicidio, como indicamos en la nota (2).

(1) Hay que tener muy presente esta situación jurídica, que es á la que se refiere el código.

(2) El suicidio es un mal social lamentable.

En Atenas estaba permitido, si precedía la licencia de los magistrados, y se castigaba si la licencia era negada ó no se había pedido.

En Tébas existía análoga legislación.

En Roma era lícito privarse de la vida, por regla general. Había algunos casos de excepción, referentes á los militares y á los penados.

En la Edad Media cambió casi radicalmente la opinión. Los legisladores juzgaron que el suicidio era un crimen, y se castigaba en el mismo cadáver del suicida y en las herencias.

Las leyes recopiladas le privaban de todos los bienes, los cuales iban á la Cámara del rey, si no dejaba descendientes. Platon creía justa la pena de infamia para los suicidas. Bec-

Disposiciones comunes á los delitos de parricidio, asesinato y homicidio.

Los tribunales, apreciando las circunstancias del hecho, podrán castigar el delito *frustrado* de parricidio, asesinato y homicidio, y la *tentativa* de los mismos, con una pena inferior en un grado á la que debiera corresponderles. Solo la apreciación de las circunstancias en cada caso particular, determinarán la aplicación de la benignidad de la regla anterior.

¿Qué delito constituye el acto de disparar un arma de fuego contra *cualquiera persona*?—No tiene nombre especial; pero este hecho, del cual no se ocupaba expresamente el código de 1850, dando lugar á graves y fundadas dudas de interpretación, es punible según el reformado, y se castiga con la pena de prisión correccional, en sus grados mínimo y medio, si no hubieren concurrido en su ejecución todas las circunstancias necesarias para constituir delito *frustrado* ó *tentativa* de parricidio, asesinato, homicidio, ó *cualquier otro delito á que esté señalada una pena superior á la expresada, por alguno de los artículos del código.*

De manera que, cuando el disparo produce una lesión que se castiga con pena menor de la prisión correccional en sus grados mínimo y medio, el hecho constituye *dos* delitos; el de disparo de arma de fuego y el de lesiones, y, por tanto, debe castigarse con el grado máximo de la pena correspondiente al delito más grave (1).

Este delito, como todos los demás, es susceptible de *frustración*.

Los disparos repetidos contra una misma persona, en el mismo acto, no constituyen tantos delitos como aquéllos sean, sino un solo acto jurídico, y por consiguiente, un solo hecho punible, del mismo modo que el autor de varias lesiones es reo como un delito. Hay quien cree, sin embargo, que debe calificarse de un solo hecho constitutivo de varios delitos.

caría censura y entiende que es inútil la represión. Duforché de Valazé considera sin fuerza á la ley penal para corregir el mal y reprimirlo. Pastoret quisiera que se colgara de un poste por los pies al suicida poniéndole señales infamantes. Rossi y Pacheco opinan que no deben pensarse los suicidios, porque no se infringe con ellos un deber exigible, y no hay interés mayor en castigar atentados de interés personal; porque la acción de la justicia, añaden, sería vejatoria, y porque la sanción que se les impusiera nunca llegaría á la natural, que es consecuencia del acto mismo.

MM. Chenveant, Helie y Carpentier, escritores franceses modernos, sostienen de nuevo la doctrina de la justicia del castigo de los suicidios, porque el hombre, dicen, no se pertenece á sí mismo.

Las legislaciones modernas, excepto la de Austria, callan sobre el suicidio.

La reacción científica comienza.

El suicidio es un delito social. Todo el que se mata falta á los deberes que ha prometido cumplir; y si ha sido culpable, debe mostrarse dócil á la ley y sufrir el castigo.

La juventud ha costado un capital, que es justo devolver á la sociedad, por la teoría económica del cambio de servicios por servicios. Si fuera sólo una infracción *moral*, se admitiría como legal la doctrina de que es lícito destruir la asociación civil, porque todos podrían darse la muerte legalmente. No es exacto que no haya sanción superior á la natural que lleva consigo el suicidio: para muchos, es cosa fácil arrostrar la muerte, y no lo es la idea del deshonor y de la infamia.

Fundado en estas razones un ilustrado profesor de la Universidad central, D. Melchor Salvá, opina que debe reformarse el código vigente, proponiendo la siguiente modificación:

«Art. 421. El cuerpo del suicida será enterrado sin honores fúnebres: no será permitido poner inscripciones, ni linaje alguno de expresión de su nombre, ni de su vida, en su sepulcro. Si hubiere testado, se tendrá por nulo y no producirá efectos legales su testamento.

«Art. 422. La tentativa de suicidio se castigará con la pena de arresto mayor. A los reos de delito frustrado se les impondrá la de prisión correccional en su grado mínimo.»

(Apuntes tomados del artículo firmado por dicho profesor, que publicó la *Revista Europea* el 17 de Marzo de 1878.)

(1) En este sentido ha resuelto las dudas del Tribunal Supremo de Justicia, aplicando al caso el art. 90 del código penal.

¿Cuándo debe calificarse de homicidio ó asesinato *frustrado* el disparo de arma de fuego?—Difícil es ofrecer reglas que abracen preceptos generales y absolutos, aplicables á todos los casos. Las circunstancias y los antecedentes de los hechos, han de decidir la calificación. La corta distancia á que el disparo se ejecute; la parte del cuerpo á que se dirija; la clase del arma y naturaleza de los proyectiles que se disparen; los resentimientos anteriores; las frases del agresor y aún los motivos ó causas eficientes del delito, son los únicos medios de convencimiento que la práctica ofrece y que la jurisprudencia, inspirada en la naturaleza humana, indica, para declarar si el hecho merece la calificación de mero disparo de arma de fuego ó delito frustrado de *asesinato ó homicidio*.

Infanticidio.

¿Qué es el *infanticidio*?—Recibe esta denominación la muerte violenta de un *recien-nacido*.

Ni el código penal, ni la jurisprudencia, fijan el tiempo hasta el cual el niño merece el calificativo de *recien-nacido*. Todos convienen, y el uso vulgar de esta frase compuesta, no contenida en el Diccionario de la lengua, lo confirma, en que indica en el sér pocos dias de vida fuera del claustro materno. Pero ningún texto legal los determina. Por manera que esa omisión queda al arbitrio prudencial de los tribunales el subsanarla.

Sin embargo, no sería absurdo, ni fuera de lugar, el convenir en que debe calificarse de *recien-nacido* al niño que no ha cumplido *tres dias*; no sólo porque ese tiempo señala la ley para minorar la pena á los ascendientes maternos cuando cometen este delito, como luego veremos, sino porque ese mismo término fija la ley de Registro civil para inscribir al niño en los libros de nacimiento; y por último, porque esta es la tendencia que se nota en la jurisprudencia y en los códigos extranjeros que, más ó menos directamente, abordan esta dificultad.

¿Qué atenuacion considerable establece el código en el delito de *infanticidio*?—La rebaja de la penalidad, en dos ó más grados, en favor de la madre, sea soltera, casada ó viuda, que, *por ocultar su deshonra*, matare al hijo *que no haya cumplido tres dias*, á la cual sólo castiga con la pena de *prision correccional* en sus grados medio y máximo; y en beneficio de los abuelos maternos que ejecutan la muerte del nieto, *por ocultar la deshonra de su hija*, á quienes se penará con la *prision mayor*. Son, pues, circunstancias esenciales para esa benignidad de la ley, que el niño no haya cumplido *tres dias*, y además, que la causa eficiente del delito haya sido el propósito de encubrir el deshonor de la madre. Y téngase presente que han de concurrir *conjuntamente* dichas circunstancias, porque la una sin la otra, no legitimaría la rebaja de la pena.

¿En qué se funda esa benignidad tan remarcable?—En la fuerza poderosa que en nosotros tiene el sentimiento del honor, bien el más preciado de todo corazon sensible y digno, cuya fuerza moral atrastra la voluntad de un modo casi irresistible á atropellarlo todo, supeditando y ahogando los impulsos de otros sentimientos, por más nobles, más legítimos y más levantados que ellos sean. La ley que ha mirado con mucha consideracion el *duelo*, no podia rechazar ni negar el hecho social, la verdad reconocida por todos, de que la persona pundonorosa prefiere la muerte á la publicidad de su deshonra. Por eso atenuó en tan alto grado el delito de *infanticidio* cometido por los ascendientes maternos en los primeros dias del nacimiento de aquellos seres infelices, cuando todavia el sentimiento natural, no ménos atendible y vigoroso, de la paternidad, no se ha despertado, y el *recien-nacido* no ha dejado de ser una sustancia material, digámoslo así con gérmenes de vida. Mas ya pasado ese primer tiempo, la muerte de esas

criaturas reviste toda la perversidad de un horrendo crimen, máxime cuando no es resultado del impulso atenuante de la deshonra.

Así es por qué el mismo código dice que, fuera de los dos expresados casos, el que mate á un recién-nacido será castigado como reo de *parricidio* ó *asesinato*, según las circunstancias que en el hecho concurran.

Aborto.

¿Qué es el aborto?—La expulsion provocada del feto antes del término natural del embarazo de la mujer que lo ha procreado. Puede causarse en diversas circunstancias: *de propósito ó violentamente, y sin que haya habido tal intencion; con y sin consentimiento de la mujer; por ésta ó por un extraño.*

El que de propósito lo causare, será castigado: 1.º, con la pena de reclusion temporal *si ejerciere violencia* en la persona de la mujer embarazada; 2.º, con la de prision mayor, si aunque *no la ejerciera*, obrare *sin consentimiento* de aquella; 3.º, con la de prision correccional en sus grados medio y máximo, *si la mujer lo consintiera.*

Cuando no haya habido propósito de causar el aborto, y éste fuese ocasionado violentamente, será castigado con prision correccional en sus grados mínimo y medio.

Cuando la mujer *causare* su aborto ó *consintiere* que otra persona se lo cause, será castigada con prision correccional, en sus grados medio y máximo. Si lo *hiciera por ocultar* su deshonra, incurrirá en pena menor. La ley es consecuente: recomienda la conveniencia, y hasta cierto punto, justifica la benignidad otorgada á los ascendientes en el *infanticidio* consumado para tan poderoso fin; igual benignidad debia conceder y concede al aborto que reconozca en la madre la misma causa.

Son tambien responsables de este delito el facultativo (1) que, *abusando de su arte*, causare el aborto ó cooperare á él, y el farmacéutico que, sin la debida prescripcion facultativa, *expendiere* un abortivo. Estos peritos en la ciencia no sólo faltan á sus deberes facilitando medios para la ejecucion del aborto, sino que, en vez de aplicar sus conocimientos á la conservacion y desarrollo de los fetos, los emplean para conseguir su destruccion, cooperando á fines tan perjudiciales de una manera positiva y eficaz.

Lesiones.

Aunque el código divide las lesiones en graves, *ménos graves* y *leves*, nosotros creemos conveniente añadir á esta division un miembro más, para mayor claridad en la materia, clasificándolas en *lesiones gravísimas, graves, ménos graves* y *leves*.

Llamamos *lesiones gravísimas* á la castracion y á cualquiera otra mutilacion causadas *de propósito*; esto es, con intencion deliberada de producir ese y no otro mal. Las segundas, que indican toda desaparicion de parte importante del cuerpo, es el género; y la primera la especie, porque la castracion viene á ser, en realidad, la mutilacion completa de los órganos genitales. Otras mutilaciones pena tambien especialmente el código, como veremos luego.

Califica el código de *lesiones graves*, las que hayan producido la imbecilidad, la impotencia, la ceguera, la pérdida de un ojo ó algun miembro del

(1). Según la jurisprudencia francesa, las *comadronas* están comprendidas en el precepto que exige la responsabilidad penal del aborto, á los facultativos. (Viada.)

ofendido, ó le dejaren impedido de él, y las que le hubieren producido enfermedad ó incapacidad para el trabajo, por más de treinta días.

Son *ménos graves* las que produzcan al ofendido inutilidad para el trabajo ó necesidad de la asistencia por ocho días ó más, (1) las cuales agravan la penalidad si fueron cometidas con *manifiesta intencion* de injuriar, ó con circunstancias *ignominiosas*. Tambien castiga expresamente la ley las *ménos graves*, inferidas á los padres, ascendientes, tutores, curadores, maestros ó personas constituidas en dignidad ó autoridad pública, aún cuando no la ejerzan en el acto de ser lesionadas.

Finalmente; son *lesiones leves*, las que hayan producido imposibilidad ó necesidad facultativa por siete días ó ménos, constitutivas de una *falta* castigada en el libro 3.º del código, de las cuales conocen los Juzgados municipales.

Réstanos manifestar, que las lesiones pueden causarse con sustancias ó bebidas nocivas, y tambien abusando de la credulidad ó flaqueza de espíritu de los ofendidos, por medio de filtros, del magnetismo, etc. Pero para que las lesiones que se causen por tales medios arteros y alevosos hasta cierto punto, sean punibles como tales, y no como tentativa ó frustracion de homicidio ó asesinato, ó por el contrario, como una imprudencia temeraria, debe constar que el delincuente no tenía *intencion de matar*, y que administraba las sustancias ó abusaba de la credulidad de su víctima, á *sabiendas*, con perfecto conocimiento del mal que iba á producir, y de los efectos de los medios empleados.

Al que causa lesiones *graves* á sus padres, hijos legítimos ó ilegítimos, ó á cualquiera otro de sus ascendientes ó descendientes ó á su cónyuge, ó bien concurriendo las circunstancias agravantes de *alevosia*, *precio* ó *promesa* remuneratoria, *premeditacion conocida*, *enseñamiento*, ó valiéndose de la inundacion, del incendio ó del veneno, el código le castiga especial y expresamente, segun la especie y naturaleza de las lesiones *graves* que infiera, con una agravacion en la penalidad ordinaria, señalada para dichas lesiones, cuando no tienen lugar en tales supuestos.

Por último, á la manera que cuando de una riña *confusa* y *tumultuaria* resulta homicidio, y no se sabe quién es su autor, se castiga al que lo fué de lesiones al muerto, así establece la ley una gradacion análoga para penar al que hubiese causado *cualquiera violencia* en la persona del ofendido que resultare con lesiones graves, recibidas en lucha *confusa* y *tumultuariamente*, no constando el autor de aquéllas. El hecho de la riña y el mal producido, se castigan, aunque con pena inferior en grado á la que debiera imponerse, al autor de aquellas lesiones.

Pena tambien el código especialmente la *mutilacion* para el servicio de las armas, comprendiendo los casos en que tenga responsabilidad el *mutilado*, ó el en que le inutilizare otro con su consentimiento, y esto se hubiere efectuado mediante precio, cuya circunstancia agrava la penalidad, así como la disminuye la de ser autores de la mutilacion los padres, hermanos ó cuñados.

Disposicion general.

¿Qué excepcion se establece en favor de los maridos y de los padres delincuentes, comprendidos en esta clase de delitos?—Que la pena desciende considerablemente en los más graves que cometan, con ocasion de las faltas de sus mujeres é hijas, estando exentos de responsabilidad en los demás

(1) Siempre que la asistencia facultativa pase de *siete días*, la lesion es constitutiva de delito. (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Noviembre de 1874, contraria á otra de 23 de Abril de 1873, que declaró falta un hecho análogo.)

casos. Así dispone la ley que el marido que, sorprendiendo en adulterio á su mujer, matare en el acto á ésta ó al adúltero, ó les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Estas reglas son aplicables en iguales circunstancias, esto es, en caso de *in fraganti* delito y en el acto, á los padres respecto de sus hijas menores de veintitres años y sus corruptores, *mientras aquéllas vivieren en la casa paterna*. El beneficio de esta disposicion no aprovecha á los que hubieren promovido ó facilitado la prostitucion de sus mujeres ó hijas.

Cuando las lesiones se causan por disparo de arma de fuego deben castigarse en la forma expuesta anteriormente, al ocuparnos de estos hechos, los cuales constituyen frecuentemente dos delitos (pág. 97).

Del duelo.

¿Qué es el duelo?—Puede definirse diciendo que es un combate individual, á que precede la provocacion y aceptacion consiguientes, llevado á efecto segun las condiciones convenidas, y á presencia de dos ó más testigos, que reciben el nombre de *padrinos*. Es una usurpacion de la autoridad pública, que confia su éxito á la suerte, ó á la mayor destreza de los combatientes, cuyo origen tiene asiento en los tiempos de la Edad Media, donde el espíritu de independencia individual, el fanatismo religioso, los principios en que descansaba el feudalismo y otras causas, dieron ocasion á que se permitiese vengar las injurias personales por medio de los desafíos, realizando la idea de que un noble no debía depender sino de Dios y de su espada, llegando á constituir el duelo un medio supletorio de prueba, regulado por las Partidas, á pesar de ser el código más adelantado, más erudito y más científico, de la civilizacion de aquellos tiempos.

Nuestro código penal, comprendiendo que la condenacion absoluta é inflexible de ese hecho seria completamente ilusoria, y que, sin embargo, no puede dejar de ser punible, no obstante lo arraigado que se encuentra en nuestras costumbres para casos extremos en que el honor se considerara mancillado, y sin reparacion legal bastante la ofensa que se le infiere (1), ha procurado evitar los duelos en lo posible, y establecido la correccion y castigo de los funestos resultados que suelen tener, exigiendo condiciones especiales en los padrinos, á fin de evitar mayores males.

¿Qué disposiciones establece el código para los duelos?—Unas *preventivas*, y otras *represivas*. Son *preventivas*: 1.º las que facultan á la autoridad que tuviese noticia de estarse concertando un duelo, para proceder á la detencion del provocador y á la del provocado que ha aceptado el desafío, y prolongarla hasta que ofrezcan, bajo palabra de honor, desistir de su propósito, siempre que no se convierta en una detencion arbitraria; 2.º la exigencia de que asistan al duelo dos ó más padrinos mayores de edad, por cada parte (2), que harán la eleccion de armas (3) y arreglarán las demas

(1) El duelo, dice uno de sus defensores, es una necesidad social. Toma la justicia donde la ley la abandona: sólo él castiga lo que las leyes no pueden castigar, el *desprestigio* y el *insulto*. Los que han hablado contra él, en absoluto, han sido casi siempre imbeciles ó cobardes.

(2) La importancia que tiene la eleccion de padrinos dedúcese de la siguiente máxima: «No son las armas las que matan la mayor parte de las veces: son los padrinos. (Grissier.)»

(3) Las armas legales son el *sable*, la *espada* y la *pistola*. Cualquiera otra es convencional; pero no puede imponerse á nadie. La primera y la última son las más usadas en España. Fuera de nuestro país sólo se emplea el sable, algunas veces, entre militares.

condiciones (1). Son *represivas* las que determinan la penalidad con que se castiga á los responsables de este delito, cuya penalidad consiste en la *prision mayor*, en caso de muerte y la *inhabilitacion*, el *destierro* y la *multa*, en otro caso; segun la gravedad de los hechos resultantes de la lucha.

¿Es siempre y en todo supuesto, castigable el *duelo*?—Sí; aunque de él no resulten lesiones, se impone á los combatientes la pena de arresto mayor.

¿En qué descansa la diversa penalidad del código?—En el resultado del desafio; en los motivos que le han provocado y en la carencia de explicaciones por parte del ofensor.

Son punibles el hecho de inducir á provocar ó aceptar un duelo, y el denostar y desacreditar públicamente á alguno, por haberlo rehusado.

¿Qué responsabilidad alcanza á los padrinos?—Se les considera como *autores* de la muerte ó lesiones que resultaren del desafio, cuando lo han promovido, ó usado cualquier género de *alevosía* en su ejecucion, ó en el arreglo de sus condiciones. Se les califica de *cómplices* cuando lo han concertado á muerte, con ventaja conocida de alguno de los combatientes. Y se les castiga con arresto mayor y multa, si no hubieren hecho cuanto estuvo de su parte para conciliar los ánimos, ó no procuraron concertar las condiciones del duelo de la manera ménos peligrosa posible para la vida de los combatientes. Tambien influye en la penalidad la falta de cumplimiento de las condiciones concertadas por los padrinos, y el haber obrado proponiéndose algun interés pecuniario ú objeto inmoral. Los padrinos deben ser mayores de edad, como queda dicho anteriormente.

TITULO IX.

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD.

Compréndense bajo este nombre el *adulterio*, la *violacion*, el *escándalo público*, el *estupro*, la *corrupcion* de menores y el *rapto*, todos los cuales ofenden la moral pública, son hechos de grave escándalo y de trascendentes consecuencias.

Adulterio.

¿Cuándo tiene lugar el delito de *adulterio*?—Cuando la mujer, ó el marido en determinados casos, violan la fé conyugal. Su trascendencia es perniciosísima, por las fatales consecuencias que produce en el orden interior de las familias, implantando en su seno una generacion ilegítima.

(1) Todas éstas deben quedar consignadas en una acta escrita, procurando en ellas la igualdad entre los combatientes, recordando que la punta de las armas blancas y la pistola, son la mejor defensa del débil; son tambien atribuciones de los padrinos el elegir el sitio, marcar las distancias; medir las armas, y cargar las pistolas, etc.

El duelo á sable puede ser con y sin punta. El duelo á pistola, puede concertarse *à pí firme*, á una distancia de 15 á 35 pasos, bien tirando los dos al mismo tiempo, bien uno despues del otro, con intervalo, á lo más, de un minuto; *marcando* desde 40 pasos á 10 ó 15, acercándose progresivamente; y *à líneas paralelas* que es igual al anterior, á excepcion de la oblicuidad de los tiros, porque los combatientes comenzarán el duelo, colocándose en la cabeza de su línea, toda la cual podrán recorrer sin salirse de ella. Las dos líneas tendrán 25 pasos de largo y distarán entre sí de 15 á 20.

À las demás formas de desafio, como á caballo, á carabina, revolver, fusil, puñal y toda clase de armas y de cuantas maneras arbitrarias convengan los duelistas que no se ajusten á las anteriores, se les dá el nombre de duelos *excepcionales*, más peligrosos, más absurdos, más brutales y ménos dignos de consideracion y disculpa, que los normales y ordinarios.

De todos éstos el llamado *à oscuras* es el más brutal, peligroso y salvaje. Consiste en encerrar á los combatientes en una habitacion oscura, armados de revolver y puñal, quiénes, á la señal dada desde fuera por los padrinos, comienzan la lucha y cesan tambien.

¿Qué circunstancias deben concurrir para la existencia del delito?—Dos: el cóito y el conocimiento que debe tener el adúltero del estado civil de la mujer. Por eso cometen adulterio la casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con élla, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. Se castiga con la prision correccional.

¿Son punibles la *tentativa* y el delito *frustrado* de adulterio?—Hasta hace poco tiempo los comentaristas opinaban que estos hechos no podían existir legalmente, porque no había términos hábiles para apreciarlos, creyendo que el código se había limitado á castigar el delito consumado. Mas el Tribunal Supremo declaró en sentencia de 8 de Mayo de 1871, que eran punibles como todos los hechos análogos, encaminados á consumir los demás delitos.

¿Son punibles la *complicidad* y el *encubrimiento* del adulterio?—No; por que no pudiendo deducirse la accion mas que contra los adúlteros, no es lícito extenderla á otras personas, como sucedería penando al cómplice y al encubridor. Así lo ha declarado tambien el Tribunal Supremo en sentencia de 3 y 31 de Junio de 1874.

¿Es *pública* la accion para perseguir este delito?—No: sólo puede procederse á la formacion de causa en virtud de querella del marido, aunque esté separado de la adúltera, dirigida contra los dos culpables viviendo ambos, si aquél no hubiere consentido el adulterio ú otorgado perdon á cualquiera de ellos. Tiene, pues, tres limitaciones esta accion; el consentimiento, el perdon y la divisibilidad.

¿Qué efecto produce el perdon?—Remite la pena á ambos culpables en cualquier tiempo que el marido perdona á la mujer, por ser *privado* ó no perseguible de oficio, el delito.

¿En qué casos es punible el adulterio del marido?—Cuando tenga la manceba dentro de la casa conyugal, ó fuera de ella, pero con escándalo (1). Este hecho más que adulterio es *amancebamiento* punible, y queda sujeto á la apreciacion judicial, en cuanto á los requisitos expresados.

¿Por qué el adulterio del marido exige distintas circunstancias que el de la mujer, para ser delito?—Porque las consecuencias del cometido por ésta son más perjudiciales que el de aquél, quien no puede alterar con su incontinencia el orden legítimo de las sucesiones, efecto necesario, casi siempre, de la infidelidad de la mujer casada. Sólo á ésta corresponde la persecucion del delito de su marido, castigado con la prision *correccional* en sus grados mínimo y medio. La manceba será desterrada, en caso de condenacion de aquél.

Cuestionábase sobre si alcanza esta penalidad á la manceba cuando es casada, y si bien algunos dicen que no, porque vendría á delatarse un adulterio quizás ignorado por el marido de aquélla, lo cierto es que la ley no distingue entre una y otra manceba, y no debe tampoco distinguirse al interpretarla.

Violacion.

¿Cuándo tiene lugar la *violacion*?—Se comete este delito yaciendo con la mujer, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1.º, cuando se usa de *fuerza ó intimidacion*; 2.º, cuando la mujer se halle *privada de razon ó de sentido*; 3.º, cuando sea *menor de doce años* cumplidos, aunque

(1) Cuando la manceba está en la misma casa, el escándalo es inherente al hecho mismo, desde el momento en que éste es conocido, con lo cual se demuestra que, el escándalo que exige el código en el amancebamiento punible del hombre casado es requisito constitutivo del delito, pero independiente del hecho de las relaciones ilícitas, que no basta por si solo, si no concurre y se justifica aquél, para caer dentro de la esfera penal. (Véase la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 9 de Noviembre de 1877.)

no concorra ninguna de las circunstancias expresadas. «Puede definirse, el acceso carnal con una mujer contra, ó sin, la voluntad de ésta.»

¿En qué consiste lo grave de este delito, y cuál es su penalidad?—En que contiene un ultraje al pudor, constituye un acto de barbarie, es un atentado contra la persona violada y produce grande alarma y perturbacion en el seno de las familias. Se castiga con la *reclusion temporal*.

Los abusos deshonestos cometidos con personas de uno ú otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias que constituyen la *violacion*, se castigan segun la gravedad que encierran. Si no intervienen esas circunstancias, constituirán otros delitos (1) ó meras faltas.

¿Son punibles la *tentativa* y el delito *frustrado* de violacion?—Ningun motivo puede alegarse en contra de la afirmativa, fundado en el código. Los hechos pueden ofrecer aquellos resultados, y entonces la aplicacion de las reglas generales del código es procedente.

¿Qué debe entenderse por abusos deshonestos?—Todo acto de lubricidad, atentatorio á la moral y á las buenas costumbres, que no tenga por objeto, precisamente, el cóito con la mujer. Este pertenece ya al terreno, ó esfera jurídica, del estupro ó de la violacion.

Delitos de escándalo público.

Estos delitos son tambien contrarios á la moral pública y á la honestidad, y los cometen: 1.º, el que, hallándose unido en matrimonio religioso indisoluble, abandonare á su consorte y contrajere nuevo matrimonio segun la ley civil, con otra persona, ó vice-versa, aunque el matrimonio religioso que nuevamente contrajere, no fuere indisoluble; 2.º, los que de cualquier modo ofendieren el pudor ó las buenas costumbres con hechos de grave escándalo ó trascendencia, no expresamente penados; 3.º, los que expusieren ó proclamaren, por medio de la imprenta y con escándalo, doctrinas contrarias á la moral pública (2).

El primero no es el delito de *bigamia*, de que nos ocuparemos más adelante, sino el de grave escándalo, que produce en nuestras costumbres la repeticion del matrimonio, no disuelto el primero, amparada por la ley de matrimonio civil. Derogada ésta, aquel delito casi no tiene razon de ser actualmente entre nosotros, porque el caso se convertirá en verdadera *bigamia*, y por lo mismo punible bajo tal concepto.

Estupro y corrupcion de menores.

¿Qué acepciones pueden darse á la palabra *estupro*?—Cuando ménos dos: una general, que comprende la *violacion* ó *desfloramiento* de una doncella, y otra jurídico-penal que indica el *desfloramiento* de una doncella ó viuda, mayor de 12 años y menor de 23, hecho con engaño ó en virtud de seduccion. Son, pues, requisitos constitutivos del estupro, el engaño, causa eficiente que ha movido el consentimiento de la estuprada, y la edad de ésta. El estupro voluntario, sin engaño, no es delito, por regla general.

Hay dos casos en que no es necesaria la concurrencia simultánea de aquellos requisitos: en el estupro cometido por autoridad pública, sacerdote, criado, doméstico, tutor, maestro ó encargado por cualquier título de la educacion ó guarda de la estuprada, no es necesario que haya intervenido engaño, pero sí, que aquélla sea doncella, mayor de 12 y menor de 23 años. En el cometido con la hermana ó descendiente, llamado incesto, no exige la ley ni el engaño, ni la limitacion indicada de la edad si bien debe

(1) De escándalo público, por ejemplo.

(2) Téngase siempre presente la legislacion de imprenta.

ser la estupro mayor de 12 años, porque, según hemos visto antes, el *estupro* de una niña menor de esta edad, es siempre *violacion*. De aquí se deduce que sólo cuando media dicho parentesco, puede tener lugar el *estupro* de una mujer mayor de 23 años.

¿Puede tener lugar el *estupro* en la *viuda*?—Al determinar el sentido y significación de la palabra *estupro*, hemos comprendido á la viuda, porque, fuera del primer caso de los antes indicados, en que la ley habla expresamente de las doncellas, se refiere en su precepto más general (1) á la *mujer mayor de 12 años y menor de 23*, sin determinar si ha de ser doncella, soltera, casada ó *viuda*. Mas como el llamado *estupro* de la casada se convertiría en un *adulterio*, no teniendo, como no tiene nombre especial, el de la viuda honesta y recatada que esté comprendida en aquel período de tiempo y haya sido víctima seducida por fraude ó engaño, no hay causa legal que abone su exclusion del concepto genérico que contiene la ley (2).

¿Qué clase de engaño será bastante para constituir el *estupro*?—Este punto, el más delicado de tal delito, queda á la prudente apreciación de los tribunales. Claro es que no todo engaño, de cualquiera clase que sea, ha de reputarse suficiente. La ley se refiere al que por su propia naturaleza, y por los bienes ó promesas que con tal objeto y en ese concepto se presentan, sea capaz de alucinar á la mujer y mover su voluntad al consentimiento, más ó menos demostrado. Siempre se ha indicado como ejemplo del engaño á que el código se refiere la *promesa de matrimonio* no cumplida, el cual, es hoy indiscutible que debe tenerse como suficiente por haber declarado el Tribunal Supremo en varias sentencias (3) que es un medio engañoso constitutivo del delito de *estupro*, siempre que la falta de cumplimiento sea voluntaria.

Los *abusos deshonestos* que hemos determinado al tratar de la violación, cometidos por las mismas personas y con las mismas circunstancias de tiempo, autoridad, guarda, parentesco, edad y engaño, tenidas en consideración para penar el *estupro*, son igualmente punibles. De lo cual se infiere que no lo son cuando faltan esos requisitos, y que, siendo las personas ofendidas mayores de edad, no son punibles.

La prision *correcional* y el *arresto* combinados, forman la penalidad de estos delitos, según la importancia de los mismos.

¿Es punible la corrupción ó prostitución de los menores de edad?—Sí: pero para que constituya delito debe consistir en *promover ó facilitar* aquellas y reunir dos condiciones: *primera*, que esa mala acción sea *habitual* en el que la ejecuta, excepto cuando es autoridad y abusa de ella al efecto, en cuyo caso no es necesario este requisito: *segunda*, que ejecute la corrupción *para satisfacer los deseos de otro* (4), no para saciar los propios. No importa, para el caso, que la prostitución no se haya conseguido. Tales hechos son los que se conocen vulgarmente con el nombre de *alcahuetería*; también se les denomina *lenocinio*, y se castigan con la prision *correcional*, la inhabilitación de la autoridad delincuente, y la interdicción para la tutela y el consejo de familia.

¿Es responsable del delito de corrupción de menores, el *tercero*, por quien y en provecho torpe del cual se corrompen ó prostituyen?—Hay comentaristas (5) que, siguiendo la jurisprudencia francesa opinan afirma-

(1) Tercer párrafo del art. 458 del código penal.

(2) Esta es la opinión de varios comentaristas, sostenida también recientemente por un redactor de la *Revista de Legislación y Jurisprudencia*. Tomo I del *Boletín*, pág. 257.

(3) Véanse, entre otras, las de 14 de Octubre de 1871, 28 de Octubre de 1872, 2 de Diciembre de 1873 y 7 de Octubre de 1874.

(4) Según doctrina del mismo Tribunal, aun cuando la prostitución ó la corrupción de los menores no se hubiese conseguido, aquel delito puede ser consumado. (Sentencias de 30 de Noviembre y 5 de Diciembre de 1877)

(5) Entre ellos Viada y Vilaseca.

tivamente, porque del mismo modo que es *autor* del hurto y del robo, dicen, el que induce á otro á hurtar ó robar, debe ser reputado tal, no *cómplice*, como ha declarado dicha jurisprudencia, el que induce á otro á que *promueva ó facilite* la prostitucion ó corrupcion de los menores. Esto no obstante, á esta doctrina lógica y fundada en la letra del código, puesto que la jurisprudencia española no ha resuelto, que sepamos, este punto, se arguye con la consideracion atendible de que, si cuando el tercero ejecuta esos actos encaminados á la corrupcion, *para satisfacer sus propios deseos*, no se le castiga, parece una inconsecuencia y un contrasentido que se le castigue por inducir á otro á que los ejecute con los mismos egoistas propósitos de aquél.

Debemos concluir lamentándonos de la frecuencia con que se cometen estos hechos, que llegan á constituir, no un *hábito* solamente en ciertas personas, sino una repugnante ó infame profesion, en la cual fundan su modo de vivir, por sus abundantes lucros, así como de que la sociedad mire estos males con perniciosísimos, más indiferencia y menos atencion de lo que merecen.

Del rapto.

¿Qué es el *rapto*?—«El robo de una mujer, cualquiera que sea su estado, ejecutado con miras deshonestas ó con intencion de casarse con ella. Con cualquiera otro fin, no constituye este delito, sin que deje de ser, por ello, punible.»

El código distingue los casos en que se verifique *con*, ó *sin*, consentimiento de la robada, dando lugar al rapto de *seduccion* y al de *fuerza*, respectivamente, más grave el segundo que el primero porque ataca la libertad personal de la robada, ofende profundamente su honor, y compromete su porvenir; quizás su ya seguro bienestar. Cuando tiene lugar *contra* la voluntad de la mujer y con el primer fin, ó aquélla es menor de doce años, se pena con la *reclusion temporal*. Y la razon es clara: *contra* la voluntad de la robada y para abusar de su honra, es un acto de violencia personal alarmante é indisculpable; y si tiene lugar en la persona de una inocente niña, menor de 12 años, aun cuando el consentimiento de ésta se hubiese obtenido, la alarma no es menor; la gravedad es de igual magnitud, y el temor de las familias, constante y duradero.

El rapto de una *doncella* menor de 23 años y mayor de 12, ejecutado *con su anuencia*, y con miras deshonestas, constituye el rapto llamado de *seduccion* (1). Si la robada no es *doncella*, ó siéndolo, es mayor de 23 años, es claro que su rapto no es punible, siempre que se haya verificado con alguno de los dos fines enunciados al principio y con otros constitutivos de distintos delitos (2). Por eso no se castiga el rapto de la casada, de la viuda y de la mujer pública, y se pena el de la *doncella* menor, porque se la supone victima engañada por los halagos y las promesas del raptor.

Los reos de este delito que no dieren razon del paradero de la persona robada, ó explicacion satisfactoria sobre su muerte ó desaparicion, serán castigados con la pena de *cadena perpétua*, porque ese silencio sirve para fundar la presuncion de un segundo delito más grave que el rapto y la violacion, como el *homicidio* ó el *asesinato*.

¿Qué reglas hay que tener en cuenta para la persecucion de los delitos de *estupro*, *violacion* y *rapto* ejecutado con miras deshonestas?—Las siguientes: 1.^a, no puede procederse por causa de *estupro* sino á instancia de la agraviada ó de su tutor, padres ó abuelos; 2.^a, para proceder en las causas de *violacion* y en las de *rapto* ejecutado *con miras deshonestas*, bastará la denuncia de la persona interesada, de sus padres, abuelos ó tutores, aun-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 1874.

(2) El de secuestro, por ejemplo, para obtener lucro.

que no formalicen instancia, pudiendo continuar despues el procedimiento de oficio; 3.º, si la persona agraviada careciese, por su edad ó estado moral, de personalidad para comparecer en juicio, y fuere, además, de todo punto desvalida, no teniendo padres, abuelos, hermanos, tutor ó curador que denuncien, podrán verificarlo el procurador síndico ó el fiscal, por fama pública.

¿Qué medio excepcional concede el código á los reos de estas tres clases de delitos, para librarse de la pena correspondiente?—El perdón *expreso* ó *presunto* de la ofendida, manifestado en forma, el cual extinguirá la acción penal y aun la pena, si ya se hubiese impuesto. Pero téngase muy presente que el perdón no se presume sino por el matrimonio de la ofendida con el ofensor, y que producirá el efecto indicado para los demás participantes en el delito.

¿En qué consiste la indemnización que debe prestar el culpable, como consecuencia de la responsabilidad de estos hechos?—1.º, en dotar á la ofendida, si fuere soltera ó viuda, cuya dote regularán los Tribunales, teniendo en cuenta la cuantía del caudal del penado y la clase á que pertenezca la ofendida. Si fuere insolvente aquél, algunos creen que debe sufrir la responsabilidad personal subsidiaria, siendo la pena principal de las correccionales; 2.º, en reconocer la prole, si la calidad de su origen no lo impidiere, esto es, si no es *sacrilega*, *adulterina*, *incestuosa* ó *mancebo* (1). Por manera que sólo los hijos naturales pueden ser reconocidos por el sentenciado; 3.º, en mantenerla, en todo caso; pues si la condicion de ciertos hijos impide su reconocimiento por el padre, no así extingue, ni disminuye la obligación natural y civil de alimentarlos.

Los ascendientes, guardadores, maestros, autoridades ó encargados, que fuesen cómplices en los delitos de violacion, estupro, corrupcion de menores, escándalo público y rapto, serán castigados como autores; y además de las penas generales, se les condenará en las de interdiccion del derecho de tutela y de ser miembros del consejo de familia.

Delitos contra el honor.

Son éstos la *calumnia* y la *injuria*.

¿Qué es *calumnia*?—«La imputacion falsa de un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio,» para lo cual ha de ser concreta y determinada la imputacion (2). Cuando se imputa un delito que no puede perseguirse de oficio, constituirá la imputacion una *injuria*, pero no una *calumnia*. Lo mismo acontece cuando la imputacion envuelve vaguedad ó generalidad; v. g.: cuando se califica á uno de *ladron*, *asesino*, *estafador*, *incendiario* etc., como no se determina el hecho con todas sus circunstancias de lugar y tiempo, la imputacion no es *calumniosa*, pero sí *injuriosa*. La gravedad de la calumnia aumenta ó disminuye, segun que se propaga, ó no, *por escrito y con publicidad*, y se imputa un delito *grave* ó *menos grave*. Consecuencia de esta doctrina que, como la imputacion ha de ser *falsa* para que exista *calumnia*, si el acusado prueba el hecho criminal que hubiere imputado, resultando la imputacion *verdadera*, quedará exento de pena. El calumniado puede pedir que se publique en los periódicos oficiales la sentencia en que se declare la calumnia.

¿Qué es *injuria*?—«Toda expresion proferida ó accion ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona,» siempre que no cons-

(1) Para recordar qué hijos ilegítimos reciben estos nombres, véase la seccion de derecho civil.

(2) Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Abril de 1873, 25 de Noviembre de 1874 y 19 de Enero de 1875.

tituyan el delito de *calumnia*. Si el hecho injurioso tuvo lugar sin el fin expresado, no existe delito.

¿Cómo se dividen las *injurias*?—En *graves* y *leves*. Son *injurias graves*: 1.º, la imputacion de un delito de los que no dan lugar á procedimiento de oficio, como el de adulterio y el de estupro; 2.º, la de un vicio, ó falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito ó interés del agraviado, como la embriaguez, la prostitucion; 3.º, las *injurias* que por su naturaleza, ocasion ó circunstancias, fueren tenidas en el concepto público por afrentosas; 4.º, las que racionalmente merezcan la calificacion de graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Las *injurias leves* no las especifica la ley, y han de ser objeto de la apreciacion judicial.

Del mismo modo que la *calumnia*, la *injuria* inferida *por escrito y con publicidad* constituye delito, y desciende á la categoria de *falta* cuando no se comete con tales circunstancias.

¿Es admisible la prueba al reo de *injuria* sobre la verdad de sus imputaciones?—No, excepto cuando éstas fuesen dirigidas contra empleados públicos, sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, en cuyo caso, probada la verdad de los hechos injuriosos, *será absuelto el acusado*.

¿Con qué penas se castigan estos delitos?—La *calumnia* se castiga con la prision *correcional*, el *arresto* y la *multa*; y la *injuria*, con el *destierro* y la *multa*, por regla general.

¿De cuántas maneras puede cometerse la *calumnia* y la *injuria*?—No sólo manifestamente, sino por medio de *alegorias*, *caricaturas*, *emblemas* ó *alusiones*, formas de ejecucion que pueden revestir dichos delitos, las cuales siempre revelan premeditacion, pero no apreciable como agravante.

¿Cuándo se reputan perpetrados estos delitos por escrito y con publicidad?—Cuando se propagaren por medio de papeles impresos, litografiados ó grabados; por carteles ó pasquines fijados en los sitios públicos ó por papeles manuscritos, comunicados á más de diez personas (1).

¿Quiénes pueden ejercitar la *accion de calumnia* ó *injuria*?—Los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos del difunto agraviado, *siempre que la calumnia ó injuria trascendiere á ellos*; y en todo caso, el heredero, porque él es la continuacion de la persona jurídica del ofendido, á no ser que la accion haya prescrito. Es tan necesaria la *querrela* de la parte ofendida ó de las personas antedichas, que sin este requisito no puede precederse á la formacion de causa. Exceptúanse los casos en que se proceda por ofensas dirigidas contra la *autoridad pública*, *corporaciones* ó *clases determinadas del Estado*, ó por *desacato*, insultos, *injurias* y amenazas contra dicha *autoridad*, *sus agentes* ó *funcionarios públicos*.

¿Qué requisito debe cumplirse para poder perseguir las *calumnias* ó *injurias* causadas en juicio?—La previa licencia del juez ó tribunal que de él conociere, siendo tan firme su resolucion acerca de este punto, que no se da contra ella recurso alguno.

¿Cuál debe preceder á las dirigidas contra los soberanos, príncipes, agentes diplomáticos y funcionarios públicos extranjeros?—Una excitacion especial del gobierno, mandando que se abra el procedimiento.

¿Qué medios tienen los delincuentes para eximirse de la pena señalada á estos delitos?—Quedarán relevados de ella consiguiendo el *perdon* de la parte ofendida, si ésta es una persona privada, pero no si hubiere sido ofendido como funcionario público.

(1) Hay que tener en cuenta, además, lo que acerca de todo impreso disponga la legislación especial de imprenta.

¿Qué deber afecta á los directores y editores de los periódicos en que se hubieren propagado las ofensas?—El de insertar en ellos, dentro del término que señalen las leyes ó el tribunal en su defecto, la satisfaccion ó sentencia condenatoria, si lo reclamare el ofendido. (1)

TÍTULO XI.

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.

Bajo este epígrafe se comprenden la *suposicion de partos*, la *usurpacion del estado civil* y la *celebracion de matrimonios ilegales*. Tiene por objeto su repression proteger la familia y los derechos de sus individuos y castigar los enlaces no celebrados con arreglo á las leyes vigentes.

¿En qué consiste la *suposicion de partos*?—En la ficcion del nacimiento de un niño en un parto que no ha existido. Es la suposicion de una paternidad evidentemente falsa, llevada á cabo, generalmente, por la fingida madre, para usurpar derechos legítimos de terceras personas, cuya trascendencia en la esfera civil, se abarca á primera vista.

La *sustitucion* de un niño por otro, es tambien otro medio criminal gravísimo para conseguir análogos fines al que se persigue con la *suposicion* de partos.

La *ocultacion* y la *exposicion* de un hijo *legítimo*, ejecutadas con ánimo de hacerle perder su estado civil, son tambien crímenes grandes que el código castiga con *presidio mayor y multa*; cuyas penas se impondrán tambien al facultativo y empleado público que, abusando de su profesion ó cargo, cooperen á la ejecucion de alguno de los cuatro delitos expresados, ademas de la de inhabilitacion especial temporal.

¿Qué se entiende por *usurpacion del estado civil*?—La sustitucion perfecta y absoluta de una persona por otra, que tenga existencia real, en todos los actos y en todas las esferas de la vida civil, propia de aquella. Por tal medio se usurpa el nombre, la paternidad, los derechos inherentes al estado, y todo género de relaciones jurídicas de aquél á quien se sustituye falsamente, en la familia y fuera de ella.

No es el simple *uso de nombre supuesto* delito ménos grave que aquél, por que éste se contrae á un fin más estrecho, ó tiene por pretexto una situacion aislada y temporal, pudiendo no tener por objeto el representar una persona cierta, sino imaginaria y supuesta, caso que no puede darse en la *usurpacion* del estado civil de otro cuya existencia ha de ser real, como queda dicho.

¿Cuáles son los *matrimonios ilegales*?—Aquéllos en que media un impedimento. Por eso son punibles los siguientes: 1.º, el segundo ó ulterior matrimonio, contraído sabiendo que no se hallaba legítimamente disuelto el anterior, hecho que recibe el nombre de *bigamia*, del cual son tambien responsables como cómplices, el segundo cónyuge y los testigos á quienes constase la no disolucion del primer matrimonio; 2.º, todo el en que medie algun otro impedimento *dirimente*, no dispensable, ó dispensable, si por culpa de alguno de los cónyuges no se revalidase; 3.º, el contraído por un menor, sin el consentimiento paterno (2) á quien debe indultarse tan luego

(1) Hay que tener en cuenta, además, lo que acerca de todo impreso disponga la legislación especial de imprenta.

(2) Véase la seccion de derecho civil para saber quiénes son los menores que necesitan consentimiento y quiénes sólo precisan el *consejo* paterno: cómo, cuando, ante quién y en qué forma deben pedirse y hacerse constar (Ley de 20 de Junio de 1862).

como se subsane la falta por el que deba dar el consentimiento; 4.º, el de la viuda que casare antes de los trescientos un días, á contar desde la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta; y el de la mujer cuyo matrimonio se hubiere declarado nulo, en los mismos casos, contado el tiempo desde su separacion legal; 5.º, el del adoptante que, sin prévia dispensa civil, contrajere matrimonio con sus hijos ó descendientes adoptivos; 6.º, el del tutor ó curador que antes de la aprobacion legal de sus cuentas contraiga matrimonio, ó preste su consentimiento para que lo contraigan sus hijos ó descendientes, con la persona que tuviere ó hubiere tenido en guarda, á no ser que el padre de ésta hubiere autorizado el matrimonio.

¿Es responsable el juez municipal que autoriza un matrimonio ilegal?—El código le castiga con *suspension* y multa. Si el impedimento existente fuere *dispensable*, con el *destierro* y multa de ménos importancia.

¿Qué responsabilidad tiene, además de la dicha, el contrayente doloso?—La de dotar, segun su fortuna y bienestar, á la mujer que se ha casado de buena fé, como justa reparacion, dentro de lo posible, del daño moral causado, que se traduce forzosamente en perjuicios á veces irreparables.

TÍTULO XII.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS.

Debemos advertir, antes de enumerarlos, que no se refiere el código, al ocuparse de aquéllos, á los cometidos por los funcionarios públicos, sino á los que pueden cometer los particulares.

¿Cuántos y cuáles son los delitos que el código castiga como atentatorios de la libertad y seguridad personales?—Siete: la *detencion ilegal*, la *sustraccion de menores*, el *abandono de niños*, el *allanamiento de morada*, las *amenazas*, las *coacciones* y el *descubrimiento y revelacion de secretos*.

Detenciones ilegales, ejecutadas por particulares.

¿En qué consiste este delito?—En privar de su libertad un particular á otra persona, injustamente, contra derecho, encerrándola ó deteniéndola. El que proporciona lugar para la ejecucion del hecho se considera como *autor* para los efectos de la penahdad.

¿Qué personas, y en qué casos, pueden ser detenidas por los particulares?—Cualquiera puede detener 1.º, al que intentare cometer un delito, en el momento de ir á cometerlo; 2.º, al delincuente *in fraganti*; 3.º, al que se fugare del establecimiento penal en que se hallaba extinguiendo condena; 4.º, al penado que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslacion á otro punto, ó durante el tránsito de su traslacion; 5.º, al fugado preso con causa pendiente; 6.º, al procesado ó condenado declarado *rebelde* (1); 7.º, á los reos de *secuestro*, con objeto de robo, condenados á muerte por el Consejo de guerra permanente (2).

(1) Art. 382 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

(2) Art. 4.º de la ley de 8 de Enero de 1877.

Serán, pues, *detenciones ilegales*, las verificadas por el particular fuera de los casos expresados.

¿Qué obligación tiene toda persona que detenga á otra, aun en los casos legales?—El particular, lo mismo que toda autoridad ó agente administrativo, que detenga á una persona, habrá de entregarla *inmediatamente* al juez más próximo, dentro de 24 horas, y si durante este plazo demorare *innecesariamente* la entrega, incurrirá en la multa de 25 á 250 pesetas (1).

La responsabilidad criminal de este delito se agrava ó disminuye en relacion al mayor ó menor tiempo que dure la detencion; á la época y circunstancias en que se diere soltura al detenido; á la forma en que se hubiere verificado la aprehension, y á los malos tratamientos que se hubieren causado á aquél. Así, pues, cuando el culpable diere libertad al encerrado, dentro de los tres días de su detencion, sin haber logrado el objeto que se propuso, ni haberse comenzado el procedimiento, las penas serán la *prision correccional* y la *multa*. Si la *detencion* hubiere durado mas de veinte días, ó se hubiere ejecutado con simulacion de autoridad pública; se hubieren causado lesiones graves á la persona encerrada ó detenida, ó se la amenazare de muerte, la pena será la *reclusion temporal*, debiendo entenderse que tales circunstancias son constitutivas del delito.

¿La *detencion* ejecutada con ánimo de presentar á la autoridad la persona detenida, es delito?—La ley provisional de Enjuiciamiento criminal autoriza la detencion de las personas y su entrega al juez competente, hechas por los particulares en los casos que quedan enumerados anteriormente, con el deber de presentarlos al juez, dentro de las 24 horas, segun tambien hemos dicho. Claro es, pues, que el ánimo sólo de presentarlas á la autoridad judicial, no basta para hacer legitima la detencion. Es menester, además, que la persona detenida sea alguna de las enumeradas y se encuentre en cualquiera de las circunstancias que legitiman la detencion. Por eso dice el código que, fuera de los casos permitidos, que son los expresados antes, todo el que aprehendiere á una persona para presentarla á la autoridad, será castigado con *arresto menor* (2) y *multa*.

Sustraccion de menores y abandono de niños.

¿Qué hechos comprende el delito de *sustraccion de menores*?—1.º la no presentacion de un menor por sus encargados, á los padres ó guardadores de aquél, cualquiera que sea la edad del mismo, si no dieren dichos encargados explicacion satisfactoria acerca de su desaparicion; 2.º, todo acto que tenga por objeto inducir á un menor, mayor de *siete años*, á que abandone la casa de sus padres ó guardadores, aunque la fuga no se haya consumado, y 3.º, la sustraccion del menor de *siete años*, sea violenta ó ejecutada con engaños.

La penalidad es grave, porque graves son los delitos. El primero y tercero se castigan con la *cadena temporal*; el segundo con el *arresto* y la *multa*.

¿Qué hechos comprende el *abandono de niños*?—1.º La entrega de los mismos á un establecimiento público, ó á otra persona, hecha por el que tiene á su cargo su crianza ó educacion, sin que intervenga el consentimiento de la que se los hubiere confiado, ó de la autoridad en su defecto; 2.º, el abandono del menor de *siete años*. Este delito es el que más se acerca al *infanticidio*, aunque no debe confundirse con el.

(1) Art. 388 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

(2) Este es el único caso en que el código castiga un delito con pena correspondiente á las faltas, cuya escepcion debe ser efecto de algun error involuntario. Muchos comentaristas creen, que el adjetivo *menor* sobra en el texto.

¿Qué se entiende por *abandono* punible de un niño?—La exposición del mismo, seguida de la cesación de todo cuidado, vigilancia y asistencia, tan necesarias para esos seres. Aun cuando sólo llegue á ser momentánea, dá lugar al delito, cuya penalidad varía dentro de la prision *correcional*, según que haya ocasionado la muerte del infante ó que únicamente haya puesto en peligro su vida.

Si el *abandono* se hizo con el fin de causar la muerte, constituirá otro delito más grave; el *infanticidio* ó el *homicidio*.

Para precaver y evitar, en lo posible, tales desgracias, la ley castiga, como falta, al que no entregare á su familia, ó á la autoridad, un infante abandonado, cuya vida peligré.

Teniendo presente el legislador que los delitos de *detencion ilegal*, *sustraccion* y *abandono de menores*, pueden ser medios para ocultar otros más graves, cuando el delincuente no dé razon del paradero de las víctimas, castiga con la pena de *cadena perpétua* al que detuviere ilegalmente á cualquiera persona, ó sustrajere un niño menor de siete años y no diese razon de su paradero, ó no acreditare haberlo dejado en libertad; y al que no justificare que lo abandonó, sin haber cometido otro delito.

Allanamiento de morada.

Advertiremos aquí, como al tratar de la *detencion ilegal*, que el código se refiere al allanamiento cometido por los particulares.

¿En qué consiste el *allanamiento de morada*?—En entrar en la ajena *contra* la voluntad de su morador. Si para ello se emplea la violencia ó la intimidacion, el delito se agrava, y tales medios demuestran que se ejecuta la entrada *contra* la voluntad del propietario; pues debe tenerse muy presente que la ley no dice *sin*, sino *contra*, dicha voluntad, circunstancia que debe aparecer claramente demostrada.

¿En qué se funda este delito?—En que su esencia ataca la inviolabilidad del domicilio, que es uno de los derechos individuales del ciudadano, reconocidos y proclamados por la Constitucion, y respetados por todas las leyes de los pueblos cultos.

¿Qué excepciones reconoce esa *inviolabilidad*?—Además del caso en que se acuerda la entrada en la morada por la autoridad judicial, con los requisitos legales, deja de constituir delito cuando el hecho tiene lugar por efecto de una causa humanitaria ó favorable al dueño; por lo cual no cometen *allanamiento de morada* los que entran en la ajena, para evitar un mal grave á sí mismos, á los moradores ó á un tercero, ni los que lo hacen para prestar algun servicio á la humanidad ó á la justicia. Los casos urgentes de incendio, inundacion ú otros peligros graves, ó de agresion ilegítima ó socorro de adentro, están legitimados por la ley (1).

¿En qué establecimientos no tiene lugar el *allanamiento*?—En los cafés, tabernas, posadas y demás casas públicas, *mientras estuviere abiertas*, porque no están destinados, preferente y principalmente, á la vivienda de las familias (2). Despues de cerrados, puede tener lugar en dichos establecimientos, el allanamiento de morada (3).

(1) Art. 5.º de la Constitucion.

(2) Véase la seccion de procedimientos criminales.

(3) Las casas de prostitucion no pueden considerarse como establecimientos públicos para este delito. (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Abril de 1875.)

Amenazas y coacciones dirigidas á particulares.

¿Cómo puede definirse la *amenaza*?—La conminacion de un mal constitutivo ó no de delito, hecha á una persona con determinado fin y con ciertas circunstancias.

¿Cuáles deben concurrir en las *amenazas* para que constituyan delito?—Que se hagan *exigiendo* una cantidad ó *imponiendo* cualquiera otra condicion, aunque no sea ilícita. Cuando consisten en un mal que constituye delito, y tienen lugar la conminacion *por escrito* ó *por medio de emisario*; y cuando el culpable hubiere conseguido su propósito, la pena es más grave que cuando no se dán estos casos. En el primero puede obligarse al amenazador á dar *caucion* de no ofender al amenazado, y en defecto de ésta, debe imponérsele el *destierro*. Cuando presta aquélla, no puede condenársele á sufrir éste (1).

Las *amenazas leves* constituyen tambien meras faltas, como veremos al tratar de estas infracciones de ley al final de esta seccion (pág. 127.)

¿En qué consiste el delito de *coaccion*?—En impedir, *con violencia*, que otro haga lo que la ley no prohibe; ó en *compelerle* á ejecutar lo que no quiere, sea justo ó injusto, sin tener autorizacion para ello, porque ataca la libertad del cohibido, subyugándola á la suya. Téngase presente que la *violencia* y el acto de *compeler* han de ejercerse sobre una persona, no sobre las cosas, porque dichos actos, ejecutados en éstas, constituirán el delito de *despojo* (2). Tambien se castiga como *coaccion* la toma *violenta* de una cosa perteneciente á un deudor, ejecutada por el acreedor, para hacerse pago con ella, porque si no se castigaran estos hechos, que bajo cierto aspecto contienen algo de usurpacion de las funciones judiciales, el desórden y la ocasion de graves conflictos no podrian evitarse.

Descubrimiento y revelacion hechos por particulares de los secretos de otro

¿Quiénes cometen el delito de *descubrimiento y revelacion de secretos*?—1.º, el particular que, *para descubrir* los de otros, se apodera de sus papeles ó cartas, y les dá, ó no, publicidad; 2.º, el administrador, dependiente ó criado que *en tal concepto* y solamente por este motivo, supiere los secretos de su principal y *los divulgare*, por el abuso de confianza que comete y los daños que puede ocasionar; 3.º, el encargado, empleado ú obrero de una fábrica ú otro establecimiento industrial que, *con perjuicio del dueño*, descubre los secretos de su industria, como son, los medios propios y especiales de fabricacion, empleados en sus establecimientos. Es innegable que, además del abuso de confianza, puede producir la divulgacion de ciertos secretos pérdidas de consideracion y hasta la quiebra de los fabricantes. Hay algo en este delito de defraudacion fraudulenta y desleal. No es necesario que el procedimiento ó materia del secreto esté reconocido y garantido legalmente por el *privilegio de invencion* ó *introduccion*, para que sea punible.

¿Qué excepcion establece la ley?—Declara que no cometen este delito

(1) Sentencia del mismo de 24 de Setiembre de 1872.

(2) Id. del mismo de 28 de Abril de 1873.

los maridos, padres, tutores ó quienes hagan sus veces, en cuanto á los papeles ó cartas de sus mujeres, hijos ó menores *que se hallen bajo su dependencia*, fundándose en que obran por derecho ó en cumplimiento de un deber. Cesa la excepcion cuando dichas personas están ya fuera de la autoridad ó guarda, lo cual sólo tendrá lugar en la esposa, en caso de nulidad del matrimonio, declarada legalmente.

TITULO XIII.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

Si son acreedores á grave represion los ataques á la personalidad física del ciudadano y los que atentan contra su personalidad moral, son de mayor magnitud social que éstos, y de no mucho menor importancia que aquéllos, los delitos cometidos contra la propiedad; una de las primeras necesidades sociales, base del orden y de la tranquilidad pública, cuya idea representa el conjunto de afanes, sacrificios, penalidades, privaciones y fatigas, compañeras inseparables del trabajo acumulado, que constituye el capital.

¿Cuáles son los delitos *contra la propiedad*?—Los robos, los hurtos, la usurpacion, las defraudaciones, las maquinaciones fraudulentas, el préstamo ilegal sobre prendas, el incendio y otros grandes estragos y los daños.

DE LOS ROBOS.

Robos con violencia ó intimidacion.—Secuestro de personas.

¿Qué es robo?—La sustraccion de cosas muebles ajenas, con ánimo de lucrarse, ejecutada con violencia ó intimidacion en las personas, ó con fuerza en las cosas. Tres son, pues, los elementos constitutivos de este delito: 1.º, que las cosas sean muebles, para distinguirlo de la usurpacion; 2.º, que se emplee la violencia, la intimidacion ó la fuerza, segun los casos, para diferenciarlo del hurto, y 3.º, que se ejecute la sustraccion de las cosas con ánimo, con intencion deliberada de lucrarse, para no confundirlo con los daños. Para el robo es preciso que el apoderamiento tenga lugar *contra la voluntad del dueño*, bastando para el hurto que la sustraccion se efectúe sin la voluntad de aquél (1).

¿Qué se entiende por *violencia*?—Todo acto de fuerza, como las lesiones y los simples malos tratamientos, ejecutado en la persona del propietario de la cosa robada.

¿Qué es *intimidacion*?—Toda coaccion moral no leve, empleada por el malhechor sobre el ánimo del dueño, para neutralizar su voluntad y obligarle á que entregue la cosa que se le exige.

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Febrero de 1873.

Hay intimidacion, ha dicho el Tribunal Supremo, no sólo cuando median actos y expresiones de amenaza, sino cuando se ejecuta el hecho con circunstancias capaces de producir temor, por razon del tiempo, del lugar ó del número de agresores (1).

¿Qué penalidad establece el código para el robo cometido con *violencia ó intimidacion* en las personas?—Será castigado: 1.º, con la pena de *cadena perpétua á muerte*, cuando, *con motivo ó con ocasion del robo*, resultare homicidio, aunque no se haya premeditado ni previsto (2); 2.º, con la pena de *cadena temporal* en su grado medio á *cadena perpétua*, cuando el robo fuere acompañado de *violacion ó mutilacion*, causadas de propósito; ó cuando *con su motivo ú ocasion* se infirieren lesiones que produzcan la imbecilidad, la impotencia ó la ceguera del ofendido, ó cuando el robado fuere detenido bajo rescate ó por más de un dia; 3.º, con la pena de *cadena temporal* cuando, *con el mismo motivo ú ocasion*, se causare alguna de las lesiones penadas en el número 2.º de las lesiones graves (3); 4.º, con la pena de *presidio mayor* en su grado medio á *cadena temporal* en su grado mínimo, cuando la *violencia ó intimidacion* que hubiere concurrido en el robo, hubiere tenido una gravedad *manifiestamente innecesaria* para su ejecucion, ó cuando en la perpetracion del delito se hubieren causado por los delinquentes á personas, no responsables del mismo, lesiones comprendidas en los números 3.º y 4.º de las enumeradas como graves (4); 5.º, con la pena de *presidio correccional á presidio mayor* en su grado medio, en los demás casos.

Si los delitos de que tratan los números 3.º, 4.º y 5.º referidos, hubieren sido ejecutados *en despoblado y en cuadrilla*, se impondrá á los culpables la pena en el grado máximo.

Al jefe de la cuadrilla, si estuviere total ó parcialmente armada, se impondrá, en los mismos casos, la pena superior inmediata.

¿Que se entiende por *cuadrilla*?—La concurrencia á un robo de más de tres malhechores armados.

¿Quiénes son responsables de los atentados cometidos por la *cuadrilla* con motivo ú ocasion del robo?—Todos los malhechores presentes á su ejecucion en despoblado y en cuadrilla, serán castigados como autores de cualquiera de los atentados cometidos por ella, si no constare que procuraron impedirlos. Se presume haber estado presente á los atentados cometidos, el malhechor que anda *habitualmente* en la cuadrilla, salvo la prueba en contrario.

¿Qué delitos se equiparan al robo?—La *violencia ó intimidacion* empleadas con una persona para obligarle á suscribir, otorgar ó entregar una escritura pública ú otro documento, cuya exhibicion ó desaparicion haya de producir perjuicios.

¿A qué se dá el nombre de *secuestro*?—A la detencion de las personas, hecha en rehenes ó como rescate, para consumir el robo. Este delito, que no estaba penado especialmente en el código, sino cuando ya el *secuestrado* habia sido victima del robo, como hemos visto en el núm. 2.º de los casos enunciados antes, ha sido objeto de una ley especial, cuya aplicacion se encomendó *exclusivamente* á los consejos de guerra permanentes, que deben formarse en cada provincia tan luego como en ella se verifique el se-

(1) Sentencia de id. de 23 de Abril de 1872.

(2) Cuando se premedita la muerte de una persona para poder robarla impunemente y, en efecto, se ejecuta primero el asesinato y despues el robo, no está comprendido en el caso del texto, y debe calificarse el hecho como constitutivo de dos delitos, si bien uno con el carácter de *medio* empleado para cometer el otro. (Sentencia de 23 de Agosto de 1872.)

(3) Véase el capítulo de las lesiones, pág. 90.

(4) Idem.

secuestro de una ó más personas, con objeto de robo (1), *prévia declaracion del gobierno.*

¿Qué penalidad debe imponerse al *secuestro*, y conforme á qué reglas, segun esa ley especial?—Los que promuevan ó ejecuten un *secuestro*, y los que concurran á la comision de este delito, con actos sin los cuales no hubiera podido realizarse, serán castigados con la pena de *cadena perpétua á muerte.*

La aplicacion de las penas se ajustará á las reglas del libro primero del código, que hemos explicado oportunamente, y son generales para todos los delitos que el mismo comprende.

Se considerará circunstancia agravante la de haber sido detenido el *agraviado bajo rescate y por más de un día* (2).

Robo con fuerza en las cosas.

Todos comprendemos cuando tiene lugar el empleo de la fuerza en las cosas, porque todos sabemos que *forzar* es «hacer fuerza ó violencia física para conseguir algun fin». Cuando, pues, el *fin* que trata de conseguirse es el lucro ó aprovechamiento de las cosas muebles ajenas, empleando el *medio* de la fuerza en las cosas, no en las personas, tiene lugar la segunda especie de robos que hemos indicado.

El que se cometa con fuerza en las cosas, puede consumarse en *casa habitada ó edificio público ó destinado al culto religioso* ó en alguna de sus *dependencias*, y puede tambien tener efecto en lugar *no habitado* ó en algun *edificio* que no sea de los indicados antes.

¿Qué edificios deben considerarse como *casas habitadas*?—Todo albergue que constituya la morada de una ó más personas, aunque se encontraren accidentalmente ausentes de ella cuando el robo tuviere lugar.

¿Cuáles como *dependencias* de casa habitada, ó de edificio público ó destinado al culto?—Los patios, corrales, bodegas, graneros, pajares, cocheras, cuadras y demás departamentos ó sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicacion interior con el mismo, y con el cual formen un solo todo. No estarán comprendidas en el párrafo anterior las huertas y demás terrenos destinados al cultivo ó á la produccion, aunque estén cercadas, contiguas al edificio y en comunicacion interior con el mismo.

¿Con qué pena se castiga el robo ejecutado en *casa habitada* ó edificio público ó destinado al culto religioso?—Hay que distinguir los casos en que llevarén ó no armas los malhechores, y la cuantía del robo. Los que con armas robaren en dichos lugares, serán castigados con la pena de *presidio mayor* en su grado medio á *cadena temporal* en su grado mínimo, si el valor de los efectos robados excediere de 500 pesetas, y se introdujerén los malhechores en la *casa ó edificio donde el robo tuviere lugar* ó en *cualquiera de sus dependencias*, por uno de los medios siguientes: 1.º, por *escalamiento*, que se realiza cuando se entra en el edificio del robo por cualquiera parte que no sean las puertas, únicas *vías destinadas al efecto*, como dice el código, al determinar cuando existe esta circunstancia *agravante*; 2.º, por *rompimiento de pared, techo ó suelo, ó fractura de puerta ó ventana*; 3.º, haciendo *uso de llaves falsas*, teniéndose por tales las que despues diremos, ó de *ganizas* ú otros instrumentos semejantes (3); 4.º, con *fractura de puertas, armarios,*

(1) Ley de 8 de Enero de 1877, publicada en la *Gaceta* del 10. (Véase el apéndice.)

(2) Artículo 2.º de la misma.

(3) La sustraccion hecha por un criado abriendo el cofre cerrado, con una llave que no es la del mismo cofre, no es robo, sino hurto doméstico, porque no ha empleado aquel medio para introducirse el malhechor en el lugar del delito. (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 1874.) (Véase el final de la página siguiente.)

arcas ú otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sellados, ó cuando los sustrae para ser fracturados ó violentados fuera del lugar del robo, y 5.º, con nombre supuesto ó simulacion de autoridad.

Cuando los malhechores no llevaren armas y el valor de lo robado excediere de 500 pesetas, se impondrá la pena inmediatamente inferior. La misma regla se observará cuando los malhechores llevaren armas, pero el valor de lo robado no excediere de 500 pesetas. Cuando no llevaren armas, ni el valor de lo robado excediere de esta cantidad, se impondrá á los culpables la pena señalada en los dos párrafos anteriores en su grado mínimo.

Como se vé, y ya hemos indicado, la cuantía ó valor de lo robado y la circunstancia de llevar ó no llevar armas los malhechores, forman la base de la aplicacion gradual de la pena, que se impondrá en el grado máximo cuando los robos expuestos hubieren sido ejecutados *en despoblado ó en cuadrilla*, ó los efectos robados fueren *cosas destinadas al culto religioso*.

¿Qué excepcion benéfica establece el código en favor de los delinquentes por la naturaleza de los objetos robados?—Rebaja la penalidad hasta el arresto mayor en su grado medio, cuando los robos se hubieren ejecutado en una *dependencia de casa habitada*, edificio público ó destinado al culto religioso, introduciéndose los culpables saltando un muro exterior, y se hubiere limitado la sustraccion á *frutas, semillas alimenticias, frutos ó leñas*, y el valor de las cosas robadas no excediere de 25 pesetas.

¿Qué penalidad marca la ley para el robo cometido en lugar *no habitado* ó en algun otro edificio de los no expresados antes?—Varia segun la cuantía é importancia del delito, pero es ménos grave que la señalada para los robos en casa habitada y edificio público, porque la alarma es menor y no se corre ningun riesgo personal. Si el valor de los objetos robados *excediere de 500 pesetas*, se castigará con la pena de *presidio correccional* en sus grados medio y máximo, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª, escalamiento; 2.ª, rompimiento de paredes, techos ó suelos, ó fractura de puertas ó ventanas exteriores; 3.ª, la de haber hecho uso de llaves falsas, ganzáas ú otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo; 4.ª, fractura de puertas, armarios, arcas ú otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sellados, de que trata el párrafo anterior, aunque se fracturen fuera del lugar del robo. Cuando el valor de los objetos robados *no excediere de 500 pesetas*, se impondrá la pena inmediatamente inferior. A diferencia del robo en lugar habitado, la ley no tiene en consideracion el de que tratamos, para la penalidad, la circunstancia de llevar, ó no, armas los malhechores, fijándose únicamente en el valor de lo robado.

¿Qué robos se exceptúan de las anteriores reglas?—Los que *no excedieren de 25 pesetas*, que se castigarán con arresto mayor en sus grados medio y máximo; y si las cosas robadas fueren *semillas alimenticias, frutos ó leñas*, se castigarán con la pena inmediatamente inferior.

¿Qué efecto produce la *reincidencia* en el delito de robo, con fuerza en las cosas?—Cuando es una sola, constituye una circunstancia genérica *aggravante*, que, como todas las de su clase, eleva la pena al grado máximo. Cuando son más de dos las *reincidencias* de los culpables de robos de semillas, frutos ó leñas, que no excedan en valor de 25 pesetas, y de los cometidos en lugar *no habitado*, se les impondrá la pena inmediatamente superior.

¿Es punible la *tenencia de ganzáas* ú otros objetos instrumentos sospechosos?—Sí; incurre en responsabilidad el que los tuviere en su poder, siempre que por la naturaleza de aquéllos se comprenda que están destinados *especialmente* para ejecutar el delito de robo, y no diere el poseedor descargo suficiente sobre su adquisicion y conservacion. Los que fabricaren dichos instrumentos son tambien responsables, y si fueren cerrajeros, se les aplicará la pena de *presidio correccional* en sus grados medio y máximo.

Se califican de *llaves falsas*: 1.º, los instrumentos á que se refiere el

párrafo anterior; 2.º, las llaves legítimas sustraídas al propietario; 3.º, cualesquiera otras que no sean las destinadas por aquél, para la cerradura, candado ó guarda, abierta por el culpable.

DE LOS HURTOS.

Caza y pesca punibles.—Hurtos cualificados.

¿Qué es hurto?—La apropiación ó apoderamiento, con intención de lucro, de las cosas muebles ajenas, *sin* la voluntad de su dueño.

Si el robo es un hecho consumado *contra* la voluntad del propietario, el hurto se diferencia de aquél en que no es menester, para que exista, que se ejecute *contra* su voluntad; basta que ésta no haya concurrido al acto de la apropiación.

La *violencia*, la *intimidación* en las personas y la *fuerza* en la sustracción de las cosas ajenas, elevarán el hurto á robo; mejor dicho, constituirán, desde luego, el último de los expresados delitos.

Así vemos que son reos de hurto y no de robo: 1.º, los que, *con ánimo de lucrarse*, hayan ó no consumado el lucro (1), y *sin violencia ó intimidación* en las personas ni *fuerza* en las cosas, toman las muebles ajenas *sin* la voluntad de su dueño; 2.º, los que, encontrándose una cosa perdida y *sabiendo* quién es su dueño, se la apropiaren *con intención de lucro*; 3.º, los dañadores que sustrajeren ó utilizaren los frutos ú objeto del daño causado, salvo los casos siguientes que constituyen meras faltas: 4.º, el entrar en heredad ó campo ajeno *para* coger frutos *y comerlos en el acto*, ó bien echarlos, también *en el acto*, á caballerías ó ganados; 2.º, el aprovechamiento del espiguelo de los campos ajenos, *sin consentimiento* del dueño, antes de haberse levantado por completo la cosecha; 3.º, el daño causado por los que lleven carruajes, caballerías ó animales dañinos, entrando en heredad murada ó cerrada, *sin permiso*, atravesando plantíos, sembrados, viñedos ú olivares; 4.º los daños causados por ganados en heredad ajena, aunque sean introducidos de propósito; 5.º, los causados por aprovechamiento ó distracción ilegítima de aguas ajenas, que no excedan de 50 pesetas.

¿En qué se diferencia el hurto de la estafa?—En que en el hurto es menester *tomar, coger, aprehender* la cosa, moviéndola del lugar que ocupa, *sin la voluntad* del dueño; y en la *estafa*, la cosa se *toma, se coge, se aprehende* y se *recibe*, con y por virtud de la voluntad, expresa ó tácita, del propietario (2).

¿En qué se distingue del daño?—En que en la ejecución del hecho constitutivo de éste, igual muchas veces al hecho externo del hurto y aun en otras del robo, falta el *ánimo* ó la intención de lucrarse.

¿En qué se separa del robo y de la usurpación?—Del primero, en que como ya hemos repetido, el hurto no se lleva á cabo con *violencia, intimidación ni fuerza*, sino astuta y fraudulentamente; y de la segunda, en que sólo pueden

(1) El aprovechamiento no forma parte esencial del delito de hurto. (Sentencia de 2 de Marzo de 1875.)

(2) Por eso no comete *hurto*, sino *estafa*, el criado que recibe de su amo un billete de Banco, para cambiarlo, y se apropia aquél ó el cambio. (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Mayo de 1874.)

ser materia de hurtos las cosas muebles, constituyendo el objeto de la *usurpacion* las inmuebles.

Para fijar la pena del hurto, se atiende al valor de las cosas sustraídas, regla que tiene su escepcion, como veremos luego, en los hurtos *cualificados*. Así vemos que se castiga: 1.º, con la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo, si el valor de la cosa hurtada excediere de 2.500 pesetas; 2.º con la pena de presidio correccional en sus grados mínimo y medio, si no excediere de 2.500 pesetas y pasare de 500; 3.º, con arresto mayor en su grado medio á presidio correccional en su grado mínimo, si no excediere de 500 y pasare de 100; 4.º, con arresto mayor en toda su extension, si no excediere de 100 y pasare de 10; 5.º, con arresto mayor en sus grados mínimo y medio, si no excediere de 10, ó aunque exceda, siempre que no pase de 20, cuando el hurto consiste en semillas alimenticias, frutos ó leñas (1).

¿Qué reforma introdujo en materia de *hurtos* la ley de 17 de Abril de 1876?—La que acabamos de expresar en el último número del párrafo anterior. Sabido es que el código de 1870, modificando el de 1850, que no reconocía *falta* de hurto, porque constituía siempre y en todo caso este hecho un *delito*, rebajó á la categoría de meras *faltas* las sustracciones menores de 10 pesetas y á las que no llegaban á 20, siendo de sustancias alimenticias, frutos y leñas, si los rateros no fueren reincidentes. Pues bien, la ley citada, declarando en su preámbulo, que este ensayo de generosa benignidad, no fué muy feliz, y que la práctica no confirmó las esperanzas de sus autores, restableció el antiguo principio, que forma ahora la doctrina vigente, según el cual, *todo hurto, cualquiera que sea su cuantía y la clase de efectos sustraídos, constituye delito*.

No queremos decir nada acerca de la necesidad y de la conveniencia discutible de esta restauracion del sistema del rigor. En la *nota* que insertamos en la página siguiente, pueden ver nuestros lectores las atinadas é incontestables reflexiones que, en contra de esta poco meditada reforma en sus consecuencias de aplicacion, expone un estudioso y sensato comentarista. Por nuestra parte, indicaremos solamente que, si bien es cierto que determinados *hurtos* se redujeron á *faltas* en 1870, tambien lo es que la pena de *arresto menor* con que se castigaban aquéllas por el código de 1850, se duplicó en extension por el primero, llegando hasta 30 días; por manera que, aun cuando no con todo el rigor con que castigaba el código de 1850 los pequeños hurtos, tampoco los penaba el de 1870, declarándolos *faltas*, con la lenidad con que aquél corregia éstas.

¿Existe alguna excepcion en favor del autor de hurto de *semillas alimenticias, frutos y leñas*?—En la actualidad ninguna, porque la repetida ley de Abril de 1876, derogó la que preceptuaba que sólo se castigasen como *faltas* el hurto de semillas alimenticias, frutos y leñas cuando el valor de la cosa sustraída no excediere de 20 pesetas y el reo no hubiese sido condenado por delitos de robo ó hurto, ó dos veces por falta de hurto. (Artículo 532 del código de 1870.)

¿Qué nuevos delitos ha creado la ley de 17 de Abril de 1876?—El de caza y pesca ilegítimas, hechos que antes eran sólo *faltas*.

Cometen aquél: 1.º, los que, empleando violencia ó intimidacion en las personas ó fuerza en las cosas, entraren á *cazar* ó *pescar* en campo vedado ó heredad *cerrada*, entendiéndose tales, no sólo las que estuvieren total-

(1) Ley de 17 de Abril de 1876, reformadora de la materia de hurtos penada en el código de 1870, y circular de la fiscalía del Tribunal Supremo de 13 de Marzo de 1877.

mente cercadas ó acotadas, sino tambien las de dominio particular aunque no estén rodeadas de *pared continua* (1); 2.º los que en dichos lugares *cazaren ó pescaren*, sin permiso del dueño, valiéndose de *medios prohibidos* por las ordenanzas; como son en todo tiempo, para la caza, los *hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos*, permitidos solamente para las aves de paso; y para la pesca, la *intoxicacion ó infección* de las aguas, las *redes y nasas*, cuyas mallas tengan menos de una pulgada castellana (2).

¿Qué circunstancias elevan la pena de los hurtos *cualificándolos*?—La *naturaleza* de las cosas *hurtadas*, como las destinadas al culto; el *lugar ó acto* en que aquéllos se *cometen*, como cuando tienen efecto en actos religiosos ó en edificio destinado á celebrarlos; las *relaciones* entre el sustractor y el perjudicado, lo cual sucede cuando el hurto es *doméstico* ó interviene grave abuso de confianza; y los *antecedentes* del procesado cuando resulta ser dos ó más veces *reincidente*.

¿Cuáles son, pues, los hurtos *cualificados*?—Los que se cometen con ó reúnen algunas de las circunstancias expresadas en la pregunta anterior. Y como su gravedad es mayor, producen el efecto de elevar la pena á la inmediata superior en la escala á la que les correspondería si solamente se castigasen como hurtos *no cualificados ó simples*.

¿Qué se entiende por abuso *grave* de confianza?—No puede prefijarse absolutamente. Este extremo importante en esta clase de delitos, queda reservado á la apreciación prudencial de los tribunales. Basta saber que cuando el abuso de confianza no merezca la calificación de *grave*, constituye una circunstancia genérica agravante, que si no *cualifica* el delito, justifica la imposición del grado máximo de la pena señalada para el hurto *simple ó no cualificado*.

(1) Decreto de 8 de Junio de 1813, y Real orden de 25 de Noviembre de 1847.

(2) Artículos 11, 45 y 46 de las ordenanzas de 3 de Mayo de 1834.

NOTA. «Los individuos de la comisión debieran haber tenido presente, al proponer la reforma de este artículo (el 531 del código), la penalidad establecida en el segundo párrafo del 526 para los delitos de robo de semillas alimenticias, frutos ó leña cometido en lugar no habitado, ó en edificio que no sea de los comprendidos en el párrafo primero del artículo 521. Dicho delito de robo, cuando el valor de las semillas alimenticias, frutos ó leñas no excede de 25 pesetas, se castiga con la pena inmediatamente inferior á la de arresto mayor en sus grados medio y máximo, ó sea con multa de 125 pesetas ó arresto mayor en su grado mínimo. Pues bien: dada la penalidad fijada en este número quinto del art. 531 á los hurtos de semillas alimenticias, frutos y leñas, resulta que éstos se castigan con pena mayor que los robos de las mismas sustancias; puesto que al autor del hurto, sin circunstancia ninguna atenuante ni agravante, han de corresponderle de dos meses y un día á tres meses de arresto, grado medio del arresto mayor en sus grados mínimo y medio; mientras que el autor de robo de las mismas sustancias habrá de incurrir, en igualdad de condiciones, en la pena más benigna de multa de 125 á 2.500 pesetas. ¿Que delincuente, en vista de esta desproporción en las penas, no se convierte de simple *ratero* en *tadron*, escalando muros, rompiendo paredes, techos, suelos y ventanas, saltando, en una palabra, por cima de todas las vallas que ha puesto el hombre para garantizar su propiedad y su seguridad personal, si al apoderarse de este modo de lo ajeno ha de salir más beneficiado que si cometiera una simple sustracción ó hurto?—Al reformarse, pues, este número 5.º del artículo, elevando de nuevo toda clase de hurtos á la categoría de delitos, ó debió aumentarse á la vez la penalidad establecida en el 526 para los robos de sustancias alimenticias, frutos y leñas, ó debió señalarse tan sólo á los hurtos de esta clase la pena de multa de 125 á 2.500 pesetas, ya que bastaba erigir estos hechos en delitos, sujetándolos á la jurisdicción de los jueces de primera instancia y de las audiencias de distrito, para que con ellos cesaran las frecuentes é inevitables complacencias de la jurisdicción municipal y la falta de medios para hacer efectiva, en las localidades pequeñas, la penalidad del código de 1870, motivos principalísimos que tuvo presentes la comisión para respetar y hacer suya la proposición del señor marqués de San Carlos.» (Viada y Vilaseca, comentarios al código penal, pág. 226, tomo II, segunda edición.)

Usurpacion

¿Qué es la *usurpacion*?—El despojo ó atentado contra la propiedad inmueble ajena, ejecutado con violencia ó intimidacion en las personas. Sin estas circunstancias, constituye un acto que no sale de la esfera del derecho civil.

¿Qué hechos enumera la ley como *usurpaciones*?—La *ocupacion con violencia ó intimidacion*, de cosas raíces ajenas, y el despojo de un derecho *real* con las mismas circunstancias. Tambien se ocupa de la alteracion ó destruccion de lindes, términos ó cualquiera otra señal de límites pertenecientes á los predios rústicos, aunque se verifique sin aquellas circunstancias. La penalidad consiste en multa, mayor ó menor, segun la utilidad reportada por el culpable, sin perjuicio del castigo correspondiente á la violencia con que se ocupare el inmueble ó se *usurpare* el derecho *real*.

Defraudaciones.

¿Qué es *defraudacion*?—El código no la define. Consiste en actos que tienen por objeto privar de su propiedad á otro, ó perjudicarle en sus intereses, por medios fraudulentos, en beneficio de determinadas personas; son verdaderas estafas cometidas con grave abuso de confianza, que el código comprendió y reunió en un mismo grupo, designándolas con la denominacion genérica de *defraudaciones*.

¿Cuáles son las que castiga la ley?—El *alzamiento*, la *quiebra* y la *insolvencia punibles*; las estafas y otros engaños.

¿Qué es *alzamiento*?—«La ocultacion de los bienes del deudor,» ó la fuga de éste, llevándoselos, en perjuicio de sus acreedores. Pueden cometer este delito los comerciantes y los que no lo sean.

No es éste el lugar oportuno para exponer, ni sucintamente siquiera, lo que son, ni las clases en que se dividen las *quiebras*, así como tampoco quiénes merecen la calificacion de comerciantes. Esta materia corresponde al derecho mercantil (1). Basta tener presente que ese estado del comerciante, llamado jurídicamente *quiebra*, en que su *pasivo* es mayor que el *activo*, que le obliga á suspender pagos y negociaciones, puede dimanar de causas diferentes, entre las cuales, la desgracia y el delito suelen tener cabida algunas veces.

Despues que el tribunal civil las ha apreciado, y calificado la *quiebra*, tiene lugar la aplicacion del código penal en los casos de *defraudacion fraudulenta* y por lo mismo punible.

La *quiebra é insolvencia fraudulenta* se castiga con pena más grave que la *quiebra con insolvencia culpable*, porque ésta es hija del descuido ó negligencia, y aquélla de la intencion criminal de defraudar. Si los perjuicios ocasionados no exceden del 10 por 100 del importe de los créditos, la pena descende un grado; y si exceden del 50 por 100, se impondrá el máximo de las señaladas. Son tambien *reos* de estos delitos los comerciantes no matriculados, que *ejercen habitualmente el comercio*; y *cómplices* los que ejecuta-

(1) El lector puede enterarse de lo puramente necesario sobre este asunto, en la seccion de derecho mercantil.

De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas, y de las casas de préstamos sobre prendas.

La primera clase de estos delitos tiene por objeto garantizar la libertad de la contratación, dejando en sus legítimos efectos prácticos la ley económica de la libre concurrencia y el nivel natural de los precios.

¿Qué maquinaciones son punibles?—Las que tienen por fin alterar el precio de cosas, en la forma siguiente: todo acto que tienda á impedir, por medios ilegítimos, la realización de una subasta ó el alza de los precios de la cosa subastada; las *coaliciones* para levantar ó rebajar los del trabajo, ó regular las condiciones de éste; y la alteración, por medios artificiosos, de los precios naturales que son objeto de contratación. Por eso son reos de este delito los que *solicitarén* dádiva ó promesa para *no tomar parte* en una subasta pública, ó *intentaren* alejar de ella á los postores, con aquellas ofertas ó por cualquiera otro artificio, á fin de alterar el importe del remate; y los que, esparciendo falsos rumores, ó de otro modo artificioso, consiguieren variar los precios naturales que resultarían de la *libre concurrencia* de las cosas que son objeto de contratación, especialmente si consisten en artículos de primera necesidad, y demás cosas alimenticias.

¿Qué requisitos deben concurrir para que la coligación contra los *precios del trabajo* sea punible?—Dos: 1.º, que exista entre varios, ya representen el *capital*, ya el *trabajo*: 2.º, que el propósito de aquélla haya comenzado á ejecutarse.

Estos casos, que preceden ó subsiguen á las huelgas de los trabajadores, se agravan cuando, para asegurar el éxito, se emplean violencias ó amenazas, á no ser que estos medios coercitivos, por su propia naturaleza, constituyan delito independiente y merezcan mayor pena.

¿Qué requisitos deben llenar los prestamistas sobre prendas, sueldos ó salarios, para que su especulación no sea punible?—Dos: 1.º, tener libros, llevados en debida forma, en donde consten, sin claros ni entrerenglonados, las cantidades prestadas, los plazos ó intereses, los nombres y domicilios de los que las reciban, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda, y las demás circunstancias que exigen los reglamentos; 3.º, expedir resguardo de la prenda que reciban en garantía de los préstamos. No es necesaria la licencia de la autoridad, como medida preventiva para dedicarse á esta lucrativa industria.

Del incendio y otros estragos, y de los daños.

El delito de *incendio* es, indudablemente, de los más graves que castiga el código, porque los males que ocasiona pueden ser de grandísima trascendencia, sumiendo en la más absoluta miseria en pocos momentos á las familias mejor acomodadas y haciendo desaparecer las mayores riquezas del arte, de la industria, de las ciencias y del comercio. Y si á estos grandes, y á veces irreparables males, se añade el ataque personal que á veces lleva consigo el hecho, del cual pueden resultar, no uno, sino muchos delitos á la vez, contra las personas, la importancia en la esfera penal y el grado de perversidad que indican son de tal magnitud que justifican la aplicación de la más grave de las penas. Con efecto. ¿Cuántos males y cuántas desgracias puede producir, produce necesariamente, el incendio de un edificio con gente, un tren de viajeros, una iglesia atestada de fieles, un teatro lleno de espectadores, cuyas puertas no pueden dar salida inmediata y momentáneamente á la

muchedumbre, que se apiña, se empuja y dificulta cada vez la salvacion del mayor número! Casos se han dado, y no muy lejanos, en que las víctimas se contaron á centenares. ¿Cabe mayor perversidad en el incendio-rio que á esto dá origen, sin riesgo, á traicion, furtiva y alevosamente? Por eso la penalidad establecida puede llegar á la cadena *perpétua* en los casos más graves que la ley castiga, atendidas las desgracias personales y los daños inmensos que pueden resultar, segun vamos á referir, y bien pudiera llegar á la de muerte.

¿Qué casos son esos?—Serán castigados, dice el código, con la pena de *cadena temporal* en su grado máximo á *perpétua*, los que *incendiaren arsenal, astillero, almacén, fábrica de pólvora ó de pirotecnia militar, parque de artilleria, archivo ó museo general del Estado; un tren de viajeros en marcha ó un buque fuera del puerto; un almacén de materias inflamables ó explosivas, sito en lugar despoblado, ó un teatro ó una iglesia ú otro edificio destinado á reuniones, cuando se hallare dentro una concurrencia numerosa.*

¿Qué incendios siguen en gravedad menor á los anteriores?—El de un *edificio, alqueria, choza, albergue ó buque en puerto, sabiendo que dentro de ellos se hallaban una ó más personas; el de un edificio público, si el valor del daño causado excediere de 2.500 pesetas, ó una casa habitada, ó cualquier edificio en que habitualmente se reúnan diversas personas, ignorando si habia ó no gente dentro, ó un tren de mercancías en marcha, si el daño causado en los casos mencionados excediere, como en los anteriores, de 2.500 pesetas.* Los primeros se castigan tambien con la *cadena temporal á perpétua*, y los segundos con aquélla solamente.

Serán penados con el *presidio mayor* los que cometieren cualquiera de los delitos referidos antes, si el valor del daño causado no excediere de 2.500 pesetas; y los que incendiaren *en poblado* un edificio, no destinado á habitacion ni reunion, si el valor del daño causado no excediere de 2.500 pesetas; pero si pasare de 250, se impondrá al culpable la pena de *presidio correccional* en sus grados medio y máximo. Si no excediere de 250 pesetas, se le impondrá la pena de *presidio correccional* en sus grados mínimo y medio.

Serán castigados con la pena de *presidio correccional* en su grado máximo á *presidio mayor* en su grado medio, cuando el daño causado excediere de 2.500 pesetas: 1.º los que incendiaren un edificio destinado á habitacion en lugar despoblado; 2.º, los que incendiaren mieses, pastos, montes ó plantíos.

Cuando el daño causado en los casos del artículo anterior no excediere de 2.500 pesetas y pasare de 250, la pena será la de *presidio correccional* en su grado medio á *presidio mayor* en su grado mínimo. Si no llegare á 250 pesetas, se impondrá la pena inferior en un grado si el incendio se hubiere causado en edificio, y la inferior en dos, si hubiere sido de *mieses, pastos, montes ó plantíos.*

Cuando en el incendio de estas cosas hubiera habido peligro de propagacion, por hallarse otros contiguos análogos á los incendiados, se impondrá la pena superior en un grado de la correspondiente al delito.

Como acabamos de ver, el peligro mayor, el mayor daño, en intensidad y extension, son la base de la penalidad de este delito.

Las disposiciones del código, posteriores á las que dejamos transcritas, gradúan el castigo de los incendios de cosas no comprendidas en aquéllas, teniendo en cuenta igualmente el importe del daño causado; determinando que el de chozas, pajares ó cobertizos deshabitados ú otros objetos, cuyo valor no exceda de 250 pesetas, siempre que no haya habido peligro de propagacion, debe pensarse sólo como delito de daños.

¿Qué clase de *estragos* constituyen delito y castiga el código?—Los causados por medio de *inmersion* ó *varamiento de nave*, *inundacion*, *explosion* de una mina ó máquina de vapor, *levantamiento de los rails* de una via ferrrea, *cambio malicioso de las señales* empleadas en el servicio de éstas para la seguridad de los trenes en marcha; *destrazo de los hilos y postes telegráficos*; y en general, por el uso de cualquier otro agente ó medio de destruccion tan poderoso como los expresados. Basta tener presente su naturaleza, para apreciar sus efectos trascendentales.

¿Qué dispone el código para los casos en que *el todo ó parte* de las cosas incendiadas pertenezcan al *incendiario*?—Prescribe que el culpable del incendio ó estragos causados en bienes ajenos, no se eximirá de las penas impuestas en este capítulo, aunque para cometer el delito hubiere incendiado ó destruido bienes de su pertenencia. Si las cosas incendiadas pertenecieren exclusivamente al incendiario, se le impondrá la pena de *arresto mayor* en su grado máximo, á *prision correccional* en su grado mínimo, si el incendio hubiere sido causado con propósito de defraudar los derechos de tercero ó de causarle perjuicio, ó si, aún sin este propósito, se le hubiere realmente causado; ó bien si la cosa incendiada hubiere sido un edificio en lugar deshabitado.

¿Cuáles son los *daños* que el código castiga?—Todos los causados en la propiedad ajena que no se hallen comprendidos en los casos de *incendio y otros estragos*. Pueden tener lugar: 1.º, con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad ó en venganza de sus determinaciones; 2.º, produciendo, por cualquier medio, *infeccion ó contagio* en ganados; 3.º, empleando sustancias venenosas ó corrosivas; 4.º, en cuadrilla y en deshabitado; 5.º, en un archivo ó registro; 6.º, en puentes, caminos, paseos ú otros objetos de uso público ó comunal; 7.º, arruinando al perjudicado.

La penalidad se funda en la cuantía del daño, que debe exceder de 50 *pesetas* para ser delito, y no ser causado por los ganados, porque el segundo siempre constituye una falta, así como el menor de dicha cantidad.

El incendio ó destruccion de papeles es tambien punible, pero distintamente, segun que fuere, ó no, estimable el valor de los documentos. Si lo primero, entra en las reglas generales de los daños; si lo segundo, se castiga con arresto, la prision correccional y la multa combinadas.

Disposiciones comunes á los delitos contra la propiedad.

¿Qué disposicion notable é importante contiene el código en favor del cónyuge y parientes del perjudicado, en los delitos contra la propiedad?—La siguiente: están exentos de responsabilidad *criminal* y sujetos únicamente á la *civil* por los *hurtos*, *defraudaciones* ó *daños* que reciprocamente se causaren: 1.º, los cónyuges, ascendientes y descendientes ó afines en la misma línea; 2.º, el consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado á poder de otro; 3.º, los hermanos y cuñados, si vivieren juntos. No lo están consiguientemente, por los demás delitos de esta seccion, y por lo mismo, las personas exceptuadas de los expresados, son responsables de los *robos*, *estafas*, *usurpaciones*, *incendios*, *daños*, etc.

¿Cuál es el fundamento de esta doctrina?—Razones de conveniencia social y presunciones legales. La pena impuesta por estos delitos á las referidas personas, descubriría, con su necesaria publicidad, secretos íntimos

del hogar doméstico, que á veces perjudicarían al mismo ofendido, y engendrarians la discordia en el seno de las familias. Además, entre éstas y aquellas personas, parece existir una coparticipacion en el dominio, que aleja la idea de criminalidad, ó destituye, cuando ménos, de su carácter repugnante, los actos á que el código se refiere.

Debemos hacer notar, que las espresadas excepciones no son extensivas á los extraños que hayan tomado parte en la ejecucion de aquellos hechos, los cuales, para dichos extraños, son siempre delitos, y la responsabilidad penal que producen, exigible á los mismos.

TITULO XIV.

IMPRUDENCIA TEMERARIA.

¿En qué consiste la *imprudencia temeraria*?—En la negligencia ó falta de diligencia con que se han ejecutado hechos que, á mediar malicia, constituirían delitos. Es, por consiguiente, condicion *esencial* negativa, la carencia de malicia ó *intencion criminal* en los actos constitutivos de la *imprudencia*, la cual puede tener lugar, no sólo por *hechos*, sino tambien por *omisiones* (1).

La gravedad de tales *hechos* ú *omisiones*, considerados como si hubiesen tenido efecto *con malicia* ó como delitos, y la infraccion de los reglamentos al realizarlos, son causas que agravan ó atenúan la responsabilidad criminal. Pero para su justa y equitativa apreciacion, es menester conceder amplitud á los tribunales, y está mandado que, en la aplicacion de las penas señaladas para la *imprudencia temeraria*, procedan segun su prudente arbitrio, sin sujetarse á las reglas prescritas para la imposicion de las que castigan los delitos, dentro del arresto mayor y el grado minimo de la prision *correcional*, segun los casos.

¿Cuántas clases de *imprudencia* declara punible el código?—Tres: *Imprudencia temeraria*; *imprudencia simple* ó *no temeraria* la cual debe tener lugar con infraccion de reglamentos, para ser penable, é *imprudencia simple* ó *negligencia*, en que no hay infracciones reglamentarias.

Cuando las penas señaladas á los hechos ú *omisiones* cometidos por *imprudencia* fueren iguales ó menores á las que la ley establece para penar aquéllos como delitos, por haber sido cometidos con *intencion criminal*, se rebajan al grado inferior inmediato.

DE LAS FALTAS.

¿Qué hechos reciben el nombre de *faltas*, y en qué se diferencian de los delitos?—Las infracciones á que la ley señala penas *leves*. Diferencianse de los delitos en que en ellas sólo se atiende al hecho material, cualquiera que sea la intencion y malicia del agente, mientras que en aquéllos, la intencion del delincuente constituye uno de sus elementos esenciales. Diferencianse tambien en que, para que las faltas sean punibles, es indispensable que hayan sido consumadas; no penándose, por regla general, ni la *tentati-*

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Abril de de 1875.

va, ni la *falta frustrada*, ni la *conspiracion*, ni la *proposicion* para cometerla. Y, por último, en que en la penalidad con que se las reprime, para nada entran las circunstancias *atenuantes* ó *aggravantes* que concurren en la comision del hecho.

Se exceptúan de lo dicho las *faltas frustradas* contra las personas ó la propiedad, que son punibles en el código reformado.

La enumeración de todos y cada uno de los hechos que se denominan *faltas* y se castigan en el libro tercero del código, no es propia de la índole de este libro, por lo cual referiremos los más importantes, por ser resultado de la reforma hecha en el código penal en 1870, no modificada posteriormente.

A diferencia del sistema de confusion que se observaba en el libro tercero del código de 1850, el reformado ha clasificado las faltas en *cuatro grupos*, de los que se ocupa en otros tantos títulos, prescribiendo varias disposiciones comunes á todos en el quinto y último, en que se divide el repetido libro tercero.

Trata el *primer* título de las faltas de imprenta, que no penaba especialmente el código de 1850 (1) y de las cometidas contra el orden público, notándose entre ellas la turbacion de los actos, de los cultos y las ofensas á los concurrentes á ellos, cuando una y otras no constituyan delito. Pero debe tenerse en cuenta que las de imprenta que castiga el código y se insertan en la nota, deben ser castigadas por los gobernadores y alcaldes (2), y no por los juzgados municipales; y que, en la próxima reforma del código relativa á los delitos contra la religion, proclamada únicamente la *tolerancia de cultos*, sufrirá modificación la parte referente á la perturbacion del ejercicio de los disidentes.

Prevé y castiga el *segundo* las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, entre las que figura la de no conservar, con la debida formalidad, los criados de servicio, mozos y dependientes, la cartilla de informes, dejando de cumplir las prevenciones establecidas para garantía y seguridad. En el título *tercero* se castigan las *faltas contra las personas*, siendo importantes las de lesiones que impidan al ofendido trabajar de *uno á siete* días ó hagan necesaria por el mismo tiempo la asistencia facultativa, agravando la pena cuando el ofensor sea padre, hijo, marido ó tutor del ofendido, y las faltas de amenazas. El título *cuarto* se ocupa y pena las cometidas *contra la propiedad*, en las cuales aparece incluida la de hurto por valor menor de 10 pesetas ó de 20 siendo de sustancias alimenticias, siempre que el culpable fuere dos ó más veces reincidente; falta de nueva creacion que abolió la ley de 17 de Abril de 1876, al erigir en delito todos los hurtos, cualquiera que fuese su cuantía y la naturaleza de las cosas sustraídas (3).

(1) Incurrirán en la pena de 25 á 125 pesetas de multa: 1.º, el director de un periódico en el cual se hubieren anunciado hechos falsos, si se negare á insertar gratis, dentro del término de tres días, la contestacion que le dirija la persona ofendida, ó cualquiera otra autorizada para ello, rectificandolos ó explicandolos, con tal que la rectificacion no excediere en extension del doble del sueldo ó noticia falsa; en el caso de ausencia ó muerte del ofendido, tendran igual derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos; 2.º, los que por medio de la imprenta, litografia ú otro medio de publicacion divulgaren maliciosamente hechos relativos á la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan producir perjuicios ó graves disgustos en la familia á que la noticia se refiera; 3.º, los que en igual forma, sin cometer delito, provocaren á la desobediencia de las leyes y de las autoridades constituidas, hicieren la apologia de acciones calificadas por la ley de delito, ú ofendieren á la moral, á las buenas costumbres ó á la decencia pública; los que publicaren maliciosamente disposiciones, acuerdos ó documentos oficiales sin la debida autorizacion, antes que hayan tenido publicidad oficial.

(2) Constituye tambien una falta de imprenta, el censurar irrespetuosamente los fallos de los tribunales, lo cual no excluye la discusion cientifica de las doctrinas que contienen. (Real Orden de 6 de Febrero 1876.)

(3) Véase el capítulo de los hurtos.

Finalmente, el título quinto prescribe las disposiciones siguientes, comunes y aplicables á todas las faltas:

1.^a En la aplicacion de las penas procederán los tribunales segun su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo las circunstancias del caso. Los cómplices en las faltas serán castigados con la misma pena que los autores, en su grado mínimo.

2.^a El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas, lo decretarán los tribunales á su prudente arbitrio, segun los casos y circunstancias.

3.^a Los penados con multas, que fueren insolventes, serán castigados con un día de arresto por cada 5 pesetas de que deban responder. Cuando la responsabilidad no llegare á 5 pesetas serán castigados, sin embargo, con un día de arresto. Por las otras responsabilidades pecuniarias en favor de tercero, serán castigados tambien por igual tiempo y cantidad.

Y termina el título prohibiendo que las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales ó particulares de la administracion que se publicaren en lo sucesivo, y en los bandos de policía y buen gobierno que dictaren las autoridades, se establezcan penas mayores que las señaladas en este libro, áun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, *á no ser que se determinare otra cosa por leyes especiales*, y declarando que, conforme á este principio, las disposiciones de este libro *no excluyen ni limitan* las atribuciones que por las leyes municipales, ó cualesquiera otras especiales, competan á los funcionarios de la administracion para dictar bandos de policía y buen gobierno, y para corregir gubernativamente las faltas, en los casos en que su represión les esté encomendada por las mismas leyes.

FIN DEL DERECHO PENAL.

APÉNDICE.

THEY DID

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Ley de proteccion á la pubertad y á la infancia, de 26 de Julio de 1878 (Gaceta de 28 de Julio).

D. Alfonso XII,

Por la gracia de Dios, rey constitucional de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Incurrirán en las penas de prision correccional en su grado mínimo y medio y multa de 425 á 1.250 pesetas, señaladas en el art. 501 del Código penal:

Primero. Los que hagan ejecutar á niños ó niñas menores de 16 años, cualquier ejercicio peligroso de equilibrio, de fuerza ó de dislocacion.

Segundo. Los que ejerciendo las profesiones de acróbatas, gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, toreros, directores de circos ú otras análogas, empleen en las representaciones de esa especie niños ó niñas menores de 16 que no sean hijos ó descendientes suyos.

Tercero. Los ascendientes que ejerciendo las profesiones expresadas en el número anterior empleen en las representaciones á sus descendientes menores de 12 años.

Cuarto. Los ascendientes, tutores, maestros ó encargados por cualquier titulo de la guarda de un menor de 16 años que le entreguen gratuitamente á individuos que ejerzan las profesiones expresadas en el número segundo, ó se consagren habitualmente á la vagancia ó mendicidad. Si la entrega se verificase mediando precio, recompensa ó promesa, la pena señalada se impondrá siempre en su grado máximo.

En uno y otro caso la condena llevará consigo para los tutores ó curadores la destitucion de la tutela ó curaduría, pudiendo los padres ser privados temporal ó perpétuamente, á juicio del tribunal sentenciador, de los derechos de patria potestad.

Quinto. Los que induzcan á un menor de 16 años á abandonar el domicilio de sus ascendientes, tutores, curadores ó maestros para seguir á los individuos de las profesiones indicadas en el número segundo, ó á los que se dediquen habitualmente á la vagancia ó mendicidad.

Art. 2.º Todo el que ejerza una de las profesiones expresadas en el artículo anterior, deberá ir siempre provisto de los documentos que acrediten en forma legal la edad, filiacion, patria é identidad de los menores de veinticinco años que emplee en sus espectáculos, cuidando escrupulosamente las autoridades locales de exigir la presentacion de los expresados documentos antes de conceder la licencia necesaria para la celebracion de aquellos espectáculos.

La no presentacion de dichos documentos siempre que lo exijan las autoridades ó sus agentes, será castigada como falta con arreglo al art. 599 del Código penal.

Art. 3.º Los gobernadores de las provincias en las capitales de las mismas y los alcaldes en los demás pueblos que toleraren la infracción de cualquiera de las disposiciones de esta ley, ó no la pongan en conocimiento de la autoridad judicial competente tan pronto como haya podido llegar á su conocimiento, serán castigados con las penas marcadas en el art. 382 del Código penal.

Art. 4.º Los agentes consulares de España en el extranjero deberán denunciar, en el más breve plazo posible, á las autoridades españolas toda infracción de la presente ley cometida en perjuicio de sus compatriotas, ó á las Autoridades de los países en que ejerzan sus funciones, si en ellos estuviesen previstos y penados los hechos á que se refieren los artículos anteriores.

En ambos casos adoptarán las medidas necesarias para que regresen á España tan pronto como sea posible, y sean entregados á sus padres, tutores ó curadores, y á falta de éstos á las autoridades locales del pueblo de su nacimiento, los niños ó niñas de origen español menores de 16 años á que esta ley se refiere.

Art. 5.º La imposición de las penas señaladas en los artículos precedentes se entenderá siempre sin perjuicio de las demás que correspondan á las que en ellas incurran por delitos y faltas previstos y castigados anteriormente en el Código penal.

Por tanto:

Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en el real sitio de San Lorenzo á veintiseis de Julio de mil ochocientos setenta y ocho.—Yo el rey.—El ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderon Collantes.

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION A LA HACIENDA.

Real Decreto de 20 de Junio de 1852.

TÍTULO II (1).

DE LOS DELITOS DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION, Y DE SUS

PENAS.

CAPITULO PRIMERO.

De los delitos.

ARTÍCULO 17. Son objeto peculiar de este decreto como delitos directos:

1.º El contrabando.

2.º La defraudacion.

Y como delitos conexos (2):

3.º La seducccion y resistencia contra la autoridad ó sus agentes que tenga por objeto la perpetracion de los delitos de contrabando ó defraudacion.

4.º La falsificacion ó suplantacion de documentos públicos ó privados, de marcas ó sellos de oficio ó de cualquiera otro signo peculiar de las oficinas de Hacienda, ó adoptado para acreditar la fabricacion nacional, cometida para verificar, encubrir y escusar los delitos de contrabando y defraudacion.

5.º El robo ó hurto de efectos estancados, existentes en los criaderos, fábricas, almacenes y dependencias de la Hacienda pública.

6.º Las omisiones y abusos de los empleados públicos y personas de cualquiera condicion en el cumplimiento de las obligaciones que, para

(1) El titulo primero trata del conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda en primera y segunda instancia, cuya parte ha quedado derogada en virtud de la unificacion de fueros, y por lo mismo emitimos dicho titulo primero, porque es inaplicable, y publicamos el segundo y sucesivos, que son los que pueden tener aplicacion por estar vigentes.

(2) El conocimiento del delito de contrabando y sus conexos, corresponden á la Hacienda; pero si aparece que los delitos no son conexos, debe conocer la jurisdiccion ordinaria. (Sent. 28 Marzo 1860.)

No puede haber delito conexo de contrabando ó defraudacion, cuando no se ha formado causa de esta clase. (Sent. 13 Diciembre 1861.)

perseguir ó impedir dichos delitos de contrabando ó defraudacion, les impongan los Reglamentos ó instrucciones (3).

7.º Y cualesquiera otros delitos comunes que se cometan para ejecutar, facilitar ó encubrir el contrabando ó defraudacion.

ART. 48. Se incurre en delito de contrabando:

1.º Por cualquier acto en que se prepare inmediatamente y á sabiendas la produccion, elaboracion ó fabricacion de los efectos estancados.

2.º Por todo acto de negociacion ó tráfico de los mismos efectos, incluso el de revenderlos, aún cuando procedan de compra hecha á la Hacienda pública (4).

3.º Por la detentacion de efectos de la clase de estancados que carezcan de signos positivos de legitima procedencia, si no se acredita su adquisicion legal con arreglo á las Leyes y Reglamentos del fisco, siempre que la cantidad detentada exceda de la que permiten las Instrucciones de Rentas á cada particular para su uso y consumo.

4.º Por el transporte de los efectos estancados sin guías espedidas por las oficinas de Hacienda, aún cuando se haga la conduccion por cuenta ajena, cualquiera que sea el medio de transporte que se emplee.

5.º Por la introduccion en el territorio español de efectos de cualquiera especie, cuya importacion esté prohibida por las Leyes, Reglamentos ú órdenes vigentes.

6.º Por el tráfico de estos mismos efectos ó por su conduccion en cualquiera género de transporte, y por la simple detentacion de dichos efectos, dentro de España, antes de haberse alterado sus formas y empleado de hecho en los usos domésticos, si el detentador no probare su legitima adquisicion autorizada por la Hacienda pública con arreglo á las Leyes.

7.º Por la estraccion del territorio español de efectos de cualquiera especie, cuya exportacion esté prohibida por las Leyes, Reglamentos ú órdenes vigentes, y por su conduccion dentro de la zona próxima á las costas y fronteras en que por las mismas Leyes y Reglamentos esté prohibida su circulacion, ó por su detentacion en la misma zona, sin los requisitos que en aquellas disposiciones estén prescritos.

8.º Por ordenar, disponer ó hacer ejecutar por medio de otras personas cualquiera de los actos de contrabando que quedan expresados, aunque el que los haya dispuesto en su beneficio no los cometa por sí directa y materialmente.

9.º Por asegurar ó hacer asegurar de cuenta propia ó por encargo de otro, cualquiera operacion de tráfico de efectos estancados ó géneros prohibidos á la importacion ó exportacion.

10.º Por andar con buque nacional ó extranjero de porte menor que el permitido por los Reglamentos ó Instrucciones, conduciendo géneros prohibidos ó procedentes del extranjero en puerto no habilitado, ó en bahía, cala ó ensenada de las costas españolas, ó por bordear estos sitios dentro de la zona de dos leguas, ó sean seis millas, que se halla señalada, aún cuando lleve su carga consignada para puerto extranjero, á ménos que no sea por arribada forzosa en los casos de infortunio de mar, persecucion de enemigos ó piratas, ó avería que inhabilite el buque para continuar su navegacion.

11.º Por ocultar alguna parte del cargamento ó dejar de manifestar cuál sea éste al requerimiento de las autoridades locales ó empleados de Hacienda.

(3) Toda omision ó abuso en la persecucion del contrabando, es delito conexo con éste. (Sent. 23 Mayo 1857.)

(4) Ni este artículo ni el siguiente se infringen en sus párrafos 2.º y 3.º por la absolucion de la instancia del reo, en virtud de la apreciacion de los hechos que corresponde á la Sala sentenciadora. (Sent. 28 Noviembre 1863.)

da, en los casos de arribada forzosa á puerto no habilitado, bahía, cala ó ensenada de las costas españolas de todo buque, cualquiera que sea la caída y bandera.

12.º Por omitir en los manifiestos, certificaciones y demás documentos que prescriban las Instrucciones, la inclusion de algunos fardos, bultos ó cabos de ilícito comercio á la llegada á los puertos habilitados de cualquier buque español ó extranjero, sea cual fuere su porte.

13.º Por extraer de cualquier buque, surto en puerto habilitado, alguna parte de su carga para trasbordarla ó para alijarla en tierra, antes ó después de la presentacion del manifiesto, sin haber obtenido el permiso de descarga de la aduana, y por el trasbordo ó alijo del cargamento, ó por parte de él, en todo caso de arribada forzosa de un buque á puerto no habilitado, bahía, cala ó ensenada, á ménos que no preceda permiso de la autoridad competente, y se observen las precauciones establecidas cuando lo exigiere la necesidad de salvar la carga y el buque.

ART. 49. Se incurre en el delito de defraudacion:

1.º Introduciendo en territorio español géneros extranjeros ó coloniales sujetos al pago de derechos de entrada, sin haber hecho el portador su declaracion en la primera aduana, y pagado los derechos correspondientes.

2.º Alterando en calidad ó en cantidad la relacion de los géneros lícitos que se introduzcan al presentar en la aduana las notas ó facturas que los declaren en contravencion á lo dispuesto en las Instrucciones del ramo.

3.º Conduciendo géneros lícitos sin guías, certificados, sellos ú otros signos comprobantes del pago de los derechos de entrada dentro de la zona ó territorio en que, segun las Instrucciones, no puedan circular libremente sin ir acompañados de aquellos signos, y por la detencion de los mismos géneros sin el propio requisito en el territorio donde las Instrucciones lo exijan.

4.º Exportando efectos del Reino sujetos al pago de derechos en las aduanas de salidas, sin haberlo satisfecho íntegramente, ó intentando hacerlo, y justificándose la tentativa por la aprehension de dichos efectos dentro de la zona determinada por los Reglamentos, sin que sus portadores ó detentadores tengan las guías competentes para legitimar el transporte ó la detencion.

5.º Conduciendo ó trayendo el buque nacional ó extranjero que arribe á puerto español géneros sujetos al derecho de entrada que no estén comprendidos en las guías, registros ó certificaciones de procedencia, cuando las Instrucciones exijan estos documentos como requisitos indispensables para legitimar la introduccion.

6.º Defraudando ó intentando eludir el pago de los derechos de consumo, así en los pueblos sujetos al derecho de puertas, como en los administradores, arrendados ó encabezados, ya sea introduciendo los géneros gravados por este impuesto, sin hacer la declaracion ni adeudar el derecho correspondiente, ya conduciéndolos dentro del rádio por distintas vías de las que estén marcadas, ó ya faltando á cualquiera otro de los requisitos que para evitar fraudes se hallen prevenidos por las Instrucciones y Reglamentos del ramo.

7.º Alterando, en cuanto á la calidad ó cantidad de los efectos imponibles, las declaraciones ó manifestacion del contribuyente, que hayan de servir para graduar la cuota del derecho de puertas ó de consumo, siempre que la alteracion pudiera haber producido un menoscabo al Erario equivalente al cinco por ciento del importe de los derechos correspondientes á la cantidad ó calidad de los géneros declarados.

8.º Omitiendo la declaracion que debe hacerse para la exaccion de toda contribucion directa á la autoridad ú oficina que corresponda, previo el requerimiento de la Administracion, en la forma prevenida en las Instrucciones.

9.º Ocultando cualquiera propiedad, contrato, sucesion, posesion ú otro acto que esté sujeto á la exaccion del impuesto ó derecho respectivo en la referida declaracion, y faltando en ella á la verdad de los hechos, ó cometiendo simulacion en los documentos que la justifiquen.

10.º Cometiendo falsedad en los mismos documentos.

11.º Por toda otra especie de violacion de las reglas administrativas que tenga tendencia manifiesta y directa á eludir ó disminuir el pago de lo que legitimamente debe satisfacerse por razon de una contribucion directa ó indirecta (1).

ART. 20. Los delitos conexos enunciados en el art. 15, y cualesquiera otros comunes que se cometan para ejecutar, facilitar ó encubrir el de contrabando ó defraudacion, se considerarán como de especie distinta; pero serán juzgados á la vez que éstos, ante los mismos Tribunales y en el mismo proceso. Sin embargo, cuando la seduccion ó resistencia se haga á individuos del cuerpo de carabineros del Reino, resguardo marítimo, guardia civil ó tropa del ejército, se estará á lo determinado en las Leyes y disposiciones militares, juzgándose, por consiguiente, á los reos de seduccion ó resistencia por los consejos de guerra respectivos, independientemente del delito de contrabando ó defraudacion y de los demás conexos que no sean la seduccion ó resistencia á los individuos de aquellos cuerpos.

CAPITULO II.

De las penas.

ART. 21. Las penas que se señalan por este decreto á los delitos de contrabando y defraudacion, se aplicarán en mayor ó menor grado desde el máximo al mínimo, segun el número y entidad de las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurren en el caso (2).

ART. 22. Son circunstancias agravantes:

1.º La calidad de empleado público en el delincuente.

2.º Que el valor de los géneros aprehendidos, ó sobre que versa el proceso, pase de dos mil reales si fueren estancados, ó de tres mil si sólo prohibidos en los casos de contrabando, ó que el importe de los derechos defraudados pase de seis mil reales en los delitos de defraudacion.

3.º Que la conduccion por tierra de géneros de contrabando se haga en cuadrilla que pase de tres hombres á caballo ó á pie.

4.º Que en el caso de conducir el contrabando, lleven los delincuentes armas, aun cuando sean de las permitidas por los Reglamentos.

5.º Que se haya hecho por los mismos resistencia á la autoridad ó funcionario público que les hubiere perseguido.

6.º Que se haya empleado cualquier género de falsificacion como medio de cometer el contrabando ó defraudacion.

7.º Que en la operacion del contrabando ó defraudacion haya mediado trato de aseguracion.

8.º Que para hacer el contrabando de géneros estancados tengan los delincuentes fábricas de elaboracion ó almacén ó tienda para la venta.

(1) Sólo es aplicable á los casos en que se trate de géneros ó cosas sujetas al pago de derechos ó de algun otro impuesto, pues sin esta circunstancia faltaria la materia y causa del delito. (*Sent. 4 Enero 1859.*)

(2) Las penas se han de aplicar en mayor ó menor grado, desde el máximo al mínimo, segun el número y entidad de las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurren. (*Sent. 5 Mayo 1863.*)

9.º La reincidencia, y cualquiera otra circunstancia de las que prueban malicia especial en el delincuente, ó trascendencia grave en el delito.

ART. 23. Son circunstancias atenuantes:

1.º La edad de ménos de diez y ocho años en el culpable.

2.º Que no llegue á doscientos reales el valor de los géneros objeto del proceso si fueren estancados, y á trescientos si sólo prohibidos en los casos de contrabando, ó que el importe de los derechos defraudados no ascienda á seiscientos reales.

3.º Cualquiera otra circunstancia que disminuya manifiestamente la malicia del culpado y el daño del delito (1).

ART. 24. Será pena comun para todo delito de contrabando, el comiso (2):

1.º Del género aprehendido que sea materia del delito.

2.º De las yuntas y aperos empleados en la labor para el cultivo del tabaco ú otro producto agrícola estancado.

3.º De las máquinas ó utensilios empleados en la fabricacion y elaboracion de géneros estancados.

4.º De las caballerías, carruajes ó buques donde se trasporten y hallaren géneros de contrabando, si el valor de ellos llegare á una tercera parte del de toda la carga, valuándose los estancados por el precio de estanco, y los prohibidos por tasacion pericial (3).

5.º De los géneros lícitos que se hallaren en el mismo baul, fardo, bulto ó caja donde hayan sido aprehendidos los prohibidos, siempre que el valor de éstos constituya una tercera parte ó más, de todo el contenido del bulto.

Pero no se podrán decomisar los objetos de que tratan los números 2.º, 3.º y 4.º de este artículo, siempre que resulten pertenecer á un tercero que no haya tenido complicidad en el delito, ni conocimiento del uso criminal que de ellos se hizo.

Del mismo modo, los géneros lícitos que se hallaren en el baul, fardo, bulto ó caja en donde hayan sido aprehendidos los prohibidos, no serán decomisados si se probare con toda evidencia que dichos géneros lícitos no pertenecian al autor del fraude, y si á un tercero, sin cuyo conocimiento se incluyeron con los prohibidos.

Si no hubiere habido aprehension, ó no hubiere tenido lugar en la totalidad del género que por el procedimiento resulte haber sido materia del delito, se sustituirá al comiso la condenacion á pagar el valor del género que no haya sido aprehendido.

ART. 25. Además de esta pena comun, incurrirá todo reo de contrabando de géneros estancados en una multa que no baje del triple, ni exceda del séxtuplo valor del género aprehendido, ó que del proceso resulte ser materia del delito, estimándose este valor por el precio de estanco.

Para el reo de contrabando de géneros prohibidos, esta pena consistirá en una multa que no baje del duplo ni exceda del cuádruplo valor del género aprehendido (4).

(1) Téngase presente la nota del art. 21.

(2) En el caso de declararse la improcedencia del comiso, la Hacienda responde del valor en venta de los géneros decomisados. (*Sent. del T. S. de J. de 26 Set. 1856.*)

A la Sala sentenciadora corresponde apreciar los hechos para declarar la improcedencia de un comiso. (*Sent. del T. S. de J. de 31 Dic. 1860.*)

(3) Aunque se establece el comiso de las caballerías, en el núm. 5 se dice que no se verificará si resultasen pertenecer á un tercero que no haya tenido complicidad en el delito. (*Sent. del T. S. de J. de 12 Junio 1862.*)

(4) Las diferentes locuciones empleadas en los arts. 25 y 27 no alteran su espíritu, que es castigar á los reos con multas circunscritas por límites determinados y graduados. (*Sent. 30 Enero 1863.*)

Todo reo de contrabando incurra en una multa que no baje del triplo ni exceda del séxtuplo del valor del género aprehendido, ó que del proceso resulte ser materia del deli-

ART. 26. Será pena comun en todo delito de defraudacion, el comiso del género en que ésta se hubiere cometido ó intentado cometer.

Exceptuáanse de estas penas los casos expresados en los párrafos 7.º, 8.º, 9.º y 11 del art. 19 de este decreto.

ART. 27. Los reos de delito de defraudacion sufrirán además una multa que no baje del duplo ni exceda del cuádruplo del importe del derecho ó impuesto defraudado.

Así el comiso del género como la imposicion de esta multa, se entenderán sin perjuicio del reintegro de la Hacienda pública, del derecho que haya sido objeto de la defraudacion. (Modificado por las Ordenanzas generales de Aduanas.) (1)

ART. 28. Cuando los reos de contrabando ó defraudacion no tuvieren bienes con que satisfacer la multa que les fuere impuesta, y el importe del reintegro á la Hacienda pública del derecho ó impuesto defraudado, sufrirán la prision correccional por vía de sustitucion y apremio, regulándose á medio duro por día de prision, pero sin que ésta pueda exceder nunca de dos años. La pena por equivalencia se sufrirá en la cárcel del partido ó de la capital de la provincia, siempre que su duracion no haya de pasar de tres meses, y precisamente en presidio correccional si fuere por más tiempo.

ART. 29. Siempre que en el delito de contrabando ó defraudacion ocurriere la circunstancia agravante expresada en el párrafo cuarto del art. 22, ó la de ser reincidente por tercera vez, se le impondrá, además de la pena comun del comiso y la pecuniaria ó supletoria que mereciere, la personal de siete meses á tres años de presidio correccional.

ART. 30. Los reos procesados por el ejercicio habitual de contrabando á quienes se justifique plenamente dicho ejercicio, sufrirán el máximum de la pena impuesta en el artículo anterior.

ART. 31. Los reos de los delitos conexos que expresa el art. 17, sufrirán por ellos las penas que establecen las Leyes comunes y las militares en los casos previstos en la última parte del art. 20, sin perjuicio de las que merezcan por los delitos de contrabando ó defraudacion.

ART. 32. En la calificacion de los cómplices ó encubridores de los delitos de contrabando ó defraudacion, se observarán las reglas establecidas por las Leyes comunes.

ART. 33. En todos los procesos sobre los delitos de contrabando ó defraudacion en que recaiga sentencia condenatoria, se impondrá á los reos el pago de las costas procesales y de los gastos ocasionados por el juicio (2).

ART. 34. De las penas pecuniarias que se impusieren á los hijos que no tengan peculio propio, responderán sus padres, si estuvieren aquéllos bajo la patria potestad, cuando no probaren que no han podido evitarlo.

to, si se refiere á géneros estancados, y en la del duplo si á géneros prohibidos. (Sent. 30 Enero 1863.)

Este artículo resultaria infringido por exceso, si en cabeza de cada reo se impusiera íntegra la multa. (Sent. 30 Enero 1863.)

No se infringe por la absolucion de la instancia del reo en virtud de la apreciacion hecha por la Sala sentenciadora. (Sent. 28 Nov. 1863.)

(1) La pena del comiso de los géneros aprehendidos y la del reintegro á la Hacienda del derecho defraudado, establecidas en los artículos 26 y 27, párr. 2.º del decreto de 20 de Junio de 1852, han sido ambas sustituidas con una multa igual al valor oficial de dichos géneros y de sus derechos de arancel, por virtud del párr. 15 del Preámbulo de las Ordenanzas generales de Aduanas aprobadas por decreto de 15 de Julio de 1870, y de lo dispuesto en los artículos 201, 203, 241, 244 y 246 de las mismas, cuyo contenido debe consultarse.

(2) No se infringe por la absolucion de la instancia en virtud de apreciacion de la Sala sentenciadora. (Sent. 28 Nov. 1863.)

ART. 35. Los maridos responderán de las penas pecuniarias en que por contrabando ó defraudacion incurrieren sus mujeres, si éstas no tuvieren bienes propios con que satisfacerlas, y si no probaren que no han podido evitarlo.

ART. 36. Las penas de presidio que, segun este decreto, hayan de imponerse á mujeres y menores de diez y siete años, se entenderán de reclusion en una casa de correccion.

ART. 37. Los indultos no se concederán hasta despues de fenecidas las causas respectivas, ni podrá en ellas remitirse ni moderarse otra parte que la condena que consista en penas personales ó en la de multas (1).

TÍTULO III.

DE LA PERSECUCIÓN DEL CONTRABANDO Y DEFRAUDACION.

CAPITULO PRIMERO.

De las personas obligadas á perseguir el contrabando y defraudacion.

ART. 38. La persecucion del contrabando y defraudacion estará especialmente á cargo de las autoridades, empleados y resguardos de Hacienda pública, en la forma que, respecto de cada clase, prevengan los Reglamentos.

ART. 39. Tendrán además la obligacion de perseguir estos delitos las autoridades civiles y militares en su respectivo territorio, las tropas del ejército de mar y tierra, y toda fuerza pública armada:

1.º Cuando fueren requeridas al intento por las autoridades de Hacienda.

2.º Cuando hallaren *in fraganti* á los delincuentes.

3.º Cuando les fuere notorio algun delito de contrabando ó defraudacion, y pudieren realizar preventivamente la aprehension, no hallándose presentes los agentes del fisco, á quienes compete este acto preferentemente. En tales casos podrán reconocer á los delincuentes, arrestarlos cuando así proceda con arreglo á la Ley, y hacer constar la aprehension, debiendo poner en seguida, así los reos y géneros aprehendidos, como las diligencias formadas, á disposicion del Tribunal competente.

ART. 40. Las autoridades y funcionarios á quienes se impone la obligacion de perseguir el contrabando por los dos artículos anteriores, estarán asimismo obligados á transmitir á los respectivos Promotores fiscales de Hacienda, las noticias que adquieran relativas á aquellas personas que, por sus circunstancias y método de vida, puedan considerarse habitualmente

(1) Por decreto de 5 de Julio de 1870, está mandado que las peticiones y expedientes de indulto por delitos de contrabando y defraudacion á la Hacienda, corresponden al Ministerio de Gracia y Justicia para los efectos de la Ley de 18 de Junio de dicho año, sobre indultos.

Los indultos por delitos de contrabando y defraudacion, no comprenden la sujecion á la vigilancia de la autoridad, si clara y terminantemente no se consigna en ellos la concesion de esta gracia. (Orden de 23 de Julio de 1869, expedida por el Ministerio de Hacienda.)

ocupadas en aquel ejercicio, á fin de que dichos funcionarios cumplan con el deber que les impone el art. 63.

CAPITULO II.

Del reconocimiento de los edificios, caballerías, carruajes y embarcaciones.

ART. 41. Para perseguir y aprehender el contrabando de efectos estancados en todo el Reino, y el contrabando y la defraudacion de los demás en la zona en que lo permitan las disposiciones vigentes, podrá el resguardo ú otra fuerza pública, autorizada al intento, reconocer y registrar cualquier edificio público ó particular, previos los requisitos y en la forma que este decreto prescribe (1).

ART. 42. No se procederá al reconocimiento de edificio alguno por los agentes de la Hacienda pública, sin estar autorizados por mandamiento escrito de la autoridad competente.

ART. 43. Cuando se hubiere de hacer el reconocimiento en casas particulares, se acordarán estas diligencias por las autoridades judiciales ó administrativas de la Hacienda pública, con previo conocimiento de causa, justificándose suficiente motivo para el registro, bajo su responsabilidad, por los abusos que cometieren (2).

Cuando éste se hubiere acordado sin fundamento, ó se ejecutare sin los requisitos y formalidades que prescribe este decreto, quedará al interesado su derecho á salvo para pedir la reparacion que haya lugar.

ART. 44. Para los reconocimientos de tiendas, almacenes, posadas y establecimientos destinados al tráfico de cualquier especie que sea, será suficiente que, en virtud de sospecha fundada, se acuerde por el jefe de la administración local de Hacienda, bajo su responsabilidad.

ART. 45. De todo reconocimiento que se intente hacer en cualquiera casa particular ó de tráfico, se ha de dar previo aviso al alcalde del pueblo para que asista al acto por sí ó por medio de sus tenientes y subalternos, omitiéndose la designacion de la casa que haya de ser registrada, y reservando el indicarla para el acto mismo del reconocimiento.

ART. 46. Los alcaldes que sean requeridos al intento por los empleados de rentas ó del resguardo, no podrán excusarse ni diferir la práctica de la diligencia, bajo su responsabilidad.

Si se negaren á este servicio, ó lo resistieren, se llevará á efecto el registro con asistencia de dos vecinos honrados, y se hará constar aquella negativa ó resistencia por diligencia firmada del jefe de la fuerza y del alcalde mismo requerido si se prestare á ello. Esta diligencia se unirá á su tiempo al proceso, para que la conducta del alcalde sea juzgada en él, como incidencia del delito principal descubierto por el reconocimiento.

ART. 47. Para el reconocimiento de los edificios públicos, una vez obtenido el mandato de la autoridad competente, el aviso oficial que ha de preceder al registro, en vez de al alcalde, se dirigirá al jefe respectivo, á cuyo cargo se hallaren aquéllos.

(1) Es legal la aprehension de géneros de contrabando fuera de la zona fiscal, cuando son perseguidos de cerca por la fuerza pública, desde dicha zona. (Sent. 28 Mayo 1861.)

(2) La entrada en el domicilio de un español ó extranjero para aprehender á un contrabandista perseguido por la autoridad ó sus agentes, podrá efectuarse siempre que concurren todas las circunstancias que menciona la Constitucion del Estado. (Véase la pág. 66.)

Con respecto á los palacios y sitios reales, el aviso se entenderá para con el administrador, el alcalde ó conserje correspondiente; pero si el Monarca residiese en el edificio que se intente reconocer, no podrá tener lugar el reconocimiento sin previo real permiso.

Tampoco podrán reconocerse los palacios del Senado y Congreso de los Diputados, sin permiso de sus respectivos Presidentes, mientras se halle abierta la legislatura; pero bastará dirigir el aviso oficial á los encargados del gobierno interior de los edificios, cuando no estuvieren las Cortes reunidas.

Para reconocer los templos, lugares sagrados, casas de comunidad y demás establecimientos ó habitaciones de eclesiásticos, el aviso ó requerimiento se dirigirá al vicario ó superior eclesiástico, en los pueblos donde le haya, y en su defecto al cura párroco de la feligresía. Estos dispondrán, bajo su responsabilidad y sin demora, la asistencia de persona que represente la autoridad eclesiástica en el reconocimiento, el cual en todo caso se llevará á efecto.

Respecto al registro de las casas de embajadores y ministros representantes de las potencias extranjeras, se guardarán las formalidades que para con los representantes de España se observen en sus cortes respectivas, y siempre deberá preceder la real autorizacion expedida por el ministerio de Estado. Y para el de las casas de los cónsules, se obtendrá el permiso de la autoridad local.

En cuanto á las de extranjeros transeuntes, el aviso previo para el reconocimiento se dará al cónsul de la respectiva nacion, donde le hubiere, y donde no, al alcalde, omitiéndose la designacion de la casa hasta el acto mismo del reconocimiento. Este se verificará aunque el cónsul no asista, habiendo sido avisado.

Para el reconocimiento de cualquier establecimiento militar, se dará previo aviso á la autoridad militar local, la cual en el acto nombrará un oficial que asista á aquel, y dispondrá, bajo su responsabilidad, cuanto sea necesario para que no se embarace ni difiera la diligencia.

ART. 48. Los carruajes y caballerías que transiten fuera de poblaciones, sólo podrán ser reconocidos á la entrada ó salida de éstas, ó en las posadas y ventas del tránsito; pero podrán ser custodiados ó llevados á la vista en caso de fundada sospecha por el resguardo ú otra fuerza pública, con tal que el reconocimiento se verifique en la poblacion más inmediata. La detencion en caminos públicos y en despoblado, sólo podrá verificarse en los casos notorios de conduccion de contrabando por hacerse éste en cuadrilla, y consistir en géneros estancados ó conocidamente prohibidos, la carga principal de las caballerías ó carruajes.

ART. 49. También podrán ser reconocidas las embarcaciones, siempre que se hallen en algunos de los casos expresados en los párrafos 10, 11, 12 y 13 del art. 16 de este decreto, ó en cualquiera de los que determinen para el mismo fin las Instrucciones de aduanas; pero deberán observarse las formalidades que éstas prescriban en el reconocimiento de todo buque; y con respecto al de las naves extranjeras, guardarse siempre las formas que para el acto estén previstas por los tratados vigentes con la potencia de su bandera respectiva.

ART. 50. No se hará de noche el reconocimiento de ningun edificio público ó privado; pero podrán tomarse durante ella por el jefe de la fuerza, las precauciones exteriores que sean necesarias para evitar que se extraiga el contrabando, ó se facilite la fuga de los culpables.

ART. 51. Cuando al perseguir el resguardo á los contrabandistas los llevase á la vista, podrá reconocer sin detencion y aunque fuere de noche, cualquier edificio público ó privado donde se refugiaren, ó donde introdujeran los efectos del contrabando; quedando responsables los que hubieren hecho el reconocimiento, si lo hubieren practicado sin que concurrieran

las circunstancias que se prescriben en esta disposicion para que pueda verificarse.

ART. 52. En toda clase de reconocimiento se observará por los individuos que lo practiquen la debida circunspeccion, sin propasarse á palabras descompuestas ni ofensivas, y evitando todo acto estrepitoso que no sea necesario para asegurar el descubrimiento y aprehension de las defraudaciones y de los delinquentes. De cualquier exceso que por aquéllos se cometa, serán responsables los jefes que presidan el acto, sin perjuicio del procedimiento que haya lugar contra su autor.

Sobre detencion, prision y cumplimiento de condenas de los militares.

GRACIA Y JUSTICIA.—*Orden de 31 de Enero, derogando las órdenes de 14 de Octubre y 7 de Mayo de 1874, sobre cumplimiento de condenas de militares sentenciados por el fuero comun y disponiendo sobre el mismo (Gaceta de 2 de Febrero).*

Los individuos del ejército y de la armada sentenciados por los Tribunales del fuero comun á arresto ó prision por insolvencia de multa, extinguian siempre la condena en los cuarteles ó en las prisiones militares, no considerándose esto como infraccion de las reglas establecidas en el código penal para la ejecucion y cumplimiento de las penas, puesto que el castigo se sufría como en él se preceptuaba, aunque en local distinto del que designa; pero el gobierno republicano, fijándose en la letra de la ley, dispuso en órdenes de 11 de Octubre de 1873 y 7 de Mayo de 1874 que se observase estrictamente lo prescrito en los artículos 50, 118 y 119 del expresado código.

La experiencia ha demostrado los inconvenientes de esta medida, porque hay necesidad, para observarla, de conducir á los penados desde la poblacion donde están en cumplimiento de sus deberes militares á la capital del juzgado donde radica la causa, lo cual es embarazoso en tiempo de paz y del todo imposible, las más veces, en tiempo de guerra. Estos viajes en calidad de preso son, en algunos casos, injusta agravacion de la pena; en otros, medios de sustraerse á los rigores y peligros de la vida de campaña, y siempre ocasion de que, personas que sólo deben sufrir castigo leve, se pongan en contacto en las cárceles del tránsito y en la del partido donde fueron juzgados, si es que han de permanecer en ella, con criminales endurecidos que perviertan su corazon y les infundan ideas contrarias á la disciplina y al honor del uniforme militar.

Estando, pues, probada la conveniencia de volver á la antigua práctica,

El rey, y en su nombre el ministerio regencia,

Ha tenido á bien ordenar que se observen las disposiciones siguientes:

Artículo 1.º Se derogan las órdenes de 14 de Octubre de 1873 y 7 de Mayo de 1874, en las cuales se dispuso que los condenados por los tribunales del fuero comun á pena de arresto ó de prision subsidiaria que pertenecieren al ejército ó armada al tiempo de sufrir la condena, la cumplieran en los establecimientos señalados en los artículos 50, 118 y 119 del código penal.

Art. 2.º Los individuos del ejército y de la armada que deban cumplir penas de las expresadas en el artículo anterior, impuestas por la jurisdiccion ordinaria, bien porque hubieren sido juzgados antes de ser militares,

ó porque lo hubieren sido en causa que produzca desafuero, extinguirán la condena en los cuarteles ó prisiones militares de las poblaciones donde se encuentren los cuerpos ó institutos á que pertenezcan.

Art. 3.º Para el debido cumplimiento de la sentencia, el juez á quien corresponda su ejecucion remitirá al capitán general del distrito donde se halle el sentenciado, testimonio de la ejecutoria, en la forma acostumbrada, y la expresada autoridad militar acusará el recibo de aquel documento, dispondrá que se cumpla lo que en él se ordena, y remitirá al juzgado, luego que se haya extinguido la condena, certificación en que esto se haga constar, para que se una á la causa y surta en ella los efectos á que haya lugar en derecho.

De órden del ministerio regencia lo digo á V..... para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 31 de Enero de 1875.—Cárdenas.—Señor.....

MINISTERIO DE LA GUERRA.—Circular fecha 13 de Febrero de 1875, sobre el mismo asunto:

Artículo 1.º Los militares é individuos de los cuerpos auxiliares del ejército en activo servicio sufrirán la detencion ó prision preventiva durante el proceso, aunque éste se siga por los tribunales ordinarios en los casos de su exclusiva competencia, en los castillos, prisiones militares y calabozos de los cuarteles, segun su clase, franqueándolos á los jueces para la práctica de todas las diligencias, y cumpliéndose sus autos ó providencias de prision, incomunicacion y demás que exijan los procedimientos.

Art. 2.º Todo oficial del ejército ó asimilado á empleo de tal, condenado á más de seis años de prision ó á presidio por tiempo que no exceda de seis años, si no se le impone además la privacion de empleo, será propuesto para el retiro ó licencia absoluta segun corresponda, no abonándole más tiempo que el servido hasta el día en que cometió el delito.

Art. 3.º El oficial separado del servicio en virtud de condena, ó por providencia gubernativa, como incorregible ó perjudicial, no tendrá derecho á uso de uniforme.

Art. 4.º Toda persona condenada á muerte por fallo de un consejo de guerra será pasada por las armas.

Art. 5.º Los oficiales del ejército y sus asimilados de los cuerpos auxiliares cumplirán las demás penas:

Primero. Las de cadena, extrañamiento, reclusion, relegacion, presidio mayor y confinamiento que llevan consigo la privacion de empleo, y las de prision mayor, ó sea por más de seis años y presidio correccional que producen la separacion del servicio, conforme al art. 2.º que precede, en los establecimientos públicos ó puntos que designa el Código penal ordinario.

Segundo. Las de prision correccional, cuya duracion no excede de seis años, arresto y prision por insolvencia de multa, cuando no se les condene además á privacion de empleo ó separacion del servicio, en las prisiones militares, fuertes ó castillos que designe el capitán general del distrito respectivo, suspensos de sus empleos y con el goce de sueldo señalado á esta situacion.

Tercero. La de destierro en los puntos que designen las sentencias, en situacion de reemplazo.

Art. 6.º Los individuos de tropa que se hallen sobre las armas, ó en servicio activo, cumplirán las mismas penas:

Primero. Las de cadena, extrañamiento, reclusion, presidio mayor y prision mayor, en los establecimientos públicos ó puntos que designe el Código penal ordinario; y las de presidio ó prision correccional, en los establecimientos que correspondan á su actual residencia.

Segundo. La de relegacion en Ultramar, sirviendo en el respectivo ejér-

cito hasta cumplir el tiempo de su empeño; siendo entregados á la autoridad respectiva despues de obtenida su licencia absoluta, para que extingan el resto de su condena conforme al art. 141 del Código penal.

Tercero. La de confinamiento, en los cuerpos de disciplina correspondientes al ejército de la Península ó de Ultramar en que se hallen sirviendo hasta terminar su empeño; y despues serán tambien entregados á la autoridad civil para que extingan su condena si no la tuvieren ya cumplida.

Cuarto. Las de arresto, cuya duracion no excede de seis meses, y la prision por insolvencia de multa, en los calabozos de los cuarteles ó prisiones militares de las poblaciones donde se encuentren los cuerpos ó institutos á que pertenezcan.

Quinto. La de destierro, en regimiento de guarnicion en otro distrito.

Art. 7.º Todo individuo de tropa, procedente de las quintas, que pase á cumplir una pena fuera de las filas, cuando le corresponda salir del establecimiento penal por indulto ó extincion de la condena, será destinado al cuerpo de disciplina que corresponda, segun se halle en la Península ó Ultramar, á terminar su total empeño, contándole el tiempo como si hubiere continuado sirviendo en el ejército. El enganchado ó reenganchado recibirá su licencia absoluta con la fecha del dia en que se le notifique la sentencia.

Se exceptúan los que hayan permanecido sin interrupcion en presidio siete ó más años por una sola ó varias condenas, los cuales no volverán á ingresar en el servicio conforme al art. 95 de la ley de reemplazos de 1856 y real orden de 7 de Agosto de 1852.

Art. 8.º Para que tenga efecto el destino á un cuerpo de disciplina que previene el artículo precedente, el comandante del establecimiento penal, en lugar de dar la licencia al penado, lo pondrá á disposicion de la autoridad militar superior del punto, con copia de la filiacion, en la que conste el tiempo que ha permanecido en el establecimiento y motivo de su baja, libreta de ajustes y alcances que puedan resultar á su favor. La autoridad militar lo agregará á un cuerpo de la guarnicion, y dará cuenta al capitan general del distrito para que disponga la traslacion, por los puestos de la guardia civil, al punto que se halle el cuerpo de disciplina, debiendo ser alta en él en la primera revista de comisario con la fecha de su baja en el establecimiento penal conforme á la real orden de 12 de Diciembre de 1854.

Art. 9.º Para el debido cumplimiento de la sentencia, conforme á los artículos anteriores, el juez ordinario á quien corresponda su ejecucion remitirá al capitan general ó jefe del juzgado de guerra del distrito donde se halle el sentenciado, testimonio de la ejecutoria. La expresada autoridad militar acusará el recibo de aquel documento, dispondrá que se cumpla lo que en él se ordena, y lo devolverá al juzgado luego que se haya extinguido la condena ó de entregar el reo á la autoridad civil, segun proceda, con certification en que se haga así constar para que se una á la causa y surta en ella los efectos á que haya lugar en derecho.

Si procede la entrega del reo porque deba ser baja definitiva ó temporal en el ejército, tendrá aquélla lugar despues de degradado, privado de su empleo ó separado del servicio, segun determine ó corresponda por la sentencia.

Sobre ejecuciones de pena capital.

GRACIA Y JUSTICIA. —Circular de 9 de Febrero, dictando instrucciones para procurar el mayor recogimiento en las ejecuciones de pena capital. (Gaceta de 10.)

Derogada la ley que abolía la gracia de indulto, y asumida, por el Poder Ejecutivo de la República, la facultad de concederle en los crímenes castigados con pena capital, la inexorable necesidad ha impuesto al gobierno el penoso deber de acordar el cumplimiento de algunas sentencias en casos en que, ni el deseo más propicio, ni la más ardiente misericordia, ni las unánimes disposiciones de todos los encargados del Poder, han logrado hallar la menor circunstancia sobre qué fundar el ejercicio de la gracia de indulto, la cual, por lo mismo que procede de la más alta y magnífica prerrogativa, no ha de usarse nunca con escándalo de la opinión y abandono y menosprecio de la justicia.

El gobierno hubiera querido resolver favorablemente todos los casos sometidos á su exámen; así comenzaría la obra lenta de la abolición de la pena capital, siguiendo en esto el derrotero que le marean estados en los cuales aquélla ya no existe, y naciones que, paso á paso, sin alarmas y sin peligros, persiguen de una manera franca este fin humano y progresivo.

Pero sobre que la gravedad de ciertos delitos no lo consiente, y lo veda el carácter de sus circunstancias esenciales y constitutivas, forzoso es declarar con sinceridad y entereza que no está la sociedad española preparada al beneficio de esa reforma; que faltan en nuestro sistema penitenciario estímulos eficaces de arrepentimiento, y quizás medios suficientes y análogos de corrección y de castigo, que no han permitido los tiempos ni han querido nuestras desdichas que adelante la educación de nuestro pueblo en proporción á los estímulos empleados para impulsarla, ni logre el punto de madurez que ya otros pueblos alcanzaron, ni marche á compás del progreso de las ideas, ni siga tan de cerca como fuera preciso el movimiento de los hechos sociales. Y como el derecho penal se funda en la ciencia, pero también se modifica y se ha modificado siempre por el poder de las circunstancias, jamás toman forma sus esencias, ni realidad sus abstracciones, ni encarnación en la ley positiva sus principios, sino en el grado y por la medida que las públicas necesidades exigen, y que en cada lugar y tiempo permiten y aconsejan las condiciones de la vida social á todo legislador previsor y discreto. Por eso no tiene todavía aplicación posible en la vida legal de la sociedad española la más pura y elevada noción de la pena; ni la tendrá, mientras el sentido moral no se levante, y el respeto al principio de autoridad no se afirme, y el amor á la ley y la veneración á la justicia no penetren en el alma del hombre iluminada por el sentimiento religioso, entibiado en España por la intolerancia, y que, así como ha sucedido en otros pueblos cultos, ha de vivificarse y exaltarse en nosotros al calor de la libertad de conciencia.

Por eso los legisladores y los gobiernos, en la materia penal más que en otra alguna, han de consultar la opinión y someterse á las circunstancias; y en estos momentos cualquier aspiración á la lenidad directa ó indirecta llevaría la más profunda alarma á todas las clases sociales, sin distinción de escuelas ni de partidos: que tales y tan costosas han sido las experiencias recientes, tantos y tan profundos los sacudimientos que ha sufrido esta sociedad, y han sido tan frecuentes y tan graves y tan terribles las

manifestaciones del crimen, que la opinion pública, presa del sobresalto y sobrecogida del espanto, sólo vislumbra remedio á tamaños males en la aplicacion severa de las leyes, cuya autoridad ha de restablecerse enérgicamente para enfrenar de una vez los actos de rebeldía contra ellas, y extirpar los hábitos de desobediencia, hasta reemplazarlos con el de la más perfecta sumision á la autoridad y á las leyes, para que así satisfecha por el ejercicio de un rigor saludable el ánsia legítima de castigo, aplacado el justo temor y desvanecido el natural recelo, se repongan los desquiciados fundamentos del orden, recobre la sociedad su asiento, y sepan todos los hombres de bien que no necesitan buscar en imposibles retrocesos ni en insensatas reacciones, precursoras de nuevas catástrofes, el bienestar de sus personas y la seguridad de su hacienda, sino que dentro de la república encontrarán siempre el amparo de las leyes y la proteccion y la defensa del gobierno.

Mas si esta necesidad, que tanto apremia y que á tanto obliga, exige el puntual cumplimiento de las leyes, y muy principalmente de las leyes penales, no significa que dejen de adoptarse ciertas medidas para impedir que la opinion vulgar y estraviada convierta, con notorio escándalo, un acto tan solemne como la ejecucion de la pena capital, en motivo, si no de manifestación alegría, de indiscreta curiosidad, por lo ménos, muy cercana á la indiferencia que de nada se impresiona, ó que toma el aterrador espectáculo como ocasion de solaz y entretenimiento.

Bien quisiera el que suscribe alzar poderoso valladar contra estos inconvenientes, reduciendo el hecho á un acto de pura justicia, sin aparato y sin publicidad, contra lo cual no introduciria peligrosa innovacion; ántes, por el contrario, seguiria el noble ejemplo de cultas y poderosas naciones como Inglaterra, Prusia y la mayoría de los Estados septentrionales de la república Norte-americana; pero á este comienzo, apenas perceptible y nada aventurado, de abolicion, se oponen abiertamente las disposiciones del código penal y de la ley de Enjuiciamiento criminal, que se derivan de muy distinto sistema y se inspiran en muy diversos principios.

Este rigorismo legal, que hace de la publicidad condicion esencial é inexcusable de la última pena, impide asimismo variar la hora de las ejecuciones, de tal suerte que los inconvenientes descritos pudieran evitarse en todo ó en parte, á ejemplo de lo que acontece en otros países donde, experiencias repetidas y minuciosas, han patentizado la absoluta ineficacia de la publicidad en las ejecuciones capitales para producir los efectos preventivos y de intimidacion á que la ley aspira.

Es, por tanto, inexcusable atenerse á las leyes, respetarlas y cumplirlas, si bien adoptando algunas medidas que, sin pugnar con aquéllas, pongan remedio á inconvenientes que son el cortejo obligado de una perversion del sentido moral en ciertas esferas sociales, ó que proceden de costumbres y prácticas contrarias á las tendencias de la misma ley, que procura ahorrar al delincuente sufrimientos innecesarios, y al espíritu moderno, que vá disipando paulatinamente preocupaciones de otros tiempos y corrigiendo desvarios lamentables que suelen ser patrimonio de todas las muchedumbres.

Descuella entre éstos el tristísimo de convertir en romería el acto de una ejecucion capital, mostrando los concurrentes á él, en lugar del recogimiento á que su gravedad convida, la alegría salvaje de una fiesta sazónada con los alicientes y estímulos que la especulacion más grosera no vacila en ofrecer al pueblo, desprestigiando así la augusta serenidad de la justicia en uno de sus momentos más terribles, y contribuyendo á defraudar las esperanzas que la ley funda en la eficacia preventiva de la pena capital.

Y estos inconvenientes se agravan por la sensible circunstancia de verificarse las ejecuciones á gran distancia del lugar en que el reo está re-

cluso, con lo cual además se agravan la mortificación y el sufrimiento de aquel desgraciado que difícilmente podrá abstraerse del público que le sigue y le rodea fatigoso y anhelante, sin mostrar acaso el más leve síntoma de conmiseración, ó revelando quizá impulsos de mal reprimida crueldad, tormento moral cuyos efectos deplorables apenas alcanzará á moderar en aquel ánimo conturbado el dulce consuelo de la resignación cristiana.

A evitar estos inconvenientes se dirigen las instrucciones que doy á V. S. I., esperando de su notorio celo las ejecute con puntualidad y decisión.

Ante todo cuidará V. S. I. de disponer que la ejecución se lleve á efecto en el punto más próximo posible al que ocupe el reo en capilla.

En segundo lugar, reclamará la intervención de la autoridad civil, á fin de que, por todos los medios que estén á su alcance, impida que en el sitio de la ejecución, ni en el trayecto que haya de recorrer el reo, se dispongan puestos de bebidas ó de comestibles, ni circulen los vendedores de unos y otros efectos, procurando evitar por estos medios, y por lo demás que le sugiera su prudencia, que infundan en la muchedumbre que concurre á estos actos, sentimientos ajenos á la dignidad de un pueblo culto, contrarios á la majestad de la justicia é incompatibles con el recogimiento y el respeto que debe inspirar el espectáculo de la muerte.

Sírvase V. S. I. comunicar estas instrucciones á los jueces de primera instancia á quienes fuera cometido ó correspondiera el cumplimiento de las sentencias capitales.

Madrid 9 de Febrero de 1874.—Martos.—Señor....

Interpretación oficial del artículo 11 de la Constitución, sobre tolerancia religiosa.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—*Real orden-circular de 23 de Octubre, explicando los propósitos del gobierno en los puntos á que puede aplicarse el artículo 11 de la Constitución (Gaceta de 24).*

Las naturales dificultades que para la aplicación del art. 11 de la ley fundamental del estado, como para la de todo nuevo texto legal, han surgido; los cargos dirigidos contra un funcionario público, objeto de un expediente gubernativo, resuelto por real orden de esta misma fecha; y las varias reclamaciones que en distinto sentido, y sobre sucesos que ocurren al practicar derechos consignados en aquel artículo, se elevan, desde puntos y localidades diferentes, al gobierno de S. M., imponen á éste el imperioso deber de dictar algunas reglas conformes con la legislación vigente en el reino.

El gobierno de S. M. está resuelto á que la letra y el espíritu del artículo 11 del Código fundamental sean por todos atacados y obedicidos: entiende que los párrafos primero y segundo de dicho artículo á nadie pueden ofrecer justificadas dudas, y que proclamándose en el uno la religión católica-apostólica-romana como oficial, se respetan en el otro las opiniones religiosas de todos los que viven fuera del gremio de aquella iglesia, y se permite el ejercicio de cualquier culto que no se oponga ni contradiga á la moral cristiana. Bien claro está, por consiguiente, que el estado protege la religión católica, que es la suya, pero que al mismo tiempo admite y establece la tolerancia de cultos, garantizando el ejercicio de ese derecho contra toda clase de agresiones.

No desconoce el gobierno, sin embargo, que el párrafo tercero del ar-

tículo 11 constitucional ha dado motivo, en la práctica, á dudas y vacilaciones que no se refieren á la palabra *ceremonias*, cuyo genuino sentido no puede oscurecerse, sino á la frase *manifestaciones públicas*. Debe recordarse, no obstante, que al disputarse los preceptos constitucionales ante las Cortes, se declaró la inteligencia que habia de darse á la referida frase, ya espontáneamente, ya contestando á preguntas concretas, en uso de su derecho formuladas por los representantes de la nacion. Este recuerdo puede servir para desvanecer toda censura infundada que por inconsecuencia ó arbitrariedad se dirija contra las medidas gubernativas que ahora se adopten, si ellas resultan en armonía con lo declarado en la referida discusion constitucional.

No es esta la vez primera que las autoridades gubernativas y los tribunales de justicia están obligados á interpretar rectamente la frase *manifestaciones públicas*. El Código penal vigente, reformado en 18 de Junio de 1870, usa de ella con frecuencia, y al castigar en su art. 168 cierta clase de manifestaciones públicas, considera como promovedores y directores de las mismas á los que con discursos, impresos, lemas, banderas, ú otros signos que ostentaren, ó por cualesquiera otros hechos, las inspiren. No puede negarse, por lo tanto, que la ley penal, sin confundir la reunion con la manifestacion, interpreta ésta en sentido lato, y busca su esencia en las palabras, impresos, lemas, banderas y otros signos que para realizarla se empleen. Por virtud de esta interpretacion se han prohibido en España, desde que rige esa legislación penal, lemas y letreros públicos alusivos á formas de gobierno distintas de la vigente, y partidos políticos hay fuera de la legalidad comun sólo por el título que quieren aplicarse.

Y aun prescindiendo del Código penal, basta acudir al Diccionario de la lengua, formado por la docta Academia que cuida en España de la pureza y precision de nuestro idioma, para saber que manifestacion pública religiosa es *todo acto* que, saliendo del recinto cerrado del hogar, del templo ó del cementerio, *declara, descubre ó dá á conocer lo que en ellos está guardado ú oculto*.

De aquí parte el gobierno para creer, con tanta buena fé como firmeza, que todo aquello que manifieste *en ó sobre* la vía pública las opiniones, creencias ó ideas religiosas de las sectas disidentes, ó dé á conocer en la misma forma los actos relativos á su respectivo culto, debe prohibirse; y no puede ser autorizado ó tolerado por las autoridades encargadas de guardar la constitucion del estado.

Al profesar esta doctrina no es, ciertamente, el gobierno que hoy rige los destinos del reino una excepcion en punto tan importante. En una de las naciones que más precio dan actualmente á la libertad religiosa, donde no ya se proclama la tolerancia, sino que se pretende consagrar la absoluta libertad de todos los cultos y singularmente del católico, por altas razones nacionales é internacionales se impiden, sin embargo, ciertas manifestaciones públicas bien antiguas y bien arraigadas en las costumbres, creyendo que si por una parte están obligados los gobiernos á consentir el pleno ejercicio de la libertad religiosa, deben por otra proveer escrupulosamente, no tan sólo al cuidado de la moral y de la higiene, sino al mantenimiento del orden, evitando entre los ciudadanos las agitaciones á que puede dar motivos ó pretextos todo acto religioso ejecutado fuera de los templos.

Nacion hay tambien, y de las más libres, que teniendo en cuenta las creencias de la mayoría de los ciudadanos, y aun el interés de aquellos que profesan otras diversas, no consiente que los miembros de las iglesias disidentes, bien vayan solos ó acompañados, vistan fuera de ellas los trages propios de su religion, practiquen sus ritos ó ceremonias, ni lleven banderas, objetos ni simbolos algunos en la vía pública, considerando como un acto punible el que tales hechos se realicen cerca de los templos dedicados al servicio de la religion oficial. Semejantes actos, ejecutados

fuera de las casas particulares, de los cementerios ó de los templos destinados especialmente al culto, se miran allí como ocasion de sumo escándalo y de molestia para la mayoría, como evidente peligro para la paz pública, y son reprimidos enérgicamente.

No otra cosa se propone el gobierno del rey en la interpretacion del citado artículo constitucional; reclama de las sectas disidentes, y á favor de la religion oficial del estado, el respeto y las consideraciones que el Código penal exige para la forma de gobierno, expresion tambien de la voluntad de la inmensa mayoría del país; de manera que todo aquello que directamente y en la exterioridad de la via pública sea contrario á la religion católica-apostólica-romana debe proscribirse, bien se ejecute por actos personales ó por emblemas, letreros, anuncios y otros signos.

Mas para determinar exactamente el limite que separa lo lícito de lo ilícito; para que la inviolabilidad de los lugares destinados al culto de esas sectas, mientras no se ataque á la moral cristiana, pueda ser mantenida, y á su amparo dedicarse libremente los que los profesen al ejercicio del derecho que consigna el precepto constitucional, y para que, so pretexto de reuniones ó asociaciones religiosas, no se constituyan organismos politicos contrarios á la seguridad del estado y al mantenimiento del orden social, es necesario que la administracion pública conozca dónde se encuentran los templos, y quiénes son los que los dirigen, regentan ó representan. Preciso es, pues, que todo español ó extranjero que haya de abrir un templo consagrado á una religion diversa de la católica, que esté comprendida en el artículo 14 de la constitucion, dé conocimiento de ello á los gobernadores civiles en las capitales de provincia, á los subgobernadores en los pueblos donde esta clase de autoridades funcione, y á los alcaldes en los restantes del reino. Ni unos ni otros deben ni pueden olvidar que la inviolabilidad constitucional del templo sólo garantiza los actos, ritos y ceremonias puramente religiosos, pues, por lo demás, así los ministros de cualquier culto, sea el que fuere, como los congregados en el recinto destinado á practicarlo, están sujetos á las reglas de policía é higiene que las ordenanzas y reglamentos establezcan, y han de ser responsables de las faltas y delitos que se cometan dentro de aquél, y muy señaladamente, por su naturaleza politica, de los comprendidos en los arts. 144, 145, 181, 182, 197, 198, 199, 201, 202, 203 y 271 del Código penal.

Hay además en esta materia tan importante un punto sobre el cual debe decir su opinion franca y resuelta el gobierno de S. M. La lamentable confusion que en algunas partes se ha querido introducir entre el templo, dedicado al culto, y la escuela, destinada á la enseñanza, no puede consentirse en modo alguno. El templo es inviolable, segun el art. 14 de la constitucion; la escuela está sometida á la inspeccion, vigilancia y correccion del gobierno y de sus delegados, segun el art. 7.º del decreto de 29 de Julio de 1874, reglamentando la libertad de enseñanza; y esas facultades gubernativas serian ilusorias si el catedrático pudiera invocar la inviolabilidad del sacerdote, y convertir á su antojo en iglesia el aula donde reúne á sus discípulos para instruirles en las letras, las artes ó las ciencias. La religion es objeto del art. 14 constitucional; la enseñanza lo es del art. 12; los efectos de ambos preceptos son diversos, como la índole de los derechos que consagran, y para cumplir aquéllos y para respetar éstos es indispensable establecer con claridad la linea divisoria del templo y de la escuela. Si hay quien pretende suscitar conflictos á la sombra de una inexplicable confusion, la prudencia del gobierno ha de evitarlos.

Por otra parte, el libre ejercicio del culto está reconocido en España á todos sus habitantes, sin distincion de nacionales y extranjeros; pero no sucede lo mismo con la libertad de enseñanza, cuya posesion tan sólo se asegura á los españoles en el art. 12 de la constitucion. Razones de estado que á nadie pueden ocultarse, han obligado á los legisladores españoles de

todos los tiempos, incluso á los de ideas más liberales, á exigir el carácter nacional para fundar ó crear establecimientos de enseñanza; porque era imposible consentir en manos de extranjeros el depósito sagrado de las futuras generaciones, que llevan en su conciencia y en su entendimiento el porvenir de nuestra patria. Así es que no ya para fundar escuelas y establecimientos de enseñanza, sino sólo para ingresar en el profesorado español, ha sido necesario que las leyes de instrucción pública autoricen especialmente á los extranjeros, como sucedió en la de 1857, que los facultó únicamente para enseñar lenguas vivas y para dar lecciones de música vocal é instrumental. Deberán tener, por consiguiente, muy en cuenta las autoridades, que no pueden estar al frente de los establecimientos de enseñanza, tanto públicos como privados, los extranjeros, porque el Código fundamental no lo consiente, en razon á graves consideraciones de alto interés político.

Después de esto, queda sólo una última prevención que hacer para completar el pensamiento del gobierno: entiende éste, y así se propone realizarlo, que fuera del templo, que es inviolable mientras en él no se delinca, y fuera de los demás establecimientos autorizados al efecto por disposición especial, todas las reuniones que se celebren, sea cualquiera su carácter y el fin que se propongan, quedan sujetas á la regla 4.^a de la real orden de 7 de Febrero de 1873, que dispone «que no podrá convocarse ni celebrarse ninguna reunion pública en calles, plazas y paseos ú otro lugar de uso comun, sin el permiso previo y por escrito del gobernador de la provincia en las capitales, y de la autoridad local en los demás pueblos.» Si acaso, pues, alguna de estas reuniones se celebra sin solicitar y obtener previamente el permiso de la autoridad, podrá ser disuelta en el acto como ilícita, y sus autores entregados á los tribunales de justicia. Nadie puede tachar esta medida de injusta, porque sería locura exigir al gobierno que otorgara á la ínfima minoría, que son los disidentes, lo que no puede conceder á los católicos, que constituyen la casi unanimidad de los ciudadanos españoles.

De esta manera quedan explicados los propósitos del gobierno en los puntos á que directa ó indirectamente puede aplicarse el art. 11 de la constitucion, y tal ha de ser la interpretacion á que han de ajustarse su conducta las autoridades y funcionarios á quienes su cumplimiento atañe. Y para que más claramente todavía sepan á qué atenerse, y no quepa disculpa alegando infundada vaguedad en las instrucciones que contiene esta circular, se condensan á continuacion en reglas precisas y concretas, á saber:

1.^a Queda prohibida desde esta fecha toda manifestacion pública de los cultos ó sectas disidentes de la religion católica fuera del recinto del templo ó del cementerio de las mismas.

2.^a Para los efectos de la regla anterior, se entenderá manifestacion pública todo acto ejecutado sobre la via pública, ó en los muros exteriores del templo ó del cementerio, que dé á conocer las ceremonias, ritos, usos y costumbres del culto disidente, ya sea por medio de procesiones ó de letreros, banderas, emblemas, anuncios y carteles.

3.^a Los que funden, construyan ó abran un templo ó un cementerio, destinado al culto ó enterramiento de una secta disidente, lo pondrán en conocimiento del gobernador de la provincia en la capital, del subgobernador en los puntos donde esta autoridad resida, ó de los alcaldes en los demás pueblos, cuarenta y ocho horas ántes de abrirlos al público, manifestando el nombre del director, rector ó encargado del establecimiento.

Igual noticia habrán de dar, si ya no lo hubiesen hecho, y dentro del plazo de quince dias, á contar desde esta fecha, los fundadores ó encargados de los templos y cementerios existentes en la actualidad.

4.^a Las escuelas dedicadas á la enseñanza funcionarán con independen-

cia de los templos, sea cualquiera el culto á que éstos pertenezcan, y se considerarán separadas de ellos para todos los efectos legales.

Los encargados ó directores de las mismas deberán ser españoles, y pondrán en conocimiento de las autoridades á quienes se refiere la regla anterior, el objeto de la enseñanza, sus nombres y títulos académicos, si los tienen, y de los profesores á cuyo cargo estén las cátedras.

5.^a Las reuniones que se celebren dentro de los templos y de los cementerios, así disidentes como católicos, gozarán de la inviolabilidad constitucional, siempre que en ellas no se contravenga expresamente á las ordenanzas y reglamentos de policía, ó no se cometa alguno de los delitos comprendidos y castigados por el Código penal.

6.^a Las escuelas y establecimientos de enseñanza, sin distincion de cultos, continuarán sujetos á la constante inspeccion é intervencion del gobierno, con arreglo á los preceptos que contiene el decreto de 29 de Julio de 1874.

7.^a Las reuniones que se celebren fuera del templo y de los demás lugares y establecimientos autorizados al efecto por disposicion especial, seguirán sometidas á la real órden de 7 de Febrero de 1875; y si para convocarlas ó celebrarlas no se solicita y obtiene el permiso previo y por escrito de la autoridad, podrán ser disueltas como ilícitas en el acto por el gobernador, subgobernador ó alcalde respectivamente, quienes entregarán á los que las convoquen ó presidan á disposicion de los tribunales de justicia.

De real órden, acordada en consejo de ministros, lo comunico á V. S. para su publicacion en el *Boletín oficial* de esa provincia y para su exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1876.—Cánovas.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Ley de secuestros de personas.

GRACIA Y JUSTICIA.—*Ley de 8 de Enero sobre aplicacion de penas por el delito de secuestro* (Gaceta de 10).

Don Alfonso XII, Por la gracia de Dios, etc.

Artículo. 1.^o Tan luego como se verifique el secuestro de una ó más personas con objeto de robo en una provincia, se aplicará en ella y en las limítrofes que se consideren en caso análogo, previa declaracion del Gobierno, la penalidad y el procedimiento que son objeto de esta ley.

Art. 2.^o Los que promuevan ó ejecuten un secuestro, y los que concurran á la comision de este delito con actos sin los cuales no hubiera podido realizarse, serán castigados con pena de cadena perpétua á muerte.

La aplicacion de las penas se ajustará en un todo á lo dispuesto en el capítulo 4.^o del título 3.^o y capítulos 3.^o y 4.^o del título 4.^o del Código penal vigente, considerando como circunstancia agravante la de haber sido detenido el agraviado bajo rescate y por más de un día.

Art. 3.^o El conocimiento de estos delitos corresponderá exclusivamente á un Consejo de guerra permanente que se constituirá, llegado el caso, en cada provincia. El Consejo continuará la causa hasta su terminacion, no obstante la ausencia y rebeldía de los reos, sin perjuicio de oírlos siempre que se presenten ó fueren habidos.

Art. 4.^o Toda persona se considerará investida de autoridad pública para proceder á la captura de los reos á quienes por el Consejo de guerra

se hubiere impuesto la última pena, empleando al efecto medios prudentes y racionales.

Art. 5.º El Consejo de guerra podrá autorizar las recompensas en metálico que las corporaciones ó particulares ofrezcan para la captura de los reos de secuestro condenados á la última pena.

Art. 6.º Las autoridades civiles y militares podrán proponer al gobierno la exención del servicio de las armas de la persona que hubiere denunciado á cualquier procesado por estos delitos, contribuyendo eficazmente á su captura. Esta gracia puede subrogarse á favor del pariente, dentro del cuarto grado, que designe la misma persona.

Art. 7.º Se autoriza al gobierno para que en las mismas provincias antedichas, y oyendo el parecer de una junta, compuesta del gobernador de la misma, presidente; comandante militar, juez decano de primera instancia, jefe de la guardia civil y dos diputados provinciales, pueda fijar durante un año el domicilio de los vagos y gentes de mal vivir; entendiéndose por tales los comprendidos en el párrafo 23 del art. 40 del Código penal vigente.

Artículo transitorio. Se declara desde luego aplicable esta ley desde su promulgacion en las provincias que comprenden los distritos militares de Andalucía y Granada y en las de Badajoz, Ciudad-Real y Toledo.

Por tanto; mandamos, etc.

Dado en Palacio á 8 de Enero de 1877.—Alfonso.—El ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.

GRACIA Y JUSTICIA.—*Real orden de 3 de Julio, relativa á la interpretacion que debe darse al art. 7.º de la ley de 8 de Enero sobre secuestros de personas.* (Publicada en el Boletín oficial de Búrgos.)

«Excmo. Sr.: Dada cuenta al rey (Q. D. G.) del expediente instruido con motivo de la comunicacion dirigida en 27 de Abril último por el ministerio de su digno cargo á este de Gracia y Justicia, trasladando otra del ministerio de la Guerra referente á la consulta elevada por el capitán general de Granada sobre la interpretacion que debe darse al art. 7.º de la ley de 8 de Enero último sobre secuestros de personas y demás que expresa; S. M. ha tenido á bien disponer lo siguiente:

1.º Que la junta á que se refiere el mencionado art. 7.º debe considerarse constituida desde luego y de una manera permanente, siendo su objeto vigilar y averiguar si hay ó no vagos y gente de mal vivir en la provincia, funciones ámbas que son y deben ser continuas, para poder informar con conocimiento de causa al gobierno, á fin de que éste pueda usar acertada y provechosamente la autorizacion que la ley le concede de poder fijar durante un año el domicilio de las personas en quienes concurren las circunstancias de que habla el referido artículo;

2.º Que la presidencia de la expresada junta, mientras no se varíe ó modifique su texto, no deja lugar á duda fundada de que corresponde al gobernador civil de la provincia, cualquiera que sea el nombre que lleve la autoridad militar (superior) de la misma, puesto que aquél, como delegado y representante natural y legal del gobierno, tiene y debe tener la supremacía que por su cargo y carácter le pertenece;

Y 3.º Que el repetido art. 7.º no se opone á que la junta pueda proponer al gobierno el destierro de los que tenga por vagos y gente de mal vivir, porque cuando así lo haga, podrá su indicacion servir de un dato más que el gobierno, cuyas facultades quedarán íntegras, utilizará si lo creyere conveniente.»

Sobre quebrantamiento de condenas.

¿Son punibles la tentativa y el quebrantamiento frustrado de condena?—No vamos á estudiar esta cuestion filosófico-legal fuera de las esferas del derecho constituido. No vamos á analizar nuestro propio corazon para apreciar el origen, la fuerza, la naturaleza del sentimiento de la libertad, que impulsa al hombre aprisionado á romper las ligaduras, á salvar los obstáculos físicos y legales que coartan material ó moralmente el ejercicio de su actividad. Tampoco vamos á ocuparnos de otros sentimientos no ménos nobles, no ménos poderosos que aquel que ejerce irresistible pujanza en la voluntad del preso, como son el amor de la familia y el cariño de la pátria. Sólo vamos á emitir nuestra opinion contestando negativamente á la pregunta formulada al principio, atendiendo para ello tan sólo á lo dispuesto en el Código penal de 1870. Por eso preguntamos: ¿son punibles..., etc? Si nuestro propósito fuera otro, si quisiéramos manifestar nuestro sentir respecto á lo que juzgamos justo, racional, filosófico en este punto, con abstraccion de la ley vigente, formularíamos la cuestion de otra manera; preguntáramos: ¿La tentativa y el quebrantamiento frustrado de una condena, deben ser castigados? Y no nos limitaríamos á estas dos fases de la generacion de los hechos humanos, sino que manifestáramos también nuestro sincero juicio acerca de si el quebrantamiento de condena consumado debe ser punible como delito.

Pero como no es este nuestro propósito, como nos guía un criterio eminentemente práctico, sólo nos proponemos resolver la duda que puede producir la lectura del tema de estas observaciones, duda que se ha ofrecido más de una vez en la práctica y puede ofrecerse de nuevo, sin más pretensiones, al hacerlo, que llamar la atencion de los funcionarios que intervienen en la administracion de justicia.

El quebrantamiento de condena no es, en rigor, un delito. No figura en la extensa escala de hechos punibles, comprendida en el libro 2.º del Código penal, y por tanto, no está sujeto á las reglas generales, contenidas en el libro 1.º, para la aplicacion de las penas, en consideracion al conjunto de los hechos que constituyen la tentativa y frustracion juridica de los delitos, ni al grado de responsabilidad penal de las personas que, directa ó indirectamente, han intervenido en aquéllos, ni á las circunstancias modificativas de la imputabilidad. Es un hecho castigado con un recargo ó agravacion de penalidad en determinadas condiciones, teniendo por punto de partida la situacion para con la ley penal de los que la cometen, y la naturaleza de los medios empleados para su ejecucion. Se ocupa el Código de tales actos al fin del libro 1.º (cap. 1.º, tit. V), y sólo deben aplicarse sus taxativos preceptos cuando los hechos concretos que especifica se realicen, tengan cumplido efecto tal y como en dicho Código se prevenen y determinan. Ni más allá, ni en otras circunstancias de lugar y tiempo. Los actos preparatorios, los de principio de ejecucion, los inherentes á la realizacion misma del hecho, no caen bajo la sancion penal. Es condicion ineludible la consumacion del quebrantamiento, la interrupcion del mal en que consiste la pena impuesta, la solucion de la continuidad de las privaciones que formen la esencia y la naturaleza de la condena.

De aquí se deduce que un quebrantamiento sólo puede castigarse cuando se consumó, ó lo que es lo mismo, que el quebrantamiento de condena sólo es penable cuando se consuma. Si la sentencia no se ha infringido, si la condena no se quebrantó, si la pena impuesta no ha sufrido la más mínima solucion de continuidad, no se dá el caso previsto y castigado en el Código, y el hecho, cualquiera que éste sea, encaminado á realizar el

quebrantamiento, esté ya más ó ménos cercano al final de su realizacion, constituya una *tentativa* ó un quebrantamiento *frustrado*, ese supuesto hecho no es punible, no está dentro de la esfera del Código, no justifica el recargo de la penalidad ó el aumento, en interinidad, de la pena impuesta.

Y la razon de estas exclusiones es evidente, dentro del texto del Código mismo. El cap. IV del tit. 3.º del libro 1.º, establece las reglas que deben observarse para la aplicacion de las penas á los autores de *delito consumado*, de *delito frustrado* y *tentativa*, y á los cómplices y encubridores, así como las que deben aplicarse para la determinacion de las penas, en consideracion á las circunstancias atenuantes y agravantes. Por consiguiente, todo hecho que no merezca la categoria de delito; toda accion ú omision no comprendida en los casos clasificados, definidos, previstos y penados en los quince títulos del 2.º libro del Código, no pueden regularse, ni apreciarse en su naturaleza y represion correspondientes, por las indicadas reglas de aplicacion general. Estos casos, cortos en número, son la excepcion, forman grupo aparte, quizás porque no son verdaderamente delitos; quizás porque deben ser objeto de correcciones disciplinarias, y materia propia de los reglamentos penitenciarios; y ni debe aplicárseles una interpretacion extensiva, ni debe sacárseles de la esfera legal en que el legislador les ha colocado.

Por otra parte, no es necesario meditar mucho sobre la naturaleza de tales hechos y el lugar que ocupan en el Código, para declarar que la aplicacion de los principios y reglas generales á que antes hemos hecho referencia, es, en la mayoría de los casos, imposible, si no se quiere vencer este obstáculo con la arbitrariedad.

Vamos á demostrarlo.

Concediendo momentáneamente que el quebrantamiento de condena sea delito, para cuya represion deban tenerse en cuenta las prescripciones generales del Código, y por consiguiente, que sea punible, no sólo el *consumado*, sino el *frustrado*, y tambien la *tentativa*, hay que reconocer que el castigo de esos hechos debe rebajarse en uno ó más grados, segun que sea *frustrado* el quebrantamiento ó mera *tentativa*, y segun que haya *cómplices* y *encubridores* cooperadores á la ejecucion de tales hechos. Aquellos grados hay que buscarlos en las escalas de las penas, único arsenal adonde podemos dirigirnos para cumplir los arts. 66, 67, 68 y 69 del expresado Código.

Ahora bien: el castigo señalado para el quebrantamiento consumado; esto es, para los sentenciados que *hubiesen* quebrantado su condena, consiste en una agravacion de la pena impuesta, agravacion regulada y determinada por los arts. 129 y 130. La entidad de esa agravacion, la naturaleza de ese nuevo mal, que por más que nuevo sea, no quiere la ley llamarle pena distinta, sino aumento ó agravacion de la ya existente, forma el tipo, la clave, el punto de partida, para buscar en las escalas de la penalidad los grados inferiores á aquélla que necesitamos para aplicar las reglas del Código. Pues cuando la pena-tipo sea el sufrimiento por determinados años de las mayores privaciones y de los trabajos más penosos que autoricen los reglamentos, ¿á qué escala de las graduales hemos de recurrir para rebajar en uno ó más grados ese castigo, y poder penar, con proporcion justa y necesaria, la *tentativa* y el quebrantamiento *frustrado* de la condena que, cuando aquél se consuma, lleva consigo la clase de agravacion expuesta? No es posible hacer esa gradacion, porque en ninguna de las escalas existe ese mal, ese sufrimiento, como pena principal ni como pena accesoria. Luego las reglas generales son inaplicables, es irrealizable su aplicacion práctica en este y otros casos que nos ofrecen las del art. 129, ántes citado, y esto basta para declarar que el castigo de los quebrantamientos de condena constituye una excepcion, en cuyo sistema de correccion no entra la de la *tentativa*, ni la de la *frustracion* de aquel hecho penado por el Código cuando se consuma.

Fundados en las consideraciones que quedan apuntadas ligeramente, creemos que los procedimientos instruidos con motivo ú ocasion de un quebrantamiento de condena *no consumado*, deben dirigirse únicamente á perseguir el delito de infidelidad en la custodia de los presos, frecuente á veces, cuya existencia forma parte del primero, en esos casos como elemento poderoso del proyecto de evasión y base de reconocida solidez para fundar en ella la esperanza de un éxito feliz, avivada y vigorosamente sostenida por el fuego de la libertad personal, depositado en el corazón del hombre por la mano de Dios, cuya fuerza secreta y perseverante no bastan á cercenar los obstáculos insuperables, los desengaños crueles, los proyectos contrariados, las frustradas tentativas de realización, ni el aumento de rigor, de privaciones y de grillos con que la ley castiga inútilmente al que quebranta una condena.

No es extraño, pues, que un hecho que debe origen á tan sagrado y natural sentimiento, se aparte de las condiciones elementales de todo delito, y tenga derecho de exigir de los criminalistas meditadas reflexiones para resolver si hay razon para incluirse en la lista de las acciones punibles.

Acaso sería más filosófica y racional su eliminación absoluta, procurando evitarlos con la construcción de establecimientos penales que reúnan todas las condiciones de seguridad que la ciencia y la esperiencia aconsejan, y corrigiendo las inevitables con la represion interior disciplinaria que señalen los reglamentos.

Pendiente de próxima discusion en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de imprenta, aprobado por el Senado, es corta la vida legal que resta al decreto de 31 de Diciembre de 1875, que está hoy vigente, á que nos referimos en el texto de esta obra. Por lo mismo, y considerando que las variaciones que dicho proyecto de ley pueda tener en el Congreso no han de ser trascendentales, hemos creido conveniente dar á conocer á nuestros lectores dicho proyecto, porque quizás cuando este tomo se ponga á la venta, haya aquél recibido la sancion real y sido promulgado como ley del reino.

PROYECTO DE LEY DE IMPRENTA.

TITULO PRIMERO.

De los impresos y sus clases.

Artículo 1.º Es impreso, para los efectos de esta ley, la manifestacion del pensamiento con palabras fijadas sobre el papel, tela ó cualquiera otra materia, por medio de letras de imprenta, litografía, fotografía; ó por otro procedimiento de los empleados hasta el día ó que en adelante se emplearen.

Art. 2.º Los impresos se dividen en libros, folletos, hojas sueltas, carteles y periódicos.

Se entiende por libro todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen 200 ó más páginas.

Se entiende por folleto todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen más de ocho páginas y ménos de 200.

Es hoja suelta todo impreso que, sin ser periódico, no exceda de ocho páginas.

Es cartel todo impreso destinado á fijarse en los parajes públicos.

Se entiende por periódico toda série de impresos que salgan á luz una ó más veces al día ó por intervalos de tiempo regulares ó irregulares que no excedan de treinta días, con título constante.

Art. 3.º Todo impreso que no lleve pié de imprenta, ó lo lleve supuesto, será considerado como clandestino, y sus autores, directores, editores ó impresores, quedarán sujetos á la responsabilidad que señala el art. 203 del Código penal.

TITULO II.

De los periódicos.

Art. 4.º No podrá publicarse periódico político alguno sin que su fundador acuda previamente á la autoridad gubernativa de la provincia si ha de ver la luz pública en la capital, ó al alcalde si en algun otro punto, exponiendo el título que ha de llevar, el establecimiento tipográfico en que haya de imprimirse, y el nombre del fundador-propietario ó de la sociedad legalmente constituida que lo haya de fundar, y en este caso el nombre del gerente.

El fundador-propietario, ó el gerente en su caso, que se proponga publicar un periódico, ha de ser ciudadano español, mayor de edad, llevar dos años de vecindad por lo ménos en el punto en que el periódico se publique, pagar 250 pesetas de contribucion territorial, ó con dos años de antelación 500 pesetas por subsidio industrial, y estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Nadie podrá intentar ni realizar la publicacion de más de un periódico político diario.

Art. 5.º Para acreditar las circunstancias á que se refiere el artículo anterior con los documentos oportunos, se fija el plazo de cuarenta días desde que se solicite la publicacion del periódico.

La autoridad, examinando los documentos presentados, resolverá, en el plazo de otros veinte días, si se han acreditado ó no aquellas condiciones. En el primer caso, podrá publicarse el periódico desde luego; en el segundo, no podrá llevarse á cabo la publicacion sin subsanar los defectos que en la documentacion se observen.

Art. 6.º De la negativa de la autoridad podrá apelarse en el término de cinco días ante la audiencia del territorio, la cual fallará en el de veinte días, y este fallo será ejecutorio.

Art. 7.º Si trascurridos los cuarenta días que señala el art. 5.º no acreditara el propietario las circunstancias que exige el art. 4.º, se entenderá que renuncia á la publicacion del periódico.

Si cumplidos los sesenta días desde aquel en que se hizo la solicitud, la autoridad nada hubiere resuelto, se entenderá justificada la aptitud del fundador-propietario del periódico, y éste podrá publicarse.

Art. 8.º Dos horas antes de repartirse un periódico tendrá obligacion el fundador-propietario, ó el que debidamente autorizado haga sus veces, de presentar dos ejemplares en la fiscalía de imprenta, y otro en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el ministerio de la Gobernacion y en el Gobierno de provincia si se publica en esta corte.

En las demás poblaciones donde haya audiencia, se presentarán dos ejemplares en la fiscalía de imprenta y dos en el Gobierno de provincia.

En los pueblos restantes se presentarán los cuatro ejemplares en la alcaidía.

Dichos ejemplares serán firmados por el fundador-propietario, director, gerente ó editor del periódico.

La fiscalía de imprenta, ó la alcaidía, donde aquélla no exista, sellará uno de los ejemplares presentados, devolviéndolo á los encargados del periódico, para que éstos puedan acreditar su presentacion.

Art. 9.º No podrá trasmitirse, cederse ni enajenarse el derecho de la publicacion de un periódico, sin que el nuevo adquirente acredite ante la autoridad, y en la forma prescrita por el art. 4.º, las condiciones en el mismo exigidas.

En el caso de que falleciese ó se incapacitase el fundador-propietario ó el gerente, su sucesor deberá cumplir los requisitos exigidos en el mismo art. 4.º, pero sin que por eso se suspenda la publicacion del periódico. Si trascurrido un mes no se presentase solicitud ninguna con este fin, ó presentada no se acreditase en los cuarenta dias las condiciones exigidas, cesará la publicacion del periódico.

Art. 10. El derecho á publicar un periódico se pierde:

1.º Si su fundador deja trascurrir ocho dias sin realizar la publicacion desde la fecha en que legalmente pueda hacerlo.

2.º Si deja voluntariamente de publicarse por espacio de ocho dias seguidos, siendo diario, y de cinco números cuando no lo sea, despues de haber salido á luz.

3.º Si no continúa su publicacion dentro de los ochos dias siguientes á aquel en que haya cumplido la pena de suspension que los tribunales le hubiesen impuesto.

Art. 11. Todo periódico está obligado á insertar en uno de los tres primeros números despues de su entrega, la comunicacion que la persona, tribunal, corporacion ó asociacion autorizada por la ley, que se creyese ofendidas ó á quienes se hubiesen atribuido hechos falsos ó desfigurados en el periódico, le dirigieren con el fin de vindicarse, ó de negar, rectificar, aclarar ó explicar los hechos.

Esta comunicacion deberá insertarse en la primera plana del periódico, ó por lo ménos en una plana y columna iguales á las en que se publicó el artículo contestado ó rebatido; la insercion será gratuita, siempre que no exceda del duplo del artículo; si excediese, deberá pagar el comunicante, por exceso, el precio ordinario que tenga establecido el periódico; la comunicacion se insertará íntegra y sin intercalacion en el texto.

Del contenido de la comunicacion responderá el que la suscriba. En caso de ausencia ó muerte de la persona agraviada, tendrán igual derecho, y podrán usar de él, su cónyuge, hijos, padres, hermanos y herederos.

Art. 12. Si el director, fundador, gerente ó encargado del periódico se negare á insertar la comunicacion á que el artículo anterior se refiere, el interesado podrá acudir al juez municipal en juicio verbal, con arreglo al art. 1.166 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si el fallo ejecutorio fuese favorable al comunicante, la insercion de su comunicado irá encabezada por la sentencia: no se acompañará observacion alguna por parte del periódico y se hará la insercion en la primera plana de uno de los tres primeros números que se publiquen despues de la citacion ó notificacion.

Art. 13. Para la publicacion de los periódicos que no sean políticos, bastará que se dé conocimiento al gobernador en la capital de la provincia, y al alcalde en los demás pueblos.

TITULO III.

De los delitos.

Art. 14. Para que haya delito de imprenta se necesita la publicacion.

Art. 15. Se entiende realizada la publicacion de un impreso:

1.º Cuando se ha comenzado su reparticion.

2.º Cuando se ha puesto en venta.

3.º Cuando se ha fijado en un paraje público, ó dejado en local ó establecimiento del mismo género.

4.º Cuando se han enviado los impresos al correo.

Art. 16. Constituye delito de imprenta:

1.º Atacar directamente ó ridiculizar los dogmas de la religion del Estado, el culto y el sagrado carácter de los ministros de la misma, ó la moral cristiana.

2.º Hacer befa ó escarnio de cualquiera otra que tenga prosélitos en España.

3.º Ofender, fuera de los casos previstos en el Código penal, la inviolable persona del rey, aludiendo irrespetuosamente, ya de un modo directo ó ya indirecto, á sus actos y á sus opiniones; propalar máximas y doctrinas que induzcan á suponerle sujeto á responsabilidad, ó que en alguna manera nieguen ó desconozcan sus derechos, su dignidad y sus prerogativas; insertar noticias respecto de su persona y dar cuenta de hechos ó actos que tengan relacion con ella ó con la de cualquier miembro de la real familia, si al hacerlo pueden racionalmente considerarse publicadas unas y otros en su desprestigio.

4.º Atacar directa ó indirectamente la forma de gobierno ó las instituciones fundamentales; proclamar máximas ó doctrinas contrarias al sistema monárquico-constitucional; conspirar directa ó indirectamente contra el orden legal, suponiendo imposible su continuacion ó su ejercicio, y alentando de cualquier modo las esperanzas de los enemigos de la paz pública.

5.º Injuriar ó ridiculizar á los cuerpos colegisladores ó á alguna de sus comisiones, ó negar y poner en duda la legitimidad de unas elecciones generales para diputados á Cortes ó para senadores.

Los delitos á que se refieren los tres párrafos anteriores serán perseguidos y castigados, aunque para cometerlos se disfrace la intencion con alegorías de personajes ó países supuestos, ó con recuerdos históricos, ó por medio de ficciones, ó de cualquiera otra manera.

6.º Desfigurar maliciosamente las sesiones ó los discursos de los senadores ó diputados en los casos no previstos en el Código penal, ofendiéndolos ó denigrándolos por las opiniones ó doctrinas que sustenten ó por los votos que emitan en el desempeño de sus cargos.

7.º Atribuir á un senador ó diputado, despues de publicado el *Diario de Sesiones*, palabras ó conceptos que no consten en el mismo.

8.º Publicar noticias que puedan favorecer las operaciones del enemigo en tiempo de guerra civil ó extranjera, ó descubrir las que hayan de ejecutar las fuerzas del ejército y armada, ú otras que promuevan discordia ó antagonismo entre sus distintos cuerpos ó institutos, ó que se dirijan en cualquier forma y por cualquier medio al quebrantamiento de la disciplina militar.

9.º Defender ó exponer doctrinas contrarias á la organizacion de la familia y de la propiedad, ó que se encaminen á concitar unas clases contra otras, ó á concertar coaliciones con el mismo objeto.

10.º Publicar noticias falsas de las que pueda resultar alarma para las familias, peligro para el orden público, ó daño grave y manifiesto á los ir-

tereses y al crédito del Estado, así como insertar documentos oficiales desfigurando su sentido.

11.º Provocar á la desobediencia de las leyes y de las autoridades constituidas, ó hacer la apología de acciones calificadas por las leyes de delitos ó faltas.

12.º Ofender ó ridiculizar á los monarcas ó jefes de otros Estados amigos, ó á los Poderes constituidos en ellos, así como á los representantes diplomáticos que tengan acreditados en la corte de España, siempre que aquella ofensa ó disfavor estén penados en la nacion respectiva.

13.º Atacar la inviolabilidad de la cosa juzgada ó tratar de coartar con amenazas ó dicerios la libertad de los jueces, magistrados y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.

Art. 17. Los periódicos que por medio del grabado ó de la litografía incurran en los casos comprendidos en el artículo anterior, cometen delito de imprenta y se hallan sujetos á las prescripciones de la presente ley.

Art. 18. Comete delito de imprenta el periódico que, teniendo conocimiento de haber sido denunciado otro, inserte el artículo ó el suelto objeto de la denuncia.

Art. 19. Los delitos á que se refieren los títulos; 1.º y 2.º del libro 2.º en sus secciones primera, segunda y tercera del Código penal, no están comprendidos en la presente ley; y si se cometiere alguno de ellos por medio de la imprenta, será juzgado por la jurisdiccion ordinaria y castigado con arreglo á dicho Código.

En este caso, la pena que el tribunal ordinario imponga llevará necesariamente consigo, como accesoria, la suspension del periódico por el término que aquel tribunal considere conveniente, dentro de los plazos que esta ley señala para las penas en el título siguiente.

Art. 20. Los delitos de injuria y calumnia que se cometan contra los ministros y demás personas constituidas en autoridad, con ocasion del examen y critica de los actos inherentes al cargo que ejerzan, así como los cargos que por otros conceptos se les dirijan, quedarán sujetos á la jurisdiccion y procedimiento ordinario y se aplicarán á ellos las disposiciones que contiene el título 40 del libro 2.º del Código penal, á instancia de parte ó procediéndose de oficio.

Los insultos que se dirijan á los ministros y personas constituidas en autoridad con ocasion de sus funciones, serán reputados delitos de imprenta y quedarán sujetos á la presente ley.

Art. 21. No están comprendidos en las disposiciones de la presente ley los impresos oficiales que emanen de las autoridades constituidas ó de las dependencias del Estado, la *Gaceta de Madrid*, el *Diario oficial de avisos de Madrid*, mientras esté limitado á la insercion de documentos oficiales y de anuncios, los Boletines de los ministerios, los oficiales de las provincias, los eclesiásticos de los prelados del reino, que sólo publiquen decisiones y documentos diocesanos, ni los escritos pastorales.

Contra los delitos que se cometieren en los impresos mencionados en este artículo, se procederá con arreglo á lo que determinan las leyes sobre responsabilidad de los funcionarios públicos y las demás vigentes en el reino, sin perjuicio de la accion penal que corresponda contra los particulares que resulten culpables de dichos delitos, y de la facultad del Gobierno para suspender ó suprimir los impresos de que trata este artículo.

TITULO IV.

De las penas.

Art. 22. Los delitos comprendidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del art. 16 de la presente ley, se castigarán suspendiendo la publi-

cacion del periódico por un plazo que no bajará de veinte días ni excederá de sesenta en los que vean la luz diariamente, ó por el tiempo necesario para publicar desde 20 á 60 números en los que salgan á luz en otros períodos.

Art. 23. Los delitos á que se refieren los números 8.º, 9.º, 40, 44, 42 y 43 del art. 46, los arts. 17 y 18 y el párrafo segundo del art. 20, se castigarán con la suspension del periódico por un plazo de quince á treinta días, ó de 15 á 30 números, segun sea diaria ó no la publicacion.

Art. 24. El periódico que sea castigado tres veces dentro del plazo de dos años con penas de las comprendidas en el art. 22, ó con las del 23, será suprimido y no podrá volver á publicarse.

Art. 25. En el caso del art. 18, el periódico que copie é inserte el artículo ó suelto denunciado, quedará sujeto á la misma pena que se imponga á éste; pero no será suprimido hasta la cuarta vez que sea castigado con penas de las comprendidas en el art. 22 y en el art. 23.

TITULO V.

Del quebrantamiento de condena y de las penas en que incurren los que la quebrantan.

Art. 26. Se quebranta la condena impuesta á un periódico:

- 1.º Si se publica antes de haberla extinguido.
- 2.º Si se publica no obstante haber sido suprimido.
- 3.º Si otro periódico sirve la suscripcion del suspendido.
- 4.º Si publicándose dos periódicos, y aprovechando ambos para la impresion la misma caja ó la mayor parte de ella, en caso de ser el uno condenado, sirve el otro la suscripcion de aquél.

Art. 27. Las penas que corresponden á los casos de quebrantamiento de condena contenidos en el artículo anterior, son las siguientes:

En el primer caso, el secuestro de la tirada y la suspension por otro plazo igual al de la condena.

En el segundo caso, el secuestro del periódico y la multa al fundador-propietario, ó al gerente en su caso, en cantidad de 1.000 pesetas.

En el tercer caso, la suspension del periódico que sirva la suscripcion del condenado, por un plazo igual al de éste.

En el cuarto caso, además del secuestro de la tirada, sufrirá el periódico una pena igual á la de suspension ó supresion que se haya impuesto á aquél cuya suscripcion cubra.

Art. 28. La denuncia por quebrantamiento de condena se formulará por el fiscal ante el Tribunal de imprenta, y producirá desde luego la suspension de la publicacion del periódico denunciado hasta que el Tribunal falle el juicio.

Art. 29. Las multas en que sea condenado el fundador-propietario del periódico, ó en su caso el gerente, por causa de quebrantamiento de condena, se harán efectivas por la via de apremio, y en caso de insolvencia, tendrá lugar la prision subsidiaria que establece el art. 50 del Código.

TITULO VI.

De los tribunales de imprenta.

Art. 30. Conocerá de todos los delitos de imprenta un tribunal compuesto de un presidente de Sala y dos magistrados de la Audiencia en cuyo territorio se publique el periódico, nombrados por el Gobierno.

Art. 31. Los magistrados que compongan el Tribunal de imprenta de Madrid disfrutarán sobre su sueldo la gratificación anual de 2.500 pesetas. Los que formen el Tribunal de Barcelona tendrán la gratificación anual de 2.000 pesetas.

Art. 32. El presidente y magistrados podrán ser recusados por las mismas causas que los demás magistrados de las Audiencias.

Art. 33. El escrito de recusacion se presentará al presidente del Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes á la notificación de la denuncia.

Art. 34. En la tramitacion de este incidente se estará á lo dispuesto en la legislación comun.

TITULO VII.

De los fiscales de imprenta.

Art. 35. En Madrid, en Barcelona y en cualquiera otra poblacion donde lo haga necesario el número de periódicos, habrá fiscales de imprenta nombrados por el Ministro de la Gobernacion.

Art. 36. Los fiscales de imprenta de Madrid, Barcelona y demás poblaciones á que se refiere el artículo anterior, serán letrados y tendrán la categoría y sueldo del fiscal de Audiencia de provincia.

Art. 37. Cuando el nombramiento del fiscal de imprenta recaiga en persona que no pertenezca al orden judicial ó fiscal, deberá ser precisamente el nombrado jefe de administracion civil y haber desempeñado cargos de esta categoría.

Art. 38. Uno de los abogados fiscales de la Audiencia, designado por el Ministerio de la Gobernacion, de acuerdo con el de Gracia y Justicia, suplirá al fiscal de imprenta en ausencias y enfermedades. Podrá tambien nombrarse un abogado fiscal especial para Madrid.

Los auxiliares que la fiscalía de imprenta necesite habrán de ser letrados; y su nombramiento, así como el de los demás empleados subalternos, se hará por el Ministerio de la Gobernacion.

Los gastos que por personal y material exija la fiscalía de imprenta de Madrid, de Barcelona y otros puntos, y la gratificación de los magistrados á que se refiere el art. 31, se consignarán en el presupuesto del ministerio de la Gobernacion.

Art. 39. En las capitales de provincia, no comprendidas en el art. 35, donde haya Audiencia, desempeñará el cargo de fiscal de imprenta el teniente fiscal ó un abogado fiscal designado por el ministro de la Gobernacion, de acuerdo con el de Gracia y Justicia.

Art. 40. En todos los partidos judiciales desempeñará aquel cargo el promotor fiscal, y en las capitales donde hubiere más de uno, turnarán.

Art. 41. Todas las acciones por delitos de imprenta serán ejercidas por el fiscal especial.

Art. 42. Los fiscales de imprenta tendrán la obligacion de dar conocimiento á los fiscales de sus respectivas Audiencias de los delitos que á su juicio se cometan por medio de los periódicos y no sean de los comprendidos y penados por esta ley especial. Al efecto acompañarán, con la comunicacion que á los fiscales de Audiencia dirijan, un número del periódico en que el delito se cometa.

TITULO VIII.

Del enjuiciamiento.

Art. 43. La accion penal para perseguir ante los tribunales los delitos de imprenta prescribe á los ocho dias de la publicacion del impreso.

Art. 44. En el término fijado en el artículo anterior, el fiscal de imprenta procederá á la denuncia del periódico que haya infringido las disposiciones de la presente ley, ordenando, si lo juzga oportuno, el secuestro de los ejemplares del número denunciado, y poniéndolo en conocimiento del gobernador de la provincia para que lo lleve á cabo.

El fiscal de imprenta de Madrid se dirigirá con este objeto al ministro de la Gobernacion y al director general de correos y telégrafos, que dictarán las disposiciones convenientes para que el secuestro y detencion del periódico se verifique.

Art. 45. Inmediatamente que se presente la denuncia ante el Tribunal de imprenta, se pondrá en conocimiento de los directores de los demás periódicos que se publiquen en la localidad para que se abstengan de reproducirlo.

Art. 46. La denuncia fiscal contendrá las circunstancias siguientes:

1.^a Título del periódico.

2.^a Nombre y domicilio del fundador-propietario, ó en su caso, del gerente.

3.^a Naturaleza del delito, citando el artículo ó suelto que lo constituye y el artículo de la ley en que se halla comprendido.

Art. 47. Presentada la denuncia en el término legal, el Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, señalará dia para la vista, que no podrá verificarse antes del quinto dia, ni despues del octavo.

En la misma providencia se ordenará la citacion y emplazamiento, debiendo hacerse la notificacion del señalamiento al fundador-propietario del periódico, ó en su caso al gerente, con antelacion por lo ménos de cuarenta y ocho horas al señalado para la vista.

Art. 48. El emplazado podrá comparecer por sí ó por medio de procurador con poder bastante, y asistido ó no de letrado, segun su voluntad.

Art. 49. El Tribunal de imprenta se reunirá en el dia señalado para celebrar vista; este acto será público, á no ser que el Tribunal decida lo contrario, por exigirlo así causas especiales.

Art. 50. En el acto de la vista dará cuenta el secretario de la sala ó relator de las actuaciones practicadas; acusará el fiscal y defenderá el periódico un letrado en ejercicio del respectivo colegio ó de fuera, con tal que se halle habilitado en la forma prescrita por las disposiciones vigentes. La vista se verificará aunque no asista el defensor del periódico.

Art. 51. Terminada la vista, el Tribunal dictará el fallo, que se publicará en la audiencia inmediata; si el periódico fuera condenado, se impondrán las costas al periódico; si absuelto, se declararán de oficio.

Art. 52. Formará sentencia el voto de la mayoría: si sobre la aplicacion de la pena ú otro punto en que quepa diversidad de pareceres no hubiese mayoría, se estará al voto más favorable al periódico denunciado.

Art. 53. Cuando fuesen denunciados vários periódicos por la insercion de un mismo escrito, corresponderá el conocimiento y fallo del asunto al tribunal de imprenta ante quien primero se hubiere entablado la denuncia.

Los efectos de la sentencia serán iguales para todos los periódicos denunciados.

Art. 54. Cuando del procese resultase que se ha cometido alguno de los

delitos no comprendidos en esta ley, y si en el Código penal vigente, el Tribunal de imprenta mandará pasar los autos al juez de primera instancia para su continuacion y para la aplicacion de la pena que corresponda conforme á las leyes comunes.

Art. 55. Si el periódico fuese condenado, se inutilizará la edicion sequestrada; si absuelto, se devolverá al fundador-propietario.

Art. 56. Contra los fallos del Tribunal de imprenta condenando el impreso, no habrá recurso alguno.

Procederá, sin embargo, el de casacion en los casos siguientes:

1.º Cuando se funde en la infraccion de ley á que se refiere el art. 799 de la de Enjuiciamiento criminal.

2.º Cuando se funde en infraccion del procedimiento señalado en esta ley para los delitos de imprenta.

3.º Cuando se funde en los casos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del art. 804 de la citada ley de Enjuiciamiento criminal.

Para que pueda resolverse con seguridad sobre las cuestiones á que dé lugar el caso 2.º de dicho artículo, así la acusacion como la defensa precisarán en el acto de la vista los puntos que sean objeto de sus respectivos informes, y el secretario del Tribunal los consignará fielmente en el acto de la vista.

4.º Cuando se funde en que la sentencia no impone al procesado la pena que corresponda segun esta ley al delito.

Art. 57. El recurso de casacion se interpondrá en el término improvable de tres dias ante el presidente del Tribunal sentenciador, y para ante la Sala segunda del Tribunal Supremo; al deducirlo, el fundador-propietario del periódico acreditará haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en una de sus sucursales, la cantidad de 500 pesetas.

Art. 58. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el presidente del Tribunal de imprenta remitirá los autos al Tribunal Supremo, citando y emplazando á las partes para que comparezcan en el término de ocho dias si el proceso se hubiese instruido en la Península, de quince si en las islas Baleares, y de un mes si en las islas Canarias.

Art. 59. El Tribunal Supremo comunicará los autos á las partes por su órden para instruccion por término de tres dias á cada una.

Art. 60. Instruidas las partes, se señalará dia para la vista, que no podrá ser anterior al quinto, ni posterior al octavo.

Art. 61. La vista se verificará en la forma prescrita en los artículos 49 y 50, y una vez terminada, se dictará sentencia declarando haber ó no lugar al recurso; la sentencia se publicará en la audiencia inmediata.

Art. 62. Si se estimase el recurso de casacion por quebrantamiento de forma, el Tribunal Supremo determinará al propio tiempo el estado á que han de reponerse los autos. Si se casare la sentencia por infraccion de esta ley en la aplicacion de la pena, se impondrá en el fallo de casacion la que sea procedente.

Art. 63. La declaracion de no haber lugar al recurso de casacion lleva consigo la condena en las costas al recurrente y la pérdida del depósito. Si el recurso que se desestime hubiese sido interpuesto por el fiscal, se satisfarán las costas con cargo al fondo que tiene este objeto especial.

Art. 64. Si ocurriese que un periódico fuese denunciado teniendo interpuesto recurso de casacion contra condena anterior que determinase la supresion, siendo desechado el recurso antes del dia señalado para la vista de la denuncia, ésta se suspenderá á peticion del fiscal, que promoverá el sobreseimiento del Tribunal y que se expida certificacion de las sentencias condenatorias que determinen la supresion del periódico, para que el ministro de la Gobernacion la decrete en forma.

Art. 65. La publicacion de las defensas pronunciadas en los juicios de imprenta estará sujeta á las prescripciones de la presente ley.

Art. 66. En las poblaciones en que no haya audiencia ni juzgado, el alcalde remitirá por el primer correo al fiscal de imprenta del territorio un ejemplar del periódico que á su juicio haya infringido lo dispuesto en la presente ley.

En estos casos, el término para formalizar la denuncia comenzará á correr desde que el fiscal reciba el número denunciado, y el del emplazamiento se prolongará un día por cada 50 kilómetros de distancia que medien entre el lugar donde se publique el periódico y la residencia del Tribunal de imprenta.

TÍTULO IX.

Del libro y del folleto.

Art. 67. La publicación del libro no exigirá otro requisito que el del pie de imprenta á que se refiere el art. 3.º

Art. 68. Los delitos que en el libro se cometan quedarán sujetos al procedimiento comun y á la sanción que para ellos señale el Código penal.

Art. 69. Los folletos no políticos solo necesitarán para publicarse que se dé conocimiento de su publicación al gobernador de la provincia en la capital, y al alcalde en las demás poblaciones.

Art. 70. Los folletos políticos necesitarán además, que quien haya de publicarlos, justifique ante dichas autoridades su personalidad como ciudadano español mayor de edad.

Art. 71. Esta justificación deberá hacerse en el plazo de diez dias, y la autoridad resolverá en el de cinco si está ó no suficientemente acreditada.

Art. 72. En caso negativo, el que intente publicar el folleto político podrá en el término de cinco dias recurrir en alzada del alcalde ante el gobernador, el cual resolverá dentro de otros ocho.

La apelación de esta resolución se interpondrá en el plazo de cinco dias para ante el ministro de la Gobernación, el cual resolverá definitivamente dentro de otros ocho dias.

Art. 73. Los delitos que puedan cometerse en el folleto político, si son de los comprendidos en el título 3.º de esta ley, serán juzgados por el tribunal de imprenta, previa denuncia del fiscal; pero á la pena de suspensión ó supresión que establece el título 4.º se substituirá una multa de 250 á 4.000 pesetas para los delitos comprendidos en el art. 46, y de 100 á 500 pesetas para los comprendidos en el art. 48 y en el párrafo segundo del art. 20.

Art. 74. En el caso de insolvencia tendrá lugar la prision subsidiaria de que habla el art. 50 del Código penal.

Art. 75. Serán castigados con arreglo á dicho Código, y por la jurisdicción ordinaria, los delitos que se cometan por medio del folleto político y no estén comprendidos en la presente ley.

TÍTULO X.

De las hojas sueltas y carteles.

Art. 76. La publicación de hojas sueltas y carteles no podrá hacerse sin el previo permiso de la autoridad.

De la negativa de ésta podrá apelarse en los términos que establece el artículo 74.

Art. 77. El suplemento de cualquier periódico que se publique separadamente de él se considerará como hoja suelta.

TÍTULO XI.

Infracciones de policía.

Art. 78. Son infracciones de policía:

1.º La publicación de todo impreso, sea cualquiera su clase, antes de haberse llenado los requisitos que para cada una de ellas señala esta ley.

2.º La publicación de cualquier periódico político después de haber dejado trascurrir sin publicarse ocho días si es diario, y cinco números si no lo es.

3.º La inserción de artículos y noticias políticas en periódicos ó folletos que no tengan ese carácter.

Art. 79. La contravención á estas disposiciones se castigará por el gobernador ó por el alcalde, según la localidad donde el impreso se publique, con el secuestro de la tirada y la multa de 50 á 1.000 pesetas al dueño de la imprenta ó del establecimiento tipográfico en que se hubiese hecho la impresión.

En caso de insolvencia del multado, tendrá lugar la prisión subsidiaria que establece el art. 50 del Código penal, sin otra modificación que la de sufrir el insolvente un día de prisión por cada 10 pesetas de multa.

Art. 80. Cometén infracción de policía también los fundadores-proprietarios ó gerentes de un periódico que dejen de enviar, dos horas antes de su repartición, los ejemplares del mismo que expresa el art. 8.º

Art. 81. De igual modo la cometen los fundadores-proprietarios, ó en su caso los gerentes, que condenados en juicio verbal á insertar la sentencia y la comunicación á que se refiere el art. 12, dejen de hacerlo.

En este caso, y en el del artículo anterior, incurrirá el fundador-proprietario ó el gerente en la multa de 25 á 500 pesetas, que se le exigirá por las mismas autoridades que expresa el art. 79, y con la prisión subsidiaria si resultare insolvente.

Art. 82. Nadie podrá vender por las calles y plazas, en las estaciones de los ferro-carriles, ni en los establecimientos públicos, impresos de ninguna especie sin licencia de las autoridades gubernativas. Los que contravengan de algun modo á este precepto, serán castigados con la pena de arresto de uno á diez días, y multa de 5 á 50 pesetas, que señala el caso segundo del art. 586 del Código penal.

Art. 83. Los repartidores de los periódicos que sirvan las suscripciones de los mismos por las casas, deberán llevar siempre consigo un documento firmado por los directores, en que se haga constar que están autorizados para la repartición. Estos documentos se expedirán cada mes y no servirán para el siguiente. Los que contravengan de cualquier modo á este precepto, serán castigados con multa de 5 á 25 pesetas y reprensión, con arreglo al art. 589 del Código penal.

Art. 84. Serán igualmente castigados con la multa que señala el caso cuarto del art. 589 del Código penal, los que vendan á voces en lugares públicos, ó sobre la vía pública, impresos cuya venta no esté permitida especialmente, así como los que de cualquier modo alteren el título del impreso bajo el cual esté autorizada su venta.

Art. 85. Los insolventes quedarán sujetos á la responsabilidad personal subsidiaria que establece el art. 50 del Código penal.

Art. 86. Habrá en los gobiernos de provincia ó en las alcaldías un re-

gistro donde consten con toda exactitud las licencias concedidas para repartir impresos, y el nombre, profesion y domicilio de las personas de cualquier edad y sexo á quienes se concedan. A los menores irresponsables segun el Código penal no se les concederá semejante permiso sino á solicitud de persona mayor de edad, que quedará en tal caso responsable de las trasgresiones que aquéllos cometan.

Toda trasgresion dará derecho para retirar temporal ó definitivamente las licencias.

Art. 87. La accion de la autoridad contra las infracciones de policia castigadas en esta ley, espira á los ocho dias de haber cometido el hecho que la produce sin haberla intentado.

Art. 88. La imposicion y exaccion de las multas se entiende sin perjuicio del procedimiento que corresponda por los delitos que hayan podido cometerse en los impresos que ocasionaron la falta.

TITULO XII.

De los dibujos, grabados, litografias, fotografias, etc.

Art. 89. Ningun dibujo, litografia, fotografia, grabado, estampa, medalla, viñeta, emblemas y cualquiera otra produccion de la misma indole, ya apareciesen solas, ó ya en el cuerpo de algun impreso, podrán anunciarse, exhibirse, venderse ó publicarse sin el permiso previo del gobernador, ó del alcalde donde no residiese el gobernador.

Este permiso exime de toda responsabilidad á los que hubiesen de incurrir en ella por el contenido de dichos objetos, y no es necesario para los grabados y litografias que forman parte de las publicaciones literarias, científicas ó artísticas que no sean diarias.

Art. 90. El anuncio, venta, exhibicion ó publicacion sin el permiso correspondiente de cualquiera de las producciones á que se refiere el artículo anterior, constituye caso de clandestinidad y sujeta los responsables á la jurisdiccion ordinaria y á la pena que señala el art. 203 del Código penal.

Art. 91. En cualquier tiempo que aparezca que en alguna de las mencionadas producciones publicadas con el permiso competente se ha cometido cualquiera de los delitos definidos en esta ley, se prohibirá su circulacion y recogerán todos los ejemplares que pudiesen ser habidos, salvo el derecho de los interesados á reclamar daños y perjuicios contra la autoridad que haya dado el permiso.

Art. 92. Contra las resoluciones del alcalde podrán recurrir los interesados al gobernador, y contra las de esta autoridad al ministro de la Gobernacion.

TITULO XIII.

De los impresos que se publiquen en el extranjero.

Art. 93. Queda autorizado el gobierno para prohibir la introduccion y circulacion en territorio español de cualquier impreso de los que son objeto de esta ley, que se publique en el extranjero.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 94. El ministro de la Gobernacion expedirá los reglamentos relativos á la policia de los ramos de imprenta, libreria, anuncio, venta y distribucion de los impresos, y el reglamento y las instrucciones convenientes para la ejecucion de la presente ley en todas sus partes.

Art. 95. Los periódicos políticos que se publican en la actualidad deberán llenar los requisitos que exige el art. 4.º, en el plazo de sesenta dias.

Art. 96. Quedan derogadas las disposiciones anteriores sobre imprenta que se opongan á la presente ley.

Y el Senado, acompañando el expediente, lo pasa al Congreso de los Diputados para los efectos correspondientes.

Palacio del Senado 8 de Abril de 1878.—El marqués de Barzanallana, presidente.—El conde de la Romera, senador secretario.—El Sr. de Rubianes, senador secretario.

El presente documento es el resultado de un estudio que se ha realizado en el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, con el fin de proporcionar una visión general de la situación actual de la enseñanza de la Historia en el país. El estudio se ha basado en una revisión de la literatura especializada, en la consulta de expertos en el campo y en la realización de encuestas a profesores y estudiantes de Historia. Los resultados del estudio indican que la enseñanza de la Historia en Chile ha experimentado un proceso de transformación importante en los últimos años, pasando de una enseñanza tradicional y memorística a una enseñanza más crítica y participativa. Sin embargo, persisten algunos problemas que deben ser abordados para mejorar la calidad de la enseñanza de la Historia. Entre ellos se encuentran la falta de recursos materiales y humanos, la necesidad de actualizar los contenidos y métodos de enseñanza, y la necesidad de fortalecer la formación de los profesores de Historia. En conclusión, la enseñanza de la Historia en Chile ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos propuestos.

	Páginas
Idem de piratería.....	60
Título II.—Delitos contra la Constitución.....	60
Idem contra la forma de gobierno y contra los derechos individuales cometidos por los particulares.....	62
Idem por los funcionarios públicos.....	64
Delitos religiosos.....	67
Título III.—Delitos contra el orden público, rebelion y sedicion.....	70
Disposiciones de la ley de orden público.....	73
Atentados, desacatos y otros desórdenes.....	77
Título IV.—De las falsedades.—Falsificacion de firmas, sellos y marcas.....	80
Falsificacion de moneda, billetes, documentos de crédito, papel sellado y otros efectos timbrados.....	81
Falsificacion de documentos.....	82
Ocultacion de bienes.—Falso testimonio.—Acusacion y denuncia falsas.....	84
Usurpacion de funciones, calidad y títulos, y uso indebido de nombre, trages, insignias y condecoraciones.....	86
Título V.—Inhumacion y violacion de sepulturas.—Delitos contra la salud pública.....	86
Título VI.—De los juegos y rifas.....	87
Título VII.—Delitos de los empleados públicos cometidos en el ejercicio de sus cargos.....	89
Infidelidad en la custodia de presos.....	90
Violacion de secretos.—Desobediencia y denegacion de auxilio... Anticipacion, prolongacion y abandono de funciones públicas.—Usurpacion de atribuciones y nombramientos ilegales.....	91
Abusos contra la honestidad.....	92
Cobhecho, fraudes y exacciones ilegales.—Malversacion de caudales públicos.....	93
Negociaciones prohibidas á los empleados.....	94
Título VIII.—Delitos contra las personas.—Parricidio.....	94
Asesinato.—Homicidio.—Suicidio.....	96
Infanticidio.....	98
Aborto.—Lesiones.....	99
Del duelo.....	101
Título IX.—Delitos contra la honestidad.—Adulterio.....	102
Violacion.....	103
Delitos de escándalo público.....	104
Estupro y corrupcion de menores.....	104
Del rapto.....	106
Título X.—Delitos contra el honor.—Calumnia é injuria.....	107
Título XI.—Delitos contra el estado civil de las personas.—Suposicion de partos.—Usurpacion de estado civil.—Matrimonios ilegales.....	109
Título XII.—Delitos contra la libertad y seguridad de las personas.—Detenciones ilegales.....	110
Sustraccion de menores y abandono de niños.....	111
Allanamiento de morada.....	112
Amenazas y coacciones.—Descubrimiento y revelacion de secretos.....	113
Título XIII.—Delitos contra la propiedad.—Robos.—Secuestro de personas.....	114
Robos con fuerza en las cosas.....	116
Hurtos.—Caza y pesca punibles.—Hurtos cualificados.....	118

	Páginas
De la usurpacion.—Defraudaciones.....	121
De las estafas y otros engaños.....	122
Maquinaciones punibles para alterar el precio de las cosas.—Pres- tamos sobre prendas.....	124
Del incendio y otros estragos.....	124
Imprudencias punibles.....	127

LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO.

De las faltas.....	127
--------------------	-----

APENDICE.

Título II.—Decreto sobre contrabando y defraudacion.....	133
Título III.—De la persecucion del contrabando y defraudacion.	139
Sobre detencion, prision y cumplimiento de condenas de los mi- litares.....	142
Sobre ejecuciones de pena capital..	145
Interpretacion oficial del art. 11 de la Constitucion sobre toleran- cia religiosa.....	147
Ley de secuestros de personas.....	151
Sobre quebrantamiento de condenas.....	153
Proyecto de ley de imprenta.....	155

FIN.

Es tan íntima la relacion que existe entre la economía política y el derecho mercantil, que, más que para tratar expresamente de aquélla, expondremos á continuacion algunas ideas generales de la ciencia económica para que pueda comprenderse perfectamente la naturaleza especial de la materia del derecho mercantil. Las ideas del lucro, del precio, de la utilidad y del valor, deben adquirirse y estudiarse en su genuino sentido, antes de conocer las leyes que regulan el comercio en sus distintas manifestaciones. Y el contrato de cambio, que tan fundamental y preferente papel desempeña en la contratacion mercantil, no podria comprenderse bien, si antes no se estudiase bajo el aspecto de la economía política.

Por eso hemos creído conveniente manifestar á nuestros lectores que sólo á manera de introduccion al estudio elemental del derecho mercantil, y no como tratado especial, exponemos á continuacion algunas

IDEAS GENERALES DE ECONOMÍA POLÍTICA.

De la riqueza y su produccion.—Valor.—Utilidad.—Precio.—Trabajo.—Capital.

¿Qué es economía política?—La ciencia que trata de la produccion, circulacion, distribucion y consumo de la riqueza. Varios autores alemanes la dividen en pura y aplicada. Aquélla tiene por objeto servir de guia á los gobiernos, y la segunda es la que, adoptada por éstos, tiende á mejorar la situacion económica de los pueblos. Conócese tambien con los nombres de crematística, cataláctica, economía nacional y social.

¿Qué ciencias tienen más puntos de contacto con la economía política?—La moral, porque lo lícito y lo honesto se concilian con lo útil; el derecho, porque le ilustra y aconseja, y prepara las reformas de algunas materias que, como la propiedad, las sucesiones y otras, no pueden eludir la influencia de la economía; la política, por las cuestiones financieras que constituyen su principal elemento; la administracion, porque no puede dictar disposiciones útiles sin consultar los principios económicos; para la agricultura, la industria, el comercio, etc.; la historia, porque en este arsenal de hechos encuentra la comprobacion de sus principios y el resultado de la experiencia; la estadística, que, del mismo modo y por los mismos medios, refleja los hechos de la vida social.

¿Qué utilidad é importancia tiene la ciencia económica?—Su definicion la hace conocer desde luego. Siendo su objeto la creacion y movimiento de

la riqueza, sin la cual los pueblos no pueden existir, y con la que aumentan su prosperidad y comodidades, claro está que es de suma importancia su estudio y de gran utilidad su aplicacion.

¿Qué es *riqueza*?—La suma de cosas útiles al hombre, sean ó no apropiables, ó «una sustancia que tiene valor y utilidad». El conjunto de cosas útiles no apreciables, como el *aire*, el *calor*, la *fertilidad* de las tierras, etc., recibe el nombre de *riqueza natural*, por la espontaneidad de su produccion. Al conjunto de cosas útiles que son producto del trabajo del hombre, denominase *riqueza artificial*. Tambien se divide la riqueza en *materias* é *inmateriales*, segun que es corpórea ó incorpórea; *apreciable* é *inapreciable*, *individual* y *colectiva*, gratuita y onerosa, cuyas palabras explican la idea que contienen bien claramente.

¿Constituyen el oro y la plata la exclusiva riqueza de las naciones?—No: forman parte de su riqueza nacional, como cosas útiles; pero no son su única riqueza. En el siglo xvii. nuestros antepasados desconocieron esta verdad, y embriagados con la abundancia de los metales preciosos venidos de América, abandonaron la agricultura y la industria, y los artículos extranjeros consumieron al poco tiempo tanta riqueza ficticia, dejando á aquéllos sumidos en la miseria.

¿Es la tierra la única fuente de todas las riquezas?—No, porque la *industria* produce riqueza con la misma abundancia que la *agricultura*, medio de explotacion de la tierra.

¿Cuál es, pues, la verdadera causa productura de la riqueza?—El trabajo, ayudado por las fuerzas naturales.

¿Qué es *utilidad*?—La propiedad que tienen ciertas cosas de satisfacer las necesidades de la vida. Denota una relacion de carácter variable entre el hombre y las cosas, que aumenta ó disminuye segun que responden á mayor ó menor número de aquellas necesidades. La *utilidad*, entre otras calificaciones que suele dársele, puede ser *absoluta* ó *relativa*; *general* y *especial*; *mediata* é *inmediata*.

¿Qué necesidades tiene el hombre?—*Físicas*, *morales* é *intelectuales*. Son *físicas* las impuestas por la naturaleza, como el alimento, el vestido y la habitacion; son *morales* las debidas al progreso social, como los caminos, canales y puertos, y son *intelectuales* las que dimanen de la condicion y estado de las personas, como los libros para el hombre de ciencia y las herramientas para el obrero. La division de necesidades *verdaderas* y *ficticias* no es admisible, porque todas son necesidades á los ojos de la *economía*. Otros las dividen en *naturales* y *artificiales*.

¿Es lo mismo *valor* que *utilidad*?—No: la *utilidad* supone, como hemos dicho, relacion entre el hombre y las cosas; y el *valor* la supone entre sí mismas ó entre hechos, ó entre éstos y aquéllas. La *utilidad* no indica siempre *valor*; el *valor* presupone siempre *utilidad*. Aquél es proporcional á ésta, considerado en concreto.

¿Qué es, pues, el *valor*?—La propiedad que tienen ciertas cosas de proporcionar otras en cambio. La *oferta* y la *demand*a determinan el *valor*. Puede ser *directo* ó *indirecto*, en *uso* ó en *cambio*. Como no hay dos valores iguales constantes y fijos, no puede tenerse la medida del valor, ni aun en el *dinero*, elemento tambien variable en el mercado.

¿Qué es la *demand*a y la *oferta*?—*Demand*a es el deseo de adquirir una cosa combinado con el medio de satisfacerlo. *Oferta* es la cantidad de mercancías que existen en el mercado para satisfaccion de las necesidades de los consumidores que las *demand*an.

¿Qué efectos produce el *valor* de las cosas?—Importantes y trascendentes. Cuando media proporcion igual entre la *oferta* y la *demand*a, el *valor* se mantiene sin alteracion. Cuando la *demand*a es mayor que la *oferta*, el *valor* sube; y en el caso contrario, baja el *valor*.

¿Qué es *precio*?—En su sentido económico es «la suma de valores que

nos cuesta la posesion de un objeto extraño.» Si el valor que se entrega consiste en moneda, el *precio* es el *valor* de la cosa, expresado en dinero. Recibe el nombre de *precio necesario* al que está determinado por los gastos de produccion, á que se llama tambien *precio natural*. Llámase *corriente* ó *vulgar* el que tienen las cosas en el mercado, que cuando es sabido se llama *fijo*; *nominal*, á la cantidad absoluta de dinero que nos cuesta una cosa; *real*, al conjunto de valores representados por la cantidad del *precio nominal*; y *precio justo* ó *medio*, al que reina en el mercado cuando no hay carestía ni baratura.

¿A qué se dá el nombre de *produccion*?—Al acto por el que, á medio del trabajo, se hace útil lo que es inútil, ó se aumenta la utilidad de lo que ya era útil. Llámense *primeras materias* á las cosas á que se aplica el acto de la produccion, y al resultado ó efecto de la *produccion* se denomina *producto*. El importe de los valores invertidos en la produccion, sin descuento de los gastos causados en la misma, recibe el nombre de *producto bruto* ó *total*; y de *neto* ó *liquido* la suma de los mismos valores, con descuento del importe de dichos gastos.

¿Cuáles son los elementos de la *produccion*?—El hombre representado por el *trabajo*, el *capital* y la *naturaleza*. Debe haber tambien *sugeto*, *objeto* ó *instrumentos* de produccion.

¿Qué es *trabajo*?—«La aplicacion de las fuerzas del hombre á la materia para modificarla y acomodarla á los diferentes usos de la vida.» En más lata acepcion es «la accion voluntaria de las facultades humanas.» El clima, las costumbres, la educacion, la necesidad y la pronta y justa recompensa, son causas que halagan el trabajo, lo aumentan y lo perfeccionan, especialmente si á ellas va unida la participacion del trabajador en la ganancia. Puede ser *material* ó *intelectual*, *productivo* é *improductivo*.

¿Qué resultados produce el *trabajo*?—La modificacion conveniente de los objetos á que se aplica, la mejora de la condicion moral del hombre y algunas utilidades del momento, que desaparecen tan pronto como desaparece el dolor que trata de evitarse ó el placer que se busca. La libertad del trabajo aumenta éste y fomenta la riqueza nacional. Los medios *preventivos* y *represivos* de los gobiernos, por escogitados que sean, nunca llegan á inventar y corregir lo que es hijo del interés individual que, acostumbrado á esta especie de tutela administrativa, se entrega á la indolencia, y espera del gobierno el remedio, nunca llegado, de sus males y privaciones.

¿Qué es *capital*?—La suma de valores existentes destinados á la produccion juntamente con el trabajo. Son, pues, *capital* las tierras con sus mejoramientos, los artefactos de las industrias, los edificios, los materiales, etc. Llámase *nacional* al conjunto de los capitales individuales.

¿Qué divisiones se hacen del *capital*?—Dividese en *productivo* é *improductivo*, *fijo* y *circulante*, *material* é *inmaterial*, y puede ser *privado*, *municipal*, *provincial* y *nacional*. La primera division la repugna la *economía*, porque quiere que todo capital sea *productivo*. Llámase *capital fijo* á los valores que representan las máquinas, edificios y demás enseres que se consumen paulatinamente, y *circulante* al que se incorpora al producto para no volver á presentarse en su primitivo estado. Dáse el nombre de *inmaterial* ó *personal*, á los conocimientos científicos, al talento, á la habilidad, á la experiencia, al crédito, etc., y de *material* ó *real*, á todo lo que es elemento tangible de produccion.

¿Qual es el origen del *capital*?—Las economías. Las primeras materias, las auxiliares, las subsistencias y las mercancías, son elementos poderosos para formar y aumentar el capital, pero no son su verdadero y único origen.

¿El dinero es *capital*?—Las buenas doctrinas económicas no le dan este

carácter, porque no contribuye á la produccion si no se trasforma en máquinas, material, edificios, etc.

¿Cuáles son los *agentes naturales*?—Las fuerzas de la naturaleza, como el aire, el agua, el calor, la electricidad, etc.

Para facilitar el trabajo, el hombre ha inventado ciertos instrumentos que, aplicados á la produccion, reciben el nombre de *máquinas y herramientas*. Con ellos consigue, además de aumento de fuerzas y economía de tiempo, abaratar y perfeccionar los productos, facilitando el consumo; no siendo cierto que la inercia, la ociosidad de los individuos y la abundancia excesiva de los productos, inconvenientes que se supone son debidos á las máquinas, sean mayores males que las incalculables ventajas que proporcionan.

Industria.—Comercio.—Gremios.—Privilegios de invencion.—Aduanas.—Colonias.—Poblacion.—Emigracion.

¿Qué es *industria*?—El arte que tiene por objeto la produccion. Comenzó constituyendo una de las ocupaciones intimas de la familia, y fué poco á poco ensanchando su esfera de accion hasta llegar á ser la ocupacion principal de clases y pueblos enteros. Puede ser ejercida en grandes ó pequeñas proporciones. La *industria en grande* proporciona considerables ganancias, pero requiere gruesos capitales y considerable número de brazos. La *pequeña industria* tiene pocas ventajas y no acarrea buenas economías; pero no tropieza con los anteriores inconvenientes.

¿Cómo se divide la *industria*?—En *agricola, fabril, comercial y extractiva*. La primera se ejerce en los vegetales y animales; la segunda crea artículos que la vida social exige; la tercera se ejerce en el cambio, los trasportes y demás operaciones mercantiles, y la cuarta tiene por objeto la extraccion de varios objetos útiles que se encuentran en la tierra y el mar, como los metales preciosos y los animales que son objeto de caza y pesca. Comprende, pues, esta industria los grandes ramos de la *minería*, la *caza* y la *pesca*, cuya riqueza y ventajas son inmensas.

¿Cuál de estas industrias debe ser preferida?—No puede determinarse la preferencia entre ellas. Todas contribuyen á la *produccion*, y todas son de suma importancia. La *agricola* ocupa más brazos y dá más productos; asegura el porvenir de las familias de un modo más perpétuo é imperecedero, mas su produccion es lenta y no progresiva; requiere propiedad y libertad, y excluye la proteccion y el privilegio, porque las prohibiciones y los reglamentos administrativos que no se limitan á garantizar aquellas exigencias, ahogan sus aspiraciones é inutilizan los esfuerzos del interés individual, verdadero juez de las necesidades y fuerzas de la tierra.

¿Cuál de los sistemas de cultivo es el preferido?—El cultivo *en grande* mejora los campos, puede emplear las máquinas, enajenar, dividir el trabajo, etc., ejecutar, en fin, todas las operaciones que consiente y soporta un gran capital. El *pequeño cultivo* facilita bienes á mayor número de personas; escatima las cosechas y los palmos de terreno; puede armonizarse con el ejercicio de otras industrias y fomenta la moralidad de las familias. La regla, pues, más seguida es que debe emplearse el uno ó el otro, segun la naturaleza del terreno y las fuerzas del cultivador, que siempre debe estar al frente de los trabajos agrícolas.

¿Qué condiciones debe tener el *trabajo* para ser productivo?—Debe ser *libre, espontáneo, voluntario* y bien *retribuido*. Por eso el trabajo del esclavo no es tan productivo como el del hombre libre. Cuanto mayor sea la li-

bertad del trabajo del cultivador, si tiene pleno dominio de la tierra que cultiva, mayores serán los productos. Hé aquí por qué la *economía* aboga por la consolidación de los dominios, aún á pretexto de la redención de las cargas, y la historia nos enseña las escasas producciones del vasallo solariego y del antiguo siervo de la gleba, que á la falta de libertad, unían la carencia del dominio sobre el terreno que labraban.

¿Cuáles son los contratos que se celebran comunmente en la *industria agrícola*?—El de *aparcería*, el *arrendamiento* y el *enfiteusis* (1). El primero consiste en labrar la tierra de otro, mediante el pago de una porción determinada de sus productos. El segundo, llamado también *colonato* ó *colonia*, se diferencia del anterior en que se paga una pensión ó cánón anual, perpetua ó temporalmente. El tercero es muy semejante á éste, pero concede más derechos al enfiteuticario, que puede disponer de las tierras casi como dueño.

¿Cuándo se dice que las tierras están *amortizadas*?—Cuando existen en poder de personas á quienes, si les es lícito adquirir, les está prohibido enajenar, cuya prohibición es el principal elemento de la amortización. Puede ser *civil* ó *eclesiástica*, según que los fundadores sean legos ó comunidades, establecimientos y fundaciones pías.

¿Es conveniente la *amortización*?—La *economía política* la condena, porque imposibilita el cambio, germen inagotable de riquezas; segrega de la circulación los bienes amortizados; acaricia la ociosidad y favorece el indolente abandono de los edificios. Si alguna disculpa puede alegarse en su favor, es tan sólo en los grandes y extensos vínculos y mayorazgos que fueron un elemento político para la perpetuidad de la aristocracia del Estado.

¿Cuándo nació la *industria fabril*?—Al mismo tiempo que la *agrícola*, y fué sucesivamente creciendo en resultados, hasta que la división del trabajo hizo necesaria su separación. Sus ventajas son también de grande importancia. Crea la inmensidad de variados artículos que las necesidades del público demandan; ofrece ancho campo al *capital* y al *trabajo*; facilita los cambios; corrige las costumbres y ejerce la actividad del hombre. No impiden su producción el clima y la naturaleza del terreno. Asentada en las grandes poblaciones, allí aumenta el foco de consumo, que se aprovecha de sus primeros artículos. Hoy constituye la vida de los pueblos libres y es la fuente abundante de su riqueza y bienestar.

¿Qué beneficio reportan los *gremios* á la *industria fabril*?—Cuando las guerras civiles despedazan y asolan una nación, contribuyen los gremios á resistir los efectos prácticos y sensibles de los embates, conservando la industria que ejercen los asociados. En los demás casos son perjudiciales al adelantamiento de las artes y oficios, porque el *trabajo* reglamentado no puede satisfacer las exigencias del consumidor, ni los diferentes gustos y caprichos que presenta y exige la demanda.

¿Qué eran los *gremios*?—Comunidades de personas que ejercían un mismo arte ú oficio, favorecidas por privilegios y regidas por reglamentos. Nacieron á fines del siglo XII ó principios del XIII, y llegaron á generalizarse tanto, que casi todas las industrias fueron objeto de estas asociaciones reglamentadas. En España desaparecieron definitivamente en 1834.

¿Son justos los privilegios de *invención* y *perfección*?—Sí, porque el *trabajo* exige recompensa, y el *trabajo* recompensado excita su misma actividad. Además, todo el que inventa ó perfecciona debe ser el propietario de su perfección ó invento, pues en otro caso no encontraría sus esfuerzos re-

(1) En Galicia y Asturias es muy frecuente el contrato *foral*, y en Cataluña el llamado á *rabasa morta*. (Véase el *Tratado de Derecho civil*.)

munerados: otros opinan que son injustos porque establecen un monopolio en perjuicio del consumidor. Estos privilegios nacieron en Inglaterra en el siglo XVII y en España en 1826, y consisten en permitir que el inventor disfrute exclusivamente de las utilidades de su invento; pero no perpétuamente, lo cual redundaría en grave perjuicio del Estado. Duran cinco, diez y quince años (1).

¿Debe ser el gobierno fabricante?—No; tan lejos de producir ventajas su fabricación, perjudica á la industria privada, que no puede ofrecer sus artículos á precios tan bajos como aquélla. Consume más de lo que produce, y sólo redundan en beneficio de los operarios, que se cuidan más del salario que de la bondad de los artículos.

¿Qué importancia tiene la *industria mercantil*?—Es la intermediaria entre las demás y el *consumo*, acercando los productos al consumidor por medio de la *permuta* de valores por valores. Crece su importancia cuanto mayor es la libertad de las transacciones; y al lado de una *agricultura* poderosa y fecunda y de la *industria fabril* floreciente, constituye una arteria de riqueza nacional, que engrandece al pueblo que la ejerce, y contribuye al desarrollo progresivo de éste.

¿Qué es *comercio*?—La industria que tiene por objeto comprar para vender, á fin de conseguir alguna utilidad ó lucro. Es *interior* y *exterior*. El primero se limita á los habitantes de un mismo pueblo ó nación. El segundo se extiende á los extranjeros. El *interior* puede ser al *por mayor* y al *por menor*, segun que se practique en grandes ó pequeñas partidas. El *interior* requiere la libertad más amplia en la contratacion, la desaparicion de *portazgos* y *arbitrios municipales*, y la ausencia de *aduanas* de tierra, *alcabalas*, *tasas* y demás entorpecimientos. El *exterior* es de *consumo* cuando exporta los artículos nacionales ó importa los extranjeros, y es de *trasporte* cuando se ejerce entre naciones extranjeras exclusivamente. Tambien la libertad del comercio *exterior* aumenta considerablemente las fuerzas productivas de los estados y las ganancias resultado de su ejercicio. Acerca de la mayor ó menor libertad existen dos sistemas: el llamado *proteccionista* y el *libre-cambista*. Aquél demanda proteccion y reglamentacion oficial para el comercio. Este la rechaza como perjudicial, invocando tan sólo el interés individual ampliamente libre, como fuerza poderosa para su desarrollo. Aquél pide defensa para la industria nacional consistente en prohibir la entrada de los artículos extranjeros. Este, por el contrario, quiere que el mundo sea un mercado para todas las industrias, sin excepciones egoistas.

¿Qué males capitales trae el sistema *protector*?—Muchos, y principalmente los siguientes: la falta de libertad en el cambio; la pasion y la parcialidad del gobierno, y la privacion de los inmensos bienes económicos que reporta la division del trabajo. Enriquece á un pequeño número de personas, á pretexto de fomentar la industria nacional; origina y estimula el contrabando; paraliza las industrias en su orden y adelantamiento progresivo; mantiene la carestia y requiere el establecimiento de las *aduanas*.

¿Qué son *aduanas*?—Ciertas oficinas del Estado que tienen por objeto el cobro y recaudacion de los impuestos que pesan sobre las mercaderias que entran, salen ó pasan por las zonas que comprenden. Su origen viene del pueblo griego y romano. No debieran existir; pero ya que se consideran necesarias, deben sus aranceles gravar poco al consumidor, sus formalidades de registros, guías, etc., no molestar al comercio, y ser iguales para todas las importaciones, aboliéndose los derechos *diferenciales*.

¿A qué se da el nombre de *balanza de comercio*?—Al resultado de las ex-

(1) Sobre la naturaleza de la propiedad intelectual, puede consultarse lo que decimos en el *Tratado de Derecho civil*.

portaciones é importaciones anuales de la nacion. Es *favorable* cuando la exportacion supera á la importacion, y *adversa* cuando ésta es mayor que aquélla. La razon de esta diferencia consiste en que el *debe* y el *haber nacional* baja ó sube, y se compensa, cuando unas y otras dan un resultado de valores igual ó casi igual.

¿Cómo se combate esta teoria?—La *economia* demuestra que es viciosa, errónea y contraria á la verdad de los hechos. Es errónea, porque se funda en el error económico de creer que los metales preciosos son la única fuente de riqueza; é inexacta, porque no alcanza á comprender en sus registros todos los actos de exportacion é importacion, entre los cuales hay algunos que no pueden consignarse en aquéllos. La ciencia ha conseguido relegar á la historia económica este sistema.

¿Quiénes fueron los primeros fundadores de las *colonias*?—Los fenicios, los griegos y los romanos en los tiempos antiguos. En la época moderna, los españoles con la conquista del Nuevo Mundo; luego los portugueses, franceses, ingleses, holandeses, etc., poblaron de *colonias* las costas y riberas de las Indias.

¿Qué son las *colonias*?—Unas poblaciones fundadas por ciudadanos de otra nacion, sujetas á ésta, regidas y gobernadas por las leyes de la madre pátria, á que se dá el nombre de *metrópoli*.

¿Qué era el *pacto colonial*?—Un sistema de comercio entre la *metrópoli* y la *colonia*, fundado en un presunto contrato bilateral en virtud del que los mercados de ámbas estaban abiertos de par en par para el consumo y contrataciones recíprocas, con la prohibicion de admitir en él á las demás naciones. Inglaterra, Francia y España lo sancionaron por medio de disposiciones legislativas.

¿Es justo y útil este sistema?—No es justo, porque la *metrópoli* dicta la ley á la *colonia*, y se reserva la mejor parte de sus productos. No es útil, porque si en él va ganando aquélla, esta ganancia no compensa las pérdidas de la *colonia*, ocasionadas por la prohibicion de la libre concurrencia y beneficiosos efectos de la *demand*a y de la *oferta*. La prohibicion india y enseña luego la opresion que incita los ánimos de los coloniales á sacudir el yugo, y hace necesario un ejército poderoso y una escuadra fuerte y bien acondicionada, para ocurrir á sus necesidades y defensa, lo cual grava considerablemente el tesoro público.

¿Qué principios deben tenerse presentes para el régimen de las *colonias*?—Debe procurarse identificarlas con las demás provincias de la *metrópoli* en todo lo relativo al orden económico é industrial, teniendo por norma la libertad de comercio.

¿Son convenientes las *colonias*?—No, bajo el punto de vista de la economía política; porque cuestan más de lo que producen, y por la libertad de comercio se llega á gozar de sus productos, sin tener el cuidado que requiere su régimen y conservacion. Tarde ó temprano concluyen por emanciparse de la madre pátria.

¿Cuál es la historia de nuestro comercio *colonial*?—Primeramente lo hacían naves aisladas; despues estuvo á cargo de flotas, reunidas para la mútua defensa contra la piratería. Sevilla fué el único puerto habilitado para la carga y descarga; luego lo fué tambien Cádiz. El comercio tenía lugar exclusivamente entre la *metrópoli* y las *colonias*; éstas estaban obligadas á consumir los frutos de aquélla, hasta el extremo de que, para que no se perjudicase la exportacion de los vinos españoles, se prohibió la plantacion de las viñas en América. Fernando VII permitió la navegacion libre y aislada. Carlos III aumentó el número de puertos habilitados, y poco á poco se fué abandonando el sistema antiguo, dando pasos hácia la libertad de comercio.

¿Qué reglas se deben seguir en el comercio de *cereales*?—En el *interior*, lo mismo que en el *exterior*, todo principio que tienda á proclamar la li-

bertad de comercio, es una conquista para la riqueza nacional. Las tasas en los precios, las aduanas provinciales y otras rémoras que lo dificultan, no sólo son ineficaces para conseguir la baratura, sino que atacan el derecho de propiedad del productor y lastiman al del consumidor, á quien obligan á comprar por un precio dado. Los *pósitos* ó graneros públicos no satisfacen las necesidades del mercado, porque llevan consigo todos los defectos de una administracion oficial, y ahogan la industria particular, que no puede competir con ellos. En cuanto al comercio *exterior*, existen las mismas conveniencias y utilidades, nacidas del principio de libertad. Los derechos protectores son una prohibicion y un monopolio que impiden la proporcion natural entre la *demanda* y la *oferta*; crean un precio artificial que no está en consonancia con el resultado de la libre concurrencia, y establecen una especie de contribucion sobre los artículos de primera necesidad.

¿La importacion de cereales puede destruir la agricultura nacional?—No, porque los frutos de la nacion son los primeros en que se verifica el consumo, por la facilidad con que abastecen el mercado; y cuando éstos no llegan para satisfacer las necesidades de aquél, la importacion extranjera cubre sus faltas, y el consumidor encuentra barato el pan cotidiano. Esta es otra ventaja de la libertad del comercio de granos.

¿Qué sistema se seguia en España en esta materia?—Cuando el precio de los granos nacionales llegaba á un tipo determinado, se autorizaba la importacion, prohibida por regla general.

La *poblacion* numerosa de una nacion, lejos de constituir un bien para el país, lleva consigo siempre la miseria.

¿Cuál es el límite ó dique de la *poblacion*?—Las subsistencias. Si el pueblo es rico, la poblacion aumenta, porque existe la riqueza necesaria para la satisfaccion de las necesidades que rodean al ciudadano; si es pobre, la poblacion decrece comparativamente, porque la carencia de medios retrae y dificulta la procreacion. La riqueza, pues, constituye un estado favorable á la poblacion, que produce la expansion de los ánimos, los goces de la familia, el deseo de la trasmision de las fortunas, y otros tantos motivos para aspirar al matrimonio y fomentar la aproximacion de los sexos.

¿Qué operacion aritmética suelen hacer los economistas para calcular el progreso de la *poblacion*?—Consideran el número de las subsistencias como un *dividendo*, el número de personas como el *divisor*, y la cuota media de cada una, como el *cuociente*; deduciendo que la poblacion puede crecer cuando crece el *dividendo* y no se altera el *divisor*, y disminuir cuando éste aumenta y se mantiene el mismo aquél.

¿Cómo resume el economista Malthus la teoria de la *poblacion*?—Dice que el hombre se multiplica en progresion geométrica, y las subsistencias se aumentan en proporcion aritmética. Clasifica los obstáculos que se oponen á la poblacion en *privativos* y *destructivos*; los primeros proceden del vicio ó de la razon; los segundos del vicio ó de la miseria. Estos deben evitarse; aquéllos deben atenderse, si no constituyen la *poligamia*, la *prostitucion*, etc.

¿Es verdadera esta teoria?—Exajerada, como lo fué, por los discípulos de Malthus, conduce á errores trascendentales; mas no puede desconocerse que encierra verdades sólidas, pues es indudable que las fuerzas de la especie crecen considerablemente para la procreacion, y las subsistencias aumentan paulatinamente.

¿Qué otros obstáculos *destructivos* se conocen?—Las guerras y las epidemias, si bien no influyen mas que momentáneamente en el progreso de la poblacion; porque la peste no perjudica á la riqueza, y existiendo ésta, los matrimonios se suceden, y la guerra, si algo perjudica, es porque requiere un gran consumo de subsistencias.

¿Influye la emigracion en la *poblacion* y riqueza de los pueblos?—Puede asegurarse que no, de un modo perjudicial y sensible, porque es insignificante su cifra á la totalidad nacional. Además los emigrantes son, por regla general, gente pobre y ruda, que en nada aumenta la riqueza del país.

¿Cuáles son las causas principales de la *emigracion*?—El deseo de riquezas, los infortunios, la pobreza, las persecuciones políticas ó religiosas, la facilidad de las comunicaciones, etc.

¿Constituye un bien ó un mal para el país?—Si escasea el trabajo y la poblacion es exuberante, no es perjudicial. Si el trabajo y el capital aumentan, ó emigran con las personas, es un mal para la nacion, que de ellos se vé privada. No hay derecho para impedirlo. La emigracion forzosa es siempre un mal económico, por no ser hija de la necesidad, como lo causó la expulsion de los moros y judios de España.

CIRCULACION.

Distribucion y consumo de la riqueza.—Moneda.—Crédito.—Bancos.

¿Cómo se define la *circulacion*?—«El movimiento de la riqueza que pasa del productor al consumidor.» Es mayor ó menor segun la naturaleza de los bienes cambiables y los obstáculos que tenga que vencer. Cuanto mayor sea, será más provechosa, y sus bienes serán considerables.

¿Qué causas contribuyen á su aumento?—La prosperidad del país en todas las industrias; el *gran consumo*; la *division del trabajo*; la *moneda*; el *crédito* y la facilidad en las vías de comunicacion.

¿Qué causas la disminuyen ó retardan?—Las guerras exteriores é intestinas; las calamidades públicas; malas cosechas, etc. La parálisis de la circulacion produce las crisis en la industria, tan perjudiciales para los pueblos.

¿Qué es la *moneda*?—Un medio de facilitar los cambios, contratos necesarios para la vida civil de las naciones. No es más que una mercancía que sirve de agente de los mismos.

¿Cuál fué su origen?—Las dificultades que ofrecian los primitivos cambios ejecutados directamente por medio de permutas, en las que habia que apreciar el valor absoluto y relativo de los objetos, y que buscar incesantemente *lo necesario*, en persona que necesitase el mismo objeto que por aquél se debía dar en cambio. La necesidad es, pues, el origen de la moneda.

¿Qué cualidades debe tener ésta?—Debe reunir condiciones de solidez, dureza, perpetuidad, divisibilidad y ser de materia de valor y poco abundante. El oro y la plata son los metales que reúnen mejores condiciones para servir de moneda.

¿Qué objetos se empleaban antiguamente como *moneda*?—Los ganados, la sal, las pieles y otros productos naturales que aún se usan entre los salvajes; como las conchas, el cacao, etc. Más tarde se echó mano de los metales, que, admitidos por todos los pueblos, cambiaron ehoro en polvo en

barras ó en pedazos informes, procurando igualar su relacion con los efectos comprados por medio del peso, hasta que se adoptó como medida de seguridad la acuñacion oficial y el sello de la nacion, simbolo del peso y calidad de los metales.

¿De qué depende el valor de la moneda?—Como todas las mercancías, está sujeta á las variaciones que sufre la relacion que media entre la oferta y la demanda. Es *intrínseco* y *extrínseco*. El primero es el derivado de las cualidades propias de los metales preciosos; el segundo nace de la comparacion de la cantidad de moneda circulante con las necesidades de comercio. Por eso la *moneda* siempre vale más que el metal que la forma. Su abundancia, cuando es escasa la demanda, disminuye su valor. Su escasez, cuando la *demand*a es grande, lo aumenta. Una y otra no perjudica la riqueza nacional.

¿La *moneda* es *riqueza*?—Considerada en sí misma es riqueza, porque contiene utilidad y valor, y es producto del trabajo del hombre.

¿Puede considerarse como capital cuando se aplica á la *produccion*?—Sí; mas no, si se atesora y conserva fuera de la *circulacion*.

¿Qué proporcion debe haber entre la riqueza de un estado y su *moneda circulante*?—No puede establecerse una regla general. La mayor ó menor extension de las operaciones mercantiles, el grado de circulacion, el valor de los metales y otras circunstancias, deben tenerse presentes para regular la proporcion.

¿Cuál es la *moneda de vellon*?—La fabricada con metales bajos, á fin de facilitar los pagos de las fracciones de la unidad monetaria, que no podrian efectuarse sin embarazo, si aquéllas se presentaran por piezas de metales preciosos de pequeñas dimensiones.

¿Será conveniente un sistema monetario *universal*?—Sí; con él desaparecerian las diferencias que existen entre las monedas de diversas naciones.

¿Debe restringirse la exportacion é importacion de la *moneda*?—No, porque la moneda no es mas que una mercancía que sirve para facilitar los cambios y busca los mercados en donde se le dá más valor. Antiguamente, y como consecuencia del *sistema mercantil*, se prohibió la extraccion de los metales preciosos, hasta el extremo de aplicarse la pena de muerte contra los exportadores. El *sistema prohibitivo* confirmó aquella doctrina, dando ocasion al contrabando, por la facilidad de su ejercicio. Hoy los buenos principios aconsejan la libre exportacion, que obedece á la ley general económica que busca el equilibrio.

¿Puede alterarse el valor de la *moneda*?—No, ni aun por el monarca. La moneda tiene un valor *intrínseco* que disminuye si no se acuña en la ley establecida, y su minoracion introduce el desórden en el comercio, defraudando los intereses de los comerciantes, que pierden parte de sus valores al realizar sus transacciones.

¿Cuál es la medida de todos los valores?—No puede determinarse, porque es variable el coste de la *produccion*. Algunos consideran el *trabajo* del hombre como medida más exacta; otros el *salario*; otros el *precio medio* del trigo; otros el *término medio* de los precios corrientes en un período largo de tiempo; pero todos estos tipos son esencialmente variables.

¿Qué es *crédito*?—«La mútua confianza que los hombres se otorgan en el comercio de la vida.» Es el alma de las transacciones mercantiles. Hay diversas opiniones sobre su naturaleza. Quién lo cree una anticipacion de valores; quién el cambio de capitales fijos en capitales circulantes; unos la facultad de disponer de lo ajeno prometiendo pagarlo; otros lo consideran como propiedad inmaterial. Mas la verdadera idea del crédito consiste en la confianza mútua de los hombres.

¿En qué se divide el *crédito*?—En *público* y *privado*, *real* y *personal*, *mobiliario* y *territorial*. Es *público* el de las naciones, y *privado* el de los par-

ticulares. Es *real* el que nace de los bienes *inmuebles*, y *personal* el que se limita á las condiciones de las personas. Es *moviliario* el relativo á operaciones de industria y comercio, y *territorial* el que tiene por objeto poner en circulacion los bienes *raices*.

¿El *crédito* es *capital*?—No, porque no aumenta los medios de produccion, pero facilita la circulacion y auxilia la produccion de la riqueza.

¿Es *útil* el crédito en el comercio?—Lo es tanto, que cuando no excede de sus límites naturales, puede acometer empresas extraordinarias. Constituye un vínculo que une á todos los hombres, fomenta el espíritu de asociacion y es signo de progreso y de civilizacion.

¿Qué son *letras de cambio*?—Unos documentos de giro en virtud de los cuales se paga una cantidad de dinero, en diferente punto de aquél en que se expide el documento, á la orden de persona determinada. (Véase el *Derecho mercantil*). Créese que deben su origen á los judíos, que las crearon para salvar sus capitales de las persecuciones religiosas.

¿Qué personas intervienen en ellas?—Tres: el *librador*, ó persona que manda pagar; el *tomador*, ó persona á cuya orden debe pagarse, y el *aceptante*, ó persona que debe pagar.

¿Qué ventajas ofrecen las *letras de cambio*?—Evitan el difícil y arriesgado trasporte de la moneda; facilitan considerablemente los pagos por la circunstancia de ser *endosables*; contribuyen á la circulacion de la riqueza y permiten que el acreedor, á *término*, pueda por este medio obtener dinero, descontando el interés del tiempo no vencido.

¿A qué se llama *curso del cambio*?—Al precio corriente que tienen las letras en el mercado, atendida la uniformidad ó disparidad de moneda de las demás plazas.

Bancos.—Cajas de ahorros.—Montes de piedad.

¿Qué son *bancos de comercio*?—Unos establecimientos de crédito que tienen por objeto custodiar el depósito de sumas de numerario de los particulares, pudiendo emitir títulos que auxilian el comercio y facilitan la circulacion. Constituyen una caja general y comun de los comerciantes.

¿Qué especies hay de *bancos*?—Diversas: son *públicos* los reglamentados y vigilados por el gobierno, y *privados* los que se encomiendan al interés particular. Divídense también, por razon de su objeto, en bancos de *depósito*, de *circulacion* y de *descuento*, y *agrícolas* ó *territoriales*.

¿Qué era la *moneda de banco*?—Una moneda ideal creada por los bancos de depósito, fundada en el análisis del peso y ley de los metales depositados, que consistía en un título ó documento que representaba el valor efectivo.

¿Cuál es el *banco de depósito* más antiguo?—El de Venecia. Sigue en antigüedad el de Barcelona; luego los de Valencia, Génova y otros no menos notables.

¿Cuáles son los caracteres esenciales de los *bancos de depósito*?—El respeto á las sumas que reciben; que no destinan á operacion alguna, por cuya custodia no devengan interés.

¿Qué son *bancos de circulacion* y de *descuento*?—Los establecimientos de crédito que, fundados en su capital, emiten billetes al portador y á la vista por un valor superior á él, y descuentan las *letras* y demás documentos de crédito no vencidos.

¿Qué diferencia hay entre los *billetes de banco* y la *moneda*?—La misma que entre la promesa y el pago. El *billete* es una promesa de pagar; la *mo-*

neda constituye el pago; pero se equiparan sus efectos, y el público cobra y paga con billetes de banco.

¿Cuál es el mayor servicio que prestan los *bancos*?—La atracción de la fortuna social, que recibe vida y actividad convertida en capital del banco, y la facilidad en las transacciones por medio de las cuentas corrientes y liquidaciones entre los comerciantes, quienes, por un módico descuento, ven realizado el capital cuya efectividad no es realizable hasta pasado algún tiempo.

¿Qué requisitos deben tenerse presentes en los *bancos de circulación y descuento*?—Tres: el *capital*, la *reserva metálica* y la *emisión de billetes*. El *capital* debe ser proporcionado á la negociación, y debe formarse por *acciones* transmisibles y cotizables en la Bolsa. La *reserva* es un fondo preventivamente acumulado para combatir las malas situaciones económicas. En cuanto á la *emisión*, sólo diremos que depende su mayor ó menor escala de las circunstancias del mercado.

¿Es conveniente la pluralidad de *bancos*?—Sí, porque con ella viene la concurrencia, hija de la libertad y enemiga del monopolio y del banco único y privilegiado.

¿Qué son *bancos agrícolas*?—Los que tienen por objeto prestar dinero sobre hipotecas, mediante un módico interés, dando en cambio un papel hipotecario negociable en la plaza, que justifica y garantiza al portador la responsabilidad del banco, á quien está obligado el propietario. Su objeto principal es valorar el territorio, fijar el crédito de cada propietario y entregarle billetes de su emisión.

¿Cuál es la base del *crédito territorial*?—Una buena legislación hipotecaria que suprima las hipotecas táticas ó legales, y reconozca por base la *especialidad* y la *publicidad*. La nueva ley promulgada entre nosotros en 1870, basada en esos dos principios, ha contribuido poderosamente al levantamiento del crédito territorial, especialmente con las reformas hechas con posterioridad (1).

¿Qué son las *cajas de ahorros*?—Unos establecimientos de crédito que tienen por objeto acumular y guardar con seguridad las pequeñas economías de los ciudadanos, formando así capitales y estimulando al obrero con un pequeño interés. Son útiles porque crean capitales, contribuyen á mejorar las costumbres, emancipan el trabajo manual y alivian la precaria situación de las clases pobres. El capital de esos establecimientos puede emplearse en negocios lucrativos y no aventurados, por lo cual suelen ofrecérselo al gobierno, con la obligación de devolverlo cuando le fuere pedido, y de pagar los intereses corrientes.

¿Qué son los *montes de piedad*?—Unos establecimientos que tienen por objeto facilitar dinero sobre prendas á personas desvalidas, por un módico interés. Su utilidad y conveniencia es un hecho reconocido generalmente.

¿Qué es *papel moneda*?—La titulación ó documentación de crédito, emitida por el Estado, cuyo curso ha declarado forzoso el gobierno. Los males consiguientes al papel moneda son inmensos. Luego se presenta el descuido; más tarde la tasa; enseguida la miseria; concluyendo por mil calamidades de que nos presenta ejemplo la historia de las naciones.

¿Cuál es el elemento más poderoso de la *circulación* de la riqueza?—Las vías de comunicación, sin las cuales de poco sirven las libertades de comercio y las libertades de cambio. Sin ellas desaparece el consumo, desfallecen las industrias, y sus escasos artículos aumentan de precio por el recargo que sufren con los gastos de transporte. Por el contrario, cuando

(1) Véase la sección de *Derecho civil*, al tratar de las hipotecas.

existen, convierten á la nacion en un gran mercado sin distancias, y provisto de todo género de mercancías que ofrece á los consumidores.

¿Deben construirse por el gobierno las *vías ferreas*, ó por compañías particulares?—Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas. El primero consume un grueso capital, que arrebató á la riqueza pública; el segundo vigila más los trabajos, regula más los servicios y se realiza con más actividad y economía. Así, pues, la construcción debe encomendarse, por regla general, á las compañías particulares, sin perjuicio de que el gobierno las inspeccione en todo lo concerniente á la seguridad de los individuos, y se reserve las líneas que puedan servir de medios estratégicos de defensa nacional.

¿Cómo debe distribuirse la *riqueza*?—Entre todos los que han tenido participación en su producción, en términos proporcionales.

¿Qué es la *libre concurrencia*?—La libertad de todas las transacciones de la vida, que deja obrar al interés individual segun las necesidades de los mercados. Es la armonía de todas las fuerzas productoras. Comenzó á aparecer en el mundo económico con el siglo actual.

¿La *libre concurrencia* es causa del *pauperismo*?—No; la historia demuestra que el *pauperismo* existió siempre, en todas épocas y naciones, cuando estaba planteado el sistema reglamentario, sin que esperara para agobiar la sociedad, al planteamiento de la *libre concurrencia*. Puede asegurarse que hay menos pobres hoy que antes.

Renta.—Salarios.—Intereses.—Huelgas.—Consumo.—Empréstitos.—Deuda pública.—Impuestos.

¿Qué es *renta*?—El producto de los valores que percibimos anualmente por nuestro trabajo, nuestro capital ó nuestra industria. Es *real* y *nominal*. Llámase *real* á la cantidad de artículos ó productos que pueden adquirirse con la *renta*. Llámase *nominal* al importe de la *renta* cobrada en dinero. Si es el sabio el que la cobra, por su ciencia, recibe el nombre de *honorario*. Si es el obrero, por su trabajo, el de *jornal* ó *salario*. Si es el capitalista, por el préstamo del capital, el de *rédito* ó *interés*, y si es el propietario, por el uso de sus fincas, el de *arrendamiento*, *inquilinato*, *beneficio*, etc.

¿Qué es *renta nacional*?—«La suma de rentas particulares.» Divídese en *bruta* ó *total*, y *líquida* ó *neto*. La primera comprende los gastos de producción; la segunda cuenta sólo los productos, con deducción de aquéllos.

¿Qué es el *salario*?—El tanto ó precio que recibe el obrero, en recompensa ó remuneración de sus servicios manuales. Auxilia poderosamente al capital en la producción, y es hijo de la libertad del trabajo. Divídese, como el precio, en *corriente* y *necesario*. Este indica el límite mínimo á que puede descender, que es la subsistencia del obrero. Aquél contiene alguna economía, y sube ó baja segun las oscilaciones del mercado, causadas por la *libre concurrencia*. También suelen dividirse en *real* y *nominal*, tomada esta división, por razon de analogía, de la que se hace de la *renta*, y queda explicada en el penúltimo párrafo.

¿Es conveniente siempre la subida de los *salarios*?—No, porque los obreros son también consumidores, y se conducen de lo mismo que les causa placer como productores, y porque disminuye la demanda del trabajo. Cuando la alza del *salario* tiene lugar progresiva y paulatinamente, produce bienes y es signo de bienestar.

¿Cuál es la tendencia natural de los salarios?—El equilibrio general.

¿Qué causas mantienen la diversidad de los salarios?—La naturaleza de la ocupacion, la dificultad del aprendizaje, la asiduidad del trabajo, la confianza que inspira el obrero y aun el azar ó la buena suerte.

¿Qué medios suele emplear el obrero para imponer condiciones al capital?—Procura y consigue hacer desaparecer la oferta del trabajo por medio de las *huelgas*, tan frecuentes en esta época aun entre nosotros, en donde apenas se conocian en la práctica. Son las *huelgas* adoptadas por los obreros, la renuncia voluntaria y premeditada del trabajo, como medio de conseguir del capitalista ó empresario, condiciones más ventajosas para aquél, que suelen ser referentes al aumento del salario y minoracion de las horas de trabajo. Son perjudiciales por la paralización inmensa que producen en las industrias y servicios públicos, amagando constantemente alteraciones del orden público.

¿Son coaliciones lícitas las *huelgas*?—Algunos creen que no, porque tienden á alterar el precio natural de los salarios; pero la opinion más conforme con la legislación vigente, que proclama el principio de libertad de asociacion, las declara lícitas, siempre que no se ejerza coaccion, violencia ó intimidacion en los huelguistas, ó éstos en los obreros que no quieran abandonar el trabajo, y rehusen seguir á los primeros.

¿El sábio contribuye á la *produccion*?—De tal manera que á los esfuerzos de su inteligencia se deben los grandes inventos, que, como la imprenta, la aplicacion del vapor á los trasportes, el telégrafo, etc., son inagotables fuentes de riqueza y poderosos auxiliares del comercio.

¿Qué es *interés*?—La *renta* que produce el capital circulante, de cuyo uso se utiliza un extraño; ó en una acepcion más lata, la *renta* que produce todo *capital*. Se gradúa generalmente por una anualidad.

¿Cuál es el fundamento del *interés*?—La remuneración y compensacion de las privaciones que se impone el capitalista. Es ventajoso para el que dá y para el que recibe, pues ambos reportan utilidad del contrato. Por consiguiente, á mayor privacion y mayor riesgo, mayor *interés*. Al precio ordinario del uso de los capitales se llama *cuota corriente del interés*, y *cuota media* al mismo, comparado con todas las aplicaciones á la industria.

¿Qué causas influyen en la alza ó baja del interés?—Las relaciones que median entre la *demand*a y la *oferta* de los capitales, no influyendo para ello la abundancia ó escasez del numerario, porque sólo es agente de los cambios, y no sinónimo de *capital*.

¿En qué se parece el *interés* al *salario*?—En que ambos propenden al equilibrio, distinguiéndose en que el *salario* sube cuando el *interés* baja, y desciende cuando éste asciende, sin que por ello el *capital* y el *trabajo* sean enemigos, sino que, como queda dicho, obedecen á la ley de la *concurrency*.

¿Es legítimo el *interés*?—Sí, porque todo servicio requiere recompensa; porque el capital es productivo, y porque la privacion voluntaria del capitalista demanda un goce ulterior.

¿En qué se fundan los que anatematizan la *usura*?—Dicen que está condenada por el Evangelio; que es una especie de hurto, porque se gana sin causa; que el préstamo debe ser obra de misericordia, etc. Lo primero no es verdad, porque el Evangelio *aconseja* y no manda. Los demás errores nacen de la equivocada idea de la riqueza y de la supuesta esterilidad del dinero. La *usura* es lícita y honesta, y nada importa que haya sido objeto de leyes represivas en la antigüedad. La economia la legitima, y no puede ménos de relegar al fuero interno las limosnas hechas en forma de préstamo gratuito. Reprueba la *usura* excesiva, no como injusta, sino como inmoral. Por eso condena igualmente la *tasa del interés*, que siempre resultará difícil, porque no hay base cierta en que pueda descansar. La historia

justifica su ineficacia y demuestra que en vez de remediar los males ha contribuido á su agravacion.

¿Cómo puede mitigarse la *usura*?—Con los beneficios de la *libre concurrencia*, con el desarrollo del *crédito* y con el establecimiento de bancos *hipotecarios* y *montes de piedad*.

¿Cuál es el origen de la *renta* de la tierra?—Segun la teoria del economista Ricardo, nació esa *renta* desde el momento en que los hombres han tenido que dedicarse al cultivo de los terrenos de segunda y tercera calidad, por verse agotados los de primera; ó desde que se han visto obligados á pagar á los dueños de éstos un tanto por su uso. De esto resultó que, valiendo los productos de todos los terrenos un mismo precio en el mercado, la ventaja estaba de parte del propietario de los de primera calidad, porque con ménos gastos de produccion los obtenia. A este beneficio se le llamó *renta territorial*.

¿Es exacta la teoria de Ricardo?—Lo es sólo en el fondo. La division de los terrenos no es base bastante para originar la *renta* de la tierra, porque los adelantos agrícolas, la construccion de canales y caminos y otros beneficios, equiparan á los de segunda y tercera calidad el valor de los de primera.

¿Cuál es el verdadero fundamento de la *renta territorial*?—El derecho de propiedad.

¿Qué base debe tenerse en cuenta para regular la *renta* económicamente?—La diferencia entre los gastos de produccion y el precio de los productos, la cual es imposible averiguar con exactitud, porque no puede saberse la extension é intensidad de las fuerzas productivas de la tierra con toda certeza.

¿A quién se llama *empresario*?—A la persona que sirve de intermediario entre los productores, se aprovecha de ellos, realiza una especulacion y satisface á aquéllos lo que les corresponde. Sus ganancias son inciertas y sólo dependen del cálculo y de la fortuna.

¿Qué nombre reciben las ganancias del *empresario*?—No lo tienen especial, porque no puede llamárseles *salario*; no se equiparan al *interés*, sino que son una remuneracion de su trabajo, del riesgo que ha conseguido de la inteligente direccion que le ha dado y de la privacion del capital empleado. Estas ganancias están sujetas á la alza y baja producida por la *concurrencia*, por lo penoso del trabajo, por la *prima* del seguro y otros motivos. También tienden, como el *salario* y el *interés*, al equilibrio.

¿Qué es *consumo*?—El acto contrario á la produccion. Si *producir* es crear y dar vida á la riqueza, *consumir* es destruirla, extinguirla. A la entrega de un valor, en cambio de las cosas necesarias para el consumo, se llama *gasto*. El consumo es conveniente porque es la consecuencia de la produccion, y con él se satisfacen las necesidades. El consumo que motiva *inmediatamente* satisfacciones personales, como el hambre, la sed, se llama *improductivo*, y *reproductivo* el que las produce *mediatamente*, como los materiales que se destruyen para construir un artefacto. Esta especie de consumo es combatida por algunos economistas, que consideran anti-téticas las ideas de *reproduccion* y de *consumo*. Dividesele también en *público* y *privado*.

¿Qué causas influyen en el *consumo*?—La *moda*, que destruye ó aminora el valor de las mercancías; el *clima*; los *hábitos*; las *costumbres*; la *condicion* de las personas y tantos otros motivos de necesidad y de comodidad.

¿El lujo es perjudicial á la riqueza pública?—Cuando es moderado y está conforme con los medios de subsistencia del consumidor, favorece las industrias y no perjudica la fortuna de la familia. Deben limitarlo las buenas costumbres y los hábitos de orden. Las leyes santuarias que lo regulaban antiguamente son injustas, inútiles, imposibles y exponen la familia á pesquisas inquisitoriales, siempre de carácter odioso.

¿Qué son las *contribuciones*?—Las cargas que pesan sobre el pueblo para sostenimiento de la vida comun. Otros las definen diciendo que son «el precio del servicio de seguridad de los ciudadanos».

¿Son convenientes los impuestos?—Constituyen una necesidad para los Estados, y cuando son moderadas, contribuyen al engrandecimiento del país. Si pasan de la medida de lo justo, secan las fuentes de la producción, alejando el ahorro y disminuyendo el capital. No es, por tanto, cierto que estimulen el trabajo y que sean el mejor uso que pueda darse á la fortuna privada.

¿Qué reglas deben seguirse en su imposición?—Deben ser proporcionadas al caudal del contribuyente; determinadas en la cantidad y en la fecha del pago; satisfacerse en la época y en la forma ménos gravosa; que el traspaso de su importe á las arcas del Tesoro cueste poco; no gravar al *capital*, limitándose á la *renta*; ser moderadas y estar en armonía con la naturaleza de aquélla; no imponerse al que sólo cuenta con los recursos indispensables para su subsistencia, y ser iguales para todos.

¿Qué métodos se anuncian para conseguir esta igualdad?—1.º, establecer una cuota por la seguridad de las personas y otra proporcional á las fortunas; 2.º, distribuir un impuesto progresivo, segun la cuantía de los capitales; 3.º, distribuirlo en proporción á la riqueza del contribuyente. Este sistema es el que se aproxima más á la equitativa repartición; 4.º, establecer un impuesto *general* sobre la *renta* ó producto neto de todos los bienes y profesiones; 5.º, establecerlo igual sobre los *capitales*.

¿Es posible una sola contribución?—No; está justificada la necesidad de los impuestos especiales. Sin embargo, algunos economistas sostienen la opinión contraria con razones dignas de consideración.

¿Qué clases hay de *contribuciones*?—*Directas* é *indirectas*. Las primeras gravan al *capital* ó á la *renta*. Las segundas tienen lugar mediatamente, por un hecho del contribuyente, como el *consumo*, la *importación* ó *exportación*, etc.

¿Cuáles producen mayores ventajas?—Ambas tienen inconvenientes. Las *directas* son más ciertas y justas, de fácil recaudación y ménos costosas; se las elude, en cambio, fácilmente, con especialidad en la riqueza inmueble. Las *indirectas* gravan á los pobres, se convierten en santuarios, son embarazosas y fomentan el espíritu de inquisición. Las buenas doctrinas proclaman la armonía de unas y otras, destituidas de los vicios y defectos que las perjudican, teniendo partidarios acérrimos unos y otros impuestos.

¿El impuesto *territorial* debe ser fijo?—Es más conveniente que sea móvil, segun los cambios de las fortunas.

¿Cuáles son las mejores contribuciones *indirectas*?—Las que concilian un crecido redimiento con el menor gravámen; por eso la economía política reprueba las que recaen sobre artículos de primera necesidad, y aplaude las moderadas que afectan á los artículos de lujo.

¿Es defendible la *lotería* oficial?—No, porque es juego que la moral condena, constituye un impuesto fundado en la ambición, desproporcionado á la fortuna del jugador, y espanta el trabajo disipando los ahorros.

¿Cómo y por quién deben cobrarse las *contribuciones*?—Deben pagarse en dinero y cobrarse por el estado, supuesto que el arrendatario agobia y trata con dureza al contribuyente, siendo, como dice un economista, un *lobo carnívoro*. Sin embargo, algunas veces las arrienda el estado (1).

¿En qué se dividen los *impuestos*?—En *ordinarios* y *extraordinarios*. Son

(1) Actualmente cobra el Banco de España las contribuciones, por contrato temporal convenido con el gobierno.

ordinarios los que se piden en circunstancias normales; y *extraordinarios* los que se decretan cuando no bastan aquéllos para subvenir á las necesidades del estado, que se vé precisado á echar mano de su crédito.

¿Es preferible el *empréstito* al *impuesto extraordinario*?—Siempre que la riqueza pública pueda sostener el *impuesto*, no debe contraerse el *empréstito*; porque aquél es momentáneo y éste produce una deuda que devenga intereses, los cuales acumulados á otros, privan á la nacion de los recursos con que cuenta para las atenciones futuras.

¿Qué clases hay de *empréstitos*?—Dos; *voluntarios* y *forzosos*. Estos se convierten en *contribuciones* injustas que indican la falta de crédito del estado. Aquéllos descansan en la buena fe y confianza que inspira el gobierno. Pueden ser *reembolsables* y *no reembolsables* ó *perpétuos*; los primeros devengan interés y deben ser restituidos en el tiempo estipulado; los segundos crean *rentas*, ó dan lugar á la emision de títulos que representan un capital que produce interés. Pueden ser los *empréstitos á capital real* y á *capital nominal*. Si el gobierno reconoce la deuda íntegra que recibe, son á *capital real*; y cuando se confiesa deudor de una, en parte imaginaria, son á *capital nominal*. En aquéllos, el *capital* es fijo, y variable el *interés*; en éstos sucede lo contrario. También pueden ser los *empréstitos por adjudicacion* y por *suscripcion*. Tienen lugar por *adjudicacion* cuando el gobierno opta por la mejor postura ó proposicion que se le haya hecho; y por *suscripcion* cuando el público se compromete á pagar la cuota determinada por aquél. A veces se garantizan con hipotecas nacionales ó con los productos de una *renta*.

¿Qué nombres recibe la deuda contraida por el estado, segun su origen?—Llábase *deuda flotante* la que nace de los bonos del tesoro, especie de letras de cambio pagaderas á su vencimiento, emitidas por el gobierno en momentos de urgente necesidad, que devengan interés; deuda *consolidada* la que está inscrita en el *gran libro*, cuya amortizacion es potestativa en el gobierno, debiendo ser satisfechos puntualmente los intereses que devenguen sus títulos; *rentas* ó *anualidades á término*, los intereses que el gobierno paga durante un tiempo determinado, por el *capital* que ha tomado á préstamo; *rentas vitalicias*, las que, por el mismo concepto, satisface el gobierno á una ó más personas, mientras vivieren, que reciben el nombre de *tontinas* cuando el gobierno, siendo varias las personas, estipula el pago total ó desmembracion de los accionistas difuntos.

¿Qué es la *conversion de rentas*?—La reduccion en los intereses de la deuda, que sólo puede hacerse justamente, con la condicion del reembolso del capital, si fuere rechazado por los acreedores.

¿Cómo puede conseguirse el reembolso de éstos?—Por medio de *impuestos*, si son extranjeros, ó de la amortizacion.

¿En qué consiste este sistema?—En la formacion de un capital equivalente á la deuda, que se aumenta á expensas del *interés compuesto*, y vivifica con una constante economia. Este sistema está desechado por ilusorio.

Las ligerísimas indicaciones que dejamos hechas sobre las más importantes materias que abarca la extensa esfera de la economia política, bastan á llenar el propósito que hemos manifestado antes de emitirlas. Con ellas puede el lector comenzar desde luego, el estudio del Derecho mercantil.

ELEMENTOS DE DERECHO MERCANTIL.—SU HISTORIA.

El comercio.—Los comerciantes.—Contabilidad mercantil.

¿Qué es *derecho mercantil*?—El conjunto de disposiciones legales que regulan los actos de comercio y dirimen las contestaciones que de los mismos se originan.

¿Qué es el *comercio*?—Una industria que tiene por objeto comprar para vender y vender para ganar, presidiendo siempre en estas operaciones la idea mediata ó inmediata del lucro. En una acepción lata, comprende la *moneda*, las *bolsas*, los *pesos* y *medidas*, y otras instituciones que auxilian el comercio. Según Coquelin, es el conjunto de relaciones que sostienen los hombres entre sí para todo lo que se refiere á la satisfaccion de sus necesidades, ó, en sentido estricto, la industria que tiene por objeto el transporte y distribucion de los productos. Según Carabantes, puede definirse «el conjunto de negociaciones ó contratos sobre los productos de la naturaleza ó de la industria, con el objeto de hacer alguna ganancia».

¿Cuál es el origen del comercio y qué causas contribuyeron á su desarrollo?—El origen del comercio es tan antiguo como los pueblos. La Etiopía, la India, el Egipto, la Siria y las demás naciones de la antigüedad lo han conocido en mayor ó menor escala. Nínive, Babilonia, Tiro, Roma, Cartago, Ródas, Atenas y tantas otras ciudades célebres, nos demuestran que el comercio existía en tiempo en que aquéllas brillaban por su riqueza é importancia. La guerra de las Cruzadas, el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza, el de las Américas, la aplicacion del vapor á la navegacion, la de la electricidad á las comunicaciones, los ferro-carriles, los progresos de la civilizacion y el adelanto en la ciencia económica, contribuyeron poderosamente á que el comercio creciese y se desarrollase, extendiéndose á todas partes, poniendo en comunicacion á todas las naciones, sembrando la riqueza con prodigalidad en el mercado del mundo. A él es debido el proverbial engrandecimiento de Venecia, Génova, Pisa, Constantinopla, Amburgo, Brujas y Marsella.

¿Cuál es el origen del *derecho mercantil*?—Los usos y costumbres fundados en la buena fé de los que se dedicaban al comercio en los antiguos pueblos: usos y costumbres que, á medida que la industria aumentaba en interés, se generalizaban y establecian, procurando suplir la falta de leyes escritas. La reunion de los usos, prácticas y costumbres marítimas, formuladas por escrito, constituyen el más antiguo cuerpo de doctrina que reconoce la historia del derecho mercantil.

¿Cuáles fueron las primeras leyes publicadas para regular el comer-

cio?—Las leyes *Rodias*, que se ocuparon del *marítimo*, llegando á ser generalmente aceptadas por los pueblos del Mediterráneo, con inclusion de la inmortal Roma.

¿Han legislado los romanos sobre el comercio?—No.

¿Han legislado los fenicios y cartagineses?—No se conoce ley ni disposicion alguna dictada por ellos en materia comercial.

¿Cuál es el primer código mercantil?—El denominado *Consulado del mar*, formado en Barcelona hácia el año de 1266, en el reinado de D. Jaime el Conquistador, segun se cree más generalmente. Llámase así porque contiene el derecho que debia ser aplicado por magistrados especiales, denominados *cónsules*. No fué sancionado por la corona, cuya circunstancia no ha sido obstáculo para su observancia por más de cuatro siglos, en las costas del mar de Levante.

¿Qué otras compilaciones refiere la historia del derecho mercantil?—Los *Roles ó Juicios de Oleron*, mandados formar por la reina Eleonora, en Francia, en la misma época próximamente en que se publicó el *Consulado del mar*, que contenian los usos, costumbres y juicios observados en el mar de Poniente y las leyes *Rodias*; las *leyes de Wisby*, publicadas en la ciudad del mismo nombre, en Suecia, por el año de 1288 próximamente; los *capítulos*, promulgados en Barcelona en 1340 por D. Pedro IV de Aragon, que regulaban los actos, hechos y empleos marítimos; las *Ordenanzas de los magistrados municipales de Barcelona*, publicadas en 1435; las *Ordenanzas de Burgos*, recopiladas en 1553 con el título de *ordenanzas hechas por el prior y cónsules de la Universidad de la contratacion de esta M. N. y M. L. ciudad de Burgos*, por SS. MM. confirmadas, para los negocios y cosas tocantes á su jurisdiccion é juzgados; las *ordenanzas marítimas de la Ansa Teutónica*, publicadas en 1590 y tantos, por los diputados de la *Liga anseática*, reunidos en Asamblea general en la ciudad de Lubeck, conocidas tambien con el nombre de *Jus Anseaticum maritimum*; el tratado *Le Guidon de la mer*, coleccion de costumbres relativas á contratos marítimos, observadas en los siglos XIV y XV; las *ordenanzas de los mercaderes y de la marina*, publicadas en Francia en tiempo de Luis XIV, en las cuales se compilaron las costumbres marítimas francesas y las doctrinas de nuestros jurisconsultos; el *código de Federico de Prusia*, extensivo á todos los ramos del derecho mercantil y las *ordenanzas de Bilbao*, formadas por los comerciantes de esta ciudad en 1725, y aprobadas por don Felipe V un año despues, que abrazan el comercio terrestre y marítimo.

¿Cuáles son los códigos mercantiles más notables de la época moderna?—El código de comercio francés, publicado en 1807, que ha corregido los antiguos abusos, acomodando las prácticas y principios mercantiles á las necesidades de su época; los de Cerdeña y Nápoles, publicados por los años de 1834, mejorando las doctrinas del anterior, y el holandés, promulgado en 1838, que viene á ser el código francés con algunas reformas y alteraciones.

¿Cuál era el estado de la legislacion mercantil española á principios del siglo presente?—El *consulado del mar* y las *ordenanzas de Bilbao*, sin fuerza obligatoria en toda la monarquía, formaba el derecho vigente á la sazón; pero sus disposiciones no satisfacian las necesidades, creadas por los adelantos de la civilizacion y el desarrollo ya considerable del comercio. Algunas ciudades se regian por ordenanzas particulares, lo cual traia por consecuencia necesaria la diversidad de jurisprudencia, mal que perjudicaba la uniforme decision de las contiendas mercantiles, haciendo indispensable una reforma general y profunda que combinase los antiguos principios con las exigencias de la época; reforma llevada á cabo por el actual Código de comercio, publicado como ley en 30 de Mayo de 1829, con fuerza obligatoria desde el 1.º de Enero siguiente, y por la ley de Enjuiciamiento mercantil promulgada el 24 de Julio de 1830.

¿Quién fué el autor de éstos códigos?—El jurisconsulto D. Pedro Sainz de Andino, cuyo trabajo ha sido preferido al formado por una comision de magistrados, jurisconsultos y personas prácticas, nombrada para formular el primero.

¿Qué juicio merece el Código de comercio?—M. Pardessus, célebre jurisconsulto francés, dice que es mucho más perfecto que los que habian visto la luz antes de su publicacion, y mejor que los de las demás naciones. En el exámen de cada uno de sus libros, prodiga elogios á su autor, reconociendo la justa supremacía que tiene sobre el francés, y declarando terminantemente que cualquiera país mercantil puede adoptarlo como ley. Esto no obstante, nuevas exigencias, efecto del desarrollo y engrandecimiento del comercio, demandan la pronta revision del mismo, como se ha comenzado á practicar, aunque parcialmente, con la promulgacion de la ley y reglamento sobre sociedades, sobre bolsas, sobre quiebras, compañías de crédito, papel sellado, y efectos de la no comparencia en juicios del citado para el reconocimiento de firmas y para la confesion judicial (1).

¿Qué progresos se han hecho en el derecho mercantil de las demás naciones?—Todas han entrado, más ó ménos aceleradamente, en la reforma de sus códigos, siendo las más notables la que sufrió el *francés* en el título de las quiebras, y la del *ruso*, que ocupa el tomo segundo del cuerpo general de códigos de aquella nacion, formado en tiempo del emperador Nicolás. Lo que llama la atencion es el parasismo que en esta materia padece la legislacion inglesa, apesar de ser el primer pueblo comercial. En todos los estados que ejercen el comercio, se nota conocidamente el movimiento científico inclinado á la mejora de las leyes mercantiles, convencidos de que esta industria es una de las más poderosas palancas de la riqueza nacional.

¿Cuál es la idea económica que predomina en el comercio?—El cambio, definido por un célebre economista en la fórmula siguiente: *El cambio es la sociedad entera en movimiento*.

¿Cuál es el fin del comercio?—La aproximacion lucrativa de los productos al consumidor. Por eso sus operaciones fundamentales son la *compraventa* y el *cambio*, auxiliadas por los demás actos y contratos de carácter mercantil, como el *trasporte*, los *seguros*, los *documentos de giro*, etc.

¿Qué elementos se consideran indispensables para el desarrollo del comercio?—El Sr. Martí de Eixalá los clasifica en ocho grupos: 1.º, vias de transporte: terrestres (comunes ó férreas), hidráulicas; 2.º, medios de locomocion: hombres, acémilas, carruajes, wagones, buques; 3.º, medios de contabilidad: pesos, medidas; 4.º, medios de negociacion: personales (factorias, corredores, comisionistas, agentes viajadores), materiales (moneda, instrumentos de crédito y giro); 5.º, lugares de contratacion: férias, mercados, lonjas, bolsas; 6.º, medios de comunicacion: peatones, correos, telégrafos; 7.º, medios de proteccion: leyes mercantiles, consulados-tribunales, derecho internacional, agentes diplomáticos y consulares; 8.º, medios de fomento: asociaciones particulares, corporaciones oficiales, aranceles, tratados de comercio.

¿Cómo se divide el comercio?—1.º, en terrestre y marítimo; 2.º al por mayor y menor; 3.º, interior y exterior; 4.º, de larga navegacion y cabotaje, cuyas divisiones tienen varias subdivisiones, como puede verse en el cuadro siguiente:

(1) El decreto-ley del gobierno provisional de 6 de Diciembre de 1868, sobre unificacion de fueros, derogó la ley de Enjuiciamiento mercantil; y la ley de 19 de Octubre de 1869 acordó la revision del Código de comercio, cuyo proyecto parece estar terminado, pero no ha llegado á ser ley.

COMERCIO.....	Terrestre...	Interior.	{	Importacion.
		Exterior.....		Exportacion.
	Marítimo...		{	Mixto.
		Interior.		
		Exterior.	{	
		De cabotaje.		
		Colonial.		
		De gran navegacion.....	{	Directo.
			{	Indirecto.

LLámase *comercio terrestre* el que se hace por tierra por medio del transporte á lomo, con carruajes y por rios ó canales navegables. Es *marítimo* el que se hace por medio del transporte en embarcaciones que surcan el mar.

LLámase *comercio al por mayor* el que se realiza en grandes cantidades ó partidas de géneros, que exceden de las que se regulan para el consumo próximo del individuo, y *al por menor* el que se ejerce en pequeñas cantidades, que tienen por fin próximo el consumo de éste.

LLámase *comercio interior* el que tiene lugar entre los individuos de una nacion, cualquiera que sea el medio de comunicacion, y *exterior* el que se practica entre los individuos de diferentes naciones, en los mismos casos.

Recibe el nombre de *comercio de larga navegacion*, el exterior que se ejecuta por el mar, y llámase *comercio de cabotaje* el interior practicado por el mismo medio, esto es, entre puertos de la misma nacion.

¿Qué otras divisiones suelen hacerse del comercio?—Dividese tambien en *comercio de neutralidad* y *bandera ó asilo*, *comercio activo ó pasivo*; y aquilatando más las operaciones de la industria, tambien se divide en *comercio de mercaderías* y de *dinero ó de papel*. El primero tiene lugar con naciones enemigas, por medio de una neutral. Denomínase *activo* al que ofrece los productos en el mercado, y *pasivo* así se aguarda al comprador. El de mercaderías ó de dinero, no necesita explicacion.

¿Qué actos se consideran mercantiles?—«Aquéllos que caen bajo el dominio del Código mercantil, y por lo mismo son de la competencia de los tribunales de comercio.» Unos son mercantiles por su naturaleza, y otros por ser ejecutados por comerciantes. A la primera clase pertenecen la *compraventa*, la *permuta*, los *transportes*, los *seguros* de conducciones terrestres, las *sociedades*, las *letras de cambio* y la *navegacion*. Corresponden á la segunda el *préstamo*, *depósito*, *afianzamiento*, *libranzas*, *vales*, *pagarés*, *cartas-órdenes* y otros. En fin, son *contratos mercantiles* los que tienden á producir y ejercitar el comercio.

¿Cómo se clasifican los contratos mercantiles?—Dividense en *contratos fundamentales*, *contratos auxiliares* y *contratos accidentales*. Son *fundamentales*, los indicados arriba como mercantiles por su naturaleza; *auxiliares*, los que reciben este nombre por ser otorgados por comerciantes; y *accidentales*, los que nacen de algunos *cuasi contratos*, por ejemplo, las *averías* y los *naufragios*.

¿Cuál fué el *acto primordial* del comercio?—La *permuta*. Por las dificultades que presentaba para el cambio y para la satisfaccion de las necesidades del individuo, fué indispensable crear un signo representativo de todos los valores, que orillase los inconvenientes y facilitase las transacciones de

la vida. Con la *moneda*, los pesos y medidas y la creacion de las férias y mercados, el comercio comenzó á adquirir gran desarrollo, en bien de los consumidores y con lucro para los comerciantes.

¿Quiénes son *comerciantes* segun el Código?—Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matricula y tienen por ocupacion habitual y ordinaria el tráfico mercantil, fundando en él su estado politico. Pueden ejercer esta industria, por regla general, todas las personas que tienen capacidad para contratar y obligarse, sin que exista distincion entre los nacionales y el extranjero naturalizado.

¿Qué se entiende por ocupacion habitual del tráfico mercantil?—La práctica frecuente y repetida de actos y operaciones comerciales, que constituyen el modo de vivir social de una persona, con el fin de obtener lucro.

¿Qué excepciones modifican el anterior principio?—Las siguientes: 1.^a, el menor, mayor de veinte años emancipado y con dispensa de edad, puede ejercer el comercio si renuncia el beneficio de la *restitucion in integrum* y cuenta con peculio propio; 2.^a, la mujer casada mayor de veinte años, con licencia de su marido concedida por escritura pública, ó sin este requisito si estuviere separada de él.

¿Qué bienes están afectos á las resultas del comercio ejercido por la mujer casada?—La *dote* y los *gananciales* en el primer caso antedicho; y los que le correspondan en propiedad, usufructo y administracion, los que posteriormente adquiera y los dotaes que le fueren restituidos por sentencia, en el segundo caso.

El fuero mercantil ¿es *personal* ó *real*?—Los autores de más nota opinan que es *real*, supuesto que quedan sujetas á la jurisdiccion mercantil las personas que, no siendo comerciantes, hagan accidentalmente una operacion de comercio terrestre.

¿Qué incapacidades establece la ley para ejercer el comercio?—Dos; por incompatibilidad de estado y por tacha legal. Por incompatibilidad de estado no pueden ejercer el comercio: 1.^o, las corporaciones eclesiásticas; 2.^o, los clérigos, aunque no tengan más que la tonsura, mientras vistan el traje clerical y gocen de fuero eclesiástico; 3.^o, los magistrados civiles y jueces, en el territorio donde ejercen su autoridad ó jurisdiccion, y 4.^o, los empleados en la recaudacion y administracion de las rentas reales en los pueblos, partidos ó provincias adonde se extiende el ejercicio de sus funciones, á ménos que no tengan autorizacion particular. No pueden ejercerlo por tacha legal: 1.^o, los infames que estén declarados tales por la ley ó por sentencia judicial ejecutoriada, y 2.^o, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitacion.

¿Qué efectos producen los contratos celebrados por personas inhábiles para comerciar?—Son nulos cuando la incapacidad fuese notoria, y válidos para el contrayente que no tuviese de ella conocimiento, y á quien la ocultase el incapacitado.

¿Qué deberes son inherentes á la profesion mercantil?—1.^o, la *inscripcion* en la matricula de comercio existente en la capital de provincia (1); 2.^o, la de ciertos documentos en el *registro*; 3.^o, la exacta y formal *contabilidad*; 4.^o la conservacion de la *correspondencia* mercantil.

¿Qué es el *registro público* del comercio?—Un negociado de la seccion de Fomento del gobierno de la provincia, que comprende la correspondiente á la *matricula general de comerciantes*, de que se ha hablado, y tiene por objeto la toma de razon de determinados documentos.

(1) La matricula de comerciantes se debe circular, anualmente, á los juzgados de primera instancia, quienes cuidarán de que se lleve una copia auténtica en el atrio de sus salas, para conocimiento del comercio, reservando la original en la secretaria. (Decreto de unificacion de fueros.)

¿Cuáles son éstos?—1.º, las cartas dotalas y capitulaciones matrimoniales que se otorguen por los comerciantes ó tengan otorgadas al tiempo de dedicarse al comercio, así como las escrituras que se celebren en caso de restitucion de dote; 2.º, las escrituras en que se contrae sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto y denominacion; 3.º, los poderes que se otorguen por comerciantes á factores y dependientes suyos para dirigir y administrar sus negocios mercantiles.

¿Cuándo debe tener lugar su presentacion?—Dentro de los quince dias siguientes á su otorgamiento, ó á la inscripcion de los otorgantes en la matrícula, si aquéllos fueren de fecha anterior. Debe remitirse copia de todos los documentos á los juzgados de primera instancia, para que se fijen en el estrado y anoten en el registro particular que cada juzgado tendrá para estos casos, segun previene el decreto de unificacion de fueros.

¿Qué efectos produce la falta de inscripcion de estos documentos?—Las escrituras dotalas entre consortes que profesen el comercio, de que no se haya tomado razon en el registro general de la provincia, serán ineficaces para obtener la prelacion del crédito dotal en concurrencia de otros acreedores de grado inferior. Las escrituras de sociedad de que no se toma razon en el registro general de comercio, no producirán accion entre los otorgantes para demandar los derechos que en ellas les hubieren sido reconocidos; sin que por esto dejen de ser eficaces en favor de los terceros interesados que hayan contratado con la sociedad. Tampoco producirán accion entre el mandante y mandatario los poderes conferidos á los factores y mancebos de comercio para la administracion de los negocios mercantiles de sus principales, si no se presentan para que se tome razon de ellos en el registro general, sin perjuicio de las obligaciones contraidas por aquéllos, cuyo cumplimiento recae sobre los comitentes, que se hará efectivo en bienes del establecimiento.

¿Qué sancion penal se impone á los contratantes?—Incurren en la multa mancomunadamente de 5.000 rs. vn. por el hecho de la presentacion en juicio de un documento no registrado.

¿Cuál es el fundamento del registro de los mencionados documentos?—Evitar que el comerciante adquiera mayor crédito del que le corresponda; dar publicidad á la sociedad formada; á sus administradores, capital, nombre y garantias, y al carácter de factores y dependientes con que se reviste á determinadas personas. En una palabra, tiene por objeto evitar el abuso del crédito y prevenir fraudes de trascendentales consecuencias.

¿Qué comprende la contabilidad mercantil?—La cuenta y razon de todas las operaciones é inventarios del comerciante, asentadas en tres libros formados y llevados con determinadas condiciones legales, llamados *diario*, *mayor* ó *de cuentas corrientes* y *de inventarios*.

¿Qué objeto se propone la contabilidad mercantil?—Presentar á los ojos del comerciante y de los tribunales en su caso, en cualquiera circunstancia, la situacion que mantienen sus operaciones, y preparar pruebas con que poder defender sus derechos en ulteriores contestaciones judiciales y extrajudiciales. Coopera tambien á impedir el abuso del crédito.

¿Qué operaciones deben anotarse en el libro *diario*?—En él deben asentarse dia por dia, y por su orden, los actos y contratos, con determinacion de su carácter y circunstancia, nombre de las personas y designacion del cargo ó descargo que puedan producir. Hay quien opina que deben constar tambien en él todas las pagas y cobros que haga ó reciba el comerciante, aunque no deban su origen á actos mercantiles, porque de otra manera se defraudaria el objeto de los libros, si no constaran las entradas y salidas de las cantidades procedentes de estos actos. Los comerciantes *al por menor* cumplen con la exigencia de la ley anotando en un solo asiento en este libro, el producto de las ventas *al contado*; y en el *mayor*, el de las que se verifiquen *al fado*.

¿Cuál es el objeto del libro *mayor ó de cuentas corrientes*?—Abrir una cuenta particular para cada negociacion ó persona con que se haya contratado, ora sea acreedor, ora deudor, dividiendo dicha cuenta en dos secciones, una en que aparezca el *debe* y otra en que resulte el *ha de haber*, según los asientos del *diario*, que se trasladarán, por orden riguroso de fechas, al *mayor*. En él tambien debe abrirse el comerciante á sí mismo una cuenta con destino á los gastos domésticos.

¿Qué objeto tiene el libro de *inventarios*?—Hacer constar todos los valores que cuenta el comerciante al dar principio á su tráfico, y el resultado de los balances generales que anualmente deben formarse, contentivos tambien de todos los bienes de la casa.

¿Qué condiciones deben reunir los libros referidos?—Deben estar encuadernados, forrados, foliados y selladas sus hojas con el del juzgado, consignando en la primera una nota en que se exprese el número de las que contiene cada libro y la fecha de la presentacion de éste, firmada por el juez y un escribano de actuaciones.

¿En qué forma deben llevarse?—Los asientos deben extenderse en idioma español, por orden correlativo de fechas, sin blancos, huecos, raspaduras, intercalaciones ni enmiendas; debiendo salvarse las omisiones por medio de nuevas anotaciones.

¿Qué sancion penal tienen estas prevenciones?—Los libros que no aparezcan formados y llevados con las formalidades enunciadas, carecen de fuerza en juicio con respecto al comerciante que los presente, y se estará en las diferencias que le ocurran con otro comerciante á lo que resulte de los de éste, que no tengan tacha y estén arreglados á aquellas prescripciones. La falta de formalidades será castigada con la multa de 1.000 á 20.000 reales, sin perjuicio de la accion criminal que procediere. La carencia de alguno de los libros se castiga con la de 6.000 á 30.000 reales por cada uno. (1)

¿Qué otros libros pueden llevar los comerciantes?—Todos los auxiliares que consideren necesarios para el mejor orden y claridad de sus operaciones, como son comunmente el llamado de *caja*, el de *compras y ventas*, el de *gastos generales*, el de *beneficios y pérdidas*, el *copiador de letras*, el de *vencimientos*, etc. Para que tengan valor en juicio deben llevarse con las formalidades de los libros necesarios.

¿Cuál es el carácter de los libros mercantiles?—Son de la propiedad exclusiva de los comerciantes, á quienes no se les puede obligar á entregarlos ó trasportarlos de un punto á otro, ni decretar de oficio ni á instancia de parte, pesquisa ni reconocimiento judicial; sino su exhibicion como medio de prueba en juicio, en que su dueño tenga interés ó responsabilidad, debiendo reconocerse y compulsarse minuciosamente los asientos relacionados con el punto litigioso, á presencia de aquél ó de su apoderado.

¿En qué casos pueden, no obstante, ser reconocidos?—En el de *sucesion*, en el de *liquidacion* de la compañía y en el de *quiebra*, en los cuales todos los interesados tienen derecho á revisarlos íntegramente.

¿Qué documentos forman la *correspondencia mercantil*?—Constituyen la correspondencia de los comerciantes las cartas, facturas y demás documentos que reciben, y el libro copiador de las que escriben por razon de sus operaciones. Deben conservar aquéllos en legajos ordenados, anotando en ellos las fechas de sus contestaciones, y copiar éstas íntegramente y

(1) Suprimidos los Tribunales de Comercio en 1868, corresponde la facultad de imponer estas multas á los jueces de primera instancia, con apelacion á las Audiencias. (Circular de Hacienda de 15 de Marzo de 1878)

á la letra en el mencionado libro, por órden de fechas, sin blancos, huecos, interlineaciones ni enmiendas; guardando, en fin, las mismas formalidades que se exigen en los libros, cuyas omisiones tienen señaladas las mismas penas.

AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO.

Obligaciones y derechos de las personas que auxilian el comercio terrestre.—Bolsas.

¿Cuáles son los agentes auxiliares del comercio terrestre?—Los *corredores, comisionistas, factores, mancebos y portadores*.

¿Qué es *corredor*?—«La persona legalmente autorizada para intervenir en las negociaciones de los comerciantes.» Su oficio es *viril y público*.

¿Qué clases hay de corredores?—*Ordinarios y especiales*. Los primeros pueden intervenir en todas las operaciones comerciales, exceptuando las de bolsa y fletamentos. Los segundos pueden intervenir únicamente en esta clase de operaciones; por lo cual reciben el nombre de *agentes de bolsa* aquéllos, é *intérpretes de navío* éstos, cuyo cargo pertenece al derecho marítimo.

¿Qué cualidades deben tener los corredores *ordinarios*?—Deben ser españoles, ó extranjeros naturalizados, mayores de veinticinco años, y llevar seis de aprendizaje al lado de un corredor ó de un comerciante matriculado.

¿Quiénes tienen prohibicion legal de serlo?—Los menores de edad, aunque sean emancipados, los eclesiásticos, militares y funcionarios públicos, los comerciantes quebrados no rehabilitados y los corredores destituidos de su oficio. Segun opinion de algunos autores, tampoco pueden serlo los casados menores de veinte, porque siendo el cargo *público*, y no pudiendo obligarse, parece que están comprendidos en el espíritu de la disposicion prohibitiva del Código.

¿A quién compete el nombramiento de los corredores?—Al rey, con vista de las ternas formadas por el gobernador de la provincia, con audiencia de la junta de corredores de la plaza en que haya de publicarse la vacante, cuyas ternas se formarán con los nombres de las personas que hayan sido declaradas aptas para el ejercicio del cargo, teniendo en cuenta el resultado del exámen que deben sufrir ante la expresada junta (1).

¿Qué requisitos debe cumplir el nombrado antes de comenzar á ejercer la *correduría*?—Debe jurar el buen desempeño del cargo ante el gobernador de la provincia, y constituir una fianza por valor de 40.000 reales vellon en metálico en las plazas mercantiles de primera clase, de 25.000 en las de segunda y de 12.000 en las de tercera.

¿Cuáles son las atribuciones de los corredores?—Servir de intermediarios entre los comerciantes, proponiendo ó aceptando ventas, con vista de

(1) Cuando existian tribunales especiales de Comercio, éstos informaban tambien al gobernador para la formacion de las ternas.

las necesidades mercantiles que sienta cada uno, intervenir en sus contratos y certificar lo que resulte de los libros que tienen á su cargo.

¿Cuáles son sus principales obligaciones?—1.^a, deben asegurarse de la identidad y capacidad legal de las personas contratantes; 2.^a, proponer los negocios con exactitud y sin engaño; 3.^a, guardar riguroso secreto sobre ellos; 4.^a, desempeñar por sí mismo el oficio, salvo el caso de imposibilidad, por el cual, previo informe de la junta de corredores, el gobernador de la provincia le habilitará de un sustituto, que desempeñará el cargo bajo la responsabilidad del propietario; 5.^a, llevar un *cuaderno manual* y un libro *registro* en el papel correspondiente, el primero foliado, y el segundo con todas las formalidades prescritas para los de la contabilidad de los comerciantes, anotando en aquél las operaciones en que intervenga, en numeracion correlativa y por orden de fechas, con expresion de la naturaleza del contrato, nombres de los contratantes y demás circunstancias de la negociacion; y en éste los asientos del *cuaderno manual*, literalmente, sin enmiendas ni entre renglonaduras, guardando la misma numeracion; 6.^a, asistir á la celebracion de los contratos que exijan escritura, firmarlos, certificar de su presencia á la suscripcion de los interesados, recoger un ejemplar, custodiarle bajo su responsabilidad y entregar á aquéllos dentro de las veinticuatro horas siguientes una minuta del asiento relativo á la negociacion, refiriéndose al libro *registro*.

¿Qué prohibiciones garantizan el buen desempeño del cargo de corredor?—Les está terminantemente prohibido tener participacion directa ó indirecta en operaciones de comercio, ni en sociedades mercantiles; ser fiadores y garantir los contratos en que intervengan, fuera de los casos expresamente permitidos y declarados obligatorios por la ley; cobrar y pagar por cuenta ajena, excepto en negociaciones de valores endosables; proponer algunas sobre letras de cambio ó mercancías pertenecientes á personas no conocidas en la plaza, y dar certificaciones acerca de lo que no resulte de sus registros.

¿Qué sancion penal corrige los abusos de los corredores?—La indemnizacion de daños y perjuicios, las multas, la suspension y privacion de oficio y las penas que determina el código penal, segun la gravedad de los casos, constituyen la materia represiva de sus abusos y delitos.

¿Qué número de corredores debe haber en cada plaza?—El que fuere necesario, segun su poblacion é importancia mercantil. Siendo más de diez formarán un colegio, presidido por el gobernador de la provincia ó por el juez en quien delegue la presidencia, cuya junta de gobierno estará compuesta de un síndico presidente y dos ó cuatro adjuntos, segun el número de colegiados.

¿Qué requisitos deben concurrir en los *corredores agentes de bolsa*?—Los mismos que se exigen para los *corredores ordinarios*, aumentándose á ocho los años de aprendizaje y la fianza á 50 000 pesetas en efectivo. Tambien puede constituirse en papel. La fianza queda sujeta *exclusivamente* al resultado de las operaciones en que interviene el corredor por razon de su oficio.

¿Cuáles son sus atribuciones principales?—Intervienen en las negociaciones de efectos públicos y sus traspasos, y en las negociaciones de las letras de cambio, valores comunes de comercio, ventas de metales preciosos, etc., etc. Pueden estipularse aquéllas al contado y á plazo, á voluntad del comprador. Las segundas no pueden pasar de fin á fin de mes.

¿Cuál es su responsabilidad?—Son responsables de la legitimidad de los efectos publicos al portador que por su mediacion se negocien en la bolsa; de la legitimidad del cedente y autenticidad de su firma, estando sujetos, por regla general, á la responsabilidad que imponen las leyes á todo comisionista ó mandatario. Deben llevar los mismos libros que los *corredores ordinarios*, y tienen análogas prohibiciones y derechos. Para mejor inteligen-

cia insertamos en la nota el decreto de 12 de Marzo de 1875, que regula esta materia (1).

¿A qué se da el nombre de *bolsas*?—«Por bolsa de comercio se entiende la lonja ó sitio público en que se reúnen los comerciantes ó personas que se dedican al tráfico y giro comercial, y los agentes públicos que intervienen en sus negociaciones para tratar y negociar especialmente sobre efectos públicos, estableciendo el curso de los cambios con sujeción á las reglas que prescribe la ley y bajo la inspección de la autoridad pública.» Estas reuniones tienen lugar todos los días no feriados, de doce á dos de la tarde. Exceptuábanse también los miércoles, jueves y viernes de la Semana Santa, los días de S. M. el rey y el 2 de Mayo.

Por decreto de 12 de Enero de 1869 se declaró libre la creación de bolsas de comercio, casas de contratación, pósitos, lonjas, alhóndigas ú otros establecimientos que tengan por objeto reuniones para contratar efectos públicos y comerciales, y toda clase de operaciones y compromisos mercantiles, los cuales quedaban sujetos á los códigos civil, mercantil y penal. Pero reconocido por el gobierno que la libertad otorgada á la contratación y á la intervención de los agentes por dicho decreto y otro anterior de 30 de Noviembre de 1868, se había convertido en vituperable licencia, dando lugar á la depreciación de los valores públicos, declaró en suspenso ambas disposiciones, restableciendo en 40 de Julio de 1874 la ley de bolsas de 8 de Febrero de 1854 y su reglamento.

(1) Artículo 1.º El colegio de agentes continuará constituido en la forma prescrita por el decreto de 10 de Julio último, sujetándose á las reformas que se establecen en el presente.

Art. 2.º La fianza de los agentes de cambio será de 50.000 pesetas en efectivo, habiendo de arreglarse cada semestre, si estuviere constituida en papel, por el precio de las cotizaciones del 30 de Junio y 31 de Diciembre.

Art. 3.º La fianza á que se refiere el artículo anterior estará sujeta exclusivamente al resultado de las operaciones en que intervengan los agentes dentro de su oficio, sin que pueda ser ocupada con preferencia en virtud de reclamaciones fundadas en otra clase de contratos anteriores ó posteriores á la constitución de la misma fianza.

Art. 4.º Las operaciones á plazo tendrán fuerza civil de obligar, con tal de que estén publicadas en Bolsa é intervenidas por la junta sindical, sin cuyos requisitos se las considerará como fraudulentas y punibles.

Los agentes de cambio que dejen de llenar las expresadas condiciones serán multados por la junta sindical en 1.250 pesetas la primera vez, en 2.500 la segunda, y expulsados del colegio la tercera.

Art. 5.º Si la fianza de un agente no alcanzase para cubrir el importe de las reclamaciones, los reclamantes tendrán derecho á repetir contra los demás bienes del agente.

Art. 6.º Las operaciones á plazo serán siempre á voluntad del comprador, y no podrán exceder, de fin del mes en que se verifiquen, ó fin del siguiente.

Art. 7.º Vencidas las operaciones á plazo, si hubiere alguna reclamación por falta de cumplimiento del agente, se procederá por la junta con arreglo á lo prescrito en el art. 19 de la ley orgánica provisional de 8 de Febrero de 1854 para las operaciones al contado.

Si la reclamación fuese de un agente contra su comitente, la junta comprará ó venderá, bajo la responsabilidad del reclamante, los valores á que se refiera la operación, expidiendo la correspondiente certificación para que el agente pueda reclamar ante los tribunales la diferencia que resulte contra su comitente.

La junta sindical pondrá en la tablilla los nombres de los comitentes que dejen de cumplir sus compromisos.

Art. 8.º Transcurridos los tres primeros días hábiles de cada mes, ya no podrán presentarse ante la junta sindical las reclamaciones á que diere lugar la liquidación del mes anterior.

Art. 9.º Los agentes tendrán derecho á exigir de sus comitentes al contratar una operación, las garantías que estimen necesarias; y si en el curso de la operación hubiese alteración en los cambios, podrán los primeros exigir á los segundos aumento de garantía, y en el caso de no obtenerla liquidar la operación, poniéndolo en conocimiento de la junta.

Art. 10. La junta sindical cuidará de que los agentes no compren ni vendan mayor cantidad que la que habrá de designarse en un reglamento para el régimen interior del colegio. Cuando algun agente quisiera traspasar el límite señalado, la junta le exigirá que reponga la fianza, y el que se negare á ello no podrá seguir operando á plazo mientras que no haya liquidado las primeras operaciones.

Los individuos que formen la junta sindical responderán colectivamente con sus fianzas de las operaciones que, intervenidas por la misma junta y publicadas en Bolsa, hicieren los agentes sin haber repuesto la fianza, según lo prescrito en este artículo.

Comisionistas.

¿Qué es *comisionista*?—Llámanse así «al que desempeña algun acto comercial por cuenta de otro, ya sea en nombre propio, ya en el de la persona que se lo ha encargado. Más bien que auxiliar del comercio es un comerciante que facilita las transacciones mercantiles, sustituyendo la persona de sus colegas y dependientes y excusando su presencia.

¿Quiénes pueden ser *comisionistas*?—Todos los que pueden ser comerciantes, sin que baste para desempeñar este cargo la capacidad legal para representar y obligar á otro.

¿Qué diferencias le separan del *factor*? (1)—El *comisionista* puede obrar á nombre propio, quedando obligado á las personas con quienes contrató, aun cuando el negocio fuese ajeno, y el *factor* gestiona á nombre de su principal, á quien obliga. Aquél necesita un encargo especial para cada caso, dado por escrito ó verbalmente; mientras que éste obra en todo lo concerniente al establecimiento que regenta, en virtud de un poder general que debe ser otorgado en escritura pública. Y por fin, en que, segun queda dicho, puede ser *factor* aquél que tiene capacidad para representar á otro, necesitando el *comisionista* reunir todas las condiciones que el Código exige para ejercer el comercio. Son tan importantes las funciones del *comisionista*, que la ley le impone los deberes de *registro*, *contabilidad* y *correspondencia* que afectan á los comerciantes. En todo lo que no se halle determinadamente dispuesto en el Código acerca de ellas, se aplicarán las disposiciones del derecho comun relativas al contrato de *mandato*. Los derechos y deberes de los *comisionistas* son especiales, como se verá al tratar del contrato de *comision*.

Factores y mancebos.

¿Quiénes son los *factores* y *mancebos*?—Unas personas encargadas por los comerciantes para ejecutar ciertos tráficós mercantiles. O en forma más concreta: «*Factor* es la persona encargada de dirigir, por cuenta ajena, algun establecimiento mercantil ó fabril. Tambien se suele llamar *gerente*,» y al establecimiento *factoria*. «*Mancebo* es el dependiente que tiene el comerciante á su lado para que, bajo su direccion inmediata, le ayude en las operaciones de su tráfico.»

¿Quiénes pueden ser *factores*?—Todos los que tienen la capacidad necesaria, segun las leyes civiles, para representar á otro y obligarse por él. Necesitan poder especial, más ó ménos limitado, del dueño del establecimiento, registrado en la forma que el Código prescribe en el general de comercio, cuya circunstancia dá mayor legalidad á sus actos, por más que la falta de registro no pueda ser causa de nulidad de las operaciones que efectúe. Debe fijarse un extracto de dicho poder en los estrados del juzgado de primera instancia del punto donde esté establecido el *factor*.

¿Qué contratos tienen lugar entre el *factor* y su principal?—La *locacion de servicios* y el *mandato civil*, siendo aplicables á los contratantes las prescripciones del derecho comun en cuanto á la capacidad de los contrayen-

(1) Véase el capítulo siguiente para saber quiénes son los *factores*.

tes; cumplidas las cuales, todos los contratos que celebre el *factor* se entienden hechos por cuenta de su principal, si no se ha extralimitado de las facultades que éste le ha concedido, en cuyo caso queda él sólo obligado, á no ser que se justifique que la negociacion se hizo por cuenta del establecimiento, pues entonces el contratante puede elegir entre dirigirse contra éste ó contra su principal.

¿Quiénes pueden ser *mancebos*?—Todos los que sean mayores de diez y siete años y obtengan el consentimiento de sus padres ó curadores, si son menores de edad.

¿Qué contrato tiene lugar entre los *mancebos* y sus principales?—La *locacion de servicios*, relativos únicamente á la entrega y recibo de géneros por cuenta ó de orden de éstos, á quien no obligan. Autorizados especialmente para alguna negociacion ó parte del tráfico de sus principales, pueden contratar válidamente y obligarles, si reúnen las circunstancias de capacidad legal necesarias. Esta autorización puede ser *expresa*, manifestada en un poder ó por cartas circulares; y *tácita*, demostrada por los hechos de estar el *mancebo* al frente del mostrador, vender, recibir precios y expedir recibos con consentimiento del comerciante.

¿Qué derechos tienen los *factores* y *mancebos*?—Tienen accion al percibo de los salarios estipulados y al reintegro de los gastos y pérdidas ocasionados por razon de su cargo, áun cuando no lo hubieren desempeñado constantemente por inhabilitacion que no exceda de tres meses.

¿Cuáles son sus obligaciones?—Desempeñar personalmente las funciones inherentes á sus respectivos cargos, á nombre y conforme á las instrucciones de sus principales. Deben abstenerse de traficar directa ó indirectamente en negociaciones del mismo género á que se dedican aquéllos. Estas obligaciones están garantidas con el abono de daños y perjuicios dimanados de la falta de su cumplimiento, y la pérdida de los beneficios que obtuvieren de los negocios cuyo tráfico les está prohibido, en favor de los comerciantes.

¿Por qué causas se extinguen los cargos de *factor* y de *mancebo*?—1.º, por la revocacion del poder otorgado á aquél y la despedida de éste, comunicada por medios legítimos; 2.º, por la muerte de cualquiera de ambos ó su inhabilitacion; 3.º, por el lapso del tiempo estipulado en el contrato; 4.º, por la venta del establecimiento en que sirven.

¿Es potestativa y arbitraria entre ambos contratantes la *rescison* del contrato?—Cuando en él se ha estipulado tiempo determinado, no puede rescindirse sin consentimiento de los dos, á no mediar justas causas, que lo son todo acto de fraude, abuso de confianza ó negociacion prohibida por parte de los dependientes; y con respecto á ambos, cualquiera injuria ú ofensa que lastime su honor ó sus intereses, respectivamente.

Porteadores.

¿Quiénes reciben este nombre?—Ciertas personas que se ocupan en trasladar las mercancías ajenas, de un punto á otro, por tierra ó por canales y rios navegables. Llámase *cargador* el que demanda el trasporte; *porteur* el que ejecuta el encargo, y *consignatorio* aquél á quien van dirigidas las mercancías. Del trasporte marítimo nos ocuparemos en su lugar oportuno. Basta indicar por ahora que al contrato que se estipula se llama *fletamento*, al *cargador fletador* y al *porteur fletante*.

¿Quiénes pueden ser *porteur*?—Del silencio de la ley, que nada dice relativo en particular á estos auxiliares, se deduce que pueden serlo todos los que tengan capacidad para obligarse. Deben cumplir el encargo por sí

mismos, pues en otro caso dejarán de ser porteadores, para convertirse en *asentistas* ó *comisionistas* de conducciones.

¿Qué contrato se celebra entre el *cargador* y el *porteador*?—El de *locacion-conduccion*.

¿Qué es *carta de porte*?—La escritura ó documento en que se consigna el contrato, detallando sus términos y condiciones, y el precio ó *merced* del arrendamiento. Por ella deben decidirse las contestaciones que ocurran entre dos contratantes. Al ocuparnos especialmente de este contrato trataremos de las obligaciones y derechos que de él nacen.

CONTRATOS Y OBLIGACIONES MERCANTILES (1).

Su perfeccion.—Su interpretacion y su extincion.

¿Cuál es el origen de las obligaciones mercantiles?—El mismo que reconocen las civiles: la *ley* y el *consentimiento*. La primera crea los *cuasi-contratos*, el segundo los verdaderos *contratos*. Ya hemos definido el contrato al ocuparnos del Derecho civil. Veamos qué condiciones debe reunir para que se califique de *mercantil*.

Los contratos ordinarios del comercio están sujetos á todas las reglas generales que prescribe el derecho comun sobre la capacidad de los contrayentes y demás requisitos que deben intervenir en la formacion de los contratos en general, así como sobre las excepciones que impiden su ejecucion y las causas que los rescinden é invalidan, bajo la modificacion y restricciones que establecen las leyes especiales del comercio. Por consiguiente, todo contrato *mercantil* debe reunir las condiciones siguientes: *capacidad* en los contratantes, *consentimiento* manifestado en forma legal, *objeto* y *causa legitima*.

¿Quiénes tienen capacidad para contraer?—Todos los que pueden ejercer *actos mercantiles*, segun hemos expuesto al principio.

¿En qué forma ha de manifestarse el consentimiento?—*Por escritura pública; con intervencion de corredor; por escritura privada y por medio de la correspondencia*. Manifestado en otra forma, no surte efecto, á ménos que la ley, determinadamente, autorice algun medio especial, porque en derecho mercantil no tiene aplicacion el principio que «de cualquiera manera que el hombre aparezca obligado, queda obligado,» tan general y tan necesario en las relaciones que caen bajo la esfera del Derecho civil.

Es válido el consentimiento manifestado *verbalmente*?—Tan sólo cuando el valor de lo contratado no excede de 4.000 rs. y de 3.000 en las *férias* y *mercados*.

¿Cuándo se perfeccionan los contratos otorgados bajo cualquiera de es-

(1) Siendo, como son, comunes á los contratos mercantiles las doctrinas fundamentales que rigen los civiles, y no pudiendo comprenderse con exactitud la naturaleza especial de los primeros sin conocer perfectamente la de los segundos, es evidente que al estudio del Derecho mercantil debe preceder el de los elementos, siquiera del Derecho civil. Por ello nos permitimos recomendar á nuestros lectores el compendio que de éste hemos publicado.

tas formas?—Si se contraen con *escritura pública*, tan luego como se ponen de acuerdo, consienten sus términos y se redacta el documento. Si se contraen con *intervencion de corredor*, en el momento de haber aceptado ambos contratantes las proposiciones de aquél. Cuando se contrata por medio de *escritura privada*, desde que ésta se ha extendido, aprobado y firmado. Cuando el convenio se efectúa por medio de la *correspondencia epistolar*, queda perfecto el contrato en el momento en que el aceptante contesta al proponente manifestándole, pura y simplemente, su aceptación. Los contratos que pueden celebrarse de palabra quedan perfectos desde la mútua conformidad de los contrayentes.

¿Qué divisiones suelen hacerse de los contratos en derecho mercantil?—Cinco, que reconocen por base la diversidad de leyes que los regulan, las obligaciones á que dan lugar, el objeto sobre que recaen, el modo con que se perfeccionan y la naturaleza de la negociacion. Por la primera causa, los contratos son *comunes ó peculiares del derecho mercantil*. Por la segunda, son *unilaterales, bilaterales ó intermedios*. Por razon de su objeto, son *comutativos y aleatorios*. Por su perfeccion, son *verbales ó consensuales y escritos*. Y por el negocio que representan, pueden ser *preparatorios, principales y accesorios*.

¿Qué requisitos concurren en los contratos mercantiles?—*Esenciales, naturales y accidentales*, del mismo modo que en los civiles. Los *esenciales* son el *consentimiento*, la *cosa* y la *causa*. Los *naturales* tienen por objeto garantizar la propiedad y asegurar la certeza de lo convenido. Los *accidentales* son los que emanan exclusivamente de la voluntad de las partes. Su naturaleza y efectos son iguales á los civiles, cuya doctrina legal les es aplicable.

¿De cuántas maneras puede ser la escritura en que se otorgan los contratos?—*Pública, oficial ó privada*. Es *pública* la que se otorga ante escribano. Es *oficial* el asiento del corredor ó la póliza otorgada con su asistencia. Es *privada* la que tiene lugar firmando la los particulares solamente y la contenida en la correspondencia. La primera es necesaria unas veces y en otras conveniente. La segunda es siempre voluntaria, lo mismo que la tercera.

¿Qué reglas deben tenerse presentes para la interpretacion de los contratos mercantiles?—Las siguientes: 1.^a, los contratos de comercio se han de ejecutar y cumplir de buena fé, segun los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido propio y genuino de las palabras dichas ó escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo en que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contrajeren sus obligaciones; 2.^a, estando bien manifiesta por los mismos términos del contrato ó por sus antecedentes y consiguientes la intencion de los contratantes, se procederá á su ejecucion con arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en defectos accidentales de las voces y términos de que hubieren usado las partes, ni otra especie de sutilezas que no alteren la sustancia de la convencion; 3.^a, cuando haya necesidad de interpretar las cláusulas del contrato y los contratantes no resuelvan de comun acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases de su interpretacion: primera, las cláusulas verdaderas y consentidas del mismo contrato que pueden explicar las dudosas; segunda, los hechos de las partes subsiguientes al contrato que tengan relacion con lo que se disputa; tercera, el uso comun y práctica observada generalmente en los casos de igual naturaleza; cuarta, el juicio de personas prácticas en el ramo de comercio á que corresponda la negociacion que ocasiona la duda; 4.^a, omitiéndose en la redaccion de un contrato cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto lo contratado, se presume que las partes quisieron sujetarse á lo que en casos de igual especie se practicará en el punto donde el contrato debia recibir su ejecu-

cion, y en este sentido se procederá si los interesados no se acomodaren á explicar su voluntad de comun acuerdo; 5.^a, en caso de rigorosa duda, que no pueda resolverse por los medios indicados, se decidirá ésta en favor del deudor; 6.^a, siempre que, tratándose de distancia, en los contratos, se hable genéricamente de leguas ú horas, se entenderán las que estén en uso en el país á que haga referencia el contrato; 7.^a, todos los cómputos de dias, meses y años se entenderán el dia de veinticuatro horas, los meses segun están designados en el calendario gregoriano, y el año de trescientos sesenta y cinco dias; 8.^a, en las obligaciones mercantiles contraídas á término fijo, que consistan en número determinado de dias, no se cuenta, en caso alguno, el de la fecha del contrato si no mediare pacto expreso para hacerlo, pero si el de la espiracion del término; 9.^a, ninguna reclamacion judicial sobre la ejecucion de obligaciones á término es admisible hasta el dia despues del vencimiento; 10, no se reconocen términos de gracia, cortesía, ó que bajo cualquiera otra denominacion difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino el que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se apoye en una disposicion terminante de derecho; 11, las obligaciones que no tienen término prefijado por las partes son exigibles á los diez dias despues de contraídas, si sólo producen accion ordinaria, y al dia inmediato si llevan aparejada ejecucion.

¿Por qué modos se extinguen las obligaciones mercantiles?—Por el pago, por la prestacion de lo prometido, por la remision, la confusion, la compensacion, la extincion de la cosa, la novacion, la rescision, la condicion resolutoria, el mútuo disenso y la prescripcion.

¿Cómo, cuándo y por quién debe hacerse el pago?—Deben entregarse las cosas íntegras y las mismas prometidas, si fuere posible, en las obligaciones de dar. Debe realizarse el plazo prefijado, sin que sea lícito al deudor anticiparlo, como puede suceder en derecho civil, por los perjuicios á que puede dar lugar la anticipacion. Cualquiera puede pagar á nombre del deudor ó sin su autorizacion, y éste podrá hacerlo si administra libremente sus bienes.

¿De cuántas maneras puede ser el plazo estipulado para el pago?—Convencional, legal y prudencial. El primero y el segundo deben origen á la voluntad y á la ley, respectivamente. El tercero nace del dictámen de un tribunal, ó de árbitros llamados á fijarlo.

¿Cuándo vence el plazo convencional?—El último dia de su término. Si éste no es fijo, por haberse estipulado á contar por meses ó años, se entiende vencido al siguiente al de la fecha del mes ó año convenido. Si el término está señalado para una feria, vencerá el último dia de ésta, si lo debido es dinero, y el primero si son mercancías que debian venderse en ella.

¿Cuándo vence el plazo legal?—Este es de diez dias cuando el contrato en que se pacte produce accion ordinaria, y se entiende vencida la obligacion al dia siguiente de su fecha si produce accion ejecutiva. Exceptúanse los contratos de compra-venta y préstamo, puesto que en el primero el vendedor debe entregar al comprador, dentro de las veinticuatro horas siguientes, los géneros vendidos, y el mutuante no puede exigir el pago al mutuuario sin requerirle con treinta dias de anticipacion.

¿Cuándo vence el plazo prudencial?—El dia señalado por el juez ó árbitros llamados á fijarlo. En todos los plazos mercantiles no se reconocen términos de gracia y cortesía. Sólo se computa el dia del vencimiento, excluyéndose el de la fecha del otorgamiento. El dia se entiende de veinticuatro horas, y los meses se computan por el calendario gregoriano. Si el del vencimiento fuese feriado, puede pedirse en el precedente.

¿En dónde debe hacerse el pago?—En el lugar designado por el contrato, en el de su celebracion si no se hubiese prefijado y fuese éste bilateral, y en el del domicilio del deudor cuando sea unilateral.

¿A quién debe hacerse el pago?—Al acreedor ó á su representante legítimo, presumiendo que lo es el portador de un documento endosable. Si la obligación es solidaria, puede pagarse á cualquiera de los acreedores. Los efectos de la *novacion*, *mutuo disenso*, *condicion resolutoria* y *confusion* son, por regla general, los mismos que señala el Derecho civil, con ligeras excepciones, de las que nos ocuparemos al tratar de los contratos á que son aplicables.

¿De cuántas maneras puede ser la *remision ó condenacion*?—*Absoluta ó parcial*, *expresa ó tácita*. Las dos primeras se refieren al todo ó parte de la deuda. La segunda y tercera á la forma en que se manifiesta, bien con palabras ó por hechos. Es peculiar del Derecho mercantil la *condonacion* de los réditos por el recibo de la deuda principal, y la concedida á los quebrados por la junta de acreedores, obligatoria para todos.

¿Qué circunstancias deben concurrir en la *compensacion*?—1.^a, los créditos compensables deben ser *ciertos*, *liquidos*, *puros*, *vencidos* y de la misma especie y cualidad, y 2.^a, deben pertenecer, respectivamente, al deudor y al acreedor.

¿Qué excepciones tiene esta doctrina?—Dos: 1.^a, las ventas de los réditos no endosables son ineficaces en cuanto al deudor, hasta que le sean notificadas en forma ó éste las consienta extrajudicialmente, renovando su obligación en favor del cesionario, contra quien puede oponerse la *compensacion* de la deuda del cedente, contraída antes de la cesion. Los endosantes de los documentos de giro pueden alegar la *compensacion* de sus créditos y los del *librador y pagador*, contra el que reclame en fuerza del documento.

¿Qué condiciones debe reunir la cosa para que por su *extincion* termine el contrato?—Debe ser *especifica y determinada*, de manera que no pueda confundirse con otra, lo cual no es aplicable á las *fungibles*. Debe estar vencido el plazo y resultar satisfecho el acreedor de la naturaleza y condiciones de la cosa. Y por último, la extincion no debe ser efecto de la morosidad del deudor.

¿Cuáles son las causas más comunes de la rescision de los contratos?—La morosidad, el vicio ó menoscabo y otras nacidas de su objeto y circunstancias. La *lesion enorme y enormísima* y la *restitucion*, no rescinden los contratos mercantiles.

¿Cuándo tiene lugar la *prescripcion* como medio de extinguir las obligaciones?—En los casos y condiciones establecidas por el Derecho civil, si bien en términos más breves y fatales, contra los que no tiene lugar la *restitucion*, por ninguna causa, titulo ni privilegio. No pueden establecerse reglas generales y absolutas, porque el número de las excepciones marcadas por el Código mercantil es quizás mayor que el que comprende la regla general. Así, pues, sólo diremos que las acciones que por las leyes de comercio no tengan un plazo determinado para deducirlas en juicio, prescriben en el tiempo que corresponda, atendida su naturaleza, según las disposiciones del derecho común.

¿Cómo se interrumpe la *prescripcion*?—Por la demanda ú otro cualquier género de interpelacion judicial hecha al deudor, ó por la renovacion del documento en que se funde la accion del acreedor. En el primero de estos dos casos comenzará á contarse nuevamente el término de la *inscripcion* desde que se hizo la última gestion en juicio, á instancia de cualquiera de las partes litigantes, y en el segundo desde la fecha del nuevo documento; y si en él se hubiere prorogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

De las sociedades mercantiles: su fundacion: su constitucion y su disolucion.

Estos contratos, de uso frecuente y de importancia cada dia mayor, han sido tambien objeto del espiritu de reforma que dominaba en la legislacion, desde 1868. La ley de 19 de Octubre del siguiente año habia declarado libre la creacion de toda clase de Bancos, bolsas, sociedades de crédito y demás asociaciones que tuviesen por objeto cualquiera empresa industrial ó de comercio, y facultaba á los primeros para emitir billetes y obligaciones al portador. Tambien suprimió la tutela del gobierno, declarando que las sociedades no estarían sujetas á su inspeccion y vigilancia, quedando sometida la decision de sus cuestiones á los tribunales de justicia; y como medida transitoria estableció que los Bancos y sociedades existentes continuasen rigiéndose por sus estatutos, sin perjuicio de poder optar á los beneficios que dicha ley otorgaba, siempre que así lo acordasen los asociados. Finalmente, reconocia la necesidad de reformar el Código de comercio, y al efecto mandó proceder á su revision con objeto de modificarlo en el sentido de la más amplia libertad de los asociados, y á fin de ponerlo en consonancia con los adelantos de la época.

Pero esa amplia libertad ha tenido ya sus limitaciones. En cuanto á la creacion, régimen y gobierno de las bolsas, ha desaparecido, supuesto que en 10 de Julio de 1874 se restableció la ley de 8 de Febrero de 1851 y su reglamento, dadas para la Bolsa de Madrid, única que existe; y en 19 de Marzo del referido año de 1874, se suprimieron los Bancos de comision, para crear, bajo la base del de España, un solo *Banco nacional*, con sucursales en las principales poblaciones, y establecer la circulacion fiduciaria única, en sustitucion á la que existía entónces en várias provincias, que es el estado que mantiene hoy este importantísimo asunto.

¿Qué es *compañía mercantil*?—«El convenio que dos ó más personas hacen de poner en comun sus bienes, su industria ó algunas de estas cosas, con el objeto de tener algun lucro, aplicándolas á operaciones del comercio.» Los sócios pueden ser *capitalistas* ó *industriales*. Para que sea *mercantil* debe formarse con el objeto de verificar operaciones comerciales.

¿Qué clases hay de *compañías mercantiles*?—Tres: *sociedades colectivas*; *sociedades en comandita* y *sociedades anónimas*. La sociedad *accidental* ó de cuentas en participacion, no debe contarse entre las *compañías verdaderamente mercantiles*.

¿Qué es *sociedad colectiva*?—Aquella en que todos los sócios están obligados solidariamente á las resultas de las operaciones de las mismas, no sólo con los capitales que cada uno aportó ó prometió aportar al fondo comun, sino tambien con los demás bienes. Debe girar bajo una *razon social*, nombre que se dá al conjunto de apellidos de todos los sócios ó de algunos, bajo cuya firma se contratan y realizan las operaciones.

¿Qué solemnidades deben concurrir en la constitucion de las *compañías colectivas*?—Deben consignarse en escritura pública, sujeta al registro público de comercio, en donde han de registrarse igualmente todas las adiciones, modificaciones y reformas que sufra el contrato.

¿Qué requisitos debe contener la escritura?—Debe expresar necesariamente: 1.º, los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes; 2.º, la ra-

zon social ó denominacion de la compañía; 3.º, los sócios que han de tener á su cargo la administracion de la compañía y usar de su firma; 4.º, el capital que cada sócio introduce en dinero efectivo, crédito ó efectos; 5.º, la parte que haya de corresponderle en beneficios y pérdidas; 6.º, la duracion de la sociedad, que ha de ser necesariamente por un tiempo fijo, ó para un objeto determinado; 7.º, el ramo de comercio, fábrica ó navegacion sobre que ha de operar la compañía; 8.º, las cantidades que se designen á cada sócio anualmente para sus gastos particulares, y las compensaciones que en caso de exceso hayan de recibir los demás; 9.º, la sumision á juicio de árbitros en caso de diferencias entre los sócios, expresándose el modo de nombrarlos; 10, la forma en que se ha de dividir el haber social, disuelta que sea la compañía; 11, todos los demás objetos sobre que los sócios quisieren establecer pactos especiales; 12, cuando el capital, ó la parte de él que un sócio haya de poner, consista en efectos, se hará su valuacion en la forma que esté prevenida en el contrato de sociedad, ó en defecto de pacto especial sobre ello, se hará por peritos que nombren ambas partes.

¿Cómo debe hacerse la distribucion de ganancias y pérdidas?—Con arreglo á las condiciones estipuladas. No habiéndose determinado en el contrato de sociedad la parte que cada sócio deberá llevar en las ganancias, se dividirán éstas á prorata de la porcion de interés que cada cual tenga en la compañía, entrando en la distribucion los sócios industriales, si los hubiere, en la clase del sócio capitalista que tenga la parte más módica; las pérdidas se repartirán en la misma proporcion entre los sócios capitalistas, sin incluir en el repartimiento á los industriales, á menos que por pacto expreso se hubieren éstos constituido partícipes en ellas; estos tres casos últimos son requisitos *accidentales*.

¿A quién corresponde la direccion de la compañía?—A todos los asociados que, por la imposibilidad de ejercerla en comun, delegan sus facultades en *factores* ó *gerentes*, quienes ejecutarán los actos administrativos, bajo la *razon social* y firma adoptadas.

¿Qué obligaciones nacen de las *compañías colectivas*?—Relativamente al capital: 1.º, la de aportar á la caja la parte que cada sócio se haya obligado á llevar, para cuyo cumplimiento puede la compañía proceder ejecutivamente contra sus bienes ó rescindir el contrato; 2.º, la de sufrir las pérdidas, en la proporcion estipulada, á excepcion de los sócios industriales, si no se ha pactado otra cosa. Relativamente á la administracion: primero, la de cooperar á la buena direccion de la compañía, interviniendo en aquélla, cuando por pacto especial no fuese excluido; segundo, la de prestar en la administracion el mismo interés y diligencia que en la de sus bienes, y llevar los libros de contabilidad con todas las formalidades legales.

¿Qué prohibiciones son consecuencia de este contrato?—1.º, ningun sócio puede segregar ni distraer del acervo comun más cantidad que la que se hubiere designado á cada uno en las sociedades colectivas ó en comandita para sus gastos particulares; y si lo hiciere podrá ser compelido á su reintegro, como si no hubiese completado la porcion de capital que se obligó á poner en la sociedad, ó en su defecto, será lícito á los demás sócios retirar una cantidad proporcional, segun el interés que tengan en la masa comun; 2.º, no pueden los sócios aplicar los fondos de la compañía ni usar de la firma social para negocios por cuenta propia, y en el caso de hacerlo perderán, en beneficio de la compañía, la parte de ganancias que les pueda corresponder en ella, y podrá tener lugar la rescision del contrato social en cuanto á ellos, sin perjuicio del reintegro de los fondos de que hubieren hecho uso, y de indemnizar además todos los perjuicios que á la sociedad se hayan seguido; 3.º, ningun sócio puede transmitir á otra persona el interés que tenga en la sociedad, ni sustituirla en su lugar para que desempeñe los oficios que á él le tocaren en la administracion social, sin que preceda, tanto para lo uno como para lo otro, el consentimiento de los só-

cios; 4.^a, ningún sócio puede privar de la administracion y de usar la firma de la compañía al que hubiese obtenido estas facultades por condicion expresa del contrato social; 5.^a, en las sociedades colectivas que no tengan género de comercio determinado, no podrán sus individuos hacer operaciones por su cuenta sin que preceda consentimiento de la sociedad, la cual no podrá negarlo sin acreditar que de ello le resulta un perjuicio efectivo y manifiesto; los sócios que contravengan á esta disposicion aportaran al acervo comun el beneficio que les resulte de estas operaciones, y sufrirán individualmente las pérdidas, si las hubiere; 6.^a, el sócio industrial no puede ocuparse en negociacion de especie alguna, á ménos que la sociedad se lo permita expresamente, y en caso de verificarlo, quedará á arbitrio de los sócios capitalistas excluirlo de la compañía, privándole de los beneficios que le correspondiesen en ella, ó aprovecharse de los que haya granjeado en las negociaciones hechas en fraude de esta disposicion; 7.^a, la trasmision de los derechos de un sócio, hecha sin consentimiento de la sociedad, es ineficaz para éste.

¿Qué derechos tienen los sócios?—Además de la administracion en que pueden intervenir, tienen derecho á que la compañía les abone los gastos, daños y perjuicios ocasionados inmediatamente por sus servicios. Pueden examinar la contabilidad y correspondencia y otros análogos; y con respecto al capital, tienen derecho á percibir la cantidad que se les asigne para sus gastos, las utilidades que les correspondan y con derecho á la devolucion de los que hayan impuesto en el fondo social, cuando se liquide la compañía.

¿Qué es *sociedad anónima*?—«La que se forma creando un fondo por acciones, para emplearlo en un objeto determinado por mandatarios elegibles y amovibles á voluntad de los sócios.» Llámase *anónima* porque no tiene *razon social*, ni resulta obligado personalmente ningún sócio.

¿Qué requisitos deben cumplirse en su constitucion?—Además de la escritura pública registrada, necesita un reglamento para su gobierno. Para determinar las circunstancias que deben concurrir es necesario distinguir dos actos capitales que intervienen en la instalacion de las compañías *anónimas*, y son: su *fundacion* y su *constitucion definitiva*.

¿Cuándo se dice que está *fundada* la sociedad, y cuándo que está *constituida*?—Después del otorgamiento de la escritura y formacion del reglamento puede decirse que está *fundada*. Concedida la autorizacion antes, y sin este requisito ahora, impresos y publicados los estatutos y depositada en la caja la parte legal del capital, la sociedad está *constituida definitivamente*. Para el primer acto no es necesario la concurrencia de todos los accionistas; basta la de las personas que han concebido el proyecto, debiendo intervenir aquéllos en el segundo.

¿Qué debe contener la escritura de *fundacion*?—Además de las generalidades de todo documento público, debe manifestarse en ella el objeto de la compañía, su nombre, su duracion, capital, número de acciones, forma de su pago, administracion, distribucion de dividendos, formacion de inventarios, balances y fondo de reserva, cuyo limite debe ser un 10 por 100 de capital.

¿Qué debe contener el reglamento?—Toda la parte referente á la administracion y direccion de las operaciones á que se dedique la compañía.

¿Con qué nombre deben girar las compañías *anónimas*?—Con una denominacion que guarde conformidad con el objeto y fines de su fundacion. A los *gerentes* corresponde el uso de la *firma social*.

¿Qué capitales forman el *social*?—Dos, uno *nominal* y otro *efectivo*. El *nominal* es el máximo prefijado en la escritura de fundacion, y debe ser entregado por los accionistas, realizándose cuando la necesidad y los estatutos lo reclamen. El *efectivo* es el que se paga realmente, y comienza á en-

tregarse antes de la constitucion definitiva. A estos hay que agregar el llamado *fondo de reserva*.

¿Cómo se distribuye el capital *efectivo*?—Se divide en *acciones* de cuota fija que se expiden despues de la constitucion de la compañía á favor de cada sócio por el valor entregado, cuyas *acciones* son cotizables en la bolsa como valores comunes.

¿Puede destinarse el capital social á objetos diferentes del de la compañía?—La ley permite que los sobrantes se apliquen á hacer *descuentos* ó *préstamos* que no pasen de noventa dias, recibiendo en garantía deuda consolidada.

¿Cuál es el objeto del fondo de reserva?—Prevenir una eventualidad, y aumentar las garantías sociales. Fórmase con una parte de las utilidades, sin las que no puede existir. Va paulatinamente aumentando, teniendo por límite *minimum* el 10 por 100 del capital social.

¿A quién corresponde la administración de estas compañías?—Antes de la constitucion definitiva corresponde á las personas designadas interinamente en la escritura. Despues de la constitucion definitiva, á los *gerentes* nombrados en la primera junta general. Aquélla es *interina*, limitada á las gestiones relativas á la formacion de la sociedad. En la esfera de ésta entra todo lo concerniente á la direccion económica de la compañía.

¿Cuáles son las obligaciones principales de los administradores definitivos?—1.^a, comenzar las operaciones de la compañía dentro de un plazo señalado; 2.^a, expedir los títulos de las acciones y sus trasferencias, y registrarlos á nombre de las personas á quien se concedan; 3.^a, guardar las prescripciones de la escritura, reglamento y estatutos, llevando la contabilidad y correspondencia con las formalidades del Código; 4.^a, constituir el depósito en acciones en la cantidad señalada por los estatutos dentro de los quince dias siguientes á su nombramiento; 5.^a, formar el balance general. Les está prohibido expedir documentos al portador, no estando autorizada la compañía para ello, y hacer negocios extraños al objeto de la misma. La falta del cumplimiento de sus deberes legitima la indemnización de daños y menoscabos, sin perjuicio de las multas y responsabilidad criminal á que se hagan acreedores.

¿Qué obligaciones y derechos tienen los sócios *anónimos*?—Están obligados á poner en la caja social el importe de las acciones por que se suscriben, y tienen derecho á votar en las juntas generales, examinar los libros y operaciones de la compañía, ceder sus acciones, no siendo administradores, percibir utilidades y el importe de aquéllas, aumentado ó disminuido, segun el éxito de la compañía.

¿Qué atribuciones corresponden á la junta general de accionistas?—Nombrar y separar los administradores é inspectores, designar su remuneracion, acordar los dividendos y emisiones de títulos y demás que se le concedan en la escritura.

¿Qué es sociedad en comandita ó comanditaria?—«Aquélla en que unos se obligan á poner el capital y otros á administrarlo en nombre propio y bajo su responsabilidad, participando todos de las ganancias en la proporcion que establecen.» Bien examinada, es un compuesto de sociedad *colectiva* y *anónima*, porque tiene sócios obligados solidariamente y sócios que sólo prestan su capital. Los primeros se llaman *gerentes*; los segundos, *comanditarios*.

¿De cuántas maneras puede constituirse la sociedad en comandita?—De dos: dividiendo el capital en *acciones* ó conservándolo sin division. En el primer caso les son aplicables las disposiciones de las *anónimas*. En el segundo, las de las *colectivas*, con pequeñas excepciones.

¿Qué diferencias separan las sociedades comanditarias por acciones de las *anónimas*?—Aquéllas tienen *razon social* y éstas *denominacion social*. Aquéllas, no obstante la division del capital en acciones, tienen sócios respon-

sables solidariamente, cuyos nombres componen la *razon social* bajo que gira y firma, y éstas no tienen mas que sócios *anónimos*. La administracion de aquéllas corresponde á los *gerentes* nombrados en la escritura de fundacion; la de éstas pertenece á los que hayan sido elegidos en la primera junta general. Diferéncianse tambien en la diversidad de derechos. Los *comanditarios* tienen los mismos que los *anónimos*, y los *gestores* tienen además opcion á la indemnizacion que pudiera corresponderles por razon de su administracion.

¿En qué se diferencian las sociedades *comanditarias sin acciones* de las llamadas *colectivas*?—Pocos son los puntos en que discrepan, prescindiendo de la existencia de los sócios *comanditarios* en aquélla, quienes no pueden incluir sus nombres en la *razon social*, intervenir en la administracion ni enajenar sus derechos sin consentimiento de la sociedad. Los *gestores* de la *comanditaria* no pueden percibir capital á la disolucion de aquélla, porque no lo han puesto, y los sócios *colectivos* recogen en tal caso el que les corresponda.

¿Por qué modos se extinguen las compañías mercantiles?—Por la *disolucion* y por la *rescision*. La primera tiene lugar por la conclusion del contrato. La segunda se verifica por la separacion ó exclusion de algun sócio, para quien se rescinde, por consecuencia de la falta del exacto cumplimiento de sus deberes, por ejemplo, no depositando la parte del capital correspondiente, haciendo operaciones prohibidas, etc., y por otras causas comunes á todas las compañías. Debe ser pedida por los demás sócios.

¿Qué efectos produce la *rescision*?—La separacion del sócio que dá margen á ella, sin perjuicio de quedar obligado á responder de la parte de pérdida que le corresponda. Su capital queda sujeto al éxito de las operaciones pendientes hasta su terminacion. Para que produzca efecto legal respecto al público, debe tomarse razon de ella en el registro de comercio.

¿Qué otras causas produce la disolucion de las compañías?—Unas *comunes* á todas, y otras *especiales*. Son *comunes* la realizacion del objeto ó conclusion del término por que se constituyeron, la pérdida del capital social y la quiebra de la compañía. Son *especiales* y aplicables á las *colectivas* y en *comandita sin acciones*, la muerte, demencia ó quiebra de algun sócio, y su simple voluntad, si no estuviere obligado por tiempo fijo. Del mismo modo que la *rescision*, para que produzca efecto contra extraños, es preciso que la disolucion se anote y publique en el registro, excepto cuando tiene lugar por la conclusion del término.

¿Cuáles son los efectos de la *disolucion*?—La extincion y liquidacion de la sociedad con todas sus consecuencias, como rendicion de cuentas, realizacion de las operaciones pendientes y adjudicacion consiguiente del fondo social, por los sócios administradores hasta entónces. Estas operaciones y demás actos se gestionarán bajo la *razon social* de la compañía, agregándole las palabras en *liquidacion*.

¿Qué actos comprende la liquidacion de las compañías?—Además de la terminacion de las operaciones pendientes, comprende los balances, arreglo de cuentas corrientes, division de fondos liquidados, adjudicacion y otras de análoga naturaleza.

¿Qué forma se ha de observar en la liquidacion de las compañías?—La que se haya pactado en la escritura de fundacion; y si nada se hubiese dicho en ella sobre el particular, se observarán las reglas siguientes: 1.ª, no habiendo contradiccion por parte de algun sócio, continuarán encargados de la liquidacion los que hubieren tenido la administracion del caudal social; pero si lo exigiere cualquiera sócio, se nombrarán á pluralidad de votos dos ó más liquidadores de dentro ó fuera de la compañía, para lo cual se celebrará sin dilacion junta de todos sus individuos, convocando á ella á los ausentes con tiempo suficiente para que puedan concurrir por sí

ó por legítimo apoderado; 2.^a, los socios administradores formarán en los quince días inmediatos á la disolucion de la sociedad el inventario y balance del caudal comun, cuyo resultado pondrán en conocimiento de los socios; si omitieren hacerlo, se podrá establecer á instancia de cualquiera socio una intervencion sobre la gestion de los administradores, á cuya costa harán los interventores el balance; 3.^a, cualesquiera que sean los liquidadores, estarán obligados á comunicar á cada socio mensualmente un estado de la liquidacion, bajo la pena de destitucion; 4.^a, luego que el estado de las negociaciones permita la division del haber social, segun la calificacion que hagan los liquidadores, ó la junta de socios, que cualquiera de ellos podrá exigir que se celebre para este efecto, se procederá á verificala, ejecutándose por los mismos liquidadores dentro del término que la junta prefiere; las reclamaciones contra la division se decidirán por jueces árbitros; 5.^a, ningun socio puede exigir la entrega del haber que le toque en la division de la masa social mientras no estén extinguidos todos los créditos pasivos de la compañía, ó se deposite su importe, si la entrega no se pudiere verificar de contado; los socios *mutuantes* para con la compañía deben ser satisfechos como acreedores al fondo comun, antes de hacerse la distribucion del haber liquido; 6.^a, los bienes particulares de los socios que no se incluyeron en la formacion de la sociedad, no pueden ser ejecutados para pago de las obligaciones que ésta contrajo en comun, sino despues de haberse hecho excursion en el haber de la social; los *comanditarios*, hecha la liquidacion, podrán retirar su capital siempre que resulte caudal bastante para atender á las responsabilidades de la compañía; 7.^a, los libros y papeles de la sociedad se conservarán, bajo la responsabilidad de los liquidadores, hasta la total liquidacion de ella y pago de todos los que, bajo cualquier título, sean interesados en su haber.

¿Quién puede promover la liquidacion de la compañía?—Todo socio tiene derecho á promover la liquidacion y division del caudal social, bajo las reglas que van establecidas, y de exigir de los liquidadores cuantas noticias puedan interesarles sobre el estado de la liquidacion y de las operaciones pendientes de la sociedad.

¿Cómo se define la sociedad *accidental* ó de cuentas en participacion?—«El contrato en que dos ó más comerciantes convienen en llevar parte en algun negocio que haga alguno de ellos en su nombre y bajo su crédito particular, participando de sus resultados en la proporcion que establezcan.» Es más bien que *sociedad* una *comision* ó *mandato* mercantil. No exige formalidades especiales en su constitucion, giro y terminacion, debiendo liquidarse por el mismo socio que la hubiese dirigido, obligado á rendir cuentas comprobadas.

Préstamos.

¿Qué es *préstamo mercantil*?—«Un acto en virtud del que un comerciante recibe una cantidad de dinero ó mercancías, para destinarla á las operaciones de su tráfico, obligándose á devolver otro tanto de la misma especie.» De esto se deduce que sólo el *préstamo mutuo*, y nunca el *comodato*, tiene el carácter de mercantil.

¿Qué condiciones deben concurrir segun eso en el *mutuo* para ser *mercantil*?—Dos: 1.^a, que tenga lugar entre personas calificadas de comerciantes, con arreglo al art. 1.^o de este Código, ó que cuando menos el deudor tenga esta calidad; 2.^a, que se contraiga en el concepto y con expresion de que las cosas prestadas se destinan á actos de comercio, y no para necesidades ajenas de este tráfico. Puede ser contraido bajo cualquiera de las formas en que deben celebrarse los contratos mercantiles, ya referidas.

¿Qué obligaciones nacen del préstamo?—La devolución de la cantidad prestada ó de otra cosa de la misma especie y calidad que la recibida, al vencimiento del plazo prefijado por el contrato, ó por el tribunal en su defecto, si se determinó de un modo tácito; y si el préstamo se hubiese estipulado sin plazo, esto es, por tiempo indeterminado, treinta días después de haber sido prevenido el deudor. La demora dá causa á *intereses legales* desde el requerimiento, los cuales se regularán, consistiendo en géneros el préstamo, por el valor que éstos tuvieren en la época del vencimiento.

¿Qué son *réditos* ó *intereses*?—«Una cantidad que el deudor tiene que pagar al acreedor, además del capital, por el uso que hace de lo prestado.» Dividense en *convencionales* y *legales*. Aquéllos nacen de la voluntad, y deben pactarse por escrito, no pudiendo exceder del 6 por 100, según el Código; doctrina que ha sido modificada por la ley que abolió la tasa del interés, proclamando su libre estipulación sobre el capital numerario dado en préstamo. Llámense *legales* los fijados previamente por la ley, que, según aquella, debe fijarlos el gobierno á principio de cada año, hasta cuyo tiempo se considera como *legal* el de 6 por 100 anual. Las tres reglas siguientes aclaran perfectamente la aplicación práctica de esta doctrina.

1.ª No se deben *réditos* de *réditos* devengados en los préstamos mercantiles, ni otra especie de deuda comercial, mientras que, hecha liquidación de éstos, no se incluyen en un nuevo contrato, como aumento de capital; ó bien hasta que, de común acuerdo, ó bien por una declaración judicial, no se fija el saldo de cuentas, incluyendo en él los *réditos* devengados á la fecha, lo cual no podrá tener lugar sino cuando las obligaciones de que procedan estén vencidas, y sean exigibles de contado.

2.ª Después de intentada la demanda judicial contra el deudor por el capital y *réditos*, no puede hacerse acumulación de los que se vayan devengando para formar un aumento de capital que produzca interés.

3.ª Siempre que un acreedor haya dado documento de recibo á su deudor por la totalidad del capital de la deuda, sin reservarse expresamente la reclamación de *réditos*, se tendrán éstos por condonados.

Comision mercantil.—Comisionistas.

¿Qué es *comision*?—«Un contrato por el que un comerciante dá el encargo de hacer algunas operaciones de comercio á otro que lo admite y se constituye en la obligación de cumplirlo, mediante una retribución.» Diferénciase del *mandato* en que el mandatario obra á nombre del mandante, á quien obliga, y el *comisionista*, que es la persona á quien se dá el encargo, gestiona en nombre propio, sin obligar al comitente.

¿De cuántas maneras puede constituirse la *comision*?—Por todos los medios por que pueden otorgarse los contratos, con la especialidad de que pueden celebrarse de palabra, cualquiera que sea la cuantía del negocio, siempre que se ratifique por escrito antes de su conclusión. El *comisionista* debe manifestar en el correo inmediato al recibo del encargo su no aceptación, y está obligado á practicar las diligencias necesarias para la conservación y seguridad de los efectos en su poder hasta que el comitente designe quién deba reemplazarle, lo cual, si se dilatare, le autoriza para el depósito judicial y la venta de los efectos precisos para cubrir aquellos gastos.

¿Cómo debe cumplirse el desempeño de la *comision*?—Gestionando por sí mismo como si lo hiciese en negocio propio; pero conformándose con las instrucciones del comitente, cuyo cumplimiento puede suspender en casos

urgentes. Debe consultar los casos no previstos y comunicar las circunstancias que puedan influir en el buen éxito del negocio y su terminación, consignar en los libros y recibos el nombre del comitente, y responder de los daños y extravíos de fondos en metálico, aunque sea por caso fortuito ó por efecto de violencia. Le está prohibido prestar, anticipar y distraer, en manera alguna, los fondos que le hayan entregado.

¿Cuáles son los deberes del *comisionista*, terminada la *comision*?—Avisar al comitente en el correo inmediato; rendir cuentas conforme á los asientos de sus libros, y remitir ó retener, según las instrucciones, el caudal sobrante, cobrándose de la retribucion convenida ó que le corresponda, según el uso de la plaza, y de los desembolsos que haya hecho.

¿Cómo se extingue la *comision*?—Por la conclusion del negocio, la muerte ó inhabilitacion del comisionista y la revocacion del comitente.

¿Qué restricciones tiene el *comisionista* en las *comisiones* de comprar y vender?—No puede pagar las cosas que deba comprar para otro á mayor precio que el corriente en la plaza, aun cuando el *maximum* señalado por el comitente exceda de éste, pudiendo aquél aceptar el contrato ó dejarlo por cuenta del *comisionista*. No debe vender por cuenta ajena á menor precio que el señalado por el comitente, á quien queda responsable de la diferencia, ni comprar para si ni para otro, lo que se le ha encargado que venda; ni hacerlo al fiado y á otros plazos que los señalados por el uso general, salvo los pactos en contrario.

¿Qué debe tenerse presente en la *comision de trasportes*?—Debe celebrar sus contratos á precios corrientes y con personas conocidas, asegurar las conducciones teniendo orden y fondos, ó manifestar que no puede hacerlo, atemperándose en todo á las instrucciones y términos del contrato.

¿Qué reglas son peculiares á las *comisiones* para recibir y conservar efectos?—1.^a, el comisionista que hubiere recibido efectos por cuenta ajena, sea porque los hubiese comprado para su comitente, ó porque éste se los hubiese consignado para que los vendiera, ó para que los conservara en su poder ó los remitiera á otro punto, es responsable de la conservacion de los efectos en los términos que los recibió; pero esta responsabilidad cesa cuando la destruccion ó menoscabo que sobrevenga en dichos efectos proceda de caso fortuito inevitable; 2.^a, tampoco es responsable el comisionista de que los efectos que obren en su poder se deterioren por el trascurso del tiempo, ó por otro vicio inherente á la naturaleza misma de los efectos; 3.^a, cualquiera que sea la causa que produzca alguna alteracion perjudicial en los efectos que un comisionista tiene por cuenta de su comitente, debe hacerla constar en forma legal sin pérdida de tiempo, y ponerla en noticia del propietario; 4.^a, las mismas diligencias debe practicar el comisionista siempre que al encargarse de los efectos que le hayan sido consignados notare que se hallan averiados, deteriorados y en distinto estado del que conste en las cartas de portes ó fletamentos, ó de las instrucciones que le haya comunicado el propietario; y no haciéndolo, podrá éste exigir que el comisionista responda de las mercaderías que recibió, en los términos en que se le anunció su remesa, y resulten de las cartas de portes ó del conocimiento; 5.^a, si por culpa del comisionista perecieron ó se deterioraren los efectos que le estuvieren encargados, abonará al propietario el perjuicio que se le hubiese irrogado, graduándose el valor de los efectos por el precio justo que tuvieren en la plaza en el dia en que sobrevino el daño; 6.^a, si ocurriere en los efectos encargados á un comisionista alguna alteracion que hiciere urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y fuese tal la premura que no haya tiempo para dar aviso al propietario y aguardar sus órdenes, acudirá el comisionista al Tribunal de comercio de la plaza, decia el Código, y hoy al juzgado de primera instancia, el cual autorizará la venta con las solemnidades y precauciones que estime más prudentes en beneficio del propietario.

Compra-venta.

¿Qué es *compra-venta mercantil*?—Un convenio en virtud del cual uno se obliga á entregar á otro un objeto de comercio, mediante una cantidad consistente en dinero. La *cosa* comprada ha de ser *mueble*, presidiendo siempre en el contrato la idea del lucro, obtenido por medio de la reventa de aquélla, en la misma forma en que se compró ó en otra diferente, cuyo ánimo debe existir al tiempo de hacerse la compra. Exceptúanse las primeras materias que sean accesorias de un contrato civil, las cuales quedan sujetas á la ley comun.

¿Qué ventas no tienen el carácter de mercantiles?—Las compras debien raices y efectos accesorios á éstos, aunque sean muebles; las de objetos destinados al consumo del comprador ó de la persona por cuyo encargo se haga la adquisicion; las ventas que hagan los labradores y ganaderos de los frutos de sus cosechas y ganados; las que hagan los propietarios y cualquiera clase de personas, de los frutos ó efectos que perciban por razon de renta, dotacion, salario, emolumento ú otro cualquiera título remuneratorio ó gratuito; y finalmente, la reventa que haga cualquiera persona que no profese habitualmente el comercio, del residuo de los acopios que hizo para su propio consumo. Siendo mayor cantidad la que estos tales ponen en venta que la que hayan consumido, se presume que obraron al comprarlos con ánimo de vender lucrativamente y se reputarán mercantiles la compra y la venta.

¿Qué formalidades deben observarse en la celebracion de este contrato?—Las mismas que en todos los demás. Exceptúanse las ventas de efectos públicos, cédulas y títulos de crédito, de sociedades por acciones y bienes pertenecientes á quiebras, en las cuales interviendrá necesariamente un corredor, y donde no lo haya, se ejecutarán en subasta pública, previos los edictos y avisos oportunos.

¿Qué significacion tienen las *arras* en la *compra-venta mercantil*?—Se consideran únicamente como parte de pago del precio, en signo de ratificacion del contrato y no de condicion suspensiva. Los contrayentes no pueden retractarse de él aun cuando las pierdan voluntariamente.

¿De cuántas maneras puede otorgarse la compra-venta?—Puede ser *pura y condicional, conmutativa y aleatoria*. Son sus requisitos esenciales el *consentimiento*, la *cosa* y el *precio*. El *consentimiento* puede expresarse entre presentes y entre ausentes. La *cosa* puede ser *determinada* ó *indeterminada*, segun que pueda ó no ser confundida y sustituida por otra. El *precio* debe ser *verdadero y cierto*, sin que sea necesaria su exacta proporcion con el valor de la cosa vendida, como acontece en la *compra-venta civil*.

¿Qué derechos nacen en favor del comprador?—1.º, puede examinar, gustar y probar la cosa vendida, á cuya entrega tiene derecho, y no recibirla si la encuentra alterada ó defectuosa, ó no conforme con las muestras, en vista de las cuales ha comprado, y tiene accion á ser indemnizado, si opta por el recibo de los géneros; 2.º, demandar del vendedor el reintegro de las resultas de los vicios internos de la cosa que no pudieran percibirse por el reconocimiento hecho al tiempo de la entrega, cuyo derecho debe ejercitar en los seis meses siguientes á ésta; 3.º, las reclamaciones consiguientes á la eviccion y saneamiento.

¿Qué obligaciones afectan al comprador?—1.ª, debe entregar el precio dentro del termino de diez dias, si no hubiese plazo estipulado en el acto de hacerse la entrega; pagar los gastos causados en el recibo y extraccion de los géneros fuera del lugar de aquélla, así como los de traslacion al depósito y los ocasionados en su conservacion; 2.ª, recibir los efectos en el

plazo convenido, y no habiéndolo, en el legal; recogerlos del punto en que se hallen al tiempo de la venta, justificar los vicios que contengan, y pedir su depósito en los casos en que proceda; 3.^a, cumplir, en fin, todos los deberes correlativos á los derechos del vendedor.

¿Cuáles son éstos?—1.^o, reclamar el precio, para cuya realizacion se considera como acreedor de dominio sobre los géneros vendidos en caso de demora del comprador, hasta el momento de su entrega, si la venta se ha hecho *al fiado*, y aún despues, si se ha hecho *al contado*, mientras se conservan en el mismo estado en que fueron vendidos; 2.^o, para exigir su exámen, peso y medida y solicitar el depósito judicial en el caso de resistencia infundada á su recibo por parte del comprador.

¿Cuáles son sus obligaciones?—1.^a, tener á disposicion del comprador los efectos dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato, en toda su integridad y sin alteracion, debiendo conservarlos en calidad de depósito desde que el comprador se dá por satisfecho de su bondad, y remitirlos oportunamente al punto acordado; 2.^a, pagar los gastos de la entrega hasta ponerlos pesados y medidos á disposicion del comprador, expidiendo las correspondientes facturas con el recibo al pié, del precio ó de la parte de éste que hubiese recibido; 3.^a, es responsable de la indemnizacion de perjuicios por los vicios y defectos de la cosa en los casos y tiempo en que procedan.

¿Cuándo tiene lugar la rescision de las ventas mercantiles?—Casos hay en que es *necesaria*, y otros en que es *voluntaria*. Es *necesaria* cuando la cosa vendida perece ó se deteriora sin culpa del vendedor, ó éste vende ó entrega á otro la especifica y determinada, porque en tales casos no puede realizarse la entrega. Es *voluntaria* cuando la solicitan los interesados por falta de entrega ó recibo de la cosa vendida y por los vicios de que adolezca. Sólo entónces tiene lugar la *rescision*, pues á diferencia del derecho civil, las ventas mercantiles no se rescinden por lesion enorme ni enórmisima, y sólo se dá la repeticion de daños y perjuicios contra el contratante que procediere con dolo en el contrato ó en su cumplimiento.

Cuando la facultad de rescindirle compete al comprador, puede éste elegir entre la *rescision* y la *indemnizacion* de daños y perjuicios, si la causa de aquélla procede de culpa del vendedor.

¿A quién perjudica la pérdida de la cosa vendida y no entregada?—Por regla general perece para el vendedor, siendo sólo imputable al comprador cuando ha sido moroso en recibirla.

¿A quién corresponden los aumentos y menoscabos de la cosa?—Al responsable del daño ó la pérdida, el cual debe percibir las utilidades ó beneficios.

¿Qué son ventas *aleatorias*?—«Las que recaen sobre objetos cuya existencia, en todo ó en parte, pende de la eventualidad.» Diferéncianse de las ventas *condicionales* en que éstas no son eficaces hasta el cumplimiento de la condicion, y aquéllas quedan perfectas é irrevocables desde su otorgamiento, por más que sus resultados estén pendientes de un suceso incierto.

¿A qué se dá el nombre de *venta de esperanza*?—A la que tiene por objeto una cosa que no existe al tiempo de otorgarse, y cuya existencia es más ó menos probable. Es contrato *condicional y aleatorio* á la vez, y tiene por requisito *esencial*, además de los comunes, la circunstancia de que el suceso de que depende no se haya verificado, ó cuando menos, que no haya llegado á conocimiento de los contratantes su realizacion.

¿Qué son ventas á *provecho comun*?—«Las que se celebran con el pacto de que los beneficios que resulten en la reventa de los efectos vendidos se han de dividir entre vendedor y comprador, en la proporcion en que hayan convenido.» Es contrato *aleatorio* porque no es conocido el precio á que pueden venderse los efectos.

Permuta.

¿Qué es *permuta*?—«Un contrato por medio del que uno adquiere el dominio de una cosa, dando otra en recompensa.» Es *simple*, cuando no media apreciación de valores, y *estimatoria*, cuando esto tiene lugar.

Es tan poco frecuente este contrato, que el derecho mercantil no ha alterado en nada su naturaleza, disponiendo por ello que se rija por las mismas reglas que van prescritas para las compras y ventas, en cuanto éstas sean aplicables á las circunstancias especiales de este género de convenciones.

Contratos accesorios.

¿Qué son *contratos accesorios*?—Los que no pueden existir sin que dependan de otro anterior, del cual provenga la obligación principal. Tienen por objeto el *afianzamiento y seguridad* de las transacciones y su realización.

¿Ha modificado el derecho mercantil la *prenda é hipoteca*?—No se ocupa de estos derechos *reales*, pero los admite y concede preferencia sobre los créditos no privilegiados.

¿Qué circunstancias debe reunir la fianza para que se considere *mercantil*?—Para que un *afianzamiento* se considere mercantil no es necesario que el fiador sea comerciante, siempre que lo sean los principales contrayentes, y que la fianza tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil.

El *afianzamiento mercantil* se ha de contraer *necesariamente* por escrito, sin lo cual será de ningún valor y efecto.

Las reglas de derecho común sobre los *afianzamientos ordinarios* son aplicables á los *mercantiles*, en cuanto no han sido modificadas por las disposiciones del Código de comercio.

Depósito.

¿Qué es *depósito mercantil*?—Un contrato por medio del cual un comerciante entrega á otro uno ó varios objetos de comercio, por consecuencia de alguna operación mercantil, para que los custodie y devuelva cuando se le reclamen. Llámase *voluntario* al que se verifica en condiciones normales, eligiendo el deponente á su placer la persona del depositario; si las cosas entregadas son específicas, denominase *regular*; é *irregular*, si consiste en cosas fungibles. Llámase *necesario*, cuando un peligro inminente, la ley ó una sentencia, obligan á su constitución. En el primer caso es *miserable*, en el segundo *legal* y en el tercero *judicial*. A diferencia del derecho común, el *depósito mercantil* dá derecho al depositario á exigir una retribución, distinción importantísima para la práctica.

¿Qué derechos y obligaciones nacen de este contrato?—Los derechos y obligaciones respectivas del *deponente* y del *depositario* son las mismas que existen entre los *comitentes* y *comisionistas* que hemos enumerado. Como en él no se trasfiere el dominio, el *depositario* no puede usar del depósito, á

menos que se le faculte para ello, en cuyo caso se convierte en *irregular*. El *deponente*, si no se hubiese pactado nada sobre el caso concreto, puede reclamar la devolución del depósito en el lugar convenido ó en el del contrato, si no hubiese habido pacto, cuando lo crea conveniente.

Trasporte terrestre.

¿Cómo se define?—Un contrato «en virtud del que uno se obliga á trasladar de un punto á otro por tierra, canales ó ríos navegables, las personas ó mercancías ajenas, por cierto precio; y á entregar estas últimas á las personas á quien vayan dirigidas. Es un verdadero *arrendamiento de obras*.»

¿Qué requisitos debe contener la *carta de porte*?—1.º, el nombre, apellido y domicilio del cargador; 2.º, el nombre, apellido y domicilio del porteador; 3.º, el nombre, apellido y domicilio de la persona á quien va dirigida la mercadería; 4.º, la fecha en que se hace la expedición, 5.º, el lugar donde ha de hacerse la entrega; 6.º, la designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas ó signos exteriores de los bultos que se contengan; 7.º, el precio que se ha de dar por el porte; 8.º, el plazo dentro del que se ha de hacer la entrega al consignatario; 9.º, la indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto ha mediado algún pacto. Su fuerza probatoria sólo puede enervarse por falsedad ó error involuntario en su redacción.

¿Qué obligaciones nacen del *trasporte*?—Unas relativas al cargador, otras al consignatario y otras al porteador. El *cargador* debe entregar los efectos en tiempo oportuno y en la forma convenida para su conducción, pagar el porte y los gastos que de la misma se ocasionen y sufrir las pérdidas y averías hijas de fuerza mayor, caso fortuito ó vicios de los efectos.

El *consignatario* debe examinar los que se le remitan, reclamar sus faltas y averías en el acto, si son visibles, y dentro de veinticuatro horas despues, ó antes de pagar el porte, cuando no se adviertan; debe recoger la *carta de porte* original, expedir recibo y satisfacer el porte y los gastos ocasionados dentro de aquel tiempo.

El *porteador* está obligado á practicar cuanto se haya estipulado en el contrato acerca del tiempo, forma y lugar de la conducción, debiendo sujetarse y cumplir igualmente con las leyes fiscales y de salubridad y seguridad pública. Debe hacer la entrega á la persona á quien vayan dirigidos los efectos ó á su representante, en el punto convenido y en el estado en que los reciba; pedir el depósito judicial y la venta de los necesarios para el pago del porte y gastos suplidos, no verificándolo el consignatario, quedando responsable de las faltas y averías que hayan sufrido por su culpa.

¿En qué consiste la responsabilidad del porteador?—En el abono total ó parcial de los objetos porteados.

¿Qué derechos competen á cada una de las tres personas que intervienen en el contrato?—Los relativos á las obligaciones expuestas. Puede además el cargador variar la consignación de los efectos que entregó al porteador mientras estuvieren en camino, y éste cumplirá su orden con tal que al tiempo de prescribirle la variación de destino le devuelva en el acto el duplicado de la carta de porte suscrita por el porteador.

Si la variación del destino dispuesta por el cargador exigiese que el porteador varíe de ruta, ó pase más adelante del punto designado en la carta de porte para la entrega, se fijará de comun acuerdo la alteración

que haya de hacerse en el precio de los portes, y en otra forma no tendrá más obligacion el porteador que la de hacer la entrega en el lugar prefijado en el primer contrato.

Seguros.

¿A qué se dá el nombre de *seguros*?—«A los contratos aleatorios que tienen por objeto atenuar las consecuencias funestas de algun riesgo.» Diviendense en *mútuos ó reciprocos*, y *singulares ó particulares*. Unos y otros reciben diferentes denominaciones, por razon de las cosas y riesgos que tratan de asegurar. Cuando el contrato tiene lugar entre varias personas sujetas al mismo riesgo, comprometiéndose todos á resarcir proporcional y mútuamente el daño causado, el contrato es de *seguros mútuos*. Cuando el resarcimiento constituye una obligacion que debe cumplir una persona en favor de otra, mediante una retribucion, el *seguro es singular*.

Llábase *asegurador* al que toma el riesgo sobre sí; *asegurado* al que tiene derecho á la indemnizacion, y *prima* á la retribucion ó precio del seguro.

¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir en los *seguros*?—Cuatro: *cosa, riesgo, interés en evitarlo y prima*.

¿Qué cosas pueden ser objeto de los *seguros*?—Todas las que son susceptibles de especulacion lícita, sean corporales ó incorporeales, con tal que existan real y legalmente y estén sujetas al riesgo, cuyos efectos tratan de asegurarse.

¿Quiénes pueden asegurar?—Los propietarios, sus acreedores, el primero y ulteriores aseguradores, sin perjuicio de sus respectivas obligaciones, y el comisionista de alguno de los referidos.

¿Qué es *riesgo*?—Todo accidente perjudicial que puede sobrevenir. Una vez asegurado, no puede ser objeto de otro seguro, excepto cuando el asegurador se constituye en quiebra, ó cuando el seguro es limitado en el tiempo ó en el lugar.

¿Qué es *prima*?—La porcion de efectos ó el tanto por ciento estipulado á favor del asegurador ó tercero, como precio del seguro.

¿En qué forma debe celebrarse el contrato?—En escritura pública, oficial ó privada y por medio de póliza, siendo nulo el contraído de palabra. La póliza puede ser objeto de endoso, siempre que esté extendida á la orden.

¿Qué objeto tiene la póliza del seguro y qué requisitos debe contener?—Constituye una prueba del contrato para el caso de duda ó litigio, y deben constar en ella las circunstancias siguientes: 1.^a, los nombres y domicilio del asegurador, del asegurado y del conductor de los efectos; 2.^a, las cualidades específicas de los efectos asegurados, con expresion del número de bultos y las marcas que tuvieren, y el valor que se les considere en el seguro; 3.^a, la porcion de este mismo valor que se asegure, si el seguro no se extendiere á la totalidad; 4.^a, el premio convenido por el seguro; 5.^a, la designacion del punto donde se reciban los géneros asegurados y del en que se haya de hacer la entrega; 6.^a, el camino que hayan de seguir los conductores; 7.^a, los riesgos de que hayan de ser responsables los aseguradores; 8.^a, el plazo en que hayan de ser los riesgos de cuenta del asegurador si el seguro tuviere tiempo limitado, ó bien la expresion de que su responsabilidad dura hasta verificarse la entrega de los efectos asegurados en el punto de su destino; 9.^a, la fecha en que se celebre el contrato; 10, el tiempo, lugar y forma en que se hayan de pagar los premios del seguro ó las sumas aseguradas en su caso; 11, cualquiera otra condicion que se estipulare en el contrato.

¿Qué obligaciones nacen del de *seguros*?—El *asegurador*, sobreviniendo el *riesgo*, debe pagar el importe de los daños no exceptuados y gastos causados para evitarlos, ya en totalidad cuando se pierdan ó inutilicen absolutamente, ya en parte cuando sufran deterioro. Debe justificar en debida forma, dentro de las veinticuatro horas siguientes á la ocurrencia, el daño exceptuado del seguro. El *asegurado* está obligado al pago de la *prima*, á justificar el riesgo y el daño; poner en conocimiento del *asegurador* las noticias que reciba sobre esto; seguir sus instrucciones y proporcionarle los medios necesarios para ejercitar las reclamaciones á que se crea con derecho el *asegurador*, que se subroga en los de aquél.

¿Cuándo tiene lugar la *rescisión* de este contrato?—Cuando alguno de los contratantes se constituya en quiebra; cuando el viaje no se realice ó tarde más de un año en emprenderse; cuando se falte á alguna de las condiciones referentes al camino y formas de su conduccion. También tiene lugar por la valoración excesiva de los efectos asegurados; por no transportarse íntegramente, y por exceder el valor ó el riesgo del segundo, del que se haya fijado y tratado de evitar en el primero.

¿Qué efectos produce la *rescisión*, especiales á este contrato?—El pago de un medio por ciento del valor asegurado, excepto en el caso de quiebra. La nulidad lleva consigo el abono de daños y perjuicios.

Del cambio (1).

¿Qué acepciones tiene la palabra *cambio*?—Tres: significa la permuta de moneda extranjera ó del país, de diferente especie; el contrato por el que uno recibe dinero ó valores en un punto, que promete ó manda entregar en otro distinto; y representa además la diferencia que existe, á veces, en el numerario entre dos ó más plazas. El cambio, en el primer concepto, se le conoce también con el nombre de *diminuto*, *manual* ó *real*; en el segundo, con el de *local*, *mercantil* y *trayecticio*, y en el tercero no reconoce nombre especial sino el genérico de *cambio*.

¿En cuál de los tres sentidos tomamos nosotros la palabra?—Preferentemente en el segundo, que encierra la idea de un contrato que puede ser definido en la forma siguiente: «Un convenio por el que uno se obliga á hacer pagar cierta cantidad, que se le dá ó promete en el acto, en lugar distinto de aquél en que la recibe, á la misma persona que la entrega ó promete, ó á cualquiera otra que haya adquirido el derecho de cobrarla. Suele también dividirse en *nacional* y *extranjero*, *directo* é *indirecto* ó *circulatorio*. Se llama *nacional* cuando el punto del pago y el de la promesa están dentro del reino, y *extranjero* cuando el punto en que deba pagarse está fuera de él. Si se realiza de un punto á otro sin necesidad de recurrir á más contratos y á diversas poblaciones, el *cambio* es *directo*, é *indirecto*, si es indispensable recurrir á estos medios para realizar el pago.

¿Cuáles son, pues, los requisitos *esenciales* del contrato de *cambio*?—Dos: que el pago se efectúe en distinto lugar de aquél en que se promete y que consista en dinero.

¿Qué medios de realización reconoce este contrato?—Las *letras de cambio*, las *libranzas* y *pagarés á la orden* y las *cartas-órdenes de crédito*, los cuales facilitan prodigiosamente la circulacion, y son el alma del comercio.

(1) Véase lo expuesto antes por vía de introduccion al Derecho mercantil, acerca de algunas ideas fundamentales de la ciencia económica.

Letra de cambio.

¿Qué es *letra de cambio*?—«Un documento extendido en forma legal, en el que una persona manda á otra que pague cierta cantidad á la órden de un tercero en determinado lugar, distinto de aquél en que el mismo documento se expide;» ó en otros «un documento por cuyo medio, el que ha celebrado un contrato de este nombre, encarga á otro que pague una cantidad determinada en lugar distinto de aquél en que se le ha entregado.» Al que la expide ó suscribe se llama *librador*; aquél á quien se ordena el pago, llámase *pagador*; y aquél á quien debe pagarse, *tomador*, *tenedor* ó *portador*.

¿Qué circunstancias deben contener las *letras de cambio*?—Deben extenderse en el papel sellado correspondiente, y contener las siguientes: 1.^a, designacion del lugar, día, mes y año en que se libra la letra de cambio; 2.^a, la época en que debe ser pagada; 3.^a, el nombre y apellido de la persona, á cuya órden se manda hacer el pago; 4.^a, la cantidad que el librador manda pagar, detallándola en moneda real y efectiva, ó en las monedas nominales que el comercio tiene adoptadas para el cambio; 5.^a, el valor de la letra, ó sea la forma en que el librador se dá por satisfecho de él, distinguiendo si lo recibió en numerario ó en mercaderías, ó si es valor entendido ó en cuenta con el tomador de la letra; 6.^a, el nombre y apellido de la persona de quien se recibe el valor de la letra, ó á cuya cuenta se carga; 7.^a, el nombre y domicilio de la persona á cuyo cargo se libra; 8.^a, la firma del librador, hecha de su propio puño, ó de la persona que firme en su nombre con poder suficiente al efecto, y 9.^a, puede intervenir un notario público en la redaccion de la letra de cambio, y dar fé de la autenticidad de la firma del librador.

¿De cuántas maneras puede fijarse la época del pago?—De seis: girando la letra: 1.^o, á un día determinado; 2.^o, á una feria; 3.^o, á la vista ó á la presentacion; 4.^o, á tantos días ó meses vista; 5.^o, á tantos días ó meses fecha, y 6.^o, á uno, dos ó más *usos*.

¿Cuando tiene lugar el vencimiento, segun estos casos?—En el primero vence la letra en el día prefijado; en el segundo, el último de la feria; en el tercero, debe pagarse el en que fuere presentada; en el cuarto, en el señalado á contar desde la presentacion del documento; en el quinto, en el mismo, á contar desde la fecha, y en el sexto igualmente, teniendo presente que se llama *uso* en el comercio un cierto número de días ó meses, que no es igual en todas las plazas mercantiles.

¿Pueden expedirse letras á la órden del mismo librador?—La operacion es válida, pero no constituye el contrato de *cambio* hasta tanto que pasa á un tercero por medio de endoso. Igualmente es permitido librar á cargo de una persona para que haga el pago al domicilio de un tercero. Tambien puede librarse en nombre propio, por órden y cuenta de un tercero, y expresarse así en la letra; pero la responsabilidad del librador siempre es la misma, y el tenedor no adquiere derecho alguno contra el tercero, por cuya cuenta se hizo el giro.

¿De cuántas maneras puede entregarse el valor recibido por el librador?—Puede ser *efectivo*, en *mercaderías*, en *cuenta* y *entendido*.

Quando en la letra de cambio no aparezcan todas las circunstancias enumeradas anteriormente, se considerará como *pagaré* á cargo del librador y en favor del tomador.

¿Qué es *endoso*?—«El acto por el que se trasmite la propiedad de la letra de cambio y demas documentos expedidos á la órden.» Es *perfecto* ó *regular*, cuando reúne todos los requisitos legales; es *imperfecto* ó *irregular* aquél en que faltan algunos.

¿Cuáles son esos requisitos?—1.º, el nombre y apellido de la persona á quien se trasmite la letra; 2.º, si el valor se recibe de contado, en efectivo ó en géneros, ó bien si es en cuenta; 3.º, el nombre y apellido de la persona de quien se recibe, ó en cuenta de quien se carga, si no fuere la misma á quien se traspasa la letra; 4.º, la fecha en que se hace; 5.º, la firma del endosante ó de la persona legítimamente autorizada que firme por él. Cuando no firme el mismo endosante se expresará siempre en la antefirma su nombre. Faltando en el endoso la expresion del valor ó la fecha, no trasfiere la propiedad de la letra, y se entiende una simple comision de cobranza. Será nulo el endoso cuando no se designe la persona cierta á quien se ceda la letra, ó falte en él la suscripcion del endosante ó de quien lo represente legítimamente.

Está prohibido firmar los endosos en blanco, y el que lo hiciere notendrá accion alguna para reclamar el valor de la letra que hubiere cedido en esta forma.

¿Qué efectos produce el endoso *regular*?—Trasmite la propiedad de la letra y obliga al *endosante* solidariamente con el *librador*, en el caso de falta de aceptacion ó pago de la letra.

¿Qué efectos produce el endoso *irregular*?—Como que se reduce á una comision de cobranza, puede el cesionario cobrar la letra, con la obligacion de rendir cuentas, y endosarla, quedando obligado á los tomadores sucesivos.

¿En qué tiempo deben calificarse los endosos?—Antes del vencimiento de la letra, en los que pueden pactarse todas las condiciones en que convengan los interesados.

¿Qué obligaciones corresponden al librador?—1.ª, avisar al pagador y proveerle de fondos; 2.ª, expedir segundos, terceros y cuantos ejemplares pidan los tomadores antes del vencimiento de la letra, con la expresion de no ser válidos los segundos y siguientes, sino en defecto de haberse hecho el pago en virtud de los primeros; es responsable de las resultas de la letra para con los tenedores; 3.ª, la de afianzar el valor de la misma, ó depositar su importe, siempre que no hubiere podido obtenerse su aceptacion.

¿De cuántas maneras puede hacerse la provision de fondos?—*Real y presuntamente*, segun que se remitan al pagador, ó se consideren legalmente en su poder por estar autorizado el *librador* para girar á cargo de aquél ó ser su deudor al vencimiento de la letra, ó del tercero, por cuya cuenta se hizo el giro de una cantidad igual al importe de la misma letra.

¿Cuándo es necesaria la expedicion de segundos y más ejemplares?—En caso de extravío del primero, y cuando la letra esté girada sobre plazas de Ultramar, en cuyo caso deben siempre remitirse con buques distintos, segundos ejemplares cuando ménos; y si se probase que los buques en que se remitan ó conducian las primeras y segundas letras padecieron accidente de mar que estorbó su viaje, no entrará en el cómputo del plazo legal el tiempo transcurrido hasta la fecha en que se supo aquel accidente en la plaza donde residiere el remitente de las letras.

El mismo efecto producirá la pérdida presunta de los buques cuando no se haya recibido noticia de ellos. La reclamacion del ejemplar que se sustituya á la letra perdida, debe hacerse por el último tenedor á su cedente, y así sucesivamente, de endosante en endosante, hasta el librador. Ninguno puede rehusar la prestacion de su nombre é interposicion de sus oficios para que se expida el nuevo ejemplar, satisfaciendo el dueño de la letra perdida los gastos que se causen hasta obtenerlo.

¿Qué obligaciones incumben al *tomador* de la letra?—Las cláusulas de *valor en cuenta y valor entendido*, hacen responsable al tomador de la letra del importe de ella en favor del librador, para exigirlo ó compensarlo en la forma y tiempo que ambos hayan convenido al hacer el contrato de cambio; y para que pueda realizar su derecho debe presentar la letra dentro del

término prevenido para su aceptación y para el pago en el día de su vencimiento, y protestarla en forma legal, en defecto de una ó del otro.

¿Es siempre necesaria la aceptación?—Sólo es circunstancia *esencial* en las letras á plazo, á contar desde la vista, y desde la fecha, si excede aquél de treinta días.

¿Cuándo debe verificarse la presentación?—El término varía según las plazas sobre que están giradas, la forma del giro y el objeto de la presentación. Las letras giradas en la Península é islas Baleares á un plazo contado desde la vista, sobre cualquiera pueblo de ella ó de dichas islas, deben ser presentadas á la aceptación dentro de los cuarenta días de su fecha. Las letras libradas á la vista serán presentadas al pago dentro del mismo término. En las letras de la misma procedencia y sobre los mismos puntos, que estén libradas á un plazo de la fecha, no hay obligación de presentarlas á la aceptación si el plazo que designan no excediere de treinta días; pero si pasare de este término, se exigirá la aceptación dentro de los mismos treinta días. Los términos prefijados se entienden dobles para las letras que se giran entre la Península é islas Canarias. Las letras giradas entre la Península y las Antillas españolas ú otro de los puntos de Ultramar que están más acá de los cabos de Hornos y de Buena-Esperanza, se presentarán al pago ó á la aceptación dentro de seis meses, cuando más, contados desde su fecha, cualquiera que sea la forma del plazo designado en su giro. Este término será de un año con respecto á las plazas de Ultramar que estén más allá de aquellos cabos. Las letras giradas en países extranjeros sobre plazas del territorio de España, se deben presentar á su pago ó aceptación para que surtan efecto en juicio ante los tribunales españoles, en los plazos contenidos en ellas si estuvieren libradas á la fecha, y si lo estuvieren á la vista, dentro de los cuarenta días siguientes á su introducción en el reino. Las que se giren en territorio español sobre países extranjeros se presentarán y protestarán con arreglo á las leyes vigentes en la plaza donde sean pagadas.

¿Qué recurso queda al tomador en caso de extravío de la letra?—El que haya perdido una letra, estuviese ó no aceptada, de que no tenga otro ejemplar para solicitar el pago, no puede hacer con el pagador otra gestión que la de requerirle á que deposite el importe de la letra en la caja común de depósitos, si la hubiere, ó en persona convenida por ambos, ó designada por el tribunal en caso de discordia; y si el pagador no consintiere en hacer el depósito, se hará constar esta resistencia por medio de una protestación, hecha con las mismas solemnidades que se haría el protesto por falta de pago; y mediante esta diligencia, conservará el reclamante íntegros sus derechos contra los que sean responsables á las resultas de la letra.

Aceptación y pago de las letras de cambio.

¿Qué es aceptación?—El hecho ó manifestación de aquel contra quien se libra una letra de cambio, en la cual expresa admitir el encargo ó comisión de pagar su importe. Debe firmarse por el aceptante y expresarse necesariamente, con la fórmula *acepto* ó *aceptamos*, sin condición, y en parte ó por la totalidad.

¿Qué efectos produce la aceptación?—La aceptación de la letra constituye al aceptante en la obligación de pagarla á su vencimiento, sin que pueda relevarle de hacer el pago la excepción de no haberle hecho provisión de fondos el librador.

No se admite restitución ni otro recurso contra la aceptación puesta en

debida forma y reconocida por legítima. Sólo cuando se probare que la letra es falsa, quedará ineficaz la aceptación.

¿A quién debe pagarse?—Al portador de la letra, que queda obligado, si el pagador lo exigiere, á acreditar la identidad de su persona por medio de documentos ó de sujetos que lo conozcan ó salgan garantes de ésta.

¿En qué tiempo debe efectuarse el pago y en qué forma?—El pago de las letras de cambio se debe exigir por el portador el día de su vencimiento, y si fuere feriado, en el precedente.

Las letras giradas *á la vista*, deben ser presentadas dentro del término de cuarenta días.

Todas deben pagarse en la moneda efectiva que designen; y si estuvieren concebidas en términos que representen cantidades de monedas de cambio ideales, se reducirán á monedas efectivas del país donde se haga el pago, haciendo el cómputo á uso y costumbre de la plaza.

Expedidos muchos ejemplares de una letra, ¿cuál se considera legítimo para el pago?—El que haya sido aceptado. Para que el pago hecho sobre otro ejemplar no perjudique al pagador, debe éste exigir del tenedor de la letra que afiance su valor. Si no afianza, no se liberta del pago á la presentación de la que fuere aceptada.

Protesto é intervencion.

¿Qué es *protesto*?—«Un requerimiento formal y solemne hecho á la persona á cuyo cargo está girada una letra de cambio, para que la acepte y pague, ó manifieste la razón que tiene para no hacerlo, con la intimación de que serán de su cuenta los daños y perjuicios que se ocasionen si no lo verifica.»

Las letras de cambio se protestan por *falta de aceptación*, ó por *falta de pago*, ante escribano y dos testigos vecinos del pueblo, que no sean comensales ó dependientes aquél.

¿Cuándo debe tener lugar el *protesto por falta de aceptación*?—En el día siguiente á la presentación de la letra, ó en el sucesivo, si fuere feriado.

¿En dónde debe formalizarse el *protesto*?—En el lugar designado por la letra. En defecto de designación, en el que tenga el pagador; y á falta de ambos, en el último que se le hubiese reconocido. No constando el domicilio del pagador en ninguna de las tres formas sobredichas, se indagará el que tenga de la autoridad municipal local, y con la persona que la ejerza se entenderán las diligencias del protesto y la entrega de su copia en defecto de no descubrirse el paradero del pagador.

¿Qué formalidades debe contener la diligencia exacta de protesto?—Copia literal de la letra con la aceptación, si la tuviese, y todos los endosos é indicaciones hechas en ella. A continuación se hará constar el requerimiento á la persona que deba aceptar ó pagar la letra, ó no estando presente á la que se le hace en nombre de ésta, y se extenderá literalmente su contestación. Se concluirá con la conminación de gastos y perjuicios á cargo de la misma persona por la falta de aceptación ó de pago, quien suscribirá la diligencia; y no sabiendo ó no pudiendo hacerlo, firmarán indispensablemente el acta los dos testigos presentes. En la fecha del protesto se hará mención de la hora en que se practica.

Los protestos se han de evacuar necesariamente antes de las tres de la tarde, y los escribanos retendrán en su poder las letras, sin entregar éstas ni el testimonio del protesto al portador, hasta puesto el sol del día en que se hubiere hecho; y si el pagador se presentare entre tanto á satisfacer el importe de la letra y los gastos del protesto, admitirá el pago, haciéndole entrega de la letra y cancelando el protesto.

¿Qué efectos produce el protesto?—Cuando tiene lugar por *falta de aceptación*, dá al *portador* de la letra derechos para exigir del *librador* y *endosantes* la fianza de su valor y depósito, ó reembolso con los gastos causados, si no afianzan. Si se formaliza por *falta de pago*, tiene derecho el *portador* á exigir su reembolso con los gastos de protesto y recambio del *librador*; *endosantes* y *aceptantes*, como responsables que son todos á las resultas de la letra.

¿A qué se llama *letra perjudicada*?—A la que no ha sido protestada en tiempo y forma legal. En su virtud cesa la responsabilidad del *librador*, con tal que pruebe que al vencimiento tenía hecha provision de fondos para su pago en poder del *librado*, y caduca el derecho del *portador* contra éste y los *endosantes*.

¿Qué es *intervencion*?—«Un acto por el que una persona acepta ó paga voluntariamente una letra de cambio, por no haberlo querido hacer la que estaba designada.»

¿Cuándo y cómo debe hacerse?—Después del *protesto*, haciéndola constar á continuacion de éste bajo la forma del *interviniente* y del *escribano*, expresándose el nombre de la persona por cuya cuenta intervenga, quedando obligado, no haciendo esta expresion, por todos los que lo están al pago de la letra.

¿Quiénes pueden intervenir y en beneficio de qué personas?—Cualquiera extraño á la negociacion, y aún el *pagador* que no haya aceptado, puede formalizar la *intervencion* en favor del *librador* y *endosantes*, siendo preferido el que amplíe su responsabilidad.

¿Cuáles son sus efectos?—Hecha la *intervencion* en la *aceptacion*, el que interviene queda obligado al pago de la letra como si se hubiese girado á su cargo, debiendo dar aviso por el correo más próximo á aquél por quien ha intervenido. Hecha en el *pago*, el *interviniente* se subroga en los derechos del *portador*, mediante que cumpla con las obligaciones prescritas á éste, con las limitaciones siguientes: pagando por cuenta del *librador*, sólo éste le responde de la cantidad desembolsada y quedan libres todos los *endosantes*; y si pagare por cuenta de un *endosante*, tiene la misma repetición contra el *librador*, y además contra el *endosante* por quien intervino y los demás que le precedan en el orden de los *endosos*; pero no contra los *endosantes* posteriores que quedan exonerados de su responsabilidad.

¿Qué acciones competen al *portador*?—Si la letra no ha sido pagada, puede dirigir sus reclamaciones contra todas las personas obligadas en ella, á fin de obtener la indemnizacion de daños y perjuicios, si no opta por la rescision. Como la obligacion de éstos es *solidaria*, la accion se dirige contra cualquiera, debiendo tener presente que, intentada contra uno, no puede ejercitarla contra los demás sino en caso de insolvabilidad del demandado.

Quando el *portador* de la letra protestada dirigiese su accion contra el *aceptante* antes que contra el *librador* y *endosantes*, hará notificar á todos éstos el protesto por medio de un *escribano público* ó *real*, dentro de los mismos plazos señalados.

Los *endosantes* á quienes se omita hacer esta notificacion quedan exonerados de responsabilidad sobre el pago de la letra, aún cuando el *aceptante* resulte insolvente; y lo mismo se entiende con respecto al *librador* que probare haber hecho oportunamente la provision de fondos.

Si hecha *excursion* en los bienes del *deudor* ejecutado para el pago ó reembolso de una letra, sólo hubiere podido percibir el *portador* una parte de su crédito, podrá dirigirse sucesivamente contra los demás por lo que todavía alcance el total, hasta quedar enteramente reembolsado.

Constituyéndose en quiebra el *deudor* contra quien se procede por el reembolso de una letra, puede el *portador* dirigir sucesivamente su accion contra los demás responsables á la letra; y si todos resultaren quebrados,

tiene derecho á percibir de cada masa el dividendo que corresponda á su crédito, hasta quedar éste cubierto en su totalidad.

¿Quiénes se subrogan en los derechos del *portador*?—El que paga una letra por intervencion y el endosante que reembolsa el importe de la protestada por falta de pago.

¿Qué comprende la indemnizacion de daños y perjuicios?—La devolucion del importe de la letra con el rédito legal que haya devengado desde la fecha del protesto; los gastos causados en él, el recambio, corretaje, comision de giro, papel y correspondencia.

¿De cuántas maneras puede el *portador* ejecutar sus acciones?—Puede proceder judicialmente contra la persona obligada ó librar una nueva letra contra ella, que se llama de *resaca*.

¿Qué partidas deben comprenderse en la cuenta de *resaca*, y en qué forma debe hacerse?—Las siguientes: el capital de la letra protestada, los gastos del protesto, el derecho del sello para la *resaca*, la comision de giro á uso de la plaza, el corretaje de su negociacion, los portes de cartas, y el daño que se sufra en el recambio.

El librador de la *resaca* debe acompañar á ésta la letra original protestada, un testimonio del protesto y la cuenta de la *resaca*.

En la cuenta de *resaca* se ha de hacer mencion del nombre de la persona sobre quien se gira la *resaca*, del importe de ésta y del cambio á que se haya hecho su negociacion.

El recambio ha de ser conforme al curso corriente que tenga en la plaza donde se hace el giro, sobre el lugar en que se ha de pagar la *resaca*, y esta conformidad ha de hacerse constar en la cuenta de la misma *resaca* por certificacion de un corredor de número, ó de dos comerciantes donde no haya corredor. El interés legal del importe de la cuenta sólo puede exigirse desde el día del emplazamiento ó juicio del obligado.

¿Qué acciones resultan de la letra *perjudicada*?—El *portador* puede dirigirse contra el aceptante y contra el librador que no probare haber hecho oportunamente provision de fondos, ó el endosante que hubiere sido satisfecho del valor de la letra, debiendo ejercitar sus reclamaciones en juicio ordinario.

¿Qué efectos mercantiles producen las *falsificaciones* hechas en las *letras de cambio*?—Si la falsificacion consiste en el supuesto de un librador imaginario ó imitacion de la firma de una persona conocida, el librador es irresponsable y el aceptante puede oponer la excepcion de la falsedad. Los endosantes quedan obligados, porque han otorgado el contrato de cambio. Si la letra es verdadera, y la aceptacion supuesta, el aceptante no se obliga porque no ha contratado; pero son responsables el *portador*, el librador y los endosantes. Por último, si la letra es verdadera y contiene firma falsa de su propietario, puede tener lugar la retencion del valor de la misma en poder del aceptante, pedida por el verdadero dueño. Todo lo dicho tiene lugar sin perjuicio de la accion criminal para perseguir y castigar el delito cometido.

Libranzas, vales ó pagarés y cartas-órdenes de crédito.

¿Qué es *libranza*?—«Un documento por el que un principal manda á un subalterno ó dependiente, que pague cierta cantidad á un tercero.» Las libranzas expedidas de comerciante á comerciante producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, ménos en cuanto á la aceptacion y á la duracion del derecho para repetir contra el librador y los endosantes.

¿En qué se diferencian de las *letras de cambio*?—1.º, en que la libranza

ha de contener la expresion de ser *libranza*, sin que sea menester la fijacion de la época del pago, lo cual es requisito esencial en las *letras* de cambio; 2.^a, en que no requieren aceptacion, y sólo pueden protestarse por falta del pago; 3.^a, en que debe el tenedor ejercitar sus derechos contra el librador en el término de dos meses, desde la fecha del protesto, si la libranza fuere pagadera en territorio español; y si lo fuese en el extranjero, se contará este plazo desde que, sin pérdida de correo, pudo llegar el protesto al domicilio del librador ó endosante contra quien se repite. Pasado dicho plazo, cesa toda responsabilidad en los endosantes, y tambien en el librador que pruebe que al vencimiento de la libranza tenia hecha la provision de fondos en poder de la persona que debia pagarla.

¿Qué circunstancias debe contener la *libranza*?—Ocho: 1.^a, fecha; 2.^a, la cantidad; 3.^a, la época de su pago; 4.^a, la persona á cuya *orden* se ha de hacer; 5.^a, el lugar en que debe pagarse; 6.^a, el origen y especie del pago; 7.^a, la firma del libramiento; 8.^a, la expresion de ser *libranza* y el nombre y domicilio de la persona contra quien se expida.

¿Qué es *vale ó pagaré*?—«Un documento por el que uno se confiesa deudor á otro de cierta cantidad que se obliga á satisfacer á la *orden* de aquél.» Sólo intervienen en él dos personas, el *acreedor* y el *deudor*, constituyendo esto una de las diferencias que lo distinguen de la *libranza* y de la *letra*.

¿Qué circunstancias debe reunir el *pagaré*?—Las mismas que las *libranzas*; y es tan necesaria la expresion en ambos de *á la orden*, que si no la contienen, no se consideran contratos de comercio, sino simples promesas de pago, sujetas á las leyes comunes sobre préstamos. Los *pagarés* en favor de *el portador*, sin expresion de persona determinada, no producen obligacion civil ni accion en juicio.

¿En qué se diferencian de las *letras*?—En que el librador no está obligado á hacer provision de fondos; en que debe ser pagado en la misma poblacion; en que puede ser satisfecho en parte; y en que se entiende vencido el plazo á los diez dias de su fecha, cuando no se ha fijado otra época.

¿Qué es *carta-orden*?—«El documento privado ó misiva que una persona dirige á otra residente en distinta poblacion, para que entregue á ésta determinada cantidad.» Supone un cambio *condicional*, supuesto que su realizacion pende de que el portador la presente y de que el pagador quiera satisfacerla. Por esta causa son otros los requisitos y efectos á ellas inherentes.

¿Cuáles son los requisitos que deben contener las *cartas-órdenes*?—Para que se reputen contratos mercantiles las *cartas-órdenes* de crédito han de ser dadas de comerciante á comerciante, para atender á una operacion de comercio. No pueden darse *á la orden*, sino *contraidas* á sugeto determinado; y para su cobro, el portador está obligado á probar la identidad de su persona, si el pagador no lo conociera personalmente. Toda *carta-orden* de crédito ha de contraerse á cantidad fija, como máximo de la que deberá entregarse al portador, y las que no contengan este requisito, se considerarán simples cartas de recomendacion.

¿Tiene lugar el protesto en las *cartas-órdenes*?—No pueden protestarse, ni por ellas adquiere accion alguna el portador contra el que la dió, aun cuando no sea pagada. Pero si se probare que el dador habia revocado la carta de crédito intempestivamente y con dolo, para estorbar las operaciones del tomador, será responsable á éste de los perjuicios que de ello se le siguieren.

¿Necesitan del requisito de la *aceptacion*?—Tampoco lo requieren.

¿Son *endosables*?—La naturaleza de estos documentos y las condiciones con que se expiden impiden tambien su endoso.

¿Qué acciones y obligaciones nacen de las *cartas-órdenes*?—El portador que no las presenta debe devolverlas, pudiendo obligársele á ello dentro de un plazo corto, y afianzar su importe hasta que conste su revocacion.

El pagador, por su carácter de comisionista, puede reclamar del comitente el importe de la carta-orden pagada, quien está facultado para repetir contra el tomador la cantidad que éste hubiese percibido en virtud de ella, si antes no la dejó en su poder; y en defecto de hacerlo, podrá exigirla el mismo dador ejecutivamente, con el interés legal de la deuda desde el día de la demanda, y el cambio corriente de la plaza en que se hizo el pago, sobre el lugar donde se haga el reembolso.

Prescripcion de las acciones nacidas de los contratos mercantiles.

¿Qué disposiciones establece el Código en esta materia?—Pueden reducirse á las reglas siguientes; 1.^a, las acciones que por las leyes de comercio no tengan un plazo determinado para deducirlas en juicio, prescriben en el tiempo que corresponda, atendida su naturaleza, segun las disposiciones del derecho comun; 2.^a, todos los términos prefijados por disposicion especial de este Código para el ejercicio de las acciones y repeticiones que proceden de los contratos mercantiles, son *fatales*, sin que en ellos tenga lugar el beneficio de la restitucion bajo causa alguna, título ni privilegio; 3.^a, la prescripcion se interrumpe por la demanda ú otro cualquier género de interpelacion judicial hecha al deudor, ó por la renovacion del documento en que se funde la accion del acreedor. En el primero de estos dos casos, comenzará á contarse nuevamente el término de la prescripcion desde que se hizo la última gestion en juicio á instancia de cualquiera de las partes litigantes; y en el segundo, desde la fecha del nuevo documento; y si en él se hubiere prorogado el plazo del cumplimiento de la obligacion, desde que éste hubiere vencido.

DEL COMERCIO MARÍTIMO.

¿Qué objetos forman la materia del *comercio marítimo*?—Las *naves*; las personas encargadas de su expedicion, administracion, mando, gobierno y servicio de las mismas; ciertos contratos especiales de este ramo del comercio de que nos ocuparemos más adelante y los *riesgos* por accidentes de mar.

¿Qué es *nave*?—Toda embarcacion que tiene por objeto ejercer el *comercio marítimo*. Se compone de *casco* y *arboladura* ó *aparejo*, comprendiéndose entre éstos elementos los palos, cables, jarcias, velámenes, botes y áncoras. Las naves deben matricularse inscribiendo su nombre en el registro de la provincia marítima á que correspondan, y contener el de su propietario, el número de toneladas que midan y demás circunstancias que exige la ordenanza de matrículas.

¿Cómo se dividen las *naves*?—Por el fin á que se destinan se dividen en *buques de guerra* y *mercantes*, siendo solamente éstos objeto del derecho marítimo mercantil.

¿Quiénes pueden adquirir su propiedad?—La propiedad de las naves mercantes puede recaer indistintamente en toda persona que por las leyes

comunes del reino tenga capacidad para adquirir; pero la expedicion de ellas aparejadas, equipadas y armadas, ha de girar necesariamente bajo el nombre y responsabilidad directa de un naviero. Los extranjeros que no tengan carta de naturalizacion, no pueden adquirir en todo ni en parte, la propiedad de una nave española; y si recayere en ellos por título de sucesion ú otro gratuito, la habrán de enajenar en el término preciso de treinta dias, bajo pena de confiscacion. Este término se contará desde el dia en que hubiere recaído en su favor la propiedad.

¿De cuántas maneras pueden adquirirse?—Las naves se adquieren por los mismos modos prescritos en derecho para adquirir el dominio de las cosas comerciables. Toda traslacion de dominio de una nave, cualquiera que sea el modo en que se haga, ha de constar por escritura pública. La posesion de la nave, sin el título de adquisicion, no atribuye la propiedad al poseedor, si no ha sido continua y por espacio de treinta años. El capitán no puede adquirir la propiedad de la nave por prescripcion. Además de estos medios hay otros dos especiales, que son la *construccion* y las *presas marítimas*. La primera es libre, debiendo ser visitados, reconocidos y declarados en buen estado para la navegacion, los buques contruidos, antes de salir á viaje.

¿Qué es *apresamiento*?—Un modo de adquirir el dominio de las naves enemigas, por medio de la apropiacion ejecutada por los buques de guerra y corsarios. Sólo puede tener lugar en las embarcaciones enemigas y piratas por los referidos buques, siempre que los segundos hayan obtenido patente para armarse en corso, con arreglo á las leyes.

¿Por qué medios se pueden enajenar las naves?—Su dominio se traslada y pierde por todos los que se adquiere, excepto los de la construccion. La *venta* es el más frecuente.

¿De cuántas maneras puede venderse una nave?—*Judicial* y *extrajudicialmente*. La segunda debe hacerse á españoles ó á extranjeros naturalizados.

¿Qué accesiones comprende el contrato de venta de las naves?—Se entienden siempre comprendidos, aunque no se exprese, todos los aparejos pertenecientes á ella que se hallen á la sazón bajo el dominio del vendedor, á menos que no se haga pacto expreso en contrario. Si se enajenare una nave que se hallase á la sazón en viaje, corresponderán al comprador íntegramente los fletes que devengue en el mismo viaje, desde que recibió su último cargamento. Pero si al tiempo de hacerse la enajenacion hubiere llegado la nave al puerto de su destino, pertenecerán los fletes al vendedor, sin perjuicio de que, tanto en uno como en otro caso, puedan los interesados hacer sobre la materia las convenciones que tengan á bien.

¿Cuándo tiene lugar la venta *judicial*?—Estando la nave en viaje é inutilizándose para la navegacion, y por virtud de embargo obtenido por los acreedores, previo el juicio competente.

¿Qué orden de prelación debe seguirse para el pago de deudas en el caso de venta de la nave?—El siguiente, en el mismo en que designan las obligaciones: 1.^a, los créditos de la real Hacienda, si hubiere alguno contra la nave; 2.^a, las costas judiciales del procedimiento de ejecucion y venta de la nave; 3.^a, los derechos de pilotaje, toneladas, anclaje y demás de puerto; 4.^a, los salarios de los depositarios y guardianes de la embarcacion, y cualquiera otro gasto causado en su conservacion desde su entrada en el puerto hasta su venta; 5.^a, el alquiler del almacén donde se hayan custodiado los aparejos y pertrechos de la nave; 6.^a, los empeños y sueldos que se deban al capitán y tripulacion de la nave en su último viaje; 7.^a, las deudas inexcusables que en el último viaje haya contraído el capitán en utilidad de la nave, en cuya clase se comprende el reembolso de los efectos de su cargamento que hubiese vendido con el mismo objeto; 8.^a, lo que se deba por los materiales y mano de obra de la construccion de la nave,

cuando no hubiere hecho viaje alguno, y si hubiere navegado, la parte del precio que aún no esté satisfecha á su último vendedor, y las deudas que se hubieren contraído para repararla, aparejarla y aprovisionarla para el último viaje; 9.^a, las cantidades tomadas á la gruesa sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto antes de la última salida de la nave; 10, el premio de los seguros hechos para el último viaje sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto de la nave, y 11, la indemnización que se deba á los cargadores por valor de los géneros cargados en la nave que no se hubieren entregado á los consignatarios, y la indemnización que les corresponda por las averías de que sea responsable la nave.

¿En dónde debe pedirse el embargo de la nave?—Mientras dure su responsabilidad por los créditos anteriores, puede ser embargada á instancia de los acreedores que presenten sus títulos en debida forma, en cualquier puerto donde se halle; y se procederá á su venta judicialmente con audiencia y citación del capitán, en caso de hallarse ausente el naviero. Por cualquiera otra deuda que tenga el propietario de la nave, no puede ser ésta detenida ni embargada sino en el puerto de su matrícula, y el procedimiento se entenderá con el mismo propietario, haciéndole la primera citación, al menos, en el lugar de su domicilio.

¿Cómo debe realizarse la venta judicial?—Por medio de subasta pública, anunciada con treinta días de antelación, renovándose cada diez los carteles en que se anuncie la venta, y pregonándose por término de tres horas en cada uno de los días primero, diez, veinte y treinta de la subasta. Los carteles se fijarán en los sitios acostumbrados para los demás anuncios en el puerto donde se haga la venta, y en la capital del departamento de Marina á que aquél corresponda; y tanto en uno como en otro punto se fijará un cartel en la entrada de la capitania del puerto. La venta se anunciará también en todos los diarios que se publiquen en la provincia, y se hará constar en el expediente de subasta el cumplimiento de ésta y las demás formalidades prescritas. En el remate se procederá con las solemnidades y en la forma que está dispuesto por el derecho común para las ventas judiciales.

Navieros.

¿Quién es el naviero?—«La persona bajo cuyo nombre y responsabilidad gira la expedición de la nave mercante, ó sea la que la expide aparejada, equipada y armada, á la que se dá también el nombre de *armador*.»

¿Qué requisitos requiere el cargo de naviero?—Debe tener la capacidad legal que se exige en el comerciante, é inscribirse necesariamente en la matrícula del comercio de su provincia.

¿Qué atribuciones corresponden al naviero?—1.^o, el nombramiento y separación del capital de la nave, previa fianza del nombrado, si la considera necesaria, y el de la tripulación, á propuesta de aquél; 2.^o, la celebración de todos los contratos relativos á la provision y flete de la nave. Pueden los navieros desempeñar por sí mismos los oficios de capitán ó maestro de sus naves, sin que lo estorbe la repugnancia de ningún copropietario, á menos que no sea matriculado, cuya cualidad le dará la preferencia. En caso de concurrir á solicitarlo dos copropietarios que sean ambos matriculados, se preferirá al que tenga más interés en el buque; y si ambos tuviesen igual proporción en él, se sorteará el que haya de serlo. Cuando el naviero tenga coparticipes, estas facultades están limitadas á la parte que le corresponde en la nave.

¿Qué obligaciones tiene el *naviero*?—Pagar los sueldos de la nave y el reintegro de los fondos gastados en su beneficio, así como las deudas contraídas para su reparación, habilitación y aprovisionamiento é indemnizaciones procedentes de la custodia de los efectos cargados en la nave y de los perjuicios causados á los cargadores. Puede salvarse de la responsabilidad de indemnizar á los cargadores renunciando á la nave con todas sus pertenencias y á los fletes que haya devengado en el viaje.

¿En qué casos cesa, además, su responsabilidad?—Cuando el contrato ha sido otorgado por el capitán en su provecho particular, aunque se sirviese de la nave para su cumplimiento; y cuando ha contratado excediéndose de los límites de sus atribuciones, sin autorización especial ó faltando á las condiciones esenciales para su validez. Tampoco tiene responsabilidad el *naviero* en los excesos que durante la navegación cometan el capitán y la tripulación, y sólo habrá lugar por razón de ellos á proceder contra las personas y bienes de los que resulten culpados.

¿Cuando y con qué condiciones puede el *naviero* despedir al capitán y á la tripulación?—Antes de hacerse el buque á la vela puede el *naviero* despedir á su arbitrio al capitán é individuos de la tripulación; cuyo ajuste no tenga tiempo ó viaje determinado, pagándoles los sueldos que tengan devengados, según sus contratos, y sin otra indemnización, como ésta no se funde en un pacto expreso y determinado. Despidiéndose al capitán ú otro individuo de la tripulación durante el viaje, se les abonará su salario hasta que regresen al puerto donde se hizo el ajuste, á menos que no hubiesen cometido delito que diera justa causa para despedirlos ó los inhabilitara para desempeñar su servicio. Cuando los ajustes del capitán é individuos de la tripulación con el *naviero* tengan tiempo ó viaje determinado, no podrán aquéllos ser despedidos hasta el cumplimiento de sus contratos sino por causa de insubordinación en materia grave, hurto, embriaguez habitual, ó perjuicio causado al buque ó su cargamento por dolo ó negligencia manifiesta ó probada. Si el capitán copropietario hubiere obtenido el mando de la nave por pacto especial del acta de sociedad, no se le podrá privar de su cargo sin causa grave.

De los capitanes.

¿Qué es *capitan*?—«La persona encargada del mando y gobierno de la nave mercante.» Llámasele también *maestre* ó *patron de nave*. Sin embargo, estos nombres se aplican comúnmente á los que dirigen buques de cabotaje que no necesitan *piloto*. El capitán es el jefe de la nave, á quien debe obedecer toda la tripulación, observando y cumpliendo cuanto mandare para el servicio de ella.

¿Qué circunstancias son necesarias para este cargo?—Ser natural y vecino de los reinos de España y persona idónea para contratar y obligarse. Los extranjeros no pueden serlo si no tienen carta de naturaleza, debiendo además prestar fianza equivalente á la mitad, cuando menos, del valor de la nave que capitaneén. En cuanto á la pericia que ha de tener el capitán en el arte de la navegación, su examen y demás requisitos necesarios para ejercer este cargo, se estará á lo que prescriben las ordenanzas de matriculas de gentes de mar. Debe tener tres campañas, el título de *piloto* ó *contramaestre*, ó ser propietario de buque. El *naviero* puede ser capitán y propietario de la nave, siendo preferido el que tenga más interés en el buque, y en igualdad de circunstancias, el que decida la suerte.

¿Cuáles son las atribuciones del *capitan*?—1.^a, proponer al *naviero* la tripulación de la nave, dirigirla y gobernarla; 2.^a, castigar con penas correc-

cionales las faltas de disciplina ó servicio, atemperándose á los reglamentos de Marina; 3.^a, disponer las reparaciones durante la navegacion y en casos urgentes, para que la nave pueda continuar y acabar su viaje, con tal que, si llegare á puerto donde haya consignatario de la misma nave, obre con acuerdo de éste. Fuera de aquel caso, no tiene facultad para disponer por sí obras de reparacion, ni otro gasto alguno para habilitar la nave, sin que el naviero consenta la obra y apruebe el presupuesto de su coste; 4.^a, comprar los pertrechos y municiones necesarias para mantener la nave, siempre que las circunstancias no le permitan solicitar previamente las instrucciones del naviero; 5.^a, obligar á los que tengan viveres por su cuenta particular á que los entreguen para el consumo comun, abonando su importe en el acto, ó á lo más tarde en el primer puerto donde arriben, cuando se hubieren consumido las provisiones de la nave antes de llegar á puerto; 6.^a, puede procurarse los fondos que necesite para costear las reparaciones y aprovisionamiento de la nave, tomándolos á riesgo marítimo ú obligacion á la gruesa, sobre el casco, quilla y aparejos, con licencia del tribunal competente del puerto donde se halle, siendo territorio español, y en país extranjero del cónsul, si lo hubiere, ó no habiéndolo, de la autoridad que conozca de los asuntos mercantiles. No surtiendo efecto este arbitrio, podrá echar mano de la parte del cargamento que baste para cubrir las necesidades que sean de absoluta urgencia y de perentoriedad, vendiéndola con la misma autorizacion judicial y en subasta pública; 7.^a, está facultado para arrojar al mar, de acuerdo con los oficiales de la nave y cargadores ó sobrecargos, los efectos ó parte del cargamento que conceptúe necesaria para salvarla, y obligar al piloto á variar de rumbos, aun contra su voluntad, y 8.^a, puede contratar la tripulacion y los fletamentos en ausencia del naviero ó consignatario.

¿Cuáles son las obligaciones del capitán?—1.^a, proveerse de la patente de navegacion y de tres libros llamados *diario*, de *cuenta y razon* y de *cargamentos*, relativos á la contabilidad de la nave; 2.^a, examinar sus condiciones, adquirir una lista detallada de la tripulacion, á que se dé el nombre de *rol*, y los demás documentos exigidos por las ordenanzas; 3.^a, recibir la carga y procurar que se coloque en buenas condiciones, sentándola en el libro correspondiente y cuidando de que no sea excesiva; 4.^a, debe firmar los conocimientos que exija el *fletador*, y remitir al naviero un estado exacto del cargamento, sus cargadores y fletes, noticiándole tambien las cantidades que haya tomado á la gruesa; 5.^a, emprender el viaje inmediatamente, si no lo estorba alguna causa legítima, y durante él mandar y gobernar el buque, anotar todas las vicisitudes atmosféricas y hechos que pasen durante la navegacion, defender la nave contra piratas y enemigos, intentar su rescate en caso de apresamiento, é inventariar los efectos pertenecientes á cualquiera persona que muera durante la navegacion; 6.^a, presentarse al capitán de puerto y declarar las causas que motiven su arribada, formalizando la correspondiente protesta, en caso de que sea forzosa; 7.^a, concluido el viaje, debe noticiar su arribo al naviero inmediatamente, entregar la carga al consignatario, ó ponerla á disposicion de la autoridad correspondiente, cuando no se presenten los consignatarios, llevando un asiento formal de todo lo que entregue; 8.^a, levantar acta, conforme á la ley (1), de los nacimientos y defunciones que ocurran durante el viaje.

¿Qué obligaciones tiene el capitán para con los demás buques?—Pueden reducirse á dos; la de *ir en conserva*, cuando se estipule; esto es, la de realizar dos ó más buques un mismo viaje, con la obligacion de socorrerse mutuamente; y la general de prestarse todo género de auxilio, evitar daños

(1) Véase la seccion de *Derecho civil* al tratar del registro de nacimientos y defunciones.

y resarcirlos dentro ó fuera de los puertos, antes, despues y durante la navegacion por fuerza mayor, caso fortuito y culpa de los capitanes, como, por ejemplo, en combates navales, choques ó abordaje, y dolo, negligencia ó descuido imputable al capitan.

¿Qué prohibiciones afectan al capitan?—1.º, contratar gente que esté comprometida con otro buque; 2.º, conducir personas no relacionadas en el *Rol*, é indocumentadas; 3.º, abandonar la nave hasta el último momento en que haya esperanza de salvarla, para lo cual debe oír á los oficiales. Pudiendo salvarse en el bote, procurará llevar consigo lo más precioso del cargamento, recogiendo indispensablemente los libros de la nave, siempre que haya posibilidad de hacerlo. Si los efectos salvados se perdieren antes de llegar á buen puerto, no se le hará cargo alguno por ellos, justificando en el primero adonde arribe que la pérdida procedió de caso fortuito inevitable; 4.º, obstruir la cubierta con efectos ó parte de la carga, si hubiere oposicion por parte de cualquier interesado; 5.º, admitir más carga que la del fletador, excepto la que permite su derecho de *pacotilla*, que comprende las mercancías de un valor igual á su salario; 6.º, negociar por su cuenta, cuando lleve parte en las utilidades; 7.º, nombrar sustituto sin permiso del naviero, y pernoctar fuera del buque, á no ser por una causa grave; 8.º, reparar el buque sin auencia é intervencion del consignatario, y tomar dinero á la gruesa, ó hipotecar la nave para sus propias negociaciones, excepto en la parte de que fuere propietario, y otras prohibiciones de menor importancia.

¿Cuándo comienza y termina la responsabilidad del capitan?—Comienza desde que se le hace la entrega del buque en la orilla del agua, ó en el muelle del puerto donde se carga, hasta que lo pone en la orilla ó muelle del puerto de la descarga, si otra cosa no se hubiere pactado expresamente, ó si no hubiere quedado de cuenta del cargador entregar la carga á bordo, ó recibirla del mismo modo; y cesa cuando los daños provienen de fuerza mayor ó caso fortuito.

¿En qué consiste la responsabilidad?—Varía segun la importancia, naturaleza y trascendencia de las faltas. La indemnizacion de daños y perjuicios, las multas, la pérdida de empleo, la inhabilitacion perpétua, y las penas señaladas por el Código, cuando las faltas se elevan á la categoria de delitos, forman la responsabilidad *civil* y *criminal* á que están sujetos los capitanes de las naves mercantes.

Tripulacion ó equipaje.

¿Quiénes componen la *tripulacion*?—Todas las personas que lleva la nave con destino á su servicio. Llámase tambien á su conjunto *equipaje*, y en él no se entiende comprendido el capitan. Generalmente componen la tripulacion el piloto, contraestre y los marineros. Dividese en *oficiales* y *marineros*, siendo los primeros el piloto y el contraestre.

¿Quién es el *piloto*?—La persona perita, encargada del derrotero de la nave, sujeta á las órdenes del capitan.

¿Qué clases hay de pilotos?—Dos, *teóricos* ó *de altura*, y *prácticos* ó *de costa*. Los primeros se forman por medio de estudios científicos reglamentados, y los segundos adquieren este título por el conocimiento práctico de las costas por donde van á navegar. A éstos pueden agregarse los *prácticos de puerto*, que lo son del á que están destinados, para dirigir la entrada y salida de los buques, y fijar el mejor fondeadero de los mismos.

¿Cuáles son sus deberes?—El piloto debe ir provisto de las cartas de navegacion é instrumentos necesarios para el desempeño de su cargo, y

responde de los accidentes á que dé lugar su omision en esta parte. Para mudar de rumbo ha de obrar el piloto con acuerdo del capitán; y si éste se opusiere á que tome el que convenga al buen viaje de la nave, le expondrá las observaciones convenientes en presencia de los demás oficiales de mar; y en caso de insistir el capitán en su resolucion, extenderá el piloto la conveniente protesta en el libro de navegacion, sin dejar de obedecer al capitán, á cuyo perjuicio vendrán las resultas de su mala disposicion. Los pilotos llevarán particularmente por sí un libro en que anotarán todos los dias la altura del sol, la derrota, la longitud y latitud y otras particularidades útiles. Sustituye al capitán interinamente en los casos de muerte, ausencia ó enfermedad.

¿Qué es *contramaestre*?—El oficial encargado de la tripulacion, del servicio de la nave y de su aparejo. Su cargo es de importancia suma, no sólo por los conocimientos que requiere su buen desempeño, sino por las atenciones que están á su mando.

¿Cuáles son sus atribuciones?—Es del cargo del contramaestre vigilar la conservacion de los aparejos de la nave y proponer al capitán las reparaciones que crea necesarias; arreglar en buen orden el cargamento; tener la nave expedita para las maniobras, y mantener el orden, la disciplina y buen servicio en la tripulacion, pidiendo al capitán las órdenes é instrucciones que sobre todo ello estime más convenientes, dándole aviso inmediato de cualquiera ocurrencia en que sea necesaria la intervencion de su autoridad. Cuando se desarme la nave se encargará por inventario de todos sus aparejos y pertrechos, cuidando de su conservacion y custodia, á menos que por orden del naviero sea relevado de este cargo.

De los contratos de la tripulacion.

¿Qué contratos otorgan los tripulantes?—La *locacion-conduccion* de servicios mediante un salario ó retribucion, formalizada por escrito en el libro de cuenta y razon de la nave, y firmada por los que supieren hacerlo, ú otro en su nombre.

¿Qué derechos nacen del contrato?—Los contenidos en las reglas siguientes: 1.º, no puede ser despedido sin justa causa el hombre de mar durante el tiempo de su contrata; 2.º, si arbitrariamente rehusare el capitán llevar á su bordo al hombre de mar que tenga ajustado, le pagará su soldada como si hiciera su servicio; y mediante esta indemnizacion no se le podrá obligar á llevarlo, con tal que lo deje en tierra antes de emprender el viaje; 3.º, despues que comience la navegacion, y durante ésta hasta concluir el viaje, no puede abandonar el capitán en tierra, ni en mar, á hombre alguno de su equipaje, á menos que como reo de algun delito no se proceda á su prision y entrega en el primer puerto de su arribada á la autoridad que corresponda, en los casos y forma que previenen las ordenanzas de Marina; 4.º, si despues de ajustado el equipaje se revocase el viaje de la nave por arbitrariedad del naviero ó por motivos de su interés particular, se abonará á todos los hombres de mar ajustados una mesada de su respectivo salario, por via de indemnizacion, aparte de lo que les corresponda percibir con arreglo á sus contratas por el tiempo que lleven de servicio en la nave; en el caso de estar el equipaje ajustado á una cantidad alzada por el viaje, se graduará lo que corresponda á dicha mesada y dietas; cuando el viaje que estaba proyectado se calculase de tan corta duracion que no pasase de un mes, la indemnizacion se reducirá al salario de quince dias á cada individuo del equipaje; 5.º, ocurriendo la revocacion del viaje despues que la nave hubiere salido al mar, devengarán los hombres de

mar, ajustados en una cantidad alzada por el viaje, todo lo que les correspondería si éste se hubiera concluido, y los que estén ajustados por meses percibirán el salario correspondiente al tiempo que hayan estado embarcados y al que necesiten para llegar al puerto donde debía terminarse el viaje. Será también de cargo del naviero y capitán proporcionar al equipaje trasportes para el mismo puerto, ó bien para el de la expedición de la nave, según más les convenga; 6.º, cuando el naviero diere distinto destino á la nave del que estaba determinado en los ajustes del equipaje, y los individuos de éste rehusaren conformarse á esta variación, no estará obligado á abonarles más que las soldadas de los días transcurridos desde sus ajustes; pero si ellos se conformaren en hacer el viaje determinado nuevamente por el naviero, y la mayor distancia ó otras circunstancias dieren lugar á un aumento de retribucion, se regulará ésta amigablemente, ó por árbitros en caso de discordia; 7.º, las reglas prescritas en los tres números precedentes se observarán tambien cuando la revocacion ó variacion del viaje traiga causa de los cargadores de la nave, quedando á salvo el derecho del naviero para reclamar de éstos la indemnizacion que corresponda en justicia; 8.º, revocándose el viaje de la nave por justa causa, independiente de la voluntad del naviero y cargadores, cesa el derecho del equipaje á indemnizacion alguna, y solamente podrá exigir los salarios devengados hasta el día en que se revoque el viaje, siempre que la nave esté todavía en el puerto.

¿Qué motivos justifican la revocacion del viaje?—Son causas justas para la revocacion del viaje: primera, la declaracion de guerra ó interdiccion de comercio con la potencia para cuyo territorio habia de hacer el viaje la nave; segunda, el estado de bloqueo del puerto á donde iba destinada, ó peste que en él sobrevenga; tercera, la prohibicion de recibir en el mismo puerto los géneros cargados en la nave; cuarta, la detencion ó embargo de la nave por orden del gobierno ú otra causa independiente de la voluntad del naviero; quinta, cualquiera descalabro en la nave, que la inhabilite para la navegacion.

¿Qué derechos tiene el equipaje cuando se extiende el viaje á punto más distante del convenido?—Percibirá aquél un aumento de soldada proporcional á sus ajustes: si, al contrario, por las mismas razones de conveniencia del naviero ó de los cargadores se redujere el viaje á un puerto más cercano, no se les podrá hacer por esta razon desfalcó alguno en sus ajustes.

¿Qué derechos tiene el equipaje en caso de pérdida de la nave?—Perdida enteramente por causa del apresamiento ó naufragio, no tiene derecho el equipaje á reclamar salario alguno, ni tampoco el naviero á exigir el reembolso de las anticipaciones que le hubiere hecho. Si se salvare alguna parte de la nave, se harán efectivos sobre ella los salarios debidos al equipaje hasta la cantidad que alcance su producto; y si sólo se hubiese salvado alguna parte del cargamento, tendrá el equipaje el mismo derecho sobre los fletes que deban percibirse por su transporte; en ambos casos será comprendido el capitán en la distribucion por la parte proporcional que corresponda á su salario. Los marineros que naveguen á la parte, no tendrán derecho alguno sobre los restos de la nave que se salve, sino sobre el flete de la parte del cargamento que haya podido salvarse.

¿Qué derechos le corresponden en caso de enfermedad, muerte ó apresamiento?—No cesa de devengar salario el hombre de mar que enfermase durante la navegacion, á menos que no haya emanado la enfermedad de un hecho culpable. Cuando la dolencia proceda de herida recibida en el servicio ó defensa de la nave, será asistido y curado á expensas de todos los que se interesen en el producto de ésta, deduciéndose de los fletes, ante todas cosas, los gastos de la asistencia y curacion. Muriendo el hombre de mar durante el viaje, se abonará á sus herederos el salario que correspon-

da al tiempo que haya estado embarcado, con arreglo á los términos del contrato de ajuste. Cualquiera que sea su ajuste, si es que ha muerto en defensa de la nave, se le considerará vivo para devengar los salarios y participar de las utilidades que correspondan á los demás de su clase, concluido que sea el viaje. Del mismo modo se considerará presente para gozar de los mismos beneficios al hombre de mar que fuere apresado en ocasion de defender la nave; pero siéndolo por descuido ú otro accidente que no tenga relacion con el servicio de ésta, percibirá solamente los salarios devengados hasta el dia de su apresamiento.

AUXILIARES DEL COMERCIO MARÍTIMO.

¿Cuáles son los auxiliares del comercio *marítimo*?—Los mismos que cooperan al ejercicio del terrestre, llamándose á los factores y mancebos *sobrecargos*, y á los corredores, *intérpretes de navio*.

¿Qué es *sobrecargo*?—El factor ó dependiente á quien su principal, interesado en la carga de un buque, pone en él para que cuide y vigile sus intereses durante el viaje. Requiere la aptitud del *factor* y el otorgamiento de poder.

¿Cuáles son las atribuciones y deberes de los *sobrecargos*?—Los sobrecargos ejercerán sobre la nave y el cargamento la parte de administracion económica que se les haya confiado expresa y determinadamente por sus comitentes, sin entrometerse en las atribuciones que son privativas de los capitanes para la direccion facultativa y mando de las naves. El sobrecargo debe llevar cuenta y razon de todas sus operaciones en un libro foliado y rubricado en la forma que se previene. Redúcense sus obligaciones á cumplir las órdenes é instrucciones que tuvieren, anotar sus operaciones y gozar del derecho de *pacotilla*, cuya negociacion es la única que les está permitida durante el viaje.

¿Cuáles son los *corredores intérpretes de navio*?—Las personas que ejercen en las operaciones del comercio *marítimo* las mismas funciones que los corredores del comercio *terrestre*.

¿Qué circunstancias deben concurrir en el nombramiento de estos cargos?—Sobre el nombramiento, aptitud y requisitos que han de cumplir los corredores de navios para entrar en posesion de sus cargos, se observarán las disposiciones prescritas con respecto á los corredores ordinarios, con sola la restriccion de reducirse á una mitad la cantidad designada para las fianzas de éstos. Para estos cargos serán preferidos los corredores ordinarios de la misma plaza, siempre que posean los idiomas vivos de Europa, cuyo conocimiento será de indispensable necesidad en todo el que haya de ser corredor intérprete de navio.

¿Cuáles son sus atribuciones?—1.ª, intervenir en los contratos de fletamento que los capitanes ó los consignatarios de los buques no hagan directamente con los fletadores; 2.ª, asistir á los capitanes y sobrecargos de naves extranjeras, y servirles de intérpretes en las declaraciones, protestas y demás diligencias que les ocurran en los tribunales y oficinas públicas; 3.ª, traducir los documentos que los expresados capitanes y sobrecargos extranjeros hayan de presentar en las mismas oficinas, certificando estar hechas las traducciones bien y fielmente, sin cuyo requisito no serán

admitidas, y 4.ª, representar á los mismos en juicio, cuando ellos no comparezcan personalmente ó por medio del naviero ó consignatario de la nave.

¿Cuáles son sus obligaciones?—Será obligacion de los corredores intérpretes llevar tres clases de asientos: 1.º, de los capitanes á quienes presten la asistencia que compete á su encargo, expresando el pabellon, nombre, calidad y porte del buque y los puertos de su procedencia y destino; 2.º, de los documentos que traduzcan, copiando las traducciones á la letra en el registro, y 3.º, de los contratos de fletamentos en que intervengan, expresando en cada asiento el nombre del buque, su pabellon, matricula y porte, los nombres del capitán y del fletador, el destino para donde se haga el fletamento y demás particularidades contenidas en la contrata original, de que el corredor deberá conservar un ejemplar. Estas tres clases de asientos se llevarán en libros separados con las formalidades que se previenen.

¿Cuáles son sus prohibiciones?—Tambien están sujetos á las prohibiciones prescritas para los corredores ordinarios.

CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARITIMO.

¿Cuáles son los contratos especiales del comercio marítimo?—El *fletamento*, los *seguros* y el *préstamo á la gruesa*. Llámense *especiales*, no porque los desconozca el derecho comun, sino porque se rigen por reglas diferentes de las establecidas por éste, cuando tienen lugar sobre objetos ó con ocasion de operaciones mercantiles.

Fletamento.

¿Qué es *fletamento*?—Un contrato consensual en virtud del que el naviero, ó capitán de la nave en su nombre, se obliga á trasportar de un punto á otro personas ó efectos, mediante el precio estipulado. Segun se vé, tiene por objeto la locacion de la nave, para el transporte. Llámase *fletante* al obligado á hacer el transporte; *fletador* al que lo pide y *flete* al precio del servicio. El contrato celebrado entre el propietario del buque y el naviero no es el *fletamento*, sino un arrendamiento de *cosa*, sujeto á las condiciones del Derecho civil.

¿Quiénes pueden celebrar el contrato de *fletamento*?—El naviero, el consignatario, y el capitán en ausencia de ambos, en concepto de *fletantes*; y en el de *fletador*, todo el que tenga capacidad para obligarse ú obligar á otros.

¿Qué extension puede alcanzar?—Puede ser *total* ó *parcial*; esto es, puede comprenderse la *carga general* de la nave ó una *parte de ésta*: ser *extensivo* á todo el viaje, á un tiempo determinado ó estar estipulado por meses, y estipularse *pura* ó *condicionalmente*, por cantidad alzada, por quintales ó por toneladas.

¿Qué requisitos deben concurrir en el contrato de *fletamento*?—1.º, la clase, el nombre y porte del buque; 2.º, su pabellon y puerto de su matricula; 3.º, el nombre, apellido y domicilio del capitán; 4.º, el nombre,

apellido y domicilio del naviero, si éste fuere quien contratare el fletamento; 5.º, el nombre, apellido y domicilio del fletador, y obrando éste por comision, el de la persona de cuya cuenta hace el contrato; 6.º, el puerto de carga y el de descarga; 7.º, la cabida, número de toneladas ó cantidad de peso ó medida que se obliguen respectivamente á cargar y recibir; 8.º, el flete que se haya de cargar, arreglado, bien por una cantidad convenida por el viaje, ó por un tanto al mes, ó por las cavidades que se hubieren de ocupar, ó por el peso ó la medida de los efectos en que consista el cargamento; 9.º, el tanto que se haya de dar al capitán por capa; 10, los días convenidos para la carga y la descarga; 11, las estadias y sobrestadias que pasados aquéllos habrán de contarse, y lo que se haya de pagar por cada una de ellas. Además se comprenderán en el contrato todos los pactos especiales en que convengan las partes. Para que los contratos de fletamento sean obligatorios en juicio, han de estar redactados por escrito en la *póliza de fletamento*, de que cada una de las partes contratantes debe recoger un ejemplar firmado por todas ellas. Cuando alguno no sepa firmar, lo harán á su nombre dos testigos.

¿A qué se dá el nombre de *capa*?—A una retribucion ó gratificacion que el fletador entrega al capitán, además del flete, en premio y como estímulo del cuidado y diligencia que debe prestar al cargamento. Suele consistir en un tanto por ciento del importe del flete.

¿Qué es *estadia*?—La indemnizacion que recibe el capitán del fletador por la demora en la carga y descarga de la nave.

¿Qué es *sobrestadia*?—Recibe este nombre la *estadia* cuando ha trascurrido el segundo plazo fijado para la carga ó descarga.

¿Cuáles son las obligaciones del fletante?—1.ª, recibir la carga que ha sido objeto del fletamento, conforme á la *póliza*, y la que pueda colocarse bajo escotilla, sin perjudicar al contrato, cuidando que se coloque en buena *estiva*; 2.ª, emprender el viaje dentro del plazo estipulado, no habiendo causa que lo dilate, tan luego como esté toda la carga á bordo, si el fletamento ha sido *total*, y á los ocho días despues que tenga las tres cuartas partes, y á los cuarenta desde que comenzó la carga, si no llegare á esta cantidad; 3.ª, hacer el viaje á sus expensas, procurando la mejor conservacion del cargamento hasta ponerlo en la orilla ó muelle de la descarga, á disposicion de los cargadores ó consignatarios, ó de la autoridad competente en caso de depósito.

¿Qué actos ú operaciones le están prohibidas?—1.º, contratar más carga de la que quepa en el buque, y la consistente en artículos de ilícito comercio; 2.º, retener su entrega por falta de pago de los fletes; 3.º, variar de nave, á no ser cuando no reuna las tres cuartas partes del fletamento, y ocultar su pabellón.

¿Cuáles son las obligaciones del fletador?—Poner la carga al costado del buque en el tiempo convenido, ó dentro del que marque el uso de la plaza, y pagar las *estadias* y *sobrestadias*.

¿Cuáles son las del consignatario?—Recibir los efectos, pagar los fletes y el derecho de *capa*.

¿Por qué causa puede rescindirse el fletamento?—Por la declaracion de guerra con la nacion á donde se destina la nave, ó cesacion de relaciones con el puerto de descarga; la venta de buque con algunas limitaciones; la voluntad del fletador, quedando obligado á la consiguiente indemnizacion, segun los perjuicios que ocasione; y la del fletante, cuando no le haya puesto la carga al costado del buque, con la misma obligacion de indemnizar.

¿Qué causas impiden ó retardan la terminacion del viaje fletado?—La declaracion de guerra, el bloqueo, el tiempo contrario, los descalabros de la nave, la falta de viveres, el temor de piratas ó enemigos, el naufragio y el apresamiento.

¿Qué obligaciones nacen de la *arribada*?—Cuando procede de *culpa del fletante*, ó de la del capitán, los cargadores tienen derecho á ser indemnizados. Si la causa es el mal tiempo ó el temor de piratas, y la nave vuelve al puerto de salida, pueden descargarla pagando el flete de ida, ó una mesada si iba destinada á puerto del mismo mar, y dos, si á otro diferente. Cuando la *arribada* tiene lugar á otro puerto, pueden hacer la descarga pagando el flete de ida, si dista del de salida más de la mitad de la distancia, y medio flete, si es menor. Cuando la causa de la *arribada* sea alguna reparación de la nave, no puede descargarse sin el pago del flete por entero, siempre que la dilación no pase de treinta días, y si excede de este término no debe satisfacer la parte del flete proporcional á la distancia á que la nave haya trasportado el cargamento.

¿Qué efectos legales produce el *naufragio* en el contrato de fletamento?—La carga que se haya perdido no adeuda flete, por lo cual debe devolverse el que se haya recibido. La salvada sólo paga en proporción á la distancia recorrida. Cuando el *naufragio* tiene lugar á la vuelta del buque fletado para viaje redondo, sólo hay derecho á cobrar el flete de ida. Estos efectos son aplicables al caso de apresamiento de la nave.

¿A qué se dá el nombre de *conocimiento*?—A un documento que se entregan mutuamente el cargador y el capitán de la nave, que comprende una relación ó inventario de los efectos cargados para su transporte.

¿Qué requisitos debe contener?—1.º, el nombre, matrícula y porte del buque; 2.º, el del capitán y el pueblo de su domicilio; 3.º, el puerto de la carga y el de la descarga; 4.º, los nombres del cargador y del consignatario; 5.º, la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías; 6.º, el flete y la capa contratada. Puede omitirse la designación del consignatario y ponerse á la orden, y éste firmará un conocimiento, que entregará al capitán. El capitán firmará tantos cuantos exija el cargador. Todos los conocimientos, ya sea el que debe firmar el cargador, ya los que se exijan al capitán, serán de un mismo tenor, llevarán igual fecha y expresarán el número de los que se han firmado.

¿Cuándo debe expedirse el conocimiento y cuáles son sus efectos?—No debe expedirse hasta que se haya entregado toda la carga, siendo el capitán responsable, sin pretexto ni excusa, de lo que conste en él. Los conocimientos á la orden se pueden ceder por endoso, y negociarse. En virtud del endoso se transfieren á la persona en cuyo favor se hace, todos los derechos y acciones del endosante sobre el cargamento. El portador legítimo de un conocimiento á la orden debe presentarlo al capitán del buque antes de darse principio á la descarga, para que se le entreguen directamente las mercaderías; y omitiendo hacerlo, serán de su cuenta los gastos que se causen en su conservación y depósito. Sea que el conocimiento esté dado á la orden, ó que se haya extendido en favor de persona determinada, no puede variarse el destino de las mercaderías sin que el cargador devuelva al capitán todos los conocimientos que éste firmó; y si el capitán consintiere en ello quedará responsable del cargamento al portador legítimo de los conocimientos. Todas las demandas entre cargador y capitán se han de apoyar, necesariamente, en el conocimiento de la carga entregada á éste, sin cuya presentación no se les dará curso. Reconocidas las firmas, los conocimientos tienen fuerza ejecutiva en juicio.

Riesgos y daños marítimos.

¿Qué causas suelen producir las pérdidas y daños de las naves y sus cargamentos?—Los accidentes del tiempo y de la mar, la existencia de una fuerza mayor, la detención forzosa por represalias ú orden de algun go-

bierno y el caso fortuito. Son accidentes de mar la tempestad y el choque del buque. Es fuerza mayor el encuentro de piratas ó corsarios, y están comprendidos en el caso fortuito el incendio, la peste, la sublevacion de la gente de mar y una escasez extremada. De estas causas nacen los riesgos y daños que, segun sus resultados, dan origen á las *averías*, *arribadas forzadas* y *naufragios*.

Averías.

¿A qué se dá el nombre de *averías*?—Son *averías* en sentido legal 1.º, todo gasto extraordinario y eventual que sobreviene durante el viaje de la nave, para la conservacion de ésta, de su cargamento ó de ambas cosas juntamente; 2.º, los daños que sufre la embarcacion desde que se haga á la vela en el puerto de su expedicion hasta que quede anclada en el de su destino, y los que reciba su cargamento desde que se cargue hasta que se descargue en el puerto á donde fuere consignado.

¿Cuántas clases hay de *averías*?—Divídense en *ordinarias* y *extraordinarias*; y éstas se subdividen en *simples* ó *particulares* y *gruesas* ó *comunes*. Los gastos que ocurren en la navegacion, conocidos con el nombre de *menudos*, pertenecen á la clase de *averías ordinarias*, las cuales son de cuenta del naviero fletante, y deben satisfacerse por el capitán, abonándosele la indemnizacion que se hubiere pactado en la póliza de fletamento ó en los conocimientos. Si no se hubiere pactado indemnizacion especial y determinada por estas *averías*, se entienden comprendidas en el precio de los fletes, y no tendrá derecho el naviero á reclamar cantidad alguna por ellas. Se consideran *gastos menudos* ó de *avería ordinaria* comprendidos en las disposiciones anteriores: 1.º, los pilotajes de costas y puertos; 2.º, los gastos de lanchas y remolques; 3.º, el derecho de bolisa, de piloto mayor, anclaje, visita y demás llamados de puertos; 4.º, los fletes de gabarras y descarga hasta poner las mercaderías en el muelle, y cualquiera otro gasto comun á la navegacion que no sea de los extraordinarios y eventuales.

Pertenecen á la clase de *averías simples* ó *particulares*: 1.º, los daños que sobrevienen al cargamento desde su embarque hasta su descarga por vicio propio de las cosas, por accidente de mar ó por efecto de fuerza insuperable, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos; 2.º, el daño que sobrevenga en el casco del buque, sus aparejos, arreos y pertrechos, por cualquiera de las mismas tres causas indicadas, y los gastos que se causaren para salvar estos efectos ó reponerlos; 3.º, los sueldos y alimentos de la tripulacion de la nave que fuere detenida ó embargada por orden legítima ó fuerza insuperable, si el fletamento estuviere contratado por un tanto el viaje; 4.º, los gastos que hiciere la nave para arribar á un puerto con el fin de reparar su casco ó arreos, ó para aprovisionarse; 5.º, el ménos valor que hayan producido los géneros vendidos por el capitán en una arribada forzada para pago de alimentos y salvarse la tripulacion, ó para cubrir cualquiera otra de las necesidades que ocurran en el buque; 6.º, el sustento y salarios de la tripulacion mientras la nave esté en cuarentena; 7.º, el daño que reciban el buque ó cargamento por el choque ó amarramiento con otro, siendo éste casual é inevitable: cuando alguno de los capitanes sea culpable de este accidente, será de su cargo satisfacer todo el daño que hubiere ocasionado; 8.º, cualquiera perjuicio que resulte al cargamento por descuido, faltas ó baraterías del capitán ó de la tripulacion, sin perjuicio del derecho del propietario á la indemnizacion competente contra el capitán, la nave y el flete. Se clasificarán además como *averías simples* ó *particulares*, todos los gastos y perjuicios causados á la nave ó en

su cargamento, que no hayan redundado en beneficios y utilidad comun de todos los interesados en el mismo buque y su carga.

¿De cuenta de quién son las *averías simples ó particulares*?—Los gastos y daños que se comprenden bajo ese nombre se soportarán por el propietario de la cosa que ocasionó el gasto ó recibió el daño.

¿Qué son *averías gruesas ó comunes*?—Averías gruesas ó comunes son todos los daños y gastos que se causan deliberadamente para salvar al buque, su cargamento ó algunos efectos de éste, de un riesgo conocido y efectivo. Salvo la aplicacion de esta regla general en los casos que ocurran, se declaran especialmente corresponder á esta clase de averías: 1.º los efectos ó dinero que se entreguen por vía de composicion para rescatar la nave y su cargamento, que hubieren caído en poder de enemigos ó de piratas; 2.º, las cosas que se arrojen al mar para aligerar la nave, ya pertenezcan al cargamento ó al buque y su tripulacion, y el daño que de esta operacion resulte á las que se conserven en la nave; 3.º, los mástiles que de propósito se rompan é inutilicen; 4.º, los cables que se corten y las áncoras que se abandonen para salvar el buque en caso de tempestad ó de riesgo de enemigos; 5.º, los gastos de alijo ó trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto ó rada, con el fin de salvarlo de riesgo de mar ó de enemigos, y el perjuicio que de ello resulte á los efectos alijados ó trasbordados; 6.º, el daño que se cause á algunos efectos del cargamento de resultados de haber hecho de propósito alguna abertura en el buque para desaguarlo y preservarlo de zozobrar; 7.º, los gastos que se hagan para poner á flote una nave que de propósito se hubiere hecho encallar con objeto de salvarla de los mismos riesgos; 8.º, el daño causado á la nave que fuere necesario abrir, romper ó agujerear de propósito para extraer y salvar los efectos de su cargamento; 9.º, la curacion de los individuos de la tripulacion que hayan sido heridos ó estropeados defendiendo la nave, y los alimentos de éstos mientras estén dolientes por estas causas; 10, los salarios que devengue cualquiera individuo de la tripulacion que estuviere detenido en rehenes por enemigos ó piratas, y los gastos necesarios que cause en su prision hasta restituirse al buque, ó á su domicilio, si no pudiere incorporarse en él; 11, el salario y sustento de la tripulacion del buque, cuyo fletamento estuviere ajustado por meses durante el tiempo que permaneciere embargado ó detenido por órden ó fuerza insuperable, ó para reparar los daños á que deliberadamente se hubiere expuesto para provecho comun de todos los interesados; 12, el menoscabo que resultare en el valor de los géneros que en una arribada forzosa haya sido necesario vender á precios bajos para reparar el buque del daño recibido por cualquier accidente que pertenezca á la clase de averías gruesas.

¿A quiénes afectan las *averías gruesas ó comunes*?—Al importe de los gastos y daños que causan todos los interesados en la nave y cargamento existente en ella al tiempo de correrse el riesgo de que procede la avería.

¿Qué formalidades deben observarse para la resolucion de una *avería*?—El capitán no puede resolver por sí solo los daños y gastos que pertenecen á la clase de averías *comunes* sin consultar á los oficiales de la nave y los cargadores que se hallen presentes, ó á sus sobrecargos. Si éstos se opusieren á las medidas que el capitán, con su segundo si lo tuviese, y el piloto, hallaren necesarias para salvar la nave, podrá el capitán proceder á ejecutarlas bajo su responsabilidad, no obstante la contradiccion, quedando á salvo el derecho de los perjudicados para deducirlo á su tiempo en el tribunal competente, contra el capitán que en estos casos hubiese procedido con dolo, ignorancia ó descuido. Cuando, hallándose presentes los cargadores, no sean consultados para la resolucion que previene el caso precedente, quedarán exonerados de contribuir á la avería comun, recayendo sobre el capitán la parte que á éstos corresponderia satisfacer, á menos que por la urgencia del caso hubiere faltado al capitán tiempo y oca-

sion para explorar la voluntad de los cargadores antes de tomar por sí disposición alguna. La resolución adoptada para sufragar los daños ó gastos de las averías comunes se extenderá en el libro de la nave, con expresion de las razones que la motivaron, de los votos que se hubieren dado en contrario y los fundamentos que hubieren expuesto los votantes. Esta acta se firmará por todos los concurrentes que sepan hacerlo, y se extenderá antes de procederse á la ejecucion de lo resuelto, si hubiere tiempo para ello; y en el caso de no haberlo, en el primer momento en que pueda verificarse. El capitán entregará copia de la deliberacion á la autoridad judicial en negocios de comercio del primer puerto donde arribe, afirmando bajo juramento que los hechos contenidos en ella son ciertos.

¿Qué reglas deben seguirse para evitar mayores daños en caso de *avería*?—Cuando se haya de arrojar al mar alguna parte del cargamento, se comenzará por las cosas más pesadas y de ménos valor; y en las de igual clase, serán arrojadas primero las que se hallen en el primer puente siguiendo el orden que determine el capitán, con acuerdo de los oficiales de la nave. Existiendo alguna parte del cargamento sobre el combés de la nave, será ésto lo primero que se arroje al mar. A continuacion del acta que contenga la deliberacion de arrojar al mar la parte del cargamento que se haya graduado necesaria, se anotará cuáles han sido los efectos arrojados; y si alguno de los conservadores hubiere recibido daño por consecuencia directa de la echazon, se hará tambien mencion de ellos.

¿Cómo se justifican las *averías*?—En el puerto en donde entre el buque debe el capitán formalizar la *protesta* dentro de las veinticuatro horas de su arribada, levantando acta en que se consigne la certeza de los hechos acaecidos, recogiendo testimonio del expediente instruido en el puerto de arribada, para poder repetir la protesta en el de su destino, en donde debe presentar informacion testifical en el tribunal de marina, con citacion de todos los interesados ó sus consignatarios, cuyo tribunal, en vista de su resultado, aprueba ó reprueba como ilegítima la *avería*.

¿Qué reglas deben seguirse en la distribucion de las pérdidas resultado de la *avería*?—1.^a la regulacion y justiprecio de la *avería* se verificará por peritos que, á propuesta de los interesados ó sus representantes, ó bien de oficio si éstos no lo hiciesen, nombrará el tribunal de comercio del puerto de la descarga, haciéndose ésta en territorio español. Si se hiciere en país extranjero competirá este nombramiento al consúl español, y no habiéndolo, á la autoridad judicial que conozca de los negocios mercantiles. Los peritos aceptarán el nombramiento y prestarán juramento de desempeñar fiel y legalmente su encargo; 2.^a debe apreciarse con separacion lo *salvado* y lo *perdido* ó *deteriorado*, ya pertenezca al buque, ya á su arboladura, ya á la carga que contenga, comprendiéndose en ésta los efectos que, arrojados al mar, han vuelto á recobrase. Por este medio se llega fácilmente á conocer la diferencia que media entre el valor de lo *salvado* y el valor de lo *perdido*, cuya diferencia constituye la cantidad con que debe contribuir la nave y sus pertrechos, las mercancías salvadas, etc.

¿A quién corresponde hacer la cobranza de las cuotas que deben satisfacerse?—Al capitán, facultado para retener los efectos salvados, si los consignatarios no afianzan su valor. Es responsable de los daños que sean consecuencia de la morosidad en entregarlos.

¿Cuándo ha de hacerse el pago?—Después de que el tribunal apruebe el repartimiento de la *avería*, con audiencia de los interesados y al término de tercero día, contado desde el auto de aprobacion. Si durante él el pago no tiene lugar, puede el capitán proceder contra los efectos salvados hasta realizarlos sobre sus productos. Si para cortar un incendio en algun puerto ó rada se mandase echar á pique algun buque, como medida necesaria para salvar los demás, se considerará esta pérdida como *avería* comun, á que contribuirán los demás buques salvados.

Arribadas forzosas.

¿Qué es *arribada forzosa*?—La entrada de un buque en un puerto distinto de aquél á que va destinado, motivada por la necesidad.

¿Cuáles son las causas justas en que puede fundarse?—1.^a, la falta de víveres; 2.^a, el temor fundado de enemigos ó piratas; 3.^a, cualquiera accidente en el buque que lo inhabilite para continuar la navegacion; ocurriendo alguno de estos motivos que obligue á la arribada, se examinará y calificará en junta de los oficiales de la nave, ejecutándose lo que se resuelva por la pluralidad de votos, de que se hará expresa é individual mencion en el acta que se extenderá en el registro correspondiente, firmándola todos los que sepan hacerlo. El capitán tendrá voto de calidad, y los interesados en el cargamento que se hallen presentes, asistirán también á la junta, sin voto en ella, y sólo para instruirse de la discusion y hacer las reclamaciones y protestas convenientes á sus intereses, que se insertarán también literalmente en la misma acta.

¿Qué clases hay de *arribada*?—*Legítimas é ilegítimas*. Son *legítimas* las que proceden de caso fortuito, é *ilegítimas* las que deben su origen al dolo, negligencia é imprevision del capitán. No se considerará legítima la arribada en los casos siguientes: 1.^o, procediendo la falta de víveres de no haberse hecho el aprovisionamiento necesario para el viaje, según uso y costumbre de la navegacion, ó de que se hubiesen corrompido por mala colocacion ó descuido en su buena custodia y conservacion; 2.^o, si el riesgo de enemigos ó piratas no hubiese sido bien conocido, manifiesto y fundado en hechos positivos y justificables; 3.^o, cuando el descalabro que la nave hubiere padecido tenga origen de no haberla reparado, pertrechado, equipado y dispuesto competentemente para el viaje que iba á emprender, y 4.^o, siempre que el descalabro provenga de alguna disposicion desacerutada del capitán, ó de no haber tomado las que convenian para evitarlo.

¿Quién es responsable de los daños causados en una *arribada forzosa*?—Los gastos de la *legítima* serán siempre de cuenta del *naviero ó fletante*, quedando por cuenta de aquél y del capitán mancomunadamente, los perjuicios de las *ilegítimas*.

¿En qué casos puede tener lugar la descarga en caso de *arribada*?—En tres: si la solicitan los cargadores; si se hace necesaria para reparar el buque, y si el cargamento ha padecido. En los dos últimos se necesita licencia del tribunal que conoce del expediente.

¿Cuándo debe continuarse el viaje?—Cuando el motivo de la arribada haya desaparecido. Si consistia en temor de enemigos ó piratas, debe ser objeto de una junta de oficiales de la nave, á que asistan los interesados en el cargamento.

Naufragios.

¿Qué se entiende por *naufragio*?—La pérdida total ó destruccion parcial de la nave. En este caso debe el capitán convocar la junta de que se ha hablado anteriormente para tratar del abandono del buque y de las medidas que sea conveniente adoptar. Acordado el abandono, debe procurarse la salvacion del cargamento, ya depositándolo en los demás buques del convoy, si los hubiere, ya adoptando los medios que las circunstancias permitan, si estuviere solo.

¿Qué formalidades debe cumplir el capitán en tierra?—Presentarse á la

autoridad, relacionando el suceso y los hechos posteriores al naufragio, quien debe recibir declaracion jurada á los pasajeros y á la tripulacion.

¿Qué deberes corresponden á las autoridades en los naufragios?—Deben adoptar todas las medidas necesarias para el socorro de las personas, del buque y su cargamento, atemperándose á lo que permitan las circunstancias. Están obligadas á instruir el correspondiente sumario en averiguacion de la moralidad del hecho y acordar la entrega de los efectos, si resulta haber persona con derecho á recibirlos, ó la publicacion de los mismos si no resulta dueño conocido. El buque es responsable de los gastos hechos, que en caso de abandono de sus dueños ó cuando no comparecen dentro del mes siguiente á la publicacion de edictos, puede realizar y satisfacer con el precio de las mercancías más expuestas á deteriorarse.

¿Qué obligaciones tiene el capitán que ha recogido efectos naufragados?—Está obligado á custodiarlos, conduciéndolos al puerto donde vá destinada su nave, en el cual se depositarán con autorizacion judicial, por cuenta de los legítimos interesados en ellos. En el caso de que sin variar de rumbo, y siguiendo el mismo viaje, se puedan descargar los efectos en el puerto á que iban consignados, podrá el capitán arribar á éste, siempre que consientan en ello los cargadores ó sobrecargos que se hallen presentes, los pasajeros y los oficiales de la nave, y que no haya riesgo manifiesto de accidente de mar ó de enemigos; pero no podrá verificarlo contra la liberacion de aquéllos, ni en tiempo de guerra, ó cuando el puerto sea de entrada peligrosa. Todos los gastos de la arribada que se hagan con el fin indicado, serán de cuenta de los dueños de los efectos naufragados, además de pagar los fletes correspondientes, que en defecto de convenio entre las partes se regularán á juicio de árbitros en el puerto de la descarga, teniendo en consideracion la distancia que haya porteadado los efectos, el buque que los recogió, la dilacion que sufrió, las dificultades que tuvo que vencer para recogerlos y los riesgos que en ello corrió.

Seguros marítimos.

¿Qué cosas pueden ser objeto de estos seguros?—El cargamento, el buque y su aparejo, construido ó en construccion; las cantidades dadas á la gruesa y la libertad de los navegantes. No se permite asegurar el buque y cargamento por la totalidad de su valor. Sólo puede serlo aquél por las cuatro quintas partes y éste por las nueve décimas.

¿Qué cosas no pueden ser objeto del seguro marítimo?—1.º, el flete del cargamento existente á bordo; 2.º, las ganancias calculadas y no realizadas sobre el mismo cargamento; 3.º, los sueldos de la tripulacion; 4.º, las cantidades tomadas á la gruesa; 5.º, los premios de los préstamos hechos á la gruesa; 6.º, la vida de los pasajeros ó de los individuos del equipaje; 7.º, los géneros de ilícito comercio; 8.º, las cosas de naciones extranjeras; 9.º, la nave dedicada al contrabando.

¿Qué riesgos son objeto de estos seguros?—Solamente los que puedan ocurrir en el mar, por su causa, fuerza mayor, orden legítima y caso fortuito, como el incendio. Al hablar de las *arribadas* nos hemos ocupado de ellos.

¿Qué excepciones hay en favor de los aseguradores?—No son de cuenta de los aseguradores los daños que sobrevengan por alguna de las causas siguientes: cambio voluntario de ruta, de viaje ó de buque, sin consentimiento de los aseguradores; separacion espontánea de un convoy, habiendo estipulado ir en conserva con él; prolongacion del viaje á un puerto más remoto del que se designó en el seguro; disposiciones arbitrarias y contra-

rias á la póliza del fletamento ó al conocimiento de los navieros, cargadores y fletadores, y baraterías del capitán ó del equipaje, no habiendo pacto expreso en contrario; mermas, desperdicios y pérdidas que procedieren del vicio propio de las cosas aseguradas, como no se hubieren comprendido en la póliza por cláusula especial. No responden los aseguradores de los daños que sobrevengan á la nave por no llevar en regla los documentos que prescriben las ordenanzas marítimas; pero si de la trascendencia que pueda tener esta falta en el cargamento que vaya asegurado. Los aseguradores no están obligados á sufragar los gastos de pilotaje y remolque, ni los derechos impuestos sobre la nave ó su cargamento.

¿Qué formalidades deben observarse en la celebracion del contrato?—Debe ser reducido á póliza ó escritura suscrita por los interesados, ó en la que intervenga escribano. De cualquiera manera que se extienda el contrato de seguro, debe contener todas las circunstancias siguientes: 1.^a, la fecha, con expresion de la hora en que se firma; 2.^a, los nombres, apellidos y domicilios del asegurador y el asegurado; 3.^a, si el asegurado hace asegurar efectos propios ó si obra en comision por cuenta de otro; 4.^a, el nombre y domicilio del propietario de las cosas que se aseguran, en el caso de hacer el seguro por comision; 5.^a, el nombre, porte, pabellon, matricula, armamento y tripulacion de la nave en que se hace el transporte de las cosas aseguradas; 6.^a, el nombre, apellido y domicilio del capitán; 7.^a, el puerto ó rada en que las mercaderías han sido ó deben ser cargadas; 8.^a, el puerto de donde el navio ha debido ó debe partir; 9.^a, los puertos ó radas en que debe cargar ó descargar, ó por cualquiera otro motivo hacer escalas; 10, la naturaleza, calidad y valor de los objetos asegurados; 11, las marcas y números de los fardos, si las tuviesen; 12, los tiempos en que deben empezar y concluir los riesgos; 13, la cantidad asegurada; 14, el premio convenido por el seguro, y el lugar, tiempo y modo de su pago; 15, la cantidad del premio que corresponda al viaje de ida y al de vuelta, si el seguro se hubiere hecho por viaje redondo; 16, la obligacion del asegurador á pagar el daño que sobrevenga en los efectos asegurados; 17, el plazo, lugar y forma en que haya de hacerse su pago; 18, la sumision de los contratantes al juicio de árbitros en caso de contestacion, si hubieren convenido en ella, y cualquiera otra condicion lícita que hubieren pactado en el contrato.

¿Es endosable la póliza del seguro?—Extendiéndose la obligacion del asegurador, no sólo en favor de la persona á cuyo nombre se hace el seguro, sino tambien á su orden, será endosable la póliza.

¿Qué requisitos debe contener el seguro de la libertad de las personas?—Los siguientes: 1.^o, el nombre, naturaleza, domicilio, edad y señas de la persona asegurada; 2.^o, el nombre y matricula del navio en que se embarca; 3.^o, el nombre de su capitán; 4.^o, el puerto de su salida; 5.^o, el de su destino; 6.^o, la cantidad convenida por el rescate y los gastos del regreso á España; 7.^o, el nombre y domicilio de la persona que se ha de encargar de negociar el rescate, y 8.^o, el término en que éste ha de hacerse, y la indemnizacion que deba retribuirse en caso de no verificarse.

¿Qué obligaciones nacen del contrato?—Corren por cuenta de los aseguradores todas las pérdidas y daños que sobrevengan á las cosas aseguradas por los riesgos que puedan ser objeto del seguro marítimo. Los asegurados deben satisfacer la *prima* estipulada desde que el riesgo se ha comenzado á correr. Si el riesgo sobreviniere, debe avisar y obedecer las órdenes del asegurador, y practicar las diligencias necesarias para salvar los efectos asegurados.

¿Qué derechos competen al asegurado?—1.^o, si el asegurado fuere declarado en quiebra, pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, podrá el asegurado exigir las fianzas; y no dándosele, bien por el mismo quebrado ó por los administradores de su quiebra, en el término de los tres dias siguientes al requerimiento que se les haga para darlas, se rescindirá el con-

trato: el asegurador tiene el mismo derecho sobre el asegurado cuando no haya recibido el premio del seguro; 2.º, puede pedir la nulidad del contrato dejando de verificarse el viaje, aun cuando sea por su culpa ó arbitrariedad, y 3.º, el llamado *de abandono*, que consiste en dejar los efectos asegurados, reclamando su importe cuando la ley lo autoriza.

¿En qué casos puede tener lugar el *abandono*?—En siete: 1.º, apresamiento; 2.º, naufragio; 3.º, rotura ó varamiento de la nave que la inhabilite para navegar; 4.º, embargo ó detención por orden del gobierno propio ó extranjero; 5.º, pérdida total de las cosas aseguradas; 6.º, deterioración de las mismas que disminuya su valor en las tres cuartas partes, á lo ménos, de su totalidad, y 7.º, todos los demás daños se reputan averías y se soportarán por quien corresponda, según los términos en que se haya contratado el seguro.

¿Cómo se debe hacer el *abandono* para que sea eficaz?—Debe ponerse en conocimiento de los aseguradores dentro de los seis meses siguientes á la fecha en que se recibió la noticia de la pérdida acaecida en los puertos y costas de Europa, y en los de Asia y Africa que están en el Mediterráneo. Este término será de un año para las pérdidas que sucedan en las islas Azores, de Madera, islas y costas occidentales de Africa y orientales de América, y será de dos en cualquiera otra parte del mundo más lejana. Con respecto á los casos de apresamiento, correrán los términos prefijados anteriormente desde que se recibió la noticia de haber sido conducida la nave á cualquiera de los puertos situados en alguna de las costas mencionadas. Debe ser absoluto y total, puro y sin condicion.

¿Cuáles son sus efectos?—Admitido el abandono, ó declarándose válido en juicio, se trasfiere al asegurador el dominio de las cosas abandonadas, correspondiéndole las mejoras ó perjuicios que en ellas sobrevengan, desde el momento en que se propuso el abandono. El regreso de la nave después de admitido el abandono, no exonera á los aseguradores del pago de los efectos abandonados. Comprende los fletes del cargamento salvado, aun cuando se hayan pagado con anticipación.

¿Qué causas anulan el seguro?—Es nulo cuando recae sobre cosas que no pueden ser objeto de él; cuando se extiende á todo el valor ó riesgo; cuando la pérdida de las cosas es conocida; cuando no se consigna en escritura pública con las formalidades legales, ó se contrae á favor de quien no tiene derecho en la cosa ó ha habido dolo ó falsedad. Sus efectos consisten en la invalidación del contrato.

¿Por qué causas está sujeto á rescisión?—1.º, se rescinde *totalmente* por la quiebra de cualquiera de los contratantes, cuando ni ellos ni los administradores dan fianza; 2.º, por la falta de realización del viaje, ó no haberse emprendido dentro del año siguiente al otorgamiento del contrato; 3.º, cuando se varíen la nave, el capitán ó los efectos que deban cargarse.

Se rescinde *parcialmente* por el exceso de la valoración que se ha dado á los géneros por error ó equivocación; cuando no se carguen todos los asegurados; cuando siendo más de uno el seguro y no comprendiéndose en el primero todo el valor de lo asegurado, se contrata en los segundos y terceros, por más de lo que quedó por asegurar en el primero.

Son efectos de la *rescisión* la disminución de lo contratado á sus justos límites en la *parcial*, y la ineficacia del contrato en la *total*. El asegurado debe pagar siempre un medio por ciento sobre el importe del valor rescindido, excepto el caso de quiebra.

Préstamos á la gruesa.

¿Qué es contrato á la gruesa ó préstamo á riesgo de mar?—Un contrato por el que uno entrega cierta cantidad de dinero, mercancías ú otros efec-

tos á un tercero que debe devolverla con un premio, hipotecando para seguridad de su devolucion efectos destinados al comercio marítimo, obligándose á responder de los riesgos el prestamista. Son, pues, sus requisitos el *capital*, el *riesgo*, los *efectos* del comercio marítimo hipotecados y la *prima* que se devenga. Bien examinado, es un compuesto del *préstamo* y del *seguro*. Puede definirse en otros términos: «Un contrato real, unilateral, aleatorio, en virtud del cual una persona presta á otra cierta cantidad en dinero ó efectos, sobre cosas expuestas á riesgos marítimos, que le ha de ser devuelta con la ganancia estipulada si se salva, y perdida si ellas se pierden.»

¿De cuántas maneras pueden celebrarse, qué formalidades deben concurrir en su celebracion y qué efectos produce?—Puede otorgarse de tres maneras: por *instrumento público*, con las solemnidades de derecho; en *póliza* firmada por las partes, con intervencion de corredor, y por *documento privado* entre los contrayentes. Los contratos á la gruesa que consten por instrumento público traen aparejada ejecucion. El mismo efecto producirán cuando, habiéndose celebrado con intervencion de corredor, se compruebe la póliza del demandante con el registro del corredor que intervino en el contrato, siempre que aquél se encuentre con todas las formalidades que previene el derecho. Celebrándose privadamente entre los contratantes, no será ejecutivo el contrato sin que conste la autenticidad de las firmas por reconocimiento judicial de los mismos que las pusieron, ó en otra forma suficiente. Los préstamos á la gruesa contraídos de palabra son ineficaces en juicio, y no se admitirá en su razon demanda ni prueba alguna. En la redaccion del contrato á la gruesa se hará expresion de: 1.º, la clase, nombre y matricula del buque; 2.º, el nombre, apellido y domicilio del capitán; 3.º, los nombres, apellidos y domicilios del dador y del tomador del préstamo; 4.º, el capital del préstamo y el premio convenido; 5.º, el plazo del reembolso; 6.º, los efectos hipotecados; 7.º, el viaje por el cual se corra el riesgo.

¿Son negociables las pólizas de estos contratos?—Pueden cederse y negociarse por endosos, estando extendidas *á la orden*; y en fuerza del endoso se trasmiten á los cesionarios todos los derechos y riesgos del dador del préstamo.

¿Quiénes pueden celebrarlo?—Todos los que pueden prestar y asegurar, y los que tengan efectos destinados á la navegacion y expuestos á correr riesgos de mar, como el propietario de la nave, el naviero, los cargadores y el capitán, estando de *arribada*, con necesidad de reparar ó abastecer la nave, sin tener fondos para ello ni haber corresponsales ni interesados en la carga en el puerto en que se halle. Para ello debe pedir licencia al tribunal competente. No quedarán obligados el buque, sus aparejos, armamento ni virtualas, al préstamo á la gruesa que tome el capitán en la plaza donde residan el naviero ó sus consignatarios, sin que éstos intervengan en el contrato ó lo aprueben por escrito, y la obligacion del capitán sólo será eficaz con respecto á la nave por la parte de propiedad que tenga en ella.

¿Qué cosas pueden ser y cuáles no, objeto del *préstamo á la gruesa*?—Los préstamos á la gruesa pueden constituirse conjunta ó separadamente sobre el casco y quilla del buque, las velas y aparejos, el armamento y virtuala y las mercaderías cargadas. Si se constituye el préstamo á la gruesa sobre el casco y quilla del buque, se entienden hipotecados al capital y premios, el buque, las velas, aparejos, armamento, provisiones y los fletes que ganare en el viaje. No puede recaer sobre mayor cantidad que lo que importen las tres cuartas partes de la nave; sobre los salarios del equipaje; sobre la carga por más valor que el que se le dé en el puerto en que empiece á correr el riesgo; sobre los fletes no devengados; sobre los efectos que ya están corriendo el riesgo; sobre la vida de los pasajeros y de la tripulacion y sobre los géneros de ilícito comercio.

¿Qué clases de riesgos deben sufrir los efectos dados en préstamo á la gruesa?—Los mismos que son objeto del contrato de seguros.

¿Qué derechos y obligaciones nacen de aquel contrato?—Salvándose los efectos hipotecados, el prestador á nada queda obligado. Si no se salvan se extinguen sus derechos. El prestador pierde el capital y el premio íntegramente con la desaparición de los efectos, y sólo en parte percibiendo el relativo á los que se salvan, en caso de naufragio. Ambos contratantes soportarán á prórata las averías que padezcan las cosas hipotecadas. No se extinguirá la acción del prestador aún cuando se pierdan las obligadas al pago del préstamo si el daño ocurrido en ellas procediere de alguna de las causas siguientes: 1.^a, por vicio propio de la misma cosa; 2.^a, por dolo ó culpa del tomador; 3.^a, por baratería del capitán ó del equipaje; 4.^a, cargándose las mercaderías en buque diferente del que se designó en el contrato, á menos que por acontecimiento de fuerza insuperable hubiese sido indispensable trasladar la carga de un buque á otro. En cualquiera de estos casos tiene derecho el prestador á la gruesa al reintegro de su capital y réditos, no habiéndose pactado expresamente lo contrario. El deudor debe probar la pérdida de los efectos. Cuando se salvan, debe pagar el capital y el premio en la época, lugar y forma convenidas.

¿Qué prelación de créditos se establece sobre el valor de los efectos hipotecados, cuando concurren con el prestador otros acreedores?—Distinta, segun la naturaleza de aquéllos y la extension de las cosas sobre que recae. Cuando los acreedores son hipotecarios, es preferible aquél. Cuando son de la misma naturaleza, es preferible el más moderno al más antiguo, por regla general. Si el préstamo está constituido sobre la nave, para repararla ó habilitarla, son preferidos los créditos inscritos en el registro civil, los celebrados durante el viaje, antes de emprenderlo y después de concluidos los anteriores, por el orden inverso de sus fechas. Cuando el préstamo se ha contraído sobre las mercancías, si se han destinado á beneficiar la carga, la preferencia de créditos es la señalada para los de las naves. Si se han tomado para otros fines semejantes, los segundos préstamos serán nulos con tal que los primeros hayan sido contraídos en forma legal y registrados en el oficio de hipotecas. Si con el prestador á la gruesa concurre en caso de naufragio un asegurador de los mismos objetos sobre que estuviere constituido el préstamo, dividirán entre sí el producto de los que se hubieren salvado, á prórata de su interés respectivo, siempre que la cantidad asegurada cupiera en el valor de los objetos, despues de deducido el importe del préstamo. En concurrencia de todos los interesados, el naviero será preferido al prestador y asegurador, porque los efectos cargados están especialmente hipotecados al pago de los fletes.

¿Qué causas producen la nulidad del préstamo á la gruesa?—La omision de alguna solemnidad ó falta de los requisitos esenciales, y si constituyen su objeto géneros ó cosas acerca de las cuales hay prohibicion legal, algunas de las que hemos indicado al tratar de los seguros. La rescision puede ser absoluta ó parcial. La absoluta tiene lugar cuando los efectos no llegan á ponerse en riesgo, porque esto constituye la circunstancia capital del contrato. La parcial procede de haber tomado mayor cantidad en préstamo que el valor de las tres cuartas partes de la nave, de no haber podido emplear todo lo recibido en sus reparaciones ó en la carga, ó, una vez empleado, no haber cargado todos los géneros comprados. El efecto de la rescision parcial consiste en restituir el sobrante al prestador antes de la expedicion de la nave.

Extincion de las obligaciones marítimas.

¿Por qué medios se extinguen las obligaciones procedentes del comercio marítimo?—Por los mismos medios ordinarios y extraordinarios porque se extinguen las obligaciones mercantiles en general, de los cuales ya nos hemos ocupado, limitándonos á ampliar lo entonces dicho acerca de la *prescripcion* (1). La regla general en esta materia consiste en que todas las acciones mercantiles, que no tengan un plazo determinado para su deducion en juicio, prescriben por el tiempo señalado en el Derecho civil, atendida su naturaleza.

¿Por qué tiempo prescriben las acciones nacidas de los contratos marítimos?—Por dos y seis meses, uno y cinco años. Prescriben á los dos meses las acciones del consignatario contra el capitan y aseguradores por el daño de la nave, y las del capitan contra el fletador para el pago de averias y gastos de arribada á que está afecto el cargamento, cuyo término empezará á contarse, para el consignatario, desde la entrega de éste, y para el capitan, desde el recibo de los fletes, siendo indispensable la protesta y su notificacion.

Prescribe á los seis meses la accion para reclamar los fletes y el importe de las averias comunes, contados desde la entrega de los efectos conducidos.

Prescriben al año: 1.º, las acciones procedentes de vituallas destinadas al aprovisionamiento de la nave ó de alimentos suministrados á los marinos, de órden del capitan, contado el tiempo desde su entrega, siempre que dentro de él haya estado fondeada la nave por el espacio de quince días, cuando ménos, en el puerto donde se contrajo la deuda; no sucediendo así conservará el acreedor su accion, aun despues de trascurrido el año, hasta que fondee la nave en dicho puerto, y quince días más; 2.º, la reclamacion de los jornales devengados en obras hechas en las naves, en las mismas condiciones del caso anterior; 3.º, la de los oficiales y tripulacion por el pago de sus salarios y gajes prescribe al año, despues de concluido el viaje en que los devengaron, y 4.º, la accion sobre entrega del cargamento ó por daños causados en él, un año despues del arribo de la nave.

Prescriben por cinco años: 1.º, la accion para repetir el valor de los efectos suministrados para construir, reparar y pertrechar las naves, contados desde que se hizo su entrega; 2.º, la accion que provenga del préstamo á la gruesa y de la póliza de seguros, contando el tiempo desde la fecha del contrato.

De las quiebras.

¿A qué se dá el nombre de quiebra?—Al estado en que se coloca un comerciante, y cesando en el pago corriente de sus obligaciones. En la acepcion más lata la quiebra comprende «la suspension de pagos que hace un comerciante.» El que no reuna esta cualidad no puede constituirse ni ser declarado en quiebra.

(1) Páginas 31 y 56.

¿Qué clase de quiebras distingue el Código?—Cinco: 1.ª, suspensión de pagos; 2.ª, insolvencia fortuita; 3.ª, insolvencia culpable; 4.ª, insolvencia fraudulenta; 5.ª, alzamiento.

Entiéndese quebrado de *primera clase* el comerciante que, manifestando bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, suspende temporalmente los pagos, y pide á sus acreedores un plazo en que pueda realizar sus mercaderías ó créditos, para satisfacerles. Es quiebra de *segunda clase* la del comerciante á quien sobrevienen infortunios casuales é inevitables en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil, que reducen su capital al punto de no poder satisfacer el todo ó parte de sus deudas.

Se reputan quebrados de *tercera clase*, los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 1.º, cuando los gastos domésticos y personales del quebrado hubieren sido excesivos y descompasados con relacion á su haber líquido, atendidas las circunstancias de su rango y familia; 2.º, si hubiere hecho pérdidas en cualquiera especie de juego que excedan de lo que por vía de recreo aventura en entretenimientos de esta clase un padre de familia arreglado; 3.º, si las pérdidas le hubieren sobrevenido de apuestas cuantiosas, de compras y ventajas simuladas ú otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependa absolutamente del azar; 4.º, si hubiere revendido á pérdida, ó por ménos precio del corriente, efectos comprados al fiado en los seis meses precedentes á la declaracion de la quiebra, que todavía estuviere debiendo; 5.º, si constare que en el periodo transcurrido desde el último inventario hasta la declaracion de quiebra hubo época en que el quebrado estuviere en débito por sus obligaciones directas de una cantidad doble del haber líquido que le resultaba, segun el mismo inventario.

Serán tambien tratados en el juicio como quebrados de *tercera clase*, salvas las excepciones que propongan y prueben para destruir este concepto y demostrar la inculpabilidad de quiebra: 1.ª, los que no hubiesen llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos que prescribe el Código de comercio, aunque de sus defectos y omisiones no haya resultado perjuicio á tercero; 2.ª, los que no hubiesen hecho su manifestacion de quiebra en el término y forma que se prescriben; 3.ª, los que, habiéndose ausentado al tiempo de la declaracion de la quiebra ó durante el progreso del juicio, dejaren de presentarse personalmente en los casos que la ley impone esta obligacion, á ménos de tener impedimento legítimo para hacerlo.

Pertenecen á la *cuarta clase*, los quebrados en quienes concurren algunas de las circunstancias siguientes: 1.ª, si en el balance, memorias, libros ú otros documentos relativos á su giro y negociaciones incluyese el quebrado gastos, pérdidas ó deudas supuestas; 2.ª, si no hubiese llevado libros, ó si habiéndolos llevado los ocultare é introducir en ellos partidas que no se hubiesen sentado en el lugar y tiempo oportuno; 3.ª, si de propósito rasgase, borrarse ó alterase en otra cualquiera manera el contenido de los libros; 4.ª, si de su contabilidad comercial no resultare la salida ó existencia del activo de su último inventario y del dinero, valores, muebles y efectos, de cualquiera especie que sean, que constare ó se justificare haber entrado posteriormente en poder del quebrado; 5.ª, si hubiese ocultado en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros, ú otra especie de bienes ó derechos; 6.ª, si hubiese consumido y aplicado para sus negocios propios, fondos ó efectos ajenos que le estuviesen encomendados en depósito, administracion ó comision; 7.ª, si sin autorizacion del propietario, hubiere negociado letras de cuenta ajena que obrasen en su poder para su cobranza, remision ú otro uso distinto del de la negociacion, y no le hubiese hecho remesa de su producto; 8.ª, si hallándose comisionado para la venta de algunos géneros, ó para negociar créditos ó valores

de comercio, hubiese ocultado la enajenacion al propietario por cualquier espacio de tiempo; 9.^a, si supusiese enajenaciones simuladas, de cualquiera clase que éstas sean; 10, si hubiese otorgado, consentido, firmado ó reconocido deudas supuestas, presumiéndose tales, salva la prueba en contrario, todas las que no tengan causa de haber ó valor determinado; 11, si hubiese comprado bienes inmuebles, efectos ó créditos en nombre de tercera persona; 12, si en perjuicio de los acreedores hubiese anticipado pagos que no eran exigibles sino en época posterior á la declaracion de la quiebra; 13, si despues del último balance hubiese negociado el quebrado letras de su propio giro á cargo de persona, en cuyo poder no tuviera fondos, ni crédito abierto sobre ella, ó autorizacion para hacerlo; 14, si despues de haber hecho la declaracion de quiebra hubiese percibido y aplicado á sus usos personales dinero, efectos ó créditos de la masa, ó por cualquiera medio hubiese distraido de ésta alguna de sus pertenencias.

Se presume de derecho *quiebra fraudulenta* ó de *cuarta clase*, sin perjuicio de las excepciones que se prueben en contrario, en el comerciante en cuyos libros no pueda deducirse, en razon de su informalidad, cuál sea su verdadera situacion activa y pasiva, é igualmente en el que, gozando de salvo-conducto, no se presente ante el tribunal que conoce de la quiebra, siempre que por éste se le mande verificarlo.

¿Quiénes se reputan cómplices en las *quiebras fraudulentas*?—1.^o, los que habiéndose confabulado con el quebrado para suponer créditos contra él, ó aumentar el valor de los que efectivamente tengan sobre sus bienes, sostengan esta suposicion en el juicio de examen y calificacion de los créditos, ó en cualquiera junta de los acreedores de la quiebra; 2.^o, los que de acuerdo con el mismo quebrado, alterasen la naturaleza ó fecha del crédito para anteponerse en la graduacion, con perjuicio de otros acreedores, aún cuando esto se verificase ántes de hacerse la declaracion de la quiebra; 3.^o, los que de ánimo deliberado hubiesen auxiliado al quebrado para ocultar ó sustraer, despues que cesó en sus pagos, alguna parte de sus bienes ó créditos; 4.^o, los que siendo tenedores de alguna pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria la declaracion de quiebra por el tribunal que de ella conozca, la entregasen á éste y no á los administradores legítimos de la masa, á ménos que, siendo de reino ó provincia diferente de la del domicilio del quebrado, prueben que en el pueblo de su residencia no se tenia noticia de la quiebra: esta excepcion no será admisible con respecto á los que habiten la misma provincia que el quebrado; 5.^o, todos los que negaren á los administradores de la quiebra la existencia de los efectos que obrasen en su poder pertenecientes al quebrado; 6.^o, los que despues de publicada la declaracion de la quiebra admitiesen endosos del quebrado; 7.^o, los acreedores legítimos que hiciesen conciertos privados y secretos con el quebrado, en perjuicio y fraude de la masa; 8.^o, los corretores que interviniesen en operacion alguna de tráfico ó giro que hiciere el que estuviere declarado en quiebra. Llámase *alzado* al quebrado que oculta sus bienes con perjuicio de los acreedores.

¿Qué responsabilidad tienen ambos?—Serán condenados civilmente y sin perjuicio de las penas en que incurran con arreglo á las leyes criminales: 1.^o, á perder cualquiera derecho que tengan en la masa de la quiebra en que sean declarados cómplices; 2.^o, á reintegrar á la misma masa los bienes, derechos y acciones sobre cuya sustraccion hubiese recaído su complicidad; 3.^o, á la pena del doble tanto de la sustraccion, aún cuando no se llegara á verificar, aplicada por mitad al fisco y á la masa de la quiebra.

Los que simplemente y sin cometer fraude alguno en perjuicio de los acreedores del alzado le facilitasen medios de evasion, no son cómplices del alzamiento ni contraen la responsabilidad civil; pero si incurrirán en

las penas impuestas por el derecho comun á los que favorecen á sabiendas la fuga de los criminales.

¿De cuántas maneras puede procederse á la declaracion judicial de quiebra?—Puede hacerse á solicitud del quebrado y á instancia de acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles. En el caso de fuga notoria de un comerciante, con las circunstancias que se prefijan, procederá de oficio la jurisdiccion de comercio á la ocupacion de los establecimientos del fugado, y prescribirá las medidas que exija su conservacion entretanto que los acreedores usen de su derecho sobre la declaracion de quiebra. De esto se deduce que en ningun caso procede hacer de oficio la declaracion de quiebra, puesto que las facultades del tribunal, en el que acabamos de referir, reducen taxativamente á diligencias preliminares y preventivas.

¿En qué forma y con qué solemnidades debe pedir la declaracion de quiebra el deudor?—Es obligacion de todo comerciante que se encuentre en estado de quiebra ponerlo en conocimiento del tribunal ó juez de comercio de su domicilio, dentro de los tres dias siguientes al en que hubiere cesado en el pago corriente de sus obligaciones, entregando al efecto en la escribania del mismo tribunal una exposicion en que se manifieste en quiebra y designe su habitacion y todos los escritorios, almacenes y otros cualesquiera establecimientos de su comercio.

Con la exposicion en que se manifieste en quiebra acompañará el quebrado: 1.º, el balance general de sus negocios; 2.º, una memoria ó relacion que exprese las causas directas é inmediatas de su quiebra.

En el balance general hará el quebrado la descripcion valorada de todas sus pertenencias en bienes, muebles é inmuebles, efectos y géneros de comercio, créditos y derechos, de cualquiera clase que sean, así como igualmente de todas sus deudas y obligaciones pendientes. Con la relacion de las causas de las quiebras podrá el quebrado acompañar todos los documentos de comprobacion que tenga por conveniente. Tanto la exposicion de quiebra como el balance y la relacion prevenidas llevarán la firma del quebrado, ó de persona autorizada bajo su responsabilidad para firmar estos documentos con poder especial, de que se acompañará copia fehaciente, sin cuyo requisito no se les dará curso.

¿Quién debe pedir la declaracion de una *compañía*?—En las *colectivas*, todos los socios que residan en el pueblo, y en las *en comandita*, los solidarios, por la analogia de sus cargos con aquéllos.

¿Qué requisitos deben concurrir para la declaracion de quiebra solicitada por los acreedores?—Es indispensable que conste préviamente en debida forma la cesacion de pagos del deudor por haberse denegado generalmente á satisfacer sus obligaciones vencidas, ó bien por su fuga ó ocultacion, acompañada del cerramiento de sus escritorios y almacenes, sin haber dejado persona que en su representacion dirija sus dependencias, y de evasion á sus obligaciones. No será suficiente para declarar en quiebra á un comerciante á instancia de sus acreedores, que haya ejecuciones pendientes contra sus bienes, mientras él manifieste ó se le hallen bienes disponibles sobre que trabarlas.

Para que se hagan de oficio las diligencias previas, ya queda indicado que debe constar notoriamente la fuga del deudor.

¿Qué efectos produce la declaracion de *quiebra*?—1.º, el quebrado queda de derecho separado é inhibido de la administracion de todos sus bienes desde que se constituye en estado de quiebra; 2.º, todo acto de dominio y administracion que haga el quebrado sobre cualquiera especie y porcion de sus bienes despues de la declaracion de quiebra, y los que haya hecho posteriormente á la época á que retrotraigan los efectos de dicha declaracion, son nulos; 3.º, las cantidades que el quebrado haya satisfecho en dinero, efectos ó valores de crédito, en los quince dias precedentes á la

declaracion de quiebra, por deudas y obligaciones directas cuyo vencimiento fuese posterior á ésta, se devolverán á la masa por los que las percibieron; 4.º, se reputan fraudulentos y quedarán ineficaces de derecho con respecto á los acreedores del quebrado, los contratos celebrados por éste en los treinta dias precedentes á su quiebra que sean de las especies siguientes: *primera*, todas las enajenaciones de bienes inmuebles hechas á título gratuito; *segunda*, las constituciones dotalas hechas de bienes propios á sus hijos; *tercera*, las cesiones y trasposos de bienes inmuebles hechos en pago de deudas, no vencidas al tiempo de declararse la quiebra; *cuarta*, las hipotecas convencionales establecidas sobre obligaciones de fecha anterior que no tuviesen esta calidad, ó sobre préstamos de dinero ó mercaderías, cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de otorgarse la obligacion ante el escribano y testigos que intervinieron en ella: son tambien fraudulentas é ineficaces las donaciones entre vivos no remuneratorias, otorgadas despues del último balance, si resulta inferior el *pasivo* al *activo*; 5.º, todo contrato hecho por el quebrado en los cuatro años anteriores á la quiebra, en que se pruebe cualquiera especie de suposicion ó simulacion hecha en fraude de sus acreedores, se podrá revocar á instancia de éstos; 6.º, en virtud de la declaración de quiebra se tienen por vencidas todas las deudas pendientes del quebrado, bajo descuento del rédito mercantil por la anticipacion del pago, si éste llegase á verificarse antes del tiempo prefijado en la obligacion.

¿Qué contratos y operaciones pueden anularse á instancia de los acreedores?—Probado el fraude con que ha obrado el quebrado en perjuicio de sus derechos, pueden anularse los siguientes: 1.º, las enajenaciones á título oneroso de bienes raíces, hechas en el mes precedente á la declaración de quiebra; 2.º, las constituciones dotalas ó reconocimientos hechos por un cónyuge comerciante en favor de otro cónyuge en los seis meses precedentes á la quiebra, sobre bienes que no fueron inmuebles de abo-lengo, ó los hubiere adquirido ó poseído de antemano el cónyuge en cuyo favor se haga el reconocimiento de dote ó de capital; 3.º, toda confesion de recibo de dinero ó de efectos á título de préstamos que, hecha seis meses antes de la quiebra en escritura pública, no se acredite por la fé de entrega del escribano, ó que habiéndose hecho por documento privado, no constare uniformemente de los libros de los contrayentes; 4.º, todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que no sean anteriores de más de diez dias á la declaracion de la quiebra.

¿Qué disposiciones son consiguientes á la declaracion de quiebra?—1.ª, el nombramiento de *comisario* de la quiebra en un comerciante matriculado; 2.ª, el arresto del quebrado en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura; y en defecto de darla, en la cárcel; 3.ª, la ocupacion judicial de todas las pertenencias del quebrado y de los libros, papeles y documentos de su giro; 4.ª, el nombramiento de depositario en persona de la confianza del tribunal, á cuyo cargo se pondrá la conservacion de todos los bienes ocupados al deudor hasta que se nombren los síndicos; 5.ª, la publicacion de la quiebra por edictos en el pueblo del domicilio del quebrado y demás donde tenga establecimientos mercantiles, y su insercion en el periódico de la plaza ó de la provincia, si lo hubiere; 6.ª, la detencion de la correspondencia del quebrado para los fines y en los términos que se expresará; 7.ª, la convocacion de los acreedores del quebrado á la primera junta general.

¿Cómo debe formalizarse la ocupacion de los bienes y papeles del quebrado?—1.º, todos los almacenes y depósitos de mercaderías y efectos del quebrado quedarán bajo dos llaves, de las cuales tendrá una el *comisario* y la otra se entregará al depositario; 2.º, lo mismo se practicará en el escritorio ó despacho del quebrado, haciéndose constar en el acto por diligencia el número, clase y estado de los libros de comercio que se encuen-

trén; 3.º, en el mismo acto de la ocupacion del escritorio se formará inventario del dinero, letras, pagarés y demás documentos de crédito pertenecientes á la masa, y se pondrán en una arca con dos llaves, tomándose las precauciones convenientes para su seguridad y buena custodia; 4.º, los bienes muebles del quebrado que no se hallen en almacenes en que puedan ponerse sobrellaves y los semovientes, se entregarán al depositario bajo inventario, dejándole al mismo quebrado la parte de ajuar y ropas de uso diario que el comisario estime prudentemente que le son necesarias; 5.º, los bienes raíces se pondrán bajo la administracion interina del depositario, quien recaudará sus frutos y productos, y dará las disposiciones convenientes para evitar cualquiera malversacion; 6.º, con respecto á los bienes que se hallen fuera del pueblo del domicilio del quebrado, se practicarán iguales diligencias en donde se encuentren, despachándose á este fin los oficios convenientes á sus respectivos jueces.

Quando la quiebra sea de una sociedad colectiva, se extenderá la ocupacion de bienes en los términos que se prescribe á todos los socios que en el contrato de sociedad aparezcan responsables á las resultas de sus negociaciones.

¿Qué condiciones debe reunir el depositario, y cuáles son sus principales atribuciones?—El nombramiento de depositario recaerá en un comerciante de notorio abono y buen crédito, sea ó no acreedor á la quiebra, el cual, antes de dar principio á sus funciones, prestará juramento de ejercer bien y fielmente su encargo. Las letras, pagarés ó cualquiera otro documento de crédito vencido, se cobrarán por el depositario, y las que fueren pagaderas en domicilio diferente, se remitirán por el mismo para su cobro á persona abonada, con previa autorizacion del comisario. Será de cargo y responsabilidad del depositario practicar las diligencias necesarias con las letras que deban presentarse á la aceptacion ó protestarse por falta de ésta ó de pago. Todas las cantidades que se recauden, pertenecientes á la quiebra, serán puestas en el arca del depósito de dinero y valores de la misma.

¿Cuáles son sus prohibiciones?—El depositario no podrá hacer ventas de los efectos de la quiebra, como no sea de aquéllos que no pueden conservarse sin que se deterioren ó corrompan. Tampoco podrá hacer otros gastos que los que absolutamente sean indispensables para la custodia y conservacion de los efectos que tenga en depósito. Tanto para lo uno como para lo otro, ha de obrar con permiso del comisario.

¿Qué medidas deben adoptarse con la correspondencia?—Se pondrá en poder del comisario, quien la abrirá á presencia de aquél ó de su apoderado, entregando al depositario las cartas que tengan relacion con las dependencias de la quiebra, y al quebrado las que sean de otros asuntos.

¿Quiénes deben concurrir á la primera junta general?—Todos los acreedores que resulten del balance, convocados por circulares expedidas al efecto.

¿Qué objeto tiene la primera junta general?—Dar conocimiento á los acreedores del balance y memoria presentados por el quebrado, haciéndose en el acto por el comisario las comprobaciones convenientes, y poner de manifiesto la situacion de las dependencias de la quiebra, con vista del estado que presentará el depositario; discutir y votar las proposiciones del quebrado y proceder al nombramiento de síndicos de la quiebra.

¿Quiénes son los síndicos?—Las personas nombradas por los acreedores en la primera junta general para promover, activar y dirigir los intereses comunes, á fin de realizar cuanto antes el pago de las deudas, previa la tramitacion del procedimiento. Su número se fijará de antemano por el tribunal, á propuesta del comisario, segun la extension de negocios que tenga la quiebra, y no podrá exceder de tres.

¿Quiénes pueden ser nombrados síndicos en las quiebras?—Cualquiera

acreedor del quebrado que lo sea por su propio derecho, y no en representación ajena, y que tenga además las cualidades de ser comerciante matriculado, corriente en su giro, mayor de veinticinco años y con residencia habitual en el pueblo.

El nombramiento de síndicos se ha de hacer en persona determinada, y no colectivamente en sociedad alguna de comercio. Se hará á mayoría de votos por los acreedores que concurran á la junta general y se ratificará por los acreedores, reconocidos en la junta de calificación de créditos, ó bien se hará un nuevo nombramiento si no se acordare su confirmación.

¿Cuáles son sus atribuciones?—1.ª, la administración de todos los bienes y pertenencias de la quiebra, á uso de buen comerciante; 2.ª, la recaudación y cobranza de todos los créditos de la masa y el pago de los gastos de administración de sus bienes que sean de absoluta necesidad para su conservación y beneficio; 3.ª, el cotejo y rectificación del balance general hecho anteriormente del estado del quebrado; 4.ª, el examen de documentos justificativos de todos los acreedores de la quiebra; 5.ª, la defensa de todos los derechos de la quiebra, y el ejercicio de todas las acciones y excepciones que la competan; 6.ª, promover la convocación y celebración de las juntas de acreedores ordinarias y extraordinarias; 7.ª, procurar la venta de los bienes de la quiebra cuando aquélla deba ejecutarse con sujeción á las formalidades de derecho.

¿Qué retribución tienen los síndicos?—Un medio por ciento sobre todas las cobranzas que hagan de créditos y derechos de la quiebra; dos por ciento en los productos de las ventas de mercaderías pertenecientes á ella, y uno por ciento en las ventas y adjudicaciones de bienes inmuebles ó pertenencias de cualquiera otro género que no sea del giro y negocio del quebrado.

Derogada la ley de Enjuiciamiento mercantil por el decreto de unificación de fueros de 6 de Diciembre de 1868, los títulos V y VIII de aquélla, que trataban de las quiebras y del procedimiento de apremio, han sido modificados y pasado á formar parte de la ley de Enjuiciamiento civil, como títulos adicionales. Por consiguiente, en la sección de *Procedimientos* nos ocuparemos del relativo á las quiebras, que continúa regulado por la ley citada de Enjuiciamiento civil.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Ley de 27 de Junio de 1878, reformando algunos artículos del Código de Comercio (Gaceta de 2 de Agosto de 1878).

Don Alfonso XII,

Por la gracia de Dios rey constitucional de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran suprimidos los artículos 1.145 y 1.161 del Código de Comercio.

Art. 2.º Los artículos 1.º, 17, 1.062, 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.070, 1.105, 1.147, 1.150 y 1.158 del expresado Código, se entenderá y regirán desde la promulgación de esta ley en la forma siguiente:

«Artículo 1.º Se reputan de derecho comerciantes, y como tales sujetos á las prescripciones de este Código, los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, funden en él su estado civil, se ocupen habitual y ordinariamente en el tráfico mercantil y estén además inscritos en la matrícula de comerciantes.

La falta de cumplimiento en la inscripción de la matrícula, no exime á la persona que al comercio se dedica de ser tratada en juicio por las prescripciones de este Código, debiendo serle aplicables, á petición de parte legítima, desde el momento mismo en que anuncie á sus acreedores haber suspendido ó aplazado el pago de sus obligaciones vencidas.

Art. 17. El ejercicio habitual del comercio se supone para los efectos legales cuando una ó más personas anuncian al público por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones que en este Código se declaran como actos positivos de comercio, y á estos anuncios se sigue que la persona se ocupa realmente en actos de esta misma especie y se comprueba el hecho por la contribución que pague del impuesto industrial.

DERECHO ECLESIAÍSTICO.

(CANÓNICO Y DISCIPLINA.)

INSTITUCIONES DE DERECHO CANÓNICO.

¿Qué es iglesia?—La reunion de los cristianos bajo la direccion de sus legítimos pastores los obispos y el Romano Pontífice, con el fin de conseguir la bienaventuranza eterna. 3^a

¿Cuáles son las notas de la verdadera Iglesia?—La unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. 5^a

¿En cuántos estados puede hallarse la Iglesia respecto á la sociedad civil?—En el estado de resistencia, en el de tolerancia, en el de libertad y en el de proteccion. 6^a

¿Qué potestad tiene la iglesia como sociedad independiente?—La legislativa, la coercitiva y la judicial. 4^a

¿Qué es Derecho canónico?—La coleccion de reglas ó leyes establecidas por los obispos, y principalmente por el Romano Pontífice, para el régimen y gobierno de la iglesia. 1^a

¿De cuántas clases son las fuentes del Derecho canónico?—Divinas y humanas. 7^a

¿Cuáles son las divinas?—El Derecho divino natural y el Derecho divino positivo. "

¿Qué es Derecho divino natural?—El conocido del hombre por medio de la razon. "

¿Qué es Derecho divino positivo?—El que procede de la expresa voluntad de Dios, manifestada por señales exteriores. "

¿Cuáles fueron los medios de promulgacion del Derecho divino positivo?—La Sagrada Escritura y la tradicion. "

¿En qué partes se divide la Sagrada Escritura?—En Antiguo y Nuevo Testamento. "

¿De qué libros consta el Nuevo Testamento?—De los cuatro Evangelios, las Epístolas de los Apóstoles y el Apocalipsis. "

¿Cuáles son las fuentes humanas del Derecho eclesiástico?—Las escritas son los cánones de los concilios, las constituciones de los Romanos Pontífices y las sentencias de los Santos Padres; las no escritas son la costumbre y la tradicion. 9^a y 10^a

¿Qué son concilios generales?—Las reuniones de obispos del mundo católico, convocadas y presididas por el Romano Pontífice. 11^a

¿Cuál fué el origen de los concilios generales?—Los actos de los mismos Apóstoles, que se reunieron tres veces bajo la presidencia de San Pedro para tratar de asuntos eclesiásticos. "

¿Qué son concilios particulares?—Las reuniones de obispos de una comarca para tratar de los asuntos de las iglesias en ella establecidas. "

¿Qué clases se conocen de concilios particulares?—Los diocesanos ó patriarcales, los nacionales y los provinciales.

¿Qué se entiende por concilio diocesano ó patriarcal?—La reunion de los obispos de una diócesis ó patriarcado, convocados y presididos por el exarca ó patriarca.

¿Qué es concilio nacional?—La reunion de los obispos de una nacion, convocados y presididos por el primado.

¿Qué es concilio provincial?—La reunion de los obispos de una provincia, convocados y presididos por el metropolitano.

¿En qué épocas deben celebrarse?—Desde el Concilio I de Nicea hasta el siglo VI debian celebrarse dos veces al año; desde este siglo hasta el Concilio de Trento, una sola vez al año, y desde el Concilio de Trento hasta nuestros dias, de tres en tres años.

¿Qué potestad tenian los concilios provinciales?—En los primeros siglos tuvieron la legislativa dentro de sus respectivas provincias; en la actualidad tan sólo tienen la administrativa.

¿Qué son concilios episcopales?—Las reuniones del clero de una diócesis bajo la presidencia de su obispo, que hasta el Concilio de Trento debian celebrarse tantas veces como los provinciales, y desde dicho concilio anualmente.

¿Quiénes asisten á los concilios diocesanos?—Todos los que tienen dignidad, personado ó prebenda de oficio en la iglesia, catedral ó en las colegiadas, el vicario general, los foráneos, los párrocos, los abades seculares y regulares y los exentos.

¿Qué son constituciones pontificias ó bulas?—Las disposiciones y leyes dadas *motu proprio* por el Romano Pontífice.

¿Qué son rescriptos ó breves?—Las respuestas á las consultas que se le hacen para la resolucion de los casos dudosos de derecho.

¿Qué son sentencias de los Santos Padres?—Los testimonios escritos de los varones esclarecidos por su ciencia y santidad, que vivieron en los ocho primeros siglos de la iglesia.

¿Qué es costumbre?—El derecho introducido por la práctica consiguiente.

¿De qué clase puede ser la costumbre?—General ó particular, fuera de derecho, contra ó segun derecho.

¿Qué son tradiciones?—Las verdades que fueron pasando de viva voz de generacion en generacion, y las cuales, segun su origen, pueden ser divinas, apostólicas ó simplemente eclesiásticas.

¿Qué requisito han de tener las leyes eclesiásticas para que sean obligatorias?—La promulgacion que antiguamente se hacia, remitiendo dichas leyes á cada obispo, ó á lo ménos á cada concilio provincial, para que allí se publicasen.

¿Dónde debe hacerse la promulgacion de las leyes eclesiásticas?—No solamente en Roma, sino en las iglesias particulares, para que oficialmente llegue á noticia de los fieles.

¿Qué requisito es indispensable en España para que puedan promulgarse las leyes eclesiásticas?—Que antes hayan merecido el pase ó *exequatur* de la corona.

¿Cuál es la ley en que se halla reglamentado el ejercicio del pase?—La 9.^a del titulo III del libro II de la Novísima Recopilacion, ó sea la pragmática de D. Carlos III de 1768, en la que se dispone que se presenten al consejo para obtener el pase todas las bulas, breves y rescriptos pontificios, exceptuando los de penitenciaría y en sede plena las dispensas matrimoniales de edad extratempora, oratorio y otras de igual importancia.

HISTORIA DEL DERECHO CANÓNICO.

Cánones y constituciones apostólicas.—Colecciones canónicas.

¿A qué se da el nombre de cánones apostólicos?—A ochenta y cinco disposiciones que, aunque llevan ese nombre, fueron formadas por autores desconocidos las cincuenta primeras en el siglo V, y las treinta y cinco restantes en el VI, comprendiendo en ellas la disciplina vigente en los siglos III y IV en las iglesias orientales. 15^a

¿A qué se da el nombre de constituciones apostólicas?—A una obra dividida en ocho libros y 255 cánones, cuya doctrina no es toda pura, por haber sido viciada, según se cree, por algunos herejes de la iglesia oriental. 15^a

¿En cuántas épocas se divide la historia del derecho canónico?—En tres: la primera que comprende hasta 1154, en que se publicó el decreto de Graciano; la segunda desde éste hasta la publicación de las decretales de Gregorio IX, y la tercera desde éstas hasta nuestros días. 15^a

¿Qué son colecciones?—Las recopilaciones, ya por orden de fechas, ya por el de materias, de las leyes eclesiásticas. 16^a

¿En cuántas clases se dividen las colecciones?—En dos: las de la iglesia oriental y las de la occidental.

¿Cuántas fueron las colecciones más notables de la iglesia oriental?—Tres: la primera, que se leyó en el concilio de Calcedonia, formada de 465 cánones, tomados de cinco concilios particulares, y los de Nicea y primero constantinopolitano; la segunda, que fué ésta misma, con el aumento de los cánones formados en Efeso, Calcedonia, Trullo, Sardis y Cartago, y con el de varias epístolas de obispos y santos padres griegos; y la tercera, que fué ésta misma, con el aumento de los cánones del segundo concilio de Nicea y de los dos celebrados por Focio, quien también redactó un *Nomocanon*, ó sea una coleccion doble de leyes eclesiásticas y de las civiles correlativas. 17^a

¿Cuál fué la coleccion más célebre en Occidente en el siglo VI?—La que comprendía los 465 cánones de la primera oriental, los 50 primeros apostólicos, los de Sardis y Calcedonia, y 138 de los concilios de Cartago, cuya coleccion fué formada por Dionisio el Exiguo, que floreció en Roma á principios del siglo VI y que coleccionó también las decretales pontificias desde Siricio hasta Anastasio II. 18

¿Qué colecciones tuvo la Iglesia española?—Tres: la primitiva, la braccarense y la goda. 19

¿Qué contenía la primitiva?—Los cánones de la primera coleccion oriental y los de varios Concilios celebrados en España, en África y en las Galias hasta el siglo VI. "

¿Qué contenía la de Martin de Braga?—Los mismos cánones que la primitiva, si bien distribuidos por materias y acomodados á la disciplina vigente en la Península, formando toda la obra ochenta y cuatro capítulos, sesenta y ocho relativos al clero, y diez y seis á los legos. "

¿Qué contenía la goda?—Los cánones de todos los concilios generales, nacionales y algunos africanos y galos, y las decretales pontificias hasta el siglo VII, distribuidos todos estos materiales por orden cronológico, si "

bien anteponiendo los cánones de los concilios generales á los particulares.

¿Qué más colecciones se conocieron en la Iglesia occidental hasta el siglo VIII?—Muchas, aunque poco importantes, en la Iglesia franca, y las de Cresconio y Fulgencio Ferrando en la africana.

¿En qué tiempo apareció la coleccion de Isidoro Mercator ó Pecator?—
21 A principios del siglo IX, viendo la luz, según la opinion más probable, en la parte occidental de las Galias, por más que se ignora su verdadero autor, siendo tan sólo conjetural que éste haya sido Benito, diácono de Maguncia.

¿Por qué no puede atribuirse á San Isidoro de Sevilla?—Porque contiene cánones de fecha posterior á la muerte de este santo padre, y porque esa coleccion falsificada, no fué conocida en España en ningún tiempo.

¿Qué materiales forman esta coleccion?—Cánones de concilios, algunos de ellos adulterados ó supuestos, y decretos pontificios, los unos legítimos, y noventa y seis falsificados y atribuidos á los Papas que mediaron desde Clemente I hasta Gregorio I.

¿Qué éxito tuvo esta coleccion?—Fué conocida y recibida en todas partes ménos en España, sin que se conociese la falsedad de los documentos de esta especie que contenia.

¿Qué fin se propuso el falsificador?—Lo más verosímil parece que fué ensanchar y desarrollar la accion de la Silla apostólica en el gobierno de las Iglesias particulares, y fundar en el derecho escrito las alteraciones que ya entónces habia experimentado la disciplina establecida por los concilios de los siglos IV y V.

¿Cuándo y por quiénes se descubrió su falsedad?—Comenzó á descubrirse en el siglo XIV, por Marsilio de Pádua, Nicolás de Cusa y Jorge Casandre, á los que siguieron Antonio Conti, Baroni, Blondin y otros, dando la última mano hasta el dia al descubrimiento, los hermanos Ballerini y Berardi.

¿Qué eran las capitulares de los reyes francos?—Las leyes dadas por
22 los reyes francos de la raza carlovingia en los siglos VIII y IX, de acuerdo con los barones y obispos del reino, y sobre materias así civiles como eclesiásticas.

¿Fuéron coleccionadas las capitulares?—Lo fueron en el siglo IX por el abad Ansegiso, que las reunió en cuatro libros, á los que despues Benito Levita, en el mismo siglo, añadió otros tres.

De todas las colecciones publicadas por órden de materias en las Iglesias francas desde el siglo VIII, ¿cuáles fueron las más notables?—Las de Reginon, Abbon y Burcad; la primera publicada á principios del siglo X, la segunda á últimos del mismo y la tercera á principios del siguiente.

¿Con qué nueva coleccion se abrió la época del Derecho nuevo?—Con la de Graciano, cuyo nombre originario no consta de una manera cierta, si bien es probable que fuese el de *Concordia discordantium canonum*.

¿Quién fué Graciano?—Un monje benedictino que nació en Clusi y vivió en el monasterio de los Mártires de Bolonia, habiendo sido muy versado en el estudio de los cánones de la Iglesia.

¿Cuál fué el método que empleó en su obra?—La dividió en tres partes, tratando en la primera, subdividida en 104 distinciones, de lo relativo á las personas; en la segunda de los juicios, dividiéndola en 36 causas y 172 cuestiones; y en la tercera de las cosas eclesiásticas, ó sean de *consecratione*, dividiéndola en cinco distinciones.

¿Qué éxito tuvo la obra de Graciano?—Sirvió, desde su publicacion, de texto en todas las universidades, y especialmente en la de Bolonia, para el estudio del derecho canónico; y si bien no recibió la sancion legal, tuvo no obstante una importancia inmensa en la práctica.

¿Qué formas sufrió el decreto de Graciano?—A causa de los muchos do-

cumentos apócrifos que aquél había tomado de la coleccion de Isidoro Mercator y de otras, se hizo necesario purificarla: habiendo tomado este trabajo á su cargo una junta de sábios nombrada por los pontífices Pío IV y Gregorio XIII, y cuyos individuos son conocidos con el nombre de correctores romanos. También trabajó en la purificacion del decreto el célebre D. Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona.

Además del decreto de Graciano, ¿qué otras obras forman lo que se llama cuerpo de Derecho canónico?—Las *Colecciones* de Gregorio IX y Bonifacio VIII, las *Clementinas* y las *Extravagantes*; la primera publicada en 1234, y formada por San Raimundo de Peñafort, por orden de Gregorio IX, comprendiendo en ella las decretales de los pontífices anteriores, y especialmente las de Alejandro é Inocencio III y las de dicho Gregorio. La de Bonifacio VIII, que se conoce con el nombre de *Sexto de decretales*, se publicó en 1298, y contiene principalmente los cánones de los Concilios I y II de Lyon. Las *Clementinas*, ó sea las decretales de Clemente V, publicadas en el concilio de Viena, salieron á luz coleccionadas en 1347 por orden de Juan XXII. Y por último, las *Extravagantes*, que son obra de autor particular y forman dos colecciones, la una de las decretales de dicho Juan XXII, y la otra de la de varios pontífices, especialmente de los que mediaron desde Urbano IV hasta Sixto IV.

¿Con qué concilio se abre la época del derecho novísimo?—Con el de Trento, convocado por Paulo III, y cuyas sesiones, en número de veinticinco, se celebraron en un período de diez y ocho años, tratándose en ellas así el dogma como la reforma de la disciplina.

¿Cuándo y cómo fueron admitidos sus decretos en España?—En 1564, por una pragmática de D. Felipe II, en la cual, si bien no se puso limitacion alguna, debe entenderse no obstante que salvaban las regalías de la Corona, como lo demostraron los hechos posteriores.

Bulas, breves, concordatos.

¿Qué clases se conocen de bulas, y en qué se distinguen de los breves?—Tres, á saber: *consistoriales*, *no consistoriales é intermedias*. Las primeras se expiden en el consistorio de cardenales, que las suscriben también con el pontífice; las segundas, que se expiden fuera del consistorio; y las últimas, que son dadas por el pontífice antes de ser consagrado. Se distinguen las bulas de los breves en que éstos se expiden para negocios de poca importancia, escribiéndose en caracteres latinos, en vitela blanca con sello de cera, y por la oficina llamada secretaría de breves; y las bulas se dan para negocios más graves, extendiéndose en caracteres teutónicos, con sello de oro ó de plomo en vitela oscura, y por la cancellería.

¿Cuál es la coleccion más notable de las bulas pontificias?—El *bulario magno*, empezado á formar por Jerónimo Mainardo y continuado por los Querubini y Pablo de Roma, comprendiendo en él las publicadas desde Leon el Grande. No tiene sancion legal.

¿Qué son reglas de cancellería?—Ciertos estatutos formados por los pontífices Juan XXII y sucesores, hasta Nicolás V, que las redujo á 72, y cuyo objeto es el despacho de los negocios en que entiende la cancellería apostólica. Su fuerza obligatoria se extingue á la muerte del pontífice, pero todos acostumbra á restablecerlas.

¿Qué son concordatos?—Los tratados celebrados por las autoridades supremas eclesiástica y temporal para arreglar asuntos eclesiásticos. Tienen una grande importancia como fuentes de derecho canónico particular.

¿Cuáles son los más notables que se celebraron en España?—La concordia de Facheneti y los de 1737, 1753 y 1851.

¿En qué tiempo, por quién y con qué objeto se celebró la primera concordia?—En el reinado de Felipe IV, por el nuncio D. César Fachenet y con el objeto de arreglar el personal de la nunciatura, su arancel de derechos y las facultades del nuncio.

¿Sobre qué recayó el concordato de 1737?—Sobre varias diferencias relativas á la inmunidad del asilo y otros puntos que mediaban entre Clemente XII y Felipe V, que fueron los que lo celebraron.

¿Cuál fue el objeto del concordato de 1753?—El de arreglar Fernando VI y Benedicto XIV las cuestiones relativas al real patronato y á los expósitos y vacantes de obispos.

¿Con qué objeto se celebró el concordato de 1851?—Con el de terminar las diferencias que mediaban entre la corona de España y la Santa Sede sobre muchos puntos de disciplina eclesiástica, entre ellos sobre los bienes que habían sido de la Iglesia, la supresión de las órdenes monásticas, el arreglo de las diócesis y parroquias, y del personal de las iglesias catedrales, colegiales y parroquiales. Este concordato es el más importante de todos por su carácter general, que hace de él casi un Código de la disciplina eclesiástica española.

INSTITUCIONES DE DERECHO CANÓNICO.

[illegible]

¿Qué requisitos son indispensables para ser miembro de la Iglesia católica?—El bautismo y la perseverancia en la comunión eclesiástica.

¿En qué conceptos puede tomarse la Iglesia?—En el de universal y particular: la primera comprende á todos los fieles esparcidos por la tierra, y la segunda comprende á los de una localidad cualquiera.

¿Como se sostiene y sostuvo la armonía entre todas las Iglesias particulares?—Reconociendo los actos legales de una todas las demás, no admitiendo en éstas á los clérigos adscritos á una determinada y no recibiendo en la comunión á los fieles peregrinos sin las letras formadas de su propio obispo.

Qué eran letras *formadas* y cuántas sus clases? --Ciertas credenciales escritas con signos especiales, que los obispos expedían á sus fieles cuando se ausentaban de sus respectivas diócesis, para acreditar que gozaban de la comunión eclesiástica. Eran *comunicatorias*, *dimisorias* ó *comendaticias*. Las primeras se concedían á los fieles en quienes no concurría alguna circunstancia especial; las segundas se expedían á los clérigos que pasaban á servir en otra diócesis, para acreditar la licencia que al efecto les había dado su propio obispo, y las últimas se otorgaban, según la opinión más probable, á los fieles constituidos en dignidad.

¿Cuál fué el origen, y en qué se funda, de la distinción entre el sacerdocio y el imperio?—El mismo Jesucristo: la estableció, según resulta de varios pasajes del Evangelio, especialmente cuando dijo que su reino no era de este mundo, y cuando otorgó la potestad espiritual á los apóstoles. Esta distinción, sostenida hasta ahora desde los primeros días de la Iglesia, es de gran utilidad en el órden político, porque hace imposible el despotismo antiguo.

¿Tienen, no obstante, alguna autoridad los príncipes en materias de disciplina?—La tienen en lo relativo á la disciplina externa, que es la que tiene por objeto el régimen exterior de la Iglesia, si bien esa autoridad es más ó menos amplia, según el estado que la Iglesia ocupe respecto á la sociedad civil, sin que pueda fijarse una regla aplicable á todos los casos.

¿Cómo se clasifican los fieles?—En clérigos y legos. Los primeros tienen algun cargo público en la Iglesia, en virtud de la ordenacion que han recibido. Los legos no tienen ninguno ni ejercen funciones jerárquicas.

¿Cuál es el fundamento de la distincion entre clérigos y legos?—El derecho divino, porque Jesucristo no confirió á todos sus fieles, sino tan sólo á los apóstoles, la potestad de gobernar su Iglesia.

¿Qué es jerarquía?—El orden de personas que, por institucion divina ó eclesiástica, tienen á su cargo el ministerio espiritual. En el primer caso se llama jerarquía de derecho divino, en el segundo jerarquía de derecho humano. Tambien se divide en jerarquía de *orden* y de *jurisdiccion*, según que á los miembros de la una y de la otra les está encomendada la potestad de orden ó la de jurisdiccion.

¿Qué grados forman la jerarquía de derecho divino?—Los de obispos, presbíteros y ministros, según lo decidió como verdad dogmática el Concilio de Trento. Los obispos son superiores á los presbíteros, según decision del mismo concilio, y esta superioridad procede tambien de derecho divino.

¿Qué diferencias hay entre la potestad de orden y la de jurisdiccion?—La primera se adquiere por la ordenacion, la segunda por el señalamiento de súbditos y territorio propio. La de orden es inextinguible, cualquiera que sea el estado en que caiga el ordenado; la de jurisdiccion puede perderse cuando deja de haber territorio y súbditos, así como puede delegarse, adquirirse y perderse por privilegio, transaccion ó prescripcion, lo que no sucede respecto á la de orden.

¿Quiénes forman la jerarquía de derecho humano? Los patriarcas, primados, metropolitanos, párrocos, penitenciarios, arciprestres urbanos y rurales, arcedianos y otros ministros eclesiásticos.

¿Quiénes son los obispos?—Los sucesores de los apóstoles, sumos sacerdotes que tienen la potestad de regir y gobernar la Iglesia y de trasmitir el ministerio eclesiástico por medio de la ordenacion.

¿Cuál es el limite de la potestad de los obispos?—Pueden hacer todo lo que respecto al gobierno de la Iglesia no les está prohibido por leyes generales de la misma ó por decretos de los Romanos Pontífices. Esto se entiende respecto al gobierno de sus respectivas diócesis.

¿De qué clases es la potestad que ejercen?—De orden y de jurisdiccion, que adquirirían en los diez primeros siglos por la ordenacion, así como desde entónces adquieren la de orden por la ordenacion y la de jurisdiccion por la confirmacion, y en España por la toma de posesion.

¿Cómo se divide la potestad de jurisdiccion episcopal?—En jurisdiccion voluntaria y contenciosa. La primera es la que se ejerce *intervolentes* la segunda cuando hay contienda entre las partes.

¿Qué es diócesis?—El territorio en que cada obispo ejerce su potestad.

¿Cuál fué el origen de las diócesis?—No son de origen divino, pero si apostólico, ó cuando ménos del primer siglo de la Iglesia.

¿Qué efectos produjo la creacion de diócesis?—1.º, limitar la potestad episcopal en su ejercicio, que por su naturaleza se extiende á toda la Iglesia católica; 2.º, someter á la potestad del obispo á todos los fieles que residan en el territorio de su diócesis; 3.º, impedir á los demás obispos el que se entrometan á gobernar la diócesis ajena. Sin embargo de esto, los obispos pueden ejercer la jurisdiccion voluntaria sobre súbditos propios, aunque se hallen ellos accidentalmente en diócesis ajena.

¿Qué son exenciones?—Los privilegios en virtud de los cuales ciertas

personas ó corporaciones no están sometidas á la jurisdiccion de su propio obispo.

40 ¿Cuáles son los deberes de los obispos?—La predicacion, el ejercicio del ministerio pastoral por medio de la potestad de órden, el gobierno de sus iglesias por medio de la jurisdiccion, y, como una consecuencia de ésta, la facultad de dispensar los cánones; porque es de observar que los deberes episcopales son bajo otro concepto derechos y atribuciones.

¿En qué consiste la predicacion?—En la exposicion de la fé y moral cá-tólica, en la refutacion de los errores á ellas contrarios, y en general en la enseñanza á los fieles de todas las verdades y de todas las prácticas que pueden influir en su salvacion eterna, bien esta enseñanza se haga oralmente, bien por escrito, como en las pastorales, libros de oracion y devocion, etc.

¿Qué dispuso el concilio IV de Letrán, en su cánón X, sobre el deber de la predicacion de los obispos?—Por haberla éstos abandonado desde el siglo V, con motivo ya de las discordias y guerras intestinas que introdujo en la sociedad civil el feudalismo, ya de la parte importante que en ellas y en los demás asuntos políticos tomaron aquéllos, el concilio les recordó la obligacion que tenían de predicar por sí mismos la divina palabra á los fieles, y que, en el caso de que por sus muchas ocupaciones, enfermedades, incursiones de enemigos ú otras causas no pudiesen hacerlo, eligiesen varones idóneos que desempeñasen en representacion suya este ministerio.

¿Qué disposiciones sobre la misma materia adoptó el Concilio de Trento?—Recordó á los obispos la obligacion en que estaban de predicar por sí mismos en la iglesia catedral, á no estar legítimamente impedidos. Impuso á los párrocos tambien la obligacion de predicar en sus respectivas iglesias, salvo el derecho de hacerlo tambien el obispo. Determinó que cuando el párroco estuviere impedido, el obispo nombrase quien lo hiciese á costa de aquél. Determinó tambien que los regulares no pudiesen predicar ni aun en las iglesias de su órden contradiciéndolo el obispo, y les impuso la obligacion previa de obtener su bendiccion.

11 ¿Qué actos puede ejercer el obispo por su potestad de órden?—La administracion de todos los sacramentos en las iglesias de su diócesis.

¿Qué actos puede ejercer el obispo por su potestad de jurisdiccion?—Puede legislar en cuanto sea preciso para el sostenimiento de la pureza de la fé, costumbres y disciplina, decidir todas las cuestiones de carácter eclesiástico que se susciten entre los fieles de su diócesis y aun las civiles que medien entre clérigos ó contra un clérigo, establecer penas y correcciones contra los infractores de las leyes eclesiásticas, y dispensar éstas en cuanto no esté reservado al Romano Pontífice.

10 ¿Qué es visita episcopal?—La inspeccion de las personas y cosas eclesiásticas que el obispo periódicamente debe hacer por sí ó por medio de delegados.

11 ¿En qué se funda la obligacion de la visita episcopal?—En la necesidad de conservar la pureza de la fé, costumbres y disciplina, que corre á cargo del obispo en su diócesis.

11 ¿Quién debe hacer la visita?—El obispo, por sí mismo ó bien la persona á quien la encomiende, sin perjuicio de la que hagan los arcedianos y quienes hayan adquirido este derecho, con tal que la verifiquen por sí mismos y acompañados de notario aprobado por el obispo, según lo dispuso el Concilio de Trento.

11 ¿Sobre qué asuntos debe recaer la visita?—Sobre la enseñanza religiosa y costumbres del pueblo y clero, sobre los libros parroquiales, iglesias, ornamentos, vasos sagrados y más cosas de la dotacion de aquéllas.

11 ¿Quiénes están sujetos, según el Concilio de Trento, á la visita episcopal?—Los cabildos, aunque sean exentos, los poseedores de beneficios cu-

rados, aunque sean unidos á monasterios, los de beneficios de todas clases, dados en encomienda, los monasterios tambien encomendados ó que no esten sujetos á congregacion que dependa de la Silla apostólica, los regulares por los delitos que cometan fuera del cláustro, y en fin, los hospitales, cofradías, hermandades y regulares píos que no estén bajo la inmediata proteccion de los reyes.

¿En qué tiempo debe el obispo visitar su diócesis?—Todos los años, y siendo muy extensa de dos en dos años.

¿De qué manera debe proceder el obispo en la visita?—Sin aparato y solemnidad judicial, en forma sumaria, sin imponer verdaderas penas y si tan sólo correcciones, por lo cual no se podrá apelar de sus providencias de visita sino en el efecto devolutivo.

¿Qué se entiende por procuraciones?—Los gastos de alimentacion episcopal, que deben sufragar las iglesias y beneficios visitados.

¿Qué dispusieron los concilios III de Letrán y Tridentino en esta materia?—El primero que no llevasen perros y aves de caza, ni más de cuarenta á cincuenta caballos el arzobispo, veinticinco el cardenal, el obispo veinte á treinta, el arcediano cinco á siete, y el dean dos. El Tridentino dispuso que los obispos no molestasen ni gravasen á las iglesias y beneficios que visitasen con exacciones inútiles, ni recibiesen dinero ni otro don, cualquiera que fuese la costumbre en contrario.

¿Qué son presbíteros?—Los sacerdotes de segundo orden que, bajo la autoridad del obispo, administran los sacramentos á los fieles, ménos el de la confirmacion y el orden, y desempeñan otras funciones del ministerio eclesiástico.

¿De qué clases es la potestad de los presbíteros?—De orden y de jurisdiccion. La primera la adquieren por la ordenacion; la segunda, que consiste en el ejercicio de la primera, por la autorizacion de su propio obispo.

¿Qué son diáconos?—Unos ministros eclesiásticos inmediatamente inferiores en grado á los presbíteros, creados para la administracion de las cosas temporales de la iglesia y el desempeño de ciertas funciones jerárquicas.

¿Cuál es el origen de los diáconos?—Si bien aparecen por primera vez en número de siete, creados por los apóstoles, son, no obstante, de institucion divina.

¿Cuáles fueron los oficios de los diáconos en la antigua disciplina?—Dentro de la Iglesia: 1.º, recibir las oblacones de los fieles y presentarlas al sacerdote; 2.º, leer los nombres de los oferentes; 3.º, servir al sacerdote en el altar y leer el Evangelio; 4.º, predicar y bautizar por mandato del obispo; 5.º, distribuir la Eucaristia á los fieles; 6.º, dirigir en el oficio divino á los penitentes y catacúmenos, y conservar el orden dentro del templo. Fuera de la Iglesia: 1.º, recaudar los bienes eclesiásticos y distribuirlos segun las órdenes del obispo; 2.º, cuidar de las viudas, enfermos y menesterosos; 3.º, inquirir las costumbres del clero y pueblo, y 4.º, acompañar al obispo y trasmitir sus órdenes á los presbíteros y demás clero y á los fieles.

¿Cuáles son las funciones de los diáconos segun la actual disciplina?—1.ª, asistir inmediatamente al sacerdote en la celebracion de las misas solemnes y leer el Evangelio; 2.ª, bautizar solemnemente por orden del obispo ó del párroco y distribuir de la misma manera la Eucaristia, y 3.ª, predicar con licencia del obispo.

¿Cuándo se crearon el subdiaconado y demás órdenes menores?—No consta el tiempo fijo; pero sí que en la Iglesia romana, en el siglo III, se conocian ya las mismas que existen hoy.

¿Cuándo fué elevado á orden mayor el subdiaconado, y cuáles son sus funciones?—Comenzó á ser considerado como tal en el siglo VI, en que se

le impuso la ley de la continencia, y quedó definitivamente en el xi. En la antigua disciplina sus funciones eran servir fuera del altar al sacerdote, recibir las oblacones y entregarlas al diácono y cuidar de las puertas del templo; en la actual, están reducidas á asistir al sacerdote en las misas solemnes y leer la Epístola.

¿Cuáles fueron las funciones de las órdenes menores?—Las de los *acólitos*, auxiliar al diácono y subdiácono fuera del altar; las de los *exorcistas*, conjurar á los endemoniados; las de los *lectores*, conservar y leer las escrituras, y las de los *ostiatarios*, cuidar de las puertas del templo bajo las órdenes del subdiácono.

¿Qué estado tienen en la actual disciplina las órdenes menores?—Son una simple preparacion para recibir las mayores.

¿En qué se diferencian las unas de las otras?—En que las mayores imponen la ley de la continencia y la obligacion de rezar las horas canónicas; no pueden ser conferidas sin título, y los que las reciben quedan adscritos perpétuamente al servicio de la Iglesia; todo lo cual no sucede con las menores.

¿Qué es prima tonsura?—Una preparacion para recibir las órdenes concedidas por el obispo con ciertas ceremonias solemnes.

¿Qué derechos tienen los tonsurados?—El de usar el traje eclesiástico, y en este caso gozar del privilegio del fuero; y el de tener aptitud para los beneficios eclesiásticos, si no son inhábiles por la edad ú otro concepto.

De los párrocos y cabildos catedrales.

42^a ¿Qué son párrocos?—Unos funcionarios auxiliares de los obispos que bajo sus órdenes tienen á su cargo la cura pastoral de una parte de la diócesis

¿Cuál fué el origen de los párrocos?—No son de institucion divina, sino que fueron creados por la Iglesia segun se fué extendiendo la religion cristiana. Los civitatenses empezaron á conocerse en el siglo v, los rurales en el x.

¿Cuáles son las atribuciones de los párrocos?—Tienen autoridad propia, que no excluye, sin embargo, la del obispo. Esta autoridad se reduce á administrar los sacramentos y algunos sacramentales á sus feligreses, sin que pueda hacerlo sin su licencia ó la del obispo otro presbítero. Deben ofrecer por sus feligreses el sacrificio de la misa los días festivos, predicarles la divina palabra y enseñarla á los niños; llevar los libros necesarios para hacer constar en ellos los bautismos, matrimonios y defunciones que ocurran en sus parroquias, y por último, velar por la observancia de los preceptos de la Iglesia y la pureza de la fé y de las costumbres.

¿Qué son arciprestes rurales?—Los párrocos que además de su parroquia velan sobre otro número de ellas, para que los propios párrocos cumplan con sus deberes. Segun el derecho vigente en España, debe haber uno, cuando ménos, por cada partido judicial.

¿Qué auxiliares tienen los párrocos?—Los coadjutores, tenientes beneficiados y capellanes, segun los casos.

43^a ¿Qué es cabildo catedral?—Una corporacion eclesiástica creada para las funciones del culto solemne en la iglesia episcopal y auxiliar al obispo en el gobierno de su diócesis, cuyos individuos se llaman *canónigos*. (1)

¿Cuál fué el sistema de vida de los canónigos hasta el día?—Desde el siglo iv hasta el vii vivian en comunidad, cuyo método de vida fué introduciéndose en las respectivas iglesias por los obispos, á imitacion de los monjes orientales. En el siglo vii esta disciplina se hizo general en Occidente y se restableció en las iglesias en que habia dejado de existir, formando,

(1) *del colegio*
A los prebendados que forman el cabildo catedral
presididos por un superior individuo tambien de la
corporacion se llaman *canónigos*.

en 846, Godegango, obispo de Metz, un reglamento que amplió poco después el concilio de Aquisgran. En el siglo xi los canónigos abandonaron la vida común, y desde entonces se restableció en algunas iglesias bajo la forma monástica, continuando aquéllos viviendo en el siglo en las demás, dándose de esta época la division de los canónigos en *seculares* y *regulares*.

¿Cuántas categorías hay entre los miembros del cabildo?—Dignidades, personados, prebendas de oficio y simples prebendas.

¿Qué se entiende por dignidad?—Un beneficio eclesiástico que antiguamente llevaba aneja preeminencia y jurisdicción.

¿Qué se entendía por personado?—Un beneficio que llevaba aneja tan sólo preeminencia. En la actualidad no existen los personados y si tan sólo las dignidades, si bien no llevan ya aneja jurisdicción.

¿Cuántas eran antiguamente y son en la actualidad las dignidades en cada iglesia catedral?—Variaba su número en cada iglesia. En España, desde el concordato de 1851 son cuatro en las iglesias sufragáneas, y cinco en las metropolitanas, además de la dignidad de *deán* que hay en todas, á saber: *arcipreste*, *arcediano*, *chantre*, *maestroescuela*, y en las metropolitanas la de *tesorero*.

¿Qué son prebendas de oficio?—Unas piezas eclesiásticas que forman parte de los cabildos catedrales, y á las que van unidas funciones especiales.

¿Cuántas son en la actualidad en España?—Cuatro, á saber: *lectoralia*, *penitenciaria*, *doctoralia* y *magistralia*.

¿Cuáles son las funciones de cada una de ellas?—Las de la *lectoralia*, la enseñanza de la Sagrada Escritura á los clérigos; de la *penitenciaria*, la administración del sacramento de la penitencia y la absolución de los pecados y censuras pertenecientes al obispo, previa autorización ó delegación de éste; de la *magistralia*, la predicación en la iglesia y en las demás iglesias de la ciudad, cuando el obispo lo disponga; y de la *doctoralia*, el asesoramiento del cabildo en las dudas de ley y la defensa jurídica de sus derechos é intereses.

¿Cuál es el origen de las prebendas de oficio?—Las dos primeras fueron instituidas, si bien como oficios y no como prebendas, por el Concilio IV de Letrán, habiendo después determinado el Tridentino que se les uniesen las dos primeras prebendas que vacasen en cada catedral. La *magistralia* y *doctoralia*, si bien como oficio de primera procede del mismo Concilio de Letrán, en el concepto de prebendas son de origen puramente español, porque fueron establecidas en una constitución de Sixto IV, dada en 1474, á instancia del clero de Castilla y de Leon.

¿Cuáles son los deberes de los canónigos y qué clasificación puede hacerse de ellos?—Estos deberes ó se refieren al culto ó al gobierno de la diócesis. Los primeros están reducidos á asistir al coro para la celebración de los oficios divinos y desempeñar en ellos las funciones que les correspondan por los estatutos. Los segundos están reducidos á formar el *senado* ó consejo del obispo para la resolución de los negocios graves en la administración eclesiástica.

¿Qué relaciones mediaron entre el obispo y su cabildo hasta la celebración del Concilio de Trento?—Mientras los cabildos vivieron en vida común con sus obispos, estas relaciones fueron tan íntimas que el obispo ejercía siempre su potestad rodeado de su corporación capitular. Pero, disuelta la vida común, comenzaron por separar respectivamente sus bienes y encargarse también respectiva é independientemente de su administración, formando dos acervos que llamaron *mesas* episcopal y capitular. Además, debido á las largas ausencias de los obispos de sus diócesis, sus cabildos comenzaron también á ejercer independientemente de ellos ciertas atribuciones del gobierno, cuya legitimidad sostuvieron después apoyándose en el privilegio, transacción ó costumbre.

¿Cuál fué el resultado de todo esto?—Que los obispos comenzaron á ejercer la jurisdiccion que no les disputaban los cabildos, sin asesorarse con ellos. Deduciéndose de todo ello la necesidad de la reforma que debia tener por objeto restablecer la autoridad del obispo, devolver al cabildo sus funciones de corporacion consultiva y fijar las cualidades de aptitud que habian de tener sus miembros.

¿Cómo hizo esta reforma el Concilio de Trento?—1.º, determinando que al obispo correspondia en el cabildo la primera silla y el primer puesto, bien en el coro, bien en las procesiones ó en cualesquiera otros actos eclesiásticos; 2.º, que tenia el derecho de convocar al cabildo para tratar de asuntos eclesiásticos y no para cosas de su particular utilidad; 3.º, que lo tenia igualmente de visitarlo, cuando ménos, en concepto de delegado de la Silla apostólica, apesar de las exenciones de aquél; 4.º, que tenia igualmente el de corregir y castigar, ya en visita ó fuera de ella, á los miembros del cabildo, si bien debia asociarse de dos adjuntos individuos de la corporacion para la instruccion de la correspondiente causa criminal fuera de visita; 5.º, que el obispo debia administrar el sacramento del orden en el seno del cabildo en la iglesia catedral; 6.º, que igualmente debia asociarse de dos canónigos para la fundacion, dotacion y administracion del seminario, conmutacion de las últimas voluntades, publicacion de indulgencias y concesion de otras gracias espirituales.

¿Qué dispuso el concilio respecto á las cualidades que habian de tener los canónigos?—Determinó que por regla general habian de ser mayores de veintidos años; una vez que todos habian de tener orden sacro; que la mitad de ellos habian de ser presbíteros y diáconos, y subdiáconos la otra mitad, y que, donde fuese posible, tuviesen tambien la mitad de los simples canónigos y todas las dignidades grado académico.

¿Qué reformas se introdujeron por el concordato de 1851 en España en la organizacion y funciones de los cabildos?—Se fijó el número de canónigos de que cada uno de ellos habia de constar; se dieron voz, y tres, cuatro ó cinco votos al obispo, segun el número de capitulares, y en toda eleccion ó nombramiento que correspondiese al cabildo; se determinó que todos los capitulares habian de ser presbíteros, y se renovó la doctrina fundamental en la materia de que el cabildo es el Consejo ó Senado del obispo. Esta organizacion por sus defectos deja todavia mucho que desear.

45. ¿Cuáles son las atribuciones del cabildo estando vacante ó impedida la silla?—Las de gobernar la diócesis, no en cuerpo, sino por medio de un vicario elegido por él y que se llama vicario capitular, segun lo dispusieron el Concilio de Trento y el concordato citado.

¿Cuándo se entiende que está vacante la silla?—Cuando ha muerto el obispo, ha renunciado ó ha sido trasladado ó depuesto.

¿Cuándo se entiende impedida la silla?—Cuando el obispo cayó en cautividad; cuando por enfermedad ó edad no puede administrar la diócesis, cuando fué suspenso ó excomulgado ó desterrado por el gobierno temporal.

¿Qué límites tienen las atribuciones del cabildo, vacante ó impedida la silla?—No puede ejercer la potestad de orden episcopal ni las atribuciones que correspondan al obispo como delegado de la Silla apostólica, ni conferir, unir ni dividir beneficios de libre colacion episcopal, ni enajenar los bienes de la Iglesia, ni convocar sínodo diocesano en el primer año de vacante, ni conceder durante el mismo dimisorias sino á los artados.

¿Qué condiciones ha de tener el elegido por el cabildo para vicario capitular?—Ha de ser doctor ó licenciado en derecho canónico, ó idóneo, cuando ménos, para ejercer la jurisdiccion, y ha de obtener en España, del gobierno temporal, la real cédula auxiliatoria, una vez nombrado que haya sido por el cabildo; habiendo en éste algun individuo que tenga las cualidades dichas, no puede ser nombrado un extraño.

¿En qué tiempo ha de hacer el cabildo el nombramiento?—Dentro de los ocho días siguientes al en que haya llegado á su noticia la vacante ó impedimento de la silla, perdiendo la facultad de nombrar por aquella vez si no lo hiciere así ó nombrase á un inhábil, correspondiendo en tal caso el nombramiento al metropolitano.

¿Quién, aunque tenga las cualidades dichas, no podrá ser nombrado vicario capitular?—El obispo presentado para la misma iglesia antes de ser confirmado, segun el cánón del Concilio II de Lyon y dos rescriptos de Pío VII, si bien se disputa sobre su carácter obligatorio en España.

Auxiliares de los obispos.

¿Quiénes son los auxiliares del obispo en el ejercicio de su jurisdicción?—Hasta el siglo XIII lo fueron los arcedianos; mas por querer éstos erigirse en autoridades independientes, perdieron sus atribuciones delegadas y fueron reemplazados por los vicarios generales, que libremente nombra el obispo.

¿Qué cualidades deben tener los vicarios generales y quiénes no pueden ser nombrados?—Han de ser tonsurados, mayores de veinticinco años y graduados en derecho canónico, á no ser que no hubiere quien tuviese este requisito. No pueden serlo los clérigos casados, los regulares mendicantes, los naturales de la diócesis, los parientes del obispo, ni los que ejerzan jurisdicción en el fuero interno. En España necesitan los vicarios generales tener aptitud, segun las leyes del reino, para ejercer jurisdicción.

¿Qué atribuciones tienen los vicarios generales?—Las que los obispos les confieren, y si el mandato está redactado de una manera general, no pueden conocer de los negocios graves, entendiéndose por tales los que merezcan este concepto á juicio unánime de los tratadistas y los que el derecho reserva al obispo personalmente.

¿De qué modos termina en sus funciones el vicario general?—Por la vacante ó impedimento de la silla, por la revocación de su nombramiento hecha por el obispo y por la renuncia expresa ó tácita que haga aquél de su cargo.

¿Qué son fiscales eclesiásticos y cuáles sus cualidades y obligaciones?—Unos funcionarios del orden judicial, cuyas atribuciones tienen por objeto la defensa de los derechos é intereses de la Iglesia en los negocios contenciosos y administrativos de la diócesis. Sus cualidades están reducidas al orden sacro y al conocimiento de la ciencia del derecho. Son sus obligaciones intervenir en todos los negocios contenciosos y administrativos en que pueda sufrir perjuicio la Iglesia, desempeñar en ellos el oficio de defensor de sus derechos é intereses é impedir el castigo canónico de los delincuentes.

¿Qué son coadjutores episcopales?—Ciertos auxiliares de los obispos, que con carácter episcopal ó simplemente presbiteral concurren con ellos y bajo sus órdenes para ejercer, ya su potestad de orden y de jurisdicción, ya tan sólo la de jurisdicción.

¿Cuál fué el origen de estos auxiliares?—Se pierde en los primeros tiempos de la Iglesia, habiendo sido creados para auxiliar á los obispos, que no podían por sí mismos y sólo estar al frente de la administración de las diócesis por su mucha edad ú otra causa, una vez que por otra parte no podían ser removidos de sus sillas, por el vínculo perpétuo que con ellas habían contraído en el acto de la ordenación.

¿De qué clases fueron y son los coadjutores?—Temporales ó perpétuos, con ó sin derecho de futura sucesión. Los temporales eran nombrados para

desempeñar su cargo temporalmente, y los perpétuos lo eran para desempeñarlo mientras viviese el obispo impedido. Los sin derecho de futura sucesion, muerto el obispo impedido, no estaban llamados á sucederle, y, por el contrario, los que habian sido nombrados con ese derecho eran sus sucesores.

11 ¿Qué dispuso el Concilio de Trento sobre los coadjutores con derecho de futura sucesion?—Prohibió que pudieran nombrarse más que para los obispados y monasterios, y esto tan sólo en caso de evidente utilidad ó urgente necesidad.

11 ¿Qué exige la disciplina de España respecto á esos nombramientos?—Que se hagan á presentacion de la Corona.

Del Romano Pontífice.—Metropolitanos.

18- ¿Cuál es la autoridad suprema de la Iglesia?—El Romano Pontífice, en concepto de sucesor de San Pedro.

11 ¿Qué atribuciones concedió Jesucristo á San Pedro sobre los demás apóstoles?—El primado de honor y de jurisdiccion, cuando le dijo que era la piedra sobre que edificaria su Iglesia, cuando le encomendó que apacentase, no solamente sus corderos, sino tambien sus ovejas, y que confirmase en la fé á sus hermanos, habiendo San Pedro, en su consecuencia, ejercido estas atribuciones superiores cuando convocó á los demás apóstoles, y habló el primero de todos para eleccion de San Matias y otra vez para la abolicion de los *legales*.

¿Cuál es la base fundamental del primado pontificio?—La necesidad de que, hallándose esparcidos los obispos por todo el mundo y no pudiendo ejercer cada uno su autoridad sino en su diócesis, haya un centro comun que sostenga la union de todas las Iglesias particulares, como miembros de una sola Iglesia universal.

11 ¿Qué derechos corresponden al primado pontificio, segun la disciplina actual?—1.º, convocar y presidir los concilios ecuménicos; 2.º, sostener la pureza de la fé y la observancia de las costumbres y disciplina en toda la Iglesia; 3.º, dar leyes de observancia general; 4.º, conocer de las apelaciones de las Iglesias particulares; 5.º, castigar á los obispos delinquentes; 6.º, practicar los actos de jurisdiccion episcopal que los obispos han dejado de ejecutar, y 7.º, dispensar las leyes eclesiásticas.

11 ¿Correspondieron siempre todos estos derechos al primado?—En la primera época, que comprende hasta el pontificado de Gregorio VII, en el siglo xi, no tuvo todos estos derechos, porque la forma de organizacion del poder eclesiástico era muy descentralizadora. Sucedió todo lo contrario en la segunda, que alcanza desde Gregorio VII hasta el Concilio de Trento, siendo en ellas las atribuciones pontificias aún más extensas que los derechos enumerados. Desde el Concilio de Trento comenzó á decaer esta forma centralizadora y á devolverse á los obispos algunas atribuciones de las que les habian correspondido en la primera época y habian pasado á la *Silla* apostólica en la segunda. Se sostuvo, no obstante, en las tres, por una parte, que al Pontífice correspondia el conocimiento de las causas mayores, entendiéndose por tales las de mayor gravedad é importancia en el orden eclesiástico, y por la otra que el Pontífice no era superior á los cánones y debia observarlos.

51- ¿Qué se entiende por metropolitano?—El obispo que preside en concepto de inmediato superior á los de una provincia eclesiástica, que respecto á él se llaman sufragáneos.

11 ¿Cuál fué el origen de los metropolitanos?—Es de creer que proceden de los tiempos apostólicos.

¿Qué causas pudieron influir en la creación de estos cargos?—1.^a, la consideración de filiales que tenían las iglesias de una provincia respecto á la de la capital; 2.^a, la necesidad de establecer, para conservar la unidad, un centro en cada provincia, que sirviese de lazo entre las iglesias episcopales y la Silla apostólica, dada la gran distancia á que aquéllas se hallaban de ésta y la dificultad de las comunicaciones; 3.^a, la conveniencia de armonizar la administración del imperio con la de la Iglesia, y crear por esto una autoridad en la capital de la provincia, de jerarquía análoga á la del procónsul ó gobernador que residía en ella.

¿En cuántas épocas se puede dividir la disciplina relativa á las atribuciones de los metropolitanos?—En tres: 1.^a, hasta el siglo xii; 2.^a, desde este siglo hasta el xvi, y 3.^a, desde el xvi hasta nuestros días.

¿Qué derechos tuvieron en la primera época?—El de convocar y presidir el concilio provincial, publicar y hacer observar en la provincia las leyes eclesiásticas, vigilar cómo los obispos cumplían sus deberes, visitar sus iglesias, nombrar de entre sus sufragáneos al que hubiese de encargarse del gobierno de la iglesia vacante en la provincia, mientras no se le ordenase pastor propio, expedir á sus sufragáneos las letras formadas para que pudiesen ausentarse legítimamente de sus respectivas iglesias, y por último suplir los defectos y corregir los excesos de aquéllos. Tampoco debe olvidarse que á los metropolitanos en esta época, en unión con sus sufragáneos, correspondía la confirmación y ordenación de los obispos de su provincia.

¿Qué derechos tuvieron en la segunda época?—Muchos ménos que en la primera, no ya porque el derecho escrito les hubiese privado de ellos, sino porque habían comenzado á caer en decadencia.

¿Qué derechos tienen en la tercera?—El de devolución y queja, en virtud del cual suplen los defectos ó corrigen los excesos de sus sufragáneos, y en su consecuencia el de conferir los beneficios episcopales si el obispo propio los deja en estado de vacante durante seis meses, y nombrar vicario capitular cuando el cabildo no lo hace en los ocho días siguientes á la muerte del sufragáneo; conceder licencia á los sufragáneos para ausentarse, si bien esto ha de hacerlo por escrito y dando cuenta en el próximo concilio provincial; conocer en el mismo concilio, y en unión con él, de las causas menores de los obispos; convocar y presidir cada tres años el concilio provincial; visitar las iglesias de la provincia cuando el dicho concilio le haya autorizado para ello; y, por último, juzgar de las apelaciones interpuestas de las sentencias dictadas por los obispos sufragáneos.

¿Cuántos metropolitanos hay en la Iglesia de España?—Hasta el siglo v hubo los de Tarragona, Mérida y Sevilla. Se aumentaron entónces, dos, que fueron los de Toledo y Braga. En el siglo xii se creó el de Santiago en reemplazo del de Mérida; en el xiii, el de Valencia, en el xiv, el de Zaragoza; en el xv, el de Granada; en el xvi, el de Burgos; y por el concordato de 1851, el de Valladolid. De suerte que en la actualidad son nueve, descontando el de Braga, que corresponde á Portugal.

¿Qué fueron los primados?—Unas autoridades intermedias entre el Romano Pontífice y los metropolitanos, que presidían á los ministros de esta clase y obispos de una nación, ó de una parte de ella.

¿Qué derechos, por regla general, tuvieron los primados?—El de convocar y presidir los concilios nacionales, velar por la observancia de las leyes en todas las iglesias de la nación, y ejercer una inspección sobre los obispos de ellas.

¿Cuál fué el origen de los primados?—Los hubo de dos clases. Los de una fueron creados por los Romanos Pontífices en los siglos medios, y más que autoridades propias fueron unos delegados ó vicarios apostólicos. Los de la otra debieron su origen á causas especiales y peculiares á cada

nacion, no dejando de ser una de ellas la importancia política de la capital, que vino á realizar la iglesia en ella constituida.

¿Cuál fué la iglesia primada de España, y por qué vicisitudes pasó hasta nuestros dias?—La de Toledo, que comenzó á adquirir esta dignidad desde el siglo VII, siendo entónces sus atribuciones las de presidir los concilios nacionales y confirmar á los obispos y metropolitanos elegidos por el monarca. Reconquistada la ciudad por Alonso VI, fué confirmado su primer obispo por el papa Urbano II en la dignidad de primado, sin embargo de que le fué ésta disputada en los tiempos posteriores por los metropolitanos de Sevilla, Tarragona y Santiago; pero desde su restablecimiento quedó ya reducido á un mero honor sin jurisdiccion propia.

54. ¿Qué se entiende por patriarcas?—Unos altos dignatarios eclesiásticos con carácter episcopal, que no solamente ejercian la potestad propia del obispo en sus diócesis, sino jurisdiccion superior sobre los metropolitanos y obispos de una gran comarca llamada diócesis.

¿Cuántos eran los patriarcas?—Cinco, á saber: los de Roma, Antioquia, Alejandría, Jerusalem y Constantinopla.

¿Cuál fué el origen de los patriarcas?—Cada uno tuvo el suyo. El de Roma fué debido á que esta silla era la primada de la Iglesia universal, y además la matriz de todas las de Occidente, y especialmente de las de Italia. Los de Antioquia y Alejandría proceden de los tiempos anteriores al concilio I de Nicea, y verosimilmente de los tiempos apostólicos, por cuanto la Iglesia de Antioquia fué fundada por el mismo San Pedro, y la de Alejandría por su discípulo San Marcos. El primer concilio de Nicea reconoció ya en los obispos de estas Iglesias preeminencias superiores á las metropolitanas. El patriarcado de Jerusalem fué creándose paulatinamente desde el concilio mencionado, que reconoció ya al obispo de esta Iglesia alguna preeminencia de honor, hasta el de Calcedonia, en que se le señaló territorio y jurisdiccion propia. El patriarcado de Constantinopla comenzó á crearse en el concilio I de la misma ciudad, y quedó definitivamente establecido en el de Calcedonia, cánón 28, que no fué admitido en Occidente hasta el concilio IV constantinopolitano, siendo desde entónces considerado en toda la Iglesia dicho patriarcado como el primero de los de Oriente.

¿Cuáles eran los derechos de los patriarcas?—1.º, consagrar los metropolitanos de su diócesis; 2.º, conocer en apelacion de los asuntos resueltos por los obispos y metropolitanos de la misma; 3.º, convocar y presidir el concilio diocesano; 4.º, corregir á los metropolitanos y sufragáneos negligentes, y 5.º, el de ser consultados por los mismos en los negocios áridos, y en general velar por la observancia de los cánones.

¿Qué estado tienen en la actualidad los patriarcas?—Los de la Iglesia oriental continúan separados de la comunión de la iglesia católica, y si bien se confieren sus títulos en Roma, los que los obtienen no ejercen jurisdiccion en los patriarcados respectivos, viniendo á ser asi meros obispos *in partibus*.

49. ¿Qué se entiende por cardenales de la iglesia romana?—Los obispos, presbíteros y diáconos de la misma que forman el Senado del Pontífice y le auxilian en el gobierno de la Iglesia universal.

¿Cuántos son los cardenales obispos?—Seis, en la actualidad, cuyas sillas están inmediatas á Roma.

¿Cuántos son los presbíteros?—Cincuenta desde el arreglo de Sixto V, pues antes habia variado el número, comenzando por ser veintiocho, que eran otros tantos presbíteros adscriptos por título propio al servicio de un número igual de iglesias en Roma.

¿Cuántos son los diáconos?—Catorce desde el mismo Sixto V, que restableció el antiguo número, suprimiendo los cuatro palatinos creados por Leon X.

¿Cuáles eran las funciones de los cardenales antes del siglo XII?—Gobernar por título propio sus respectivas iglesias y diaconías, y auxiliar al Romano Pontífice cuando los consultaba en el despacho de los negocios graves.

¿Cuáles eran esas prerogativas desde el siglo XII?—Las mismas, aunque en mayor escala, por haberse centralizado en Roma el poder eclesiástico, y además la elección pontificia.

¿Cuáles son sus honores?—El uso del capelo y traje encarnado que les concedió Inocencio IV, y del birrete del mismo color que les otorgó Paulo II; el tratamiento de eminencia, que deben á Urbano VIII; el uso de armas propias de la dignidad, hasta el punto de que no puedan usar las que tengan por su familia, y el título exclusivo de cardenales, que no pueden llevar los demás ministros eclesiásticos.

¿A quién corresponde su nombramiento, y qué cualidades han de tener los nombrados?—Al Romano Pontífice, que debe elegirlos de todas las naciones cristianas entre los que tengan la edad, ciencia y demás cualidades que los cánones exigen en los obispos.

¿Qué es consistorio?—La asamblea de los cardenales de la Iglesia romana, convocada y presidida por el Pontífice.

¿Qué clases hay de consistorio?—Público y secreto. Al primero, además de los cardenales, asisten los embajadores y otros dignatarios eclesiásticos y seculares. Al segundo asisten sólo los cardenales, para tratar de los negocios graves de la Iglesia; esto es, se reúnen en días determinados, y entonces se llama consistorio ordinario, ó bien cuando ocurre algun negocio urgente, y entonces recibe el de extraordinario.

¿Qué son congregaciones?—Son comisiones permanentes formadas por los cardenales, y á las cuales está encomendado el despacho de determinada clase de negocios de la Iglesia universal.

¿Cuántas son y cuáles las más importantes?—Desde Sixto V son nueve, tres de origen anterior y seis creadas por este Pontífice. Las más importantes son: la consistorial, que prepara los negocios que han de resolverse en el consistorio; la de inquisición, que examina y declara las doctrinas heterodoxas; la del índice, que la auxilia en el examen de los libros, y la de interpretación del Concilio de Trento, cuyo objeto es dar interpretaciones auténticas de los decretos tridentinos.

¿Qué otros auxiliares, además de los cardenales, tiene el Romano Pontífice?—Los oficiales de la curia romana, que forman al objeto varias corporaciones, á saber: la *Penitenciaria*, para todo lo perteneciente al fuero interno; la *Cancillería*, para el despacho de los negocios consistoriales; la *Dataría*, para ciertas dispensas de ley; la *Secretaría* de breves, para las gracias llamadas menores, cuya concesión se hace por medio de breves, y además la *Curia de justicia*, que forma las siguientes corporaciones: la *Rota*, tribunal supremo para todas las naciones cristianas; la *Signatura de gracia*, para la resolución de ciertos negocios contenciosos que no pueden terminarse según el rigor del derecho, y la *Signatura de justicia*, para ciertos pleitos sobre admisión de apelaciones, delegaciones y recusaciones.

Legados pontificios y prelados inferiores.

¿Qué son legados apostólicos?—Los enviados del Pontífice á las provincias cristianas, para que en ellas ejerzan en su nombre una parte más ó menos considerable de su jurisdicción.

¿Cuál fué el estado de la institución de los legados hasta el siglo XI?—Tuviron escasa importancia por las grandes atribuciones que ejercian los metropolitanos, y prescindiendo de los enviados para un objeto especial y

determinado, y de los que residían en Constantinopla con el nombre de *Apocrisarios*, tan solo se conocieron algunos en Occidente, con el de vicarios apostólicos, que no eran otra cosa más que metropolitanos del territorio, con la mayor amplitud de atribuciones, que recibían de la Silla apostólica.

¿Cuál fué el estado de la institución desde el siglo xi hasta el Concilio de Trento?—Por la decadencia de la autoridad metropolitana y la necesidad de la mayor intervención del primado en las iglesias particulares, los legados aumentaron en número, clases y atribuciones.

¿Cuántas fueron las clases de legados?—Tres: *natos*, *missi* y *ad latere*. Eran los primeros aquéllos cuya legación no se les concedía por consideración a su persona, sino por ir unida á la silla metropolitana que poseían por título propio; éstos eran los antiguos vicarios apostólicos. Los *missi* recibían la legación directamente del mismo Pontífice, pero ellos no tenían la dignidad cardenalicia, y los *ad latere* eran los cardenales á quienes el Pontífice nombraba sus legados en las provincias cristianas.

¿Cuáles fueron las atribuciones de los legados en esta época?—Los *natos* fueron poco á poco perdiendo las que antiguamente habían ejercido, y por el contrario fueron ensanchándose las de los *missi* y *ad latere*. Las facultades de éstos eran ordinarias ó extraordinarias; las primeras les correspondían por disposiciones generales del derecho, y las segundas por el título especial de su nombramiento. Los *ad latere* con las unas y las otras llegaron á ejercer casi toda la potestad pontificia, y á concurrir con los metropolitanos y simples obispos en el ejercicio de la que era propia de éstos.

¿Qué resultados produjo en esta época la institución de los legados y la amplitud de sus atribuciones?—La institución en sí misma contribuyó á contener en algo la corrupción de la disciplina. La amplitud de sus atribuciones fué grandemente perturbadora, ya por los excesos en que incurrian los legados á su sombra, ya por la absorción que hicieron de la autoridad ordinaria de los obispos.

¿Cuál fué el estado de las legaciones pontificias desde el Concilio de Trento hasta nuestros días?—Perdieron su anterior importancia. El concilio dicho les prohibió ejercer la autoridad de los obispos, y por los convenios hechos con los monarcas, tampoco pueden ejercer en ninguna provincia cristiana sus atribuciones sin presentar antes á la autoridad suprema temporal las credenciales que hayan recibido de la Silla apostólica, no debiendo en el ejercicio de sus facultades infringir los concordatos, la disciplina particular y el derecho común; y por último, además del carácter de ministros eclesiásticos tienen el de representantes diplomáticos del Pontífice. El número de legados disminuyó considerablemente en esta época, comparada con la anterior.

¿Cuál es el estado de la legación pontificia en España, ó sea de la *nunciatura*?—Leon X, á petición de Carlos I, amplió sus facultades en los asuntos de gracia y declaró perpétuas las que ya entonces tenía para conocer en apelación de los negocios fallados por los metropolitanos. Por los abusos en que habían incurrido los nuncios y sus oficiales, se publicó en el reinado de Felipe IV el arreglo de la nunciatura, que se conoce con el nombre de Concordia de César Facheneti. En 1774 Clemente XIV creó el tribunal de la Rota española, que conoce en nombre del Pontífice, y por delegación especial que le confiere el nuncio para cada negocio, de todas las últimas apelaciones de la Iglesia de España, y de los asuntos en primera instancia de los exentos. Los jueces que la forman son seis, divididos en dos turnos, y los nombra el rey y los confirma el Papa.

¿Qué son prelados inferiores?—Los que con carácter presbital ejercen no obstante jurisdicción casi episcopal en el territorio que les está señalado.

¿Cuántas son sus clases?—Cuatro: simples prelados inferiores, que son aquéllos cuyo territorio está enclavado en la diócesis de un obispo, y prelados *vere nullius*, que son aquéllos cuyo territorio está fuera de la diócesis, formando una cuasi diócesis. Seculares, los que pertenecen al clero secular, y regulares, los que pertenecen al estado monástico.

¿Por qué títulos adquirieron los exentos la jurisdicción cuasi episcopal?—Por privilegios pontificios, por transacciones con los obispos, y por prescripción inmemorial.

¿Cuáles son las atribuciones de los prelados exentos?—Por regla general todas las que constituyen la jurisdicción episcopal, con excepción de las siguientes; 1.^a, la de convocar á concurso para la provision de parroquias; 2.^a, la de conferir éstas en econmato; 3.^a, la de celebrar concilio diocesano; 4.^a, la de conceder dimisorias; 5.^a, la de conceder indulgencias, y 6.^a, la de absorber en los casos reservados á la Silla apostólica, y de las irregularidades y censuras reservadas al obispo; y por último, la de publicar monitorios. Estas atribuciones corresponden al obispo del territorio en que está enclavado el exento, ó al más próximo si es *vere nullius*.

¿Sobre qué recae principalmente, desde el Concilio de Trento, la exención de los prelados regulares?—Sobre el orden de la vida monástica é *intra claustra*, pues en cuanto á las demás exenciones fueron derogadas por el concilio, por regla general.

¿Qué prelados regulares notables hubo en la Iglesia de España?—Los grandes maestros de las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara, fundadas en el siglo xii, y la de Montesa, que lo fué en el xiv. Estos llegaron á ser tambien grandes señores en el orden temporal.

¿Qué otra exención más hubo en España de la autoridad ordinaria de los obispos?—La de la real capilla, por la que sucesivamente se fué concediendo á los monarcas el tener oratorios en sus palacios; quedar sometidos, así como el clero que los servía y las personas de los reyes y su servidumbre, á la autoridad de un capellan mayor, eximiéndose de la del propio obispo; haber sido elevado dicho capellan mayor al rango de prelado *vere nullius*; haberse creado el patriarcado de las Indias para que se uniese á la capellania mayor, teniendo así el carácter episcopal el que la desempeñase y, por último, haberse demarcado el territorio exento por esta causa, y erigiéndose en parroquia la real capilla.

¿Qué otra jurisdicción exenta importante se conoce en España?—La del vicario general castrense, que desempeña el capellan mayor de palacio. Tuvo principio por cesion del papa Inocencio X, y desde entonces se renueva periódicamente. Cuenta el vicario general castrense como auxiliares suyos á su auditor general y á sus delegados en las provincias para el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, y á los capellanes de los cuerpos del ejército, para el de la cura de almas. Están sometidos á esta jurisdicción exenta todos los que gozan íntegramente el fuero de guerra y se hallan en servicio activo.

¿Qué se entiende por jurisdicciones privativas y cuántas son?—Las que tienen por objeto el conocimiento de negocios especiales que no pertenecen al gobierno y organizacion comun de la Iglesia. Son la de cruzada, la del excusado y la de expolios y vacantes.

¿Cuál es el objeto de la jurisdicción de cruzada y quién la ejerce?—Conceder á los fieles las gracias espirituales que se conocen con este nombre, distribuyendo los sumarios y recogiendo las limosnas, y conceder tambien ó negar permiso para la impresion y tasa de los misales y breviarios. Ejercia esta jurisdicción hasta el concordato último un presbítero que nombraba la Corona y confirmaba el Papa, y era elevado por esto á la categoría de alta dignidad eclesiástica; desde el concordato ejerce esta jurisdicción el arzobispo de Toledo, y son sus delegados los obispos en sus respectivas diócesis.

¿Qué era la jurisdicción privativa del excusado?—La que ejercía el comisario de cruzada para recaudar la parte de diezmos que con el nombre de *excusado* correspondía á la Corona, por habérselo concedido Pío V á Felipe II por cinco años, y después Benedicto XIV á Fernando VI perpetuamente.

¿Qué era la de expolios y vacantes? La que tambien correspondía á dicho comisario para recaudar los expolios de los obispos difuntos y las rentas de las mitras episcopales mientras estuviesen vacantes, y distribuir las segun lo dispuesto en el concordato de 1783.

¿Cómo ejercía el comisario general de cruzada estas jurisdicciones privativas?—En la parte contenciosa, formando tribunal con otros dos jueces.

¿En qué estado quedaron por el concordato de 51 las jurisdicciones exentas y privativas en España?—Se suprimieron todas, con las siguientes excepciones; las del capellan mayor en Palacio y sitios reales, la castrense y la de los cuatro órdenes militares, que habrán de ejercerse por un obispo con titulo de prior en un coto redondo. Esto por lo que hace á las jurisdicciones exentas; pues respecto á las privativas se encomendó la de cruzada al arzobispo de Toledo y ordinarios de las diócesis como sus delegados, y se suprimieron el tribunal del excusado y la colecturía general de expolios y vacantes.

De los regulares.

¿Cuáles son los fundamentos de la vida monástica?—La práctica de los consejos evangélicos.

¿Qué se entendía antes del cristianismo por ascetismo filosófico?—El ejercicio de la virtud y la abstinencia de ciertas cosas lícitas á los demás hombres, con el fin de reprimir los vicios.

¿Cuáles fueron los ascetas más célebres de esta clase?—Entre los judíos los Esenos y Terapeutas. Los primeros vivían en comunidad, renunciaban á la propiedad privada y se mantenían con el trabajo personal.

Los segundos renunciaban tambien á la propiedad, pero vivían aisladamente y no se alimentaban más que de pan y agua.

¿En qué forma se presentó ya en los primeros tiempos de la Iglesia el ascetismo cristiano?—De una manera aislada, habiendo individuos que, sin estar reunidos ni formar corporacion y movidos de su ardiente fe, se dedicaban á la práctica de los consejos evangélicos y á toda clase de abstinencias y mortificaciones. Entre ellos ocupaban un lugar distinguido las vírgenes sagradas, que hacían profesion pública de su estado recibiendo el velo del obispo, y aunque vivían con sus respectivas familias, su nombre se inscribía en el cánón de la Iglesia, se las consideraba como personas eclesiásticas y tenían lugar preferente en el templo, no pudiendo contraer matrimonio á no ser excomulgadas y quedar sujetas á penitencia pública.

¿Cuándo comenzó á tomar el ascetismo la forma monástica?—Segun la opinion general, en el siglo III, en Egipto, con motivo de la persecucion de Decio, huyendo de ella muchos cristianos á las soledades de la Tebaida, en las que continuaron aun despues de dada la paz á la Iglesia, distinguiéndose entre todos ellos San Pablo, San Antonio y San Pacomio, que parece haber sido el primero que reunió á los solitarios, hasta entonces dispersos, en edificios destinados al objeto, los cuales se llamaron *monasterios*.

¿Cuándo se extendió la vida monástica por Oriente y Occidente?—En el siglo IV, San Hilarion, discípulo de San Antonio, la estableció en Palestina; Eustatio de Sebaste en la Armenia y San Basilio en el Ponto y la Capadocia;

propagándose despues por todas las demás provincias del Oriente. En Occidente comenzó á organizarse el monacato con la venida de San Atanasio á Roma y con los escritos y ejemplo de San Jerónimo. En España existia ya en el año 384, á juzgar por el canon sexto del concilio celebrado entonces en Zaragoza.

¿A qué regla estuvieron en un principio sometidos los monjes?—Cada monasterio tenia la suya y ninguna de ellas era fija é invariable, por más que todas consistian en preceptos cuyo objeto era la práctica de los consejos evangélicos.

¿Qué inconvenientes ofrecia esta variedad y variabilidad de las reglas monásticas?—La vagancia de los monjes de un monasterio á otro, el estar éstos sometidos á la arbitrariedad de su respectivo superior, y el no saber de antemano cuáles habian de ser para siempre sus ocupaciones y trabajos, á fin de acomodar á ellos su espíritu y asegurar su fervor.

¿Cuándo comenzó la estabilidad en la regla monástica?—En el siglo vi, en que San Benito publicó la suya para los monjes del monte Casino, y que se extendió despues á casi todos los de Occidente. Está compuesta de ochenta capitulos, introduciéndose en ella la solemnidad de la profesion religiosa y la prohibicion de pasar de un monasterio á otro sin justa causa.

¿Qué otras reglas célebres se conocieron en los tiempos posteriores?—Las de San Basilio, San Agustin y San Francisco, á las que, y á la de San Benito, pueden referirse todas las demás, que son simples modificaciones suyas.

¿Cuándo comenzó á decaer la pureza de la vida monástica y en qué tiempos se hizo su primera reforma?—Desde el siglo viii, con ocasion de las grandes riquezas adquiridas por los monasterios, la construccion de éstos en las ciudades, la concesion á los mismos de derechos feudales y la adjudicacion por diferentes títulos de las abadías á los legos. Esta corrupcion dió márgen en los siglos x y xi á la reforma basada en la más absoluta pobreza y en la construccion de los monasterios en los desiertos, que llevaron á cabo los fundadores de las órdenes de los *cluniacenses*, *camaldulenses*, *cartujos* y *cistercienses*.

¿Qué nuevo aspecto tomó la vida monástica desde el siglo xii?—Abandonando la soledad, aparece la institucion en las nuevas órdenes que se crean con un carácter más social y humanitario, dedicándose á uno ú otro ramo de la vida activa. Tales son las órdenes militares de caballería, las de redencion de cautivos, las hospitalarias, las de la enseñanza, las de misiones, etc.

¿Qué órdenes militares se conocieron y cuál fué su origen?—Las de los Templarios, Hospitalarios y Teutónicos; los primeros se llamaban así porque tenian su monasterio cerca del templo levantado en el Calvario, en Jerusalem; los segundos, porque cuidaban los enfermos en el hospital de San Juan, en la misma ciudad, y los últimos, porque se dedicaban tambien al alivio de los enfermos alemanes, en el hospital que tambien tenian en Jerusalem. A poco tiempo, todos ellos se dedicaron á las funciones de la guerra en la Palestina, auxiliando á los cruzados contra los turcos, hasta que, tomada por éstos la ciudad de San Juan de Acre en 1291, se retiraron á Europa, extendiéndose por casi toda ella. A los tres votos de la vida monástica unian en su profesion el cuarto, de defender con las armas la fé cristiana. Su regla era la de San Agustin, modificada.

¿Qué órdenes militares especiales se conocieron en España?—Las más célebres fueron las de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa; las tres primeras aparecieron en el siglo xii, y fueron confirmadas por el pontífice Alejandro III. La última fué creada por D. Jaime II de Aragon, en reemplazo de los Templarios, suprimidos entonces, y aprobada por Clemente V en 1317.

¿Qué órdenes se conocieron para la redencion de cautivos?—Las de los Trinitarios y Mercenarios, creadas en el siglo XIII; la primera, por San Juan de Mata y San Félix de Valois, y aprobada por Inocencio III; y la segunda, por San Raimundo de Peñafor y D. Jaime de Aragon el Conquistador, y aprobada por Gregorio IX. La causa de la creacion de ambas fueron las guerras con los mahometanos, en las que éstos reducian á la esclavitud á los prisioneros cristianos.

¿Cuáles fueron las órdenes hospitalarias y cuál el objeto de su institucion?—Las de los *Hermanos hospitalarios* y de las *Hermanas de la caridad*. Los primeros deben su origen al portugués San Juan de Dios, que creó la orden en Granada en el siglo XVI, en el cual fué tambien confirmada por la Silla apostólica. Las segundas lo deben á San Vicente de Paul, en el siglo XVII. Los unos y las otras tienen por instituto asistir y prestar toda clase de cuidados á los enfermos en los hospitales.

¿Qué órdenes se conocieron dedicadas á la enseñanza de la juventud?—Varias, entre ellas la de los Jesuitas, fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, y aprobada por Paulo III, y la de los Escolapios, fundada por el tambien español San José de Calasanz, en el siglo XVII, con el nombre de Congregacion de clérigos regulares de las Escuelas pías. Estos tienen por especial instituto dar la enseñanza primaria á los niños pobres.

¿Qué órdenes de misiones se conocieron?—La de los Padres misioneros, fundada tambien por San Vicente de Paul, y la mencionada de los Jesuitas.

¿Qué requisito es indispensable para la constitucion de nuevas órdenes?—Desde el Concilio IV de Letrán, en el siglo XIII, cuyo decreto confirmó el segundo de Lyon, es necesaria para el objeto la aprobacion ó confirmacion de la Silla apostólica.

De los votos monásticos y noviciado.

¿Qué son votos monásticos?—La promesa deliberada hecha solemnemente á Dios para practicar la perfeccion evangélica. Son tres, á saber: los de obediencia, pobreza y castidad.

¿A qué se obliga el religioso por el primero?—A renunciar á su propia voluntad y á obedecer ciegamente, sin tardanza, sin tibieza y con buen ánimo, las órdenes de sus superiores.

¿A qué se obliga por el segundo?—A renunciar, no solamente á la propiedad individual, sino tambien á la posesion de todas las cosas muebles é inmuebles, cualquiera que sea el título que pueda emplearse. Por este voto el religioso pierde su personalidad para adquirir, ó á lo ménos para conservar toda clase de bienes temporales.

¿A qué se obliga por el voto de castidad?—No tan solamente á vivir con toda pureza de costumbres, sino tambien á renunciar para siempre al matrimonio, siendo un impedimento dirimente para aquél.

¿En qué penas incurrén los religiosos que infringen sus votos?—En varias, segun la gravedad de la infraccion, y á arbitrio del superior en la mayor parte de los casos. Sin embargo, la infraccion del voto de pobreza se pena, si es conocida despues de muerto el monje, con la privacion de la sepultura eclesiástica, y si vive todavia, con la privacion de la comunión del altar y de voz activa y pasiva por dos años.

¿Qué se entiende por noviciado?—El tiempo que ha de preceder á la profesion, y que por regla general es de un año, durante el que el aspirante vive en el claustro practicando con todo rigor la regla, ya para que él mismo pueda comprender la trascendencia de la profesion que intenta.

hacer, ya para que el monasterio pueda cerciorarse de su verdadera vocación.

¿Qué variaciones experimentó la disciplina respecto al tiempo de noviciado?—En el Oriente duraba este tiempo de prueba tres años; en Occidente, San Gregorio Magno lo limitó á dos y San Benito á uno, lo cual confirmó el Concilio de Trento, salvo las reglas que le diesen más duración. Antes del Concilio de Trento, el monasterio y el aspirante, de común acuerdo, podían renunciar al noviciado, y así se hacía en la mayor parte de los casos. El Concilio prohibió esta renuncia, y determinó que ese tiempo de prueba había de ser completo y continuo, bajo la pena de nulidad de la profesión que sin él se hiciese, disponiendo igualmente que los novicios, hasta el momento de su profesión, conservasen la libertad de abandonar el claustro y volver al siglo.

¿Qué dispuso el Concilio sobre la forma y efectos de las renunciaciones ó donaciones que los novicios hagan de sus bienes antes de la profesión?—Prohibió que puedan hacerlas, ni aún por causas piadosas, antes de los dos meses anteriores á la profesión, y aún así, con licencia del obispo ó su vicario, siendo nulas las que en contrario hiciesen, aunque fuese con juramento, y aún las válidas que no surtan efecto hasta después de la profesión. Prohibió, del mismo modo, que antes de ésta den los novicios y sus parientes al monasterio más bienes que los indispensables para el vestido y alimento, bajo la pena de excomunión á los que las diesen y recibiesen, facultando á los novicios para recuperar lo donado.

¿Qué es profesión religiosa?—La promesa solemne por la que uno se obliga á observar perpétuamente alguna de las reglas aprobadas por la Silla apostólica.

¿De cuántas maneras puede ser la profesión?—Expresa ó tácita. Esta es la que se hace por medio de hechos, como la toma del hábito después del noviciado. Fué muy usada entre los antiguos monjes y en la Edad Media. La regla de San Pacomio no establecía otra profesión que ésta. Hoy ha caído en desuso, por más que el Concilio de Trento no la haya condenado. Profesión expresa ó solemne es la que se hace de viva voz y con ciertos ritos y ceremonias. Estas se determinan en las constituciones de cada una de las órdenes. El acto de la profesión debe elevarse á escritura pública.

¿Quiénes están incapacitados de profesar?—Los que no pueden consentir libremente; los dementes, furiosos y mantecatos; los menores de diez y seis años; los siervos, á no consentir sus dueños; los militares; los que están obligados á rendir cuentas de intereses ajenos, como los tutores; los sometidos á causa criminal; los condenados á alguna pena corporal; los obispos sin licencia del Romano Pontífice; y los casados que hayan consumado el matrimonio.

¿Qué requisitos ha establecido el Concilio de Trento para que pueda declararse la nulidad de la profesión?—1.º, que la nulidad se alegue dentro de los cinco años siguientes al día de la profesión; 2.º, que se alegue á la vez ante el ordinario y el superior del monasterio á que pertenece el monje de cuya profesión se trata; 3.º, que el reclamante no abandone, durante la causa, el monasterio, y 4.º, que si apesar de esto lo abandona, sea vuelto á él, castigado como apóstata y privado de todos los privilegios de la orden, entre tanto que no se resuelve la causa de nulidad.

¿Qué recurso cabe si han trascurrido los cinco años de profesión sin que se haya pedido su nulidad?—El extraordinario de *restitución*, que por gracia concede el Romano Pontífice con conocimiento de causa.

¿Cuál es la situación actual en España de los religiosos?—Por decreto de 8 de Marzo de 1836 y ley de 29 de Julio del 37 fueron suprimidas todas las órdenes religiosas de varones, exceptuando las destinadas á las misiones de Africa y las de los Escolapios, Hospitalarios, Hermanos de la caridad y beatas dedicadas á la enseñanza, que el gobierno podría conservar

en concepto de establecimientos de instruccion ó beneficencia. A las religiosas se las permitió continuar viviendo en clausura, sometidas al diocesano. A todos los religiosos de ambos sexos se les reconoció el derecho de testar, la capacidad de adquirir *inter vivos* y *mortis causa*, y los demás derechos civiles propios de los eclesiásticos seculares. Los exclaustrados, no obstante, canónicamente están sujetos en cuanto les sea posible á la observancia de las reglas. Por el concordato de 1851 se autorizó el establecimiento de las congregaciones religiosas de San Vicente de Paul, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede. Tal era la situación legal de los regulares en España al estallar la revolucion de Setiembre de 1868. Dos decretos del gobierno provisional, que por su importancia transcribimos á continuacion, modificaron esencialmente el estado legal de las órdenes monásticas, restableciendo los principios consignados en los citados decretos de 1836 y 1837. Los siguientes indicados decretos, que tienen fuerza de ley, constituyen el derecho vigente acerca del particular:

DECRETO.

En uso de las facultades que me competen como individuo del gobierno provisional y ministro de Gracia y Justicia, he venido en decretar, de acuerdo con el Consejo de ministros, lo siguiente: Artículo 1.º Quedan extinguidos desde esta fecha todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados en la Peninsula ó islas adyacentes desde 29 de Julio de 1837 hasta el dia.—Art. 2.º Todos los edificios, bienes raices, rentas, derechos y acciones de las casas de comunidad de ambos sexos suprimidas en el artículo anterior, pasarán á ser propiedad del Estado.—Art. 3.º Los religiosos y religiosas exclaustrados á consecuencia de las disposiciones anteriores, quedarán sujetos á los respectivos ordinarios y sin derecho alguno á percibir la pensión concedida á los que ingresaron en los conventos antes de la expresada fecha de 29 de Julio de 1837.—Art. 4.º Las religiosas cuyos conventos quedan suprimidos á consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1.º de este decreto, podrán ingresar en otros de su misma orden de los subsistentes, ó pedir su exclaustracion, reclamando la dote que llevaron al entrar en religion, de la persona ó establecimiento donde entrare.—Art. 5.º Todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y demás casas religiosas que quedaron subsistentes por la ley de 29 de Julio de 1837, se reducirán en cada provincia á la mitad, y los gobernadores civiles, oyendo á los diocesanos, designarán en el término de un mes, contado desde la publicacion de este decreto, los que hayan de conservarse; prefiriendo aquellos que tengan algun mérito artístico, y trasladando las religiosas de los que se supriman á otros de la misma orden.—Art. 6.º Se prohíbe en todos los monasterios y conventos la admision de novicias y profesion de las que hoy existan, aunque hayan ingresado con el carácter de organistas, cantoras ó cualquiera otra denominacion.—Art. 7.º Las religiosas profesas que, en virtud del presente decreto, pueden continuar en sus conventos, monasterios, etc., tendrán la facultad de solicitar su exclaustracion en cualquier tiempo, acudiendo al gobernador civil, que la acordará desde luego, dando conocimiento al diocesano.—Art. 8.º Las religiosas cuya profesion fuere anterior á la citada ley de 29 de Julio de 1837, tendrán derecho á la pensión de 5 reales, señalada en el art. 29 de la misma; pero las de entrada posterior sólo lo tendrán á reclamar sus dotes en la forma prevenida en el art. 4.º del presente decreto.—Art. 9.º Las hermanas de la Caridad, de San Vicente de Paul, de Santa Isabel, las de Doctrina cristiana y las demás conocidas con cualquier otra denominacion, que hoy están dedicadas á la enseñanza y beneficencia, se conservarán, quedando sujetas des-

de la publicación de este decreto á la jurisdicción del ordinario, en cuya diócesis residan.—Madrid 18 de Octubre de 1868.—El ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz.

DECRETO.

En uso de las facultades que me competen como individuo del gobierno provisional y ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de ministros, vengo en decretar:—Quedan disueltas desde esta fecha las asociaciones conocidas con el nombre de conferencias de San Vicente de Paul. Los gobernadores civiles procederán á incautarse de los libros, papeles y fondos que, siendo propiedad de las mismas, existan en poder de sus presidentes, secretarios ó de cualquiera otra persona. Madrid 19 de Octubre de 1868.—El ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz.

Eleccion episcopal.

¿Qué se entiende por eleccion episcopal?—El nombramiento de una persona idónea, hecho conómicamente para una iglesia episcopal vacante.

¿A qué circunstancias se debe atender en la eleccion de obispos para que sea conónica?—A cuatro: 1.^a, persona á quien corresponda el derecho de elegir; 2.^a, forma y solemnidades de eleccion; 3.^a, cualidades del elegido, y 4.^a, estado de la iglesia para que se hace la eleccion.

¿A quién ha correspondido y corresponde en la actualidad el derecho de elegir?—A distintas personas, segun la disciplina de la Iglesia, que al efecto puede dividirse en seis épocas.

¿Cuál fué la establecida en las dos primeras?—El clero y pueblo de la iglesia vacante designaba el que habia de ocuparla, y el concilio provincial examinaba el acto de la eleccion y las cualidades del elegido, para confirmarlo y ordenarlo, si lo hallaba idóneo. Pero en el siglo iv y siguientes se modificó esta disciplina, autorizando al metropolitano para nombrar un obispo *visitador* que interinamente se encargase de la administracion de la iglesia vacante y dirigiese los ánimos del clero y pueblo para una buena eleccion. Algunos obispos, por disciplina que tan sólo puede considerarse como excepcional, hicieron con su clero y pueblo la eleccion del que les habia de suceder.

¿Cuál fué la disciplina sobre este punto en la tercera época?—Los príncipes, usurpando ó usando los derechos electorales del clero y pueblo, comenzaron á nombrar desde el siglo ix á los que habian de ascender á la cátedra episcopal, confiéndoles la investidura por medio de la entrega del báculo y del anillo, á pretexto de que á los obispados estaban unidos feudos, cuya provision les correspondia. Resultaron de aquí grandes disturbios en el siglo xi entre la Iglesia y el Estado, y aun guerras que perturbaban la Europa, hasta que en el Concilio I de Letrán, año de 1123, en tiempo de Calixto II, la iglesia recobró la libertad de sus elecciones, conservando los príncipes la investidura por medio del cetro, en señal de concesion de los feudos unidos á los obispados.

¿Cuál fué la disciplina de la cuarta época?—Desde los últimos años del siglo xii el derecho de elegir quedó reservado á los cabildos catedrales, cuyos miembros lo ejercian, con excepcion de los que estuviesen *suspensos*, *excomulgados* ó *entredichos*, y los ausentes, que no podian votar sino por medio de procurador que fuese del seno del cabildo.

¿En qué formas verificaban los cabildos la elección?—En tres indistintamente: por *escrutinio*, por *compromiso* ó por *cuasi inspiración divina*. El primero era el modo más común. Se nombraban tres individuos del cabildo escrutadores, que después de votar ellos por escrito recogían secretamente y de palabra los votos de sus colegas, proclamando después el resultado de la elección, y como elegido al que hubiese sido favorecido con la mayor y más sana parte de los votos, con lo cual se hacía ya irrevocable la elección. Tenía lugar el compromiso cuando el cabildo delegaba su derecho electoral en una ó más personas de su seno ó fuera de él, facultándoles más ó menos ampliamente para hacer por aquella vez la elección, siempre con sujeción á las prescripciones del derecho común. Se acudía á esta forma cuando por las discordias intestinas del cabildo sobre designación del candidato no era posible llevar los ánimos á un acuerdo. Por cuasi inspiración se verificaba la elección cuando, sin haberse puesto antes de acuerdo con los electores, proclamaban repentinamente y á una voz al que querían elegir, como si fuesen movidos para ello por el Espíritu Santo.

¿En qué tiempo y lugar había el cabildo de hacer la elección?—En cuanto al tiempo, después de dar la sepultura al prelado difunto, dentro de los tres meses siguientes al día en que hubiese tenido noticia de la muerte de aquél, pasando en otro caso el derecho de elegir por aquella vez al superior inmediato, salvo el caso de un impedimento legítimo que hubiese tenido el cabildo. En cuanto á lugar, debía hacerse la elección en la iglesia ó sitio acostumbrado para estos actos, después de convocar, no solamente á los presentes, sino también á los ausentes, dentro de la provincia á los unos, y los otros en la forma acostumbrada en estos casos. No se contaban para la elección los votos condicionales, alternativos ó inciertos.

¿Qué se entendía por *postulación*?—La elección de un individuo que tenía algún impedimento; pero dispensable, para ascender á la cátedra episcopal. La postulación, para ser válida, había de ser hecha por las dos terceras partes del cabildo, y el impedimento del elegido había de ser de los que acostumbra á dispensar la Silla apostólica; pues siendo indispensable, la postulación sería nula, y los que la hiciesen perderían por aquella vez el derecho de elegir.

¿Qué cualidades había de tener el elegido?—De dos clases: positivas y negativas. Las primeras eran: edad de treinta años; ser hijo de legítimo matrimonio y de buena vida y costumbres, tener grado mayor académico en teología ó cánones, ó testimonio de establecimiento científico que acreditase su idoneidad para enseñar á otros y, por último, haber recibido orden sacro seis meses antes de la elección. Las negativas eran: no estar suspendido, entredicho ó excomulgado, no ser hereje ni cismático, ni irregular por delito ó por defecto.

¿Cuál fué la disciplina de la quinta época?—La de las reservas pontificias, introducidas desde el pontificado de Clemente IV, en la segunda mitad del siglo xiii. Según ellas, el Romano Pontífice era el que elegía á los que habían de ascender á la cátedra episcopal. Fué introduciéndose esta reserva lentamente, habiendo llegado á su apogeo en los siglos xiv y xv.

¿Cuál fué la disciplina eclesiástica de la sexta época?—La en virtud de la que los monarcas, ya por medio de concordatos, ya por el de concesiones especiales de la Silla apostólica, adquirieron ó consolidaron el derecho de presentar, para las sillas episcopales de sus reinos, los que las habían de ocupar al Romano Pontífice, que conservó el derecho de confirmarlos.

¿Cuál fué la disciplina especial de la Iglesia de España sobre la elección episcopal?—Hasta el Concilio XII de Toledo no se distinguió la disci-

plina española de la general de la Iglesia. Desde este concilio los monarcas visigodos adquirieron el derecho de elegir á los obispos, que confirmaba el primado de Toledo. Despues de la invasion árabe no hubo una disciplina clara y definida hasta el siglo XIV; porque unas veces eran el clero y pueblo de la iglesia vacante los que elegian, y otras eran los monarcas de la restauracion. Desde el siglo XIV se introdujeron en España las reservas, hasta el siglo XVI, en que Adriano VI confirmó á favor de la corona de España el derecho de presentar para todas las iglesias episcopales de estos reinos, que volvió á ser sancionado en 1753, en el concordato celebrado entre Benedicto XIV y Fernando VI, ampliando el patronato real á todos los demás beneficios menores que habian sido hasta entonces de provision apostólica, con la sola excepcion de cincuenta y dos en dicho convenio señalados.

De la confirmacion de los obispos.

¿Qué se entiende por confirmacion episcopal?—La concesion del obispado hecha por autoridad competente, en virtud de la cual se constituye el elegido jefe y pastor de la Iglesia.

¿Qué requisitos deben preceder á la confirmacion?—1.º, la aceptacion de la eleccion por el elegido, dentro del mes siguiente al dia en que se le haya hecho saber, y la peticion del mismo de la confirmacion, dentro de los tres meses siguientes á su aceptacion; 2.º, el detenido examen de las cualidades del elegido, de las solemnidades de la eleccion y del estado de la iglesia para la que se haya hecho.

¿Cuáles son los efectos de la confirmacion?—En los once primeros siglos iba unida á la ordenacion; así es que ella por sí sola no producía efecto alguno. Desde el siglo XI, por la confirmacion el elegido se hace pastor de la Iglesia, adquiere jurisdiccion episcopal, puede usar las insignias y privilegios de su cargo, y administra los bienes de su iglesia; de suerte que el único efecto que queda reservado á la consagracion es el carácter episcopal y la potestad de órden.

¿A quién correspondió el derecho de confirmacion en los doce primeros siglos?—Al metropolitano. Al principio en union con los obispos com-provinciales, y despues él solo, y esto bien correspondiese la eleccion al clero y pueblo, bien al monarca, bien al cabildo catedral.

¿A quién correspondió desde el siglo XII?—Al Romano Pontífice, si bien con distinto carácter. Hasta el siglo XV la confirmacion estuvo unida en la Silla apostólica á la eleccion, porque, correspondiendo ésta al Romano Pontífice, no habia él de confirmar sus propios actos. Desde dicho siglo, en que los reyes comenzaron á ejercer el derecho de presentacion, correspondió solamente la confirmacion al Pontífice, y ya no la eleccion.

¿En qué forma se acreditan las cualidades del elegido y el estado de la iglesia vacante como requisito previo á la confirmacion?—Por la instruccion de los expedientes de *vita et moribus* y de *statu Ecclesiæ*, que deben instruir los legados ó nuncios, en su defecto el ordinario del presentado, y á falta de éste el obispo más próximo, observando las formalidades prevenidas en las bulas de Gregorio XIV y Urbano VIII.

¿Qué es preconizacion?—La relacion que cuatro cardenales deben hacer en consistorio al Pontífice, *sub periculo salutis æternæ et adhibita accurata diligentia*, de las cualidades del elegido ó presentado.

¿Qué se entiende por proposicion?—La votacion favorable al presentado hecha por los cardenales en un segundo consistorio, con vista de la cuál pronuncia el Romano Pontífice la fórmula solemne de la confirmacion.

¿En qué pena incurren los presentados que antes de su confirmacion se mezclan en la administracion de su diócesis?—En la pérdida de todos los derechos adquiridos por la eleccion, á no ser que hubiesen sido elegidos para una iglesia constituida fuera de Italia por unanimidad ó *in concordiam*, y correspondiese su confirmacion al Pontífice, los cuales pueden administrar desde luego espiritual y temporalmente su diócesis, con la sola prohibicion de no enajenar sus bienes.

De la consagracion, juramento y posesion episcopales.

¿Qué se entiende por consagracion?—La solemne ceremonia hecha con arreglo á la liturgia de la Iglesia, por la cual el obispo confirmado adquiere el carácter y la potestad de orden episcopal.

¿A quién correspondia hasta el siglo xii el derecho de consagrar á los obispos?—Al metropolitano propio, con asistencia de los obispos comprowinciales, ó á lo ménos con la de dos ó tres, consintiendo los demás por escrito si por necesidad urgente, ó demasiada distancia, no pudiesen concurrir. Los metropolitanos eran consagrados, bien por el patriarca, si estaban á él sujetos, bien por los demás obispos comprowinciales en otro caso.

¿A quién corresponde desde el siglo xii el derecho de consagracion?—Al Romano Pontífice, que acostumbra á ejercerlo por medio de cualquiera obispo católico, á quien faculta para ello, y que ha de hacer la consagracion con otros dos obispos como asistentes, y en domingo ó día de apóstol, y en su propia iglesia ó á lo ménos en una de su provincia.

¿Qué obligacion especial tienen los obispos ántes de ser consagrados?—La de prestar juramento de obediencia al Romano Pontífice. Hasta el siglo xi no hacian más que una *promesa de obediencia canónica* al consagrante. Desde este siglo la promesa comenzó á solemnizarse con juramento, y no fué ya de obediencia canónica al consagrante, sino de fidelidad al Pontífice, especificada en los siete artículos establecidos por Gregorio VII, á los que despues añadió algunos Clemente VIII.

¿Qué juramento especial tienen que prestar los obispos en España?—Desde el tiempo de los Reyes Católicos tenian que jurar al recibir las *suplicas* para Su Santidad que no recaudarian no consentirian que otros recaudasen las alcabalas y derechos reales en las ciudades, villas y lugares de su diócesis sin licencia de la Corona. Felipe IV añadió á esta cláusula, respecto á los presentados para las iglesias de Ultramar, la de no usurpar el real patronato. En la segunda mitad del siglo xviii se substituyó este juramento por otro de fidelidad al monarca y obediencia á las leyes, que es el que hoy está vigente.

¿Qué es posesion episcopal?—El acto solemne en que el cabildo entrega la iglesia al obispo confirmado ó á su procurador con poder especial. Hasta entónces no puede el obispo por la disciplina particular de España ejercer su jurisdiccion. De la posesion debe remitirse testimonio, por ante notario, al ministro de Gracia y Justicia.

De la eleccion pontificia.

¿Cuál fué la disciplina vigente sobre este punto en los doce primeros siglos?—Correspondia la eleccion al clero y pueblo romanos, si bien desde

el siglo vi había que pagar un tributo á los reyes lombardos, y despues á los emperadores de Constantinopla, para que confirmasen ó consintiesen la eleccion hecha, cuya vejacion remitió para siempre Constantino Pogonato con motivo de la eleccion del Papa Agaton. Por más que de derecho el poder temporal no intervenia en la eleccion, se procuraba elegir á uno que le fuese aceptable.

¿Cuál fué y es la disciplina vigente desde el siglo xii?—Quedó la eleccion reservada al colegio de cardenales, empezando esta disciplina en la eleccion de Inocencio II, habiendo sido establecida como derecho escrito en el concilio III de Letrán, en que se dispuso que sólo los cardenales fuesen los que eligiesen al Pontífice; que para que hubiese eleccion canónica era necesario que se reuniesen las dos terceras partes de los votos en un candidato, y que el elegido por menor número, aunque lo hubiese sido por mayoría, que aceptase el pontificado y los que le favoreciesen quedasen excomulgados.

¿Qué se dispuso en el concilio II de Lyon respecto á la eleccion pontificia?—1.º, que los cardenales presentes al fallecimiento del Pontífice hubiesen de aguardar á los ausentes durante diez dias; 2.º, que se encerrasen todos en el palacio en que hubiese fallecido el Pontífice, que es lo que se llama *cónclave*, cada uno sin llevar más acompañamiento que el de un familiar lego ó eclesiástico, ó cuando más dos si le fuesen necesarios; 3.º, que mientras no se verificase la eleccion viviesen todos en comunidad y no aisladamente, y sin estar separados los unos de los otros por pared alguna intermedia; 4.º, que no pudiesen tener comunicaciones con ninguna persona de afuera, ni recibir recados ni esquelas, bajo pena de excomunion; 5.º, que el que abandonase el cónclave, á no ser por causa de enfermedad, no pudiese volver á él; 6.º, que recibiesen los alimentos por un torno ó ventana al efecto, para evitar toda comunicacion exterior, y 7.º, que no haciendo la eleccion en los tres primeros dias no se les sirviese á la comida y cena más que un sólo manjar, y si no la hacian en los cinco siguientes se les sujetase á un régimen riguroso de pan y agua, entretanto que aquella no se efectuase.

¿Qué se entiende por *exclusiva*?—Un derecho puramente tradicional, de origen desconocido, que corresponde al emperador de Austria y á los reyes de España y Francia para excluir cada uno de ellos un cardenal de entre los elegibles, con tal que no se haya hecho todavía la eleccion.

¿Qué cualidades debe tener el elegido?—Las necesarias para el episcopado, sin ser preciso que sea cardenal, por más que la práctica de los últimos siglos reserva el pontificado á los individuos del colegio que son italianos.

De la ordenacion.

¿Qué elementos constituyen cada uno de los siete sacramentos de la Iglesia?—La *materia*, que es el signo exterior y sensible, y la *forma*, que son las palabras que pronuncia el ministro al aplicar la materia sobre el sugeto que va á recibir el sacramento.

¿De qué origen son la *materia* y la *forma* de los sacramentos?—De origen divino inmediato ó mediato, segun que hayan sido instituidas *in specie* ó *in genere* por el mismo Jesucristo.

¿Qué es sacramento del orden?—Uno de los siete instituidos por Jesucristo, y cuyo objeto es conferir la potestad sagrada á los ministros de la Iglesia.

¿Cuántos grados tiene el sacramento del orden?—Siete, á saber: presbítero, diaconado, subdiaconado, ostiariado, lectorado, exorcistado y aco-

litado. Los tres primeros son mayores é imponen la ley de continencia á los que lo reciben; los cuatro últimos son menores.

¿Cuál es la materia del sacramento del orden?—De los mayores parece ser la imposición de manos, si bien desde el siglo ix se añadió como parte integrante de la ordenación la entrega de los instrumentos simbólicos de la potestad propia de cada orden.

¿Cuál es la forma de este sacramento?—Se emplea una *deprecativa*, que parece ser la verdadera y esencial, y otra *indicativa*. Por la primera se pide á Dios su gracia y potestad para el ordenante. Por la segunda se le confiere esa misma potestad. Hasta el siglo x no se usó en la Iglesia latina de la forma indicativa. Las órdenes menores, como establecidas por la Iglesia, nunca tuvieron en la Iglesia latina la imposición de manos como materia, sino la entrega de instrumentos, y su forma fué siempre indicativa.

¿Cuáles son los efectos de la ordenación?—Conferir la *gracia*, santificando la potestad sagrada propia del orden, y el *carácter*, que es una nota espiritual é indeleble, impresa en el alma.

¿Qué efectos produce el carácter?—1.º, no poder reiterarse el orden recibido; 2.º, no perderse la potestad por ningún delito en que incurra el ordenado, ni por ninguna pena eclesiástica ó civil que se le imponga, y 3.º, quedar el ordenado adscrito perpétuamente al servicio de la Iglesia.

¿Cuáles son las cualidades de aptitud para recibir las órdenes?—Ser del sexo masculino, estar bautizado y confirmado, tener la edad y ciencias necesarias, no haber incurrido en irregularidad y tener vocación al estado eclesiástico.

Del ministro del sacramento del orden.

¿Quién es el ministro de este sacramento?—El obispo, porque: 1.º, según los actos apostólicos solamente lo administraron los apóstoles; 2.º, porque así consta por tradición; 3.º, porque la Iglesia declaró siempre nulas las ordenaciones hechas por otros ministros inferiores, y 4.º, porque así lo declararon varios concilios y señaladamente el de Trento como dogmático. Sin embargo de lo dicho, las órdenes menores pueden ser conferidas válidamente por los presbíteros en concepto de ministros extraordinarios si gozan de esta prerogativa por un título especial, v. gr.: los cardenales, presbíteros en sus títulos, muchos prelados exentos en sus territorios y los abades mitrados en sus monasterios.

Según la antigua disciplina, ¿quiénes se consideraban como obispos propios de los ordenandos para conferirles las órdenes?—Para conferir las primeras todos los obispos tenían aptitud, constándoles por las letras formadas ó por otro medio la idoneidad del ordenado. Mas, conferidas que fuesen las primeras, ya no podía conferir al clérigo las demás sino el obispo que le había conferido aquéllas, una vez que por este acto el clérigo había quedado adscrito con carácter de perpetuidad al servicio de su Iglesia.

¿Quién se reputaba obispo propio de la ordenación según la disciplina nueva?—El obispo de origen, ó sea el del territorio en que había nacido el ordenando; el del domicilio, ó sea el de en que había fijado su residencia; el del beneficio, ó sea el del en que radicaba el beneficio de que gozase el ordenando, y el de familiaridad, ó sea el que tenía entre sus familiares el ordenando. Así se dispuso por Bonifacio VIII respecto á los tres primeros, introduciendo el uso la competencia del último; surgiendo de todo esto no pequeña perturbación, porque los cuatro obispos que eran propios por

los títulos dichos podían ordenar al mismo sugeto sin contar los unos con los otros.

¿Cuándo y cómo se corrigió esa perturbacion?—Primeramente el Concilio de Trento determinó que no se considerase como obispo *proprio* por *familiaridad* sino al que hubiese tenido al ordenando en su servicio privado durante tres años y le confírese un beneficio inmediatamente despues de la ordenacion, siendo, por lo tanto, necesario tambien que no fuese obispo meramente titular ó *in partibus*. Despues Inocencio XII, por su bula *Speculatores*, determinó que no se entendiese por obispo propio de origen el del territorio en que *fortuitamente* hubiese nacido el ordenando, reputándose en tal caso obispo propio de éste el que lo fuese de su padre; que tampoco fuese habido como obispo propio por razon de domicilio sino el del territorio en que el ordenando residiese diez años ó al que hubiese trasladado la mayor parte de sus bienes, teniendo en él casa abierta y una residencia por tiempo indeterminado bastante á hacer constar su ánimo de vivir allí constantemente, siendo preciso en cualquiera de los dos casos que además jurase ser ésta su voluntad y firme resolucion; respecto al obispo del beneficio, determinó igualmente que tan sólo se considerase como propio para la ordenacion si el beneficio estaba dotado con renta bastante para la congrua sustentacion del ordenando, y que cuando fuese este obispo el que le hubiese de imponer las manos se cerciorase antes de la buena vida y costumbres del ordenando por las *testimoniales* de los obispos de origen y domicilio.

¿Qué se entiende por *dimisorias*?—La facultad que por escrito dá el obispo propio al ordenando para que pueda serlo otro.

¿Qué clases hay de *dimisorias*?—Pueden serlo por tiempo limitado ó ilimitado, y para que cualquiera obispo, sin distincion, pueda imponer las manos al ordenando, ó para que tan sólo pueda hacerlo el que en ellas se designe.

¿Qué han de contener las *dimisorias*?—Además de la facultad dicha, el testimonio de la aptitud canónica en todos los conceptos, del ordenando.

¿Quién puede conceder las *dimisorias*?—El obispo confirmado, aunque no esté consagrado, con tal que, por lo que hace á España, haya tomado posesion, y el cabildo catedral en *sede vacante*, despues de trascurrido un año de la muerte del último prelado, á no ser que el ordenando sea *arredado*, ó sea poseedor de un beneficio que lleve anejo cierto orden, en cuyo caso para recibirlo, podrá concederle *dimisorias* desde luego.

¿Qué valor tienen las órdenes conferidas por los obispos que no tengan el ejercicio de su potestad, como lo son los herejes, cismáticos, depuestos, etc., si las confieren *cum intentione faciendi quod facit Ecclesia*?—Son válidas aunque ilícitas, habiendo fijado la doctrina sobre este punto Santo Tomás.

¿Qué se entiende por *intersticios*?—El tiempo que debe permanecer el ordenado en la orden que se le haya conferido antes de pasar á otra superior.

¿Cuál fué y es la disciplina de la Iglesia sobre la necesidad de los *intersticios*?—Conviniendo en el principio de que eran necesarios, fué varia, no obstante, hasta el Concilio de Trento en cuanto al tiempo de su duracion. En este concilio se determinó que entre una y otra orden de las mayores debe mediar á lo ménos un año; lo mismo que entre el subdiaconado y las menores, y que en la concesion de éstas tambien son necesarios los *intersticios*, á no ser que el obispo creyese conveniente otra cosa.

¿Qué se entiende por ordenaciones *per saltum*, y cuál fué la disciplina acerca de ellas?—Las de un orden superior sin haber recibido el inferior. En la disciplina antigua no parece que fuese necesaria esta gradacion religiosa en la concesion de las órdenes, porque se partía del principio de que

las superiores llevaban virtualmente incluidas las inferiores. En la disciplina actual esta gradacion es tan necesaria, que el que reciba un orden sin tener los anteriores ó alguno de ellos, incurre en irregularidad, de la cual podrá dispensarle el obispo si suple la orden omitida y por otra parte no ha ejercido todavía la recibida *per saltum*, correspondiendo en otro caso la dispensa al Pontífice.

¿Qué se entiende por *témporas*?—Los dias señalados por la Iglesia para administrar el sacramento del orden, que son el sábado anterior á cada una de las cuatro estaciones, y además el de Pasion y el Santo. Fueron señalados estos dias porque en ellos los fieles se dedicaban al ayuno y á la oracion, y de esa manera pedian tambien á Dios que concediese á su Iglesia buenos ministros, y además porque los apóstoles ordenaron *orantes et jejunantes*. El obispo que ordene *extra témporas* sin dispensa del Pontífice, incurre en la pena de privacion del ejercicio de la potestad de ordenar, y el así ordenado en la de suspension en el orden recibido.

Del título de la ordenacion.

¿Qué se entiende por título de ordenacion?—La adscripcion del ordenado á una iglesia para desempeñar en ella perpétuamente su ministerio; siendo, por consiguiente, absolutamente necesaria esta adscripcion, dada la índole del ministerio eclesiástico, porque no se concibe en la Iglesia la existencia de un clérigo sin oficio espiritual que desempeñar.

¿Cuáles eran los efectos del título de la ordenacion?—1.º, el servicio perpétuo del clérigo á la iglesia á que habia sido adscrito; 2.º, la residencia constante y laboriosa del mismo en ella para desempeñar su ministerio; 3.º, la imposibilidad de adscribirse en otra iglesia subsistiendo el vínculo de la primera y no obteniendo, por consiguiente, antes dimisorias de su propio obispo rebajándolo; 4.º, el derecho de no poder ser separado del servicio de la iglesia de su adscripcion sin formacion de causa, y 5.º, el de percibir de los bienes de la misma iglesia lo necesario para su sustento.

¿En qué estado cayó en el siglo *xii* la disciplina relativa á la necesidad del título de ordenacion?—Por la separacion que se introdujo entre la ordenacion y la colacion de beneficios, comenzaron muchos obispos á conferir las órdenes á clérigos que no tenian beneficio propio con que atender á su subsistencia. De esto resultó un gran número de clérigos vagos que andaban de iglesia en iglesia, sin residir en ninguna, y que se dedicaban á oficios indignos del ministerio eclesiástico para procurarse su alimento; por lo que el Concilio III de Letrán dispuso que el obispo que ordenase á un clérigo que no tuviese beneficio y no se lo confriese, estuviese en la obligacion de mantenerlo entretanto de su cuenta, á no ser que el así ordenado tuviese bienes propios con que subsistir.

¿Qué se entiende por patrimonio como título de ordenacion?—El caudal de bienes propios del ordenado bastante para su congrua sustentacion, á lo cual se destinan de un modo solemne.

¿Cuál fué el origen del título de patrimonio?—El cánón mencionado del Concilio III de Letrán, en cuanto por él se eximia al obispo de alimentar de su cuenta al ordenado sin beneficio, en el caso en que éste tuviese bienes propios con que subsistir.

¿Cuál es el carácter de este título, segun el Concilio de Trento?—Es extraordinario en cuanto al obispo; por él no puede ordenar á ningun clérigo, á no ser por necesidad ó utilidad de la Iglesia; y aún en tal caso el así ordenado habrá de ser adscrito al servicio de una iglesia dada, además de

que el patrimonio ha de consistir en bienes bastantes para la alimentacion del clérigo, segun cada una de las diócesis, y ha de ser constituido por escritura pública, para que conste de un modo cierto que los bienes en que consiste quedan fuera del comercio mientras el clérigo no tenga beneficio propio con que subsistir.

¿Con qué penas se castigan las ordenaciones sin título?—Desde el Concilio de Trento, segun la opinion más probable, si proceden de negligencia del obispo, incurre éste en la establecida en el cánón del Concilio III de Letrán mencionado, y si de mala fé del ordenado, éste queda suspenso en el ejercicio de la órden recibida.

¿Qué se entiende por obispos titulares ó *in partibus*?—Los ordenados á título de una iglesia que no pueden gobernar por no tener fieles.

¿Qué razones excusan, segun algunos canonistas, las ordenaciones de obispos titulares ó *in partibus*?—Las siguientes, todas ellas muy débiles: 1.^a, la conveniencia de conservar vivo, en cierto modo, el recuerdo de iglesias que florecieron en otros tiempos y que no existen en la actualidad; 2.^a, la necesidad de los coadjutores con carácter episcopal, ya cuando la diócesis es muy extensa, ya cuando el obispo propio se halla imposibilitado de regirla por sí mismo, y 3.^a, la necesidad que tiene el Romano Pontífice de auxiliars con carácter episcopal, para el régimen y gobierno de toda la Iglesia.

De las irregularidades.

¿Qué se entiende por *irregularidad*?—Un impedimento canónico perpetuo, establecido por la Iglesia, que impide recibir lícitamente las órdenes, ó ejercerlas despues de recibidas.

¿Cuál es el fundamento de las irregularidades?—La dignidad del ministerio cristiano y el conjunto de condiciones que son necesarias para ejercerlo con fruto.

¿Cuáles son las fuentes de las irregularidades?—El delito y el defecto; entendiéndose por tal la falta de *lenidad*, la de *ciencia*, la de *edad*, la *bigamia*, la falta de *legitimidad*, la de *reputacion*, la de *libertad*, el *defecto corporal* y la falta de *fé*, segura y firme, que se suponía tenían los *neófitos* y los clínicos.

¿Qué delitos producian irregularidad segun la disciplina antigua?—Los graves, bien fuesen civiles ó eclesiásticos, ya públicos, ya secretos, con tal que los que los cometiesen incurriesen, por las leyes de la Iglesia, en penitencia pública. La irregularidad continuaba aún despues de expiado el delito por la penitencia.

¿Qué modificaciones experimentó esta disciplina en las Decretales?—Se determinó, por regla general, que no se incurriese en irregularidad sino en los casos expresos en el derecho; que tan sólo la produjesen los delitos públicos, ya civiles, ya eclesiásticos, que por las leyes de la Iglesia ó del Estado, segun los casos, produjesen infamia; que igualmente produjese irregularidad la penitencia pública impuesta por la iglesia, y las penas infamantes impuestas por sentencia judicial, y, por último, que solamente produjesen irregularidad los delitos ocultos siguientes: 1.^o, la reiteracion del bautismo respecto del que lo reciba, del que lo administre y de los clérigos asistentes; 2.^o, la recepcion de las órdenes *per saltum*; 3.^o, el ejercicio de funciones propias de un órden que no se hubiese recibido; 4.^o, el ejercicio de un órden violado, la excomunion mayor, la suspension y el entredicho personal ó local, y 5.^o, el homicidio ó mutilacion voluntaria.

¿Qué clases hay de homicidio para el efecto de la irregularidad?—Tres,

á saber: *voluntario, casual y necesario*. El primero se comete con intencion; el segundo se comete practicando una cosa ilícita, aunque sin intencion de matar, y el tercero se comete en justa defensa. El homicidio de las dos primeras clases produce siempre irregularidad; el de la tercera la produce tan sólo cuando el homicida ha excedido los límites de la justa defensa. La intencion de matar, á la que no haya seguido mediata ó inmediatamente la muerte, no produce irregularidad.

¿En qué casos produce la mutilacion?—En los mismos que el homicidio con tal que haya tenido por objeto algun miembro que desempeñe funciones especiales é importantes en el cuerpo humano.

¿Quiénes se consideran irregulares por defecto de lenidad ó manse-dumbre?—Los jueces en las causas criminales, con tal que de ellas se haya seguido la muerte ó mutilacion del culpable; los militares que en el campo de batalla hayan cometido alguna muerte y todos los que de cualquier manera; v. gr., en concepto de acusadores, testigos, escribanos ó verdugos, contribuyen al derramamiento de sangre, con las siguientes excepciones: los obispos que tenían el mero y mixto imperio como señores feudales, si lo delegaban en jueces legos para las causas de sangre; los clérigos que por injurias personales acusen al lego, si protestan al hacerlo que no es su intencion que se imponga al delincuente pena de sangre; los obispos que entregan á un clérigo al brazo secular para que sea castigado, con tal que al hacerlo pidan al magistrado que no le imponga pena de sangre.

¿Quiénes son irregulares por defecto de ciencia?—Los que no tienen los conocimientos necesarios para desempeñar el orden ó beneficio que se les haya de conferir.

¿Quiénes lo son por defecto de edad?—Los que no tienen los siete años cumplidos para la primera tonsura y órdenes menores, y veintidos, veintitres y veinticinco, inceptos para el subdiaconado, diaconado y presbiterado, segun el decreto del Concilio Tridentino.

¿Qué se entiende por irregularidad de *bigamia*?—La segunda union conyugal de un hombre despues de legitimamente disuelto el primer matrimonio, ó la union de un hombre con una viuda ó mujer prostituida, ó, finalmente, el matrimonio contraido por un religioso profeso ó clérigo de orden sacro. La primera se llama bigamia propiamente dicha, la segunda *bigamia interpretativa*.

¿Quiénes son irregulares por defecto de legitimidad?—Los nacidos de union ilegítima. Hasta el siglo xmo se conoció esta irregularidad y aún hoy es fácilmente dispensable.

¿Quiénes son irregulares por falta de reputacion?—Los que hayan ejercido algun oficio ó profesion que la opinion tenga por vil ó infamante y los hijos ó nietos de herejes declarados tales que hayan muerto en la herejía.

¿Quiénes son irregulares por falta de libertad?—Los siervos, á no prestar sus dueños el consentimiento para que se ordenen; los guardadores de menores, administradores de bienes ajenos y empleados que hayan desempeñado algun destino público por el que tengan que rendir cuentas, entretanto que esto no se verifique, y los casados que no obtengan para ordenarse el consentimiento de sus mujeres, en cuyo caso éstas tendrán que hacer voto solemne ó simple de castidad perpétua, por más que continúen viviendo en el siglo, si, atendiendo á su edad y circunstancias, el obispo las autoriza para ello.

¿Quiénes se consideran irregulares por defecto de cuerpo?—Los que padecen alguno que les impida ejercer el ministerio digna y decorosamente, ó les haga aparecer ridiculos ó despreciables ó repugnantes á la vista de los demás.

¿De qué modos terminan las irregularidades?—Algunas, como la falta de ciencia y otras que imposibilitan absolutamente para el ministerio ecle-

siástico, no desaparecen sino con las causas que las producen; las demás se extinguen por dispensa.

¿Quiénes pueden dispensar las irregularidades?—Los obispos en las que proceden de delito oculto, excepto el homicidio voluntario, y en la de defecto de legitimidad, si bien su dispensa habilita solamente al dispensado para las órdenes menores y beneficios simples. En todas las demás solamente dispensa el Pontífice.

¿En qué se distingue la irregularidad de la *censura*?—En que ésta tan sólo procede por delito, al paso que la primera también por defecto; la censura puede ser temporal, la irregularidad por su naturaleza es perpétua. La censura se extingue por la absolución; la irregularidad por la dispensa. La censura procede de la ley ó de la autoridad del juez; la irregularidad tan sólo de la ley. La censura supone siempre malicia en el delincuente; en la irregularidad se incurre aun por ignorancia. La censura no puede proceder de delito oculto; la irregularidad sí. La censura es impuesta por sentencia; en la irregularidad se incurre *ipso facto*. La censura admite grados; la irregularidad es indivisible.

Del celibato eclesiástico.

¿Qué es celibato eclesiástico?—La imposibilidad que tienen los clérigos de orden *sacro* de contraer matrimonio ó de usar del contraído ántes de la ordenación.

¿De qué tiempo data el celibato eclesiástico?—Del siglo iv relativamente á los obispos, presbíteros y diáconos.

¿En qué se distinguió y distingue la disciplina oriental de la occidental sobre el celibato?—En que, según aquélla, pueden ser ordenados de diáconos y presbíteros los casados conservando el uso del matrimonio, como no sucede en Occidente.

¿En qué estado cayó la ley del celibato en los siglos medios en Occidente?—En tal relajación que los clérigos, no solamente vivían en concubinato, sino que contraían matrimonio, habiendo declarado nulos los concilios I y II de Letrán todos los por ellos contraídos.

¿Cuándo se impuso la ley del celibato á los subdiáconos?—En los dos siglos v y vi.

¿Qué efectos produce la ley del celibato respecto á los clérigos menores?—Que los que sean casados podrán ejercer su ministerio tan sólo en defecto de otros solteros, y aun en este caso será necesario que hayan contraído el matrimonio con mujer soltera y lleven además hábito y tonsura clerical. Así lo dispuso el Concilio de Trento, templando el rigor del derecho de decretales.

Negocios y ocupaciones seculares prohibidas á los clérigos.

¿Qué ocupaciones están prohibidas á los clérigos por razón de su estado?—1.º, el comercio, no entendiéndose por tal el cultivo de sus propias tierras y de las de sus beneficios y la venta de los frutos de las mismas y de los ganados que en ellas se alimentan; 2.º, la administración de los bienes ajenos y la representación en juicio ó fuera de él de las demás personas, excepto la de su iglesia ó prelado y la del monarca; 3.º, todo oficio que en la opinión pública se considere indecoroso, no comprendiéndose en esta calificación las artes mecánicas y liberales; 4.º, los cargos públicos,

excepto los que tengan por objeto la enseñanza ó la beneficencia; 5.º, la milicia, apesar de los abusos que en esto hubo en los siglos medios; 6.º, la caza *clamorosa*, entendiéndose por tal la que se hace con gran tumulto y aparato, especialmente para la muerte de reses mayores, y 7.º, la medicina y abogacia, salvo el caso de obtener dispensa pontificia para la primera, y además real para la segunda. Sin embargo, los clérigos que sean profesores en la ciencia de curar podrán ejercerla sin dispensa en caso de necesidad, así como los que sean abogados podrán también sin ella defender á los pobres, á sus iglesias y á sí mismos, y en caso de necesidad á sus parientes.

De las cosas eclesiásticas.

¿Qué son cosas eclesiásticas?—Todo lo que puede ser ó es objeto de santificación ó piedad cristiana.

¿Cómo se dividen las cosas eclesiásticas?—En espirituales y corporales. Las primeras tienden directa é inmediatamente á la santificación del individuo. Las segundas contribuyen también á ella, pero indirectamente.

¿Cómo se subdividen las cosas eclesiásticas corporales?—En *sagradas, religiosas y temporales*. Las primeras son las que están consagradas á Dios. Las segundas lo están en sí mismas al servicio de la Iglesia por medio de la bendición de que fueron objeto; v. gr., los cementerios y monasterios. Las terceras lo están más ó menos inmediatamente en los frutos que producen; v. gr.: los bienes destinados á los gastos del culto ó de sus ministros.

Del matrimonio canónico (1).

¿Qué es matrimonio?—La union legítima y perpétua del varon y de la mujer, elevada por Jesucristo en la Iglesia católica á la dignidad de sacramento para la procreacion, educacion de los hijos y mútuo auxilio de los cónyuges.

¿Cuáles son los fines del matrimonio?—Tres, á saber: la procreacion, la educacion de la prole y el mútuo auxilio que se deben los cónyuges para todas las atenciones de la vida.

¿Qué clases hay de matrimonio?—*Legítimo, rato y consumado*. El primero es el que se celebra, segun la ley civil, en los países en que no se observa la ley canónica; el segundo el que, celebrado con arreglo á ésta, no se ha consumado todavía por la union carnal de los cónyuges posterior á su celebracion, y *consumado* cuando esto ha sucedido. Se divide también el matrimonio en *verdadero, presunto y putativo*. El primero es el celebrado por personas legítimas y con las solemnidades establecidas por la Iglesia; el segundo el que por una presuncion de derecho se considera celebrado, por más que en realidad no lo haya sido; v. gr., el de los esposos que despues de otorgados los esponsales se habian unido carnalmente. El Concilio de Trento derogó la fuerza de esta presuncion, establecida por las Decretales. El *putativo* es el celebrado con todas las solemnidades de la Iglesia, pero mediando un impedimento dirimente entre los contrayentes,

(1) En la seccion de *Derecho civil*, pág. 57, hemos tratado del matrimonio civil y de sus efectos.

que ignoran ambos, ó á lo ménos uno de ellos. Sus efectos, segun las leyes eclesiásticas, son los del matrimonio verdadero. Se divide igualmente el matrimonio en *público* y *de conciencia*, siendo el primero el celebrado con todas las solemnidades anteriores y simultáneas al acto de su celebracion.

¿Qué se entiende por matrimonio de conciencia?—El que sin preceder las proclamas se celebra en secreto ante el párroco ó el obispo y dos testigos, con el fin de que permanezca oculto hasta que, cesando la causa que haya dado motivo al secreto, se le dé la debida publicidad.

¿Qué dispuso Benedicto XIV acerca del matrimonio de conciencia?—Que no se permitiese su celebracion sino por una causa muy grave; que el obispo hubiese de autorizarla previamente, y que se hiciese constar insertando su correspondiente partida en un libro especial que, cerrado y sellado, habia de conservarse en la cámara episcopal.

¿Qué caracteres jurídicos tiene el matrimonio?—Los de contrato y sacramento. La ley civil vigente lo considera y regula sólo como contrato.

¿Cuál es su base y su fundamento?—El consentimiento de los contrayentes, que puede manifestarse por palabras claras y terminantes, ó por señales naturales ó arbitrarias cuando la significacion de éstas está fijada por el derecho ó por las costumbres de los respectivos lugares; tambien puede manifestarse el consentimiento por escrito, ó por medio de procurador con poder especial.

¿Qué causas se oponen al consentimiento?—El error, la fuerza y el miedo.

¿Qué circunstancias ha de tener el primero para que vicie el consentimiento?—Que recaiga sobre la persona, ó sobre una cualidad tan esencial que conste sin ningun género de duda que sin ella el contrayente no celebraria el matrimonio.

¿En qué se distingue la fuerza del miedo?—En que la primera es una causa exterior que apremia al individuo, determinándole á obrar independientemente de la voluntad; y el miedo es la coaccion que ejerce sobre el entendimiento el peligro de un mal próximo ó remoto.

¿Qué diferencia hay en los efectos de la fuerza y del miedo, respecto al consentimiento?—La primera lo vicia de tal manera que el matrimonio celebrado con ella es nulo; el segundo lo anula tan sólo en el caso de que sea grave y no proceda de una causa natural ó legítima, entendiéndose por miedo grave el que *cae en varon constante*, segun la frase de los moralistas.

¿Puede celebrarse el matrimonio condicionalmente? La opinion afirmativa es la más general, si bien no están conformes los prácticos en determinar los efectos de la condicion. La que se opone á la naturaleza y fines esenciales del matrimonio convienen todos en que lo anula; las demás condiciones, aunque sean inmorales ó imposibles, no lo anulan, sino que se tienen como no puestas. Sin embargo, creen algunos que el matrimonio condicionado no vale sino como esponsales mientras que la condicion no se cumple; otros creen que es verdadero y eficaz cumpliéndose la condicion, sin necesidad de que se preste nuevo consentimiento; y otros, en fin, sostienen que habrá de renovarse el consentimiento tan pronto se cumpla la condicion, especialmente si ha trascurrido mucho tiempo entre este cumplimiento y la celebracion del matrimonio. En la práctica no se acostumbra á celebrar matrimonios con condicion.

¿Cuál es la *materia*, *forma* y *ministro* del sacramento del matrimonio?—Hay diversidad de opiniones en este punto. Unos creen que la *materia* son los mismos contrayentes; y la *forma*, las palabras que emplean para manifestar el consentimiento; otros dicen que el mismo consentimiento mútuo es la *materia* y la *forma*: la *materia* en cuanto es determinado, y la *forma* en cuanto determina. Melchor Cano sostiene que la *materia* es el contrato, y la *forma* la bendicion nupcial. En cuanto al *ministro*, en las dos primeras

opiniones son los mismos contrayentes; en la del teólogo citado es el sacerdote.

De los impedimentos del matrimonio.

¿Qué son impedimentos?—Las condiciones negativas de los contrayentes que se oponen á la celebracion del matrimonio.

¿De qué clases son los impedimentos?—*Dirimentes é impedientes*. Los primeros invalidan el matrimonio. Los segundos se oponen á su celebracion y lo hacen ilícito si lo celebran, pero no lo anulan.

¿Quién puede establecer impedimentos dirimentes?—La Iglesia, segun lo declaró el Concilio de Trento, y los principes en aquellos países en que la legislacion eclesiástica matrimonial no tiene carácter civil, si bien los establecidos por la Iglesia afectarán al sacramento, y los que establezcan los principes al contrato.

¿Cuáles son las fuentes de los impedimentos dirimentes establecidos en la actualidad?—La falta de consentimiento, la impotencia, el parentesco, la existencia de matrimonio anterior, el voto solemne de castidad, la condicion de persona, la disparidad de cultos y la falta de algunos de los requisitos en el acto de la celebracion, establecidos como indispensables por el Concilio de Trento.

¿Qué impedimentos proceden de la falta de consentimiento?—El error, fuerza y miedo, de que ya se ha hablado; el rapto y la demencia.

¿Qué se entiende por *rapto*?—El robo violento de una persona á un lugar en que esté bajo el poder del raptor, con el fin de contraer matrimonio *vel libidinis causa*.

¿Qué clases hay de rapto?—Dos: de *violencia* y de *seduccion*, segun que la persona robada asienta ó se oponga á su rapto.

¿Qué circunstancias ha de tener el rapto con seduccion para que se reputa tal?—Que la persona robada sea de menor edad y honesta.

¿Hasta cuándo el rapto es impedimento dirimente entre el raptor y la robada?—Hasta que la robada deja de estar en poder del raptor, y puede, por lo tanto, manifestar libremente su consentimiento.

¿Qué clases hay de demencia para los efectos de la validez del matrimonio?—*Perpétua y periódica*. La primera es una causa absoluta de nulidad del matrimonio del demente; no así la segunda, porque anula tan sólo el matrimonio celebrado en los momentos en que la esté padeciendo uno de los contrayentes, pero no el que haya celebrado en intervalo lúcido.

¿Qué impedimentos proceden de la impotencia?—La falta de edad y la impotencia propiamente dicha.

¿Hasta qué edad no puede contraerse matrimonio?—Hasta los catorce años los varones y doce las hembras, *nisi malitia suppleat aetatem*; esto es, á no ser que el desarrollo físico se haya adelantado á la edad, en cuyo caso será necesaria la autorizacion especial del obispo para la celebracion del matrimonio.

¿Qué es impotencia y cuántas sus clases?—La incapacidad para consumir el matrimonio. Puede ser *perpétua, temporal, natural, accidental, absoluta y respectiva*. Anula tan sólo el matrimonio la *perpétua* anterior á la celebracion.

¿Por qué medios debe hacerse constar la impotencia?—Por el reconocimiento de médicos y mañonas, y por las señales que pueden ser manifestas, verosímiles y dudosas. Cuando son manifestas se declara desde luego la impotencia, y por consiguiente la nulidad del matrimonio. Si son verosímiles se puede decretar el divorcio, con tal que juren antes los cónyuges que no han podido consumir el matrimonio, y siete parientes de los

(1) *Heror, condicio, votum, cognacio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo ligamen honestas, si ita finis, si forte crine nequit, raptus ut mulier, nec loco relicta, si paragonit du- phia, sent presentia testis*

mismos, y en su defecto siete testigos ó dos cuando ménos abonen tambien con juramento la veracidad de los consortes. Si son dudosas, se les concede el plazo de tres años para consumir el matrimonio, y no pudiendo hacerlo en él, se declara su nulidad.

¿Qué clases de parentesco se conocen para los efectos de la validez del matrimonio?—De consanguinidad, de afinidad civil, espiritual y de pública honestidad.

¿Qué es parentesco de consanguinidad?—El vínculo que liga á las personas que descienden de un mismo tronco, en el que hubo union carnal lícita ó ilícita.

¿Qué cosas han de tenerse presentes en el parentesco de consanguinidad?—La *estirpe*, la *línea* y el *grado*. Estirpe es la persona de la que descienden aquellas cuyo parentesco se trata de averiguar; línea, la série de personas que proceden de una misma estirpe; y grado es la distancia que hay entre los parientes entre sí y con relacion á un tronco comun. La línea puede ser *recta* y *transversal*. La primera comprende á las personas que están entre sí ligadas con la relacion de engendrante á engendrado. La transversal á las demás. Se divide igualmente la transversal en *igual* y *desigual*. La primera tiene lugar cuando los parientes están á la misma distancia del tronco comun; la segunda cuando están en grado desigual.

¿Cómo se computan los grados civil y canónicamente?—Civilmente se reputan tantos grados cuantas son las personas que descienden del tronco. En la computacion canónica se siguen las reglas siguientes: en la línea recta hay tantos grados cuantas son las generaciones, ó lo que es lo mismo, cuantas son las personas, sin contar con la estirpe comun; en la línea colateral igual, hay tantos grados entre dos parientes cuantos dista cualquiera de ellos del tronco comun; en la desigual, cuantos dista el más remoto del tronco comun.

¿Hasta qué grados está prohibido el matrimonio entre los parientes?—En la línea recta hasta lo infinito; en la colateral hasta el cuarto grado canónico, si bien tan sólo procede el impedimento de derecho natural en cuanto á los hermanos.

¿Qué es afinidad?—La relacion ó parentesco que por el matrimonio consumado se establece entre un cónyuge y los parientes del otro.

¿Hasta qué grados está prohibido el matrimonio por afinidad?—En la línea recta hasta lo infinito; en la colateral, hasta el cuarto grado, si la afinidad procede de cópula lícita, y hasta el segundo tan sólo si procede de cópula ilícita. Los grados en la afinidad no son tales en rigor; pero se llaman así por analogía con las de la consanguinidad.

¿Qué es parentesco ó cognacion civil?—La relacion que media entre el adoptado y el adoptante y sus parientes naturales.

¿Qué impedimento dirimente procede de la cognacion civil?—El que se opone á la celebracion del matrimonio entre el adoptante y el adoptado y los ascendientes y descendientes de aquél, aún despues de disuelta la adopcion, y entre el adoptado y los hijos naturales del adoptante mientras subsiste la adopcion.

¿Qué es parentesco ó cognacion espiritual?—La relacion que se establece con el bautismo y la confirmacion entre el bautizante y confirmante, el bautizado y confirmado y los padrinos, entre todos los cuales respectivamente media impedimento dirimente, así como tambien entre los mismos y los padres naturales del bautizado ó confirmado.

¿Qué se entiende por *pública honestidad* y cuáles son sus efectos como impedimento dirimente del matrimonio?—El parentesco ó relacion que procede de los esponsales válidos y del matrimonio rato, y se extiende hasta el cuarto grado si procede del matrimonio rato, y hasta el primero si procede de los esponsales; pero es indispensable que éstos hayan sido válidos.

¿Qué es el *ligamen* como impedimento dirimente?—Un matrimonio anterior no disuelto legítimamente. Se entiende que subsiste el matrimonio anterior aunque sea larga la ausencia y desconocido el paradero de uno de los cónyuges, siendo necesario para que el presente pueda pasar á segundas nupcias que conste de un modo *cierto* el fallecimiento del ausente; y si apesar de esto, despues de celebrado el segundo matrimonio, apareciere el cónyuge ausente, el segundo se considerará nulo, por más que los hijos nacidos durante la buena fé de los consortes gozarán de la consideración de legítimos.

¿Cuáles son los efectos del orden sacro como impedimento dirimente?—La nulidad del matrimonio que contraigan los que antes de él hubiesen recibido el presbiterado, diaconado ó subdiaconado.

¿Qué es *voto* como impedimento del matrimonio?—La promesa hecha á Dios de guardar castidad.

¿Cómo se divide el voto?—En *simple* y *solemne*: éste es el que se hace en el acto de la profesion religiosa en una de las órdenes aprobadas por la Silla apostólica, y en el de recibir las órdenes sagradas; simple es el hecho en cualesquiera otras circunstancias, por grandes que sean las solemnidades con que se efectúe. El voto solemne es el único que anula el matrimonio que se celebra despues de contraído.

¿Qué crímenes son los que constituyen impedimento dirimente, y con qué circunstancias?—El de adulterio y el de homicidio. Para que el primero sea tal impedimento es necesario que antes ó despues de haberse cometido, los adúlteros se hayan dado palabra de matrimonio, ó bien que los dos ó cualquiera de ellos haya atentado contra la vida del cónyuge inocente, aunque hubiese sido sin éxito. Para que el homicidio sea impedimento dirimente es necesario que concurren en él las circunstancias siguientes: 1.^a, que no uno solo, sino ambos, hayan sido los que atentaron contra la vida del cónyuge inocente; y 2.^a, que lo hayan hecho con intención, uno de ellos á lo ménos, de contraer matrimonio.

¿Qué es disparidad de culto?—El impedimento de contraer matrimonio los que están bautizados con los que no lo están.

(1) ¿Cuáles son los impedimentos *impedientes*, segun la actual disciplina?—Los siguientes: la prohibición de la Iglesia, la prohibición temporal de velaciones, los esponsales, el voto simple de castidad, la ignorancia de los rudimentos de la doctrina cristiana, la falta de las proclamas, la del consentimiento paterno, la falta del trascurso del año de luto, la prohibición impuesta á los tutores y curadores de contraer matrimonio ellos ni sus hijos con sus pupilas antes de la aprobacion legal de sus cuentas, y, por último, la falta de real licencia para aquellas personas que por su estado necesitan de este requisito para contraerlo. La prohibición de la Iglesia puede ser general ó particular: la primera tiene por objeto la celebracion de matrimonios entre católicos y herejes; la segunda se refiere á algun caso especial, como cuando el obispo ó el párroco suspenden la celebracion de un matrimonio dado, hasta averiguar si existe impedimento por parte de alguno de los contrayentes.

Requisitos y solemnidades que preceden al matrimonio.

¿Cuáles son estos requisitos y solemnidades?—Los esponsales (1), las proclamas, el consentimiento paterno, la instruccion del expediente de

(1) Véase la parte correspondiente del *Derecho civil*.

(1) *in iudicio ecclesie: votum, sponsalia,*

*Se ven por
fundamento
el interés de
impedimento*

libertad de los contrayentes y la licencia del ordinario en algunos casos.

¿Qué son proclamas?—La publicacion que hace el párroco al pueblo reunido en la iglesia, de las personas que intentan contraer matrimonio, con el fin de que revelen, quienes de él tengan noticia, el impedimento que exista y se oponga á su celebracion. Todos están obligados á hacer esta revelacion, á no ser que hubiesen adquirido la noticia en el secreto de la confesion ó por razon del oficio que ejerzan.

¿Cuándo se estableció este requisito previo del matrimonio?—Ya era conocido este requisito de las proclamas en algunas provincias de Francia en el siglo XII, y en el siglo XIII se hizo disciplina general de la Iglesia por el Concilio IV de Letrán, cuyo decreto, por haber caído en desuso, fué renovado é innovado por el Concilio de Trento, que dispuso: 1.º, que los matrimonios se anunciasen por el párroco propio de los contrayentes, y 2.º, que las proclamas se hiciesen en la iglesia en tres dias de fiesta consecutivos y en la solemnidad de la misa. Si los contrayentes son de distintas parroquias ó han tenido varios domicilios, debe hacerse la publicacion en todas.

¿Quién puede dispensar las proclamas y en virtud de qué causas?—El Ordinario. El Concilio de Trento lo dejó á su arbitrio y prudencia, y señaló como causa, aunque no exclusiva de otra, el peligro de que, haciéndose las tres publicaciones, pudiera dilatarse maliciosamente la celebracion del matrimonio. Benedicto XIV añadió á esta causa la del escándalo, como cuando dos vivian unidos realmente en concubinato, si bien, segun la opinion pública, en matrimonio, y querian legitimar su union. Además de estas causas puede haber otras varias, que apreciará el obispo, segun su prudencia. El derecho de dispensar las proclamas, cuando los contrayentes son de distintas diócesis, corresponde al obispo de aquella en que haya de celebrarse el matrimonio.

Además del consentimiento paterno (1), ¿en qué casos será necesaria la formacion del expediente de libertad de los que intentan contraer matrimonio?—Cuando, ó por no haber sido siempre vecinos del párroco que lo haya de autorizar, ó porque éste, por cualquiera otro medio, no haya podido cerciorarse de la libertad respectiva de los contrayentes, necesita hacerla constar de una manera auténtica para evitar el peligro de autorizar un matrimonio nulo ó ilícito por un vínculo anterior, ó cualquiera otro impedimento preexistente.

¿En qué casos los párrocos no pueden autorizar los matrimonios sin licencia especial del ordinario?—Cuando sea preciso instruir previamente el expediente sobredicho de libertad; cuando los que intenten casarse sean extranjeros, vagos ó de ajena diócesis, ó hayan estado ausentes por largo tiempo despues de la edad nubil.

De la dispensa de los impedimentos canónicos.

¿Qué es dispensa de los impedimentos matrimoniales?—La autorizacion que, mediando justa causa, concede la autoridad competente á las personas que tienen algun impedimento para que puedan contraer matrimonio válida y lícitamente.

¿Qué impedimentos no pueden dispensarse?—Los que proceden del derecho divino, natural ó positivo, como lo son el de impotencia ó el de pa-

(1) Véase la parte correspondiente del *Derecho civil*.

rentesco entre ascendientes y descendientes, y los que se oponen á la naturaleza misma del matrimonio, como la falta del consentimiento.

¿A quién corresponde el derecho de dispensar los impedimentos?—Al Romano Pontífice, si bien los obispos podrán dispensar los impedimentos dirimentes cuando, estando ya próximo á celebrarse el matrimonio, se descubre un impedimento de esta clase que estaba oculto, y, por otra parte, no se puede dilatar la celebracion sin causar escándalo, ni los contrayentes pueden fácilmente recurrir á Roma. Del mismo modo, los obispos pueden dispensar los impedimentos dirimentes cuando éstos llegan á saberse despues de celebrarse solemnemente el matrimonio, habiendo habido buena fé en ambos ó en uno de los contrayentes; siendo además requisitos indispensables que el impedimento no se haya hecho público, que la separacion de los cónyuges no pueda efectuarse sin escándalo, y que no sea fácil recurrir á Roma, ya por la distancia, ya por la pobreza de los cónyuges, ó por cualquiera otra causa. Respecto á los impedimentos impedientes, puede el obispo, por regla general, dispensarlos, ménos los tres siguientes, que están reservados al Pontífice: los esponsales válidos, voto simple de castidad y la herejía.

¿En qué forma y por qué causas se conceden las dispensas?—El Concilio de Trento mandó que no se concediesen sino con justa causa y grátis, y que nunca se dispensase el impedimento de consaguinidad en el segundo grado sino entre los príncipes y por una causa de utilidad pública; pero este decreto no está en observancia. Las dispensas en la actualidad se otorgan por la *penitenciaria* ó la *dataría*, segun que el impedimento sea oculto, y su dispensa, por lo tanto, haya de producir tan sólo efecto en el fuero interno, ó sea público, y se haya de aplicar en el fuero externo. Las principales causas fijadas por la práctica en la curia romana para conceder dispensas, son las siguientes: la tranquilidad pública, la paz de las familias, el peligro del escándalo ó de la infamia, la falta de dote y la estrechez de lugares.

¿De qué manera se solicitan en España y se obtienen las dispensas?—Se solicitan por medio del Ordinario y se conceden *in forma commissoria*, encargando su ejecucion á éste, *si preces veritate nitantur*, para lo cual deben justificar los solicitantes la verdad de la causa que hayan alegado ante él á quien se haya cometido la dispensa. Asi lo dispuso el Concilio de Trento.

De las solemnidades en la celebracion del matrimonio.

¿En qué forma se celebraban los matrimonios segun la antigua disciplina?—Con ritos civiles, segun la costumbre de cada localidad, y recibiendo además los esposos la bendicion sacerdotal en la iglesia, si bien esta solemnidad no se consideró indispensable en Occidente, hasta el siglo VIII, en el imperio de Carlo Magno, que por una de sus capitulares declaró nulas las uniones que no hubiesen sido santificadas con la bendicion del sacerdote.

¿Cuál fué la forma de la celebracion del matrimonio en la disciplina de la Edad Media?—Estaba completamente abandonada á la voluntad de los contrayentes, porque no habia ritos eclesiásticos ni civiles que se considerasen necesarios para la validez del acto, una vez que se creia que ésta dependia exclusivamente del consentimiento de los contrayentes, siendo, por consiguiente, válidos los matrimonios clandestinos.

¿Qué eran, pues, matrimonios *clandestinos*?—Los que se celebraban ocultamente, sin proclamas, bendicion nupcial, testigos, escritura ni otra circunstancia de publicidad.

¿Qué reforma estableció el Concilio de Trento en este punto?—Determinó que á los matrimonios debiese preceder su publicación en tres días, y que hubiesen de celebrarse ante el párroco ú otro sacerdote, con su licencia, y dos ó tres testigos, y que fuesen nulos de allí en adelante los que se celebrasen sin la asistencia de estas personas.

¿En qué países y en qué casos continuaron siendo válidos los matrimonios clandestinos, después de la reforma tridentina?—En todos los países en que no se publicó ni admitió aquella, respecto á las personas que estén en ellos domiciliadas, y no, por lo tanto, respecto á las que, procedentes de países en que dicha reforma se haya publicado, vayan á casarse allí para eludir su observancia. Son también válidos los matrimonios clandestinos en Bélgica y Holanda cuando ambos ó cualquiera de los contrayentes son herejes; lo son igualmente en Francia y en España, y lo son también en aquellos países en que no haya párroco ó sacerdote católico que pueda autorizarlos, con tal que se celebren ante dos testigos.

¿Cuáles son los efectos del matrimonio?—Respecto de los padres, la perpetuidad de los derechos y obligaciones recíprocos que establece; respecto de los hijos, su legitimidad, aunque el matrimonio sea nulo por algun impedimento dirimente oculto, ignorado por cualquiera de los contrayentes, con tal que se haya celebrado con todas las solemnidades del derecho.

Del divorcio (1) y de las segundas nupcias.

¿Qué es divorcio y cuántas sus clases?—La separación legítima de los cónyuges. Puede ser en cuanto al vínculo, en cuanto á la habitación y en cuanto al lecho. En el primer caso se disuelven todas las relaciones entre los cónyuges, como si el matrimonio nunca hubiese existido; en el segundo cesan también las relaciones, pero subsiste el vínculo; en el tercero subsisten las relaciones y el vínculo, pero los esposos no cohabitan carnalmente. El divorcio de las dos primeras clases no puede tener lugar sino por decreto de autoridad competente en los casos prevenidos en el derecho; el de la tercera clase depende exclusivamente de la voluntad de los consortes.

¿Cuál es la doctrina de la Iglesia en cuanto al divorcio *quo ad vinculum*?—Desde el Concilio de Trento la Iglesia occidental no lo admite sino en el caso del matrimonio rato, que se disuelve por la profesión religiosa de uno de los cónyuges. La Iglesia oriental continúa admitiéndolo por adulterio y otras causas.

¿Cuáles son los efectos de la conversión de uno de los cónyuges á la fé, permaneciendo el otro en la infidelidad, en cuanto al matrimonio simplemente legítimo?—Segun la doctrina de San Pablo, se disuelve concurriendo alguna de las dos circunstancias siguientes: 1.ª que el cónyuge infiel no quiera continuar unido al convertido, y 2.ª, que haya en la continuación de la union peligro de apostasia para el convertido. Si después de disuelto el matrimonio el infiel entrase también en el gremio de la Iglesia antes que el primer convertido hubiese contraído nuevo vínculo, se restablecerá el primero.

¿Cuáles son las causas de divorcio en cuanto á la habitación?—1.ª, el adulterio de cualquiera de los cónyuges, cuando no lo hayan cometido ambos ó el inocente no haya perdonado la injuria de un modo expreso ó tácito, ó cuando el inocente, siendo el marido, no haya con su conducta dado causa al adulterio de la mujer; 2.ª, el crimen de herejía ó apostasia;

(1) Véase la sección de *Derecho civil*, pág. 239, libro I.

3.^a, la coaccion que ejerza el marido sobre la mujer para que cometa algun delito ó sea su cómplice, y 4.^a, la *servicia* ó malos tratamientos. De todas ellas solamente es perpétua la separacion que procede del adulterio, si el inocente no remite la injúria: la separacion por otras causas cesa cuando cesan éstas.

¿Quién puede pedir la nulidad del matrimonio y cuáles son los efectos de la sentencia que se dicte en las causas de esta especie?—Pueden pedirla todas las personas que tengan noticia de ella cuando el impedimento de que proceda sea de interés público, y solamente los cónyuges cuando el impedimento les interese á ellos exclusivamente. Las sentencias dictadas en causas de nulidad de matrimonio nunca pasan en autoridad de cosa juzgada, y debe intervenir en la sustanciacion de estos expedientes el *defensor del matrimonio*, cuyo cargo, distinto del de fiscal, fué creado por Benedito XIV.

¿Qué concepto merecieron y merecen en la Iglesia las segundas nupcias?—Por más que se consideraron siempre como lícitas, imprimian cierta nota de incontinencia en los que las celebraban; así es que no se bendecian por el sacerdote. En la disciplina actual tampoco se bendicen las que contraen los viudos, pero si las de las viudas. Las Decretales reconocieron en éstas la libertad de contraer matrimonio inmediatamente despues de disuelto el anterior, sin incurrir en nota de infamia ni en otra pena; pero el Código penal español volvió á renovar la prohibicion que ya por el derecho romano tenian aquellas de contraer segundo matrimonio antes de transcurridos 301 dias despues de la muerte del marido ó antes del alumbramiento (1).

De las iglesias.

¿Qué es iglesia?—Un edificio destinado al culto divino, consagrado ó bendecido solemnemente.

¿Con qué nombre se conocieron en la disciplina primitiva las iglesias?—Por razon de su dedicacion, con los de *dominica* y *domus Dei*; por razon de su objeto, con el de *oratoria* y *domus orationis*; por razon de las reliquias sobre que se habian levantado, con los de *martiria*, *apostolea* y *prophetea*. Tambien se las conocia con el nombre de *títulos*, *templos* y *basilicas*.

En los tres primeros siglos, ¿cuáles fueron los lugares destinados por los cristianos á la oracion?—En los tiempos apostólicos eran éstos los *cenáculos*, ó sea unos departamentos especiales de las casas de habitacion destinados á las funciones de la comida y la cena; esto especialmente entre los cristianos que procedian de la nacion judaica. Despues los lugares de oracion más notables fueron las *catacumbas*, que eran inmensas excavaciones subterráneas cerca de las grandes ciudades, de donde en tiempos anteriores se habian extraido los materiales de construccion para los edificios de éstas, y en cuyos sitios se reunian los fieles para las funciones del culto, y en cuanto por la persecucion de que eran objeto por parte de la autoridad temporal no podian hacerlo públicamente. En los siglos II y III, en el periodo que estuvo calmada la persecucion, comenzaron ya los fieles á edificar algunos templos en las ciudades.

Desde la paz de Constantino, ¿qué variacion se introdujo respecto á los lugares de oracion, y en qué clases se dividieron éstos por razon de su importancia canónica?—Las catacumbas dejaron ya de dedicarse á tal ob-

(1) Véase la seccion de *Derecho penal*, pág. 387, libro I.

jeto. En su lugar se edificaron templos y se dedicaron al culto cristiano muchos que hasta entónces lo habian estado al idolátrico. Las iglesias se clasificaron en *matrices* y *filiales* por las distintas relaciones que en ellas mediaron, en *catedrales*, *parroquiales* y *conventuales*. Las primeras eran y son, aquéllas en que el obispo tiene permanentemente su cátedra; las parroquiales, las dedicadas primero y principalmente á la cura de almas, y las conventuales, las dedicadas al culto de las comunidades monásticas. En los siglos medios empezaron á conocerse tambien las *colegiadas*, que eran y son aquéllas cuyo clero forma corporacion ó cabildo. Hubo tambien y hay otras iglesias de ménos importancia, que se llaman *oratorios*, *capillas*, *santuarios* ó *ermitas*.

¿Qué requisitos han de preceder á la edificacion de una iglesia?—La licencia del obispo, que no puede concederla sin que antes se acredite la justa causa, ó sea la necesidad ó utilidad eclesiástica de la edificacion, y la dotacion bastante para atender á los gastos del culto en la iglesia que se intenta edificar. Debe tambien el obispo, ó un presbítero en su nombre, bendecir y colocar la primera piedra y fijar una cruz en el sitio en que se ha de colocar el altar mayor.

¿Por cuenta de quiénes han de repararse las iglesias?—Por cuenta de sus propios bienes, y en su defecto, por cuenta de los beneficiados ó personas que posean y disfruten los bienes y diezmos de la iglesia que se ha de reparar. No pudiéndose conseguir fondos bastantes por estos medios para la reparacion, podrá destruirse por completo y destinar el solar á usos profanos, con tal que no sean indecorosos, para lo que se deberá fijar en él una cruz.

¿Qué son oratorios privados?—Los que se erigen en las casas de los particulares para que en ellas se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa, asistiendo á él la familia y su servidumbre.

¿Qué determina la disciplina vigente acerca de la edificacion de oratorios privados?—La regla general la prohíbe, porque todos los fieles tienen obligacion de asistir á la iglesia parroquial; pero el Romano Pontífice, á quien está reservada la concesion de esta gracia, la concede por dispensa, aunque imponiendo la obligacion de concurrir á aquélla en las fiestas más solemnes, que se designan en el breve de concesion.

Edificada la iglesia, ¿qué solemnidad tiene en ella lugar para que pueda celebrarse desde entónces el culto divino?—La consagracion ó bendicion, que son la habilitacion solemne del templo para las funciones del culto. La consagracion sólo puede hacerla un obispo; la bendicion puede someterse á un presbítero. La consagracion puede hacerse en cualquiera dia, y no puede reiterarse, á no ser en el caso de reedificarse la iglesia por haber sido casi totalmente destruida.

¿Es muy antigua la ceremonia de la consagracion de las iglesias?—Ya se conocia en el siglo IV, en que se verificó la de algunos templos con gran solemnidad y aparato.

¿En qué casos se consideran profanadas las iglesias?—Cuando se cometen en ellas acciones torpes, indecentes é injuriosas al lugar sagrado, como son la sepultura de un infiel, hereje ó excomulgado vitando, el homicidio y efusion de sangre criminales, la *voluntaria effusio humani seminis*; debiendo tenerse presente que la profanacion de la sacristia ó cementerio no lleva consigo de la de iglesia, porque se consideran departamentos independientes.

¿Cuál es el efecto de la profanacion de la iglesia?—Que inmediatamente que sucede se cierra la iglesia al culto, interrumpiéndose las ceremonias religiosas, aunque ya estén principiadas, y no vuelve á abrirse hasta que se reconcilie. Debe reconciliar la iglesia profanada el obispo, si estaba consagrada, y si tan solo bendita puede reconciliarla un presbítero por delegacion de aquél; pero si la profanacion procedió del enterramiento en

ella del cadáver de un infiel, hereje ó excomulgado vitando, debe antes procederse á su exhumacion.

¿Qué otras cosas son necesarias para el culto?—Las investiduras sacerdotales, los vasos sagrados y los ornamentos del altar. De todos ellos han de ser necesariamente consagrados por el obispo el cáliz, la patena y el ara del altar: los demas pueden ser benditos por un presbítero por delegacion del obispo. Tambien forman parte del culto católico las reliquias y las imágenes de los santos.

De las inmunidades de las iglesias, y especialmente del asilo.

¿En qué consiste la inmunidad de los templos?—En que no se consientan en ellos actos profanos y en que no se puedan extraer de ellos los criminales que allí se hayan acogido. Se entienden por actos profanos los juicios seculares, las fiestas teatrales, las alocuciones civiles, las juntas profanas, las ferias, los contratos y demas actos que repugnen al decoro y santidad del templo.

¿Cuál fué el origen del privilegio del asilo?—Esta inmunidad ya la conocieron los gentiles y los mismos judíos. Entre los cristianos es la opinion más probable que data de antigua costumbre introducida inmediatamente despues de dada la paz á la Iglesia por Constantino, á semejanza de lo que pasaba en la misma religion pagana.

¿Cuáles fueron las bases de legitimidad del asilo eclesiástico?—La clemencia que acostumbró siempre la Iglesia á conceder á los desgraciados que imploraban su proteccion, y la reverencia debida á los templos consagrados á Dios, á lo que se unia la enmienda de los culpables acogidos, que si se eximian por esto de la pena civil, quedaban sometidos á todo el rigor de la penitencia canónica.

¿En qué tiempo fué reconocido el asilo por la ley civil?—En el año 397 dió el emperador Arcadio una constitucion reconociéndolo. Pero, segun ésta y las demas dictadas con posterioridad, el asilo tenia por objeto, más que librar al criminal de la pena, proteger al desvalido é injustamente perseguido contra el opresor.

¿Qué nuevo carácter tomó en los siglos medios?—Se convirtió en una inmunidad, en virtud de la cual el verdaderamente criminal se eximia de la pena acogiéndose á la iglesia, quedando, no obstante, sujeto á la penitencia pública. Debe tenerse presente que el derecho penal de aquella época era bárbaro y la mayor parte de las penas eran de sangre.

¿Qué limitaciones impusieron las Decretales á la inmunidad del asilo?—Fueron excluidos de él los ladrones públicos y los taladores nocturnos de los campos, los que delinquiesen con ánimo de acogerse á sagrado, los que matasen ó mutilasen miembros en lugar inmune, y los que lo hiciesen valiéndose para ello de asechanzas y ejecutando un plan preconcebido.

¿Quién es el juez en las causas de asilo?—Hubo y hay cuestiones sobre este punto, si bien Gregorio XIV determinó que no fuese la autoridad eclesiástica, á la cual habia de estar exclusivamente sometido el delincuente refugiado mientras que aquélla no decidiese si habia ó no cometido el delito por que se le perseguia, y si era ó no de los exceptuados por las constituciones apostólicas.

¿Qué extension tenia el derecho de asilo y qué limitaciones se impusieron en España por breve de Clemente XIV?—La inmunidad alcanzaba, no solamente al interior del templo, sino al exterior en radio de treinta á cuarenta pasos, y gozaban de ella todas las iglesias en que se celebraban los divinos misterios, las casas de los obispos y párrocos si se hallaban edifica-

das en los átrios de aquéllas, los cementerios, hospitales y otros lugares religiosos, las cruces puestas en las vías públicas, y aun los mismos sacerdotes cuando llevaban la Eucaristia. Por el mencionado breve se determinó que en España no hubiese más que una, ó cuando más dos iglesias, en cada población que gozase de la inmunidad del asilo, á cuyo efecto las designaría el obispo.

¿Qué delitos están exceptuados de la disciplina actual de la Iglesia española?—Los de los incendiarios, plagiarios, envenenadores, asesinos, salteadores de caminos y ladrones nocturnos; los de los que, fingiéndose ministros de justicia, entran en las casas para robarlas ó violentar á las mujeres honestas; los de los falsificadores de las escrituras, cédulas, libros ú otros documentos de los Bancos públicos, quebrados fraudulentos, pecuniarios, reos de lesa majestad; los de los que extraen ó mandan extraer por fuerza los reos del asilo, de los que cometen en estos lugares homicidios, mutilaciones ú otros delitos que se castiguen con penas de sangre ó galeras; los de los refugiados al asilo que lo abandonan para cometer nuevos delitos, y de los taladores de los campos, herejes, falsificadores de letras apostólicas, homicidas con premeditacion y monederos falsos.

¿Cuál es la disciplina de España sobre la estradicion de los refugiados?—El juez real es el que la lleva á efecto, previa la venia del provisor, párroco ó eclesiástico de mayor categoria, residente en el lugar en que se verifica la extradiccion, y prometien lo antes de palabra ó por escrito, segun lo exigiere el acogido, que no le atacará en su vida ni en sus miembros y le guardará en nombre de la Iglesia. Formado el sumario y recibida al reo la indagatoria, el juez real pasará un oficio al eclesiástico con testimonio del tanto de culpa que resulte de la causa pidiéndole la entrega llana del reo. Si el juez eclesiástico accede, continúa sustanciándose la causa como si el delincuente no se hubiese acogido. Si no accede, sustancia el juez real el recurso de fuerza.

¿Qué aplicacion tiene en la actualidad la disciplina del asilo?—Ninguna, porque no teniendo aquélla más objeto que el de eximir al delincuente refugiado de la pena de sangre, y habiéndose por otra parte dulcificado el derecho penal, ninguno de los delitos no exceptuados se castiga hoy con penas de aquella gravedad, para que pudiera tener lugar la disciplina del asilo.

De las sepulturas y cementerios.

¿Cuáles fueron los lugares de sepultura entre los cristianos en los primeros siglos de la Iglesia?—Los mismos de los demás ciudadanos. Estaban situados fuera de las poblaciones, porque así lo exigia la administracion romana, y eran públicos y particulares, segun lo permitia la fortuna de la familia del difunto.

¿Qué cambios experimentó la disciplina desde que se dió la paz á la Iglesia por Constantino?—Por un sentimiento de piedad comenzaron los fieles á pedir que se les permitiese el enterramiento cerca de los templos. Al principio se concedió tan sólo por vía de privilegio á los emperadores, obispos, abades, personas constituidas en dignidades eclesiásticas y legos de reconocida santidad. A poco tiempo se hizo la gracia extensiva á todos los fieles y concluyó por extenderse de la misma manera gradual á convertir en lugar de enterramiento el interior de los templos, si bien la Iglesia protestó siempre contra este abuso, y dispuso que las inhumaciones se hicieran en los cementerios.

¿Qué son cementerios?—Los lugares religiosos benditos por el obispo, separados de las iglesias y destinados á la sepultura de los fieles.

¿En qué cementerios deben ser enterrados los cadáveres de los fieles?—En el de la propia parroquia, á cuyo efecto se consideran como parroquianos, no solamente los domiciliados sino tambien los peregrinos y transeuntes que hayan fallecido en ella accidentalmente, si no pueden ser sus cadáveres trasportados cómodamente al cementerio de su domicilio. Se consideran igualmente parroquianos los sirvientes domésticos y los estudiantes mientras permanezcan en el lugar de sus estudios.

¿Qué excepciones tiene la regla dicha?—La relativa á los monjes, cuyos cadáveres se entierran en el mismo monasterio, lo mismo que los de los canónigos y los beneficiados en la iglesia catedral ó en la que radica su beneficio. Los que tienen sepultura de familia tambien están exceptuados de la regla general. Y en suma, todos los fieles, desde que llegan á la pubertad, tienen el derecho de elegir sepultura, aunque sea fuera de la parroquia. El cadáver de la mujer casada que no la haya elegido, se enterrará en la de su marido, y si hubiere tenido varios, en la del último.

¿En qué iglesia deben celebrarse las exequias?—En la parroquial del difunto, por más que el enterramiento se haya hecho en otra parte, debiendo satisfacer al párroco por vía de oblacion, una cantidad que está fijada por la costumbre, que al principio fué voluntaria y que se hizo forzosa por el decreto del concilio IV de Letrán.

¿Qué es *cuarta parroquia*?—La parte que corresponde al párroco del difunto de las donaciones ú ofrendas de cualquiera clase que por disposicion del finado ó de sus parientes, se hagan á la iglesia en cuyo cementerio se verifica el enterramiento.

¿A quiénes niegan los sagrados cánones la sepultura eclesiástica?—A los infieles, judíos, apóstatas, herejes que profesen públicamente la herejía, cismáticos denunciados y declarados tales, á los niños que mueren sin el bautismo, á los excomulgados vitandos, á los que hieren públicamente á los clérigos, á los nominalmente entredichos, á los suicidas, á los ladrones que fallecen en el acto de cometer el delito, á los usureros manifiestos, á los muertos en los torneos y en desafio y á sus padrinos, á los raptos y violadores de las iglesias, aunque se hayan confesado y recibido el Viático, á no ser que hubiesen prometido restituir lo robado, á los pecadores públicos que hayan muerto impenitentes, á los que no hubiesen cumplido con el precepto pascual y á los monjes que mueran con peculio. En tiempo de *entredicho general* se niega tambien la sepultura eclesiástica á todos los fieles, concediéndose únicamente á los clérigos, cuyo enterramiento debe hacerse sin aparato ni pompa alguna.

¿En qué casos puede procederse á la exhumacion de un cadáver?—Cuando haya de hacerse algun reconocimiento por dependencia de alguna causa criminal; cuando haya de trasladarse el cadáver á otro cementerio ó panteon particular. y cuando se le haya de trasladar á un lugar profano por haber sido declarado indigno de la sepultura eclesiástica.

¿A quién debe pedirse permiso para la exhumacion de un cadáver con el fin de trasladarlo á otra sepultura?—A la autoridad superior administrativa del territorio, previa la vénia de la autoridad eclesiástica (1).

(1) En la fecha en que escribimos está pendiente de discusion en las Cortes un proyecto de ley de secularizacion de cementerios, resolucion consiguiente á la libertad religiosa, sancionada por la Constitución. Si cuando publiquemos este libro segundo el proyecto se ha elevado y promulgado como ley del reino, insertaremos en el apéndice sus principales bases.

DE LOS BIENES ECLESIASTICOS.

De las oblacones.

¿En qué se funda el derecho que la Iglesia tiene á la propiedad mueble ó inmueble?—En la necesidad de medios materiales para realizar su mision; tales son los templos, vasos sagrados, ornamentos y las cosas necesarias para el sostenimiento del culto y alimentacion de los ministros.

¿De qué clases fueron los bienes de la Iglesia?—Oblaciones, fundos, diezmos y primicias.

¿Qué eran las oblacones?—Las cosas muebles que ofrecian á Dios voluntariamente los fieles para las atenciones del culto y el sostenimiento de los ministros de su Iglesia.

¿En qué clases se dividian las oblacones?—En dos: unas se hacian en el altar y otras fuera del altar. Además habia una tercera clase, que era la de las que hacian los fieles al recibir los sacramentos, en las exequias por los difuntos ó en otros actos religiosos. Las oblacones del altar eran el pan y el vino para el sacrificio, y las espigas y uvas en tiempo de la recoleccion de la cosecha, así como tambien el aceite y el incienso. Las oblacones fuera del altar consistian en cualesquiera otras especies ó en dinero. Se recibian en un arca llamada *corbana*, ó en otro sitio especial llamado *ga-zophilacio*. No se recibian las oblacones sino de los fieles que estaban en la comunion eclesiástica, y las del altar tampoco se recibian de los que no participaban de la Eucaristia, como eran los pecadores públicos, los penitentes y los catecúmenos.

¿A qué dieron origen las oblacones de tercera clase?—A lo que se llama derechos de *estola* y *pie de altar*, que se hicieron obligatorios desde el concilio IV de Letrán, y que no tienen el carácter de remuneracion ó merced por los servicios prestados por el que los recibe, sino el de medio de alimentacion de los ministros eclesiásticos; siendo muy convenientes para la pureza y el buen nombre de éstos que se suprimiesen y desapareciesen en la administracion económica eclesiástica.

De la adquisicion de predios ó bienes raices.

¿Poseyó la Iglesia bienes raices en los tres primeros siglos?—A juzgar por un decreto de Constantino, en los últimos años del siglo III ya debió poseer algunos bienes de esta clase; pero hasta entonces su propiedad fué la mueble.

¿En qué nueva situacion económica se colocó la Iglesia desde la paz de Constantino?—Se le confirió la libertad de adquirir, que hasta entonces no habia tenido. Constantino mandó que se le devolviesen los bienes confiscados en la última persecucion á los cristianos que ya hubiesen fallecido entonces, y cuyas familias hubiesen tambien desaparecido. Facultó igualmente á la Iglesia para adquirir por donaciones *inter vivos* ó *mortis causa*. Por las leyes de sucesores se adjudicaron á la Iglesia los antiguos templos gentilicos y sus rentas, los bienes de los clérigos que morian intestados y sin parientes, los de las Iglesias y conventiculos de los herejes y de los clérigos ó monjes que volvian á la vida privada. Las donaciones hechas en

testamento á las iglesias no estaban sujetas á la detraccion de la *cuarta fal-cidia*, y las *inter vivos* que se le hiciesen tampoco necesitaban para su va-lidez la insinuacion, entre tanto que no excediesen de 500 sueldos.

¿De qué manera se limitó la libre facultad de adquirir de la Iglesia?—Por medio de las leyes de amortizacion, en las que se pusieron á esa libertad trabas más ó ménos directas, para evitar así los inmensos perjuicios que sufría el Estado con la propiedad siempre creciente de la Iglesia.

¿Qué leyes de amortizacion se conocieron en España?—Muchas, ya des-de los antiguos tiempos. El concilio III de Toledo declaró la necesidad de la licencia del monarca para la validez de las enajenaciones que se hicie-sen á las iglesias. En la Edad Media, Alfonso VI prohibió las enajenaciones en favor de las iglesias en el fuero que dió á Toledo. Esta prohibicion se fué extendiendo por los reinos de Castilla y de Leon; pero no se insertó en las Partidas. D. Juan II impuso á todas las adquisiciones de la Iglesia la al-cabala de un 20 por 100 para el Estado. Carlos III renovó la ley del fuero de Córdoba, que prohibia estas adquisiciones, y la de los fueros de Valencia y Mallorca, que tenia el mismo objeto. En nuestros dias se vendieron por el Estado los bienes que la Iglesia habia adquirido en los tiempos anteriores, como si fuesen nacionales.

¿En qué se diferencia la propiedad eclesiástica de la particular?—1.º, en el modo de adquirir: el particular no tiene limitacion en el ejercicio de este derecho: la Iglesia la tiene por su misma naturaleza, porque no puede adquirir más que la que le sea indispensable para el fin religioso que tiene á su cargo; 2.º, en el uso de la propiedad, porque el particular puede des-tinarla al que tenga por conveniente, y la Iglesia tan solo al fin espiritual, y 3.º, en la facultad de enajenarla, porque el particular puede hacerlo sin limitacion ni traba, al paso que la Iglesia tan solo en determinados casos y con ciertas solemnidades.

Del dominio y administracion de los bienes eclesiásticos.

¿A quién corresponde el dominio de los bienes eclesiásticos?—Segun unos, á los pobres; segun otros, á Dios; segun otros, al Romano Pontifice; segun otros, á la Iglesia general, y segun la opinion más probable, á las iglesias particulares, respecto á los bienes que les hayan sido donados ó que hayan adquirido por cualquier título.

¿Cuál era la forma de administracion de los bienes eclesiásticos en los primeros siglos?—Todos los de una diócesis formaban un acervo comun, cuya administracion corria á cargo de los diáconos, bajo las órdenes é ins-peccion inmediata del obispo. En el siglo IV se creó un ministro especial con el nombre de ecónomo en algunas iglesias de Oriente, que despues se extendió á todas por el decreto del concilio de Calcedonia, á quien se le confió, aunque siempre bajo la inspeccion y autoridad del obispo, la admi-nistracion de los bienes eclesiásticos. El cargo de ecónomo era de tal impor-tancia que, si el obispo era negligente en nombrarlo, lo nombraba el me-tropolitano, y en su caso el patriarca. Esta disciplina se extendió tambien á Occidente desde el siglo VII.

¿En qué forma se distribuian los bienes eclesiásticos ó sus frutos?—En cuatro partes: una para el obispo, otra para el clero, la tercera para los po-bres y la cuarta para las atenciones de las Iglesias. En España se divi-dían tan solo en tres, porque no se hacia parte especial para los pobres, que debían ser socorridos por el obispo y por el clero por cuenta de sus respectivas porciones.

¿Cuándo empezó á alterarse esta forma de administracion, y por cuál fué reemplazada?—En el siglo VI, en que á los presbíteros de las iglesias

rurales comenzó á dejárseles la administracion y usufructo de los bienes de ellas. La iglesia catedral comenzó tambien á tener sus bienes propios y separados de las demás iglesias de la diócesis, y el obispo tenia además como exclusiva mente suyos el tributo extraordinario que se llamaban *subsídio caritativo*, y los ordinarios denominados *censo sinodático* ó *catedralicio*, *procuraciones* y *porcion canónica*.

¿A quién correspondia, segun esta disciplina y segun la primitiva, la administracion de los bienes eclesiásticos en sede vacante? Segun la primitiva, correspondia al ecónomo; segun la posterior, los reyes, á título de regalia, se atribuyeron la administracion de las iglesias episcopales vacantes, y los obispos hicieron lo mismo respecto á los beneficios de su diócesis, fundándose en el *jus spoli*. El Concilio de Trento encomendó la administracion de las iglesias episcopales vacantes y de las parroquiales á los ecónomos.

De la enajenacion de las cosas eclesiásticas.

¿Desde qué tiempo se prohibió enajenar las cosas eclesiásticas?—Ya desde el siglo iv, segun resulta de varios cánones de los concilios, así de Oriente como de Occidente, y con especialidad de los de la Iglesia de Africa.

¿Qué se entiende por enajenacion de los bienes eclesiásticos?—Toda traslacion de dominio y todo acto que tienda, ó á impedir el libre y completo uso de las cosas eclesiásticas, ó á que se saquen de ellas las ventajas ó utilidades que pueden reportar segun su naturaleza. Por consiguiente, se comprenden en ella la venta, la donacion, la permuta, la dacion en prenda, la hipoteca, el usufructo, el feudo, el enfiteusis y el arrendamiento por más de tres años; y como enajenacion indirecta la transaccion.

¿Por qué causas pueden, por via de excepcion, ser enajenadas las cosas eclesiásticas?—Por necesidad ó utilidad de la iglesia y por piedad. Por la primera causa, cuando la Iglesia no puede pagar sus deudas solamente con los frutos; por la segunda, cuando de la enajenacion reporte mayores ventajas; por la tercera, cuando el precio de la enajenacion se ha de emplear en redimir cautivos ó alimentar á los pobres, especialmente en tiempo de hambre.

¿Qué solemnidades han de preceder á la enajenacion y la han de acompañar?—Si los bienes que se van á enajenar son de cabildo ó de la mesa episcopal, debe discutirse y autorizarse la enajenacion por la mayoría del cabildo; si son de patronato, debe obtenerse el consentimiento del patrono. En los países en que está admitida la decretal *ambitiosae* de Paulo II, se necesita la aprobacion previa de la Silla apostólica. Se necesita igualmente el consentimiento del poder temporal. Si los bienes que se van á enajenar son de alguna parroquia, basta la licencia del obispo, sin intervencion del cabildo. Y, por último, la enajenacion debe reducirse á escritura pública con las solemnidades establecidas por la ley civil del lugar en que se verifique.

¿Qué valor tiene la enajenacion si se hace sin los requisitos dichos y sin justa causa?—Es nula, y por la decretal citada incurrn todos los que en ella intervienen en la pena de excomunion. Además los obispos son privados por seis meses de la entrada en sus iglesias, y en caso de contumacia incurrn en la pena de suspension. Si los que enajenaron viciosamente son prelatos inferiores ó beneficiados, quedan privados de los beneficios, de cualquiera clase que sean.

De los beneficios, su naturaleza y sus clases.

¿Qué se entiende por *beneficio*?—El derecho de percibir una renta eclesiástica aneja á un oficio espiritual ó ministerio público creado por la Iglesia.

¿Cuál es la propiedad esencial de los beneficios eclesiásticos?—La perpetuidad, que significa, respecto á la iglesia, que ha sido creado el beneficio para satisfacer una necesidad permanente, y por consiguiente que no es temporal; respecto al beneficiado, que ha de servirlo tambien perpétuamente, salvo los casos en que sea de él privado ó lo renuncie conforme á derecho.

¿Qué requisitos son necesarios en la ereccion de un beneficio?—1.º, que se haga por la autoridad eclesiástica, ó con su asentimiento ó aprobacion posterior: por falta de este requisito no son verdaderos beneficios las capellanías laicales y los legados pios; 2.º, que lleve en sí un cargo eclesiástico que desempeñar, aunque no sea más que el rezo de las horas canónicas, por lo cual el derecho de percibir las rentas eclesiásticas sin obligacion de desempeñar un oficio, no es verdadero beneficio eclesiástico.

¿Cómo se clasifican los beneficios?—En menores y mayores, seculares y regulares, curados y simples, manuales, titulares, encomendados, residenciales y no residenciales, electivos, electivo-confirmativos y colativos, de patronato, de libre provision, reservados y patrimoniales.

¿Qué son beneficios mayores y menores?—Los primeros son lo que van anejos á las primeras dignidades de la Iglesia, los cuales se llaman tambien consistoriales, como los patriarcados, arzobispados y abadias con jurisdiccion quasi episcopal. Los segundos son todos los demás.

¿Qué son beneficios seculares y regulares?—Los primeros, los que tienen por objeto el régimen y servicio de la Iglesia; los segundos, los que tienen por objeto la observancia de la disciplina monástica y el gobierno de los monjes. Estos son los beneficios regulares por naturaleza é institucion; pero hay otros que se llaman tambien así por las personas que los desempeñan.

¿Qué son beneficios curados y simples?—Los primeros, son aquéllos á que va aneja la cura de almas; los segundos, todos los demás.

¿En qué consisten los beneficios de las demás clases dichas?—Los manuales son los que se conceden por cierto tiempo á voluntad del concedente. Los *á título* se conceden á perpetuidad; los *á encomienda*, provisionalmente y por tiempo determinado ó indeterminado á quienes tienen ya otro á título. Los electivos son los que se conceden por eleccion. Los electivo-confirmativos, aquéllos para cuya concesion se requiere, además de la eleccion, la confirmacion del superior. Los colativos son los que se confieren por el nombramiento de la autoridad legítima. Los de patronato, aquellos en cuya provision se tiene en cuenta la presentacion ó eleccion de patronato. Los de libre provision, los que confiere libremente el obispo. Los reservados, aquéllos cuya provision toca á la Silla apostólica, y los patrimoniales, aquéllos que no pueden conferirse sino á los naturales de un pueblo, diócesis ó provincia.

¿Desde qué tiempo se conocieron los beneficios en la Iglesia?—Desde el siglo v, en cuanto por beneficio no se entiende solamente el oficio, sino los bienes que constituyen su dotacion; porque hasta entónces, si bien hubo desde un principio oficios en la Iglesia, éstos no tenían una dotacion especial, por cuanto, segun se ha dicho, todos los bienes de la diócesis eran administrados por el obispo, que distribuía sus frutos entre los individuos del clero segun sus necesidades.

De la creacion, union y division de obispados.

¿A qué autoridad corresponde la creacion, union y division de obispados?—Aunque no faltan canonistas que atribuyen esta facultad á la autoridad temporal, la opinion más fundada es la de los que se la adjudican á la eclesiástica, como que tiene por objeto un asunto que pertenece al régimen interior de la iglesia. Sin embargo, al ejercer esa facultad la autoridad eclesiástica, procura obrar de acuerdo con la temporal en aquellos países en que hay relaciones de proteccion mútua entre la Iglesia y el Estado.

¿A cuál de las autoridades eclesiásticas correspondió en la disciplina antigua y corresponde en la moderna la creacion, union y division de obispados?—Hasta el siglo XI, á los concilios provinciales; desde ese siglo, al Romano Pontífice que es quien hoy conserva esa atribucion.

¿Qué principios tuvo en cuenta la autoridad eclesiástica en todos tiempos al ejercer esta facultad?—Procuró que no hubiese obispados sino en las ciudades de importancia, *ne vilesceret nomen episcopi et auctoritas*, como determinaron los padres de Sardis. Procuró, además, despues de dada la paz á la Iglesia por Constantino, poner en armonia sus circunscripciones territoriales con las hechas por el Estado, para que de este modo pudieran resolverse más fácilmente los conflictos de jurisdiccion entre unas y otras potestades; pero al obrar así no abdicó ninguna parte de su libertad para organizar su administracion del modo más conveniente á sus fines.

¿Qué se entiende por union de iglesias ó beneficios, y cuántas son sus clases?—La reunion de dos ó más, hecha con justa causa por la legítima autoridad. Puede ser por *confusion*, por *subjecion* y *æque principaliter*. La union por *confusion* se efectúa cuando de dos beneficios se hace uno solo nuevo y distinto de los dos preexistentes, que vienen á quedar suprimidos. Por *subjecion* tiene lugar la union cuando se unen entre si dos ó más beneficios, que continúan subsistiendo aunque no independientes y separados, tomando uno de ellos el título de matriz, y el otro ú otros el del filial ó filiales ó anejos. Se hace la union *æque principaliter* cuando dos beneficios hasta entónces independientes y separados se unen sin subordinarse el uno al otro, continuando desde entónces servidos por un solo ministro.

¿A qué autoridad corresponde la union y division de las iglesias y beneficios?—Al obispo. Los prelados inferiores no tienen atribuciones para unir y dividir los beneficios de sus territorios exentos, á no ser que les correspondan por un título especial. El obispo del territorio en que está enclavado el exento será el que con el consentimiento del prelado inferior acordará de oficio ó á instancia de parte la union ó division. En Sede vacante al cabildo catedral pasa esta facultad, pero no podrá ejercerla en perjuicio de los derechos de la Silla episcopal.

¿Cuáles son las justas causas que admite el derecho para la union de iglesias y beneficios?—En general la necesidad y utilidad espiritual de los fieles, con tal que por otra parte haya rentas bastantes para atender á los gastos de la iglesia ó beneficio que se constituya por la union y para la alimentacion congrua del ministro que haya de serlo. Pero cuando se trata de parroquias, como su union se considera odiosa, ha de darse alguna de las tres causas siguientes: 1.ª, haberse disminuido considerablemente el número de los fieles en una ó en ambas parroquias de cuya union se trate, hasta el punto de no ser precisos dos párrocos para el servicio espiritual de aquéllos; 2.ª, haberse arruinado una de las iglesias parroquiales y no tener fondos para reedificarla, y 3.ª, no haber tampoco rentas bastantes para sostener el culto decorosamente en ambos beneficios ó iglesias y ali-

mentar á sus ministros. Con cualquiera de estas causas podrá hacerse la union, que será de una de las tres clases dichas, según las circunstancias del caso.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento sobre uniones de parroquias y beneficios en general?—1.º, que no pudiesen unirse de por vida, esto es, tan solo para mientras viviese el beneficiado que hubiese de servirlos; 2.º, que no se pudiese unir ninguna iglesia á la mesa episcopal ó la capitular; 3.º, que tampoco pudiesen unirse parroquias á los monasterios, hospitales, dignidades, prebendas ó beneficios simples; 4.º, que tampoco se pudiesen unir los beneficios de una diócesis á los de otra; 5.º, que tampoco se uniesen los de libre colacion á los de patronato y los reservados perpétuamente á la Silla apostólica entre sí, ni los que estuviesen vacantes antes de la union, y 6.º, que ni aun para fundar seminarios ó redotar las prebendas incóngruas del cabildo catedral pudiesen unirse otros beneficios que los simples.

¿Qué causas influyeron para que en los siglos medios se hubiesen unido tantas parroquias á la mesa episcopal y á las de otras corporaciones eclesiásticas?—El derecho que tenía el obispo de reservarse alguna al hacer la demarcacion parroquial de su diócesis; la conveniencia, aunque rara, de que alguna parroquia por circunstancias especiales estuviese gobernada bajo su inmediata inspeccion; el haber disminuido las rentas de la mesa episcopal, hasta el punto de no ser ya bastantes para la cóngrua sustentacion del obispo, si bien Clemente y prohibió ya las uniones de parroquias por esta causa. Respecto á las uniones hechas á monasterios y otras corporaciones eclesiásticas, además de la última causa dicha, influyó mucho la devocion de los fieles que, en la obligacion de devolver á la Iglesia los beneficios de que sus antepasados se habian apoderado, prefirieron devolverlos á las corporaciones y especialmente á las comunidades religiosas, que merecian sus simpatías mucho más que el clero secular.

¿Cómo y por quién se administraban espiritualmente las parroquias unidas á estas comunidades religiosas?—Se suponía dividida la cura de almas en *habitual* y *actual*. La primera correspondia á la comunidad ó corporacion, y en su virtud ella era la que percibia las rentas del beneficio. La segunda se encomendaba á un vicario amovible *ad mutum*, al que aquélla asignaba una parte de las rentas, en la generalidad de los casos muy escasa, teniendo además que satisfacer al obispo todas las veces que nombraba vicario, un tributo que se llamaba *redencion de altares*.

¿Qué disposiciones adoptó el Concilio de Trento respecto á estas parroquias unidas?—1.º, que se nombrasen para todas ellas vicarios que fuesen idóneos para la cura de almas, y que serian temporales ó perpétuos, según lo creyesen más conveniente los ordinarios; 2.º, que á estos vicarios se les asignase por las corporaciones á que estuviese unida la parroquia la tercera parte de sus rentas para su cóngrua sustentacion, ó una mayor ó menor, según el ordinario lo determinase; 3.º, que estos vicarios dependiesen en lo relativo á la cura de almas de la autoridad del obispo; 4.º, que no pudiese constituirse ninguno aunque fuese amovible *ad mutum* sin el previo exámen y consentimiento del obispo, excepto los que nombrase el abad de Cluny, los abades generales en los monasterios en que tuviesen su asiento, ó los que ejerciesen en ellos jurisdiccion cuasi episcopal en concepto de prelados regulares, y 5.º, que si, erigida una vicaria perpétua, no se le señalase por el monasterio que tuviese la cura habitual la cóngrua sustentacion, quedase por este hecho disuelta la union de la parroquia, la cual volveria á su antiguo estado.

¿Qué solemnidades han de observarse en la union de beneficios eclesiásticos?—1.º, han de ser citados los patronos legos ó eclesiásticos, si alguno de los beneficios, cuya union se intenta, es de patronato; 2.º, lo han de ser igualmente los poseedores de los mismos, y mucho más si son parroquias;

3.º, se ha de oír igualmente al pueblo ó feligreses de la iglesia ó beneficio de cuya union se trate, y 4.º, se ha de obtener tambien el consentimiento del prelado inferior en cuyo territorio radique alguno de los beneficios que se van á unir. Y por último, segun costumbre, la union se decretará por el obispo *sine pro ajuicio possessoris*; debiendo antes oír el obispo á su cabildo, si no hubiese práctica en contrario.

¿En qué casos procede la division de beneficios, y especialmente de parroquias?—Cuando el número de los fieles se ha aumentado hasta el punto de que no pueda ya ser satisfactoriamente servido por un solo párroco; cuando alguno de los pueblos de la parroquia estén á mucha distancia de la iglesia ó sus comunicaciones con ella sean difíciles; y en todo caso será siempre preciso que puedan dotarse convenientemente las dos nuevas parroquias que se eréen.

¿Qué se dispuso en el concordato de 1851 respecto á uniones y divisiones de parroquias?—Se acordó proceder á la formacion de un nuevo plan general de ellas en toda la Peninsula, creando, uniendo, dividiendo ó suprimiendo las que fuese necesario para el mejor servicio espiritual de los fieles.

De la residencia de los beneficiados.

¿Qué se entiende por residencia?—La permanencia continua y laboriosa del beneficiado en la iglesia ó lugar de su beneficio.

¿Cuál fué la disciplina establecida y observada sobre la residencia de los obispos hasta nuestros dias?—En los tres primeros siglos no infringieron este deber; mas desde el siglo iv ya fué necesario dictar disposiciones para contener abusos. Por esta razon, el Concilio de Sardis les prohibió que se acercasen al campo ó residencia imperial, á no ser que fuesen llamados, y que, aun en el caso de que hubiesen de interceder por algun desgraciado cerca del emperador, enviasen á sus diáconos para que en su nombre hiciesen la intercesion. Estos abusos se graduaron y agravaron más en los siglos medios, en que por efecto de la parte que tomaron los obispos en los negocios del Estado, y á consecuencia de los feudos que recibieron de la Corona, se ausentaron muy frecuentemente de sus respectivas diócesis, dejándolas encomendadas á manos mercenarias. No se habian corregido por completo estos abusos al celebrarse el Concilio de Trento, por lo que declaró esta asamblea la obligacion en que, para cumplir un precepto divino, estaban los obispos de no abandonar sus respectivas iglesias, y dispuso que los que se ausentasen por más de seis meses, sin justa causa, quedasen privados *ipso jure* de la cuarta parte de los frutos, que se aplicarian á la iglesia y á los pobres, y de la mitad si la ausencia continuase por otros seis meses. Y que, en caso de contumacia, el metropolitano, ó el obispo más antiguo en su defecto, pudiese prohibirle la vuelta á la iglesia, dando cuenta dentro de tres meses al Romano Pontífice, para que acordase lo conveniente ó dotase la iglesia de nuevo pastor.

¿Cuáles son las justas causas que excusan á los obispos de residir?—La caridad cristiana, la necesidad urgente, la obediencia debida y la utilidad evidente de la Iglesia y del Estado. El conocimiento y apreciacion de estas causas corresponde al Romano Pontífice ó al metropolitano de la provincia. El obispo, aun teniendo alguna de dichas causas, no puede ausentarse sin obtener antes la licencia por escrito, á no ser que la ausencia fuese resultado de un hecho repentino, ó para el desempeño de algun cargo público anejo al obispado. Tambien el Concilio de Trento facultó, por regla general, á los obispos para que, segun su conciencia, pudiesen ausentarse de sus diócesis tres meses al año, cuidando de estar en ellas en las fiestas más solemnes de la Iglesia.

¿Qué dispuso el Concilio mencionado sobre la residencia de los párrocos?—Que éstos no pudieran ausentarse de sus parroquias sin causa conocida y aprobada por el obispo, y con su licencia; que éste la concediera gráti y por escrito, si bien por un tiempo que no excedería de seis meses, á no haber una *causa grave* que exigiese otra cosa. Pero siempre tendría el párroco obligación de dejar encomendada la cura de almas por su cuenta á un vicario idóneo que aprobase el obispo.

¿Qué dispuso el Concilio acerca de la residencia de los canónigos?—Que éstos debiesen cumplir por sí mismos las obligaciones de sus prebendas, y que no pudieran ausentarse sino por justas causas, cuales son peligro de muerte, enfermedad, el estudio de las ciencias eclesiásticas y la comisión que el obispo está facultado para encargar á dos capitulares cualesquiera funciones que se refieran al gobierno de la diócesis. También el Concilio facultó á los capitulares para que, según su conciencia, pudieran ausentarse de sus iglesias durante tres meses en cada año, sin necesidad de pedir y obtener licencia.

¿Qué ministros eclesiásticos están exentos de la ley de la residencia por el derecho comun ó por privilegios especiales?—Los auditores de la Rota romana y de la española, y los capellanes de honor, con tal que entre todos ellos no haya más que seis que sean beneficiados de otras iglesias y no correspondan á una misma dos de ellos.

¿En qué penas incurrén los beneficiados que faltan á la ley de residencia?—Si son párrocos, una vez citados por edicto, pueden los ordinarios proceder contra ellos empleando las censuras eclesiásticas, secuestración de frutos y los demás medios de derecho, hasta privarles del beneficio. Si son canónigos, y están ausentes más que los tres meses que el Concilio les tolera, deben ser privados el primer año de la mitad de los frutos de la prebenda, y el segundo, de todos; procediendo contra ellos, caso de continuar en su contumacia, por los medios de derecho. Los demás beneficiados que estén ausentes más de seis meses, sin justa causa, pueden ser privados de sus beneficios.

¿Qué solemnidades se han de observar para privar de su beneficio al no residente?—Ha de oírsele, para saber si la ausencia procede ó no de justa causa. Para ello se le ha de citar por medio de edictos fijados en las puertas de la iglesia, ó personalmente si se sabe su paradero. Si la citación es personal, basta que se haga una sola vez. Si fuese por edictos, habrán de publicarse éstos tres veces, fijando en ellos término al beneficiado para que se presente. Si trascurridos seis meses después de extinguido el término el beneficiado no se presentase, podrá el obispo proceder, aunque sea gubernativamente, con él, excomulgándolo y aun privándolo del beneficio.

De la pluralidad de beneficios.

¿Cuál fué siempre la doctrina de la Iglesia sobre la pluralidad de beneficios?—La consideró en todos tiempos como un abuso contrario á la misma naturaleza de los oficios eclesiásticos, que exige sea un solo ministro el que desempeñe cada uno de ellos, y un solo beneficio el que tenga á su cargo cada uno de los ministros. Los Concilios de Calcedonia y segundo de Nicea condenaron ya la pluralidad simultánea, y aun la sucesiva, de los oficios eclesiásticos.

¿Qué inconvenientes produce para la Iglesia la pluralidad de sus beneficios?—Los siguientes: 1.º, que no es de creer que un solo ministro pueda desempeñar cumplidamente á la vez dos cargos; 2.º, que implica la infracción de la ley de residencia, cuando los beneficios radican en distintas igle-

sias; 3.º, que es motivo de avaricia para los ministros eclesiásticos; 4.º, que es causa de que se disminuya el número de éstos.

¿Qué dispusieron los Concilios III y IV de Letrán sobre la pluralidad de beneficios?—Se había generalizado escandalosamente este abuso en los siglos medios, tomando como pretexto que el oficio eclesiástico podía desempeñarse por mandatario ó procurador; y por consiguiente, que un mismo individuo podía poseer dos ó más. El Concilio III de Letrán prohibió que un solo ministro pudiese obtener dos dignidades ó dos parroquias, y dispuso que el poseedor de uno de estos beneficios que obtuviese otro, le perdiese y se privase de la potestad de conferir al que se lo hubiese conferido. El Concilio IV de Letrán avanzó más, determinando que, por el solo hecho de obtener un beneficio de las clases dichas ó un personado, el poseedor de otro, quedase privado del primero, estableciendo, no obstante, la excepción á favor de personas ilustres por su nacimiento y ciencia, á quienes tuviese por conveniente dispensar el Romano Pontífice.

¿Cuál fué el estado de la disciplina desde este Concilio hasta la celebración del de Trento?—Por haberse limitado aquel decreto á las dignidades, parroquias y personados, se admitió como doctrina corriente que todos los beneficios simples podían ser poseídos en pluralidad; y de aquí que se admitiese la clasificación de los beneficios en *residenciales* y *no residenciales*, *compatibles* é *incompatibles*, éstos de primero y segundo género: *uniformes* y *diformes*, los *uniformes sub eodem* y *sub diverso tecto*, *titulares* y *encomendados*, *unidos* durante la vida del beneficiado y *servidos en vicariato*. Por todas estas divisiones se logró corromper cada vez más la disciplina, y extender y arraigar el abuso de la pluralidad.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento sobre esto?—Lo siguiente: 1.º, prohibió retener muchas iglesias metropolitanas ó episcopales con ningún pretexto ni título; 2.º, prohibió también retener por ningún título más de una parroquia; 3.º, dispuso que de allí adelante no se confiriese más de un beneficio á cada clérigo, y que tan sólo en el caso de que las rentas de uno no bastasen para su congrua sustentación, pudiese conferirse otro simple, con tal que ambos no exigiesen residencia; 4.º, renovó la constitución del Concilio II de Lyon, por la cual los ordinarios obligarán estrechamente á que los que posean dos ó más curatos ó beneficios incompatibles, presenten las dispensas que se les hubiesen concedido, y en otro caso, procedan contra ellos con arreglo á dicha constitución.

¿Cuál es la práctica que en el día se observa cuando se obtiene un segundo beneficio incompatible?—Obtenido el segundo, vaca *ipso jure* el primero. La vacante no tiene lugar desde la aceptación del segundo, sino desde su toma de posesión quieta y pacífica; y por esta razón, si se le moviese pleito al beneficiado sobre su segundo beneficio, conservará entre tanto el primero.

De la colación de beneficios.

¿Qué es colación?—La concesión del beneficio, hecha libre y canónicamente por el que tiene legítima autoridad.

¿Cómo se divide la colación?—En *colación propiamente dicha* y *elección*. La primera es la concesión hecha por uno solo. La segunda es la hecha por varios.

¿A quién corresponde el derecho *ordinario* de conferir los beneficios?—Al obispo de la diócesis en que radique el beneficio concedido.

¿Quiénes tienen derecho á conferir beneficios por títulos especiales?—Desde el siglo XI son varias las personas ó corporaciones que adquieren el derecho de conferir por privilegio, costumbre ó transacción, porque, sepa-

rada desde entonces la colacion de beneficios de la ordenacion, se consideró que correspondia á la primera, no á la potestad de órden, sino á la de jurisdiccion, que puede adquirirse como las demás cosas eclesiásticas. Entre las corporaciones indicadas figuraron en primer lugar los cabildos catedrales, que adquirieron el derecho de conferir todos ó parte de los beneficios que radicaban en la iglesia catedral, con ó sin intervencion del obispo.

Vacante la silla episcopal, ¿á quien corresponde el derecho ordinario de conferir los beneficios eclesiásticos?—Al cabildo catedral, pero solamente respecto á los de patronato, previa la presentacion del patrono; á los electivo confirmativos cuando la confirmacion correspondia al obispo; á los que sean de libre colacion del mismo cabildo, y á los cuya colacion correspondia al obispo con el cabildo. Podrá tambien conferir los beneficios de libre colacion episcopal, no en caso de vacante, sino cuando, estando el obispo suspenso, es moroso en pedir la relajacion de la suspension.

¿En qué tiempo se han de conferir los beneficios?—Por regla general dentro de seis meses desde la vacante, exceptuándose los obispados, cuya eleccion se ha de efectuar dentro de tres, y los beneficios de patronato, respecto á los que conceden los cánones á los patronos legos cuatro meses, y á los eclesiásticos seis, para hacer la presentacion.

¿Qué es *derecho de devolucion* para conferir beneficios?—El que corresponde al superior inmediato para hacer la provision cuando el inferior no la ha hecho dentro del término legal, pasado el que se extingue su derecho, hasta el punto de que se anula la colacion que haga despues. Se entiende por superior inmediato el obispo respecto de su cabildo y demás coladores inferiores, y el metropolitano respecto del obispo. Si el colador moroso fuese un prelado *secular*, el derecho de devolucion corresponderá al superior inmediato; si fuese *regular*, corresponderá al obispo, como *delegado de la Silla apostólica*.

De la colacion pontificia.

¿Desde qué tiempo empezaron los Pontífices á intervenir en la provision de los beneficios de las diócesis?—Desde el siglo xii, por medio de los *mandatos de providendo* primero, y despues con las *reservas* y *prevenciones*.

¿Qué eran *mandatos de providendo*?—Ciertos diplomas expedidos por el Pontífice, en los que prevenia á un obispo que confiriese un beneficio al clérigo que le designaba.

¿Qué eran *reservas*?—Los decretos pontificios por los que el Romano Pontífice se adjudicaba la provision de ciertos beneficios, que de otro modo corresponderia á los obispos ú otros coladores inferiores.

¿Cuántas clases habia de *reservas*?—*Generales*, que comprendian todos los beneficios de una clase determinada, y *particulares*, que comprendian beneficios especiales. Habia otras muchas clases que procedian, ya del tiempo en que vacasen los beneficios, ya de la persona que los hubiese poseido, ya de otras circunstancias que hoy no tienen importancia alguna.

¿En qué tiempo se introdujeron y extendieron estos medios de provision apostólica?—Desde el siglo xiv, pontificado de Juan XXII, hasta los concilios de Constanza y Basilea, en el siglo xv.

¿Qué era *derecho de prevencion*?—El que tenia el Pontífice para conferir todos los beneficios en concurrencia con los *ordinarios*.

¿Qué dispuso el concilio de Basilea respecto á estos medios de provision?—Derogó todas las reservas, excepto las contenidas en el cuerpo del

derecho y las que correspondiesen al Romano Pontífice en sus Estados. Suprimió completamente las *gracias expectativas*; conservó el derecho de prevencion y los *mandatos de providendo*, si bien los limitó á uno por cada iglesia en que el colador ordinario no tuviese más de diez beneficios, y dos en las que tuviese cincuenta ó más.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento sobre la materia?—Abolió por completo las expectativas, mandatos de *providendo*, y reservas *mentales*, y conservó el derecho de prevencion y las reservas expresas en la forma que tenían de antiguo.

¿Qué se dispuso por lo que hace á la Iglesia de España en el concordato de 1763 respecto á la provision apostólica?—Se transfirieron á la Corona, en concepto de patrono, los derechos que hasta entonces correspondían á la Silla apostólica, con la sola excepcion de cincuenta y dos beneficios que ésta se reservó para su provision. En su consecuencia el patronato universal de la Corona fué reconocido y se extendió: 1.º, á la presentacion para todos los beneficios consistoriales en España é Indias; 2.º, á la nominacion para todos los beneficios menores del reino de Granada y de las Indias; 3.º, á la nominacion de la primera silla *post Pontificalem* de todas las iglesias catedrales y colegiatas de España; 4.º, á la de todos los beneficios menores que vacasen en los ocho meses apostólicos, correspondiendo las vacantes de los otro cuatro á los ordinarios; 5.º, á la de las vacantes en estos cuatro meses, estándolo también la Silla episcopal; 6.º, á la de los beneficios que vacasen por promocion de sus poseedores á alguno de los cincuenta y dos reservados á Su Santidad, y 7.º, á la de los que vacasen *apud Sedem apostolicam*.

¿Qué alteraciones introdujo en esta materia el concordato de 1854?—En vez de los cincuenta y dos beneficios reservados, segun se ha dicho, á Su Santidad, lo quedó la dignidad de chantre en todas las iglesias metropolitanas y en veintidos sufragáneas, y en las demás una prebenda de gracia. La dignidad de dean se adjudicó á la Corona. Las demás dignidades, canonjías y capellanías asistentes, habrán de proveerse en rigorosa alternativa por los obispos y el monarca. Todos los beneficios curados de provision ordinaria, sin diferencia del mes en que vauen, han de proveerse por la Corona, á propuesta en terna de los ordinarios.

De las cualidades de los que hayan de obtener beneficios y de los que se confieren por concurso.

¿Qué edad se necesita para obtener beneficios?—Para el episcopado, treinta años cumplidos; para las dignidades con cura de almas y para las parroquias, veinticinco principiados; para las demás dignidades y oficios sin cura de almas, veintidos cumplidos; para los canonicatos de iglesia catedral, la edad necesaria para recibir la orden propia del canonicato, y por consiguiente veinticinco empezados, porque segun el último concordato todas las canonjías son presbiterales. Para la prebenda del penitenciario, cuarenta, ó á lo menos más de treinta, si no hubiese persona de aquella edad apta. Estas reglas generales no derogan las especiales de la fundacion que exijan mayor edad.

¿Qué orden han de tener los beneficiados y cuándo la han de tener?—Por regla general, basta la prima tonsura para los beneficiados simples, exigiéndose orden superior hasta el presbiterado, segun las funciones en que consista el cargo anejo al beneficio. No es necesario el orden al tiempo de la colacion, bastando que se reciba en el año siguiente á la toma de posesion quieta y pacífica del beneficio. Los que no lo reciban en este tiempo

perderán *ipso facto* el beneficio si es parroquia, y previa la correspondiente *monición* canónica en otro caso, pero siempre será preciso oír al beneficiado moroso.

¿Qué ciencia necesitan los beneficiados?—Por regla general la indispensable para desempeñar sus cargos, siendo los beneficiados curados los que requieren mayor aptitud científica. Según el Concilio de Trento, los obispos, dignidades de iglesias, catedrales y colegiatas, canónigos de oficio y la mitad de los demás prebendados han de ser graduados en teología ó derecho canónico.

¿Quiénes se reputan inhábiles para obtener beneficios?—Los ilegítimos, los casados, los hijos de los herejes que hubieren muerto en la herejía y sus fautores hasta el segundo grado en la línea paterna y el primero en la materna, los criminales por delito que lleva la pena de privación de beneficio, los incursores en excomunión ú otra censura hasta ser absueltos, y los irregulares. En España son también inhábiles los extranjeros, á no obtener carta de naturaleza.

¿Cómo deben proveerse según el Concilio de Trento los beneficios curados?—Por concurso, que puede ser general ó particular, y que debe ser convocado, siendo particular, á los diez días de la vacante del beneficio. En él serán examinados los que se presenten ó haya elegido el obispo por éste y otros tres examinadores, confiriéndose el beneficio por el colador á quien corresponda al que resulte más digno.

¿Qué modificaciones introdujo en esta forma de provision San Pío V?—Admitió la apelacion del fallo del obispo y examinadores, pero sólo en el efecto devolutivo para ante el metropolitano; ó si la apelacion se interponia del fallo de éste, para ante el obispo más inmediato. Hoy es para ante la Rota.

¿Qué dispusieron los pontífices Clemente XI y Benedicto XIV sobre el concurso?—1.º, que el exámen de todos los opositores versase sobre las mismas materias; 2.º, que éstos pusiesen por escrito el sermón que tienen que hacer y las respuestas que tienen que dar á las preguntas científicas que se les hagan; 3.º, que la duracion de los ejercicios fuese igual para todos; 4.º, que á todos se concediese el mismo tiempo de preparacion; 5.º, que se les pusiese en completa comunicacion, y 6.º, que no se admitiese la apelacion del juicio en concurso si no se interponia en los diez días siguientes á la colacion del beneficio.

¿Cuál es la disciplina de España respecto al concurso?—Se observa la práctica del arzobispado de Toledo. Se convoca á concurso cada dos ó tres años para la provision de todos los beneficios curados que hayan vacado en este tiempo. Los que son de patronato de la Corona se previstan por ésta en virtud de propuesta, que eleva el obispo, de tres aprobados en el concurso. Los beneficios de patronato eclesiástico se previstan eligiendo el patrono uno de los tres más dignos que le presenta el obispo, para que él á su vez presente al colador al que de ellos haya elegido. Si son los beneficios de patronato laical, también deben los patronos presentar al obispo á quien haya sido aprobado en concurso.

¿Qué son examinadores sinodales?—Los encargados por el obispo de hacer el exámen de los clérigos de la diócesis que por cualquiera concepto tengan que someterse á él. Son de dos clases: ó nombrados por el sínodo diocesano ó por el cabildo en su defecto, y éstos son los que intervienen en el concurso para la provision de los beneficios curados, ó nombrados libremente por el obispo, y éstos intervienen en el exámen de los ordenados y de los que solicitan licencias para confesar y predicar.

¿Cuántos son y qué cualidades han de tener los examinadores de la primera clase?—Han de ser seis, por lo menos, maestros licenciados ó doctores en teología ó derecho canónico, ó cuya idoneidad conste de otro modo. Su nombramiento, no haciéndose en sínodo, corresponde al obispo y ca-

bildo, previa la autorizacion de la congregacion de la interpretacion del concilio. Dura hasta que hayan fallecido los nombrados sin quedar seis supervivientes. Todos los que de ellos toman parte en el concurso han de prestar antes juramento de desempeñar bien su cargo.

¿Qué otros beneficios se confieren tambien por concurso?—Las cuatro prebendas de oficio, á saber: la penitenciaria, lectoralia, magistralia y doctoralia. Pero los jueces de este concurso son el obispo y el cabildo catedral. Si las prebendas dichas son de la provision de éstos, su eleccion tiene la fuerza de colacion; si son de patronato real, proponen en terna á la Corona de entre los más dignos de los opositores.

Del derecho de patronato.

¿Qué es derecho de patronato?—El conjunto de prerogativas concedidas por la Iglesia á los fundadores ó dotantes de iglesias ó beneficios. Estas prerogativas son *útiles, honoríficas y onerosas*, siendo entre todas la principal la de *presentacion*, que consiste en presentar al colador un sugeto idóneo para que le confiera el beneficio vacante.

¿Cuál es el fundamento y antigüedad del derecho de patronato?—La concesion de la Iglesia, que quiso remunerar con él á sus bienhechores. Comienzan sus orígenes en Occidente en el siglo v, aunque en concepto de concesion personalísima y no trasmisible, desarrollándose hasta alcanzar su actual estado en los siglos medios, sin que pueda fijarse con precision el año ni el motivo con que esto se efectuó.

¿Cómo se divide el derecho de patronato?—Primeramente en *eclesiástico, laical y mixto*: aquél es el que corresponde á alguna iglesia, dignidad ú oficio eclesiástico; laical el que corresponde á personas ó corporaciones legas, ó que aunque sean eclesiásticas lo tienen, no en consideracion á ninguna fuerza ó dignidad eclesiástica, y mixto es el que participa de la naturaleza de ambos y de sus cualidades más favorables.

¿A qué se ha de atender para calificar un patronato dado?—A la voluntad del fundador, y no existiendo la fundacion, á la clase de bienes con que haya sido fundado el beneficio, y á la costumbre.

¿Qué más divisiones se hacen del patronato?—En *real*, que es el que vá unido á alguna cosa, título ó derecho, y *personal*, que es el que corresponde á la persona por sí misma y sin consideracion á ninguna cosa. El *real* puede ser *eclesiástico* ó *laical*; el *personal* es siempre *laical*. Este se subdivide tambien en *hereditario*, que es el que pasa á los herederos del fundador, *familiar*, que pasa á los individuos de su familia, y cuando, segun la fundacion, se comprenden tambien los colaterales, se llama *gentilicio*. El *familiar* puede ser *lineal*, que es el á que es llamada una linea con preferencia á los demás parientes; *primogenial*, al que son llamados los primogénitos; simplemente *descendental*, al que son llamados los descendientes del fundador, y en fin, *mixto* de hereditario y familiar, que es el que participa de ambos. El patronato *hereditario* puede convertirse en *familiar*, pero no vice-versa.

¿Qué otra division se conoce del patronato?—Se divide en *activo y pasivo*: el primero es el definido, el segundo es el derecho concedido por el fundador á ciertos individuos para obtener con preferencia á todos los demás el beneficio. Se distinguen el uno del otro en que el *activo* puede recaer sobre una iglesia ó un beneficio, el *pasivo* tan sólo sobre una iglesia; del *activo* son capaces las mujeres y niños, del *pasivo* tan sólo los varones aptos para recibir las órdenes.

¿Quiénes son incapaces de adquirir ó retener el derecho de patronato?—

Los judíos, infieles y herejes, y los excomulgados con excomunion mayor, si son contumaces.

¿De cuántos modos se adquiere el derecho de patronato?—De cuatro: por *fundacion, reedificacion ó redotacion, prescripcion y privilegio*.

¿En qué casos la fundacion es modo de adquirir este derecho?—Cuando es de un beneficio y el fundador donó á la iglesia los bienes bastantes para la congrua sustentacion del clérigo que ha de servirlo; ó siendo de una iglesia, cuando donó el fundo, hizo la construccion de la iglesia y la dotó convenientemente. Si no fué uno sólo el fundador, todos los que lo hayan sido adquirirán *in solidum* el derecho de patronato. Debe advertirse que no es necesario que los fundadores lo reserven expresamente para que les corresponda.

¿En qué casos es modo de adquirirlo la reedificacion ó redotacion?—Cuando consiste la redotacion por lo ménos en la mitad de la renta necesaria, y la reedificacion en obras indispensables para que la iglesia pudiese subsistir. A diferencia del caso anterior, es indispensable la vólia del obispo para adquirir el patronato por este título, y aquél no podrá concederla sino por evidente necesidad ó utilidad de la iglesia ó beneficio.

¿Qué tiempo es necesario para que por *prescripcion* se adquiriera el patronato?—Cuarenta años si es contra otro patronato, y tiempo inmemorial si es sobre una iglesia ó beneficio libre.

¿A quién correspondió y corresponde conceder el patronato por privilegio?—Hasta el siglo xv, no sólo al Pontífice, sino á los obispos. El Concilio de Trento quitó á éstos la facultad, y desde entonces sólo el Pontífice puede concederlo, pero por necesidad ó utilidad de la iglesia.

¿De cuántos modos se trasfiere el patronato?—Si es *laical personal* pasa á los herederos ó á los individuos de la familia del fundador, segun las cláusulas de la fundacion. Si es *real* pasa con el fundo, derecho ó título á que vaya unido. Si es *eclesiástico* sigue á la dignidad ú oficio á que se halla adherido. Se trasfiere igualmente por permuta, por donacion y por venta de la cosa á que esté anejo.

¿Cómo se prueba el derecho de patronato?—1.º, por la fundacion; 2.º, en su defecto, por presentaciones realizadas hechas durante cien años; 3.º, por testigos que depongan sobre él como existente desde tiempo inmemorial; 4.º, por las enunciativas del mismo, hechas en varios documentos auténticos, y especialmente en decretos episcopales ó del Romano Pontífice. Si el patronato se pretende para una corporacion ó persona en que pueda recaer sospecha de usurpacion, será indispensable acreditar, no existiendo la fundacion, la posesion inmemorial y presentaciones llevadas á efecto en un periodo de cincuenta años.

¿Qué es derecho de *presentacion*?—El nombramiento que hace el patrono, hecho saber al colador de un sugeto para el beneficio vacante.

¿En qué tiempo el patrono debe hacer la presentacion?—Dentro de cuatro meses si es lego, y dentro de seis si es eclesiástico, á contar desde que haya llegado ó debido llegar á su noticia la vacante.

¿En qué formas puede hacerse la presentacion si son varios los patronos?—O *colectiva, ó separadamente, ó por turno*. En el primer caso la presentacion toma la forma de la eleccion; en el segundo cada patrono hace constar su voto separadamente por escrito, y el que obtenga la mayoría absoluta se considerará el presentado, y no teniéndola ninguno, el obispo podrá elegir entre todos los que hayan obtenido votos. Tiene lugar por turno quando sucesivamente cada uno de los copatronos hace la presentacion en nombre de todos los demás. Para que pueda hacerse en esta forma es necesario que la hayan consentido todos los interesados.

¿Qué diferencias hay entre el patrono lego y el eclesiástico respecto á la presentacion?—1.ª, la del tiempo, ya indicada; 2.ª, el patrono eclesiástico

no puede presentar de cada vez más que á uno, y el lego á varios; 3.ª, el patrono eclesiástico que presenta á un indigno pierde por aquella vez su derecho; no así el lego; 4.ª, los patronos eclesiásticos estarán sujetos á las reservas pontificias, y no los laicales, y 5.ª, los beneficios curados de patronato eclesiástico habian de conferirse por concurso; no así los de patronato laical. Esta diferencia casi desapareció por el concordato de 1851.

¿Qué es *institución*?—La colacion del beneficio, hecha por el obispo en el presentado por el patrono.

¿Qué otros derechos corresponden al patrono además de la presentación?—1.º, el de alimentos para cuando caiga en estado de pobreza sin culpa suya y tenga la iglesia sobranste con que atender á sus necesidades: la cantidad de los alimentos guardará relacion con la posición social del patrono y las rentas de la iglesia; 2.º, el de inspeccion sobre la iglesia ó beneficio del patronato para inquirir privadamente si se cumplen las cargas y administran bien los bienes, poniendo los abusos en conocimiento del obispo; pero este derecho no implica el de intervenir en la administracion de los sacramentos y de los bienes, ni en la visita de ornamentos; 3.º, el de que se pueda inscribir su nombre ó sus armas en la iglesia, que se haga mencion de él en las preces públicas, se le conceda asiento de distincion en aquélla, y otros honores.

¿Cuáles son los modos de perderse el derecho de patronato?—La voluntad del fundador, algun hecho del patrono y la naturaleza de las cosas. Existe el segundo de los dichos cuando el patrono deja prescribir su derecho ó comete algun delito penado por los cánones, con la pérdida del mismo. Se dá el tercero cuando se arruina la iglesia ó se destruye el beneficio.

Modos de perder los beneficios eclesiásticos.

¿De cuántos modos se pierden los beneficios eclesiásticos?—*Ipsa jure*, por sentencia judicial ó por voluntad del mismo beneficiado, en virtud de renuncia, permuta ó traslacion.

¿Qué es renuncia?—La dimision libre y espontánea del beneficio, hecha expresa ó tácitamente por el beneficiado ante el superior legítimo.

¿De cuántas clases puede ser la renuncia?—*Pura ó condicional*, segun que se haga en una forma absoluta ó haciéndola depender de alguna circunstancia.

¿Cuál fué la doctrina de la Iglesia sobre las renunciaciones en los doce primeros siglos?—No las admitia por ser contrarias al vínculo perpétuo, en virtud del cual el beneficiado quedaba ligado á su iglesia por la ordenacion.

¿Qué causas se consideraron bastantes para la legitimidad de la renuncia desde el siglo XIII?—El peligro de muerte, la debilidad corporal, la falta de ciencia, la conciencia de un crimen grave, la malicia de la plebe y la irregularidad.

¿Ante quién debe hacerse la renuncia y con intervencion de qué personas?—La de los obispados ante el Romano Pontífice, y la de los beneficios menores ante el obispo. Si el beneficio es de patronato ó electivo, debe hacerse con el consentimiento de los patronos ó electores, de cuyo requisito se puede prescindir cuando se niegan sin causa á prestarlo.

¿Qué es resignacion?—La dimision que hace el beneficiado de un beneficio con la condicion de que se le confiera á la persona que designa.

¿Qué carácter tienen las resignaciones?—Son censurables ó inadmisibles, por regla general, porque tienden á violar las leyes de la Iglesia sobre provision de beneficios.

¿Con qué condiciones pueden tolerarse?—Haciéndolas ante el Romano Pontífice con atestado del ordinario, acreditando la idoneidad canónica del resignatario. Si el beneficio resignado es parroquial, ha de sufrir examen aquél ante los sinodales, y además ha de tener treinta años de edad.

¿Qué es permuta?—La resignacion reciproca que hacen dos beneficiados de sus respectivos beneficios.

¿Qué circunstancias ha de tener para que sea admisible?—Se ha de hacer ante el obispo, con causa justa y sin interés ni consideracion personal. Han de ser análogos los beneficios permutados, los dos cóngruos y ninguno de ellos litigioso.

¿Quiénes pueden renunciar los beneficios y en qué forma?—Todos los beneficiados mayores de catorce años, personalmente ó por medio de procurador, con poder especial que conste por instrumento público.

¿Qué beneficios son irrenunciables?—Los que hayan servido de título de ordenacion al beneficiado, si por otra parte no tiene asegurada la cóngrua sustentacion. Siendo la renuncia condicional, es necesario que no aparezca hecha con fraude ó por interés pecuniario, no siendo por esto válida la que se haga con reserva de pension, ó sin haber desempeñado antes tres años el beneficio, ó cuando por cualquiera causa lo vá á perder el renunciante. Por lo mismo tampoco es admisible la permuta de un beneficio residencial con otro que no lo es.

De la traslacion.

¿Qué es traslacion?—La mutacion del obispo de una silla á otra, en virtud de la cual queda vacante la primera y se encarga del gobierno de la segunda como pastor propio.

¿Qué dispusieron los concilios de Nicea y Sardis sobre la traslacion de los obispos?—El primero las prohibió y declaró nulas, y el segundo privó á los trasgresores de la comunión laical aún al fin de la vida, cuyo rigor se mitigó en las Decretales de Gregorio IX.

¿Cuáles son las justas causas de traslacion de los obispos?—La necesidad ó utilidad de la iglesia general ó de las iglesias particulares.

¿A quién corresponde autorizar la traslacion de los obispos?—Al Romano Pontífice desde el siglo XII, así como antes al concilio provincial. En España las traslaciones no pueden hacerse sino en virtud de presentacion de la Corona.

Del peculio de los clérigos.

¿De qué clases son los bienes de los beneficiados?—*Patrimoniales*, que son los que les pertenecen por título privado; *profecticios*, que son los que adquieren por su ministerio ó por los frutos de su beneficio. A éstos se les llama *peculio*.

¿Qué es *cóngrua* sustentacion?—La cantidad de bienes necesarios para la frugal y moderada alimentacion y sostenimiento de los ministros eclesiásticos. Tienen derecho á ella todos, una vez que dedican su trabajo al servicio de la Iglesia.

¿A qué están obligados los beneficiados respecto á los frutos de sus beneficios?—A distribuir en usos piadosos y entre los pobres el resto, despues de cubiertas moderadamente sus necesidades; y teniendo bienes pa-

trmoniales con que subsistir, según la opinion más pura, deben destinar á aquellos usos *todos* sus bienes profecticios.

¿Qué consecuencia se deduce de esta doctrina?—Que no deben testar los beneficiados de sus bienes profecticios. Así en efecto les estuvo prohibido hasta el siglo XII, si bien desde entónces se les toleró esta facultad á los beneficiados menores en España, pero no á los obispos.

¿A quién, pues, deben corresponder los *espolios* y *vacantes*, esto es, los bienes que deja el obispo á su muerte y los frutos de la mitra durante la vacante?—A la Iglesia, si bien en los siglos medios se introdujo diversa disciplina por el derecho de regalia en Francia y las reservas pontificias. Por el primero los reyes de Francia perseguían las rentas de los obispados vacantes, y conferían los beneficios que no tenían aneja la cura de almas mientras durase la vacante. Por las segundas los Pontífices reservaron las vacantes y los espolios al erario pontificio.

¿Cuál fué la disciplina de la Iglesia española?—Se introdujo tambien aquí la reserva pontificia, hasta que en el concordato de 1753 se acordó que la Corona nombraría *colectores* que recaudasen los espolios y vacantes, para destinarlos á los usos prescriptos por los sagrados cánones. Por el concordato de 1851 se facultó á los obispos para testar, dejando por lo tanto ya de haber espolios, y se organizó de otra manera la administracion de las vacantes.

6M

DE LOS DELITOS Y PENAS ECLESIAÍSTICAS.

De la apostasia.

¿Qué es *apostasia*?—El abandono voluntario de la fé cristiana, profesada en el bautismo. En el sentido lato se denominaba tambien así: «el abandono que hacia el catecúmeno de la fé cristiana, por más que no la hubiese profesado todavía en el bautismo».

¿Qué clases de apostasia hay según los cánones?—La de los que se pasaban al judaismo, la de los que se pasaban al gentilismo; la de los *turificadores* y *sacrificadores*; la de los *libeláticos*, y la de los *factores* de herejía. Tambien se denomina apostasia el abandono de la vida monástica ó clerical.

En qué se diferenciaban los apóstatas de la primera y de la segunda clase?—En que los de la primera eran siempre voluntarios, y entre los de la segunda habia muchos forzosos.

¿Qué eran los apóstatas de las tercera, cuarta, quinta y sexta clases?—Los de la tercera eran los que habian ofrecido á los ídolos incienso y vino como sacrificio. Los de la cuarta habian comido en el templo carnes sacrificadas á los ídolos. Los de la quinta eran los que, sin haber abandonado la fé cristiana en realidad, obtenian del magistrado un libelo en que se decia que habian sacrificado á los ídolos. Y los de la sexta eran los que, sin abandonar la fé cristiana, desempeñaban algun cargo, como el de los *flamines*, que tenía conexión íntima con las funciones idolátricas.

¿En qué penas incurrian los apóstatas, ya por los antiguos cánones, ya despues por las leyes imperiales?—Por los cánones, si se habia hecho el apóstata verdaderamente reo de idolatria, se le privaba en las iglesias romana, africana y española de la comunión aun al fin de la vida. Por regla

general en todas se sometía al apóstata á la penitencia pública, más ó menos duradera y rigurosa, segun las circunstancias del delito; cumplida la cual se le recibía en la comunión. Por una ley de Teodosio se dictaron contra los apóstatas las siguientes penas: privacion de la testamentificacion activa y pasiva, y de hacer donaciones y ventas, infamia perpétua, y aún la pena capital al que hiciese apostatar á otro.

¿Qué penas se señalaron contra los que abandonasen la vida religiosa?—Por derecho comun se previno unas veces que se les excomulgase, otras que incurriesen *ipso facto* en excomunion y en irregularidad. Por las constituciones de las mismas órdenes se les declaró inhábiles para elegir ni ser elegidos prelados, y se les impuso la pena de cárcel, ayunos y otras penitencias arbitrarias á discrecion del superior.

¿Qué penas se impusieron contra los que abandonasen la vida clerical?—Entendiéndose que estas penas no proceden desde el siglo XII contra los clérigos de órdenes menores, las establecidas contra los apóstatas de mayores son: excomunion, irregularidad, pérdida del privilegio del fuero y aun prision.

De la herejía.

¿Qué es *herejía*?—El error voluntario del entendimiento de un hombre cristiano en puntos de fé, con pertinacia de la voluntad.

¿Qué circunstancias son precisas para que haya herejía?—Que el error recaiga en materias de fé, que éstas hayan sido definidas como dogmas por la Iglesia y que el error sea pertinaz.

¿Qué clases hay de herejía?—*Material* y *formal*: la primera es el error en materias de fé por ignorancia y sin pertinacia; la *formal* es la definida anteriormente. *Interna* y *externa*, segun que no se haya manifestado todavía ó se haya hecho pública por palabras y por hechos. *Ocultas* y *manifestas*: la primera no es conocida de nadie, ó lo es de pocas personas, y de muchas la segunda.

¿Qué es sospecha de herejía?—Los indicios ó conjeturas que hacen dudar de la pureza de la fé de un cristiano.

¿Qué clases de sospechas se conocen?—Leve, vehemente y violenta, segun que los indicios en que consistan tengan más ó menos fuerza probatoria. La violenta constituye una presuncion *juris et de jure*.

¿Qué penas se impenen en los cánones á los herejes?—La excomunion *late sententie*, en la que incurren tambien los que protegen, encubren ó defienden, y la irregularidad con infamia, de la que igualmente participan los sobredichos. Esta irregularidad se extiende á los hijos y nietos del padre hereje y á los hijos tan sólo de la madre, si ésta y aquél murieron en la herejía. Los clérigos herejes son privados perpétuamente de sus cargos y beneficios. Por último, los herejes no pueden ser enterrados en lugar sagrado.

¿Qué penas se imponian por las leyes de España á los herejes?—La de muerte y confiscacion de bienes, que eran tambien las impuestas en las leyes de casi todos los Estados de Europa, sin que la Iglesia las haya dispensado nunca su aprobacion expresa.

¿Quién puede absolver del delito de herejía?—Solamente el obispo, previa la abjuracion, que comprende la retractacion de la herejía y la profesion de la fé católica, con la cual el hereje vuelve á la comunión eclesiástica y se le remiten la mayor parte de las penas.

Del cisma.

¿Qué es *cisma*?—La disolución de la unidad eclesiástica por causa de discordias intestinas, permaneciendo íntegra la fe de la Iglesia.

¿Qué clases hay de *cisma*?—*Interno* y *externo*: el primero se limita á una iglesia particular, y el segundo media entre dos ó más iglesias particulares. Este puede ser *particular* ó *universal*. El particular no rompe la armonía de las iglesias entre sí cismáticas con la católica. El segundo, por el contrario, rompe los vínculos de las iglesias cismáticas con el centro de la unidad.

¿Qué penas señalan los sagrados cánones al cisma?—Si al cisma va unida la herejía, las señaladas para este delito; en otro caso los cismáticos incurren en excomunión *ipso facto*, quedan suspensos en el ejercicio de las órdenes y pierden la idoneidad para adquirir y retener beneficios. Estas penas se imponen á los factores del cisma, pero no á la masa de los fieles.

De la simonía.

¿Qué es *simonía*?—La deliberada voluntad de comprar ó vender por un precio temporal alguna cosa espiritual.

¿Qué se entiende por *precio* en materia de simonía?—Segun la fórmula de San Gregorio Magno, el *manus á manu*, á *lingua* y *ab obsequio*. El primero es el dinero ó cualquiera otra cosa que esté en el comercio, el segundo son las recomendaciones de personas extrañas, y el tercero son los servicios personales prestados.

¿Cómo se clasifican las cosas espirituales para los efectos de la simonía?—En *secundum essentiam*, *secundum causam* y *secundum effectum*. Las primeras son los dones del Espíritu Santo y en general las cosas que son espirituales por su misma naturaleza. Las segundas son las que, aunque en sí mismas no son espirituales, producen, no obstante, otra espiritual, como los sacramentos. Las terceras son las que, no siendo en sí mismas espirituales, son resultado de otra espiritual.

¿Qué especies hay de simonía?—De derecho *divino* y de derecho *eclesiástico*, por razón de la ley que la haya declarado. *Mental*, *convencional* y *real*, por razón de los que la cometan, subdividiéndose la *real* en *expresa*, *tácita* y *confidencial*. La simonía de derecho divino tiene lugar en la negociación de las cosas eclesiásticas por su naturaleza; la de derecho eclesiástico, en la de las cosas que la Iglesia ha reputado espirituales, por más que no lo sean por su naturaleza. La *mental* consiste en el propósito interno y no manifestado de cometer este delito. La *convencional* se comete por pacto expreso, aunque no se haya cumplido después, y la *real* tiene lugar cuando se ha hecho la entrega del precio por la cosa espiritual. La *real expresa* es la que se comete sin apariencias de ocultación. La *tácita* consiste en dilatar la concesión de una cosa espiritual hasta obtener una ventaja temporal. Llámase *simonía confidencial* cuando un beneficiado recibe el beneficio, ó bien para dimitirlo á favor de otra persona con quien al efecto se ha convenido, ó bien con la obligación de dar á un tercero una parte de los frutos. Debe advertirse que puede haber delito de simonía sin que lo haya cometido el que recibe la cosa espiritual.

¿En qué casos, sin cometer el delito de simonía, se pueden recibir cosas

temporales al conferir las espirituales?—En aquéllos en que las primeras no se reciban ó no se exijan, expresa ó tácitamente, como precio de las segundas.

¿Qué penas establecieron los santos cánones contra el delito de simonía?—1.^a, la excomunion *lata sententie* contra el ordenante y ordenado, el colador y el beneficiado; y, en una palabra, contra todos los coreos; 2.^a, la suspension del ordenante y ordenado cuando se ha cometido en la ordenacion; 3.^a, la nulidad de la colacion, si se ha cometido en la provision de beneficios, y de todos los actos que ejecute el beneficiado, aunque él esté inocente del delito; 4.^a, la irregularidad, y 5.^a, la obligacion de devolver todos los frutos percibidos; la simonía *confidencial* se castiga con la nulidad de la colacion simoniaca, con la pérdida de todos los beneficios obtenidos legitimamente, y respecto á los obispos y superiores que la hayan cometido, con la privacion de entrada en su iglesia.

De la blasfemia y sacrilegio.

¿Qué es blasfemia?—Un ultraje hecho por medio de la palabra á la majestad de Dios y á los santos ó á los misterios de la religion.

¿Cómo se divide la blasfemia?—En *enunciativa* é *imprecativa*. La primera consiste en la negacion de alguno de los atributos de la divinidad. La segunda en frases de maldicion, ira ú otras que redundan en desprecio de Dios.

¿Qué penas se imponen por los cánones á los blasfemos?—Por las Decretales se les somete á penitencia pública, y cuando son clérigos se les priva de sus beneficios. Los que no cumplan la penitencia pueden ser excomulgados.

¿Qué penas se establecen en el derecho español contra los blasfemos?—Por el derecho antiguo se les castigaba con la pérdida de una parte proporcional de sus bienes, siendo nobles; y siendo plebeyos, con azotes y marca. Por el Código penal vigente, con las penas de arresto, reprension y multa.

¿Qué es sacrilegio?—La violacion de las cosas sagradas.

¿Qué clases hay de sacrilegio?—*Personal*, *local* y *real*. Se comete el primero contra las personas consagradas á Dios; el segundo invadiendo, destruyendo ó incendiando los lugares sagrados, interrumpiendo violentamente las funciones religiosas y alterando de igual modo el orden en las iglesias. Se comete el tercero hurtando, robando y empleando en usos profanos las cosas consagradas á Dios, ó robando en las iglesias cosas profanas.

¿Qué penas se establecen en los cánones contra los sacrilegos?—Se faculta al juez, por regla general, para imponer una extraordinaria cuando no se halle establecida especialmente en aquéllos que señalan la de excomunion *lata sententie* á los que persiguen á los clérigos y monjes, á los que violan la inmunidad eclesiástica y á los que quebrantan, destruyen ó incendian las iglesias ó las despojan de sus bienes.

De los delitos contra la castidad.

¿Qué es adulterio?—La union ilícita de personas, alguna de las cuales está ligada con el vínculo del matrimonio.

¿Qué clases hay de adulterio?—*Simple* y *doble*. El primero tiene lugar

cuando solamente uno de los adúlteros es casado, y doble cuando lo son los dos.

¿Qué penas establecen los cánones contra el adulterio?—La excomunión, si el adúltero es lego, y si es clérigo la deposición y encierro perpetuo en un monasterio.

¿Qué es estupro?—La desfloración ilegítima de una mujer virgen. Se divide en voluntario é involuntario. El primero se comete con el consentimiento de la estuprada, y el segundo empleando la fuerza ó la seducción.

¿Qué penas se establecen por los cánones contra el estupro?—Siendo el reo lego, la de dotar á la estuprada ó casarse con ella; siendo clérigo, la de dotarla y además otra arbitraria, que le impondrá el juez, según las circunstancias del caso.

¿Qué es fornicación?—La cohabitación entre personas que no están ligadas entre sí por ningún vínculo, y que podrían unirse en matrimonio.

¿Qué penas estableció el Concilio de Trento contra los concubinarios legos y eclesiásticos?—Contra los primeros la de excomunión, si amonestados tres veces no se apartasen, procediendo á mayor rigor el ordinario si no fuese bastante con la pena impuesta, y que el mismo castigue de oficio á las mujeres concubinas, hasta expulsarlas de la población, si fuese preciso. Contra los eclesiásticos, la pena de privación de la tercera parte ó de todos los frutos del beneficio, si amonestados convenientemente no se apartan de sus concubinas. Si aún así no fuere bastante, la de suspensión; después de ésta, la de deposición y declaración de indignos para obtener cualquiera oficio eclesiástico; después de todo esto, la de excomunión, debiendo proceder los obispos en esta materia sin guardar las solemnidades judiciales, y sin que de sus providencias pueda interponerse apelación con efecto suspensivo.

¿Qué es incesto y cuáles son sus penas?—La unión carnal fuera del matrimonio entre los consanguíneos ó afines. El clérigo reo de este delito es declarado infame y depuesto de sus beneficios. El lego se le declara del mismo modo infame é incurre en la pena de excomunión *ipso jure*.

¿Qué es rapto?—La sustracción violenta de una mujer con la intención de abusar carnalmente de ella.

¿Qué es sacrilegio?—La unión carnal con una mujer consagrada á Dios por voto solemne de castidad.

¿Con qué penas castigan los cánones á los sacrilegos?—Si son legos, con la de excomunión; si son eclesiásticos, con la de deposición y encierro perpetuo en un monasterio. A la monja sacrilega se la encierra en prisión dentro del monasterio, y se la somete á penitencia.

De las penas, censuras y penitencias eclesiásticas.

¿Qué es penitencia?—La compensación hecha á Dios por la injuria que se le ha causado por el pecado, con el propósito de no ofenderle y con la esperanza de obtener su perdón.

¿A quién corresponde la potestad de perdonar los pecados?—A la Iglesia en el sacramento de la Penitencia, que administran los presbíteros, competentemente autorizados por su obispo.

¿Cómo se llaman los Códigos formados por la autoridad eclesiástica regulando las penitencias en proporción á los pecados?—Libros penitenciales, que empezaron á conocerse en las iglesias, así oriental como occidental, desde el siglo III; siendo entre los de aquella muy notables los de San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, San Basilio y San Juan Crisóstomo; y

en Occidente, el de Teodoro de Cantorbery, en el siglo vii; el de Beda, en el viii, y de Raban Mauro, en el ix.

¿Qué especies hay de penitencia?—*Sacramental*, que es la que se impone al administrar el sacramento, y otra que se impone por la autoridad eclesiástica en el fuero externo, la cual puede ser *general* ó *particular*: la primera es la que se impone á todos los fieles, y la segunda á alguno en particular por sus pecados. Esta puede ser voluntaria ó forzosa, segun que el pecador se la imponga á sí mismo, ó bien se la imponga una sentencia judicial.

¿Qué era la penitencia pública y cuándo tenía lugar segun la disciplina primitiva?—La que se hacia pública ó individualmente por los cristianos. Tenia lugar: 1.º, cuando éstos se habian hecho reos de pecados públicos, y aun segun la opinion de algunos, por los pecados secretos de la mayor gravedad; 2.º, cuando habian sido condenados por los jueces seculares como reos de algún delito, sucediendo lo mismo cuando se hacian reos de crimen eclesiástico; 3.º, cuando sin ser condenados por él, se hacia, no obstante, público el delito que habian cometido en secreto; y, finalmente, cuando los mismos pecadores, sin estar á ello obligados, ó cualesquiera fieles, por mera devocion, se sometian á penitencia pública.

¿En qué grados ó estaciones se divide esta penitencia?—En cuatro, desde la mitad del siglo iii, á saber: el de los *flentes*, *audientes*, *abstracti* y el de los *consistentes*. Los primeros estaban fuera de la iglesia confesando públicamente sus pecados, con las vestiduras rasgadas, de luto y ceniza en la cabeza. Los segundos entraban ya dentro del templo, para oír las Sagradas Escrituras y la predicacion, concluido lo cual abandonaban la iglesia. Los *abstracti* entraban en la iglesia hasta el púlpito, para recibir la imposición de manos del obispo, hecho lo cual tambien se salian. Y los *consistentes* asistian á todo el oficio; pero ni participaban de la Eucaristía, ni se admitian sus oblationes. Además los penitentes, por regla general, estaban sujetos á otras privaciones de cosas lícitas, como los baños, convites, la celebracion y el uso del matrimonio, etc., y debian orar de rodillas los domingos y dias festivos, entre tanto que los demás cristianos lo hacian de pie.

¿Qué personas no estaban sujetas á penitencia pública?—Los jóvenes, las mujeres adúlteras, los casados y los clérigos de orden sacro.

¿Cuándo cesó el uso de las penitencias públicas?—En Oriente, en el siglo iv, el patriarca Nectario las suprimió para la iglesia de Constantinopla, cuyo ejemplo imitaron despues las demás de aquellas regiones. En Occidente comenzaron á desusarse en su verdadero carácter de penitencias desde el siglo vii. En la disciplina actual subsiste todavia el principio de que los pecados públicos deben purgarse con penitencias públicas, si bien en la práctica se imponen éstas en muy pocos casos.

De las censuras en general.

¿En qué consiste la potestad coercitiva de la Iglesia?—En la facultad de castigar á los fieles infractores de sus leyes, obligándolos por los medios espirituales de que dispone, á cumplir las penas que se les impongan.

¿En qué tiempo comenzó á usarse la palabra *censura* en la disciplina eclesiástica?—A últimos del siglo xii y principios del xiii.

¿Qué son *censuras* y cuántas se reconocen en el derecho de la Iglesia?—Una nota ó pena espiritual y medicinal impuesta por la autoridad eclesiástica á los delincuentes y contumaces, por la cual se les priva de algunos derechos espirituales hasta que se corrijan ó aparten de la contumacia. Son las *censuras* la excomunion, la suspension y el entredicho.

¿Qué personas están sujetas á las censuras de la Iglesia?—Tan solo los fieles vivos, porque los que no lo son, ni son súbditos de la Iglesia, ni pueden ser privados de derechos espirituales que no tienen.

¿Qué censuras pueden imponerse á corporaciones?—La suspension y el entredicho, pero no la excomunion, porque ésta es más grave y afecta más directamente al alma.

¿A quiénes se puede imponer la censura de suspension?—Tan solo á los clérigos y monjes, pero no á los legos.

¿Qué circunstancias han de concurrir para que puedan imponerse censuras?—Que se haya cometido un delito externo que á la vez sea pecado mortal, y que el delito sea cierto, manifiesto y probado y, por regla general, consumado.

¿Qué circunstancia excusa de la censura?—La ignorancia de hecho y de derecho por parte del delincuente.

¿En qué fuero producen su efecto las censuras?—En el externo, por lo que el inocente á quien se hayan impuesto no quedará por ellas ligado en el cielo, por más que deba respetarlas en la tierra.

¿Cómo se dividen las censuras?—Por razon del que las establece, unas proceden de la ley, otras de algun precepto particular, y otras de sentencia judicial. Las primeras pueden ser *latæ* ó *ferendæ sententiæ*, segun que se incurra en ellas por el hecho de cometer el delito, ó sea precisa una sentencia judicial imponiéndolas. Por razon de los lugares y personas á quienes se imponen, pueden ser las censuras *locales* ó *personales*. *Local*, es el entredicho; y el mismo, la excomunion y la suspension son tambien *personales* cuando se imponen á personas determinadas. Por razon del acto que á ellas da lugar, unas veces se imponen por un delito ya cometido, y otras por uno que se continúa cometiendo. Por razon del tiempo que han de durar, las unas son de duracion *limitada* y las otras *indefinida*; éstas se hallan más en armonia con su propia naturaleza. Por razon de la autoridad eclesiástica, á la que corresponde su absolucion, pueden ser *reservadas* ó *no reservadas*. De las primeras puede absolver tan solo el superior especialmente designado; de las segundas absuelven los ordinarios, sea quien quiera el que las haya impuesto. Por razon de los bienes y derechos de que privan las censuras varian tanto cuantos son éstos, y por consiguiente pueden ser *parciales* ó *totales*, privando en este caso de la comunión eclesiástica.

¿Qué clases se conocian de comunión en la primitiva disciplina?—La *laical*, la *clerical* y la *peregrina*. La primera se dividia en tantos grados cuantos eran los de la penitencia pública; la segunda en tantos cuantas eran las órdenes de los clérigos, y la tercera tambien era peculiar á los clérigos, en virtud de la cual quedaban como los últimos de sus respectivas órdenes, y además suspensos en el ejercicio de sus funciones.

¿A quiénes corresponde la potestad de imponer censuras por el derecho ordinario?—A todas las autoridades eclesiásticas que ejercen jurisdiccion en el fuero externo, pero dentro de sus respectivos territorios.

¿A quiénes puede corresponder este derecho por títulos especiales?—A los que hayan adquirido la jurisdiccion cuasi episcopal, ó la ejerzan por delegacion.

De la excomunion.

¿Qué es excomunion?—Una censura por la cual es privado alguno de los derechos espirituales propios de los fieles que se han hecho, por el bautismo, miembros de la Iglesia.

¿Qué clases hay de excomunion y cuáles fueron sus respectivos efectos

en la antigua disciplina? — *Mayor y menor.* Los efectos de la primera eran la privación de todos los derechos espirituales, siendo para la Iglesia el excomulgado como un gentil y publicano. Los efectos de la *menor*, que también se llamaba *medicinal*, eran la privación tan sólo de algunos de los derechos espirituales que corresponden á los fieles. Los penitentes en este sentido estaban excomulgados.

¿Qué otra especie se conocía de excomunion?—La de las iglesias particulares entre sí, que podía tener lugar en tres casos: 1.º, cuando una iglesia particular rompía la comunión con otra independiente de ella; 2.º, cuando entre las dos iglesias mediaba vínculo de superioridad ó inferioridad respectiva, y 3.º, cuando la excomunion mediaba entre el obispo y su propia iglesia.

¿Qué efectos producía en el orden civil la excomunion segun la antigua disciplina?—Conforme á la opinión más fundada, cortaba las relaciones puramente voluntarias entre los demás fieles y el excomulgado, pero no las relaciones necesarias.

¿Cuáles son los efectos de la excomunion *menor* en la nueva disciplina?—Priva también, como en la antigua, tan solo de parte de los derechos espirituales, como el de recibir los sacramentos y el de ser elegido para dignidad ú oficio eclesiástico, pero no del de elegir y conferir beneficios. Se incurre en ella comunicando á sabiendas y fuera del crimen con un reo de excomunion *mayor*.

¿Cuáles fueron en la Edad Media los efectos civiles y eclesiásticos de la excomunion *mayor*?—Los mismos en lo eclesiástico y en lo civil; el aislamiento completo del excomulgado en todas las relaciones sociales, hasta el punto de considerársele privado de los derechos civiles y políticos, y si era soberano, absueltos los súbditos del juramento de fidelidad.

¿En qué casos se permitió comunicar con los excomulgados?—1.º, por utilidad del comunicante ó del excomulgado; 2.º, por ley conyugal; 3.º, por humildad ó sea obediencia legal; 4.º, por ignorancia de hecho ó de derecho, y 5.º, por necesidad.

¿Qué otro caso estableció Martino V en el concilio de Constanza?—El de que se podría comunicar con el excomulgado cuando la sentencia de excomunion no se hubiese publicado por el juez especial y expresamente, ó cuando el excomulgado no lo fuese por haber impuesto manos violentas en los clérigos.

¿Qué requisitos han de preceder á la excomunion?—No imponiéndose las censuras sino á los contumaces, deben preceder, cuando ménos, dos amonestaciones, aunque sean por edictos, segun el decreto tridentino.

¿En qué casos es legítima la excomunion *lata sententia*?—En los más graves y señalados, sin embargo de que tiene esta excomunion el defecto de que, procediendo *ipso jure*, no puede preparársela con las moniciones.

¿En qué casos conviene no imponer censuras?—Como éstas son por vía de medicina, cuando pueda racionalmente presumirse que, lejos de contribuir á minorar el mal, lo agravarán.

De la suspension y entredicho.

¿Qué es suspension?—Una censura eclesiástica por la que se priva á los clérigos del ejercicio de la potestad que les corresponda por razon de su oficio ó beneficio.

¿Qué especies hay de suspension?—La *del oficio*, por la que el clérigo queda privado de las atribuciones que dependen del orden ó jurisdiccion; *del beneficio*, por la que queda privado de los frutos del mismo, y la *del*

oficio y beneficio, que comprende las dos. La suspensión en general comprende ambas; pero la una no es verdad reconocida que comprenda á la otra. La suspensión puede ser *total*, que comprende la privación de todas las funciones, ó *parcial*, que comprende tan sólo la de algunas. Puede ser también *temporal* ó *perpétua*. También se conoce la *local*, por la que el clérigo no puede ejercer sus funciones en un territorio determinado. Puede ser también la suspensión, como las demás censuras, *ferenda* ó *latæ sententie*, según que se imponga por la misma ley ó por sentencia judicial.

¿Cuáles son los efectos de la suspensión?—Produce irregularidad en el que la infringe; pero es necesario, para que se pueda imponer, que el suspenso haya cometido culpa grave, se haya impuesto por escrito y previas las moniciones canónicas.

¿Qué es *entredicho*?—Una censura eclesiástica que tiene por objeto la privación á los fieles del uso de ciertas cosas sagradas, en cuanto son comunes á todos los miembros de la Iglesia.

¿Qué clases hay de *entredicho*?—*Personal*, que es el que se impone directamente á las personas negándoles los sacramentos, y *local*, que es el que recae sobre un territorio determinado. Ambos se dividen en *generales* y *especiales*. El *local general* comprende una gran comarca; el *especial*, un territorio reducido; el *personal general* se impone á una comunidad, colegio ó pueblo, y el *personal particular*, á personas señaladas. El *entredicho* puede también ser *ferenda* ó *latæ sententie*.

¿Cuáles son los efectos del *entredicho*?—En la Edad Media eran la prohibición de los oficios divinos y sacramentos, excepto el bautismo y la penitencia y Viático á los enfermos. Inocencio III determinó que no se interrumpiese la predicación al pueblo y se administrase la confirmación á los párvulos, y que los clérigos reunidos á dos ó tres pudiesen rezar en voz baja las horas canónicas en las iglesias conventuales, y ser enterrados, caso de fallecimiento, en el cementerio, sin solemnidad ni toque de campanas, y que tampoco se negase la penitencia á los cruzados y peregrinos. Gregorio IX permitió la celebración de la misa privada todas las semanas, sin toque de campanas, con exclusion de los excomulgados y entredichos, y á puerta cerrada. Bonifacio VIII permitió la administración del sacramento de la Penitencia y la celebración de los oficios divinos sin toque de campanas y á puertas cerradas, excepto en las fiestas de la Natividad del Señor, Pascua, Pentecostés y Asunción de la Virgen, á las que añadió Martino V el Corpus y su octava, en las cuales podrian celebrarse con solemnidad. Es también efecto del *entredicho* la privación de sepultura eclesiástica y la irregularidad de los clérigos que lo violen.

De la absolucion de las censuras.

¿Qué es absolucion de censuras?—El acto de la potestad eclesiástica por el cual vuelve el censurado á la comunión de la iglesia, ó al ejercicio de los derechos de que antes habia sido privado.

¿De cuántas clases puede ser la absolucion de las censuras?—En el fuero interno y en el externo. En el fuero interno la dispensa el sacerdote en el sacramento de la penitencia; en el externo, tan sólo el que ejerce jurisdicción ordinaria, empleando al efecto las solemnidades del ritual romano.

¿Quiénes tienen la facultad de absolver de las censuras *ferenda sententie*?—1.º, el que las impuso; 2.º, el que tenga esa facultad por delegación; 3.º, el sucesor del que las impuso; 4.º, el cabildo catedral sede vacante; 5.º, el superior del que las impuso, en concurrencia con éste, ó en virtud de apelación, según los casos.

¿Quiénes pueden absolver de las censuras reservadas?—El autor de la ley ó censura. Por excepcion, los obispos tienen por el Concilio de Trento facultad de absolver de todas las reservas á la Silla apostólica siendo ocul-tas, y aún no siéndolo, si los censurados no pueden presentarse en Roma. En caso de muerte, puede absolver de todas las censuras reservadas en el fuero interno el sacerdote.

¿De cuántas clases puede ser la absolucion de las censuras?—*Pública ó privada*, segun que se haga con las solemnidades de rito, como sucede con los excomulgados y denunciados, ó privadamente. Puede tambien ser la absolucion *necesaria, ad cautelam* y *cum reincidentia*. La primera es cuando la censura es cierta; la segunda cuando hay duda de hecho sobre si se ha ó no incurrido en ella, ó si fué nula. Tiene lugar la tercera cuando el excomulgado se halla en artículo *mortis*, no puede recurrir al superior, se limita la absolucion á cierto tiempo ó se le impone con ella alguna obligacion.

De las penas eclesiásticas.

¿Qué es *anatema*?—Lo mismo que la excomunion mayor, aunque como pena y no como *censura*. El anatema es más grave, porque se impone despues de la censura y por la ineficacia de ésta, con carácter de perpetuidad.

¿Qué es *deposicion*?—Una pena eclesiástica por la cual los clérigos delin-cuentes son privados perpétuamente del ejercicio de sus órdenes, de sus beneficios y de las funciones de su ministerio.

¿En qué convienen y en qué se diferencian la *suspension* y la *deposi-cion*?—Convienen en que tan sólo pueden imponerse á clérigos y monjes, y en que pueden ser totales ó parciales; así como en que su violacion pro-duce irregularidad y pueden ser *ferendæ* ó *latæ sententiæ*.

Se diferencian en que la suspension es temporal y la deposicion perpé-tua; en que la deposicion se limita al orden, y la suspension, siendo total, se extiende á todo derecho, y en que la fórmula de la deposicion es más solemne que la de la suspension.

¿Qué especies hay de deposicion?—La simplemente dicha y la *degra-dacion*. Se diferencian en que la primera se impone por sólo la sentencia judicial, y la segunda por el obispo, con las solemnidades de rito; la prime-ra no priva de los privilegios clericales como la segunda; el depuesto es so-metido á penitencia, y el degradado entregado al brazo secular; la depo-sicion no excluye la degradacion posterior; ésta excluye absolutamente la deposicion.

¿Quiénes fueron y son los jueces de la deposicion?—Segun la antigua disciplina, el obispo con su presbiterio. Segun la de la iglesia africana, tres, seis ó doce obispos, si el depuesto era diácono, presbítero ú obispo. Segun la disciplina nueva, el Romano Pontífice respecto al obispo, y el obispo propio respecto á los demás clérigos, acompañado de otros tres ó seis obispos, y en defecto de éstos, de otros tantos abades con uso de pontificales, ó en último término, personas constituidas en dignidad ecle-siástica.

¿Cuáles son las solemnidades de la degradacion?—El despojo del degrada-do de las vestiduras propias de su orden. La deposicion se impone sim-plemente por sentencia judicial.

¿A qué deberes todavia queda sujeto el degradado, y por qué delitos se impone la degradacion?—A la ley de continencia y al rezo de las horas ca-nónicas. Los delitos por que se impone son: la herejía, la apostasia parti-naz, la falsificacion de letras apostólicas, el asesinato, la sollicitacion *ad turpia* en la confesion, el aborto del feto animado, etc.

ELEMENTOS DE DISCIPLINA ECLESIASTICA.

¿Qué es disciplina eclesiástica?—La coleccion de leyes de la Iglesia para organizar el poder eclesiástico, establecer las distintas formas de administración y reglar su poder judicial. Se distingue del derecho canónico en su carácter eminentemente práctico.

De los Cardenales de la Iglesia romana.

¿Qué son cardenales?—Unos clérigos de alta jerarquía que forman una corporacion para auxiliar al Pontífice en el gobierno de la Iglesia, elegirlo y suplirle sede vacante.

¿Cuántos son?—Segun la constitucion de Sixto V son setenta: seis obispos, cincuenta presbíteros y catorce diáconos.

¿Qué cualidades han de tener los cardenales?—Las mismas que los obispos.

¿Cuántas son las principales congregaciones en que se dividen los cardenales para auxiliar al Pontífice?—Diez; la consistorial, de inquisicion, de índice, de intérpretes del Concilio de Trento, de ritos, de obispos y regulares, de propaganda fide, de inmunidad eclesiástica, de indulgencias y de negocios eclesiásticos.

De los Legados apostólicos.

¿Qué son *Legados* y cuántas fueron sus clases?—Ciertos ministros eclesiásticos que representaban al Pontífice y hacian sus veces en alguna provincia cristiana. Se dividieron en tres clases principales: *nati*, *missi*, *à latere* y *nuncios*.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento sobre las atribuciones de los legados?—Que en ningun caso impidiesen ni usurpasen la jurisdiccion ordinaria de los obispos.

¿Cómo ejerce el nuncio en España su jurisdiccion contenciosa?—Por medio del tribunal de la Rota, creado en 1773 por Clemente XIV, y al cual el nuncio delega el conocimiento especial de cada uno de los asuntos.

De los Patriarcas, Primados y Concilios nacionales.

¿Quiénes son patriarcas?—Los obispos que presiden á todas las iglesias de una diócesis. Fueron los patriarcas cinco: uno en Occidente, el de Roma, y cuatro en Oriente, los de Constantinopla, Alejandria, Antioquía y Jerusalem.

¿Quiénes fueron los primados?—Los obispos que presidian á todos los demás de una nacion.

¿Quién es el primado de la Iglesia española?—El arzobispo de Toledo, cuya dignidad aparece por primera vez en el cánón VI del concilio XII de la misma ciudad.

¿Qué derecho tienen en la disciplina actual los primados?—Ninguno, por estar reducidos á dignidades puramente honoríficas.

¿Qué eran los concilios nacionales?—Las asambleas formadas por los obispos de una nacion.

¿Cuál fué y es la disciplina relativa á estos concilios?—La convocacion correspondia al monarca ó al Pontífice. La presidencia al primado y en su defecto al metropolitano más antiguo. En la disciplina actual no se conocen estos concilios como ordinarios.

De los Metropolitanos y Concilios provinciales.

¿Cuáles son los derechos de los metropolitanos por la disciplina vigente?—1.º, conocer en apelacion de las sentencias de los sufragáneos; 2.º, convocar y presidir el concilio provincial; 3.º, obligar á los sufragáneos á la residencia; 4.º, suplir por derecho de devolucion la negligencia de éstos; 5.º, visitar la provincia y las parroquias unidas á los monasterios; 6.º, conocer de las causas menores de los obispos en concilio provincial; 7.º, erigir en congregacion las casas de regulares de la provincia, y 8.º, usar de *pallio* y demás insignias metropolitanas.

¿Cuántos son y cuál es el origen de los metropolitanos en España?—Nueve: los de Toledo, del siglo v; Sevilla, de tiempos antiguos; Tarragona, idem; Santiago, del siglo xii; Zaragoza, del xiv; Valencia y Granada, del xv; Burgos, del xvi, y Valladolid del corriente.

¿Quiénes deben ser convocados á los concilios provinciales?—Los obispos de la provincia, aunque sean exentos, los prelados *vere nuntius*, los prelados inferiores, los jefes provinciales de las órdenes, los cabildos catedrales y aun los de las colegiadas, pero por costumbre en España. De todos los dichos tienen obligacion de asistir los de las tres primeras clases.

¿Cuándo deben celebrarse los concilios provinciales?—De tres en tres años, segun el decreto tridentino, pero actualmente no se observa.

¿Cuáles son las atribuciones de estos concilios?—Segun el mismo concilio: 1.ª, tratar de la forma de exámen de los obispos electos; 2.ª, autorizar al metropolitano para visitar la provincia; 3.ª, conocer de la escasez de réditos de las iglesias catedrales; 4.ª, juzgar de las causas de ausencia y de las licencias dadas por el metropolitano; 5.ª, examinar todas las dudas relativas á ritos é indulgencias, y 6.ª, conocer con el metropolitano de las causas menores de los obispos.

DE LOS OBISPOS Y SUS AUXILIARES.

Concilio diocesano.

¿Bajo qué conceptos deben ser considerados los obispos en el desempeño de su ministerio?—1.º, respecto de la Iglesia universal, por su union con el Romano Pontífice, y como miembros de la asamblea ecuménica, en la que reside toda la plenitud del poder eclesiástico; 2.º, respecto á la Iglesia provincial, de cuyo metropolitano penden, y 3.º, respecto á su propia iglesia, en la cual ejercen su autoridad ordinaria en concepto de doctores, pastores y jueces de sus diócesanos.

¿Qué cambios experimentó la disciplina relativa á la forma de eleccion ó nombramiento de los obispos?—Hasta el siglo XII correspondió la eleccion al clero y pueblo de la iglesia vacante. Desde los primeros años del siglo XIII, y por el decreto del concilio IV de Letrán, quedó reservada al capítulo catedral. Así en el primero como en este período, la confirmacion y ordenacion del elegido correspondia al metropolitano y demás obispos comprovinciales. Desde el siglo XIV comenzó la Silla apostólica á reservarse las elecciones y confirmaciones de los obispos. En los XV y XVI los monarcas, por los concordatos ó por concesiones especiales, adquirieron el derecho de presentar para las iglesias episcopales vacantes en sus reinos, confirmando los Romanos Pontífices á los presentados. En la actualidad, como excepcion de esta regla, solamente en Alemania los cabildos conservan el derecho electoral.

¿Desde cuándo tienen el derecho de presentacion los reyes de España?—Ya lo tuvieron y ejercieron durante la monarquía visigoda. En el siglo XVI lo confirmó á su favor Adriano VI. En el XVIII volvió á confirmarlo Benedicto XIV por el concordato que celebró con Fernando VI.

¿De qué modo se acreditan las cualidades del presentado?—Segun los decretos de Trento y la constitucion *Humus* de Gregorio XIV, se forman dos expedientes ante el nuncio, el uno titulado *De vita et moribus*, y el otro *De statu ecclesiæ*. En el primero se acreditan por medio de testigos sin tacha las cualidades canónicas del presentado, y en el segundo que está vacante la iglesia para que lo ha sido. El nuncio remite, elevados á escritura pública, estos dos expedientes á Roma, con su informe. Allí son examinados por cuatro cardenales, uno de los cuales toma el nombre de *relator*, quienes dan cuenta al Romano Pontífice en consistorio del resultado de este examen, y manifiestan *sub periculo salutis æternæ* que crean al presentado idóneo. Este acto se llama *proposicion*. En el consistorio siguiente, el Pontífice nombra al presentado obispo de la iglesia para que lo ha sido, y este acto se llama *preconizacion*.

¿Qué efectos jurídicos produce la preconizacion ó confirmacion?—El confirmado adquiere la potestad de jurisdiccion, si bien antes debe obtener en Roma las bulas de confirmacion, que son nueve, de las cuales se retiene en España por la Corona la titulada *vasallorum* y ciertas cláusulas de las otras.

¿En qué tiempo el confirmado debe pedir y recibir la consagracion?—En el de tres meses, á contar desde la entrega de las bulas de confirmacion, cuyo plazo podia prorogarse, segun el Concilio Tridentino, hasta seis.

¿Qué juramentos debe prestar el obispo antes y despues de la consagracion y al tiempo de recibirla?—Al tiempo de recibirla debe jurar fidelidad á la Iglesia y al Romano Pontífice, y que no dañará á éste, que guardará los secretos que le confie y que le defenderá, que asistirá á los concilios á que le convoque, que recibirá honoríficamente á sus legados y que visitará la Iglesia romana. Antes ó despues de la consagracion, debe tambien prestar juramento de fidelidad á la autoridad temporal.

¿De qué clase es la potestad episcopal?—De *orden* y de *jurisdiccion*. La primera procede de la consagracion, y tiene por objeto la administracion de todos los sacramentos y de los sacramentales reservados á los obispos; la segunda versa sobre el régimen y gobierno de la diócesis.

¿Cuáles son los sacramentales más importantes de esta clase?—La consagracion del crisma; la consagracion, bendiccion y reconciliacion de las iglesias; la consagracion y bendiccion de los abades, altares, imágenes, cemeniterios, vestiduras y vasos sagrados.

¿Qué carácter tiene la potestad de orden episcopal?—Que no puede delegarse á otro que no sea obispo.

¿En qué conceptos ejerce el obispo su potestad de jurisdiccion?—En el de doctor, ó sea enseñando, y en el de juez y legislador, ó sea gobernando.

¿En qué derechos ó deberes se desenvuelve la potestad de jurisdiccion?—En el de la predicacion, en el de la oracion, en el de la obediencia al Romano Pontífice y metropolitano propio, en el de la residencia, en el de la visita de la diócesis, en el de la administracion de justicia, en el de la celebracion del concilio diocesano y en el de la administracion de los bienes y derechos de la Iglesia.

¿Cómo y cuándo debe predicar el obispo?—Por escrito y de palabra, y por si mismo en la iglesia catedral, ó por personas idóneas si estuviese legítimamente impedido. En las demás de la diócesis por medio de los párrocos, y estando éstos impedidos, por el de los coadjutores que al efecto les nombre el obispo. Este ó sus auxiliares deben predicar en la iglesia catedral en las fiestas principales de la Iglesia. Los párrocos en estos mismos dias y todos los domingos, y á lo ménos tres veces á la semana en la Cuaresma y en el Adviento. Deben tambien predicar con su propio ejemplo, llevando una vida modesta, frugal y humilde, no enriqueciendo con los bienes de la Iglesia á sus propios parientes, sino distribuyéndolos á los pobres.

¿A qué se extiende el deber episcopal de la oracion?—A celebrar el santo sacrificio de la misa y ofrecerlo por el pueblo.

¿En qué casos pueden los obispos ausentarse de sus diócesis?—Cuando lo exijan la caridad cristiana, la necesidad urgente ó utilidad evidente de la Iglesia y del Estado y, finalmente, cuando ausentándose cumplan un deber de obediencia. Pero será necesario que estas causas hayan sido examinadas y aprobadas por escrito por el Romano Pontífice ó por el metropolitano. Tambien puede ausentarse para cumplir ó desempeñar algun oficio unido á su titulo episcopal, sin necesidad de pedir licencia. Del mismo modo puede ausentarse tambien sin este requisito por dos ó tres meses cada año, segun su conciencia, procurando, no obstante, estar en su iglesia las festividades principales.

¿En qué penas incurrén los obispos que indebidamente se ausentan?—Estándolo durante seis meses, en la pérdida de la cuarta parte de sus frutos; por la continuacion de la ausencia durante otros seis, en la de otra cuarta parte, y si continuasen fuera de su iglesia, el metropolitano deberá prohibirles la entrada en ella y comunicar el hecho en el término de tres meses al Romano Pontífice, quien adoptará, segun las circunstancias del caso, las medidas oportunas, hasta privar de su iglesia al obispo contumaz.

¿A qué se llama *pontificales* en derecho eclesiástico?—A los actos de la potestad de orden episcopal, y entre ellos especialmente á la ordenacion.

¿Qué dispone la disciplina respecto de este deber episcopal?—Que el obispo debe conferir por sí mismo las órdenes, á no ser que esté legítimamente impedido, en cuyo caso, despues de examinar y aprobar los ordenandos, podrá expedirles dimisorias generales ó especiales para que sean ordenados por otro obispo, quien á su voluntad podrá examinar de nuevo á los ordenandos.

¿Qué dispuso sobre este punto el Concilio de Trento respecto á los obispos titulares ó *in partibus*?—Que éstos en ningun lugar, aunque sea exento, ni con el pretexto de ningun privilegio, ni á título de familiaridad, se proponen á ordenar súbditos ajenos sin las dimisorias de su propio obispo.

¿Quiénes pueden, además de los obispos, conferir las órdenes menores?—Los abades mitrados y prelados exentos que gocen de este privilegio, no pudiendo conferir las sino á sus propios súbditos, sin que puedan expedirles dimisorias, porque, no ordenándolos ellos, lo habrán de ser por el obispo de la diócesis en que radica el territorio exento.

¿En qué tiempo y con qué objeto deben los obispos visitar sus propias diócesis?—Anualmente, ó á lo menos de dos en dos años, con el fin de que se conserven en toda su pureza el dogma y las buenas costumbres, y de que los ministros eclesiásticos cumplan con sus deberes.

¿Quiénes y qué lugares pueden ser visitados por el obispo?—Todos los beneficiados y beneficios de su diócesis, los cabildos catedrales que sean exentos, las iglesias seculares que gocen de la misma exencion, los beneficios curados unidos á las iglesias catedrales ó monasterios.

¿Por medio de quién puede hacer la visita el obispo?—Por sí mismo, y si estuviere legítimamente impedido, por visitadores que nombre al efecto, respetando el derecho que para visitar toda ó parte de la diócesis hayan adquirido los cabildos catedrales, los arcedianos, deanes y otros, si bien los visitadores nombrados por los cabildos habrán de ser antes aprobados por el obispo, de la misma manera que lo habrá de ser el notario que acompañe al arcediano al hacer la visita, así como éste tendrá obligacion de dar cuenta de ella al obispo dentro de dos meses despues de concluida.

¿Qué es concilio diocesano?—La congregacion canónica del clero de la diócesis, y especialmente del parroquial y catedral, convocada y presidida por el obispo, para tratar de cosas eclesiásticas.

¿Cuándo debe celebrarse el concilio diocesano y quiénes están obligados á concurrir á él?—Debe celebrarse todos los años, con la asistencia obligatoria del cabildo catedral ó de sus diputados, y de todos los beneficiados de la diócesis que no estén legítimamente impedidos, así como con la de los exentos que no estén sometidos á capítulos generales, los abades y los regulares que desempeñen la cura de almas, bajo la pena todos ellos de excomunion, despues que haya sido canónicamente declarada su contumacia.

¿Qué honores corresponden al obispo?—El primer lugar en el coro, en el cabildo y en todos los actos religiosos á que asista, teniendo en el cabildo, para la decision de todos los asuntos que no le sean personales, aunque no concurra á la votacion, tres, cuatro ó cinco votos, segun sean los capitulares diez y seis, veinte ó más de veinte, y además el decisivo en caso de empate.

¿Qué atribuciones tiene el obispo para corregir las malas costumbres é impedir la propagacion de doctrinas heréticas?—Puede reservar á su autoridad la absolucion de ciertos pecados y delitos graves, si es que ya no lo está por el derecho comun de la Iglesia, como sucede con el delito oculto de herejía, segun la reforma tridentina. De estos pecados y delitos reservados no puede absolver ningun sacerdote que no tenga licencia especial.

para ello, á no ser *in articulo mortis*. El obispo puede tambien prohibir el ministerio de la predicacion á cualquiera, aunque sea regular, que predique doctrinas falsas, escandalosas ó por cualquiera otro concepto inconvenientes. Puede igualmente prohibir la lectura de los libros que sea perjudicial á los fieles por razon de la doctrina que contengan, pero no puede obligarles á que le entreguen esos libros para ser destruidos, á no ser que así se halle establecido por el derecho especial del país y facultado por la autoridad temporal. Los fieles deben abstenerse de leer los libros prohibidos, á no estar autorizados por su obispo ó por el Romano Pontífice, incurriendo de lo contrario en la pena de excomunion si leen libros heréticos, y en pecado mortal si leen los condenados por otro concepto.

De los Coadjutores episcopales.

¿De cuántas clases son los coadjutores episcopales?—Temporales y perpétuos, con futura sucesion ó sin ella.

¿En qué se distingue el obispo *coadjutor* del meramente *auxiliar*?—Por la disciplina española, en que el coadjutor es nombrado cuando el obispo propio no puede administrar su diócesis, por vejez, enfermedad ó incapacidad intelectual ó moral, y el auxiliar cuando, no estando imposibilitado el obispo, no puede, sin embargo, administrar por sí sólo la diócesis, por ser demasiado extensa. El coadjutor, siendo perpétuo, es nombrado con derecho de futura sucesion, y nunca con este derecho de auxiliar; el coadjutor administra toda la diócesis como si fuera el obispo propio, y el auxiliar tan sólo cuando el obispo propio le delega su autoridad, y en la parte de ésta que le confía. Sin embargo, por el concordato de 1851 hay en España obispos auxiliares que tienen jurisdiccion perpétua, cuales son los de Ceuta y Tenerife, que pertenecen á las diócesis de Cádiz y Canarias.

¿Qué determinó el Concilio de Trento sobre coadjutores?—Los prohibió, por regla general, y especialmente los con futura sucesion, exceptuando tan sólo aquellos casos en que los reclamase la urgente necesidad ó evidente utilidad de la Iglesia, apreciada por el Romano Pontífice, debiendo tener aún entonces los nombrados todas las cualidades que los sagrados cánones exigen á los obispos, y debiendo ordenarse á título de una iglesia *in partibus*.

Segun la disciplina española, ¿qué intervencion tiene la Corona en el nombramiento de obispos auxiliares?—No los presenta, porque no es patrona de la iglesia *in partibus*, á cuyo título han de ser ordenados; pero si designa al Romano Pontífice uno de los tres que el obispo propio le propone, para que aquél le nombre tal obispo auxiliar; debiendo advertirse que el Romano Pontífice, de acuerdo con la Corona, puede nombrar obispo auxiliar, para una iglesia, aunque el obispo propio lo resista.

De la curia episcopal.

¿Qué es curia episcopal?—El conjunto de personas que auxilian al obispo en el ejercicio de su jurisdiccion, á saber: el vicario general, el fiscal, el defensor del matrimonio, el secretario de cámara, los notarios, el colector de vacantes, de misas y de cruzada, el canceller, los visitadores, los examinadores sinodales y los alguaciles.

¿Cuáles son las cualidades que ha de tener el vicario general?—Ha de ser mayor de veinticinco años, clérigo y graduado en derecho canónico,

siendo posible, debiendo además obtener despues de nombrado la real cédula auxiliatoria.

¿Cuáles serán las atribuciones del vicario general?—Las que resulten de su nombramiento, así respecto á la jurisdiccion contenciosa como á la voluntaria. Si el nombramiento contiene solamente cláusulas generales, el vicario general ejercerá la parte de la jurisdiccion episcopal que determine la costumbre de la diócesis, entendiéndose que no le corresponde el conocimiento de los *asuntos graves*.

¿De qué modo termina el vicario general en sus funciones?—Por la renuncia que el mismo haga, tácita ó expresa, por su separacion acordada por el obispo, por muerte, traslacion, renuncia, suspension, excomunion, cautiverio y expulsion del obispo de su diócesis.

¿Cuáles son las funciones del secretario de cámara?—Suscribir y sellar todos los decretos y documentos que autorice el obispo, conservándolos en los archivos público ó secreto, segun la clase del documento, é intervenir en todos aquellos asuntos que consten en el título de su nombramiento, sin exigir ninguna clase de derechos, por prohibirlo el Concilio de Trento.

¿Cuáles son las funciones del colector de misas?—Recibir las limosnas que se den para este objeto, y distribuirlas entre los clérigos pobres de la diócesis.

¿Quién nombra al administrador de cruzada y cuáles son sus funciones?—El obispo con el cabildo. Sus funciones son expender bulas y recaudar este subsidio.

¿Qué cualidades ha de tener el fiscal eclesiástico?—Ha de ser, segun la disciplina española, ordenado *in sacris* y perito en la ciencia del derecho. Sus funciones son: defender la integridad de la jurisdiccion eclesiástica, denunciar y perseguir los delitos canónicos é intervenir en todos los negocios de orden público de la Iglesia.

¿Cuál es el origen y funciones del cargo de defensor del matrimonio?—Fue creado por Benedicto XIV con el objeto de que defendiese en todas las causas matrimoniales la validez del vinculo. Este cargo es distinto del de fiscal.

¿Qué clases hay de notarios eclesiásticos?—Episcopales y apostólicos, segun que sean nombrados por el obispo ó por el Pontífice. Pueden ser notarios los clérigos. El obispo no debe nombrarlos sin examinarlos antes. Su número debe ser proporcionado á las necesidades de la diócesis. En el otorgamiento de los instrumentos que autoricen, deben observar las mismas formalidades que prescriben las leyes civiles á los notarios reales.

Del Cabildo catedral.

¿Cuántas clases hay de cabildos?—Catedrales y colegiales.

¿Cuántas clases hay de cabildos catedrales?—*Metropolitanos* y *sufragáneos*, *seculares* y *regulares*, *dobles* y *simples*, *exentos* y *no exentos*, con *número fijo* ó *número indeterminado de capitulares*. Son cabildos *simples* los que constituyen una sola corporacion en una sola iglesia, y *dobles* los que forman dos corporaciones en dos iglesias, como sucede en Zaragoza.

¿Cuál fué en España hasta nuestros dias la organizacion de los cabildos?—En la España visigoda hacian los canónigos vida comun con el obispo, segun se deduce del cánón 23 del concilio toledano IV. En el siglo xi se generalizó en las iglesias de Castilla y Aragon la vida comun en los cabildos, segun la regla de San Agustin. Comenzaron estas corporaciones á volver al siglo en el xiv. En el xvi los cabildos catedrales de Castilla, con el asentimiento del romano Pontífice, volvieron todos á la vida secular; en

el xvii hicieron lo mismo los de Aragon, y en Navarra el cabildo de Pamplona conservó hasta nuestros días la vida comun, segun la regla agustiniana, aunque mitigada.

¿Las dignidades de las iglesias catedrales de España pueden ejercer la cura de almas?—Está terminantemente prohibido por el art. 25 del concordato novísimo.

¿Cuáles son las prerogativas de las dignidades de los cabildos catedrales españoles?—1.º, presidir por su orden el cabildo en el coro y en las procesiones; 2.º, ejercer tambien por su orden las funciones pontificales que les correspondan, segun los estatutos de la iglesia; 3.º, administrar los sacramentos al obispo cuando esté enfermo, y 4.º, asistir al obispo en concepto de presbíteros cuando celebre de pontifical.

¿Qué dignidades se conocen en algunas iglesias de España además de las establecidas por regla general en todas las iglesias?—En la de Toledo, las de capellan mayor de los Reyes y capellan mayor de Muzárabes; en la de Sevilla, la de capellan mayor de San Fernando; en la de Granada, la de capellan mayor de los Reyes Católicos, y en la de Oviedo, la de abad de Covadonga.

¿Cuáles son las obligaciones de los canónigos relativamente al culto?—Cantar en el coro diariamente las horas canónicas y desempeñar las funciones de su orden, segun lo prevengan las constituciones de cada iglesia.

¿En qué penas incurren los canónigos que no asisten al coro sin justa causa?—En la pérdida de las distribuciones cotidianas, y además en la privacion de la mitad de los frutos de la prebenda si la ausencia durase un año, y si más, en la pérdida de todos.

¿Por qué causas pueden ausentarse los canónigos de sus respectivas iglesias?—Cuando estén dedicados al servicio del obispo ó de la iglesia, por razon de estudios ó de enfermedad; y finalmente, pueden ausentarse tres meses cada año, sin necesidad de pedir licencia, por más que hayan de hacerlo siempre con justa causa, segun conciencia.

¿Cuáles son las funciones del cabildo como senado del obispo?—Intervenir en el gobierno de la diócesis con su voto decisivo ó consultivo en la decision de ciertos asuntos.

¿En qué casos debe el obispo solicitar el consejo del cabildo?—En todos los negocios graves y áridos, á no ser que haya costumbre en contrario.

¿En qué casos necesita el obispo el consentimiento del cabildo?—1.º, para la enajenacion de las cosas eclesiásticas de la catedral; 2.º, para la ereccion de una nueva parroquia; 3.º, para la ereccion y volacion de nuevos canonicatos y dignidades; 4.º, para la union, division y supresion de beneficios; 5.º, para exigir el subsidio caritativo; 6.º, para el nombramiento de examinadores sinodales, cuando no pueda hacerse por el concilio diocesano; 7.º, para la ereccion de los canónigos de oficio, y 8.º, para la de los beneficiados asistentes en el turno que no corresponda á la corona.

¿Quién puede convocar y presidir el cabildo?—El obispo, y en su defecto el dean y demás dignidades, por su orden.

¿Cuántos prebendados deben asistir para que haya cabildo?—Las dos terceras partes, á no ser que, convocados todos, no quisiesen concurrir, porque entonces basta la tercera parte.

¿Cuáles son las atribuciones del cabildo en sede vacante ó impedida?—Todas las que constituyen la jurisdiccion episcopal, con las solas escepciones establecidas por derecho.

¿En qué casos se entiende que la silla está vacante ó impedida?—Por muerte, traslacion, renuncia ó deposicion del obispo; por cautiverio ó extrañamiento del obispo, cuando hallándose éste á larga distancia fallece su vicario general, y finalmente, cuando el obispo es públicamente hereje ó notoriamente está excomulgado.

¿De qué modo ha de ejercer el cabildo en tales casos la jurisdiccion episcopal?—No en corporacion, sino por medio de un solo vicario, que ha de nombrar en los ocho dias siguientes al en que haya llegado á su noticia la vacante ó impedimento de la silla, sin que el obispo pueda reservarse parte alguna de la jurisdiccion.

¿En qué pena incurre el cabildo que deja de hacer este nombramiento ó nombra á uno indigno?—Pierde por aquella vez la facultad de nombrar que pasa por derecho de devolucion al metropolitano, ó al obispo más antiguo, si el cabildo moroso fuese el metropolitano, ó al obispo más próximo si el cabildo moroso fuese exento.

¿Qué puede hacer el vicario capitular?—1.º, ejercer la jurisdiccion, así voluntaria como contenciosa, civil ó criminal, por sí ó por medio de sus vicarios; 2.º, predicar y conceder licencias para ello; 3.º, visitar la diócesis por sí ó por medio de otros; 4.º, conferir los beneficios é instituir á los presentados por los patronos, confirmar las elecciones y nombrar ecónomos para las parroquias vacantes; 5.º, dispensar en las irregularidades que proceden de delito oculto y en los pecados reservados, así como las proclamas matrimoniales; 6.º, imponer censuras y penas canónicas, pero no el anatema; 7.º, expedir dimisorias; 8.º, representar á la diócesis y á la silla episcopal, pero no al cabildo, y 9.º, establecer ó derogar constituciones sinodales.

¿Qué cosas están prohibidas al vicario capitular?—1.º, todo lo que pueda ser en detrimento del obispo; 2.º, resolver y acordar en los negocios más graves hasta despues de un año de la muerte del obispo, como son expedir dimisorias ó convocar concilio diocesano; 3.º, imponer gravámenes á las iglesias y beneficios, y 4.º, conceder indulgencias segun la opinion más probable.

De las iglesias colegiadas.

¿De cuántas clases son las iglesias colegiadas?—*Insignes y no insignes, seculares y regulares, exentas y no exentas.*

¿Qué iglesias colegiadas se conservan en España por el concordato novísimo?—Las capillas reales en Toledo, Sevilla y Granada; las que existan en las capitales de provincia; las de patronato particular cuyos patronos se comprometan á sostenerlas de su cuenta; las de Covadonga, Roncesvalles, Jerez de la Frontera, San Isidro de Leon, Sacro-monte de Granada y San Ildefonso de Alcalá de Henares, y además subsistirán como colegiadas las iglesias catedrales cuyas sillas deben suprimirse ó trasladarse.

¿De qué individuos ha de constar el cabildo de las colegiadas?—De un abad, presidente, que tendrá á su cargo la cura de almas, de dos canónigos de oficio, seis de gracia y seis beneficiados.

¿A quién corresponde el nombramiento de estos individuos?—El de abad á la Corona, el de los canónigos de oficio al cabildo con el obispo, el de los de gracia á la Corona y al obispo alternativamente, y el de los beneficiados alternativamente á la Corona y al obispo con el cabildo.

Además de los canónigos, en las iglesias catedrales, ¿qué otros ministros hay en reemplazo de los antiguos racioneros, suprimidos?—Los beneficiados, que no tienen voz ni voto en el cabildo, y cuyas funciones están reducidas al culto divino. En la iglesia de Toledo debe haber veinticuatro, en la de Sevilla veintidos, en la de Zaragoza veintiocho, en las de Tarragona, Valencia, Santiago, Burgos, Granada y Valladolid veinte, y en las sufragáneas diez y seis, catorce y doce, segun detalladamente se establece en el art. 17 del concordato, ménos en la de Menorca, en la que habrá tan sólo diez.

De los párrocos.

¿Qué clases hay de arciprestes?—*Urbanos y rurales, y con jurisdiccion ó sin ella.*

¿Qué son arciprestes rurales?—Ciertos párrocos rurales que ejercen determinadas atribuciones sobre los ministros de la misma clase, constituidos en una parte señalada de la diócesis, que se llama *arciprestazgo*.

¿Cómo se han organizado los arciprestazgos á consecuencia del concordato novísimo?—Por real cédula de 24 de Noviembre de 1851 se dispuso que los ordinarios dividiesen el territorio de la diócesis en arciprestazgos, procurando acomodar esta division á la de los partidos judiciales, y que al frente de cada uno de ellos nombrasen un arcipreste amovible, el cual ejercería la jurisdiccion voluntaria y contenciosa en los asuntos de ménos importancia.

¿Cuáles son las funciones de los arciprestes?—Además de la indicada anteriormente, asesorar al obispo en la division parroquial, que debe hacerse segun el concordato, y visitar las escuelas de instruccion primaria, así como poner en conocimiento de los párrocos las órdenes del obispo que á aquéllos se refieran.

¿Qué es párroco?—Un clérigo que, bajo la autoridad del obispo, rige y gobierna á una parte del pueblo cristiano domiciliada en una porcion del territorio de la diócesis, que se llama *parroquia*.

¿De cuántas clases son las parroquias segun la disciplina general?—*Titulares y encomendadas, perpétuas y temporales, matrices y anejas, seculares y regulares, civitatenses y rurales, de patronato ó de libre provision, mayores y menores.* Las urbanas se dividen, segun su categoria, en parroquias de *entrada, ascenso y término*. Las rurales en parroquias de primera clase, que son las que tienen más de veinticinco vecinos, y de segunda, que son las que tienen ménos.

¿En qué forma y con qué requisitos deben instruirse los expedientes de union y division de parroquias?—Debe oirse en ellos y obtenerse el consentimiento del cabildo; deben ser citados todos los que tengan interés en la union ó division, como son las autoridades civiles, las cofradías, los patronos; debe igualmente oirse al arcipreste respectivo y al fiscal eclesiástico, y, por último, debe obtenerse su real aprobacion.

¿De cuántas maneras es el concurso para la provision de parroquias?—*Abierto y cerrado, general y particular.* En el abierto se admite á todos los opositores, cualquiera que sea la diócesis á que pertenezcan. En el cerrado tan sólo á los que sean de la diócesis en que se celebra.

¿Sobre qué ha de recaer el examen y quiénes le han de hacer?—No sólo sobre la ciencia, sino tambien sobre las condiciones morales del opositor. Han de hacerle los examinadores sinodales con el obispo ó su vicario general.

¿Pueden ser los legos examinadores sinodales?—No son incapaces, pero no suele nombrárseles.

¿Qué obligacion tienen los examinadores sinodales despues de nombrados?—Deben jurar desempeñar fiel y gratuitamente su cargo.

¿Qué recurso tienen los opositores contra el juicio del obispo y examinadores?—El de apelacion que les concedieron San Pio V y Benedicto XIV, para lo cual los ejercicios deben hacerse por escrito.

¿Qué juramento deben prestar los párrocos despues de tomar posesion de sus beneficios?—En los dos meses siguientes deben hacer, ante el obispo ó su vicario general, profesion jurada de su fé ortodoxa con arreglo á la fórmula del ritual.

¿Cuáles son las obligaciones de los párrocos?—1.^a, residir en sus beneficios; 2.^a, predicar; 3.^a, administrar los sacramentos; 4.^a, celebrar la misa *pro populo*; 5.^a, asistir al concilio diocesano y á las conferencias doctrinales que los unos con los otros deben celebrar, segun las órdenes del obispo; 6.^a, llevar con toda puntualidad y custodiar los libros de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones que haya en su parroquia, y 7.^a, atender á los pobres y menesterosos de la misma y corregir la corrupcion de costumbres de sus feligreses.

¿Cuáles son las prerogativas y derechos de los párrocos?—1.^o, tomar por su cuenta los coadjutores aprobados por el obispo que necesiten para el mejor servicio de la parroquia; 2.^o, administrar, con exclusion de otro sacerdote, los sacramentos á sus feligreses; 3.^o, recoger y administrar las ofrendas de los fieles; 4.^o, celebrar los funerales de sus feligreses y percibir en todo caso los derechos que se llaman *cuarta funeral*, y 5.^o, percibir los derechos de estola y pie de altar.

¿Qué dotacion tienen, además de estos derechos, los párrocos segun el concordato novísimo?—Los urbanos de tres á diez mil reales, y los rurales desde dos mil doscientos, segun su clase. Los coadjutores y ecónomos, de dos á cuatro mil. Los párrocos disfrutan, además, de sus iglesias.

De las exenciones.

¿Qué jurisdicciones exentas subsisten en España despues del concordato novísimo?—La del capellan mayor de S. M.; la del vicario general castrense; la de las cuatro órdenes militares, que ejercerá en un coto redondo formando una *cuasi diócesis* un prior con carácter episcopal (1); la de los prelados regulares y la del nuncio de Su Santidad *pro tempore*, en la iglesia y hospital de Italianos de esta corte.

¿Quién ejerce la jurisdiccion exenta de la capilla real?—El patriarca de las Indias, cuyo título fué creado en el siglo xvi.

¿Quiénes forman su cabildo?—Los capellanes de honor, de los cuales seis pueden ser prebendados de otras iglesias, no siendo canónigos de oficio ni dos de una misma iglesia, ni deanes. De ellos, el uno desempeña las funciones de sacristan mayor, otro la cura de almas de Palacio, otro administra el hospital del Buen Suceso, y otros dos los colegios de Loreto y Santa Isabel.

¿Qué categoría tiene la capilla real?—La de parroquia, creada por Benedicto XIV en 1753.

¿Quién ejerce la jurisdiccion castrense?—El mismo patriarca de las Indias, en concepto de vicario general, por concesion de Clemente XII en 1746, si bien ya desde 1744, por concesion de Inocencio X, existia esta jurisdiccion exenta.

¿Quiénes están á ella sometidos?—Todos los militares de mar y tierra y sus familias.

¿Qué auxiliares tiene para ejercerla el capellan mayor?—Para el ejercicio de la jurisdiccion contenciosa tiene en Madrid á su auditor, que es un capellan de honor, y en las provincias un subdelegado en cada diócesis; y para la cura de almas, capellanes, que son los párrocos de los regimientos (2).

(1) El tribunal de las órdenes, suprimido despues de la Revolucion de 1808, se ha restablecido y organizado una vacante en Agosto de 1876. Véase la nota referente á los tribunales eclesiásticos, en la *Sección de procedimientos*.

(2) Véase la organizacion de los tribunales eclesiásticos en el *Tratado de procedimientos*.

¿Qué atribuciones de jurisdicción voluntaria tiene el vicario general?—1.^a, la de vestir el traje seglar en caso de peligro; 2.^a, la de bendecir los vasos y vestiduras sagradas; 3.^a, la de reconciliar las iglesias y cementerios; 4.^a, la de conceder licencia para comer huevos, carnes y otros manjares prohibidos aun en tiempo de Cuaresma; 5.^a, la de conmutar y absolver las censuras; 6.^a, la de administrar todos los sacramentos, aun los reservados á los párrocos; 7.^a, la de absolver en el fuero interno de los delitos de apostasia, herejia, cisma y de todos los pecados reservados á la Silla apostólica; 8.^a, la de conceder licencia para celebrar misa una hora antes de amanecer y otra despues de medio dia, y aun dos al dia si fuese preciso, en altar portátil y al aire libre, siendo aquél decente; 9.^a, la de conceder indulgencia plenaria en algunos dias solemnes; 10, la de permitir celebrar misa de *requiem* todos los lunes ó martes por el eterno descanso de los militares difuntos, y 11, la de imponer ó agravar censuras y penas eclesiásticas á los inobedientes.

¿Están sometidos los monasterios existentes en España en la actualidad á los ordinarios?—Los monasterios de mujeres gozan de la exención total, si ésta es legitima, por la cual están sometidos á sus prelados regulares y no á los ordinarios. Los monasterios de varones no conservan más exención que la parcial para la vida interior del claustro, estando sometidos á los ordinarios en cuanto á la vida fuera del claustro. Sin embargo, por breve de Su Santidad, en 1861, quedaron sometidos á los ordinarios en concepto de delegados de la Silla apostólica, y por el tiempo de cinco años, todos los monasterios y congregaciones que nuevamente se fundasen en España.

¿Quiénes eligen los prelados regulares?—Sus inferiores, por medio de votos secretos.

¿Que atribuciones tienen los obispos sobre los regulares exentos?—1.^o, dar licencia para erigir monasterios de órdenes exentas; 2.^o, castigar á los religiosos exentos que vivan fuera del monasterio, aunque sea á titulo de estudios; 3.^o, examinar y dar licencia con justa causa á las religiosas profesas para que abandonen el claustro; 4.^o, dar igualmente licencia para que se pueda entrar en los monasterios de mujeres; 5.^o, trasladar á las poblaciones los monasterios de monjas que se hallen fuera de poblado; 6.^o, gobernar los monasterios sujetos inmediatamente á la Silla apostólica que no están sometidos á un prelado regular; 7.^o, corregir, visitar y ejercer jurisdicción sobre los regulares encargados de la cura de almas aun en los monasterios; 8.^o, hacer observar las censuras y las fiestas de la diócesis aun en las iglesias exentas; 9.^o, resolver las controversias que sobre procedencia en los actos religiosos surjan entre regulares; 10, castigar á los exentos delincuentes, cuando no lo hubieran sido por superiores; 11, explorar á los novicios y novicias dos meses antes de la profesion; 12, compeler á los monasterios, aun, por medio de censuras, á la restitution de lo que los novicios hayan donado á los monasterios antes de la profesion; 13, conocer de la coaccion que se haya ejercido sobre los novicios ó novicias para que entrasen en el monasterio; 14, conocer de las causas que formen contra los religiosos por abandono del claustro; 15, dar licencia á los regulares exentos para predicar aun en las iglesias de sus órdenes y corregir los excesos que cometan en el ministerio de la predicacion; 16, corregir los excesos de los que vivan fuera de los monasterios; 17, visitar los monasterios encomendados en que no esté vigente la disciplina regular, 18, examinar á los regulares que soliciten las órdenes, y 19, dar licencias á los mismos para confesar.

De la direccion y exencion de las monjas.

¿De cuántas clases son las monjas por la jurisdiccion á que están sometidas?—*Exentas*, que están sometidas inmediatamente al Romano Pontífice, al metropolitano, á un obispo ajeno ó al prelado de su orden, y sujetas á la jurisdiccion ordinaria, ya totalmente en cuanto á la vida interior y exterior, ya tan sólo en cuanto á la vida exterior.

¿Qué atribuciones tiene el obispo en todos los monasterios de monjas, aun exentas?—1.^a, la de nombrar, ó á lo ménos aprobar los confesores extraordinarios que deban elegirse por el obispo ó por el superior del monasterio cada año; 2.^a, la de visitar los monasterios por sí ó por medio de los vicarios generales y la de dar licencia, con legítima causa, á las monjas para que puedan abandonar la clausura.

De los clérigos en general.—Seminarios conciliares.

¿Qué establecimientos creó el Concilio de Trento para dar la necesaria instruccion científica á los clérigos?—Los *seminarios* llamados *conciliares*, que en la actualidad son *ordinarios*, *centrales* y *generales*, segun que en éstos se confieren los grados superiores y en aquéllos tan sólo el de la licenciatura. Los centrales son cuatro, existentes en Valencia, Granada, Toledo y Salamanca.

¿A quién corresponde la fundacion y régimen interior de estos establecimientos?—Por el Concilio de Trento al obispo, si bien sus decretos no tuvieron exacta aplicacion en España, hasta que en el art. 28 del concordato novísimo se determinó que, cuando ménos, en cada una de las diócesis hubiese un seminario para la conveniente instruccion del clero. El método de estudios se halla trazado en un plan general publicado por el Nuncio de S. S., *collatis consiliis*, de acuerdo con el gobierno de S. M. Proclamada la libertad de enseñanza en Octubre de 1868, se suprimieron las cátedras de teología de las universidades, dejando á los obispos en absoluta independencia para que establezcan y regulen la enseñanza de los seminarios del modo que juzguen más conveniente; mas, aquel principio de libertad ha vuelto á restringirse, despues de la restauracion monárquica (1).

¿A quiénes puede conferirse la prima tonsura?—A los fieles confirmados que conozcan los rudimentos de la fe, sepan leer y escribir y aspiren á entrar en el clero movidos por una vocacion espiritual.

¿A qué pruebas deben someterse los ordenados, especialmente los que aspiren á las órdenes mayores?—Deben ser examinados por el obispo y otras personas doctas que éste designe, no sólo acerca de los conocimientos científicos que posean, sino tambien respecto á su buena vida y costumbres, para lo cual habrán de presentar las correspondientes testimoniales de su propio párroco, quien debe, antes de expedirlas, publicar los nombres de los ordenandos en la iglesia, exhortando á los fieles á que le manifiesten lo que sepan respecto á las cualidades y circunstancias de aquéllos.

¿Qué diferencia hay entre el título de ordenacion y la adscripcion del ordenado á una iglesia?—Que el título es el derecho que el ordenado tiene á

(1) En la actualidad se discuten las bases para una nueva ley de Instruccion pública.

la cóngrua sustentacion por cuenta de ciertos bienes eclesiásticos, y la adscripcion es la asignacion del ordenado á una iglesia determinada, en la que ha de desempeñar su ministerio.

¿Cuántos son los títulos de ordenacion, segun el Concilio de Trento?—Tres: el *beneficio*, el *patrimonio*, la *pobreza ó mesa comun*, á cuyo título se ordenan tan sólo los individuos de las órdenes mendicantes. De estos títulos, los dos últimos, y especialmente el segundo, son de carácter extraordinario, que no pueden emplearse sino cuando el primero no es bastante para cubrir el servicio espiritual de los fieles.

¿Qué clases hay de inmunidad eclesiástica?—Tres: *real*, *local* y *personal*; ésta última se llama tambien *fuero*.

¿De cuántas clases es éste?—*Personal* y *real*, ó sea *propio* y *atribuido*, que tambien se llama *privilegio del fuero*. El *personal*, ó sea el privilegio del fuero, corresponde á los clérigos por razon de la persona, no por razon de la cosa sobre que recae. Su origen procede de la concesion de la autoridad temporal. El *real*, ó sea el fuero propio, es la competencia que corresponde á la iglesia por su misma naturaleza para conocer ella sola de los asuntos espirituales ó eclesiásticos. Su extension se determina por la naturaleza de la cosa sobre que recae.

En virtud de este privilegio del fuero, ¿qué eclesiásticos son los que en la actualidad están en España exentos del servicio militar?—Tan sólo los misioneros del Asia, los escolapios y los clérigos de San Vicente de Paul.

¿Qué determinó el Concilio de Trento sobre el traje clerical?—Que los clérigos gasten un traje honesto, que esté en armonia con la santidad de sus funciones, y que los que falten en esto al precepto eclesiástico puedan ser suspensos por el obispo en el ejercicio de las órdenes ó en la percepcion de los frutos de sus beneficios, y aún, si fuesen reincidentes, ser privados de ellos.

¿De qué negocios y actos pueden abstenerse los clérigos?—De los políticos, del comercio que tiene por objeto el lucro, de las funciones teatrales y de toros, de los juegos y de la caza estrepitosa.

De la sustentacion del culto y clero.

¿Cuáles son las principales formas de sustentacion?—Las oblacones y limosnas espontáneas, los diezmos y primicias, los productos de los bienes de todas clases cuya propiedad corresponda á la Iglesia, la subvencion del Estado y los derechos de estola y pie de altar.

¿Qué deben tener presente los clérigos relativamente á esta forma de sustentacion?—Que esos derechos no tienen el carácter de precio de las cosas espirituales que deben dispensar á los legos gratuitamente, y que es conveniente que no presenten siquiera la forma de exacciones obligatorias, hasta el punto que seria de desear que fuesen completamente abolidos.

¿Cuál es el origen de los diezmos de la Iglesia católica?—Puramente humano eclesiástico. Esta prestacion quedó abolida en 1840, cuya abolicion fué confirmada de una manera tácita por el concordato novísimo.

¿Cuáles son los límites del derecho propio y no concedido por la autoridad temporal que tiene la Iglesia á la propiedad en general?—Los de la necesidad para cumplir su divina mision; y, por consiguiente, tendrá derecho á adquirir la propiedad inmueble en cuanto sea necesaria para aquel objeto y nada más, resultando de aquí que esta propiedad, en cuanto se destine á la sustentacion del clero, no es un derecho originario de la Iglesia, una vez que puede cubrirse aquella atencion por medio de la propiedad mueble.

¿Qué dispone el concordato novísimo sobre este punto?—Se establece en el el derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar libremente la propiedad, sin que la que adquiriera con posterioridad á dicho concordato haya de computarse en la dotacion del culto y clero en él fijada.

¿En qué se funda la condicion de inalienables que tienen los bienes eclesiásticos por derecho comun?—En la perpetuidad del servicio á que dichos bienes están consagrados.

¿Qué dispuso el novísimo concordato sobre las enajenaciones de los bienes eclesiásticos que se habian hecho por el Estado?—Se declaró en él que no serian inquietados en su propiedad y aprovechamiento los que los habian adquirido en virtud de las enajenaciones hechas (1).

De los beneficios.

¿Qué es beneficio y cuántas son sus clases?—Una porcion de bienes eclesiásticos adscrita á un oficio espiritual, cuya administracion y usufructo corresponde al clérigo que sirve aquél. Se dividen en *mayores y menores, curados y simples, compatibles é incompatibles, residenciales y no residenciales, de libre colacion y de patronato, reservados y de provision ordinaria, y seculares y regulares*.

¿Qué edad se requiere para adquirir los beneficios eclesiásticos?—Catorce años en general, salvo aquellos casos para cuya obtencion leyes especiales eclesiásticas la exigen mayor.

¿Los hijos ilegítimos pueden obtener beneficios en la misma iglesia en que los posean sus padres?—Lo prohíbe terminantemente el Concilio de Trento, ya porque de esta manera venia á perpetuarse la memoria de la incontinencia paterna en la persona del hijo, ya para que nunca pueda aparecer que los beneficios eclesiásticos se adquieren por herencia como las cosas temporales.

¿Puede un mismo clérigo poseer dos ó más beneficios?—Lo prohíbe terminantemente el Concilio de Trento, salvo el caso de que el beneficio poseído no sea bastante para la cógrua sustentacion del beneficiado, en cuyo caso podrá conferirse á éste otro simple, con tal que ámbos no exijan la residencia personal.

Del patronato real.

¿Cuál es el origen del patronato universal que corresponde á la Corona de España?—Procede de los tiempos de la monarquía visigoda, por cuanto en el cánón sexto del concilio de Toledo ya se reconoce al monarca la actual facultad de elegir á los obispos. En tiempo de la reconquista se confirmó más este derecho por la recuperacion, dotaciones y fundaciones que hicieron los monarcas á favor de la Iglesia. Por lo que se refiere á Aragon, Cataluña, Navarra, Valencia y las Baleares, Urbano II reconoció á Pedro I el patronato sobre todas las iglesias y monasterios que recuperase de los sarracenos ó edificase nuevamente, con la sola excepcion de las iglesias episcopales. En cuanto á Granada é Indias Occidentales, fué también reconocido el patronato á favor de los reyes católicos por Alejandro VI. Y, por último, este patronato se hizo universal por el concordato otorgado entre Benedicto XIV y Fernando VI, en 1753.

(1) Véase la primera nota siguiente.

De la actual forma de sustentacion del culto y clero en España.

¿Qué dotacion está asignada á los obispos por el novísimo concordato?—Al de Toledo 160.000 rs. anuales, á los de Sevilla y Valencia 150.000, á los de Granada y Santiago 140.000, á los de Burgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza 130.000, á los de Barcelona y Madrid 110.000, á los de Cadiz, Cartagena, Córdoba y Málaga 100.000, á los demás 90 y 80.000; al patriarca de las Indias, no siendo arzobispo ó obispo propio, 150.000. Los obispos que sean cardenales, tendrán un sobresueldo de 20.000 reales. Los obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife, y el prior de las órdenes militares, tendrán 40.000 reales. Y además el Estado sufragará á todos el coste de las bulas de su confirmacion. No se computará tampoco en su dotacion los palacios episcopales y casas de recreo que por el concordato se les conservaron y no habian sido antes enajenados. Y, por último, tampoco quedarán sujetos al derecho comun de espolios por los bienes que dejen á su fallecimiento, de los que podrán disponer, pasando á sus herederos legítimos en caso de morir intestados.

¿Qué dotaciones se asignaron al clero catedral y colegial?—A la dignidad de dean de la iglesia de Toledo, 24.000 reales anuales; á la misma, en las demás iglesias metropolitanas, 20.000, y en las sufragáneas 18.000; á la dignidad de abad en las colegiatas, 15.000; á las demás dignidades y canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas 16.000, y á las de las sufragáneas 14.000; así como á los canónigos de oficio de las colegiatas 8.000; á los canónigos de gracia de las metropolitanas 14.000, de las sufragáneas 12.000 y de las colegiatas 6.600. A los beneficiados de las iglesias metropolitanas, 8.000, de las sufragáneas 6.000, y de las colegiatas 3.000.

¿Qué dotacion se asignó al clero parroquial?—A los párrocos urbanos 3 á 10.000 rs., y á los rurales 2.200 como minimum. A los coadjutores y ecónomos de 2 á 4.000 rs. Además los párrocos y coadjutores disfrutaban de los derechos de estola y pie de altar, y de las casas de habitacion é iglesias que no fueron enajenados, sin que nada de esto se les impute en su dotacion.

¿De qué manera fué dotado el culto?—Se asignó por este concepto á las iglesias metropolitanas de 90 á 140.000 rs. anuales, á las sufragáneas 70 á 90.000 y á las colegiatas de 20 á 30.000, así como á cada una de las parroquias 4.000 rs. anuales como minimum.

¿De qué manera se dotaron la administracion y visita episcopales y los seminarios?—A los metropolitanos se les asignaron por aquel concepto de 20 á 30.000 rs., y á los sufragáneos de 16 á 20.000 rs. anuales. A los seminarios se les asignó la cantidad de 90 á 120.000 rs.

¿Qué fondos y productos se consignaron para el pago de estas dotaciones?—1.º, los productos de los bienes que habian pertenecido á la Iglesia y que, no habiendo sido enajenados, se le habian devuelto por la ley de 3 de Abril de 1845; 2.º, los productos de los bienes que pertenecian á la mesa maestral y las encomiendas de las cuatro órdenes militares que estaban vacantes al tiempo de otorgarse el concordato, ó que vacasen en lo sucesivo; 3.º, los productos de la bula de cruzada, y 4.º, un impuesto sobre la riqueza urbana, rústica y pecuaria, en la cantidad necesaria para cubrir, con los fondos anteriores, el importe total de las dotaciones señaladas (1).

(1) La ley de arreglo del clero, aprobada por las Cortes en 1873, no ha llegado á regir. En ella se consignaba el principio de que corresponde á los ayuntamientos y diputaciones provinciales la sustentacion del culto y clero, conforme á las disposiciones que contenia aquella, reservándose el Estado el pago de algunas obligaciones generales. El art. 11 de la Constitución de 1876 ha vuelto á reconocer y sancionar la obligacion del Estado, que reconocia tambien la de 1869, de mantener el culto y los ministros de la religion catolica, á la que declara oficial.

De la propiedad del clero regular de ambos sexos y de la sustentacion del mismo.

¿Pueden los regulares tener propiedad?—Individualmente les estaba prohibido en absoluto, así la de las cosas muebles como la de las inmuebles; pero por regla general podian tener la propiedad en comun, con tal que no se lo prohibiesen la regla ó constituciones de la orden. Por decreto de 25 de Junio de 1868 se autorizó á las comunidades religiosas para adquirir y poseer bienes, cuyo decreto fué derogado por otro de 15 de Octubre siguiente, en el cual se restableció el art. 38 de la ley de 29 de Julio de 1837, que concede *individualmente* á las monjas profesas el derecho de adquirir y poseer bienes. Esto es lo vigente.

¿Qué requisitos son indispensables para la fundacion de un nuevo convento?—1.º, la licencia del ordinario si pertenece á una orden cuyos individuos no hacen votos solemnes, y la del Romano Pontífice en otro caso; 2.º, la citacion y audiencia de los superiores de los demás conventos existentes en el territorio en que haya de fundarse el nuevo, y 3.º, la citacion y audiencia tambien del párroco del lugar en que se haya de hacer la nueva edificacion. Por el concordato novísimo los obispos son los que han de proponer las casas religiosas, así de varones como de mujeres, que hayan de existir en sus respectivas diócesis, con la limitacion de que las monjas se han de dedicar todas, no solo á la vida contemplativa, sino á algun ejercicio de la activa.

¿Por qué medios se atiende en la actualidad á la sustentacion de los religiosos y de las monjas?—A la de los primeros se atiende por el gobierno. A la de las monjas con los bienes que en otro tiempo les pertenecieron y no fueron vendidos, con el producto del trabajo á que se dediquen y con las dotes de las que hagan profesion. No siendo esto bastante, se cubrirá el déficit por cuenta del Tesoro, por el que atenderá tambien á los gastos extraordinarios de reparacion de sus iglesias y conventos, de la misma manera que cubrirá tambien la dotacion de dos monjas de oficio que ha de haber en cada convento y de sus capellanes y saeristanes. Esta forma de sustentacion está próxima á desaparecer. (Véase la nota anterior.)

De las capellanías y oficios eclesiásticos.

¿Qué es capellanía?—Un título eclesiástico que confiere derecho para percibir cierta porcion de rentas, é impone la obligacion de cumplir ciertos oficios ó levantar ciertas cargas religiosas, segun la voluntad del fundador.

¿De cuántas clases son las capellanías?—Eclesiásticas y laicales, colativas y electivo-colativas, familiares y de libre colacion, fijas en una iglesia y como oficio propio ó residencial, ó no fijas y sin oficio. Las familiares se subdividen en capellanías de patronato *activo*, de patronato *pasivo*, y de patronato *activo y pasivo*, y amayorazgadas y no amayorazgadas, pudiendo ser las amayorazgadas de tantas clases de cuantas son los mayorazgos.

¿Cuándo se llamará eclesiástica una capellanía?—Cuando la fundacion haya sido aprobada por el ordinario, y cuando al mismo corresponda la provision que ha de hacer por eserito.

¿Qué capellanía se llama *colativa*?—La que se confiere libremente por el ordinario, á diferencia de la electivo-colativa que se confiere por el ordinario en virtud de la presentacion hecha por el patrono, bien sea eclesiástico, bien laical.

¿Qué reglas deben tenerse presentes respecto á la naturaleza y clase de las capellanías?—En caso de duda, deben reputarse eclesiásticas. Son de mejor condicion las eclesiásticas que las laicales, porque las primeras se asimilan á los beneficios, al paso que las segundas á los aniversarios. Son igualmente de mejor condicion las que llevan anejo un oficio, imponen al poseedor la obligacion de residir y la de auxiliar al párroco. Las capellanías eclesiásticas se rigen por las leyes de esta clase, y las laicales por las civiles.

¿Qué reglas deben tenerse presentes respecto á las capellanías familiares?—Debe atenderse á las cláusulas de la fundacion para determinar si son de patronato activo; es decir, si han de conferirse en virtud de presentacion de un individuo de la familia, llamado por el fundador, ó bien si son de patronato pasivo, esto es, si han de conferirse á un clérigo de una familia llamada en la fundacion, ó bien si reunen los dos patronatos.

¿Pueden fundarse capellanías laicales en una iglesia determinada y con oficio propio?—No hay inconveniente ninguno en ello, con tal que el obispo haya aprobado la fundacion, por más que la provision no le corresponda.

¿Qué determinaron Carlos III y Carlos IV respecto á la supresion y reduccion del excesivo número de capellanías que habia en España?—El primero mandó suprimir las incógruas, uniéndolas á otras, y que todas las que se conservasen fuesen residenciales; y el segundo prohibió fundar capellanías sin real licencia, y previno que en su fundacion habian de observarse los requisitos establecidos para la de los mayorazgos.

¿Cuáles fueron las últimas disposiciones dictadas sobre esta materia?—El real decreto de 1852, por el que se mandó conservar las capellanías colativas de sangre; el de 1855, por el que se derogó éste y se restableció la ley de 1844, mandando proceder á la distribucion de los bienes de las mismas entre los individuos de las familias llamadas á su patronato activo y pasivo; el de 1856, en que se acordó suspender el de 1855, y, finalmente, el de 1867, por el que se conservaron las capellanías colativas cuyos bienes no se habian todavía temporalizado, aunque mandando convertirlos en inscripciones intrasferibles de la deuda pública.

De las iglesias y su reparacion.

¿Qué clases hay de iglesias?—Mayores y menores, consagradas y benditas, públicas y privadas, seculares y regulares, libres y patronadas. Son mayores las catedrales, colegiatas insignes y basílicas. Son menores todas las demás.

¿Qué es inmunidad de las iglesias?—Los privilegios otorgados á las mismas por razon de la santidad del culto. Estos son el asilo, la prohibicion de celebrar en ella juicios civiles ni criminales y reuniones de carácter civil, de cualquiera clase que sean.

¿Qué se ha determinado por el novísimo concordato y disposiciones respecto á la reparacion de templos?—Por el art. 36 de aquél el gobierno temporal se encargó de sufragar estos gastos. Por real decreto de 4 de Octubre de 1864 se estableció la instruccion de los expedientes que deben hacerse para acreditar la necesidad de la reparacion. Segun ella estos gastos son ordinarios y extraordinarios. Los primeros son los que anualmente se destinan á la conservacion de las catedrales, parroquias y seminarios. Los segundos son los que, en defecto de otros fondos ó limosnas de los fieles, se destinan á reparaciones mayores ó á nuevas construcciones, así de las iglesias como de las casas religiosas. Los palacios episcopales se reparan ordinariamente por cuenta de la dotacion de la mitra, en el tiempo de la vacante. En cada diócesis, por dicha real disposicion, ha de haber una comi-

sion que esté al frente de las reparaciones que se hagan en los templos, la cual constará del prelado, del dean, de un canónigo designado por el cabildo, del fiscal de la audiencia, ó en su defecto del promotor fiscal del juzgado, del regidor síndico del ayuntamiento y de un delegado de la comisión encargada de la conservación de monumentos públicos. Hay, además, juntas locales encargadas de la ejecución inmediata de las obras. Es inmediata la reforma de esta materia (1).

Del sacrificio de la misa.

¿En qué idioma debe celebrarse la misa?—En latín, según dispuso el santo Concilio de Trento, y en griego para los católicos de este rito.

¿Qué abusos prohibió el concilio en la celebración de la misa?—Todos los que procedan de avaricia, irreverencia ó impiedad, ó puedan tener cierto sabor de idolatría, imponiendo á los obispos la obligación de extirparlos, suprimiendo en este punto toda exención de la autoridad del ordinario.

¿Puede un sacerdote celebrar dos misas en un día?—Tan solo en caso de absoluta necesidad, para lo cual debe tenerse presente, respecto á los en que los párrocos pueden hacerlo, el rescripto de Benedicto XIV al obispo de Huesca.

De los oratorios privados.

¿En qué se funda lo lícito de la concesión de oratorios privados?—En la necesidad y verdadera devoción de los que lo soliciten, y en la carencia de perjuicio por otra parte para el culto público.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento respecto á oratorios privados?—Que no se consientan sino en lugares decorosos, y que al efecto sean visitados por el ordinario.

¿Qué dispuso Clemente XI sobre lo mismo?—Que no puedan celebrar en ellos los sacerdotes, aunque sean regulares ú obispos, en las fiestas de Pascua, Pentecostés, Natividad del Señor y en otras igualmente solemnes y no comprendidas en el breve de concesión.

¿A quién corresponde el exámen de estos breves?—Al obispo de la diócesis, salvo las facultades especiales sobre la materia propias del arzobispo de Toledo, en concepto de comisario general de cruzada.

Del culto de las reliquias y sagradas imágenes.

¿Qué determinó el Concilio de Trento sobre esto?—Que los obispos enseñen á los fieles el verdadero carácter de este culto, que en sí es santo y provechoso, para que no incurran en idolatría. Que así las reliquias de los mártires como las imágenes de Jesucristo, la Virgen y demás santos deben conservarse en las iglesias y ser objeto de la veneración de los fieles, pero que ninguna debe ponerse en la iglesia sin la autorización del obispo.

De los Hospitales.

¿Qué entendió el Concilio Tridentino por hospital?—La casa destinada, no solamente á la curación de enfermos, sino á la educación de los huérfanos y á la asistencia de los enfermos y desvalidos.

(1) Véase la nota anterior.

¿De qué clases eran los hospitales?—Por razon de la fundacion eran libres ó de patronato real ó particular; por razon de los bienes y de la misma fundacion eran eclesiásticos ó laicales, de dominio público ó de dominio privado.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento respecto á hospitales?—Que los ordinarios cuidasen de que fuesen gobernados fiel y diligentemente, áun aquellos que gozasen de exencion, y que visitasen los de su diócesis, ménos los que estuviesen bajo la inmediata proteccion de los reyes, á no obtener para ello su licencia expresa.

¿Qué disposiciones se dictaron en España con posterioridad respecto á hospitales?—San Pio V, á instancias de Felipe II, mandó proceder á su reduccion, porque habia muchos que no cubrian el objeto de la fundacion. Por la ley civil de 1849 los hospitales se clasificaron en generales, provinciales y municipales, segun los fondos con que hubiesen de ser sostenidos. Temporalizados, por consiguiente, todos estos establecimientos, los obispos no pueden visitarlos sino en lo espiritual, porque la administracion temporal corre á cargo del Estado (1).

¿Constituyen verdaderas parroquias los hospitales?—De ningun modo, sino que sus capellanes, en lo espiritual, están sometidos al párroco del territorio en que el establecimiento radique.

De los Cementerios y exequias de los cristianos.

¿De cuántas clases son los cementerios?—Católicos y profanos, rurales y urbanos, públicos ó privados, eclesiásticos, municipales y de cofradías.

¿Por qué leyes se rigen los cementerios en España?—Por las canónicas y por las civiles, especialmente por la real cédula de 1787 y por el real decreto de 2 de Junio de 1833, y por la ley de 27 de Abril de 1835 (2).

¿Con qué fondos deben ser contruidos los cementerios?—Con los de la iglesia parroquial, y en su defecto con los municipales, en cuyo caso corresponderá al municipio la propuesta del capellan y la percepcion de los derechos de sepultura, así como la vigilancia por lo que conviene á la salubridad pública; pero no por eso el cementerio dejará de considerarse como eclesiástico, debiendo tener sus llaves el párroco ó capellan.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento sobre las exequias de los fieles?—Que se celebren sufragios, misas, oraciones y otras obras de piedad que los fieles vivos dispongan por el eterno descanso de los difuntos, y que se satisfaga la cuarta funeral á la iglesia catedral ó parroquial apesar de las costumbres, gracias ó privilegios que hubiese en contrario.

De la familia cristiana.—Matrimonios.

¿Cuáles son los efectos civiles del bautismo en España?—Sin él ninguno era antes considerado como ciudadano español, ni podia aspirar á grados académicos, ni al magisterio, y se reputaba abortivo el niño fallecido antes de recibirlo. Desde la Constitución de 1869 y la ley de registro civil,

(1) Véase lo dicho acerca de la beneficencia, en el tratado de Derecho administrativo.

(2) El proyecto de la ley de secularizacion de cementerios, que se presentó á las Cortes en 1873, no ha llegado á ser ley.

Por Real orden de 28 de Febrero de 1872, se mandó que de conformidad con el espíritu y disposiciones de la ley de 1855, se construyesen cementerios contiguos á los católicos, pero independientes de éstos, para enterrar los cadáveres de los que mueren fuera de la Iglesia Católica. (La nota de la pág. 134, entiendase modificada por ésta.)

el bautismo no es necesario para ningún acto de la vida civil. La ley no prefiere para nada á ninguna religion.

¿Qué determina el Concilio de Trento respecto á la preparacion espiritual de los que intentan contraer matrimonio?—Que ántes de celebrarlo, ó á lo menos tres dias antes de consumarlo, los esposos confiesen y comulguen.

¿Quiénes se entienden domiciliados para el efecto de determinar el párroco que ha de asistir á su matrimonio?—Los que lleven un mes de residencia en la parroquia *cum animo ibi manendi*.

¿Quién es el ministro del matrimonio secreto ó de conciencia?—El párroco de uno de los contrayentes, á no ser que el obispo elija para ello, por una grave causa, á otro sacerdote de probidad y doctrina.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento respecto á la libertad de los esposos para contraer matrimonio?—Prohibió que las autoridades temporales, directa ni indirectamente, violentasen á los súbditos para celebrar matrimonio, bajo la pena de anatema *ipso facto incurrenda*.

¿Qué impedimentos dirimentes pueden dispensarse?—Los que fueron establecidos por derecho humano, á saber: la cognacion espiritual, la afinidad por adopcion, la afinidad superviviente, la que procede de cópula ilícita, la que procede de pública inhonestidad, la consanguinidad, el impedimento procedente de un matrimonio contraído por ignorancia, y el que procede de un crimen que no ha sido voluntariamente cometido por ninguno de los esposos.

¿Cuáles son las causas más comunes por que se dispensan los impedimentos?—Las siguientes: *ob dotem incompetentem, pro indotata, ob angustiam loci seu locorum, ob angustiam loci et si extra, ob ininitias, pro confirmatione pacis, ad sedandas lites, pro muliere viginti quator annorum, pro muliere viginti quator annorum et ultra, ob infamiam cum copula y ob infamiam sine copula*.

¿De qué impedimento puede dispensar en España el arzobispo de Toledo, como comisario general de cruzada?—De la afinidad por delito.

¿De qué impedimento puede dispensar el mismo cónyuge incente?—De los que proceden del crimen de raptó, de error en la persona, de error en la condición servil, de impotencia, de coaccion y de la cognacion ignorada por el otro (1).

De los ayunos y penitencias públicas.

¿Qué dispusieron el Concilio de Trento y Benedicto XIV respecto á ayunos?—Que los cristianos deben hacer estas obras de mortificacion, y que los obispos no deben autorizar el uso de carnes en los dias que la Iglesia lo prohíbe, á no ser por una grave causa, y aun entónces bajo la condición de guardar la forma del ayuno.

¿De qué privilegio gozan los españoles relativamente á esta materia?—Están facultados para comer carnes los viérnes de todo el año, ménos los de la Cuaresma, así como en los dias de ésta.

De los testamentos y sufragios por los difuntos.

¿Qué dispuso el Concilio de Trento respecto al cumplimiento de las últimas voluntades?—Que los obispos, como delegados de la Silla apostólica, sean los ejecutores de las últimas voluntades en su parte piadosa.

(1) Véase el *Derecho canonico*, pág. 122.

¿Cómo deben proceder los mismos en su conmutacion?—Por justa causa y en forma sumaria y extrajudicial.

¿De qué parte de la herencia deben salir los gastos de las exequias?—Del quinto, para no perjudicar á los herederos en sus legítimas.

¿Qué dispuso el Concilio respecto á la conservacion de la Sagrada Eucaristia y al Viático de los moribundos?—Mandó guardar la antiquísima costumbre de conservarla en el sagrario de la iglesia, y llevarla á los que, por enfermedad, no pueden ir allí á recibirla.

¿Se concede á los reos de pena capital la Sagrada Eucaristia?—Hasta el Concilio de Trento se les negaba en España; pero se les concedió por *motu proprio* de San Pío V en 1569, y en conformidad con él se dictó la ley 4.^a del título I del libro 4.^o de la Novísima Recopilacion.

De los juicios eclesiásticos.

¿Qué es juicio y cuántas son sus especies?—La discusion legitima entre partes, ante el juez competente, que la decide por una sentencia. Los juicios pueden ser eclesiásticos y seculares, civiles y criminales, sumarios y ordinarios, petitorios y posesorios, simples y dobles, contenciosos y gubernativos (1).

Segun el Concilio de Trento, ¿cómo se dividen los juicios ó causas eclesiásticas?—En civiles y criminales, de primera instancia y apeladas, simples y graves, judiciales y extrajudiciales, ordinarias y exceptuadas.

¿Está obligado el juez eclesiástico á seguir el procedimiento civil?—No lo está en las causas meramente espirituales, pero sí debe seguirlo en las temporales y mixtas.

¿En qué causas y puntos es aún ésto de imposible observancia?—En las matrimoniales, en las de apelacion ante el metropolitano y ante la Rota.

Por razon de la materia, ¿cuáles son las causas de naturaleza mixta?—Las matrimoniales, algunas beneficiales, las de funerales, las decimales, la de nulidad de profesion, las de preeminencia entre iglesias ó clérigos, las de derechos parroquiales y oblacones, y las de esponsales.

¿Cuáles son las causas que se sustancian en forma de jurisdiccion voluntaria no habiendo contradiccion de parte legítima?—La union, supresion, division ó creacion de beneficios, la enajenacion de bienes eclesiásticos, las dispensas matrimoniales, adquisicion, prueba y ejercicio del derecho de patronato.

¿Cuáles son las causas exceptuadas, segun el Concilio de Trento?—Las que por los cánones vigentes deben sustanciarse ante la Silla apostólica, ó las que se reserva el Romano Pontífice por una causa razonable y urgente y en rescripto firmado por el mismo.

Del fuero competente (2).

¿Cuáles son las reglas segun las que se ha de determinar la competencia del fuero?—Las siguientes: 1.^a, el actor debe seguir el fuero del reo; 2.^a, en

(1) Véase el *Tratado de procedimientos*.

(2) Véase el tratado de la competencia de los tribunales en la *Seccion de procedimientos*, aplicable á esta materia.

los crímenes más graves, que se castigan con pena capital ó que producen la perturbacion del órden público, los eclesiásticos no gozan de fuero; 3.^a, el demandado debe contestar ante el juez que conoce de la demanda, á no alegar su incompetencia; 4.^a, el demandado ante juez incompetente, debe excepcionar su incompetencia; 5.^a, la reclamacion de incompetencia á que no accede el juez contra quien se interpone, debe ser resuelta por su superior; 6.^a, cuando hay conflicto entre dos jurisdicciones debe resolverlo el superior comun.

¿Qué determinó el Concilio de Trento respecto á fuero competente?—Que todas las causas eclesiásticas deben ser decididas en primera instancia por el ordinario, en el término de dos años despues de empezadas.

¿Por qué causas se hace un juez competente?—Por razon del domicilio, por razon del delito, por razon del contrato, por la del lugar en que está sita la cosa litigiosa, por la incontinencia de la causa, por la terceria y por la sumision expresa ó tácita de las partes.

¿En qué casos los clérigos no gozan de fuero?—En los actos de conciliacion, en los inquilinatos, para prestar declaracion en causas criminales, en los juicios posesorios é interdictos, en los que son demandantes sobre cosas temporales, en los mismos respecto á la reconvention que interponga el demandado, en los juicios universales de testamentaria y abintestato y en los juicios por accion real.

¿En qué casos el clérigo delincuente no goza de fuero?—Cuando la causa recae sobre delito de falsificacion de bulas ó privilegios apostólicos, desacato al obispo, herejía y otros delitos graves, respecto á los que procede el desafuero, por costumbre.

¿En qué forma se sustancian las cuestiones de competencia entre las autoridades eclesiásticas y temporales?—Por medio de los recursos de fuerza en conocer.

Del procedimiento canónico civil.

¿Cuáles son las partes del juicio civil eclesiástico segun el derecho comun de las Decretales?—La demanda, la citacion y emplazamiento, la contestacion, las primeras y segundas réplicas, las pruebas, siendo necesarias, la publicacion de probanzas, la citacion de las partes para sentencia, la pronunciacion de ésta, su notificacion, su apelacion verbal ó escrita y la entrega de los *apóstoles* al apelante.

¿Cometió especialmente á los ordinarios el Concilio de Trento el conocimiento de algunas causas civiles?—Las de personas miserables y desvalidas, aunque algunas de ellas fuesen exentas.

Del juicio criminal eclesiástico.

¿De cuántas clases son las causas criminales eclesiásticas?—Mayores y menores, eclesiásticas, seculares y mixtas, inmunes y no inmunes, muy graves, graves y leves, contra obispos, contra clérigos ó contra legos, y reservadas ú ordinarias.

¿Quién estableció la division de las causas en graves y leves?—El Concilio Tridentino, determinando que de las primeras contra obispos conociese el Romano Pontífice, así como de las segundas contra los mismos el concilio provincial.

¿Qué determinó el mismo concilio respecto á la citacion de los obispos acusados y á los testigos que han de recibirse en estos juicios?—Que no se cite al obispo sino en causa por delito penado con la deposicion ó priva-

cion de la silla episcopal, y que no se admitan como testigos contra el obispo sino á files que estén contextes y sean de buena fama, castigándolos con graves penas si faltan á la verdad por pasion, temeridad ó mala voluntad.

De las causas matrimoniales.—Recursos de apelacion, proteccion y fuerza (1).

¿A qué clase pertenecen estas causas?—A las graves entre las eclesiásticas, habiéndolas declarado tales el Concilio de Trento.

¿Qué funcionario eclesiástico debe intervenir necesariamente en la instruccion de estas causas para sostener la validez del matrimonio?—El defensor del matrimonio, cuyo cargo fué creado por Benedicto XIV en la bula *Dei miseratione*.

¿Sobre qué asuntos se instruyen los juicios eclesiásticos en la forma sumaria?—Segun la constitucion de Clemente V, sobre elecciones, postulaciones, provisiones de dignidades, personados, prebendas, parroquias ú otros beneficios eclesiásticos, sobre diezmos, matrimonios y usuras. Debe tenerse no obstante en cuenta que alguno de estos negocios se resuelven, cuando no hay contradiccion de parte, por jurisdiccion voluntaria.

¿Qué más causas eclesiásticas se instruyen sumariamente?—Las de las personas miserables, huérfanos, viudas y pobres, las de espolios y las leves.

¿En qué caso se conoce en forma sumarísima segun el Concilio de Trento?—1.º, cuando se deniegan las órdenes sagradas ó la promocion á las superiores; 2.º, cuando se suspende temporalmente al clérigo en el oficio, en virtud del delito que conste al obispo que ha cometido, pero cuya prueba sea difícil ó haya de causar escándalo.

¿En qué casos procede esta suspension sumarísima?—En los de concubinato secreto, solicitacion *ad turpia*, mala direccion de las monjas, concitacion contra el propio párroco, inmision en cosas politicas y de sociedades secretas, usura y desacato al obispo.

¿Qué es apelacion y cuántas son sus clases?—El recurso interpuesto para ante el superior por la parte que se considera agraviada por la providencia del inferior. La apelacion puede ser verbal ó escrita, judicial ó extrajudicial, útil y frivola, y de sentencia definitiva ó de providencia interlocutoria.

¿En qué casos puede apelarse extrajudicialmente?—En los juicios ó causas sobre elecciones, postulaciones, provisiones ó cualesquiera otros actos extrajudiciales respecto á los que no esté prohibida la interposicion de este recurso.

¿Cuántos dias se dan para apelar por derecho canónico?—Diez improrogables, bien sea la apelacion judicial ó extrajudicial.

¿Ante quién debe apelarse?—Ante el superior inmediato de aquél que ha dictado la providencia.

¿Qué son recursos de abuso ó proteccion?—Los interpuestos ante el juez temporal por el que litiga ante otro eclesiástico á consecuencia del exceso en que éste haya incurrido en la instruccion y fallo de la causa. Estos recursos están tolerados por la Iglesia.

¿De cuántas clases son en España?—Administrativos, que se llaman *recursos de proteccion*, y judiciales que se llaman *recursos de fuerza*.

(1) Véase el tratado de la competencia de los tribunales, en la *Seccion de procedimientos*, aplicable á esta materia.

¿En qué casos procede el recurso de proteccion?—Cuando el lego es detenido ó vejado por la autoridad eclesiástica, ó cuando el clérigo es tratado inhumanamente por la misma. Estos recursos comunmente se interponen, no contra los actos judiciales, sino contra los gubernativos de la autoridad eclesiástica.

¿De cuántas clases son los recursos de fuerza?—De tres: en conocer, en proceder y en no otorgar la apelacion.

¿En qué casos determina el concilio que solicite la autoridad eclesiástica el auxilio del brazo secular?—Para la clausura de las monjas é inclusion de sus monasterios en poblado, para expeler ó desterrar las concubinas de los clérigos, para llevar á efecto la reforma de los regulares y para conservar la libertad eclesiástica.

De las penas eclesiásticas (1).

¿Qué es *pena canónica en general*?—La privacion de un bien espiritual ó temporal, impuesta por la Iglesia en castigo de alguna infraccion de las leyes eclesiásticas divinas ó humanas.

¿De cuántas clases son las penas eclesiásticas en general?—Por razon de su naturaleza, penas propiamente dichas ó *censuras*; por razon del delito, públicas ó privadas, generales ó especiales; por razon del modo de imponerlas, fijas ó arbitrarias, judiciales ó gubernativas; por razon de su importancia, principales ó accesorias, y por la de su origen y actual fuerza obligatoria, antiguas, anticuadas, nuevas y renovadas.

¿En qué se distingue la pena de la penitencia?—En que la primera se impone al delito y la segunda al simple pecado, público ó secreto.

¿Cuál es la escala gradual de las penas canónicas?—El anatema, la excomunion mayor *ipso facto incurrenda*, la excomunion mayor *monitione premissa*, excomunion menor, entredicho, irregularidad por delito y deposicion, privacion de derechos espirituales que procedan del oficio, privacion de pensiones, absoluta ó parcial, temporal ó perpétua; privacion de honores eclesiásticos, tambien temporal ó perpétua, absoluta ó parcial; multa, reclusion temporal ó perpétua, reprension pública ó privada, restitution y reparacion del daño causado. Además hay las siguientes penas especiales para los clérigos: suspension de oficio ó de beneficio, ó de ambas cosas; inhabilitacion para obtener cargos eclesiásticos, privacion de voz activa ó pasiva ó de ambas, en cabildo, expulsion del mismo é incomunicacion. Las penas accesorias son: la degradacion, la nulidad del acto, la penitencia pública, la infamia y la privacion de sepultura eclesiástica.

¿Qué es penitencia pública?—La impuesta á los pecadores públicos.

¿Cuándo comenzaron á redactarse los códigos de las penitencias públicas, ó sea los *penitenciales*?—En el siglo v, así en Oriente como en Occidente, siendo los más célebres el de Juan Jejunator en Oriente, y los de Teodoro de Cantobery y Beda en Occidente.

¿Qué determinó el Concilio de Trento sobre penitencias públicas?—Que deben imponerse por pecados cometidos públicamente y que hayan causado escándalo, salva la facultad de conmutar el obispo la penitencia pública en otra secreta cuando lo creyere conveniente.

¿Cuáles son las penas antiguas que renovó el Concilio de Trento?—Las impuestas á los obispos residentes en la curia romana y en las Cortes sin necesidad, las impuestas á los predicadores herejes, las fulminadas contra los que confieren beneficios á indignos, contra los que exigen derechos

(1). Véanse las páginas 155 y 160.

excesivos, contra los obispos que no asisten al concilio, contra los que ordenan á clérigos sin congrua sustentacion y contra los párrocos no residentes.

¿Contra quiénes fulminó el Concilio de Trento la censura de excomunion?—Contra los que niegan la obligacion del precepto pascual, contra los que violan la clausura monástica, contra los que hacen ó reciben donaciones del novicio antes de la profesion, contra los que ejercen coaccion sobre los novicios para obligarles á profesar, contra los reos del crimen de rapto, contra los reos pertinaces de concubinato con escándalo, contra los que se oponen inicuamente á la celebracion de los matrimonios, contra los depredadores de los bienes eclesiásticos, contra los que se intrusan en la presentacion de los beneficios, contra los duelistas y contra los que violan la inmunidad eclesiástica.

¿Qué delitos se castigan, segun el concilio, con la censura de entredicho?—La intrusion del capitulo en dar reverendas ó dimisorias, la vagancia clerical y la aceptacion de cosas temporales en remuneracion de la colacion de beneficios.

¿Quiénes son castigados con la pena de infamia y sus padrinos. que consiente el rapto, los duelistas y sus padrinos.

¿A quiénes se impone la pena de inhabilitacion perpétua?—A los canónigos regulares que aceptan beneficios seculares, á los clérigos que usurpan los bienes de la Iglesia, á los simoniacos que reciben premio por la provision de beneficios, á los que abusan de su jurisdiccion en las elecciones de los prelados regulares, los que contraen matrimonio clandestino ó sin preceder las amonestaciones, los clérigos concubinarios pertinaces y los raptos de mujeres.

¿A quiénes se imponen penas arbitrarias?—A los párrocos negligentes en la predicacion, á los regulares, que sin permiso de su superior se someten al servicio de otro prelado, á los notarios negligentes, á los que contraen matrimonio clandestino y á los párrocos que no advierten á los padrinos del bautismo el impedimento que contraen.

¿Qué dispuso el concilio sobre el uso de la excomunion?—Que sea con gran circunspeccion y no se imponga temerariamente por cosas leves.

De los delitos eclesiásticos (1).

¿De cuántas clases es el delito canónico?—*Atroz, grave y leve*, de comision ó de omision, clerical y comun á clérigos y legos, reservado y no reservado, público y oculto.

¿En qué clases suelen dividirse los delitos canónicos por razon de su objeto?—En seis: delitos contra Dios y sus mandatos, contra la Iglesia y los suyos, contra las personas eclesiásticas y contra las cosas eclesiásticas, contra la pública moralidad y contra las personas privadas.

¿Cuáles son los delitos comunes á clérigos y legos?—La herejía, el cisma, la apostasia de la fé, el sacrilegio, la incontinencia, concubinato y rapto, la violacion de la clausura regular, la violacion de la inmunidad eclesiástica, la profanacion de los lugares sagrados y religiosos, el duelo, la simonia, el homicidio y las supersticiones.

¿Cuáles son los delitos mixtos en que frecuentemente incurren los legos tan sólo?—El conato de abolir ó variar en España la verdadera religion, el acto público de cualquiera otro culto no católico (2), la excitacion públi-

(1) Véase la pág. 151.

(2) Estos hechos no son delitos, segun el Código penal de 1870, vigente en la actualidad.

ca contra los preceptos de la Iglesia, la irrisión pública de las cosas sagradas, la perturbación del orden en los templos, las injurias inferidas á los sacerdotes en el desempeño de su ministerio, la apostasía de la verdadera religion, la exhumación y mutilación de cadáveres, el duelo, el adulterio y el concubinato, el rapto de una mujer impúbera, el estupro y seducción de menores, los matrimonios clandestinos ó celebrados con impedimento dirimente dispensable, la bigamia, la blasfemia y la exposicion de figuras obscenas.

¿Cuáles son los principales delitos en que solamente pueden incurrir los clérigos por comisión?—La acumulación de beneficios, la intrusión en derechos ajenos, la violación del sigilo sacramental, la asistencia á funciones teatrales, la ordenación fraudulenta, la diseminación de errores en la predicación, el concubinato del clérigo, la apostasía del estado clerical ó regular, la avaricia en la administración de las cosas sagradas, la simonía especial en la provision de beneficios, etc.

¿Cuáles son los delitos principales que por omisión pueden cometer los clérigos?—La negligencia del obispo en la predicación, en la residencia y en recibir su consagración, en la visita de la diócesis, en la fundación del seminario, en la asistencia al concilio provincial y al diocesano y en su celebración, en la vigilancia de los regulares; la negligencia de los canónigos en la recepción de las órdenes sagradas, en la asistencia á las horas canónicas; la negligencia del párroco en el estudio de las ciencias eclesiásticas, en predicar y residir y en advertir á los padrinos la afinidad que contraen con el bautizado; la negligencia de los clérigos menores en el desempeño de sus respectivos oficios, la de los administradores de los hospitales eclesiásticos en el desempeño de su encargo, la de todos los beneficiados en general en la celebración de las fiestas religiosas, etc.

¿Cuáles son los delitos leves que se castigan tan sólo con la pena de nulidad del acto?—La nominación de un indigno para un beneficio simple, la acumulación de beneficios, la donación de un monasterio mayor en encomienda, la provision de un canonicato sin los debidos requisitos, la presentación de un indigno hecha por un patrono, el arrendamiento de los bienes eclesiásticos por largo tiempo, la resignación de un beneficio en favor de los hijos y la presentación hecha á otra persona distinta que al obispo.

¿Qué nuevos delitos eclesiásticos fueron declarados y penados con posterioridad al Concilio de Trento?—1.º, el comercio de los clérigos; 2.º, el comercio sobre las limosnas de misas; 3.º, la sollicitación *ad turpia* en el confesonario; 4.º, la cesión de los productos de un beneficio por una cantidad alzada; 5.º, los espectáculos deshonestos en los dias festivos; 6.º, la asociación secreta; 7.º, el jansenismo refractario, que no admite la constitución pontificia *Unigenitus*; 8.º, el racionalismo así absoluto como moderado y sus consecuencias; 9.º, el indiferentismo teórico y práctico; 10, los abusos y supersticiones del magnetismo animal y del *mesmerismo*; 11, las supersticiones del *espiritismo* y de la evocación de las almas de los difuntos, y 12, la propaganda protestante de biblias adulteradas.

De las indulgencias.

¿Tiene la Iglesia la facultad de conceder indulgencias?—Así lo ha declarado el Concilio de Trento, diciendo que esta potestad fué concedida á la Iglesia por Jesucristo, y que el uso de las indulgencias es muy saludable al pueblo cristiano y debe conservarse en la Iglesia, fulminando la pena de anatema contra los que dicen que la Iglesia no tiene facultad de concederlas ó que son inútiles.

¿De qué manera deben concederse las indulgencias?—Con toda moderación y prudencia, para evitar que caigan en desprecio y se enerve y corrompa esta parte importantísima de la disciplina eclesiástica.

¿Qué abusos condenó el Concilio de Trento relativamente á este punto?—Las cuestaciones inmorales que con el pretexto de conceder indulgencias se hacian entonces en muchas partes de la Europa, y previno además á todos los obispos que averiguasen todas las corruptelas que se habian introducido en esta materia, y las denunciasen en el primer concilio provincial á que asistiesen.

¿Con qué formalidades debe hacerse la publicacion de indulgencias?—El ordinario debe acompañarse para ello de dos individuos del cabildo.

¿Qué dispuso Benedicto XIV respecto á las indulgencias que se conceden á los que visitan ciertas iglesias?—Que no era licito exponer con este motivo la divina Eucaristia, sino por una causa pública y previa la autorizacion del obispo: que era difícil determinar si sería conveniente ó inconveniente la exposicion frecuente del Santísimo Sacramento de la Eucaristia, y que no debía resolverse esta duda en absoluto y *a priori*, sino teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso; lo mismo que debía decirse respecto á la comunión cotidiana.

¿Qué dispuso Benedicto XIV respecto á la indulgencia plenaria en artículo *mortis*?—Concedió á los obispos y prelados que tenían esta facultad que la conservasen y á un pudiesen delegarla en sacerdotes piadosos, regulares ó seculares, que la ejerciesen en sus respectivas poblaciones.

¿Qué se contiene en la bula de cruzada que se publica en España respecto á la indulgencia plenaria *in artículo mortis*?—Se faculta á los fieles para que puedan elegir dos veces, una en vida y otra *in artículo mortis*, á un presbítero, secular ó regular, con licencias para confesar, concedidas por el ordinario, para que en el fuero de la conciencia pueda absolverles de cualesquiera pecados y censuras, aunque estén reservadas al ordinario ó á la Silla apostólica, excepto tan solo el crimen de herejía, con la sola condicion de que les imponga una penitencia saludable. Esta clausula, que se contenia en la bula de cruzada tal como estaba redactada, y habia sido concedida por los Pontífices anteriores á Pio IX, fué tambien confirmada por éste en la prorogacion de la bula que concedió por doce años más en Gaeta en 1849, y que volvió á prorogar por igual tiempo en Abril de 1861 (1).

FIN DE LA DISCIPLINA ECLESIASTICA.

(1) No podemos extendernos más en estas materias, por falta de espacio.

ÍNDICE.

ALGUNAS IDEAS GENERALES DE ECONOMIA POLITICA.

Páginas

Riqueza.—Produccion.—Valor.—Utilidad.—Premio.—Trabajo.—	
Capital.....	4
Industria.—Comercio.—Gremios.—Aduanas.—Colonias.—Pobla-	
cion.—Emigracion.....	4
Distribucion y consumo de la riqueza.—Moneda.—Crédito.—	
Bancos.....	9
Cajas de ahorros.—Monte de Piedad.....	11
Renta.—Salario.—Interés.—Huelgas.—Consumo.—Empréstitos.	
—Deuda pública.—Impuestos.....	13

DERECHO MERCANTIL.

El comercio.—Los comerciantes.—Contabilidad mercantil.....	19
Auxiliares del comercio terrestre.—Sus obligaciones y derechos.—	
Bolsas.....	26
Comisionistas.—Factores, mancebos y porteadores.....	29
Contratos mercantiles.—Perfeccion, interpretacion y extincion de	
sus obligaciones.....	31
Sociedades mercantiles.—Su fundacion, constitucion y disolucion.	35
Préstamos.....	40
Comision y comisionistas.....	41
Compra-venta.....	43
Permuta.—Contratos accesorios.—Depósito.....	45
Trasporte terrestre.....	46
Seguros.....	47
Del cambio.....	48
Letras de cambio.....	49
Protestas ó intervencion.....	52
Libranzas, pagarés y cartas-órdenes.....	54
Prescripcion de las acciones mercantiles.....	56
Comercio marítimo.....	56
Navieros.....	58
Capitanes.....	59
Tripulacion ó equipaje.....	61
Contratos de la tripulacion.....	62
Auxiliares del comercio marítimo.....	64
Contratos especiales de este comercio.....	65
Fletamento.....	65
Riesgos y daños marítimos.....	67
Averias.....	68
Arribadas forzosas.—Naufragios.....	71

Seguros marítimos.....	72
Préstamos á la gruesa.....	74
Extincion de las obligaciones marítimas.....	77
De las quiebras.....	77

DERECHO ECLESIASTICO.

Instituciones de derecho canónico.....	87
Cánones.—Constituciones apostólicas y colecciones canónicas.....	89
Bulas.—Breves.—Concordato.....	91
De la Iglesia.—Gerarquía eclesiástica.....	92
Párrocos y cabildos catedrales.....	96
Auxiliares de los obispos.....	99
Del Romano Pontífice.—Metropolitanos.....	100
Legados pontificios y prelados inferiores.....	103
De los regulares.....	106
De los votos monásticos y del noviciado.....	108
Eleccion episcopal.....	111
Confirmacion de los obispos.....	113
Su consagracion, juramento y posesion.....	114
Eleccion pontificia.....	114
De la ordenacion.....	115
Ministro del Sacramento del Orden.....	116
Título de la ordenacion.....	118
De las irregularidades.....	119
Celibato eclesiástico.....	121
Ocupaciones prohibidas á los clérigos.....	121

De las cosas eclesiásticas.....	122
Matrimonio canónico.....	122
Impedimentos del matrimonio.....	124
Requisitos y solemnidades que le preceden.....	126
Dispensa de impedimentos.....	127
Solemnidades de la celebracion del matrimonio.....	128
Del divorcio y de las segundas nupcias.....	129
De las Iglesias.....	130
Sus inmunidades.—Asilo eclesiástico.....	132
Sepulturas y cementerios.....	133

Breves eclesiásticos.—Oblaciones.....	135
Adquisiciones de bienes raíces.....	135
Dominio, administracion y enajenacion de bienes eclesiásticos.....	136
De los beneficios, su naturaleza y sus clases.....	138
Creacion, union y division de obispados.....	139
Residencia de los beneficiados.....	141
Pluralidad y colacion de beneficios.....	142
De la colacion pontificia.....	144
Cualidades de los beneficiados y de los aspirantes á concurso.....	145
Patronato eclesiástico.....	147

Modos de perder los beneficios.....	149
Traslacion de los obispos.....	150
Del peculio de los clérigos.....	150

DELITOS Y PENAS ECLESIASTICAS.

De la apostasia.....	151
De la herejia.....	152
Del cisma y de la simonia.....	153
De la blasfemia y del sacrilegio.....	154
Delitos contra la castidad.....	154
Penas, censuras y penitencias eclesiasticas.....	155
Excomunion.....	157
Suspension y entredicho.....	158
De la absolucion de censuras.....	159
Anatema, deposicion, etc.....	160

DISCIPLINA ECLESIASTICA.

Cardenales de la Iglesia Romana y legados apostolicos.....	161
Patriarcas.—Primados.—Concilios nacionales.—Metropolitanos y conatos provinciales.....	162
Obispos y auxiliares.—Concilios diocesanos.....	163
Coadjutores episcopales.....	166
De la curia episcopal.....	166
Del cabildo catedral.....	167
Iglesias.—Colegiatas.....	169
De los párracos.....	170
De las exenciones.....	171
De las monjas.....	173
De los clérigos.—Seminarios conciliares.....	173
Sustentacion del culto y clero.....	174
De los beneficios y del patronato real.....	175
Actual forma de sustentacion del culto y clero.....	176
Propiedad del clero regular de ambos sexos y de la sustentacion del mismo.....	177
Iglesias y su reparacion.....	178
Sacrificio de la misa, oratorios privados y culto de las reliquias y sagradas imágenes.....	179
Hospitales y cementerios y exequias de los cristianos.....	180
Familia cristiana, matrimonios y ayunos y penitencias públicas..	181
Testamentos y sufragios por los difuntos y juicios eclesiasticos...	182
Fuero competente y procedimiento canónico civil.....	183
Juicio criminal eclesiástico y causas matrimoniales.—Recursos de apelacion, proteccion y fuerza.....	184
Penas eclesiasticas.....	185
Delitos eclesiasticos.....	187
Indulgencias.....	189

PRINCIPIOS ELEMENTALES DEL DERECHO POLÍTICO. (1)

LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL GOBIERNO.—DERECHO POLÍTICO.—ORGANIZACION POLÍTICA ROMANA.—INVASION GODA.—ELECCION DE LOS REYES.—CONCILIOS DE TOLEDO.—OFICIO PALATINO.—FUERO-JUZGO.—GOBIERNO DE LAS PROVINCIAS.—ESTADO DE LAS PERSONAS.—SERVIDUMBRE.—TERRITORIO.—ESPÍRITU RELIGIOSO DE LOS GODOS.—DOMINACION ÁRABE.—RECONQUISTA.—DIVISIONES E INCORPORACIONES DEL TERRITORIO NACIONAL.—ACLAMACION, CORONACION Y CONSAGRACION DE LOS REYES.

¿Qué es la *sociedad*?—Una reunion de pueblos gobernados por leyes que regulan sus derechos y declaran sus deberes.

¿Cuál es el origen de la *sociedad*?—La familia, que constituye su primer elemento. Es quimérico y falso el sistema del pacto social que supone que los hombres, en su estado *primitivo*, vagaban errantes, y para establecer la mútua defensa de sus intereses y personas, se agruparon, cediendo al poder directivo parte de sus derechos. La historia lo desmiente y la razon lo condena, porque el supuesto estado de naturaleza es absurdo, dadas las condiciones de debilidad y sociabilidad del hombre.

¿Qué es *Estado* ó *Nacion*?—Dáse este nombre á los pueblos constituidos en cuerpos políticos, encerrados en determinado territorio, dentro del cual ejercen su soberania y gozan de su independencía. Tres elementos forman la sociedad civil: los *ciudadanos*, el *territorio* y el *jefe* ó *soberano poder*.

¿Qué es el *gobierno*?—El ente moral compuesto de varias personas que, sustituyendo temporal ó perpétuamente al poder originario de la nacion, está encargado de la direccion de su destino, de su progreso, integridad y administracion. Nace con la sociedad, porque es necesario para la existencia de ésta. Representa la voluntad colectiva, y manifiesta su poder dirigiendo la accion social al bien comun.

(1) Solamente porque este libro contenga algo de todas las asignaturas de la Facultad de Derecho, exponemos aquí las ligerísimas indicaciones que el lector verá, acerca del derecho político, cuya esfera es vastísima y requiere mucho espacio, y una profundidad de estudios de que carecemos nosotros.

¿Qué funciones ejerce el gobierno?—*Legisla, juzga y administra*, comprendiendo en la palabra gobierno las facultades del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial.

¿Qué es *derecho político*?—El conjunto de leyes que ordenan y distribuyen los poderes públicos, moderan su accion, señalan su competencia, declaran los derechos y fijan los deberes de los ciudadanos. Son sus fuentes la filosofía y la historia.

¿Qué orígenes reconoce el *derecho político*?—La organizacion física y moral del hombre y la legislacion de cada pueblo. Por eso las instituciones políticas deben ser conformes con la naturaleza de los pueblos, que va re-tratándose primero en la *costumbre*, despues en la *ley civil* fundamental, más tarde en las *políticas*, y por último, en la *administracion*. De aquí que el estudio del derecho político puede ser *histórico* y *filosófico*. El primero nos suministra datos acerca de los hechos antiguos y del nacimiento, desarrollo y desaparicion de las instituciones; el segundo indica las modificaciones demandadas por el progreso y la civilizacion.

¿Cuál ha sido la organizacion política de España?—Antes de la conquista romana estaba dividida en tribus, sin unidad política, inmenso bien que comenzaron á introducir los cartagineses y romanos. Durante la dominacion de éstos resultaba la España distribuida en *colonias*, *municipios*, *ciudades latinas*, *ciudades inmunes* y *confederadas*. El *municipio* era gobernado por la *curia*, á quien dirigian los *duumviri* por medio de decretos, cuyas inmunidades y obligaciones quedan indicadas al tratar del derecho civil. Los ciudadanos eran *privilegiados*, *curiales* y *proletarios*: aquellos constituian la aristocracia; éstos dependian del Tesoro. Habia los *siervos de la gleba*, servidumbre caracterizada por la adherencia del siervo á la tierra (1).

¿Qué caractéres distinguen la dominacion romana en España?—Cinco: la *unidad política*, la *religion cristiana*, la *libertad municipal*, el *idioma* y la *ciencia*.

¿Qué causa modificó este estado nacional?—La invasion de los *godos*, pueblos oriundos de la Germania, que á principios del siglo v invadieron las mejores provincias occidentales. Su exagerado espíritu de libertad, que respetaban en los vencidos, y el sentimiento religioso, fomentaban la independencia personal y halagaban la supersticion. Sus costumbres austeras, su modo de vivir especial, y su carencia de civilizacion contrastaron con las costumbres y manera de ser del pueblo romano, que, débil y ahogado por el peso de la tiranía de los césares, sucumbió ante la bizarra virilidad de los invasores (2).

¿Cómo han coexistido los dos pueblos en la Península?—El conquistador gobernó tolerando al conquistado su legislacion y modo de ser, dando ocasion con este sistema, al *derecho personal* ó *de castas*, segun se indica en la historia del derecho civil (3).

¿Cuál era la forma de gobierno de los *godos*?—La monarquía *electiva*, que fué militar hasta Recaredo, y desde este monarca, militar y religiosa. Su poder no era absoluto, sino limitado por las leyes y concilios, en cuyas asambleas ejerció gran influencia la nobleza. La asociacion de los hijos al trono de sus padres, en vida de éstos, y el deseo de evitar disturbios en los interregnos, contribuyeron á introducir la monarquía hereditaria.

(1) Como complemento de estas indicaciones, puede verse la pág. 2 del *Tratado de Derecho civil*.

(2) Idem la pág. 5 de id.

(3) Págs. 6 y 8 de id.

¿Quiénes concurrían á la eleccion del rey?—El Concilio VII de Toledo determinó que fuese elegido en junta de obispos y de los mayores dignatarios de palacio y del pueblo, si bien la intervencion de éste estaba limitada á la manifestacion del consentimiento por la aclamacion.

¿Qué condiciones debia tener el elegido?—Debia ser nacional, lego, noble, de buenas costumbres y presentado en momentos en que no hubiera efervescencia. No podia ser elegido por virtud de conspiraciones. A la eleccion seguian la aclamacion y la *uncion religiosa*.

¿Qué caractéres distinguían al monarca?—Era *legislador, gobernador, magistrado y caudillo* de la nacion.

Concilios de Toledo (1) y oficio palatino.

¿Qué fueron los concilios de Toledo?—Unas asambleas mixtas en donde se trataban cuestiones políticas y religiosas, á que asistian los obispos y abades por derecho propio exclusivamente, y despues tambien la nobleza.

¿Tenia el pueblo intervencion en ellos?—Sí, y aunque su voluntad no era necesaria, se manifestaba para robustecer los acuerdos del concilio.

¿A quién correspondia su convocacion?—Al rey.

¿Qué era el *tomo regío*?—El libro en que se insertaban los discursos de apertura de los concilios y se proponian los puntos sujetos á deliberacion.

¿Qué conexión tienen estas asambleas con las cortes de los reinos de Leon y Castilla?—Deben considerarse como el fundamento de éstas.

¿Qué era el *oficio palatino*?—El alto consejo de los reyes, formado por próceres y magnates, que le auxiliaba en el ejercicio del poder legislativo, le consultaba en los asuntos árdulos y le ayudaba en la administracion de justicia. Llamábase tambien *aula régia*.

Legislacion y administracion goda.—De las personas.—De la propiedad territorial.

¿Cuándo terminó la legislacion *personal ó de castas*?—En tiempo de Recesvinto, que dictó leyes generales para toda la monarquia, fundadas en los principios más justos y racionales que la civilizacion de aquellos tiempos proclamaba. La publicacion del *Fuero-Juzgo* unificó la legislacion, asentándola en máximas de justicia universal (2).

¿Quiénes gobernaban las provincias?—Los *duques*, los *condes*, los *gobernadores* de las ciudades, los *gardingos*, el *vicario*, el *vilico*, etc. Los *duques* eran más bien militares que autoridades civiles. Los *condes* participaban más del carácter civil que del militar, y eran inferiores á aquellos en jerarquía. Los *gobernadores* ejercían funciones económicas y administrativas. Los *gardingos* seguian en órden á los *condes*, sin que se puedan detallar con precision sus atribuciones. El *vicario* sentenciaba las causas civiles á nombre del *duque* ó del *conde*. El *vilico* gobernaba el *pago* ó la *aldea*.

¿Desapareció la *curia* en tiempo de los godos?—No; ha ido paulatina-

(1) Véase la *Historia del Derecho civil*, pág. 7.

(2) Véase la *Historia del Derecho civil*, pág. 8.

mente degenerando su primitiva institucion hasta convertirse en el *concejo* de la Edad Media.

¿Qué era el *pacis adsertor*?—Una magistratura que tenía por objeto arreglar la paz con los enemigos.

¿Cuál era el estado de las personas?—En un principio vivían los latinos y los germanos con entera separacion, sin más vínculo que el gobierno superior á que obedecían. El matrimonio entre ambos estaba prohibido; y si los godos dominaban por la fuerza, los romanos influían poderosamente por su ciencia y saber. La necesidad de la defensa comun contra los árabes amalgamó las castas y contribuyó poderosamente á la fusion.

¿Cómo se dividía la gente goda?—En *libres* y *siervos*. La nobleza reconocía algunas jerarquías. Los *optimales* ó *primates palatii* eran los grandes del reino. Seguían los *duques*, *condes* y *gardingos*; luego los *leudes*, militares asalariados por el rey, y los *buccellarios*, que lo estaban por los próceres. Las demás personas libres se llamaban *misiones laici*.

¿Sufrió alteracion el estado de las personas romanas?—No; continuaron distinguiéndose en *patricios* y *plebeyos*, *curiales*, *ingénuos*, *libertos* y *esclavos*.

¿Qué division se hacía de los *siervos*?—Eran *territoriales* los que estaban afectos á la tierra que cultivaban; *idóneos*, los que servían más de cerca á sus señores; *viles*, los que ocupaban el infimo lugar, y *fiscales*, los que formaban parte del patrimonio *real*, tenían peculio, mandaban á otros, y podían llegar á ser miembros del *oficio palatino*.

¿Qué orígenes reconocía la *servidumbre*?—El *cautiverio*, el *delito* y la *generacion*.

¿Reconociase entonces la clase media?—No.

¿Qué alteracion sufrió la propiedad territorial?—Los godos adjudicaron-se los dos tercios del territorio cultivado, respetaron la posesion de los vendidos en el tercio restante, y mantuvieron *pro indiviso* los terrenos incultos y los montes. Gravaron con tributos la porcion de los romanos, dejando libres las que ellos se apropiaron, de lo cual nació la division de tierras *exentas* y *tributarias*. El rey reconocía como parte del patrimonio de la corona grandes extensiones de terreno, que se trasmitían á sus sucesores, y otras que nombraban *beneficiales*, con las que recompensaban las acciones de guerra, obligándose á salir á campaña los agraciados.

¿Qué causa influyó en la alteracion de este modo de ser de la propiedad?—La permission de los matrimonios entre *latinos* y *germanos*.

Espíritu religioso.—Invasion árabe.—Reconquista

¿Qué religion profesaron los godos?—La arriana, abjurada por Recaredo en el Concilio III de Toledo. Su espíritu religioso era tan exagerado, que les conducía á la supersticion y á la más intransigente intolerancia con los judíos y católicos, á quienes prohibieron ejercer su culto, imponían privaciones é incapacidades, llegando al extremo de obligar á ochenta mil judíos á renegar de la religion de sus padres.

¿Qué ventajas trajo su espíritu religioso?—La unidad de creencias, que

estrechó los lazos en la lucha con los árabes, y contribuyó al planteamiento de la unidad política.

¿Cuándo tuvo lugar la invasión agarena?—A principios del siglo viii, á cuyo triunfo cooperaron las discordias intestinas y la decadencia y degradación del pueblo godo.

¿Qué conducta siguieron los árabes en España?—A los pueblos que se les sometían voluntariamente, les exigían tan sólo una décima parte de sus utilidades y ganancias. A los que oponían resistencia á su dominación, les imponían crecidos tributos. Toleraron la religion católica, y consintieron que los españoles se gobernarán por sus leyes, aplicadas por jueces creados de entre los mismos. La libertad, en fin, era mayor ó menor, segun la humildad y resignación de los vencidos y el carácter de los gobernadores.

¿Qué ventajas produjo esta invasión?—La unificación del pueblo latino y germano, unido en la causa común de la mútua defensa.

¿Cuándo comenzó la reconquista?—Cuando los godos fugitivos se cobijaron en las montañas de Astúrias, y comenzaron á hacer excursiones al campo de los moros, talando y destruyendo sus alquerías.

¿Qué sistema adoptaron en su progresiva marcha?—Los reyes, los monasterios, los magnates y áun los caudillos del pueblo, fundaban poblaciones en los puntos conquistados, á las cuales concedían privilegios y exenciones para estimular su aumento y el sentimiento de la independencia, en lo cual se cifraba la defensa del territorio. De aquí nació la distincion de lugares de *realengo*, *abadengo*, *señorio* y *behetría*, segun el fundador ó colonizador. Por tal sistema, y despues de continuos combates, el pueblo español comenzó á agrandar sus dominios, recobrando palmo á palmo y despues de heróicas campañas, todo el territorio perdido, que se consideró desde entonces indivisible.

Unidad y division del territorio nacional.—Reinos de Leon y Castilla.

¿Quién fué el primer monarca que acordó su division?—Fernando I el *Magno* lo dividió entre sus hijos, lo cual motivó una guerra civil que al fin terminó con la sucesion de Alfonso VI en todos los reinos de su padre. El emperador Alfonso VII adjudicó á su hijo D. Sancho el reino de Castilla, y á D. Fernando, el de Leon, volviendo á reunirse en tiempo de D. Fernando el *Santo*. Alonso X lo desmembró tambien, y D. Juan I no consiguió el deseo de repetir la division. En tiempo de los godos siempre se consideró indivisible el territorio nacional.

¿Cuándo se desatendió la ley que establecia la integridad nacional?—Durante la dinastía austriaca.

¿Cuándo se restableció aquella ley?—Con la instalacion del gobierno representativo, en cuya Constitución se consignó la necesidad de la autorizacion de las Córtes para enajenar alguna parte del territorio nacional.

¿Cuáles fueron los primeros reinos creados en la reconquista?—El de Astúrias, despues el de Leon, luego el condado de Castilla, erigido en reino en tiempo de Fernando el *Magno* y unido al de Leon por muerte de Bermudo III, sin sucesion. Las desmembraciones y creaciones sucesivas quedan indicadas arriba hasta Fernando III. El matrimonio de D. Fernando el *Magno* con doña Sancha originó la union de los reinos de Castilla y de Leon.

¿Cuándo se unió la corona de Aragon á la de Castilla?—En tiempo de los Reyes Católicos.

¿Cuándo se incorporó á estos reinos el de Portugal?—Reinando Felipe II.

¿Qué causas favorecian las incorporaciones?—La sucesion de las hem-

bras y los matrimonios. Por estos medios y las nuevas conquistas, formaron parte del territorio nacional los reinos de Toledo, Córdoba, Murcia, Jaén, Sevilla, Mallorca, Valencia, Granada y Navarra.

¿Cuándo tuvo lugar la perfecta unidad nacional?—En la monarquía de los Reyes Católicos. Felipe II, Felipe V, y otros monarcas, han hecho grandes esfuerzos para conseguirlo; más, si es cierto que la impulsaron prodigiosamente, hasta los tiempos modernos no se ha conseguido la completa unidad, proclamada por todas las Constituciones del sistema representativo.

¿Cuál fué el primer monarca de la nueva era?—*Pelayo*, unánimemente proclamado por todos en Astúrias.

Monarquía hereditaria.—Orden de sucesion, aclamacion, coronacion y consagracion de los reyes.

¿Cuándo se hizo la monarquía hereditaria?—El código de las Partidas sancionó como ley la sucesion á la corona, estableciendo se tuviera en consideracion la linea, el grado, el sexo y la mayor edad, si bien ya la costumbre habia legitimado el derecho de sucesion.

¿Qué circunstancias facilitaron el tránsito á la monarquía hereditaria?—El deseo de evitar discordias civiles, las ideas de autoridad y mando, la asociacion del presunto heredero al principe reinante, la coronacion de aquél en vida de éste, su jura, etc.

¿Sufrió alteracion el orden legal de suceder en España?—Sí: Felipe V cambió el llamamiento que hacian las Partidas, excluyendo á las hembras. Pero Carlos IV restableció la ley de Partida en las Cortes celebradas en Madrid en 1789, cuya pragmática no se publicó por motivos políticos. La Constitucion vigente confirma este orden de sucesion.

¿Qué era la *aclamacion* de los reyes?—El acto público y solemne en que el pueblo proclamaba el futuro soberano. Los godos acostumbraban á elevar al elegido sobre un pavés, mostrándolo así á la muchedumbre.

¿Qué solemnidades seguian á la *aclamacion*?—El juramento de los reyes, en el que prometian guardar las leyes, usos, costumbres y privilegios, y la rendicion del *pleito-homenaje* que le hacian los magnates, rico-hombres, caballeros, villas, ciudades, etc.

¿Qué era la *coronacion*?—El acto solemne de colocar la corona en las sienes del monarca, como simbolo del poder que iba á ejercer.

¿Qué era la *consagracion*?—El acto en virtud del cual los prelados unjian al monarca coronado, á fin de revestirlo de un carácter sagrado que inspiraba respeto y consideracion religiosa.

MATRIMONIO DE LOS REYES.—FAMILIA REAL.—REGENCIAS.—RENUNCIA DE LA CORONA.—CÓRTESES.—LA NOBLEZA, EL FEUDALISMO Y EL CLERO.—ORDENES MILITARES.—CONCEJOS Y CORREGIDORES.—ADMINISTRACION CIVIL Y MILITAR.—MILICIAS.—FORMAS DE GOBIERNO.—ELECCIONES.—ORDEN JUDICIAL.

Derecho anterior y posterior á la Constitucion democrática de 1869.—Modificaciones introducidas por la Constitucion vigente de 1876.

Circunscritas nuestras aspiraciones á muy estrechos límites, apuntaremos algunas ideas capitales acerca de las materias indicadas en el epígrafe, tanto más someramente, cuanto que debemos reservar algun espacio para tratar con separacion de las importantísimas doctrinas que proclaman las nuevas constituciones, base fundamental de las leyes orgánicas, y fuente y origen de la profunda reforma de que viene siendo objeto la legislacion, desde la era política comenzada en Setiembre de 1868.

¿Qué circunstancias deben tenerse presentes en el matrimonio de los reyes?—Además de la paz doméstica, la perpetuidad de ciertos linajes, los derechos creados por las combinaciones que producen las alianzas á que pueden dar lugar tales uniones y otras consideraciones esencialmente políticas, favorables ó adversas á la nacion.

¿Tienen las Cortés participacion en el matrimonio de los reyes y sus inmediatos sucesores?—Las antiguas Cortés intervenian en la eleccion del cónyuge, y aún se cuentan ejemplos de haber propuesto la princesa que debía unir su suerte al principe. Segun la Constitucion de 1869, el rey necesitaba estar autorizado por una ley para contraer matrimonio. La de 1876 se limita á exigir que el monarca, antes de contraer matrimonio, lo ponga en conocimiento de las Cortés (1).

¿Es necesaria la *jura* del principe heredero?—Por la Constitucion vigente no se exige este requisito, sin embargo de que ese acto fortalece, indudablemente, el derecho del inmediato sucesor. El primer juramento se prestó en favor de doña Urraca de Castilla. En tiempo de D. Alonso VI tenia lugar la solemnidad en las Cortés del reino.

¿Quién es el *principe de Asturias*?—El inmediato sucesor á la corona, segun los llamamientos de la ley fundamental del Estado. Algunos creen que también se le llamó principe de Jaen. Enrique III fué el primer infante que

(1) Art. 56.

usó de este nombre. Juan II lo declaró mayorazgo, consistente en aquel principado, y los Reyes Católicos lo redujeron á un mero título. Doña Isabel II fué la primera hembra que llevó el dictado de princesa de Astúrias.

¿Qué nombre reciben los demás hijos del rey?—Llámanse *infantes*.

¿Qué intervención tuvieron en el poder los infantes?—En casos de menor edad solían gobernar el reino y formar parte del consejo privado de los reyes. Necesitan licencia real para contraer matrimonio, bajo la pena de privación de títulos, honores y consideraciones.

¿Puede el monarca disponer del reino en su última voluntad?—No. Sus facultades están limitadas á testar sobre sus heredamientos de familia, mas no acerca del patrimonio real, que es inherente á la corona, ni sobre las cosas del reino, en que no ejerce derecho de propiedad. La historia refiere casos en que los monarcas dispusieron del territorio nacional como si fuese parte de su exclusivo patrimonio, cuya absurda doctrina fué proclamada también por las dinastías austriaca y de Borbon (4).

¿A quién corresponde hoy la regencia del reino, en casos de minoría?—Al padre ó á la madre del menor, mientras permanezcan viudos; en su defecto, al pariente más próximo llamado á suceder, y no habiéndolo, deben ejercer la regencia una, tres ó cinco personas nombradas por las Cortes, gobernando interin el Consejo de ministros (2).

¿Qué circunstancias debe tener el regente?—Ser español, tener veinte años y no estar excluido de la sucesion si fuere pariente. Nada dispone la nueva Constitución sobre el particular.

¿Cuándo termina la menor edad del monarca?—A los catorce años terminaba antiguamente; á los diez y ocho, segun la Constitución de 1869, y á los diez y seis, conforme á la de 1876 (3).

¿Qué llamamientos hacían las leyes de Partida?—Preferían al tutor nombrado por el difunto; luego designaban á la madre, y á falta de ésta, las Cortes debían nombrar una, tres ó cinco personas que debían ejercer la tutela, doctrina modificada por el derecho moderno, como ya queda indicado y veremos luego.

¿A quién corresponde la regencia en caso de incapacidad del monarca?—Reconocida ésta por las Cortes, corresponde al primogénito si fuere mayor de diez y seis años; en su defecto al rey consorte, y á falta de éste, á las demás personas á quienes se ha dicho pertenece la regencia, en caso de minoría. (4) La Constitución de 1869 otorgaba la regencia á una, tres ó cinco personas nombradas por las Cortes, como en los casos de menor edad.

¿Qué disponía el derecho antiguo?—Nada hay expreso sobre la manera de acudir á la incapacidad de los reyes. Doña Isabel la Católica nombró en su testamento gobernador del reino, único dato que sirvió de norma.

¿Fué, ó es, renunciable la corona?—Sí, pero con consentimiento de las Cortes, para lo cual necesita el monarca, actualmente, una ley que autorice la abdicacion (5).

¿Ha sido siempre necesario el concurso de las Cortes?—Si bien puede asegurarse que el derecho y la costumbre sancionaron siempre la necesidad de su consentimiento, la historia enseña que Carlos V renunció la co-

(1) Véase lo dicho antes, al tratar de la unidad y division del territorio nacional.

(2) Arts. 67 y 68 de la Constitución de 1876.

(3) Art. 66 de id.

(4) Art. 71 de id.

(5) Art. 55, núm. 5.º de la Constitución de 1876.

rona sin acuerdo de éstas, disponiendo de ella como de su patrimonio, y que Felipe V siguió su ejemplo.

¿Qué fueron las *Córtes*?—Las asambleas formadas por los dignatarios eclesiásticos y el estado llano, en los primeros tiempos, que tenían por objeto tratar cuestiones políticas y económicas pertenecientes al reino. Pueden considerarse como herederas de los antiguos *Concilios de Toledo* (1).

¿Qué elementos las formaban en un principio?—La nobleza y el estado eclesiástico, habiendo trascurrido algunos siglos antes de la entrada de los representantes de las ciudades ó villas.

¿Cuándo tuvieron asiento los *procuradores*?—En las *Córtes* de Leon de 1188 y en las de Carrion de los Condes, en Castilla.

¿Quiénes eran los *procuradores*?—Los representantes de los *concejos* nombrados generalmente por *insaculacion*, otras veces por *elección* y otras por *turno*, entre ciertas distinguidas familias, para representarlos y gestionar ante las *Córtes* la eficacia de sus intereses y derechos.

¿Recibían remuneración?—Un pequeño salario que satisfacían los *concejos*.

¿Era limitada su representación?—En un principio sí, pero más tarde se hicieron generales sus poderes.

¿Quién convocaba las *Córtes*?—El rey, por medio de cartas dirigidas á los que debían tomar asiento en ellas.

¿Cuándo debían ser convocadas?—No había época prefijada.

¿Qué forma se seguía en las deliberaciones?—Cada brazo ó *estamento* deliberaba con separacion, formulaba su peticion y la elevaba al rey, quien podia aceptarla ó desecharla. Su autoridad era mayor respecto á los impuestos y servicios públicos.

¿Qué atribuciones tenía y tiene el rey actualmente, sobre las *Córtes*?—Las de convocarlas, suspenderlas, cerrarlas y disolverlas. Puede disolver el Congreso de diputados, debiendo convocar nuevas *Córtes* y reunir las dentro de tres meses, y disolver simultánea ó separadamente la parte electiva del Senado (2).

¿Qué facultades ejercen las *Córtes*?—Forman con el rey el *poder legislativo*, y deben reunirse todos los años. Compónenlas el Senado y el Congreso de diputados.

¿Qué monarcas favorecieron la nobleza?—Don Sancho Garcia dió á los nobles mayor nobleza, agrandando sus privilegios; Alonso VI aumentó su número, Alonso VIII creó una nobleza de fortuna al lado de la de sangre.

¿Qué monarcas reprimieron su exagerada influencia?—Alonso V de Leon; Alonso VII en el ordenamiento de las *Córtes* de Nájera; Fernando III suprimió los condes, sustituyéndolos con los *adelantados*; Alonso el Sábio intentó reprimir sus ambiciones; D. Fernando y doña Isabel, fortaleciendo el poder de los *concejos*, han conseguido domar el orgullo de los nobles, creando audiencias, chancillerías y nuevos *concejos*, y dando participacion en el gobierno á los letrados. Por fin, el cardenal Cisneros, Carlos V y Felipe II, concluyeron con su preponderancia, destinándolos á comisiones diplomáticas, empleos de palacio y cargos militares.

¿Qué caracteres distinguían á la antigua nobleza castellana?—Su amor á la milicia, á sus reyes, á la religion y á la patria.

(1) Véase la *Historia del Derecho civil*.

(2) Art. 92 de dicha Constitucion.

¿Qué jerarquías reconocía la nobleza?—Las siguientes: el rey, el príncipe, los infantes, los grandes, los duques, los marqueses, los condes y los hidalgos.

¿Qué bienes trajo á la patria la decadencia de la aristocracia?—La desaparicion de las luchas intestinas, sostenidas por las familias nobles entre sí, ya solas, ya coligadas con otras, y aun con los concejos, formando *hermandades*.

¿Qué es *feudalidad*?—«La desmembracion de la soberanía entre varios príncipes desiguales, confederados y revestidos de un poder omnimodo en sus vasallos inmediatos y directos. La propiedad es su base, la familia su nervio y su vínculo la herencia.»

¿Existió el *feudalismo* en España?—En la corona de Castilla se reconoció el principio feudal, pero en la práctica se ostentó templado en su aplicacion, por efecto de la lucha con los árabes, el poder de los concejos y aun por la topografía del terreno. En Aragon, el régimen feudal tuvo asiento en su más alto grado.

¿Qué causas contribuyeron á fortalecer el poder del clero?—Las inmensas donaciones y mercedes que recibieron las iglesias y monasterios de la prodigalidad de los reyes y magnates, á las que iba aneja la jurisdiccion, equiparándose su autoridad á la del rey, sus palacios y viviendas á los castillos y fortalezas de los nobles, con vasallos que salian á campaña animados del mismo entusiasmo y rudo fervor que los de los magnates legos. Fué tal su preponderancia, que las Cortes y monarcas solicitaron la disminucion de los conventos y sancionaron la prohibicion de poder adquirir el clero terrenos *realengos*.

¿Qué privilegios gozaba el clero?—La *immunidad real y personal*. Se les eximió de pechos y tributos, garantizando la integridad de sus tierras con la excomunion, y se declararon las personas, exentas del fuero ordinario.

¿Cuántas son las órdenes militares y á qué debieron su origen?—Cuatro: *Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa*. Hijas del espíritu de la Edad Media, participaban de la vida monástica y de la disciplina militar. Tenian castillos formidables y vasallos, y sus *maestres*, que eran los jefes, ejercian jurisdiccion propia.

¿Cuándo decayó su importancia?—Los Reyes católicos incorporaron los maestrazgos á la corona, temporalmente, y Carlos V consiguió la incorporacion perpétua de los de *Santiago, Calatrava y Alcántara*. En la actualidad no tienen importancia alguna. Suprimidas por decreto de 9 de Marzo de 1873, fueron restablecidas por otro de 14 de Abril de 1874, y organizado su gobierno, por el que lleva la fecha de 1.º de Agosto de 1876. Constituyen un monumento histórico de las glorias de la reconquista, sin objeto alguno práctico al presente. El rey es el *Gran Maestre* de todas las órdenes, cuyo Maestrazgo perpétuo le fué reconocido últimamente por el Papa en 18 de Noviembre de 1875 (1).

¿Cuál fué el origen de los concejos?—El *municipio romano*, conservado durante la monarquía de los godos. Aumentados por la importancia de las cartas de poblacion y engrandecidos por la munificencia de los reyes, llegaron á constituir un poder que contribuyó á contrabalancear la influencia de los nobles (2).

(1) Para conocer la organizacion, facultades y atribuciones del Consejo y Tribunal de las órdenes militares, véase el citado decreto de 1.º de Agosto de 1876.

(2) Véase la *Historia del Derecho civil*.

¿Cuándo estuvieron más florecientes los *concejos*?—En tiempo de Alonso VII y Alonso VIII, épocas en que contaban con grandes riquezas, castillos, milicias *concejiles* y gran preponderancia en la gestion pública. El derecho de enviar *procuradores* á las Cortes y la intervencion en la política consolidó é hizo temible su preponderancia.

¿Qué causas contribuyeron á su decadencia?—La intervencion de la nobleza en el gobierno de las ciudades y las banderías que por ello nacian en su seno ocasionaron la pérdida de alguno de sus derechos.

¿Cuál fué su organizacion?—No era igual en todos, pues se ajustaba á las prerogativas de sus fueros. La ordinaria consistia en un número determinado de *alcaldes* con jurisdiccion civil y criminal, un *alguacil mayor* que era el jefe de la milicia, varios *concejales* y algunos *jurados* que representaban á la clase artesana.

¿Cuándo desapareció por completo la fuerza de los *concejos*?—A la terminacion de la guerra de las Comunidades, concluyendo por extinguirlos Carlos V y sus sucesores.

¿Quiénes eran los *corregidores*?—Unos jueces nombrados por el rey para gobernar y administrar justicia á los pueblos. Las discordias y turbulencias de los *concejos* motivaron su introduccion. Desde Alonso XI, casi todos los monarcas nombraron *corregidores* con el carácter de temporales en un principio, y despues sin tiempo limitado. La mala eleccion de las personas contribuyó á que se repugnase y llegase á odiar la institucion, que ya no está vigente.

¿Qué administracion regia la nueva monarquía de Castilla?—La anterior á la batalla de Guadalete. Creáronse despues el *condestable*, los *cancilleres*, el *almirante*, los *adelantados*, los *merinos* y los *alcaldes foreros*. El *condestable* era dignidad superior en materias de milicia. Los *cancilleres* eran secretarios del rey. El *almirante* ejercia en la marina las mismas funciones que el *condestable* en los ejércitos de tierra. Los *adelantados* eran gobernadores militares de una provincia. Los *merinos* eran más bien civiles que militares, parecidos á los *condes*. Tenian á sus órdenes *merinos menores* que administraban justicia en el territorio sujeto á su jurisdiccion.

¿Cómo se administraba la justicia?—Por efecto del principio feudal, la justicia se habia desmembrado del poder real, administrándola los *grandes señores*, *abades* y *alcaldes de fuero* en sus respectivos lugares, en donde ejercian jurisdiccion, si bien se reconocia como base que la jurisdiccion civil y criminal emanaba del rey. Poco á poco fué rescatándose el ejercicio de esta prerogativa con la instalacion de las *audiencias* y *chancillerías*, *adelantados*, *merinos*, *alcaldes de corte* y *corregidores*.

¿Cómo se formaba la milicia?—El rey llamaba á sus vasallos á la guerra, quienes tenian el deber de ponerse á sus órdenes. Con ellos iban las *milicias concejiles*, las *mesnadas* de los señores, los *caballeros* de las órdenes y todos los que cobraban salario del rey.

¿Cuándo tuvieron principio los ejércitos *permanentes*?—La Santa Hermandad, creada por los Reyes Católicos, tuvo puntos de similitud con ellos. El cardenal Cisneros creó milicias asalariadas, y Felipe III y Felipe V completaron la organizacion del ejército permanente español.

¿Cuándo comenzó la monarquía *pura* en España y la desaparicion de las Cortes?—En tiempo de Felipe IV, despues de la derrota de los comuneros.

¿Cuándo comenzó la época *constitucional*?—A principios del presente siglo, con la promulgacion de la Constitucion de 1812.

¿Qué formas de gobierno se conocen?—La *monarquía*, la *aristocracia* y la *democracia* (1).

¿Qué es gobierno *monárquico*?—El que está encomendado á una sola persona, revestida del supremo poder. Puede ser *hereditario* ó *electivo*, *puro* ó *mixto*, *absoluto* ó *templado*. Es la *monarquía hereditaria* cuando existe prefijado el orden de suceder á la corona. Es *electiva* cuando el pueblo designa el monarca por medio de sufragios. Es *pura* cuando ninguna corporación interviene en el ejercicio del poder. Es *mixta* cuando determinadas asambleas participan de su ejercicio. Es *absoluta* cuando la sola voluntad del rey es *ley* obligatoria. Y es *templada* cuando la legislación señala los límites de su voluntad.

¿Cuándo tiene lugar el gobierno de la *aristocracia*?—Cuando está encomendado á los nobles. Recibe el nombre de *oligarquía* siendo corto el número de los llamados.

¿Cuándo gobierna la *democracia*?—Siempre que el poder está en manos de la muchedumbre. Llámase *demagogia* si lo ejerce una facción.

¿Qué otra division suele hacerse del gobierno?—Dividese en *simple* ó *compuesto*. El primero no admite mas que uno de los tres elementos indicados, *monarquía*, *aristocracia* ó *democracia*. El segundo resulta formado por la combinacion de dos ó más.

¿En qué se diferencian los gobiernos antiguos de los modernos?—En que aquellos eran tanto mejores cuanto más libertad *política* concedían, y los segundos reunen más bondad cuanto mayor es la libertad *civil* que otorgan.

¿A qué se le llama gobierno *representativo*?—A un moderno régimen ó forma gubernamental que tiene su asiento en la Constitución, en el cual el poder real está limitado por la Representación nacional y dividido en su ejercicio en tres grandes esferas de accion, el poder *legislativo*, el *ejecutivo* y el *judicial*. Algunos niegan á éste tal categoría, considerando como un orden comprendido en el *ejecutivo*.

¿Cuándo se comenzó á practicar en España el sistema *representativo*?—La introducción del estado llano en las Cortes es su germen, que se desenvuelve y presenta en todo su desarrollo en las de 1842.

¿Qué condiciones debe tener toda Constitución?—Debe definir los poderes públicos, señalar sus límites, dirimir sus competencias, procurando armonizarlos. Debe declarar y sancionar los derechos fundamentales del ciudadano por medio de preceptos absolutos y claros, evitando fórmulas reglamentarias y concediendo entrada en la vida política á todos los elementos sociales temidos y respetados. Por último, debe ser de tal manera formulada, que sea modificable por los adelantos de la filosofía y los progresos de la civilización.

¿Quién ejerce la *soberanía* en el gobierno *representativo*?—El poder *legislativo* y el *ejecutivo*.

¿Qué género de derechos goza el ciudadano en el régimen *representativo*?—*Civiles* y *políticos*. Los primeros son relativos á la *igualdad* y la *seguridad* para todos, sin consideración á su carácter de ciudadanos. Los segundos son relativos á su *capacidad* para intervenir en el gobierno del Estado de que forman parte. Según la Constitución de 1869 reciben unos y otros el nombre de *derechos individuales*. Algunos publicistas les dan el dictado de *libertades necesarias*.

¿A quién corresponde el ejercicio del poder legislativo?—A las Cámaras con el rey, y entre nosotros al Congreso de los diputados, al Senado y al

(1) Véase los *Prolegómenos del derecho* que presiden al romance.

monarca conjuntamente (1). Pueden ser más de dos las Cámaras legisladoras ó una sola.

¿Quiénes forman el Congreso?—Los diputados, elegidos por la parte del pueblo que participa del sufragio.

¿De cuántas maneras puede ser la eleccion?—*Directa é indirecta*. Es *directa* cuando el elector nombra al diputado; é *indirecta*, cuando nombra un tercero que debe elegir, ó contribuir á la eleccion de aquél. Si el compromisario es más de uno, la *indirecta* será de uno, dos ó más grados, segun el número de los compromisarios que se nombren.

¿Cuál de los métodos es preferible?—El de la eleccion *directa*, porque se acerca más á la verdad de la eleccion.

¿De cuántas maneras puede votarse?—*Pública y secretamente*. El sufragio secreto, que es el adoptado por nuestro derecho, es más aceptable, porque garantiza mejor la libertad del elector. Puede ser tambien más ó ménos limitado, segun que se extienda á elegir todos los diputados de una provincia, ó sólo los que deban representar una circunscripcion más ó ménos grande. Las elecciones se verificaron en España algunas veces por circunscripciones territoriales, que encerraban varios partidos judiciales. En la actualidad comprenden generalmente un solo partido de aquellos.

¿Cuál era la base del sufragio antes de 1869?—La *propiedad* y la *capacidad*. Una renta fija y el ejercicio de ciertas profesiones, concedian el derecho electoral. Despues se reconoció el sufragio universal limitado por la menor edad, y actualmente se preparan reformas legislativas que todavia no son leyes, en sentido restrictivo para el sufragio (2).

¿Qué representacion política tiene el Senado?—Tiene por objeto templan las pasiones populares de la Cámara baja, conservar las tradiciones y costumbres, y auxiliar el poder real, moderando las exageradas pretensiones de la Representacion nacional.

¿Qué sistemas pueden ofrecerse para su constitucion? Tres: el *hereditario*, el *electivo* y el *vitalicio*. En el primero son senadores por derecho propio los hijos de los grandes que disfrutaban una fortuna determinada. En el segundo, la eleccion es la única puerta para entrar á formar parte de él. En el tercero la facultad de elegir, que corresponde al monarca, está limitada á personas que deben reunir ciertas condiciones, sin derecho á transmitir el cargo á sus sucesores. Este era el sistema adoptado por la Constitucion anterior á la de 1869. Esta adoptó el sistema *electivo* por provincias, y la vigente sanciona un sistema mixto en que se reconoce el derecho propio y se admite el principio de eleccion en favor del monarca y de las corporaciones del Estado y de los mayores contribuyentes (3).

¿Cuál es la mision del poder ejecutivo?—Guardar y hacer que se cumplan las leyes. Reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros responsables, individual ó colectivamente.

¿En qué puede fundarse la responsabilidad?—En excesos, en omisiones, en errores, imprudencia, negligencia ó desaciertos.

¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad ministerial?—El Congreso la exige y el Senado la impone. Actualmente se nota la falta de una ley especial para el objeto, que desarrolle y haga realizables en la práctica estos principios.

(1) La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. (Art. 18 de la Constitucion de 1876.)

(2) Se ha presentado al Congreso un proyecto de ley, proponiendo la electoral de Julio de 1875.

(3) Art. 20. El Senado se compone: 1.º De senadores por derecho propio. 2.º De senadores vitalicios nombrados por la Corona. 3.º De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes. Los primeros y segundos no excederán de 180. Los terceros constituirán aquel número.

¿Cuál es la misión del poder judicial?—Juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, observando las leyes de tramitación.

¿Cuál es su más sólida garantía?—La inamovilidad é independencia de los tribunales, compuestos de personas aptas y de acrisolada probidad (1).

¿A quién corresponde su nombramiento?—Al rey, como jefe supremo del poder ejecutivo, en quien reside la plenitud de las jurisdicciones.

¿Desde cuándo constituye un verdadero poder el orden judicial?—Desde la Constitución de 1869, que expresamente lo reconoce como tal, no obstante que muchos publicistas le consideraban ya como poder, por más que convenían en que era una desmembración del poder ejecutivo.

Derecho político moderno según la Constitución de Junio de 1869; la vigente, promulgada en 2 de Junio de 1876 y leyes posteriores.

DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES.

¿Quiénes son españoles?—1.º, todas las personas nacidas en territorio español; 2.º, los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España; 3.º, los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza, y 4.º, los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo del territorio español: la calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero ó admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del rey (2).

¿Qué reglas deben tenerse presentes según la ley fundamental para la detención y prisión de las personas?—Las siguientes: 1.º, ningún español ni extranjero podrá ser *detenido* sino por causa de delito, decía la Constitución de 1869; pero la de 1876 dice «sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban (3)»; 2.º, todo detenido será puesto en libertad ó entregado á la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención: que se dejará sin efecto ó elevará á prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente: la providencia que se dictare se notificará al interesado dentro del mismo plazo; 3.º, ningún español podrá ser *preso* sino en virtud de mandamiento de juez competente: el auto por el cual se haya dictado el mandamiento se ratificará ó repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión; 4.º, ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal á quien, en virtud de leyes anteriores al delito, compete el conocimiento y en la forma que éstas prescriban: no podrán crearse tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún delito, y 5.º, toda persona detenida ó presa sin las formalidades legales, ó fuera de los casos previstos en esta Constitución, será puesta en libertad á petición suya ó de cualquier espa-

(1) La ley provisional sobre organización del poder judicial ha hecho grandes reformas en esta materia. (Véase el tratado ó sección de *Procedimientos*.)

(2) Art. 1.º de la Constitución de 1876.

(3) Véase el tratado de procedimiento criminal en el *sumario*.

ñol. Una ley, que todavía no existe, determinará la forma de proceder sumariamente en este caso (1).

¿Qué garantías tiene el domicilio, cuándo puede efectuarse la entrada en él, y el registro de los papeles y efectos, y con qué formalidades deben practicarse?—Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ó extranjero residente en España, sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma establecida por las leyes. La Constitución de 1869 especificaba los urgentes de incendio, inundación ú otro peligro análogo, ó de agresión ilegítima procedente de adentro, ó para auxiliar á persona que desde allí pida socorro. Fuera de estos casos, añadía, la entrada en el domicilio de un español ó extranjero residente en España, y el registro de sus papeles ó efectos, sólo podrán decretarse por juez competente y ejecutarse *de día*. El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar *á presencia del interesado* ó de un individuo de su familia, y en su defecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo. Según la Constitución de 1869, cuando un delincuente hallado infraganti y perseguido por la autoridad ó sus agentes, se refugiase en su domicilio, podían éstos penetrar en él sólo para el acto de la aprehensión: si se refugiase en domicilio ajeno, debía preceder requerimiento al dueño de éste. Nada dice respecto á estos casos la de 1876.

«Ningun español puede ser compelido á mudar de domicilio ó de residencia, sino en virtud de autoridad competente y en los casos previstos por las leyes.» La de 1869 exigía sentencia ejecutoria.

¿Cuándo podrá tener lugar la apertura de la correspondencia?—En ningún caso podrá detenerse, ni abrirse por la autoridad gubernativa, la correspondencia confiada al correo. Tampoco podía detenerse la telegráfica, según la de 1869, guardando silencio la de 1876 respecto á este extremo; pero en virtud de auto de juez competente podrán detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse *en presencia* del procesado la que se le dirija por el correo.

¿Qué circunstancias debe contener el auto de prision, de registro de morada ó de detención de la correspondencia?—Debe ser motivado. Cuando el auto carezca de este requisito, ó cuando los motivos en que se haya fundado se declaren en juicio ilegítimos ó notoriamente insuficientes, la de 1869 daba derecho á la persona que hubiere sido presa, ó cuya prision no se hubiere ratificado dentro del plazo de setenta y dos horas, ó cuyo domicilio hubiere sido allanado, ó cuya correspondencia hubiere sido detenida, para reclamar del juez que hubiese dictado el auto, una indemnización proporcionada al daño causado, pero nunca inferior á 500 pesetas; los agentes de la autoridad pública estaban asimismo sujetos á la indemnización que regulaba el juez cuando recibieran en prision á cualquiera persona sin mandamiento en que habia de insertarse el auto motivado, ó cuando la retuviesen sin que dicho auto haya sido ratificado dentro del término legal. La Constitución de 1876, nada dice; pero el Código penal castiga esos abusos.

¿Qué responsabilidad contraen las autoridades gubernativa y judicial que no cumplan con los requisitos y solemnidades expresadas?—La autoridad gubernativa que infrinja lo prescrito incurrirá, según los casos, en delito de detención arbitraria ó de allanamiento de morada, según el Código penal.

¿Qué garantías otorga la Constitución al derecho de propiedad y cuándo puede tener lugar la privación y la expropiación de los bienes?—Nadie podrá ser privado temporal ó perpétuamente de sus bienes y derechos, ni

(1) Art. 5.º, último párrafo de la Constitución de 1876.

turbado en la posesion de ellos, sino en virtud de sentencia judicial; los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción, serán personalmente responsables del daño causado. Quedan exceptuados de ella los casos de incendio ó inundacion ó otros urgentes análogos, en que por la ocupacion se haya de excusar un peligro al propietario ó poseeder, ó evitar ó atenuar el mal que se temiere ó hubiere sobrevenido. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad comun y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnizacion regulada por el juez, con intervencion del interesado. Si no precediere este requisito, los jueces ampararán, y en su caso reintegrarán en la posesion, al expropiado (1).

¿Qué contribuciones son exigibles y hay obligacion de satisfacer?—Las votadas por las Cortes ó por las corporaciones populares legalmente autorizadas para imponerlas, y cuya cobranza se haga en la forma prescrita por la ley. Todo funcionario público que intente exigir ó exija, el pago de una contribucion sin los requisitos prescritos en este párrafo, incurrirá en el delito de exaccion ilegal.

¿Que otros derechos concede la Constitución á los españoles?—Varios, como son el de votar en las elecciones públicas, siempre que se hallen aquellos en el pleno goce de sus derechos civiles y llenen las condiciones de las leyes; el de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante, sin sujecion á la previa censura; el de reunirse pacíficamente; asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios á la moral pública; y, por último, el de dirigir peticiones individual ó colectivamente á las Cortes, al rey y á las autoridades, y el de fundar y mantener establecimientos de instruccion ó de educacion, con arreglo á las leyes (2); el de salir libremente del territorio y trasladar su residencia y haberes á pais extranjero, salvas las obligaciones de contribuir al servicio militar ó al mantenimiento de las cargas públicas, y el de optar á los empleos y cargos públicos, segun su mérito y capacidad.

¿Qué disposiciones regulan y cómo deben practicarse, los derechos de *reunion* y *asociacion*?—Toda reunion pública estará sujeta á las disposiciones generales de policia. Las reuniones al aire libre y las manifestaciones políticas sólo podrán celebrarse de dia; y si sus individuos delinquieren por los medios que la misma les proporcione, podrá imponérseles la pena de disolucion. La autoridad gubernativa puede suspender la asociacion que delinca, sometiendo incontinenti á los reos al juez competente. Finalmente, toda asociacion cuyo objeto ó cuyos medios comprometan la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por una ley.

Al ocuparnos en la seccion de Derecho penal de las reuniones y asociaciones lícitas (pág. 63), hemos expuesto la legalidad vigente, cuya lectura recomendamos en este lugar.

¿Quiénes y en qué forma no pueden ejercer el derecho de *peticion*?—El derecho de peticion no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza armada; tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de ella, sino con arreglo á las leyes de su instituto, en cuanto tenga relacion con éste.

¿Qué prescribia la Constitución de 1869 en materia de *libertad religiosa*?—Decia textualmente lo siguiente: «La nacion se obliga á mantener el culto

(1) Art. 10 de la Constitución de 1876.

(2) La Constitución de 1869 concedia este derecho, sin previa licencia, salva la inspeccion de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad. Establecia, pues, la libertad de ensenanza, que restringe la Constitución de 1876, sujetando á una ley los deberes de los profesores, y la ensenanza de los establecimientos costeados por el Estado, las provincias y los pueblos.

y los ministros de la religion católica: el ejercicio público ó privado de cualquiera otro culto queda garantido á todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho: si algunos españoles profesaren otra religion que la católica, es aplicable á los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.»

¿Qué sanciona la Constitucion de 1876, respecto á religion?—La tolerancia de cultos disidentes. Dice en su art. 41 que «la religion católica, apostólica, romana es la del Estado, y que la nacion se obliga á mantener el culto y sus ministros.

Nadie será molestado, añade, por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral cristiana. Pero no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religion del Estado (1).

AUTORIZACIONES PARA PROCESAR.

¿Es necesario, segun el derecho moderno, la autorizacion para procesar á los funcionarios públicos?—No lo era, cualquiera que fuese el delito que cometieren, cuando regia la Constitucion de 1869; pero ese requisito previo ha vuelto á exigirse por la Constitucion de 1876, segun el art. 77, estando pendiente de discusion el proyecto de ley que ha de fijar los casos. Los funcionarios públicos no pueden escudarse con el mandato del superior, que no les eximirá de responsabilidad en los casos de infraccion manifiesta, clara y terminante de una prescripcion constitucional; en los demás sólo eximirá á los agentes que no ejerzan autoridad.

SUSPENSION DE GARANTÍAS.

¿Qué garantías constitucionales pueden suspenderse, cuándo, cómo y en qué circunstancias?—Sólo pueden suspenderse las relativas á la detencion y prision, al domicilio, registro de papeles y efectos, cambio de aquél ó de residencia de las personas, y las que garantizan la libre emision del pensamiento y el ejercicio de asociacion y reunion, las cuales no podrán suspenderse en toda la monarquia ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias: promulgada aquella, el territorio á que se aplicare se regirá, durante la suspension, por la ley de orden público establecida de antemano (2). No podrá tampoco autorizarse al gobierno para extrañar del reino ni deportar á los españoles, ni para desterrarlos á distancia de más de 250 kilómetros de su domicilio; en ningun caso los jefes militares ó civiles podrán establecer otra penalidad que la prescrita previamente por la ley.

(1) La interpretacion de estos preceptos constitucionales ha sido varia. El gobierno ha publicado una circular que lleva la fecha de 23 de Octubre de 1876, en que se dan reglas para entender, apreciar y aplicar aquéllos. (Véase la seccion de *Derecho penal*, pág. 68).

(2) De las prescripciones que contiene la ley de orden público, nos hemos ocupado ya en la seccion de *Derecho penal*, pág. 73, al tratar de los delitos de rebelion y sedicion á que nos referimos.

De la forma actual de gobierno y de los poderes públicos.

La forma de gobierno de la nacion española, es la monarquía constitucional y parlamentaria.

¿En quién reside la soberanía y los tres poderes *legislativo, ejecutivo y judicial*?—La soberanía reside esencialmente en la nacion, de la cual emanan realmente todos los poderes. La potestad de hacer las leyes, reside en las Cortes con el rey (1). El rey sanciona y promulga las leyes (2). El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. Los tribunales ejercen el poder judicial, administrando justicia en nombre del rey, juzgando y ejecutando lo juzgado.

La gestion de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales con arreglo á las leyes.

¿Qué elementos constituyen las Cortes?—Se componen de dos cuerpos colegisladores, á saber: Senado y Congreso. Ambos cuerpos son iguales en facultades (3), excepto en los casos previstos en la Constitucion, y representan á toda la nacion, y no exclusivamente á los electores que los nombraren. Ningun senador ni diputado podia admitir de sus electores mandato alguno imperativo, segun la Constitucion de 1869. La vigente guarda silencio respecto á este particular.

¿Cuándo deben renovarse las Cortes?—El Congreso se renovará totalmente, y el Senado en su parte electiva, por mitad, cada cinco años. La renovacion será total cuando el rey disuelva el Senado (4). La Constitucion de 1869, limitaba el tiempo de la renovacion á tres años.

De las Cortes.

¿A quién corresponde la convocacion, apertura, suspension, clausura y disolucion de las Cortes?—Al rey. Puede disolver simultánea ó separadamente la parte electiva del Senado y el Congreso, debiendo convocarlos dentro de tres meses.

¿Cuándo deben reunirse, y por cuánto tiempo?—Las Cortes deben reunirse todos los años, y segun la Constitucion de 1869, continuar reunidas á lo ménos cuatro meses cada año, sin incluir en este tiempo el que se invertia en su constitucion. Mas nada de esto se dice en la Constitucion de 1876. Se reunirán *necesariamente* luego que vacare la corona, ó que el rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno del Estado (5).

¿Qué facultades comunes tienen los dos cuerpos colegisladores?—Las siguientes: 1.^a, formar el respectivo reglamento para su gobierno interior; 2.^a, examinar la legalidad de las elecciones y la aptitud legal de los individuos que los compongan; 3.^a, elegir los secretarios.

El Congreso nombra su presidente y vice-presidentes. El rey nombra

(1) Art. 18 de la Constitucion de 1876.

(2) Art. 51.

(3) Arts. 38 de la Constitucion de 1869 y 19 de la de 1876.

(4) Arts. 24 y 30 de ésta.

(5) Arts. 32 y 33 de la misma.

para cada legislatura, de entre los mismos senadores, el presidente y vice-presidentes del Senado.

Además de la potestad *legislativa* que ejercen con el rey, corresponde á las Cortes: 1.º, recibir á aquel, al sucesor inmediato de la corona y á la regencia, el juramento de guardar la Constitución y las leyes; 2.º, elegir la jencia del reino y nombrar el tutor del rey menor cuando lo previene la Constitución; 3.º, hacer efectiva la responsabilidad de los ministros acusados por el Congreso y juzgados por el Senado (1).

¿Qué prohibiciones respectivas les impona la ley?—Tres: no podrá estar reunido uno de los cuerpos colegisladores sin que lo esté también el otro, excepto en el caso de que el Senado se constituya en tribunal de justicia: no les es permitido deliberar juntos, ni en presencia del rey.

Las sesiones del Senado y las del Congreso serán públicas, excepto en los casos que necesariamente exijan reserva, que serán secretas.

¿Qué requisitos deben cumplirse en todo proyecto para que llegue á ser ley?—Que sea votado en los dos cuerpos colegisladores y sancionado por la corona, debiendo presentarse al Congreso antes que al Senado el que se refiera á contribuciones y crédito público (2). Cuando no hubiere conformidad entre ambas resoluciones, se formará una comisión compuesta de individuos de ambas cámaras, para que procuren conciliar aquéllas, emitiendo dictámen al efecto, que se discutirá en el Senado y en el Congreso (3).

¿Cómo deben votarse, y qué número de votos necesitan las leyes?—Las resoluciones de las Cortes se tomarán á pluralidad de votos. Pero para votar leyes, se requiere en cada uno de los cuerpos colegisladores, la presencia de la mitad más uno del número total de los individuos que lo compongan.

Segun la Constitución de 1869, ningún proyecto de ley podía aprobarse por las Cortes, sino después de haber sido votado, artículo por artículo, en cada uno de los cuerpos colegisladores. Exceptuábanse los códigos ó leyes que por su mucha extensión no se prestaban á la discusión por artículos; pero, aún en este caso, los respectivos proyectos se sometieran íntegros á las Cortes. Nada dice, acerca de esto, la Constitución vigente.

¿A quién corresponde la iniciativa de las leyes?—Al rey y á cada uno de los cuerpos colegisladores.

¿Qué garantías é inmunidades disfrutan los senadores y diputados?—La inmunidad é inviolabilidad personal, en la forma siguiente: no podrán ser procesados ni detenidos, cuando estén abiertas las Cortes, sin permiso del respectivo Cuerpo colegislador, á no ser hallados *infraganti*. Así en este caso como en el de ser procesados ó arrestados mientras estuvieren cerradas las Cortes, se dará cuenta al cuerpo á que pertenezcan, tan luego como se reúnan.

La inmunidad era todavía más lata por la Constitución de 1869, puesto que prescribía que, cuando se hubiere dictado sentencia contra un senador ó diputado en proceso seguido sin el permiso á que se refiere el párrafo anterior, la sentencia no podía llevarse á efecto hasta que autorizase su ejecución el cuerpo á que pertenecía el procesado.

(1) Art. 45 de la Constitución de 1876. La de 1869 les facultaba también para resolver cualquiera duda relativa á la sucesión de la corona, y para nombrar los ministros del tribunal de cuentas.

(2) El art. 50 de la Constitución de 1869, comprendía en esta prerogativa las leyes sobre fuerza militar, y daba preferencia á la resolución del Congreso, cuando el Senado alteraba el proyecto y aquel no admitía la alteración.

(3) Art. 10 de la ley de relaciones entre los cuerpos colegisladores, de 12 de Julio de 1897, declarada subsistente.

Los senadores y diputados son inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

¿Cómo se verifica la elección de senadores elegibles por las corporaciones y contribuyentes?—Por provincias, á cuyo efecto, cada distrito municipal elegirá un número de compromisarios igual á la sexta parte del de concejales que deban componer su ayuntamiento. Los distritos municipales donde el número de concejales no llegue á seis, elegirán, sin embargo, un compromisario. Los compromisarios así elegidos se asociarán á la diputación provincial respectiva, constituyendo con ella la junta electoral. Cada una de estas juntas elegirá, á pluralidad absoluta de votos, cuatro senadores. Debemos advertir que está próxima á discutirse la ley electoral que ha de alterar lo antes expuesto.

Cualquiera que sea en adelante la division territorial, nunca se alterará el número total de senadores que, con arreglo á lo prescrito en la Constitución, resulta de la demarcación actual de provincias.

¿Qué condiciones deben tener los senadores elegidos?—Para ser elegido senador por nombramiento del rey ó por elección de las corporaciones y contribuyentes, se requiere ser español y pertenecer ó haber pertenecido á alguna de las siguientes clases:

1.^a Sólo podrán ser senadores por nombramiento del rey ó por elección de las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan ó hayan pertenecido á una de las siguientes clases (1):

- 1.^o Presidentes del Senado ó del Congreso de los diputados.
- 2.^o Diputados que hayan pertenecido á tres Congresos diferentes ó que hayan ejercido la diputación durante ocho legislaturas.
- 3.^o Ministros de la corona.
- 4.^o Obispos.
- 5.^o Grandes de España.
- 6.^o Tenientes generales del ejército y vicealmirantes de la Armada, después de dos años de su nombramiento.
- 7.^o Embajadores, después de dos años de servicio efectivo, y ministros plenipotenciarios después de cuatro.
- 8.^o Consejeros de Estado, fiscal del mismo Cuerpo, y ministros y fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas del reino, consejeros del Supremo de la Guerra y de la Armada, y decano del Tribunal de las Ordenes militares, después de dos años de ejercicio.

(1) Las condiciones para ser senador conforme á la Constitución de 1809, eran:
 Ser ó haber sido presidente del Congreso;
 Diputado electo en tres elecciones generales, ó una vez para Cortes Constituyentes;
 Ministro de la corona;
 Presidente del Consejo de Estado, de los Tribunales Supremos, del Consejo Supremo de la Guerra y del Tribunal de cuentas del reino;
 Capitan general de ejército ó almirante;
 Teniente general ó vicealmirante;
 Embajador;
 Consejero de Estado;
 Magistrado de los Tribunales Supremos, individuo del Consejo Supremo de la Guerra y del Almirantazgo, ministro del Tribunal de Cuentas del reino, ó ministro plenipotenciario durante dos años;
 Arzobispo ó obispo;
 Rector de Universidad de la clase de catedráticos;
 Catedrático de término, con dos años de ejercicio;
 Presidente ó director de las Academias Española, de la Historia, de Nobles Artes, de Ciencias exactas, físicas y naturales, de Ciencias morales y políticas y de Ciencias médicas;
 Inspector general de los Cuerpos de ingenieros civiles;
 Diputado provincial cuatro veces;
 Alcalde dos veces en pueblos de más de 30.000 almas.
 Eran además elegibles los 50 mayores contribuyentes por contribucion territorial, y los 20 mayores por subsidio industrial y comercial de cada provincia.

9.º Presidentes ó directores de las Reales Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias exactas, físicas y naturales, de Ciencias morales y políticas, y de Medicina.

10. Académicos de número de las corporaciones mencionadas, que ocupen la primera mitad de la escala de antigüedad en su Cuerpo; inspectores generales de primera clase de los cuerpos de ingenieros de caminos, minas y montes; catedráticos de término de las Universidades, siempre que lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de ella.

Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar 7.500 pesetas de renta, procedente de bienes propios, ó de sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada, ó de jubilación, retiro ó cesantía.

11. Los que con dos años de antelación posean una renta anual de 20.000 pesetas ó paguen 4 000 pesetas por contribuciones directas al Tesoro público, siempre que además sean títulos del reino, hayan sido diputados á Córtes, diputados provinciales ó alcaldes en capital de provincia ó en pueblos de más de 20.000 almas.

12. Los que hayan ejercido alguna vez el cargo de senador, antes de promulgarse esta Constitución. Los que para ser senadores en cualquier tiempo hubieren acreditado renta, podrán probarla para que se les compute al ingresar como senadores por derecho propio, con certificación del registro de la propiedad que justifique que siguen poseyendo los mismos bienes.

El nombramiento por el rey de senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se expresará siempre el título en que, conforme á lo dispuesto en este artículo, se funde el nombramiento.

¿Qué condiciones son comunes á todos los senadores?—Las siguientes: ser español, tener 35 años cumplidos, no estar procesado criminalmente, ni inhabilitado en el ejercicio de los derechos políticos, y no tener los bienes intervenidos.

¿Cómo se verifica la eleccion de diputados á Córtes y qué condiciones debe tener el elegido?—En la forma que prescribe la ley electoral, nombrándose un diputado al menos, por cada 50.000 almas de población. Para ser elegido diputado se requiere ser español, de estado seglar (1), mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles.

La incompatibilidad de los diputados y los casos de reeleccion, son objeto de leyes especiales. Pero cesarán en sus cargos, sin necesidad de declaración alguna, los diputados á quienes el gobierno ó la real casa confieran pension, empleo, ascenso que no sea de escala cerrada, comision con sueldo, honores ó condecoraciones, si dentro de quince días no renuncian la gracia. Exceptuase el cargo de ministro (2).

Ya queda dicho que el cargo de diputado dura cinco años, segun el artículo 30 de la Constitución de 1876.

Del rey.

¿Cuáles son los atributos del poder real?—El ser la persona del rey sagrada é inviolable, y, por tanto, no estar sujeta á responsabilidad. Son responsables sus ministros, que han de refrendar siempre los mandatos de aquél, á quienes nombra y separa libremente.

La dotacion del rey se fijará al principio de cada reinado.

¿Qué facultades corresponden al rey como jefe del poder ejecutivo?—1.ª, la potestad de hacer ejecutar las leyes, y su autoridad se extiende á

(1) La Constitución de 1869 no cerraba las puertas del Congreso á los eclesiásticos.

(2) Art. 31 de la Constitución de 1876.

todo cuanto conduce á la conservacion del órden público en lo interior y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitucion y á las leyes; 2.^a, el rey sanciona y promulga las leyes (1); 3.^a tiene el mando supremo del ejército y armada, y dispone de las fuerzas de mar y tierra (2); 4.^a, concede los grados, ascensos y recompensas militares, con arreglo á las leyes (3). Corresponde además al rey:

1.^o Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean conducentes para la ejecucion de las leyes (4).

2.^o Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3.^o Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes (5).

4.^o Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Córtes.

5.^o Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

6.^o Cuidar de la acuñacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre.

7.^o Decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la administracion, dentro de la ley de presupuestos (6).

8.^o Conferir los empleos civiles, y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes, como queda dicho.

9.^o Nombrar y separar libremente á los ministros, como queda dicho.

¿Qué actos y prerogativas no puede ejecutar sin estar autorizado legalmente?—El rey necesita estar autorizado por una ley especial: 1.^o, para enajenar, ceder ó permutar cualquier parte del territorio español; 2.^o, para incorporar cualquiera otro territorio al territorio español; 3.^o, para admitir tropas extranjerass en el reino; 4.^o, para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, los que estipulen dar subsidio á una potencia extranjera y todos aquellos que puedan obligar individualmente á los españoles. En ningun caso los artículos secretos de un tratado podrán derogar los públicos; 5.^o, para abdicar la corona en su inmediato sucesor.

Para contraer matrimonio el rey ó aquél, no necesitan estar autorizados por las Córtes; bástaes ponerlo en conocimiento antes de efectuarlo, y someter á su aprobacion los contratos y estipulaciones matrimoniales (7).

Sucesion á la corona y regencia del reino.

El art. 57, con que comienza este titulo en la Constitucion de 1876, declara que el rey legitimo de España es D. Alfonso XII de Borbon.

(1) La Constitucion de 1869 dice lo siguiente:

«Todo lo que el rey mandare ó dispusiere en el ejercicio de su autoridad, será firmado por el ministro á quien corresponda. Ningun funcionario público dará cumplimiento á lo que carezca de este requisito.»

(2) La primera parte de este artículo no existe en la Constitucion de 1869.

(3) La Constitucion de 1869 dice en el párrafo segundo del art. 73:

«Conferir los empleos civiles y militares con arreglo á las leyes.»

(4) La Constitucion de 1869 dice en su art. 75:

«Al rey corresponde la facultad de hacer reglamentos para el cumplimiento y aplicacion de las leyes, previos los requisitos que las mismas señalen.»

(5) En la Constitucion de 1869 se añade: «Salvo lo dispuesto relativamente á los ministros.»

Esta cláusula se refiere al art. 90, en el cual se determina que para que el rey indulte á los ministros condenados por el Senado ha de preceder peticion de uno de los Cuerpos Colegisladores.

(6) Este precepto no está en la Constitucion de 1869.

(7) Art. 56 de la Constitucion de 1876.

¿Qué orden de sucesión á la corona prescribe la Constitución?—La autoridad real es hereditaria, y la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior á las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón á la hembra; y en el mismo sexo, la persona de más edad á la de ménos.

Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de D. Alfonso XII de Borbon, sucederán por el orden que queda establecido sus hermanas, su tía, hermana de su madre, y sus legítimos descendientes, y los de sus tíos, hermanos de D. Fernando VII, si no estuviesen excluidos (1).

Si llegara á extinguirse la dinastía que sea llamada á la posesion de la corona, las Córtes harán nuevos llamamientos como más convenga á la nacion.

Quando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el gobierno del reino.

Cualquiera duda de hecho ó de derecho que ocurra en orden á la sucesion á la corona, se resolverá por una ley (2).

¿Es necesario el juramento de los reyes?—La Constitución de 1869 lo exigía expresa y terminantemente. Quando falleciere el rey, el nuevo rey, dice, jurará guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, del mismo modo y en los mismos términos que las Córtes decreten para el primero que ocupe el trono, conforme á la Constitución. Igual juramento debia prestar el príncipe de Asturias quando llegaba á la mayor edad. La de 1876 tambien lo exige indirectamente al comprender entre las facultades de las Córtes, la de recibir al rey, al sucesor inmediato de la corona y de la regencia ó regente del reino, el juramento de guardar la Constitución y las leyes. (Art. 45).

¿Pueden las Córtes excluir de la sucesion á alguna persona?—Segun la Constitución de 1869, podian excluir á todas aquellas que sean incapaces para gobernar, ó hayan hecho cosas por que merezcan perder el derecho á la corona, cuya exclusion debia ser objeto de una ley (3). Nada dice expresamente, la de 1876.

¿En qué casos há lugar al nombramiento de una regencia del reino?—En los de menor edad é imposibilidad de gobernar. Quando el rey fuere menor de edad, el padre ó la madre del rey, y en su defecto el pariente más próximo á suceder en la corona, segun el orden establecido en la Constitución, entrará desde luego á ejercer la regencia, y la ejercerá todo el tiempo de la menor edad del rey.

Quando el rey se imposibilitare para ejercer su autoridad, y la imposibilidad fuese reconocida por las Córtes, ejercerá la regencia, durante el impedimento, el hijo primogénito del rey, siendo mayor de 16 años; en su defecto, el consorte del rey, y á falta de éste, los llamados á la regencia.

Si no hubiere ninguna persona á quien corresponda el derecho de regencia, la nombrarán las Córtes, y se compondrá de una, tres ó cinco personas. Hasta que se hagan estos nombramientos, gobernará provisionalmente el Consejo de ministros.

¿Qué circunstancias ha de reunir el regente del reino.—Para que el pariente más próximo ejerza la regencia, necesita ser español, tener 20 años cumplidos, y no estar excluido de la sucesion de la corona. El padre ó la madre del rey, sólo podrán ejercer la regencia permaneciendo viudos.

¿Qué facultades y limitaciones tiene la regencia?—La regencia ejercerá

(1) Este precepto no existia en la Constitución de 1869, porque estaba vacante el Trono, quando se promulgó.

(2) Este precepto no está en la Constitución de 1869.

(3) Art. 64 de id.

toda la autoridad del rey, en cuyo nombre se publicarán los actos del gobierno. La Constitución de 1869 prohibía que durante la regencia se hiciese variación alguna en la Constitución; pero la de 1876 nada perceptúa acerca de este extremo.

¿Quiénes están llamados á ser tutores del rey menor, y qué requisitos deben reunir?—Será tutor del rey menor el que le hubiere nombrado en su testamento el rey difunto, siempre que sea español de nacimiento. Si éste no le hubiere nombrado, recaerá la tutela en el padre, y en su defecto en la madre, mientras permanezcan viudos. A falta de tutor testamentario ó legítimo, lo nombrarán las Cortes. Los cargos de regente ó de tutor del rey, no pueden estar reunidos sino en el padre ó la madre.

Las Cortes podrán excluir de la tutela á las personas que sean incapaces para el cargo ó hayan hecho cosa por que merezcan no continuar en él.

De los ministros.

Son los ministros las personas encargadas del gobierno de la nación, que deben refrendar y autorizar con su firma todo lo que el rey mandare ó dispusiere en el ejercicio de su autoridad, quedando responsables por solo aquel hecho (1).

Los ministros pueden ser senadores ó diputados y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos Colegisladores; pero sólo tendrán voto en aquel á que pertenezcan.

¿Qué tribunal es competente para juzgar y exigir la responsabilidad á los ministros?—Al Congreso corresponde acusarlos y al Senado juzgarlos. Las leyes determinarán los casos de responsabilidad de los ministros, las penas á que estén sujetos y el modo de proceder contra ellos, cuyas leyes no existen todavía (2).

Del poder judicial.

La Constitución asienta las bases de este poder de la nación, que obtiene su desarrollo y disposiciones complementarias, en la ley sobre organización del mismo (3).

Sanciona como tales bases, las siguientes:

- 1.^a La justicia se administra en nombre del rey.
- 2.^a Unos mismos Códigos regirán en toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.
- En ellos no se establecerá mas que un sólo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.
- 3.^a A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad

(1) Art. 49 de la Constitución de 1876.

(2) La Constitución de 1869 dice en sus arts. 88 y 89.

Art. 88. No podrán asistir á las sesiones de las Cortes los ministros que no pertenezcan á uno de los Cuerpos Colegisladores.

Art. 89. Los ministros son responsables ante las Cortes de los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Al Congreso corresponde acusarlos y al Senado juzgarlos.

Las leyes determinarán los casos de responsabilidad de los ministros, las penas á que estén sujetos y el modo de proceder contra ellos.

(3) Véase el Tratado de procedimientos, en donde hemos expuesto la organización de los tribunales, sus funciones, manera de ser, atribuciones y facultades.

de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

4.^a Una ley especial determinará los casos en que haya de exigirse autorizacion previa para procesar ante los tribunales ordinarios á las autoridades y sus agentes (1).

5.^a Las leyes determinarán los tribunales y juzgados que ha de haber, la organizacion de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que han de tener sus individuos (2).

6.^a Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinen las leyes (3).

7.^a Los Magistrados y jueces serán inamovibles y no podrán ser depuestos, suspendidos ni trasladados sino en los casos y en la forma que prescriba la ley orgánica de Tribunales (4).

8.^a Los jueces son responsables personalmente de toda infraccion de ley que cometan (5).

De las diputaciones provinciales y ayuntamientos.

¿Qué principios ha sentado la ley fundamental para la organizacion y facultades de las corporaciones enunciadas?—Los siguientes: 1.^o, gobierno y direccion de los intereses peculiares de la provincia ó del pueblo por las respectivas corporaciones; 2.^o, publicidad de las sesiones de unas y otras, dentro de los límites señalados por la ley (6); 3.^o, publicacion de los presupuestos, cuentas y acuerdos importantes de las mismas; 4.^o, intervencion del rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las diputaciones pro-

(1) Este precepto no existe en la Constitucion de 1869, y para realizarlo se ha presentado ya á las Cortes un proyecto de ley en que se especifican los casos que requieren previa autorizacion de procesamiento.

(2) Tampoco existe esta disposicion en el Código fundamental de 1869, y sólo tiene alguna relacion con ella lo dispuesto en el art. 93, que dice así:

«Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos y para los comunes que determine la ley. La ley determinará tambien las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de jurado.» La ley de Junio de 1870 sobre organizacion de tribunales, responde á estos preceptos constitucionales.

(3) Tampoco existe este precepto en la Constitucion de 1869.

(4) La Constitucion de 1869 determina acerca de este punto lo siguiente:

«Art. 94. El rey nombra los magistrados y jueces á propuesta del Consejo de Estado y con arreglo á la ley orgánica de Tribunales.

El ingreso en la carrera judicial será por oposicion. Sin embargo, el rey podrá nombrar hasta la cuarta parte de magistrados de las audiencias y del Tribunal Supremo, sin sujecion á lo dispuesto en el párrafo anterior, ni á las reglas generales de la ley orgánica de Tribunales, pero siempre con audiencia del Consejo de Estado y dentro de las categorías que para estos casos establezca la referida ley. (Véase lo dicho en el «Tratado de procedimientos judiciales.»)

Art. 95. Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos sino por sentencia ejecutoria ó por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado, y al tenor de lo que se disponga en la mencionada ley orgánica. Tampoco podrán ser trasladados sino por Real decreto expedido con los mismos trámites; pero podrán ser suspendidos por auto del tribunal competente.

Art. 96. Los tribunales, bajo su responsabilidad, no darán posesion á los magistrados ó jueces que no hubieren sido nombrados con arreglo á la Constitucion y á las leyes.

Art. 97. Los ascensos en la carrera judicial se harán á consulta del Consejo de Estado.

(5) La Constitucion de 1869 añadia: Segun lo que determine la ley de responsabilidad judicial, y despues el siguiente párrafo: «Todo español podrá entablar accion pública contra los jueces ó magistrados por los delitos que cometieren en el ejercicio de su cargo.» Tambien preceptuaba lo siguiente:

«Los Tribunales no aplicarán los reglamentos generales, provinciales y locales, sino en cuanto estén conformes con las leyes.»

(6) Esta prescripcion de la ley fundamental de 1869, no se expresa en la de 1876.

vinciales y los ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes, y 5.º, determinacion de sus facultades en materia de impuestos, á fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposicion con el sistema tributario del Estado.

No es necesario recordar que en cada provincia habrá una diputacion provincial, elegida en la forma que determina la ley, y compuesta del número de individuos que ésta señale, así como que, en los pueblos habrá alcaldes y ayuntamientos, debiendo ser éstos nombrados por los vecinos que tengan derecho electoral.

De las contribuciones y de la fuerza pública.

¿Qué deberes impone la ley al gobierno respecto á los presupuestos generales del Estado y á la fuerza armada?—Respecto á los primeros previene que todos los años presentará el gobierno á las Cortes el presupuesto general de gastos del Estado para el año siguiente y el plan de contribuciones y medios para llenarlos, como asimismo las cuentas de la recaudacion é inversion de los caudales públicos, para su examen y aprobacion.

Si no pudieran ser votados ántes del primer día del año económico siguiente, regirán los del anterior, siempre que para él hayan sido discutidos y votados por las Cortes y sancionados por el rey (1).

En cuanto á la fuerza pública, se limita la Constitucion á prescribir que las Cortes fijarán todos los años, á propuesta del rey, las fuerzas militares de mar y tierra. No puede existir en territorio español fuerza armada permanente que no esté autorizada por una ley.

¿Qué establece la Constitucion relativamente á los empréstitos y á la deuda pública?—Que el gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre el crédito de la nacion; y que la deuda pública está bajo la salvaguardia de la nacion. La Constitucion de 1869, prohibia que se hiciese ningun empréstito, sin que se votasen al mismo tiempo los recursos necesarios para pagar sus intereses. Nada dice de esto expresamente, la de 1876.

De las provincias de Ultramar.

Las Cortes Constituyentes de 1869, acordaron é hicieron constar en la Constitucion, la reforma del sistema de gobierno de las provincias de Ultramar para cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba ó Puerto-Rico, á fin de hacer extensivos á las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitucion; y añá-

(1) Lo dispuesto en la Constitucion de 1869 sobre este punto dice así:

«El Gobierno presentará todos los años á las Cortes los presupuestos de gastos y de ingresos, expresando las alteraciones que haya hecho en los del año anterior.

Quando las Cortes se reunan el 1.º de Febrero, los presupuestos habrán de presentarse al Congreso dentro de los diez días siguientes á su reunion.

Art. 101. El Gobierno presentará al mismo tiempo que los presupuestos el balance del último ejercicio, con arreglo á la ley.

Art. 102. Ningun pago podrá hacerse sino con arreglo á la ley de presupuestos ú otra especial y por orden del ministro de Hacienda, en la forma y bajo la responsabilidad que las leyes determinen.»

dieron que el régimen por que se gobiernan las provincias españolas situadas en el archipiélago filipino, sería reformado por una ley.

Desde dicha época nada trascendental se había hecho para llevar á efecto el mandato de la Constitución, hasta que por un decreto reciente (1) se mandó observar desde luego en la isla de Puerto-Rico, otro sobre régimen municipal de la misma, sin perjuicio de las alteraciones que las Cortes acuerden en su día. Con posterioridad se promulgó la ley de abolición de la esclavitud en aquella antilla y á su territorio se han hecho extensivas varias leyes civiles y administrativas con algunas modificaciones, conducta que comienza á seguir el gobierno en la isla de Cuba, una vez que ya ha conseguido la pacificación completa de la misma.

Así se ve que tiene cumplimiento el art. 89 de la Constitución, que establece que las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales; pero el gobierno queda autorizado para aplicar á las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes, y dando cuenta á las Cortes, las leyes promulgadas ó que se promulguen, para la Península.

Cuba y Puerto-Rico serán representadas en las Cortes del reino en la forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias (2), y esa representación, que ya ha tenido en pasada legislatura la segunda de dichas antillas, será extensiva muy pronto á la primera, cuyo derecho se le ha declarado y reconocido recientemente.

De la reforma de la Constitución.

¿Cuándo, por quién y con qué circunstancias, puede reformarse la Constitución?—La ley de 1869 regulaba esta necesidad prescribiendo que las Cortes, por sí ó á propuesta del rey, podrán acordar la reforma de la Constitución, señalando al efecto el artículo ó artículos que hayan de alterarse. Hecha esta declaración, el rey, decía, disolverá el Senado y el Congreso, y convocará nuevas Cortes, que se reunirán dentro de los tres meses siguientes. En la convocatoria se insertará la resolución de las Cortes de que se habla anteriormente. Los cuerpos colegisladores tendrán el carácter de constituyentes tan sólo para deliberar acerca de la reforma, continuando despues con el de Cortes ordinarias. Mientras sean constituyentes no podrá ser disuelto ninguno de los Cuerpos colegisladores.

(1) Publicado en la *Gaceta* de 14 de Diciembre de 1872, con fecha del día anterior.

(2) Lo dispuesto en la Constitución de 1869 respecto á las provincias de Ultramar, dice así:

«Art. 108. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno en las provincias de Ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba ó Puerto-Rico, para hacer extensivos á las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución.

Art. 109. El régimen por que se gobiernan las provincias españolas situadas en el Archipiélago filipino, será reformado por una ley.»

La Constitución de 1869 contiene además un título cuyo epígrafe es: *De la Reforma de la Constitución*, y que dice de esta manera:

«Art. 110. Las Cortes, por sí ó á propuesta del rey, podrán acordar la reforma de la Constitución, señalando al efecto el artículo ó artículos que hayan de alterarse.

Art. 111. Hecha esta declaración, el rey disolverá el Senado y el Congreso y convocará nuevas Cortes, que se reunirán dentro de los tres meses siguientes. En la convocatoria se insertará la resolución de las Cortes de que habla el artículo anterior.

Art. 112. Los Cuerpos colegisladores tendrán el carácter de constituyentes tan sólo para deliberar acerca de la reforma, continuando despues con el de Cortes ordinarias.

Mientras las Cortes sean constituyentes, no podrá ser disuelto ninguno de los Cuerpos colegisladores.»

Más estas prescripciones, que formaban un título de aquel Código, no tienen cabida expresa en el texto de la de 1876, lo cual no quiere decir que ésta sea irreformable, porque esta interpretación sería absurda y contraria al sistema representativo.

De las elecciones.

Comprende la ley vigente, de 23 de Junio de 1870, promulgada en 20 de Agosto del mismo y modificada por otra de 16 de Diciembre de 1876, las elecciones *municipales*, las de diputados *provinciales*, diputados á *Córtes* y *senadores*, en cuya ley se trata de los electores y de los elegibles, de las incapacidades é incompatibilidades de éstos, del procedimiento que debe seguirse en el acto de verificarse la elección, terminando con la sanción penal que debe imponerse por los delitos electorales. De todo diremos algo, circunscribiéndonos á lo más importante, porque además de ser muy vasta y minuciosa la materia, debe sufrir inmediatamente grandes reformas, presentadas ya á las *Córtes* por el gobierno en proyectos de ley, pendientes de discusión.

¿Quiénes tienen derecho electoral activo?—Segun la citada ley de 20 de Agosto de 1870, todos los españoles que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles, y los hijos de éstos que sean mayores de edad, con arreglo á la legislación de Castilla (1). Exceptuáanse únicamente: 1.º, los que por sentencia ejecutoria estén privados del ejercicio de derechos políticos; 2.º, los que al verificarse las elecciones, se hallen procesados criminalmente, si contra ellos se hubiese dictado auto de prisión y no la hubieren subrogado con fianza, en los casos en que sea admisible con arreglo á derecho; 3.º, los sentenciados á penas aflictivas ó correccionales, mientras no hayan extinguido sus condenas y obtenido la rehabilitación, con arreglo á las leyes, y 4.º, los que careciendo de medios de subsistencia, reciben ésta en establecimientos benéficos, ó los que se hallen empadronados como mendigos y autorizados por los municipios para implorar la caridad pública. Pero estos preceptos, que sancionaban el sufragio universal, han sufrido algunas limitaciones por la ley de 26 de Diciembre de 1876, en cuanto á las elecciones municipales y provinciales, como pasamos á exponer, y sufrirá muy luego otras para las de diputados á *Córtes*.

Conforme al texto de la ley citada de 1876, serán electores para elegir Ayuntamiento y diputados provinciales los vecinos cabezas de familia con casa abierta, que lleven dos años, por lo ménos, de residencia fija en el término municipal, y vengán pagando por bienes propios alguna cuota de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, ó de subsidio industrial ó de comercio, con un año de anterioridad á la formación de las listas electorales, ó acrediten ser empleados civiles del Estado, la provincia ó el municipio en servicio activo, cesantes con haber por clasificación, jubilados ó retirados del ejército ó armada.

También serán electores los mayores de edad que, llevando dos años por lo ménos, de residencia en el término del municipio, justifiquen su capacidad profesional ó académica por medio de un título oficial.

En los pueblos menores de 400 vecinos, todos ellos serán electores, sin

(1) Art. 1.º de dicha ley.

más excepciones que las generales que establece el art. 2.º de la ley electoral de 20 de Agosto de 1870 (1).

¿Quiénes tienen capacidad para ser *elegidos*, ó derecho electoral *pasivo*?—Varían las circunstancias que exige la ley, según la naturaleza de los cargos que van á desempeñar. Al tratar del Senado, como cuerpo colegislador, ya hemos visto qué personas pueden ser elegidas senadores.

Son elegibles para diputados á *Córtes*, por ahora, todos los electores; para diputados provinciales, todos los que, pudiendo serlo á *Córtes*, tengan su vecindad dentro de la provincia; y para concejales en las poblaciones de 4.000 vecinos los electores que, además de llevar cuatro años por lo menos de residencia fija en el término municipal, paguen una cuota directa de las que comprendan en la localidad los dos primeros tercios de las listas de contribuyentes por el impuesto territorial, y para las menores de 4.000 y mayores de 400 vecinos, los que satisfagan cuotas comprendidas en los primeros cuatro quintos de las referidas listas. En los pueblos que no excedan de 400 vecinos serán elegibles todos los electores.

Serán además incluidos en el número de los elegibles todos los que contribuyan con cuota igual á la más baja que en cada término municipal corresponda pagar para serlo, con arreglo al párrafo anterior.

Los que siendo vecinos paguen alguna cuota de contribucion y acrediten por medio de título oficial su capacidad profesional ó académica, serán también elegibles.

Igualmente lo serán los que acrediten que sufren descuento en los haberes que perciban de fondos generales, provinciales ó municipales, siempre que el importe del descuento se halle comprendido en la proporción marcada anteriormente para los elegibles en las poblaciones de 4.000 y 400 vecinos respectivamente.

¿Cómo deben computarse las cuotas de contribucion?—Se estimará la cuota acumulando las que satisfagan los contribuyentes dentro y fuera del pueblo, por impuesto directo del Estado y por recargos municipales. Para computar la contribucion á los electores y á los elegibles, se considerarán bienes propios: respecto de los maridos, los de sus mujeres, mientras subsista la sociedad conyugal; respecto de los padres, los de sus hijos que legítimamente administren; respecto de los hijos los suyos propios cuyo usufructo no tuvieran por cualquier concepto.

¿Qué número de concejales debe votarse?—Se procurará que á cada colegio electoral corresponda elegir cuatro concejales, ó el número que más á éste se aproxime. Cada elector votará únicamente dos concejales cuando hayan de elegirse tres en el colegio electoral, tres cuando cuatro, cuatro cuando seis, y cinco cuando siete.

Promulgada esta ley, se procederá á formar las listas electorales con arreglo á lo prevenido en los párrafos anteriores, sujetándolas en su formación, plazos y demás requisitos y trámites á la ley electoral, según queda dispuesto.

En los pueblos que no excedan de 800 vecinos se constituirá una sola mesa.

Los cargos de diputado provincial y de concejal son incompatibles entre sí.

(1) Dice así el artículo citado.

«Art. 2.º Exceptúanse únicamente:

1.º Los que por sentencia ejecutoria estén privados del ejercicio de derechos políticos:
2.º Los que al verificarse las elecciones se hallen procesados criminalmente, si contra ellos se hubiese dictado auto de prision y no la hubieren subrogado con fianza en los casos en que sea admisible con arreglo á derecho.

3.º Los sentenciados á penas aflictivas ó correccionales, mientras no hayan extinguido sus condenas y obtenido rehabilitacion con arreglo á las leyes.

Los catedráticos de universidad ó de instituto, podrán ser concejales en las poblaciones en que desempeñen sus destinos.

¿Quiénes no pueden ser diputados provinciales?—En ningún caso pueden serlo: 1.º, los senadores, diputados á Cortes y concejales; 2.º, los alcaldes, tenientes y regidores; 3.º, los empleados activos del Estado, de la provincia ó de alguno de sus municipios; 4.º, los que directa ó indirectamente tengan parte en servicios, contrataciones ó suministros dentro de la provincia, por cuenta de ésta, del Estado ó de los ayuntamientos; 5.º, los que desempeñen cargos públicos que por las leyes especiales estén declarados incompatibles con el de diputado provincial; 6.º, los que tengan contienda administrativa ó judicial pendiente con la diputación ó con los establecimientos sujetos á la dependencia y administración de ésta.

Pueden excusarse los mismos á quienes se conceden excusas para los cargos de concejales, según la ley municipal.

¿Qué incapacidades relativas al ejercicio de los tres indicados cargos reconoce la ley electoral?—Unas comunes á los tres, y otras limitadas al de concejal.

No podrán ser elegidos para ninguno de los cargos referidos, los que desempeñen ó hayan desempeñado, tres meses antes de las elecciones, cargo ó comisión de nombramiento del gobierno, con ejercicio de autoridad en la provincia, distrito ó localidad donde éstas se verifiquen. Tampoco podrán ser elegidos para ninguno de los dichos cargos: 1.º, los contratistas y sus fiadores de obras y servicios públicos que se paguen con fondos del Estado, provinciales y municipales, ni los administradores de dichas obras y servicios; 2.º, los recaudadores de contribuciones y sus fiadores; 3.º, los deudores al Estado que lo sean por cualquier clase de contrato; 4.º, los deudores en concepto de segundos contribuyentes, los fiadores y mancomunados de ambos casos, los que reciban sueldo de la provincia y todos los que no pueden ser diputados provinciales. El proyecto de ley electoral, añade á las incapacidades dichas, los ingenieros de los distritos y los presidentes de las mesas electorales, cuya incapacidad durará hasta un año después de terminada la causa. En cualquier tiempo en que después de la admisión del electo adquiriera alguna de las cualidades expresadas, la incapacidad que cada una de ellas lleva consigo producirá su efecto, y aquel en quien se halle perderá inmediatamente el cargo.

No podrán ser elegidos concejales los que, con relación al municipio, se hallen en los casos en que se encuentran respecto á la provincia los comprendidos en las incapacidades, y además los que ya hemos enumerado. Para los cargos de diputados á Cortes y diputado provincial, no se computarán á los candidatos electos los votos que obtengan en las localidades donde ejerzan jurisdicción, aunque sea de elección popular el cargo que desempeñen.

¿Qué casos de incompatibilidad declara dicha ley?—Los siguientes: 1.º, el cargo de senador es incompatible con todo empleo activo que no esté comprendido en las categorías que hemos dicho daban aptitud para ejercerlo; 2.º, el cargo de diputado es incompatible con el ejercicio de destinos públicos, aunque sean en comisión y sin sueldo, siempre que lo tengan señalado en el presupuesto del Estado ó de la Casa real; 3.º, los cargos de senador, diputado á Cortes, diputado provincial y concejal son incompatibles entre sí; 4.º, los cargos de diputado provincial y concejal son también incompatibles entre sí, y con todo destino retribuido por el gobierno ó por la Casa real, y con los de notario público y juez de paz de sus respectivos distritos ó colegios electorales. Es igualmente incompatible el cargo de concejal con todo empleo retribuido de fondos provinciales ó municipales.

El senador ó diputado á Cortes que acepte del gobierno ó de la Casa real empleo, comisión con sueldo, honores ó condecoraciones, se entien-

de que renuncia sus respectivos cargos, y no podrá ser reelegido hasta las próximas elecciones generales. Los senadores ó diputados que fuesen elegidos por dos ó más provincias ó distritos optarán, en término de ocho días, á contar desde la constitucion de su respectivo cuerpo colegislador, por la que deseen representar. Para los que fueren elegidos con posterioridad se entenderá el plazo de los ocho dias desde la aprobacion del acta.

¿Por qué medio se justifica el derecho electoral?—Por una cédula talonaria que los alcaldes deben entregar á cada elector, la cual debe presentarse al ejercitar dicho derecho, en el acto de las votaciones.

Cuando los vecinos todos quisieren reclamar su inclusion en las listas electores deben presentar, y los ayuntamientos admitirles, las pruebas de su capacidad electoral, pudiendo alzarse ante las diputaciones provinciales del fallo que aquellos dictaren; y si los vecinos no se conformaren, pueden entablar el recurso de apelacion á las audiencias, que lo sustanciarán y decidirán oyendo á las partes y al ministerio fiscal. El nuevo proyecto de ley reserva exclusivamente á las autoridades judiciales los juicios de inclusion y exclusion del censo electoral.

Todo vecino podrá reclamar igualmente la inclusion ó exclusion de electores ante el ayuntamiento de su municipio, y aducir las pruebas para apoyar su reclamacion, pudiendo del mismo modo alzarse de las providencias que sobre ellas recaigan ante las comisiones provinciales. El alcalde dará recibo de las solicitudes que se le entreguen.

Así los tribunales de justicia y demás autoridades judiciales ó administrativas, como los curas párrocos expedirán gratis, y en papel de oficio, cualquiera clase de documentos que necesite el elector ó vecino para acreditar su capacidad ó la incapacidad de otros electores.

¿Tienen derecho electoral los militares?—Segun la ley vigente, los electores del ejército y armada en el servicio activo no podrán votar en las elecciones provinciales ni municipales. En las de diputados á Cortes y compromisarios para las de senadores, votarán en el punto donde se hallen el dia de la eleccion, siempre que lleven dos meses de residencia continua. Acreditarán su derecho por medio de una cédula de filiacion talonaria, firmada por el jefe del distrito militar y del cuerpo á que pertenecan. Los jefes de los cuerpos remitirán con ocho dias de antelacion al alcalde del pueblo en que residan y hayan de votar sus subordinados relacion numerada y por orden alfabético de los mismos, y el libro talonario que corresponda á las cédulas que les haya entregado.

¿En qué forma debe hacerse la emision del voto?—Los votos se podrán emitir así en papeletas impresas como manuscritas, pero en papel precisamente blanco, y manifestando el elector que vota con *cédula duplicada*, cuando este caso se dé, conforme á la ley.

¿Qué solemnidades deben cumplirse antes de la eleccion, durante ella y despues de terminada?—En el primer dia de la eleccion, antes de constituirse la Mesa provisional, remitirá el alcalde del distrito municipal á los colegios y sus secciones los libros talonarios de los electores que correspondan á sus respectivas demarcaciones, y nota certificada de las incapacidades en que hayan incurrido los electores con posterioridad á su inclusion en el libro de censo electoral, acompañando los comprobantes.

Las Mesas electorales se colocarán de modo que los electores puedan ver el acto de entregar las papeletas y su introduccion en la urna, y los presidentes de las mismas cuidarán de que, tanto el salon en que se verifican las elecciones, cuanto las avenidas que conduzcan al local, estén siempre despejados, de manera que los votantes puedan entrar y salir fácilmente.

Nadie podrá entrar en el local de elecciones con palo, baston ni arma alguna, á excepcion de los electores que por impedimento fisico necesitan apoyarse en baston ó muleta, los cuales no podrán permanecer en el

local mas que el tiempo preciso para emitir su voto. El elector que infringiere este precepto, y advertido no se sometiere á las órdenes del presidente, será expulsado del local y perderá el derecho de votar en aquella eleccion. Las autoridades podrán, sin embargo, usar dentro del colegio el baston y demás insignias de su mando.

Debe fijarse al público el resultado del escrutinio parcial, que se hará cada día de eleccion.

Elecciones municipales.

Las elecciones de ayuntamiento se verificarán en las épocas marcadas en la ley municipal para su renovacion. En los casos de disolucion ó suspension de los ayuntamientos por quien corresponda, ó de reemplazo de alguno ó algunos de sus individuos por muerte ó incapacidad, la renovacion se hará precisamente por los electores y por los mismos trámites de su nombramiento.

La ley municipal dispone que esta clase de elecciones se hará en la primera quincena del undécimo mes del año económico, siendo *generales*. Se procederá á la eleccion *parcial* cuando medio año antes, por lo ménos, de las elecciones ordinarias, ocurran vacantes que asciendan á la tercera parte del número total de concejales.

Si las vacantes ocurrieren despues de aquella época y ascendieren al número indicado, serán cubiertas interinamente hasta la primera eleccion ordinaria, por los que la comision provincial designe de entre los que en épocas anteriores hayan pertenecido por eleccion al ayuntamiento; además de las elecciones municipales *generales y parciales*, los ayuntamientos se renovarán por mitad de dos en dos años, saliendo en cada renovacion los concejales más antiguos.

En los casos de renovacion ordinaria ó extraordinaria la eleccion de los concejales se hará por los mismos colegios electorales que hubieren hecho la de los salientes.

¿A quién corresponde la designacion de los *colegios y secciones* electorales?—A los ayuntamientos, cuidando de procurar á los electores la mayor facilidad en la emision de los votos.

¿Qué norma debe seguirse para fijar el número de los *colegios*?—La mayor ó menor cantidad de poblacion. En las que no pasen de 5.000 vecinos no podrá exceder el número de *colegios* al de *alcaldes* que correspondan á su ayuntamiento: en las que pasen de este número podrá el ayuntamiento dividir los *colegios* en tantas *secciones* cuantas sean necesarias para facilitar la libre emision del sufragio, siempre que el número no exceda al de *alcaldes* de barrio: cuando los *distritos* municipales correspondan á varios grupos de poblacion rural, los *colegios electorales* se dividirán en tantas *secciones* cuantos sean los grupos de poblacion rural que tengan *alcaldes* de barrio. En los pueblos que no excedan de 800 vecinos, se constituirá una sola Mesa (1).

Hecha la division en la forma prescrita, no podrá alterarse ni modificarse sino por justa causa y con la aprobacion de la comision provincial y del gobernador. La alteracion no se hará en ningun caso para las elecciones *parciales* ni *extraordinarias*.

(1) Téngase presente lo dicho antes acerca del número de concejales que debe votar cada colegio para facilitar la participacion de las minorias en la gestion municipal.

¿Qué número de concejales debe tener el ayuntamiento?—Será proporcional al de habitantes del distrito, arreglándose á la extensa escala que contiene la ley municipal, cuyo límite mínimo es el siguiente: hasta 500 residentes, un alcalde, ningún teniente, cinco regidores, un distrito y un colegio; y cuyo límite máximo es desde 100.000 residentes en adelante, pudiendo llegar á cincuenta concejales, un alcalde, diez tenientes y diez distritos, divididos en las secciones que fueren necesarias.

¿Cómo debe celebrarse la eleccion?—A la hora señalada para comenzar la eleccion, el presidente ocupará su puesto é invitará á los dos más ancianos y á los dos más jóvenes de los electores presentes, entre los que sepan leer y escribir, á tomar asiento en la mesa para ejercer las funciones de secretarios escrutadores *interinos*. Si hubiere reclamaciones sobre la edad que declaren tener estos secretarios, se estará á lo que resulte del libro talonario del censo electoral. Despues de haber tomado asiento los secretarios *interinos*, el presidente anunciará en alta voz: *Se procede á la votacion de la Mesa definitiva*. Esta se compondrá de un presidente y cuatro secretarios, elegidos por papeletas y por mayoría de votos.

Los electores se irán acercando uno á uno á la mesa, y presentando sus respectivas cédulas talonarias al presidente, le entregarán la papeleta doblada, con su voto; aquél la introducirá en la urna, diciendo: *Voto del elector Fulano de Tal*.

La cédula talonaria será sellada en el anverso, y devuelta al elector despues de haber anotado un secretario en la lista numerada la palabra *voto*. Si hubiere votado con cédula duplicada, se anotará así en la lista para hacer imposible la votacion del mismo elector con la primera, ó la de otro á su nombre.

¿Qué debe contener la papeleta de votacion?—Contendrá el nombre del elector del mismo colegio ó seccion á quien se designe para presidente, y separadamente, bajo el epígrafe de *secretarios*, los nombres de otros dos electores, tambien del mismo colegio ó seccion, para secretarios escrutadores. No podrán ser elegidos para estos cargos los electores que no sepan leer y escribir.

¿Cómo se verifica y con qué solemnidades el *escrutinio*?—Este se verificará sacando el presidente las papeletas de la urna una á una, leyéndolas en voz baja y entregándolas despues á uno de los secretarios, para que á su vez las lea en alta voz y las deposite sobre la mesa por el orden que van saliendo; los otros secretarios escrutadores llevarán simultáneamente nota de la votacion para presidente y secretarios, cuyas tres notas se confrontarán, y en caso de duda se cotejarán con las papeletas que se hayan ido dejando sobre la mesa. Todo elector tiene derecho á leer por sí ó á pedir que se vuelvan á leer, contar y confrontar las papeletas con las notas que hayan llevado los secretarios escrutadores. Terminada la lectura de las papeletas, dictadas las resoluciones sobre los casos dudosos y admitidas las protestas á que dieren lugar, se procederá al recuento de los votos despues de haber preguntado el presidente por tres veces consecutivas en alta voz: *¿Hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio?*

Proclamados presidente y secretarios de la Mesa á los que hubieren obtenido mayor número de votos, se quemarán las papeletas, salvo aquellas sobre que se hubiese hecho alguna reclamacion, y el presidente de la Mesa *interina* dará posesion á los elegidos, declarando constituido el colegio ó seccion electoral, y terminando así las operaciones del primer dia de eleccion, que se consignará en un acta. Constituidos al dia siguiente, á las nueve de la mañana, en el colegio ó seccion electoral el presidente y secretarios escrutadores elegidos, se declarará por el primero en alta voz que *se empieza la votacion para concejales*, la cual se arreglará á los trámites referidos.

¿Qué deben contener las papeletas para la votacion definitiva?—Conten-

drán tantos nombres como concejales corresponda elegir al colegio, y los que excediesen de este número serán nulos. En las secciones se votarán el mismo número que corresponda al colegio de que dependan.

A las cuatro en punto de la tarde se verificará el escrutinio, levantándose el acta consiguiente, á la cual se unirá una lista de los votantes y fijará otra antes de las nueve de la mañana del día siguiente en la parte exterior del colegio electoral, y otra lista con los nombres y votos de los elegidos.

Iguales operaciones se verificarán el tercer día, reuniéndose los individuos de las Mesas de las *secciones* en el siguiente, para practicar el escrutinio *general* del colegio, cuyo resultado debe constar también por acta.

¿Cómo debe verificarse el escrutinio *general* cuando haya más de un colegio?—En las poblaciones en que haya más de dos colegios electorales cada Mesa elegirá á pluralidad de votos, al terminar la votación del último día, un secretario escrutador que asista como comisionado al escrutinio general del distrito municipal.

¿Cuándo y cómo debe hacerse el escrutinio general en el distrito?—Se hará en todos los pueblos el segundo domingo del undécimo mes del año económico, á las diez en punto de la mañana, en las casas consistoriales, donde se reunirán todos los comisionados de los colegios con asistencia del ayuntamiento, presidido por el alcalde primero. Ni éste ni el ayuntamiento tendrán voto en este acto. Constituida de esta manera la junta general de escrutinio bajo la presidencia del alcalde primero, se nombrarán por mayoría de votos entre los comisionados, los secretarios escrutadores, y la junta de escrutinio, después de haber hecho los secretarios la confrontación de las actas y el recuento de los votos, examinará todas las reclamaciones de los electores, procediéndose enseguida á la proclamación de los concejales que resulten con mayoría relativa de votos, hasta completar el número de los que corresponda elegir; en el caso de empate entre los electos decidirá la suerte los que han de quedar de concejales; hecha la proclamación de concejales electos por cada colegio, se hará la de los que componen el municipio ó ayuntamiento del pueblo, levantando de todo un acta expresiva.

Elecciones provinciales.

¿Cómo deben hacerse?—Por partidos judiciales. Cada partido judicial elegirá tres diputados provinciales. Si los que por esta regla deben ser nombrados en la provincia no llegan al número de 20, se aumentará el de los elegibles hasta completarse, en los partidos que tengan mayor población. Si los que corresponda elegir á la provincia exceden de 30, se reducirá el número de los elegibles en los partidos que tengan menor población. El Gobierno de S. M. publicará oportunamente el número de diputados provinciales que debe nombrar cada partido judicial con arreglo á esta disposición.

¿Cuál debe ser la capital del distrito electoral?—El pueblo que sea cabeza de partido judicial.

¿Cuántas clases hay de elecciones provinciales y cuándo deben comenzar?—Unas son *ordinarias* y otras *extraordinarias*: las primeras son las que periódicamente previene la ley que se verifiquen en la primera quincena del tercer año económico, debiendo tener lugar en los mismos *colegios* y *secciones* establecidos para las municipales. Las *extraordinarias* son las que tienen lugar por renuncia ú otra clase de vacantes, que hagan necesaria su provision y el reemplazo de los elegidos.

¿A quién corresponde convocar las elecciones provinciales?—La convocatoria para las elecciones ordinarias y extraordinarias, que deban verificarse con arreglo á las leyes, corresponde hacerla al gobierno, quien la anunciará en los cinco dias siguientes á la orden ó acuerdo en que se funden, debiéndose verificar en un plazo que no baje de diez dias ni exceda de veinte.

¿En qué forma deben practicarse estas elecciones?—El nombramiento de Mesa interina, el de la definitiva y todos los demás procedimientos hasta verificarse el escrutinio se ajustarán á lo establecido para las elecciones de concejales. Los demás trámites hasta la proclamacion del diputado en la junta de segundo escrutinio, serán iguales á los establecidos para la eleccion de diputados á Córtes, de que nos ocuparemos.

Los diputados electos presentarán sus actas en la secretaría de la Diputacion provincial ocho dias antes del designado para la apertura de sus sesiones, constituyéndose en este dia la Diputacion.

Elecciones para diputados á Córtes (1).

Son generales y parciales. Las primeras tienen lugar en toda la nacion. Las segundas en casos concretos.

¿Cómo deben hacerse estas elecciones y en dónde?—Del mismo modo que las provinciales, serán por *distritos* y *unipersonales*. Cada provincia se dividirá en tantos *distritos* electorales cuantos sean los diputados que deba elegir segun su poblacion. Tendrán lugar en los mismos colegios electorales y sus secciones establecidas para las elecciones de los municipios el dia señalado por el gobierno en el decreto de convocatoria.

¿Quién debe fijar la demarcacion de los *distritos* y bajo qué tipo de poblacion debe hacerse?—La demarcacion de los *distritos* será objeto de una ley, y no podrá variarse sino por medio de otra, arreglándose al número de 40.000 almas á que corresponde un diputado como minimum, segun dispone el art. 63 de la Constitucion, y teniendo en cuenta la distancia de los pueblos que la formen con el de la cabeza de distrito, procurando en lo posible para todos los puntos de su circunferencia un radio próximamente igual, y no pudiéndose interponer á menos distancia de este radio pueblos que formen parte de otros distritos.

Será cabeza de distrito la capital del partido judicial más céntrico de la demarcacion.

¿En qué forma y con qué requisitos debe llevarse á efecto la eleccion?—El nombramiento de la Mesa interina, el de la definitiva y todos los demás procedimientos hasta la redaccion del acta se ajustarán á lo establecido para las elecciones de concejales. Del acta de eleccion de cada dia se sacarán inmediatamente dos certificaciones literales que autorizarán los secretarios de la Mesa con el V.º B.º del presidente, y remitirán la una al gobernador civil de la provincia por el correo más inmediato, y la otra al alcalde

(1) Ya hemos indicado varias veces que la ley electoral de 20 de Agosto de 1870 para diputados á Córtes, no habia sufrido alteracion al presente; pero tambien hemos dicho que esta próxima á modificarse y acaso se modifique en la presente legislacion, si llega á ser ley el proyecto presentado, al efecto, por el gobierno, en que se restringe el derecho electoral *activo*. Para que nuestros lectores puedan formar una ligera idea de las principales modificaciones que introduce dicho proyecto en la legislacion vigente para las elecciones de diputados, insertamos al final de este tratado, por *via de apéndice*, algunos párrafos de una reseña publicada en un diario de esta capital, en que se indican convenientemente aquellas modificaciones.

de la cabeza del distrito electoral. También comunicarán los presidentes de Mesa al ministro de la Gobernación y al gobernador de la provincia por el medio más rápido, al terminar el escrutinio del día, un extracto de su resultado. A cada acta se unirá una lista de los electores que hayan tomado parte en la elección, la cual se sacará de la numerada en que hayan sido anotados los votos.

¿Cuándo debe hacerse, por quiénes y con qué solemnidades el escrutinio general del distrito?—A los tres días de concluida la elección en los colegios electorales se instalará en el pueblo cabeza de distrito la junta de escrutinio del mismo, compuesta de un secretario comisionado por cada colegio electoral, el que será elegido por la Mesa después de concluida la votación del último día. Las Mesas de las secciones se reunirán con la del colegio de que dependen para hacer la elección de este comisionado. Los secretarios comisionados llevarán á la junta de escrutinio del distrito copias literales certificadas de las actas de los tres días de elección de sus colegios y secciones y de los documentos que se hayan presentado. El juez de primera instancia del pueblo cabeza de distrito, presidirá, pero sin voto, la junta de escrutinio del mismo.

Constituida la Mesa á las diez de la mañana en el local destinado al efecto, se empezará el escrutinio con la lectura de los artículos de la ley electoral, referentes al acto. Enseguida se presentarán por el alcalde de la cabeza de distrito las certificaciones de las actas de los colegios electorales que se le hubiesen remitido y las que trajesen los comisionados, deducidas de las mismas actas. Unos y otros documentos serán escrupulosamente confrontados por cuatro secretarios escrutadores, elegidos en el acto por los comisionados de la junta de escrutinio. El presidente, con los cuatro secretarios, hará el recuento y resumen de los votos obtenidos por cada candidato.

¿Qué facultades y limitaciones impone la ley á la junta de escrutinio?—No podrá anular ningún acta ni voto; sus atribuciones se limitan á efectuar, sin discusión, el recuento de los votos emitidos en los colegios y secciones electorales, ateniéndose estrictamente á los que resulten computados por sus respectivas Mesas. Si sobre el recuento ocurriese alguna cuestión la decidirá la junta de escrutinio, por mayoría de votos.

¿Quién debe hacer la proclamación del elegido?—El juez de primera instancia, como presidente de la junta de escrutinio, debiendo proclamar diputado al candidato que hubiese obtenido mayor número de votos.

Del acta de este escrutinio, que original se archivará en la secretaría de ayuntamiento con las certificaciones remitidas por los alcaldes y presentadas por los comisionados, se sacarán dos copias; una se enviará al gobernador civil de la provincia, y otra al diputado proclamado, en la cual constará el número de votantes, los votos de los candidatos, las protestas y sus relaciones y la proclamación. Esta certificación constituye la credencial para poder presentarse el interesado en el Congreso de los diputados.

Elecciones parciales.

¿En qué casos deben verificarse?—En los siguientes: 1.º, cuando el diputado renuncie su cargo expresamente; 2.º, cuando se haya hecho incompatible con arreglo á las disposiciones de esta ley; 3.º, cuando ocurra su muerte; 4.º, cuando el Congreso declare la nulidad de una elección, y 5.º, en las vacantes que dejen las elecciones múltiples. Se entiende que renuncia el cargo el diputado electo que no presente su credencial en el

Congreso á los treinta dias de haber sido proclamado. Se exceptúa el caso de imposibilidad alegada oportunamente.

¿Cuándo deben convocarse, en qué forma y con qué procedimiento han de tener lugar?—El gobierno mandará proceder á elecciones parciales por medio de decreto, que publicará dentro de los diez dias de ocurrir la vacante, convocando á los colegios para que se haga la eleccion á los veinte dias de la fecha de la convocatoria. Las elecciones parciales se harán por los mismos trámites y procedimientos que las generales.

Elecciones para senadores.—Eleccion de compromisarios.

Ya hemos manifestado que los senadores se eligen por medio de *compromisarios*, empleando el sistema indirecto de las elecciones.

¿Quiénes son los *compromisarios*?—Las personas elegidas por sufragio para que, en union de la diputacion provincial, elijan á su vez, por igual medio, los senadores. La eleccion de compromisarios para senadores se verificará al mismo tiempo que la de diputados á Córtes, cuando ambos Cuerpos colegisladores hayan sido disueltos, ó cuando se proceda á la renovacion parcial del Senado habiendo sido disuelto el Congreso.

¿Cuántos *compromisarios* deben elegirse, y qué circunstancias deben reunir?—Cada distrito municipal elegirá por sus electores, al tenor de esta ley, un número de compromisarios igual á la sexta parte del de concejales que deban componer el ayuntamiento: los distritos municipales donde el número de concejales no llegue á seis, elegirán, sin embargo, un *compromisario*: sólo serán elegibles para este cargo los electores del distrito que sepan leer y escribir.

¿Cómo se practica la eleccion?—Se emplea el mismo procedimiento establecido para las elecciones de concejales, debiendo remitirse copia literal del acta á la diputacion provincial.

Elecciones parciales para senadores.

La ley electoral, conforme con la Constitucion, establece que la renovacion parcial del Senado se hará por cuartas partes cada vez que se verifiquen elecciones generales de diputados á Córtes; y al efecto, al dia siguiente de constituido el Senado se procederá de la manera más solemne, en sesion pública, al sorteo, por provincias y entre sus senadores, del número que del uno al cuatro toque á cada senador. El Senado pondrá en conocimiento del gobierno, á fin de que lo comunique á las diputaciones provinciales, el resultado del sorteo y las vacantes que ocurran, para que las tengan en cuenta en las épocas de renovaciones parciales.

¿Qué senadores dejarán de serlo por *renovacion*?—En la primera todos aquellos que hubieran obtenido el número uno en el sorteo, dentro del cupo relativo á cada provincia; en la segunda renovacion los del número dos, y así sucesivamente hasta que hayan dejado de ser senadores todos los que lo eran al tiempo de verificarse el sorteo; en cuyo caso, de no haber disolucion total del Senado, la renovacion se irá haciendo por el turno que viene establecido.

¿Cómo se proveen las vacantes naturales?—No se reemplazarán hasta el período ordinario de la renovacion parcial. Cuando llegue el dia marcado para cubrir las vacantes procedentes de ésta se llenarán en cada pro-

vincia todas las demás hasta cubrir el cupo de los cuatro, tomando cada elegido el número correlativo que correspondiera á su antecesor para el turno de renovacion.

Sancion penal relativa á los actos electorales.

La citada ley castiga especialmente las *falsedades*, las *coacciones*, las *amenazas* y *faltas* de los funcionarios públicos y las *arbitrariedades*, *abusos* y *desórdenes* cometidos con motivo de las elecciones. Esta penalidad está en relacion con la sancionada por el Código.

¿Quiénes cometen el delito de *falsedad electoral*?—1.º, los funcionarios que con el fin de dar ó quitar el derecho electoral alteren las listas electorales, el libro del censo electoral, el talonario ó las cédulas sacadas de este; 2.º, los que entregaren á los electores cédulas falsas; 3.º, los que aplicaren indebidamente votos á favor de un candidato para cualquiera de los cargos que son objeto de la eleccion; 4.º, el que á sabiendas y con manifiesta mala fé, altere la hora en que deben comenzar las elecciones en cada día; 5.º, los que, estando incluidos en el padron, lista electoral, libro talonario y provistos de la correspondiente cédula, voten sabiendo que están inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos, ó comprendidos en cualquiera de los casos que les incapacitan para ser electores; 6.º, el que siendo elector vote dos ó más veces en la misma ó distinta Mesa en una eleccion, ó una sola vez tomando el nombre de otro para votar, usando de cédula ajena, aunque tenga el mismo nombre; 7.º, el presidente y secretarios que admitan á votar dos ó más veces á un mismo elector en la propia eleccion, y los que le admitan, aunque sólo sea una vez, sabiendo que se halla incapacitado para ejercer el derecho electoral; 8.º, el que al formarse el padron de vecindad se suponga con más ó menos edad de la que realmente tenga, ya para adquirir el derecho electoral, ó ya para obtener las ventajas de la edad, siempre que despues tome parte en la eleccion y se aproveche de la preferencia que para ser secretario escrutador interino se concede á la edad; 9.º, el encargado de formar el padron y de extender las cédulas que desfigure maliciosamente el nombre ó apellido de algun vecino, con el fin de privarle del derecho electoral; 10, el elector que con el propósito de ser nombrado secretario escrutador interino falte á la verdad cuando al ser preguntado por el presidente, al constituirse la Mesa, se supusiere con distinta edad de la que realmente tenga, aun cuando aquella resulte consignada en el padron, libro talonario ó cédula; 11, los jefes militares ó de marina que provean maliciosamente de cédula declaratoria del derecho electoral á alguno de sus subordinados, que no le tenga, y 12, los que cometan cualquiera otro acto de falsedad que no esté previsto en los números anteriores, y que se refiera á procedimientos ó actos electorales.

¿Quiénes cometen los delitos de *amenazas* y *coacciones*?—1.º, las autoridades civil, militar ó eclesiástica, ó cualquiera otra clase de funcionarios públicos que obliguen á los electores que de ellos dependan, ó que de cualquier modo les estén subordinados, haciendo uso de medios ilícitos, á dar ó negar su voto á candidato determinado; 2.º, los que con dicterios ó cualquiera otro género de demostraciones violentas intentan coartar la libertad de los electores: si los dicterios ó demostraciones se refiriesen á las opiniones ó creencias religiosas atribuidas á los candidatos ó electores, la pena se impondrá siempre en el grado medio al máximo, y la cualidad de eclesiástico en el ofensor ú ofendido será además reputada como circunstancia agravante, y 3.º, conduciendo por medio de agentes ó dependientes

de la autoridad civil, militar ó eclesiástica á los electores para que emitan sus votos.

La penalidad es distinta, segun que las amenazas ó coacciones sean *directas* ó *indirectas*.

Son *directas* las que por su forma ó medios de ejecucion aparecen claras, y en relacion inmediata con la persona del amenazado. Y cometen las *indirectas*: 1.º, los que recomienden con dádivas ó promesas á candidatos determinados como los únicos que pueden ó deben ser elegidos; 2.º, los que con dádivas ó promesas combatan la eleccion de candidatos determinados, los funcionarios públicos que promuevan expedientes gubernativos de denuncias, atrasos de cuentas, propios, montes, pósitos ó cualquiera otro ramo de la administracion, desde la convocatoria hasta que se haya terminado la eleccion; 4.º, todo funcionario, desde el ministro de la corona inclusive, que haga nombramientos ó separaciones, traslaciones ó suspensiones de empleados, agentes ó dependientes de cualquier ramo de la administracion, ya correspondan al Estado, á la provincia ó al municipio, en el período desde la convocatoria hasta despues de terminada la eleccion, siempre que tales actos estén fundados en causa legitima y afecten de alguna manera á la seccion, colegio, distrito, partido judicial ó provincia en donde la eleccion se verifique; 5.º, los que valiéndose de persona reputada como criminal solicitaren por su conducto á algun elector para obtener su voto en favor ó en contra de candidato determinado, y el que se prestara á hacer la intimidacion; 6.º, los que por medio del soborno intenten adquirir votos en su favor ó en el de otro candidato, y el elector que reciba dinero, dádivas ó remuneracion de cualquiera clase para votar ó negar su voto á candidato ó candidatos determinados.

¿Qué infracciones castiga la ley electoral en los funcionarios que intervienen en las elecciones?—Todas las faltas de cumplimiento de las obligaciones que les impone, y solemnidades que establece la referida ley, en todo lo que se refiera á los actos electorales, quedando sujetos en lo demás al Código penal. El art. 173 de aquélla enumera con extension los funcionarios y las faltas corregibles, cuyo artículo no debemos insertar por su mucha extension, remitiéndonos á él.

¿Quiénes pueden acusar los delitos electorales?—Todos los ciudadanos que no tengan prohibicion legal, porque la *accion* correspondiente es *popular*.

¿Cuánto dura dicha *accion*?—Sólo podrá ejercitarse dentro de los dos meses siguientes á la aprobacion ó anulacion definitiva de las actas referentes á las elecciones en que se hayan cometido los delitos.

El acusador no se obligará á prestar otra fianza que la de *estar á derecho* y sostener su *accion* hasta que recaiga sentencia ejecutoria, y todas las actuaciones se entenderán de oficio, y en papel de esta clase, sin perjuicio del reintegro en su dia por el acusador ó acusado que hubiesen sido condenados.

¿Ante qué tribunales deben sustanciarse las denuncias?—El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de las causas que en virtud de esta ley se entablen contra los gobernadores de provincia ú otras autoridades ó funcionarios públicos de igual ó superior categoria; las audiencias de los respectivos territorios, de las que se formen contra los diputados provinciales y jueces de primera instancia, y los tribunales inferiores, de las que se promuevan contra los alcaldes y demás empleados públicos de menor categoria que los ya mencionados, ó contra cualesquiera otras personas que, por razon de sus cargos, intervengan en materia de elecciones.

No nos ocuparemos en esta seccion de las leyes *municipal* y *provincial*, no obstante su carácter de *orgánicas*, porque este es más bien administrativo, y su estudio pertenece á otro tratado ó rama de derecho.

PROYECTO DE LEY ELECTORAL

PRESENTADO POR EL GOBIERNO A LAS CORTES.

En los párrafos siguientes, que tomamos de un diario político por no tener á la vista el proyecto de ley electoral para diputados á Cortes, se indican las principales modificaciones que aquél pretende introducir en el derecho vigente, de las cuales pueden deducir nuestros lectores el espíritu y la tendencia de la reforma proyectada, descollando en primer término el principio de restriccion del sufragio, cuyo derecho reconocerá por base *el censo y la capacidad*

Apéndice del derecho político.

«El número y extension de los distritos electorales sufren en el proyecto modificaciones esencialísimas. Por el momento y mientras una ley especial fija la division y demarcacion de todos los distritos y secciones de la monarquía, con arreglo al resultado del último censo de poblacion, regirá la division establecida por la ley vigente, exceptuando la capital, Barcelona y Sevilla, que formarán un solo distrito con su radio municipal, y elegirá 8, 5 y 4 diputados, respectivamente, agrupándose tambien otras poblaciones que se determinan expresamente, para formar un solo distrito y elegir un número fijo de diputados.

Los demás distritos nombrarán un solo diputado.

Los distritos se subdividirán en las secciones necesarias para facilitar el voto, no pudiendo comprender cada una ménos de 400 electores ni más de 500 en los distritos rurales, y de 1.000 en los urbanos. La ley determinará el número y residencia de las secciones, y sólo por una ley podrán variarse.

Las condiciones necesarias para ser elegido diputado son las mismas que en la actualidad; pero al hablar de las incapacidades se establecen algunas nuevas, en virtud de las cuales los ingenieros de los distritos, los presidentes de mesas electorales y los contratistas de obras ó servicios municipales ó provinciales quedan tambien incapacitados, y la incapacidad durará hasta un año despues de haber terminado la causa que la producía.

En cualquier tiempo en que un diputado se inhabilite, despues de haber sido admitido en el Congreso, perderá su cargo.

El derecho electoral queda, como hoy, restringido á favor de los contribuyentes por cuotas de 25 y 50 pesetas de contribucion territorial ó industrial, y á las capacidades contenidas en la ley vigente, si bien se amplía en favor de algunas contadas clases.

En los procedimientos para adquirir ó perder el derecho electoral, se hacen tambien notables innovaciones.

El derecho electoral y la consiguiente inscripcion en el censo, solamente podrán obtenerse y perderse en virtud de declaracion judicial hecha á instancia de parte legítima por los trámites que la ley establece. Sólo los jueces de primera instancia, con exclusion de todo fuero, son competentes para hacer esas declaraciones, las cuales, una vez consentidas, se comunicarán por conducto de los gobernadores á las comisiones del censo para su anotacion correspondiente.

Las reclamaciones de inclusion y exclusion, antes de ser sustanciadas, se harán públicas en los *Boletines oficiales* de las provincias. Se fijan plazos perentorios é improrogables para esos juicios y una tramitacion análoga á la de los interdictos. Haya ó no oposicion de parte, se dará siempre traslado al ministerio fiscal. La apelacion se interpone ante las audiencias.

Los colegios se constituirán de la manera siguiente:

Diez dias antes de la eleccion, el ayuntamiento cabeza del distrito anunciará por edictos los locales en que ha de constituirse cada uno de los colegios. Las votaciones se harán bajo la presidencia del alcalde del ayuntamiento, cabeza de cada seccion, asociado del número de interventores que corresponda, los cuales serán nombrados directamente por los electores.

La designacion de los interventores para cada mesa electoral se hará por escrito en cédulas, que firmarán los electores de las respectivas secciones que quieran suscribirlas. En cada una de estas cédulas no se podrá proponer para dicho cargo mas que dos personas, que han de ser precisamente electores de la misma seccion, y saber leer y escribir. Si resultaren más de dos los designados en una cédula, sólo se tendrá por propuestos á los dos primeros.

En la misma cédula se podrá proponer tambien á dos *suplentes* para reemplazar á los interventores en ella designados que por cualquier motivo no puedan ejercer el cargo.

El domingo inmediato anterior al señalado para la eleccion, la comision inspectora del censo electoral se constituirá en sesion pública á las once en punto de la mañana en el local destinado para la instalacion del colegio de la cabeza del distrito, y anunciará los nombres, que se escribirán en el acta, de los que han de presidir las mesas de todas las secciones del mismo distrito. Acto seguido se recibirán por la comision los pliegos de las propuestas para interventores que, conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, fueron entregados por los electores.

A las doce en punto del mismo dia anunciará el presidente que se va á proceder á la apertura de los pliegos presentados, y tendrá ésta efecto empezando por los de la cabeza del distrito y siguiendo por los de las secciones, segun el órden de su numeracion correlativa. El presidente abrirá y leerá los pliegos, y el secretario escribirá en el acta lo que de ellos resultare.

Terminadas estas operaciones, los interventores proclamados serán llamados para aceptar en el acto el cargo.

De todo ello se levantará acta, cuyo original se archivará, expidiéndose copia literal certificada á la secretaria del Congreso y certificacion parcial á cada uno de los vecinos, en la cual se designarán los presidentes é interventores nombrados para constituir las respectivas mesas.

En toda convocatoria para eleccion de diputados á Córtes, sea ésta general ó parcial, se señalará siempre un domingo para las votaciones.

La votacion se hará simultáneamente en todas las secciones cabeza de distrito en el domingo designado, comenzando á las ocho en punto de la mañana, y continuando sin interrupcion hasta las tres de la tarde, en que se declarará definitivamente cerrada y comenzará el recuento de los votos emitidos.

En los distritos á que corresponda elegir tres diputados, cada elector no podrá dar su voto mas que á dos candidatos, pero en una sola papeleta.

En los distritos que deban elegir cuatro ó cinco diputados, cada elector sólo podrá dar su voto en la misma forma á tres candidatos á lo más.

De igual manera sólo podrá cada elector votar en su papeleta á cuatro candidatos, si fueren seis los diputados correspondientes al distrito, á cinco candidatos si fueren siete los diputados, y á seis candidatos si fueren ocho los diputados.

Del acta de la votacion se enviará copia literal certificada por los indivi-

duos de la Mesa á la secretaria del Congreso, la cual se entregará á la administracion ó estafeta más cercana en pliego cerrado y sellado. El administrador de correos dará recibo, haciendo constar en él el día y hora de su entrega.

El escrutinio general se hará el domingo siguiente, y bajo la presidencia del juez de primera instancia, el cual no podrá ser sustituido por el municipal aun cuando ejerza interinamente las funciones de aquél.

La junta de escrutinio no podrá anular ninguna acta ni voto. En casos de empate, el presidente proclamará *diputados presuntos* á los candidatos empatados, reservándose el Congreso la resolucion definitiva.

Para los distritos que con arreglo á esta ley deben elegir tres ó más diputados, solamente se entenderá que hay vacante en su representacion en las Córtes cuando por cualquiera causa faltaren dos por lo ménos de sus diputados.

En estos casos, si fuesen dos los diputados que haya que elegir, no podrá cada elector votar mas que á un solo candidato.

Además de los que resulten elegidos por los procedimientos anteriores, serán tambien admitidos y proclamados diputados por el Congreso los candidatos que, sin haberlo sido como electos por ningun distrito electoral, reclamen su admision fundados en haber obtenido en diversos distritos y en eleccion general, votos en minoria ó empate, respecto á cada distrito, que acumulados den un total de 10.000 por lo ménos. El derecho de ser admitido diputado por esta votacion acumulada, estará limitado por las condiciones siguientes:

1.^a No podrá reclamar este derecho el candidato que ejerciere ó hubiese ejercido en propiedad ó comision cualquier cargo público de real nombramiento, incluso el de ministro de la corona, desde el día de la convocatoria hasta el de la eleccion inclusive.

2.^a No serán acumulables en ningun caso para los efectos de este artículo los votos obtenidos en distritos á que corresponda elegir tres ó más diputados, ni tampoco los que obtuvieren en elecciones parciales, cualquiera que fuese el número de unos ú otros.

3.^a El candidato que pretenda este derecho ha de presentar su reclamacion en el Congreso en el término perentorio de treinta días naturales despues de su constitucion definitiva.

Pasado este término, no se admitirá reclamacion alguna de esta clase.

4.^a Para admitir á un diputado por el derecho que concede este artículo, deberá proceder siempre la aprobacion por el Congreso de todas las actas de eleccion de que resulten los votos que se acumulen, y la aprobacion además especial de la computacion de los mismos votos acumulados, segun el resultado de dichas actas.

5.^a No podrán ser admitidos por este concepto en cada Congreso más de 10 diputados, haciendose la proclamacion de los 10 que resultaren con mayor número de votos entre los que lo hubiesen solicitado dentro del plazo prefijado.

En los casos de eleccion empatada, si uno solo de los candidatos empatados tuviesen aptitud legal para ser diputado, será proclamado y admitido desde luego una vez probada la eleccion.

Tambien será admitido desde luego, y proclamado por el Congreso, el que resulte legalmente elegido si hubiese en el acta protestas que aparezcan justificadas contra la votacion del otro ú otros candidatos empatados.

A falta de estas diferencias, y en igualdad de todas las circunstancias, decidirá la suerte ante el Congreso quién ha de ser proclamado diputado entre los candidatos empatados, y si el empate fuese de distrito á que solo corresponda elegir un diputado, se declarará nula la eleccion y vacante el distrito para los efectos consiguientes.»

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.

ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL Y PRINCIPIOS ELEMENTALES DE PROCEDIMIENTOS.

Tribunales ordinarios.

La antigua organizacion de los tribunales ordinarios españoles ha sido modificada profundamente por la ley provisional organica publicada el 20 de Setiembre de 1870. Contiene ésta el orden jerárquico completo de los tribunales; está fundada en los principios políticos de la Constitucion de 1869, y relacionada con la ley de Enjuiciamiento criminal publicada en Diciembre de 1872, cuyas circunstancias bastan para que sigamos el método expositivo que ha adoptado el legislador, tomando sólo del antiguo derecho las reglas, los principios y las definiciones que no hayan sido derogadas ó modificadas por la nueva ley, y teniendo en cuenta las disposiciones posteriores publicadas hasta el presente que afectaron á dichas leyes y rigen en la actualidad.

Organizacion de los tribunales.

462

Los jueces y tribunales de justicia, en todos sus diferentes grados y jerarquias, constituyen el tercer poder, cuya existencia política reconocia la Constitucion de 1869 con el nombre de poder judicial, nombre que no emplea la de 1876, que es la vigente, pero que tampoco rechaza.

Dichas entidades tienen la potestad de administrar justicia en nombre del rey, aplicando las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, únicas funciones que les está permitido ejercer, por lo cual no podrán mezclarse, directa ni indirectamente, en asuntos peculiares á la administracion del Estado, ni dictar reglas ó disposiciones de carácter general, ni aprobar, censurar ó corregir la aplicacion ó interpretacion de las leyes, hecha por sus inferiores en el orden jerárquico, sino cuando administren justicia en virtud de las apelaciones ó de los recursos, sin perjuicio de las prevenciones de sus superiores.

¿Qué se entiende por jueces?—Comprendiendo bajo esta palabra todos los funcionarios que, individual ó colectivamente, están encargados de la administracion de justicia, puede decirse que son las personas constituidas

(1) Los otros dos, son, el ejecutivo (la corona y los ministros) y el legislativo (las cámaras y la corona).

Lp 12

en autoridad, con jurisdicción bastante para administrar aquélla en *materias civiles y criminales*. Llámase *magistrados* los que constituyen las *audiencias* y el Tribunal Supremo de Justicia. A éstos antes se les llamaba *ministros* de dicho tribunal. Según la nueva ley, bajo la denominación general de *Jueces* se comprenden los municipales, los de instrucción y los que componen los tribunales de partido (1), con inclusión de los presidentes de éstos y los suplentes de cada una de las clases expresadas: y bajo la general de *Magistrado* se comprenden los que administran justicia en las audiencias y en el Tribunal Supremo, en plazas de número ó como suplentes, y por lo tanto, los presidentes y presidentes de Sala de dichos tribunales están también incluidos en dicha denominación.

¿Qué prohibiciones impone la nueva ley á los individuos y corporaciones del poder judicial?—Además de las indicadas, no podrán los jueces, magistrados y tribunales: 1.º, aplicar los reglamentos generales, provinciales ó locales, ni otras disposiciones, de cualquiera clase que sean, que estén en desacuerdo con las leyes; 2.º, dar posesión de sus cargos á los jueces y magistrados cuyos nombramientos no estuvieren arreglados á la Constitución de la monarquía, á la ley orgánica ó á otras especiales; 3.º, dirigir al poder ejecutivo, á funcionarios públicos ó á corporaciones oficiales, felicitaciones ó censuras por sus actos; 4.º, tomar en las elecciones populares del territorio en que ejerzan sus funciones más parte que la de emitir su voto personal; esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplirán los deberes que, por razón de sus cargos, les impongan las leyes; 5.º, mezclarse en reuniones, manifestaciones ú otros actos de carácter político, aunque sean permitidos á los demás españoles; 6.º, concurrir en cuerpo, de oficio, ó en traje de ceremonia á fiestas ó actos públicos, sin más excepción que cuando tenga por objeto complimentar al monarca ó al regente del reino, ó cuando el gobierno expresamente lo ordenare.

¿En qué funda su independencia el poder judicial?—En la *responsabilidad é inamovilidad* de los individuos que lo componen. En su consecuencia, los jueces y magistrados responderán civil y criminalmente de las infracciones de las leyes que cometan, en los casos y en la forma que éstas prescriban. No les eximirá de responsabilidad alegar su obediencia á las disposiciones del poder ejecutivo, en lo que sea contrario á derecho. Por eso no podrá el gobierno destituirlos, trasladarlos de sus cargos, ni jubilarlos, sino en los casos y en la forma que establecen la Constitución de la monarquía y las leyes. En ninguno podrá suspenderlos.

Antes de entrar á describir la jerarquía judicial, conviene tener idea de lo que es ó se entiende por *jurisdicción* y por *fuerzo*, para comprender muchas de las palabras de la ley y el sentido de varios de sus pensamientos, cuyas palabras, si bien más importantes en el derecho antiguo, no son completamente inútiles en el lenguaje moderno.

¿Qué es *jurisdicción*?—Llámase *jurisdicción* á la facultad que tienen los jueces y tribunales para dirimir las contiendas que se suscitan entre particulares, terminándolas, previa la tramitación que corresponda, por una decisión final que recibe el nombre de *auto* ó *sentencia*, según la importancia del asunto. A fin de poder ejercer la jurisdicción tienen los jueces y tribunales fuerza coactiva para llevar á efecto lo juzgado, á la cual se dá el nombre de *imperio mero*, si se refiere á la jurisdicción criminal, y de *imperio mixto*, si es relativa á la jurisdicción civil.

La *jurisdicción* es *ordinaria* y *especial* ó *privilegiada*; *propia* y *delegada*;

(1) Estos tribunales, que forman una de las bases de la organización dada al poder judicial por la ley de 20 de Setiembre de 1870, no han llegado á establecerse, porque además de cambiar profundamente la organización anterior, su establecimiento requería muchos trabajos estadísticos y geográficos, y un considerable aumento en el presupuesto de gastos.

contenciosa ó voluntaria. Llámase ordinaria la de negocios y personas, salvas algunas excepciones, que constituyen el objeto de la competencia de las jurisdicciones privilegiadas; La primera es la regla general, y la segunda la excepción que la modifica. Más adelante veremos cómo se definen las demás.

¿Qué se entiende por *fuero*?—Dáse el nombre de *fuero* á la jurisdicción á que está sujeta la persona contra quien se litiga, ó la cosa acerca de la cual se cuestiona. Divídese en *comun* y *privilegiado*. El *comun* nace de la jurisdicción ordinaria; el *privilegiado* de las jurisdicciones especiales, y puede ser *eclesiástico* y *militar*.

Determinan el *fuero* las personas de los litigantes, las cosas litigiosas y el pueblo en que tiene lugar el hecho, ó á que pertenecen aquellas. El estado, jerarquía ó profesion de las personas causan el *fuero* llamado *personal*. La naturaleza de las cosas, da origen al *fuero real*, ó por razon del negocio controvertido. El lugar del domicilio del demandado, el en que se celebra el contrato ó se comete el delito, son tambien causas determinantes y generalmente aceptadas, de *fuero* ó competencia.

El *fuero* se divide en *activo*, *pasivo* y *atractivo* ó de atraccion. Es *activo*, cuando el litigio se ventila en el *fuero* del demandante. Es *pasivo*, cuando debe ventilarse en el del demandado. Y *atractivo*, cuando alguno de los comprendidos en el procedimiento, por más que estén exentos de la jurisdicción que conoce en el asunto, se ven obligados á litigar ante ella, por comprenderles la naturaleza del hecho ó causa del procedimiento.

264 Tribunales de la jurisdicción ordinaria.

¿Cómo se divide el territorio de la Península para los efectos judiciales, segun la ley orgánica judicial, y qué jueces ó tribunales debe haber en cada territorio?—Se divide en *distritos*; éstos en *partidos*, y éstos en *circunscripciones*, subdivididas á su vez en *términos municipales*. En cada término municipal habrá uno ó más jueces municipales; en cada circunscripción, un juez de instruccion; en cada partido, un tribunal de partido; en cada distrito, una audiencia; en la capital de la monarquía, el Tribunal Supremo. Tambien debian señalarse algunas poblaciones, segun la ley orgánica indicada, en las cuales habian de constituirse cuando fuere procedente y en el tiempo determinado por la misma: 1.°, salas ordinarias de audiencia, para juzgar de las causas por delitos en que las audiencias debian conocer con intervencion del Jurado; 2.°, salas extraordinarias de Audiencia, para juzgar de las causas por delitos comunes que, siendo ordinariamente de las atribuciones de las audiencias, sin intervencion del Jurado, debian verse en tribunales presididos por un magistrado, y compuestos de él y dos jueces de tribunales de partido, en los casos que establece la ley. La designacion de estas poblaciones no constituia una division judicial especial; ni alteraba el orden jerárquico de los jueces, de los magistrados, ni de los tribunales. Mas suspendida la ley de Enjuiciamiento criminal por decreto de 3 de Enero de 1875, en la parte relativa al Jurado y al juicio oral y público, es evidente que lo preceptuado en la orgánica de Tribunales respecto á la constitucion de las expresadas salas de justicia en determinadas poblaciones para los objetos indicados, está tambien en suspenso.

Componen el *poder judicial*, en el orden gerárquico de menor á mayor autoridad, los jueces y tribunales siguientes: *jueces municipales*, *jueces de instruccion*, *tribunales de partido* (1), *audiencias* y el *Tribunal Supremo de Justi-*

(1) Las funciones de los jueces de instruccion, así como la mayor parte de las de los tribunales de partido, las desempeñan actualmente los jueces de primera instancia.

cía. Tenemos, pues, que han desaparecido de la nomenclatura y de la escala judicial los antiguos juzgados de primera instancia (1), que los de paz han recibido el nombre de juzgados municipales, y que son de nuevo origen los jueces de instrucción y los tribunales de partido, de cuyas funciones nos ocuparemos separadamente.

2.6.º De los juzgados municipales.

El *juez municipal* es el funcionario nombrado por el presidente de la audiencia respectiva, á propuesta en terna de los presidentes de los tribunales de partido, hoy de los jueces de primera instancia, con jurisdicción propia para conocer en los juicios verbales civiles, y en los de faltas criminales, en los actos de conciliación y otras diligencias de menor importancia. Forman el grado inferior del poder judicial y son actualmente los encargados del registro civil. Su cargo es *bienal* y *obligatorio*.

Podrán, no obstante, excusarse de ser jueces municipales: 1.º, los mayores de sesenta años; 2.º, los senadores y diputados á Cortes; 3.º, los que hubieren sido reelegidos antes de espirar los cuatro años siguientes á aquél que hubieren cesado en su anterior cargo; 4.º, los suplentes de jueces municipales, durante los dos años siguientes á aquél en que dejaron de serlo.

¿Qué condiciones especiales se requieren para ser juez municipal?—Además de las generales que, como veremos más adelante, se exigen á todos los cargos judiciales, los jueces municipales y sus suplentes habrán de saber leer y escribir y estar domiciliados en el pueblo en donde hubieren de ejercer sus funciones. Si en él hubiere letrados con aptitud para ser jueces municipales, serán preferidos á los que no lo fueren, á no mediar motivos que aconsejen lo contrario.

¿Cuándo, por quién y en qué forma, tiene lugar el nombramiento de los jueces municipales?—Los jueces municipales y sus suplentes serán nombrados por los presidentes de las audiencias durante los quince días primeros del mes de Mayo, en los años en que deba verificarse la renovación.

¿Cómo se provistan las vacantes durante el bienio municipal?—Se proveerán por los presidentes de las audiencias, previos los trámites establecidos para la renovación total de los jueces. Los nombrados para ocupar dichas vacantes cesarán, si no fueren reelegidos, al terminar los dos años porque debieron haber desempeñado el cargo sus antecesores.

¿Qué trámites deben preceder á la posesión de los jueces municipales?—La revisión del nombramiento y el juramento. Del mismo modo que el de todos los jueces y magistrados, debe ser revisado por el tribunal pleno de partido, con audiencia fiscal, el nombramiento hecho, para saber si lo ha sido con arreglo á la Constitución y á las leyes, acordando en su vista su cumplimiento, ó manifestando reverentemente al gobierno los motivos que le hayan obligado á no otorgárselo (2). En el primer caso, los jueces municipales de pueblos que no sean cabeza de partido prestarán el juramento ante los jueces municipales que cesen, y en su defecto ante los suplentes, en el lugar destinado á las audiencias del juzgado. Los jue-

(1) Apesar de todo, y como el planteamiento de la ley orgánica no es ni ha sido nunca completo, los juzgados de primera instancia existen con su mismo nombre y propia organización.

(2) Como no existen todavía los tribunales de partido, no puede tener lugar la revisión que se refiere.

ces de pueblos cabeza de partido y sus suplentes, ante el tribunal del partido.

¿Cuál es la fórmula del juramento?—La general para todos los jueces y magistrados, que consiste en jurar «guardar y hacer guardar la Constitución de la monarquía, ser fieles al rey, administrar recta, cumplida é imparcial justicia, y cumplir todas las leyes y disposiciones que se refieran al ejercicio de su cargo».

¿Qué distintivo pueden usar estos funcionarios?—Los jueces municipales, y sus suplentes cuando los reemplazaren, usarán en todos los actos en que ejerzan jurisdicción ó á que concurren como tales, una medalla de plata, pendiente de un cordón negro.

¿Qué dotación tienen los jueces municipales y sus suplentes?—Ninguna: solamente percibirán los honorarios que les señalen los aranceles judiciales.

¿Qué atribuciones tienen los jueces municipales?—Unas civiles y otras en materia criminal. Les corresponde, en materia civil: 1.º, intervenir en los actos de conciliación; 2.º, ejercer la jurisdicción voluntaria en los casos para que expresamente les autoricen las leyes; 3.º, conocer en primera instancia y en juicio verbal, de las demandas cuyo objeto no exceda de 250 pesetas; 4.º, dictar, á prevención, las primeras providencias en las testamentarias ó sucesiones intestadas, cuando proceda, segun las leyes, en los pueblos donde no residiere tribunal de partido, hasta que éste tome conocimiento de ellas. Se entenderá por primeras providencias, para los efectos de este artículo, las que tengan por objeto poner en seguridad los bienes de las herencias y proveer á todo lo que no admita dilación: cuando los jueces municipales intervengan en estas actuaciones, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del tribunal del partido, al que remitirán las diligencias que hubieren practicado; 5.º, adoptar en los casos que requieren una determinación que sin daño de los interesados no pueda diferirse, providencias interinas, dando cuenta al tribunal de partido con remisión de los antecedentes; 6.º, desempeñar las comisiones auxiliaorias que los jueces de instrucción ó el tribunal del partido les confieran; 7.º, conocer de los demás juicios que se les encomienden por las leyes.

Corresponde á los jueces municipales en materia penal: 1.º, conocer en primera instancia de los juicios de faltas; 2.º, instruir á prevención las primeras diligencias en las causas criminales; 3.º, desempeñar las comisiones auxiliaorias que los jueces de instrucción y el tribunal de partido les confieran.

Tienen además á su cargo, como queda indicado, todo lo relativo al registro civil en sus secciones de nacimientos, defunciones y matrimonios (4).

Para ayudar las funciones del juez habrá en cada juzgado municipal un secretario y un suplente, cuyas condiciones y facultades explicaremos al tratar de los auxiliares de los juzgados, y además un subalterno con el nombre de alguacil, ó más si fueren necesarios.

Cuando nos ocupemos del ministerio fiscal se verá que al lado de cada juez municipal existe y funciona con independencia en el círculo de sus atribuciones, un fiscal, que recibe también el nombre de *fiscal municipal*.

(1) Véase lo dicho acerca de esta materia en el tratado de *Derecho civil*.

L. 6^a

Juzgados de instrucción y Tribunales de partido.

Debemos advertir á nuestros lectores, que aunque esta clase de jueces y tribunales no existen entre nosotros, porque no han llegado á ser un hecho en la práctica, la ley orgánica de 1870 los creó y forman parte del organismo y gerarquías judiciales que ella ha sancionado.

Estos juzgados y tribunales deben su origen á dicha ley.

Los primeros están encomendados á un solo juez, que tiene atribuciones propias civiles y penales, que consisten en desempeñar, *en lo civil*, las funciones que expresamente les atribuyan las leyes y las comisiones que para la práctica de determinadas diligencias les confieran los respectivos tribunales de partido; *en lo criminal*, instruir las sumarias de las causas y las demás diligencias que les encarguen los jueces de partido; y en ambas esferas, desempeñar las comisiones auxiliaorias que por conducto del tribunal del partido les dirijan otros jueces ó tribunales. Su jurisdicción está limitada al territorio de la circunscripción que se les señale, debiendo ser nombrados de Real orden, á propuesta de la sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado. Tal es lo preceptuado en la ley precitada, que no está en vigor (1).

Los *Tribunales de partido* se compondrán, según la repetida ley, de tres jueces, de los que uno tendrá el carácter de presidente y el nombramiento de tal. Sin embargo, serán presididos extraordinariamente por un magistrado de la audiencia respectiva, con sujeción á las reglas siguientes: 1.^a, los presidentes de las audiencias nombrarán magistrados que, constituyéndose en los tribunales de partido, los presidan con voto, al menos en seis días consecutivos de audiencia pública; 2.^a, turnarán en este servicio los magistrados de audiencia, sin distinción, entre los que compongan las salas de lo civil y criminal; de él estarán exentos los presidentes de audiencias y de sus salas; 3.^a, no se admitirán excusas para eximirse de este servicio, á no ser que estén fundadas en la imposibilidad de prestarle; los presidentes de las audiencias las estimarán según su prudente arbitrio, y pondrán en conocimiento del ministro de Gracia y Justicia las que admitieren, con informe razonado; 4.^a, los presidentes de audiencia señalarán el tribunal de partido que ha de presidir cada magistrado; 5.^a, no habrá turno entre los tribunales de partido del distrito de las audiencias para que sean presididos por magistrados; los presidentes de las audiencias designarán á éstos, teniendo exclusivamente en cuenta la mejor administración de justicia; 6.^a, el tribunal de partido que asista un magistrado se constituirá para los asuntos de justicia con éste y dos de los jueces que correspondan al tribunal, alternando éstos entre sí, sin exclusión del que tenga nombramiento de presidente del mismo tribunal; 7.^a, los magistrados que presidieren tribunales de distrito darán á su regreso cuenta, en una Memoria de visita, á las salas de gobierno de todo cuanto juzguen digno de atención relativamente al modo de administrar justicia, á las prácticas abusivas que se hayan introducido, á la conducta y dignidad de los que desempeñen funciones judiciales y al cumplimiento de los deberes de los auxiliares y subalternos; 8.^a, las salas de gobierno pasarán estas Memorias á los respectivos fiscales, y en vista de su dictámen, adoptarán las medidas que estén dentro de sus atribuciones para corregir lo que sea digno de reforma y proponer

(1) Los jueces de instrucción tampoco existen como tales. Sus funciones corresponden á los jueces de primera instancia.

al gobierno por conducto del presidente lo que merezca ser puesto en su conocimiento, y á cuya correccion no alcancen sus facultades.

Los jueces de tribunales de partido serán nombrados en la misma forma que los de instruccion, teniendo en cuenta el lugar que ocupen en el escalafon general formado por el ministerio de Gracia y Justicia, que con los expedientes necesarios, debe pasar anualmente al Consejo de Estado. Dicho expediente debe contener las escalas siguientes: de aspirantes; de jueces de instruccion; de jueces de tribunales de partido de ingreso; de jueces de partido de ascenso y de presidentes de tribunales de partido de ingreso; de presidentes de tribunales de partido de ascenso; de magistrados de audiencia, á excepcion de la de Madrid; de presidentes de audiencia, presidentes de sala de audiencia, á excepcion de la de Madrid, y de magistrados de la audiencia de Madrid; de presidente y presidentes de sala de la audiencia de Madrid; de magistrados del Tribunal Supremo; de presidentes de sala del Tribunal Supremo.

En todos los nombramientos se expresará las condiciones especiales en virtud de las cuales los nombrados ingresan ó ascienden en la carrera.

¿Qué clases hay de estos tribunales y cuántos debe tener cada partido judicial, segun la ley orgánica?—En cada partido judicial habrá, por lo ménos, un tribunal de partido. En los pueblos que por sí solos, ó con otros que se les agreguen, llegaren á 100 000 almas, podrá haber dos tribunales de partido. En los que lleguen á 200 000 podrá haber tres. Los tribunales de partido serán de ingreso ó de ascenso, pero todos tendrán las mismas atribuciones y ejercerán igual jurisdiccion. Serán de ascenso los que residan en capitales de provincias ó en poblaciones que tengan más de 20.000 almas. Los demás serán de ingreso.

¿En cuántas circunscripciones se dividen los partidos?—En dos, que podrán aumentarse en los partidos que por su extension, naturaleza del terreno, dificultad de comunicaciones ú otras causas, sea necesario ó conveniente para la mejor administracion de justicia.

¿Qué atribuciones tienen los tribunales de partido?—Su jurisdiccion se extiende á lo civil y á lo criminal. Corresponde á los tribunales de partido, en materia civil: 1.º, decidir las competencias que se susciten entre los jueces municipales cuando correspondan ámbos á su partido; 2.º, ejercer la jurisdiccion voluntaria, con arreglo á las leyes; 3.º, conocer en primera instancia de los juicios, á excepcion de los verbales, y de aquéllos que, con arreglo á esta ley, son de la competencia de las audiencias ó del Tribunal Supremo; de las recusaciones de los jueces de instruccion de su partido y de las que se interpongan contra un solo juez de su tribunal; de las demandas de responsabilidad civil contra jueces municipales y de instruccion correspondientes á su partido; 4.º, conocer en segunda instancia: de los juicios verbales, de las recusaciones de los jueces municipales contra los autos de primera instancia en que se haya denegado la recusacion, y 5.º, desempeñar ó hacer desempeñar las comisiones que les confieran otros tribunales.

Corresponde á los tribunales de partido, en materia penal: 1.º, decidir las competencias que se susciten entre los jueces municipales cuando correspondan ámbos á su partido; 2.º, declarar á quién corresponde actuar cuando estén discordes dos jueces de instruccion correspondientes á su partido; 3.º, conocer en única instancia y en juicio oral y público, de los delitos á que la ley señale en su grado máximo una pena correccional, sin más excepciones que las que establece esta ley al señalar las atribuciones de las audiencias y del Tribunal Supremo; 4.º, conocer en primera instancia de las recusaciones de los jueces de instruccion correspondientes á su partido y de las que se interpongan contra un solo juez de su tribunal; 5.º, conocer en segunda instancia; de los juicios de faltas, de las recusaciones de los jueces municipales contra los autos de primera instancia en que se

haya denegado la recusacion, y 6.º, desempeñar ó hacer desempeñar las comisiones auxiliorias que otros tribunales les confieran.

Téngase presente que, como no existen estos tribunales, la mayoría de sus atribuciones están ejercidas por los jueces de primera instancia.

266 De las Audiencias.

Dáse el nombre de *Audiencia* á un tribunal compuesto de magistrados, que debe residir en la capital del *distrito judicial*, dividido en varias salas, con jurisdiccion civil y criminal, presididas aquéllas por uno de dichos magistrados y el tribunal pleno por el *presidente de la audiencia*.

Habrán en la Península, islas adyacentes y Canarias, quince audiencias, que residirán en Albacete, Barcelona, Búrgos, Cáceres, Coruña, Granada, Madrid, Oviedo, Las Palmas, Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; todas las audiencias serán de igual categoria, excepto la de Madrid, que será de ascenso (1).

¿Cuál es la organizacion de las Audiencias?—En cada audiencia habrá una *sala de gobierno* y las de *justicia* que señale la ley. El presidente, los presidentes de sala y el fiscal de cada audiencia, compondrán su sala de *gobierno*; las *salas de justicia* serán de lo *civil* ó de lo *criminal*. Exceptúanse las audiencias de Las Palmas, Palma y Pamplona, en cada una de las cuales habrá una sola sala para lo civil y lo criminal. En cada audiencia habrá un presidente de la misma. Las salas de lo civil y de lo criminal se auxiliarán mutuamente en el despacho de los negocios de su respectiva competencia cuando sea necesario, y los magistrados que no fueren indispensables para constituir las, suplirán á los de las otras que estuviesen ausentes ó impedidos de asistir á ellas.

¿Qué número de salas de justicia y presidentes de éstas debe tener cada audiencia?—Las audiencias de Madrid y Barcelona tendrán tres salas de justicia, y dos las de Albacete, Búrgos, Cáceres, Coruña, Granada, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, y un número de presidentes de sala igual al de éstas, respectivamente señalado. Las salas de lo *civil* constarán de cuatro magistrados, además de su presidente; el gobierno señalará el número de magistrados que habrán de componer las salas de lo criminal en cada audiencia. Una vez fijado definitivamente, no podrá ser alterado sino por una ley. En los casos en que la aglomeracion de causas criminales en alguna audiencia lo hiciere necesario ó conveniente, se podrá formar otra sala, que tomará el número siguiente á la última de las de planta, para auxiliar á ésta, si hubiere bastantes magistrados para constituir la.

¿Pueden constituirse las salas de justicia, en algun caso, fuera de la capital del distrito?—Conforme á la ley orgánica debían constituirse en las poblaciones designadas en la de division judicial para juzgar las causas en que debia intervenir el jurado; y la misma mandaba que los presidentes de las salas de lo criminal y los magistrados que las formasen turnarian en este servicio, y cuando no asistiese el presidente de sala, presidiria el magistrado más antiguo de los que la formasen. Pero, declarado en suspenso todo lo relativo al jurado y al juicio oral, ya dejamos dicho que la constitucion de estos tribunales no tiene objeto.

¿Cuáles son las *salas extraordinarias de audiencia*?—Las que se reúnan para juzgar las causas por delitos comunes de la competencia de las au-

(1) La ley orgánica, en su art. 41, determina las provincias que comprende el territorio de cada una de las quince audiencias.

diencias en poblaciones determinadas, formando dichas salas dos jueces del tribunal del partido en que se constituyan, presididas por un magistrado de la sala de lo criminal de la audiencia respectiva, con voto en las deliberaciones.

¿Cómo deben nombrarse los magistrados?—Cualquiera que sea su categoría y clase, deben ser nombrados por real decreto en la misma forma y con las mismas solemnidades expuestas al tratar del nombramiento de los jueces de instruccion y de tribunales de partido.

¿Qué atribuciones tienen las audiencias en sus diferentes salas?—Corresponde á las salas de lo civil: 1.º, decidir las competencias que se susciten en materia civil entre los jueces municipales de su distrito, que correspondan á diferentes partidos; 2.º, decidir las competencias civiles entre los tribunales de partido de su distrito, hoy de los jueces de primera instancia; 3.º, conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan contra los jueces eclesiásticos, sufragáneos ó metropolitano en materia civil; 4.º, conocer en única instancia de los incidentes en asuntos civiles, cuando versen sobre recusacion de sus magistrados, y de los promovidos contra los jueces de los tribunales de partido, cuando fuere más de uno el recusado; 5.º, conocer en primera instancia de los recursos de responsabilidad civil que se promuevan contra jueces municipales de instruccion ó de tribunales de partido; 6.º, conocer en segunda instancia de los juicios y de los negocios civiles de que hubieren conocido en primera los tribunales de partido de su territorio, de los incidentes de recusacion de jueces de instruccion y de tribunales de partido cuando fuese uno solo el recusado en materia civil, y 7.º, auxiliar á la administracion de justicia en lo civil, siempre que sean requeridos al efecto por otros jueces ó tribunales.

Corresponde á las salas de lo criminal de las audiencias: 1.º, decidir las competencias en materia criminal que se susciten entre los tribunales de partido, ó fueren de primera instancia cuando los contendientes correspondan á su distrito; 2.º, conocer con intervencion del jurado: de las causas de los delitos á que las leyes señalaren penas superiores á la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, segun la escala general; de las causas, cualquiera que sea la penalidad que las leyes impongan, por delitos de lesa majestad, de rebellion, de sedicion (1); 3.º, conocer en única instancia y en juicio oral y público, de las causas por delitos á que la ley señale, en cualquiera de sus grados, pena superior á la de presidio correccional y que no exceda de presidio mayor (2); de las causas contra jueces municipales y los que en los juzgados de esta jurisdiccion ejercieren el ministerio fiscal, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; de las causas contra jueces de instruccion, los de los tribunales de partido y sus fiscales, por cualquiera clase de delitos; de las causas contra los jueces eclesiásticos, con excepcion de aquéllos que deban ser juzgados por el Tribunal Supremo; 4.º, conocer en única instancia de los incidentes de recusacion de sus magistrados y de los promovidos contra jueces de tribunales de partido, cuando fuere más de uno el recusado en negocio criminal; 5.º, conocer en segunda instancia de los incidentes de recusacion de jueces de instruccion y de jueces de tribunales de partido, cuando fuere uno solo el recusado en materia criminal; 6.º, auxiliar á la administracion de justicia en lo criminal, siempre que sea requerida al efecto por otros juzgados y tribunales; 7.º, conocer en consulta y segunda instancia, de las causas sentenciadas por los jueces de primera instancia, conforme á la ley de 18 de Junio de 1870 para preparar el recurso de casacion.

Finalmente, corresponde á las audiencias *en pleno*, constituidas en tri-

(1) En suspenso, por el Real decreto de 3 de Enero de 1875.

(2) Idem, por idem.

bunales de justicia, decidir de los incidentes de recusacion que se promovieren sobre la de sus presidentes y presidentes de sala ó de más de dos magistrados de una sala de justicia (4).

Del Tribunal Supremo.

El decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificación de fueros ha motivado la supresion del entonces llamado *Tribunal Supremo de Guerra y Marina*, que recibió el nombre de *Consejo Supremo de la Guerra*; (2) desapareciendo desde dicha época la anomalía, tan perjudicial á la pretendida unidad de jurisprudencia, de que existiesen en la capital del reino dos tribunales que se denominaban *supremos*, no debiendo haber más que uno; si algun dia habia de comenzar á realizarse la unidad de legislación, en su aplicacion práctica. En la actualidad sólo tiene la categoria de *supremo* el que ocupa el grado más alto de la jerarquía judicial, que reside en Madrid y ejerce su jurisdiccion en todo el territorio español; y á fin de que no pueda repetirse la anomalía que dejamos indicada, la ley moderna dispone que «ningun otro tribunal podrá tener el título de supremo».

¿Cuál es la organizacion interior actual del Tribunal Supremo?—Devuelta al Consejo de Estado la jurisdiccion contencioso-administrativa por Real Decreto de 20 de Enero de 1875, la supresion de la sala cuarta de aquél Tribunal, que entendia en los recursos que se daban contra la administracion, era consiguiente, y la reforma del Tribunal, tambien necesaria; lo cual llevó á cabo otro decreto de 27 del mismo mes y año. Segun él, que está vigente, el Tribunal Supremo consta de tres salas, cada una de las cuales se compone de un presidente y ocho magistrados; con los auxiliares necesarios para el mejor servicio.

¿Qué atribuciones corresponden al Tribunal Supremo?—Como fin principal y preferente de sus funciones, que luego determinaremos detalladamente, tiene por objeto la uniformidad de la jurisprudencia en los diferentes ramos del Derecho, para lo cual, y para alcanzar la unidad de criterio jurídico, cada sala conoce de diferentes materias, con atribuciones propias é independientes.

¿Qué asuntos son de la competencia de la sala primera?—Los recursos de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal en materia civil y de los de queja contra los autos de las audiencias en que se deniegue el testimonio de la sentencia, pedido para interponerlos.

¿Cuáles corresponden á la sala segunda?—Los de casacion por infraccion de ley ó doctrina en materia criminal; los que se consideran admitidos por ministerio de la ley, como sucede contra las sentencias en que se impone la pena capital, y los de queja contra las audiencias en que se niegue el testimonio del fallo para intentar dichos recursos.

(1) Existia en la audiencia de Madrid una sala llamada *correcional*, que tenía por objeto el conocimiento de los delitos cometidos en la corte, á los cuales señalaba el Código pena correcional. Los jueces de primera instancia instruían el sumario y, una vez perfeccionado, continuaba el procedimiento la sala correcional hasta su terminacion, causando ejecutoria la sentencia. Esta sala ha desaparecido con la publicacion de la ley de organizacion de tribunales y su complementaria de Enjuiciamiento criminal, por cuya razon no nos ocupamos de ella en el texto, haciendo aqui ligerisimas indicaciones.

Compñase esta sala de un presidente, tres magistrados, un secretario y un vice-secretario, ambos letrados. Correspondia al presidente la direccion de los juicios, teniendo facultad para imponer correcciones disciplinarias. El procedimiento que se seguía ante la sala era especial para este género de delitos y contenía el juicio oral y publico. Y como ya no tiene objeto, ni existe ninguna causa que deba ser sustanciada por aquel procedimiento, dicho Tribunal correcional sólo merece un recuerdo histórico.

(2) Hoy se llama *Consejo Supremo de Guerra y Marina*. (Real Decreto, 12 de Febrero 1878.)

¿Y cuáles son del conocimiento de la sala tercera?—1.º, los recursos de casación por quebrantamiento de forma civiles y criminales; 2.º, los de queja contra las audiencias por el motivo expresado en la pregunta anterior; 3.º, las decisiones de las competencias en materia civil y criminal entre jueces y tribunales que no tengan superior común; 4.º, los recursos de forma contra el Tribunal de la Rota y la Nunciatura; 5.º, el cumplimiento de las ejecutorias extranjeras; 6.º, los juicios de residencia de los funcionarios de Ultramar, que estén bajo su jurisdicción; 7.º, de las apelaciones contra los alcaldes mayores por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; 8.º, de las causas contra los cardenales, arzobispos, obispos y auditores de la Rota; 9.º, de las causas contra los consejeros de Estado, ministros del Tribunal de Cuentas, subsecretarios, directores, jefes de las oficinas generales del Estado, gobernadores de provincia, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios; lo dispuesto en este número sólo es aplicable á las causas por delitos cometidos mientras estuvieron en servicio activo; 10.º, de las causas por delitos cometidos por magistrados de audiencias ó del Tribunal Supremo, por los fiscales de las audiencias y por los tenientes y abogados fiscales del Tribunal Supremo de las audiencias; 11.º, de las causas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los auxiliares del Tribunal Supremo.

Y, por último, conocerá además cada una de las salas de justicia del Tribunal Supremo en única instancia, de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan, á excepcion de su presidente respectivo.

¿De qué causas debe conocer el Tribunal Supremo en pleno?—Debe conocer en única instancia y en juicio oral y público, de las siguientes: 1.º, contra los príncipes de la familia real; 2.º, contra los ministros de la Corona por los delitos comunes cometidos en activo servicio, cuando no deban ser juzgados por el Senado; 3.º, contra los presidentes del Congreso de los diputados y del Senado; 4.º, contra el presidente ó presidentes de sala ó el fiscal del Tribunal Supremo; 5.º, contra los magistrados de una audiencia ó del Tribunal Supremo, cuando sean juzgados todos, ó al menos la mayoría de los que constituyen una sala de justicia, por actos judiciales en que hayan tenido participacion. Conocerá, además, el Tribunal Supremo en pleno, constituido en la sala de justicia, de los incidentes de recusacion que versen sobre la del presidente del tribunal, ó de los presidentes de sala, ó de más de dos magistrados de una sala de justicia.

INGRESO Y ASCENSO EN LA CARRERA JUDICIAL (1).

265

Cuerpo de aspirantes.

Por la nueva ley orgánica se ha creado un cuerpo facultativo llamado de aspirantes á la judicatura, cuyo número varia y fija anualmente el gobierno, que tiene por objeto cubrir las vacantes de los juzgados de instruc-

(1) Véase el Real Decreto de 23 de Enero de 1875, inserto en el apéndice, que rige en la actualidad y ha modificado las disposiciones de la ley sobre organizacion del poder judicial.

cion, prefiriéndoles á otros letrados, aunque no hayan cumplido veinticinco años, para ser jueces municipales, suplentes de los mismos y de los de instruccion, sustitutos de jueces de tribunales de partido y sustitutos de fiscales de los mismos ó de abogados fiscales de audiencias, en defecto de aspirantes al ministerio fiscal.

El cuerpo de aspirantes se dividirá en tantos colegios como audiencias haya en la Península, islas Baleares y Canarias, que estarán bajo la dependencia de las respectivas audiencias.

¿Qué requisito se exige para ser admitido en el cuerpo de aspirantes?—Ser español, haber cumplido veintitres años y ser licenciado en Derecho civil por universidad costeada por el Estado, y no estar comprendido en ninguna de las incapacidades que, para obtener cargos judiciales, establece la ley de tribunales. Sólo puede entrarse por oposicion.

¿En dónde y ante quiénes deben tener lugar los ejercicios de oposicion?—En Madrid, ante una junta calificadora, compuesta del presidente del Tribunal Supremo, que lo será tambien de dicha junta, del fiscal y de dos magistrados del mismo tribunal ó de la audiencia de Madrid nombrados por el gobierno, del decano del colegio de abogados de Madrid, de tres letrados nombrados por el gobierno á propuesta en terna hecha por la junta de gobierno del colegio de Madrid, de dos catedráticos de Derecho de la Universidad central nombrados por el gobierno y de un secretario con voto, que nombrará el gobierno á propuesta en terna de la junta calificadora.

Terminados los exámenes, la junta formará una lista de los que considere aptos, numerándolos por orden del mérito de cada uno. El ministro de Gracia y Justicia admitirá en el cuerpo de aspirantes á los examinados y aprobados por el orden de numeracion que tengan en las listas formadas, por la junta calificadora, expidiéndoles nombramiento y título.

¿Dónde deben residir los aspirantes?—Pasarán los nombrados á formar parte del colegio respectivo de las audiencias en cuyos distritos tuvieren su residencia, concurriendo á las sesiones públicas del tribunal ó tribunales del lugar de su domicilio, y ocupando en ellas el sitio que se les designará en los reglamentos, pudiendo cambiar de domicilio poniéndolo en conocimiento del presidente de la audiencia y esperando su contestacion. El presidente no se lo negará sin justa causa, y cuando el cambio de domicilio fuere para un punto que no correspondiese al distrito de la misma audiencia, lo pondrá en conocimiento del presidente de la audiencia á que pasare. El aspirante deberá en este caso, tan luego como cambie su domicilio, ponerse á las órdenes del presidente de la audiencia á cuyo territorio se hubiese trasladado.

Del comportamiento, aptitud profesional, celo y asistencia á las sesiones de los aspirantes, los jueces y magistrados deben dar cuenta al ministerio de Gracia y Justicia para que la junta calificadora, en su vista, proponga la corrección que proceda, que puede ser alguna de las tres siguientes: 1.ª, la exclusion del cuerpo de los que se hayan imposibilitado para continuar en él; 2.ª, la postergacion por tiempo de tres meses á un año, á contar desde el día en que les corresponda ser nombrados jueces de instruccion, de aquéllos que por su conducta, falta en el cumplimiento de sus deberes ó de aptitud para el desempeño de sus funciones, no fuesen dignos de ser promovidos á la judicatura, pero dieren esperanzas de enmienda; 3.ª, la exclusion definitiva de los que hubieren sido postergados dos veces por cualquiera de las causas expresadas en el párrafo anterior. Contra la resolucion del gobierno, conformándose con lo propuesto por la junta calificadora, no se dará ulterior recurso.

¿Qué prohibiciones y obligaciones son inherentes al cargo de aspirante?—Los aspirantes no podrán ejercer empleo públicamente ni cargo ninguno de administracion general, provincial ó municipal. Si fueren nombrados para alguno que sea obligatorio con arreglo á las leyes, podrán ex-

cusarse de él y tendrán derecho á que sea admitida la excusa. Si lo admitieren, dejarán de pertenecer al cuerpo. No estará prohibido á los aspirantes el ejercicio de la abogacía. Será obligatorio para ellos el desempeño de los cargos de jueces municipales, suplentes de los mismos y de los de instrucción y sustitutos de jueces de tribunales de partido, en el pueblo que estén domiciliados.

Condiciones para los cargos judiciales.

Unas son comunes á jueces y magistrados, y otras especiales de cada cargo. Son *comunes* á unos y otros, cualquiera que sea la clase ó denominación, las siguientes: 1.ª, ser español de estado seglar; 2.ª, haber cumplido veinticinco años; 3.ª, no hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad ó incompatibilidad que establece esta ley, y 4.ª, estar dentro de las condiciones que para cada clase de cargos se hallan establecidas en la misma.

¿Quiénes están incapacitados, para ser jueces ó magistrados?—4.º, los impedidos física ó intelectualmente; 2.º, los que estuvieren procesados por cualquier delito; 3.º, los que estuvieren condenados á cualquiera pena correccional ó aflictiva, mientras que no la hayan sufrido ú obtenido de ella indulto total; 4.º, los que hubieren sufrido y cumplido cualquiera pena que los haga desmerecer en el concepto público; 5.º, los que hubieren sido absueltos de la instancia en causa criminal, mientras que, por el transcurso del tiempo, la absolución no se hubiere convertido en libre; 6.º, los quebrados no rehabilitados; 7.º, los concursados, mientras no sean declarados inculpables; 8.º, los deudores á fondos públicos como segundos contribuyentes; 9.º, los que tuvieren vicios vergonzosos, y 10, los que hubieren ejecutado actos ú omisiones que, aunque no penables, les hagan desmerecer en el concepto público.

¿Qué casos de incompatibilidad declara la ley?—Prescribe que los cargos de jueces y magistrados serán incompatibles: 4.º, con el ejercicio de cualquiera otra jurisdicción; 2.º, con otros empleos ó cargos dotados ó retribuidos por el Estado, por las Cortes, por la Casa real, por las provincias ó por los pueblos; 3.º, con los cargos de diputados provinciales, de alcalde, regidores y cualesquiera otros provinciales ó municipales, y 4.º, con empleos de subalternos de tribunales ó juzgados. Los comprendidos en el caso tercero que no manifestasen la causa de exención de sus cargos en el término de ocho días, se entenderá que han renunciado al judicial, que quedará vacante de derecho.

Además de las anteriores incompatibilidades *absolutas*, la ley enumera otras *relativas ó especiales*, segun las que no podrán pertenecer simultáneamente á un mismo tribunal los jueces ó magistrados que tuvieran parentesco, dentro del grado, con los fiscales, tenientes fiscales, abogados fiscales ó auxiliares del mismo tribunal. Lo será igualmente cuando el parentesco fuere entre los jueces municipales y los de tribunales de partido, con los fiscales ó jueces de instrucción del mismo tribunal, ó de cualquiera de ellos con los magistrados de la audiencia respectiva. En los casos anteriores quedará sin efecto el nombramiento hecho á favor de quien tuviere parientes, con los cuales fuere incompatible el nombrado, desempeñando funciones judiciales ó fiscales.

¿Qué condiciones deben reunir los jueces de instrucción, los de tribunales de partido y los magistrados?—Los jueces de instrucción, los de los tribunales de partido, los magistrados de número y los suplentes de cualquiera de las mismas clases deberán reunir, además de las condiciones ex-

presadas, la de ser abogados ó licenciados en Derecho civil por universidad costeada por el Estado.

¿Qué incompatibilidades acepta la ley por razón del territorio?—Según ella, nadie podrá ser juez de instrucción, ni de tribunal de partido, ni magistrado de audiencia, á cuya jurisdicción pertenezcan: 1.º, el pueblo de su naturaleza; 2.º, el pueblo en que él ó su mujer hubieren residido de continuo, en los cinco años anteriores al nombramiento; 3.º, el pueblo en que, al hacerse el nombramiento, ejerciere cualquiera industria, comercio ó granjería; 4.º, el pueblo en que él ó su mujer ó los parientes de uno ó de otro en línea recta ó en la trasversal, dentro del *cuarto grado civil* de consanguinidad, ó segundo de afinidad, poseyeren bienes raíces ó ejercieren alguna industria, comercio ó granjería; 5.º, el pueblo en que hubiese ejercido la abogacía en los dos años anteriores al nombramiento; 6.º, el pueblo en que hubiese sido auxiliar ó subalterno de juzgado ó tribunal. Se exceptúan los jueces ó magistrados que ejerzan sus funciones en Madrid.

¿Qué negociaciones están prohibidas á los jueces y magistrados?—No podrán ejercer por sí, ni por sus mujeres, ni á nombre de otro, industria, comercio ni granjería; ni tomar parte en empresas ni en sociedades mercantiles como socios colectivos ó como directores gestores, administradores ó consejeros, en el territorio adonde se extienda su jurisdicción, bajo pena de renuncia tácita de destino.

Provision y ascenso de los jueces y magistrados, según la ley orgánica de 1870.

¿Cómo deben proveerse los juzgados de instrucción?—Se proveerán únicamente en aspirantes á la judicatura, confiriendo de cada cinco vacantes: 4.º, dos á los que tengan los dos primeros números en el cuerpo de aspirantes; 2.º, dos á los que el gobierno considere más dignos entre los aspirantes comprendidos en la tercera parte superior de la escala, y 3.º, uno al que el gobierno considere más digno entre todos los que correspondan al mismo cuerpo, con tal que lleven en él un año por lo ménos.

¿En quiénes debe recaer la provision de las plazas de jueces de tribunales de partido?—Las de los que son de ingreso, á excepcion de las de sus presidentes, podrán proveerse en jueces de instrucción. Las de presidentes de ingreso y de jueces de tribunales de ascenso, en jueces de tribunales de ingreso. Las de presidentes de tribunales de partido de ascenso, en presidentes de los de ingreso ó en jueces de los de ascenso.

¿Cómo y en qué forma tiene lugar el ascenso y provision de las plazas de magistrado de audiencia?—Deben distinguirse las de Madrid de las de más. De cada cuatro vacantes de magistrados que ocurran en las audiencias, con excepcion de la de Madrid, se proveerán: 4.º, dos en presidentes de tribunales de partido de ascenso; 2.º, una en teniente fiscal ó en abogado fiscal de audiencia; 3.º, una en secretario de gobierno ó de sala del Tribunal Supremo ó de audiencia, ó en un abogado, ó en un catedrático de Derecho de universidad costeada por el Estado.

¿En quiénes deben proveerse las plazas de magistrados de la audiencia de Madrid?—De cada cuatro plazas de magistrado de la audiencia de Madrid que vacaren, se proveerán: 4.º, una en el magistrado más antiguo de fuera de Madrid que no hubiere sufrido, durante los dos últimos años de desempeño de su cargo, corrección disciplinaria que le deba privar del ascenso, á juicio del gobierno; 2.º, dos en magistrados de audiencia de fuera de Madrid que lleven por lo ménos cuatro años de antigüedad en su

cargo y que se hallen en el caso del número anterior; 3.º, una en fiscal de audiencia de fuera de Madrid, ó en abogado fiscal del Tribunal Supremo, ó en teniente fiscal de la audiencia de Madrid, que lleven por lo menos seis años en el ejercicio de este cargo, ó en secretarios de sala del Tribunal Supremo con diez años de ejercicio, ó en abogados que hubiesen ejercido su profesion por más de quince años en capital de audiencia, pagando la primera cuota de contribucion por lo menos cinco años, ó una de las dos primeras cuotas si fuere en el colegio de Madrid.

¿Qué particularidades afectan á los cargos de presidentes de audiencia?—Que se sirven siempre en comision; dan derecho á los primeros números de la escala de los presidentes de sala, y pueden ser separados por el gobierno, despues de oir al Consejo de Estado, pero conservando el cargo de presidentes de sala, y además de su sueldo la mitad del sobresueldo que como presidentes de audiencia les correspondia, la cual conservarán hasta que sean promovidos ó jubilados.

¿En quiénes deben provistarse las plazas de magistrados del Tribunal Supremo?—De cada cuatro vacantes que ocurran en las plazas de magistrado del Tribunal Supremo se proveerán: tres en presidentes de la audiencia de Madrid ó en quien hubiese sido tres años presidente de audiencia de fuera de Madrid, ó presidente de sala ó fiscal de la de Madrid, ó teniente fiscal único del Tribunal Supremo, ó en el magistrado más antiguo de la de Madrid.

La cuarta vacante podrá proveerse en abogados que hayan ejercido veinte años en capital de audiencia, ó quince en Madrid, pagando á lo menos en los ocho últimos la primera cuota del subsidio industrial.

No recayendo la eleccion en ninguno de esta clase, se nombrará quien reuna las condiciones expresadas.

¿Qué circunstancias personales exige la ley para los presidentes de sala de dicho tribunal?—Hallarse en alguno de los casos siguientes: 1.º, haber sido ministro de Gracia y Justicia; 2.º, haber sido fiscal del Tribunal Supremo; 3.º, haber sido magistrado del Tribunal Supremo tres años por lo menos; 4.º, haber sido ministro de la Corona y ejercido los cargos de magistrado, el de fiscal de audiencia, ó la abogacia en Madrid durante quince años, pagando en los cinco últimos años, por lo menos, la primera cuota del subsidio industrial.

¿Qué condiciones debe reunir el presidente del Tribunal Supremo?—Estar comprendido en alguno de los casos siguientes: 1.º, haber sido presidente del Consejo de ministros, ó ministro de Gracia y Justicia, si fueren ó hubiesen sido magistrados del mismo Tribunal Supremo, magistrados ó fiscales de audiencia, ó ejercido la abogacia diez años por lo menos; 2.º, haber sido presidente del Senado ó del Congreso de los diputados, con alguna de las circunstancias expresadas en el número anterior; 3.º, haber sido presidente del Consejo de Estado ó de la seccion de Estado y Gracia y Justicia del mismo, con alguna de las circunstancias expresadas en el número 1.º; 4.º, haber sido presidente de Sala ó fiscal del Tribunal Supremo, un año por lo menos.

Lo que queda expuesto relativo al ingreso y ascenso en la carrera judicial, que es lo consignado en la ley orgánica de 1870, no está vigente en absoluto. Con posterioridad y por medio de decretos se han modificado las reglas establecidas, quedando siempre vigente, sin embargo de todo, y respetado hasta ahora, el principio de la oposicion para el ingreso, tanto en la carrera judicial como en la fiscal.

Los últimos decretos que se publicaron, que son los que se aplican actualmente, llevan las fechas del 23 de Enero de 1875 y 22 de Octubre

de 1877; los cuales, dando una marcada preferencia á la clase de *cesantes*, establecen nuevos principios y fijan reglas concretas, declarando derogadas las disposiciones de la mencionada ley orgánica acerca de esta materia. Por si nuestros lectores desean conocer su texto, los publicamos en el apéndice.

De los honores y traje de los jueces y magistrados.

¿Qué tratamiento tienen los jueces y magistrados?—Todos los tribunales tendrán tratamiento impersonal, ya sea de palabra, ya por escrito. Los jueces de instruccion y de tribunales de distrito, en los actos de oficio, tendrán el tratamiento de *señoría*; los magistrados y presidentes de Sala de las audiencias, el personal de *señoría*; los presidentes de las audiencias y los de sala de Madrid, el de *señoría ilustrísima*; los magistrados del Tribunal Supremo, el de *excelencia*. En los actos de oficio, los jueces y magistrados no podrán recibir mayor tratamiento que el correspondiente á su empleo efectivo en la carrera judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera ó por otros títulos, ni usar, cuando se reúnan en cuerpo ó en salas, ninguna condecoracion que les dé derecho á tratamiento superior que el que corresponda al que presida el acto.

¿Qué traje deben usar los jueces municipales?—Ya hemos dicho al ocuparnos de ellos, que éstos y sus suplentes cuando los reemplazaren, usarán en todos los actos en que ejerzan jurisdiccion, ó á que concurren como tales, una medalla de plata, pendiente de un cordon negro, cuyo modelo aprobará el gobierno.

¿Qué traje deben usar los jueces y magistrados?—En las audiencias públicas, en los demás actos oficiales dentro del edificio y en los actos solemnes á que deban concurrir en comision ó en cuerpo, con arreglo á la ley, ó cuando de Real orden se les mande, usarán el traje de ceremonia, que es, para los jueces de instruccion y de tribunales de partido la toga, medalla y placa que estén establecidos para los jueces de primera instancia por las disposiciones vigentes á la publicacion de la ley; para los magistrados de audiencia y del Tribunal Supremo, la toga, medalla y placa que les esté señalada á la publicacion de la ley; en los demás actos oficiales no expresados, los jueces y magistrados usarán sólo la placa ó medalla y el baston, con el distintivo que les esté señalado.

¿Cuál es el traje propio del presidente del Tribunal Supremo y del ministro de Gracia y Justicia, cuando éste presida dicho tribunal?—El primero usará ordinariamente el collar pequeño, y en los actos solemnes el gran collar de la justicia, sobre toga igual á la de los demás magistrados. El ministro de Gracia y Justicia cuando presida el Tribunal Supremo en pleno, ó su sala de gobierno, lo que no podrá hacer cuando se constituyan en sala de justicia, asistirá con su toga, usando otro gran collar.

Ningun juez ni magistrado podrá usar otro traje ni otras insignias que las que correspondan á su empleo en la carrera judicial, ni condecoraciones superiores á las que use el presidente.

267ª Inamovilidad judicial.

El principio justo y necesario de la inamovilidad judicial, que consiste en el derecho que tienen los jueces y magistrados á no ser destituidos, suspenso, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas que se expresarán, viene reconocido y declarado en España, y desgraciadamente no

siempre respetado, por todas las Constituciones, sancionándolo de nuevo la de 1876 en su art. 80. Gozarán de inamovilidad los jueces y magistrados que ejerzan funciones permanentes, sin limitación de tiempo, y los que las ejerzan con esta limitación, sólo por el tiempo en que deban desempeñarlas, en la forma prescrita en la ley orgánica.

¿Cuándo procede la *destitución* de jueces y magistrados?—Procede de *derecho* ó por virtud de Real decreto acordado en Consejo de ministros, previa consulta del Consejo de Estado. Tiene lugar de *derecho*: 1.º por sentencia firme en que ésta se declare; 2.º, por sentencia firme en que se imponga á un juez ó magistrado pena correccional ó aflictiva. Debe acordarse por Real decreto: 1.º, cuando hubieren incurrido en alguno de los casos manifestados de incapacidad, á excepcion del 2.º, ó en alguna incompatibilidad de las expresadas oportunamente (1); 2.º, cuando hubieren sido corregidos disciplinariamente por hechos graves, que sin constituir delitos, comprometan la dignidad de su ministerio ó los hagan desmerecer en el concepto público; 3.º, cuando hubieren sido absueltos de la instancia en cualquiera clase de procesos, mientras la absolución, por el lapso del tiempo, no se convierta en libre (2); 4.º, cuando hayan sido una ó más veces declarados responsables civilmente; 5.º, cuando por su conducta viciosa, por su comportamiento poco honroso ó por su habitual negligencia, no sean dignos de continuar ejerciendo funciones judiciales.

En cualquiera de los expresados casos, antes de pasar al Consejo de Estado los expedientes de destitución, se oirá instructivamente al interesado y al fiscal de la audiencia respectiva, cuando se trate de jueces municipales de partido ó jueces de primera instancia, y al fiscal del Tribunal Supremo respecto á los magistrados.

¿Cuándo y con qué solemnidades debe decretarse la *suspension* de los jueces y magistrados?—Puede ser *judicial* y *disciplinaria*. Sólo puede tener lugar por auto de tribunal competente en los siguientes casos: 1.º, cuando se hubiere declarado haber lugar á proceder criminalmente contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; se hubiese dictado auto de prision ó fianza equivalente, ó se le expida por el ministerio fiscal una pena aflictiva ó correccional; 2.º, cuando, por las correcciones disciplinarias que se les hubiesen impuesto, apareciese que se hallaban en el caso 2.º de los de destitución por Real decreto; 3.º, cuando la *suspension* se decretare disciplinariamente.

Procederá la *suspension disciplinaria* de los jueces de instruccion, jueces de partido ó de primera instancia y magistrados de audiencia, á excepcion de los de Madrid, hasta que sean trasladados á otras plazas: 1.º, cuando se casaren con mujer nacida dentro de la demarcacion, circunscripcion, partido ó distrito en que ejerzan sus funciones, á no haber sido accidental su nacimiento, ó con la que estuviere establecida en él, ó poseyere en el mismo bienes inmuebles, ó los poseyeren sus parientes en línea recta ascendente ó descendente, ó en el segundo grado de la colateral; 2.º, cuando por actos propios ó de su mujer, hubieren adquirido en el mismo territorio bienes inmuebles; mas no cuando les vinieren por sucesion ó por actos de un tercero.

¿Quién debe acordar la *suspension judicial*?—El tribunal que conociere de la causa impondrá la *suspension judicial* en el mismo auto en que dictare la providencia que la motive, en los tres casos de la *suspension judicial*.

(1) Pág. 13.

(2) La absolución de la instancia está ya desechada y los tribunales no pueden acordarla, según el Tribunal Supremo, desde la publicación de la ley de 18 de Junio de 1870, que preparó la transición al establecimiento del recurso extraordinario de casación en materia penal.

cial. En el primer caso de la *disciplinaria* la impondrá la sala de gobierno de la audiencia respectiva, á los jueces municipales, de instruccion ó de tribunales de partido; y la de gobierno del Tribunal Supremo, á los magistrados. Para este efecto se constituirán en salas de justicia y llamarán á sí los antecedentes de las correcciones impuestas. En el segundo caso, la impondrá el tribunal ó sala de gobierno á que corresponda conocer de la falta que diere lugar á la correccion disciplinaria, constituyéndose al efecto en sala de justicia: en ambos casos oirá por escrito y oralmente al interesado, si compareciere en virtud de la citacion que se le haga.

¿Cuánto tiempo puede durar?—En los casos 1.º, 2.º y 3.º de los en que hemos dicho procede, durará hasta que recaiga en la causa sentencia de absolucion libre ó haya transcurrido el tiempo necesario para que se convierta en libre la absolucion de la instancia (1), si tal hubiere sido el resultado de la causa. En el caso 4.º, hasta que se hubiere declarado ó desestimado la absolucion. En el caso 5.º, todo el tiempo en que se hubiere impuesto la correccion disciplinaria.

¿Qué hechos y qué circunstancias legitiman la *traslacion* de los jueces y magistrados?—Todos, á excepcion de los de Madrid, serán *necesariamente* trasladados: 1.º, cuando lleven ocho años de residencia en una misma poblacion; 2.º, cuando por actos ajenos á sus propios hechos hubiere alguno de aquéllos, ó su mujer, ó sus ascendientes ó descendientes, ó los de su mujer, ó sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, adquirido bienes inmuebles en la demarcacion á que se extienda la jurisdiccion del juzgado ó tribunal á que corresponda; 3.º, cuando por alguna circunstancia, que no sea de las que justifican la suspension disciplinaria, se reunieren en un tribunal ó audiencia dos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, en cuyo caso procurará el gobierno que la traslacion se haga dentro de cuatro meses, destinando entretanto á los que sean parientes, á diferentes salas de justicia; 4.º, en los casos en que procede dicha suspension, debiendo entonces hacerse la traslacion, siempre que fuere posible, dentro de un año desde que comenzó la suspension. Los jueces de tribunales de partido y magistrados de audiencia *podrán* ser trasladados: 1.º, por disidencias graves con los demás magistrados que compongan el tribunal á que correspondan; 2.º, cuando la sala de gobierno de la audiencia lo proponga con fundado motivo, respecto á los jueces de los tribunales de partido, ó la del Tribunal Supremo de Justicia respecto á los magistrados de audiencia; 3.º, cuando circunstancias de otra clase, ó consideraciones de orden público muy calificadas, exigieren la traslacion.

¿Con qué condiciones y garantías debe acordarse la traslacion?—La de los jueces y magistrados que se fundare en alguna de las causas de suspension *disciplinaria*, no podrá hacerse, en ningun caso, á plaza que tenga categoria ó sueldo superior ó inferior al que desempeñase el trasladado, y se hará *sien pre*, previa consulta del Consejo de Estado, en decreto acordado en Consejo de ministros y refrendado por el de Gracia y Justicia.

¿Cuándo procede la *jubilacion* de los jueces y magistrados?—Cuando se inutilizaren para el servicio, física ó intelectualmente, y *podrán* ser jubilados á su instancia ó por resolucion del gobierno, los jueces de instruccion que hayan cumplido sesenta y cinco años, y los de partido y magistrados que hayan cumplido setenta. Cuando la jubilacion no sea á instancia del interesado, deberá ser oido el juez ó magistrado en el expediente gubernativo que al efecto se instruya.

Los jubilados por inutilidad antes de cumplir los sesenta años podrán

(1) Véase la nota anterior.

ser rehabilitados y volver al servicio, acreditando haber desaparecido la causa que hubiese motivado la jubilacion, oído el Consejo de Estado.

Cuando la suspension, la destitucion, la traslacion ó la jubilacion no se ajustare á las reglas que quedan indicadas, los jueces y magistrados podrán entablar recurso *contencioso* contra la administracion ante el Tribunal Supremo.

Del mismo modo que hemos dicho al final del capítulo que trata del ingreso y ascenso en la carrera judicial, relativo á manifestar que lo dispuesto en la ley orgánica de tribunales no estaba vigente en absoluto, debemos hacer aquí igual manifestacion, en cuanto á la inamovilidad de los jueces y magistrados. Otro decreto de 23 de Enero de 1875, estableció nuevas bases para declararla, y dejó sin efecto las declaraciones de inamovilidad hechas en virtud de la disposicion sexta de las transitorias de la citada ley orgánica, dictando reglas á la Junta de clasificacion, á que debia atenderse para formular su dictámen, en cuanto á los antecedentes de los funcionarios, y á los méritos, servicios y tiempo de cesantías. Este decreto puede verse en el apéndice.

268^a Responsabilidad judicial.

El principio de la responsabilidad judicial, proclamado ya en nuestras antiguas leyes y casi nunca llevado al terreno de la práctica, ha obtenido completo desenvolvimiento en la ley provisional sobre organizacion de tribunales. Toda infraccion de ley relativa al ejercicio de funciones judiciales, prevista y castigada en el Código penal ó en otras leyes especiales, es causa de responsabilidad *criminal*, y puede serlo de responsabilidad *civil*, por los daños y perjuicios ocasionados por la negligencia ó ignorancia inexcusables de los jueces y magistrados (1).

¿Cómo puede comenzar el juicio de responsabilidad *criminal*?—1.º, en virtud de providencia del tribunal competente; 2.º, á instancia del ministerio fiscal; 3.º á instancia de persona hábil para comparecer en juicio, en uso del derecho que le concede la Constitucion (2). El Tribunal Supremo en todo caso, y las audiencias en los que sean de su competencia, pueden tambien mandar, oyendo previamente al ministerio fiscal, que se abra el juicio de responsabilidad. Los jueces y tribunales de partido se limitarán á poner en conocimiento del fiscal de la audiencia á cuyo territorio pertenezcan los hechos y los antecedentes que tengan, para que éste pueda ejercitar la accion criminal correspondiente, ó excitar á otro fiscal á que proceda, si fuere de distinta jurisdiccion el delincuente.

La misma manifestacion harán los jueces y tribunales al presidente de la audiencia, expresando que ya lo han puesto en conocimiento del fiscal.

¿Qué orígenes puede tener ó á qué causas ser debida la denuncia fiscal?—A una Real orden, ó al cumplimiento de su deber. La Real orden en que se excite al ministerio fiscal para incoar los procedimientos, expresará el hecho ó hechos que deban ser objeto de las actuaciones judiciales, y será dirigida al fiscal del Tribunal Supremo, quien formulará la denuncia cor-

(1) El art. 81 de la Constitucion de 1876, dice que los jueces son responsables personalmente de toda infraccion de ley que cometan.

(2) La de 1869 daba el carácter de *pública* á la accion para perseguir la responsabilidad judicial. La de 1876, nada dice concretamente.

respondiente, cuando fueren magistrados aquellos contra quienes deba procederse; y siendo un juez municipal, de instruccion, de tribunal de partido ó de primera instancia, el fiscal del Tribunal Supremo la trasladará al de la audiencia á que corresponda el conocimiento de la causa, con las instrucciones que estime convenientes, el cual entablará la denuncia que proceda con arreglo á las leyes.

Tambien harán la denuncia correspondiente los fiscales de las audiencias cuando llegue á su conocimiento la perpetracion de algun delito cometido por un juez municipal, de instruccion ó de tribunal de partido, sin necesitar excitacion de su superior jerárquico, ni del gobierno. Esto, no obstante, el fiscal del Tribunal Supremo, los de las audiencias, tribunales de partido y los municipales, denunciarán por sí cuando les corresponda, ó poudrán en conocimiento de sus superiores, los hechos que crean dan lugar á responsabilidad, segun la categoría de la persona responsable.

¿De cuántos periodos consta el juicio de responsabilidad?—De dos: el primero llamado *ante juicio*, en el cual se declara, ó no, haber lugar á proceder contra el querrellado, sin que la declaracion afirmativa prejuzgue su criminalidad; y el segundo que constituye el verdadero juicio, compuesto de *sumario* y *juicio oral*, en los términos y con las formalidades que prescribe la ley de Enjuiciamiento criminal.

¿En qué consiste la responsabilidad *civil*?—En el resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan ser apreciados en metálico, que los jueces y magistrados causen á los particulares, corporaciones ó al Estado euando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia ó ignorancia inexcusables; debiendo entenderse que lo hay, aún cuando falte la intencion, siempre que la providencia perjudicial fuere manifestamente contraria á la ley, al trámite ó solemnidad mandada observar, bajo pena de nulidad.

¿Cuándo, por quién y ante qué tribunal debe exigirse la responsabilidad *civil*?—Cuando sea firme la sentencia que hubiere recaído en la causa ó pleito en que se suponga causado el agravio, y solamente podrá exigirse á instancia de la parte perjudicada ó de sus causa-habientes, en juicio ordinario y ante el tribunal inmediatamente superior al que hubiere incurrido en ella. Si se entablare contra los magistrados de una sala del Tribunal Supremo, se exigirá ante todos los demás que compongan el tribunal, constituidos en sala de justicia, siendo presidente el que lo sea del tribunal. No podrá entablar el juicio de responsabilidad civil el que no haya reclamado oportunamente durante el procedimiento, pudiendo hacerlo. En ningun caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia firme.

269 De los auxiliares de los juzgados y tribunales. y 272

Para que éstos puedan llenar cumplidamente la difícil é importante mision que les está confiada, la ley les concede un personal de auxiliares que contribuyen bajo su inspeccion, direccion y dependencia, á llenar los fines de la administracion de justicia. Están tambien bajo las órdenes de los juzgados y tribunales otras personas llamadas subalternos de aquéllos.

Bajo la denominacion de *auxiliares* de los juzgados y tribunales se comprenden: los secretarios, los archiveros judiciales y los oficiales de sala. Segun se vé, han desaparecido por la nueva ley los escribanos, los relatores, los secretarios archiveros, los cancilleres registradores y los tasadores repartidores, al ménos bajo estas denominaciones.

269

Secretarios judiciales.

¿Cuántas clases debe haber de secretarios judiciales?—Siete: *secretarios de juzgados municipales, de juzgados de instruccion, de tribunales de partido, de salas de justicia de las audiencias, de gobierno de éstas, de salas de justicia del Tribunal Supremo y de gobierno del mismo.*

¿Qué condiciones son comunes á los secretarios judiciales?—Para ser secretario judicial, cualquiera que sea su denominacion ó clase, se requiere: 1.º, reunir las condiciones que se exigen para ser juez ó magistrado; 2.º, no estar comprendido en ninguno de los casos de incapacidad para dichos cargos; 3.º, no obtener empleos de los que son incompatibles con las funciones judiciales, excepto los secretarios de los juzgados municipales, y ser de buena conducta moral.

Antes de tomar posesion deben prestar juramento ante los jueces y tribunales á quienes van á auxiliar, de los cuales recibirán la posesion, debiendo residir en el pueblo en que ejerzan sus funciones, del cual no podrán ausentarse sin previa licencia.

¿Qué obligaciones y facultades tienen los secretarios judiciales?—Hay que distinguir los secretarios *de justicia* de los secretarios *de gobierno*. Los primeros deben auxiliar á los jueces y tribunales en el ejercicio de la jurisdiccion, guardar secreto en las materias que lo exijan, anotar la entrega y devolucion de autos y presentacion de escritos, dar cuenta sin dilacion de las pretensiones de éstos, extender y autorizar con su firma las actuaciones, providencias, autos y sentencias que ante ellos pasen, custodiar y conservar los procesos y documentos, no expidiendo certificaciones y testimonios sin mandato judicial, cuidar de llevar al corriente los libros de su oficina, y por fin ejercer sus funciones con imparcialidad y sujetándose á las leyes y reglamentos.

¿Qué otras obligaciones deben cumplir, relativas al despacho de los negocios?—1.º, deben dar cuenta de palabra ó por escrito con la concision posible, segun la sencillez y gravedad del negocio cuando se trate de providencias de tramitacion; 2.º, deben formar los apuntamientos y expresar en ellos si puede fallarse la contienda ó existen defectos de nulidad; 3.º, deben manifestar al tribunal si las sentencias apeladas ó recurridas fueron dictadas dentro del término legal; 4.º, consignar al margen los nombres y apellidos de los jueces ó magistrados que dicten las providencias, autos y sentencias, cuyas rúbricas cuidarán de recoger anotando el tiempo invertido en las vistas y los nombres de los defensores que hayan asistido, y 5.º, les corresponde tambien extender y refrendar las reales provisiones, cartas y despachos, regular las costas segun arancel y cumplir cualesquiera otros deberes que la ley les imponga.

¿Es inamovible el cargo de secretario judicial?—Pueden ser *separados y suspendidos* en ciertos casos; y *trasladados*, con su consentimiento, previo expediente, por algunas de las causas que dan lugar á la destitucion de los jueces.

Los presidentes de los tribunales de partido, de las audiencias y del Tribunal Supremo *suspenderán* respectivamente á los secretarios: 1.º, cuando disciplinariamente se les impusiere como correccion la suspension de empleo y la privacion de sueldo y emolumentos; 2.º, cuando fueren procesados criminalmente; 3.º, cuando se promoviere expediente para su separacion. En estos casos les será aplicable lo que respecto á los jueces y magistrados hemos dicho.

¿Quiénes tienen derecho preferente á ser *secretarios* y *suplentes* de éstos en los juzgados municipales?—Los que tuvieren algunos conocimientos ju-

ridicos adquiridos en estudios profesionales ó en la práctica de negocios judiciales. Serán nombrados por los presidentes de los tribunales de partido, á propuesta en terna hecha por los jueces municipales. Su dotacion consistirá en los derechos que les estuvieren señalados en los aranceles judiciales. Habrá un sólo secretario y un suplente.

¿Qué condiciones se requieren para ser secretario de juzgado de instruccion ó de tribunal de partido?—Además de las expresadas como necesarias para ser juez ó magistrado, que ya quedan enumeradas, la ley exige las siguientes: 1.^a, estar graduado de licenciado en Derecho en universidad costeada por el Estado, ó ser abogado recibido por los tribunales cuando estaban autorizados para ello, ó haber obtenido la habilitacion necesaria para hacer oposicion á esta clase de secretarías en virtud de los estudios y del exámen previo que señalen los reglamentos; 2.^a, ser peritos en taquigrafía; 3.^a, haber obtenido la plaza por oposicion.

¿Cómo se proveerán las plazas indicadas?—Las secretarías de los juzgados de instruccion se proveerán siempre por oposicion. Las de tribunales de partido alternativamente por oposicion y por concurso, entre los secretarios de la categoría inmediatamente inferior. Una junta calificadora, compuesta del presidente, fiscal y dos magistrados de la audiencia, del decano y dos abogados del colegio, hará para cada plaza la propuesta en terna que considere justa en vista del resultado de las oposiciones, y las salas de gobierno de las audiencias formarán las ternas para la provision por concurso. Unas y otras las elevarán al gobierno, á quien corresponde el nombramiento.

El número de secretarios de los juzgados de instruccion y tribunales de partido lo fijará el gobierno, segun las necesidades del servicio, y no tendrán más retribucion que la que les corresponda con arreglo á los aranceles judiciales.

¿Qué funciones corresponden á los *secretarios de gobierno*?—Entenderán exclusivamente en los negocios gubernativos de las audiencias y del Tribunal Supremo, sin que directa ni indirectamente intervengan en los que tengan carácter contencioso más que para darles el curso correspondiente en sus relaciones con la presidencia. Corresponderá además á los secretarios de gobierno: 1.^o, conservar el sello del tribunal; 2.^o, sellar y registrar las reales provisiones, cartas y despachos que mandare librar el tribunal para las partes interesadas ó de oficio; 3.^o, llevar un registro exacto en que estén copiados literalmente los documentos expresados en el número anterior, y no dar copia de ninguno de ellos sin órden escrita del tribunal ó de alguna de sus salas; 4.^o, estar al frente del archivo del tribunal, con el carácter y fé pública de archivero, en los tribunales en que no lo hubiere especial, con las atribuciones y responsabilidades de este cargo; 5.^o, estar al frente de la biblioteca de los tribunales en que no hubiere archivero. En el Tribunal Supremo estará también á cargo de la secretaria la direccion de la *Coleccion legislativa*, en la parte que se refiere á las resoluciones que deben insertarse en aquélla.

Para auxiliar á los secretarios de gobierno y reemplazarles en caso de vacante, ausencia, enfermedad ó cualquier otro impedimento legal, existe en el Tribunal Supremo un vice-secretario, pudiendo crearse este cargo en alguna audiencia, cuando la aglomeracion de negocios lo hiciera necesario ó conveniente.

¿Cómo deben proveerse las secretarías de las salas de justicia y vice-secretarías de las audiencias; y qué condiciones deben concurrir en los aspirantes?—Se proveerán siempre por oposicion directa en personas que, además de reunir las circunstancias indispensables para ser nombradas jueces ó magistrados, deben ser peritas en taquigrafía y figurar en la terna correspondiente. Las secretarías de gobierno de las audiencias se proveerán entre los secretarios de las salas de justicia que opten á ellas, y si no

los hubiere, por oposicion. Las secretarías de las salas de justicia del Tribunal Supremo se proveerán alternativamente por concurso y por oposicion. La de gobierno del Tribunal Supremo tambien lo será por concurso, dando la preferencia á los secretarios de sala del mismo tribunal, á los de gobierno de las audiencias, en su defecto á los de salas de justicia, y no habiéndolos, se proveerá por oposicion. La vice-secretaría del referido tribunal se proveerá siempre en esta forma ante la sala de gobierno.

L 69

Archiveros judiciales.

Reciben este nombre los funcionarios nombrados por el gobierno para la custodia, conservacion y arreglo de los documentos que se les confien y de las bibliotecas de los tribunales, estando bajo sus órdenes los empleados necesarios al efecto. Tienen dotacion fija y se pública en los certificados que expidan en virtud de providencia judicial. Debe haberlos en el Tribunal Supremo y en las Audiencias en que el gobierno lo estime necesario.

¿Cómo se nombran y qué condiciones deben tener los nombrados?—Serán propuestos en terna por la sala de gobierno del tribunal respectivo, y nombrados por el ministerio de Gracia y Justicia. Para ser archivero se necesita reunir las condiciones que las disposiciones generales de la administracion señalen para esta clase de destinos, y reunir además la circunstancia de ser abogados.

L 69

Oficiales de sala.

¿Quiénes son los *oficiales de sala*?—Los funcionarios públicos nombrados para auxiliar á los tribunales en la aplicacion práctica de la administracion de justicia, llevando á efecto los mandatos judiciales, de orden y fuera de la presencia de los juzgados ó tribunales de quienes dependan. Debe haberlos en el Tribunal Supremo y en las audiencias, pudiendo nombrarseles para los tribunales de partido, siempre que el gobierno lo considere conveniente.

¿Cuáles son, pues, los deberes y facultades de los oficiales de sala?—1.º, hacer los emplazamientos, citaciones y notificaciones, embargos, recogidas de autos y demás diligencias que deban practicarse fuera de la presencia judicial; 2.º, asistir al presidente del tribunal y presidentes de las salas y á los jueces, á cuyas órdenes estuvieren, para cumplir las que les dicten, relativas al servicio judicial; 3.º, asistir á los estrados siempre que por circunstancias especiales lo mande el presidente de la sala á que estén adscritos, haciendo que los concurrentes guarden en ella orden y compostura.

¿Qué circunstancias deben reunir, y de quién reciben el nombramiento?—Para ser oficial de sala se requiere: 1.º, reunir todas las circunstancias que deben concurrir en los secretarios judiciales; 2.º, tener conocimiento de las prácticas judiciales relativas al oficio que han de desempeñar. Los oficiales de sala de las audiencias y del Tribunal Supremo serán de nombramiento real, á propuesta en terna de la sala respectiva de gobierno. Los de los tribunales de partido serán de nombramiento de los presidentes de las audiencias, á propuesta en terna del tribunal, al cual hayan de auxiliar en el ejercicio de sus funciones. Su número lo fija el gobierno, con informe de las audiencias.

¿Es inamovible el cargo de oficial de sala?—Goza de las mismas garan-

tías que disfrutan los secretarios judiciales, respecto á su destitucion, suspension, traslacion y licencias.

Pueden considerarse tambien como auxiliares de los tribunales los médicos forenses, los asesores letrados, los intérpretes de lenguas, revisores de letras, los antiguos fieles de fechos, los alcaides de las cárceles, la policia judicial y los *hombres buenos*.

269 Subalternos de los juzgados y tribunales.

Bajo la denominacion de subalternos de los Juzgados y tribunales se comprenden los *porteros*, *alguaciles*, *mozos de estrados* y *mozos de oficio*. El número y la clase de subalternos, en los Juzgados de instruccion, tribunales de partido, audiencias y en el Tribunal Supremo, se fijará por el gobierno; segun las necesidades del servicio (1).

275 Del gobierno y régimen de los tribunales.

El gobierno del Tribunal Supremo, de las audiencias y de los tribunales de partido, corresponde y está á cargo de sus respectivos *presidentes*. Por consiguiente, es de su deber cumplir y hacer que se cumplan las leyes; guardar y hacer que se guarde el orden debido en los tribunales; recibir y despachar la correspondencia oficial; reunir y presidir el tribunal pleno y la sala de gobierno; ordenar y distribuir las salas de justicia, que podrán presidir cuando les parezca; llamar al fiscal y conferenciar con él; dar cuenta al gobierno de las vacantes, entradas, salidas y licencias de los magistrados, jueces y auxiliares; oír y remediar las quejas que se les hagan referentes á la administracion de justicia; entender, en fin, en todo lo relativo al gobierno interior de los tribunales, y en tantas otras funciones gubernativas que por su variada indole no podemos enumerar (2).

¿Qué facultades, además de las dichas, corresponden á los *presidentes* del Tribunal Supremo y de las audiencias?—1.^a, la de pedir el primero directamente á los presidentes de las audiencias de los tribunales de partido y á los Juzgados municipales, los pleitos, causas ó expedientes que estuvieran terminados; 2.^a, la facultad de disponer visitas de inspeccion para examinar el estado de la administracion de justicia, despues de oír á la junta de gobierno del Tribunal Supremo.

Los presidentes de las audiencias tendrán las mismas atribuciones, pero limitadas al territorio de la audiencia.

¿Qué atribuciones pertenecen á los *presidentes de sala*?—Deben cumplir y hacer cumplir las leyes que se refieran al cargo que desempeñan; presidir las salas á que correspondan; llevar en ellas la palabra, sin que ningun otro, sin su permiso, pueda usarla; hacer que en las mismas se guarde el orden debido y poner en conocimiento del presidente todo lo que estimen oportuno á la mejor administracion de justicia, y las faltas de los magistrados, cuando consideren que necesitan algun correctivo que no quepa dentro del límite de sus atribuciones.

(1) Por Real orden de 30 de Enero de 1878 se declaró que el nombramiento de los *alguaciles* de los Juzgados, como subalternos que son de los mismos, corresponde hacerlo á los jueces de primera instancia, dando preferencia á los licenciados de la clase de tropa.

(2) Puede verse al efecto el titulo XI de la ley provisional, sobre organizacion del poder judicial.

¿Qué atribuciones corresponden á los presidentes de tribunales de partido?—Además de las comunes, que ya quedan indicadas y son compatibles con la organizacion y jerarquia de los tribunales que presiden, pueden: 1.º, exponer al gobierno, por conducto de los presidentes de las audiencias, lo que crean necesario ó conveniente para la mejor administracion de justicia en su partido; 2.º, recibir las excusas de asistencia que den los jueces, auxiliares y subalternos del tribunal; 3.º hacer al fiscal las indicaciones que estimen oportunas para la mejor administracion de justicia, sin coartarle la libertad de acción que le corresponde; 4.º, poner en conocimiento de los presidentes de las audiencias las vacantes que ocurran y las entradas y salidas de los jueces de instruccion y de los del tribunal que presidan.

De las audiencias y del Tribunal Supremo en pleno.

Las audiencias y el Tribunal Supremo se reunirán *en pleno*: 1.º, para constituirse en sala de justicia; 2.º, para los actos que no tengan carácter judicial. Se constituirán las audiencias *en pleno*, como salas de justicia, cuando hayan de decidir los incidentes de recusacion de sus presidentes y presidentes de sala, ó de más de dos magistrados que sean de una misma. El Tribunal Supremo se constituirá *en pleno*, como sala de justicia, en los casos referidos al enumerar anteriormente sus facultades y atribuciones (1). Ambos tribunales, constituidos en esta forma, se ajustarán á lo que prescriben las leyes para las salas de justicia, valiéndose de los auxiliares y subalternos que nombrará el presidente.

¿En qué casos deben constituirse *en pleno* para actos que no tengan carácter judicial?—1.º, para examinar, acordar ó suspender el cumplimiento de los nombramientos de los jueces y magistrados, recibirles juramento y darles posesion en el acto; 2.º, para evacuar los informes que les pida el gobierno sobre reformas legislativas; 3.º, cuando para deliberar sobre algun asunto grave lo acuerde la sala de gobierno, ó lo ordene el presidente.

¿Qué intervencion tiene el ministerio fiscal en las reuniones de los tribunales *en pleno*?—El fiscal tendrá voz y voto. El teniente fiscal ó el abogado fiscal que le sustituya, tendrá voz, pero no voto.

Salas de gobierno.—Junta de tribunales de partido.

¿Cuáles son las principales atribuciones de las salas de gobierno?—Corresponde á las salas de gobierno de las audiencias y á la del Tribunal Supremo: 1.º, velar por la administracion de justicia en su respectivo distrito á las de cada audiencia, y á la del Tribunal Supremo, en toda la monarquía; 2.º, despachar los negocios que por su índole no correspondan á salas de justicia; 3.º, evacuar los informes que el gobierno ó el presidente del tribunal indicado les pida, relativos á la administracion de justicia; 4.º, proponer al gobierno la separacion de los empleados de las dependencias del tribunal, y acordar en este caso su suspension; 5.º, decidir las cuestiones relativas al repartimiento de negocios entre las salas del tribunal á que correspondan, dándoles carácter gubernativo; 6.º, en los casos de disiden-

(1) Pág. 10.

cia entre magistrados, ó entre salas, adoptar las medidas prudentes que requiera el caso, y si no bastaren, proponer al gobierno lo que estimen más conducente; 7.º, ejercer la jurisdicción disciplinaria en los casos que expresa esta ley, y constituirse en tribunal de justicia.

A semejanza de las salas de gobierno, todos los jueces que componen los tribunales de partido debían reunirse gubernativamente, según la ley orgánica, con asistencia del fiscal, para ejercer funciones análogas, en cuanto cabe, á las de las salas de gobierno, lo cual no es hoy de aplicación porque, como hemos dicho repetidas veces, no existen esos tribunales. El fiscal ausente ó impedido será sustituido, en su caso, por el juez más moderno.

Constitucion, audiencias y policía de estrados, de los juzgados y tribunales.

Desde el 15 de Setiembre de cada año, época de la apertura de los tribunales en el Supremo, aquéllos y los juzgados tendrán todos los días no feriados audiencia pública en el edificio destinado al efecto, por el tiempo que á continuación se expresa: los jueces municipales, por el que sea necesario para el despacho de los negocios del día; exceptuándose los que lo sean de pueblo que no llegue á cincuenta vecinos, los cuales podrán destinar sólo dos días á la semana si bastaren para el despacho; los jueces de instruccion, por tres horas á lo ménos; los tribunales de partido, las audiencias y el Tribunal Supremo, por cuatro horas, de las cuales tres por lo ménos, se destinarán á la vista de los pleitos y causas. La asistencia es necesaria, á no mediar justa causa, debiendo ser sustituidos, el juez municipal por su suplente, y el de instruccion por el municipal.

¿Cuántos magistrados se requieren para formar sala?—En todos los casos en que la ley no exija determinado número, bastarán para formarla, dos jueces en los tribunales de partido, tres en las audiencias y cinco en el Tribunal Supremo de justicia.

¿Cómo debe hacerse el despacho ordinario y la vista de los juicios?—En audiencia pública. Se hará, sin embargo, á puerta cerrada cuando lo exijan la moral ó el decoro. Tendrán preferencia en el despacho las cuestiones de alimentos provisionales, de competencia, los interdictos posesorios, los de obra nueva ó vieja, los juicios ejecutivos, las denegaciones de justicia ó de prueba, las causas por delitos á que la ley señale pena que exceda de la de presidio mayor, y otros expresamente exceptuados.

¿Qué efecto producen las actuaciones practicadas bajo la influencia de intimidación ó de fuerza?—Son nulos todos los actos judiciales, y los jueces y tribunales que hubieren cedido á la intimidación ó á la fuerza, tan luego como se vean libres de ellas, lo declararán así todo y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables.

De los acuerdos, providencias, autos y sentencias y forma en que deben dictarse.—Ejecutorias.—Jueces y magistrados ponentes.

¿A qué se dá el nombre de *acuerdos*?—A las resoluciones de los tribunales en pleno, cuando no estén constituidos en salas de justicia, y á las de las salas de gobierno. La misma denominación se dará á las advertencias y

á las correcciones que se impongan en las sentencias ó en otros actos judiciales, cuando no se exprese en los autos la falta, correccion y nombre de la persona á que se refieran, con la frase *á lo acordado*.

¿Qué son *providencias* y cuáles reciben el nombre de *autos*?—Las resoluciones de los juzgados y tribunales que tengan carácter judicial, se denominarán: *providencias* cuando sean de mera tramitación, y *autos* cuando decidan incidentes ó puntos que determinen la personalidad combatida de alguna de las partes, la competencia del juzgado ó tribunal, la procedencia ó improcedencia de la recusacion, la determinacion de la accion, la admission ó inadmission de las excepciones ó de la reconvention, la reposicion de alguna providencia, la denegacion de la reposicion, la prision y soltura, la admission ó denegacion de prueba, las que puedan producir á las partes un perjuicio irreparable, y las demás que según las leyes *deban fundarse*.

¿Cómo pueden definirse las *sentencias*?—Son las resoluciones de carácter judicial de los juzgados y tribunales, que deciden definitivamente la cuestion civil ó criminal del pleito ó de la causa, en una instancia ó en un recurso extraordinario. Las que, recayendo sobre un incidente, pongan término á lo principal, objeto del pleito, haciendo imposible su continuacion, y las que declaren haber ó no lugar á oír á un litigante ó reo declarado en rebeldia, son objeto de la sentencia. Pueden ser *firμες* y *revocables*; son *sentencias firmes* aquellas contra las cuales no se da recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes; son *sentencias revocables* las que aún no han adquirido el carácter de *firμες*.

¿Qué es *ejecutoria*?—El documento público y solemne en que se consigna literalmente una *sentencia firme*.

¿En qué forma deben dictarse las tres clases de resoluciones judiciales indicadas y las *ejecutorias*?—La fórmula de las *providencias* se limitará á la determinacion del juez ó tribunal, sin más fundamentos ni adiciones, que la fecha en que se acuerde, la rúbrica del juez ó del presidente de sala, y la firma del secretario. Los *autos* se formularán fundándolos en *resultandos* y *considerandos* concretos y limitados unos y otros á la cuestion que se decida. Las *sentencias definitivas* se formularán con *resultandos*, en que se espresa con claridad y con la posible concision, los hechos importantes que estén enlazados con las cuestiones que haya de resolver el juez ó tribunal, y con *considerandos* en que se haga aplicacion de las leyes. Las *ejecutorias* se encabezarán en nombre del rey. En ellas se insertarán las sentencias firmes, y las anteriores, solo cuando, por referirse las firmas á ellas, sean su complemento necesario.

¿Cómo deben instruirse los jueces y tribunales antes de dictar resolucion judicial?—El juez único para dictar sentencia, verá por sí los autos. A los tribunales colegiados se dará cuenta de ellos por los respectivos secretarios; formando apuntamiento en los casos que lo ordenen las leyes de Enjuiciamiento. Concluida la vista, podrá cualquiera de los jueces ó magistrados pedir los autos para reconocerlos privadamente; exceptuábanse las sentencias en los juicios por jurados, que debian votarse inmediatamente despues de pronunciado el veredicto, no pudiendo separarse el tribunal hasta que hubiese votado reservadamente y se hubiese publicado la sentencia en la sala en que se hubiere celebrado el juicio (1).

¿Quiénes son los *ponentes*?—Los jueces ó magistrados encargados, entre otras cosas, de la redaccion de las sentencias, en cuyo cargo turnarán los individuos de los tribunales.

(1) Sabido es que el juicio por jurados, así como el juicio oral ante las salas, se ha suspendido por Real decreto de 3 de Enero de 1875.

¿Qué atribuciones y deberes corresponden á los ponentes?—1.ª, informar al tribunal ó á la sala, sobre la admision ó desestimacion de las adiciones á los apuntamientos; 2.ª, examinar los interrogatorios y proposiciones de prueba y calificar su pertinencia; en caso de reclamacion, decidirá el tribunal; 3.ª, discernir los cargos de curadores para pleitos ó causas, recibir las declaraciones y ratificaciones de los testigos y practicar todas las diligencias de prueba ó de otra clase que les ordene el tribunal ó la sala; 4.ª, proponer los autos y las sentencias y redactarlas definitivamente, conformándose con lo acordado, y 5.ª, leer en audiencia pública la sentencia. Comenzada la votacion no puede interrumpirse sino por algun impedimento insuperable, y todo el que tome parte en la de una sentencia, firmará lo acordado, aunque hubiese disentido de la mayoría; pero podrá, en este caso, salvar su voto extendiéndolo, fundándolo ó insertándolo con su firma al pie, dentro de las veinticuatro horas siguientes, en el libro de *votos reservados*.

En las causas en que intervenia el jurado debia practicarse lo que establece la ley de Enjuiciamiento criminal, de la que nos ocuparemos en su lugar oportuno.

¿Qué número de votos se necesitan para dictar sentencia?—La mayoría absoluta, excepto cuando la ley exige mayor número. De lo expuesto se deduce que á toda sentencia debe preceder la discusion y la votacion, debiendo aquélla ser firmada por todos los votantes no impedidos, dentro de las veinticuatro horas siguientes á la en que se haya acordado, á excepcion de las en que intervenia el jurado, que debian firmarse en el acto. Unas y otras se extenderán en el libro registro de sentencias y se notificarán á los procuradores de las partes el mismo dia en que se publiquen, ó á lo ménos al siguiente.

¿Son reformables las sentencias por el mismo tribunal que las dicta?—No pueden variarse despues de firmadas; pero si aclararse algun concepto oscuro ó suplir cualquiera omision que contengan, dentro del dia hábil siguiente al de la notificacion. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio ó á instancia de parte del ministerio fiscal en su caso.

Segun acabamos de ver, ha desaparecido de la nomenclatura judicial la division que se hacia de las sentencias en *definitivas* é *interlocutorias* (1). Las primeras decidian la cuestion principal, las segundas resolvian los incidentes nacidos durante el curso del procedimiento, ya sobre la cosa litigiosa, ya acerca de la ritualidad.

De la jurisdiccion disciplinaria.

Puede definirse, la facultad que tienen los superiores jerárquicos para corregir los hechos, faltas ú omisiones determinadas por la ley, que si bien no constituyen delito, son dignos de censura por la naturaleza de los mismos y por lo que afectar pudieran al prestigio de la institucion á que pertenecen los individuos culpables. La jurisdiccion disciplinaria no se extiende á los hechos ni á las omisiones que constituyan delito, ni á hechos de la vida privada que no se hayan manifestado con publicidad.

¿Qué personas están sujetas á la jurisdiccion disciplinaria?—Los jueces y magistrados; los auxiliares de los juzgados y tribunales, y los abogados y procuradores.

¿Qué tribunales ejercen dicha jurisdiccion?—Los tribunales de partido

(1) Sin embargo, la ley orgánica de tribunales usa alguna vez la frase *sentencias definitivas*, como puede verse, entre otros, en el art. 694.

respecto á los jueces municipales y de instruccion; las salas de gobierno de las audiencias respecto á los jueces de tribunales de partido; la sala de gobierno del Tribunal Supremo respecto á los magistrados; ambas deben constituirse en salas de justicia para ejercer la jurisdiccion disciplinaria.

¿En qué casos procede la correccion de los jueces y magistrados?—1.º, cuando faltaren de palabra, por escrito ó por obra, á sus superiores en el órden jerárquico, ó á las consideraciones debidas á sus iguales; 2.º, cuando traspasaren los límites racionales de su autoridad respecto á los auxiliares y subalternos de los juzgados y tribunales, ó á los que acudan á ellos en asuntos de justicia, ó á los que asistan á los estrados, cualquiera que sea el objeto con que lo hagan; 3.º, cuando fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes; 4.º, cuando por la irregularidad de su conducta moral, ó por vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público, comprometiesen el decoro de su ministerio; 5.º, cuando por gastos superiores á su fortuna contrajeran deudas que dieran lugar á que se entablen contra ellos demandas ejecutivas; 6.º, cuando recomendaran á jueces ó tribunales negocios pendientes en juicio contradictorio ó causas criminales; 7.º, cuando infringieren las prohibiciones 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª de las que impone la ley á los individuos del poder judicial (1), y 8.º, cuando sin autorizacion del ministerio de Gracia y Justicia, publicaren escritos en defensa de su conducta oficial, ó atacando la de otros jueces ó magistrados.

¿Quiénes podrán promover las correcciones de los jueces y magistrados y con qué fundamento?—Los presidentes de los tribunales y los fiscales de éstos, por los datos que con caracteres de ciertos hayan llegado á su noticia, por queja de los agraviados con antecedentes bastantes para demostrar la existencia de hechos que caigan bajo la jurisdiccion disciplinaria, ó cuando se lo prevengan sus superiores en el órden jerárquico.

¿Qué tramitacion siguen estos expedientes?—El procedimiento será meramente instructivo y consistirá en dar vista al juez ó al magistrado y al fiscal contra quien se proceda, de los antecedentes, admitir los medios de prueba que ámbos presentaren, procurar el complemento de los demás que puedan contribuir á aclarar ó á fijar los hechos, y oír por escrito á la parte interesada y al ministerio fiscal. Terminado el expediente, el tribunal ó la sala de gobierno impondrá la correccion disciplinaria ó declarará no haber lugar á imponerla.

¿Qué correcciones disciplinarias pueden imponerse á los jueces y magistrados?—A los jueces municipales sólo se impondrá la *represion simple* y la *multa*, que nunca bajará de 25 pesetas, ni excederá de 250. A los jueces de instruccion, á los de tribunales de partido y á los magistrados, se les impondrán la *represion simple*, *represion calificada*, *postergacion* para ascensos, *privacion* de sueldo, *suspension* de empleo y *privacion* de sueldo.

¿En qué consiste la *represion simple* y la *calificada*?—Consiste la *represion simple* en la comunicacion literal de la correccion que el presidente del tribunal corrector hará al corregido directamente, cuando fuese éste juez municipal ó presidente de tribunal de partido ó de audiencia, y en los demás casos por conducto del presidente del tribunal á que corresponda; la *represion calificada* consiste en la comunicacion hecha del modo expresado, y en la pérdida de sueldo correspondiente, de uno á tres meses.

¿En qué consiste la *postergacion*?—En no poder ser ascendido por término de seis meses á un año.

¿Cuánto puede durar la *privacion* de sueldo y la *suspension* de empleo y sueldo?—La *privacion* de sueldo no bajará de tres meses, ni excederá de seis; la *suspension* de empleo y *privacion* de sueldo durará por lo ménos

tres meses, y podrá extenderse hasta doce; en los casos de reincidencia ésta será siempre por un año.

Las correcciones impuestas por los tribunales de partido son reclamables ante las salas de gobierno de las audiencias; contra sus resoluciones y las de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, no se da ulterior recurso.

¿Qué correcciones podrán imponerse á los auxiliares?—La *advertencia*, el *apercibimiento*, la *multa*, que no exceda de 100 pesetas en los juzgados municipales, de 200 en los de instrucción, de 300 en los de partido, de 500 en las audiencias y de 1 000 en el Tribunal Supremo; la *reprension* á puerta cerrada y *suspension* de empleo y *privacion* de sueldo y de emolumentos, que no exceda de seis meses ni baje de tres; en caso de reincidencia en actos de la misma clase, podrá extenderse á un año. Durante la *suspension*, el sueldo y emolumentos serán para los que desempeñen sus cargos.

Contra estas correcciones pueden recurrir los interesados al superior del que las haya impuesto, excepto contra las de las salas de gobierno de las audiencias y del Tribunal Supremo.

¿Por quiénes y en qué casos pueden ser corregidos los abogados y procuradores?—Lo serán disciplinariamente por los juzgados municipales, tribunales de partido y por las salas de justicia de los demás tribunales, en los casos siguientes: 1.º, cuando faltaren oralmente, por escrito ó de obra al respeto debido á los juzgados y tribunales; 2.º, cuando en la defensa de sus clientes se descompusieren contra sus colegas de una manera grave é innecesaria para aquélla, y cuando llamados al orden en las alegaciones orales, no obedecieren al que presidiere el tribunal. No obsta lo dicho á que los juzgados y tribunales impongan á los abogados y procuradores las correcciones que correspondan, con arreglo á las leyes, por faltas ó excesos en el ejercicio de sus cargos, que no sean de los comprendidos en los casos que hemos transcrito.

L 73^a

DEL MINISTERIO FISCAL (1).

Al lado de cada juez ó tribunal, excepto de los jueces de instrucción, existe uno ó más funcionarios públicos, que tienen la representación legal de los intereses del Estado, personifican la ley y hablan en nombre de la justicia y del interés público.

Al conjunto ó corporación jerárquica de estas personas, se denomina *Ministerio fiscal*. Su objeto, según se vé, es velar por la observancia de las leyes, promover la acción de la justicia en cuanto concierne al interés público y representar al gobierno en sus relaciones con el poder judicial.

¿Cuál es la organización del ministerio fiscal?—Se compone de un solo fiscal en el Tribunal Supremo, en cada audiencia, tribunal de partido y juzgado municipal; un solo teniente fiscal en el Tribunal Supremo, y en cada audiencia; siete abogados fiscales en el Tribunal Supremo, seis en la

(1) Para conocer y estudiar profundamente la naturaleza, historia, y facultades del ministerio fiscal, recomendamos á nuestros lectores el «Ensayo teórico-práctico sobre los deberes y atribuciones de los promotores fiscales, por D. Vicente Ferrer y Minguet, Fiscal de la Audiencia de Madrid», publicado en 1875.

audiencia de Madrid y tres, dos y aún de uno solo, en las demás, según su importancia. El orden jerárquico de dichos funcionarios es el siguiente: 1.º, el fiscal del Tribunal Supremo; 2.º, los fiscales de las audiencias; 3.º, los fiscales de los tribunales de partido; 4.º, los fiscales de los juzgados municipales.

Los tenientes y abogados fiscales serán considerados solamente como auxiliares de los fiscales á cuyas inmediatas órdenes funcionan.

¿Cuál es el carácter distintivo del ministerio fiscal?—El ser independiente del poder judicial, distinguiéndose por su unidad de acción y subordinación jerárquica.

277

Aspirantes al ministerio fiscal.

Del mismo modo que para la judicatura hemos visto que había un cuerpo de aspirantes, con derechos y deberes, el ministerio fiscal tendrá también un cuerpo de aspirantes al cual son extensivas todas las disposiciones que hemos referido acerca del ingreso, derechos, preeminencias y obligaciones de los aspirantes á la judicatura (1), entendiéndose que presidirá la junta calificadora el fiscal del Tribunal Supremo, y que los fiscales de las audiencias ejercerán las atribuciones y deberes de los presidentes de las mismas.

¿Es obligatorio el desempeño de los cargos que se confieran á los aspirantes del ministerio fiscal?—Sí, siempre que lo sean del mismo orden para el pueblo en que residan; no así el de los cargos correspondientes al orden judicial.

278

De las condiciones generales y especiales para los cargos del ministerio fiscal.

La ley, siguiendo los mismos principios que ha proclamado para los cargos del poder judicial, exige condiciones *comunes* á todos los del ministerio fiscal, y además las *especiales* de cada cargo.

Son *comunes* á todos, cualesquiera que sean su jerarquía y categoría, las mismas que establece la ley para los jueces y magistrados, así como también les es aplicable todo lo dicho respecto á incapacidades, incompatibilidades y exenciones (2).

¿Qué funcionarios del ministerio fiscal están exceptuados del principio de incompatibilidad judicial que les es aplicable?—Los siguientes: 1.º, los fiscales de los juzgados municipales y sus suplentes; 2.º, los suplentes de fiscales de tribunales de partido y de abogados fiscales de las audiencias; 3.º, los que accidental ó interinamente desempeñaren cargos del ministerio fiscal; 4.º, los que ejercieren funciones fiscales en Madrid. Todos los mencionados son compatibles en los pueblos en que no lo son los funcionarios del poder judicial.

También se exceptúan de las prohibiciones inherentes á estos cargos las clases comprendidas en las tres primeras excepciones, únicas que pueden ejercer la abogacía, ejercicio prohibido expresamente por la ley orgánica al ministerio fiscal.

(1) Véase la pág. 11.

(2) Véase la pág. 13.

¿Qué circunstancias se requieren además para formar parte de él?—Las mismas generales que para ser juez ó magistrado, y la de ser licenciado por universidad costeada por el gobierno, á escepcion de los fiscales municipales, que pueden serlo los que no sean letrados.

¿Qué condiciones especiales deben tener estos funcionarios y sus suplentes?—Las mismas que deben concurrir en los jueces municipales, siendo preferidos los abogados, á no mediar motivos que aconsejen lo contrario. No será obstáculo que no tengan veinticinco años.

¿Cómo deben proveerse las fiscalías de los tribunales de partido?—Las de *ingreso* en aspirantes al ministerio fiscal, de Real orden, á propuesta del Consejo de Estado, como los juzgados de instruccion se proveerán en aspirantes á la judicatura. Las de *ascenso* en fiscales de tribunales de ingreso. Unos y otros no deben haber sido corregidos disciplinariamente.

En todos los ascensos que no se den á la antigüedad rigurosa, se atenderá muy especialmente al mérito de distinguirse ventajosamente en el uso de la palabra.

Las plazas del ministerio fiscal, de las audiencias y del Tribunal Supremo se proveerán, su mayor parte, en funcionarios del grado inferior inmediato, algunas en magistrados y otras en abogados que reúnan ciertas condiciones de capacidad y pago de contribucion. Para la provision hay establecidos turnos.

¿Qué condiciones exige el cargo de fiscal del Tribunal Supremo?—La ley no prescribe ninguna especial: dice sólo que será de libre nombramiento del gobierno.

Para el nombramiento y ascensos de los individuos del ministerio fiscal, hay que atenerse á los Reales decretos de 23 de Enero de 1875 y 22 de Octubre de 1877, de que hemos hecho mencion al tratar de esta materia con relacion al orden judicial, los cuales publicaremos en el apéndice.

274 Del nombramiento, juramento y posesion de los funcionarios del ministerio fiscal.

Para la propuesta, eleccion, incapacidades, excusas, reclamaciones, decisiones de éstas, provision de vacantes y publicacion de los nombramientos de los fiscales municipales y sus suplentes, se estará á lo expuesto respecto á los jueces municipales, entendiéndose sustituidos los presidentes de la audiencia y de tribunales de partido por los fiscales de aquéllas y de éstos.

¿Qué debe contener el juramento de los individuos del ministerio fiscal?—Los extremos siguientes: «guardar y hacer guardar la Constitucion de la monarquia, ser fieles al rey, promover el cumplimiento de la justicia, cumplir todas las leyes y disposiciones que se refieran al ejercicio de su cargo». El juramento se prestará ante los presidentes de los tribunales respectivos, encargados de dar posesion á los nombrados, en tribunal pleno á los fiscales y tenientes, y en la sala de gobierno á los abogados fiscales con asistencia de los secretarios y subalternos del tribunal.

Los fiscales de los tribunales de partido prestarán el juramento ante la sala de gobierno de la audiencia del distrito, y con la certificacion de haberlo prestado, tomarán posesion en el juzgado á que correspondan, en la misma forma y con las solemnidades empleadas en la de los jueces de los tribunales de partido.

270

Honores, antigüedad y trage de los funcionarios del ministerio fiscal.

Minuciosa la ley orgánica de tribunales en todo lo relativo al lugar y asiento que debe ocupar el ministerio fiscal en las reuniones en pleno, salas de gobierno y salas de justicia, no podemos hacernos cargo de todos sus detalles, que el lector puede estudiar en el capítulo 8.º, título XX de la misma. Basta á nuestro objeto decir que los fiscales figuran entre los presidentes de sala y se sientan, así como tambien los tenientes, á la derecha del tribunal, y los abogados fiscales á la izquierda, debiendo ocupar análoga situación los fiscales de partido y sus suplentes; que la mayor antigüedad dá derecho de precedencia en puestos, sustituciones y asistencias en casos de vacante ú otro impedimento de los jefes, y que todos los individuos del ministerio fiscal usarán en las audiencias públicas, actos oficiales dentro del edificio y actos solemnes fuera, el trage de ceremonia, que es para los *fiscales de partido*, abogados fiscales de Audiencia y del Tribunal Supremo y tenientes fiscales de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, el señalado para los jueces de tribunales de partido. Para el teniente fiscal de la de Madrid y los fiscales de Audiencia y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el de los magistrados de Audiencia. Para el fiscal del Tribunal Supremo, el de los magistrados de este tribunal. Las medallas tendrán en el reverso la inscripcion: *Ministerio fiscal*.

Los fiscales municipales solo usarán una medalla con dicha inscripcion.

274

Separacion, suspension, traslacion y jubilacion de los funcionarios del ministerio fiscal.

¿Cuándo procede la *separacion* ó *destitucion* de éstos funcionarios?—Todo el ministerio fiscal, á excepcion del fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de las Audiencias, que pueden ser separados libremente por el gobierno, gozaba por la ley orgánica de ciertas garantías que, si bien no podian equipararse absolutamente á la inamovilidad del poder judicial, exigian la formacion de un expediente en el cual debia oirse á los interesados y á sus jefes, y hacerse constar una causa justa. El aumento de dotacion y las indicadas garantías, contribuian, en nuestro juicio, á robustecer la independencia é imparcialidad tan necesarias para el desempeño de las importantísimas funciones del ministerio fiscal. Mas esa casi inamovilidad que disfrutaban los tenientes, abogados y promotores fiscales, ha desaparecido con la publicacion del decreto de 23 de Enero de 1875, ya citado. Desde esta fecha dichos funcionarios, del mismo modo que los fiscales, pueden ser separados *libremente* por el gobierno, y colocados en un cargo análogo por razon del sueldo, en la carrera judicial, sin que se dé recurso contencioso contra las separaciones, suspensiones, ascensos y traslaciones del ministerio fiscal.

La *destitucion* puede tener lugar *de derecho* y por virtud de *justa causa*. Procede *de derecho* en los mismos casos en que *de derecho* son destituidos los jueces y magistrados (1). Debe declararse por Real decreto ó por Real orden,

(1) Véase la pag. 17.

según la categoría del funcionario, por virtud de alguno de los motivos siguientes, que se consideran justas causas: 1.º, cualquiera de las que legitiman, en esta forma, la destitución de los jueces y magistrados (1), excepto la declaración de responsabilidad civil; 2.º, la falta de subordinación á sus superiores jerárquicos; 3.º, las faltas repetidas de deferencia á las instrucciones de sus superiores jerárquicos, cuando aquéllas sean completamente infundadas. En todo caso deben ser oídos los interesados, sus superiores inmediatos y el fiscal del Tribunal Supremo.

¿En qué casos procede la *suspension*, y quién la decreta?—En los tres primeros que hemos dicho justificaban la de los jueces y magistrados (2). La *suspension* puede declararse por las salas de justicia y por el gobierno. Cuando se dé alguno de dichos tres casos, declarará la *suspension* la sala que conociere de la causa. El gobierno puede decretarla: 1.º, cuando considere procedente su destitución mientras dure el expediente; 2.º, en los casos establecidos respecto á los jueces de instrucción, jueces de partido y magistrados (3); esta disposición no es aplicable á los fiscales de juzgados municipales; 3.º, cuando la *suspension* se les hubiese impuesto disciplinariamente como corrección.

Es aplicable á la *suspension* de los funcionarios del orden fiscal lo establecido respecto á la duración de aquélla y pago del sueldo en el poder judicial.

¿Pueden ser trasladadas legalmente los funcionarios del ministerio fiscal?—Sí. El gobierno puede acordarla libremente, de uno á otro punto, en la misma clase á que correspondan ó á otra superior, cuando estén en las condiciones de esta ley. Contra la traslación hecha de este modo no habrá recurso alguno. Es aplicable al ministerio fiscal la traslación necesaria que hemos visto debe tener lugar en los jueces y magistrados, por razón de poseer bienes inmuebles y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, entendiéndose limitada la prohibición de pertenecer á una misma sala á que mientras se haga la traslación no puedan actuar en ella dos de dichos parientes.

¿Cuándo y en qué términos deben jubilarse dichos funcionarios?—En el mismo tiempo y con las mismas condiciones en que pueden serlo los jueces y magistrados.

Contra las resoluciones de destitución, ingreso ó ascenso en la carrera, tenía el ministerio fiscal los recursos contenciosos que le ha negado el decreto de 23 de Enero de 1875, y sólo le compete en el caso de jubilación improcedente.

274

Responsabilidad, atribuciones, unidad y dependencia del ministerio fiscal.

El ejercicio de la acción pública, apesar de la dependencia jerárquica relativa y de las indicaciones que el gobierno puede hacer al ministerio fiscal, está sujeto á responsabilidades civiles y penales, las cuales pueden exigirse en los casos y forma que hemos expuesto al tratar de la responsabilidad judicial (4), con las alteraciones siguientes: 1.º, sólo podrá establecerse el juicio en virtud de providencia del tribunal competente ó á instan-

(1) Véase la pág. 17.

(2) Véase la pág. id.

(3) Véase la pág. id.

(4) Véase la pág. 19.

cia del ministerio fiscal; 2.^a, antes de proceder de oficio á decretar los procedimientos deberá oírse al inmediato superior jerárquico del funcionario que pueda ser responsable.

274

¿Qué atribuciones corresponden al ministerio fiscal?—Las siguientes:

1.^a Vigilar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que se refieren á la administración de justicia y reclamar su observancia.

2.^a Dar á sus respectivos subordinados las instrucciones generales ó especiales para el cumplimiento de sus deberes y la posible unidad de la acción fiscal.

3.^a Sostener la integridad de las atribuciones y competencia de los juzgados y tribunales en general, defenderlas de toda invasión, ya provenga del orden judicial, ya del administrativo, promoviendo cuestiones de competencia, recursos por abuso de jurisdicción ó recursos de fuerza en conocer, é impugnando las competencias que indebidamente se promuevan contra el juzgado ó tribunal en que ejerzan sus funciones.

4.^a Representar al Estado, á la administración y á los establecimientos públicos de instrucción y beneficencia en las cuestiones en que sean parte, ya demandante, ya demandada.

5.^a Interponer su oficio en los pleitos que versen sobre el estado civil de las personas.

6.^a Representar y defender á los menores, incapacitados, ausentes ó impedidos para administrar sus bienes hasta que se les provea de tutores ó curadores para la defensa de sus propiedades y derechos.

7.^a Promover la formación de causas criminales por delitos y faltas cuando tengan conocimiento de su perpetración, si no las hubiesen comenzado de oficio aquellos á quienes corresponda.

8.^a Ejercitar la acción pública en todas las causas criminales, sin más excepción que la de aquellas que, según las leyes, sólo pueden ser promovidas á instancia de parte agraviada.

9.^a Investigar con especial diligencia las detenciones arbitrarias que se cometan y promover su castigo.

10. Asistir á las vistas de los negocios civiles en que sean parte y de los criminales, sin más excepción que las de aquéllos en que no se pueda ejercitar la acción pública.

11. Promover las correcciones disciplinarias en los casos en que procedan, según las leyes.

12. Velar sobre el cumplimiento de las sentencias en los pleitos y causas en que hayan sido parte, á cuyo efecto tendrán el derecho y el deber de visitar los establecimientos penales, para inspeccionar si las sentencias en lo criminal se cumplen en la forma en que hubiesen sido impuestas. No podrán, sin embargo, introducir alteraciones en el régimen y disciplina de las prisiones, limitándose en su caso á exponer al gobierno los vicios que observaren y los medios de corregirlos.

13. Poner en conocimiento del Tribunal Supremo y del gobierno, los abusos é irregularidades graves que notaren en los juzgados ó tribunales, cuando no alcanzaren de otro modo á obtener su remedio.

14. Exponer verbalmente su dictámen en asuntos urgentes de fácil resolución, lo cual se expresará en la providencia ó auto que recaiga.

15. Pedir á los juzgados y tribunales del territorio en que ejerzan sus funciones y que estén subordinados al tribunal á que pertenezcan, las causas y negocios terminados, para ejercer su vigilancia sobre la administración de justicia y promover la corrección de los abusos que puedan introducirse.

16. Requerir el auxilio de las autoridades, de cualquier clase que sean, para el desempeño de su ministerio, siendo responsables éstas, con arreglo á las leyes, de las consecuencias que resultaren de su falta ó descuido en prestarles dicho auxilio.

17. Cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes.

18. Nombrar los fiscales suplentes de partido para los casos de vacante, incompatibilidad, ausencia, enfermedad ú otra causa, dando cuenta al fiscal del Tribunal Supremo.

274

La *unidad* en la accion fiscal consiste en que las opiniones que sostengan los funcionarios ante los tribunales sean uniformes, principalmente en las cuestiones capitales de derecho y de apreciacion. Al efecto cada fiscal se arreglará á las instrucciones que sus superiores jerárquicos le comuniquen en lo que se refiera al ejercicio del ministerio fiscal, y les consultará cuando la gravedad del negocio, la dificultad del caso ó cualquiera otra circunstancia, lo hicieren necesario ó conveniente.

La *dependencia* de los funcionarios del orden fiscal es circunstancia necesaria para conseguir la *unidad* de accion apetecida, y por eso la ley establece que el fiscal del Tribunal Supremo sea el jefe del ministerio fiscal de toda la monarquia, bajo la inmediata dependencia del ministerio de Gracia y Justicia; los fiscales de las audiencias lo sean en sus respectivos distritos; y los de tribunales de partido, lo sean de los que ejerzan el ministerio fiscal en los juzgados municipales.

¿Es absolutamente obligatoria para los inferiores la opinion y el mandato de los superiores en el orden fiscal?—Acerca de esto deben tenerse presentes las reglas siguientes. 1.^a, el inferior hará respetuosamente á su superior jerárquico las observaciones que estime conducentes, relativamente á las órdenes é instrucciones que considere contrarias á las leyes ó que por apreciaciones equivocadas ó por cualquier otro motivo, sean improcedentes, pero *sin que pueda separarse de ellas hasta que así lo ordene su superior*; 2.^a, interpondrá en tiempo y forma, cuando no tuviere instrucciones en contrario, los recursos procedentes en los negocios en que sea parte, sin perjuicio de lo que su superior resuelva acerca de su seguimiento; 3.^a, el superior, recibidas que sean las consideraciones emitidas por el inferior, cuando las encontrare legales y procedentes, reformará ó dejará sin efecto las órdenes ó instrucciones que él mismo hubiese dado; 4.^a, cuando el superior no encontrare legales ó procedentes las observaciones hechas por el inferior, le dará las instrucciones que estime convenientes, y si lo considerare oportuno, nombrará á otro de sus subordinados para que le sustituya en el despacho de negocios.

Esto no obstante, como la obediencia debida no exime de responsabilidad en casos de *manifiesta, clara y terminante infraccion* de un precepto legal, no parece aventurado el decir que en tales casos extremos la opinion ó mandato del superior no es absolutamente obligatoria.

274

Correcciones disciplinarias del ministerio fiscal.

En el orden fiscal existe la misma jurisdiccion disciplinaria que hemos dicho existia en el poder judicial, y los superiores jerárquicos pueden imponer las mismas correcciones señaladas para los jueces y magistrados (1) despues de oir instructivamente á los interesados.

Contra las correcciones disciplinarias impuestas por los fiscales de las audiencias podrá recurrirse al fiscal del Tribunal Supremo. Contra las correcciones impuestas por el fiscal del Tribunal Supremo, ya sea directamente, ya confirmando, modificando ó renovando las impuestas por los fiscales de la audiencia, sólo se podrá recurrir al ministro de Gracia y Justicia. Contra las resoluciones no habrá ulterior recurso.

Secciones 71, y 70

De los abogados, procuradores y de sus colegios.

¿Quiénes son los Abogados?—Los funcionarios que con capacidad para ejercer el cargo protegen la vida, la honra y la hacienda de los ciudadanos, acusando ó defendiéndoles ante los tribunales de justicia.

¿Qué circunstancias se necesitan para ejercer la abogacía y quiénes no pueden ejercerla?—Para ejercer la abogacía se requiere: 1.º, haber cumplido veintiún años; 2.º, ser licenciado en derecho civil; 3.º, no estar procesado criminalmente, y 4.º, no haber sido condenado á penas aflictivas, ó haber obtenido rehabilitación. No podrán ejercer la abogacía; 1.º, los que estén desempeñando cargos judiciales ó del ministerio fiscal; exceptuándose de esta regla los jueces y fiscales municipales; 2.º, los que desempeñen empleos en el ministerio de Gracia y Justicia ó en la sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y 3.º, los auxiliares y dependientes de los tribunales.

Deben estar inscritos en el colegio de abogados si lo hubiere, y donde no exista, hallarse avendado ó ser residente, inscribirse como abogado en ejercicio, pagar la contribución y prestar juramento, en Madrid, ante la sala de gobierno del Tribunal Supremo; en las capitales de Audiencia, ante la misma sala de ésta; en donde hubiere tribunal de partido, ante él y ante el juez de instrucción, y en su defecto del juez municipal, en los demás casos.

No obstante lo dicho, y aún cuando no se hallen inscritos, podrán los letrados, siempre que reunan las demás circunstancias, defender sus negocios y causas, y los de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad.

¿Cuáles son las obligaciones de los abogados?—1.ª, defender á sus clientes con celo, diligencia, sinceridad y convencimiento, hasta la terminación de la causa; 2.ª, asistir á la apertura de los tribunales; 3.ª, concurrir á las visitas generales de cárceles, cuando tengan defendidos presos; 4.ª, defender gratuitamente á los pobres; 5.ª, producirse en los informes orales y escritos con mesura, dignidad y respeto á los tribunales, estando obligados á permanecer ante ellos durante las vistas, necesitando para salir, la licencia del presidente.

¿Cuáles son sus prohibiciones?—Todo acto que no esté en relación con sus obligaciones les está prohibido, y especialmente el aconsejar á los adversarios, descubrir los secretos de su cliente; tomar la defensa del contrario en otra instancia, celebrar el pacto de *quota litis* y dar participación á los procuradores en el importe de sus honorarios.

¿Cuáles son los abogados de pobres?—Los que cada año elige el colegio para defender los intereses de éstos. En donde no hay colegio el abogado más antiguo reparte, por riguroso turno entre todos los abogados del partido, los negocios de pobres.

¿Cuáles son sus obligaciones?—Además de las generales á todos, deben presentarse en la cárcel á sus patrocinados, escucharlos y consolarlos en lo posible y asistir gratuitamente á las visitas generales.

No podrán excusarse de la defensa en las causas criminales sin un motivo personal y justo, que calificarán según su prudente arbitrio los deca-

nos de los colegios, donde los hubiere, y en su defecto, el juez ó el tribuna en que hubieren de hacer las defensas.

¿Qué debe hacer el abogado cuando en los negocios civiles no considere sostenible el derecho de sus clientes pobres?—Lo manifestará al tribunal, el cual nombrará ó mandará nombrar otro abogado. Si este segundo no aceptare la defensa, como impropio, se hará un tercer nombramiento; y si el tercer letrado manifestase lo mismo, se pasará el asunto al ministerio fiscal, cuando no fuere parte, con objeto de que manifieste si es sostenible ó no la pretension del pobre. Si el ministerio fiscal lo considerase insostenible, cesará la obligación de los abogados; mas si la considerare sostenible, se nombrará un cuarto abogado, que no podrá excusarse de la defensa.

¿Qué son los colegios de abogados?—Las corporaciones formadas por todos los de una población ó más, presididos por una junta de gobierno compuesta de un presidente, varios miembros, un secretario y un tesorero. Los habrá en capitales de audiencia y pueden establecerse en las de provincia y poblaciones donde hubiere más de veinte abogados.

¿Cuáles son las principales atribuciones de los colegios?—Admitir en su seno á los letrados que consideren dignos, velar por su comportamiento en el ejercicio de su profesion, amonestarles por tres veces si dieren lugar á ello, decretar la suspension del ejercicio de aquélla por tiempo que no exceda de tres meses, nombrar los abogados de pobres, regular los honorarios de la clase, defender al que consideren injustamente perseguido por el ejercicio de la profesion y evacuar los informes que les pidan los tribunales ó el gobierno. Los decanos tienen la consideracion de magistrados honorarios en los puntos donde haya audiencia y la de jueces de la misma categoría que corresponda á los juzgados en donde radiquen.

270

¿Quiénes son los *procuradores*?—Unos mandatarios especiales encargados de representar á los litigantes por medio de poder declarado bastante por un letrado. Su nombramiento corresponde á las audiencias.

¿Qué requisitos se requieren para ser *procurador*?—Para ser procurador se requiere: 1.º acreditar pericia en el orden y tramitación de los juicios, la cual se supone en los abogados y notarios; 2.º, reunir las condiciones primera, tercera y cuarta de las que se exigen para el ejercicio de la abogacía; 3.º, constituir como garantía un depósito en metálico ó en papel del Estado al tipo de cotización oficial, que cubra la cantidad efectiva que á continuacion se expresa: 25.000 pesetas en Madrid, 7.500 en poblacion que haya audiencia, 5.000 donde haya tribunal de partido, 2.000 donde haya juzgado de instruccion, 1.000 en los demas pueblos; ó bien, en cualquiera de los casos, constituir la garantía de la quinta parte de las sumas indicadas agregando á ella la propiedad de un oficio enajenado de la misma clase, mientras no se haya realizado su reversion al Estado.

¿Qué obligaciones tienen los *procuradores*?—Las siguientes: 1.ª, presentar oportunamente el poder que tengan para comparecer en juicio, ó devolverlo sino lo aceptaren, tan pronto como sea posible, para que no sea perjudicado el poderdante; 2.ª, seguir el juicio mientras no hayan cesado en su cargo por alguna de las causas que se expresan en esta ley; 3.ª, transmitir al abogado, elegido por su cliente ó por ellos mismos, todos los documentos, antecedentes ó instrucciones que se les remitan, ó que ellos mismos se puedan adquirir, haciendo cuanto conduzca á la defensa de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario: cuando no tuvieran instrucciones ó fueren insuficientes las que se les hubiesen dado, hacer lo que requiera la naturaleza ó índole del negocio; 4.ª, pagar los gastos que se causaren á su instancia; 5.ª, tener al cliente y al

letrado siempre al corriente del curso del negocio que se les hubiere confiado; 6.^a, firmar todas las pretensiones que se presenten á nombre del cliente; 7.^a, oír y firmar los emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquiera clase, incluso las de sentencias, teniendo estas actuaciones de la misma fuerza que si interviniese en ellas directamente el poderdante: no se admitirá la respuesta de que las espresadas diligencias se entiendan con éste; 8.^a, asistir á todas las diligencias y actos para los que las leyes lo prevengan; 9.^a, llevar un libro de conocimiento de negocios pendientes, y otro de cuentas con los litigantes, con los abogados y con los auxiliares y subalternos que devenguen honorarios ó derechos; 10, dar á sus clientes cuentas documentadas de los gastos judiciales é inversion de las cantidades recibidas.

¿Por qué causas cesa la representacion de los procuradores?—1.^a, por la revocacion del poder tan luego como conste en autos, ya sea expresa, ya tácitamente, por el nombramiento posterior de otro procurador para el mismo negocio; 2.^a, por el desistimiento voluntario del procurador ó por cesar éste en su oficio, estando obligado á poner con anticipacion uno y otro caso en conocimiento de sus poderdantes, judicialmente ó por acto notarial: mientras no aparezca en los autos hecho el desestimiento no podrá abandonar la representacion que tuviere; 3.^a, por separarse el poderdante de la accion ó de la oposicion que hubiere formulado; 4.^a, por haber tramitado el mandante á otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, cuando la trasmision haya sido reconocida por providencia ó auto firme, con audiencia de la parte contraria; 5.^a, por haber terminado la personalidad del poderdante; 6.^a, por la terminacion del acto, del pleito ó de la causa para que se dió el poder, y 7.^a, por muerte del poderdante ó del procurador. En el primer caso, desde que se pueda suponer, atendida la distancia y medios de comunicacion, que se ha sabido la muerte del poderdante.

Así como los abogados tienen sus colegios, los procuradores deben y pueden formarlos en las mismas poblaciones en que aquéllos los tengan, siendo su objeto, segun la naturaleza respectiva de los cargos, la equitativa distribucion de las obligaciones de los mismos, el buen orden de la corporacion y el decoro, la fraternidad y disciplina de los colegiados.

Los abogados y procuradores están sujetos á la jurisdiccion disciplinaria que corresponde ejercer á los tribunales.

TRIBUNALES ESPECIALES.

Juzgados eclesiásticos.

Del mismo modo que la jurisdiccion *comun* se divide en ordinaria y privilegiada ó especial, la *eclesiástica*, que pertenece á esta clase, se divide á la vez en *eclesiástica ordinaria* y *especial*. La *ordinaria* es la que ejercen los obispos con sus provisoros y los vicarios eclesiásticos, los metropolitanos y los suyos, y en último término el tribunal de la Rota, con intervencion del monarca. La *especial* es la que ejercen los juzgados *castrenses* y el de la Rota, superior comun á todos (4).

(1) El tribunal especial de las órdenes militares se suprimió por decreto de 2 de Noviembre de 1803, refundiéndose en el Tribunal Supremo. Dos ministros del refundido, el teniente fiscal del segundo y los subalternos necesarios quedaron encargados de la jurisdiccion gubernativa y contenciosa del primero.

¿Quién es el *provisor* ó *vicario general*?—La persona nombrada por el diocesano ó metropolitano, á quien encomiendan el despacho de los asuntos concernientes á la jurisdicción que éstos ejercen. Cuando la diócesis es muy extensa, pueden nombrarse dos vicarios que distribuyan el despacho de los negocios. Deben poner en conocimiento del ministro de Gracia y Justicia los nombramientos.

¿Cuáles son las atribuciones de los vicarios?—Pueden conocer de todos los negocios que expresamente se les hayan encomendado por el obispo en el título de su nombramiento, dentro de la jurisdicción de aquéllos.

Quando está la mitra vacante, la jurisdicción ordinaria compete á los vicarios capitulares ó gobernadores eclesiásticos, personas elegidas por el cabildo ó el metropolitano en su caso, que deben reunir la cualidad de letrados.

¿A quiénes corresponde el conocimiento en primera instancia de los asuntos sujetos á la jurisdicción eclesiástica?—A los diocesanos y metropolitanos, cuando radican en el territorio de sus respectivas diócesis.

¿Quiénes conocen de dichos asuntos en segunda instancia?—Los metropolitanos entienden en las apelaciones de los fallos de los diocesanos, y el tribunal de la Rota conoce en el mismo grado de los fallos dictados por los metropolitanos en primera instancia.

¿Tiene representación el ministerio fiscal en los tribunales eclesiásticos?—En cada juzgado eclesiástico debe haber un fiscal de orden sagrado y letrado, cuyo nombramiento recibe del diocesano ó del vicario general, según los casos.

¿Qué atribuciones tienen los tribunales eclesiásticos?—Continuarán conociendo de las causas sacramentales, beneficiales y de los delitos puramente eclesiásticos. Actualmente ha vuelto á su jurisdicción el conocimiento de las causas matrimoniales y los divorcios (1).

¿Cuál es la organización de los juzgados *castrenses*?—El patriarca de las Indias es el vicario general castrense, en quien reside exclusivamente la jurisdicción eclesiástica militar, á quien compete el conocimiento de los negocios eclesiásticos de todos los que gozan fuero militar (2). En los departamentos de marina hay tenientes vicarios nombrados por S. M., que cooperan al ejercicio de su jurisdicción. El vicario general puede delegar sus funciones en sacerdotes de probidad y honradez. La apelación de las providencias de unos y otros se entabla para ante el tribunal de la Rota, á quien compete su conocimiento.

Fúndase el fuero eclesiástico *castrense* en la constante movilidad del ejército y en la consiguiente variación de prelados ordinarios.

¿Cuál es la organización del tribunal de la Rota?—Se compone de seis jueces ó auditores ordinarios, y dos supernumerarios, un fiscal, el auditor del nuncio, el abreviador y los notarios ó escribanos de cámara necesarios. Los auditores son nombrados por la Corona, siendo condición precisa que los numerarios sean representantes de ciertas y determinadas provincias. El abreviador es nombrado por el Pontífice.

¿Cuáles son las atribuciones de este tribunal?—Conoce, en última instancia, de los pleitos y causas seguidos en todos los tribunales eclesiásticos, ordinarios y especiales, sin que pueda en ningún caso avocar el conocimiento de la primera instancia.

(1) Decreto de 9 de Enero de 1875.

(2) Véase el tratado de exenciones en la *Disciplina eclesiástica*.

TRIBUNALES MILITARES.

La jurisdiccion militar era, á semejanza de la comun, *ordinaria* y *extraordinaria ó especial*. Apesar de las reducciones y limitaciones importantísimas que en el fuero de guerra introdujeron los decretos de 6 y 31 de Diciembre de 1868, sus modificaciones no alcanzaron á la supresion ó confusion de ambas ramas de esa jurisdiccion privativa, que todavia subsiste, y subsistirá siempre para determinados negocios. Ejercíase la jurisdiccion militar *ordinaria* por los tribunales denominados tambien *ordinarios*, que eran las Comandancias de provincias, las Capitanías generales de distrito y Comandancias de Ceuta y campo de Gibraltar; y como superiores á todos, por los Consejos Supremos de Guerra y de la Armada; y la jurisdiccion *especial ó extraordinaria*, estaba á cargo de los Tribunales que, por razon de ésta, llamábanse tambien *especiales* y eran los consejos de guerra ordinarios y extraordinarios, los de generales y el Juzgado del general en jefe, permanente en campaña, y no permanente en tiempos normales.

En la actualidad no existe esta organizacion en los Tribunales militares, ni la jurisdiccion militar es mas que una, habiéndose suprimido la llamada *ordinaria* por Real Decreto de 19 de Julio de 1875, y la sala de justicia del Consejo de la Guerra por otro del 24 siguiente, disuelto el Consejo Supremo de la Armada, creado despues de la supresion del Tribunal del Almirantazgo, y refundido en el primero, por decreto de 13 de Febrero de 1878, bajo la denominacion de *Consejo Supremo de Guerra y Marina*, que ya tuvo en otros tiempos.

Los citados decretos son los que contienen la organizacion y atribuciones vigentes de los Tribunales militares, por virtud de cuyas disposiciones quedan suprimidos todos los ordinarios y extraordinarios enumerados al principio, y sólo se conserva, como tribunal único de primera instancia, el *Consejo de Guerra*, compuesto de varios vocales y de un presidente.

Segun lo expuesto ¿á qué tribunales está encomendado el ejercicio de la jurisdiccion militar actualmente?—A dos: al Consejo de Guerra en primera instancia, y al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en segunda.

Del consejo de guerra.

Cualquiera que sea la graduacion del militar procesado, será acusado y juzgado por el consejo de guerra.

Su categoria en la milicia sólo influye para que los vocales y el presidente del tribunal sean, por regla general, de graduacion superior, y aquél de la inmediata á los de los vocales, excepto cuando se constituya el consejo para juzgar á un oficial general, puesto que, para este caso, puede ser presidido por un capitan general ó un teniente general. El cuadro siguiente tomado del mismo decreto de 19 de Julio de 1875, debe tenerse presente para comprender la constitucion del *consejo de guerra*.

EMPLEO DEL ACUSADO.	EMPLEO DEL PRESIDENTE.	EMPLEO DE LOS VOCALES.
Individuo de tropa y oficial subalterno.....	Coronel ó jefe principal del cuerpo.....	Capitanes.
Capitan ó comandante.....	Coronel.....	Tenientes coroneles.
Teniente coronel.....	Brigadier.....	Coroneles.
Coronel.....	Mariscal de campo.....	Brigadieres.
Oficial general.....	Capitan general ó teniente general.....	Tenientes generales ó mariscales de campo.

Sólo en el caso de que no pueda cumplirse esto, los vocales serán reemplazados en la forma siguiente: los capitanes por tenientes y los jefes por otros, sin que pueda entrar á formar el tribunal ningun vocal de empleo inferior al del acusado.

¿Qué circunstancia especial deben reunir los miembros del consejo de guerra?—Todos deben ser de las armas é institutos militares del regimiento del acusado: en su defecto, deben entrar en su composicion, como entrarán siempre que se juzgue á un individuo del cuerpo politico-militar, cuando menos dos vocales de dicha arma é instituto. Debe observarse el turno general que se llevará en la plaza, division ó cuerpo de tropas, excepto cuando va á juzgarse á un oficial general correspondiendo entonces al general en jefe ó al capitan general del distrito el nombramiento de presidente y vocales del consejo.

¿Cómo debe formarse el consejo cuando son varios y de distintas gerarquias los acusados?—La composicion del tribunal la determina el empleo más elevado que exista entre ellos. Los procesados no militares, ni asimilados á éstos, serán juzgados por el consejo que debe juzgar á los oficiales subalternos.

¿Tiene residencia fija el consejo de guerra?—No: se reunirá en el lugar en que se siga el proceso, ó en el más próximo, ó en la capital del distrito, si en aquéllos no hubiese oficiales bastantes, á la cual concurrirán indispensablemente, los que se necesiten.

¿De qué clase de delitos corresponde conocer al consejo de guerra?—De todos los cometidos por los individuos que dependen de la jurisdiccion militar, salvo los de desafuero, y de los que las leyes vigentes atribuyen á dicha jurisdiccion, aunque sean cometidos por personas sujetas al fuero comun (1). Pero debe entenderse limitada su competencia al ejercicio de la accion penal, no á la civil, que sólo puede entablarse ante los tribunales comunes, despues de ser firme la sentencia que decida sobre aquélla, aunque ésta se ejercite antes ó durante el seguimiento de la civil, lo cual guarda conformidad con lo que sobre el particular establece la ley de Enjuiciamiento criminal del fuero ordinario.

¿Son firmes ó ejecutorios los fallos del consejo de guerra por sí mismos?—No: necesitan la aprobacion de la autoridad militar competente, de acuerdo con su asesor, debiendo consultarse con el Consejo Supremo cuando les falte dicha aprobacion. Son autoridades competentes para ello, en tiempos de paz, la superior militar del distrito ó division territorial; y en campaña, el general en jefe; y operando las divisiones separadamente, el comandante general de las mismas, si así se determina de Real orden.

(1) Art. 11 del decreto de 19 de Julio de 1875.

Del Consejo Supremo de Guerra y Marina (1).

Refundido el Consejo Supremo de la Armada en el actual de Guerra y Marina, por decreto de 13 de Febrero de 1878, constituye este alto cuerpo consultivo y contencioso, el primer tribunal de la jurisdicción especial de Guerra y Marina, dependiendo esencial y exclusivamente del ministerio de la Guerra, sin perjuicio de entenderse con el de Marina en los asuntos é incidencias propias de este ramo, hasta el punto de que, los nombramientos de los consejeros procedentes del segundo, han de hacerse también por el primero en vista de las propuestas que aquél haga á éste.

¿Cuál es la constitución del Consejo Supremo de Guerra y Marina?—Se compondrá de un presidente y diez consejeros de las clases y siguientes categorías: el primero, capitán ó teniente general de ejército; *tres* consejeros, dos tenientes generales y un vicealmirante; *cuatro* consejeros, dos mariscales de campo y dos contraalmirantes; *tres* consejeros togados, dos procedentes del cuerpo jurídico militar del ejército y otro de la armada, asimilados á mariscales de campo; un secretario brigadier; un fiscal militar, mariscal de campo ó brigadier; y un fiscal togado procedente del ejército. Hay, además, las dependencias y personal subalterno necesario para la marcha ordenada y el ejercicio práctico de las funciones encomendadas á este supremo consejo militar.

¿Qué negocios son de la competencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina?—Conoce de las causas criminales por delitos comunes y militares que competan á los Consejos de Guerra del ejército y armada, y de todos los asuntos encomendados á los Consejos Supremos por la legislación y ordenanzas vigentes. Corresponden, pues, á su conocimiento, asuntos *contenciosos*, asuntos *administrativos* y asuntos meramente *consultivos*.

En jurisdicción *contenciosa*, le corresponde: *primero*, dirimir las competencias de jurisdicción entre las autoridades; *segundo*, conocer de las causas criminales falladas en Consejo de guerra, que se le remitan en consulta; *tercero*, acordar los sobreseimientos de las sumarias instruidas contra oficiales generales y sus asimilados; *cuarto*, de las causas por delitos cometidos por los ministros de la Corona que pertenezcan al ejército activo, cuando no deban ser juzgados por el Senado; *quinto*, de las causas contra los capitanes generales de ejército, los ministros del mismo Consejo Supremo y auditores de guerra en ejercicio; *sexto*, de las formadas contra los jefes de negociado del ministerio de la Guerra y subalternos del Consejo Supremo por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Conoce de todos los asuntos *administrativos* que se relacionan con el ejército y la armada, los cuales no podemos enumerar detalladamente, debiendo advertir que puede el Consejo Supremo promover mociones al Gobierno sobre las reformas que estime convenientes en todos los asuntos de su competencia.

Y, finalmente, como cuerpo *consultivo* evacua cuantos informes se le pidan por los ministerios de Guerra y de Marina.

¿Cuál es la organización superior del Consejo Supremo?—Puede dividirse en dos salas, no obstante la supresión de la llamada *de justicia*, cuando el presidente lo crea necesario ó el cúmulo de los asuntos lo aconseje,

(1) En Abril de 1869 se suprimió el título de Tribunal Supremo de Guerra y Marina, para dejar como *único supremo* al Tribunal Supremo de Justicia.

cada una de las cuales constará por lo ménos de *tres* consejeros, presididos por aquél y el vicepresidente de la corporacion, respectivamente.

La sala de que formen parte dos ó los tres consejeros togados, conocerá de las causas falladas en Consejo de guerra, haciendo aplicacion de las leyes penales ordinarias.

Debemos terminar este capítulo manifestando que el Consejo Supremo de que nos ocupamos, tiene facultades para imponer correcciones disciplinarias y exigir responsabilidad á todos los que intervienen en la administracion de justicia militar, con sujecion á las leyes especiales del fuero, y en su defecto, á las comunes.

Tribunales de hacienda y de comercio.

Se suprimieron por el decreto de unificacion de fueros en 1868, refundiéndose su jurisdiccion en la de los tribunales ordinarios y conservándose únicamente la tramitacion especial, establecida por el decreto de 20 de Junio de 1852 para los delitos de contrabando y defraudacion, y el procedimiento sobre quiebras, que aplican los tribunales ordinarios. En todos los demás casos no exceptuados expresamente, son aplicables las leyes comunes de procedimientos.

Tribunales contencioso-administrativos.

Los actos administrativos ejecutados por el Estado, como administrador de los intereses públicos, pueden lastimar, y lastiman á veces, los derechos de un individuo ó corporacion, para cuyos casos exista la jurisdiccion contencioso-administrativa, que tiene por objeto decidir la justicia de la reclamacion hecha por el particular que se cree lesionado en sus derechos, por las resoluciones de la Administracion pública. De lo cual resulta, que para que la referida jurisdiccion sea competente en el negocio, deben concurrir tres circunstancias: 1.^a, que el acto verse sobre cosas de interés comun; 2.^a, que sea acordado por la Administracion; 3.^a, que se haya empleado para su reparacion la vía gubernativa. O lo que es lo mismo: 1.^o, acto definitivo de la Administracion no reformable por la misma; 2.^o, lesion de un derecho preexistente; 3.^o, reclamacion en tiempo y forma.

¿Cuáles son las materias que caen bajo el dominio de los tribunales administrativos?—Difícil, prolijo é impropio de la índole de este libro, sería enumerar los diferentes ramos de la administracion, cuyo conocimiento compete á esta clase de tribunales. Basta decir que todo acto administrativo en que concurran las circunstancias expresadas antes, puede ser objeto de reclamacion contencioso-administrativa.

¿Qué tribunales están encargados de entender y decidir en los asuntos contencioso-administrativos?—Suprimida la jurisdiccion especial por que se regian en Octubre de 1868, se trasladó el conocimiento de los mismos, del Consejo de Estado y consejos provinciales, á las salas primeras de las audiencias y á la cuarta del Tribunal Supremo.

Así vinieron las cosas hasta el decreto de 20 de Enero de 1875 en que se derogó el de Octubre de 1868, se restableció dicha jurisdiccion especial y con ella la antigua seccion de lo contencioso del Consejo de Estado, encomendando al mismo tiempo el conocimiento de los asuntos de esta índole, en que antes entendian los suprimidos consejos de provincia, á las *Comisiones provinciales*. Por manera que, segun la legislacion vigente en la actualidad, las *Comisiones provinciales* y la *Seccion de lo contencioso* del Consejo

de Estado, son los tribunales á quienes corresponde ejercer la restablecida jurisdiccion contencioso-administrativa, aplicando las disposiciones que determinaban la competencia y el procedimiento especial que regia al tiempo de publicarse el decreto de 43 de Octubre de 1868 citado, que suprimió dicha jurisdiccion privativa.

¿Quién ejerce la representacion general del Estado ante estos tribunales?—Ante el Consejo de Estado, el fiscal y los abogados fiscales del mismo, nombrados por el rey; ante las comisiones provinciales, mientras otra cosa no se determine, un abogado fiscal donde haya Audiencia y un promotor fiscal en las demás, ámbos designados por el ministerio de Gracia y Justicia (1).

¿Quién representa ante los mismos la administracion provincial y la municipal?—Un diputado provincial ó un letrado á quien dé poder la Diputacion, representará la primera; y un abogado legalmente apoderado por el Ayuntamiento, á la segunda (2).

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Reglas comunes á los negocios civiles y criminales.

Habiendo reseñado y expuesto la organizacion de los tribunales ordinarios, conviene saber cuáles son los límites de su jurisdiccion.

¿Cuándo son competentes los juzgados y tribunales?—Cuando, por razon de la persona ó de la naturaleza del asunto, les corresponde el conocimiento del mismo, con exclusion de toda otra autoridad. El fuero es, por consiguiente, *personal* y *real*. El primero nace del privilegio de la persona que lo disfruta; el segundo tiene su origen en la naturaleza de las cosas litigiosas, como el mercantil, el eclesiástico, el militar, el de contrabando y defraudacion. Algunos suponen tambien que existe un fuero llamado *mixto*, que participa del personal y del real, por ejemplo, el militar, aunque bien examinada la cuestion, no hay más que los dos primeramente enunciados.

¿Es prorogable la jurisdiccion?—La *civil* podrá prorogarse á juez ó tribunal que, por razon de la materia, de la cantidad objeto de litigio y de la jerarquia que tenga en el orden judicial, pueda conocer del negocio propuesto y cuyo conocimiento se le someta. La jurisdiccion criminal, es siempre improrogable.

¿Qué jueces son competentes para los *actos de conciliacion*?—Los municipales del domicilio del demandado, y en su defecto, los de su residencia. En las poblaciones en que hubiere más de un juez municipal, el primero por cuya orden se haga la citacion, será el competente.

¿A qué extremos se extiende la competencia en general?—A las *excepciones*; á la *reconvencion*, en los casos en que proceda; á todas las *incidencias*; á llevar á efecto las providencias de tramitacion, y á la ejecucion de la sentencia.

Nos ocuparemos de la competencia en *lo civil*; de la competencia de la

(1) Orden circular de 24 de Enero de 1875.

(2) La misma.

jurisdiccion ordinaria y de las especiales en *lo criminal* y de las cuestiones á que da lugar la competencia de diferente y de la misma jurisdiccion.

De la competencia en lo civil.

¿Cuáles son los orígenes de la competencia en materias civiles?—La *sumision*, que puede ser expresa ó tácita; la naturaleza de la accion que se ejercita y el valor de la cosa litigiosa. La *sumision* sólo puede hacerse á quien tenga jurisdiccion de la misma clase y en igual grado jerárquico, entendiéndose extensiva al superior del juez ó tribunal á quien se someta la parte.

Se entiende por *sumision expresa* la renuncia explícita del fuero propio, designando aquél á quien se somete el renunciante. Y se tendrá por hecha la *sumision tácita* cuando el demandante acuda al juez, interponiendo la demanda. ó el demandado haga, despues de personado en juicio, cualquiera gestion que no sea la de proponer la *declinatoria*.

Fuera de los casos de *sumision*, la naturaleza y cuantía de las *acciones* origina la competencia conforme á las reglas siguientes: 1.^a, en los juicios en que se ejerciten acciones *personales*, será juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligacion, y á falta de éste, á eleccion del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento; cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos ó más personas que residan en pueblos diferentes y estén obligadas mancomunada ó solidariamente, no habiendo lugar designado para el cumplimiento de la obligacion, será juez competente el del domicilio de cualquiera de los demandados, á eleccion del demandante; 2.^a, en los juicios en que se ejerciten acciones *reales* sobre bienes muebles ó semovientes, será juez competente el del lugar en que se hallen ó el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante; 3.^a, cuando se ejerciten acciones *reales* sobre bienes inmuebles, será juez competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Si se ejercita sobre varias cosas inmuebles enclavadas en diferentes jurisdicciones, pero que se funden en un solo título singular de adquisicion, ó formen una sola heredad ó coto, será juez competente el de cualquiera de los lugares, en cuya jurisdiccion estén sitos los bienes, á eleccion del demandante, y 4.^a, en los juicios en que se ejerciten acciones *mixtas*, será juez competente el del lugar en que se hallen las cosas ó el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante.

Excepciones: 1.^a, en las demandas sobre estado civil será juez competente el del domicilio del demandado; 2.^a, en los depósitos de personas, el que conozca del pleito ó causa que los motive, y si no hubiere autos anteriores, el del domicilio de la persona que deba ser depositada: cuando circunstancias particulares lo exigieren, podrá decretar interina y provisionalmente el depósito el juez municipal del lugar en que se encontrare la persona que deba ser depositada, remitiendo las diligencias al del domicilio y poniendo á su disposicion la persona depositada; 3.^a, en las cuestiones de alimentos, cuando éstos se pidan incidentalmente en los casos de depósitos de personas ó en un juicio, será competente el que conozca de los autos: cuando los alimentos sean el objeto principal de un juicio, el del lugar en que tenga su domicilio aquél á quien se pidan; 4.^a, en el nombramiento y discernimiento de los cargos, de tutores ó curadores, para los bienes y excusas de estos cargos, será juez competente el del domicilio del padre ó de la madre cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su defecto el del domicilio del menor ó el del incapacitado, ó el de

cualquier lugar en que tuviese bienes inmuebles; 5.^a, en el nombramiento y discernimiento de los cargos de curadores para pleitos, el juez del lugar en que los menores ó incapacitados tengan su domicilio, ó el del lugar en que necesitare comparecer en juicio; 6.^a, en las demandas en que se ejercitaren acciones relativas á la gestion de la tutela ó curaduría, en las excusas de estos cargos despues de haber empezado á ejercerlos y en las demandas de remocion de los guardadores como sospechosos, el del lugar en que se hubiese administrado la guardaduría en su parte principal, ó el del domicilio del menor; 7.^a, en las autorizaciones para la venta de bienes de menores ó incapacitados, el del lugar en que los bienes se administraren ó el del domicilio de aquellos á quienes pertenecieren; 8.^a, en las informaciones para dispensas de ley, y en las habilitaciones para comparecer en juicio cuando por derecho se requieran, el del domicilio del que las solicitare; 9.^a, en las informaciones para perpétua memoria, el del lugar ó lugares en que hayan ocurrido los hechos, ó aquél en que estén, aunque sea accidentalmente, los testigos que hayan de declarar. Cuando estas informaciones se refieran al estado actual de cosas inmuebles, será juez competente el del lugar en que estuvieren sitas; 10, en las demandas deducidas en juicio sobre obligaciones de garantía ó complemento de otras anteriores, el del lugar en que se conozca de la obligacion principal sobre que recayeren; 11, en las demandas de *reconvencion*, el del lugar en que se hubiere interpuesto la que hubiese promovido el litigio. No es aplicable esta regla cuando el valor de lo pedido en la reconvencion excediere de la cuantía á que alcancen las atribuciones del juez que entendiere en la primera demanda, en cuyo caso reservará éste al actor de la reconvencion su derecho para que ejercite su accion donde corresponda.

¿Cuál es el fuero competente para los *desahucios* y *retractos*?—El del lugar en que estuviese sita la cosa, ó el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante.

¿Cuál para los *interdictos*?—Para el interdicto de *adquirir*, el del lugar en que estén sitos los bienes, ó aquél en que radiquen la testamentaria ó abintestato, ó el del domicilio del finado. Para los de *retener* y de *recobrar*, de *obra nueva* y *obra vieja*, el del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto: el mismo lo es para los *deslindes*.

¿Cuál para elevar á escritura pública los testamentos y codicilos?—El del lugar en que se hubiesen otorgado respectivamente los *escritos*, sin intervencion de notario, los testamentos ó las carpetas.

¿Qué juez es competente para las *testamentarias* y *abintestatos*?—El del lugar en que hubiere tenido su último domicilio el finado, que conocerá tambien de los legados, fideicomisos y reclamacion de acreedores durante dichos juicios. Si éste hubiere tenido su domicilio en país extranjero, el del lugar en que hubiese tenido el finado su último domicilio en España ó el del lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes. No obstará esto á que los jueces municipales del lugar donde alguno falleciere, adopten las medidas necesarias para el enterramiento y exequias del difunto, y á que los mismos jueces y tribunales de partido, en cuyas jurisdicciones tuviere bienes, tomen las medidas necesarias para asegurarlos y poner en buena guarda los libros y papeles, remitiendo las diligencias practicadas á los jueces á quienes corresponda conocer de la testamentaria ó abintestato, y dejándoles expedita su jurisdiccion.

¿Quién debe conocer de los *concursos* de acreedores y de las *quiebras*?—Cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en este estado, el juez del domicilio del mismo. Cuando fuere promovida por los acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo de las ejecuciones, prefiriendo el del domicilio del deudor, si éste ó el mayor número de acreedores lo reclamaren; en otro caso, lo será aquél en que antes se decretare el concurso ó la quiebra.

¿A quién compete conocer en los casos de *acumulacion* de autos?—Al juez que conociere de los más antiguos. Unos y otros deben estar en la misma instancia y no conclusos para sentencia, porque en estos estados, no son acumulables. Cuando hay testamentarias, abintestatos, concursos ó quiebras, deben acumularse á ellos los demás autos, aunque éstos sean más antiguos, por el carácter de universales que distingue á aquella clase de juicios.

¿Qué juez es competente para los *embargos preventivos*?—El del partido en que estuvieren los bienes que se hubieran de embargar, y á prevención, en los casos de urgencia, el municipal del pueblo en que se hallen.

¿Cuáles el domicilio legal de las mujeres casadas, de los hijos de familia y de los incapacitados?—El de las casadas que no estén separadas legalmente de sus maridos, es el mismo que éstos tengan; el de los hijos constituidos en potestad, el de sus padres; el de los menores ó incapacitados sujetos á tutela ó curaduría, el de sus guardadores.

¿Cuál es el de los comerciantes?—El pueblo que sea centro de sus operaciones mercantiles. Si son varios, el en que tuvieren el principal establecimiento, ó en el que se hubiesen obligado, á eleccion del demandante. Exceptuáanse los concursos y las quiebras, y los actos y contratos no mercantiles.

El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad ó en los estatutos por que se rijan. Exceptuáanse las compañías en participacion, en lo que se refiera á los litigios que puedan promoverse entre los asociados sujetos á las disposiciones generales de la ley.

¿Cuál es el domicilio legal de los empleados y militares?—El de los empleados lo constituye el pueblo en que sirvieren su destino; el de los militares en servicio activo, el pueblo en que se hallare el cuerpo á que pertenezcan al hacerse el emplazamiento.

¿Qué reglas deben aplicarse para apreciar el valor de las demandas?—Las siguientes: 1.^a, el valor de las prestaciones anuales y perpétuas se calculará por el de una anualidad multiplicada por 25: si la prestación fuere vitalicia, se multiplicará por 40 la anualidad; 2.^a, el de las obligaciones pagaderas á plazos diversos, se calculará por el de toda obligacion cuando el juicio verse sobre la validez del principio mismo de que proceda; 3.^a, el de las demandas de uno ó más acreedores por una misma obligacion, contra un sólo deudor, se calculará por la cantidad á que ascienda la reclamacion; 4.^a, el de las servidumbres se calculará por el precio de adquisicion de las mismas; 5.^a, el de las acciones *reales* ó *mixtas* sobre cosa inmueble ó litigiosa, se apreciará por el que conste en la escritura más moderna de su enajenacion: si la accion comprende las rentas, se acumularán éstas al valor de la demanda; 6.^a, el de las demandas que comprendieren muchos créditos contra el mismo deudor, se calculará por el importe de todos; 7.^a, el de las en que se reclamen créditos con intereses ó frutos vencidos ó no pagados, se hará la computacion sumando entre sí unos y otros; los frutos é intereses deben ser siempre corridos; se tendrá por cierta y líquida la cuantía de los frutos cuando el actor expresare en la demanda su importe anual y el tiempo que haya trascurrido sin pagarse; si no fuere cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el principal: lo dicho es aplicable al caso en que se pida en la demanda con el principal los perjuicios; 8.^a, cuando, por las reglas anteriores, no pudiese determinarse el valor de la demanda, se estimará por el que le dieran la partes de conformidad, y estando discordes, por el que estime un perito nombrado por las mismas: si no se pusieren de acuerdo sobre la eleccion, nombrará cada parte el que estime, y el juez un tercero para dirimir la discordia.

Compendio

De la competencia de la jurisdiccion ordinaria en lo criminal.

Es principio general de competencia en materia criminal, que la jurisdiccion ordinaria conocerá de todas las causas criminales, á excepcion de las que estuvieren reservadas al Senado y de las que expresamente se atribuyen á las jurisdicciones de Guerra y de Marina, aun cuando aparezcan culpables entre otras personas aforadas, no estando el caso reservado especialmente por la ley á otra jurisdiccion, y áun siendo así, la jurisdiccion ordinaria será competente para *prevenir* las causas por delitos que cometan los aforados, limitándose á instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales las remitirá al juez competente, y pondrá á su disposicion los detenidos y efectos ocupados. Cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la jurisdiccion especial competente forma causa sobre el mismo delito, considerándose como primeras diligencias las de dar proteccion á los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca á su comprobacion y á la identificacion del delincuente, y detener, en su caso, á los reos presuntos.

¿Cuál es el principio más general de competencia en asuntos criminales?—El que atribuye competencia al juez ó tribunal del lugar del delito; regla casi absoluta que rige siempre, fuera de los casos reservados al Senado, y aquéllos en que expresa y limitativamente atribuye esta ley el conocimiento de determinadas causas al Tribunal Supremo, á las audiencias y á las jurisdicciones de Guerra y Marina.

¿Qué jueces son competentes cuando no consta el lugar en que se cometió el hecho punible?—Los siguientes, por el orden con que se relacionan: 1.º, el de la demarcacion en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito; 2.º, el de la demarcacion en que el reo presunto haya sido aprehendido; 3.º, el de la residencia del reo presunto, y 4.º, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Cesa su competencia cuando sea conocido el lugar del delito ó falta.

¿Qué jurisdiccion debe conocer de los delitos *conexos*?—La ordinaria siempre que sea competente para juzgarlos y alguno de los reos esté sujeto á ella. No concurriendo estas circunstancias, corresponde su conocimiento á la jurisdiccion especial.

¿Cuáles son los delitos *conexos*?—1.º, los cometidos simultáneamente por dos ó más personas reunidas; 2.º, los cometidos por dos ó más personas en distintos lugares ó tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; 3.º, los cometidos como medio para perpetrar otros ó facilitar su ejecucion; 4.º, los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

¿Qué jueces y tribunales deben conocer de estos delitos?—Los siguientes, por su orden: 1.º, el del territorio en que se haya cometido el delito á que esté señalada pena mayor; 2.º, el que primero comenzare la causa en el caso de que á los delitos esté señalada igual pena; 3.º, el que la sala de gobierno de la audiencia designe en sus casos respectivos, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, ó no conste cuál comenzó primero, si los juzgados ó tribunales correspondieren al territorio de la misma audiencia; 4.º, el que la sala de gobierno del Tribunal Supremo designe en el caso anterior, si las causas hubieren empezado en juzgados ó tribunales que correspondan á diferentes audiencias.

¿Qué jueces son los competentes para juzgar en España á los extranjeros?—Suprimido el fuero de extranjería, deben ser sometidos á los tribunales que tengan competencia, segun las reglas generales, por razon de las personas ó del territorio que quedan expuestas. Exceptúanse los prin-

cipes de las familias reinantes, los presidentes ó jefes de otros estados, los embajadores, los ministros plenipotenciarios y los ministros residentes, los encargados de negocios y los extranjeros empleados de planta en las legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serán puestos á disposicion de sus gobiernos respectivos.

¿Quiénes deben conocer de los delitos comenzados en España y frustrados ó consumados en el extranjero?—Los tribunales y jueces españoles en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delito, y sólo respecto á éstos.

¿Tienen competencia los tribunales españoles para castigar los delitos cometidos en el extranjero que afectan grave y profundamente á la nacion?—Pueden perseguir y penar los siguientes: contra la seguridad exterior del Estado; lesa majestad; rebelion; falsificacion de la firma, de la estampilla real ó del regente; falsificacion de la firma de los ministros; falsificacion de otros sellos públicos; falsificaciones que perjudiquen directamente el crédito ó intereses del Estado; falsificacion de billetes de Banco, cuya emision esté autorizada por la ley, y los cometidos en el ejercicio de sus funciones por los empleados públicos residentes en territorio extranjero. Debe tenerse en cuenta el resultado del proceso que se les hubiere formado en el país en que hubieren delinquido.

¿Quién debe conocer de los delitos cometidos en el extranjero por un español contra otro español, ó contra un extranjero?—Nuestros tribunales, siempre que, en el *primer caso*, concurren las circunstancias siguientes: 1.^a, que se querrelle el ofendido ó cualquiera de las personas que puedan hacerlo con arreglo á las leyes, 2.^a, que el delincuente se halle en territorio español: 3.^a, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado ó penado en el extranjero, y habiendo sido condenado, haya cumplido la pena. Si hubiere cumplido parte de la pena, se le rebajará. En el *segundo caso*, ó sea cuando el ofendido sea extranjero, deben concurrir dichas circunstancias, ser grave en España el delito, y estar castigado en el país en donde se cometió. Cuando el delincuente español sea entregado al cónsul, instruirá el proceso en primera instancia éste ó el que le reemplace, si no fuere letrado, con el auxilio de un asesor, y en su defecto con el de dos adjuntos, elegidos entre los súbditos españoles, los cuales serán nombrados por él al principio de cada año y actuarán en todas las causas pendientes ó incoadas durante el mismo, y remitirá los autos al tribunal.

¿A quién corresponde el conocimiento exclusivo de las faltas?—A la jurisdiccion ordinaria, por medio de los jueces municipales del lugar en que se cometan, sin más excepciones que las que luego veremos respecto á militares y marinos. De las cometidas en país extranjero conocerá en primera instancia el vicecónsul, si lo hubiere, y en su defecto un súbdito español, y en apelacion el cónsul, aplicando las leyes españolas.

Todo lo expuesto no obsta para lo que se resuelva en los tratados que puedan estipularse con las naciones extranjeras.

Competencia de las jurisdicciones especiales en lo criminal.

Conocida la organizacion de los tribunales de Guerra y Marina, debemos manifestar los asuntos que son de su competencia y los individuos que gozan fuero personal.

¿Qué delitos caen bajo la jurisdiccion de Guerra y Marina?—Conocerán sus tribunales, con arreglo á las ordenanzas militares del ejército y de la armada, de los delitos cometidos por militares y marinos de todas clases en servicio activo del ejército ó de la armada. Se entiende servicio militar activo el que presta el ejército permanente y la marina; el que se hace por

los cuerpos de guardia civil; los resguardos de Hacienda y cualquiera fuerza permanente, con organizacion militar, que dependa en este concepto de los ministerios de la Guerra ó Marina, y esté mandada por jefes militares y sujeta á las ordenanzas del ejército ó de la armada en lo que se refiera al cumplimiento de sus deberes militares, aunque tenga por objeto principal auxiliar á la administracion y al poder judicial, quedando sujetos dichos aforados á la jurisdiccion ordinaria por las faltas y delitos cometidos al prestar estos auxilios.

Así, pues, toda persona no comprendida entre las referidas, debe ser juzgada por la jurisdiccion ordinaria, por cuya razon deben serlo por ésta los siguientes: 1.º, los retirados del servicio, sus mujeres, hijos y criados; 2.º, las mujeres, hijos y criados de los que estén en servicio activo; 3.º, la gente de mar, por delitos comunes cometidos en tierra; 4.º, los operarios de arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas y parques de marina, artillería é ingenieros, por delitos cometidos fuera de sus respectivos establecimientos; 5.º, los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y el orden público, cuando la rebelion ó sediccion no tenga carácter militar; 6.º, los reos de atentado y desacato contra las autoridades políticas, administrativas ó judiciales; 7.º, los reos por los delitos de tumulto; desórdenes públicos y por pertenecer á asociaciones ilícitas; 8.º, los reos de falsificación de sellos, marcas, monedas y documentos públicos; 9.º, los reos de robo en cuadrilla; 10, los reos de adulterio, estupro ó de violacion; 11, los reos militares, por injuria ó calumnia á personas que no sean militares; 12, los reos de defraudacion ó contrabando y delitos conexos, cometidos en tierra, á no haberse hecho resistencia armada á la fuerza pública; 13, los que hubieren delinquido antes de pertenecer á la milicia, ó estando dados de baja ó desempeñando algun empleo ó cargo público que no sea militar, ó habiendo desertado; 14, los que incurrieren en faltas castigadas en el libro III del Código penal, excepto aquéllas á que las ordenanzas, reglamentos y bandos militares del ejército y armada señalen pena mayor cuando fueren cometidas por militares, las cuales serán de la competencia de la jurisdiccion de Guerra ó de Marina.

En vista de lo expuesto, ¿qué delitos y faltas son de la competencia de las jurisdicciones de Guerra ó Marina en su caso?—Los siguientes:

1.º Delitos cometidos por militares ó marinos de todas clases, en servicio activo, á excepcion de los expresados anteriormente.

2.º Delitos de traicion que tengan por objeto la entrega de una escuadra, plaza, puerto militar, buque del Estado, arsenal ó almacenes de pertrechos navales ó de municiones de boca ó guerra.

3.º Delitos de seducccion de tropa de tierra ó de mar, ya se refieran á militares ó marineros españoles ó extranjeros, que se hallen al servicio de España, para que deserten de sus banderas ó buques en tiempo de guerra, ó se pasen al enemigo.

4.º Delitos de espionaje, insulto á centinelas, á salvaguardias y tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó desacato á la autoridad militar.

5.º Delitos de seducccion y auxilio á la desercion en tiempos de paz.

6.º Delitos de robo de armas, pertrechos, municiones de boca y guerra, ó efectos pertenecientes á la Hacienda militar ó de marina en los almacenes, cuarteles, establecimientos militares, arsenales y buques del Estado, y de incendio cometido en los mismos parajes.

7.º Delitos cometidos en plazas sitiadas por el enemigo, que tiendan á alterar el orden público ó á comprometer la seguridad de las mismas.

8.º Delitos que se cometan en los arsenales del Estado contra el régimen interior, conservacion y seguridad de estos establecimientos.

9.º Delitos y faltas comprendidos en los bandos que con arreglo á ordenanza pueden dictar los generales en jefe de los ejércitos y los almirantes de las escuadras.

10. Delitos cometidos por los prisioneros de guerra y personas de cualquier clase, condicion y sexo que sigan al ejército en campaña, ó que conduzcan los buques del Estado.

11. Delitos de los asentistas del ejército ó de la marina, que tengan relacion con sus asientos y contratas.

12. Delitos de cualquiera clase cometidos á bordo de las embarcaciones, asi nacionales como extranjeras, cuando no sean de guerra y se cometan en puerto, bahías, radas ó cualquier otro punto de la zona marítima del reino, ó por piratas apresados en alta mar, cualquiera que sea el país á que pertenezcan, y de las represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arribadas. Esto no obstante, cuando los delitos comunes cometidos en buques mercantes extranjeros, en la zona marítima española, lo fueren por los individuos de las tripulaciones contra otros individuos de las mismas, serán entregados los delincuentes que no sean españoles á los agentes consulares ó diplomáticos de la nacion cuyo pabellon llevase el buque en que se cometió el delito, si fueren reclamados oficialmente, á no disponer otra cosa los tratados.

13. De las faltas especiales que se cometan por los militares ó por individuos de la armada en el ejercicio de sus funciones ó que afecten inmediatamente al desempeño de las mismas.

14. De las infracciones de las reglas de policía en las naves, puertos, playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de marina y reglamentos de pesca en las aguas saladas del mar.

¿Qué legislación es aplicable á los destinos expresados?—Para los militares y marinos en servicio activo, las ordenanzas del ejército de la armada. Para los demás, el Código penal, y en defecto de éste, aquéllas.

De las cuestiones de competencia.—Recursos de inhibitoria, declinatoria, fuerza en conocer y queja.

Nacen aquéllas de la creencia más ó menos apasionada, pero siempre resultado de la buena fé y del convencimiento que tienen los tribunales de que les corresponde el conocimiento de los juicios con exclusion de toda otra autoridad, sea ó no de la misma jurisdiccion, linea ó grado; creencia que, cuando existe al mismo tiempo en otro juez ó tribunal, respecto al mismo asunto, origina el conflicto de atribuciones llamado *competencia* y exige la decision del tribunal superior á ambos.

¿Qué clases hay de competencias?—*Afirmativas y negativas*. Las primeras tienen por objeto reivindicar el conocimiento de los juicios. Las segundas tienen lugar cuando dos ó más autoridades rehusan entender en el negocio por juzgarse incompetentes.

¿Quiénes pueden promover y sostener las cuestiones de competencia?—1.º, los juzgados municipales; 2.º, los tribunales de partido (1); 3.º, las audiencias. No podrán promoverlas los jueces de instruccion (2) ni el Tribunal Supremo.

La ley orgánica de tribunales, ordenaba que cuando los jueces de instruccion que correspondiesen á un mismo partido no estuvieren conformes, no entablarán competencia; pero si no estuvieren de acuerdo despues de la primera comunicacion, debian dar cuenta al tribunal de partido, el que, en vista de las comunicaciones de ambos jueces, decidiria de plano y sin ulterior recurso, qué juez debia actuar.

(1) Ya hemos dicho que sus atribuciones corresponden á los Juzgados de primera instancia.

(2) Hoy no existen estos jueces, como meros jueces de instruccion, porque ésta corresponde á los de primera instancia, segun dejamos dicho en su lugar oportuno.

Ningun juez ni tribunal podrá promover competencia contra el Tribunal Supremo. Este ordenará que aquéllos se abstengan de todo procedimiento y le remitan los antecedentes, cuando entendieren en negocios de la competencia de dicho Supremo Tribunal.

¿De cuántas maneras pueden promoverse, y ante quiénes, las cuestiones de competencia?—Por *inhibitoria* ó por *declinatoria*. La *inhibitoria* se intentará ante el juez municipal ó el tribunal á quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita la causa. La *declinatoria* se propondrá ante el juez municipal ó el tribunal á quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y la remita al tenido por competente.

¿Quiénes pueden proponerlas?—En los negocios civiles, los que sean citados ante juez incompetente, ó puedan ser parte en el juicio promovido. En los negocios criminales, el ministerio fiscal, por acusadores particulares cuando los procedimientos no se hayan comenzado á su instancia, por los procesados y los responsables civilmente del delito. La sumision, expresa ó tácita, priva del ejercicio de estos recursos al sometido.

¿En qué tiempo deben proponerse dichas excepciones?—El ministerio fiscal, en cualquier estado de la causa. El acusador privado, únicamente al presentarse como parte en ella. El procesado y el que sea considerado como parte civil, sólo dentro del tercer día siguiente al de la notificacion de la terminacion del sumario. La *inhibitoria* y la *declinatoria* son recursos incompatibles, simultánea ó sucesivamente, debiendo asegurar el que proponga la primera que no ha empleado la segunda, y ser condenado en costas si resultare lo contrario. El juez municipal ó tribunal que se considere competente en lo criminal deberá, en cualquier tiempo y en cualquier estado de la causa, promover la competencia.

¿Qué tramitacion se da al recurso de *inhibitoria*?—Los jueces municipales y los tribunales ante quienes se proponga la *inhibitoria* oirán al ministerio fiscal, cuando no fuere éste quien la hubiere propuesto. El ministerio fiscal contestará dentro de tercer día. Con vista de lo que diga, ó sin ella en los casos en que con arreglo á lo ya dicho no proceda, mandarán los jueces ó tribunales librar oficio *inhibitorio*, ó declararán no haber lugar á hacerlo en auto motivado, que será apelable en ambos efectos. Contra lo que en segunda instancia decidieren los tribunales de partido en lo civil y en lo criminal, sólo habrá recurso de casacion en su caso.

Los autos en que los tribunales de partido negaren en primera instancia el requerimiento de inhibicion en materia *civil*, serán apelables en ambos efectos. Los autos en que lo denegaren en materia *criminal* no serán apelables, y sólo habrá contra ellos el recurso de casacion en su caso. Contra los autos de las audiencias denegando el requerimiento de inhibicion, sólo habrá, en su caso, recurso de casacion en lo *civil* y en lo *criminal*.

Con el oficio de inhibicion se acompañará testimonio del escrito en que se haya pedido, de lo expuesto por el ministerio fiscal, de la providencia que se hubiere dictado y de lo demás que los tribunales y jueces estimen conducente para fundar su competencia. El juez ó el tribunal requerido oirá: en los negocios *civiles* á la parte ó partes que hayan comparecido, y cuando no estuvieren éstas de acuerdo con la inhibicion, al ministerio fiscal: en las causas *criminales* al ministerio fiscal y al acusador privado, si lo hubiere, y además, cuando se hallare ya la causa en plenario, al procesado ó procesados, y á los que sean parte como responsables civilmente del delito. El auto en que se inhibieren los jueces ó tribunales sólo será apelable en los casos en que lo son los del requirente.

Consentida ó ejecutoriada la sentencia en que los jueces ó tribunales se hubiesen inhibido del conocimiento de un acto, pleito ó causa, se remitirán los autos al juez ó tribunal que hubiere propuesto la *inhibitoria*. Consentido ó ejecutoriado el auto en que los jueces ó tribunales desistan de

la inhibitoria, lo comunicarán al requerido de inhibicion, remitiéndole lo actuado ante el mismo para que pueda mandarlo unir á los autos. Si insistieren en la inhibicion la comunicarán á los que hubiesen sido requeridos para que remitan los autos al tribunal que corresponda, haciéndolo ellos de lo actuado en su juzgado ó tribunal.

¿A qué tribunales corresponde decidir las competencias?—Al superior comun, si fueren de la misma jurisdiccion y territorio los sostenedores del conflicto jurisdiccional. Si no tuvieran superior comun por pertenecer á distintos territorios ó jurisdicciones, corresponde decidir la competencia al Tribunal Supremo. En el primer caso pueden casarse las decisiones; en el segundo no se da ulterior recurso. Ambos tribunales pueden condenar en costas al juez ó tribunal y á las partes que hubieren sostenido la cuestion con notoria temeridad.

¿Cómo deben sustanciarse las declinatorias?—En la forma establecida para los incidentes por la ley de Enjuiciamiento civil.

¿Las inhibitorias y declinatorias suspenden el procedimiento?—Las propuestas en las causas criminales *durante el sumario* no suspenderán su curso, el cual se continuará, cuando hubiere conformidad sobre el lugar en que se cometió el delito, por el tribunal ó juez que lo sea de él: cuando no exista aquélla, por el que hubiere comenzado antes á actuar, y cuando hubieren principiado ambos en una misma fecha, por el tribunal ó juez requerido de inhibicion. Las propuestas en los negocios civiles, y en las causas criminales *durante el plenario*, suspenderán los procedimientos hasta que se discuta y decida la cuestion de competencia, sin perjuicio de practicar cualquiera actuacion que sea absolutamente necesaria y de perjuicios irreparables, ya sea de oficio, ya á instancia de parte.

¿Qué juez ó tribunal debe comenzar ó continuar el procedimiento en los casos de competencia *negativa* por delito?—Cuando tenga lugar entre la jurisdiccion ordinaria y otra privilegiada, los tribunales de aquélla comenzarán ó continuarán la causa; cuando la competencia fuere entre tribunales y jueces que ejerciesen una misma clase de jurisdiccion, la empezará ó continuará el juez del lugar en que se cometió el delito, si en ello hubiese conformidad, y no habiéndola, el primero que hubiese empezado á actuar; y si tampoco en este punto hubiese conformidad, aquél ante quien se hubiese presentado querrela ó denuncia. Cuando no sean aplicables estas reglas, deberá continuar la causa el juez que hubiese promovido la competente negativa.

¿Cómo se deciden las cuestiones de jurisdiccion entre los tribunales seculares y los eclesiásticos?—Por medio de los recursos de *fuerza en conocer*, cuando sean promovidas por aquéllos contra éstos, y por los de *inhibicion y queja*, cuando éstos las promuevan contra aquéllos. El antiguo recurso de fuerza en *no otorgar*, ha sido derogado por la ley de organizacion de tribunales.

¿Quiénes pueden promover el recurso de *fuerza en conocer* y en qué forma?—Podrán promover el recurso de fuerza en conocer: 1.º, los que se consideraren agraviados por la usurpacion de atribuciones, hecha por un juez ó tribunal eclesiástico; 2.º, los fiscales de las audiencias y el del Tribunal Supremo exclusivamente.

El agraviado preparará el recurso ante el juez ó tribunal eclesiástico, solicitando que se separe del conocimiento del negocio y remita los autos ó las diligencias practicadas al juez ó tribunal competente, protestando, si no lo hiciere, impetrar la real proteccion contra la fuerza. El ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y sin preparacion alguna.

Denegada la pretension por el tribunal eclesiástico, se recurrirá al tri-

L 10^a

bunal secular competente, quien, si procede, mandará, por medio de real provision, que aquél le remita los autos; y si á ello se negare, repetirá en la misma forma el requerimiento; y si éste fuere desobedecido, mandará al tribunal de partido que recoja los autos de poder del tribunal eclesiástico y proceda á la formacion de causa criminal contra el desobediente. Recibidos los autos en la audiencia ó en el Tribunal Supremo, se sustanciará el recurso en la forma establecida en la ley de Enjuiciamiento civil respecto á las apelaciones de los incidentes, siendo parte el ministerio fiscal.

¿Qué declaraciones debe contener la resolucion del conflicto? —Alguna de las siguientes: 1.^a, no haber lugar al recurso, condenando en costas al que lo hubiese interpuesto y mandando devolver los autos al juez ó tribunal eclesiástico, para su continuacion con arreglo á derecho; 2.^a, declarar que el juez ó tribunal eclesiástico hace fuerza *en conocer*, y ordenar que levante las censuras si las hubiere impuesto, condenándole en las costas cuando hubiere por su parte temeridad notoria, y mandar que se dé cuenta al gobierno y se remitan los autos al juez competente.

Recusacion de jueces, magistrados y asesores.

¿Qué es recusacion?—El ejercicio del derecho que tienen los litigantes para pedir la separacion de los jueces en el conocimiento de los juicios que ante ellos penden, y en los cuales son parte legitima los recusantes.

Antes de la ley orgánica de tribunales, los jueces podian ser recusados con causa ó sin ella. Segun dicha ley, los jueces, magistrados y asesores sólo podrán serlo por causa legitima; es decir, que la recusacion ha de ser *causal* en todo caso y circunstancias.

¿Cuáles son estas causas?—Son causas legítimas de recusacion: 1.^a, el parentesco de consaguinidad ó afinidad, dentro del cuarto grado civil, con cualquiera de los que pueden recusar; 2.^a, el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el letrado de alguna de las partes que intervengan en el pleito ó en la causa; 3.^a, estar ó haber sido denunciador ó acusado por alguna de ellas como autor, cómplice ó encubridor de un delito, ó como autor de una falta; 4.^a, haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictámen sobre el pleito ó proceso como letrado ó intervenido en él como fiscal, perito ó testigo; 5.^a, ser ó haber sido denunciador ó acusador privado del que recusa; 6.^a, ser ó haber sido tutor ó curador para bienes de alguno que sea parte en el pleito ó en la causa; 7.^a, haber estado en tutela ó guardaduría de alguno de los expresados en el número anterior; 8.^a, tener pleito pendiente con el recusante; 9.^a, tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en la causa; 10, amistad íntima; 11, enemistad manifiesta.

¿Quiénes pueden recusar?—En los negocios civiles, los que sean ó se muestren parte en ellos; en los negocios criminales, el representante del ministerio fiscal, el acusador privado ó los que por él puedan ejercitar ó ejerciten sus acciones y derechos, los procesados y los responsables civilmente por delito ó falta.

¿Qué deben hacer las autoridades judiciales á quienes afecte alguna de las citadas causas de recusacion?—Inhibirse del conocimiento del negocio, sin esperar á que se les recuse. Contra esta inhibicion no habrá recurso alguno.

¿Cuándo debe entablarse la recusacion?—En los negocios civiles se pondrá en el primer escrito que presente el recusante cuando la causa en que se funde fuere anterior al pleito y tenga de ella conocimiento; si fuere posterior, ó aunque anterior no hubiere tenido antes de ella conocimiento, deberá proponerse tan luego como llegue á su noticia.

En lo criminal podrá proponerse la recusacion en cualquier estado de la

causa. Ni en lo civil, ni en lo criminal, podrá hacerse recusacion despues de comenzada la vista del pleito ó de la celebracion del juicio público de la causa. En los juicios verbales y de faltas, la recusacion se propondrá en el mismo acto de la comparecencia.

DE LOS JUICIOS EN GENERAL.

¿Qué es juicio?—La controversia que se establece entre dos ó más personas acerca de algun derecho, sejetándose en ella á las leyes civiles y penales de procedimientos, cuya contienda termina por la decision del tribunal competente. Puede ser *civil* ó *criminal*, segun que verse el negocio sobre la existencia de un derecho de naturaleza *civil* ó sobre un hecho justiciable.

¿Cuántas clases hay de juicios?—*Contenciosos* y de *árbitros*; *declarativos* y *ejecutivos*; *ordinarios* y *extraordinarios*; *petitorios* y *posesorios*; *universales* y *singulares*; de *mayor* y de *menor cuantía* y *verbales*. Cuando conocen de ellos las diferentes jurisdicciones que hemos enumerado, reciben el nombre de las mismas. Así se llaman *mercantiles*, *civiles*, *eclesiásticos*, *militares*, *criminales*, etc.

¿Qué es juicio *contencioso*?—Aquél en que media discusion entre partes, ajustando aquella al procedimiento correspondiente, ante los tribunales de justicia.

¿Qué es juicio de *árbitros*?—Aquél de cuya decision están encargadas las personas nombradas por las partes, en uso de la autoridad que éstas les confieren.

¿Qué es juicio *declarativo*?—«El que versa acerca de hechos dudosos que se han puesto en controversia y que deben ser terminados por la autoridad judicial.»

¿Qué es juicio *ejecutivo*?—Aquél que tiene por objeto cumplir lo consignado en un título ejecutivo que lleva aparejada ejecucion, ó en una sentencia firme. Llámase título *ejecutivo*, ó que trae aparejada ejecucion, el que está revestido de la fuerza de las sentencias ejecutorias.

¿Qué es juicio *ordinario*?—El que tiene una tramitacion solemne y lata, que constituye la regla general de los juicios.

¿Qué es juicio *extraordinario*?—El que se separa del ordinario por estar sujeto á un procedimiento más ó ménos corto, segun la naturaleza de la cuestion litigiosa, pero siempre ménos solemne que aquél.

¿Qué es juicio *petitorio*?—El que tiene por objeto la discusion del estado de las personas, la condicion de la propiedad, las servidumbres y el cumplimiento de las obligaciones.

¿Qué es juicio *posesorio*?—Aquél en que se litiga la tenencia ó posesion de las cosas.

¿Qué es juicio *universal*?—Llámase *universal* al juicio en que se ventilan varias acciones ó derechos, como acontece en los abintestatos y en las testamentarias.

¿Qué es juicio *singular* ó *particular*?—El que está llamado á conocer y decidir una sola accion sobre derecho ó cosa determinada.

¿Qué es juicio de *mayor cuantía*?—El que tiene por objeto la terminacion de una cuestion litigiosa cuyo valor excede de 3.000 rs. (750 pesetas).

¿Qué es juicio de *menor cuantía*?—El que tiene por objeto un valor mayor de 4.000 rs. (250 pesetas) hasta 3.000 (750 pesetas).

¿Qué es juicio *verbal*?—Aquél en que se ventilan cosas de un valor que no exceda de 4.000 rs., (250 pesetas) y son de la competencia de los juzgados municipales.

La *conciliacion* no es un verdadero juicio, por lo cual no la contamos entre los miembros de la division de los juicios. Es más bien un acto solemne que debe preceder, y precede por regla general, á los juicios contenciosos, y celebrarse ante el juez municipal, con el objeto de que el demandante y el demandado transijan amigablemente sus pretensiones respectivas. Precede tambien á algunos juicios criminales, v. gr., el de injuria y calumnia (1).

¿Qué circunstancias esenciales concurren en todo juicio?—Tres: los litigantes, la cosa litigiosa y un juez ó tribunal á quien pertenece la legítima decision de la controversia pendiente.

¿Cuántos litigantes debe haber en todo juicio?—Lo ménos dos: uno que pide, llamado *demandante*, y otra contra quien se pide, denominado *demandado*; ó lo que es lo mismo, debe haber *actor* y *reo*. Sucede frecuentemente que se presentan en el juicio terceras personas, ya litigando en nombre y por derecho propio, ya como partícipes en el del demandante ó demandado. En el primer caso el tercero se llama *tercer opositor*, y los demás figuran como una sola parte, defendiéndose bajo la misma direccion, si no hubiere incompatibilidad en sus pretensiones.

¿Quiénes pueden litigar y quiénes no?—Los que tienen capacidad para contraer, porque el litigio se equipara en sus efectos á un *cuasi-contrato*, y como para contratar es necesario poder consentir, porque sin el consentimiento no puede haber contratos, de aquí que no puedan presentarse en juicio por estar incapacitados: 1.º, los locos; 2.º, los privados de la administracion de sus bienes, 3.º, los menores, sin la autoridad de sus tutores ó el consentimiento de los curadores; 4.º, el hijo de familia, mayor ó menor de edad, excepto en lo relativo á los peculios *castrenses* y *cuasi castrenses*; 5.º, la mujer casada, sin licencia de su marido, á no litigar con él, por razon de la dote, alimentos ó malos tratamientos; 6.º, los menores de edad habilitados para manejar su caudal, y los casados, tambien menores, que tienen la administracion de sus bienes, necesitan, segun la opinion más autorizada, el nombramiento de un curador *ad litem* para litigar.

¿Quiénes requieren habilitacion para comparecer en juicio?—El hijo de familia, mayor ó menor de edad, y la mujer casada, que se encontraren en alguno de los casos siguientes: 1.º, estar el padre ó marido ausentes, sin que haya fundada esperanza de su próxima vuelta; 2.º, ignorarse el paradero del padre ó marido, y 3.º, negarse el padre ó marido á representar en juicio al hijo ó mujer.

¿Qué modificaciones establece el derecho mercantil en las reglas expuestas?—Los principios que regulan esta materia en el derecho civil son aplicables al mercantil, con las modificaciones siguientes: 1.ª, el hijo de familia mayor de veinte años y el menor que, aun cuando no lo sea, reuna las circunstancias exigidas por el Código de comercio para ejercer esta industria, puede comparecer en juicio, y 2.ª, la mujer casada que á su vez cumpla con las condiciones necesarias para comerciar, puede igualmente demandar y ser demandada. Cuando las personas jurídicas, como las corporaciones y establecimientos públicos, sean partes en un juicio, deben cumplir las disposiciones reglamentarias á que estén sujetas.

¿Es obligatorio el ejercicio de las acciones en juicio?—Sólo en el caso

(1) Debe preceder á todos los que tengan por objeto perseguir y castigar delitos que no puedan perseguirse á instancia de parte (Véase el tratado de Derecho penal y el capítulo de éste relativo al ejercicio de las acciones penales), con excepcion de los de violacion y rapto segun el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

llamado de *jactancia*, cuyo nombre recibe la *accion* que tiene el que se cree lastimado en su honra ó amenazado en sus derechos, para obligar al ofensor y al que intenta perturbar aquéllos á que, ó bien pruebe sus dichos en juicio, ejercitando para ello las acciones de que se crea asistido, ó bien guarde silencio en lo sucesivo. Tambien tiene lugar la demanda de *jactancia* cuando alguno, estando próximo á emprender un viaje, sabe que otro trata de promoverle pleito.

¿Qué cosas pueden ser objeto de los juicios?—Puede ser objeto del litigio todo lo que se comprende en Derecho civil bajo el nombre juridico de *cosa*, ejercitando para ello las acciones *reales*, *personales* y *mixtas*, de las cuales pasamos á ocuparnos determinada y someramente.

DE LAS ACCIONES.

L 84

¿Qué es *accion*?—«La facultad de perseguir en juicio nuestros derechos dice un reputado jurisconsulto.» Si el derecho lastimado es *real* ó en la *cosa*, la *accion* para perseguirlo recibe el mismo nombre, y llámase, por consiguiente, *accion real*. Si el derecho lesionado es *personal* ó á la *cosa*, la *accion* es por igual motivo *personal*. Cuando el derecho perturbado participa de la naturaleza de ambos, la *accion* es *mixta*. Acerca de la naturaleza de los derechos reales personales hemos expuesto al tratar del derecho romano y civil pátrio, los principios capitales en que descansa esta division y las reglas más necesarias para distinguirlos y apreciarlos, que deben tenerse presentes en este lugar.

¿Qué division suele hacerse de las *acciones*?—Dividense principalmente en *civiles* y *criminales*. Aquéllas tienen por objeto la persecucion de un derecho *civil*. Estas se proponen el castigo de los delitos y la efectividad de las responsabilidades consiguientes. Las primeras se subdividen por razon de su origen en *reales*, *personales* y *mixtas*, segun queda indicado; y por razon de su extension, en *solidarias* y *no solidarias*, segun que puedan ser ejercitadas por uno ó más individuos contra una ó várias personas, ó sólo por una contra otra, siendo ambas determinadas. Las segundas se subdividen en *públicas* y *privadas*: son públicas las que pueden ejercitarse de oficio y por cualquier ciudadano; son privadas las que están reservadas á determinadas personas, v. gr., las de *estupro*, *injuria* y *calumnia*.

Acciones reales.

¿Qué es *accion real*?—El medio de obtener judicialmente una cosa corporal ó la declaracion de un derecho real, constituido sobre cosa ajena. Como toda *accion* supone la lesion del derecho que la produce, lleva como secuela necesaria la indemnizacion de daños y perjuicios.

¿Cuál es la naturaleza de las *acciones reales*?—La de poder dirigirse contra el poseedor de la cosa que trata de obtenerse, como hijas de un derecho real, que sigue á ésta donde quiera que se halle. Es tal su fuerza, que se dan y pueden ejercitarse contra el que ha dejado de poseer la cosa por dolo.

¿Cuántas y cuáles son las *acciones reales*?—Tantas como derechos de la

misma índole reconoce la ley, de cuyos nombres suelen tomar su específica denominación. Cuéntanse como tales la *accion reivindicatoria*, la *publiciana*, la *rescisoría de dominio*, la *confesoria*, la *negatoria*, la *hipotecaria*, las *perjudiciales ó prejudiciales* y el *interdicto de adquirir* la posesion.

¿Qué es *accion reivindicatoria*?—La que compete al que es dueño de una cosa corporal, mueble ó inmueble, fungible ó no fungible, pero determinada, contra el que la posee, ha dejado de poseerla por dolo, ó se finge su poseedor é intenta retenerla, para que la devuelva á aquél con sus frutos y acciones. Para que esta accion sea eficaz requiere, como requisito indispensable, la prueba del dominio por parte del demandante. Si la cosa ha dejado de existir por mala fé del demandado, aquél puede reclamar de éste su estimacion.

¿Qué reglas deben seguirse en la condenacion de frutos?—Para que ésta sea justa, deben distinguirse los casos en que el poseedor demandado lo sea de buena ó de mala fé; en que se hayan ó no consumido los frutos antes y despues de la contestacion á la demanda; y la naturaleza ó clase de los mismos. El poseedor de buena fé sólo está obligado á restituir los frutos industriales percibidos y no consumidos, con deduccion de los gastos de cultivo, á devolver los frutos naturales existentes y satisfacer el valor de los consumidos, y á restituir todos los que hubiese percibido despues de la contestacion á la demanda, sea cual fuere su naturaleza. Los frutos industriales, percibidos y consumidos por el poseedor antes de este tiempo, constituyen el premio de su industria y buena fé y no está obligado á su devolucion.

Cuando el poseedor es de mala fé, debe tenerse en cuenta si ésta dimana de haberse apoderado de la cosa violenta ó clandestinamente, ó consiste en tener conciencia de que aquél de quien la adquirió no era dueño de ella. La restitution de frutos, en el primer caso, se extiende á todos los percibidos, consumidos ó existentes, y se limita á los primeros, en el segundo caso.

La posesion de la cosa demandada puede haber dado lugar á gastos *útiles, necesarios ó voluntarios* para su conservacion; y como no sería justo que al poseedor de buena fé se le condenara á la pérdida de unos y otros, y sería injusto, por el contrario, que al de mala fé se le abonaran todos, la ley ha hecho distinciones y fijado reglas para su abono, las cuales hemos expuesto al tratar de la *posesion* en su lugar oportuno (1).

¿Qué es *accion publiciana*?—«La que compete al que, habiendo adquirido por justa causa la posesion necesaria para prescribir, la perdió antes de cumplirse el tiempo de la prescripcion, contra el que posee la cosa con título más débil que el suyo, para que la restituya con frutos y acciones. Cuando el dominio pueda adquirirse sin posesion, hay tambien lugar á esta *accion*».

¿Cuál es su fundamento?—La presuncion legal de que es dueño aquél á quien compete, mientras no se pruebe lo contrario, y la necesidad de proteger al poseedor que tan poco dista de la cualidad de dueño, contra otro detentador ó de menor consideracion legal. Por ello no requiere la prueba del dominio, porque no es verdadero dueño el que puede ejercitar la *accion publiciana*, circunstancia que la distingue de la *reivindicatoria*.

¿Qué es *accion rescisoría de dominio*?—La que compete al ausente por justa causa, contra el poseedor que ha prescrito una cosa de la propiedad de aquél durante su ausencia, para que se rescinda la prescripcion y se le entregue la cosa con sus frutos y acciones.

¿Cuál es el fundamento de esta *accion*?—Fúndase en la presuncion le-

(1). Véase el tratado de Derecho civil, pág. 86

gal de que no ha prescrito el que realmente habia adquirido el dominio por este título. Dura cuatro años, y sus efectos se equiparan á la *restitucion in integrum*.

¿Qué es accion *confesoria*?—La que compete al dueño del predio dominante contra el poseedor del predio sirviente, ó perturbador de una servidumbre, para vindicarla y obligar al demandado á reconocer su existencia.

¿Cuál es su fundamento?—El derecho *real* de servidumbre, que puede ser ejercitado por el propietario, el acreedor hipotecario, el enfiteuta, el superficiario y, en fin, por todo el que tenga interés en la existencia de la servidumbre.

¿Qué es accion *negatoria*?—La que compete al dueño de un predio contra el que pretende tener sobre él una servidumbre, á fin de que se declare la libertad de su finca y se obligue á éste á respetarla.

¿Cuál es su fundamento?—El principio de libertad, inherente al dominio absoluto de la propiedad, que se presume siempre, salvo la prueba en contrario. Diferénciase de las demás *acciones reales* en que, en vez de ejercitarse contra el poseedor, es éste quien tiene exclusivo derecho para su ejercicio, y en que no le es aplicable la regla que impone al demandante la obligación de probar su derecho, deber que compete por el contrario al demandado en fuerza de la presuncion de libertad que se supone en las fincas, mientras no se pruebe su limitacion ó gravámen, como queda dicho.

¿Qué es accion *hipotecaria*?—La que compete al acreedor contra el poseedor de la cosa empeñada ó hipotecada en seguridad de crédito, para conseguir su realizacion en el valor de la misma cosa, siendo la deuda exigible y no pagada. Antes de los diez dias siguientes al vencimiento del plazo, puede el tercer poseedor de la cosa hipotecada eludir la accion del acreedor, obligándole á que se dirija preferentemente contra el deudor.

¿Qué son acciones *prejudiciales*?—Las que por su naturaleza deben ser decididas con preferencia y antelacion á otras, para poder entrar en un segundo juicio en que se ventilen las segundas. Llámaseles tambien *perjudiciales* porque su decision afecta á personas que no han sido partes en el litigio. Tienen doble carácter y suelen referirse á la filiacion de las personas.

¿Cómo se define el *interdicto de adquirir*?—La accion que compete á los herederos contra los detentadores de una herencia, para obtener la posesion juridica de ésta, que nunca habian adquirido. Es condicion precisa que nadie posea á título de dueño ó de usufructuario, los bienes cuya posesion se pide.

L. 31

Acciones personales.

¿Qué es accion *personal*?—La que tiene por objeto pedir el cumplimiento de una obligacion nacida de un contrato ó de un cuasi-contrato.

¿Cuántas y cuáles son las acciones personales?—Tantas como obligaciones legitimas pueden constituirse. Son las principales y más comunes, la *redhibitoria* y *estimatoria*, la accion de *lesion*, la de *eviccion* y *saneamiento*, la *institoria* y *excitoria*, la *restitucion in integrum*, las llamadas en sentido estricto *personales* ó *interdictos* y la de *in rem verso*. Dividense las acciones personales en *directas* ó *contrarias*. Llámase *directas* á las que nacen inmediatamente del contrato, é indirectas ó *contrarias* á las que nacen mediatemente ó pueden nacer despues de celebrado, y tienen por objeto el resarcimiento de gastos é indemnizacion de daños y perjuicios.

¿Qué es accion *redhibitoria*?—Es la que compete al comprador á quien no se manifestó el vicio oculto que tenia la cosa vendida y á sus herede-

ros, contra el vendedor y los suyos, que á sabiendas lo ocultaron, para que admitan la cosa vendida, con los frutos y acciones, devolviéndoles el precio recibido, é indemnizando al comprador de los perjuicios ocasionados. Dura seis meses, contados desde la fecha de la venta ó desde que el comprador ha tenido conocimiento del vicio de la cosa, que antes ignoraba.

¿Qué es accion *estimatoria*?—La que compete al comprador engañado, contra el vendedor que por dolo é ignorancia no manifestó el vicio oculto de la cosa vendida, para que le restituya la parte del precio que ménos vale aquélla, por efecto del vicio que contiene. Llámasele tambien accion *quantum minoris*. Dura un año, contado como el anterior.

¿Qué es accion de *lesion*?—La que compete al contrayente por haber sido engañado en más de la mitad del justo precio de la cosa vendida, contra el engañador, para que se rescinda el contrato ó se le indemnice de la pérdida que ha sufrido. Esta accion dura cuatro años, y no tiene lugar en las ventas mercantiles.

¿Qué es accion de *eviccion y saneamiento*?—La que compete al que ha perdido en juicio la propiedad de una cosa, contra aquél de quien la hubo por causa onerosa, para que le indemnice de su pérdida y perjuicios que haya sufrido. Para poder utilizarla es circunstancia indispensable que el poseedor cite de eviccion á su trasmitente antes de la publicacion de probanzas del pleito, á fin de que pueda salir á él á defender el derecho demandado.

¿Qué es accion *institoria*?—La que compete á los que han contratado con los factores ó dependientes debidamente autorizados, contra los dueños ó directores de un establecimiento mercantil, para que cumpla las obligaciones contraídas por aquéllos á su nombre.

¿Qué es accion *exercitoria*?—La que compete á los que han contratado con el capitán de una nave, contra el naviero, á fin de conseguir el pago de los créditos contraídos por aquél para la reparacion ó aprovisionamiento de la nave.

¿Qué es *restitucion in integrum*?—«La accion que compete para obtener la reposicion de un negocio válido, segun el rigor del derecho, en el cual hemos sufrido lesion, al estado que tenía antes de habérsenos perjudicado.» Esta accion es por su naturaleza supletoria, y debe por ello ejercitarse en defecto de otras. Dura cuatro años, y para los menores todo el tiempo de la menor edad y cuatro años más, á que se llama *cuadrenio legal*.

¿Cuál es el objeto de las acciones posesorias?—Proteger el hecho de la posesion perturbado ó amenazado de perturbacion. Es menester tener muy en cuenta que estas acciones sólo se refieren al *hecho de poseer*, sin entrar en averiguaciones acerca del *derecho* de posesion ó por virtud del cual se posee.

¿Cuál es el origen de las acciones personales?—El delito ó la falta que constituye el hecho perturbatorio.

¿Qué clases hay de acciones posesorias?—Pertenecen á este género los *interdictos* de retener y recobrar, de obra nueva y obra vieja (1). El *interdicto de retener* la posesion sólo tiene lugar cuando ha habido conatos, manifestados por algun acto exterior, de turbar ó inquietar en ella al que la tuviere. El fin de esta accion consiste en impedir la perturbacion amenazada. El *interdicto de recobrar* tiene lugar cuando alguno es despojado por fuerza de la posesion de una cosa mueble ó inmueble del que cometió el despojo, para obtener la restitucion é indemnizacion del daño causado. No

(1) Véase más adelante el procedimiento sobre estos juicios especiales, en donde tienen un sucinto, pero completo desarrollo, estas indicaciones.

es obstáculo para que el interdicto proceda, que la posesion del despojado haya sido adquirida por fuerza, clandestinamente ó á ruego.

¿Qué es interdicto de obra nueva y de obra vieja?—La accion que compete al dueño de una heredad que se cree perjudicado por una nueva é ilegítima edificación, contra el dueño de ésta, para conseguir su demolicion. El interdicto de obra vieja tiene por objeto evitar el perjuicio que puede sobrevenir del derrumbamiento de una obra vieja ó ruínosa, y compete al que lo tome contra el dueño de aquélla, para la adopcion de medidas urgentes, á fin de evitar los riesgos que el mal estado de cualquier construccion pueda ofrecer, y para obtener su demolicion. Solo podrán intentarlo: 1.º, los que tengan alguna propiedad contigua ó inmediata, que pueda resentirse ó padecer por la ruina; 2.º, los que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio ó construccion que amenazare ruina.

¿Qué es accion de *in rem verso*?—La que compete al que contrajo con un hijo de familia ó dependiente no mercantil, para obtener de su padre ó principal, el cumplimiento de la obligacion que ha sido útil á éstos.

Acciones mixtas.

¿Cuáles son las acciones mixtas?—La de division de herencia (*familie erciscunda*), de division de cosa comun (*communi dividundo*), de deslinde ó amojonamiento (*finium regundorum*), de *peticion de herencia*, querella de *testamento inoficioso*, la denominada *pauliana*, la *ad exhibendum*, la *noxal* y la de *peculio*.

¿Cómo se define la accion *familie erciscunda*?—La que compete á un heredero contra los demás, para dividir la herencia y obligarles á ciertas prestaciones, fundándose en que á nadie puede sujetarse á permanecer en comunion contra su voluntad.

¿Qué prestaciones se deben por esta accion?—Las de *lucro*, *daño* é *impensas*. La prestacion de *lucro* tiene por objeto dar participacion á los coherederos en las ganancias procedentes de la herencia. La de *daño* tiene por objeto resarcir á aquéllos de los perjuicios causados por un coheredero. La de *impensas* reconoce igual fin por los gastos necesarios que hubiere hecho en los bienes hereditarios el coheredero.

¿Cuál es la accion *communi dividundo*?—La que tiene por objeto dividir la cosa comun perteneciente á varios sócios, y comunicar las prestaciones personales referidas.

¿Qué fin tiene la accion *finium regundorum*?—Deslindar y arreglar los términos de varios campos colindantes.

¿Cuál es la accion de *peticion de herencia*?—La que compete al heredero, contra el que posee la herencia, para que se le declare tal heredero y se le den las cosas hereditarias con todos sus incrementos, se le rindan cuentas y se le resarzan los daños ocasionados.

¿Qué es querella de *testamento inoficioso*?—La accion que tiene por objeto rescindir el testamento en la parte que perjudica á los herederos forzosos que han sido desheredados, ó á los herederos preteridos, ó á los hermanos postergados á personas torpes. Tiene de particular esta accion que obliga á probar la justa causa de desheredacion, al contrario. Dura cinco años, sin perjuicio del beneficio de restitucion correspondiente á los menores.

¿Qué es accion *pauliana*?—La que tienen los acreedores para obtener la nulidad de las enajenaciones hechas en fraude de sus créditos. Requiere indispensablemente, que las enajenaciones se hayan realizado causando daño deliberado, y que sean posteriores á la sentencia en que se condene al deudor al pago de los créditos y entrega consiguiente de bienes.

¿Quiénes no son responsables de sus efectos?—Los que han adquirido por título oneroso, sin participacion en el fraude, del deudor.

¿Cómo se define la accion *ad exhibendum*?—La que compete á todo el que tiene interés en una cosa, contra su poseedor, para que la ponga de manifiesto. Es siempre precursora de otra, cuyo ejercicio prepara, y se limita á las cosas muebles.

¿Qué es accion *noxal*?—La que tiene el que ha sido perjudicado por un animal, á quien no ha hostigado, contra su dueño ó poseedor, para que éste resarza los daños y perjuicios que le ha causado aquél.

¿Qué es accion de *peculio*?—La que compete al que ha contratado con un hijo, á quien el padre dió un peculio para negociar, contra el segundo para el cumplimiento é indemnizacion de los contratos de aquél, en cuanto quepan en el importe del peculio.

288

Excepciones.

¿A qué se da el nombre de *excepciones*?—A las alegaciones que expone el demandado contestando á la demanda, aduciendo nuevos hechos en contra de los de ésta ó un derecho que la contrarie, ó negando la existencia de aquéllos. Es la *exclusion de la accion*.

¿Cuántas clases hay de *excepciones*?—Dos: *dilatorias* y *perentorias*. Llámaseles tambien *temporales* y *perpétuas*. Algunos autores las dividen en *reales* y *personales*.

¿Qué es excepcion *dilatoria* ó *temporal*?—La que tiene por objeto aplazar la decision final del juicio, sin que su fuerza desvirtúe la de la demanda principal.

¿Qué es excepcion *perentoria* ó *perpétua*?—La que tiene por objeto combatir y dejar sin efecto la *accion* ejercitada por el demandante.

¿Cuáles son las *dilatorias*?—Sólo son admisibles como excepciones dilatorias: 1.^a, la incompetencia de jurisdiccion; 2.^a, la falta de personalidad en el demandante ó en su procurador; 3.^a, la litispendencia en otro juzgado ó tribunal competente; 4.^a, el defecto legal en el modo de proponer la demanda. Si el demandante fuese extranjero, será tambien excepcion dilatoria la del arraigo del juicio, en los casos y en la forma que en la nacion á que pertenezca se exigiere á los españoles.

¿Cuáles son las *perentorias*?—Pertenece á este género todo hecho ó derecho que tienda á destruir la accion. Son, por consiguiente, *perentorias* las de *cosa juzgada*, *pago*, *remision*, *pacto de no pedir*, *dolo* ó *miedo*, *prescripcion*, etc.

¿Qué son *excepciones reales*?—Las que nacen de la misma cosa litigiosa y pueden ser alegadas por cualquiera que tenga interés en ella, como el pacto de *no pedir*.

¿Cuáles son las *excepciones personales*?—Las que son inherentes á la persona del demandado, por quién únicamente pueden oponerse, como el beneficio de *competencia*.

289

Acumulacion de acciones y de autos.

¿Qué es acumulacion de *acciones*?—El acto por el que los litigantes reunen en una sola demanda diversas acciones que creen corresponderles, á fin de que sean discutidas y decididas en un mismo juicio y por una sola sentencia. La disminucion de los pleitos, el evitar decisiones, á veces contradictorias, dictadas sobre análogos litigios, y el no molestar la atencion de

los tribunales con procedimientos distintos, cuyo objeto puede ser comprendido en uno sólo, constituyen los principales fundamentos de la teoría de acumulacion de acciones.

¿De cuántas maneras puede ser la acumulacion?—*Necesaria y voluntaria*. Es necesaria la acumulacion: 1.º, cuando, de no hacerse, se dividiría la continencia de la causa; 2.º, cuando existe un *juicio universal* en el que deben ser ventilados los derechos particulares, y 3.º, cuando el origen de las acciones es uno mismo, aunque sean diversos los fines á que tienden. Es *voluntaria* la acumulacion siempre que entre ambos litigantes existan dos ó más acciones que no sean contradictorias y no deba preceder la declaracion judicial de alguna de ellas, en cuyo caso ésta debe ser previa é independientemente discutida.

¿Qué es acumulacion de autos?—La reunion, para ser decididos por una misma sentencia, de los diversos pleitos que tengan entre sí los mismos litigantes. Su fundamento es igual al que legitima la acumulacion de acciones. La de autos no puede tener lugar de oficio, requiriendo en todo caso la solicitud de parte legítima que puede hacer en cualquiera estado del juicio.

¿Qué causas pueden alegarse para obtenerla?—Cinco: 1.ª, cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los pleitos, cuya acumulacion se pida, produzca excepcion de cosa juzgada en el otro; 2.ª, cuando en juzgado competente haya pendiente pleito sobre lo mismo que sea objeto del que despues se haya promovido; 3.ª, cuando haya un juicio de concurso al que se halle sujeto el caudal contra que se haya deducido ó deduzca cualquier demanda; 4.ª, cuando haya un juicio de testamentaria ó de abintestato al que se halle sujeto el caudal, contra el cual se haya deducido ó se deduzca una accion de las declaradas acumulables á estos juicios; 5.ª, cuando, de seguirse separadamente los pleitos, se divida la continencia de la causa. Se entiende dividirse la continencia de las causas para los efectos de la disposicion que contiene la 5.ª causa: 1.º, cuando haya entre los dos pleitos identidad de personas, cosas y accion; 2.º, cuando haya identidad de personas y cosas, áun cuando la accion sea diversa; 3.º, cuando haya identidad de personas y acciones, áun cuando las cosas sean distintas; 4.º, cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque se den contra muchos, y haya, por consiguiente, diversidad de personas; 5.º cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas; 6.º, cuando haya identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean diversas.

¿Ante quién debe pedirse la acumulacion?—Ante cualquiera de los jueces que conozcan de los pleitos que tratan de acumularse.

¿Cuáles son los efectos de la acumulacion?—Que los autos acumulados se seguirán en un sólo juicio y serán terminados por una misma sentencia, y que el pleito más moderno se acumulará al más antiguo, suspendiéndose el curso del que estuviere más próximo á su terminacion, hasta que el otro se halle en el mismo estado.

L405

POBREZA LEGAL.

Derechos y deberes de los litigantes pobres.

¿Quiénes son pobres segun la ley de Enjuiciamiento civil?—1.º, los que vivan de un jornal ó salario eventual; 2.º, los que vivan sólo de un salario permanente, ó de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que no

exceda del doble jornal de un bracero en cada localidad; 3.º, los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras ó cria de ganados, cuyos productos estén graduados en una suma menor que la equivalente al jornal de dos braceros en cada localidad; 4.º, los que vivan sólo del ejercicio de cualquiera industria, ó de los productos de cualquier comercio, por los cuales paguen de contribucion una suma inferior á la fijada en la siguiente escala; en las capitales de provincia de primera clase, 200 rs.; en las de segunda, de 160; en las de tercera y cuarta, de 120; en las cabezas de partido judicial, de 100, y en los demás pueblos, de 80.

¿Qué excepciones reconocen estas reglas?—No pueden ser declarados pobres; 1.º, los que reuniendo dos ó más modos de vivir de los designados anteriormente, llegaren á reunir un rendimiento total superior á los tipos allí señalados, computando los parciales de cada uno, y 2.º, los que, no obstante estar comprendidos en algunas de los casos expuestos, dan lugar á inferir, á juicio del tribunal, por el número de criados que tienen á su servicio, el alquiler de la casa que habitan ú otros signos exteriores, que cuentan con medios superiores al jornal doble de un bracero en cada localidad.

¿A qué localidad se refiere la ley?—A la cabeza del partido judicial en que habite el que pida la defensa por pobre.

¿Qué derechos son consecuencia de la declaracion de pobreza?—Los que sean declarados pobres disfrutarán los beneficios siguientes: 1.º, el de usar para su defensa papel del sello de pobres; 2.º, el que se les nombren abogado y procurador, sin obligacion á pagarles honorarios ni derechos; 3.º, la exencion del pago de toda clase de derechos á los subalternos de los tribunales y juzgados; 4.º, el de dar caucion juratoria de pagar, si vinieren á mejor fortuna, en vez de hacer los depósitos necesarios para la interposicion de cualesquiera recursos. La circunstancia de litigar un pobre unido á otros litigantes, no le priva del goce de estos beneficios, áun cuando el producto de los modos de vivir de todos ellos exceda de los tipos legales, siempre que individualmente tenga derecho á ser defendido por pobre.

¿Cuáles son los deberes de los litigantes pobres?—1.º, deben pagar las costas en que fueren condenados si se les encontraren bienes en que hacerlas efectivas; 2.º, están obligados al reintegro de todas las costas y el papel sellado que hayan dejado de satisfacer si se les ha denegado la defensa por ejecutoria; 3.º, deben satisfacer las causadas en su defensa que quepan dentro de la cuarta parte de lo que hayan obtenido en el pleito en que salieron vencedores; 4.º, y las expresadas en el número anterior, si dentro de tres años despues de fenecido el pleito vinieren á mejor fortuna.

¿Cuándo puede decirse que el litigante pobre ha venido á mejor fortuna?—1.º, por haber adquirido salario permanente, sueldo, rentas, ó estar dedicado al cultivo de tierras ó cria de ganados, cuyos productos sean ó estén graduados en una cantidad superior al jornal de cuatro braceros en cada localidad; 2.º, por pagar de contribucion de subsidio cuotas dobles á las designadas por la ley para poder ser declarados pobres.

¿Qué reglas deben observarse en la tramitacion de los expedientes de pobreza?—Las siguientes: 1.ª, la sustanciacion de la pretension de pobreza se acomodarà á los trámites establecidos para los incidentes en los juicios ordinarios; 2.ª, cuando el que solicite ser defendido como pobre tenga por objeto entablar una demanda, se esperará para dar curso á ésta á que sobre el incidente de pobreza haya recaído ejecutoria. No obstante, los jueces accederán á que se practiquen sin exaccion de derechos aquellas actuaciones de cuyo aplazamiento puedan seguirse perjuicios irreparables al actor, suspendiéndose inmediatamente despues el curso del pleito; 3.ª, cuando el que solicite ser defendido por pobre fuere el demandado, quedará al arbitrio del actor la continuacion ó suspension del curso del pleito, mientras se

decida sobre la pobreza. Cuando optare por la continuacion del pleito, se formará sobre la pobreza pieza separada, defendiéndose desde luego como pobre al que haya ofrecido la justificacion, sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resolverse; las reglas que quedan establecidas tendrán aplicacion, tanto si se solicitare el despacho por pobre al principio del pleito, como si se pidiere durante su curso; 4.º, el litigante que no se haya defendido por pobre en la primera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la segunda, deberá justificar que con posterioridad ha venido á ser pobre con efecto; no justificándolo cumplidamente, no se le otorgará la defensa gratuita; esta regla es aplicable al que, no habiendo litigado como pobre en la segunda instancia, solicite se le defienda como tal para interponer ó seguir el recurso de casacion; 5.º, de toda pretension para la defensa por pobre se dará traslado á la persona contra quien se proponga litigar el que la solicite, ó si fuere éste el demandado, al actor, y 6.º, siempre que se deniegue la defensa por pobre, se condenará en costas al que la haya solicitado.

¿Qué limites reconoce la declaracion de pobreza?—La declaracion hecha en un pleito no puede utilizarse con otro si á ella se opusiere el colitigante. Oponiéndose, debe repetirse con su citacion la justificacion, y con su audiencia dictarse nueva sentencia sobre la pobreza.

¿Quiénes son pobres segun la ley de Enjuiciamiento criminal?—Esta ley considera pobres, por regla general, á las personas á quienes da esta consideracion la de Enjuiciamiento civil, y excusa la informacion cuando aquellas estuvieren comprendidas de *notoriedad*, en alguno de los casos de pobreza legal (1) que la segunda menciona, evitando así dilaciones inútiles, cuyo resultado puede preverse desde luego.

L107

Conciliacion.

66a ¿Qué es *conciliacion*?—Un acto solemne celebrado ante autoridad competente, que tiene por objeto procurar la avenencia y transaccion de los litigantes próximos á ventilar sus derechos en la jurisdiccion contenciosa. Es un trámite previo y necesario, por regla general, para entrar en la mayor parte de los litigios. Por eso dice la ley que «antes de promover un juicio, debe intentarse la conciliacion ante el juzgado municipal, y que el tribunal competente no admitirá demanda civil ó querella criminal á que no acompañe certificacion del acto de conciliacion, ó de haberse intentado sin efecto, en los casos en que por derecho corresponda. Serán, no obstante, válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salva la responsabilidad en que el juez haya incurrido; pero se procederá á la celebracion del acto en cualquier estado del pleito en que se note su falta.»

¿Qué juicios civiles están exceptuados del acto conciliatorio?—1.º, los juicios verbales; 2.º, los juicios ejecutivos y sus incidencias; 3.º, los interdictos; 4.º, los juicios de sucesion, testamentaria, abintestato, vincular y de capellanías colativas, ó sus bienes ó incidencias de estos juicios; 5.º, los de concurso de acreedores y sus incidencias; 6.º, los juicios en que estén interesados la Hacienda pública, los pósitos, propios, comunes, ó cualquiera otra clase de bienes de establecimientos públicos, de pueblos, de provincias ó del Estado; 7.º, los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados, y 8.º, los juicios contra ausentes que no tengan residencia co-

(1) Título preliminar, cap. 2.º de la ley de Enjuiciamiento criminal.

nocida ó que residan fuera del territorio de la audiencia á que corresponda el juzgado en que deba entablarse la demanda. No será necesario el acto de conciliación para la interposición de las demandas de tanteo, de retracto y de cualquiera otra que sea urgente y perentoria por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se exigirá el acto de la conciliación ó la certificación de haberse intentado sin efecto.

¿Qué querellas criminales exigen el acto previo de conciliación?—Únicamente aquellas en que se ejercitan acciones procedentes de delitos perseguibles, tan sólo á instancia de parte, exceptuando la violación y el rapto. (Art. 182 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

¿Quién es el juez competente para conocer de los actos de la conciliación?—El juez municipal del domicilio del demandado, á prevención con el de su residencia, sin perjuicio de aquél á quien se hayan sometido las partes expresa ó tácitamente.

¿Qué tramitación se sigue en la celebración de las conciliaciones?—El que intente el acto de la conciliación, acudirá al juez municipal, presentando dos papeletas firmadas por él, ó por un testigo, á su ruego, si no pudiere firmar. En estas papeletas se expresará el nombre, profesión y domicilio del demandante y demandado, la pretensión que se deduzca y la fecha en que se presentan en el juzgado. El juez, en el día en que se presente el demandante, ó en el siguiente hábil, mandará citar al demandado, señalando el día y hora en que ha de tener lugar la comparecencia, procurando que se verifique á la brevedad posible. Entre la citación y la comparecencia deberán mediar al menos veinticuatro horas. Por justas causas podrá el juez reducir este término.

Los demandantes y demandados están obligados á comparecer en el día y hora señalados. Si alguno de ellos no lo hiciere, ni manifestare causa justa para no concurrir, se dará el acto por terminado, condenándole en las costas y en una multa de seis á sesenta reales, que hará efectivos el juez municipal. Tanto los demandantes como los demandados, se presentarán acompañados cada cual de un *hombre bueno*, que lo pueden ser todos los españoles que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. El acto de conciliación se celebrará en la forma siguiente: comenzará el demandante exponiendo su reclamación y manifestando los fundamentos en que la apoya. Contestará el demandado lo que crea conveniente, y podrá hacer también manifestación de cualquier documento en que funde sus excepciones. Después de la contestación podrán los interesados replicar si quisieren. Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombres buenos y el juez municipal procurarán averiguarlos. Si no pudiesen conseguirlo, se dará el acto por terminado. Se extenderá sucintamente el acta de conciliación en un libro que llevará el secretario del juzgado municipal, la cual será firmada por todos los concurrentes. Por los que no sepan ó puedan firmar, lo hará un testigo á su ruego.

¿A quién corresponde ejecutar lo convenido en las conciliaciones?—Al juez municipal, si no excediere de la cantidad prefijada para los juicios verbales (250 pesetas). Si excediese de esta cantidad, por el juez de primera instancia, de la manera y en la forma prevenidas para la ejecución de las sentencias.

¿Qué recursos caben en este género de convenios?—Contra lo convenido en el acto de conciliación sólo se admitirá la demanda de nulidad. Procederá ésta únicamente por las causas quedan lugar á la nulidad de los contratos, y deberá interponerse ante el juez de primera instancia del partido, dentro de los ocho días siguientes al de la celebración del acto. Esta demanda seguirá la tramitación del

JUICIO CIVIL ORDINARIO.

Demanda, contestacion, reconvenccion, réplica, dúplica.

15 Habiendo sido derogada la ley de Enjuiciamiento mercantil, toda la doctrina que vamos á exponer es extensiva á los pleitos de comercio, sujetos á la tramitacion y jurisdiccion ordinarias, excepto en la sustanciacion del juicio de quiebras.

¿Qué es juicio *ordinario*?—Al ocuparnos de las diferentes clases de juicios hemos definido el juicio *ordinario* en general; mas, concretándonos á la ley de Enjuiciamiento civil, podemos definirlo ahora diciendo que es el conjunto de trámites y procedimientos, más extensos, con arreglo á los que deben sustanciarse las reclamaciones judiciales cuyo valor exceda de 3.000 reales y no tenga señalada en dicha ley tramitacion especial.

¿Cuáles son las partes principales del juicio ordinario?—La *demanda*, el *emplazamiento*, la *contestacion*, la *prueba* y la *sentencia*.

¿Cuál es la primera diligencia del juicio ordinario?—La presentacion de la demanda ante el tribunal correspondiente. Hay casos, sin embargo, en que se comienza el procedimiento por medio de diligencias preparatorias, que, por su importancia, y tener un lugar señalado durante el curso de aquél, no pueden preceder á la demanda sino en determinadas circunstancias.

¿Cuáles son éstas y aquéllas?—El juicio ordinario podrá prepararse: 1.º, pidiendo declaracion jurada el que pretende demandar á aquél contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algun hecho relativo á su personalidad, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el juicio; 2.º, pidiendo la exhibicion de la cosa mueble que en su caso haya de ser objeto de accion real que trate de entablar; 3.º, pidiendo el que se crea heredero, coheredero ó legatario, la exhibicion de un testamento ó codicilo; 4.º, pidiendo el comprador al vendedor, ó el vendedor al comprador, en el caso de eviccion, la exhibicion de títulos ú otros documentos que se refieren á la cosa vendida; 5.º, pidiendo un sócio ó comunero la presentacion de los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad al consocio ó condueño que los tenga en su poder. El juez accederá en estos casos á la pretension, si estima justa la causa en que se funda. Las demás las rechazará de oficio. Fuera de los casos expresados, no podrá pedir el demandante posiciones, informaciones de testigos ni ninguna otra diligencia de prueba, salvo cuando por edad avanzada de algun testigo, peligro inminente de su vida, proximidad de una ausencia á punto con el cual sean difíciles ó tardías las comunicaciones, ú otro motivo poderoso, pueda exponerse al actor á perder su derecho por falta de justificacion, en cuyo caso podrá pedir, y el juez decretará, que sea examinado el testigo ó testigos que estén en las circunstancias referidas, verificándose su examen del modo que se previene.

¿Qué es *demanda*?—El escrito que abre la puerta al juicio, en el cual ejercitamos el derecho que creemos tener por medio de la *accion* correspondiente.

¿Qué requisitos debe contener la demanda civil?—1.º, el nombre del autor y del demandado; 2.º, la determinacion clara y precisa en la cantidad, modo, tiempo y lugar de la cosa que se pide, exponiendo sucintamente y

enumerados los hechos y fundamentos de derecho; 3.º, la razon ó causa por que se pide, manifestando la naturaleza de la *accion* que se ejercita.

¿Qué documentos deben producirse con la demanda?—1.º el poder que justifique la personalidad del procurador, siempre que éste intervenga; 2.º, el documento ó documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representacion legal de alguna persona ó corporacion, ó cuando el derecho que reclame provenga de habérselo otro transmitido; 3.º, la certificacion del acto de conciliacion, ó de haberse intentado sin efecto, en los casos en que es requisito indispensable para entrar en el juicio; 4.º, los documentos en que se funde su derecho: si no los tuviere á su disposicion, designará el archivo ó lugar en que se hallen sus originales: interpuesta la demanda, no se admitirá al actor otros que los que fueren de fecha posterior, á ménos que juraren, si fuesen anteriores, que no tenía conocimiento de ellos; 5.º, copia en papel comun de la demanda, suscrita por procurador. Los jueces repelerán de oficio las demandas no formuladas con claridad y que no se acomodaren á las prevenciones referidas.

¿Cuáles deben tenerse presentes en las demandas *mercantiles*?—Derogada de ley de Enjuiciamiento, los negocios y causas de comercio por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868; las demandas mercantiles están sujetas á la fórmula de las civiles.

¿Qué es *emplazamiento*?—El acto legal é indispensable por medio del cual se pone en conocimiento del demandado la reclamacion intentada en la demanda, para que use de su derecho, como mejor viere convenirle.

¿De cuántos modos puede hacerse el *emplazamiento*?—De tres: 1.º, el emplazamiento se hará por medio de cédula, que será entregada al demandado si fuere habido, y si no se le encontrare, á su mujer, hijos, parientes que vivan en su compañía, criados ó vecinos: se extenderá diligencia de esto en los autos, que será firmada por el escribano y por la persona á quien se haga la entrega: si ésta no supiere, no pudiere ó no quisiere firmar, se hará lo que se previene respecto á las notificaciones; 2.º, cuando la persona que se ha de emplazar no resida en el pueblo en que se la demande, se hará el emplazamiento por medio de orden comunicada al juez municipal del en que se halle: si residiere en otro partido judicial, se hará por medio de exhorto dirigido al juez ó tribunal de él: el despacho ó la orden, serán entregados al demandante: en estos casos, el juez que conozca del negocio podrá aumentar el término del emplazamiento en razon de un dia por cada seis leguas que hubiere de distancia entre el pueblo de su residencia y el de la del demandado: tanto el juez requerido, como el municipal en su caso, presentados que les sean el exhorto ó la orden, sin pedir poder al que los presente, mandarán hacer el emplazamiento en los términos prevenidos anteriormente, y entregarán diligenciado el exhorto, ó la orden, al portador de ellos: si el demandado residiere en el extranjero, el exhorto se dirigirá en la forma que se prevenga en los tratados, ó en su defecto en la que determinen las disposiciones generales del gobierno. En este caso el juez ampliará el término del emplazamiento por el tiempo que, atendidas la distancia y la mayor ó menor facilidad de las comunicaciones, considere necesario; 3.º, si no fuere conocido el domicilio del demandado, se le emplazará por medio de edictos, que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los *Diarios oficiales* del pueblo en que se siga el juicio, en los del que hubiere tenido su residencia y en la *Gaceta de Madrid*: esto último cuando las circunstancias de las personas y del negocio lo exigieren á juicio del juez. Sin perjuicio de esto, se practicará la diligencia de emplazamiento en cualquier lugar en que fuere habido el demandado.

¿Cuál es término del emplazamiento?—De la demanda presentada y admitida por el juez, se conferirá traslado á la persona contra quien se proponga, y se la emplazará para que dentro de nueve dias improrrogables

comparezca á contestarla, entregándole la copia en papel comun. Personado en forma el demandado, se le mandará entregar los autos para que contetes dentro de nueve dias.

¿Qué efectos produce el *emplazamiento*?—1.º, previene el juicio incoado, sobre cuyo objeto no puede ser entablado otro en la misma instancia, siempre que el juez que de él conozca sea competente, ante quien queda sujeto el emplazado hasta la conclusion del juicio; 2.º, da origen á la nulidad de la enagenacion de la cosa litigiosa posterior á la fecha del emplazamiento; 3.º, interrumpe la prescripcion, y 4.º, somete á la jurisdiccion del juez emplazante al aforado que nada hubiere expuesto en oposicion.

¿Cuándo deben proponerse las excepciones dilatorias?—Dentro de seis dias, contados desde el siguiente al de la notificacion de la providencia en que se mandaren entregar los autos para contestar la demanda. Trascurrido dicho término, deberán alegarse contestando, y no producirán el efecto de suspender el curso de la demanda. A un mismo tiempo, y en un mismo escrito, el demandado alegará todas las excepciones dilatorias: no haciéndolo así, sólo podrá usar de las que no alegare, contestando á la demanda.

¿Qué tramitacion se sigue en su discusion?—Del escrito en que se proponga la excepcion dilatoria se dará traslado por tres dias al actor. De lo que dijere éste se dará copia al demandado. Se recibirá á prueba el artículo por ocho dias improrrogables, si los litigantes ó alguno de ellos lo solicitaren ó el juez lo estimare necesario. Concluido que sea el término, se pondrán durante dos dias de manifiesto en la escribania del actuario las pruebas practicadas, para que las partes puedan enterarse. Enteradas las partes de las pruebas ejecutadas, ó si no las hubiere, dada la contestacion por el actor, mandará el juez traer los autos á la vista. Dentro del dia siguiente podrán las partes pedir se oiga á sus defensores, en cuyo caso se señalará al efecto el dia inmediato. Oidas las defensas, ó pasado sin solicitarlo el dia en que pueden pedir las partes señalamiento para la vista, mandará el juez traer los autos para su exámen. La sentencia se dictará precisamente dentro del tercer dia, á contar desde el siguiente al de la vista, si la ha habido, ó en otro caso desde el siguiente al en que se dicte la providencia mandando traer los autos. El juez proveerá previamente sobre la declinatoria y la litispendencia si se propusieren estas excepciones. Si el juez se declara competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones dilatorias. La sentencia que recayere es apelable en ambos efectos. Si se apelare, se remitirán los autos al tribunal superior, citadas y emplazadas las partes.

¿A qué se da el nombre de *contestacion*?—Al escrito en que el demandado expone las excepciones ó alegaciones que cree procedentes en defensa de sus derechos. Consentida ó ejecutoriada la sentencia en que se mandare contestar la demanda, se entregarán los autos al demandado. La contestacion deberá tener lugar dentro de los seis dias siguientes al en que se notificare el auto de entrega.

¿En que forma debe presentarse la *contestacion*?—El demandado formulará la contestacion en los términos prevenidos para que el actor formule la demanda. La facultad que tiene el demandante respecto al exámen de testigos y presentacion de documentos es extensiva al demandado. En la contestacion á la demanda, deberá hacer uso el demandado de las excepciones perentorias que tuviere, y de las dilatorias no propuestas en el término señalado anteriormente. En la misma contestacion propondrá tambien la reconvention en los casos en que proceda. Las excepciones y la reconvention se discutirán al propio tiempo y en la misma forma que el negocio principal, y serán resueltas con éste en la sentencia. Despues de la contestacion á la demanda, no podrá hacerse uso de la reconvention, quedando á salvo al demandado su derecho, que podrá ejercitar en el juicio correspondiente.

¿Qué es *reconvencion*?—La reclamacion que hace el demandado al actor ante el mismo juez para que sea decidida en el mismo juicio. Tiene por objeto terminar en un solo pleito diferentes reclamaciones de la misma índole y naturaleza.

¿En qué clases de juicios no puede tener lugar?—Autores de reconocida y justa reputacion opinan que no puede alegarse en los *ejecutivos*, porque daría lugar al despacho de dos ejecuciones, difíciles de llevar á cabo en un mismo expediente.

¿Qué tramitacion sigue á la *contestacion*?—De la *contestacion* á la demanda se dará traslado al actor por término de seis dias, y de la réplica al demandado por igual término.

¿Qué es *réplica*?—Dáse este nombre á las alegaciones que opone el demandante á la *contestacion*, para desvirtuar sus fundamentos y corroborar las que sirven de base á la demanda.

¿Qué es *dúplica*?—El escrito que á su vez formula el demandado en apoyo de sus excepciones, contestando á la *réplica*.

¿Qué requisitos indispensables deben contener la *réplica* y la *dúplica*?—La determinacion concreta de la contienda judicial. En ellos, tanto el actor como el demandado fijarán definitivamente los puntos de *hecho* y de *derecho* objeto del debate, pudiendo modificar ó adicionar los que hayan consignado en la demanda y *contestacion*. En los mismos escritos pedirán por medio de otrosíes que se falle desde luego el pleito ó que se reciba á prueba si lo estimaren necesario.

De la prueba.—Escritos de ampliacion.

¿Qué es prueba?—La averiguacion de los hechos dudosos alegados en juicio, valiéndose para ello de *medios* llamados *probatorios*. En toda prueba existen, pues, como afirma un célebre jurisconsulto, dos hechos: uno *principal*, que es el que se trata de probar; otro *probatorio*, que es el que se alega para probar aquél. El primero es el *fin* de la prueba; el segundo el *medio* de probanza.

¿A quién corresponde el recibir y practicar las diligencias de prueba?—Los jueces y magistrados ponentes en los tribunales colegiados recibirán por sí las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. Los segundos, sin embargo, podrán cometer á los jueces de primera instancia, y éstos á los de paz, las diligencias cuando deban practicarse en pueblo que no sea el de su respectiva residencia. Ni los magistrados ponentes, ni los jueces de primera instancia, ni los municipales, podrán cometer estas diligencias á los escribanos ó secretarios. Las diligencias que no puedan practicarse en el partido en que se siga el litigio, deberán cometerse precisamente al juez ó tribunal de aquel en que han de ejecutarse. Este se arreglará á lo que queda prevenido anteriormente.

¿Qué division suele hacerse de las *pruebas*?—Divídenla los A. A. en *plenas* y *semiplenas*, segun la mayor ó menor fé que hacen en juicio. Mas esta division, hija de la antigua jurisprudencia, está casi desechada por el derecho moderno, omitiéndola la ley de Enjuiciamiento criminal.

¿Cuándo debe tener lugar la prueba en el juicio?—El juez recibirá el pleito á prueba en el caso de que todos los litigantes la hayan solicitado. Si alguno se opusiere, señalará dia para vista sobre el recibimiento á prueba: en él oirá á las partes, ó sus defensores si se presentaren, y determinará lo que estime procedente. La providencia en que se otorgare la prueba no será apelable: la en que se denegare lo será en ambos efectos. Si los litigantes hubieren convenido en que se falle definitivamente el pleito sin

necesidad de prueba, mandará el juez traer con citacion los autos á la vista y dictará sentencia.

¿Cuál es el escrito llamado de *ampliacion*?—Aquel en que puede alegarse por las partes, despues de haberse recibido el pleito á prueba, un hecho nuevo atinente á la cuestion, ú otro antiguo del cual juren no haber tenido conocimiento anterior.

¿Qué tramitacion se da á este escrito?—Del escrito de *ampliacion* se dará por tres dias traslado á la otra parte, que podrá tambien alegar nuevos hechos si lo creyere conveniente. La prueba que se ejecute será extensiva á los hechos expuestos en los cuatro primeros escritos y en los de *ampliacion*.

¿A qué se da el nombre de *término de prueba*?—Al tiempo fijado por el juez, dentro de los límites marcados por la ley, durante el cual deben practicarse todas las pruebas propuestas por las partes. Puede ser *ordinario* y *extraordinario*.

¿Cuál es el *ordinario* y cuándo debe otorgarse?—El término ordinario de prueba no podrá exceder de sesenta dias cuando hubiere de hacerse en la Península, islas adyacentes ó posesiones españolas de Africa. Dentro de los sesenta dias, los jueces fijarán el término que, segun las circunstancias del negocio, sea suficiente. El juez podrá otorgar próroga del término señalado por el tiempo que estime necesario, dentro de los mismos sesenta dias, si se pidiere antes de cumplirse.

¿Cuál es el *extraordinario* y cuándo debe concederse?—El término extraordinario será: de cuatro meses, si hubiere de ejecutarse la prueba en Europa ó islas Canarias; de seis, si en las Antillas españolas; de ocho, si en los continentes de América, Africa ó escalas de Levante; de un año, si en Filipinas ó en cualquiera otra parte del mundo de que no se haya hecho expresion. El término extraordinario de prueba se otorgará si hubiere de ejecutarse alguna fuera de la Península, de las islas adyacentes ó de las posesiones españolas de Africa, siempre que concurren las circunstancias siguientes: 1.^a, que se solicite dentro de los tres dias siguientes al en que se hubiere notificado el auto de prueba; 2.^a, que lo que se quiera probar fuera de la Península, islas adyacentes ó de las posesiones españolas de Africa, haya ocurrido en el pais donde se intente hacer la prueba; 3.^a, que se indique la residencia de los testigos que hayan de ser examinados cuando la prueba haya de ser testifical; 4.^a, que se expresen, en el caso de ser la prueba documental, los archivos donde se hallen los documentos que hayan de testimoniarse, y que sean éstos conducentes al pleito. Tambien deberá otorgarse el término extraordinario, aunque los hechos hayan tenido lugar en la Península ó islas adyacentes ó posesiones españolas de Africa, cuando los testigos que sobre ellos deban declarar se hallaren en cualquiera de los puntos antes designados. En este caso habrán de expresarse sus nombres y residencia.

El término extraordinario correrá al mismo tiempo que el ordinario. El litigante á quien se hubiere concedido el término extraordinario y no ejecutar la prueba que haya propuesto, será condenado á pagar á su contrario una multa, que no podrá bajar de 2.000 rs. ni exceder de 20.000 á juicio del juez que conozca de los autos, salvo si apareciere que no ha sido por su culpa. Esta multa se impondrá en la sentencia definitiva.

¿Puede suspenderse el *término de prueba*?—Ni el término ordinario ni el extraordinario de prueba podrán suspenderse sino con justa causa, á juicio del juez y bajo su responsabilidad. Cuando se otorgue la sentencia se expresará en la providencia la causa que hubiere para hacerlo. Solo se considerará justa causa para la suspension la imposibilidad de ejecutar la prueba propuesta por algun obstáculo cuya remocion no haya estado al alcance del que la pidiere.

¿Cuándo debe proponerse la prueba y cuál es admisible?—Recibidos los

autos á prueba, se entregarán por seis dias á cada una de las partes sucesivamente para que proponga la que les convenga, sin perjuicio de que en el resto del término puedan solicitar cualquiera otra. Los jueces repelerán de oficio las pruebas impertinentes ó inútiles que propusieren las partes.

¿Cuándo y en qué forma debe practicarse?—Las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio, sin que baste juramentar á los testigos dentro de él para examinarlos despues. Trascurrido el término de prueba, sólo son admisibles las escrituras ó documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad, ó de los anteriores cuya existencia ignorara el que los traiga. Tambien podrán admitirse los documentos que, aunque conocidos, no hubieren podido adquirirse con anterioridad. Toda diligencia de prueba ha de practicarse previa citacion de la parte contraria, que se hará lo más tarde el dia antes del en que hubiere de tener lugar. Exceptuánse de esta regla la confesion en juicio y el reconocimiento de libros y papeles de los litigantes. Para la prueba de cada una de las partes deberá formarse pieza separada.

MEDIOS PROBATORIOS.

¿Qué medios de prueba reconoce el derecho como legales?—Los medios de prueba de que puede hacerse uso en los juicios son: 1.º, documentos públicos y solemnes; 2.º, documentos privados; 3.º, correspondencia; 4.º, confesion en juicio; 5.º, juicio de peritos; 6.º, reconocimiento judicial; y 7.º, testigos. En materia criminal, son un medio probatorio eficaz, los *indicios*.

Documentos públicos.

¿Qué documentos merecen este nombre?—Bajo la denominacion de documentos públicos y solemnes se comprenden: 1.º, las escrituras públicas, otorgadas con arreglo á derecho; 2.º, los documentos expedidos por los funcionarios que ejerzan un cargo por autoridad pública en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones; 3.º, los documentos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos ó dependientes del Estado, de las provincias ó pueblos, y las copias sacadas y autorizadas por los secretarios y archiveros por mandato de la autoridad competente; 4.º, las partidas de bautismo, de matrimonio y defunciones dadas con arreglo á los libros de los párrocos, ó por los que tengan á su cargo el registro civil (1); 5.º, las actuaciones judiciales de toda especie.

¿Qué reglas ó requisitos deben observarse para que los documentos pú-

(1) Despues de la promulgacion de la ley del Registro civil las partidas del eclesiástico dejaron de tener fuerza probatoria, limitandose á hechos anteriores á aquélla. Pero modificada dicha ley por el Decreto de 9 de Febrero de 1875, (Vase el tratado de Derecho civil) esta disposicion ha declarado en su artículo 4.º que la partida *sacramental* del matrimonio hará plena prueba del mismo despues que haya sido inscrito en dicho Registro; y que, no habiéndolo sido, deberá someterse la partida á las comprobaciones y diligencias que dispongan los Reglamentos y á las que los Tribunales estimen necesarias para caudilar su identidad.

blicos hagan fé en juicio?—1.^a, que los que hayan venido al pleito sin citacion se cotejen con sus originales, prévia dicha citacion, á no ser que la persona á quien perjudiquen haya prestado á ellos asentimiento expreso; 2.^a, que los que hubieren de traerse de nuevo vengan en virtud de mandamiento compulsorio que se expida al efecto, prévia citacion de la parte á quien hayan de perjudicar; 3.^a, que si el testimonio que se pida fuere de parte de un documento solamente, se adicione á él lo que el coligante señalar, si lo cree conveniente; 4.^a, que los testimonios ó certificaciones sean dados por el encargado del archivo, oficina ó registro en que se hallen los documentos, por el escribano en cuyo oficio radiquen los autos, ó por el del pleito. Estos testimonios ó certificaciones se expedirán bajo la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de los originales, y la intervencion de los interesados se limitará á señalar lo que haya de testimoniarse ó certificarse.

¿Qué fuerza tienen los documentos otorgados en el extranjero?—Los documentos otorgados en otras naciones tendrán igual fuerza que los que lo sean en España, si reúnen todas las circunstancias exigidas en aquéllas, y las que además requieran las leyes españolas para su autenticidad. Conviene los litigantes sobre su inteligencia, se estará y pasará por la que le dieren. No habiendo conformidad, se remitirán por el juez á la oficina de la interpretacion de lenguas para su traduccion, sin que ésta pueda hacerse en ninguna otra forma.

¿Qué es escritura pública?—El documento otorgado ante notario y garantido con la fé pública. Puede ser escritura *matriz* ó *primera copia*. Es escritura *matriz* la original que el notario ha de redactar sobre el contrato ó acto sometido á su autorizacion, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales, ó de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo notario. Es *primera copia* el traslado de la escritura matriz, que tiene derecho á obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. Se entiende por *protocolo* la coleccion ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año y se formalizará en uno ó más tomos encuadernados, foliados en letra y con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones del caso.

¿Qué requisitos deben concurrir en las *segundas* ó *posteriores copias*?—No podrán expedirse segundas ó posteriores copias de la escritura matriz sino en virtud del mandato judicial, y con citacion de los interesados ó del promotor fiscal cuando se ignoren éstos ó estén ausentes del pueblo en que esté la notaria. Será innecesaria dicha citacion en los actos unilaterales, y aun en los demás cuando pidan la copia todos los interesados.

¿Qué circunstancias deben contener los instrumentos públicos?—Los notarios autorizarán todos los instrumentos públicos con su firma y con la rúbrica y signo que propongan y se les dé al expedirles los títulos de ejercicio. No podrán variar en lo sucesivo sin real autorizacion la rúbrica ni el signo. En cada audiencia habrá un libro en que los notarios pongan su firma, rúbrica y signo despues de haber jurado su plaza. No podrán autorizar los notarios ningun instrumento público *inter vivos* sin la presencia al ménos de dos testigos. Los notarios darán fé en los instrumentos públicos de que conocen á las partes, ó de haberse asegurado de su conocimiento por el dicho de los testigos instrumentales ó de otros dos que las conozcan, y que se llamarán, por tanto, testigos de conocimiento. También darán fé de la vecindad y profesion de los otorgantes. En los casos graves y extraordinarios, en que no sea posible consignar por completo estas circunstancias, expresarán cuanto sobre ellos les conste de propia ciencia y manifiesten los testigos instrumentales y de conocimiento. En todo instrumento público consignará el notario su nombre y vecindad, los nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, año y dia del otorgamiento. Los instrumentos públicos se redactarán en lengua castellana y se escribirán con letra clara,

sin abreviaturas y sin blancos. Tampoco podrán usarse en ellos guarismos en la expresion de fechas ó cantidades. Los notarios darán fé de haber leído á las partes y á los testigos instrumentales la escritura íntegra, ó de haberles permitido que la lean, á su eleccion, antes de que la firmen, y á los de conocimiento lo que á ellos se refiera, y de haber advertido á unos y á otros que tienen el derecho de leerlas por sí.

¿Quiénes no pueden ser testigos de los instrumentos públicos?—Los parientes, escribientes ó criados del notario autorizante. Tampoco podrán serlo los parientes de las partes interesadas en los instrumentos, ni los del notario, unos y otros dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad.

¿Qué documentos se consideran nulos?—Serán nulos los instrumentos públicos: 1.º, que contengan alguna disposicion á favor del notario que los autorice; 2.º, en que sean testigos los parientes de las partes en ellos interesadas en el grado de que queda hecho mérito, ó los parientes, escribientes ó criados del mismo notario, y 3.º, aquéllos en que el notario no dé fé del conocimiento de los otorgantes, ó no supla esta diligencia en la forma establecida anteriormente, ó en que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma, rúbrica y signo del notario.

¿Qué formalidades son privativas de los testamentos y codicilos cerrados y escrituras de reconocimiento de prole natural?—Los notarios llevarán un libro reservado en que insertarán, con la numeracion correspondiente, copia de la carpeta de los testamentos y codicilos cerrados cuyo otorgamiento hubieren autorizado, y los protocolos de los testamentos y codicilos abiertos cuando los testadores lo solicitaren, y remitirán un índice reservado tambien al regente de la audiencia, por conducto del juez de primera instancia, en los términos establecidos. No es necesario que haya un libro para cada año. Llevarán además un protocolo reservado en que pondrán las escrituras matrices de reconocimiento de los hijos naturales, cuando no quieran los interesados que consten en el registro general. Remitirán tambien de las escrituras así protocolizadas, índice reservado por conducto del juez de primera instancia al regente de la audiencia, y no necesitarán formar en cada año protocolo diferente.

¿De cuántas maneras puede ser combatida la fuerza de una escritura pública?—De dos: puede ser redargüida de falsa *civil* ó *criminalmente*. Se redarguye *civilmente* cuando concurre alguno de los casos en los cuales hemos dicho que se considera nula la escritura. Se redarguye *criminalmente* en los seis siguientes: 1.º, si constara por otro instrumento público ó por cuatro testigos idóneos y contestes que el supuesto otorgante se hallaba al tiempo del otorgamiento en un lugar lejano, mientras en la escritura se le mencionaba como presente; 2.º cuando el escribano declarase judicialmente no haber intervenido en la redaccion de la escritura, á no ser que el interesado probase lo contrario; 3.º, cuando los testigos instrumentales nieguen el otorgamiento, si el escribano es de mala fama y el instrumento reciente; pero faltando una de estas circunstancias y concordando aquél con el protocolo, deberá creerse al escribano; 4.º, cuando se niega la cualidad de escribano al que autorizó la escritura y la parte interesada no puede acreditarla, á no ser muy antiguo el instrumento; 5.º, cuando por otro instrumento público ó por declaracion de cuatro personas se justifica la ausencia en país remoto, ó el fallecimiento de uno de los testigos que se suponen presenciales, anteriormente al día de la fecha de la escritura; 6.º, cuando el escribano conviene con el aserto del reclamante que pretende no está autorizada por él, por no parecerse á la suya la letra en que está extendida.

Las demás especies de documentos públicos no necesitan explicacion con la claridad que están indicados.

Documentos privados.

¿Qué es documento privado?—Llámanse privados al documento otorgado por particulares sin que en él intervenga la fé de un notario, ni pertenezca á alguna de las clases de los documentos públicos. Figuran perfectamente como tales el *vale ó pagaré*, el *recibo ó resguardo*, los libros de *inventarios*, *cuentas*, etc.

¿Qué es *vale ó pagaré*?—Un documento privado, en el cual una persona se obliga á pagar á otra determinada cantidad ó al portador del documento.

¿Qué es *recibo ó resguardo*?—Un documento privado en el que el acreedor se dá por satisfecho del todo ó parte de la deuda, manifestando haber recibido la cantidad en que consiste.

¿Qué requisitos deben cumplirse para que los documentos privados tengan fé en juicio?—Que sean reconocidos judicialmente por su autor, ó que dos testigos declaren haberlo visto hacer, habiendo fallecido aquél, ó bien que la persona á quien perjudica no quiera rendir el juramento que se le defiera, ni referirle al que lo presente. Del mismo modo que los públicos, los documentos privados pueden ser redargüidos *civil y criminalmente*.

¿Qué reglas prescribe la ley de Enjuiciamiento acerca de la presentación de los documentos privados?—1.^a, deben exhibirse y unirse á los autos; si hubieren de testimoniarse los documentos privados ó correspondencia que obren en poder de un tercero se exhibirán al escribano de los autos, y éste testimoniará lo que señalen los interesados; 2.^a, no se obligará á los que no litiguen á la exhibición de documentos privados de su propiedad exclusiva, salvo el derecho que asista al que los necesitare, del cual podrá usar en el juicio correspondiente. Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamente, tampoco se les obligará á que los presenten en la escribanía, y si lo exigieren, irá el escribano á sus casas ú oficinas para testimoniarlos; 3.^a, podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se niegue ó se ponga en duda la autenticidad de un documento público ó privado. En este cotejo procederán los peritos con sujeción á lo prevenido. La persona que pida el cotejo designará los documentos indubitados con que deba hacerse.

¿Cuáles se reputan auténticos para el cotejo?—1.^o, los documentos que las partes reconozcan como tales de comun acuerdo; 2.^o, las escrituras públicas y solemnes; 3.^o, los documentos privados, cuya letra ó firma hayan sido reconocidas en juicio por aquél á quien se atribuya la dudosa; 4.^o, el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra suya aquél á quien perjudique.

¿Es decisivo el juicio pericial?—No. El juez hará por sí mismo la comprobación después de oír á los peritos revisores, y no tendrá que sujetarse á su dictámen.

Confesion judicial.

¿Qué es confesion judicial?—La manifestación ó reconocimiento que ante el juez competente hace un litigante de los hechos alegados, por su contrario, ó porque se le interroga.

¿De cuántas maneras puede ser la confesion?—*Expresa ó tácita, simple ó calificada, judicial ó extrajudicial*.

A fin de facilitar la claridad en la práctica de esta prueba, se prepara, por medio de breves asertos ó afirmaciones, para que el declarante confiese ó niegue, con separación, cada uno de los capítulos. Estos asertos reci-

ben el nombre de *posiciones*, y el declarar acerca de ellas se llama *absolver posiciones*.

¿Es obligatorio para el litigante el medio de prueba de la *confesion judicial*?—Si: todo litigante está obligado á declarar, bajo juramento, en cualquier estado del juicio, contestada que sea la demanda, hasta la citacion para definitiva, cuando así lo exigiere el contrario.

¿Con qué circunstancias y en qué forma debe hacerse?—El que ha de ser interrogado será citado con un día de antelacion. Si no compareciere, se le volverá á citar, bajo apercibimiento de que si no se presentare á declarar sin justa causa, será tenido por confeso. Estas declaraciones podrán hacerse á eleccion del que las pidiere, bajo juramento decisorio ó indecisorio. En el primer caso harán prueba plena, no obstante cualquiera otras; en el segundo no perjudicarán más que al que declare. Las contestaciones deberán ser afirmativas ó negativas, pudiendo agregar el que las dé las explicaciones que estime convenientes ó las que el juez le pida: si se negare á declarar, el juez le apercibirá en el acto de tenerle por confeso, si persiste en su negativa. Si las respuestas fueren evasivas, el juez le apercibirá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos, respecto á los cuales sus respuestas no fueren categóricas y terminantes; si el llamado á declarar no compareciere á la segunda citacion sin justa causa, si rehusare declarar ó persistiere en no responder afirmativa ó negativamente, apesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso, si se pidiere, inmediatamente y sin esperar á la sentencia definitiva.

¿Qué requisitos debe reunir la *confesion judicial* para que haga fé en juicio?—Debe ser voluntaria, sin fuerza ó miedo en el que la hace; prestada á sabiendas y no por error; recaer sobre el objeto determinado; ser conforme á la naturaleza y las leyes; perjudicar al confesante, y tener lugar ante juez competente.

¿Qué es *confesion extrajudicial*?—La que hace un litigante fuera de juicio. Para que surta efecto debe verificarse ante la parte contraria ó de su procurador y testigos, con expresion de cantidad y causa de deber. La ley de Enjuiciamiento civil no reconoce expresamente este género de prueba; pero, unido á otras semiplenas, puede contribuir á llevar al ánimo del tribunal sentenciador el convencimiento necesario para formar el juicio decisivo del litigio.

¿Qué es juramento *decisorio del pleito*?—Aquél que se defiende por una parte á la otra, obligándose aquélla á estar y pasar por lo que declare el confesante. Puede ser *voluntario* ó *convencional* y *judicial*.

¿Cuál es el juramento *decisorio en el pleito*?—El que presta el demandante acerca del valor de la cosa demandada, en virtud de providencia judicial. Llámasele tambien *estimatorio*. Sólo se acude á él en el caso de carecer completamente de prebanza.

¿Qué es juramento *supletorio*?—Es el que el juez exige á uno de los litigantes para completar la prueba insuficiente presentada en los autos. Tiene lugar cuando la entidad de la cosa es de poca importancia.

¿Qué es el juramento *indecisorio*?—Aquél que una de las partes defiende á la otra, obligándose sólo á pasar por lo que declare favorable á sus pretensiones y no por lo que le sea perjudicial.

Juicio de peritos.—Reconocimiento judicial.

¿Qué es *juicio pericial*?—El dictámen dado por personas peritas en la materia que es objeto de un litigio, ó cuyo conocimiento es necesario para decidirlo.

¿Qué reglas deben seguirse en el juicio de peritos en materia civil?—Las

siguientes: 1.^a, nombrará uno cada parte, á no ser que se pusieren todas de acuerdo respecto del nombramiento de uno solo. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán uno los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan; si para este nombramiento no pudieren ponerse de acuerdo, el juez insacará los que propongan, y el que designe la suerte, practicará la diligencia; 2.^a, los peritos deberán tener títulos de tales en la ciencia ó arte á que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio, si la profesión ó arte está reglamentada por las leyes ó por el gobierno; en este caso, si no los hubiere en el pueblo del juicio, podrá hacerseles venir de los inmediatos; 3.^a, si la profesión ó arte no estuvieren reglamentados por las leyes ó por el gobierno, ó estándolo no hubiere peritos de ellos en los pueblos inmediatos, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, aún cuando no tengan título; 4.^a, los peritos nombrados, practicarán unidos la diligencia; 5.^a, las partes pueden concurrir al acto y hacer cuantas observaciones queran á los peritos, pero deberán retirarse para que discutan y deliberen solos; 6.^a, si el objeto del juicio pericial permitiese que los peritos den inmediatamente su dictámen, lo darán antes de separarse á presencia del juez; si exigiere el reconocimiento de lugares, la práctica de operaciones ú otro exámen que necesite detencion y estudio, otorgará el juez á los peritos el tiempo necesario para que formen y emitan su juicio, el cual se consignará en los autos; 7.^a, los peritos que estén conformes extenderán su dictámen en una sola declaracion firmada por todos; los que no lo estuvieren lo pondrán por separado; 8.^a, cuando discordaren los peritos, el juez hará saber á las partes que se pongan de acuerdo para el nombramiento de tercero en el término de segundo dia; si no lo hicieren, el juez sorteará el que haya de dirimir la discordia entre los seis ó más que paguen mayores cuotas de subsidio de la clase á que los peritos correspondan; si no los hubiere en el pueblo del juicio, podrá recurrirse á los de los inmediatos; si tampoco en éstos los hubiere, el juez podrá nombrar por tercero á cualquiera persona entendida en el asunto de que se trate, aún cuando no tenga título; el nombre del designado por la suerte ó del elegido por el juez se hará saber á las partes.

¿Son recusables los peritos?—Sólo el perito tercero puede ser recusado, cuando en él concurra alguna de las causas siguientes: consanguinidad dentro del cuarto grado civil, afinidad dentro del mismo grado, haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario, tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro semejante, tener participacion en sociedad, establecimientos ó empresa contra la cual litigue el recusante, enemistad manifiesta, amistad íntima; cada parte no podrá recusar, no obstante la existencia de las causas referidas, mas que dos peritos terceros.

¿Cuándo debe entablarse la recusacion y cuáles son sus efectos?—La recusacion deberá hacerse dentro de los dos dias siguientes al en que se hubiere hecho saber el nombre del sorteado ó elegido. Admitida la recusacion, será reemplazado el perito en la forma misma en que se hubiere hecho el nombramiento. El tercero sorteado ó nombrado repetirá la diligencia despues de pasado el término de la recusacion sin que haya tenido lugar, concurriendo los interesados y los otros peritos en la forma antes prevenida, y emitirá su dictámen, el cual se unirá á las pruebas.

¿A qué se llama *reconocimiento judicial*?—Al exámen, inspeccion ó vista de las cosas y lugares sobre que se litiga, ó de las que, aún cuando no formen el objeto principal del pleito, pueden, no obstante, contribuir al esclarecimiento del derecho litigioso.

¿Con qué formalidades debe practicarse?—El reconocimiento judicial se hará siempre con citacion previa, determinada y expresa para él. Las partes ó sus representantes y letrados podrán concurrir á la diligencia de reconocimiento, y hacer al juez, de palabra, las observaciones que estimen oportunas. Estas se insertarán en el acta que se extienda.

Testigos.

¿Qué es prueba *testifical*?—El testimonio de dos ó más testigos idóneos, prestado ante juez competente. Recibe el nombre de *testigo* toda persona presentada en juicio por las partes, para declarar acerca de hechos de que tiene conocimiento.

¿Qué condiciones debe reunir el testigo para que su dicho sea atendido?—1.^a, debe tener catorce años de edad para declarar en causas civiles, y diez y ocho en las criminales, constituyendo una mera *presuncion* el aserto de los menores de aquel tiempo, de mayor ó menor importancia segun el grado de desarrollo intelectual del testigo; 2.^a, no tener incapacidad mental; 3.^a, no estar comprendido en alguno de los casos que constituyen *tacha legal* y arguyen parcialidad.

¿Cuáles son las tachas legales en el procedimiento civil?—1.^o, ser el testigo pariente por consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado civil del litigante que lo haya presentado; 2.^o, ser, al prestar declaración el testigo, dependiente ó criado del que lo presentare: entiéndese por criado ó dependiente para los efectos de esta disposicion, el que vive en las casas del tenido por amo y le presta en ella servicios mecánicos mediante un salario fijo; 3.^o, tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro semejante; 4.^o, haber sido el testigo condenado por falso testimonio; 5.^o, ser amigo íntimo ó enemigo manifestado de uno de los litigantes.

¿Cómo debe hacerse el exámen de los testigos?—Deben ser preguntados por el juez, á tenor de los capítulos de los interrogatorios de preguntas y repreguntas producidos á nombre de las partes, y admitidos por aquél como pertinentes. Serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. Prestarán la declaración bajo juramento en la forma y bajo las penas que las leyes previenen. Los menores de catorce años no prestarán juramento. Acto continuo de ser preguntado cada testigo acerca del interrogatorio, contestará las repreguntas, si se hubieren propuesto y admitido. Siempre se preguntará á los testigos: 1.^o, por su nombre, apellido, edad, estado, profesion y domicilio, aunque no se comprenda este particular en los interrogatorios; 2.^o, si son parientes consanguíneos ó afines de algunos de los litigantes, y en qué grado; 3.^o, si tienen interés directo ó indirecto en el pleito, ó en otro semejante; 4.^o, si son amigos íntimos ó enemigos de los litigantes. Estos particulares constituyen los capítulos *generales* de los interrogatorios en los juicios civiles.

¿Cuándo y en qué forma deben presentarse los interrogatorios?—Antes del exámen de los testigos, y deben ser formulados de una manera afirmativa. Los interrogatorios de repreguntas quedarán reservados en poder del juez, y bajo su más estrecha responsabilidad, hasta el momento del exámen de los testigos.

¿Es pública la prueba de testigos en el juicio civil?—No: si las partes lo solicitaren podrán presenciar su juramento y exigir se les den en el acto todas las noticias que sean necesarias para que puedan conocerlos con seguridad. En los juicios criminales, lo es estando la causa en plenario.

Concluido el término de prueba sin necesidad de ninguna gestion de los interesados, ó sin sustanciarla si se hiciere, el juez mandará unir las pruebas á los autos y entregar éstos por su orden á las partes para alegar de bien probado, hasta cuyo momento no adquiere la prueba publicidad.

¿Qué disposicion importante en esta materia ha adoptado la ley de Enjuiciamiento civil?—El art. 317 de la misma, consigna terminantemente que

los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, contra cuya apreciación no se da el recurso de casación, siempre que en ella no se haya infringido alguna ley ó doctrina legal, según constantes declaraciones del Tribunal Supremo. El citado artículo ha venido á modificar esencialmente la doctrina sancionada por las leyes de Partida sobre apreciación de la prueba testifical, que reconocía por base el número de los declarantes, y daba completa fé á las declaraciones de dos testigos contestes, mayores de toda excepción, es decir, sin tacha legal.

¿Cuándo deben proponerse las tachas, y qué tramitación se da al incidente?—Dentro de los cuatro días siguientes al en que se notificare la providencia mandando alegar de bien probado, podrán las partes tachar los testigos por causas que éstos no hayn expresado en sus declaraciones, formando artículo sobre ello. Trascurridos dichos cuatro días, no podrá admitirse ninguna solicitud sobre tachas. Si alguno de los litigantes tachare á uno ó más testigos, se oír sobre ello á la parte contraria, y si el que proponga la tacha ó tachas, ó ambos litigantes, solicitaren, por otrosíes de los escritos en que promuevan este artículo, que se reciban los autos á prueba sobre él, el juez lo decretará. El término de la prueba de tachas no será de quince días, pudiendo el juez fijarlo dentro de éste límite, según las circunstancias. Trascurrido el término concedido para probar las tachas, las pruebas hechas se unirán á los autos sin necesidad de gestión de los interesados. Cuando ninguna de las partes pidiere la prueba de tachas, sustanciado el artículo con los dos escritos expresados, se mandarán entregar los autos al actor para que sobre todo alegue de bien probado. Lo mismo se hará en el caso de que haya habido prueba de tachas, después de unir éstas á los autos.

Medios de prueba no expresados por la ley de Enjuiciamiento civil.

El derecho reconoce como medios probatorios, que contribuyen poderosamente á formar el juicio judicial, la *fama pública* y las *presunciones*.

¿Qué es *fama pública*?—«La opinión general que acerca de cierto hecho tienen los vecinos de un pueblo, afirmando habérselo oído á personas fidedignas.» Debe reunir las condiciones siguientes: 1.ª, uniformidad no contradicha en la creencia; 2.ª, probabilidad de las causas en que ésta se funda; 3.ª, honradez y buena opinión en las personas que la declaran; 4.ª, un origen anterior al pleito, y 5.ª, resultar justificada por dos testigos, á lo ménos, de mayor excepción, que amplien su testimonio á asegurar que tal es el común sentir de los habitantes del pueblo.

¿Qué es *presunción legal*?—Un medio indirecto de probanza, que consiste en deducir de un hecho conocido y justificado, otro desconocido, y sobre el cual no ha habido justificación. Cuando la deducción se hace por la ley, la presunción es de *derecho*. Cuando es resultado del raciocinio del hombre, la presunción se denomina de *hombre*.

¿Cómo se dividen las presunciones de *derecho*?—En presunciones *juris tantum*, y *juris et de jure*. Son presunciones *juris tantum* las que pueden ser combatidas y destruidas por una prueba demuestre lo contrario. Son presunciones *juris et de jure* las que no admiten pruebas en contrario, equiparándose en sus efectos á verdaderas reglas de derecho, razón por que sólo impropiaamente puede llamárseles *presunciones*.

¿Qué clasificación suele hacerse de las *presunciones* en general?—Los

autores las clasifican en *vehementes, medianas y leves*, por razon de su mayor ó menor íntima relacion con el hecho conocido.

La prueba de *indicios*, que se funda esencialmente en la teoría de las presunciones, es exclusivamente propia del procedimiento criminal.

Alegatos, vistas y sentencias.

¿Qué es *alegato* de bien probado?—El escrito que cada una de las partes presenta con vista del resultado de las pruebas, en el cual recibe toda la amplitud necesaria la defensa de los derechos de que cada una se cree asistida.

¿Qué término se da para formularlo?—De seis á veinte días, segun el volúmen de los autos y la gravedad de las cuestiones que se discutan. En los casos en que por el volúmen de los autos, por la complicacion del pleito ó por la dificultad de la cuestion, no bastare el término señalado anteriormente, podrá el juez conceder otro nuevo término, que no pasará de diez días.

Devueltos los autos por el actor, se entregarán al demandado para que alegue de bien probado, por igual término que el que el demandante los haya tenido. Al volver los autos con su alegato, acompañará una copia simple de él, suscrita por el procurador, la cual se entregará al demandante.

¿A qué se llama *vista* de un pleito?—Al acto en que las partes ó sus defensores informan de palabra al tribunal, del resultado de los autos, reproduciendo las respectivas pretensiones, y exponiendo en apoyo de su eficacia, cuantos razonamientos sean pertinentes á la cuestion, fundados en lo alegado y probado.

¿Es indispensable esta diligencia en los juicios civiles?—No: devueltos los autos por el demandado con su alegato, se mandaràn traer á la vista, con citacion para oír sentencia definitiva. Si cualquiera de las partes lo pidiere dentro de los dos días siguientes al de la citacion, el juez señalará á la posible brevedad, día para la vista. En este acto oírà de palabra á los defensores de los litigantes, si se presentaren. Celebrada la vista, si se hubiere solicitado, procede dictar sentencia.

¿Qué es *sentencia*?—La decision acordada por el juez que conoce del pleito, declarando ó negando el derecho alegado por las partes.

¿Cuántas clases hay de *sentencias*?—Dos: *definitivas* é *interlocutorias*; division fundada en la mayor ó menor importancia de la cuestion que terminan. Si recaen sobre la principal, son *definitivas*. Si su objeto es decidir cuestiones incidentales nacidas durante el curso del procedimiento, ya de la cosa litigiosa, ya sobre la ritualidad ú orden que debe seguir aquél, la sentencia es *interlocutoria*. Son *firmes*, ó *ejecutorias* y *no firmes*, segun que no se da, ó se da contra ellas algun recurso.

¿Dentro de qué términos deben dictarse las *sentencias definitivas* en lo civil?—Varia el término, segun que se haya ó no celebrado *vista pública* del pleito, y segun la naturaleza de éste. No habiendo tenido lugar ésta diligencia, el juez dictará sentencia en el juicio ordinario dentro de los doce días siguientes al en que se hubiere citado á las partes. Si se hubiere celebrado *vista pública*, dictará la sentencia dentro de los ocho días siguientes al en que hubiere terminado aquélla. Ambos términos podrán ampliarse hasta quince días, si los autos exceden de mil fóllos. Si trascurrieren dichos términos sin dictarse sentencia, las audiencias corregirán disciplinariamente á los jueces que hayan incurrido en falta. En las demás clases de juicios varían los términos, como haremos notar al tiempo de ocuparnos someramente de su tramitacion.

¿En qué forma deben pronunciarse las sentencias civiles?—Las sentencias definitivas de todo artículo y las de los pleitos serán fundadas. En su redaccion se observarán las reglas siguientes: 1.^a, principiará el juez expresando el lugar y la fecha en que dicta el fallo; 2.^a, consignará despues lo que resulte respecto á cada uno de los hechos contenidos en los escritos de réplica y dúplica, y en los de ampliacion si los hubiere habido, en párrafos separados, que principiarán con la palabra *Resultando*; 3.^a, á continuacion hará mérito en párrafos, separados tambien, que empezarán con la palabra *Considerando*, de cada uno de los puntos de derecho fijados en los mismos escritos, dando las razones ó fundamentos legales que estime procedentes, y citando las leyes y doctrinas que considere aplicables, y 4.^a, pronunciará, por último, el fallo en los términos prevenidos.

¿Qué recursos pueden emplear los tribunales antes de la sentencia cuando se les ofrece duda sobre algun punto importante?—Pueden acordar la práctica de algunas diligencias, por medio de *autos para mejor proveer*. Por ello están facultados para: 1.^o, decretar que se traiga á la vista cualquiera documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes; 2.^o, exigir confesion judicial á cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestion y no resulten probados; 3.^o, decretar la práctica de cualquier reconocimiento ó evaluó que reputen necesario, y 4.^o, traer á la vista cualesquiera autos que tengan relacion con el pleito.

¿Son apelables las sentencias?—Toda sentencia definitiva dictada por tribunales inferiores es apelable para ante los superiores. De las providencias interlocutorias pronunciadas por los jueces de primera instancia puede pedirse reposicion dentro de tres dias improrogables. Si no se estimare, podrá apelarse en un término igual al anterior.

¿A qué se llama *reposicion*?—A la reforma que los jueces pueden hacer en sus providencias *interlocutorias* á instancia de alguna de las partes, por juzgarlas contrarias al derecho ó efectos de un error involuntario ó de conceptos equivocados.

¿Pueden reformarse las sentencias definitivas?—Ni los jueces ni los tribunales podrán variar ni modificar la sentencia una vez pronunciada, pero sí aclarar algun concepto oscuro ó suplir cualquiera omision que hubiere sobre punto discutido en el litigio. Esto sólo podrán hacerlo á instancia de alguno de los litigantes que lo haya solicitado dentro del dia siguiente al de la notificacion de la sentencia.

De los incidentes de los juicios.

¿Qué son *incidentes*?—«Ciertas cuestiones que se suscitan en el pleito y que tienen relacion más ó ménos inmediata con el asunto principal que es objeto de la controversia,» sin cuya relacion no pueden ser calificados de tales. Siendo completamente ajenos á él, los jueces los repelarán de oficio, sin perjuicio del derecho del que los haya promovido para solicitar en otra forma lo que haya sido objeto de aquéllos.

¿Cuántas clases hay de incidentes?—Dos: unos que ponen obstáculo al seguimiento de la demanda principal, y otros que no impiden el curso de ésta. Se entiende que impide el curso de la demanda, todo incidente sin cuya prévia resolucion es absolutamente imposible de hecho ó de derecho continuar sustanciándola.

Su tramitacion es diversa. Los incidentes civiles que opongan obstáculo al seguimiento de la demanda principal, se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando entretanto en suspenso el curso de aquélla. Los que no opongan obstáculo á su seguimiento, se sustanciarán en pieza se-

parada, que habrá de formarse con los insertos que ambas partes señalen, y á costa del que los haya promovido. Estos no suspenderán la sustanciación de la demanda.

Promovido el incidente, y formada en su caso la pieza separada, se dará traslado al colitigante por término de seis días: de lo que expusiere se facilitará copia al que lo hubiere promovido. Caso de haber convenido las partes en que se reciba á prueba, ó de haberlo pedido una sola y creerlo el juez procedente, se recibirá el incidente á prueba por un término, que no podrá bajar de ocho días ni exceder de veinte, segun las circunstancias del caso. Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba, mandará el juez traer á la vista los autos para sentencia, y si despues de mandado esto se pidiere, será denegada. Hechas las pruebas y trascurrido el término señalado, se unirán á los autos y se mandarán traer á la vista con citacion. Si dentro de los dos dias siguientes al en que la citacion se hubiera hecho se pidiere señalamiento de dia para la vista, se hará y oírán en él á los letrados de las partes. Cuando esto suceda se pondrán las pruebas de manifiesto á las partes en la escribanía para instruccion, por el término que medie desde el señalamiento hasta el dia de la vista. Verificada ésta, ó si no se hubiere pedido señalamiento, pasados los dos dias siguientes al de la citacion, el juez dictará sentencia dentro de tres, en ambos casos. Estas sentencias son apelables siempre en ambos efectos. Interpuesta apelacion, se admitirá sin sustanciacion ninguna y se remitirán los autos ó la pieza separada al tribunal superior, con citacion y emplazamiento de las partes.

Términos judiciales y tiempo hábil para su computacion.

¿A qué se llama *término judicial*?—Al tiempo marcado por la ley, dentro del cual deben practicarse las actuaciones judiciales. Dividense los términos en *prorogables* é *improrogables*. Son *prorogables* aquéllos que pueden ampliarse por causas atendibles hasta cierto límite, é *improrogables* los que no pueden recibir ampliacion. Para otorgar la prórega de los términos *prorogables*, es necesario: 1.º, que se pida antes de vencer el término, y 2.º, que se alegue justa causa, á juicio del juez, sin que sobre la apreciacion que haga de ella se dé recurso alguno.

¿Cuáles son los términos *improrogables* en el procedimiento civil?—Son *improrogables* los señalados: 1.º, para comparecer en juicio; 2.º, para proponer excepciones dilatorias; 3.º, para pedir reposicion de las providencias interlocutorias de los juzgados de primera instancia; 4.º, para pedir aclaracion de alguna sentencia, ó que se supla la omision que en ella se hubiere cometido; 5.º, para apelar; 6.º, para presentarse ante los tribunales superiores en virtud de emplazamiento hecho á consecuencia de haberse admitido una apelacion, y remitidose los autos; 7.º, para suplicar de las providencias interlocutorias de los tribunales superiores; 8.º, para interponer recurso de casacion; 9.º, para apelar de la providencia denegatoria del recurso de casacion; 10, para presentarse en el Tribunal Supremo á consecuencia de haberse admitido recurso de casacion ó apelacion de providencia denegatoria de él, y remitidose los autos; 11, cualesquiera otros respecto á los cuales haya prevencion expresa y terminante de que, pasados, no se admitan en juicio la accion, excepcion, recurso ó derecho para que estuvieren concedidos.

¿Cuál es la naturaleza especial de estos términos?—Consiste en que no pueden suspenderse ni abrirse despues de cumplidos, por vía de restitution ni por otro motivo alguno. Por esta razon, trascurridos que sean y acusada una rebeldia, se declarará, sin más sustanciacion, perdido el derecho que hubiere dejado de usar la parte á quien haya sido acusada.

¿En qué tiempo deben practicarse las actuaciones civiles?—Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, ménos los domingos, fiestas enteras religiosas ó civiles y los en que esté mandado ó se mandare que vaquen los tribunales. Se entienden horas hábiles las que median desde la salida hasta la puesta del sol. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. En ellas sólo será admisible la presentacion de escritos, para evitar efectos trascendentales del trascurso de algun término perentorio y fatal.

Del recurso de apelacion y de súplica, en materia civil.

El recurso de apelacion que se interpone ante el juez inferior para que conozca del asunto fallado por éste el tribunal superior, tiene por objeto reparar las injusticias y perjuicios consiguientes, causadas en una sentencia dictada por la ignorancia, la mala fé, el error ó la malicia. Puede prevenir á veces dichas consecuencias cuando el juez teme la pronunciacion de un fallo revocable, que hubiera dictado sin consideracion alguna á no estar establecido el recurso de apelacion.

¿Quiénes pueden apelar?—Todos los que se consideren perjudicados por la sentencia, aun cuando no hayan sido partes en el juicio, y pueden hacerlo por sí ó á medio de prócurador, en los casos en que sea necesaria la presentacion de estos funcionarios.

¿Qué sentencias son apelables?—Todas: las definitivas y las interlocutorias. A la apelacion de éstas debe preceder el recurso de reposicion ante el juez inferior, dentro de los tres días siguientes á la providencia.

¿Cuál es el término para apelar?—Cinco días improrogables, contados desde el siguiente á la notificacion de la sentencia definitiva, y tres días para apelar de las interlocutorias, denegada la reposicion. Trascurridos dichos términos sin interponerse apelacion, quedarán de derecho consentidas y pasadas en autoridad de cosa juzgada sin necesidad de declaracion alguna.

¿De cuántas maneras puede otorgarse la apelacion y cuáles son sus efectos?—De dos: libremente, y en ambos efectos ó en uno sólo. Estos efectos son el llamado *devolutivo* y el *suspensivo*. Procederán libremente en lo civil en todos los casos en que no se halle prevenido que se admitan en un sólo efecto. Admitida la apelacion libremente, se suspenderá la ejecucion de la sentencia hasta que recaiga su confirmacion. Admitida en un sólo efecto, no se suspenderá la ejecucion de la sentencia; y para ejecutarla, siendo definitiva, se retendrá en el juzgado testimonio de lo necesario de los autos, remitiéndolos enseguida al tribunal superior. Si la providencia fuere interlocutoria, se facilitará al apelante testimonio de lo que señalare de los mismos autos, con las adiciones que el coligante hiciere y el juez estimare necesarias, para que pueda recurrir á la audiencia correspondiente. Del testimonio de que se habla anteriormente deberá hacerse uso, mejorando la apelacion, en el tribunal superior, dentro de los veinte días siguientes al en que se hubiere hecho entrega de él al apelante. Trascurrido este término sin haberse mejorado el recurso, queda de derecho consentida la providencia, sin necesidad de ninguna declaracion.

Denegada la apelacion, ¿qué recurso queda al litigante perjudicado?—Podrá el que la haya interpuesto recurrir en queja al superior respectivo. Este, previo informe que pedirá al inferior, y oyendo sobre él al apelante, determinará lo que crea justo. Si estimare bien denegada la apelacion, mandará remitir al juez testimonio de su providencia para que conste en los autos. Si estimare que ha debido otorgarse, lo declarará así, ordenando

al juez se los remita, prévias las citaciones correspondientes. Cuando, procediendo su otorgamiento en ambos efectos, no se ha concedido más que en el *devolutivo*, si la providencia fuere *interlocutoria* podrá pedirse al apelante, al apersonarse en el tribunal superior, que se la declare admitida libremente y en ambos efectos. Si así lo estimare el superior, despues de haber oído al colitigante, si hubiere comparecido, mandará librar orden al inferior para que remita los autos, prévia citacion de las otras partes, á fin de que comparezcan dentro de veinte dias precisamente. Cuando fuere admitida en un efecto apelacion de sentencia definitiva, que se crea procedente en ambos, podrá solicitarse del superior, luego que se hayan remitido á ella los autos, que se declare admitida en ambos efectos. Si así se declarase, se librará orden al juez inferior para que suspenda la ejecucion de la sentencia.

La tramitacion de las apelaciones puede estudiarse en todos sus detalles en el tít. xvii de la ley de Enjuiciamiento civil.

De las costas en asuntos civiles.

¿A qué se da el nombre de *costas*?—A los gastos causados en el procedimiento por los litigantes, en defensa de sus respectivas pretensiones. El pago de costas suele ser la pena civil con que los tribunales castigan la temeridad y mala fé de aquéllos cuando se presentan en juicio sin *razon derecha* para litigar, únicos casos en que procede la condenacion, la cual debe hacerse expresamente en la misma sentencia en que se decide el negocio principal. Cuando el tribunal entienda que no hubo mala fé por parte de ninguna de las partes, pronuncia la sentencia *sin hacer especial condenacion de las costas*, fórmula que indica que cada una satisfará las causadas en su defensa.

¿Qué procedimiento se sigue para hacer efectivas las costas del juicio civil?—Cuando hubiere condena de costas, los escribanos ó secretarios de las salas que las hayan impuesto las tasarán con sujecion á los aranceles, y en los juzgados de primera instancia los escribanos por ante quienes se hayan seguido los autos. Los honorarios de los letrados, peritos, y demás funcionarios no sujetos al arancel serán regulados por ellos mismos en minuta firmada, que presentarán dictada que sea la sentencia en que se haya impuesto la condena: la cantidad en que consistan se incluirá por el escribano en la tasacion. De la tasacion se dará vista á las partes, por término de dos dias á cada una. Si los honorarios de los letrados fueren impugnados, el tribunal ó el juez que conozcan de los autos oirá al colegio de abogados, si lo hubiere en el pueblo de su residencia, y en otro caso á dos letrados que nombre para que den su dictámen. Si los honorarios de los peritos ó de cualesquiera otros funcionarios no sujetos á arancel fueren impugnados, se oirá asimismo á otros dos individuos de su clase. No habiéndolos en el pueblo de la residencia del tribunal ó juez que conozca de los autos, podrá recurrir á los de los inmediatos. El tribunal ó el juez de primera instancia en su caso, con presencia de lo que las partes hubieren expuesto y de los informes recibidos sobre honorarios, aprobará la tasacion, ó mandará hacer en ella las alteraciones que estime justas, sin ulterior recurso.

JUICIOS UNIVERSALES.

Definido el *juicio universal* al tratar de las diferentes clases de juicios, vamos á hacer algunas indicaciones sobre los de esta clase de que se ocupa la ley de Enjuiciamiento civil, que son las *testamentarias*, los *abintestatos*, los *concursos de acreedores* y las *quiebras de los comerciantes* (1).

Testamentarias.

¿Qué es juicio de *testamentaria*?—El conjunto de diligencias judiciales que tienen por objeto la distribucion de los bienes relictos por el finado. Dásele impropriamente el nombre de *juicio* porque en la série de procedimientos que se sigue para conseguir el fin á que tiende, no hay controversia de ningun género, pasando á constituir otro juicio, en este caso, la materia objeto de la contienda, que por más que sea un incidente de la *testamentaria* se arreglará en su tramitacion al procedimiento que le corresponda por razon de la naturaleza del asunto y cuantía de su valor.

¿Cuántas clases hay de *testamentarias*?—Dos: *voluntarias* y *necesarias*. Es *voluntario* el juicio cuando lo promueve parte legitima, entendiéndose que lo son los herederos, el cónyuge superviviente y los legatarios parciarios, sin cuya promocion no puede intervenir la autoridad judicial, en las particiones del caudal hereditario. Es *necesario* cuando éstas deben hacerse indispensablemente bajo la inspeccion y aprobacion judicial, por concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª, estar los herederos ausentes, y no haber quien les represente legitimamente; 2.ª, ser los herederos menores, ó estar incapacitados, bien se hallen ausentes ó presentes, si el testador no hubiere dispuesto lo contrario, y 3.ª, haber solicitado el juicio uno ó varios acreedores presentando el titulo de su crédito. Su derecho caducará si por los herederos se les diere fianza bastante á responder de sus créditos, independientemente de los bienes del finado.

¿Quién es el juez competente para conocer de las *testamentarias*?—El del domicilio del difunto, sin perjuicio de la sumision expresa ó tácita de los interesados á otro juez ordinario. El juez del lugar en que ocurriere el fallecimiento deberá prevenir el juicio y remitir al del domicilio los autos que haya formado, para que éste los continúe con arreglo á derecho. Se entiende por prevencion del juicio de *testamentaria* la ocupacion de los bienes y papeles del finado y la adopcion de las providencias urgentes y precauciones necesarias para evitar abusos y fraudes.

¿Qué requisitos debe cumplir el demandante?—El que promueva el juicio voluntario de *testamentaria* debe presentar la partida de defuncion de la persona de cuya sucesion se trate, y no siendo esto posible, otro documento ó prueba que la acredite, y el testamento del difunto.

(1) El decreto-ley de unificacion de fueros, si bien derogó la ley de Enjuiciamiento mercantil, conservó el procedimiento para las quiebras, mandando que forme, como lo forma ya, un titulo adicional de la ley de Enjuiciamiento civil.

¿En cuántos períodos se divide el juicio voluntario de testamentaria?—En tres: *inventario*, *avalúo* y *division*. Las operaciones de inventario y avalúo podrán practicarse simultáneamente: 1.º, cuando los interesados lo acordaren; 2.º, cuando alguno de ellos lo pidiere y el juez lo estimare conveniente, atendidas las circunstancias del caudal.

¿Qué diligencias preceden al período de *inventario*?—Promovido el juicio por parte legítima en la forma expuesta, el juez lo habrá por prevenido, citando para él á todos los interesados en la forma que marca la ley, y al promotor fiscal cuando hay herederos cuyo paradero se ignore, ó no se presenten los citados personalmente. Si el que haya promovido el juicio solicitare la intervencion del caudal, se decretará de la manera ménos vejatoria posible. Practicadas las primeras diligencias necesarias al intento, el juez convocará á junta á los herederos para que se pongan de acuerdo sobre la administracion del caudal, su custodia y conservacion. Si no se consiguieren, el juez adoptará las determinaciones correspondientes, sujetándose á las reglas del art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civil, hecho lo cual entra el procedimiento en el primer período. Las diligencias, pues, que le preceden son relativas á la representacion de los incapaces civil y físicamente, y á la intervencion y administracion del caudal.

Primer período.—Inventario.

¿Qué es *inventario*?—La relacion exacta de todos los bienes que constituyen la fincabilidad del difunto, formalizada en una escritura pública. Puede hacerse judicial y extrajudicialmente, y ser *solemne* ó *ménos solemne*, llamado tambien *sencillo*. Es *judicial* cuando se hace con intervencion del juez ó por su encargo, necesitando su aprobacion. Es *extrajudicial* el que se hace fuera del juicio y sin que sobre él recaiga la aprobacion del juez. Llámase *inventario solemne* á aquél en cuya confeccion se emplean todas las formalidades prescritas por el derecho, y *sencillo* ó *ménos solemne* al que se hace sin estos requisitos, estando limitado á una simple relacion de bienes.

¿Cómo puede hacerse el inventario en las testamentarias?—Judicial y extrajudicialmente. Los inventarios se harán judicialmente: 1.º, cuando estuviere intervenida la herencia; 2.º, cuando lo solicitare alguno de los que han sido declarados parte legítima para promover el juicio. Para hacer los inventarios judicialmente se dará comision al escribano, sin perjuicio de que el juez pueda concurrir á su formacion en todo ó en parte, si lo considera necesario, citando á los interesados. Se guardará el orden siguiente: 1.º, metálico; 2.º, alhajas; 3.º, efectos públicos; 4.º, semovientes; 5.º, frutos; 6.º, muebles; 7.º raíces; 8.º, derechos y acciones. Se formará además un inventario especial de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren. Deben presenciar el acto dos ó más testigos, que firmarán con el escribano autorizante.

Segundo período.—Avalúo.

¿Cuándo comienza el avalúo en el juicio de testamentaria?—Después de aprobado el inventario, ó formadas las piezas separadas, para sustanciar las reclamaciones que sobre él se intentaren.

¿Qué es *avalúo*?—El justiprecio pericial de los bienes inventariados. Tiene lugar siempre que el testador no los hubiere apreciado ó hubiera padecido error en su apreciacion. Todos los bienes inventariados, á excep-

cion de aquéllos cuya exclusion se haya pretendido, serán valuados. Aquéllos cuya inclusion en el inventario esté solicitada, no se valorarán hasta que se declare por ejecutoria que deben formar parte del caudal.

¿Qué oposicion puede formularse contra el avalúo?—A los avalúos hechos por peritos de nombramiento de los interesados de la manera que queda establecida, sólo puede hacerse oposicion por dos causas: 1.^a, por error en la cosa objeto del avalúo ó en sus condiciones y circunstancias esenciales; 2.^a, por cohecho á los peritos ó inteligencias fraudulentas entre ellos y alguno ó algunos de los interesados para aumentar ó disminuir el valor de cualesquiera bienes. Ninguna otra reclamacion será admisible contra los avalúos.

¿Cuándo tiene lugar el período de *division*?—Aprobados el inventario y avalúo de los bienes, y terminados todos los pleitos á que uno y otro hayan dado lugar, ó aún cuando no lo estén, siempre que lo pidan los interesados ó lo decrete el juez, se procederá á la liquidacion y division del caudal.

Tercer período.—Division del caudal.

¿Qué es *division*?—La distribucion y adjudicacion proporcional del caudal hereditario á cada una de las personas interesadas en la herencia, segun el derecho de que se crea asistida. Comprende este período el nombramiento de contadores, las operaciones de liquidacion y division de la herencia, la colacion de bienes y su adjudicacion.

¿Cuál es el primer acto de este período?—La convocacion de una junta en que se procurará que las partes se pongan de acuerdo para el nombramiento de contadores, el cual sólo tendrá lugar cuando el testador no los ha elegido en el testamento en que instituye herederos voluntarios. Pueden recaer en cualquiera persona de la confianza de los que lo elijan, y cuando todas las personas estén de acuerdo en el nombramiento de un solo contador, éste hará la liquidacion y division. En los demas casos habrá dos contadores, que procederán unidos á ejecutar estas operaciones.

Concluida la liquidacion y division, las presentarán los contadores al juzgado en papel comun y autorizadas con sus firmas. Puestas de manifiesto por ocho días, el juez las aprobará y mandará protocolizar, si no se ha formulado la oposicion por algun interesado. Cuando en tiempo hábil se hiciere oposicion á la liquidacion y particion, el juez convocará á junta á los interesados y contadores para que acuerden lo que más convenga, oídas las explicaciones que se den mutuamente. Si hubiere conformidad de todos los interesados, se ejecutará lo acordado, y los contadores harán en la liquidacion y division las reformas convenidas. Si no hubiere conformidad, se sustanciarán dichas reclamaciones, considerándolas como una demanda, con sujecion á los trámites prevenidos para el juicio ordinario.

¿Qué es adjudicacion?—La aplicacion á cada uno de los partícipes de la porcion de caudal hereditario, en pago del haber que le ha correspondido.

¿Qué tramitacion sigue el *juicio necesario* de testamentaria?—Practicadas las diligencias precisas para la seguridad de los bienes, libros y papeles, se acomodará el juicio á los trámites establecidos para el *voluntario*, con las modificaciones siguientes: 1.^a, que los inventarios se formen siempre judicialmente; 2.^a, que para los inventarios y avalúos se cite al acreedor ó acreedores que hayan promovido el juicio; 3.^a, que los acreedores puedan ser parte en los pleitos que se suscitén sobre inclusion ó exclusion de bie-

nes; 4.^a, que los bienes se constituyan siempre en depósito, sin que pueda hacerse acuerdo ninguno en contrario; 5.^a, que el administrador, en todo caso, deba dar fianza bastante á responder de lo que administre, sin que pueda dispensársele de ella por los interesados; 6.^a, que no se proceda en ningún caso á hacer entrega de todos ó parte de los bienes á ninguno de los interesados en el caudal, sin estar reintegrados ó garantidos á su satisfaccion los créditos de los acreedores que hayan promovido el juicio.

¿A quién corresponde la administracion de las testamentarias?—Al administrador nombrado al efecto en forma legal, á quien, prestada la correspondiente fianza en el juicio necesario, y en el voluntario si los interesados no le relevan de ella, se le pondrá en posesion del cargo, suministrándole las noticias indispensables para la administracion, dándole á conocer de los arrendatarios, censuarios y cualesquiera otra persona que tenga relaciones con la herencia.

¿Qué derecho tiene el administrador para garantizar su responsabilidad?—Puede exigir el documento oportuno para hacer constar la aprobacion de sus cuentas, hecho lo cual debe entregar á los herederos lo que les corresponda y obre en su poder. Para mayor claridad y mejor método en el expediente, se formará una pieza separada de autos que se llamará de *administracion*, en la cual se actuará cuando tenga relacion con ella. Se formarán en su caso los ramos separados necesarios.

Abintestatos.

¿Qué es juicio de *abintestato*?—El conjunto de diligencias judiciales que tienen por objeto la declaracion de los herederos de una persona muerta sin testamento, y la distribucion de su herencia con arreglo á derecho.

Para que pueda prevenirse el juicio de abintestato, se necesita: 1.^o, que no conste la existencia de disposicion testamentaria; 2.^o, que no deje el finado descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del cuarto grado. Existiendo parientes, de los expresados anteriormente, que estén ausentes, se limitará el juez á adoptar las medidas más indispensables para el enterramiento del difunto y la seguridad de los bienes, y á dar á los parientes oportuno aviso de la muerte de la persona á cuya sucesion se les crea llamados, lo cual se hará por el encargado del Registro civil al agente diplomático ó al Ministerio de Estado, si el difunto fuese extranjero y no tuviera familia (1). Compareciendo los parientes, cesará la intervencion judicial en el abintestato, á no ser que alguno ó algunos de los interesados la soliciten.

El juez proveerá de tutor ó curador, si no lo tuvieren, á los parientes que fueren menores ó incapacitados, y hasta que estén discernidos estos cargos adoptará las medidas establecidas anteriormente.

¿A quién corresponde el conocimiento de estos juicios?—Es juez competente para conocer del juicio de abintestato el del domicilio que tuviera el difunto; y si le tenia en el extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, ó donde esté la mayor parte de sus bienes. La competencia del juez del domicilio se entiende sin perjuicio de que el juez del lugar del fallecimiento adopte las medidas necesarias para el enterramiento del difunto y la seguridad de los bienes que allí tuviere. Cada juez en su respectiva jurisdiccion deberá adoptar las medidas conducentes á la seguridad de

(1) Artículo 94 de la ley de Registro civil.

los bienes existentes en ella. Asegurados los bienes, y dispuesto y ejecutado el enterramiento, dejarán todos los jueces expedita su jurisdicción al que conozca ó deba conocer del abintestato, remitiéndole al efecto las diligencias que hayan practicado. El juez que tuviere conocimiento de la muerte de alguno sin testar y sin descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del cuarto grado, procederá á ocupar sus bienes, libros y papeles. En los pueblos donde no hubiere juez de primera instancia, practicará las diligencias prescritas anteriormente el juez municipal. Si no fuere letrado, lo hará con acuerdo de asesores.

¿Qué diligencias siguen á las anteriormente expuestas?—Los jueces de primera instancia y los municipales en su caso adoptarán las siguientes: 1.ª, cualquiera medida que estimen conducente para averiguar si la persona de cuya sucesion se trata ha muerto con disposicion testamentaria ó sin ella, recibiendo, á falta de otros medios, informacion en que sean examinados los parientes, amigos ó vecinos del difunto; primero, sobre el hecho de haber muerto abintestato; segundo, sobre si tiene herederos de las clases que quedan designadas; 2.ª si resultare haber fallecido sin testar y sin ascendientes, descendientes ó colaterales dentro del cuarto grado, procederán: primero, á nombrar un albacea dativo que se encargue de disponer el entierro y de lo demás propio de este cargo con arreglo á las leyes; segundo, á inventariar y depositar los bienes en persona que ofrezca garantia suficiente, la cual se encargará tambien de su administracion: ésta será amovible á voluntad del juez que conozca del abintestato; tercero, á examinar los libros, papeles y correspondencia del difunto; 3.ª, á exigir del administrador depositario fianza proporcionada á lo que deba administrar, á su satisfaccion y bajo su responsabilidad, constituyendo el depósito del metálico ó alhajas en el establecimiento público señalado al efecto, cuyo resguardo conservará el juez, mandando se testimonie en los autos; 4.ª, si hubiere frutos almacenados, se deberán sobrellavar los almacenes; y si pendientes, ó se estuvieran recogiendo, se constituirán guardas ó interventores, segun más convenga; 5.ª, abrir la correspondencia en presencia del administrador nombrado y del escribano, y adoptar en su consecuencia las medidas que su resultado exija para la seguridad de los bienes; 6.ª, si el juez que conoce del abintestato es el municipal, adoptadas las disposiciones anteriores, debe remitir el expediente al de primera instancia con la debida seguridad, poniendo á su disposicion los bienes, libros y papeles intervenidos y la correspondencia remitida. Desde este trámite será parte el promotor fiscal en representacion de los que puedan tener derechos á la herencia, siendo de su obligacion promover cuanto considere oportuno para la seguridad y buena administracion de los bienes.

¿Qué diligencias deben cumplirse para las averiguaciones de los herederos?—Practicadas en debida forma las diligencias preventivas, el juez mandará publicar edictos en los periódicos oficiales y en la *Gaceta* y fijarlos en los sitios públicos del juicio, del en que hubiere fallecido el dueño de los bienes y del de su naturaleza, anunciando su muerte sin testar y llamando á los que se crean con derecho á heredarle para que comparezcan en el juzgado por treinta dias ó más, dentro del término que en los mismos se señale.

Presentándose ó no herederos á consecuencia de este llamamiento, se fijarán segundos edictos por término de veinte dias, expresando los nombres de los presentados, si los hubiere, y sus parentescos.

¿Qué debe hacerse cuando, pasados dichos términos, no ha dado resultado la publicacion de los edictos?—El juez exigirá á los que se hayan personado que, con citacion recíproca, si fueren más de uno, y del promotor, justifiquen su parentesco dentro de un término que se les señale al efecto, que por punto general no deberá pasar de cuarenta dias. Cuando los que aspiren á la herencia hubieren nacido fuera de la Península, podrá el juez

prorogar dicho término segun las circunstancias lo aconsejen. Hecha la justificacion, si fuere uno solo el presentado, se dará vista de ello al promotor; y si éste conviniere en que se le declare heredero, mandará el juez traer los autos á la vista y hará la declaracion si la estima procedente. Si fueren más de uno los presentados, los convocará el juez á junta, en la que discutirán su derecho á la herencia. Si hubiere en ella conformidad, y conviniere el promotor, el juez los declarará herederos en la forma y porciones en que hayan convenido, si lo cree legal y procedente; y en adelante se acomodará en su caso el juicio á las reglas establecidas para el de testamentaria. En cualquiera de los casos expresados, si el promotor se opusiere á la declaracion, se sustanciará en juicio ordinario el pleito á que la oposicion dé lugar. Si no hubiere conformidad, queda á todos completamente á salvo su derecho en juicio ordinario. Los promotores seguirán teniendo parte en estos juicios hasta que haya un heredero reconocido y declarado por ejecutoria, con quien se sustanciarán todas las cuestiones.

¿Qué tramitacion sigue á la declaracion de herederos?—Terminados estos pleitos, y declarados quiénes son los herederos, se acomodará el juicio á los trámites establecidos para el de testamentaria.

¿Cómo debe declararse la herencia *vacante*?—Cuando nadie se presente reclamándola, ó no fuese reconocido el derecho de los presentados, en cuyos casos, á instancia del promotor, se adjudicará al Estado.

¿Qué retribucion corresponde al administrador del abintestato?—El administrador no tiene derecho á otra recompensa que la que á continuacion se expresa: sobre el producto liquido de la venta de frutos, bienes muebles ó semovientes, el dos por ciento; sobre el producto liquido de la venta de bienes raíces, el uno por ciento; sobre la cobranza de valores de cualquiera especie, el medio por ciento; sobre el producto liquido de la venta de efectos públicos, el medio por ciento; sobre el importe liquido de los demás ingresos que haya en la administracion por conceptos diversos de los expresados en los párrafos precedentes, el cinco por ciento.

De los concursos de acreedores.

¿Qué es concurso?—El llamamiento ó convocacion judicial de todos los acreedores de un deudor, con el fin de clasificar en un solo juicio la naturaleza y preferencia de sus respectivos créditos y obtener su realizacion; puede ser *voluntario* ó *necesario*: es voluntario cuando se promueve á instancia del deudor; y necesario cuando lo solicita parte legitima y se acreditan los dos extremos siguientes: 1.º, que haya dos ó más ejecuciones pendientes contra un mismo deudor; 2.º, que no se hayan encontrado en todas ó alguna de ellas, bienes libres de otra responsabilidad conocida y bastante á cubrir la cantidad que se reclame.

¿Qué requisitos debe cumplir el deudor que se presenta en concurso *voluntario*?—Debe acompañar á su solicitud, sin lo cual no le será admitida: 1.º, relacion firmada de todos sus bienes, hecha con individualidad y exactitud: sólo se exceptuarán de ella los bienes que con arreglo al artículo 954 de la ley de Enjuiciamiento civil no pueden ser objeto de ejecucion; 2.º, un estado de las deudas, con expresion de su procedencia y de los nombres y domicilios de los acreedores; 3.º, una Memoria en que se consignen las causas que hayan motivado su presentacion en concurso.

¿Quién es el juez competente para conocer del concurso *voluntario*?—El del domicilio del deudor.

¿Cuál es el que debe entender en el *necesario*?—Cualquiera de los jueces que estén conociendo de las ejecuciones es competente para declarar el concurso: si alguno de ellos fuere del domicilio del deudor, y éste ó el ma-

por número de sus acreedores lo reclamasen, deberán remitirse los autos para la continuacion del juicio con preferencia á los demás jueces.

¿Qué tramitacion se sigue en uno y otro?—Cuando el deudor no pide en el voluntario *quita ó espera*, sino que se solicita simplemente la formacion del concurso, la sustanciacion es la misma para ambos, estando prefijada por la ley al tratar del *necesario* en la seccion segunda del tit. xi de la de Enjuiciamiento civil.

No puede entrar en las condiciones de este libro, atendida su naturaleza y extension, el ocuparnos detalladamente de la tramitacion de los concursos, que nuestros lectores pueden estudiar en el precitado titulo; por eso sólo haremos algunas indicaciones.

Declarado el concurso, se procederá al embargo y depósito de los bienes del deudor, cuyo depositario tiene además obligacion de administrarlos, cobrar los créditos y proponer la enajenacion de los efectos que no puedan conservarse; al mismo tiempo se ocuparán los libros y papeles de aquél, acordando la retencion de su correspondencia que podrá abrir el deudor á presencia del juez y escribano.

Nombrados los síndicos del concurso en junta general de acreedores, el juicio en adelante seguirá en tres piezas separadas. La primera, que será la que contenga las actuaciones anteriores, se denominará de *administracion del concurso*: en ella se sustanciarán los incidentes que se refieran á la misma administracion. La segunda se destinará al *reconocimiento y graduacion de créditos*. La tercera á la *calificacion del concurso*. Acerca de estas piezas sólo debemos advertir que el contenido de los arts. 592 y 602 de la ley de Enjuiciamiento civil ha sido modificado por el 24 de la hipotecaria, respecto á los titulos inscritos en el Registro de la propiedad.

¿Tiene derecho el deudor á alimentos?—Cuando á juicio del juez ascendan á más los bienes que las deudas, y el concursado lo reclamare, señalará los que crea necesarios. La providencia concediendo ó negando alimentos sólo tendrá el carácter de interina, y será inapelable. El señalamiento hecho por el juez puede modificarse, suprimirse ó aprobarse por la junta de acreedores, la cual no puede dejar de conceder los alimentos cuando no aparezca claramente que los bienes no bastan á satisfacer las deudas.

¿A qué se llama *quita y espera*?—Dáse el nombre de *quita* á la remision ó rebaja de parte de las deudas que los acreedores hacen por convenio en favor del deudor. Denominase *espera* á la concesion de un plazo que aquéllos otorgan á éste, para que durante él pueda satisfacer los créditos. La tramitacion que en ambos casos se sigue constituye una especie de concurso, que tiene por fin el cumplimiento del objeto de aquellos pactos.

PROCEDIMIENTOS SOBRE QUIEBRAS.

Intimamente ligada la ritualidad de estos juicios con la esencia, efectos, naturaleza y clasificacion de las quiebras, y limitado nuestro propósito á ligeras indicaciones acerca de la materia, por la índole de este MANUAL y la falta de espacio, el lector se convencerá de la imposibilidad en que estamos de tratar con detenimiento la sustanciacion de las quiebras, debiendo tener á la vista lo expuesto al final del *Derecho mercantil*, de lo cual puede considerarse continuacion lo que pasamos á decir.

Graduacion y pago de acreedores.

¿Cómo clasifica el Código mercantil los acreedores?—En cuatro clases: 1.^a, acreedores de dominio; 2.^a, acreedores hipotecarios; 3.^a, acreedores escripturarios; 4.^a, acreedores comunes.

¿Cuáles son los comprendidos en la primera?—Todos los que tengan el derecho de propiedad sobre mercaderías, efectos y cualquier otra especie de bienes que existan en la masa de la quiebra. Pertenecen á este género: 1.^o, los bienes dotales que se conservaren en poder del marido, de los que la mujer hubiere aportado al matrimonio, constando su recibo por escritura pública, de que se haya tomado razon en la forma prevenida; 2.^o, los bienes parafernales que la mujer hubiere adquirido por título de herencia, legado ó donacion, ya se hayan conservado en la forma que los recibió, ó ya se hayan subrogado é invertido en otros, con tal que se haya cumplido la misma formalidad en las escrituras por donde conste su adquisicion; 3.^o, cualquiera especie de bienes y efectos que se hubieren dado al quebrado en depósito, administracion, arrendamiento, alquiler ó usufructo; 4.^o, las mercaderías que tuviera el quebrado en su poder por comision de compra, venta, tránsito ó entrega; 5.^o, las letras de cambio ó pagarés que se hubieren remitido al quebrado para su cobranza sin endoso ó expresion de valor, que le trasladara su propiedad, y las que hubiese adquirido por cuenta de otro; libradas ó endosadas directamente en favor del comitente; 6.^o, los caudales remitidos al quebrado fuera de cuenta corriente para entregarlos á persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, ó para satisfacer obligaciones, cuyo cumplimiento estuviese designado al domicilio del quebrado; 7.^o, las cantidades que se estuvieren debiendo al quebrado por ventas que hubiese hecho de cuenta ajena, y las letras ó pagarés de la misma procedencia que obren en su poder, aunque no estén extendidas en favor del dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la obligacion procede de ellas, y que existian en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerla efectiva y remitirle los fondos á su tiempo, lo cual se presumirá de derecho si no estuviese pasada la partida en cuenta corriente entre ambos; 8.^o, los géneros vendidos al quebrado á pagar de contado, cuyo precio ó parte de él no hubiese satisfecho, interin subsistan embalados en los almacenes del quebrado, ó en los términos en que se hizo la entrega y en estado de distinguirse específicamente por las marcas y números de los fardos ó bultos; 9.^o, las mercaderías que el quebrado hubiere comprado al fiado, mientras no se le hubiese hecho la entrega material de ellas en sus almacenes, ó en el paraje convenido para hacerla, ó que despues de cargadas, de órden y por cuenta y riesgo del comprador, se le hubiesen remitido las cartas de porte ó los conocimientos.

¿Cuáles son los acreedores hipotecarios?—Los que tienen á su favor y en garantía del crédito una hipoteca legal ó convencional, sean privilegiados ó no privilegiados. Del producto de los demás bienes de la quiebra, despues de hacer entrega á los acreedores de dominio, serán pagados los acreedores hipotecarios, prefiriendo los privilegiados, graduándose el lugar de su relacion respectiva por el de la fecha de cada privilegio, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto á las naves, y de lo que previenen las leyes comunes sobre los créditos alimenticios y refaccionarios que no procedan de operaciones mercantiles. Deben tenerse presentes las disposiciones de la ley hipotecaria cuando hay bienes inmuebles, y la naturaleza de los dotales consumidos ó enajenados al tiempo de la quiebra y de las arras prome-

tidas, por constituir créditos hipotecarios. Los acreedores con prenda se equiparan á los hipotecarios.

Siguen en orden á éstos los que lo sean por escritura pública, entre los cuales dá preferencia la fecha de su constitucion. Y, por último, los demás acreedores que no tengan documentos públicos, cobrarán á prorata de sus créditos, despues que se hayan reintegrado las tres primeras clases de acreedores.

¿En qué forma se procede á la graduacion de créditos?—Clasificados en los cuatro órdenes que quedan expuestos por los síndicos, el juez comisario, hallando conforme los estados que aquéllos le remiten con lo acordado en la junta de reconocimiento, los pasa al tribunal, quien decreta el reintegro de los acreedores de dominio y manda convocar á junta general para deliberar y resolver sobre las reclamaciones que hiciesen los acreedores agraviados. En vista del acta de la junta de graduacion, se procederá al repartimiento de todos los fondos disponibles de la quiebra por el orden de clases y prelación que de aquélla resulte.

Pago de créditos y liquidacion de las quiebras.

¿Qué orden debe seguirse en el pago de los créditos?—El establecido en el acta anterior, en cuya formacion se hayan tenido presentes las reglas expuestas.

¿Qué reglas deben seguirse acerca del pago de acreedores pendientes de litigio?—1.^a, las cantidades que pudieren corresponder á los acreedores que tengan demanda pendiente contra la masa por agravio en el reconocimiento ó en la graduacion de sus créditos, se incluirán en el estado de distribucion de las que se repartan, conservándolas depositadas en el arca de la quiebra hasta la decision del pleito que cause ejecutoria; 2.^a, á los acreedores que, teniendo sus créditos reconocidos y graduados por los acuerdos de la junta, se les hubiere hecho impugnacion judicial por un acreedor particular se les entregarán, sin embargo de ésta, las cantidades que les correspondan, prestando fianza idónea á satisfaccion de los síndicos, de cuya responsabilidad serán las resultas de su insuficiencia.

Calificacion de la quiebra.

¿Qué se entiende por calificacion de la quiebra?—La declaracion que hace el tribunal que de ella conoce acerca de su naturaleza y de la clase á que corresponda, en expediente separado, tramitado con audiencia de los síndicos y del quebrado.

¿Qué circunstancias deben tenerse presentes para hacer la calificacion?—Las siguientes: 1.^a, la conducta del quebrado en el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen; 2.^a, el resultado de los balances que se formen de la situacion mercantil del quebrado; 3.^a, el estado en que se encuentren los libros de su comercio; 4.^a, la relacion que está á cargo del quebrado presentar sobre las causas inmediatas y directas que ocasionaron la quiebra, y lo que resulte de los libros, documentos y papeles de ésta sobre su verdadero origen, y 5.^a, los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el progreso del procedimiento se hagan contra el quebrado y sus bienes. Deben también tenerse en cuenta los informes del promotor fiscal y de los síndicos, que pueden ser impugnados por el quebrado, en vista de cuyas alegaciones y de lo que resulte de la pieza de declaracion de quiebra, el tribunal hará la calificacion definitiva de la misma.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la calificación?—Si el tribunal juzgare que la quiebra corresponde á la primera ó segunda clase, mandará poner en libertad al quebrado, en el caso de hallarse todavía detenido; y si la calificare de tercera clase, le impondrá una pena correccional de reclusion, que no bajará de dos meses ni excederá de un año. El quebrado, como los síndicos, podrán interponer apelacion de esta providencia, y se les admitirá en ambos efectos, ejecutándose no obstante en cuanto á la libertad del quebrado, si en ella se hubiese decretado. Cuando, sustanciado el expediente de calificación, resultaren méritos para calificar la quiebra de fraudulenta, ó de alzamiento, se procederá criminalmente.

¿Qué efectos penales produce la calificación de la quiebra?—El quebrado que haya sido calificado en primera ó segunda clase, y el de tercera que haya cumplido su correccion, podrán ocuparse en operaciones de comercio por cuenta ajena y bajo la responsabilidad de su comitente, ganando para sí el salario, emolumentos ó parte de lucro que se le den por estos servicios, sin perjuicio del derecho de los acreedores á los bienes que el quebrado adquiera para sí propio por éste ú otro medio, en el caso de ser insuficientes los de la masa para su completo pago. Los quebrados que se encuentren en el caso de esta disposicion, cesarán en la percepcion de los socorros alimenticios que les estén asignados en el procedimiento de la quiebra. Los alzados y los quebrados calificados de fraudulentos, no pueden ser rehabilitados.

Convenios en las quiebras.

¿Qué circunstancias deben concurrir en el convenio entre acreedores y quebrados?—1.^a, debe ser celebrado en junta general, y 2.^a, solemnizado con escritura pública, se remitirá al tribunal para su aprobacion, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Trascurridos ocho dias, puede formalizarse oposicion al convenio, fundada solamente en las cuatro causas siguientes: primera, defecto de las formas prescritas para la convocacion, celebracion y deliberacion de la junta; segunda, colusion por parte del deudor aceptada por algun acreedor de los concurrentes á la junta, para votar en favor del convenio; tercera, falta de personalidad legitima en alguno de los que hubieren concurrido con su voto á formar la mayoria, y cuarta, exajeracion fraudulenta de crédito para constituir el interés que deben tener en la quiebra los que acuerden la resolucion. Esta oposicion será sustanciada con audiencia del quebrado y los síndicos.

¿Qué fuerza tiene el convenio una vez aprobado?—Es obligatorio para todos los acreedores y legitima la entrega de los bienes y libros al quebrado, con retencion de cuentas. Si fuera anterior á la clasificacion de la quiebra, y hubiese solicitud pendiente pidiendo se declare de cuarta ó quinta clase, se suspenderá su aprobacion hasta que el tribunal declare que no está comprendida en dichas clases.

¿Quiénes no pueden proponer convenio?—1.^o, los alzados; 2.^o, los quebrados fraudulentos, desde que los jueces de comercio se inhiban en este concepto del conocimiento de la calificación de la quiebra, remitiendo el expediente á la jurisdiccion real, y 3.^o, los que habiendo obtenido salvoconducto para sus personas se hubieren fugado y no se presentaren cuando fueren llamados por el tribunal ó por el juez comisario de la quiebra.

De la rehabilitacion del quebrado.

¿Qué se entiende por rehabilitacion?—La declaracion judicial en virtud de la que el quebrado recobra la capacidad legal necesaria para ejer-

cer el comercio. Puede ser absoluta ó limitada á ejercerlo por cuenta ajena.

¿Cuándo tiene lugar una y otra?—La limitada, en las quiebras de primera y segunda clase y en las culpables despues del cumplimiento de la condena. La absoluta se obtiene por el quebrado no fraudulento que, habiendo sido calificada su quiebra de primera ó segunda clase, justifica el pago de las deudas ó acredita el cumplimiento del convenio, si lo hubiese habido. El quebrado de tercera clase debe probar, además de estas circunstancias, el cumplimiento de la pena correccional. Hasta la conclusion definitiva del expediente de calificacion de quiebra no es admisible la demanda del quebrado para su rehabilitacion.

¿Cómo debe pedirse y tramitarse?—A la solicitud de rehabilitacion acompañarán las cartas de pago ó recibos originales por donde conste el reintegro de los acreedores. El tribunal encargará al juez comisario que, haciendo el exámen de los documentos presentados por el quebrado y de todos los antecedentes del procedimiento de quiebra, informe si procede la rehabilitacion en sus casos respectivos. No habiendo reparo justo, decretará la rehabilitacion, ó en el caso contrario la denegará, si el quebrado por su clase fuese inhábil para obtenerla, ó la suspenderá si sólo faltare algun requisito subsanable.

Cesion de bienes.

¿Cuál es el efecto de la cesion llevada á cabo por los comerciantes?—Las cesiones de bienes de éstos, cuando son judiciales, se convierten en verdaderas quiebras, y quedan sujetas á las reglas establecidas en el derecho mercantil, pudiendo procederse al arresto del cedente, por no gozar de inmunidad personal sino en el caso de ser declarado inculpable en el expediente de calificacion de quiebra. Sólo se diferencia la cesion judicial de la quiebra en que, realizada aquélla, no puede tener lugar, entre los acreedores y el cedente, convenio alguno, y en que éste no puede ser rehabilitado; excepciones puestas por el Código de comercio á la calificacion de quiebra que hace de las cesiones de bienes. Cuando son extrajudiciales, si los acreedores las aceptan, bien pura, bien condicionalmente, constituyen un contrato de carácter privado, cuyos términos forman la ley que debe dirimir las contiendas que se susciten entre el cedente y los cesionarios, y á tenor de cuyo contexto se hará la adjudicacion de bienes en pago de los créditos.

Algunos autores, encontrando perfecta paridad en los casos de cesion y de quiebra, manifiestan su extrañeza al notar que, sin fundado motivo, priva la ley á los acreedores de poder contratar con el deudor cedente, criticando al legislador en este punto porque ha cerrado la puerta á la voluntad de las partes, únicas interesadas en la cesion, sus créditos y efectos, para inventar un convenio que, al mismo tiempo que fuera favorable al cedente, redundara en beneficio de los cesionarios.

La extrañeza de los autores aludidos es mayor en cuanto á la negativa que establece la ley contra los cedentes, respecto á su rehabilitacion. En efecto, no se concibe, el *por qué* no pueden ser rehabilitados cuando los quebrados, á quienes expresamente el Código no lo prohíbe, pueden obtener su rehabilitacion *absoluta* ó limitada. Sea cual fuere la razon legal, á nosotros bástanos consignar, como queda expuesto, que los comerciantes que hacen cesion de bienes para pago de sus acreedores no pueden otorgar convenio alguno con éstos ni obtener rehabilitacion.

Juicio sobre nulidad del matrimonio civil y sobre divorcio.

Correspondia á la jurisdiccion ordinaria, segun la ley de matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, el conocimiento de las demandas de nulidad de aquél y de divorcio, principio que habia originado dudas acerca del procedimiento que debia aplicarse, y producido la consiguiente suspension de los juicios pendientes. El decreto de 23 de Noviembre de 1872 habia ocurrido á esta necesidad y determinado que dichas demandas se sustanciaren con arreglo al juicio civil ordinario en cuanto fuera aplicable con las adiciones que insertamos en la nota (1). Pero la modificacion profunda que introdujo en la materia el decreto de 9 de Febrero de 1873, afectó tambien necesariamente á la competencia y procedimiento para decidir tal nulidad y divorcio, mandando que pasaran las causas pendientes á los tribunales eclesiásticos, á quienes correspondia su conocimiento, reconociendo, sin embargo, como firmes, las ejecutorias dictadas en los asuntos fenecidos. (art. 7.º)

JUICIOS SINGULARES.

La ley de Enjuiciamiento civil establece reglas especiales para la tramitacion de los juicios de *menor cuantía, verbales, de desahucio, de retractos é interdictos*, formulando igualmente la que deben seguir las *ejecuciones*, cuyos procedimientos se separan más ó ménos, pero siempre algo, de las reglas del juicio ordinario, norma ó tipo general de todos los juicios.

Juicios de menor cuantía.

¿Qué cosas son objeto de estos juicios?—Toda contestacion entre partes, cuyo importe no exceda de 3.000 rs. y pase de 1.000, sin perjuicio de la

(1) 1.ª A las demandas de *divorcio* precederá siempre, y aunque los cónyuges ó alguno de ellos sea menor de edad, el acto de conciliacion, ó se hará constar que se ha intentado sin efecto. La avenencia de las partes sólo será eficaz para el caso en que acordaren continuar su vida marital.

2.ª Igual acto precederá á las demandas de *nulidad* del matrimonio cuando la causa determinante de aquélla esté comprendida en los números 3.º, 4.º y 5.º de las que lo hacen nulo, segun hemos dicho. Tampoco será válida la avenencia en este acto fuera del caso expresado en la regla anterior. El juez, ante el cual se celebre, enterará á los interesados de la obligacion de ratificar ó subsanar los defectos que se relacionen con las causas que se citan en los indicados números.

3.ª A la admision de la demanda de *nulidad* del matrimonio ó de *divorcio* precederá una informacion sumaria, con arreglo á derecho, acerca de la certeza de los hechos ó causas que, segun la ley, pueden dar lugar á que se declare la nulidad ó el divorcio, siempre que unos ú otras no aparezcan desde luego comprobados por documentos solemnes públicos ó oficiales que acompañen á la demanda.

4.ª En los casos en que, conforme á la regla anterior, proceda la informacion previa, se practicará con citacion y asistencia del ministerio fiscal ante el juzgado que, segun la ley, sea competente para conocer del negocio en el fondo.

5.ª En ambas demandas y cuando la urgencia lo reclama, el juez procederá por los trá-

accion ejecutiva, de la cual podrá usarse, cualquiera que sea la cantidad de que se trate, en los casos en que proceda con arreglo á derecho. Para fijar la cuantía debe atenderse á la demanda y á la reconvenccion en su caso.

¿Por qué medios se obtiene la evaluacion del objeto controvertido?— Cuando las partes no estén conformes acerca del valor de la cosa litigiosa el juez las oirá en juicio verbal, y adquiriendo las noticias que estime necesarias, lo fijará, determinando en su consecuencia la clase de juicio que haya de seguirse. Contra el fallo que pronuncie no habrá apelacion.

¿En qué forma y con qué documentos debe presentarse la demanda?— La demanda se deducirá por escrito, sin que sea obligatorio valerse de letrado ni procurador. Con ella presentará el demandante: 1.º, los documentos en que funde su pretension, y 2.º, copia de la demanda y de los documentos en papel comun.

¿En qué forma se practica el emplazamiento?— Entregando las copias de la demanda y documentos que la acompañen al demandado, en cuya entrega deben observarse los requisitos y formalidades que se exigen en el emplazamiento del juicio ordinario. La no comparecencia del demandado á quien se haya citado en conformidad á la ley, no detendrá el curso del pleito, pero si compareciere despues, se entenderán con él las diligencias sucesivas, sin que pueda retrocederse en el juicio.

¿Cuándo y en qué forma debe formularse la contestacion?— El demandado contestará dentro de seis dias. A su contestacion acompañará: 1.º, los documentos en que funde sus excepciones á la reconvenccion en su caso; 2.º, copia de la contestacion y de los documentos en papel comun, debiendo entregarse estas copias al demandado. Cuando el demandado formule reconvenccion, el actor deberá contestar dentro de tercero dia.

¿Qué requisitos son privativos de los escritos de contestacion á la demanda y reconvenccion?— En ambos el actor y el demandado deberán manifestar si están ó no conformes con los hechos expuestos en la demanda ó en la reconvenccion.

¿Qué efectos producen la conformidad y no conformidad en los hechos?— Si las partes estuvieren conformes en los hechos, y por no haberse alegado otros en contra quedare reducida la cuestion á un punto de derecho, el juez las citará dentro de tercero dia á juicio verbal, y, oyéndolas, ó á cualquiera otra persona que las represente legítimamente, dictará sentencia en el mismo dia. De este juicio se extenderá la oportuna acta, que firmarán el juez, escribano y los interesados.

Si las partes no estuvieren conformes en los hechos ó si, aunque lo estuvieren, se hubieren alegado otros en contra por el demandado, el juez recibirá el pleito á prueba, previniéndoles que en el término de tercero dia proponga cada una toda la que esté en el caso de hacer. Pasado dicho término no se podrá proponer prueba, ni adicionar la propuesta. Exceptúan-

mites de jurisdiccion voluntaria respecto á las resoluciones que son efecto de la admision de la demanda de divorcio y preliminares de éste.

6.ª Los conyuges menores de edad no tendrán necesidad de curador para comparecer en juicio como demandantes ó demandados, á no hallarse legalmente incapacitados por otro concepto.

7.ª El ministerio fiscal será siempre parte en los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio, debiendo ser oido en último lugar, cuando no sea él el que promueva la demanda de nulidad.

8.ª Todos los incidentes del juicio se sustanciarán, segun los casos, con arreglo á las prescripciones vigentes para cada uno.

9.ª Los jueces y tribunales apreciarán, segun las reglas de la sana critica, la fuerza probatoria de los documentos privados, aunque sean reconocidos como eficaces por las partes, y las manifestaciones ó confesiones que éstas hicieren en juicio.

10. Contra las providencias, autos y sentencias que se dicten en los juicios referidos, podrán deducirse los recursos ordinarios, extraordinarios y de casacion permitidos por las leyes vigentes, debiendo interponerse en el tiempo y forma que las mismas prescriben.

se de esta prohibición: 1.º, los documentos de fecha posterior á la demanda, á la reconvencción y á sus respectivas contestaciones; 2.º, los documentos de fecha anterior de que protestare, el que los presente, no tener antes conocimiento; 3.º, los documentos que tengan por objeto impugnar la reconvencción. Trascurridos los tres días sin que ninguna de las partes haya propuesto prueba, mandará el juez traer los autos á la vista y dictará sentencia. Si ambas partes ó alguna de ellas hubiere propuesto prueba, señalará el juez el término dentro del cual haya de practicarse. Este término no podrá pasar de nueve días. No obstante lo dispuesto anteriormente, si alguna de las diligencias propuestas hubiere de practicarse en lugar distinto del en que se siga el juicio, el juez, teniendo en consideración la distancia y la facilidad ó dificultad de las comunicaciones, señalará un término mayor para que se pueda verificar. En este caso las demás diligencias han de tener lugar precisamente dentro del término que se hubiere señalado.

¿Cómo deben practicarse las pruebas?—En la forma establecida para el juicio ordinario, debiendo presentarse los contra-interrogatorios antes del examen de los testigos.

¿Qué tramitación sigue el juicio, extinguido el término de prueba?—Unidas las pruebas á los autos, convocará el juez á las partes á juicio verbal, y las oirá si se presentaren, ó á sus apoderados, extendiéndose la oportuna acta. Al día siguiente de celebrado el juicio verbal, el juez dictará sentencia, la cual es apelable en ambos efectos. También puede interponerse contra ella, y á la vez que el recurso de apelación, el de nulidad ante la audiencia del territorio, si se hubiese protestado oportunamente hacerlo en los casos en que el juez haya declarado el negocio de menor cuantía teniendo la mayor. Interpuestos los dos recursos ó cualquiera de ellos, se remitirán los autos á la audiencia, poniéndolo en conocimiento de las partes.

¿Qué tramitación sigue el pleito en la segunda instancia?—Recibidos los autos en la audiencia, y personado el apelante, se pasarán al relator por término de tercero día para que se instruya de ellos, y sin formar apuntamiento pueda dar cuenta á la sala á que corresponda en el día que se señale para la vista. La sala señalará día para la vista, y oyendo de palabra á los interesados ó á sus apoderados, si se presentaren en el acto, y únicamente sobre los hechos, confirmará ó revocará la sentencia. La sentencia confirmatoria deberá contener condena de costas al apelante. Si no se personare el apelante dentro de ocho días, contados desde el en que se hubieren recibido los autos en la audiencia, los devolverá ésta al juez de primera instancia, para que la sentencia se lleve á efecto, y condenará al apelante en las costas á que la remesa de los mismos autos hubiere dado lugar. La no presentación en la audiencia del apelado no será obstáculo para que continúe en su rebeldía la sustanciación de la instancia. Confirmada ó revocada la sentencia apelada, se devolverán los autos al juez de primera instancia, con certificación de ella y de la tasación de costas, si hubiere habido condena, para su ejecución y cumplimiento.

¿Cómo debe cumplirse la sentencia?—Recibidos los autos en el juzgado de primera instancia, se procederá en los términos prevenidos en el título de la ejecución de las sentencias.

L 109

Juicios verbales.

¿Qué cosas son objeto de estos juicios?—Toda cuestión entre partes cuyo interés no exceda de 250 pesetas (1.000 rs.) (1). Si sobre el interés del pleito

(1) Artículo 270 de la ley orgánica de tribunales. La ley de Enjuiciamiento civil fija el límite de 600 rs.

hubiere duda, la decidirá el juez municipal, oyendo en una comparecencia á las partes. Contra su fallo sobre este punto no se da apelacion. El juez de primera instancia del partido, sin embargo, al conocer de la apelacion contra la sentencia definitiva, podrá declarar la nulidad del juicio si resultare ser su interés mayor de la expresada cantidad.

¿Quién es juez competente para conocer en los juicios verbales?—El conocimiento de estos juicios en la primera instancia, corresponde á los jueces municipales, antes de paz; en la segunda, á los jueces de primera instancia de los partidos, con exclusion de todo fuero privilegiado, segun tiene declarado repetidas veces el Supremo Tribunal.

¿Ante quién y cuándo puede entablarse el recurso de nulidad?—Ante el juzgado ó tribunal de partido cuando la parte que haga la declaracion se haya opuesto en la primera instancia á que se tramitara la demanda en juicio verbal.

¿Qué circunstancias debe contener la demanda en este juicio?—Se interpondrá en una papeleta, que se exige que sea en papel sellado, firmada por el actor, ó un testigo á su ruego si no pudiere firmar, debiendo contener el nombre, profesion ú oficio del demandante y demandado, la pretension que se deduce, la fecha en que se presente al juzgado, la firma del que la presente, ó de un testigo, á su ruego, si no pudiere firmar. El demandante acompañará además una copia de la papeleta, suscrita del mismo modo que ésta.

¿Qué sustanciacion sigue el juicio?—Recibida la papeleta, dispondrá el juez municipal á la mayor brevedad la convocacion de las partes á una comparecencia, señalando dia y hora al efecto por providencia que se extenderá á continuacion de la demanda. La citacion para la comparecencia, se extenderá á continuacion de la copia de la demanda, la cual se entregará al demandado. Para hacer constar la entrega de la papeleta se hará que el demandado firme, y si no pudiere, un testigo por él, diligencia de recibo; la cual se extenderá á continuacion de la providencia en que se hubiere ordenado la convocacion para el juicio. Cuando el demandado residiere en otro lugar que el del juez municipal que le emplace, se dirigirá oficio al del punto en que se hallare para que la cita tenga efecto. A continuacion del oficio, se extenderán la diligencia de la entrega de la copia y la citacion. Entre la convocacion y la celebracion de la comparecencia deberán mediar á lo más seis dias. En los casos en que el demandado no residiere en el lugar en que esté establecido el juzgado que le citare, se aumentará el término con un dia más por cada cuatro leguas que diste el lugar del juicio del de la residencia del demandado. El señalamiento hecho para la comparecencia, no puede alterarse sino por justa causa alegada y aprobada ante el juzgado.

Llegado el dia de la comparecencia, se celebrará ésta ante el juez y secretario. En ella las partes expondrán por su órden lo que á su derecho conduzca, y despues se admitirán las pruebas que presentaren. A estas comparecencias podrá concurrir, acompañando á los interesados y para hablar en su nombre, la persona que elijan. No compareciendo el demandado, continuará el juicio en su rebeldia sin volver á citarlo. Concluida la comparecencia, se extenderá la oportuna acta, que firmarán todos los concurrentes y los testigos. Los documentos presentados se unirán á los autos.

Al dia siguiente de celebrada la comparecencia dictará el juez sentencia definitiva, que se notificará en forma á las partes. La sentencia es apelable en ámbos efectos. Interpuesta la apelacion se remitirán los autos al tribunal correspondiente, con citacion de las partes.

¿Qué tramitacion sigue el juicio en la segunda instancia?—Recibidos los autos en el juzgado de primera instancia ó tribunal de partido, el juez oirá á las partes en la comparecencia, con sujecion á las reglas establecidas. En

el mismo día dictará sentencia. Contra ella no se da ningun recurso. Los autos se devolverán con certificación de la sentencia al juez municipal para su ejecución.

Juicio de desahucio.

¿Qué es *desahucio*?—El acto por el cual el inquilino ó arrendatario deja la finca arrendada, bien por voluntad propia, bien á instancia del propietario, cuando á ello hay lugar con arreglo á derecho. El juicio de *desahucio*, pues, tiene por objeto conseguir que el inquilino ó arrendatario deje libre y desembarazada, á favor del dueño, la finca que ha arrendado en uso de su derecho. La tramitación que se sigue en este juicio, consignada en la ley de Enjuiciamiento civil, ha sido modificada por otra del 25 de Junio de 1867, y últimamente por la de 18 de Junio de 1877, con arreglo á cuyas disposiciones vamos á exponer la sustanciación, la cual varía según el fundamento en que se apoye la demanda de desahucio.

¿A quién corresponde conocer de este juicio?—El conocimiento de las demandas de desahucio corresponde exclusivamente á la jurisdicción ordinaria, la cual tiene competencia para ejecutar la sentencia que recayere, sin necesidad de pedir ninguna clase de auxilio á otras autoridades; debiendo ventilarse el juicio ante los jueces de primera instancia y los municipales según los casos, como luego veremos.

¿Qué causas pueden motivar el *desahucio*?—1.º, el cumplimiento del término estipulado en el arrendamiento; 2.º, la conclusión del plazo que debiera darse, con arreglo á la ley, á lo pactado ó á la costumbre general de cada pueblo; 3.º, la falta de pago del precio estipulado; 4.º, la infracción manifiesta de cualesquiera de las condiciones convenidas en el contrato; 5.º, cualquiera otra causa legal no comprendida en los números anteriores (1).

¿En qué casos son competentes los jueces municipales para conocer de las demandas de *desahucio*?—1.º, cuando se funden en alguna de las causas señaladas con los tres primeros números de la pregunta anterior; 2.º, cuando el que disfruta la finca la tuviere en *precario* y no pagare merced alguna siempre que fuere requerido con un mes de término; 3.º, cuando se dirijan contra los administradores, encargados y porteros puestos por el propietario en sus fincas (2).

¿Cuándo corresponde conocer de estos juicios á los jueces de primera instancia?—Cuando se funde la demanda de desahucio en una infracción manifiesta de cualesquiera de las condiciones convenidas en el contrato de arrendamiento, que no sea ninguna de las que originan la competencia de los juzgados municipales ya enumeradas; ó se interponga fundada en cualquiera otro motivo de los que, según derecho, dan lugar al desahucio.

¿Qué tramitación siguen las demandas que se interponen ante los jueces municipales?—El juicio debe sustanciarse de conformidad con las reglas siguientes (3):

1.ª El actor expendrá su reclamación ó demanda por escrito en dos pa-
peletas en papel comun firmadas por él, ó por un testigo á su ruego si no

(1) Véase lo dicho acerca del contrato de arrendamiento en el tratado de *Derecho civil*.

(2) Estos dos últimos fundamentos del desahucio fueron admitidos por la ley de 18 de Junio de 1877, para cortar los muchos abusos que se cometían en contra de los propietarios, á fin de garantizar su derecho absoluto.

(3) Los artículos que se citan en estas reglas se refieren á la ley de Enjuiciamiento civil.

podiere firmar, que contendrán además el nombre, profesion y domicilio del demandante y demandado, la pretension que se deduzca y la fecha en que se presente en el juzgado.

2.^a Los litigantes están dispensados en estas demandas de la presentación de procurador, de la direccion de letrado y de la celebracion de acto previo de conciliacion.

3.^a Recibidas las papeletas en secretaría, el juez mandará convocar al actor y al demandado á juicio verbal, señalando dia y hora al efecto, que no podrán alterarse sino por causa alegada y estimada por el mismo: la citacion para la comparecencia se expondrá á continuacion de la copia de la demanda, que será entregada al demandado.

4.^a El juicio se celebrará dentro de los seis dias siguientes al de la presentacion de las papeletas; pero mediando siempre tres dias entre dicho juicio y la citacion del demandado.

5.^a La citacion se hará con sujecion á lo que previene el art. 640 de esta ley. Si el demandado no se hallare en el distrito, se procederá en la forma que establece el art. 644; pero sin que el total del término para la comparecencia pueda exceder de veinte dias. Cuando el demandado no tenga domicilio fijo, ó se ignorase su paradero, se procederá con arreglo á lo que dispone el art. 644.

6.^a Si el demandado que estuviere en el lugar del juicio no compareciere á la hora señalada, se observará lo que determinan los arts. 645 y 646.

7.^a En el acto de la comparecencia, las partes expondrán por su orden lo que á su derecho conduzca, y propondrán en el acto toda la prueba que les conviniere; y despues de admitida, se practicará la estimada pertinente dentro del plazo fijado por el juez, que no podrá exceder de seis dias.

Quando la demanda de desahucio se funde en la falta de pago del precio concertado, no será admisible otra prueba que la confesion judicial ó el documento ó recibo en que conste haberse verificado dicho pago.

Al dia siguiente de practicada la prueba se unirá á los autos y citará el juez á las partes á juicio verbal para el inmediato, en que las oirá, ó á la persona que elijan para hablar en su nombre, extendiéndose acta de ello.

8.^a El juez dictará sentencia dentro de tercero dia, decretando haber lugar ó no al desahucio, y apercibiendo, en primer caso, al demandado de lanzamiento si no desaloja la finca dentro de los términos á que se refiere la regla siguiente. Dicha sentencia se hará saber al demandado si no hubiere concurrido al juicio en la forma que determina el art. 649, y se notificará en estrados en el caso que el mismo supone.

9.^a Los términos de que habla la regla anterior son los que expresa el art. 647, con la prevencion en su caso que establece el 648.

10. Pasados dichos términos sin que el arrendatario haya desalojado la finca, se procederá á lanzarle de ella en la forma que previene el art. 651. En el supuesto á que se refiere el 652, se observará lo que éste establece; pero sin que se detenga por eso llevar á efecto el lanzamiento.

11. La sentencia será apelable en ambos efectos, pudiendo interponerse la apelacion por medio de escrito ó de comparecencia, dentro de tercero dia; pero si el apelante lo fuere el demandado, no admitirá el juez el recurso si no consignare el importe de los plazos del arriendo vencidos y los que debiera pagar adelantados.

12. Admitida la apelacion, se remitirá el expediente dentro de veinticuatro horas al juez de primera instancia, previa citacion y emplazamiento de las partes en la forma ordinaria, el cual, tan luego como reciba los autos, convocará á las partes á nueva comparecencia dentro de tercero dia, haciendo la citacion conforme á lo que previene la regla 5.^a de este artículo; pero aplicando al ausente la disposicion que establece el último párrafo de la misma para aquél cuyo paradero se ignore.

13. Llegado el momento de la comparecencia, el juez oirá á las partes

si se presentaren, ó sus apoderados, extendiéndose acta; y sin admitir más prueba que la que, propuesta en primera instancia, no hubiera podido practicarse, dictará sentencia dentro de tercero día.

14. Dictada que sea la sentencia, se devolverán los autos con certificado de la misma, para su cumplimiento, al juzgado municipal, el que, si el fallo fuera favorable al propietario, procederá al lanzamiento del arrendatario dentro de los términos á que se refiere la regla 8.^a de este artículo, sin excusa alguna. En la misma forma procederá si la sentencia de primera instancia hubiera quedado firme por no haber consignado el arrendatario el importe de los plazos que dice la regla 11.

15. Contra la sentencia dictada en apelacion por los jueces de primera instancia en juicio de desahucio sobre fincas rústicas ó urbanas, cuyos alquileres ó rentas vencidas á la publicacion de dicha sentencia no excedieren de 750 pesetas, no se da recurso de casacion por infraccion de ley ó doctrina legal; pero si por quebrantamiento de alguna de las formas del juicio, conforme á lo previsto en la ley de casacion civil vigente, para los negocios de menor cuantía.

16. Interpuesto por alguna de las partes recurso de casacion contra la sentencia definitiva, se aplicará, al iniciarse el recurso, el art. 667, correspondiendo el cumplimiento de la ejecutoria, si se declara haber lugar al desahucio, al juez municipal.

17. Las costas de ambas instancias, así como las que ocasione el lanzamiento, serán de cuenta del arrendatario si se acordare el desahucio, y para hacer efectivo su pago se procederá con arreglo á los arts. 653, 654 y 655.

18. Los términos designados en las reglas anteriores son improrrogables en absoluto, siendo aplicable á ellos cuanto en esta parte establece el artículo 672.

19. Cuando el juicio de desahucio se siga en virtud de las causas á que se refiere este artículo, el abono que expresan los arts. 656, 657 y 658 se reclamará ante el juez municipal si el importe de dicho abono no excediese de 250 pesetas; y tanto esta demanda, como la segunda instancia que establece el art. 660, se sustanciarán en los términos prevenidos por esta ley para los juicios verbales. Si el importe del abono excediese de 250 pesetas, la reclamacion se entablará ante el juez de primera instancia, en los términos que previene el art. 658, observándose en la apelacion lo que disponen los arts. 659 y 660.

¿Cuál es la sustanciacion correspondiente cuando el juicio se sigue ante los juzgados de primera instancia?—Presentada la demanda, el juez mandará convocar al actor y al demandado á juicio verbal, que se celebrará dentro de los ocho dias siguientes al de la presentacion de la demanda, pero mediando siempre cuatro por lo ménos entre dicho juicio y la citacion del demandado. No requiere como requisito indispensable el acto conciliatorio, siendo ésta una de las modificaciones de la ley de 1867.

¿Cómo debe practicarse la citacion?—La citacion se hará en su persona al demandado; si no pudiese ser habido despues de dos diligencias con intervalo de seis horas, se le dejará en su casa cédula citándole para el juicio, entregándola á su mujer, hijos, dependientes ó criados, si los tuviere; y no teniéndolos, al vecino más inmediato. Al propio tiempo se entregará copia simple de la demanda al demandado ó á la persona á quien se deje la cédula de citacion.

En el caso de intentarse la demanda en el lugar en que esté sita la cosa, y de no hallarse en él el demandado, se entenderá la citacion para el juicio con su representante, si lo tuviere; caso de no tenerlo constituido por medio de poder, con la persona que esté encargada en su nombre del cuidado de la finca; y si tampoco la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú orden para citarlo al juez del pueblo de su domicilio ó residencia. En este último caso, el juez señalará el término suficiente, atendidas las distancias y difi-

cultad de las comunicaciones, para la comparecencia al juicio verbal. Este término no podrá exceder de un día por cada seis leguas. Lo mismo se practicará cuando se proponga la demanda en el lugar del domicilio y no se encuentre en él el demandado. En los casos de que se habla anteriormente se apercibirá al demandado, al hacerle la citación, de que no compareciendo por sí ó por legítimo apoderado se declarará el desahucio sin más citarlo ni oírlo.

Cuando el demandado no tenga domicilio fijo y se ignore su paradero, se hará la citación en los estrados del juzgado para que comparezca al juicio verbal, bajo el apercibimiento explicado anteriormente. Si el demandado que estuviese en el lugar del juicio no compareciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la misma forma para el día inmediato, apercibiéndole al practicar esta diligencia, si fuese habido, y si no en la cédula que se le dejare, con que de no concurrir al juicio se le tendrá por conforme con el desahucio, y se procederá, sin más citarlo ni oírlo, á desalojarlo de la finca. Esta segunda citación no se hará á los ausentes.

¿Qué efectos produce la no comparecencia del demandado?—Si no compareciere el presente en el lugar del juicio despues de la segunda citación, ni el ausente despues de la primera, el juez declarará inmediatamente haber lugar al desahucio, apercibiendo de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca dentro de los términos que á continuación se expresan: el de ocho días, si se trata de una casa de habitación y que habiten con efecto el demandado ó su familia; el de quince días, si de un establecimiento mercantil ó de tráfico; el de veinte días, si de una hacienda, alquería, cortijo ú otra cualquiera finca rústica que tenga caserío, y en la cual haya constantemente guardas, capataces ú otros sirvientes, cuyos términos son improrogables; pasados los cuales sin haberse desalojado la finca, se procederá á lanzar al inquilino ó colono, sin consideración de ningún género y á su costa. Si el desahucio se hace de una finca rústica que no tuviere caserío, y en la cual no haya constantemente guardas, capataces ú otros sirvientes, el lanzamiento se decretará en el acto.

¿En qué forma debe notificarse la declaración del desahucio?—La providencia declarando el desahucio, y el lanzamiento en su caso, se hará saber al demandado en los mismos términos en que se le hizo la citación, si estuviere en el lugar del juicio; en los demás casos se notificará en estrados, parándole el mismo perjuicio que si se hiciere en su persona.

¿Qué debe hacerse cuando el arrendatario no desaloja la finca pasados los términos expuestos?—Se procederá á lanzarle sin consideración de ningún género y á su costa, reteniendo y constituyendo en depósito los bienes más realizables que se encuentren, suficientes á cubrir las costas causadas, los cuales, previa tasación judicial, se enajenarán con este objeto por la vía de apremio, si el demandado no la pagare en el acto.

¿Que debe hacerse cuando en la finca existan labores ó mejoramientos?—Si en la finca rústica hubiere labores ó plantío que el colono reclame como de su propiedad, se extenderá diligencia expresiva de la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas: no servirá esta reclamación de obstáculo para el lanzamiento; en los casos en que el demandado hubiere reclamado labores, plantío ú otra cualquier cosa que haya quedado en la finca, por no poderse separar de ella, se procederá á su avalúo por peritos que nombren las partes, y tercero de oficio, caso de discordia. Practicada que sea esta diligencia, podrá el demandado reclamar el abono de la cantidad en que haya sido apreciado lo que creyere corresponderle. Si formulara reclamación, se convocará á juicio verbal, en el que, oídas las partes y recibidas las pruebas, el juez dictará la providencia que estime de justicia. Esta providencia es apelable en ambos efectos. Interpuesto el recurso, se remitirán los autos al tribunal superior, con citación y emplazamiento de las partes en la forma ordinaria. La segunda instancia se sus-

tanciará en los términos prevenidos para las apelaciones de las sentencias.

¿Qué tramitación sigue el juicio cuando el arrendatario concurre al verbal?—El juez oír á las partes, recibirá sus pruebas y dictará sentencia apelable en ambos efectos, por regla general. Decimos por regla general, porque el juez no admitirá la apelacion si al interponerla no acreditase el arrendatario que ha satisfecho los plazos vencidos y los que debiera pagar adelantados. Si no lo acreditase, quedará desde luego firme y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia. Consentida la de primera instancia, ó pasada en autoridad de cosa juzgada, se procederá á su ejecucion en la forma antes prevenida, si se hubiere declarado haber lugar al desahucio.

¿Qué tramitación se da al expediente, apelada la sentencia de primera instancia?—Admitida la apelacion, se remitirán los autos del tribunal superior con citacion y emplazamiento de las partes, en donde se sustanciarán por los trámites prevenidos para la segunda instancia de los interdictos, debiendo contener siempre la sentencia confirmatoria condena de costas. Dictada que sea la sentencia de vista, se devolverán para su cumplimiento los autos al juzgado de que procedan, con certificacion sólo de ella y de la condena de costas, si la hubiere habido.

¿Cuándo es admisible el recurso de casacion en el juicio de desahucio?—No podrá ser admitido, caso que proceda, si al interponerlo no acredita aquél tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato debe adelantar; el mismo recurso, una vez admitido, y cualquiera que sea su estado, se considerará desierto si durante su sustanciacion dejaren de pagarse rentas vencidas, ó de satisfacerse las que corresponda adelantar; el pago de las rentas se acreditará con el recibo del propietario, ó de su administrador ó representante.

¿Qué tramitación se da al desahucio cuando la demanda se funda en cualquiera causa legal que no sea de las comprendidas en el primer grupo, y que quedan enumeradas?—Interpuesta la demanda, se convocará á las partes á juicio verbal en la misma forma y para igual tiempo al expresado al tratar de la sustanciacion de la demanda fundada en cualquiera de dichas causas; si compareciendo el demandado, conviniere con el demandante en los hechos, dictará el juez sentencia; si no compareciese el demandado, se le tendrá por conforme con los hechos expuestos en la demanda, el juez dictará en su rebeldía sentencia, declarando haber lugar al desahucio; esta sentencia es apelable en ambos efectos; si no se apelase, queda de derecho consentida sin necesidad de declaracion alguna, y se procederá á su ejecucion y cumplimiento.

La sustanciacion de la segunda instancia tendrá lugar en la misma forma que la establecida para el juicio anterior.

¿Qué efectos produce en el procedimiento la oposicion del demandado al desahucio?—Si el demandado se opusiese al desahucio en el juicio verbal, y no conviniere en los hechos, precisará los que negare y las razones en que lo funda. El juez, en su vista, declarará terminado el juicio y conferirá traslado al demandado por el término preciso de cinco dias. Transcurridos, recibirá el pleito á prueba, si procediere, por un término que no excederá de veinte dias. Al segundo dia despues de concluido el término de prueba, la que se hubiese practicado se unirá de oficio á los autos. Se entregarán éstos para instruccion á cada una de las partes por término perentorio de tercero dia. Devueltos ó recogidos los autos, el juez señalará sin dilacion dia para la vista, á la que podrán concurrir los interesados ó sus letrados defensores. Dentro de los tres dias siguientes dictará sentencia.

¿En qué casos es admisible la apelacion de esta sentencia?—Si fuese condenatoria, el juez no la admitirá, si al interponerla no acreditase el ar-

rendatario que habia satisfecho los plazos entonces vencidos y los que segun el contrato de arriendo debe pagar adelantados; y no haciéndolo así, se reputará desierto el recurso, y la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Procediendo la apelacion, debe otorgarse en ambos efectos.

El recurso de casacion puede interponerse tambien contra estas sentencias, por quebrantamiento de forma, en todos los casos; y por infraccion de ley ó doctrina legal, sólo cuan lo los alquileres ó rentas vencidas excedan de 3.000 rs. segun queda dicho al tratar de los juicios que se sustancian ante los jueces municipales.

¿Qué novedad se nota en los desahucios por razon de la cuantía del arrendamiento?—La facultad concedida á los interesados para valerse ó no de letrado, en aquellos juicios en que el importe anual del arrendamiento no exceda de 3.000 rs.; dividiéndose, por consiguiente, en desahucios de mayor y menor cuantía.

Para facilitar la prontitud en la resolucion de estas contiendas, se ha establecido que, durante el periodo de vacaciones, las salas extraordinarias de las audiencias sustancien y fallen los recursos de apelacion que se interpongan de las sentencias que decidan la cuestion en que ha concurrido el demandado citado á juicio verbal.

Era tan necesaria la reforma del procedimiento en materia de desahucios que el legislador, teniendo presente la necesidad y el número de pleitos pendientes á la publicacion de la nueva ley, ha establecido reglas, por las cuales podia regirse la tramitacion de éstos, consignando al efecto que:

1.º Los pleitos sobre desahucio pendientes al promulgarse la ley reformando algunos artículos de la de Enjuiciamiento civil, continuarán sustanciándose con arreglo al derecho anterior, á no ser que los litigantes pidieren, de comun acuerdo, que el procedimiento se acomode á la nueva legislación.

2.º En el caso de solicitarlo uno sólo de los litigantes, los jueces convocarán á las partes á una comparecencia, para que acuerden el procedimiento que haya de seguirse. Si el litigante citado no concurriere á la comparecencia, se acomodará el procedimiento á la nueva ley desde el estado en que se halle. Si concurriendo no convinieren con el contrario, se continuará la sustanciacion conforme á la ley antigua.

3.º Los procuradores que tengan poder para el pleito pendiente podrán concurrir á las comparecencias de que se habla anteriormente, y acordar, en nombre de sus representados, lo que estimen oportuno sobre la forma á que haya de acomodarse la continuacion del procedimiento.

Por este medio los litigantes que lo eran antes de la publicacion de la ley de 25 de Junio de 1867, pueden gozar de los beneficios introducidos por ésta en la tramitacion de sus pleitos pendientes.

Juicio de retracto.

Al tratar de los *retractos* en las secciones de Derecho romano y Derecho civil español, nos hemos ocupado extensamente de su naturaleza y de las diferentes clases que la ley reconoce. Tócanos ocuparnos en este lugar solamente del procedimiento á que ha de sujetarse el ejercicio de las acciones que derivan de ese derecho.

¿Quién es el juez competente para conocer las demandas de *retracto*?—El del lugar en que está situada la cosa que se intenta retraer, ó el del domicilio del comprador, á eleccion del demandante.

¿Qué circunstancias deben contener las demandas de *retracto*?—Además de las generales á toda demanda, para que pueda dárseles curso, se

requiere: 1.º, que se interpongan en juzgado competente dentro de *nueve días*, término fatal que corre contra los menores y ausentes, contados desde el otorgamiento de la escritura de venta; 2.º, que se consigne el precio si es conocido, ó si no lo fuere que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea; 3.º, que se acompañe alguna justificación, aun cuando no sea cumplida, del título en que se funde el retracto; 4.º, que se contraiga, si el retracto es gentilicio, el compromiso de conservar la finca retraída á lo ménos dos años, á no ser que alguna desgracia hiciere venir á ménos fortuna al retrayente y le obligare á la venta; 5.º, que se comprometa el comunero á no vender la participacion del dominio que contraiga durante cuatro años; 6.º, que se contraiga, si el retracto lo intenta el dueño directo ó el útil, el compromiso de no separar ambos dominios durante seis años; 7.º, que se acompañe copia de la demanda en papel comun. Si falta alguno de estos requisitos debe repelerse, de oficio, la demanda.

¿En qué casos puede prorogarse el término de los nueve días?—Cuando el retrayente no resida en el pueblo en donde se haya otorgado la escritura que dá causa á él, y cuando la venta se ha ocultado con malicia. En el primer caso tendrá el retrayente, además de los nueve días, uno por cada diez leguas que distare del pueblo del otorgamiento el de su residencia. En el segundo, el término de los nueve días no empezará á correr hasta el siguiente al en que se acreditare que el retrayente ha tenido conocimiento de ella.

¿Qué trámites siguen á la presentacion de la demanda?—Una vez entablada, el tribunal mandará hacer el depósito de la cantidad consignada en el establecimiento público destinado al efecto, ó admitirá la fianza bajo su responsabilidad en los casos en que proceda, reservándose proveer sobre el fondo, presentada que sea la certification del acto de conciliacion. Presentada ésta, se dará traslado de la demanda al comprador, emplazándolo y entregándosele la copia de ella en la forma prevenida en el juicio ordinario, quien contestará á la demanda dentro de los términos marcados para el juicio ordinario, acompañando copia simple de la contestacion, que se entregará al demandante.

¿Qué circunstancias debe contener el escrito de contestacion?—La manifestacion que debe hacer el demandado acerca de su conformidad ó no conformidad con los hechos que sirven de fundamento á la demanda. Habiendo absoluta conformidad en los hechos, el juez citará á los interesados ó sus representantes á juicio verbal, y despues de oírlos pronunciará sin dilacion la sentencia. Si no hubiere conformidad en los hechos, se recibirán los autos á prueba sobre aquéllos en que no la hubiere, por el menor término posible, segun las circunstancias, y se practicará la que las partes propongan, con sujecion á las reglas establecidas para el juicio ordinario. Concluido el término que se otorgue y sus prórogas, se pondrán las pruebas de manifiesto á las partes por tres días.

¿Qué tramitacion sigue el juicio, despues de la publicacion de probanzas?—Pasado el término anterior, el juez convocará á las partes á juicio verbal; las oírá, ó á sus legítimos representantes ó defensores, y al día siguiente dictará sentencia, que es apelable en ambos efectos.

¿Qué tramitacion se da á los retractos en segunda instancia?—Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la audiencia en la forma prevenida para el juicio ordinario. No se expresarán agravios por escrito, entregándose los autos sólo para instruccion. En todo lo demás se acordarán las reglas establecidas para las segundas instancias.

¿Por qué medio se garantizan los efectos del retracto declarado judicialmente?—Con la inscripcion en el Registro de la propiedad del compromiso que haya contraído el retrayente en la demanda, para lo cual se libra el oportuno mandamiento al registrador, exigiéndole que conteste quedar cumplido.

¿Es revocable el compromiso del demandante?—El comprador que ha ya sido vencido, puede en cualquier tiempo librar al retrayente de este gravámen, sin cuyo convenio y antes del término del compromiso no se cancelará la toma de razon, siendo nula la enajenacion que se hiciere de la finca retraida.

INTERDICTOS.

Cinco son los interdictos de que se ocupa la ley, segun lo hemos hecho notar al definirlos en otro lugar, considerándolos y estudiándolos como *acciones* (1). Su tramitacion es diversa, pero siempre sumaria, porque diversas son su índole y naturaleza, pudiendo solo intentarse: 1.º, para *adquirir la posesion*; 2.º, para *retenerla*; 3.º, para *recobrarla*; 4.º, para impedir una *obra nueva*; 5.º, y para impedir que una *obra vieja* cause daño.

Estos recursos no se dan contra las providencias administrativas, dictadas dentro del círculo de las atribuciones de las autoridades de donde emanan.

¿Quién es el juez competente para conocer de los *interdictos*?—Para el de *adquirir*, el del domicilio del finado, ó el del lugar en que radique su testamentaria ó abintestato, ó el en que estén sitos los bienes, á eleccion del demandante. Para los demás interdictos, el del lugar en que esté la cosa objeto de ellos. Debe tenerse muy presente que el conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente á la jurisdiccion ordinaria, cualquiera que sea el fuero de los demandados.

Interdicto de adquirir.

Este juicio comienza, como todos, por la presentacion de la demanda, que, además de contener los requisitos generales, para que proceda su admision es indispensable: 1.º, la representacion de titulo suficiente para adquirir la posesion con arreglo á derecho; 2.º, que nadie posea á titulo de dueño ó usufructuario los bienes cuya posesion se pida.

¿Qué efectos produce y qué tramitacion se da á la demanda?—Intentado el interdicto, el tribunal examinará el titulo en que se funde y dictará auto motivado otorgando la posesion sin perjuicio de tercero, ó denegándola. Del auto en que se deniegue la posesion puede pedirse reposicion dentro de tercero dia; y si el juez no la otorgare, queda expedito el recurso de apelacion. La apelacion se admitirá en ambos efectos, remitiéndose enseguida los autos á la audiencia, con citacion sólo del que los haya promovido.

¿Cómo debe darse la posesion al demandante?—Pronunciado auto otorgando la posesion, se procederá á darla en cualquiera de los bienes de que se trate, en voz y nombre de los demás, por alguacil, á quien se conferirá comision al efecto, y ante el secretario del tribunal. Se harán tambien las intimaciones necesarias á los inquilinos y colonos de los demás bienes, ó á los que puedan tener algunos bajo su custodia ó administracion, para que reconozcan al nuevo poseedor, librándose á este objeto los exhortos ú órdenes necesarios, y se dispondrá que dicho auto se publique por edictos

(1) Véase la página 61.

que se fijarán en los sitios acostumbrados del pueblo é insertarán en los periódicos de él y en el *Boletín oficial* de la provincia.

¿Cuándo se convierte en posesion de derecho la concedida interinamente al demandante?—A los sesenta días desde la fecha en que se hubiere insertado el auto en el *Boletín oficial* de la provincia; pasados los cuales sin que nadie se haya presentado á reclamar, se ampara en la posesion al demandante, quedando sólo al que se crea perjudicado la accion de propiedad, durante cuyo juicio deberá conservarse en la propiedad al demandante.

¿Qué tramitacion sigue el expediente en caso de oposicion?—Si dentro de los sesenta días se presentare alguno con otro título reclamando contra la posesion, se comunicará la solicitud por tres días al que la haya obtenido. De lo que expusiere éste se dará copia al reclamante, y mandará, acto continuo, el juez convocarlos á juicio verbal, al cual podrán asistir sus respectivos defensores para alegar sus derechos á poseer: en este juicio podrán presentarse documentos y testigos. Se extenderá la oportuna acta de él, que suscribirán el juez, los interesados, los testigos que hubieren sido examinados y el secretario del tribunal, uniendo los documentos á los autos. Concluido el juicio verbal, y dentro del día siguiente, el juez dictará sentencia, la cual determinará amparar en la posesion al que la haya obtenido, ó darla al reclamante con todas sus consecuencias, dejando sin efecto la dada anteriormente. En este último caso, si resultare haber procedido dolosamente el que promovió el interdicto, será condenado en costas y á la indemnizacion de daños y perjuicios. La sentencia es apelable en ambos efectos ante la audiencia.

Interdicto de retener.

¿Cuándo procede la interposicion del interdicto de *retener*?—Cuando ha habido conatos manifestados por algun acto exterior de turbar ó inquietar en la posesion de alguna cosa al que la tuviere.

¿Qué circunstancias debe contener la demanda?—Debe ofrecer en ella el demandante informacion para acreditar: 1.º, que se halla en posesion, y 2.º, que se le ha tratado de inquietar en ella, expresando el acto que lo haya hecho temer.

¿Qué efectos produce la informacion?—Si dada la informacion no resultaren acreditados los dos extremos referidos, declarará el juez no haber lugar al interdicto, cuya providencia es apelable en ambos efectos. Si de la informacion resultaren comprobados los extremos de la demanda, el juez convocará á juicio verbal al actor y al reo, en el cual les oirá y admitirá las pruebas que adujesen, que tengan por objeto acreditar la posesion ó no posesion del que haya promovido el interdicto, y la verdad ó falsedad de los actos del demandado que hayan podido revelar su propósito de inquietarlo en ella. Cualesquiera otras praevas son inadmisibles. Concluido el juicio verbal y extendida la oportuna acta, el juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes, dictará sentencia.

¿Qué disposicion debe contener la sentencia?—Una de las dos declaraciones siguientes: 1.ª, no haber lugar al interdicto, y 2.ª, haber lugar al interdicto y mantener en la posesion al que lo haya solicitado, mandando hacer las consiguientes intimaciones al que resulte haber propuesto turbarla. Si la sentencia otorga el interdicto, se condenará en costas al demandado; en caso contrario, al actor. Tambien debe contener la fórmula de *sin perjuicio*, y se reservará en ella á los que fueren condenados el ejercicio de la demanda de propiedad que pueda corresponderles con arreglo al derecho.

Las sentencias declarando haber ó no haber lugar al interdicto son apelables en ambos efectos.

Interdicto de recobrar.

Hemos visto cuándo tiene lugar este interdicto (1). Pues bien; el que solicite que se le restituya la posesion de que ha sido despojado, debe ofrecer informacion sobre los hechos siguientes: 1.º, hallarse él ó su causante en posesion ó tenencia de la cosa de que haya sido despojado; 2.º, haber sido despojado de esta posesion ó tenencia, designando al autor del despojo.

¿De cuántas maneras puede tramitarse este interdicto?—De dos: con ó sin audiencia del despojante, á voluntad del despojado, quien debe manifestarla en la demanda; si optare por que se tramite sin audiencia de aquél, al mismo tiempo que solicite la informacion, propondrá fianza á satisfaccion del juez, para responder de cualesquiera perjuicios que puedan resultar de la restitution.

¿Qué número de testigos debe presentar el demandante?—Lo ménos tres.

¿Qué efectos produce la informacion?—Resultando probados los dos extremos de la demanda, el juez, si se hubiera ofrecido fianza á su satisfaccion, y previo el otorgamiento de élla en forma, decretará la restitution con todas sus consecuencias. La fianza podrá ser de cualquiera de las clases conocidas, con tal que el juez la estime suficiente. La restitution se verificará inmediatamente, haciendo al que resulte despojante las prevenciones y apercibimientos correspondientes.

Si al intentar el interdicto no se ofreciere fianza, dada informacion por el actor, convocará el juez á ambas partes á juicio verbal. A este acto podrán asistir los respectivos defensores, y con presencia de sus alegaciones y de las pruebas que adujeren, pronunciará sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Concedida la restitution podrá apelar el despojante, sin perjuicio de lo cual se llevará á efecto la restitution, aplazando la ejecucion de los extremos de la sentencia relativos á costas, devolucion de frutos é indemnizacion de perjuicios para despues de ejecutoriada. Verificada la restitution, se remitirán los autos al tribunal superior, con citacion de ambas partes. Las providencias en que se otorgue la restitution son apelables, procediéndose á su ejecucion segun la parte dispositiva.

Cuando el juez denegare la restitution y su providencia fuere revocada, se ejecutará aquélla y harán efectivas las condenas que se impongan al despojante, quedándole reservado su derecho en juicio ordinario.

Interdicto de obra nueva.

Los casos en que procede el interdicto de obra nueva y su fin, quedan expuestos al tratar de las acciones personales (2). Veamos la tramitacion que debe dársele.

Comienza el juicio por la demanda, en que deben expresarse los hechos y ejercitar la accion correspondiente, concluyendo á que se suspen-

(1) Página 61.

(2) Página 62.

da la obra que dá márgen al procedimiento. Presentada la demanda, decretará el juez provisionalmente la suspension de la obra, dejando en el sitio en que estuviere haciéndose, un dependiente del juzgado para que cuide de que sea cumplida la suspension.

¿Cuáles son los efectos de la suspension?—Desde que se acuerda, y mientras esté pendiente el interdicto, nada podrá hacerse en la obra más que lo que sea absolutamente indispensable para que no se destruya lo edificado, y este con autorizacion del juez.

¿Qué trámites siguen á la suspension acordada?—En el mismo auto de la suspension se convocará á juicio verbal al denunciante y al denunciado, previéndoles que traigan los documentos en que respectivamente funden sus pretensiones. A este juicio podrán concurrir los defensores de los interesados. El juez, si lo estima necesario, podrá trasladarse antes de dictar sentencia al lugar de la obra para decidir con más acierto, no pudiendo mediar más que tres dias entre el juicio y la diligencia de inspeccion, á no haber una causa extraordinaria é insuperable. A esta diligencia podrán concurrir las partes, si lo solicitasen, sus defensores y los peritos que ellas mismas designen, y el que el juez nombre para que lo acompañe.

¿Cuándo debe dictarse la sentencia y cuáles son sus efectos?—Dentro de los tres dias siguientes al que en la diligencia de inspeccion haya tenido lugar, ó de la celebracion del juicio si no hubiere habido inspeccion, el juez dictará sentencia. Si no se ratificare la suspension de la obra, procederá la apelacion en ambos efectos: interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al tribunal superior, con citacion de ambas partes. Si se ratificare la suspension de la obra, se procederá á ejecutarla ante el secretario del tribunal por un subalterno que se comisione al efecto, extendiéndose en los autos la oportuna diligencia del estado, altura y circunstancias de la obra, y apercibiendo al que la estuviere ejecutando con la demolicion á su costa de lo que de allí en adelante se edificare. La sentencia en que se ratificare la suspension es apelable sólo en un efecto.

Si se consintiere la sentencia, ó apelada se confirmare, tendrá derecho el dueño de la obra suspendida á pedir autorizacion para continuarla. El juez accederá á esta solicitud si de la suspension de la obra se siguieren grandes perjuicios, con tal que el que la hubiere formulado dé fianza suficiente á su juicio para responder de la demolicion y de la indemnizacion de los perjuicios que, de continuarse, puedan seguirse, si así se mandare por ejecutoria. La providencia que recayere sobre el incidente de que se habla anteriormente, es apelable en ambos efectos. Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la audiencia, citadas las partes.

¿Qué requisito debe cumplir el dueño de la obra que pida su continuacion?—Debe deducir al tiempo de pedirla la oportuna demanda para que se declare el derecho á continuarla.

Interdicto de obra vieja.

El interdicto de *obra vieja* puede tener dos objetos: 1.º, la adopcion de medidas urgentes para evitar los riesgos que el mal estado de cualquier construccion pueda ofrecer; 2.º, obtener su demolicion.

¿Quiénes pueden proponerlo?—Sólo podrán intentarlo: 1.º, los que tengan alguna propiedad contigua ó inmediata que pueda resentirse ó padecer por la ruina; 2.º, los que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones del edificio ó construccion que amenazare ruina. Se entiende por necesidad la que no puede dejar de satisfacerse sin quedar privado el denunciante del ejercicio de un derecho, ó sin que le siga conocido perjuicio en sus intereses, ó grave molestia á juicio del juez.

¿Qué efectos produce la interposición del interdicto para la adopción de medidas urgentes?—Presentada la demanda, el juez, previa inspección que hará por sí de la obra, acompañado de perito que nombrará al efecto, decretará las medidas oportunas para procurar provisional é interinamente la debida seguridad. A la ejecución de estas medidas serán compelidos el dueño, su administrador ó apoderado, el inquilino por cuenta de alquileres, y en defecto de todos éstos se ejecutará á costa del actor, reservándole su derecho para reclamar del dueño de la obra los gastos que se le ocasionen. Si de la inspección no resultare urgencia en la adopción de medidas, el juez puede denegarlas. Sus providencias, otorgándolas ó denegándolas, no son apelables.

¿Qué tramitación se dá al interdicto cuando tiene por objeto la demolición de algun edificio?—Deducida la demanda, el juez convocará á las partes á juicio verbal, al que podrán asistir sus respectivos defensores; oírás sus alegaciones y sus testigos, y examinará los documentos que presenten. De este juicio se extenderá la oportuna acta, que suscribirán los que á él hayan concurrido. Los documentos presentados se unirán á los autos.

Si por el resultado del juicio el juez lo creyere necesario, podrá practicar por sí mismo una inspección de la obra, acompañado de perito que nombre al efecto; los interesados concurrirán si quieren á esta diligencia, acompañados de sus defensores y peritos de su nombramiento. De ella se extenderá la oportuna acta, que suscribirán todos los que hayan concurrido.

¿Cuándo debe dictarse la sentencia?—Dentro de los tres dias siguientes al en que hubiere terminado el juicio verbal, ó la práctica de la diligencia de inspección si ésta hubiere tenido lugar. Cualquiera que sea su decision, es apelable en ámbos efectos; en el caso de ordenarse en ella la demolición, y de resultar del juicio y diligencia de inspección la urgencia de ella, deberá el juez, antes de remitir los autos á la audiencia, decretar y hacer que se ejecuten las medidas de precaucion que estime necesarias, en la forma que queda indicada al tratar del interdicto que tiene por objeto la adopción de ellas. Devueltos los autos por la audiencia, se llevará á efecto lo determinado en la ejecutoria.

Segunda instancia de los interdictos.

Las apelaciones de todos los interdictos se tramitan en una misma forma; razon por que la ley dedica á ellas una sección determinada.

Recibidos los autos en la audiencia, y personada alguna de las partes, se pasarán al relator para que forme el apuntamiento. Si no se personare el apelado, se entenderá la sustanciación de la instancia con los estrados del tribunal. Formado que sea el apuntamiento, se entregará con los autos á las partes por seis dias improrrogables, para instruccion. Al devolverlos cada una de ellas, expresará, bajo la firma de su letrado y procurador, su conformidad con el apuntamiento, ó lo que en él crea debe agregarse ó variarse. Habiendo conformidad con el apuntamiento, ó hechas las agregaciones ó variaciones que el tribunal estime procedentes de las que las partes exigieren, se mandará traerlos á la vista, con señalamiento de dias para ella.

Atendida la naturaleza de los interdictos y la urgencia que envuelve su necesaria decision, la vista en segunda instancia de estos juicios tendrá preferencia respecto á las apelaciones interpuestas en los juicios ordinarios, y se verificará por riguroso turno con las de las sentencias definitivas de los juicios ejecutivos, á que está declarada igual preferencia.

¿Cuándo debe recaer sentencia?—Dentro del término del tercero dia,

contando desde el en que tenga lugar la vista. Si fuere confirmatoria debe contener condena de costas al apelante. Los autos se devolverán inmediatamente al juzgado de que procedan, con certificación de la ejecutoria, de la tasación de costas, si hubiere habido condena, y sin ningún otro inserto, para la ejecución y cumplimiento de la sentencia.

¿Puede proponerse prueba en la segunda instancia de los interdictos?—Solo podrá hacerse á solicitud de parte la que, propuesta en primera instancia, no hubiere sido posible ejecutar en el juicio verbal, por la ausencia de algún testigo ú otra causa semejante, á cuyo fin se librará orden al juez para que la reciba en la forma establecida y en juicio verbal.

295

Embargos preventivos.

La doctrina que vamos á exponer es extensiva á los negocios mercantiles, por haber sido derogada la ley de procedimientos sobre los negocios y causas de comercio por el decreto-ley de unificación de fueros.

¿Qué es embargo preventivo?—La retención judicial de los bienes del deudor, hecha provisionalmente con el fin de asegurar la realización de un crédito. Tiene por objeto evitar la defraudación de los derechos del acreedor, que fácilmente pudiera conseguirse con la fuga del deudor y la ocultación de sus bienes, y debe limitarse á los necesarios para cubrir el crédito que se reclama. No puede acordarse contra las rentas y caudales del Estado.

¿Qué condiciones exige la ley de Enjuiciamiento civil para que proceda el embargo preventivo?—Para decretarlo es necesario: 1.º, que el que lo solicite presente un título ejecutivo; 2.º, que aquél contra quien se pida se halle en uno de los casos siguientes: que sea extranjero no naturalizado; que, aunque sea español ó extranjero naturalizado, no tenga domicilio ó bienes raíces ó un establecimiento agrícola, industrial ó mercantil en el lugar competente para la demanda; que, aun teniendo las circunstancias expresadas, se haya fugado de su domicilio ó establecimiento, no dejando persona al frente de él, ó que se oculte ó exista motivo racional para creer que ocultará ó malbaratará sus bienes en daño de los acreedores, sabiendo que se procederá contra él (1).

¿Quién es el juez competente para conocer de estos embargos?—En los pueblos cabezas de partido sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el embargo preventivo. En los demás pueblos podrán decretarlo los jueces municipales, precisamente con dictamen de asesor si no fueren letrados; pero, hecho el embargo, remitirán las diligencias al juez de primera instancia.

¿Los documentos privados legitiman en algún caso el embargo?—Si se presentare un título, que no fuere ejecutivo, sin el reconocimiento de la firma, podrá decretarse el embargo preventivo de cuenta y riesgo del que lo pidiere; en tal caso, si éste no tiene responsabilidad conocida exigirá el juez, para decretarlo, fianza bastante á responder de los perjuicios que puedan ocasionarse. Para obviar dificultades y ganar tiempo, suelen los procuradores de las partes aceptar por sí y á nombre de sus representados la referida responsabilidad.

¿Cómo y en qué forma deben hacerse los embargos preventivos?—El orden que se guardará para los embargos es el siguiente: 1.º, dinero metálico, si se encontrare; 2.º, alhajas de plata, oro ó pedrería, si las hubiere; 3.º, frutos y rentas de toda especie; 4.º, bienes semovientes; 5.º, bienes

(1) Artículo 23 del decreto-ley de unificación de fueros, de 6 de Diciembre de 1893.

muebles; 6.º, bienes raíces; 7.º, sueldos ó pensiones. Los bienes embargados se depositarán, y si fueren raíces se librará mandamiento por duplicado para que se tome razon en la contaduría de hipotecas en la forma prevenida para el juicio ejecutivo.

¿Por qué medio puede el deudor impedir la práctica del embargo?—No se llevará á efecto el embargo si en el acto de hacerlo la persona contra quien se ha decretado pagare, consignare ó diere fianza á responder de las sumas que se le reclamen. En este caso, los ejecutores del embargo suspenderán toda diligencia hasta que el juez de primera instancia, ó el municipal, con conocimiento de la fianza, determinen lo conveniente, si bien adoptarán entretanto, bajo su responsabilidad, las medidas oportunas para evitar la ocultacion de bienes y cualquier otro abuso que pudiera cometerse.

¿Cuándo cesan los efectos del embargo preventivo, y cuáles son las consecuencias de su cesacion?—Si el embargo no se ratificare en el correspondiente juicio, quedará nulo el derecho á los veinte dias de haberse verificado; y si para impedirlo se hubiere dado fianza, se cancelará ésta á instancia del que la presentará ó del demandado, sin audiencia ni instruccion alguna. Las costas causadas y las que ocasionare el alzamiento del embargo, así como el otorgamiento y cancelacion de la fianza, serán en este caso de cargo del actor.

¿Puede en algun caso acortarse el término de los veinte dias?—Si el dueño de bienes embargados lo exigiere, deberá el que haya obtenido el embargo presentar su demanda en el término preciso de ochos dias; si no lo hiciere, se alzará el embargo, condenándolo en las costas, daños y perjuicios.

DE LAS EJECUCIONES.

Juicio ejecutivo.

El lector recordará la definicion que hemos dado en su lugar oportuno (1) del juicio *ejecutivo*, que es necesario tener presente para comprender su naturaleza. Consiste ésta en que, á diferencia del *declarativo*, parte del supuesto cierto de que el título en que se funda la demanda contiene una verdad legal indiscutible, con toda la fuerza de las sentencias firmes, mientras que el *declarativo* provoca la discusion, y requiere una sentencia que decida y resuelva los derechos litigiosos que son objeto de la demanda. Por eso no procede su acumulacion á los juicios ordinarios.

¿Qué circunstancia es indispensable para que proceda el juicio *ejecutivo*?—Para que el juicio ejecutivo pueda tener lugar se necesita un título que tenga aparejada ejecucion.

¿Qué títulos son *ejecutivos* y tienen aparejada ejecucion?—Los siguientes: 1.º, escritura pública, con tal que sea primera copia, ó si es segunda esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citacion de la persona á quien deba perjudicar, ó de su causante; 2.º, cualquier documento privado que haya sido reconocido bajo juramento ante autoridad judicial; 3.º, la confesion hecha ante juez competente; 4.º, las letras de cambio sin necesidad de reconocimiento judicial respecto al aceptante que no hubiere

(1) Página 56.

puesto tacha de falsedad á su aceptacion, al tiempo de protestar la letra por falta de pago; 5.º, los cupones vencidos de obligaciones al portador emitidos por compañías y empresas, y las obligaciones de la misma clase, tambien vencidas, ó á las que haya cabido la suerte de amortizacion, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos con los libros salariales. Resultando conforme la confrontacion no será obstáculo á que se despache la ejecucion, la protesta de falsedad que en el acto hiciere el director ó persona que represente á la compañía, quien podrá alegar en forma esa protesta como una de las excepciones del juicio (1). Contra las rentas ó caudales del Estado no puede despacharse ejecucion (2).

¿Por qué medios puede prepararse la *ejecucion* cuando el demandante no tiene alguno de los expresados títulos?—Pidiendo confesion judicial al deudor. Tambien cuando el título no tuviere por sí solo fuerza ejecutiva, y se necesitare con igual objeto el reconocimiento de la firma por el mismo deudor, podrá pedirse y deberá ordenarse que declare bajo juramento indecisorio. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecucion, aunque se niegue la deuda. Si no se reconociere, como igualmente si se niega la deuda, en el caso de haberse exigido confesion judicial, el acreedor podrá usar de su derecho en juicio ordinario.

¿Qué debe hacerse cuando el deudor citado para reconocer su firma no comparece?—Se le citará segunda vez, bajo apercibimiento de declararlo confeso en la legitimidad de la misma, y si no compareciese, se decretará la ejecucion, siempre que hubiere precedido protesto ó requerimiento al pago, ante notario, ó se hubiere celebrado acto de conciliación sin haberse opuesto tacha de falsedad á la firma en que funda el acreedor la accion ejecutiva (3).

¿Qué recurso queda al acreedor contra el deudor que no comparece, á pesar de haber sido citado por segunda vez?—Pedir la tercera citacion, bajo apercibimiento de haberle por confeso si no mediare justa causa, y no compareciendo, pedir la declaracion de confeso, la cual se acordará por el juez y decretará la ejecucion (4).

¿Excluye ó evita la accion ejecutiva la manifestacion del deudor que dice no responder si es ó no suya la firma?—No. En tal caso será interrogado por el juez acerca de la certeza de la deuda, y si eludiese tambien responder categóricamente será amonestado de ser habido por confeso si no responde, declarándolo así si persistiere en su negativa (5).

¿Qué requisitos especiales debe contener la demanda *ejecutiva*?—Además de los que se exigen para la demanda ordinaria debe contener la *protesta de abonar pagos legítimos*, para no incurrir en el vicio de *pluspetition*, y ser formulada por cantidad líquida.

¿Qué efectos produce su presentacion?—El juez, examinando el título ejecutivo, despachará ó denegará la ejecucion, sin prestar audiencia nunca al demandado. Del auto en que se denegare la ejecucion puede pedirse reposicion dentro de tres dias, y apelarse dentro de los cinco siguientes si ésta fuere denegada. Esta apelacion procede libremente, y una vez admitida se remitirán los autos al tribunal superior, con citacion sólo del apelante. Se sustanciarán en los mismos términos que la de la sentencia definitiva de este juicio, ménos la entrega de autos al deudor, mediante no ser parte aún en ellos.

¿Qué diligencias deben preceder al embargo?—El requerimiento de pago, que debe hacerse al deudor con el mandamiento expedido al actor

(1) Ley de 12 de Diciembre de 1872.

(2) Ley de contabilidad de 1870.

(3) Art. 23 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868.

(4) Art. 23 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868.

(5) Art. 23 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868.

por el juez. Si el pago no se verifica en el acto del requerimiento, se procederá á embargar bienes suficientes á cubrir la cantidad por que se proceda y las costas, que se depositarán con arreglo á derecho. Aunque pague el deudor dentro de las veinticuatro horas posteriores al requerimiento, y aún en el acto de éste, serán de su cargo las causadas en el juicio.

El embargo debe practicarse en la forma expuesta al tratar de los preventivos. Si hubiere bienes dados en prenda ó hipotecados se podrá proceder contra ellos antes que contra ningunos otros, si el actor lo solicitare. De todo embargo de bienes raíces se tomará razon en el Registro de la propiedad del partido, librando al efecto el oportuno mandamiento por duplicado: uno de ellos, despues de diligenciado, se unirá á los autos, y el otro quedará en el Registro.

¿Qué bienes están exceptuados del embargo?—El lecho cotidiano del deudor, de su mujer é hijos, las ropas del preciso uso de los mismos y los instrumentos necesarios para el arte ú oficio á que el primero pueda estar dedicado. Ningunos otros están exentos del embargo.

¿Qué disposiciones adopta la ley respecto al embargo de sueldos y pensiones?—En los casos en que deba procederse contra los sueldos ó pensiones sólo se embargará la cuarta parte de ellos, si no llegaren á ocho mil reales en cada año; desde ocho mil á diez y ocho mil reales, la tercera; y de diez y ocho mil en adelante, la mitad.

¿Da cuántas maneras puede hacerse el requerimiento al pago del deudor?—Personalmente, por cédula y por edictos.

¿Qué derechos tiene el acreedor relativamente á los embargos?—1.º, puede concurrir á ellos y designar los bienes del deudor en que hayan de causarse, con sujecion al orden establecido; 2.º, pedir su mejora en el curso del juicio, la cual se decretará si hay duda acerca de la suficiencia de los embargados á cubrir principal y costas; 3.º, ampliar la ejecucion por el importe de algun nuevo plazo que venciere durante el juicio y antes de pronunciarse sentencia, á la que serán extensivos los procedimientos y la sentencia que recaiga.

¿Qué trámite sigue al embargo de bienes?—La citacion de remate al deudor, que se le hará en persona, ó por medio de cédula si no fuere habido, en la forma prevenida para el requerimiento. Despues de practicada la citacion de remate puede oponerse el deudor á la ejecucion, dentro de los tres dias siguientes á la misma, pasados los cuales sin hacerlo, y acusada una redeldia por el actor, mandará el juez traer los autos á la vista, y con citacion de éste sólo, pronunciará sentencia de remate.

¿Qué tramitacion se dá al expediente cuando el deudor formula oposicion?—Si se opusiere, se entregarán los autos á su procurador por término de cuatro dias, para que dentro de ellos precisamente alegue sus excepciones y proponga la prueba que estime conveniente. Pasados estos dias, sin necesidad de apremio, se recogerán los autos de poder del procurador, estrechándolo á que los entregue sin consideracion de ningun género. De la oposicion hecha por el ejecutado, se dará traslado al actor por cuatro dias, para que conteste y proponga prueba por su parte, pasados los cuales se recogerán los autos en los términos indicados al hablar del deudor. De la contestacion del actor se dará copia al demandado, entregada la cual se reciben los autos á prueba.

¿Qué excepciones pueden alegarse en oposicion á la demanda?—Las únicas admisibles en el juicio ejecutivo son: falsedad del título, prescripcion, fuerza ó miedo de lo que con arreglo á la ley hacen nulo el consentimiento, falta de personalidad en el ejecutante, pago ó compensacion de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva, quita, espera y pacto ó promesa de no pedir, novacion, transaccion ó compromiso. Ninguna otra excepcion podrá estorbar el pronunciamiento de la sentencia ó remate. Exceptuáanse las ejecuciones que procedan de letras de

cambio, en las que no se admitirán más excepciones que las de falsedad, pago, compensacion de crédito líquido ejecutivo, prescripcion ó caducidad de la letra, espera ó quita.

¿Cuál es el término de prueba, qué género de ésta debe practicarse durante él y en qué forma?—Entregada la copia de la contestacion del actor se recibirán los autos á prueba por diez dias, dictándose al efecto la oportuna providencia, que se notificará el mismo dia de su fecha. Durante estos diez dias se harán las pruebas propuestas por ambas partes, y podrán éstas proponer y ejecutar cualesquiera otras que estimen convenientes. Tanto unas como otras deberán acomodarse á las disposiciones establecidas para las pruebas en el juicio ordinario.

¿Puede suspenderse ó prorogarse el término de prueba?—Sólo de conformidad de ambos litigantes, ó cuando, por deber hacerse toda ó parte fuera del lugar del juicio, el juez lo creyere necesario, en cuyos casos lo acordará en auto motivado y bajo su responsabilidad, por los dias que tarde el correo desde el pueblo en que se siga el juicio al más distante en que hubiere de practicarse alguna diligencia, y nada más.

¿Existen en este juicio alegatos de *bien probado*?—No. Concluido el término de prueba y sus prórogas, á instancia de una de las partes se agregarán las pruebas á los autos y se entregarán éstos por término de tres dias á cada una, para instruccion; pasados, se recogerán en la forma que queda prevenida, señalándose en seguida dia para su vista. Si las partes ó una de ellas lo pidieren podrán asistir sus defensores á informar; si no lo pidieren podrá el juez, sin informes ni vista pública, pronunciar sentencias pasado un dia útil desde el que se hubiere notificado el auto de señalamiento.

¿Cuándo y en qué forma debe dictarse la sentencia?—Dentro de los tres dias siguientes al de la vista, y no podrá determinarse en ella sino una de estas tres cosas: 1.º, seguir la ejecucion adelante; 2.º, declarar su nulidad; 3.º, no haber lugar á pronunciar sentencia de remate. En el primer caso se impondrán las costas al ejecutado. En el segundo al juez ó funcionario que haya dado causa á la nulidad. En el tercero al actor ejecutante.

¿Cuál es la naturaleza de esta sentencia?—No tiene el carácter de definitiva, puesto que, cualquiera que sea su decision, queda á las partes su derecho á salvo para promover el juicio ordinario.

Es tambien apelable en ambos efectos, á no ser que el actor diere fianza bastante á responder de lo que, siguiendo el procedimiento de apremio yalzada á la vez, pueda percibir y condenársele á devolver, revocándose la sentencia. Esta fianza será calificada por el juez exclusivamente, y podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el derecho, con tal que fuere suficiente para el objeto con que se exige.

¿Qué trámites son consiguientes á la prestacion ó no prestacion de la fianza?—Si se apelare y no se presenta dentro de los seis dias siguientes al en que se interpusiere este recurso, se remitirán los autos al tribunal superior, con citacion de ambas partes. Si se diere se remitirán tambien los autos, pero quedando en el juzgado testimonio de lo necesario para la ejecucion de la sentencia.

¿Cómo se sustancia la apelacion de la sentencia en que se declare la nulidad de la ejecucion?—Para la admision y sustanciacion de este recurso se seguirán los mismos trámites que para la apelacion de la sentencia de remate, ménos los que se refieren á la fianza.

Procedimiento de apremio en asuntos civiles (1).

¿A qué se llama *procedimiento de apremio*?—Al conjunto de diligencias que tienen por fin el cumplimiento y ejecución de la sentencia de remate.

¿Cuándo comienza?—Consentida ésta, confirmada por la audiencia ó dada la fianza de que hemos hablado antes, en el caso de pedirse la ejecución de la sentencia cuando se haya apelado.

¿Cuál es el primer trámite del *procedimiento de apremio*?—La tasación de las costas causadas en el juicio; hecho lo cual, se procede al pago de lo principal é importe de aquéllas, si lo embargado fuere dinero, pensiones ó créditos realizables en el acto. Si fueren valores de comercio endosables ó títulos al portador, emitidos por el gobierno ó por las sociedades autorizadas para ello, se hará su venta por el corredor que el juez señale, uniéndose á los autos nota de la negociacion que presentará el corredor elegido, con certificación al pie de ella, dada por los síndicos del colegio, ó donde no lo hubiere, por los dos corredores más antiguos, en la que conste haberse hecho la negociacion al cambio corriente del día de la fecha. Respecto á los efectos que se coticen en la Bolsa la eleccion del juez deberá recaer en uno de sus agentes, y donde no lo hubiere, en un corredor de comercio. Cuando los bienes fueren de otra clase, se procederá á su justiprecio por peritos nombrados por las partes, y tercero en su caso para dimitir la discordia (2).

Justipreciados los bienes se pondrán á pública subasta por ocho días si fueren alhajas, frutos, semovientes ó muebles, y por veinte si raíces, fijándose edictos en los sitios públicos ó insertándose en los periódicos oficiales, si los hubiere, en el pueblo en que se siguiere el juicio. Igual insercion se hará en los periódicos del en que se hallaren situados los bienes embargados. En los edictos se señalarán el día, hora y sitio del remate.

¿A qué reglas deben sujetarse los remates?—A las siguientes:

1.^a En los remates no son admisibles posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo de los bienes.

2.^a No habiendo postores, quedará al arbitrio del actor pedir nueva subasta, previa retasa por los mismos peritos, ó por otros nuevos si alguna de las partes lo exigiere, ó su adjudicacion en las referidas dos terceras partes.

3.^a Si por falta de postor dejare de tener efecto el remate, se procederá á nueva subasta en la forma que queda establecida.

El mismo postor será responsable de la disminucion de precio del segundo remate y de las costas que se hubieren causado con este motivo.

4.^a Verificado el remate, lo aprobará el juez en el mismo acto y mandará, si fueren alhajas, frutos, bienes muebles ó semovientes, que se haga entrega de ellos al comprador, previa la consignacion de su precio. Si fueren raíces, dispondrá la entrega de los títulos de propiedad al comprador para su reconocimiento, por el término que á su juicio requieran su extension y volumen.

5.^a Pasado este término, y suplidos cualesquiera defectos que en los títulos se hubieren encontrado, mandará el juez que se otorgue la oportuna escritura á favor del comprador previa la consignacion del precio. Si el deudor no se prestare al otorgamiento, lo hará el mismo juez de oficio.

(1) Para los procedimientos de apremio en negocios mercantiles, se aplican las reglas que contienen los artículos del título adicional á la primera parte de la ley de Enjuiciamiento civil.

(2) Artículo 28 del decreto-ley de unificacion de fueros.

6.ª Otorgada la escritura y consignado el precio, pondrá el juez en posesion al comprador, entregando al actor en el mismo día las sumas consignadas, si fueren inferiores á las que hayan sido objeto de la ejecucion. Si excedieren, se mandará practicar liquidacion y, ejecutada que sea, se hará entrega al mismo actor de lo que resulte tener derecho á percibir. El resto quedará á disposicion del deudor, si no se hallare retenido á instancia de otro acreedor. La liquidacion debe comprender la totalidad de las costas causadas en defensa del actor. Las del deudor no tendrán en ningún caso prelación.

DE LAS TERCERÍAS.

¿Qué es *tercería*?—«La accion deducida en juicio por una tercera persona distinta del actor y del demandado.» Generalmente se entabla por consecuencia de los juicios ejecutivos, no siendo, sin embargo, incidentes propios solamente de este género de procedimientos. Al demandante en la *tercería* se llama *tercer coadyuvante* si su pretension tiene por objeto apoyar alguna de las partes litigantes. Si se propone hacer valer su derecho exclusivamente recibe el nombre de *opositor excluyente*, cuya exclusion puede fundarse en el dominio de los bienes embargados, ó en la preferencia de su crédito, lo cual da lugar á las dos clases de *tercerías* que reconoce la ley de Enjuiciamiento civil, llamadas de *dominio* y de *mejor derecho*.

¿Cómo han de sustanciarse y cuáles son sus efectos?—Ni unas ni otras suspenden el juicio ejecutivo, y deben sustanciarse en pieza separada y en juicio ordinario, con el ejecutante y el ejecutado. Si la *tercería* deducida fuere de *dominio*, consentida ó ejecutoriada que sea la sentencia de remate, se suspenderán los procedimientos de apremio hasta que se decida; si la *tercería* fuere de *mejor derecho*, seguirán los procedimientos de apremio hasta la realizacion de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que se decida quién tiene mejor derecho.

La deducción de cualquier *tercería* será bastante fundamento para que se amplien y mejoren los embargos, si el actor lo solicitare. Si se hubieren embargado ó embargaren bienes no comprendidos en la *tercería* de *dominio*, podrán continuar contra ellos los procedimientos ejecutivos y de apremio, no obstante la *tercería* interpuesta.

De los juicios civiles en rebeldía.

No sería justo que el litigante de buena fé viera paralizado el pleito por la falta de concurrencia á juicio de su colitigante rebelde. La ley, reconociendo esta injusticia, previene que, declarado un litigante en rebeldía, no se volverá á practicar ninguna diligencia en su busca. Todas las providencias que recaigan de allí en adelante en el pleito, y cuantas citaciones deban hacersele, se notificarán y ejecutarán en los estrados del juzgado ó tribunal.

¿En qué forma deben hacerse las notificaciones?—Las notificaciones y citaciones de que se habla anteriormente se harán leyendo las providencias que deban notificarse, ó en que se hayan mandado hacer las citaciones, en

la audiencia pública del juez ó tribunal que las haya dictado. Para hacerlo constar se extenderán en los autos las correspondientes diligencias, que autorizará el escribano y firmarán dos testigos. Las providencias que se notifiquen en estrados y las citaciones que se hagan en los mismos, se publicarán por edictos, que deberán fijarse en las puertas del local donde celebren sus audiencias los jueces ó tribunales, haciéndose constar esto también por diligencia.

¿Qué derecho dá al colitigante la rebeldía del litigante contrario?—El de poder retener los bienes muebles y embargar los inmuebles de éste en cuanto sean necesarios para estimar asegurado lo que sea objeto del juicio. La retención se hará en poder de la persona que tuviere á su disposición ó bajo su custodia los bienes en que haya de consistir, si ofreciere garantías suficientes al efecto. Si no las ofrece se le exigirá que las preste, y si no las dieren se constituirán los bienes en depósito, entendiéndose de cuenta y riesgo del dueño de ellos. Lo mismo se hará en el caso de hallarse en poder del litigante rebelde los bienes en que deba causarse la retención. El embargo se hará por medio de orden á la contaduría de hipotecas correspondiente, para que se tome razón de la hipoteca judicial que desde luego se constituye sobre los inmuebles en que se cause, y de la prohibición absoluta de venderlos, gravarlos ú obligarlos á que queden sujetos.

¿El litigante rebelde queda privado de tomar parte en el juicio?—No, cualquiera que sea el estado del pleito durante la primera instancia en que el litigante rebelde comparezca, será admitido como parte, y se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar. Si justificare cumplidamente que una fuerza mayor le impidiera comparecer en el juicio, se alzarán la retención y el embargo. En otro caso continuarán hasta el fin del litigio.

¿Con qué formalidades deben notificarse las sentencias en los juicios sentenciados en rebeldía?—Tanto las de primera como de segunda instancia, siempre que sean definitivas, deben publicarse en los *Diarios oficiales* del pueblo en que residiere el tribunal y en el *Boletín oficial* de la provincia, y aun cuando las circunstancias del caso lo exigieren, á juicio del juez, en la *Gaceta de Madrid*. Todo esto, sin perjuicio de hacerlas notorias por medio de edictos á las puertas del tribunal, y de notificarlas en sus estrados.

¿Puede el rebelde apersonado proponer prueba en el pleito en algún caso?—1.º, siempre que no haya pasado el término señalado para este período; 2.º, si, habiendo trascurrido el término de prueba en la primera instancia, encontrándose el pleito en la segunda, las cuestiones que se discutan son de hecho, aun cuando no concurren todas las circunstancias que la ley requiere para abrir la prueba en la segunda instancia (1).

¿Qué efectos tiene para el rebelde la sentencia ejecutoria pronunciada en su daño?—No impone al sentenciado un silencio absoluto. Decimos absoluto porque sus efectos varían según la forma en que se le haya emplazado.

Al litigante que haya sido citado ó emplazado en su persona, y por su no presentación en el juicio haya sido declarado en rebeldía, no puede oírse, ni admitirse ningún género de recurso contra la ejecutoria que haya puesto término al pleito. Exceptuase el caso en que el mismo litigante acreditare cumplidamente que desde la citación y emplazamiento, y durante todo el tiempo invertido en la sustanciación del pleito hasta la citación para sentencia en segunda instancia, si la hubiere habido, y sino hasta la misma citación en la primera, ha estado impedido por una fuerza mayor, y que no haya dejado de existir, de comparecer en el juicio, lo cual se ha

(1) Véase más adelante el capítulo de las *Apelaciones*.

de justificar dentro de seis meses, contados desde la publicacion de la ejecutoria en el *Boletín* de la provincia.

Al litigante que haya sido citado por cédula entregada á su mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos, se le prestará audiencia contra la ejecutoria dictada en su rebeldia, concurriendo las circunstancias siguientes: 1.^a, que la pida precisamente dentro de un año, contado desde la fecha de la publicacion de la ejecutoria en el *Boletín* de la provincia; 2.^a, que acredite cumplidamente que una causa, no imputable al mismo, ha impedido que la cédula de citacion ó emplazamiento le haya sido entregada.

Al litigante que haya sido citado ó emplazado en edictos, por no tener domicilio conocido, se le prestará audiencia contra la ejecutoria concurriendo las siguientes circunstancias, y no en otro caso: 1.^a que lo solicite dentro de un año, contado desde la fecha de la publicacion de la ejecutoria; 2.^a, que acredite haber estado durante todo el tiempo invertido en sustanciar el pleito, desde que se le hubiere citado ó emplazado, fuera del pueblo en que se le haya seguido; 3.^a, que acredite asimismo se hallaba ausente del pueblo de su última residencia, anterior á la citacion ó emplazamiento, en la fecha de la publicacion en el de los edictos para citarlo y emplazarlo.

La audiencia que ha dictado la ejecutoria á cuyo territorio corresponda el juzgado cuya sentencia haya quedado consentida, es quien debe declarar si procede ó no que se oiga al litigante condenado en rebeldia. Sin que proceda este juicio, el juzgado no tiene jurisdiccion para conocer del asunto.

Contra las providencias que dictaren las audiencias mandando oír al litigante rebelde, ó denegándolo, no se dá otro recurso que el de casacion. En los casos en que la ejecutoria haya sido dictada por el Tribunal Supremo de Justicia será éste quien deba declarar si procede la audiencia del litigante condenado en rebeldia. Si el Tribunal Supremo creyere procedente oírlo, prevendrá á la audiencia disponga se le oiga en la forma que queda antes determinada.

¿Qué tramitacion debe darse á la audiencia que se preste al litigante rebelde?—La ley señala en las reglas siguientes: 1.^a, se entregarán los autos por ocho dias al litigante que se haya mandado oír; 2.^a, de lo que expusiere se conferirá traslado por ocho dias al que haya obtenido la ejecutoria; 3.^a, si por los dos litigantes ó cualquiera de ellos se hubiere pedido el recibimiento á prueba, y la cuestion objeto del pleito versare sobre hechos, se accederá á él, otorgando para hacerla la mitad del término legal que corresponda, salvo el caso en que se pida y proceda el extraordinario; 4.^a, oídas á los autos las pruebas que se hayan ejecutado, se entregarán por ocho dias á cada una de las partes para que se instruyan de ellas; 5.^a, en adelante se acomodará la sustanciacion á las reglas establecidas para el juicio segun su clase.

¿Cuándo pueden ejecutarse las sentencias pronunciadas en rebeldia?—Pasado los términos que hemos señalado para dar audiencia á los rebeldes. Puede, no obstante, procederse desde luego á su ejecucion si los que las hayn obtenido la pidieren, prestando fianza bastante á responder de lo que se oigan si, oido el litigante rebelde, se le mandare devolver, la cual se cancelará luego que trascurren los términos referidos.

Del juicio arbitral.

Es tambien aplicable á los negocios mercantiles la ley de Enjuiciamiento civil, segun el art. 41 del decreto de unificacion de fueros.

¿Qué autos civiles pueden ser objeto del juicio arbitral?—Toda con-

testacion entre partes, antes ó despues de deducida en juicio, y cualquiera que sea el estado de éste, puede someterse á la decision de jueces árbitros. Exceptuáanse las cuestiones acerca del estado civil de las personas, y las en que deba intervenir el ministerio fiscal, con arreglo á las leyes.

¿Qué son árbitros?—Las personas elegidas por las partes para que decidan la cuestion pendiente. Llámaseles tambien *avenidores* y *compromisarios*.

¿Qué clases hay de árbitros?—Dos: árbitros de *hecho* y árbitros de *derecho*. Distinguese por la amplitud de sus facultades en cuanto al procedimiento. Los árbitros de *derecho* están obligados á guardar las fórmulas y trámites legales establecidos en la ley de Enjuiciamiento. Los de *hecho* no tienen este deber, fallando la contienda *ex equo et bono*, por la verdad sabida y la buena fé guardada. Llámaseles tambien *arbitradores* y *amigables componedores*.

¿Qué condiciones deben tener los jueces árbitros?—1.ª, aptitud legal para comparecer en juicio; 2.ª, la calidad de letrado; 3.ª, mayor edad; 4.ª, ejercicio pleno de los derechos civiles. No se invalidará el compromiso aunque en cualquiera de los nombrados faltare alguna de las circunstancias prescritas anteriormente; pero la parte que haya nombrado al que no las reuna será obligada á elegir en el término de tercero día á otro en quien concurren.

¿Cómo debe otorgarse el compromiso de los árbitros?—Ha de formalizarse en escritura pública, y será nulo en cualquiera otra forma que se contrajere. La escritura debe contener precisamente: 1.º, los nombres y domicilios de los que la otorguen; 2.º, los nombres y domicilios de los árbitros; 3.º, el negocio que se someta al fallo arbitral, con expresion de sus circunstancias; 4.º, la designacion de tercero para caso de discordia; no podrá conferirse por las partes la facultad de nombrarlo á ninguna otra persona; 5.º, el plazo en que los árbitros y el tercero en su caso han de pronunciar la sentencia; 6.º, la estipulacion de una multa, que deberá pagar la parte que deje de cumplir en los actos indispensables para la realizacion del compromiso; 7.º, la estipulacion de otra multa que el que se alzare del fallo deberá pagar al que se conformare con él, para poder ser oído; 8.º, la fecha en que se otorgare el compromiso. La escritura en que falte cualquiera de las circunstancias expresadas anteriormente será nula.

¿Qué efectos produce la aceptacion del cargo hecha por los nombrados?—La aceptacion de los árbitros da derecho á cada una de las partes para compelerlos á que cumplan con su compromiso, bajo la pena de responder de los daños y perjuicios.

¿Son recusables los jueces árbitros?—Sólo lo son por alguna de las causas en que puede fundarse la recusacion de los jueces, siempre ue haya sobrevenido despues del compromiso, ó que se ignorese al declararlo.

¿Cuándo cesa la fuerza del compromiso?—Cesa en sus efectos: 1.º, por la voluntad unánime de los que lo contrajeren; 2.º, por el trascurso del término señalado en él sin haberse pronunciado sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros, si por su culpa ha transcurrido inútilmente dicho término.

¿Qué sustanciacion deben dar á la *litis* los árbitros nombrados?—ceptado el arbitraje, los árbitros señalarán á los interesados un término, que no podrá exceder de la cuarta parte del fijado en la escritura, para que formulen sus pretensiones y presenten los documentos en que las apoyen respectivamente. De las pretensiones y documentos que se presenten se dará mutuamente conocimiento á las partes interesadas por un término que no podrá exceder de la cuarta parte del señalado para formularlas. El pleito puede recibirse á prueba por voluntad de las partes ó porqu así lo

hayán considerado conveniente los árbitros, aún cuando aquéllas no lo hubieren pedido, por un término que no podrá exceder de la cuarta parte del señalado en el compromiso, durante el que son admisibles los medios probatorios del juicio ordinario.

Concluido el término de prueba, los árbitros dictarán sentencia dentro del señalado en el compromiso que aún reste por correr; y si lo creen necesario, podrán oír á las partes ó á sus letrados antes de pronunciarla, y exigir á las partes declaración sobre hechos que no resulten probados; hacer venir á los autos cualesquiera documentos que consideren necesarios para su decision, y ordenar el juicio pericial ó practicar cualquier reconocimiento por sí mismos.

¿En qué forma debe dictarse la sentencia?—En los mismos términos y con iguales solemnidades que las que se han prevenido para las de los juicios ordinarios, debiendo ser conforme á derecho y á lo alegado y probado.

¿Qué debe hacerse cuando no hay conformidad en los árbitros?—Se notificarán á las partes los votos que hubieren dado, y se pasarán los autos al tercero, extendiéndose la oportuna diligencia en que se haga constar debidamente. Este podrá oír á las partes ó á sus defensores antes de pronunciar sentencia y decretar alguna de las diligencias que quedan expuestas anteriormente. El voto del tercero, en lo que conviniere con el de cualquiera de los árbitros, constituye sentencia. Los puntos en que no conviniere con ninguno de ellos se someterán al fallo del juez de primera instancia competente para que los decida, el cual constituye sentencia, sea ó no conforme con el de cualquiera de los árbitros.

¿Es apelable la sentencia arbitral?—Puede interponerse el recurso de apelacion dentro de cinco dias para ante la audiencia: 1.º, cuando alguno de los interesados se creyere agraviado por la sentencia; 2.º, cuando en el juicio se hubiere cometido alguna nulidad por falta de las solemnidades, ó por la inobservancia de los trámites que quedan establecidos. No será admitido el recurso de apelacion sin que el que lo interponga haya satisfecho la multa estipulada al que preste su conformidad á la sentencia. La sustanciación de las apelaciones se acomodará á las reglas establecidas para las segundas instancias en los juicios ordinarios.

¿Tiene lugar el recurso de casacion contra las sentencias dictadas por la audiencia?—Si; cuándo y en la forma que procede en los juicios ordinarios.

¿Qué son *amigables componedores*?—Las personas elegidas para dirimir, segun su leal saber y entender, y sin forma de juicio, las contiendas ó diferencias que medien entre dos ó más. Este compromiso requiere aptitud legal para obligarse.

¿Qué cuestiones pueden someterse á su decision?—Toda continuacion entre partes, cualquiera que sea su estado, á excepcion de las que no pueden ser objeto del juicio de árbitros, por determinacion expresa de la ley.

¿En qué forma debe otorgarse el compromiso?—Se ha de formalizar en escritura pública, bajo pena de nulidad si de otro modo se contrajere, la cual ha de contener: 1.º, los nombres y vecindad de los interesados; 2.º, los de los amigables componedores que nombren; 3.º, la debida expresion del negocio que se sujete á su fallo; 4.º, la designacion de tercero para el caso de discordia, la cual no podrá cenfiarse á ninguna otra persona; 5.º, el plazo que, tanto á los amigables componedores como al tercero en su caso, se señale para pronunciar su fallo, y 6.º, la fecha en que se otorgare. Faltando cualquiera de estas circunstancias en la escritura será nula, de ningún valor ni efecto.

¿Quiénes pueden ser nombrados amigables componedores?—El nombramiento no puede recaer más que en varones mayores de edad, que se ha-

llaren en el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y sepan leer y escribir.

¿Cuáles son sus facultades?—Se limitan á recibir los documentos que los interesados les presentaren, á oírlos, á dictar su sentencia por ante escribano precisamente. Si discordaren los amigos componedores, se reunirá con ellos el tercero, y la mayoría de votos formará sentencia. Si no hubiere mayoría, quedará sin efecto el compromiso.

¿Son recusables los amigables componedores?—Pueden serlo siempre que haya sobrevenido despues del compromiso alguna de las causas siguientes, ó existiendo antes se ignorara: 1.^a, tener interés en el asunto que sea objeto del juicio; 2.^a, enemistad manifiesta. Debe intentarse en la misma forma que la de los árbitros, siendo idénticos los efectos de su alegación.

De las apelaciones y alegaciones en derecho, en la jurisdiccion civil.

La tramitación de las apelaciones requiere siempre la comparecencia del apelante en el tribunal superior, sin la cual se declarará desierto el recurso. La no comparecencia del apelado no impide el curso de los autos, notificándose en los estrados del tribunal las providencias que se dictaren. Si ni el apelado ni el apelante comparecieren, en cualquier tiempo en que éste se presente continuará la sustanciación de la instancia.

¿Cuál es el primer trámite en la segunda instancia?—La formación del apuntamiento por el relator. Formado que sea el apuntamiento, se entregará con los autos por su orden á las partes para que se instruyan sus letrados, si la providencia apelada fuere interlocutoria, áun cuando sea de las que causan estado. Tanto el apelante como el apelado, al devolver los autos, manifestarán en escrito con firma de letrado su conformidad con el apuntamiento, ó las reformas ó adiciones que crean deben hacerse en él. En este escrito deberá tambien el apelado adherirse á la apelación en los extremos en que la sentencia pueda haberle sido perjudicial. Ni antes ni despues podrá usarse de este remedio. Devueltos que sean los autos por el apelado, se pasarán al ministro ponente por igual término que se haya otorgado á las partes. Al devolverlos deberá informar á la sala sobre las adiciones ó reformas del apuntamiento pedidas por las mismas partes.

¿Qué trámites siguen á la formación del apuntamiento?—El llamamiento de los autos á la vista. Si la providencia apelada fuere definitiva, se entregarán los autos al apelante, para expresar agravios de ella por un término que no podrá bajar de ocho días ni pasar de veinte, y señalará el tribunal con presencia del volumen de los autos. Del escrito de agravios se dará traslado al apelado por el mismo término concedido al apelante al hacerle la entrega de ellos. En este escrito deberá el apelado adherirse á la apelación en los extremos en que crea perjudicial la sentencia. Ni antes ni despues podrá usar de este remedio. En los escritos de expresión de agravios y de contestación, manifestarán las partes su conformidad con el apuntamiento del relator ó las reformas ó adiciones que á su juicio deban hacerse en él.

¿Cuándo pasan los autos al ministro ponente?—Despues de presentada la contestación del apelante. Devueltos que sean por éste y habiendo conformidad en el apuntamiento, ó hechas en él las reformas ó adiciones de las pedidas por las partes que la sala hubiere creído procedentes, se mandarán traer á la vista, citadas las mismas partes.

¿Cómo deben celebrarse las vistas?—Se verificarán hablando en primer

lugar el letrado defensor del apelante, enseguida el del apelado, y á ambos será permitido rectificar equivocaciones ó restablecer los hechos que hayan podido ser presentados con inexactitud.

¿Dentro de qué términos y en qué forma debe dictarse la sentencia?—En la misma y dentro de los señalados por la ley para el juicio ordinario.

¿Qué diligencias pueden preceder á la vista del pleito?—Antes de haberse notificado la providencia en que se manden traer los autos á la vista, pueden las partes exigir confesiones judiciales, con tal que sean sobre hechos que no hayan sido objeto de otras que se hayan exigido en la primera instancia. Tambien podrán traer los documentos de que juren no haber tenido hasta entónces conocimiento. Asimismo podrán pedir el recibimiento á prueba, para utilizar cualquiera de los medios de hacerla que quedan establecidos: 1.º, cuando por cualquiera causa, no imputable al que la solicite, no hubiere podido hacerse en la primera instancia; 2.º, cuando hubiere ocurrido algun hecho nuevo, conducente al pleito y posterior al último dia del término de prueba que haya corrido en la primera instancia, y 3.º, cuando se haya adquirido conocimiento de un hecho que se ignorara antes, y sobre el cual, por consiguiente, no hayan girado ni las alegaciones ni las pruebas. Para conceder el término de prueba se oirá siempre á la parte contraria, é informará á la sala el ministro ponente.

¿Qué es *alegacion en derecho*?—Un escrito ó memoria impresa que sustituye al informe oral. Requiere: 1.º, autorizacion de la audiencia cuando no hay conformidad en las partes para su impresion; 2.º, que el pleito sea ordinario; 3.º, que por su importancia y gravedad sea, á juicio de la audiencia, más conveniente informar á los jueces por escritos que oralmente. Hecha la impresion, se repartirán ejemplares á los ministros que deban fallar el pleito, firmados por el relator, letrado y procurador de las partes, y unirán otros á los autos.

Para que la sentencia que recaiga en el pleito pueda llevarse á efecto se devolverán los autos á costa del apelante, previa tasacion y regulacion de las costas, pasados los dias señalados para interponer el recurso de casacion, con certificacion de la sentencia.

Los incidentes que ocurriesen durante la segunda instancia se sustanciarán como los de la primera, siendo suplicables las decisiones que sobre ello recaigan para ante la misma sala, dentro de tercero dia.

De la ejecucion de las sentencias civiles.

Hemos visto ya lo que son las sentencias y los trámites por que es necesario pasar para obtenerlas. Ahora vamos á exponer, siguiendo la ley de Enjuiciamiento, el medio y forma de darlas cumplimiento, los cuales varian, como no podia ménos, segun que las sentencias sean dictadas por tribunales y jueces españoles ó por tribunales y jueces extranjeros.

¿Qué reglas establece la ley para cumplimentar las sentencias españolas?—Es necesario distinguir los casos en que contengan condena de *cantidad líquida ó ilíquida*, de *hacer ó no hacer* y de *entregar alguna cosa*.

Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad *líquida* y determinada, se procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de bienes, en la forma y por el orden prevenidos para el juicio ejecutivo (1). Hechos los embargos, se pasará al avalúo y venta de los bienes en que consistan, y al pago, en su caso, con

(1) Ley de 9 de Julio de 1877.

entera sujeción á las reglas establecidas para el procedimiento de apremio despues del juicio ejecutivo.

Si la sentencia condenare al pago de cantidad *ilíquida*, procedente de frutos, se obligará al deudor á que dentro de un término, que señalará el juez segun las circunstancias del caso, presente su liquidacion con arreglo á las bases que en la misma sentencia se hubieren fijado. Habiendo conformidad por parte del acreedor, para lo cual se le dará vista, se procederá á hacer efectiva la suma en que se haya convenido de la manera y en la forma antes indicadas. No habiendo conformidad, convocará el juez á las partes á juicio verbal, previéndoles que en él habrán de presentar las pruebas sobre los hechos en que no estuviere de acuerdo. Las pruebas que hayan de practicarse fuera del lugar de la residencia del juzgado, deberán estar concluidas antes del día señalado para el juicio verbal, en el cual el juez oirá á las partes ó á sus defensores, recibirá las que aduzcan en el acto, y dentro de los tres siguientes dictará sentencia, la cual es apelable en ambos efectos. Si el apelado pidiere su ejecucion, se decretará dando fianza bastante, á juicio del juez, para responder en todo tiempo de la diferencia que hubiere entre lo de que el apelante se reconozca deudor y lo que por la sentencia se haya determinado. En este caso se reservará testimonio de la sentencia para su cumplimiento. Si no se apelare, se procederá á hacer efectiva la suma consignada en la sentencia de la manera antes establecida.

Si la sentencia condenare al pago de una cantidad *ilíquida* procedente de perjuicios, el que la haya obtenido presentará relacion de ellos con la solicitud que deduzca para el cumplimiento de la ejecutoria, de la cual se dará vista al condenado, observándose lo dispuesto para el caso en que haya ó no conformidad en la liquidacion de la cantidad á que se condenare al litigante, en concepto de líquida.

Si una sentencia contuviere condena al pago de cantidad *líquida* y de otra *ilíquida*, podrá procederse á hacer efectiva la primera sin necesidad de esperar á que se liquide la segunda. No presentando el deudor la liquidacion dentro del término que se le señale al efecto, se le concederá otro que no exceda de la mitad del primero, bajo apercibimiento de que no presentándola antes de que trascurra, habrá de estar y pasar por la que presente el que haya obtenido la ejecutoria en todo lo que no probare ser inexacta. Trascurrido dicho término sin haber el deudor presentado su liquidacion se prevendrá á la otra parte que la formule y presente. De la liquidacion presentada por el acreedor se dará vista al deudor por un término que no exceda de seis días, poniéndola al efecto de manifiesto en la escribanía. Si prestare á ella su conformidad, ó no se opusiere dentro del término prefijado, la aprobará el juez y procederá á hacer efectiva en la forma establecida la suma de que resulte deudor. Si el deudor se opusiere, se tramitará la oposicion en la misma forma en que se sustancia la oposicion á la liquidacion procedente de frutos.

Si la sentencia contuviera condena de *hacer* ó de *no hacer*, ó de *entregar* alguna cosa, se procederá á darle cumplimiento empleando los medios necesarios al efecto. Si el condenado á hacer alguna cosa no cumpliera con lo que se le ordene para la ejecucion de la sentencia dentro del plazo que el juez al efecto le señale, se hará á su costa; y si, por ser personalísimo el hecho, no pudiese verificarse en esta forma, se entenderá que opta por el resarcimiento de perjuicios. Si se hubiere fijado la importancia de éstos en la sentencia para el caso de inejecucion, se procederá á lo que respecto al cumplimiento de la sentencia en que hay condenacion de cantidad líquida se previene anteriormente. Si no se hubiere determinado, se observará lo establecido para el caso en que hubiere condena de cantidad *ilíquida* procedente de perjuicios. Si el condenado á no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se entenderá que opta por el resarcimiento de

perjuicios, que se indemnizarán al vencedor en los términos señalados anteriormente.

¿Qué tramitación debe observarse cuando la sentencia de primera instancia apelada no contenga determinación de cantidades, cuya liquidación se pretende?—La contenida en las reglas siguientes: 1.º, remitidos los autos á la audiencia se entregarán para instrucción por seis días improrrogables á cada una de las partes; 2.º, devueltos que sean, se pasarán al relator por otros seis días, para que adicione el apuntamiento; 3.º, pasados dichos seis días se señalará el en que haya de verificarse la vista; 4.º, concluida la vista se pasarán los autos al ministro ponente por seis días; 5.º, dentro de los tres siguientes se dictará sentencia, contra la cual no se dará recurso alguno, y 6.º, los autos se devolverán inmediatamente al juzgado de que procedan, con certificación sólo de la sentencia que se haya dictado y de la tasación de las costas, si hubiere habido condena.

Las costas que se ocasionen en las diligencias para el cumplimiento de las ejecutorias serán de cargo del condenado por ellas.

¿Qué reglas se observan en la ejecución de las sentencias extranjeras?—Predomina el principio de la *reciprocidad* en la fuerza de las ejecutorias. Por esta razón las sentencias pronunciadas en países extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan los tratados respectivos. Si no hubiere tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere por las leyes á las ejecutorias dictadas en España. Si la ejecutoria procede de una nación en que por Jurisprudencia no se dé cumplimiento á las dictadas en los tribunales españoles no tendrá fuerza en España.

Si la nación donde proceda la sentencia no estuviera en ninguno de los casos anteriores tendrá fuerza en España, siempre que reúna las circunstancias siguientes: 1.ª, que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia del ejercicio de una acción personal; 2.ª, que no haya sido dictada en rebeldía; 3.ª, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España; 4.ª, que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en España.

¿A quién corresponde llevar á efecto el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros?—Al Tribunal Supremo de Justicia, quien, previa la traducción de la ejecutoria, hecha con arreglo á derecho, y después de oír á la parte contra quien se dirija y al fiscal, declarará si debe ó no dársele cumplimiento. Para la comparecencia de la parte á quien deba oírse, según se ha dicho anteriormente, se librará real provision, cometida á la audiencia, en cuyo territorio esté domiciliada. El término de la comparecencia será el de treinta días, pasados los cuales el tribunal proseguirá en el conocimiento aunque no haya comparecido el citado, dictando providencia, de la cual no habrá ulterior recurso.

Denegado el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria al que la haya presentado. Otorgándose, se comunicará esta providencia por real provision á la audiencia, para que ésta dé la orden correspondiente al juez de primera instancia del partido en que esté domiciliado el condenado en la sentencia, ó del en que deba ejecutarse, á fin de que tenga efecto lo en ella mandado.

Del recurso de casacion (1).

¿Cuál es recurso de casacion?—El remedio ó recurso extraordinario que resta al litigante, á quien perjudica una sentencia definitiva contraria á derecho ó doctrina legal, ó en cuyo pleito se han infringido esencialmente las reglas de sustanciacion, para obtener la subsanacion de la falta, ó anular la sentencia que contenga tales vicios. Dásele el nombre de recurso de casacion y su conocimiento pertenece exclusivamente al Tribunal Supremo.

¿Cuál es la naturaleza y objeto de estos recursos?—No ser una tercera instancia, sino un medio extraordinario que tiene por fin principal uniformar la Jurisprudencia, condenando las malas prácticas, vigilando la ejecucion de las leyes y sacando del olvido las que, apesar de estar vigentes, una equivocada ó perniciosa interpretacion tiene en inobservancia.

¿Quiénes pueden interponer los recursos de casacion?—Por regla general las partes que se crean lastimadas en sus derechos. Podrá el ministerio fiscal, en interés de la ley, interponerlo en cualquier tiempo por infraccion de ley ó de doctrina legal, en los pleitos en que no haya sido parte, en cuyo caso no serán citadas y emplazadas las que intervinieron en el litigio, contra cuya instancia se interponga el recurso. Los resultados de este recurso no afectarán á éstas, ni la ejecutoria se podrá alterar en lo más mínimo, sirviendo el fallo únicamente para formar jurisprudencia sobre las cuestiones legales que hubieren sido discutidas y resueltas en el pleito.

La ley de Enjuiciamiento civil ha sido modificada varias veces en la tramitacion del recurso de casacion, y últimamente lo fué por la provisional de 18 de Junio de 1870, publicada el 24 del mismo, y por la de 22 de Abril de 1878 vigente.

¿Qué sentencias se tienen como definitivas para los efectos de la casacion?—Las siguientes: 1.^a, las definitivas que terminen el juicio; 2.^a, las que, recayendo sobre un artículo, pongan término al pleito haciendo imposible su continuacion; 3.^a, las que declaren haber ó no lugar á oír á un litigante que haya sido condenado en rebeldia; 4.^a, las pronunciadas en los actos de jurisdiccion voluntaria, en los casos establecidos por la ley.

¿Qué motivos pueden originar la casacion?—Tres, en alguno de los cuales se fundará el recurso: 1.^o, ser la sentencia contra ley ó doctrina legal; 2.^o, haberse quebrantado algunas de las formas esenciales del juicio; 3.^o, haber los amigables componedores fallado puntos no sometidos á su decision ó fuera del plazo señalado en el compromiso.

Para su interposicion debe constituirse un depósito en dinero de 4,000 pesetas, que se limita á 500 en los recursos por quebrantamiento de forma.

¿Qué infracciones de forma se consideran esenciales del juicio para los efectos de la casacion?—Las siguientes: 1.^a, la falta de emplazamiento en primera ó segunda instancia de las personas que hayan debido ser citadas para el juicio; 2.^a, la falta de personalidad en algunas de las partes, ó en el procurador que la haya representado; 3.^a, la falta de citacion para sentencia definitiva en cualquiera de las instancias; 4.^a, la falta de recibimiento á prueba en algunas de las instancias, cuando ésta procediere con arreglo á derecho; 5.^a, la falta de citacion para alguna diligencia de prueba;

(1) Una nueva ley de casacion civil que lleva la fecha del 22 de Abril de 1878, acaba de promulgarse. Modifica el derecho establecido por la de Enjuiciamiento civil y la provisional de 18 de Junio de 1870, y constituye la legislacion vigente en la actualidad, cuyo texto pueden ver nuestros lectores en el apéndice á este tratado de procedimientos.

6.ª, la incompetencia de jurisdiccion cuando este punto no haya sido reuelto por el Tribunal Supremo; 7.ª, haber concurrido á dictar sentencia uno ó más jueces cuya recusacion, intentada en tiempo y forma fundada en causa legal, hubiere sido desestimada; 8.ª, haber sido dictada la sentencia por menor número de jueces del señalado por la ley.

¿En qué juicios ó contra qué sentencias no se da este recurso por infraccion de ley ó de doctrina legal?—Contra las que recaigan en los juicios de menor cuantía, en los posesorios, en los ejecutivos, ni en ninguno despues del cual pueda promoverse otro sobre el mismo objeto; pero si proceden los que se funden en el quebrantamiento de algunas de las formas del juicio calificadas antes de *esenciales*.

¿Qué requisito previo exige la admission de los recursos que se funden en el quebrantamiento de forma?—La peticion de que se subsane la falta en la instancia en que se cometió, reproduciéndola en la segunda cuando la infraccion ha tenido lugar en la primera.

¿Qué efectos produce la declaracion de *haber lugar al recurso*?—Los siguientes, segun el fundamento alegado y reconocido: 1.º, la casacion de la sentencia y el pronunciamiento de otra arreglada á la ley ó la doctrina legal infringida; 2.º, la casacion de la sentencia en lo que los amigables componedores hayan decidido fuera de los limites del compromiso; 3.º, la casacion de toda sentencia de éstos, cuando el recurso se fundare en haber sido dictado fuera del término convenido en el compromiso; 4.º, la-casacion de la sentencia y la devolucion de los autos al tribunal de que procedan, para que, reponiéndolos al estado que tenian al quebrantarse la forma del juicio, los continúe con arreglo á derecho, cuando el recurso se hubiere fundado en esa causa.

¿Qué clase de depósito debe constituir el que intenta el recurso de casacion?—El que intente interponer recurso de casacion depositará en el establecimiento destinado al efecto: 4.000 pesetas cuando no fueren conformes de toda conformidad las sentencias de la primera y segunda instancia en los recursos por infraccion de ley ó de doctrina legal, y en los que se interpongan contra las sentencias de los amigables componedores; 500 pesetas cuando el recurso se interponga por quebrantamiento de forma.

Casacion por infraccion de ley ó doctrina legal y contra las sentencias de amigables componedores (1).

¿Cómo se interponen estos recursos y dentro de qué término?—Por medio del testimonio de las sentencias, que debe pedirse dentro de los diez dias siguientes al de la última notificacion de aquélla, término fatal cuyo trascurso convierte en *firme* la sentencia. Con este testimonio se interpone el recurso en el Tribunal Supremo en el término de cuarenta dias, contados desde la fecha de su entrega, término tambien fatal, presentando el escrito correspondiente y el documento que acredite la constitucion del depósito. Cuando el que solicitare testimonio litigare por pobre, la audiencia remitirá al Tribunal Supremo el testimonio solicitado en su caso, ó la copia certificada de la providencia denegatoria, y mandados entregar hasta á tres abogados, si los primeros no encontraren defendible el recurso, pasarán al ministerio fiscal, que lo interpondrá ó devolverá los testimonios con la palabra *visto*. Si la audiencia denegare la entrega del testimonio, puede recurrirse al Supremo *en queja*.

¿Qué circunstancias debe contener el recurso de interposicion?—La cita

(1) Véase la nota anterior y el apéndice.

de la ley ó doctrina legal que la sentencia hubiere infringido, y cuando fueren necesarios, que se reclamen documentos de los autos, siempre que sean de fecha anterior á la demanda, ó que sobre su inteligencia no haya habido acuerdo entre las partes, ó que de ella pueda depender la admision ó decision del recurso.

¿En qué término debe interponerse este recurso?—En el de treinta dias respecto á los fallos pronunciados en la Península é islas Baleares, y de cincuenta para los de las Canarias.

Casacion por quebrantamiento de forma (1).

¿En dónde, dentro de qué término y cómo se interpone este recurso?—En la audiencia que hubiere dictado la sentencia, necesariamente dentro de los diez dias siguientes al de su última notificacion, por medio de escrito que expresará: 1.º, la fecha de la última notificacion y de la sentencia; 2.º, la de la presentacion del recurso; 3.º, el quebrantamiento de forma en que se funde; 4.º, las reclamaciones que se hubiesen hecho para obtener su subsanacion, ó si la falta se ha cometido en la última instancia, y cuando ya no era posible solicitar su enmienda. A este escrito acompañará el documento que acredite haberse hecho el depósito, á no estar declarado pobre el que lo interponga.

¿Qué circunstancias deben tenerse presentes para su admision?—La sala debe examinar si concurren las siguientes: 1.º, si se ha interpuesto en el término señalado; 2.º, si se funda en el quebrantamiento de alguna de las formas del juicio, consideradas como solemnes; 3.º, si se pidió su subsanacion ó si fue imposible pedirla. Concurriendo todas las circunstancias anteriores, la audiencia admitirá el recurso y remitirá los autos con certificacion de los votos reservados al Tribunal Supremo, citando y emplazando á las partes. No concurriendo dichas circunstancias denegará la admision, de cuya providencia puede recurrirse *en queja* á dicho Supremo Tribunal.

Casacion por infraccion de la ley y quebrantamiento de forma (2).

La casacion puede tambien fundarse en las dos indicadas causas, debiendo interponerse los recursos en un solo escrito, ante la audiencia, dentro de los diez dias siguientes al de la última notificacion, expresando con claridad y separacion los fundamentos de cada recurso. La audiencia se limitará á resolver sobre el de quebrantamiento de forma, compitiendo al Tribunal Supremo decidir sobre la admision del otro.

¿Deben tramitarse simultánea ó separadamente ambos recursos?—Separadamente, porque la simultaneidad sería incompatible. Sustanciado por los trámites expuestos el recurso por quebrantamiento de forma, si el Supremo declara haber lugar á él, ó se hubiese interpuesto fuera del término, el que se hubiere fundado en infraccion de ley ó de doctrina legal se le considerará como no interpuesto. Si declara no haber lugar al recurso, el que lo hubiere interpuesto hará el depósito correspondiente, justificando su constitucion en el término de seis dias, á no ser pobre, y se

(1) Véase la penúltima nota y el apéndice.

(2) Idem.

sustanciará el recurso por sus trámites especiales. Si no acreditare la constitucion de este depósito con el documento correspondiente en el término de seis dias, siguientes al de la notificacion de la sentencia denegatoria del recurso por quebrantamiento de forma, se tendrá al recurrente por desistido del interpuesto por infraccion de ley ó de doctrina legal.

¿Quién debe pagar las costas impuestas al ministerio fiscal?—Las causadas á la parte contraria deberán reintegrarse de los fondos retenidos, procedentes de la mitad de los depósitos análogos, cuya pérdida haya sido declarada. Lo mismo se hará cuando el fiscal se separase del recurso que hubiere interpuesto.

Interposicion de los recursos de casacion contra las sentencias de las audiencias de Ultramar.

Los recursos contra dichas sentencias que deben interponerse ante las referidas audiencias se rigen por la Real cédula de 30 de Enero de 1855 y demás disposiciones vigentes, no obstante que por Real decreto de 9 de Diciembre de 1865 se ha dispuesto la promulgacion de la ley de Enjuiciamiento civil en las islas de Cuba y Puerto-Rico, que comenzó á regir el 1.º de Julio de 1866, dictándose para su aplicacion una instruccion en la misma fecha del indicado decreto. No podemos ocuparnos de la tramitacion y condiciones de estos recursos.

Sustanciacion de los recursos admitidos (1).

Todos los recursos de casacion, sean de la Península ó de Ultramar, se pasarán al relator para formar el apuntamiento, con el cual se mandarán entregar los autos á las partes por término de diez dias, para instruccion, quienes los devolverán, manifestando su defensor si están conformes con aquél, ó las omisiones ó inexactitudes que contenga, las cuales se rectificarán, mandando traer los autos á la vista con citacion de las partes. Ni antes de la vista, ni en el acto de verificarse, ni despues, puede admitirse en el Tribunal Supremo ningun documento que las partes presentaren. El tribunal dictará sentencia dentro de diez dias, contados desde la conclusion de la vista, estableciendo los hechos y las cuestiones de derecho á que haya dado lugar el recurso, en la fórmula de «resultandos» y «considerandos», declarando haber lugar á él, casando y anulando la ejecutoria, y mandando devolver el depósito, si se hubiere constituido, y órden á la audiencia de que proceda para que remita los autos si estima que la ejecutoria es contraria á ley ó doctrina legal.

Si el recurso se hubiere fundado en quebrantamiento de forma, el tribunal mandará, en la misma sentencia en que anule la ejecutoria, devolver los autos á la audiencia de que procedan para que, reponiéndolos al estado que tenian cuando se cometió la falta, lo sustancie ó determine, ó haga sustanciar ó determinar con arreglo á derecho, y decretará igualmente la devolucion del depósito.

Cuando no hay lugar á ninguno de los dos recursos, condenará en costas al recurrente y en la pérdida del depósito, cuya mitad se entregará á la parte recurrida en concepto de indemnizacion de perjuicios, conservándose la otra mitad para atender á las costas impuestas al ministerio fiscal.

(1) Véanse las notas anteriores y el apéndice.

Las sentencias en que se declare haber ó no lugar á los recursos de casacion, se publicarán en la *Gaceta de Madrid* é insertarán en la *Coleccion legislativa*. Si por las circunstancias especialísimas de alguna de las partes el tribunal estimare que la publicacion de la sentencia ofende á la decencia, podrá ordenar que no se verifique; ó la publicará con supresion de nombres propios, lugares y circunstancias.

¿Cuándo puede declararse desierto el recurso interpuesto?—Siempre que las partes dejaren de promover su sustanciacion en el término de un año, á contar desde la notificacion de su última providencia.

JURISDICCION VOLUNTARIA.

Actos que comprende esta jurisdiccion.

¿Qué es *jurisdiccion voluntaria*?—La facultad de juzgar sin preceder verdadero juicio. Es lo contrario á la *jurisdiccion contenciosa*. Definida así, fácilmente se comprende qué actos son los que están bajo su dominio, ó lo que es lo mismo, cuáles son los *actos de voluntaria jurisdiccion*.

La ley nos dice que se consideran tales todos aquéllos en que sea necesaria ó se solicite la intervencion del juez, sin estar empeñada ni promoverse cuestion alguna entre partes conocidas y determinadas. Son, pues, las providencias que dictan los jueces, á petición de parte, ya para dar garantías á un hecho, ya para revestirle de fórmulas más solemnes, ya para dar fuerza y valor legal á lo que no la tendría sin la intervencion del juez. La base capital en que descansa la naturaleza de estos actos es, como se vé, la ausencia de toda cuestion, contienda ú oposicion por parte de otras personas.

¿Qué tramitacion se da á estos expedientes?—La ley ha dividido los *actos de jurisdiccion voluntaria* en dos clases: unos que no tienen tramitacion especial, y otros que la tienen propia y exclusivamente determinada, no siendo aplicables á todos, en general, las mismas reglas de ritualidad.

¿A cuáles debe sujetarse la sustanciacion de los *actos* de que no hace mencion especial la ley?—A las siguientes:

1.^a Todas las actuaciones relativas á ellos se practicarán en los juzgados de primera instancia y ante escribano, consignándose en el papel sellado correspondiente.

2.^a Son hábiles para ellas todos los días y horas sin excepcion.

3.^a Si en algun caso procediese la audiencia de alguien, se prestará ú otorgará, poniendo de manifesto el expediente en la escribanía para que se instruya el que haya de evacuarla.

4.^a En los casos en que la audiencia proceda podrá oirse tambien, en la forma prevenida en la regla anterior, al que haya promovido el expediente.

5.^a Se oirá precisamente al promotor fiscal: 1.^o, cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos; 2.^o, cuando se refiera á persona ó cosa cuya proteccion ó defensa competan á las autoridades constituidas.

6.^a Se admitirán cualesquiera documentos que se presentaren, é igual-

mente las justificaciones que se ofrecieren, sin necesidad de citacion ni de ninguna otra solemnidad.

7.^a Si á la solicitud promovida se hiciere oposicion por alguno que tenga personalidad para formularla, se hará contencioso el expediente y sujetará á los trámites establecidos para el juicio que corresponda.

8.^a Si la oposicion se hiciere por quien no tenga personalidad para ello, podrá el juez, desestimándola, dictar providencia sobre la solicitud que se hubiere instruido al promover el expediente.

9.^a El juez podrá variar ó modificar las providencias que dictare sin sujecion estricta á los términos y formas establecidas respecto á las que deban su origen á la jurisdiccion contenciosa.

10.^a De las providencias que se dictaren se admitirán para ante la audiencia del territorio las apelaciones que se interpongan.

11.^a Las apelaciones se admitirán siempre libremente y en ambos efectos al que hubiere promovido el expediente.

12.^a Las que interpusieren los que hayan venido al mismo expediente, ó llamados por el juez, ó para oponerse á la solicitud que haya dado motivo á su formacion, serán admitidas en un sólo efecto.

13.^a La sustanciacion de todas las apelaciones se acomodará á los trámites establecidos para las que se interpongan y admitan de sentencias interlocutorias.

14.^a Contra las sentencias que dictaren las audiencias se da el recurso de casacion.

Estas reglas son aplicables á los juicios de prorateo de pensiones forales, que se practican en Galicia y Astúrias (1).

¿De qué actos de jurisdiccion voluntaria se ocupa la ley y señala especialmente su tramitacion?—1.^o, de los alimentos provisionales; 2.^o, del nombramiento de guardadores y de curador para pleitos, y del discernimiento de sus cargos; 3.^o, del depósito de personas; 4.^o, del deslinde y amojonamiento; 5.^o, de las informaciones para dispensa de ley; 6.^o, de la habilitacion para comparecer en juicio; 7.^o, de las informaciones para perpétua memoria; 8.^o, del consentimiento para contraer matrimonio los menores; 9.^o, de las subastas voluntarias; 10, de la elevacion á escritura pública del testamento hecho de palabra; 11, de la apertura de los testamentos cerrados; 12, de la venta y transaccion de los bienes de menores é incapacitados.

Bien quisiéramos ocuparnos especialmente de todos los actos anteriormente expuestos, mas no lo consienten las causas que tantas veces hemos indicado nos coartaban la voluntad. En efecto, la índole de este MANUAL, las proporciones que va tomando el conjunto y el tener que ocuparnos del procedimiento criminal, nos obligan á remitir al lector á la segunda parte de la ley de Enjuiciamiento civil, en donde adquirirá todos los datos necesarios para estudiar la naturaleza y tramitacion de cada uno de los expedientes á que dan margen dichos actos.

Debemos advertir aquí únicamente que las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil relativas al depósito de mujer soltera que trate de contraer matrimonio contra la voluntad de sus padres ó curadores, y las referentes al consentimiento para contraerle los menores, están derogadas por la ley de disenso paterno publicada en 20 de Junio de 1862, de cuyas disposiciones nos hemos ocupado en la seccion de *Derecho civil*.

(1) Real decreto de 18 de Abril de 1857.

DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA CRIMINAL.

La parte más defectuosa, quizás, de nuestras leyes adjetivas, era la ritualidad del juicio criminal, apesar de ventilarse en él los intereses más sagrados y apreciables del ciudadano, como son la vida, la honra y la libertad. Desde las Partidas hasta la ley provisional para la aplicación del Código penal de 1850, diferentes disposiciones venían rigiendo la materia, incoherentemente y sin ceder á un plan fijo, resultando de aquí la intrusión de prácticas viciosas, incompatibles con el actual estado social y los adelantos de la ciencia, cuya deplorable situación legal, reconocida ya en 1822 por el legislador, no ha venido á ser remediada radicalmente, como era menester, hasta la publicación de la ley de Enjuiciamiento criminal en 22 de Diciembre de 1872. Tiempo era ya de que tuviésemos un solo Código de procedimientos en donde, cualquiera que sea el grado de su bondad y el juicio que merezca, se encuentre todo lo vigente en la materia, desechado lo antiguo insostenible, conservado lo útil y sancionadas las mejoras é instituciones modernas que, como sucede con el jurado y el juicio oral, han sido ensayadas entre nosotros por algun tiempo, hasta que el decreto de 3 de Enero de 1875 acordó la suspensión de todos los capítulos de aquella ley referentes á dicho tribunal y juicio, cuya suspensión continúa en vigor. La referida ley se divide en tres libros, á que precede un título preliminar en el cual se consignan preceptos y reglas de carácter general. Comprende el primero todo lo relativo al *sumario*; el segundo todo lo referente al *juicio oral*, y el tercero el procedimiento para las *faltas*.

La jurisdicción criminal corresponde, por regla general, á los tribunales del fuero común; y sólo cuando el derecho determina con toda claridad que algunos de los privilegiados deben ejercerla, se convierten estos casos en excepción del principio general.

La ritualidad de los procedimientos observada por los tribunales privilegiados es también, por punto general, la misma que los ordinarios emplean en la averiguación y castigo de los delitos. De aquí resulta que todo lo que digamos acerca de éstos es aplicable á aquéllos, en cuanto no esté expresamente modificado por el procedimiento especial que les prescribe la ley. Y decimos por punto general, y no absolutamente, porque hay algunos

asuntos y algunos tribunales, como, por ejemplo, los eclesiásticos, los militares y los administrativos, que tienen su ritualidad especial.

¿Qué es juicio criminal?—La controversia sostenida por la accion fiscal, ó la particular, y en algunos casos por ambas, para perseguir y castigar los delitos y faltas con arreglo al derecho penal vigente. El demandante ó actor recibe en ellos el nombre de *acusador, público ó privado*, segun que sea el ministerio fiscal ó el particular. Al demandado llámasele *procesado* desde que se le declara tal, hasta la sentencia ejecutoria; *acusado* desde el escrito de acusacion, y *reo* despues de ser condenado. Tambien se usa indistintamente en la práctica de estos nombres, aunque impropia é injustamente.

¿Cómo se divide el juicio criminal?—En *ordinario y especial*. Es *ordinario* el que tiene por objeto el castigo de un delito comun, cuyo procedimiento recibe toda la amplitud necesaria y sirve de norma para los demás juicios. Es *especial* el que tiene por fin el castigo de determinados delitos que, por razon de su naturaleza ó de la persona de los delincuentes, tienen tramitacion determinada, distinta, en todo ó en parte, de la del ordinario.

TITULO PRELIMINAR.

De las acciones que nacen de los delitos y faltas.—Personas que pueden ejercitarlas.

¿Qué acciones nacen de todo delito ó falta?—Nace siempre una *penal* para el castigo del culpable, y puede nacer otra *civil* para la restitution de la cosa, la reparacion del daño y la indemnizacion de perjuicios.

¿Quiénes pueden ejercitar la *accion penal*?—Todos los españoles no exceptuados por la ley, por ser aquella *pública*. Se exceptúan: el que no goce de la plenitud de los derechos civiles; el condenado dos veces en sentencia firme como reo de denuncia ó querella calumniosa, y el juez ó magistrado. Unos y otros podrán, sin embargo, ejercitar la accion penal por delito ó falta cometidos contra sus personas ó bienes, ó las personas ó bienes de sus cónyuges, ascendientes ó descendientes. El segundo y los terceros podrán ejercitarla por el delito ó falta cometidos contra las personas ó bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí: 1.º, los cónyuges, á no ser por delito ó falta cometidos por el uno contra la persona del otro ó las de sus hijos, y por adulterio, por el segundo matrimonio, siendo válido el primero, ó por la celebracion de otro ilegal; 2.º, los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos ó afines, á no ser por delito ó falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.

Las acciones penales que nacen de los delitos de *estupro, calumnia é injuria*, tampoco podrán ser ejercitadas más que por las personas á quienes correspondiere, segun el Código penal. (Véase la seccion de Derecho penal, pág. 103.)

¿Qué acciones penales están limitadas á ciertas personas?—Sólo los ofendidos podrán perseguir las faltas de imprenta en que se les injurie, ó cuan-

do se niegue el director de un periódico á insertar la contestacion; la mujer podrá denunciar la *falta* de malos tratamientos de su marido; éste, la desobediencia de aquélla; los padres, la de sus hijos; los tutores, la de sus pupilos, y el injuriado la de injuria.

¿A quién corresponde el ejercicio de las acciones penales no exceptuadas?—Al ministerio fiscal, haya ó no acusador particular. Sostendrá tambien las precedentes de los delitos de violacion y rapto ejecutado con miras deshonestas, cuando hayan sido denunciados por persona competente, ó cuando la agraviada careciese de personalidad, fuere desvalida y no tuviere ascendientes, hermanos ó guardador que denuncien.

¿La renuncia de la parte ofendida extingue la accion penal?—Por regla general, no; pero se extinguen por esta causa las nacidas de delito ó falta, perseguibles á instancia de parte, como son las de injuria, la de estupro, etc. Las acciones civiles se extinguen en todo caso por la renuncia del perjudicado.

¿Deben ejercitarse siempre unidas la accion penal y la civil?—No; ejercitada sólo la accion penal, se entenderá utilizada tambien la civil. Si se ejercitase sólo la civil, no se entenderá utilizada con ella la penal, la cual se considerará extinguida si fuere renunciable. Estando pendiente la primera, no podrá ejercitarse separadamente la segunda hasta que aquélla haya sido resuelta por sentencia firme; pero el interesado podrá ejercitarla en la causa hasta el trámite de calificacion del delito inclusive, si antes no la hubiere renunciado. Pendiente la accion civil, podrá ejercitarse separadamente la penal; mas en este caso se suspenderá el curso de aquélla hasta que la penal sea resuelta por sentencia firme; por consiguiente, en ningun caso será necesario para el ejercicio de ésta que haya precedido el de la civil procedente del mismo delito ó falta.

Extinguida una de dichas acciones ¿se entiende caducada la otra?—No, á no ser que la extincion de la penal procediese de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer. Por eso la sentencia firme absolutoria en el pleito civil no impide la accion penal, y las pruebas de aquél se apreciarán segun corresponda, si se dicen nuevamente en el juicio criminal.

¿Puede ejercitar el Ministerio fiscal la accion civil en toda clase de delitos?—La resolucion de este punto fué objeto de diversas opiniones. Atendido el texto del art. 44 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que dice que dicha accion no podrá ejercitarse sino por los fiscales por daño causado al Estado, y teniendo en cuenta los principios que presidieron en los autores de la ley, cuya tendencia era contraria á la superabundante y escesiva tutela del Estado sobre el interés individual, la pregunta se contestaba *negativamente*, y sólo se creia legal el ejercicio de la accion civil por dicho Ministerio, cuando el hecho afectaba al interés del Estado. Pero el Tribunal Supremo, sancionando la opinion de la mayor parte de las audiencias, que repugnaban una solucion tan opuesta á lo antiguo, declaró en sentencia de 20 de Junio de 1874, que los tribunales podian declarar, *de oficio*, la indemnizacion civil. Puede, pues, contestarse afirmativamente la pregunta.

De la defensa y de la pobreza. *L 41*

El derecho de defensa es el más respetable de los que corresponden á los procesados, y como tiene que sujetarse en su ejercicio á la ritualidad y á las leyes sustantivas, pueden aquéllos exigir que les represente un procurador y les defienda un letrado, que se les nombrará de oficio si no lo eligen por si mismos. Igual derecho tienen el querellante y actor civil, entendiéndose que aquéllos y éstos, no estando declarados pobres, de-

ben satisfacer los gastos de sus respectivas defensas, los honorarios de los peritos que informen á su instancia y las informaciones reclamadas de los testigos.

Las demás costas procesales necesitan expresa condenacion.

A fin de evitar repeticiones y reservar espacio para otras materias, nos limitaremos á decir, respecto al beneficio de pobreza, que debe otorgarse á las mismas personas, por regla general, que reúnen ó están en las condiciones que exige la ley de Enjuiciamiento civil para ser declaradas legalmente pobres.

Notificaciones, citaciones y emplazamientos.

¿Por quiénes deben hacerse estas tres clases de diligencias?—Por un alguacil, ó por un oficial de sala cuando se practiquen fuera de los estrados del tribunal.

¿En qué consiste la notificacion y cómo debe practicarse?—En la entrega de la copia de la cédula que luego se dirá, á la persona que deba ser notificada. El secretario extenderá una cédula que contenga el objeto de los autos y los nombres de las partes, la copia de la resolucion, las personas que han de ser notificadas, la fecha en que se expida y la firma del secretario, anotando en los autos la expedicion de la cédula y el nombre del subalterno encargado de su cumplimiento. Este autorizará tantas copias cuantas fueren las personas á quienes deba notificar, y hará constar su entrega en la cédula original, por diligencia expresiva del día y la hora, que firmará con la persona notificada, y si ésta no supiere lo hará otra á su ruego, y si aquélla no quisiere lo harán dos testigos buscados al efecto.

Cuando á la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitacion el que hubiere de ser notificado, se entregará la cédula al pariente, familiar ó criado, mayor de catorce años, que se hallaren en aquélla, y en defecto de éstos á uno de los vecinos más próximos.

La falta de entrega de la cédula por las personas indicadas se castiga con la multa de 5 á 50 pesetas. Cuando, no obstante lo dicho, no pueda practicarse la notificacion, se hará constar así en la cédula original.

¿En qué consisten las citaciones y emplazamientos y con qué requisitos deben practicarse?—En la entrega de las respectivas cédulas, que tienen por objeto citar ó emplazar á determinadas personas; y se practican del mismo modo y con las mismas formalidades de las notificaciones, debiendo contener las cédulas algunos extremos más que aquéllas, por razon de su objeto; por ejemplo, el lugar, día y hora de la citacion, el apercibimiento en caso de no concurrir, el término y lugar en que ha de concurrir el emplazado y la prevencion procedente para el caso de no comparecencia. Si el citado no comparece, el funcionario que le haya citado se constituirá en el domicilio en donde haya entregado la copia, y consignará en la cédula original la causa de la no comparecencia. No siendo legitima, puede el tribunal imponer al citado una multa de 5 á 50 pesetas por el primer llamamiento, y procesarle por desobediencia si ya fuese el segundo.

¿Cómo se practican las notificaciones ó emplazamiento en territorio de otra autoridad judicial española ó en el extranjero?—Por medio de suplicatorio, exhorto ó mandamiento, segun corresponda, insertando en ellos los requisitos que hubiere de contener la cédula.

Si hubieren de practicarse en el extranjero, se observarán para ello los trámites prescritos en los tratados, si los hubiese, y en su defecto se estará al principio de reciprocidad.

¿Qué debe hacerse cuando la persona no tuviere domicilio conocido?—Debe acordarse su busca por la policia judicial, y si no fuere habido, inser-

tarse la cédula en el *Boletín oficial* de la provincia de su última residencia, y en la *Gaceta de Madrid* si se considerare necesario.

Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo á lo dispuesto en este capítulo.

Sin embargo, cuando la persona interesada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos.

¿Qué notificaciones, citaciones y emplazamientos deben hacerse necesariamente á las partes?—Las que la ley determine expresamente y las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria. Todas las de más pueden practicarse á los procuradores.

Suplicatorios, exhortos, mandamientos, oficios y cartas-órdenes.

Los jueces y tribunales se auxiliarán mutuamente para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias en la instrucción de las causas criminales, empleando la forma del *supplicatorio*, cuando se dirigen á un juez ó tribunal de categoría superior á la suya; la de *exhorto*, cuando se dirigen á uno de igual categoría, y la de *mandamiento*, cuando se dirigiere á un subordinado suyo. Para entenderse con los jueces y tribunales inferiores no subordinados, deben dirigirse al superior de aquéllos que tuviere categoría igual.

¿Cómo deben cursarse los expresados documentos cuando se expidan de oficio y cuando sea á petición de parte?—En el primer caso, se enviarán directamente para su cumplimiento por el juez ó tribunal que los hubiere librado. En el segundo, se entregarán á la parte, fijándole término para la presentación á la autoridad requerida, de lo cual dará aviso á la requirente. Se exceptúan los casos en que expresamente se dispone otra cosa en la ley.

¿Cómo deben cursarse los exhortos á tribunales extranjeros?—Por la vía diplomática, exceptuándose los dirigidos á Portugal que se expiden directamente, pero no los recordatorios. (Real orden de 5 de Diciembre de 1862.) Para la forma y los demás detalles, deben tenerse presentes los tratados que existan con cada nación.

¿Qué debe hacerse cuando se dilate el cumplimiento de dichos documentos?—Los *suplicatorios* se recordarán; la demora de los *exhortos* se pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado, y los *mandamientos* se reproducirán, con prevención de castigar al inferior moroso.

¿Por qué medio deben entenderse los jueces y tribunales con las demás autoridades y funcionarios de policía judicial que no están á sus inmediatas órdenes?—Por *atentos oficios*, á no ser que la urgencia exija otra forma.

¿Cuándo deben emplear las *cartas-órdenes*?—Cuando encomiendan á sus subalternos y á los funcionarios de policía judicial que estén á sus órdenes, el cumplimiento de sus resoluciones ó la práctica de diligencias judiciales.

Términos judiciales en lo criminal (1).

Los términos son *improrogables* y *prorogables*. Todos son, por regla general, *improrogables*, no existiendo más *prorogables* que aquéllos que la ley determina expresamente.

(1) Por Real decreto de 15 de Noviembre de 1875, se recordó á los tribunales el cumplimiento exacto de la observancia de los términos judiciales, conminándoles con la responsabilidad exigible, si no se atendían rigurosamente, facultando á los interesados para recurrir en queja al ministerio de Gracia y Justicia, y dando el carácter de *negligencia habitual* á la que hubiere motivado tres anotaciones en el expediente personal del juez, magistrado, ó individuo del Ministerio fiscal.

¿Pueden suspenderse ó abrirse de nuevo los términos del juicio criminal?—Si, cuando esto fuere posible sin retroceder el juicio del estado en que se hallare, y hubiere causa justa y probada. Se reputará *causa justa* la que hubiese hecho imposible dictar la resolución ó practicar la diligencia judicial, independientemente de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo.

¿Dentro de qué término deben dictarse las sentencias?—Por regla general, en los cinco dias siguientes al de la vista. Se exceptúan: 1.º, las sentencias en los juicios de que conociere el jurado, las cuales serán dictadas en la misma sesion en que se hubiese pronunciado el veredicto; 2.º, las sentencias en los juicios sobre faltas, las cuales habrán de dictarse en el mismo dia ó en el siguiente al en que se hubiere celebrado el juicio.

¿En qué término deben dictarse los autos y las providencias?—Aquéllos se dictarán en los tres dias siguientes al en que se hubiesen entablado las pretensiones que por ellos se hayan de resolver, ó hubiesen llegado las actuaciones á estado de que aquéllos sean dictados; y las *providencias* se dictarán en el mismo dia en que se hayan presentado las pretensiones, ó resulte de las actuaciones la necesidad de dictarlas.

¿Cuándo deben practicarse las notificaciones, citaciones y emplazamientos?—Lo más tarde al siguiente dia de la fecha de la resolución, cuando hubieren de hacerse en el pueblo en que se dicta, excepto las sentencias de causas en que no hubiese intervenido el jurado, que podrán notificarse en los dos dias siguientes al en que se hubiesen dictado.

¿En qué términos deben interponerse los recursos de *reforma*, *súplica* y *apelacion*?—Los de *reforma* ó de *súplica* se interpondrán en el término de tres dias, y el de *apelacion* dentro de cinco, á contar desde el de la última notificación de la resolución judicial que fuere su objeto.

¿En qué términos los de casacion por quebrantamiento de forma y preparacion de aquél por infraccion de ley?—Tambien dentro de cinco dias, contados desde la última notificación. Se exceptúan el recurso de apelacion y la preparacion del de casacion por infraccion de ley contra la sentencia dictada en juicio sobre faltas, que se interpondrán el primer dia siguiente á la última notificación, y los de reforma y apelacion contra autos y providencias dictadas á presencia de las partes, solamente admisibles en el acto.

¿Cuándo debe interponerse el recurso de *queja*?—En cualquier tiempo, mientras estuviere pendiente el juicio ó causa.

¿Qué efectos produce el trascurso de los términos judiciales?—Legitima la continuacion del procedimiento de oficio, en el estado en que se halle. Si el proceso estuviere en poder de alguna persona, se recogerá de oficio con imposicion de una multa de 5 á 25 pesetas, si no lo entregare en el acto; y si el término hubiese sido para interponer el recurso de apelacion ó el de casacion, se declarará tambien de oficio firme el auto ó la sentencia que hubiere de ser su objeto.

De la redaccion de las sentencias, segun la ley de Enjuiciamiento criminal (1).

¿Cuántos magistrados se necesitan para dictar autos y sentencias en lo criminal?—En el Tribunal Supremo, siete magistrados; en las audiencias

(1) Suspendida la parte de esta ley en todo lo relativo al jurado y al juicio oral y público, lo está tambien lo concerniente al modo de redactar las sentencias que aquí exponemos. Pero como no es más que una suspension y no una derogacion de los preceptos de aquélla lo mandado, creemos que debe continuar formando parte del texto é insertamos á continuacion lo que acerca de este punto previene la ley de 18 de Junio de 1870, so-

con ó sin jurado y en los tribunales de partido, tres magistrados ó jueces.

¿Qué debe contener la sentencia?—Comenzará por expresar el lugar y la fecha en que se dicte, los hechos de la causa, los nombres y apellidos de los actores y procesados, consignando sus sobrenombres ó apodos con que sean conocidos, edad, estado, naturaleza, domicilio, oficio ó profesion de los mismos, y en su defecto todas las demás circunstancias con que hubiere figurado en la causa, y el nombre y apellido del juez ó magistrado ponente. Se consignarán, en *resultandos* numerados, los hechos que se estimaren probados. Se expresarán las conclusiones definitivas de la acusacion y de la defensa. Se expresarán en párrafos, tambien numerados, que empezarán con la palabra *Considerando*, los fundamentos de la calificacion legal de los hechos que se hubieren estimado probados; los de la participacion que hubiere tenido cada uno de los procesados; los de las circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes de responsabilidad criminal, en caso de haber concurrido; los relativos á la responsabilidad civil en que hubieren incurrido los procesados y las personas sujetas á ella á quienes se hubiere oido en la causa, y los correspondientes á las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas y á la declaracion de querella calumniosa. En seguida se citarán las disposiciones legales que se consideren aplicables, y se pronunciará, por último el fallo *condenando ó absolviendo*, ó haciendo en su caso las declaraciones que correspondan respecto á faltas incidentales, á costas procesales y á ser calumniosa la querella.

¿Cómo debe redactarse y qué extremos debe contener la sentencia cuando el jurado haya conocido de la causa?—Se principiará expresando el lugar y la fecha en que se dictare, y todo lo demás que se establece en las reglas anteriores.

En párrafo separado, que comenzará con la palabra *Visto*, se insertará literalmente el veredicto del jurado.

Despues se consignarán, tambien en párrafos separados, todos los hechos correspondientes á la responsabilidad civil que la seccion de la sala declarase probados; á la resolucio que en la sentencia hubiere de dictarse sobre costas, y á la declaracion de calumniosa que hubiere de hacerse de la querella.

En seguida se expresarán, tambien separadamente, en párrafos que principiarán con la palabra *Considerando*, los fundamentos legales que se estimen

bre reformas en el procedimiento, que es la que está en vigor á la sazón, y con arreglo á la cual se sustancian, juzgan y sentencian las causas criminales, hasta tanto que, ó bien se alce aquella suspension, ó bien se modifique la parte de la ley de Enjuiciamiento criminal declarada en suspenso. Dice así en su

Art. 13. Las sentencias se redactarán en párrafos separados y numerados, que deberán empezar con la palabra *resultando*, los hechos que consten del proceso y sus circunstancias, y declarando los que resulten probados.

En párrafos tambien numerados, que principiarán con la palabra *considerando*, se consignarán los fundamentos de la apreciacion legal de los hechos que se consideren probados.

En seguida se citarán las disposiciones legales que sean aplicables.

Si la sentencia fuere condenatoria, se declarará:

1.º Cual es el delito que constituyen los hechos que se hayan declarado probados y la calificacion legal de sus circunstancias.

2.º La calificacion legal de la participacion que en ellos haya tenido cada uno de los procesados.

3.º La pena en que haya incurrido cada uno de ellos.

4.º La responsabilidad civil en que hayan incurrido los sujetos á ella que hayan sido oidos en la causa.

Cuando la sentencia sea absolutoria, comprenderá, además de los *resultandos* y *considerandos* y la cita de las leyes, la declaracion terminante de fundarse la absolucion en falta de prueba de los hechos, ó en que éstos no constituyan delito, ó en que no esté justificada la participacion en ellos de los procesados, ó en estar los mismos exentos de responsabilidad.

En todos los casos mandará elevar la causa en consulta á la audiencia, y citar y emplazar á las partes para que acudan á usar de su derecho dentro del término que se los señale.

procedentes para la aplicación de las leyes á los hechos que el jurado hubiese declarado probados, así como los correspondientes á las resoluciones sobre la responsabilidad civil y las costas y á la declaración de querrela calumniosa que hubieren de dictarse ó hacerse en la sentencia. A continuación se citarán las disposiciones legales que sirvan de fundamento al fallo. Por último, se pronunciará el que sea procedente, con sujeción á las resoluciones del veredicto *condenando ó absolviendo*, decidiendo sobre la responsabilidad civil, si hubiere sido proclamada, y las costas y la declaración de ser calumniosa la querrela, si á esto hubiere lugar.

¿Qué efectos produce y cómo debe entenderse la *absolucion*?—Se entenderá *libre* siempre y en todos los casos, habiendo sido derogada virtualmente la antigua fórmula de *absolucion de la instancia* que, como es sabido, suspendía el juicio criminal por falta de prueba bastante, pudiendo continuarse siempre después que apareciesen nuevos datos de investigación.

El Tribunal Supremo declaró en 4 de Junio de 1873, que entre los modos de terminarse las causas no existe ya el de la absolucion de la instancia conforme á los arts. 87 y 89 de la ley de Enjuiciamiento criminal; y en 13 de Julio de 1876, que, apesar del decreto de 3 de Enero de 1873, que suspendió el jurado y el juicio oral, dicha fórmula no tiene razon de ser, desde la ley de 18 de Junio de 1870, sobre reformas en el procedimiento, que es la que rige en la actualidad (1).

Recursos contra las resoluciones judiciales.

¿Qué recursos se dan contra las pronunciadas por los jueces de instrucción, ante quiénes deben interponerse y en qué manera?—Los de *reforma*, *apelacion* y *queja*. El primero podrá interponerse contra todos los autos del juez de instruccion ó de primera instancia; el segundo únicamente en los casos determinados por la ley, y se admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la misma lo disponga expresamente, y el tercero contra todos los autos no apelables del juez de instruccion y contra las resoluciones en que se denegare la admision de un recurso de apelacion. Los recursos de *reforma* y *apelacion* se interpondrán ante el mismo juez que hubiere dictado el auto que fuere su objeto; el de *queja* se interpondrá ante el tribunal del partido á que corresponda el juez de instruccion contra quien aquélla se produzca. Se exceptúa la queja contra el auto en que se denegare la apelacion del de no admision de la querrela, cuyo recurso habrá de interponerse ante el tribunal competente para conocer del delito que de la querrela hubiese sido objeto. Se interpondrán siempre en escrito autorizado con firma de letrado.

¿Los expresados recursos deben interponerse simultánea ó sucesivamente?—El recurso de *apelacion* no podrá interponerse sino después de haberse ejercitado el de *reforma*, pero podrán interponerse ambos en un mismo escrito; el primero subsidiariamente. El que interpusiere el recurso de reforma presentará con el escrito tantas copias del mismo cuantas sean las demás partes, á las cuales habrán de ser entregadas dichas copias. El juez de instruccion resolverá el recurso al tercer dia de entregadas las copias, hubiesen ó no presentado escrito las demás partes sobre lo que fuere objeto de recurso. El de queja suele interponerse después de los otros dos, por regla general.

¿Cómo deben sustanciarse estos recursos?—Se entregarán copias del

(1) Véase la nota anterior.

escrito de reforma á todas las partes, y el juez de instruccion lo resolverá al tercer dia de entregadas.

La apelacion se admitirá en *uno ó en ambos efectos*. En el primer caso se mandará sacar testimonio bastante, teniendo presente el carácter reservado del sumario, sin dar vista al apelante cuando los autos tuvieren para él dicho carácter, y se remitirá con el emplazamiento que se dirá, para ante el tribunal correspondiente. Si se admitiere el recurso en ambos efectos, se mandará remitir los autos originales al tribunal que hubiere de conocer de la apelacion y emplazar á las partes, para que se personen ante aquél en el término de quince, diez ó cinco dias, segun que dicho tribunal fuere el Supremo, la audiencia ó el tribunal de partido.

Recibidos los autos en el tribunal superior, si en el término del emplazamiento no se hubiere personado el apelante, se declarará de oficio desierto el recurso, y se devolverán los autos originales si el recurso se hubiese admitido en ambos efectos.

Si el apelante se hubiese personado, se le dará vista de los autos por término de tres dias para instruccion, que seguirá por igual término á las demás partes personadas, excepto del extremo para ellas reservado, y por último al fiscal, si la causa fuese por delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio ó de violacion y rapto, señalándose despues dia para la vista, en la que podrán informar. Antes de dicho dia podrán presentar los documentos que tuvieren por conveniente, en justificacion de sus pretensiones. No será admisible otro medio de prueba. El tribunal resolverá por auto el recurso, en los tres dias siguientes al en que la vista hubiese tenido lugar.

Respecto al recurso de *queja* interpuesto, el tribunal pedirá informe al juez de instruccion, que pasará luego al fiscal, si tuviere intervencion en la causa, quien emitirá dictámen escrito en el término de tres dias, debiendo resolver por auto el tribunal, al siguiente, lo que estimare justo.

¿Qué recursos se dan contra los autos de los tribunales de partido y de las salas de lo criminal?—El de *súplica* ante el mismo que hubiere dictado el auto suplicado, cuando la ley no otorga expresamente otro recurso, que en tal caso será éste el procedente. El recurso de *súplica* se sustanciará con el procedimiento del de *reforma* expuesto.

¿Contra qué resoluciones procede el recurso de casacion?—Contra los autos y sentencias de los tribunales de partido y de las salas de lo criminal de las audiencias, en los casos que enumeraremos en su oportuno lugar.

Contra las sentencias del Tribunal Supremo no procederá recurso alguno.

De las costas procesales.

215

¿A qué se da el nombre de costas procesales?—Segun el Código penal, á los derechos é indemnizaciones motivados en las actuaciones judiciales, ya consistan en cantidades fijas ó inalterables, ya en otras que no estén sujetas á arancel. Acerca de su pago debe resolverse en todo auto ó sentencia, ora declarándolas de oficio, ora condenando á los procesados no absueltos, proporcionalmente, ó bien al querellante y actor civil, cuando estos han obrado con *temeridad ó mala fé*. También pueden imponerse al ministerio fiscal, en caso de ser notorias su temeridad ó mala fé.

Segun lo dicho, ¿qué derechos y gastos comprenden las costas?—1.º, el reintegro del papel sellado; 2.º, el pago de los derechos de arancel; 3.º, el de los honorarios devengados por los abogados y peritos; 4.º, el de las indemnizaciones correspondientes á los testigos que las hubiesen reclamado,

y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instruccion de la causa. Cuando se declarasen de oficio las costas, no habrá lugar al pago de las correspondientes á los números 1.º y 2.º El secretario que interviniera en la ejecucion de la sentencia hará la tasacion de las costas relativas á estos números, teniendo en cuenta las minutas de honorarios formadas por los abogados. Las indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se hubiese fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el tribunal ó juzgado, con vista de los justificantes. La tasacion necesita la aprobacion del tribunal, que podrá pedir informe respecto á honorarios á la junta de gobierno del colegio de abogados, donde le hubiere, ó á dos de éstos donde no existiere.

¿Cómo deben hacerse efectivas las costas?—Por la vía de apremio establecida en la ley de Enjuiciamiento civil, con los bienes de los que hubiesen sido condenados á su pago, teniendo lugar la responsabilidad penal subsidiaria que establece el Código en caso de insolvencia (1). Cuando fuese el ministerio fiscal el condenado comprenderán solamente las costas los gastos de defensa de los procesados, entendiéndose como tales los mencionados por dicho Código en los números 3.º y 4.º de las costas.

¿Qué efecto produce su imposicion al ministerio fiscal?—Serán satisfechas por cuenta de los depósitos caducados constituidos para el recurso de casacion, poniéndolo en conocimiento del ministerio de Gracia y Justicia, con nota de su importe, para que obre en el expediente del condenado.

De la rebeldía y de sus efectos.

¿Cuándo debe hacerse la declaracion de rebeldía?—Será declarado rebelde el procesado que en el término fijado en las requisitorias no compareciese, ó que no fuese habido y presentado ante el juez ó tribunal que conociere de la causa. Llámase *requisitoria* al edicto en que se cita, convoca ó emplaza á los procesados, fijándose término y lugar en que deben comparecer, y el objeto y motivo de su convocacion.

¿Quiénes deben ser llamados y buscados por requisitoria?—1.º, el procesado que al ir á notificársele cualquiera resolucion oficial no fuere hallado en su domicilio por haberse ausentado, si se ignorase su paradero, y el que no tuviese domicilio conocido; 2.º, el que se hubiere fugado del establecimiento en que se hallare detenido ó preso; 3.º, el que, hallándose en libertad provisional, dejare de concurrir á la presencia judicial el día que le estuviere señalado ó cuando fuere llamado.

La requisitoria se remitirá á los jueces, se publicará en los periódicos y se fijará en el local del tribunal que la expida y de los jueces de instruccion requeridos, uniéndose á los autos el original y un ejemplar de cada periódico en que se hubiere publicado.

¿Cuándo debe hacerse la declaracion de rebeldía y qué efectos produce?—Trascurrido el plazo de la requisitoria sin haber comparecido ó sin haber sido presentado el ausente, se le declarará *rebelde*. No son hoy necesarias las tres citaciones que autorizaba la anterior jurisprudencia. Si la causa estuviere en sumario, ó pendiente el juicio *oral*, se continuará hasta que se declare terminado por el tribunal competente, suspendiéndose despues su curso y archivándose los autos y las piezas de conviccion que pudieren conservarse y no fueren de un tercero irresponsable, hasta que se presentare ó fuere habido el rebelde. Si fueren dos ó más los procesados, se suspenderá el curso de la causa respecto á los demás.

(1) Véase la pág. 31 de la seccion de Derecho penal.

¿Perjudica esta suspension el derecho de la parte ofendida?—No: en el auto en que se acuerde se le reservará la accion correspondiente para la restitution de la cosa, la reparacion del daño y la indemnizacion de perjuicios, á fin de que pueda ejercitarla, independientemente de la causa, por la via civil contra los que fueren responsables: al efecto no se alzarán los embargos hechos ni se cancelarán las fianzas prestadas.

¿Qué efectos produce el archivo de la causa por rebeldía?—Cuando fueren rebeldes todos los procesados, se mandarán devolver á los dueños que no fueren civil ni criminalmente responsables del delito, si un tercero no pidiese su retencion, los efectos ó instrumentos del mismo y demás piezas de conviccion, y se practicarán los reconocimientos periciales procedentes.

¿En qué casos la ausencia del reo no suspende el procedimiento?—Cuando se hubiese fugado ó ocultado despues de haberle sido notificada la sentencia; y estando pendiente el recurso de casacion, ó se interpusiere por la defensa ó por el ministerio fiscal, se sustanciara aquél hasta definitiva, nombrándose al rebelde abogado y procurador de oficio, siendo firme la sentencia que recayere.

¿Qué efectos produce la captura ó presentacion del rebelde?—Hace necesaria la continuacion de la causa, segun su estado.

Estadística judicial.

Esta importante materia, además de indicar el movimiento, la gravedad, naturaleza é importancia de la criminalidad de los pueblos, es un medio auténtico y poderoso, que facilita la inspeccion que el ministro de Gracia y Justicia debe ejercer sobre las funciones del poder judicial, y que corresponde á los tribunales superiores, para vigilar á los inferiores que están bajo su jerarquía. Esta inspeccion y vigilancia y aquellas ventajas se obtienen por medio de estados que, mensual ó trimestralmente, remiten todos los jueces y tribunales inferiores é individuos de ministerio fiscal á sus superiores, y éstos, por medio de resúmenes, al ministerio de Gracia y Justicia, en donde se publica el general extensivo al territorio de la Peninsula é islas adyacentes.

Para conseguir su exactitud, todo tribunal que dictare sentencia condenatoria firme, en cualquiera causa criminal, remitirá testimonio de la parte dispositiva de la misma al juez de instruccion del lugar en que se hubiese formado el sumario, y cada juez de esta clase llevará dos libros titulados, uno *Registro de penados* y otro *Registro de procesados en rebeldía*, debiendo insertar en el primero aquellos testimonios, y en el segundo las causas en que hubiere procesados rebeldes, anotando su presentacion ó captura, si se realizare.

Con el fin, sin duda, de dar más garantias de autenticidad á las resoluciones judiciales, la ley de Enjuiciamiento criminal manda que se conserven, metódicamente coleccionadas, las minutas de los autos y sentencias, á las cuales se referirán los asientos de los libros en que éstas deben extenderse.

LIBRO PRIMERO.

L 28 Del sumario.

¿Qué es *sumario*?—La primera parte del juicio criminal, que comprende todas las actuaciones judiciales practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y quiénes hayan sido los delincuentes, asegurando sus personas y la responsabilidad pecuniaria en que pueden haber incurrido. Se distingue por su carácter inquisitivo y por el sigilo que preside en las diligencias, que serán secretas hasta el juicio oral, estando prohibida su revelación indebida á los abogados y procuradores, bajo multa.

Comienzan los sumarios de oficio ó á instancia de parte; esto es, por denuncia ó por querrela.

L 50 De las denuncias.

¿Qué es *denuncia*?—La manifestación que se hace á la autoridad pública de la comisión de un hecho punible y de sus autores, sin responder del dicho, ni quedar sometido al juicio el denunciante. Puede tomarse en varios sentidos. En el lenguaje jurídico, se comprendía también bajo este nombre la *delación*, ó sea el aviso secreto dado á la autoridad, sin obligarse á aprobar el hecho, descartando la responsabilidad del dicho. En un sentido absoluto, también se conocía con el nombre de *acusación*, palabra limitada actualmente á los dictámenes formulados por el ministerio fiscal y la parte agraviada, después de la prueba del juicio. Y, por fin, en sentido concreto, cuando la manifestación se refería á daños pecuniarios en la propiedad, llamábase también denuncia.

¿Quiénes están *obligados* á denunciar?—La ley de Enjuiciamiento criminal ha establecido un principio laudable, pero algun tanto peligroso, absoluto é imposible de cumplir en la práctica, según el cual todo el que presenciare la perpetración de cualquier delito público, estará obligado á ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, juez municipal ó funcionario fiscal más próximos al sitio en que se hallare, bajo la multa de cinco á cincuenta pesetas, exceptuando á los que no gozaren del pleno uso de su razón, los impúberes, los ministros de los cultos, los jueces y funcionarios que de oficio deben proceder, el cónyuge del delincuente y los ascendientes y descendientes consanguíneos ó afines del mismo y sus colaterales consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, y los afines hasta el segundo, también inclusive.

Además de los comprendidos en el principio general, están *obligados* á denunciar los delitos públicos á dichas autoridades, ó al funcionario de policía más próximo, si se tratare de un delito *flagrante*, bajo la misma multa, los que por razón de sus cargos, profesiones ú oficios, exceptuando á los abogados y procuradores, tuvieran noticia de aquéllos; y si no lo hicieren, siendo empleados públicos, se pondrá además en conocimiento de sus jefes la omisión. El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algun delito de los que deben perseguirse de oficio, podrá denunciarlo, sin que se entienda obli-

gado por esto á probar los hechos denunciados, ni á formalizar querrela.

¿Que se entiende por *flagrante delito*?—El cometido públicamente, cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo mismo en que lo consumaba.

¿Qué responsabilidad contrae el denunciador?—Sólo puede afectarle la correspondiente á los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, ó con su ocasion.

¿De cuántas maneras puede hacerse la denuncia?—Personalmente, por mandatario, anónimamente, por escrito ó de palabra. El mandatario necesita poder especial. La denuncia escrita debe firmarse por el denunciador, ó una persona á su ruego.

¿Qué deben hacer la autoridad ó funcionario antes indicados, cuando se les presente una denuncia?—Si es escrita, la autoridad ó funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas á presencia del que la presentare, que podrá hacerlo tambien; y si fuere verbal se extenderá un acta en la que, en forma de declaracion, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y á sus circunstancias, firmándola ambos, ú otra persona á ruego del denunciador. En ambos casos procurará identificar la persona de éste. Las autoridades judiciales y los funcionarios del ministerio fiscal, registrarán en un libro reservado las denuncias que se les hicieren y las vicisitudes por que fueren pasando, expidiendo á los denunciadores un resguardo.

La autoridad á quien se hiciere una denuncia con los requisitos anteriores, mandará al juez de instruccion competente que proceda inmediatamente á lo que haya lugar, á no ser que no considerase delito los hechos denunciados, ó la denuncia fuese manifestamente falsa. Si creyese que no debía procederse, lo consignará así en el registro, absteniéndose de toda sustanciacion, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por haberla desestimado indebidamente.

¿Qué debe hacer cuando la denuncia sea anónima?—No anotarla en el registro, pudiendo, sin embargo, mandar proceder á la averiguacion del hecho denunciado, si lo estimare conveniente.

LDH

De la querrela.

¿Qué es *querrela*?—La denuncia hecha á la autoridad pública de la ejecucion de un hecho punible y de sus autores, quedando sometido el querellante á las consecuencias y responsabilidades de sus actos y del juicio, por más que de ella se aparte. Antes se entendia por *querrela* la denuncia ó acusacion de un particular, victima de un delito privado.

¿Quiénes pueden querellarse?—Como la accion penal es pública, todos los españoles, *hayan sido ó no ofendidos con el delito*, siempre que la ley no les prohiba el ejercicio de la accion popular, pueden querellarse. Tambien pueden hacerlo los extranjeros, por los delitos cometidos contra sus personas ó bienes, ó las personas ó bienes de sus representados, previa fianza, si no estuvieren exentos de darla por los tratados ó por ley de reciprocidad.

¿Cómo debe ejercitar la accion pública el ministerio fiscal?—Tambien en forma de querrela presentada ante el juez de instruccion competente ó juez de primera instancia, y ante la audiencia ó el Tribunal Supremo, cuando el querellado estuviese sometido á la providencia de estos tribunales.

¿Ante quién debe querellarse el particular?—Ante las mismas autoridades á que recurra el ministerio fiscal. Sin embargo, en los casos de delito

in fraganti, ó de los que no dejan señales permanentes de su perpetracion, ó en que fuere de temer fundadamente la ocultacion ó fuga del presunto culpable, el particular podrá acudir al juez de instruccion ó municipal que estuviere más próximo, ó á cualquier funcionario de policia, á fin de que se practiquen las primeras diligencias necesarias para hacer constar la verdad de los hechos y para detener al delincuente.

¿Puede separarse el querellante de la querella presentada?—Podrá apartarse de ella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto á las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino á instancia de parte, se entenderá haberla abandonado cuando dejare de instar el procedimiento, dentro de los cinco dias siguientes á la notificacion del auto en que se le mande instar; pero una vez sentenciada la causa en primera instancia, al no presentarse el querellante en la segunda, no puede declararse como abandono y desistimiento (1). Se tendrá tambien por abandonada la querella cuando, por muerte ó por haberse incapacitado el querellante para continuar la accion, no compareciere ninguno de sus herederos ó representantes legales á sostenerla, dentro de los sesentas dias siguientes al en que la muerte ó la incapacidad hubiesen ocurrido.

¿Qué debe contener la querella y con qué requisitos debe presentarse?—Se extenderá en papel de oficio, y en ella se expresará: 1.º, el juez ó tribunal ante quien se presente; 2.º, el nombre, apellido y vecindad del querellante; 3.º, el nombre, apellido y vecindad del querellado, ó sus señas si no fueren aquéllos conocidos; 4.º, la relacion circunstanciada del hecho, con expresion del lugar, año, mes, dia y hora en que se ejecutó; 5.º, expresion de las diligencias que se deberán practicar para la comprobacion del hecho; 6.º, la peticion de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en el número anterior, se proceda á la detencion y prision del presunto culpable, ó á exigirle la fianza de *libertad provisional*, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria, en los casos en que así proceda, y 7.º, la firma del querellante ó la de otra persona á su ruego, si no supiere ó no pudiere firmar, y la de su procurador y la del letrado que le defienda. Si el procurador lo fuese en virtud de poder especial, no será necesaria la firma del querellante, ni la de otra persona á su ruego. Se presentará siempre la querella por medio de procurador con poder bastante y firmada por letrado.

¿En qué casos debe preceder al juicio criminal el acto conciliatorio?—En las querellas por delitos, que solamente pueden perseguirse á instancia de parte, excepto los de violacion y rapto. A tales querellas acompañará la certificacion de haberse celebrado ó intentado el expresado acto entre el querellante y querellado. La falta de este requisito no obstará, sin embargo, para que se practiquen las diligencias de carácter urgente encaminadas á la comprobacion de los hechos y á la detencion del delincuente, suspendiendo despues el curso de los autos hasta que se acredite dicho extremo.

¿Qué documento debe acompañar á las querellas por calumnia ó injuria causadas en juicio?—La licencia del juez ó tribunal que hubiese conocido de aquél, en el cual se hubieren proferido.

¿Quiénes deben prestar fianza previa y quiénes están exceptuados de darla?—El particular querellante habrá de prestarla, de la clase y en la cuantía que fijará el juez ó tribunal, para responder de las resultas del juicio. Estarán exentos de darla el ofendido y sus herederos ó representantes legales; y cuando el delito fuere el de asesinato ó el de homicidio, el viudo ó viuda de la víctima, y los ascendientes y descendientes consan-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Setiembre de 1873 y 28 de Noviembre de 1874.

guíneos ó afines, y los colaterales consanguíneos hasta el cuarto grado, y los afines hasta el segundo, y los herederos también de la víctima. Pero para gozar de la exención de la fianza será necesario que sean ciudadanos españoles, ó, siendo extranjeros, que les eximan los tratados, ó en su defecto la ley de reciprocidad.

Autoridades competentes para instruir los sumarios.—Policía judicial, según la ley de Enjuiciamiento criminal (1).

¿A quién corresponde la formación de los sumarios?—A los jueces de instrucción de las circunscripciones respectivas, hoy á los jueces de primera instancia y en su defecto á los de las demás de la misma ciudad ó población, cuando en ella hubiere más de uno, y á prevención con ellos, ó por su delegación, á los jueces municipales, en los términos que veremos al hablar de la instrucción.

¿Puede encomendarse la de un sumario á un juez especial de instrucción?—El ministro de Gracia y Justicia y las salas de gobierno del Tribunal Supremo y de las audiencias, podrán encomendar la formación de los sumarios por los delitos de que deben conocer respectivamente, en única instancia y en juicio oral y público y de los que competen al Tribunal Supremo en pleno. Pero debe entenderse que ese nombramiento solo se extiende á la instrucción y terminación del sumario, el cual, una vez terminado, debe remitirse al juez ó tribunal competente (Real orden de 16 de Febrero de 1876).

¿Qué condiciones debe reunir el nombrado?—Ser magistrado, juez ó funcionario del ministerio fiscal, en activo servicio.

(1) El Real decreto de 6 de Noviembre de 1877, que publicamos á continuación, ha modificado las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento criminal en esta materia reorganizando y dando nueva forma al servicio de policía, dividiéndolo en *gubernativo* y judicial. En el preámbulo se consigna que existe, por la naturaleza misma de los servicios, una esencial diferencia entre el amparo que la sociedad á toda hora debe prestar á sus individuos para librarlos á ellos, á su domicilio y á su propiedad, de toda incursión ó ataque, y el estudio que la sociedad misma debe hacer de los elementos del mal, que, como funesta y necesaria escuela de la malicia y del error humanos, germinan y se desarrollan en su seno. Se hace constar también que el cuerpo militar de Orden público seguirá teniendo á su cargo el servicio de seguridad.

La parte dispositiva de dicho decreto de fecha 6 de Noviembre, dice así:

«Artículo 1.º La policía gubernativa y judicial en la corte se compondrá de dos servicios: el primero llamado de vigilancia y el segundo de seguridad.

Art. 2.º El servicio de vigilancia tiene por inmediato objeto el conocer todos los elementos de mal que existan en la población, con el fin de impedir en lo posible los delitos y de auxiliar la acción judicial en el descubrimiento de aquéllos y en la captura de sus autores. El servicio de vigilancia tiene á su cargo, como importante accesorio, el registro del movimiento de la población.

Art. 3.º El servicio de seguridad tiene por objeto:

Primero. Amparar dentro de la población las personas, los domicilios y los bienes de los ciudadanos.

Segundo. Mantener el orden y la libertad de circulación en la vía pública.

Tercero. Mantener el orden en las reuniones al aire libre, en los paseos, en los teatros y demás diversiones públicas, en los cafés y en los establecimientos de venta de bebidas y comidas.

Cuarto. Prestar auxilio á toda autoridad y personas que le reclamen para evitar un mal, impedir un delito ó aprehender un delincuente.

Art. 4.º El jefe superior de la policía de Madrid es el ministro de la Gobernación y bajo sus órdenes es jefe inmediato el gobernador de la provincia.

Art. 5.º El servicio de vigilancia será prestado por un cuerpo de empleados civiles, auxiliados por suficiente número de subalternos. Los unos y los otros habrán de tener, para ser nombrados, las condiciones que marquen los reglamentos; no podrán ser separados de sus destinos sino á virtud de propuesta fundada de sus jefes inmediatos, apoyada por los jefes superiores, y los una vez separados en esta forma nunca podrán volver al cuerpo.

Art. 6.º El servicio de seguridad dentro de la corte se prestará por un cuerpo organi-

¿Qué autoridades y funcionarios componen la policía judicial?—Los siguientes: 1.º, las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecucion de todos los delitos ó de algunos especiales; 2.º, los agentes ó subordinados de las mismas para el objeto del número anterior; 3.º, los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio; 4.º, los jefes, oficiales é individuos de la Guardia civil ó de cualquiera otra fuerza destinada á la persecucion de malhechores; 5.º, los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana y rural; 6.º, los guardas particulares de montes, campos y sembrados, jurados ó confirmados por la administracion; 7.º, los jefes de establecimientos penales y los alcaides de las cárceles; 8.º, los alguaciles y dependientes de los tribunales y juzgados.

¿Qué es, pues, la policía judicial y cuáles son sus deberes?—El conjunto de autoridades y funcionarios públicos, auxiliares de los jueces y tribunales, que tienen por objeto averiguar los delitos públicos que se cometen en su territorio ó demarcacion; practicar, segun sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir á los delincuentes, y recoger, poniéndolos á disposicion de la autoridad judicial, todos los efectos, instrumentos ó pruebas del delito de cuya desaparicion hubiere peligro. Ejercerán tambien estas funciones, en los delitos privados, siempre que fueren requeridos al efecto, por parte legítima (1).

Deben tambien poner, dentro de veinticuatro horas, en conocimiento de la autoridad judicial, que lo será el juez de instruccion ó el municipal en defecto de éste, la prevencion de las diligencias que estuvieren practicando. Pueden ordenar que les acompañen los dos primeros médicos en caso de lesiones; impedir que se aparten del lugar del delito *flagrante*, y

zados, á imitacion de los cuerpos militares, y en las afueras de la poblacion por un tercio de la Guardia civil.

Art. 7.º Los empleados del cuerpo civil de vigilancia y los del cuerpo de seguridad, gozarán del sueldo que les asigne el reglamento, y tendrán además opcion á cierto número de premios anuales, y á cierto número de plazas de distincion, con aumento de sueldo, en la forma y mediante las condiciones que especificará el mismo reglamento.

Art. 8.º El servicio de vigilancia llevará los siguientes registros:

Primero. Padron general del vecindario.

Segundo. Registro del movimiento de la poblacion.

Tercero. Registro de extranjeros transeúntes.

Cuarto. Registro de reclamados por la autoridad.

Quinto. Registro de sirvientes de todas clases.

Sexto. Registro de casas de huéspedes, de dormir, de bebidas, de comidas y de préstamos, de cafés, billares, fondas y demás establecimientos análogos.

Sétimo. Registro reservado de personas sospechosas en materia criminal.

Octavo. Registro de la conducta de los empleados en el servicio.

Art. 9.º Se considerarán auxiliares de la policía en sus dos ramos:

Primero. Los agentes especiales que tenga el Ayuntamiento para el cumplimiento de las Ordenanzas municipales.

Segundo. Los serenos y toda clase de vigilantes nocturnos, así públicos como particulares.

Tercero. Los porteros de las casas y establecimientos de todas clases, así públicos como privados.

Cuarto. Los dependientes de consumos.

Art. 10. Para el servicio de policía se considerará Madrid dividido en los diez distritos que tiene en la actualidad. Para el servicio de vigilancia habrá en cada distrito una delegacion, organizada en la forma que determinen los reglamentos; y para el servicio de seguridad una Prevencion con su oficina á cargo de un capitán con los subalternos necesarios.

Art. 11. Los mayores gastos que exija el servicio montado, con sujecion á este decreto, se suplirán con cargo al art. 1.º del cap. 8.º del presupuesto del ministerio de la Gobernacion.

Art. 12. El ministro de la Gobernacion formará y publicará inmediatamente el Reglamento para la ejecucion de este decreto.

Art. 13. Queda autorizado el Gobierno para ir estableciendo el servicio de policía en la forma que determina este decreto, á medida que le sea posible, en el resto de la nacion.

(1) Véase la nota anterior. Como complemento al decreto que en ella se cita se ha publicado un reglamento recientemente.

hacer que se conduzcan inmediatamente ante la autoridad judicial cuando se cogiere *in fraganti* al delincuente, las personas que en él se encontraren; secuestrar los efectos que puedan servir de medio probatorio, y requerir el auxilio de la fuerza pública, dando siempre conocimiento al funcionario de policía judicial de mayor categoría que concurriere al acto, a cuya disposicion deben ponerse.

Cuando el juez de instruccion ó el municipal se presentaren á formar el sumario, cesarán las diligencias de prevencion que estuviere practicando cualquiera autoridad ó agente de policía; debiendo éstos entregarlas en el acto á dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen adquirido, poniendo á su disposicion á los detenidos, si los hubiere, practicando las diligencias que durante el curso de la causa les encarguen dichas autoridades ó el ministerio fiscal.

¿En qué forma deben extender las diligencias los funcionarios de la policía judicial?—Por medio de un *atestado*, debiendo firmarlo é invitar á que lo firmen á los peritos y testigos, rubricando todas las hojas. Cuando no pudiese redactarlo, lo hará la autoridad á quien se dé cuenta del hecho, en vista de la relacion verbal que se le haga.

¿Qué carácter tienen los referidos *atestados*?—Se considerarán denuncias, y los funcionarios que los hayan hecho no tendrán otra responsabilidad que la de los denunciadores.

De la instruccion del sumario.

Los jueces de instruccion competentes, que son por regla general los de primera instancia, y en su defecto los municipales, formarán los sumarios de los delitos públicos, con la inspeccion del fiscal del tribunal del partido, cuyas atribuciones ejerce el promotor. El juez municipal debe dar cuenta al de instruccion y ejecutar las órdenes que éste le comunique, remitiéndole la causa, practicadas las diligencias urgentes, no pudiendo retenerla más de tres días. Los jueces de instruccion darán tambien parte de la formacion de los sumarios á los presidentes y fiscales de la audiencia y del tribunal de partido, en los dos días siguientes al en que hubieren principiado á conocer de los mismos.

¿En qué casos debe suspenderse el procedimiento despues de la práctica de las primeras diligencias?—Cuando las causas sean contra jueces y fiscales municipales, por el ejercicio de sus funciones; contra jueces de instruccion, tribunales de partido y sus fiscales, por cualquiera clase de delitos; contra los jueces eclesiásticos, que no deben ser juzgados por el Tribunal Supremo; contra las autoridades administrativas por razon de sus cargos, cuando no deben ser procesadas por dicho Supremo Tribunal (1); contra las dignidades y personas que deben ser juzgadas en única instancia por la sala tercera de éste, y por el mismo constituido en pleno. Antes de dirigir el procedimiento contra ellas debe esperar las órdenes del tribunal competente, pudiendo, sin embargo, ser detenido y preso el delincuente sorprendido *in fraganti*.

¿Pueden delegar sus facultades los jueces de instruccion?—Pueden encomendar á los municipales la práctica de todos los actos y diligencias que

(1) Restablecida por el art. 77 de la Constitucion de 1876 la autorizacion previa para procesar á las autoridades y sus agentes, que habia derogado la de 1869, se ha presentado á las Cortes un proyecto de ley en que se determinan los casos y circunstancias en que dicha autorizacion ha de pedirse. Hasta tanto, los individuos del ministerio fiscal deben consultar los procesos en que aquellas personas estén comprendidas, con el fiscal del Tribunal Supremo y atenerse á sus instrucciones. Circular de 15 de Noviembre de 1877.

la ley no les reserva exclusivamente, á cuyas autoridades acompañarán los secretarios de sus juzgados, y en su defecto un notario ó dos hombres buenos, juramentados de fidelidad y secreto.

¿Qué tramitación sigue á la presentación de una querrela?—El juez de instrucción despues de admitirla, si fuere procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren si fueren justas y atinentes, denegándolas en caso contrario.

¿Cuándo debe desestimar la querrela?—Cuando los hechos no constituyan delito, ó cuando no se considere competente para instruir el sumario. Contra el auto en que se desestime procede el recurso de apelación en ambos efectos.

¿Qué diligencias deben hacerse constar en el sumario?—Todas las que se practiquen á instancia de parte. De las de oficio solamente constarán aquéllas cuyo resultado fuere conducente al objeto.

¿Qué intervencion pueden tener en el sumario el querellante y el actor civil?—Por regla general, pueden intervenir en todas las diligencias del mismo; pero siendo el delito público podrá el juez instructor declarar secreto el sumario para el querellante, á propuesta fiscal, ó de oficio. El actor civil tendrá en el sumario la intervencion necesaria para hacer constar la propiedad de la cosa que reclame y los daños y perjuicios que hubiese sufrido y su importe, así como para asegurar la restitution, la reparación ó la indemnizacion correspondientes.

¿En qué casos deben concurrir al lugar del delito los jueces de instrucción y los fiscales de partido?—Cuando tengan noticia de la ejecucion de los que están castigados con las penas de muerte, cadena, reclusion, relegación ó extrañamiento perpétuos ó temporales, ó cuya comprobación fuere difícil por circunstancias especiales, ó que hubiesen causado extraordinaria alarma; y procederán á formar el sumario, haciéndose cargo de las actuaciones que hubiese practicado el juez municipal, recibiendo las averiguaciones y datos que le suministren los funcionarios de policía judicial, y permaneciendo en dicho lugar el tiempo necesario para practicar todas las diligencias cuya dilación pudiere ofrecer inconvenientes, y fueren compatibles con ocupaciones más graves.

¿Ante qué personas deben formarse los sumarios?—Ante los secretarios de los juzgados de instrucción, y en su defecto, ante dos hombres buenos, mayores de edad, que sepan leer y escribir, los cuales jurarán guardar fidelidad y secreto.

¿Cómo deben practicarse las diligencias sumariales, fuera de la jurisdicción del juez instructor?—Por medio de *suplicatorios*, *exhortos* ó *mandamientos*, segun los casos; y cuando hubiere peligro en demorarlas y esté próximo el lugar en que deban practicarse, podrá ejecutarlas aquél por sí mismo, avisando inmediatamente al juez propio de dicho lugar.

¿Qué medidas establece la ley en pró de la celeridad de los sumarios?—Prescribe que, si al mes de haberse incoado un sumario no se hubiere terminado, el juez instructor dará parte cada semana á los mismos á quienes lo hubiese dado al principiarse aquél, de las causas que hubiesen impedido su conclusion, quienes acordarán, segun sus respectivas atribuciones, lo que consideren oportuno; y declara que los jueces instructores serán responsables disciplinaria y criminalmente en su caso, de las faltas de celo y actividad en la formación de los sumarios (1).

¿Qué trámite procede despues de instruido y perfeccionado el sumario?—Segun la ley de Enjuiciamiento criminal, practicadas todas las diligencias de oficio ó á instancia de parte legítima, el juez de instrucción re-

(1) Véase la nota de la pág. 139 sobre términos judiciales.

mitirá los autos al tribunal que considere competente, declarando *terminado el sumario* ó acordando la remision al juez municipal, siempre que juzgue simple falta el hecho sumariado. En el primer caso, confirmada la terminacion del sumario, el tribunal resolverá si debe sobreseerse ó si ha de abrirse el juicio oral. En el segundo caso podrá apelarse del auto de remision, cuya apelacion debe otorgarse en ambos efectos (4). Mas como todo lo relativo al juicio oral está en suspenso, segun hemos dicho ya repetidas veces, una vez terminado el sumario se pasa el proceso á las partes para su calificacion, y á fin de que manifiesten si ha de sobreseerse ó se ha de elevar á *plenario*, en cuyo caso propondrán toda la prueba que crean conducente, siguiendo despues la tramitacion por la ley de 18 de Junio de 1870, sobre reformas en el procedimiento de que luego nos ocuparemos.

Del cuerpo del delito y de los medios de su comprobacion.

Estas palabras representan varias ideas, si bien todas encaminadas á la comprobacion del hecho punible. Unas veces se llama *cuerpo del delito* al delito mismo, y otras se designan con este nombre los medios materiales empleados en su ejecucion. Es tan necesaria la comprobacion del hecho criminal, que sin ella es arbitrario y completamente ilusorio todo procedimiento. Asi como sin intencion no hay delito, sin delito no puede haber delincuente.

¿Qué medios de comprobacion pueden emplearse?—Todos lo que el derecho y la jurisprudencia sancionan como convenientes y eficaces. Asi, pues, deben tenerse presentes dos situaciones: 1.^a, cuando el delito haya dejado vestigios ó pruebas materiales de su perpetracion; 2.^a, cuando no haya quedado ninguna de dichas indicaciones. En el primer caso, el juez instructor las hará constar en el sumario, recogiéndolas además inmediatamente y conservándolas para el juicio oral ó para el plenario, si fuere posible; en el segundo averiguará y hará constar, siendo factible, si la desaparicion de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual ó intencionalmente; las causas de la misma ó los medios que para ella se hubiesen empleado; procediendo seguidamente á recoger y consignar en el sumario las que de cualquier otra clase se puedan adquirir acerca de la perpetracion del delito.

Siendo habida la persona ó cosa objeto del delito, el juez instructor describirá detalladamente su estado y circunstancias, y con especialidad todas las que tuvieren relacion con el hecho punible, mandando que sean apreciadas por peritos, cuyo informe constará por diligencia si el juicio de aquéllos fuere necesario, así como tambien el reconocimiento, ó que se haga el plano de un lugar cualquiera, con todos los detalles que puedan tener valor, el retrato ó diseño de las personas y efectos; y cuidará de recoger en los primeros momentos, sellándolos y conservándolos, si fuere posible, los instrumentos, armas ó efectos de cualquiera clase que puedan tener relacion con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, ó en sus inmediaciones, ó en poder del reo, ó en otra parte conocida, extendiendo diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasion en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mismos y del lugar y circunstancias de su hallazgo, cuya diligencia firmarán los interesados y las personas que estuvieren presentes ó fueron conocidas, despues de declarar acerca del delito, su forma y causas y demás concerniente á la mejor descripcion de la persona ó cosa ob-

(1) Al tratar de la conclusion del sumario ampliaremos estas indicaciones.

jeto de aquél, para todo lo cual podrá ordenar el juez que no se ausenten las personas que hubieren sido halladas en el lugar y que comparezcan las no presentes, bajo la multa de 25 á 250 pesetas.

De lo dicho se infiere que la primera diligencia que debe practicar el juez instructor consiste en la descripción minuciosa y exacta del lugar y cuerpo del delito, extensiva á todos los extremos que quedan indicados y más que se indicarán, concernientes á la comprobación del hecho punible, aprovechando todo lo posible los momentos inmediatamente posteriores á su comisión, que son los más oportunos y los que ofrecen, por regla general, mejores y más satisfactorios resultados.

¿A qué medios de comprobación debe recurrirse cuando el delito no haya dejado huella de su perpetración?—A las declaraciones de testigos y á todos los demás de investigación que puedan dar luz sobre la ejecución del delito y sus circunstancias y la preexistencia de las cosas.

¿Qué diligencias deben practicarse en casos de muerte violenta ó sospechosa de criminalidad?—Antes de proceder al enterramiento del cadáver ó inmediatamente despues de su exhumación, hecha la descripción de aquél, se identificará por medio de testigos que á la vista del mismo den razón satisfactoria de su conocimiento. Si no los hubiere y el estado del cadáver lo permitiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por tiempo á lo ménos de veinticuatro horas, expresando en un cartel, que se fijará á la puerta del depósito de cadáveres, el sitio, hora y día en que aquél se hubiese hallado y el juez que estuviese instruyendo el sumario, á fin de que, quien tuviere algun dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver ó al esclarecimiento del delito y de sus circunstancias, lo comuniqué al juez instructor.

Cuando apesar de tales prevenciones, no fuere el cadáver reconocido, recogerá el juez instructor todas las prendas del traje con que se le hubiese encontrado, á fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

¿Es siempre necesaria la autopsia en los casos de muerte violenta ó sospechosa de criminalidad?—Sí; aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se procederá á la del cadáver por dos médicos, los cuales, despues de describir exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del fallecimiento y sus circunstancias.

¿Dónde y ante quién deben practicarse las autopsias?—Las autopsias se harán en un local público que en cada pueblo ó circunscripción tendrá destinado la administración para el objeto y para depósito de cadáveres. Podrá, sin embargo, el juez de instrucción disponer, cuando lo considere conveniente, que la operación se pratique en otro lugar ó en el domicilio del difunto, si su familia lo pidiere y esto no puidere perjudicar al éxito del sumario. Si el juez de instrucción no puidere asistir á la operación anatómica, delegará en un funcionario de policía judicial, dando fé de su asistencia, así como de lo que en ella ocurriere, el secretario de la causa (1).

¿Qué intervencion tiene el juez instructor en la curación de las lesiones?—La inspección de aquéllas, por medio de los médicos que designará, los cuales darán parte del estado en que se halle en los períodos que se les ordenare, y además, en el momento en que advirtieren peligro de muerte. Estos médicos deben ser los forenses, en donde los haya (2).

¿Qué debe hacerse cuando aparecieren señales ó indicios de envenenamiento?—Se recogerán inmediatamente las cosas ó sustancias que se pre-

(1) Las Reales órdenes de 14 de Setiembre de 1860, 13 de Enero y 17 de Abril de 1864, 18 de Junio y 5 de Julio de 1865, tratan de esta materia y del modo de abonar los gastos que ocasionan las autopsias.

(2) Véase el decreto de 13 de Mayo de 1862 que los creó, y el de 20 de Marzo de 1862.

sumieren nocivas, disponiendo el juez instructor el análisis por peritos químicos, que lo verificarán con asistencia de las personas en cuyo poder se hubiesen hallado, y en los términos que indica el decreto de 4.º de Noviembre de 1875 inserto en la nota (1).

¿En qué causas y por qué medio debe hacerse constar la preexistencia de las cosas objeto del delito?—En las formadas por los de robo, hurto, estafa y cualquier otro que por su naturaleza sea conveniente justificar aquella, lo cual se hará si no hubiese testigos presenciales del hecho, por medio de informacion sobre los antecedentes del que se presentare como agraviado, y sobre todas las circunstancias que ofrecieren indicios de hallarse éste poseyendo las cosas objeto del delito al tiempo en que se suponga cometido.

¿Cómo se aprecia el valor de las cosas ó el importe de los perjuicios?—El juez instructor oirá sobre ello al dueño ó perjudicado, y acordará despues el reconocimiento pericial, en la forma que luego veremos, facilitando á los peritos nombrados las cosas y elementos directos de apreciacion sobre que hubiere de recaer su informe, y si no estuvieren á su disposicion, les suministrará los datos oportunos que se pudieren reunir; previniéndoles en tal caso, que hagan la tasacion y regulacion de perjuicios de un modo prudente, con arreglo á los datos que les hubiesen sido suministrados.

¿Que carácter tienen las diligencias indicadas hasta aquí?—El de ser preferentes á las demás del sumario, no suspendiéndose su ejecucion sino para asegurar la persona del presunto culpable ó para dar el auxilio necesario á los agraviados por el delito, sin que la confesion del procesado exima al juez instructor de practicar las diligencias con el mismo celo y actividad que en los demás casos.

DE LOS DELINCUENTES.

Su reconocimiento.—Antecedentes de moralidad, de conducta y penales.

La primera circunstancia que debe probar ó tratar de obtener el juez instructor es la identificacion de la persona del delincuente, cualquiera que

(1) Artículo 1.º Las operaciones de análisis química, que exija la sustanciacion de los procesos criminales se practicarán por doctores en Medicina, en Farmacia ó en Ciencias, físico-químicas.

Art. 2.º Los jueces de primera instancia designarán, entre los comprendidos en el artículo anterior, los peritos que han de hacer el análisis de las sustancias que en cada caso exija la recta administracion de justicia que se sujeten á esta operacion.

Art. 3.º Cuando en el partido judicial donde se sustancie el proceso no haya doctores en ninguna de las Facultades nombradas en el art. 1.º, ó estuvieren imposibilitados legal ó físicamente para practicar el análisis los que en él residieren, el juez lo pondrá en conocimiento del presidente de la audiencia, y éste nombrará el perito ó peritos que hayan de prestar este servicio entre los doctores en las expresadas Facultades domiciliados en el distrito.

Art. 4.º El presidente de la audiencia comunicará el nombramiento de peritos al juzgado para que se pongan á disposicion de los mismos, con las debidas precauciones y formalidades, las sustancias que hayan de ser analizadas.

Art. 5.º Queda derogado el decreto de 21 de Junio de 1873 en lo que fuere contrariado al presente.

Los ingenieros industriales, que lo sean en química, están comprendidos en el decreto anterior y podrán efectuar las autopsias cadavéricas (Real órden de 16 de Junio de 1876, publicada en la *Gaceta* del 21 del mismo).

sea la naturaleza del delito que se persiga. Esta identificación debe procurarse por medio del reconocimiento de la persona de aquél, de los testigos de conocimiento que ofreciere, de las señas personales y la certificación del registro civil ó partida de bautismo de su nacimiento, y en su defecto, por los medios que parecieren oportunos y que suministre la policía judicial.

¿Cuándo debe tener lugar el reconocimiento del procesado, y en qué forma?—Tan pronto como resultare algun cargo ó circunstancia que pueda servir para su fundamento, contra determinada persona, el juez instructor acordará el reconocimiento de ésta, bastando para que se efectúe que el querellante ó el testigo la hayan visto alguna vez. Cuando los que hubieren de practicar la diligencia afirmaren que no conocen ni reconocerían á aquél, dando de tal afirmación razón satisfactoria, no se acordará el reconocimiento.

Esta diligencia se practicará poniendo á la vista del que hubiere de ejecutarla la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en union con otras de circunstancias exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, ó desde un punto en que no pudiese ser visto, según al juez instructor pareciere más conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda ó grupo la persona á quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente. Todas las circunstancias del acto, así como los nombres de los que hubiesen formado la rueda ó grupo, constarán por diligencia.

¿Cómo debe practicarse el reconocimiento cuando fuesen varios los que hubiesen de reconocer á una persona, ó vice-versa?—En el primer caso, separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya verificado el último reconocimiento. Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

¿Qué precauciones deben tomarse para asegurar un resultado cierto á la diligencia de reconocimiento?—Procurar que todo detenido ó preso, ni al serlo, ni en los depósitos ó cárceles á que fuere conducido, haga en su persona ó trage alteración alguna que pueda dificultar su reconocimiento, cuidando los alcaldes y jefes de los establecimientos en donde haya trage reglamentario, de conservar el que lleven aquéllos al ingresar en el establecimiento, á fin de que puedan vestirlo cuantas veces fuere conveniente.

¿Cómo se suple la falta de inscripción ó partida de bautismo del procesado, cualquiera que sea la causa que la motive?—Por informe que acerca de su edad, y previo examen físico, darán dos médicos nombrados por el juez instructor, sin que dicha falta ni el tiempo necesario para obtener la certificación, puedan detener la instrucción, designando al procesado, hasta que se obtenga, con el nombre con que fuere conocido, ó con el que él mismo dijere tener.

¿Qué otros antecedentes deben traerse al sumario?—1.º, informes fundados de los alcaldes de barrio ó funcionarios de policía de los pueblos en que hubiese residido el procesado, sobre la moralidad de éste, acerca de cuya conducta puede el juez interrogar á las personas conocidas de aquél; 2.º, antecedentes penales del mismo por medio de testimonio de las sentencias firmes dictadas contra él, según lo que resultare en los libros de penados y en el libro especial de condenas y de índole reservada que habrá en el registro civil de la localidad en que hubiese nacido el procesado.

¿Cómo habrá de formarse este libro?—Extractando la sentencia condenatoria de los testimonios que los tribunales deben remitir de oficio al juez municipal de dicho punto, tan luego como aquélla fuere firme. El juez conservará los testimonios en legajos. Si el condenado no hubiere nacido en

España ó no constare el punto de su nacimiento, el testimonio referido se remitirá á la Direccion general del Registro civil, que procederá del modo y forma prescritos.

¿Per qué medios debe apreciarse el discernimiento de los delincuentes mayores de nueve años y menores de quince?—Por medio de informacion de personas que puedan deponer con acierto, por sus circunstancias personales y por las relaciones que hayan tenido con el procesado, antes y despues de haberse ejecutado el hecho. En su defecto se nombrarán dos profesores de instruccion primaria para que, examinando al procesado, emitan su dictámen.

¿Qué debe hacerse con el procesado que mostrase indicios de enajenacion mental?—Someterle inmediatamente á la observacion de dos médicos en el establecimiento en que estuviere preso, ó en otro público, si fuere más apropiado ó estuviere aquél en libertad. Sin perjuicio de esto, el juez instructor recibirá informacion acerca de la enajenacion mental.

¿Qué efectos produce en la tramitacion la existencia de algun indicio de criminalidad contra determinada persona?—Autoriza para dictar auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo que quedan referidos, y en los demás de que nos ocuparemos.

Declaraciones é incomunicacion de los procesados.

A la declaracion prestada por los tratados como reos, acerca de los hechos sumariados y de la responsabilidad que pudiera caberles, se les conocia con los nombres de *indagatoria*, *inquisitiva* ó simplemente *declaracion de inquirir*. La nueva ley de Enjuiciamiento criminal no la designa con nombre especial.

¿Tienen obligacion de declarar los procesados?—Deben prestar cuantas declaraciones el juez instructor considere convenientes para la averiguacion de los hechos, sin excusarse de contestar á las preguntas que les dirigiere el juez ó con la vénia de éste, el fiscal ó el querellante particular, aunque considere á aquél incompetente, si bien podrá protestar la incompetencia, consignándose asi en los autos.

¿Puede exigirsele juramento?—No: debe exhortárseles solamente á decir verdad.

¿Debe nombrarse curador al que sea menor de edad?—Es cuestionable la necesidad de este requisito, visto el silencio de la ley de Enjuiciamiento criminal. Nosotros, y con nosotros algunos articulistas respetables, opinamos que hoy no es necesaria esa formalidad, la cual no tiene razon atendible que la sostenga actualmente (1).

¿Debe ofrecerse la causa, necesariamente, á los procesados?—Tampoco juzgamos trámite de rigor éste, dadas las disposiciones de la precitada ley, que no lo exigen, ni comprendemos que sea necesario.

¿Cuándo debe recibirse la primera declaracion al detenido?—Dentro del término de veinticuatro horas, prorogables por otras curenata y ocho si mediase causa grave, la cual se expresará en la providencia en que se acordase la próroga.

¿Qué preguntas deben contener y en qué forma deben hacérsele?—Las preguntas serán *generales* y *especiales*. Son generales las que se refieren al nombre, apellidos paterno y materno, apodo, si lo tuviere, naturaleza, ve-

(1) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 29 de Octubre de 1872, que la falta de curador no es motivo de casacion, ni en la forma, ni en el fondo.

cidad, estado, profesion; arte, oficio ó modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué tribunal, qué pena se le impuso y si la cumplió, y si sabe leer y escribir. Son especiales las que nacen de la indole y naturaleza del hecho punible que se dirijan á su averiguacion y á la participacion que en él haya tenido el procesado y demás personas responsables. Las preguntas serán directas, sin que por ningun concepto puedan hacerse de un modo capcioso ó sugestivo, ni emplear con él género alguno de coaccion ó amenaza, suspendiendo el exámen y concediendo al procesado algun descanso si hubiese perdido la serenidad de juicio por el mucho tiempo empleado ó el número de preguntas.

¿Qué derechos y preeminencias tiene el procesado relativas al acto de declarar?—Puede manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpacion ó para la explicacion de los hechos, evacuándose con urgencia las citas que hiciere y las demás diligencias que propusiere, si fueren pertinentes; dictar por sí, leer ó pedir que lean su declaracion y las anteriores; declarar cuantas veces quisiera ante el juez instructor, y exigir que no se le hagan cargos ni reconvencciones; declarar en el idioma que le fuere propio, sin perjuicio de hacerlo por medio de intérprete.

¿Dónde debe declarar el procesado?—Generalmente en el local del juez de instruccion. Pero éste puede interrogarle en el mismo lugar en que hubiesen ocurrido los hechos ó ante las personas y las cosas que juzgue conveniente, mandando que el preso sea conducido, al efecto.

¿Qué es *incomunicacion*?—El aislamiento en que se pone al procesado, con privacion expresa de no ver y hablar á persona alguna más que al juez, á los dependientes encargados de su guarda y á aquél á quien autorice dicha autoridad. Se le permitirá, sin embargo, el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, con tal que no puedan servir de medio para eludir la incomunicacion ó para atentar contra su vida, despues que el juez instructor los haya reconocido y autorizado su introduccion.

¿Quién debe decretar la incomunicacion y por qué tiempo?—Solamente el juez que instruya las diligencias, cuando para ello existiere causa bastante, que se expresará en el auto. No pasará del tiempo absolutamente preciso para la práctica de las diligencias que la hubiesen motivado, y en ningun caso podrá exceder de *cuatro* dias, si bien podrá acordarse nuevamente, en auto motivado, por otros cuatro, bajo la responsabilidad del juez instructor. Por la legislacion antigua podia llegar á *veinte* dias continuados, sin perjuicio de acordarla nuevamente, por igual término, como suele ser á veces necesario. No hay duda que es inhumano y hasta cierto punto injusto, imponer una privacion tan horrible, más grave en algunos casos que la pena á que se habian hecho acreedores los incomunicados. Estos términos eran incompatibles con el respeto y consideracion que las leyes modernas tributan á la personalidad humana, teniendo en cuenta la situacion legal de los procesados sobre quienes no ha recaido, ni ha podido recaer todavía, sentencia firme condenatoria.

¿Tienen derecho á conocer los fundamentos de la incomunicacion?—No. La ley prohíbe que se les lean y que se les dé copia del auto en que se acuerde, al ser notificados. Así puede evitarse que alguna vez y por cualquier medio, quebrantando la incomunicacion, frustren las miras del juez y hagan inútiles los esfuerzos y los medios de investigacion.

L 33

De los testigos.

Al tratar de este medio de prueba en el procedimiento civil (1) hemos dicho quiénes son los *testigos*. Ahora añadiremos que todos los residentes en territorio español, nacionales ó extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado en materia criminal, si para ello se les citase con las formalidades prescritas por la ley. Hay, no obstante, personas exceptuadas absolutamente de aquella obligación y otras que lo están de concurrir al llamamiento, pero no de declarar.

¿Quiénes están exentos absolutamente?—El rey y el regente del reino.

¿Quiénes lo están de concurrir al llamamiento, pero no de declarar?—

1.º, las demás personas reales; 2.º, los ministros de la corona; 3.º, los presidentes del Senado y del Congreso de los diputados; 4.º, el presidente del Consejo de Estado; 5.º, las autoridades judiciales de categoría superior á la del que recibiere la declaración; 6.º, el gobernador de la provincia y el capitán general del distrito en cuyo territorio se hubiere de recibir la declaración; 7.º, los embajadores y demás representantes diplomáticos acreditados cerca del gobierno español; 8.º, los capitanes generales del ejército y armada; 9.º, los arzobispos y obispos (2).

El juez pasará al domicilio de estas personas, previo aviso, á recibirles declaración. Su resistencia ó negativa á declarar se pondrá en conocimiento del Tribunal Supremo, excepto cuando fueren representantes diplomáticos extranjeros, en cuyo caso el juez de instrucción lo pondrá en conocimiento del ministro de Justicia, absteniéndose de proceder contra aquéllas.

¿Qué personas, sin embargo de lo dicho, pueden declarar por informe escrito?—Las comprendidas en los números 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de la pregunta anterior, sobre los hechos de que tuvieren conocimiento por razón de sus cargos.

¿Quiénes no están obligados á declarar?—El cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos del procesado.

¿Qué medidas pueden adoptarse contra los testigos que no concurren ó se resisten á declarar, cuando no están exceptuados por la ley?—El que sin estar impedido no concurre al primer llamamiento judicial, ó se resistiere á declarar lo que supiere sobre los hechos por que fuere preguntado, incurrirá en la multa de 25 á 250 pesetas, que se impondrá en el acto; y si persistiere en su resistencia será conducido en el primer caso á la presencia del juez instructor por los dependientes de la autoridad, y procesado por el delito de desobediencia, y en el segundo caso será también procesado por el delito de resistencia á la autoridad.

(1) Véase la pág. 79.

(2) Aunque los empleados diplomáticos extranjeros no están comprendidos en estas excepciones, suele consignarse ese privilegio en los tratados especiales que se convienen con las naciones á quienes representan.

La Real orden de 22 de Febrero de 1855 que concedía á los jefes militares, desde comandante arriba, el privilegio de prestar sus declaraciones en asuntos criminales en la sala primera de las audiencias ó en las casas del ayuntamiento donde no hubiere audiencia, ha sido derogada expresamente por el gobierno de la República, de conformidad con el art. 377 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que no los declara exceptuados; dejando, no obstante, subsistente lo prescrito en el art. 10, tit. 1.º, tratado 8.º de las ordenanzas del ejército, que prescribe que las citaciones de los indicados militares se hagan por conducto de sus jefes; cuyas disposiciones se recordaron por el ministerio de Gracia y Justicia al presidente de la audiencia de Madrid con la fecha 5 de Octubre de 1877.

Quando el testigo sea vecino de otra circunscripcion debe indemnizársele prudencialmente á juicio del instructor.

¿Dónde deben recibirse las declaraciones de los testigos?—Ante el juez de instruccion, ó municipal en su caso, y por regla general donde aquéllos tengan su asiento. Si el testigo estuviere físicamente impedido, el juez se constituirá en su domicilio. Si residiere fuera de la circunscripcion ó término municipal, el juez se abstendrá de mandarle comparecer á su presencia, á no ser que lo considerase absolutamente necesario, ordenándolo en este caso por auto, y comisionará para recibir la declaracion al que lo fuere del término municipal ó de la circunscripcion en que el testigo residiere.

¿Cómo deben citarse los testigos?—En la forma general que hemos expuesto para las citaciones (1). En los suplicatorios, exhortos y mandamientos para declaracion de testigos se hará constar su nombre, apellido y edad y las preguntas que deben hacérseles, sin perjuicio de las que considere convenientes el juez ó tribunal comisionado. Los testigos podrán ser citados personalmente, donde fueren habidos, y aun verbalmente, para que comparezcan en el acto cuando sea urgente su exámen, en cuyo caso tambien podrá constituirse el juez de instruccion en el domicilio del testigo ó en el punto en donde se encontrare. Las citaciones podrán hacerse por los agentes de policia, habilitados al efecto por el juez.

¿Qué diligencias deben practicarse cuando el testigo no tenga domicilio conocido ó se ignore su paradero?—El juez instructor ordenará lo conveniente á los funcionarios de policia ú oficiará á la autoridad administrativa, para que lo averigüen y le den parte del resultado dentro del plazo que les hubiese fijado. Trascurrido éste, se publicará la cédula de citacion en el periódico oficial del pueblo de la residencia del juez, y en su defecto en cualquiera otro que allí se publicare, y se insertará, si el juez lo estima conveniente, en los periódicos oficiales ó particulares de la capital de la provincia y del lugar donde se presume hallarse el testigo y en la *Gaceta de Madrid*, uniéndose á los autos un ejemplar de cada periódico.

¿Con qué requisitos deben recibirse las declaraciones de los testigos y en qué forma?—Los testigos habrán de declarar separada y secretamente, á presencia del juez instructor y del secretario. Si lo hicieren en otra forma, salvo los casos especiales señalados en la ley, será corregido disciplinariamente el juez instructor, á no ser que incurriese en responsabilidad criminal por la falta.

Al presentarse á declarar entregarán al secretario la copia de la cédula de citacion.

El juez les instruirá de la obligacion que tienen de ser veraces y de las penas señaladas para el delito de falso testimonio en causa criminal, recibiendo enseguida juramento á los testigos púberes. A los impúberes no se les exigirá, pero se les instruirá tambien de la obligacion en que están de decir cuanto supieren, sobre lo que fuere objeto de la declaracion.

El testigo manifestará primeramente su nombre, apellido, edad, estado y profesion, si conoce ó no al procesado y á las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad ó enesmistad, ó relaciones de cualquiera otra clase, debiendo advertirsele que no tiene obligacion de declarar en contra del procesado, si es de las personas excluidas por la ley. Despues manifestará cuanto supiere, por el órden de las preguntas que le hiciere el juez instructor, expresando la razon de su dicho. Si la declaracion es por resultado de alguna cita, no se leerá al testigo la diligencia en que aquélla se hubiese hecho.

(1) Página 139.

No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle ó inducirle á declarar en determinado sentido. Finalmente, no se harán tachaduras, enmiendas ni entrerenglonaduras en las diligencias de declaración, salvándose al final las equivocaciones que se hubiesen cometido.

Respecto á los casos en que el testigo no entendiere ó no hablare idioma español ó fuere sordo-mudo, se practicarán las diligencias que hemos indicado al enumerar anteriormente las preeminencias de los procesados en el acto de la declaración. Los testigos, en cuanto á ésta, tienen los mismos derechos que los procesados.

¿Cómo debe prestarse el juramento?—En nombre de Dios, y si á esto se resistieren los testigos por razon de sus creencias, lo prestarán por su honor.

¿Qué intérprete debe intervenir en la declaración de los extranjeros?—Será elegido entre los que tuvieren título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquiera persona que lo sepa. Para los sordo-mudos será nombrado un maestro titular de sordo-mudos, y en su defecto, cualquiera que supiere comunicarse con el testigo, los cuales prestarán juramento á presencia de éste.

¿Qué obligación impone la nueva ley á los testigos?—La de comparecer para declarar nuevamente ante el tribunal competente cuando se les citare para ello; y la de poner en conocimiento de dicho juez instructor los cambios de domicilio que hicieren hasta ser citados para el juicio oral, bajo apercibimiento, si no lo cumplieren, de una multa de 25 á 250 pesetas, á no ser que incurrieren en responsabilidad criminal por la falta.

Estas prevenciones se harán constar al final de la declaración, y el juez de instrucción, al remitir el sumario al tribunal competente, habrá de poner en su conocimiento los cambios de domicilio que los testigos le hubiesen participado ó le participen despues.

¿Qué debe hacerse cuando el testigo manifestare su ausencia de la Península ó cuando se temiera su muerte ó incapacidad antes de la apertura del juicio oral?—El juez instructor hará saber al reo que nombre abogado, en el termino de veinticuatro horas, para que le acompañe y aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. Trascurrido dicho termino, el juez volverá á juramentar y á examinar á éste á presencia del procesado y de su abogado defensor, si concurriere, permitiendo á éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que el juez repeliere como manifestamente impertinentes, cuyas contestaciones se consignarán. La diligencia será firmada por todos los asistentes.

En caso de inminente peligro de muerte del testigo, se podrá prescindir del abogado.

L. 933

De la diligencia de careo.

¿Qué es el careo?—Un acto solemne en que dos ó más personas divergentes en sus declaraciones, intentan conciliarlas y combinar sus dichos para hacer desaparecer la contradicción que de ambas resultan. Cuando los testigos ó los procesados entre sí, ó aquéllos con éstos discordaren acerca de algun hecho ó de alguna circunstancia que interese en el sumario, podrá el juez instructor celebrar careo entre los que estuvieren discordes, cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados.

¿Cómo debe practicarse?—El careo se verificará ante el juez instructor, leyendo el secretario á los procesados ó testigos entre quienes tenga lugar el acto, las declaraciones que hubiesen prestado, y preguntando á los segundos, despues de recordarles su juramento y las penas del falso testimonio, si se ratifican en ellas ó tienen alguna variacion que hacer. El juez instructor manifestará enseguida las contradicciones que resulten en dichas declaraciones, é invitará á los careados á que se pongan de acuerdo entre sí, no permitiendo que se insulten ó amenacen. De todo se extenderá minuciosa diligencia, que firmarán los concurrentes.

Este medio de comprobacion judicial no debe prodigarse, porque sus resultados útiles son poco frecuentes. Debe practicarse solamente cuando no hubiere ó no fueren conocidos otros medios de justificar la existencia del delito, ó la culpabilidad de los procesados.

Del informe pericial.

Recibe este nombre la declaracion jurada ó juicio de personas peritas, sobre hechos ó cosas que caen bajo la competencia de sus estudios científicos. Por tanto, el juez instructor ordenará proceder al informe pericial cuando para conocer ó apreciar algun hecho ó circunstancia importante en el sumario, fueren necesarios ó convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia ó arte.

¿Cuántas clases hay de peritos?—Dos: titulares y no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia ó arte, cuyo ejercicio esté reglamentado por la administracion. Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos ó práctica suficientes en aquéllas.

¿Cuántos peritos deben practicar el reconocimiento pericial?—Dos titulares si los hubiere, y si no, uno sólo. Cuando no los hubiere titulares, ó cuando el juez creyere que son más apropósito los no titulares, puede valerse de éstos con preferencia á aquéllos.

¿Es obligatorio y remunerado el servicio pericial?—Nadie podrá negarse á prestarlo no estando legítimamente impedido, circunstancia que el llamado deberá poner inmediatamente en conocimiento del juez instructor. En caso de desobediencia ó resistencia, incurre en una multa de 25 á 250 pesetas, impuesta en el acto, con apercibimiento de procesarle por desobediencia ó resistencia. Están, sin embargo, exceptuados de la obligacion el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos del procesado, cuyo parentesco deben noticiar al juez, bajo la multa y apercibimientos dichos, antes de prestar el informe pericial. En cuanto á la remuneracion, sólo tendrán derecho á reclamar sus honorarios ó indemnizaciones los peritos que prestaren informe en virtud de orden judicial, si no tuvieran, en concepto de tales, retribucion fija del Estado, la provincia ó el municipio.

¿Son recusables los peritos?—Si el reconocimiento é informe pericial pudiere tener lugar de nuevo en el juicio oral, no (1). Si no pudiere reproducirse en él, podrán ser recusados por las partes, por alguna de las causas siguientes: 1.^a, el parentesco de consanguinidad ó de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante ó con el reo; 2.^a, el interés directo ó in-

(1) Este supuesto no puede darse hoy porque está en suspenso el juicio oral; pero puede aplicarse al plenario de las causas.

directo en la causa ó en otra semejante; 3.^a, la amistad íntima ó enemistad manifiesta.

¿Cuándo debe interponerse y se decide el incidente de recusacion?—Debe interponerse por escrito, y aún sin procurador, antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusacion y la prueba testifical que ofreciere, y acompañando la documental que tuviere. El juez instructor, sin levantar mano, examinará los documentos que produjere el recusante, y oirá á los testigos que presentare en el acto, resolviendo si há ó no lugar á la recusacion. En el primer caso nombrará otro, y en el segundo continuará la diligencia.

¿Qué derecho tienen las partes cuando el reconocimiento de peritos no puede reproducirse en el juicio oral?—El de nombrar, á su costa, antes de empezar el reconocimiento, un perito que intervenga en el acto pericial, debiendo manifestar al juez el nombre de aquél y los comprobantes de su título, cuando lo tenga (1).

¿Cómo debe practicarse el reconocimiento?—Juramentados los peritos, el juez instructor les manifestará verbalmente ó por escrito, clara y determinadamente el objeto de su informe, procediendo enseguida á verificar la operacion, á que podrá concurrir el querellante y el procesado con sus representaciones, cuando el acto no puede reproducirse en el juicio oral, siendo presidido por el juez, asistido del secretario. Las partes podrán hacer á los peritos las observaciones que estimaren convenientes, haciéndose constar todas en la diligencia.

¿Qué puntos debe comprender, siendo posible, el informe pericial?—1.^o, una descripción de la persona ó cosa que deba ser objeto del mismo, en el estado ó del modo en que se hallare, que será redactada por el secretario, al dictado de los peritos, y suscrita por todos los concurrentes; 2.^o, una relacion detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, que se redactará y autorizará en la misma forma; 3.^o, las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos, conforme á los principios y reglas de su ciencia ó arte, prescindiendo de hipótesis científicas y de teorías no demostradas, y concretándose á consignar sus conclusiones con arreglo á verdades incontrovertidas ó á lo ménos generalmente aceptadas.

¿Cómo se dirime la discordia de los peritos informantes?—Nombrando el juez de instruccion otro, cuando el número de aquéllos fuere par, el cual, despues de repetirse las operaciones, si esto fuere posible, y no siendo, despues del exámen de las diligencias y de deliberar con los informantes, formulará y fundará sus conclusiones.

¿Quién debe facilitar los medios materiales necesarios para el acto pericial?—El juez instructor, que los reclamará de la administracion pública ó de la autoridad correspondiente, si existiesen preparados para tal objeto (2).

(1) Véase la nota anterior.

(2) Véanse las notas anteriores relativas á médicos forenses y análisis químicos. A toda consulta que haya de hacerse á la Academia de medicina de Madrid, debe preceder dictámen del cuerpo de médicos forenses de dicha capital sobre el punto consultado. (Real orden de 23 de Octubre de 1863.)

PRIVACION PROVISIONAL DE LA LIBERTAD DE LOS PROCESADOS (1)

Y FIANZAS PROCESALES.

Los principios fundamentales que rigen esta importante materia, están consignados en los arts. 4.º y 5.º de la Constitución del Estado de 1876. En el primero se dice que ningún español ni extranjero podrá ser *detenido* sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban; y en el segundo se declara que ningún español podrá ser *preso*, sino en virtud de mandamiento de juez competente, cuyo auto ha de ratificarse ó reponerse, oído el presunto reo, dentro de las 72 horas siguientes al acto de la prision. Hecha la prision sin estas formalidades, debe acordarse la libertad, sumariamente, á petición del interesado ó de cualquier español.

De la detencion.

¿Qué es detencion?—La privacion de libertad, sin que preceda, generalmente, informacion ni mandato judicial. Presupone, sin embargo, motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido es responsable criminalmente. La detencion *debe* realizarse por la autoridad y por la policía judicial, y *puede* efectuarse por cualquiera persona, segun los casos.

¿Quiénes *pueden* ser detenidos por cualquiera persona?—Los siguientes: 1.º, el que intentare cometer un delito, en el momento de ir á cometerlo; 2.º, el delincuente *in fraganti*; 3.º, el que se fugare del establecimiento penal en que se hallare extinguiendo condena, ó esperando su traslacion á otro, ó se fugare al ser conducido al mencionado establecimiento, ó estando preso por causa pendiente; 4.º, el procesado ó condenado que estuviere en rebeldia. El detenido puede exigir del particular que le detuviere, que justifique los motivos, racionalmente suficientes, fundamento de la detencion.

¿Quiénes *deben* ser detenidos por la autoridad ó agentes de la policía judicial?—1.º, todos los que hemos dicho podian serlo por cualquiera persona; 2.º, el que estuviere procesado por delito que tuviere señalada en el Código pena superior á la de confinamiento; 3.º, el procesado por delito á que estuviere señalada pena inferior, si sus antecedentes ó las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial, exceptuándose el procesado que prestare en el acto fianza bastante, á juicio de la autoridad ó agente, para presumir racionalmente que comparecerá al ser llamado; 4.º, el que estuviere en el caso anterior, aunque todavía no se hallare procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: primera, que la autoridad ó agente

(1) Cuando las personas detenidas ó presas sean militares en servicio activo, deben sufrir la detencion y prision en los establecimientos militares destinados á este objeto. (Circular del ministerio de la Guerra de 13 de Febrero de 1875.)

tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito; segunda, que los tenga tambien bastantes para creer que la persona á quien intente detener tuvo participacion en él.

¿Procede la detencion por simples faltas?—No, á no ser que el presunto reo no tuviere domicilio conocido y no diere fianza bastante, á juicio de autoridad ó agente que intentare detenerle (1). Aquella prohibicion, resultado del precepto terminante de la Constitucion de 1869, que decia, que ningun español ni extranjero podia ser detenido ni preso *sino por causa de delito*, ha sido modificada, al ménos formulada en términos más amplos y sujetos á una interpretacion más extensiva, segun dejamos consignado en el primer párrafo de este capítulo.

¿Qué deberes inmediatos debe cumplir toda autoridad, agente de policía ó particular, que detuviere á una persona?—Habrá de entregarla *inmediatamente* al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detencion. Si demorare innecesariamente la entrega, incurrirá en la multa de 25 á 250 pesetas, á no ser en el caso en que incurriese en las responsabilidades pecuniaria y penal que fijan la Constitucion del Estado y el Código penal, si la dilacion hubiere excedido de veinticuatro horas (2).

¿Cuándo debe elevarse la detencion á prision, y qué deben hacer los jueces ó tribunales á quienes se entregan los detenidos?—La detencion debe elevarse á prision ó dejarse sin efecto, acordando la libertad del detenido, en el término de setenta y dos horas, por el juez ó tribunal á quien se le hubiese entregado ó que hubiese acordado la detencion, á contar desde la entrega (3). Cuando el detenido fuere un preso fugado, teniendo causa pendiente, procesado en rebeldía ó por delito castigado con pena superior á la de confinamiento, ó que, siendo inferior, sus antecedentes ó las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá al ser llamado judicialmente, y el juez á quien se le haya entregado sea distinto del de instruccion del tribunal que conociere de la causa, extenderá aquél una diligencia expresiva de la persona que hubiere hecho la detencion, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla é identificarla, de los motivos que ésta manifestare haber tenido para la detencion y del nombre, apellido y circunstancias del detenido, cuya diligencia firmarán el juez, el secretario, la persona que hubiese ejecutado la detencion y las demás concurrentes.

Inmediatamente despues serán remitidos el expediente y la persona del detenido, á disposicion del juez instructor ó tribunal que conociere la causa.

Si el detenido lo hubiese sido *in fraganti*, ó por intentar cometer un delito, ó renunciare las circunstancias del número 4.º de los casos en que las autoridades deben acordar la detencion (4), el juez á quien se hubiere entregado, si no lo fuese el de instruccion competente para la formación del sumario, practicará las primeras diligencias y elevará la detencion á prision ó decretará la libertad del detenido, segun procediere, en el término señalado de sesenta y dos horas, y remitirá las diligencias y la persona del preso, si lo hubiere, á disposicion del juez de instruccion competente.

Quando el detenido lo hubiese sido por haberse fugado de algun establecimiento penal, ó al ser conducido á él, ó estuviere condenado en rebel-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Junio de 1875.

(2) Véase lo dicho en la seccion de Derecho penal, al tratar de los delitos cometidos contra los derechos individuales.

(3) El art. 5.º de la Constitucion de 1876, dice que deben ser las 72 siguientes al acto de la prision.

(4) Véase el párrafo 4.º de este capítulo.

día, el juez á quien se hubiese entregado, ó que hubiese acordado la detencion, dispondrá que inmediatamente sea remitido, con la seguridad necesaria, al establecimiento ó lugar donde debiere cumplir su condena.

¿Qué circunstancias debe tener el auto en que se eleve la detencion á prision?—Debe ser fundado y mandar que se ponga en conocimiento del ministerio fiscal y se notifique al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, haciéndole saber el derecho que le asiste para pedir por sí mismo, de palabra ó por escrito, la reposicion de dicho auto, consignándose en la notificacion las manifestaciones que hiciere.

Antes de terminar esta materia, debemos manifestar á nuestros lectores que, si el proyecto de ley sobre prisiones preventivas pendiente de discusion en el Congreso, llega á ser ley antes de terminar la impresion de este libro, lo publicaremos en el *apéndice*.

De la prision (1) y de las fianzas de estar á juicio.

¿A qué se llama *prision* de los procesados?—A la privacion de libertad, decretada en auto judicial motivado, por consecuencia de un delito grave. Es un trámite del procedimiento que no puede, ni debe, confundirse con la pena de *prision* que se impone y sufre por virtud de una sentencia firme, previos los trámites de un juicio, y por eso se llama *prision provisional*.

¿Quiénes pueden decretarla?—Mientras que la causa se hallare en estado de *sumario*, solamente podrá decretar la prision provisional el juez de instruccion ó el que formare las primeras diligencias. Cuando se entrare en el período del *juicio oral*, la prision, como la libertad provisional, serán decretadas solamente por el tribunal competente (2).

¿Qué circunstancias se requieren para decretarla?—1.^a, que conste en la causa la existencia de un hecho que represente los caracteres de delito; 2.^a, que éste tenga señalada pena superior á la de *prision mayor*, ó bien que, aunque tenga señalada pena inferior, considere necesaria el juez la prision provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que presente la fianza que se le señalare; 3.^a, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito á la persona contra quien se haya de dictar el auto de prision; 4.^a, que el procesado á quien sean aplicables los dos primeros números anteriores, no haya comparecido al primer llamamiento judicial. Se expedirán dos mandamientos, con insercion literal del auto, uno para el subalterno que haya de cumplirlo, y otro para el alcaide de la cárcel; y en caso necesario, se mandarán requisitorias que se publicarán en los *diarios oficiales*, si el procesado no fuere habido ó se ignorase su paradero, á fin de llevar á efecto la prision.

(1) El decreto de 30 de Setiembre de 1853 declaraba cuándo procedía el auto de prision de los procesados, los casos en que eran admisibles las fianzas y los en que aquella procedía siempre y no podía evitarse con éstas, cualquiera que fuera la pena correspondiente, como sucedía con el robo, el hurto, la estafa, la vagancia, el atentado contra la autoridad, el desacato grave á la misma y las lesiones peligrosas, mientras no desapareciera el peligro. La ley de Enjuiciamiento criminal ha modificado esencialmente, como veremos, las disposiciones de dicho decreto, en materia tan importante y de tanta responsabilidad para los tribunales.

(2) Como el juicio oral está en suspenso y despues del sumario la causa continúa sustanciándose hasta la sentencia, ante el mismo juez de instruccion, que dá el de primera instancia, á éste corresponde, por lo mismo, acordar cuanto concierne á la prision, libertad y fianzas de los procesados, mientras la causa no se remita á la audiencia, en consulta del fallo.

¿Cuándo deben *ratificarse*, y á quién es menester notificar los autos de *prision*?—Deben *ratificarse* en todo caso ó reponerse en las setenta y dos horas siguientes á la en que se hubiese puesto al procesado á disposicion del juez ó tribunal que hubiere dictado el auto (1), el cual, así como el de *ratificacion* y el de *soltura* en su caso, se notificarán al querellante, si lo hubiere, y al procesado, y se pondrá en conocimiento del ministerio fiscal, expidiendo al alcaide la correspondiente orden dentro de las mismas setenta y dos horas.

¿Qué recurso cabe contra los autos de *ratificacion* y de *soltura*?—El de *apelacion*.

En qué casos puede admitirse fianza para continuar el procesado en *libertad provisional*?—Cuando la pena señalada al delito por que se procede es inferior á la de *presidio mayor*, en cuyo caso el juez ó tribunal decretará si el procesado ha de darla ó no, fijando su calidad y cantidad. Este beneficio no es aplicable á los fugados del establecimiento penal en que cumplan condenas, ni á los procesados que no hayan comparecido al primer llamamiento judicial. El auto en que se decreta la fianza debe notificarse á las partes y es apelable.

¿Qué consideraciones deben tenerse presentes para determinar la cantidad y calidad de la fianza, y de cuántas clases puede ser ésta?—Se tomará en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado y todas las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor ó menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial.

La fianza podrá ser *personal* ó *hipotecaria*, y podrá constituirse en metálico ó en efectos públicos al precio de cotizacion, depositándose en el establecimiento destinado al efecto. Cuando se declare bastante la fianza *personal* se fijará tambien la cantidad de que el fiador ha de responder.

¿Quiénes pueden ser *fiadores personales*?—Cualquier español mayor de edad, con domicilio conocido, siempre que sea contribuyente al Tesoro por cualquier concepto (2.)

¿Qué bienes son admisibles para la fianza y en qué proporcion de valores?—Tanto los inmuebles, metálico ó efectos públicos del procesado, como los de otra persona.

La fianza *hipotecaria* podrá sustituirse por la metálica ó de efectos públicos, y vice-versa, guardando la proporcion siguiente: el valor de los bienes de la hipoteca será dos veces mayor que el del metálico señalado para la fianza; y una mitad más que éste, el de los efectos públicos al precio de cotizacion.

¿Qué deberes impone al procesado el estado de *libertad provisional*?—Haya ó no dado fianza, debe presentarse al juez ó tribunal en los dias que se le señalaren en el auto de fianza y cuantas veces fuere llamado, á lo cual se obliga *apud acta*, en una diligencia judicial.

¿Qué garantías establece la ley en las fianzas *hipotecarias*?—La tasacion de las fincas por peritos nombrados por el juez ó tribunal, y la suficiencia

(1) Siguientes al acto de la prision, dice el art. 5.º de la ley fundamental de 1876.

(2) La extension dada por la ley á la capacidad legal para ser fiadores ha producido malos resultados en la práctica, porque aquéllos ofrecen pocas garantías y suelen desaparecer con las mismas personas de cuya presentacion han salido garantes, no teniendo bienes con que responder.

de la titulación, que examinará el ministerio fiscal y declarará el juez ó tribunal. No es menester que se otorgue por escritura pública; podrá constituirse *apud acta*, é inscribirse en el Registro de la propiedad por virtud de mandamiento judicial.

¿Qué responsabilidad contrae el fiador de un procesado y cómo puede exigirse?—La obligación de presentar á éste, poniéndolo á disposicion del juez de la causa. Si el fiador, sea personal ó hipotecario, no presentare en el término de diez dias al procesado rebelde al primer llamamiento judicial, sin haber justificado la imposibilidad de comparecer, se procederá á hacer efectiva la fianza por la via de apremio, con intervencion del ministerio fiscal, declarándose adjudicada al Estado y haciéndose de ella entrega en la Administracion económica más próxima. Cuando los bienes de la fianza fueren de la propiedad del procesado, se realizará y adjudicará ésta al Estado inmediatamente que aquél dejare de comparecer al llamamiento judicial, ó de justificar la imposibilidad de hacerlo.

¿Qué recursos pueden ejercitarse contra los autos de prision y libertad provisionales y de fianza?—El de reforma y el de apelacion: el primero podrá emplearse de oficio y ser interpuesto durante todo el curso de la causa. En su consecuencia, el procesado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces se considere procedente, y la fianza podrá ser aumentada ó disminuida, segun se estimare necesario para asegurar las resultas del juicio.

Una importante novedad ha hecho la ley de Enjuiciamiento criminal respecto á la situacion en que debe permanecer el procesado, hasta el momento de prestar la fianza. El derecho anterior establecia (1) que si los procesados que debian otorgarla para continuar en libertad, no la habilitasen en el acto de ser requeridos, fueran reducidos *preventivamente* á prision, de la cual saldrian luego que prestasen aquella. La ley moderna, por el contrario, dispone que, entretanto que el procesado no presentare ó ampliare la fianza, en el término que se le señale, no será reducido á prision provisional; modificacion justa y equitativa que facilita la busca y la prestacion de las fianzas.

¿Cuándo debe cancelarse la fianza?—1.º, cuando el fiador lo pidiere, presentando á la vez al procesado; 2.º, cuando éste fuere reducido á prision provisional; 3.º, cuando se dictare auto firme de sobreseimiento ó sentencia firme absolutoria, ó cuando, siendo condenatoria, se presentare el reo llamado para cumplir la condena, y 4.º, por muerte del procesado, estando pendiente la causa. Si se hubiese dictado sentencia firme condenatoria y el procesado no compareciere al primer llamamiento, ó no justificare la imposibilidad de hacerlo, se adjudicará la fianza al Estado.

¿Qué derechos tiene el fiador respecto á la fianza adjudicada?—Ninguno. Solo puede reclamar su indemnizacion del mismo procesado ó de sus causa-habientes.

Para mayor claridad y no interrumpir el curso del procedimiento en lo principal, todas las diligencias de prision y libertad provisionales y fianzas se susanciarán en pieza separada.

Entrada y registro en lugar cerrado.

Desde la promulgacion de la Constitucion política de 1869, el domicilio de las personas ha sido objeto de grandes consideraciones y de profundo

(1) Art. 4.º del decreto de 30 de Setiembre de 1856.

respeto por la ley, que han sido confirmadas, aunque de un modo más genérico, en la Constitución de 1876 (1). Pero tales consideraciones no podían ser extensivas á los lugares y edificios *públicos*, cuando la autoridad competente tuviere indicios de encontrarse en ellos el procesado, ó algun objeto ó prueba del delito, pudiendo entonces procederse al registro *de día ó de noche* indistintamente.

¿Qué edificios ó lugares deben reputarse *públicos* para el efecto indicado?—Se reputarán edificios ó lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este capítulo: 1.º, los que estuvieren destinados á cualquier servicio oficial, militar ó civil, aunque habiten allí algunos empleados ó dependientes; 2.º, los que estuvieren destinados á cualquier establecimiento de reunión ó recreo, fueren ó no ilícitos; 3.º, cualesquiera otros edificios ó lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular, y 4.º, los buques del Estado.

¿Qué se exige para el registro del palacio de los cuerpos colegisladores, templos y demás lugares religiosos, y edificios de los representantes extranjeros?—La autorización del presidente de los primeros, bastando pasar recado de atención á los encargados de los segundos. Para entrar y registrar en los edificios de los representantes de naciones extranjeras acreditados, les pedirá su *vénia* el juez instructor por medio de atento oficio, en el que les rogará que contesten en el término de doce horas. Denegada la *vénia*, ó trascurrido este término sin contestación, el juez instructor lo comunicará inmediatamente al ministro de Gracia y Justicia, empleando para ello el telégrafo, si lo hubiere. Absteniéndose hasta que el ministro le comunique su resolución, sin perjuicio de adoptar medidas de vigilancia, de entrar y registrar el edificio.

¿Cuándo, por qué causas y con qué solemnidades puede tener lugar la entrada y registro en el domicilio ó lugar cerrado de un particular español ó extranjero?—Sólo puede tener lugar, generalmente *de día*, siempre que existan los indicios que se requieren para el registro de los edificios *públicos*. Para que pueda efectuarse *de noche*, se exige que el particular, ó su representante, haya prestado consentimiento, tácito ó expresamente, ó que se den casos urgentes de incendio, inundación ú otro peligro análogo, ó de agresión ilegítima ó petición de auxilio, procedentes de adentro.

El auto en que se acuerde será fundado, determinará si ha de tener lugar solamente de día, y la autoridad ó funcionario que lo ha de practicar.

¿Qué lugares se reputan *domicilio* para los efectos del registro?—1.º Los palacios reales, estén ó no habitados por el monarca al tiempo de la entrada ó registro; 2.º, el edificio ó lugar cerrado, ó la parte de él destinada principalmente á la habitación; 3.º, los buques nacionales mercantes.

¿Gozan de las prerrogativas del domicilio las tabernas, casas de comida, posadas y fondas?—No se reputarán como domicilio de los que se encontraren ó residieren en ellas accidental ó temporalmente. Lo serán tan sólo de los taberneros, hosteleros, posaderos y fondistas, que se hallaren á su frente y habitaren allí con sus familias, *en la parte* del edificio á este servicio destinada.

¿Qué formalidades deben cumplirse para registrar los buques extranjeros, y las habitaciones y oficinas de los cónsules?—La autorización del comandante ó capitán, ó la de los cónsules y representantes de la nación á que pertenezcan los buques, si aquéllos se negaren á darla. Y para

(1) Art. 6.º Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ó extranjero residente en España, *sin su consentimiento*, fuera de los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes; casos que enumeraba el art. 5.º de la Constitución de 1869 y de que nos ocupamos en el texto. Téngase presente lo dispuesto en el Código penal.

entrar en las habitaciones y oficinas de los últimos, bastará pasarles previamente recado de atención, cuidando de observar las formalidades de la ley.

Después de notificado el auto en que se acuerde la entrada en el edificio público ó privado, se procederá á ejecutarlo, empleando para ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza; cuidando de practicar la diligencia á presencia del interesado, ó de la persona á quien encomendare sus veces, con arreglo á la Constitución, ó de una persona de su familia mayor de edad, ó de dos testigos vecinos, si aquél no concurriere ó no nombrase persona que le represente. La resistencia de los individuos de la familia ó de los testigos, constituye un delito de resistencia ó desobediencia á la autoridad, según los casos.

¿Qué debe hacerse cuando el registro comenzado *de día* no se hubiese terminado al concluir éste?—Debe suspenderse hasta el siguiente, sellando y cerrando los muebles ó locales en donde hubiese de continuarse, á menos que el interesado, requerido al efecto por el juez, consintiere la continuación de la diligencia. En caso de negativa, se adoptarán las medidas de vigilancia oportunas, y de todo, y de sus resultados, se tomará nota en el acta que se extenderá y firmarán los concurrentes.

Para el registro de edificios y otros lugares cerrados, por consecuencia ó en persecución de los delitos de defraudación y contrabando, hay que tener presente lo dispuesto en el artículo 47 del decreto de 20 de Junio de 1852.

Registro de libros y papeles.

Todos los libros y papeles de los particulares pueden ser registrados por virtud de auto judicial motivado; pero los de contabilidad no pueden ser objeto de registro sino en fuerza de *indicios graves* que indiquen un resultado importante para la causa, en virtud del cual el juez instructor podrá recoger los libros y papeles, que se foliarán, rubricarán y sellarán en todas sus hojas por los asistentes al acto.

¿Con qué formalidades debe practicarse el exámen del protocolo de los notarios ó de los libros del Registro de la propiedad ó civil?—El de los protocolos se hará en el edificio en que se custodien, pudiendo desglosarse la escritura matriz ó recogerse los documentos contra los cuales aparezcan indicios ó méritos bastantes para considerarla cuerpo del delito, dejando en todo caso testimonio literal, con intervención del ministerio fiscal. El de los libros del Registro de la propiedad y civil, se practicará también en el local en que estén situados (1).

¿Debe hacerse personalmente el registro del domicilio por el juez instructor?—No: puede delegar en el municipal, ó en cualquiera autoridad ó agente de policía judicial, y en el juez del territorio en que deba practicarse la diligencia.

¿Qué requisitos deben cumplirse forzosamente en todo registro de papeles y efectos?—Se verificará *siempre*, á presencia del interesado ó de un individuo de su familia, y en su defecto, de dos testigos vecinos del mismo pueblo (2).

(1) Ley del Notariado, arts. 32 y 225 de la ley Hipotecaria.

(2) Art. 6.º de la Constitución de 1876.

Detencion y exámen de la correspondencia.

Puede tambien ser detenida y examinada por mandato judicial consignado en auto motivado la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere ó recibiere, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento ó la comprobacion de algun hecho ó circunstancia importante en la causa. Pero la confiada al correo no puede detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa (1).

Esta facultad es tambien delegable, como se ha indicado antes, y puede encomendarse á los administradores de correos y telégrafos en donde deba hallarse la correspondencia. Pueden tambien ordenar los jueces instructores que se les remita copia por las oficinas de telégrafos, de los telegramas trasmitidos, si fuera conveniente á la investigacion.

¿Qué formalidades deben adoptarse para practicar esta diligencia?—La resolucion debe ser fundada y limitada á determinada correspondencia, con expresion de circunstancias concretas; debe ser citado el interesado, que podrá presenciar la operacion por sí, ó por persona que designe, pero ni la ausencia de éstas ni el estar en rebeldia el procesado, impedirá ni suspenderá la diligencia. Tomadas las notas convenientes, se rubricarán la correspondencia relacionada con la causa y los sobres, por todos los asistentes, y se sellarán con el del juzgado, encerrándola en otro sobre, que conservará el juez instructor durante el sumario, cuyo pliego podrá abrirse cuantas veces sea preciso.

La correspondencia no pertinente se devolverá al interesado, ó se entregará cerrada á un individuo de su familia mayor de edad, si aquél estuviere en rebeldia, ó la conservará el juez, no siendo conocido ningun pariente.

De las fianzas y de los embargos.

Además de la fianza de que nos hemos ocupado al tratar de la prision provisional de los procesados, como medio para evitar ésta y continuar en libertad, el juez instructor debe mandar que todo procesado contra quien resultaren indicios de criminalidad, preste fianza bastante, que no bajará de la tercera parte del importe probable de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes para asegurar aquellas, decretando en el mismo auto el embargo de bienes, que se efectuará al dia siguiente de la notificacion, si no prestare la fianza suficiente.

Todas las diligencias conducentes se instruirán en pieza separada, y para el embargo de bienes se guardará el orden establecido en el juicio ejecutivo; considerando exceptuados los que en éste se exceptúan.

Acerca de la clase de fianza, su constitucion, calificacion y suficiencia, se siguen las mismas disposiciones que hemos indicado al tratar de la fianza de libertad provisional (2).

Si los bienes embargados fueren muebles, se depositarán. Si fueren semovientes, se enajenarán ó constituirán en depósito, á voluntad del pro-

(1) Art. 7.º de la misma. La Constitucion de 1869 extendia la prohibicion á la correspondencia telegráfica, acerca de la cual nada dice la de 1876.

(2) Véase la pág. 167.

cesado, y se enajenarán forzosamente siempre que los gastos de administración excedan de los productos, á ménos que su dueño sufrague el exceso. Si son inmuebles los embargados, se anotarán en el Registro de la propiedad por medio del conducente mandamiento. Si el embargo se extendiere á sementera, pueblas, plantíos, frutos, rentas y otros bienes semejantes, puede el juez confiar la administración, pero intervenida, al procesado, ó nombrar un administrador retribuido, con ó sin fianza, bajo su responsabilidad, cuyas operaciones puede inspeccionar un interventor nombrado por el procesado. Si lo embargado consistiese en pensiones ó sueldos, se pasará oficio á quien hubiere de satisfacerlos, para que retenga la cuarta parte, si la pension ó sueldo no llegare á 2.000 pesetas anuales; la tercera, desde 2.000 á 4.500 pesetas anuales, y la mitad si excediere de esta suma.

Las fianzas pueden ampliarse ó reducirse, segun que haya motivos para suponer que las responsabilidades pecuniarias sean mayores ó menores, en sus respectivos casos.

De la responsabilidad de terceras personas.

Al tratar de las personas responsables de los delitos (1) hemos visto que la exención de responsabilidad *criminal* no lleva consigo la exención de la *civil* consiguiente á que, á veces, terceras personas están obligadas á hacer efectiva ésta, como sucede, por ejemplo, con las que tienen bajo su potestad ó guarda legal á los locos, imbeciles y menores de edad, que no delinquen pero que causan daños que, dada la malicia y la voluntad de que carecen, constituirían delito, y en otros casos que el Código penal marca (2). Pues bien, cuando en la instrucción del sumario apareciere indicada la existencia de la responsabilidad civil de un tercero, ó por haber participado alguno por título lucrativo de los efectos del delito, el juez instructor, á instancia del actor civil, exigirá fianza á la persona contra quien resulte la responsabilidad, ó en su defecto embargará los bienes que sea necesario, formando para ello pieza separada, en la cual se oirá á las partes á quienes interese la cuestión; si hubiere reclamación contra la fianza ó embargo, se practicarán las pruebas propuestas y el juez resolverá conforme á derecho, cuya resolución se llevará á efecto, sin perjuicio de que se reproduzca el incidente en el juicio oral, si lo hubiere, ó de la acción civil correspondiente.

Conclusion del sumario.

La ley provisional de 18 de Junio de 1870 sobre reformas en el procedimiento para plantear el recurso de casacion, habia introducido algunas importantísimas y necesarias para el planteamiento de aquél, estableciendo los escritos llamados de *calificacion* y *conclusiones*, y reservando la acusacion y la defensa para despues de las pruebas, que, anteriormente, tenían lugar antes, dictando reglas para la apreciacion de aquéllas y dando la fórmula de las sentencias. La expresada ley ha sido derogada por la de Enjuiciamiento criminal, basada en los mismos principios y arreglada á la nueva

(1) Véanse las páginas 22 y 52 de la seccion de Derecho penal.

(2) Página 324 del lib. 1.

organizacion de los tribunales de justicia, y estuvo rigiendo en todo lo relativo al juicio oral y al jurado, que eran las situaciones á que pasaban las causas despues de terminado el sumario, si no se sobreseian, hasta que, por el decreto de 3 de Enero de 1875, tantas veces mencionado, se suspendió la parte de la referida ley relativa á los expresados juicios orales.

Por manera que, una vez terminado el sumario, las causas se ajustan actualmente, en su ulterior sustanciacion, á la ley de 48 de Junio de 1870, por ahora y hasta tanto que otra cosa se determine.

¿A quién corresponde la terminacion del sumario y la declaracion de estarlo así?—Al juez de instruccion, que lo declarará terminado despues de haber hecho todas las diligencias acordadas por él, de oficio ó á instancia de parte.

¿Qué tramitacion seguia el procedimiento, segun la ley de Enjuiciamiento criminal?—Con aquella declaracion, que se ponía en conocimiento del ministerio fiscal, si el delito era público ó de violacion y rapto, y notificada á las partes, terminaba la competencia del juez instructor, quien mandaba remitir los autos y piezas de conviccion (1) al tribunal que juzgaba competente para conocer del delito, emplazando á todas las partes para que comparecieran en el término de quince dias, si fuere ante el Tribunal Supremo; de diez, si fuere ante la audiencia, y de cinco, si fuere ante el tribunal de partido, ó el juez municipal, si reputare simple falta el hecho sumariado. En este caso, el auto era apelable en ambos efectos para ante el tribunal de partido.

¿Qué procedimiento seguia el sumario, ya llegado á poder del tribunal competente, segun la ley de Enjuiciamiento criminal?—Se remitian los autos y piezas de conviccion al ponente, que extendia la correspondiente acta; despues se pasaban para instruccion al ministerio fiscal, si el delito era público ó de violacion ó rapto, por término de tres á diez dias, prorogable por otros diez, si excedieren de 2.000 los folios, y al procurador del querellante por igual término, devolviéndolos ambos, manifestando por escrito, su conformidad con la terminacion del sumario, ó pidiendo la práctica de nuevas diligencias; escritos que pasaban de nuevo con los autos al ponente, por término de tres dias, trascurridos los cuales el tribunal dictaba auto confirmando ó revocando el del juez de instruccion en que se habia declarado terminado el sumario, mandando devolver el proceso y las piezas de conviccion si fueren necesarias; que se practicasen las diligencias acordadas, si aquél se revocare, y trajesen la causa á la vista, con citaciones, para *sobreseerla* ó abrir el juicio oral, si el auto se confirmare; uno de cuyos dos extremos debia acordarse, necesariamente, por el tribunal, en los cinco dias siguientes al de la vista.

Pero, segun queda dicho, esta tramitacion está en suspenso, y las causas, una vez concluso el sumario, se sobreseien ó elevan á plenario como veremos más adelante, á juicio del juez instructor, y atendida la importancia del cargo que resulta.

Del sobreseimiento.

¿Qué es sobreseimiento?—La suspension temporal ó definitiva del procedimiento criminal. Puede ser *libre* ó *provisional*, y el primero *parcial* ó *total*. Es *libre* el sobreseimiento cuando la suspension es definitiva. No pue-

(1) Armas, efectos y demás medios materiales de probanza, ocupados y retenidos por razon de la causa, como influyentes en la comprobacion del delito.

de alzarse, ni abrirse nuevamente el procedimiento, y por eso se caracterizaba en la práctica antigua con la frase gráfica de *sin ulterior progreso*. Cuando esta fórmula de sobreseer es extensiva á todos los procesados, el *sobreseimiento libre es total*; cuando se limita á determinadas personas continuando el procedimiento para otras, es *parcial*.

Se llama sobreseimiento *provisional* á la suspension limitada en el tiempo, que puede alzarse ulteriormente y no impide en este caso, la continuacion del proceso por todos sus trámites. Antes de la nueva ley se acordaba con la fórmula de *por ahora y sin perjuicio*.

Cuando se decreta el sobreseimiento, se declarará en el auto si ha de entenderse *provisional ó libre, total ó parcial*, con las costas de oficio ó impuestas á alguna parte.

¿Cuándo procede el sobreseimiento *libre* segun la ley de Enjuiciamiento criminal?—En los casos siguientes: 1.º, cuando no resultare justificado el hecho que hubiese dado motivo á la formacion de la causa; 2.º, cuando el hecho no constituyere delito ni falta, ó solamente falta; 3.º, cuando aparecieren de un modo indudable exentos de responsabilidad criminal los procesados, como autores, cómplices ó encubridores, aun cuando resultare cierto el delito.

¿Cuándo procede el sobreseimiento *provisional* segun la misma ley?—Cuando resultare del sumario haberse cometido un delito y no hubiere indicacion de sus autores, cómplices ó encubridores.

¿Qué efectos produce el sobreseimiento *libre, total, ó parcial*?—Además de los indicados en las definiciones, el primero lleva consigo necesariamente, el archivo de los autos, y el segundo, si bien termina el procedimiento en cuanto á las personas á que se hace extensivo, no impedía antes el juicio oral, que se mandará abrir desde luego, respecto á los demás procesados, y no impide tampoco hoy, que la causa se eleve á plenario y se continúe por todos sus trámites, contra los demás acusados.

En los casos primero y segundo de los que justifican el sobreseimiento *libre*, podrá declararse, al decretarlo, que la formacion de la causa no perjudica á la reputacion de los procesados ó de cualquiera de ellos, y reservarles, á su instancia, el derecho para perseguir al querellante como calumniador ó mandar proceder de oficio contra él, siempre que resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo proceso. Cuando el hecho resultare ser una mera *falta*, se mandará remitir la causa al juez municipal competente, para la celebracion del juicio correspondiente, cuya resolucion no están obligados á consultar los jueces instructores, y si sólo á dar parte de la inhibicion.

¿Qué debe acordarse respecto á las piezas de conviccion en caso de sobreseimiento?—Si éste es *total*, se mandará que se archiven con los autos las que no tuvieren dueño conocido, reputándose tal al que las estuviere poseyendo al tiempo de incautarse de ellas el juez instructor. Las que resultaren con dueño, se entregarán á éste, á menos que un tercero solicite su retencion, hasta que se resuelva la accion civil que se propusiere entablar, y que entablará necesariamente, dentro del plazo que le fijará el tribunal, á cuyo lapso, sin haber acreditado el ejercicio de la accion, se entregarán las cosas retenidas á sus reputados dueños.

¿Qué recurso se da contra el acto de sobreseimiento?—Solamente el de casacion.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DURANTE EL SUMARIO.

La inmunidad limitada que gozan los representantes de la nacion (senadores ó diputados), la autoridad y funciones que ejerce la magistratura, y la naturaleza especial de ciertos delitos y de los medios con que se cometen, han motivado determinadas reglas de excepcion en el procedimiento del sumario, cuando los procesados son senadores, diputados, jueces ó magistrados, y cuando los delitos son de *injuria* y *calumnia* contra particulares, ó han sido cometidos por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicacion, de cuyas disposiciones pasamos á ocuparnos.

Procedimiento contra los representantes de la nacion.

¿Qué requisito ineludible debe cumplirse por el juez cuando el procesado sea representante de la nacion (senador ó diputado)?—Reclamar de la Asamblea á que pertenezca autorizacion para procesarle, ó simplemente participar á aquélla el procesamiento, según los casos y las reglas siguientes: 1.º, cuando el procesado lo estuviere al tiempo de ser elegido representante, bastará poner en conocimiento de la Asamblea en el primer día de sesion, la causa que existiere pendiente contra el elegido; 2.º, cuando, al ser procesado, gozare ya del carácter de representante, la causa fuere por delito, y las Cortes estuviesen abiertas, no podrá dirigirse el procedimiento contra él hasta obtener autorizacion de la Asamblea, pedida en forma de suplicatorio, por conducto del ministro de Gracia y Justicia, remitiendo, con carácter de reservado, testimonio de los cargos que resulten contra el procesado y de los dictámenes del fiscal y peticiones particulares; 3.º, cuando el representante, aún siendo sólo electo, fuese procesado durante un interregno parlamentario, bastará ponerlo en conocimiento de la Asamblea en el primer día de reunion, ó en el de su constitucion, suspendiendo desde entonces el procedimiento, hasta que aquélla resuelva lo que tenga por conveniente; 4.º, cuando el representante fuere delincuente *in fraganti*, podrá ser detenido y procesado sin la autorizacion á que se refiere el caso anterior; pero en las veinticuatro horas siguientes á la detencion ó procesamiento, habrá de ponerse lo hecho en conocimiento de la Asamblea respectiva.

¿Qué efectos produce la negativa de la autorizacion para procesar á los representantes?—Justifica el sobreseimiento respecto al senador ó diputado, sin perjuicio de que la causa continúe contra los demás procesados.

¿En qué se funda la inmunidad que la Constitucion y las leyes otorgan á los representantes de la nacion?—En consideraciones meramente políticas, que tienden á garantizar la personalidad de los representantes, cuya presencia en la Asamblea puede ser absolutamente necesaria, para evitar los graves conflictos que entrañan las cuestiones más trascendentales del porvenir y de la manera de ser de la nacion. Esta inmunidad, llevada al terreno de la exajeracion y cobijada por la pasion política de partido, puede convertirse en verdadera impunidad de los delitos, y dar margen á invasiones

del poder legislativo en las independientes funciones que debe ejercer el poder judicial, que no pueden contener ordinariamente la entereza y energía de éste y no tienen solución legal por falta de un superior común que decida el conflicto, verdaderamente grave bajo el punto de vista de la pureza del sistema representativo y del respeto y acatamiento á la acción judicial.

Procedimiento contra los jueces y magistrados.

Para exigir á instancia de los particulares, la responsabilidad criminal en que los funcionarios del poder judicial incurran, antes de entrar en el juicio correspondiente, hay que resolver, en otro sumario y previo, si la querella formulada contra ellos debe, ó no, admitirse y procederse á la instrucción del sumario. A las diligencias consiguientes á la presentación de aquella, pruebas aducidas y resolución judicial adoptada, se da el nombre de *antejuicio*, sin el cual no puede entrarse en el juicio principal de responsabilidad. De manera que, así como hemos visto que para procesar á los representantes de la nación se necesita autorización del Parlamento, ó cuando ménos poner en su noticia la existencia del procedimiento, y para el procesamiento de los funcionarios públicos se precisa actualmente la autorización del gobierno, requisitos que originan reglas excepcionales del Enjuiciamiento ordinario, del mismo modo, para procesar á los jueces y magistrados á solicitud de un particular, se exige que la querella sea admitida en el *antejuicio* de que vamos á ocuparnos, trámite que constituye también otra de las excepciones del procedimiento establecido para el juicio criminal ordinario.

¿Quiénes pueden promover el *antejuicio* indicado?—Cualquier ciudadano español que no esté incapacitado para el ejercicio de la acción penal, dando la fianza personal hipotecaria, en metálico ó en efectos públicos, que el tribunal determine, para que la causa pueda sustanciarse á su instancia. Exceptuase de este requisito el ofendido, dañado ó perjudicado directamente por el delito. Volvemos á advertir que, si bien el juicio de responsabilidad contra los jueces y magistrados puede incoarse por providencia del tribunal competente, y á instancia del ministerio fiscal (1), sólo cuando lo promueven los particulares debe preceder el indicado *antejuicio* (2).

¿Cuándo puede promoverse?—Cuando tuviere por objeto el delito de prevaricación en negocios civiles ó criminales cometido en sentencias, autos ó providencias dictadas injustamente y á sabiendas, ó por negligencia ó ignorancia inexcusable, no podrá promoverse hasta que se hubiese terminado, por sentencia firme, el pleito ó causa en que se haya dictado la resolución que hubiese dado motivo al procedimiento. Si tuviere por objeto la prevaricación cometida por negarse á juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, ó por retardo malicioso en la administración de justicia, podrá promoverse desde la resolución negativa, ó después que hayan trascurrido quince días de presentado el último escrito pidiendo al juez ó tribunal que falle ó resuelva, y no lo hubiese hecho, ni manifestado en los autos causa legal para no hacerlo. Cuando tuviere por objeto cualquier otro delito cometido, podrá promoverse el *antejuicio* desde el momento en que el delito fuere conocido.

¿Qué documentos deben acompañarse á la querella particular?—A este

(1) Art. 246 de la ley orgánica de tribunales.

(2) Art. 258 de la misma y Real orden circular de 12 de Octubre de 1876, expedida por el ministerio de Gracia y Justicia.

escrito, que firmará siempre un letrado, acompañarán diferentes documentos, segun la naturaleza del delito que motive el *antejuicio*. Si la responsabilidad criminal que se intentare exigir fuese por alguno de los casos de prevaricacion que hemos indicado en el primer párrafo de la pregunta anterior, primeramente se presentará con el escrito la copia certificada de la sentencia, auto ó providencia injus a; y si no pudiese presentarse, se manifestará la oficina ó el archivo judicial en que se hallaren los autos originales. Si la responsabilidad fuere por razon de retardo malicioso ó denegacion de justicia, pretextando la oscuridad del derecho, se acompañarán: 1.º, las copias de los escritos presentados despues de trascurrido el término legal, pidiendo que se resuelva ó falle el pleito ó causa; 2.º, la certificacion del auto ó providencia denegando la peticion por oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, ó la que acredite que el juez ó tribunal dejó trascurrir quince dias desde la peticion sin haber resuelto ó fallado los autos, ni haberse consignado en ellos y notificado á las partes la causa legitima que se lo hubiere impedido. Si la responsabilidad fuere por razon de cualquier otro delito, se presentará con el escrito de querrela el documento que acredite la perpetracion de aquél, ó en su defecto las listas de los testigos que deben declarar. Si no pudiese obtener los documentos necesarios, presentará testimonio del acta notarial levantada, para hacer constar que los reclamó al juez ó tribunal que hubiese debido facilitarlos ó mandar expedirlos.

¿Qué tramitacion se da al escrito de querrela?—A su presentacion seguirá la práctica de las pruebas propuestas, de las compulsas negadas por el juez ó tribunal á quien se hubieren pedido, y de las que se juzgare convenientes, recibiendo las declaraciones á las personas que se indiquen, hechas las cuales se unirán á los autos, dándose vista de ellos, excepto de las diligencias testimoniadas de algun sumario, al querellante, para instruccion, por término de tres dias, recogiéndose aquéllos al cuarto, y se pasará despues al fiscal por igual término; y devueltos que sean, se señalará dia para la vista, en la cual las partes podrán manifestar lo que juzgare procedente, pidiendo la admision ó no admision de la querrela interpuesta, acerca de lo cual el tribunal resolverá lo que estimare justo en los tres dias siguientes al de la vista.

¿Qué efectos produce la admision ó no admision, de la querrela interpuesta?—Si se admitiere, se mandará proceder á la instruccion del sumario con arreglo al procedimiento comun, designando el juez que lo haya de formar, y acordando la suspension de los funcionarios contra quienes hubiese sido admitida la querrela, cuyo acuerdo se pondrá en conocimiento del ministro de Gracia y Justicia para los efectos que procedan. Si no se admitiere, el tribunal impondrá las costas al querellante, no siendo éste el ofendido por el supuesto delito, y aun á éste, cuando resultare haber obrado con mala fé ó con *notoria temeridad*. Si hubiere condena de costas, no se devolverá la fianza hasta que se satisfagan, y si no se pagaren en el término que se fije para ello, se harán efectivas por cuenta de la fianza, devolviendo el resto á quien la hubiese prestado.

Sumarios por delitos de injuria y calumnia perseguibles á instancia de partes.

Al tratar de estos delitos en la seccion de Derecho penal (1) hemos dicho que, segun el Código, nadie puede ser penado por calumnia ó injuria

(1) Página 108.

contra particulares, sino á querella de la parte ofendida; y la ley de Enjuiciamiento criminal, para llevar á efecto el precepto indicado, establece que no se admitirá ninguna querella por dichos delitos, si no se presentare certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliacion con el querellado, que no produjo avenencia, ó de haberlo intentado sin efecto.

Hemos visto tambien, en la indicada seccion, que nadie podia deducir aquella cuando la calumnia ó la injuria hubieren sido causadas en juicio, sin previa licencia del juez ó tribunal que de él conociere; y la referida ley dispone igualmente que, además de la certification del acto conciliatorio, debe acreditarse la indicada precisa autorizacion.

Estos requisitos previos, la necesidad de presentar, siendo posible, el documento en que se hubiere inferido la injuria ó calumnia y la prohibicion de admitir testigos de referencia, en las verdades de palabra, son otras tantas modificaciones de la regla general de procedimientos á que deben sujetarse los sumarios de que nos ocupamos.

Sumario por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicacion.

Los delitos cometidos por estos medios siempre han estado sujetos en su persecucion á reglas determinadas, ya siendo objeto de una legislacion especial, distinta de la comun, ya formando parte de ésta, modificada respecto á tales delitos, como acontecia en el Código reformado de 1870, segun el cual no eran aplicables las mismas reglas acerca de los autores, cómplices ó encubridores de los delitos comunes, á los responsables de los cometidos por medio de la imprenta. De aqui tambien la necesidad de dictar algunos preceptos, fuera de los generales, para la instruccion de los sumarios consiguientes al ejercicio de los medios indicados de publicacion, encaminados al secuestro de los ejemplares que constituyen el cuerpo del delito y á la averiguacion del verdadero *autor real*, y, en su defecto, de las personas subsidiariamente responsables, segun el Código (1).

Derogadas las disposiciones de éste, en lo referente al ejercicio de la libertad de imprenta, cuyo derecho se reguló en 31 de Diciembre de 1875, por un Real decreto en que se definen, determinan y castigan con penas especiales los *abusos* (2) cometidos por la prensa, erigiendo tribunales y fiscales tambien especiales para su persecucion, todo lo concerniente al procedimiento para esa persecucion y castigo se encuentra consignado en el expresado decreto, próximo á ser reemplazado por una ley, pendiente en estos momentos de la deliberacion de las Cortes (3). Comienza el juicio por la denuncia fiscal á que precede el secuestro de la edicion del impreso, acordada por aquél, y tiene lugar, á seguida, la vista de la causa, en juicio oral y público, ante el tribunal de imprenta, debiendo recaer sentencia á las veinticuatro horas de aquella diligencia.

Trámites para la responsabilidad civil de terceras personas.

Es un principio inconcuso, que de todo delito nacen dos acciones: una *penal* y otra *civil*. La segunda puede dar lugar á la intervencion de una

(1) Véase la pág. 52.

(2) No se les llama delitos.

(3) Si al terminar este libro se hubiese promulgado la ley de imprenta á que aludimos, la insertaremos en el apéndice. Por esta razon nos abstenemos de hablar del procedimiento vigente.

persona distinta del acusador y del procesado, en el juicio criminal, como responsable *civilmente* de las consecuencias del hecho punible. Así acontece, cuando el loco y el menor han causado daños efectuando aquel hecho y no tienen bienes para subsanar el daño causado, en cuyo caso, y siempre que no haya habido culpa ni negligencia por parte de sus padres ó guardadores, son éstos los responsables *civilmente*. Otros casos de responsabilidad civil de terceras personas enumera el Código (1), y la ley de Enjuiciamiento eriminal se refiere tambien al en que alguno hubiese participado del delito, por título lucrativo.

Ahora bien: ¿que garantía puede exigirse á esas terceras personas, que aparecen indicadas en un sumario como responsables *civilmente*?—El juez instructor á instancia del actor civil ó querellante particular, que es el principal y preferentemente interesado en la responsabilidad *civil*, no de oficio, exigirá fianza á dichas terceras personas, ó en su defecto procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente, acerca de cuya procedencia debe ser oído el interesado en pieza separada, que se formará al efecto; y previa audiencia del autor, el juez resolverá las pretensiones pendientes.

LIBRO SEGUNDO.

DEL JUICIO ORAL.

ADVERTENCIA. Aquí debiéramos ocuparnos, siguiendo á la ley de Enjuiciamiento criminal, de la segunda parte del juicio encomendada á los tribunales de derecho, ya solos, ya en union con los jurados; pero suspendida por decreto de 3 de Enero de 1875 la parte de aquella relativa al jurado y al juicio oral ante dichos tribunales, todo lo que pudiéramos decir, si no sería ocioso é inútil, sería evidentemente innecesario para la práctica. Por eso advertimos á aquellos de nuestros lectores que quieran conocer la legislación suspendida, que pueden leerla en el libro segundo de la referida ley; y como derecho vigente, aunque provisional, copiamos á continuación la antes citada de 18 de Junio del 1870, cuyo texto es el que aplican todos los tribunales para instruir el plenario y tramitar la segunda instancia, y á la cual se ajustan para apreciar las pruebas y redactar las sentencias.

(1) Artículos 19, 20 y 21. Véase la pág. 22 del tratado de Derecho penal.

LEY PROVISIONAL

SOBRE REFORMAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PLANTEAR EL RECURSO DE CASACION EN LOS JUICIOS CRIMINALES.

Artículo 1.º Por ahora, y hasta que se publique la nueva ley de Enjuiciamiento criminal, continuarán sustanciándose las causas con arreglo á la legislación vigente, con las variaciones y adiciones que se establecen en esta ley.

Art. 2.º Luego que se hayan practicado todas las diligencias del sumario, acordadas por el juez, se mandará entregar la causa al ministerio fiscal y al acusador privado si le hubiere, para que dentro del término que se les señalará, segun el volumen y complicacion del proceso, manifiesten por escrito, pero sin razonar ni fundar su juicio:

1.º La calificación que merezca el delito segun los hechos que resulten del sumario.

2.º La participacion que en él haya tenido el procesado ó cada uno de ellos, si fueren más de uno.

3.º Si resultan méritos para exigir la responsabilidad civil subsidiaria contra una ó más personas, ó el resarcimiento por el que á título lucrativo haya participado de los efectos del delito.

4.º Si procede elevar la causa á plenario ó sobreseerla, y en qué términos.

5.º Si renuncian la prueba y la ratificación de los testigos del sumario, ó por el contrario, conviene á su derecho el recibimiento á prueba y la ratificación de todos ó algunos de los testigos.

En este último caso propondrán, por medio de otrosies, la prueba que les interese, presentando listas de los testigos que hayan de ser examinados, expresando su nombre, apellido, sobrenombre, si le tuvieren, y domicilio; ó si ignorasen estas circunstancias, los datos que sean conducentes para averiguar su paradero.

Art. 3.º Si el juez creyere procedente elevar la causa á plenario, dictará auto mandándolo así, y comunicándolo á los procesados y personas que cualquiera de los acusadores hubiere designado como responsables subsidiariamente, por un término igual al que se hubiere concedido á cada uno de aquéllos.

Este término podrá ser ampliado por otro igual á la mitad del concedido, si se pidiere antes de concluir éste y se alegare justa causa, que calificará el juez.

Trascurrido dicho término, ninguna otra próroga podrá concederse.

Art. 4.º El auto en que se mande elevar la causa á plenario no es apelable.

Art. 5.º Al devolver la causa, los procesados y los responsables civilmente presentarán un escrito, firmado por su abogado y procurador, en que manifiesten:

1.º Que se han enterado de la calificación hecha por el ministerio fiscal y acusador privado, si le hubiere.

2.º Si se conforman con las declaraciones de los testigos del sumario á efecto de omitir su ratificación, y renuncian la prueba; ó si, por el contra-

rio, piden la ratificación de todos ó algunos de dichos testigos y el recibimiento de la causa á prueba.

En este caso propondrán, por medio de otrosíes, la prueba que intenten practicar de la manera prevenida en el art. 2.º

Art. 6.º Cuando alguna de las partes lo solicite, el juez recibirá la causa á prueba, y mandará practicar las que se hubieren propuesto, si las creyere útiles, ó desestimarás las que á su juicio no lo sean.

Art. 7.º De la providencia en que se desestime toda ó parte de la prueba propuesta, ó se niegue la ampliación del término probatorio concedido, podrá pedirse reposición dentro del término de segundo día.

Si el juez declarare no haber lugar á ella, se admitirá la protesta que hiciere el interesado para los efectos convenientes en la segunda instancia.

Art. 8.º Durante el término probatorio podrá cualquiera de las partes pedir nueva prueba ó ampliación de la que hubiere propuesto, siempre que los hechos que intente justificar hayan ocurrido ó llegado á su noticia despues de haber presentado el escrito proponiendo su prueba.

Art. 9.º Tanto en el caso de que se haya renunciado la prueba, como en el de haber transcurrido el término probatorio, el juez dictará providencia mandando entregar el proceso al acusador privado, si le hubiere, y al ministerio fiscal para que formalicen la acusación dentro del término que señalará, segun el volumen y complicación de la causa, pero que no excederá de ocho dias, que podrán prorogarse por cinco más, pidiéndolo antes de espirar el concedido y mediando causa justa.

Transcurrido este segundo término, no se concederá ningun otro, cualquiera que sea la causa que se alegue.

Art. 10.º De las acusaciones se conferirá traslado á los procesados y personas responsables civilmente, para que presenten sus defensas dentro del término señalado en el artículo anterior.

Art. 11.º Devuelto el proceso por la última de las personas expresadas en el artículo anterior, el juez dictará auto declarando conclusa la causa, y mandando traerla á la vista con citación de las partes, señalando para ella el día más próximo que sea posible.

Art. 12.º Los tribunales y jueces aplicarán las penas señaladas en el Código, cuando resulte probada la delincuencia por cualquiera de los medios siguientes, apreciados por las reglas del criterio racional:

- 1.º Inspección ocular.
- 2.º Confesión de los acusados.
- 3.º Testigos fidedignos.
- 4.º Juicio pericial.
- 5.º Documentos fehacientes.
- 6.º Indicios graves y concluyentes.

Para que pueda fundarse la condenación solamente en indicios, es necesario:

- 1.º Que haya más de uno.
- 2.º Que resulte probado el hecho de que se deriva el indicio.
- 3.º Que el convencimiento que produzca la combinación de los indicios sea tal, que no deje lugar á duda racional de la criminalidad del acusado, segun el orden natural y ordinario de las cosas.

Art. 13.º Las sentencias se redactarán consignando en párrafos separados y numerados, que deberán empezar con la palabra *resultando*, los hechos que consten del proceso y sus circunstancias, y declarando los que resulten probados.

En párrafos tambien numerados, que principiarn con la palabra *considerando*, se consignarán los fundamentos de la apreciación legal de los hechos que se consideren probados.

En seguida se citarán las disposiciones legales que sean aplicables.

Si la sentencia fuere condenatoria, se declarará:

4.º Cuál es el delito que constituyen los hechos que se hayan declarado probados y la calificación legal de sus circunstancias.

2.º La calificación legal de la participacion que en ellos haya tenido cada uno de los procesados.

3.º La pena en que haya incurrido cada uno de ellos.

4.º La responsabilidad civil en que hayan incurrido los sujetos á ella que hayan sido oídos en la causa.

Cuando la sentencia sea absolutoria, comprenderá, además de los resultados y considerandos y la cita de las leyes, la declaracion terminante de fundarse la absolucion en falta de prueba de los hechos, ó en que éstos no constituyan delito, ó en que no esté justificada la participacion en ellos de los procesados, ó en estar los mismos exentos de responsabilidad.

En todos los casos mandará elevar la causa en consulta á la audiencia, y citar y emplazar á las partes para que acudan á usar de su derecho dentro del término que se les señale.

Art. 14. Recibida la causa en la audiencia, se mandará pasar al relator para formar el apuntamiento.

Devuelta por el relator, se mandará entregar la causa al acusador privado, cuando le hubiere, y al ministerio fiscal, aunque hayan apelado alguna de las partes, para que reproduzcan ó modifiquen su acusacion.

De estos escritos se conferirá traslado á los demás interesados para que formalicen su defensa.

La sala señalará el término en que hayan de presentarse las alegaciones expresadas, atendida la complicacion y volúmen del proceso; pero sin que en ningun caso pueda aquél exceder de quince dias para cada una de las partes.

Presentado el último escrito, se señalará inmediatamente dia para la vista.

Art. 15. Cuando vista la causa entendiere el tribunal superior que debió haberse accedido á la prueba propuesta ó ampliado el término, y se hubiere hecho ante el juez de primera instancia la protesta indicada en el artículo 7.º, dejará sin efecto la sentencia consultada, y mandará devolver la causa al juzgado para que, reponiéndola al estado que corresponda, practique la prueba ó amplie el término probatorio y dicte nueva sentencia.

Art. 16. La sentencia se redactará segun queda dispuesto en el art. 13, y se pronunciará dentro de los cinco dias siguientes al de la conclusion de la vista.

Art. 17. Contra las sentencias definitivas que pronuncien las audiencias en la segunda instancia, ó la sala cuarta de la de Madrid en la única, no se dá otro recurso que el de casacion.

Queda suprimida la tercera instancia.

Art. 18. Las causas pendientes á la publicacion de esta ley continuarán sustanciándose hasta la terminacion de la instancia en que se hallen, con arreglo á las leyes y disposiciones vigentes en dicha época.

En todas tendrá lugar el recurso de casacion contra la ejecutoria que recaiga, para lo cual los tribunales superiores redactarán las sentencias con arreglo á lo que queda dispuesto en el art. 13.

Art. 19. Las causas contra reos ausentes, se sustanciarán hasta la conclusion del sumario.

Terminado éste, se archivarán hasta que sean habidos ó se presentaren á disposicion del juzgado.

Las causas en que haya además otros procesados presentes, continuarán sustanciándose respecto á éstos solamente.

Palacio de las Cortes 24 de Mayo de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, diputado secretario.—Julian Sanchez Ruano, diputado secretario.—Francisco Javier Carratalá, diputado secretario.—Mariano Rius, diputado secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.—El ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

LIBRO TERCERO

PROCEDIMIENTOS PARA EL CASTIGO DE LAS FALTAS.

Primera instancia.

Al tratar de la competencia de los juzgados municipales hemos enumerado entre las atribuciones que les corresponden en materia penal, la de conocer en primera instancia de los juicios sobre *faltas* (1), nombre que reciben los actos ú omisiones, que, como hemos dicho oportunamente (2), están castigados con penas leves en el libro III del Código. De manera que el único juez competente para perseguirlas y castigarlas, es el juez municipal, ajustándose á la tramitación establecida por la ley de Enjuiciamiento criminal (3).

¿En qué forma tiene lugar el procedimiento para su represión?—En juicio verbal *público*, con asistencia del fiscal municipal, si la falta es perseguible de oficio; del querellante, si le hubiere; del procesado y de los testigos.

¿Cuándo y en dónde debe celebrarse el juicio?—En el local del juzgado municipal, dentro de los tres días siguientes al de la fecha del en que tuviere noticia el juez de haberse cometido la falta, cuyo término podrá prorrogarse si hubiere causa bastante, haciéndola constar. Cuando algun testigo importante, ó una de las partes que resida dentro del término municipal, estuviere físicamente impedido de concurrir al local del juzgado, podrá celebrarse en otro punto conveniente.

¿Cómo y en qué tiempo debe hacerse la citación?—Acompañando copia de la querella, si se hubiese presentado, y expresando que el citado debe acudir al juicio con las pruebas que tenga. Siempre deberán trascurrir, cuando menos, veinticuatro horas entre el acto de la citación y el de la celebración del juicio, si el citado residiere dentro del término municipal, y un día más por cada treinta kilómetros de distancia, si residiere fuera de él. La falta de asistencia sin causa justa de las partes, testigos y peritos citados, se castigan con multa hasta 25 pesetas.

¿En qué forma debe obtenerse la declaración de los testigos y procesados que residieren fuera del territorio municipal?—Por medio de exhorto, con citación del querellante particular, si lo hubiere, y en presencia del ministerio fiscal, si la falta pudiese perseguirse de oficio, observándose las formalidades legales.

¿Puede suspenderse la celebración del juicio?—Sí; siempre que por motivo justo no pudiese celebrarse en el día señalado, ó no pudiese concluirse en un sólo acto, en cuyo caso el juez señalará el día más inmediato posible para su celebración ó continuación, haciéndolo saber á los interesados.

¿Cómo debe celebrarse?—Dando principio por la lectura de la querella, si la hubiere; siguiendo á esto el examen de los testigos convocados y practicándose las demás pruebas que el querellante, denunciador y fiscal municipal, si asistiere, pidieren y el juez considerase admisibles. Seguida-

(1) Pág. 4.

(2) Véase la sección de Derecho penal.

(3) De las cometidas en país extranjero conocen en primera instancia los vice-cónsules, y en donde no los haya, un súbdito español elegido legalmente; y en segunda, los cónsules, con su asesor, si aquel no fuese letrado, y á falta de asesor, con un adjunto nombrado también con arreglo á ley. El procedimiento es el del texto.

mente se oirá al acusado, se examinarán los testigos que presentare en su descargo y se practicarán las demás pruebas que pidiere y el juez considerare admisibles. Acto continuo expondrán de palabra las partes lo que creyeren conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, hablando primero el ministerio fiscal, si asistiere, despues el querellante particular y, por último, el acusado.

De cada juicio se extenderá un acta diaria, expresando clara y sucintamente lo actuado, la cual se firmará por todos los concurrentes al mismo, que puedan hacerlo, á cuyo efecto podrá el juez municipal adoptar todas las disposiciones necesarias para que no se ausenten aquéllos hasta que dicha acta esté extendida.

¿Qué efectos produce la ausencia del procesado?—No suspende la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste habersele citado en forma, á no ser que el juez municipal, de oficio ó á instancia de parte, creyere necesaria la suspensión.

¿Cuándo debe dictarse y llevarse á efecto la sentencia?—En el mismo día ó al siguiente de la celebración del juicio, debe pronunciarse, y llevarse á efecto desde luego, trascurrido este término, si no hubiere apelacion, suspendiendo la ejecucion de aquélla, y otorgando ésta en ambos efectos para ante el tribunal de partido á qué corresponde el juzgado municipal, si se interpusiere, haciéndose constar la presentacion del recurso por diligencia que extenderá el secretario municipal y firmará el apelante y, si no supiere, un testigo á su ruego, remitiendo los autos originales al presidente de dicho tribunal, emplazando al fiscal municipal, si hubiere sido parte en el juicio, y á los demás interesados, para que en el término de cinco dias acudan á usar de su derecho ante dicho tribunal.

Segunda instancia.

Recibidas las diligencias por el presidente del tribunal de partido, dice la ley (1), hoy por los jueces de primera instancia, y trascurrido que sea el término del emplazamiento, si el apelante se hubiese personado, se señalará dia para la vista, mandando que se pongan de manifiesto á las partes en la secretaría por el término de cuarenta y ocho horas. Si el apelante no se hubiese personado en el término del emplazamiento, el tribunal declarará desierto el recurso y devolverá los autos al juez municipal, á costa de aquél. La vista será pública y comenzará por la lectura de los autos remitidos. Se oirá enseguida al fiscal del tribunal, cuya asistencia será precisa, si la falta fuere de las que deben perseguirse de oficio, y á los interesados ó á sus legítimos representantes, si concurrieren, y acto continuo se dictará sentencia, la cual se notificará al fiscal y demás partes presentes.

¿Qué prueba puede proponerse en la segunda instancia?—Solamente la que, habiendo sido propuesta en la primera, no hubiera podido practicarse por causa ajena á la voluntad del que la hubiese propuesto; la cual se practicará, conforme á derecho, en un término que no pase de diez dias.

¿Qué recurso se da contra las sentencias dictadas sobre faltas, en segunda instancia?—El de *casacion* por infraccion de ley, que deberá prepa-

(1) Hoy, por los jueces de primera instancia, que tienen las facultades de los tribunales de partido.

rarse en el mismo día ó en el siguiente en que se han dictado, y no haciéndolo, quedan firmes y se devolverán los autos para su ejecucion.

¿Cómo deben conservarse las actuaciones de los juicios de falta?—Reuniéndolas, coleccionándolas todas y formando con las de cada año los tomos necesarios, que se conservarán encuadernados en el juzgado municipal.

PROCEDIMIENTOS CRIMINALES ESPECIALES.

Procedimientos por delitos contra la Hacienda pública.

El decreto-ley de unificacion de fueros y la ley de Enjuiciamiento criminal, han dejado subsistente este procedimiento, establecido por el decreto de 20 de Junio de 1852, que está vigente hasta en su parte penal, debiendo recurrir á las leyes comunes en los procedimientos que dicho decreto no prefiere (1).

¿Qué delitos son objeto de él?—El *contrabando*, la *defraudacion* y sus conexos, entendiéndose por tal toda omision ó abuso en su persecucion. Los que tengan relacion con éstos y se hallen expresamente castigados por el Código penal, se sustancian ante los tribunales ordinarios y por el procedimiento ordinario de que antes nos hemos ocupado. Aquéllos, por el contrario, tienen una tramitacion especial, consignada en el Real decreto de 20 de Junio de 1852.

¿Qué tribunales son competentes para conocer de los delitos de contrabando, defraudacion y sus conexos?—Los tribunales de partido ó jueces de primera instancia y las audiencias, desde que se suprimieron los juzgados especiales de Hacienda (2). Contra las sentencias firmes se da el recurso de casacion para ante el Tribunal Supremo.

¿Qué diligencias previas preceden á los procedimientos judiciales en las causas de contrabando y defraudacion?—El expediente administrativo formado por consecuencia de la aprehension y comiso de los géneros, del cual debe remitir el administrador del ramo al juez de Hacienda una copia, declarando si há lugar al comiso y si los reos han podido, ó no, incurrir en pena personal.

Todas las diligencias encaminadas á la persecucion del contrabando y defraudacion, y á la declaracion, venta y distribucion de los géneros aprehendidos no pueden ser objeto de este MANUAL por su extension y carácter administrativo.

¿Qué causas pueden dar motivo á la formacion del sumario?—La aprehension de los géneros, la instancia del perjudicado y la denuncia del promotor fiscal, quien debe ser citado previamente para todas las diligencias, debiendo asistir á las que, por su importancia, determina el decreto citado, pudiendo dirigir á los testigos y peritos, por medio del juez, las preguntas que estime conducentes.

¿Qué medios de investigacion deben practicarse en el sumario de estas causas?—Los mismos que, por regla general, establece el derecho para la in-

(1) Sentencia de 22 de Abril de 1875.

(2) Decreto-ley de unificacion de fueros de 6 de Diciembre de 1868.

vestigacion de los delitos y de los delinquentes comunes. Hallándose perfecto el *sumario*, el promotor fiscal formalizará la acusacion dentro del término de diez dias, presentando articulados los hechos y el derecho en que se funden sus peticiones, alegando cuantas circunstancias modifiquen la penalidad, y ocupándose de todas las cuestiones é incidencias. Desde este trámite entra la causa en

Plenario.

¿Qué diferencia separa los escritos de acusacion en las causas de Hacienda de los que se presentan en las seguidas por delitos comunes?—Que en aquéllos no se propone la prueba como en éstos, por medio de *otroes* puestos á su continuacion.

¿Qué tramitacion sigue el *plenario*?—Recibida la causa á prueba, se practicará, por regla general, en la misma forma prescrita para los delitos comunes, dentro del término que el juez considere prudencialmente necesario, que puede prorogarse por justas causas á ochenta dias. Fenecido el término de prueba se entregan los autos á las partes, para instruccion, por tres dias, pasados los cuales debe tener lugar la *vista* en el dia señalado al efecto. Puede tambien el juez practicar alguna nueva diligencia, acordándola *para mejor proveer*, debiendo dictar sentencia en el preciso término de diez dias, teniendo presentes las probanzas hechas y las reglas ordinarias de critica racional. La sentencia debe pronunciarse con *resultandos y considerandos*.

¿Qué modificaciones ha introducido el procedimiento por delitos contra la Hacienda?—La imposicion de la pena á que se haya hecho acreedor el reo, sin necesidad de sentencia, cuando, convencido el acusado de la justicia que encierra la acusacion fiscal, se compromete á sufrir aquélla, sin más trámites ni dilaciones. En tal caso el juez sobreseerá la causa, considerando el auto con fuerza de ejecutoria. Esta doctrina no tiene lugar si concurre un delito conexo ó se trata de la imposicion de una pena personal.

En cuanto á la reposicion de los autos interlocutorios se ha establecido que sólo puede apelarse de ellos cuando tengan fuerza de definitivos, pudiendo reclamar contra los demás en la segunda instancia, en el acto de la vista, juntamente con lo principal.

¿Tiene lugar en estas causas la *consulta* de la sentencia de primera instancia con el tribunal superior?—No; si de la sentencia no se interpone apelacion, ó se sobreesce la causa en los casos expuestos en la anterior pregunta, debe llevarse á efecto si hubiere conformidad en la calificacion que del delito y la pena hayan hecho el ministerio fiscal y el juez. Apesar de ello debe elevarse al fiscal de la audiencia un testimonio literal del *sumario*, de la censura del Promotor y de la sentencia, en vista de todo lo cual puede aquel funcionario interponer el recurso de casacion, ó el de responsabilidad, si fuere procedente.

¿En qué caso tiene siempre lugar la segunda instancia?—Cuando la pena impuesta sea la de muerte ú otra inmediata.

¿Qué tramitacion se da al proceso en segunda instancia?—Cada parte presenta un escrito de agravios, despues de lo cual se recibe la causa á prueba, si se propone la documental, la testifical sobre hechos nuevos, ó se pide la práctica de la que ha sido negada injustamente por el juez; en cuyos casos debe practicarse en el término de diez dias, prorogables hasta veinte, terminados los cuales se pasan los autos á las partes, para instruccion, por seis, y van al relator. Examinados por el ponente, tiene lugar la *vista*, dictándose sentencia fundada dentro de los diez dias siguientes, sin

perjuicio de las diligencias que el tribunal haya considerado oportuno evacuar para mejor proveer.

¿Tiene lugar el recurso de súplica en las causas de Hacienda?—No; sólo puede intentarse el de casacion.

¿Qué causas pueden dar lugar al recurso de casacion?—Las mismas que, en principio, legitiman la casacion en materia penal; esto es, la infraccion de ley y el quebrantamiento de las reglas de tramitacion, en los casos expresamente determinados por el derecho.

¿Cuándo debe interponerse la casacion y con qué requisitos?—Dentro de los diez dias siguientes á la notificacion del fallo, en la forma con que se hace en lo civil, tanto más necesaria cuanto que no pueden alegarse ante el tribunal Supremo de Justicia más infracciones que las expuestas al interponer el recurso. Debe preceder la constitucion de un depósito equivalente á la mitad de la pena pecuniaria, y al valor del comiso, con tal que no exceda de 300 duros, siempre que el recurrente no sea el ministerio fiscal, ó un litigante pobre.

¿Qué tramitacion se da al recurso?—Admitido por la audiencia, se remite al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes, mandando la sala á quien corresponda conocer de él, que pasen los autos al relator, para formar el apuntamiento, despues de lo cual se entregan al fiscal para que diga si procede ó no el recurso, y despues á las partes, por veinte dias, para instruccion. Si el recurrente no se hubiere apersonado, el fiscal pedirá que se declare desierto el recurso, condenándole al pago de las costas y á la mitad del depósito. Instruidas las partes y manifestada, por el ponente, su conformidad con el apuntamiento, tiene lugar la vista en el dia señalado, y aquél propone los puntos de hecho y de derecho sobre que debe recaer el fallo, y lo redacta declarando si há ó no lugar al recurso, cuyo fallo debe pronunciarse dentro de los quince dias siguientes á la vista y publicarse en la *Gaceta de Madrid*.

¿Qué efectos produce la sentencia del Tribunal Supremo declarando haber lugar al recurso?—Por virtud de esta declaracion pasan los autos á otra sala, la cual determina en última instancia las cuestiones sobre violacion de ley, aplicando un procedimiento igual al anterior. Cuando ésta declara la nulidad por infraccion de las reglas del Enjuiciamiento, manda reponer el proceso y lo remite á la sala de la audiencia para que se prosiga en primera ó en segunda instancia, por el juzgado competente ó por una de sus salas ordinarias, con arreglo á las leyes y al estado á que se le reponga. Si determina que no se reponga el proceso, lo devuelve á la sala de la audiencia para que se ejecute el fallo que pronunció. El fallo de la segunda sala, cualquiera que sea, será tambien motivado, causará ejecutoria, no habrá contra él recurso alguno, y se publicará igualmente en la *Gaceta*, del mismo modo que los que las audiencias pronuncien despues de la devolucion de las causas.

¿Qué efectos produce la sentencia declarando no haber lugar al recurso?—Siempre que se declara no haber lugar al recurso de casacion, ha de comprenderse en la sentencia la condenacion del recurrente en las costas y en la pérdida de la suma depositada ó de que se obligó á responder siendo pobre. Esta cantidad, ó la mitad de ella, que pierde el que da lugar á que se declare el recurso por desierto, se reparte por iguales partes, mitad para el acreedor particular, si lo hubiere, y mitad para el fisco.

¿La interposicion del recurso suspende la ejecucion de la sentencia?—Sólo cuando en ella se imponga la pena de muerte, la degradacion ó alguna corporal que haya de cumplirse fuera de la Península ó islas adyacentes. En los demás casos, el recurso no suspende el cumplimiento de la sentencia.

Aunque la parte penal de una ley no puede calificarse exactamente de procedimientos, no queremos concluir esta materia sin consignar una declaracion importantísima hecha por el Tribunal Supremo respecto á las penas de *comiso* y *multa* establecidas en los artículos 26 y 27 del decreto de 20 de Junio de 1852. En sentencia de 5 de Octubre de 1876, declaró dicho Tribunal que las expresadas penas fueron sustituidas por una sola *multa* igual al valor de los géneros aprehendidos y de los derechos de arancel fijados para los mismos, modificacion introducida por el párrafo quince del preámbulo, y artículos 201, 203, 241, 244 y 246 de las ordenanzas de Aduanas, aprobadas por decreto de 15 de Julio de 1870.

Procedimientos seguidos ante el Senado.

¿Qué atribuciones corresponden al Senado como tribunal de justicia?—1.º, juzgar á los ministros cuando, para hacer efectiva su responsabilidad, son acusados por el Congreso de los diputados (1); 2.º, conocer de todos los delitos cometidos por los senadores que hayan jurado su cargo; 3.º, conocer de las causas sobre delitos graves contra la persona ó dignidad del rey, ó contra la seguridad interior ó exterior del Estado.

¿Quiénes forman el Senado constituido en tribunal?—Todos los senadores legos que hayan jurado sus cargos, presididos por la persona que tuviera á su cargo la direccion de este alto cuerpo. Ejercerá el cargo de fiscal un comisario nombrado por el gobierno. Son requisitos esenciales para su constitucion la concurrencia de sesenta senadores y la convocacion del gobierno cuando no es ministro de la corona el procesado.

¿A quién corresponde la instruccion del sumario?—Al presidente del Senado, con acuerdo del comisario fiscal.

¿Qué tramitacion sigue al sumario?—El comisario informará verbalmente al Senado del resultado de las actuaciones, procediéndose á declarar si há ó no lugar á la acusacion, en sesion y por votacion secreta. Habiendo lugar á la acusacion, se abre el juicio público, durante el que el fiscal formulará el escrito de acusacion, presentando lista de los testigos de cargo, calificando el delito, sus circunstancias y el grado de delincuencia del procesado y pidiendo la pena correspondiente. Entregada al acusado copia de la acusacion y de la lista de testigos, se preparará éste para su defensa en un término que no puede bajar de diez dias, presentando igualmente lista de los testigos de descargo, que se comunicará al acusador. Trascurrido el término concedido al acusado, tendrá lugar la vista pública en el dia señalado, en el cual se leerá la acusacion y las listas de testigos, los cuales serán examinados durante el juicio público. Concluido su exámen informará el acusador, le contestará el defensor y hablará el acusado. Terminada la vista se constituye el Senado en sesion secreta para decidir del grado de culpabilidad ó inocencia del acusado, en cuyo juicio, y para la calificacion de los hechos, se atenderán los senadores á su conciencia, como verdaderos jurados. Se votará primero la declaracion de culpabilidad, para lo cual se necesitan las dos terceras partes de votos, procediéndose enseguida á la discusion y votacion de la pena por bolas, siempre que la declaracion fuese conforme con la acusacion. Si no hubiere conformidad, una comision de cinco individuos propondrá la pena que crea conveniente.

¿Cuándo y en qué forma debe dictarse sentencia?—Debe tener lugar

(1) Núm. 3.º del art. 45 de la Constitucion de 1876.

después de la constitucion del tribunal hecha al efecto, el cual no puede disolverse sin haberla pronunciado y debe formularla con considerandos.

¿Cómo se sustancian las acusaciones contra los ministros de la corona?—Declarando el Congreso haber lugar á la acusacion de algun ministro, se nombra una comision encargada de sostener la acusacion ante el Senado, siguiendo el procedimiento anterior, excepto en lo relativo á la procedencia de la acusacion, asunto propio exclusivamente de la competencia del Congreso.

Juicios militares en materia penal.

Suprimida la jurisdiccion ordinaria militar por decreto de 19 de Julio de 1875, ha desaparecido la clasificacion que antes se hacia de los tribunales militares, dividiéndolos en *permanentes* y *no permanentes*, y como consecuencia de aquella supresion y de la nueva organizacion dada á dichos tribunales por el expresado decreto, ha quedado vigente un solo procedimiento para sustanciar en la jurisdiccion militar las causas de su competencia. Sobre esta nueva organizacion y alcance de atribuciones del *Consejo de Guerra*, tribunal único de primera instancia, y del *Consejo Supremo de Guerra y Marina*, tribunal de segunda instancia, ya hemos expuesto lo conveniente al tratar de su organizacion (1).

Puede, pues, decirse que el procedimiento seguido en la jurisdiccion ordinaria para perseguir y castigar delitos comunes, que antes aplicaban los tribunales militares *permanentes*, no se aplica ya. El único vigente es el que pasamos á indicar.

Dan principio los procedimientos por los mismos medios con que empiezan en los tribunales ordinarios, exceptuándose la excitacion fiscal. Convencido el jefe de que el hecho punible es de tal gravedad que merece mayor pena que la que puede imponerle correccionalmente, manda que, con arreglo á ordenanza, se proceda á la averiguacion del delito, nombrando juez fiscal que instruye los procedimientos, quien reúne las circunstancias de juez instructor y de fiscal. Este nombramiento suele recaer en un oficial de graduacion proporcionada á la del procesado. En el sumario se emplean todos los medios de investigacion y de prueba admitidos por el derecho comun. Concluido aquél, el juez fiscal resume los hechos y emite su opinion acerca de la culpabilidad ó del sobreseimiento. Si el delito fuese *leve*, bastará castigo correccional sin consejo de guerra. Si fuese *grave*, pasan los autos al jefe militar, quien, con audiencia de su auditor, aprueba, modifica ó corrige el dictámen fiscal.

¿Cuándo pasan las actuaciones á plenario?—Siempre que así lo acuerde el jefe militar, siendo consecuencia del acuerdo la necesidad del fallo de la causa en consejo de guerra.

¿Cómo se tramita el plenario?—Recibidos los autos por el juez fiscal, se nombra defensor al procesado, que ha de recaer en un oficial que no sea de la compañía de aquél. Hasta hace poco tiempo recibíasele la *confesion con cargos*, hoy suprimida y reducida á una simple indagatoria, debiendo tomarla por sí el mismo fiscal, leyéndosela íntegramente, permitiendo la aclaracion y rectificacion de hechos y procediendo enseguida á evacuar las citas indicadas por el procesado en ella. Aceptada la defensa, se procede á la ratificacion del sumario, á los careos de los testigos con el acusado, cuando aquéllos no son periciales, y terminadas estas diligencias, el juez fiscal las remite al jefe militar, quien las pasa al auditor, para que mani-

(1) Véase la página 41.

fieste si el procedimiento se ha sustanciado con arreglo á derecho, y se han evacuado las diligencias necesarias. Conforme el jefe con el auditor, vuelven los autos al juez fiscal, quien formula en conclusion su dictámen, pasando el proceso al defensor, para instruccion y defensa, procediéndose enseguida á la formacion y celebracion del consejo de guerra correspondiente, en el dia, lugar y hora acordado.

¿Qué solemnidad debe preceder á la reunion del consejo de guerra?—La misa llamada de Espiritu Santo, á la cual concurrirán todos los vocales.

¿En qué forma ejerce el consejo de guerra sus funciones?—Reunidos los vocales y colocados por antigüedad formando circulo despues del presidente, expone éste brevemente la causa de la celebracion del consejo. El fiscal lee integramente el proceso, el defensor el escrito de defensa, y terminadas ambas lecturas, el presidente propondrá al consejo lo que creyere procedente en contra ó en favor del reo. Si compareciere éste, podrán hacerse las preguntas que se creyeren útiles ó necesarias para esclarecer la verdad, y perfectamente instruido el consejo, el juez mandará despejar el local á los que no intervienen en la causa. Constituido el consejo en sesion secreta, el presidente emite su juicio y pide á los vocales su voto, que se escribirá y firmará por el votante, si pudiere hacerlo, ó por otro vocal si estuviere imposibilitado para ello. La mayoría de votos decide, por regla general, de la pena. Verificada la votacion, el fiscal hará extender la sentencia, que firmarán todos los votantes.

¿Es definitiva y causa ejecutoria la sentencia dictada por los consejos de guerra ordinarios?—No, necesita la aprobacion del capitán ó comandante general, previo el dictámen de su auditor. Cuando éste no está conforme con la sentencia, emite su dictámen fundado, y el jefe militar pasa la causa al Consejo Supremo de la Guerra ó al Almirantazgo, segun el caso, cuya decision causa ejecutoria.

¿Es ejecutivo el fallo de los consejos de guerra extraordinarios?—Tampoco. Necesita como los anteriores de la aprobacion del jefe militar y de la de los tribunales superiores indicados, cuando no hay conformidad entre éste y el fallo.

DE LAS AMNISTÍAS Y DE LOS INDULTOS.

257
El derecho de gracia que todas las constituciones reconocen en el poder supremo de la nacion, es antiquísimo, y se ha deslindado y determinado con la separacion de los poderes públicos, habiendo sido despues objeto de controversia acerca de su conveniencia ó de su uso limitado ó arbitrario, decidiéndose nuestro derecho por la regulacion de su ejercicio, consignada ya en el decreto de 7 de Diciembre de 1866, derogado por la ley provisional de 18 de Junio de 1870, vigente en la actualidad, pero próxima á ser reformada en cuanto á delitos comunes.

Es una prerogativa conveniente á veces, necesaria sobre todo para los delitos políticos y aun para los comunes en quienes concurren determinadas circunstancias. Por su medio, se templá el rigor desmedido, resultado de la aplicacion práctica de las leyes, y produce buenos efectos en la sociedad, en casos dados y cuando no se prodiga el perdon.

¿Qué es amnistia?—El perdon otorgado por el jefe supremo de la nacion á gran número de personas ó á clases enteras de individuos, procesados

por delitos generalmente llamados políticos. El nombre de amnistía viene á significar olvido de lo pasado, y son muy frecuentes estas gracias en nuestros tiempos, y preferentemente en las épocas de convulsiones políticas.

¿Qué es *indulto*?—La condonacion, permuta ó rebaja de la pena correspondiente al reo.

A continuacion copiamos algunas de las disposiciones de la ley de 18 de Junio de 1870, antes citada, sobre el ejercicio de la gracia del indulto.

De las clases y efectos del indulto.

El indulto podrá ser total ó parcial.

Será indulto *total* la remision de todas las penas á que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente.

Será indulto *parcial* la remision de alguna ó algunas de las penas impuestas, ó de parte de todas las en que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente.

Se reputará tambien indulto parcial la conmutacion de la pena ó penas impuestas al delincuente en otras ménos graves.

Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el tribunal á quien corresponda la concesion del indulto en que no se hiciese mencion expresa, á lo ménos, de la pena principal sobre que recaiga la gracia.

El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, á excepcion de las de inhabilitacion para cargos públicos y derechos políticos y sujecion á la vigilancia de la autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mencion especial en la concesion.

Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnizacion civil.

Podrá concederse indulto de las penas accesorias, con exclusion de las principales y vice-versa, á no ser de aquéllas que sean inseparables por su naturaleza y efectos.

El indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho, pero no comprenderá la devolucion de la ya pagada, á no ser que así se determinare expresamente.

No se podrá conceder indulto del pago de los gastos del juicio y costas procesales que no correspondieren al Estado, pero sí de la pena subsidia-ria que el penado insolvente hubiere de sufrir por este concepto.

Si el penado hubiere fallecido al tiempo ó despues de existir causas bastantes para la concesion de su indulto, podrá relevarse á sus herederos de la pena accesoria de multa, con arreglo á lo dispuesto en los párrafos anteriores.

El indulto total se otorgará á los penados tan sólo en el caso de existir á su favor razones de justicia, equidad ó utilidad pública á juicio del tribunal sentenciador y del Consejo de Estado.

En los demás casos se concederá tan sólo el parcial, y con preferencia la conmutacion de la pena impuesta en otra ménos grave dentro de la misma escala gradual.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá tambien conmutarse la pena en otra de distinta escala cuando haya méritos suficientes para ello, á juicio del tribunal sentenciador ó del Consejo de Estado, y el penado además se conformare con la conmutacion.

Conmutada la pena principal, se entenderán tambien conmutadas las

accesorias por las que correspondan, según las prescripciones del Código, á la que hubiere de sufrir el indultado.

Se exceptúa, sin embargo, el caso en que se hubiere dispuesto otra cosa en la concesion de la gracia.

La conmutacion de la pena quedará sin efecto desde el día en que el indultado deje de cumplir, por cualquiera causa dependiente de su voluntad, la pena á que por la conmutacion hubiere quedado sometido.

Serán condiciones tácitas de todo indulto:

- 1.^a Que no cause perjuicio á tercera persona ó no lastime sus derechos.
- 2.^a Que el penado haya de obtener, antes de gozar de la gracia, el perdón de la parte ofendida, cuando el delito por que hubiese sido condenado fuere de los que solamente se persiguen á instancia de parte.

Podrán además imponerse al penado en la concesion de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad ó la utilidad pública aconsejen.

El tribunal sentenciador no dará cumplimiento á ninguna concesion de indulto, cuyas condiciones no hayan sido previamente cumplidas por el penado, salvo las que por su naturaleza no lo permitan.

La concesion del indulto es por su naturaleza irrevocable, con arreglo á las cláusulas con que hubiere sido otorgado.

Art. 20. Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes ó cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representacion.

Puede tambien proponer el indulto el tribunal sentenciador, ó el Tribunal Supremo, ó el fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo á lo que se dispone en el párrafo 3.º, art. 2.º del Código penal, y se disponga además en las leyes de procedimiento y casacion criminal.

La propuesta será reservada hasta que el ministro de Gracia y Justicia, con su vista, decrete la formacion del oportuno expediente.

FIN.

APÉNDICE.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Ley de 27 de Junio de 1878, reformando algunos artículos del Código de Comercio (Gaceta de 2 de Agosto de 1878).

Don Alfonso XII,

Por la gracia de Dios rey constitucional de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran suprimidos los artículos 1.445 y 1.461 del Código de Comercio.

Art. 2.º Los artículos 1.º, 17, 1.062, 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.070, 1.405, 1.447, 1.450 y 1.458 del expresado Código, se entenderán y regirán desde la promulgacion de esta ley en la forma siguiente:

«Artículo 1.º Se reputan de derecho comerciantes, y como tales sujetos á las prescripciones de este Código, los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, funden en él su estado civil, se ocupen habitual y ordinariamente en el tráfico mercantil y estén además inscritos en la matrícula de comerciantes.

La falta de cumplimiento en la inscripcion de la matrícula, no exime á la persona que al comercio se dedica de ser tratada en juicio por las prescripciones de este Código, debiendo serle aplicables, á petición de parte legítima, desde el momento mismo en que anuncie á sus acreedores haber suspendido ó aplazado el pago de sus obligaciones vencidas.

Art. 17. El ejercicio habitual del comercio se supone para los efectos legales cuando una ó más personas anuncian al público por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones que en este Código se declaran como actos positivos de comercio, y á estos anuncios se sigue que la persona se ocupa realmente en actos de esta misma especie y se comprueba el hecho por la contribucion que pague del impuesto industrial.

Art. 1.062. El día para la celebracion de la primera junta de acreedores se fijará con respecto al tiempo que sea absolutamente preciso para que los acreedores que se hallen en el Reino, reciban la noticia de la quiebra y puedan nombrar personas que les representen en las juntas. En ningun caso podrá diferirse la celebracion de ésta más de 30 dias desde que se hizo la declaracion judicial de quiebra.

Si la junta no pudiese celebrarse por cualquier motivo en el día señalado, se designará el más inmediato posible dentro de los quince dias siguientes, anunciándolo por simple edicto que se fijará en los estrados del

juzgado para que llegue á conocimiento de los acreedores, produciendo el mismo efecto que si la citacion fuese personal.

En el caso de que no bastara una sola sesion para el objeto de la junta, se continuará ésta en los dias sucesivos.

Art. 4.066. No será admitida en la junta persona alguna en representacion agena si no se halla autorizada con poder bastante, que estará obligada á presentar en el acto al comisario.

Art. 4.067. Constituida la junta en el dia y lugar señalados para su celebracion, se dará conocimiento á los acreedores del balance y memoria presentados por el quebrado, haciéndose en el acto por el comisario, de oficio ó á instancia de cualquiera de los acreedores, todas las comprobaciones que crean convenientes con los libros y documentos de la quiebra que se tendrán á la vista. El depositario presentará tambien á la junta un informe circunstanciado sobre el estado de las dependencias de la quiebra y el juicio que pueda formarse sobre sus resultados. Asimismo formará y presentará una nota de las recaudaciones y gastos hechos hasta aquel dia.

Cumplidas las precedentes formalidades, se procederá al nombramiento de síndicos.

Art. 4.068. Para toda quiebra se nombrarán tres síndicos, sin que se pueda disminuir ni aumentar este número.

Art. 4.069. El nombramiento de primero y segundo síndico, se verificará en una misma votacion por los acreedores que concurren á la junta general, quedando elegidos los que hubiesen obtenido á su favor votos que representen la mayor suma del capital.

El nombramiento del tercer síndico tendrá lugar por sólo los acreedores cuyos votos no hayan servido para resultar nombrados los dos primeros, quedando elegido aquél que mayor número de votos obtuviere.

Las votaciones serán nominales, y se harán así constar en el acta de la junta.

Art. 4.070. Puede recaer el nombramiento de síndico en cualquier acreedor del quebrado, ya lo sea por su propio derecho, ó ya en representacion agena, y con preferencia en quien ejerciere ó hubiere ejercido el comercio, debiendo tener los elegidos las cualidades de ser mayores de 25 años, y la residencia habitual en el pueblo en que la quiebra tenga lugar.

El nombramiento de síndico se ha de hacer en persona determinada, y no colectivamente en sociedad alguna de comercio.

Art. 4.105. Reunidos los acreedores en el dia señalado para la junta de examen y reconocimiento de créditos, se hará la lectura del estado general de éstos, de los documentos respectivos de comprobacion y del informe de los síndicos sobre cada uno de ellos. Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí ó por medio de apoderado, podrán hacer sobre cada partida las observaciones que estimen oportunas. El interesado en el crédito, ó quien lo represente, satisfará en la forma que pueda convenirle, y se resolverá por mayoría de votos sobre el reconocimiento ó exclusion de cada crédito, regulándose aquélla por la mitad más uno del número de votantes que representen las tres quintas partes del total del crédito que compongan entre todos.

El acuerdo de la junta deja salvo el derecho de todos y cada uno de los acreedores á la quiebra, el del interesado en el crédito controvertido, y el del quebrado, para que, si se sintieren agraviados, usen de él en justicia como les convenga, quedando entre tanto privado de voz activa en la quiebra el acreedor cuyo crédito no sea reconocido.

Art. 4.147. Terminado el juicio de examen y reconocimiento de créditos, y hecha la calificacion de la quiebra, podrá el quebrado presentar proposiciones de convenio si no hubiese sido calificada de tercera, cuarta ó quinta clase, y solicitar del juzgado que convoque á junta á sus acreedores, para lo cual acompañará tantas copias de dichas proposiciones cuantos éstos sean, á fin de que se les remitan para su reconocimiento.

Art. 4.150. El comisario, hallándose el juicio de quiebra en el estado

que se expresa en el art. 1.147, deferirá á cualquiera convocacion de junta extraordinaria que pida el quebrado para tratar de convenio, prestándose alguna persona por él á pagar los gastos.

Art. 1.158. Si se hiciere oposicion al convenio por algun acreedor, se sustanciará con audiencia del quebrado y de los síndicos en el término perentorio é improrogable de 30 días, los cuales serán comunes á las partes para alegar y probar lo que les convenga, y á su vencimiento se decidirá por el juez segun corresponda; admitiéndose sólo en el efecto devolutivo las apelaciones que se interpongan de esta providencia, la cual se llevará por lo tanto á cumplimiento entre el deudor y los acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio de lo que se resuelva en superiores instancias.»

Por tanto:

Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho. — Yo el rey. — El ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de Llano.

GRACIA Y JUSTICIA.

Decreto de 23 de Enero de 1875, estableciendo nuevas bases para las declaraciones de inamovilidad de los magistrados y jueces (Gaceta de 24.)

Art. 1.º Se deroga la sexta disposicion transitoria del tit. 23 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, y se dejan sin efecto las declaraciones de inamovilidad, otorgadas en virtud de ella á los magistrados y jueces.

Art. 2.º La junta de clasificacion creada por la quinta disposicion transitoria de la ley provisional antes citada examinará: primero, si el juez ó magistrado ha ingresado en la carrera con posterioridad á la publicacion de la ley provisional y con arreglo á sus prescripciones, ó lleva el tiempo de servicio que, segun el presente decreto se requiere para obtener la declaracion de inamovilidad; segundo, si concurre en él alguna de las circunstancias que inhabilitan con arreglo á las leyes para el ejercicio de funciones judiciales; tercero, si ha sufrido correcciones disciplinarias, multas, apercibimientos ó imposiciones de costas que por su número y calidad, atendido el tiempo de servicio, demuestren ineptitud, negligencia ú otro vicio grave; cuarto, si en su vida pública ó en la privada, se nota alguna falta ó vicio que haga desmerecer en el concepto público, para lo cual deberá la junta pedir directamente informes reservados á las autoridades locales, y aún á los particulares, cuando lo juzgue conveniente.

La junta emitirá su dictámen en vista de los antecedentes que estime oportunos, manifestando si concurren en el interesado las circunstancias necesarias para gozar de inamovilidad.

Art. 3.º Los méritos y servicios necesarios para ser declarado inamovible en cada categoría de la carrera judicial, y á los cuales se refiere el número 1.º del artículo anterior, son los expresados en las disposiciones siguientes:

1.ª Para ser declarado inamovible en juzgado de entrada, se requiere haber desempeñado durante dos años, con anterioridad al nombramiento, el cargo de promotor fiscal, ó durante cuatro un destino que exija la cualidad de letrado, ó haber ejercido por igual tiempo la abogacia, pagando contribucion por este concepto.

2.ª Para ser declarado inamovible en juzgado de ascenso, se requiere haber obtenido juzgado de entrada con los requisitos establecidos en la disposicion anterior y haberlo desempeñado por espacio de tres años, ó haber servido antes de la fecha del nombramiento, promotoria fiscal durante cinco años ó destino que exija la cualidad de letrado durante ocho, ó haber ejercido por igual tiempo la profesion de abogado, satisfaciendo contribucion en tal concepto.

3.ª Para ser declarado inamovible en juzgado de término, se requiere

haber obtenido juzgado de ascenso con los requisitos expresados en la disposicion anterior y haberlo desempeñado por espacio de tres años, ó haber servido antes del nombramiento durante ocho promotoria fiscal en propiedad ó cargos que exijan la cualidad de letrado, habiendo llegado en ellos á la categoría administrativa de jefe de Negociado, ó haber ejercido durante diez la profesion de abogado, pagando en cuatro de ellos la primera cuota en capital de juzgado, una de las tres primeras en poblacion donde hubiere audiencia ó una de las cinco primeras en Madrid.

4.ª Para ser declarado inamovible en plaza de magistrado de audiencia de provincia, se requiere haber sido nombrado juez de término con arreglo á la disposicion antecedente y haberlo servido durante cuatro años, ó haber antes del nombramiento desempeñado durante diez años, una cátedra de Derecho en propiedad, ó cargos administrativos que exijan la cualidad de letrado, habiendo llegado á obtener en ellos la categoría de jefe de administracion, ó haber ejercido por igual tiempo la abogacia en poblacion donde haya Audiencia, pagando una de las dos primeras cuotas de contribucion, ó en Madrid pagando una de las tres primeras.

5.ª Para ser declarado inamovible en plaza de magistrado de la audiencia de Madrid, se requiere haber sido nombrado para plaza de magistrado de provincia en virtud de las circunstancias expresadas en la disposicion anterior y haberla desempeñado durante cuatro años, ó haber servido con anterioridad al nombramiento cátedra de Derecho en propiedad durante quince, habiendo obtenido la categoría de término, ó haber ejercido por el mismo tiempo la abogacia en capital de audiencia, satisfaciendo en cinco de ellos la primera ó segunda cuota si fuere en Madrid, y la primera si fuere en otra capital de distrito.

6.ª Para ser declarado inamovible en plaza de magistrado del Tribunal Supremo, se requiere haber sido nombrado magistrado de audiencia con arreglo á las disposiciones anteriores y haber desempeñado por dos años el cargo de presidente de audiencia ó el de presidente de sala de Madrid, ó por cuatro el de presidente de sala de audiencia de provincia ó el de magistrado de la de Madrid, ó haber ejercido la abogacia durante quince años en Madrid ó veinte en capital de audiencia, pagando en ocho de ellos la primera cuota.

Art. 4.º Para ser declarado inamovible en la categoría de presidente de sala, se requiere haber sido nombrado para plaza de magistrado del mismo tribunal ó de otro de igual categoría con las condiciones prescritas en las disposiciones anteriores y haberlo desempeñado durante tres años.

Art. 5.º A los que hubieren servido en una categoría más tiempo del requerido en las disposiciones anteriores, se les computará el exceso para compensar lo que les faltare en la inmediata superior.

Tambien se estimará para completar la antigüedad que les faltare para ascender á la categoría en que actualmente estén, el tiempo que lleven de servicio en ella.

Art. 6.º Para los efectos de este decreto, los servicios en la carrera fiscal se considerarán como prestados en la judicial en cargo de igual dotacion; tambien se apreciará, pero sólo por la mitad, el tiempo de servicio en cargos asimilados á los judiciales, segun la décima disposicion transitoria de la ley provisional; y el de cesantía de los mismos ó de los de la carrera judicial ó fiscal á los que hubieren sido declarados en esta situacion despues de haber servido durante seis años.

Art. 7.º Lo dispuesto en el art. 820 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, respecto á la libre separacion del fiscal del Tribunal Supremo y de los fiscales de las audiencias, será aplicable á los tenientes, abogados y promotores fiscales; quedando por tanto en suspenso la aplicacion de las disposiciones contenidas en los arts. 821, 822, 823 y 824 de la misma ley.

No procederá el recurso contencioso contra las disposiciones del Gobierno relativas á la separacion, suspension, ascenso ó traslacion de los funcionarios del ministerio fiscal.

Art. 8.º El Gobierno dará cuenta á las Córtes del presente decreto.

Madrid veintitres de Enero de mil ochocientos setenta y cinco.—El Presidente del Ministerio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas.

GRACIA Y JUSTICIA.

Decreto de 23 de Enero de 1875, dictando reglas para la provision de los cargos del orden judicial y del ministerio fiscal (Gaceta de 24.)

Artículo 4.º La provision de los cargos del orden judicial y del ministerio fiscal, se hará por lo que resulte de los escalafones de sus diversas categorías, en los cuales se comprenderá, tanto á los funcionarios activos como á los cesantes, segun su antigüedad, estimada por el tiempo que lleven de servicio en estas carreras.

Para determinar la antigüedad se contará por la mitad el tiempo de servicio en cargos que, segun la décima disposicion transitoria de la ley orgánica del poder judicial, han de considerarse como asimilados á los judiciales y fiscales, y el de cesantia en unos y otros, siempre que al ser declarado el funcionario en esta situacion pasiva hubiere servido seis años en su carrera á destino asimilado á ella.

Art. 2.º Mientras existan cesantes de la carrera judicial, se proveerán las vacantes que por cualquiera causa ocurran en ella con sujecion á las reglas siguientes:

1.ª De cada dos vacantes de juzgados de entrada, una se proveerá en cesante de la misma categoría, y otra en la forma establecida en los artículos 423, 424 y 425 de la ley orgánica; las plazas que se provean en cesantes se darán, una por antigüedad y otra por eleccion.

Luego que sean colocados todos los aspirantes á la judicatura, serán nombrados en su turno los promotores que, procediendo de la clase de aspirantes al ministerio fiscal, hayan sido removidos sin causa que les haga desmerecer en el concepto público.

Aunque se extingan las clases de aspirantes á la judicatura y de promotores removidos con las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, no se hará nueva convocatoria mientras haya jueces de entrada cesantes en aptitud para volver al servicio activo.

2.ª De cada cuatro vacantes de juzgado de ascenso ó término, las dos primeras se proveerán en cesantes de la respectiva clase, una por antigüedad y otra por eleccion, y las otras dos en jueces activos ó cesantes de la clase inmediata inferior, dándose una al más antiguo y otra al que el gobierno elija entre los que lleven tres años de servicio efectivo en ella.

3.ª De cada cuatro vacantes de magistrado de audiencia de fuera de Madrid, las dos primeras se proveerán en cesantes de la misma categoría, una por antigüedad y otra por eleccion; la tercera en un juez de término que lleve cuatro años de servicio efectivo en esta clase, y la cuarta en la forma prescrita en los números 2.º y 3.º del art. 433 de la ley orgánica, observándose lo dispuesto en los arts. 435 y 436 de la misma ley.

4.ª De cada cuatro vacantes de magistrado de la audiencia de Madrid,

se proveerán: la primera en el cesante más antiguo de la misma audiencia; la segunda en un cesante de la misma categoría, á eleccion del gobierno, y las otras dos segun el turno establecido en el art. 438 de la ley orgánica; entendiéndose que cuando el gobierno usare de la facultad que concede el artículo 439, el magistrado de audiencia de fuera de Madrid en quien recaiga el nombramiento, ha de llevar á lo ménos dos años de servicio efectivo en esta categoría.

5.^a Las vacantes de magistrado del Tribunal Supremo se proveerán en cesantes del mismo Tribunal que reunan las condiciones que exige el decreto de esta fecha para ser declarado inamovible en la misma categoría, ó en los comprendidos en el art. 144 de la ley orgánica, siempre que concurran en ellos las circunstancias necesarias para ser declarados inamovibles, conforme al expresado decreto.

6.^a Las presidencias de las audiencias y las de sus Salas, se proveerán, á eleccion del gobierno, en cesantes de la misma clase, ó en la forma establecida en los arts. 140, 141 y 142 de la ley orgánica.

En la provision de la Presidencia del Tribunal Supremo y de sus Salas, se observará lo prescrito en los arts. 145 y 146 de la misma ley.

Art. 3.^o Las vacantes que ocurran en el ministerio fiscal se proveerán observándose las reglas siguientes:

1.^a De cada dos vacantes de Promotoría de entrada, la primera se proveerá en un cesante, y la segunda con arreglo á lo prescrito en el art. 778 de la ley orgánica. Colocados los actuales aspirantes, no se hará nueva convocatoria mientras haya cesantes de esta clase en aptitud para volver al servicio activo.

2.^a De cada cuatro vacantes de Promotoría de ascenso ó término, las dos primeras se proveerán en cesantes de la clase respectiva, una por antigüedad y otra por eleccion, y las otras dos en promotores activos ó cesantes de la clase inmediatamente inferior por eleccion entre los que lleven dos años á lo ménos de servicio efectivo en ella.

3.^a De cada cuatro vacantes de abogado fiscal de audiencia ó teniente fiscal de audiencia de fuera de Madrid, se proveerán las dos primeras en cesantes de la misma clase, dándose una al más antiguo y otra por eleccion; la tercera en un funcionario activo ó cesante del ministerio fiscal de la clase inmediatamente inferior que lleve á lo ménos dos años de servicio efectivo en ella, y la cuarta con sujecion á lo dispuesto en los arts. 782 y 783, segun los casos que en ellos se preveen.

4.^a De cada cuatro vacantes de fiscal de audiencia de fuera de Madrid, teniente fiscal de la de Madrid y abogado fiscal del Tribunal Supremo, las dos primeras se proveerán en cesantes de la respectiva clase, una por antigüedad y otra por eleccion; y la tercera y cuarta en la forma prevenida en los arts. 784 y 785 de la ley orgánica.

5.^a El cargo de fiscal de la audiencia de Madrid y el de teniente fiscal del Tribunal Supremo, se proveerán en cesantes de la misma clase, si los hubiere, ó en la forma prevenida en el art. 786 de la referida ley.

Art. 4.^o Cuando se extingan los cesantes de una clase, se proveerán las vacantes en la forma prescrita en los arts. 2.^o y 3.^o para los demás turnos.

Art. 5.^o Los cesantes del ministerio fiscal podrán ser nombrados en los turnos de eleccion para plazas de igual dotacion de la carrera judicial, y del mismo modo y con las mismas condiciones, podrán proveerse plazas del ministerio fiscal en funcionarios cesantes del orden judicial.

Los que en virtud de lo dispuesto en el art. 7.^o del decreto de esta fecha sobre inamovilidad judicial sean removidos de cargo del ministerio fiscal sin causa que les haga desmerecer en el concepto público, tendrán opcion á ser incluidos en el escalafon de la categoría judicial cuya dotacion sea igual á la que disfrutaren al tiempo de cesar en la carrera fiscal.

Art. 6.^o En los turnos de eleccion en las escalas de activos y cesantes

serán preferidos entre estos últimos, en igualdad de circunstancias, los que disfruten haber pasivo.

Art. 7.º Los funcionarios de la carrera judicial ó de la fiscal que hayan sido jubilados contra su voluntad y no hubieren cumplido la edad prescrita en los arts. 239 y 832 de la ley orgánica, podrán volver al servicio, si lo solicitaren, y del expediente que se forme resultare su aptitud para desempeñar el cargo que ejercian.

Los que hayan sido jubilados á su instancia y reunieren las mismas condiciones podrán tambien volver al servicio, pero reintegrando al Tesoro de una vez ó por descuentos sucesivos del sueldo que hayan de disfrutar, la diferencia que resulte entre el haber que les habria correspondido como cesantes, y el que hayan percibido como jubilados comprendidos en el artículo anterior.

Art. 8.º Los magistrados, jueces y funcionarios del ministerio fiscal comprendidos en el artículo anterior, y los que hubieren sido declarados cesantes sin causa bastante á hacerlos desmerecer en el concepto público, que deseen volver al servicio y no lo hayan pretendido hasta ahora, lo solicitarán en el término de quince dias, á contar desde la publicacion del presente decreto, si residieren en la Península: en el de un mes si en las Baleares ó Canarias; en el de dos si en Cuba ó Puerto-Rico, y en el de seis si en Filipinas; acompañando á su instancia los que disfruten haber pasivo, certificación que lo acredite.

Los que no utilizaren estos plazos se entenderá que renuncian á volver á la carrera.

Art. 9.º Los nombramientos que se hagan en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, se publicarán en la *Gaceta de Madrid* con un extracto de los servicios de los agraciados.

Art. 10. Quedan derogadas las disposiciones de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial que sean cantrarias á las de este decreto, del cual dará el gobierno cuenta á las Cortes

Madrid veintitres de Enero de mil ochocientos setenta y cinco.—El Presidente del Ministerio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas.

GRACIA Y JUSTICIA.

Real decreto de 22 de Octubre, modificando el decreto de 23 de Enero de 1875 sobre provision de cargos del orden judicial y del ministerio fiscal. (Gaceta de 23).

Artículo 1.º La mitad de las vacantes de magistrados de audiencia y de juez de primera instancia de término y de ascenso se proveerán en cesantes de la misma categoría, prefiriendo á los que disfruten haber pasivo, y la otra mitad en funcionarios de la categoría inmediatamente inferior que reunan las condiciones requeridas para el ascenso en la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.

En la misma forma se proveerán los cargos de fiscal, teniente fiscal y abogado fiscal de audiencia, y los de promotor fiscal de término y de ascenso.

Art. 2.º La mitad de los juzgados de primera instancia de entrada se proveerán precisamente en cesantes de la misma clase; para la otra mitad podrán ser nombrados tambien promotores de entrada ó de ascenso, activos ó cesantes, que por haber comenzado á ejercer estos cargos antes de la publicacion de la citada ley provisional sobre organizacion del poder judicial estén comprendidos en la décima cuarta disposicion transitoria.

Los promotores fiscales de entrada que se encuentren en este caso, no podrán ser nombrados jueces si no han ejercido la promotoria durante tres años á lo ménos.

Art. 3.º Sólo tendrán derecho á ser colocados en los turnos correspondientes á los cesantes, aquellos que hubiesen sido nombrados para el cargo en que cesaron con arreglo á las disposiciones generales vigentes en la fecha de su nombramiento.

Los que no se encuentren en este caso podrán ser repuestos en su misma categoría, ó nombrados para cargos de otra inferior con arreglo á sus méritos y servicios.

Art. 4.º A los cesantes que con anterioridad á la ley provisional sobre organizacion del poder judicial estuvieren comprendidos en cualquiera de las categorías de la carrera judicial ó fiscal, se les abonará la mitad del tiempo de su cesantía para el solo efecto de poder optar al ascenso inmediato á la clase en que actualmente se hallen, siempre que en ésta hayan servido el tiempo exigido por las disposiciones vigentes ó por las que en lo sucesivo rijan.

Art. 5.º Queda modificado, en cuanto se oponga á las anteriores disposiciones, el decreto de 23 de Enero de 1875 sobre provisiones de cargos del orden judicial y del ministerio fiscal.

Dado en Palacio á veintidos de Octubre de mil ochocientos setenta y siete.—Alfonso.—El ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderon y Cellantes.

LEY DE CASACION CIVIL.

TITULO PRIMERO.

De los casos en que procede el recurso de casacion.

Artículo 1.º El conocimiento de los recursos de casacion corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo.

Art. 2.º El recurso de casacion se da únicamente contra las sentencias definitivas pronunciadas por las audiencias, contra las que dicten los jueces de primera instancia en las demandas de desahucio, y contra las de los amigables componedores, y sólo en los casos establecidos por esta ley.

Art. 3.º Tienen el concepto de definitivas para los efectos del artículo anterior, además de las sentencias que terminan el juicio:

1.º Las que recayendo sobre un incidente ó artículo ponen término al pleito haciendo imposible su continuacion.

2.º Las que declaren haber ó no lugar á oír á un litigante que haya sido condenado en rebeldía.

3.º Las pronunciadas en actos de jurisdiccion voluntaria en los casos establecidos por la ley.

Art. 4.º El recurso de casacion ha de fundarse en alguna de las causas siguientes:

1.º Ser la sentencia contra ley ó doctrina legal.

2.º Haberse quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio.

3.º Haber los amigables componedores dictado la sentencia fuera del plazo señalado en el compromiso, ó resuelto puntos no sometidos á su decision.

Art. 5.º Se considerará como infraccion de formas esenciales del juicio para los efectos del núm. 2.º del artículo anterior:

1.º La falta de emplazamiento en primera ó segunda instancia de las personas que hubieran debido ser citadas para el juicio.

2.º La falta de personalidad en alguna de las partes ó en el procurador que la haya representado.

3.º La falta de recibimiento á prueba en alguna de las instancias cuando procediere con arreglo á derecho.

4.º La falta de citacion para alguna diligencia de prueba ó para sentencia definitiva en cualquiera de las instancias.

5.º La denegacion de cualquier diligencia de prueba admisible segun las leyes, y cuya falta pueda producir indefension.

6.º La incompetencia de jurisdiccion cuando este punto no haya sido resuelto por el Tribunal Supremo.

7.º Haber concurrido á dictar sentencia uno ó más jueces cuya recusa-

cion, fundada en causa legal é intentada en tiempo y forma, hubiese sido estimada.

8.º Haber sido dictada la sentencia por menor número de jueces que el señalado por la ley.

Art. 6.º No se da recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal en los juicios de menor cuantía, en los posesorios, en los ejecutivos, ni en ningun otro despues del cual pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, excepto los casos comprendidos en el art. 3.º, número 3.º; pero son procedentes los que se fundan en el quebrantamiento de alguna de las formas del juicio expresadas en el artículo anterior.

Tampoco se da recurso contra los autos que dicten las audiencias en los expedientes sobre ejecucion de sentencias, á no ser que en ellos se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en estas, ó se provea en contradiccion con lo ejecutoriado.

Art. 7.º Para que puedan ser admitidos los recursos de casacion fundados en quebrantamiento de forma, es indispensable que se haya pedido la subsanacion de la falta en la instancia en que se cometió, y reproducido la peticion en la segunda instancia cuando la infraccion proceda de la primera.

Art. 8.º Será admisible el recurso, aunque no haya precedido la reclamacion de que habla el artículo anterior, siempre que la infraccion se haya cometido en la segunda instancia cuando el hacerla fuera ya imposible.

Art. 9.º El que intentare interponer recurso de casacion, depositará en el establecimiento destinado al efecto, mil pesetas cuando fueren conformes de toda conformidad las sentencias de la primera y segunda instancia, ó más gravosa todavia la de segunda que la de primera en los recursos por infraccion de ley ó de doctrina legal; en los que se interpongan contra las sentencias de los amigables componedores y las pronunciadas en los autos de jurisdiccion voluntaria. Quinientas pesetas cuando el recurso se interponga por quebrantamiento de forma.

Art. 10. En los casos en que la cantidad objeto del litigio sea inferior á 3.000 pesetas, el depósito no excederá de la sexta parte de su valor, si el recurso que se intenta interponer se fundase en infraccion de ley ó doctrina legal, ó fuese contra el fallo de amigables componedores, ó pronunciado en autos de jurisdiccion voluntaria, ni de la dozava parte si se fundase en quebrantamiento de forma.

TITULO II.

De la preparacion del recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina.

Art. 11. El que se proponga interponer recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal, presentará ante la Sala que hubiere dictado la sentencia, dentro del término improrogable de diez dias, contados desde el siguiente al de la notificacion que se le hubiere hecho de aquella, un escrito manifestando su intencion de interponer el recurso, y solicitando que se le expida para ello certificacion literal de la sentencia, y de la de primera instancia si en la segunda hubieren sido aceptados y no reproducidos textualmente todos sus resultandos y considerandos.

Pasados los diez dias sin solicitarlo, la sentencia quedará firme.

Art. 12. La audiencia mandará dar la certificacion que se hubiere solicitado dentro del término señalado en el artículo anterior, y que se emplee á las otras partes para su comparecencia ante la Sala de admision del Tribunal Supremo, que por ahora lo será la tercera del mismo Tribunal,

dentro del término de cuarenta días en los pleitos procedentes de la Península é islas Baleares, y de cincuenta en los que lo sean de las Canarias, el cual empezará á correr desde el siguiente al de la entrega de la certificación á la parte que la hubiere solicitado, cuya fecha se hará constar por diligencia puesta al pié de dicho documento.

Art. 43. Si se pidiere la certificación fuera del término señalado en el artículo anterior, ó de sentencias ó autos de los comprendidos en las reglas generales de los párrafos primero y segundo del art. 6.º, ó de providencias de mera tramitación, la denegará la audiencia en auto motivado, en el que se expresará además la fecha de la sentencia, la de su certificación y la de la presentación del escrito en que se hubiere pedido la certificación.

Del auto denegativo se dará copia certificada en el acto de la notificación al que la hubiere solicitado, para que si lo estima conveniente pueda recurrir en queja ante la Sala de admisión del Tribunal Supremo en el término de quince días en los pleitos procedentes de audiencia de la Península é Islas Baleares, y de treinta para las de las Canarias, contados desde el día siguiente al de la entrega, que se expresará por diligencia puesta al pié de la certificación.

Pasado este término, ningún recurso se podrá utilizar.

La audiencia podrá acordar, á instancia de parte, la continuación del procedimiento á pesar de la expedición de la copia certificada á que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Art. 44. El recurrente presentará ante el Tribunal Supremo, dentro del término señalado en el artículo anterior, el recurso de queja, acompañando la copia certificada de la providencia denegatoria.

La sala, sin más trámites, dictará la resolución que proceda, contra la cual no se dá ulterior recurso.

Art. 45. Cuando el Tribunal Supremo confirmare el auto denegatorio, lo pondrá en conocimiento de la audiencia que lo dictó para los efectos legales que procedan.

Cuando revocare, dirigirá carta orden á la audiencia para que mande dar la certificación solicitada.

Art. 46. En el mismo día en que se entregue la certificación á la parte que se proponga interponer el recurso de casación, se remitirá al Tribunal Supremo:

1.º Certificación literal autorizada por el presidente de la sala que dictó la sentencia, de los votos reservados, si los hubiere, y negativa en el caso de no haberlos.

2.º El apuntamiento de los autos.

Art. 17. Si el que solicitare la autorización estuviese mandado defender en concepto de pobre, deberá manifestar en el mismo escrito en que pida la certificación si tiene abogado y procurador que le defiendan y representen ante el Tribunal Supremo, designándolos en su caso; bajo la prevención de que no designándolos ó no aceptando los que hubiere designado, se le nombrarán de oficio.

Art. 48. La audiencia mandará remitir al Tribunal Supremo la certificación de la sentencia ó del auto denegatorio, previos los emplazamientos de que hablan los arts. 41 y 42 en sus respectivos casos.

Art. 19. Recibida la certificación á que se refiere el artículo anterior en el Tribunal Supremo, la sala de admisión acordará, en el caso de haber designado el recurrente abogado y procurador, que se le requiera para que manifiesten si aceptan la defensa y representación.

Si contestaren afirmativamente, se entregará la certificación al procurador para que en el preciso término de veinte días presente el recurso que corresponda.

Art. 20. Si el interesado no hubiere designado abogado ni procurador, ni comparecido éste en su nombre con poder despues de diez días de re-

mitida la certificacion por la audiencia, mandará la sala del Tribunal Supremo que los decanos de los respectivos colegios nombren á los que se hallen en turno. Lo mismo acordará si los elegidos por la parte ó alguno de ellos no aceptasen el careo.

Art. 21. Hecho el nombramiento de abogado y procurador, acordará la sala que se entregue al último la certificacion de la sentencia ó del auto denegatorio, para que dentro del término de veinte dias presente el recurso que corresponda, autorizado con la firma del abogado.

Art. 22. Si el letrado designado por la parte ó nombrado de oficio no considerase procedente el recurso, lo expondrá por escrito, pero sin razonar su opinion, en el término de tres dias, y en el de otros dos se nombrará nuevo letrado que, si opinare como el anterior, lo expondrá por escrito en igual término y forma, nombrándose en los dias siguientes otro tercer letrado que, por escrito manifestará tambien su opinion dentro de tercero dia si fuese conforme con los anteriores.

Art. 23. Cuando los tres abogados convinieren en la improcedencia del recurso, se pasará el expediente al ministerio fiscal para que lo interponga en el término de diez dias, si lo estima procedente en derecho; en otro caso lo devolverá con la nota de visto.

En este último caso la sala declarará no haber lugar á la admision del recurso, y comunicará esta resolucion á la audiencia en que se haya seguido el pleito.

TITULO III.

De la interposicion y admision del recurso por infraccion de ley ó de doctrina.

Art. 24. La parte que hubiere obtenido la certificacion de la sentencia presentará en la sala de admision del Tribunal Supremo el escrito formalizando el recurso de casacion en el término de cuarenta dias en los pleitos procedentes de la Peninsula é Islas Baleares, y de cincuenta en los de Canarias, cuyo término empezará á correr desde el dia siguiente al de la entrega de la certificacion.

Pasado dicho término quedará firme la sentencia, y no podrá admitirse el recurso aunque no se haya acusado la rebeldia por la parte contraria.

Luego que se presente un procurador con poder bastante expresando que va á proponer recurso de casacion, se le pondrá de manifiesto la certificacion de votos reservados que al asunto haga referencia.

Art. 25. Al escrito en que se interponga el recurso acompañarán:

1.º El poder que acredite la legitima representacion del procurador, á no haber sido nombrado de oficio.

2.º La certificacion de la sentencia.

3.º El documento en que se justifique haber hecho el depósito prevenido en los arts. 9.º y 10.

4.º En los pleitos sobre desahucio presentará tambien el inquilino recurrente el documento que acredite tener satisfechas las rentas vencidas; las que segun el contrato deba adelantar, y el importe del inquilinato correspondiente á los cuarenta dias que esta ley concede para la interposicion del recurso.

No presentándose el documento señalado en el núm. 3.º de este artículo, y en su caso el del núm. 4.º, se mandará devolver el escrito á la parte recurrente.

Art. 26. No se considerará al recurrente relevado de la obligacion de constituir el depósito por alegar que ha venido á pobreza posteriormente y ofrecer justificacion de este hecho.

Art. 27. En el escrito se citará con precision y claridad la ley ó doctrina que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido.

Si fueren dos ó más los fundamentos ó motivos del recurso, se expresarán en párrafos separados y numerados.

Art. 28. Con el escrito se presentarán tantas copias del mismo cuantas sean las partes litigantes.

Art. 29. Los recurrentes en casacion ó queja acreditarán ante la audiencia respectiva haber formalizado el recurso en el Tribunal Supremo dentro del plazo legal, lo cual deberán hacer en el término de quince dias en los pleitos procedentes de la Península é Islas Baleares, y de treinta en la de Canarias, á contar desde el siguiente al en que espira dicho plazo legal.

No haciéndolo, acordará la Audiencia, á instancia de parte, que lleve á efecto la sentencia recurrida, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13.

Art. 30. Si dentro del término del emplazamiento compareciese la parte que obtuvo la sentencia, se le entregará la copia del recurso, á fin de que, si lo tiene por conveniente, pueda presentar dentro de seis dias una sucinta nota contradiciendo la admision del recurso; pero sin entrar en el exámen é impugnacion de los motivos de casacion alegados.

Acompañará tambien tantas copias de la nota cuantas sean las partes litigantes, á cada una de las cuales se entregará un ejemplar.

Art. 31. Podrá la parte recurrente presentar dentro de tercero dia otra sucinta nota de contestacion á la de que habla el artículo que precede: pero sin ampliar los motivos de casacion, ni alegar otros nuevos.

Art. 32. Trascurridos los plazos expresados en los artículos anteriores, mandará la sala que pasen los autos al magistrado ponente para su instruccion, citadas las partes presentes.

Art. 33. Dentro de los diez dias siguientes al de la última citacion pronunciará la sala el fallo que corresponda, arreglado á una de las tres fórmulas siguientes:

Primera. «No há lugar á la admision del recurso, se condena al pago de las costas á la parte recurrente, á la que se devolverá el depósito constituido, y dese comunicacion de este auto á la audiencia de... para los efectos legales correspondientes.»

Segunda. «Admitido el recurso, y pase á la sala primera.»

Tercera. «Admitido respecto á la infraccion de ley... ó de doctrina... señalada en el núm... no há lugar, respecto á las demás infracciones alegadas, y pase á la sala primera.»

Art. 34. El primero de los fallos formulados en el artículo anterior se dictará:

1.º Cuando la certificacion se hubiere pedido é interpuesto el recurso fuera de los términos respectivamente señalados en esta ley, ó no se haya constituido el depósito, ó el realizado sea inferior al que corresponde con arreglo á los arts. 9.º y 10.

2.º Cuando la sentencia contra que se recurre no tenga el concepto de definitiva, ó no sea susceptible del recurso de casacion por la naturaleza ó cuantía del juicio en que hubiere recaído.

3.º Cuando no se hayan citado con precision y claridad las leyes que se supongan infringidas y el concepto en que lo han sido.

4.º Cuando la ley ó doctrina citadas se refieren á cuestiones no debatidas en el pleito.

5.º Cuando el recurso se refiera á la apreciacion de las pruebas sin alegar ley ó doctrina que al hacerla se haya infringido.

6.º Cuando se citen como doctrina legal principios de derecho que no merezcan tal concepto, ó las opiniones de los jurisconsultos á que la legislacion del pais no dé fuerza de ley.

Art. 35. El segundo de los fallos formulados en el art. 33 se dictará

cuando no concorra ninguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior.

Art. 36. Corresponde dictar el tercero de los fallos formulados en el artículo 33 cuando el recurso se fundase á la vez en motivos comprendidos en los dos artículos que preceden.

Art. 37. Contra los fallos á que se refieren los artículos anteriores no se da recurso alguno.

Art. 38. Las sentencias que se dicten con arreglo á la fórmula primera serán motivadas, y se publicarán en la *Gaceta* y en la *Coleccion legislativa*.

Lo mismo se practicará respecto á las sentencias arregladas á la fórmula tercera, en los puntos en que se estime no haber lugar á la admision del recurso.

TITULO IV.

De la sustanciacion y decision de los recursos admitidos por infraccion de ley ó de doctrina.

Art. 39. Recibidos en la sala primera los autos dictará providencia mandando se haga saber su venida á las partes que estuvieren personadas, y que se entreguen á la recurrente para la instruccion por término de diez dias.

Art. 40. El recurrente devolverá los autos con un escrito manifestando quedar instruido, y en él podrá pedir tambien y ordenar la sala que se desglosen del pleito principal y que se una á ellos alguno ó algunos documentos que obre en él, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

1.^a Que la exposicion que se haya hecho de ellos en el apuntamiento de la audiencia ó en la sentencia sea insuficiente para apreciar con exactitud su valor y sentido.

2.^a Que sean de influjo tan directo y necesario que de su inteligencia pueda depender la decision del recurso.

Tambien podrá pedir el recurrente, y la sala deberá ordenar, se remita y una á los autos certificacion de cualquiera diligencia de prueba practicada en el pleito, si concurren respecto de ella las mismas circunstancias.

Art. 41. Devueltos los autos por la parte recurrente, se entregarán por su orden á los demás litigantes que se hubiesen presentado para instruccion y por igual término de diez dias á cada uno.

Podrán tambien pedir el desglose y remision de documentos siempre que concurren las circunstancias expresadas en el artículo anterior.

Art. 42. Si la parte que haya obtenido la sentencia no se hubiese presentado, continuará la sustanciacion del recurso sin oírle; pero si se personare antes de la vista del recurso, se la tendrá por parte, mandando que se entiendan con la misma las diligencias sucesivas, sin que en ningun caso pueda retroceder ni paralizarse la sustanciacion.

Art. 43. Si alguna de las partes hubiere pedido el desglose y remision de documentos, acordará la sala, luego que todas hubieren manifestado hallarse instruidas, que pasen los autos al magistrado ponente; y en vista de su informe acerca de dicha pretension, dictará la resolucion que corresponda, contra la cual no se dará ulterior recurso.

Art. 44. Cuando hubieren tenido lugar la union á los autos de documentos traídos del pleito principal, se dará vista para instruccion á cada una de las partes litigantes por un término que no podrá exceder de ocho dias.

Art. 45. Instruidas las partes, declarará la sala conclusos los autos, y mandará que se traigan á la vista con las debidas citaciones.

Art. 46. El secretario formará un acta expresiva de las actuaciones é incidentes que hayan tenido lugar durante la sustanciacion del recurso.

Art. 47. Redactarán tambien los secretarios una nota expresiva de los puntos de hecho y de derecho comprendidos en el apuntamiento y en la sentencia de la audiencia en cuanto se relacione con los motivos de casacion, haciendo mencion especial de la parte dispositiva de la sentencia y de las leyes y doctrinas que se citen como infringidas y del concepto en en que se alegue que lo han sido.

A cada uno de los magistrados que deben componer la sala se entregará dos dias antes del señalado para la vista, una copia de la nota.

Igual copia y en el mismo dia se entregará á cada una de las partes.

Art. 48. El señalamiento de dia para la vista se hará por el presidente de la sala siguiendo el orden de fechas de las providencias declarando conclusos los autos, á no ser que exijan la alteracion de este orden circunstancias especiales de apreciacion exclusiva del presidente.

Art. 49. Sólo podrá suspenderse la vista de los pleitos en el dia señalado:

1.º Por impedirlo la continuacion de un pleito ya empezado.

2.º Por faltar el número de magistrados necesarios para dictar sentencia.

3.º Por muerte ó cesacion del procurador de cualquiera de las partes.

4.º Por fallecimiento de cualquiera de los litigantes.

5.º Por solicitarlo todos los procuradores de las partes.

6.º Por enfermedad del abogado de la parte que pidiese la suspension, siempre que se comprobase suficientemente á juicio de la sala y se solicitase cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la vista, á no ser que la enfermedad hubiese sobrevenido despues de este periodo.

7.º Por la defuncion de la esposa ó cualquiera de los descendientes ó ascendientes del abogado defensor, ocurrida dentro de los nueve dias anteriores al señalado para la vista.

Art. 50. En el caso de suspension de la vista, se volverá á señalar el dia en que deba celebrarse tan pronto como haya desaparecido el motivo de la suspension, sin alterar el orden de los señalamientos que ya estuvieren hechos.

Art. 51. Ni antes de la vista ni en el acto de verificarse puede admitir la sala ningun documento que las partes presenten, ni permitir su lectura, como tampoco la alegacion de hechos que no resulten de los autos.

Art. 52. Las vistas de los recursos empezarán con la lectura de la sentencia que á ellos hubiere dado lugar, de la certificacion de votos reservados y del acta formada por el relator, y despues informarán por su orden los abogados defensores, los cuales podrán leer la parte que les pareciere necesaria de los documentos cuya union se hubiere estimado.

Terminados los informes, el presidente de la sala pronunciará la fórmula de «visto,» salvo si estimare necesario que los abogados repliquen mutuamente.

Art. 53. Para la vista de los recursos deberán concurrir el presidente de la sala y seis magistrados, uno de los cuales será el ponente.

Si faltase el presidente de sala, será reemplazado por el del Tribunal; y si éste se hallare ausente ó impedido, ó fuere incompatible, presidirá la sala el magistrado más antiguo.

Art. 54. El que haya presidido la vista del pleito señalará el dia en que haya de tener lugar su discusion y votacion. Para ello el ponente someterá de palabra á la deliberacion de la sala los puntos de hecho, los fundamentos de derecho y la decision que á su juicio deba recaer, pero sin llevar formulado el proyecto de sentencia.

Art. 55. El Tribunal dictará sentencia dentro de quince días, contados desde el siguiente al de la terminación de la vista.

El magistrado ponente la presentará redactada con arreglo á lo decidido por la sala, aunque su voto haya sido contrario.

Art. 56. Si el Tribunal estimase que en la sentencia se ha cometido la infracción de ley ó de doctrina en que se funda el recurso, declarará haber lugar á él y casará la sentencia, mandando devolver el depósito si se hubiere constituido.

A continuación, aunque separadamente, dictará la sentencia que corresponda sobre la cuestión objeto del pleito, con arreglo á lo que exigen la ley ó la doctrina quebrantadas en la sentencia de la audiencia.

Podrá, sin embargo, acordar para mejor proveer el desglose y remisión de documentos que obren en el pleito ó que se remita certificación de cualquier escrito, actuación ó diligencia practicada en el mismo, y aún ordenar la remisión de todo el pleito cuando lo estime absolutamente necesario para fallarlo con el debido conocimiento.

En todo caso se dictará la segunda sentencia sin nueva vista.

Art. 57. El término para dictar sentencia en el caso del párrafo último del artículo anterior, empezará á contarse desde el día siguiente al de haberse recibido en la sala las actuaciones ó documentos que se hubiese mandado remitir.

Art. 58. En las sentencias en que se declare no haber lugar al recurso se condenará al recurrente al pago de todas las costas y á la pérdida del depósito, si se hubiere constituido, al que se mandará dar la aplicación señalada por la ley.

TITULO V.

De la interposicion, admision y sustanciacion del recurso por quebrantamiento de forma.

Art. 59. El recurso de casacion por quebrantamiento de forma se interpondrá en la sala que hubiere dictado la sentencia dentro de los diez días siguientes al de su notificación á la parte que le proponga.

Pasado dicho término sin haberlo interpuesto, quedará de derecho firme la sentencia.

Art. 60. En el escrito en que se formalice el recurso se expresará el caso ó casos del art. 5.º en que se funda, y las reclamaciones que se hubieren hecho para obtener la subsanación de la falta, ó que no ha sido posible hacerlo por haber tenido lugar en la última instancia y cuando ya no era posible solicitar su enmienda.

Art. 61. Con el escrito en que se interponga el recurso se presentará el documento en que se acredite haberse hecho el depósito prevenido en el artículo 9.º de esta ley.

Sin este documento no se admitirá el escrito, á no estar mandado ayudar y defender en concepto de pobre el recurrente.

Art. 62. Presentado el recurso, la sala examinará:

1.º Si la sentencia es definitiva ó merece el concepto de tal con arreglo al art. 3.º de esta ley.

2.º Si ha sido interpuesto dentro del término legal.

3.º Si se funda en alguna de las causas taxativamente señaladas en el artículo 5.º de esta misma ley.

4.º Si la omisión ó falta ha sido reclamada oportunamente, pudiendo haberlo sido con arreglo á los arts. 7.º y 8.º

Art. 63. Concurriendo todas las circunstancias expresadas en el artículo anterior, la sala, dentro de tercero día, dictará auto admitiendo el recurso, y mandando se cite y emplace á las partes para su comparecencia ante el Tribunal Supremo dentro del término de quince días, á contar desde el siguiente al de la última notificación del auto en los pleitos procedentes de la Península é Islas Baleares, y de treinta para los que lo sean de las Canarias; y que se remitan los autos á dicho Tribunal, con certificación de los votos reservados, si los hubiera habido, respecto de la infracción en la forma, ó negativa en otro caso.

Art. 64. No concurriendo todas las circunstancias expresadas en el artículo 62, la sala sentenciadora dictará auto motivado declarando no haber lugar á la admisión del recurso, y que se entregue copia certificada del escrito y del auto á la parte que se suponga agraviada, si lo pidiese, expresándose al pie de ella el día en que tiene lugar su entrega.

Art. 65. Con la copia certificada á que se refiere el artículo anterior, podrá la parte recurrir en queja ante la sala de admisión del Tribunal Supremo dentro de los términos respectivamente señalados en el art. 43, pasados los cuales sin ejecutarlo no se admitirá el recurso, y se pondrá en conocimiento de la audiencia esta resolución.

Art. 66. Si el que intenta recurrir en queja estuviese declarado pobre, la audiencia remitirá la copia certificada á la sala de admisión del Tribunal Supremo, haciéndolo saber al interesado.

Art. 67. Recibida la certificación en el Tribunal Supremo, acordará que al recurrente se nombre abogado y procurador, al primero de los cuales se entregará aquella para que formalice el recurso de queja dentro del término de diez días.

Art. 68. Si el abogado nombrado de oficio no estimare procedente la queja, se pasará la certificación al fiscal para que la formalice si la hallare fundada: en otro caso la devolverá con la nota «visto,» y se ejecutará lo prevenido en el párrafo segundo del art. 23 de esta ley.

Si antes de devolver el fiscal los autos se presentase el interesado manifestando tener abogado y procurador que lo defiendan, se les requerirá para que manifiesten si aceptan el cargo; y contestando afirmativamente, se entregará la copia certificada al procurador para que con la debida dirección presente el recurso de queja en el término de diez días.

Art. 69. Presentado el recurso de queja, la sala, sin más trámites, dictará dentro de quinto día la resolución que corresponda, y contra ella no se da ulterior recurso.

Art. 70. Cuando el Tribunal Supremo revocase el auto denegatorio de la admisión del recurso, lo admitirá por sí, y dirigirá orden á la audiencia para que remita los autos con la certificación y citaciones prevenidas en el artículo 63.

Art. 71. Si el Tribunal Supremo confirmase el auto denegatorio, lo pondrá en conocimiento de la audiencia que lo dictó para los efectos correspondientes.

Art. 72. Recibidos los autos en la sala de casación, y personada la parte recurrente dentro del término del emplazamiento, acordará que pasen al secretario relator para la formación del apuntamiento.

Art. 73. Los secretarios relatores formarán los apuntamientos, siguiendo el orden riguroso de las fechas en que se hubiere acordado este trámite.

Art. 74. Hecho el apuntamiento, acordará la sala que se entregue con los autos á las partes por su orden y término de diez días á cada una para su instrucción.

Art. 75. Al devolver los autos, las partes manifestarán su conformidad con el apuntamiento, ó en otro caso propondrán las adiciones ó rectificaciones que crean necesarias.

Art. 76. Conformes las partes con el apuntamiento, ó hechas en él las reformas que haya estimado el Tribunal, previo el informe del magistrado ponente, declarará conclusos los autos, y mandará que se traigan á la vista con citacion de las partes.

Art. 77. En el señalamiento de dia para la vista y demás trámites sucesivos, se observará lo dispuesto en los artículos desde el 48 al 54 inclusive, sin más diferencia que la de que la vista consistirá en la lectura del apuntamiento y en los informes de los abogados defensores.

Art. 78. El término para dictar sentencia será de diez dias.

Art. 79. En las sentencias en que se declare haber lugar al recurso de casacion, se mandará devolver el depósito á la parte recurrente, y los autos á la audiencia de que procedan para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los sustancie y determine ó haga sustanciar y determinar con arreglo á derecho, y se acordarán además las correcciones y prevenciones que correspondan, segun la gravedad de la infraccion.

Art. 80. Cuando se declare no haber lugar al recurso, se condenará al recurrente al pago de las costas y á la pérdida del depósito, si se hubiere constituido.

TITULO VI.

De los recursos por quebrantamiento de forma, y á la vez por infraccion de ley ó de doctrina.

Art. 81. El que se proponga interponer recurso de casacion por quebrantamiento de forma, y á la vez por infraccion de ley ó de doctrina, formalizará el relativo al quebrantamiento de forma con arreglo á lo dispuesto en los arts. 60 y 64.

En un otrosí del mismo escrito hará la protesta formal de interponer en su caso y lugar el relativo á la infraccion de ley ó de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El escrito se presentará dentro de los diez dias siguientes al de la notificacion de la sentencia á la parte que intente el recurso, pasados los cuales sin hacerlo, quedará de derecho firme la sentencia, aunque se haya protestado interponer el de infraccion de ley ó de doctrina.

Art. 82. Para la admision y sustanciacion del recurso, se observará lo dispuesto en el art. 62 y siguientes del tít. 5.^o de esta ley.

Art. 83. Declarado por el Tribunal Supremo no haber lugar al recurso por quebrantamiento de forma, y practicada y aprobada la tasacion de costas, mandará la sala que se entreguen los autos á la parte recurrente para que en el término preciso de veinte dias, que empezarán á correr desde el siguiente al de la notificacion de la providencia, formalice el recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina con arreglo á lo dispuesto en los arts. 27 y 28 de esta ley.

Art. 84. Con el escrito que se interponga el recurso se presentará el documento que acredite haber hecho el depósito prevenido en los artículos 9.^o y 40 de esta ley, sin el cual se mandará devolver el escrito á la parte que lo hubiese presentado.

Art. 85. El recurso se sustanciará y fallará con arreglo á lo dispuesto en los arts. 30 y siguientes de esta ley, con las modificaciones siguientes:

La primera de las fórmulas expresadas en el art. 33 será la de:

«No há lugar á la admision del recurso: se condena á la parte recurrente al pago de las costas, devolviéndosele el depósito constituido, y los autos á la audiencia de... con la certificacion correspondiente.»

Art. 86. Cuando se declare admitido el recurso, se sustanciará con arreglo á lo dispuesto en el art. 39 y siguientes del tit. 4.º de esta ley.

TITULO VII.

De los recursos contra las sentencias de los amigables componedores.

Art. 87. Con el escrito formalizando el recurso de casacion contra las sentencias de los amigables componedores se presentará:

- 1.º El testimonio de la escritura de compromiso.
- 2.º El del fallo y su notificacion al recurrente.
- 3.º El documento que acredite la constitucion del depósito que corresponda con arreglo á los arts. 9.º y 10 de esta ley.

Si el plazo señalado en la escritura de compromiso hubiese sido prorogado, y el recurso se fundase en haberse pronunciado el fallo fuera de término, se acompañará además testimonio de la escritura de próroga.

Ningun otro documento será admisible.

Art. 88. En el recurso se expresará en qué causa de las referidas en el núm. 3.º del art. 4.º se funda el recurso ó si se entabla por ambas, expresándose los motivos de casacion, en párrafos separados y numerados.

Art. 89. El término para interponer el recurso será de veinte dias, que empezará á correr desde el siguiente al de la naticacion del fallo á la parte recurrente.

Art. 90. El recurso se presentará ante la sala de admision, la cual acordará que se cite y emplace á los demás interesados para que comparezcan á usar de su derecho ante ella en el término de quince dias en los negocios procedentes de la Península é Islas Baleares, y de treinta para los de las Canarias.

Art. 91. En la sustanciacion y decision de estos recursos se observará lo dispuesto en el tit. 5.º de esta ley.

Art. 92. Cuando la sala estimare que los amigables componedores han dictado el fallo fuera del término señalado en el compromiso, casará su sentencia.

Art. 93. Si el recurso se fundare en haber resuelto los amigables componedores puntos no sometidos á su decision, casará su sentencia únicamente en el punto ó puntos en que consista el exceso.

TITULO VIII.

De los recursos interpuestos por el ministerio fiscal.

Art. 94. El ministerio fiscal podrá interponer el recurso de casacion en los pleitos en que sea parte, sujetándose á las reglas establecidas en los titulos precedentes, pero sin constituir depósito.

Art. 95. Podrá igualmente el ministerio fiscal, en interés de la ley, interponer en cualquier tiempo el recurso de casacion por infraccien de ley ó de doctrina legal en los pleitos en que no haya sido parte, en cuyo caso serán citadas y emplazadas las que intervinieron en el litigio para que, si lo tienen por conveniente, se presenten ante el Tribunal Supremo dentro del término de veinte dias.

Las sentencias que se dicten en estos recursos servirán únicamente

para formar jurisprudencia sobre las cuestiones legales discutidas y resueltas en el pleito, pero sin que por ellas pueda alterarse la ejecutoria en lo más mínimo, ni afectar el derecho de las partes.

Estos recursos se entenderán admitidos de derecho, y se interpondrán directamente en la sala de casacion.

Art. 96. Cuando el ministerio fiscal, en el caso del art. 23, creyese oportuno interponer el recurso de casacion, la sentencia que acerca de él recaiga aprovechará ó perjudicará á la parte que hubiese intentado promoverla.

Art. 97. Cuando fuese desestimado el recurso de casacion interpuesto por el ministerio fiscal en pleitos en que hubiere sido parte, las costas causadas á la contraria deberán reintegrarse con los fondos retenidos procedentes de la mitad de los depósitos cuya pérdida haya sido declarada.

Lo mismo se decretará cuando el fiscal se separase del recurso que hubiera interpuesto, ó aun cuando sin haber llegado á interponerlo formalmente hubiere comparecido ante el Tribunal Supremo la parte contraria por haber sido citada y emplazada.

Art. 98. El pago de las costas de que habla el artículo precedente se hará por el orden riguroso de antigüedad y con arreglo á lo que permitieren los fondos existentes.

TITULO IX.

De la interposicion de los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por las audiencias de Ultramar.

Art. 99. Los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por las audiencias de la Habana y de Puerto-Rico, continuarán interponiéndose ante las mismas en la forma y con las solemnidades y condiciones prevenidas por la ley de Enjuiciamiento civil no reformada é instruccion de 9 de Diciembre de 1865 dictada para su aplicacion en aquellas provincias.

Asimismo se interpondrán ante la audiencia de Manila los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por ella, con sujecion á los preceptos de la Real cédula de 30 de Enero de 1855, y demás disposiciones dictadas para su cumplimiento.

Los autos de la audiencia de la Habana y de Puerto-Rico en que se denegare la admision del recurso de casacion serán apelables en el tiempo y forma prescritos por la referida ley de Enjuiciamiento civil é instruccion de 9 de Diciembre de 1865.

Los mismos autos de denegacion y los de admision del recurso dictados por la audiencia de Manila serán apelables conforme á lo prevenido para ambos casos por la Real cédula de 30 de Enero de 1855.

Todos los fallos que pronunciare el Tribunal Supremo en los recursos de casacion y en las apelaciones procedentes de la audiencia de Manila serán comunicados por medio de certificacion, y no en virtud de Real provision como ha venido verificándose hasta el dia.

TITULO X.

Disposiciones comunes á todos los recursos de casacion.

Art. 100. Podrá la audiencia decretar la ejecucion de la sentencia á peticion de la parte que la hubiere obtenido, aunque se haya interpuesto y

admitido el recurso de casacion, si presta antes fianza bastante á juicio del mismo Tribunal para responder de cuanto recibiese ó pudiese recibir si se declarase la casacion.

Art. 101. Si litigare por pobre la parte recurrente y el recurso fuere desestimado, pagará cuando llegue á mejor fortuna la suma en que hubiere debido consistir el depósito, y el importe de las costas á cuyo pago hubiese sido condenada.

Art. 102. En cualquier estado del recurso puede separarse de él el que lo haya intentado, presentando su procurador poder especial otorgado al efecto, ó suscribiendo el interesado el escrito de separacion, en el cual deberá ratificarse.

La Sala tendrá por separado al recurrente, condenándole al pago de las costas y del depósito en su caso.

Art. 103. Cuando la separacion del recurso por infraccion de ley ó doctrina legal se hiciese antes de ser admitido por la Sala, se mandará devolver todo el depósito, y la mitad cuando se hiciese despues de admitido y antes del señalamiento para la vista, dándose á la otra mitad la aplicacion ordinaria.

En los recursos por quebrantamiento de forma solamente se devolverá la mitad del depósito, cualquiera que sea el tiempo en que se haga la separacion, antes del señalamiento de día para la vista. Hecho esto, no tendrá lugar la devolución.

Art. 104. El auto en que se estime la separacion del recurso se comunicará á la audiencia de que proceda el pleito, y se notificará á las partes que hubiesen comparecido ante el Tribunal Supremo.

Art. 105. La mitad del importe del depósito á cuya pérdida hubiere sido condenado el recurrente en todo ó en parte, segun las disposiciones de esta ley, se entregará á la parte que hubiere obtenido la ejecutoria reclamada como indemnizacion de perjuicios, conservándose la otra mitad en el establecimiento público en que se hubiese hecho para los efectos expresados en el art. 103.

Art. 106. Las sentencias en que se declare por la sala de casacion haber ó no haber lugar al recurso, y en que por la de admision se resuelva no haber lugar á la del recurso en todos ó en alguno de sus extremos, se publicarán en la *Gaceta de Madrid* é insertarán en la *Coleccion legislativa*.

Podrá el Tribunal decretar, si concurrieren circunstancias especiales de su exclusiva apreciacion, que no se verifique la publicacion ó que se haga suprimiendo los nombres propios de las personas interesadas en el pleito y el de la audiencia y juzgado en que se siguió el litigio.

Art. 107. No habrá ulterior recurso contra las sentencias en que se declare haber ó no lugar al de casacion.

Art. 108. El que interponga recurso de súplica de auto dictado en algun incidente en los casos en que esta ley no prohiba ulterior recurso, presentará con el escrito tantas copias cuantas sean las partes colitigantes, á cada una de las cuales se entregará un ejemplar para que, si lo tienen por conveniente, contesten dentro de tercero día, pasado cuyo término la sala dictará la resolucion que corresponda, previo informe del magistrado ponente.

Art. 109. Hecha en su caso tasacion de las costas, se librará certificacion de las sentencias que dicte el Tribunal Supremo sobre admision y resolucion definitiva de los recursos, la cual se remitirá á la audiencia de donde proceda el pleito para su cumplimiento.

Art. 110. En cualquier estado del recurso en que las partes dejaren de promover su sustanciacion en el término de un año, á contar desde la notificacion de la última providencia que se hubiere dictado, se declarará desierto.

Trascurrido este plazo, el secretario dará cuenta á la sala para que recaiga la anterior declaracion, contra la cual no se da ulterior recurso.

DISPOSICION TRANSITORIA.

Art. 144. Los recursos en que á la publicacion de esta ley no haya recaído auto firme de admision se pasarán en el estado en que se hallen á la sala de este nombre para que acerca de ella resuelva lo que proceda, arreglándose á las prescripciones de dicha ley.

Si el recurso estuviere admitido, continuará su sustanciacion en la sala primera con sujecion á lo dispuesto en esta ley.

Por tanto:

Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores, y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veintidos de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho.
—Yo el Rey.—El ministro de Gracia y Justicia, *Fernando Calderon y Collantes*.

PROCEDIMIENTO PARA LOS ABUSOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA.

ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1875.

Art. 8.º El fiscal de imprenta ordenará por sí ó en virtud de mandato del gobierno, y llevará á efecto, el secuestro de la edicion del número en que aparezca haberse cometido alguno de los abusos comprendidos en el artículo 1.º; y esta medida se ejecutará, en cuanto á los ejemplares expedidos para otras poblaciones, por órdenes escritas ó telegráficas á las respectivas autoridades.

Art. 9.º En el término de veinticuatro horas despues de verificado el secuestro, presentará el fiscal la denuncia al tribunal de imprenta, el cual señalará desde luego dia para la vista, que no podrá ser anterior al tercero, ni posterior al sexto, á contar desde la presentacion de la denuncia. En la misma providencia ordenará la citacion, emplazamiento y notificacion del señalamiento al director del periódico, en el domicilio que éste hubiere designado conforme al art. 3.º, cuya diligencia se verificará con entrega de copia de la denuncia, y por cédula en el caso de no ser habido el director en dicho domicilio.

Art. 10. El emplazado podrá comparecer por sí ó por medio de procurador con poder bastante, y asistido ó no de letrado, segun su voluntad.

Art. 11. El tribunal de imprenta se reunirá en el dia señalado para celebrar vista; este acto será público, á no ser que el tribunal decida lo contrario por exigirlo así la decencia.

Art. 12. En el acto de la vista dará cuenta el secretario de sala ó relator de las actuaciones practicadas; acusará el fiscal, y defenderá el periódico un letrado en ejercicio del respectivo Colegio, ó de fuera, con tal que se halle habilitado en la forma prescrita por las disposiciones vigentes. La vista se verificará aunque no asista el defensor del periódico.

Art. 13. Terminada la vista, el tribunal dictará el fallo, que se publicará en la audiencia inmediata; si fuese condenatorio, se impondrán las costas al periódico; si absolutorio, se declararán de oficio.

Art. 14. Formará sentencia el voto de la mayoría; si sobre la aplicacion de la pena ú otro punto en que quepa diversidad de pareceres no hubiere mayoría, se estará al voto más favorable al periódico denunciado.

Art. 15. Cuando del proceso resultare que se ha cometido alguno de los delitos no comprendidos en este decreto y si en el Código penal vigente, el tribunal de imprenta mandará pasar el oportuno tanto de culpa al competente juez de primera instancia para su persecucion y castigo conforme á las leyes comunes.

Art. 16. Si el periódico fuese condenado, se inutilizará la edicion secuestrada; si absuelto, se devolverá al director.

Art. 17. Contra el fallo del tribunal de imprenta no se dará otro recurso que el de casacion por quebrantamiento de forma en la sustanciacion del

proceso, ó por infraccion de este decreto en la aplicacion de la pena: podrán utilizar este recurso tanto el fiscal como el director del periódico.

Art. 18. El recurso de casacion se interpondrá, en el término improrogable de tres dias, ante el presidente del tribunal sentenciador para ante la sala segunda del Tribunal Supremo; al deducirlo el director del periódico, acreditará haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en una de sus sucursales la cantidad de 4.000 pesetas.

Art. 19. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el presidente del tribunal de imprenta remitirá los autos al Supremo, citando y emplazando á las partes para que comparezcan en el término de ocho dias si el proceso se hubiese instruido en la Península; de doce si en las islas Baleares, y de un mes si en las islas Canarias.

Art. 20. El Tribunal Supremo comunicará los autos á las partes por su orden, para instruccion por término de tres dias á cada uno.

Art. 21. Instruidas las partes, se señalará dia para la vista, que se verificará en la forma prescrita en los arts. 41 y 42; y terminado este acto, se dictará la sentencia declarando haber ó no lugar al recurso; la sentencia se publicará en la audiencia inmediata.

Art. 22. Si se estimare el recurso de casacion por quebrantamiento de forma, el Tribunal Supremo determinará al propio tiempo el estado á que han de reponerse los autos. Si se casase la sentencia por infraccion de este decreto en la aplicacion de la pena, se impondrá en el fallo de casacion la que sea procedente.

Art. 23. La declaracion de no haber lugar al recurso de casacion, lleva consigo la condena en las costas al recurrente y la pérdida del depósito. Si el recurso que se desestime hubiere sido interpuesto por el fiscal, se satisfarán las costas con cargo al fondo que tiene este objeto especial.

Art. 24. La publicacion de las defensas pronunciadas en los juicios de imprenta, se considerará como un número del periódico denunciado, y estará sujeta, por tanto, á las prescripciones de este decreto.

Art. 25. En las poblaciones donde no haya audiencia, podrán el gobernador y alcalde, en su caso, proceder al secuestro de los números en que á su juicio se haya cometido alguno de los abusos previstos en el art. 4.º; pero deberán dar cuenta por el primer correo al fiscal de imprenta del territorio, remitiéndole el ejemplar autorizado para que pueda denunciarlo. En estos casos, el término para formalizar la denuncia comenzará á correr desde que el fiscal reciba el ejemplar del número secuestrado, y el del emplazamiento se prolongará un dia por cada 50 kilómetros de distancia que medien entre el lugar donde se publique el periódico y la residencia del tribunal de imprenta (4).

Art. 27. En las cuestiones de recusacion, competencia y demás incidentes y actuaciones sobre que no contiene disposicion especial el presente decreto, se estará á lo prescrito en las leyes comunes de procedimientos.

(1) El art. 26 se refiere á la dotacion ó sobresueldo de los magistrados que han de componer el tribunal de imprenta.

ÍNDICE.

Páginas.

ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL.

Tribunales de jurisdiccion ordinaria.....	3
Juzgados municipales.....	4
Idem de instruccion y tribunales de partido.....	6
Audiencias.....	8
Tribunal Supremo.....	10
Ingreso y ascenso en la carrera judicial.....	11
Honores y traje de los funcionarios.....	16
Inamovilidad judicial.....	16
Responsabilidad judicial.....	19

Auxiliares de los tribunales.—Secretarios.—Archiveros.—Oficiales de sala y subalternos de los tribunales.....	20
Gobierno y régimen de los tribunales.....	24
Constitucion, audiencias y policia de Estrados.....	26
Resoluciones de los tribunales.—Ejecutorias.—De los ponentes...	26
Jurisdiccion disciplinaria.....	28
Del Ministerio Fiscal.—Ingreso y ascenso en la carrera.....	30
Honores, antigüedad, traje, separacion, suspension, traslacion y jubilacion de sus individuos.....	33
Responsabilidad, atribuciones y dependencia del Ministerio Fiscal	34
Jurisdiccion disciplinaria.....	36
De los abogados y procuradores.....	37

TRIBUNALES ESPECIALES.

Juzgados eclesiásticos.....	39
Tribunales militares.....	41
Idem de hacienda y comercio.....	44
Idem contencioso-administrativos.....	44

Competencia de los tribunales.....	45
En lo civil.....	46
En lo criminal.....	49

Recursos de competencia.—Inhibitoria.—Declinatoria.—Fuerza en conocer.—Queja.....	52
Recusaciones de jueces, magistrados y asesores.....	55

DE LOS JUICIOS.

Juicios en general.....	56
De las acciones.—Acciones reales, personales y mixtas.....	58
Excepciones.—Acumulacion de autos y de acciones.....	63
Pobreza legal.....	64
De la conciliacion.....	66

JUICIO CIVIL ORDINARIO.

Demanda, contestacion, reconvenccion, réplica y dúplica.....	68
De la prueba.—Escritos de ampliacion.....	71
Medios probatorios.—Documentos públicos y privados.—Correspondencia.—Confesion.—Juicio pericial.—Reconocimientos judiciales.—Testigos.—Fama pública.—Presunciones.....	73
Alegatos, vistas y sentencias.....	81
Incidentes y términos judiciales.....	82
Apelaciones, súplicas y pago de costas en materia civil.....	84

JUICIOS UNIVERSALES.

Testamentarias en todos sus periodos.—Abintestato y concurso de acreedores.....	86
Procedimientos en quiebras mercantiles.....	92
Idem para la nulidad de los matrimonios y divorcios.....	97

JUICIOS SINGULARES.

Juicios de menor cuantía.—Verbales.—De desahucio y de retracto. Interdictos.—De adquirir, retener, recobrar, obra nueva y obra vieja.....	97
Embargos preventivos.....	108
Juicio ejecutivo y apremios.....	113
De las tercenas.....	114
Juicios en rebeldía.....	119
Juicio arbitral.....	121
Ejecucion de sentencias civiles.....	125
Del recurso de casacion.....	128

JURISDICCION VOLUNTARIA.

Actos que comprende.....	132
--------------------------	-----

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL.

De las acciones penales, y quiénes pueden ejercitarlas.....	136
-------------------------------------------------------------	-----

Del derecho de defensa.—Notificaciones, suplicatorios, exhortos, oficios y cartas-órdenes.....	137
Términos judiciales.—Sentencias.....	139
Recursos contra las resoluciones judiciales.—Costas procesales...	142
De la rebeldía de los procesados y sus efectos.—Estadística judicial.....	144

DEL SUMARIO.

De la denuncia y de la querella.—Autoridades competentes para la instruccion de los sumarios.....	146
De la policia judicial.....	149
Instruccion del sumario.—Cuerpo del delito y su comprobacion.....	151
De los delinquentes.—Datos de moralidad y penales.—Declaraciones é incommunicacion de aquéllos.....	155
De los testigos y diligencias de careo.....	159
Informe pericial.....	162
Privacion de libertad de los procesados.—Detencion y prision provisionales.—Fianzas de estar á juicio.....	164
Entrada y registro de domicilios, libros y papeles.—Detencion y exámen de la correspondencia.—Fianzas y embargos provisionales.....	168
Responsabilidad de terceras personas.....	172
Terminacion de los sumarios.—Sobreseimientos.....	172
Procedimientos especiales durante el sumario.—Contra los representantes de la nacion, los jueces y magistrados.—Por razon de injuria y calumnia perseguibles á instancia de parte; y por delitos ó abusos de la imprenta.....	173
Trámites para exigir la responsabilidad civil de terceras personas.	178
Del juicio oral.—Procedimiento vigente posterior al sumario.	178

PROCEDIMIENTOS PARA EL CASTIGO DE LAS FALTAS.

En primera y segunda instancia.....	183
-------------------------------------	-----

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN MATERIA PENAL.

Por delitos contra la Hacienda pública y para juzgar los que son de la competencia del senado.—Juicios militares.....	185
De las amnistías y de los indultos.....	190

APENDICE.

Gracia y Justicia.—Decreto de 23 de Enero de 1875, estableciendo nuevas bases para las declaraciones de inamovilidad de los magistrados y jueces.....	195
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

	Páginas.
Idem.—Decreto de 23 de Enero de 1875, dictando reglas para la provision de los cargos del orden judicial y del ministerio fiscal.....	498
Idem.—Real decreto de 22 de Octubre, modificando el decreto de 23 de Enero de 1875 sobre provision de cargos del orden judicial y del ministerio fiscal	201
Ley de casacion civil	202
Procedimiento para los abusos cometidos por la imprenta.....	216

ÍNDICE

DEL ORDEN DE MATERIAS QUE CONTIENE ESTE LIBRO.

Prolegómenos del Derecho.

Historia é instituciones del romano.

Idem id. del civil español, con las reformas vigentes en el registro y matrimonio civiles.

Derecho penal español, precedido de una reseña histórica del mismo.

—Reformas en materia de hurtos, caza, pesca y secuestro de personas.—Ley de proteccion á la infancia (26 de Julio de 1878).—Abusos cometidos por la imprenta.

Ideas generales de economía política.

Historia y elementos del Derecho mercantil vigente.—Ley de 30 de Julio de 1878, sobre supresion y modificacion de algunos artículos del Código de comercio.

Derecho eclesiástico, (canónico y disciplina.)

Elementos de Derecho político.—Constituciones de 1869 y 1876.—Leyes orgánicas comparadas.

Procedimientos judiciales, en materia civil y penal.—Suspension del Jurado y del juicio oral.—Restablecimiento de la jurisdiccion contencioso-administrativa.—Reforma del juicio de desahucio y de las quiebras mercantiles.—Nueva organizacion de Tribunales militares.—Procedimiento en las causas de imprenta.

NOTA. Como cada tratado ó seccion del Derecho tiene paginacion independiente, no puede servir esta al lector para buscar las materias; pero puede fácilmente conseguir pronto su propósito buscando aquéllas en el índice particular que á su final tiene cada tratado, y este, en las indicaciones que contiene la parte superior de las hojas.





Andres B. Stone





LAMAS VARELA



MANUAL

DE DERECHO



4.200

12-13-14

184

22-1-19

27th June 1880

Proceeding in the top.

27. 10. 1970